

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA



**TESIS DOCTORAL**

**La política social franquista: el Ministerio de Jose Antonio Girón de Velasco (1941-1957)**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

**Pedro González Murillo**

Director

Antonio Fernández García

**Madrid, 2014**

**LA POLÍTICA SOCIAL FRANQUISTA: EL MINISTERIO DE JOSÉ  
ANTONIO GIRÓN DE VELASCO (1941-1957)**

**VOL. 1**



**Doctorando: Pedro González Murillo**

**Director: Dr. D. Antonio Fernández García**

**Facultad de Geografía e Historia  
Universidad Complutense de Madrid  
Noviembre de 1997**

**22382**

**1**



## Índice.

Introducción.....	pág. 1
-------------------	--------

### *1ª PARTE: LOS FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA SOCIAL: LA POLÍTICA FAMILIAR.....pág. 6.*

Capítulo 1. Los agentes de la política social del régimen franquista.....	pág. 6
1.1. Un punto de partida: el Fuero del Trabajo.....	pág. 6
1.2. José Antonio Girón de Velasco: su papel en el régimen de Franco.....	pág. 13
1.2.1. La función del Falangismo según Girón.....	pág. 24
1.3. La organización sindical.....	pág. 27
1.3.1. Un ejemplo de las dificultades de la organización sindical para ejercer sus funciones.....	pág. 32
1.3.2. Defensa/control del trabajador.....	pág. 34
1.4. Atribuciones y organización del ministerio de Trabajo.....	pág. 36
1.5. El nacimiento de los jurados de empresa.....	pág. 38
1.5.1. Los Jurados de empresa.....	pág. 40
1.6. Las Magistraturas de Trabajo.....	pág. 46
1.7. La regulación de las condiciones de trabajo a través de las reglamentaciones del trabajo.....	pág. 48
1.7.1. Contenido de las reglamentaciones del trabajo.....	pág. 59
1.7.2. Una valoración de las reglamentaciones del trabajo.....	pág. 63
Notas.....	pág. 68

Capítulo 2. El trabajo: concepto, características y fines.....	pág. 81
2.1. El concepto de la propiedad.....	pág. 87
2.2. El antiliberalismo del régimen franquista.....	pág. 88
2.3. La persistente lucha contra el fantasma del "comunismo." .....	pág. 89
2.4. La influencia del catolicismo en el mundo del trabajo.....	pág. 100
2.5. La autarquía como marco del mundo del trabajo.....	pág. 102
2.6. La entrada y la salida del trabajador del mercado de trabajo.....	pág. 114
Notas.....	pág. 118

Capítulo 3. El concepto del salario.....	pág. 123
3.1. Salarios e intervencionismo.....	pág. 134
3.2. Salarios e inflación.....	pág. 136
3.2.1. Salarios e inflación en los años 40.....	pág. 136
3.2.2. Salarios e inflación en los años 50.....	pág. 139
3.3. La paga extra como atenuador del conflicto laboral.....	pág. 152
3.4. El nivel de vida de los trabajadores españoles.....	pág. 154
Notas.....	pág. 164
Capítulo 4. La concepción de la familia en el franquismo.....	pág. 173
4.1. El concepto de familia.....	pág. 173
4.2. El papel de las mujeres y los hombres en el hogar y en la empresa.....	pág. 177
Notas.....	pág. 187
Capítulo 5. Los marcos de la política familiar.....	pág. 190
5.1. La política del Estado con respecto a la familia como "objetivo prioritario".....	pág. 190
5.2. El Fuero de los Españoles y la familia española.....	pág. 195
5.3. La imagen de la familia española antes del 18 de julio de 1936.....	pág. 196
5.4. Marco demográfico general de una época antimalthusiana.....	pág. 201
5.5. Las prestaciones familiares por medio de los salarios.....	pág. 207
5.5.1. Concepto de las prestaciones familiares.....	pág. 207
5.5.2. Objetivos de las prestaciones familiares.....	pág. 210
5.5.3. La previsión en torno a la familia española.....	pág. 213
Notas.....	pág. 221
Capítulo 6. El subsidio familiar, una creación del "Nuevo Estado": 1938-1957.....	pág. 224
6.1. Antecedentes del subsidio familiar en España.....	pág. 224
6.2. Naturaleza del subsidio familiar.....	pág. 233
6.3. Concepto y planteamiento del subsidio familiar.....	pág. 239
6.4. Definición y desarrollo del subsidio familiar.....	pág. 241
6.5. Teorías y problemas para la aplicación del subsidio familiar.....	pág. 248
6.6. Características del subsidio familiar.....	pág. 250

6.7. El subsidio familiar español: campo de aplicación, administración y financiación.....	pág. 254
6.7.1. Campo de aplicación del subsidio familiar.....	pág. 254
6.7.2. Administración del subsidio familiar.....	pág. 260
6.7.3. Financiación del subsidio familiar.....	pág. 263
Notas.....	pág. 267
Capítulo 7. Las ramas del Régimen Obligatorio del Subsidio Familiar.....	pág. 270
7.1. El Régimen General.....	pág. 271
7.1.1. La ley de subsidios familiares de 18 de julio de 1938 y su evolución posterior.....	pág. 271
7.1.2. La modificación de las prestaciones en el subsidio familiar.....	pág. 274
7.1.3. Evolución cuantitativa del Régimen General.....	pág. 276
7.2. La rama agropecuaria y de trabajadores del mar.....	pág. 279
7.2.1. Rama agropecuaria.....	pág. 279
7.2.2. Evolución cuantitativa de la Rama Agropecuaria.....	pág. 282
7.2.3. La rama de los trabajadores del mar.....	pág. 286
7.2.4. Evolución cuantitativa de la Rama de los trabajadores del Mar.....	pág. 286
7.3. El funcionariado.....	pág. 288
7.3.1. Funcionarios de la Administración Central y Local.....	pág. 288
7.3.2. Funcionarios de la Organización Sindical y de F.E.T. y de las J.O.N.S.....	pág. 293
7.3.3. Evolución cuantitativa de la rama de los funcionarios.....	pág. 294
7.4. El subsidio familiar en los ministerios militares.....	pág. 299
Notas.....	pág. 301
Capítulo 8. El apoyo del régimen al matrimonio tradicional y la natalidad.....	pág. 304
8.1. La re-evangelización de la familia española.....	pág. 304
8.2. Nupcialidad y natalidad como política de Estado.....	pág. 306
8.3. Los premios de natalidad.....	pág. 310
8.4. Los préstamos/premios de nupcialidad.....	pág. 313
8.4.1. Análisis cuantitativo de los préstamos/premios de nupcialidad.....	pág. 316
Notas.....	pág. 320

Capítulo 9. El plus familiar y la política de potenciación de las familias numerosas.....	pág. 322
9.1. Concepto del plus familiar.....	pág. 322
9.2. El plus familiar: legislación e implantación, campo de aplicación, financiación y administración.....	pág. 331
9.2.1. Legislación e implantación progresiva del plus familiar.....	pág. 331
9.2.2. Campo de aplicación del plus familiar.....	pág. 334
9.2.3. Financiación del plus familiar.....	pág. 340
9.2.4. Administración del plus familiar.....	pág. 343
9.2.5. Valoración de la política bifronte en torno al salario familiar.....	pág. 344
9.3. La familia numerosa.....	pág. 349
9.3.1. El concepto de la familia numerosa.....	pág. 349
9.3.2. Evolución de la legislación sobre familias numerosas.....	pág. 355
9.3.3. Los principales beneficios concedidos a las familias numerosas.....	pág. 356
9.3.4. Proyectos y realizaciones en torno a la ley de la familia numerosa.....	pág. 365
9.3.5. Evolución cuantitativa de las prestaciones a las familias numerosas.....	pág. 368
Notas.....	pág. 377

## **IIª PARTE: LA POLÍTICA LABORAL.....pág. 381**

Capítulo 10. El problema del paro.....	pág. 381
10.1. Antecedentes en la lucha contra el paro.....	pág. 382
10.2. La Obra Sindical Lucha contra el paro y el Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación.....	pág. 387
10.3. Las causas del paro.....	pág. 401
10.4. Los remedios teóricos del franquismo contra el paro.....	pág. 407
10.5. El paro antes de la llegada de Girón al ministerio de Trabajo.....	pág. 409
10.6. La sacudida del paro en la primera mitad de los años 40.....	pág. 418
10.6.1. El problema del paro en Andalucía durante 1945.....	pág. 432
10.7. El paro en la segunda mitad de los años cuarenta.....	pág. 448
10.7.1. Un trienio de aparente tranquilidad (1942-1948).....	pág. 448
10.7.2. La ruptura de la tendencia durante 1949.....	pág. 479
10.7.3. El repunte del año 1950.....	pág. 497

10.8. Los años bisagra para el problema del paro.....	pág. 512
10.9. El cambio de tendencia de 1954.....	pág. 548
10.10. Una valoración sobre el tema del paro.....	pág. 573
Notas.....	pág. 575
 Capítulo 11. La cooperativa como instrumento de armonización social.....	pág. 600
11.1. El desarrollo del movimiento cooperativo.....	pág. 609
11.2. El control de las cooperativas por parte del Estado franquista.....	pág. 614
Notas.....	pág. 617
 Capítulo 12. El régimen ante la huelga.....	pág. 620
12.1. Las huelgas de los años cuarenta.....	pág. 623
12.2. Las huelgas de los años cincuenta.....	pág. 625
Notas.....	pág. 635
 Capítulo 13. El sistema de previsión social.....	pág. 641
13.1. Concepto, fines y características.....	pág. 641
13.2. El campo de aplicación de la previsión social.....	pág. 653
13.3. El sistema de financiación en los seguros sociales.....	pág. 657
13.4. El aparato de previsión y su incidencia en la empresa.....	pág. 666
13.5. Los problemas originados por la financiación de los seguros sociales entre los ministerios de Hacienda y Trabajo.....	pág. 675
13.6. El abandono del campo español por parte del ministerio de Trabajo.....	pág. 684
Notas.....	pág. 689
 Capítulo 14. Seguro Obligatorio de Enfermedad.....	pág. 700
14.1. La evolución legislativa del seguro de enfermedad.....	pág. 700
14.2. El Seguro de Maternidad: Consideraciones generales y evolución legislativa.....	pág. 714
14.3. El campo de aplicación del S.O.E.....	pág. 722
14.4. La financiación del seguro obligatorio de enfermedad.....	pág. 727
14.5. La administración del S.O.E.....	pág. 736
14.6. Hospitales y ambulatorios: El Plan Nacional de Instalaciones del S.O.E.....	pág. 741

14.7. Evaluación de algunos aspectos polémicos en el desarrollo del S.O.E.....	pág. 760
14.8. El tratamiento de las enfermedades profesionales.....	pág. 769
14.8.1. La evolución legislativa del seguro de enfermedades profesionales.....	pág. 769
14.8.2. El problema de la silicosis entre los mineros españoles.....	pág. 775
Notas.....	pág. 784
Capítulo 15. Otros aspectos de la previsión social.....	pág. 797
15.1. El seguro de accidentes del trabajo: una obra nunca acabada.....	pág. 797
15.1.1. La repercusión efectiva del seguro de accidentes del trabajo.....	pág. 799
15.2. El tratamiento de la vejez: El Seguro de Vejez e Invalidez.....	pág. 806
15.2.1. El tortuoso camino hacia un Seguro de Vejez e Invalidez.....	pág. 806
15.2.2. Metas del seguro de vejez: el campo de aplicación y las prestaciones los ancianos.....	pág. 807
15.2.3. Bases económicas del seguro de vejez.....	pág. 813
15.3. El difícil camino hacia el seguro de paro.....	pág. 823
15.3.1. El Seguro de Paro Tecnológico.....	pág. 829
15.3.2. El Seguro de Paro por Escasez de Energía Eléctrica.....	pág. 829
15.3.3. El Subsidio de Paro por falta de algodón.....	pág. 831
15.3.4. Subsidios de paro en las mutualidades laborales.....	pág. 832
15.4. Una cima nunca coronada: El seguro total.....	pág. 832
Notas.....	pág. 835
Capítulo 16. El mutualismo laboral como materialización del fracaso de la política pública de los seguros sociales.....	pág. 843
16.1. El gobierno de las mutualidades.....	pág. 848
16.2. Mutualidades y montepíos: "La gran revolución".....	pág. 850
Notas.....	pág. 861
Capítulo 17. El problema de la vivienda.....	pág. 866
17.1. Los organismos encargados de la política de vivienda.....	pág. 876
17.2. Los tipos de viviendas construidas por el franquismo.....	pág. 886
17.3. El Plan Nacional de la Vivienda.....	pág. 894
Notas.....	pág. 900

Capítulo 18. El significado y función de las Universidades Laborales.....	pág. 908
18.1. El arranque de las universidades laborales.....	pág. 914
18.2. Los órganos de gobierno de las universidades laborales.....	pág. 925
Notas.....	pág. 926
Conclusiones.....	pág. 932
Fuentes y Bibliografía consultada.....	pág. 940

## 1. Introducción.

La historiografía sobre el franquismo ha dado una singular importancia a su vertiente política. Enmarcada en ésta se han realizado estudios generales con un carácter poco crítico como los de Ricardo de la Cierva<sup>1</sup> o Luis Suárez Fernández.<sup>2</sup> Desde posicionamientos alternativos a estos modelos se realizaron obras que son hoy verdaderos clásicos como las publicadas por Raymond Carr,<sup>3</sup> Juan Pablo Fusi,<sup>4</sup> Payne,<sup>5</sup> Paul Preston<sup>6</sup> o Javier Tusell<sup>7</sup> entre otros. En el ámbito de las bases sociales del régimen podríamos destacar la obra de Viver Pi-Sunyer<sup>8</sup> y dentro de los estudios generales sobre la oposición al franquismo los de Heine<sup>9</sup> o Tusell.<sup>10</sup> Por último, quizás la obra que abrió brecha en el estudio de la historia económica del régimen fue la de González.<sup>11</sup>

En cualquiera de los casos, esta breve enumeración de obras muy significativas pone de manifiesto que la historiografía en torno al franquismo se ha centrado sobre los temas de la política interior, la política económica, la política exterior o en el personaje del general Franco. Es decir, no ha habido una acentuada inclinación por el estudio de la política social del régimen y cuando ésta se ha dado se ha centrado esencialmente en los estudios sobre la oposición, no en la labor llevada a cabo desde los organismos y ministerios que tenían como misión la ejecución de dicha política social. Creemos que este hecho puede justificar por sí sólo un intento de estudio de la política social del régimen a través de las atribuciones que tenía el ministerio de Trabajo, sin olvidar que en algunos casos la ejecución final de aquellas políticas dependía en última instancia, total o parcialmente, de organismos sindicales.

Indudablemente el contexto histórico en el que el doctorando comenzó a desarrollar esta tesis influyó a la hora de elegir este tema. La crisis del *Estado de Bienestar* o la tendencia a minimizar la acción del Estado en temas sociales eran cuestiones candentes al finalizar este doctorando su licenciatura en el año 1993 y ello hizo más atractivo si cabe este objeto de estudio. Sin embargo, pese a las consideraciones hechas y por encima de ellas, el motivo inicial para que esta tesis comenzara a realizarse fue la sugerencia que hizo al doctorando su director de investigación, el Dr. Fernández García. En estas condiciones comenzó este estudio sobre la política social del primer franquismo a través de la labor del ministerio de Trabajo de 1941 a 1957.

En nuestro planteamiento inicial hemos de tener en cuenta que la aproximación a lo social y más concretamente al mundo de lo laboral depende de un sinfín de factores de características muy distintas que no permiten un enfoque fragmentario si no se quiere perder la perspectiva general y global. Y es que sobre el objeto de estudio convergen variables puramente biológicas relacionadas con la salud, la enfermedad, el nacimiento o la muerte; elementos de tipo estrictamente laboral como los conflictos y huelgas que se desarrollan durante este periodo con



el objetivo de obtener por parte de los trabajadores mejoras sociales y políticas; factores económicos tales como la política fiscal o monetaria; elementos estrictamente ideológicos tales como la concepción que sobre el trabajo, el salario o la familia intentó imponer el Nuevo Estado; aspectos jurídicos como el desarrollo de un corpus legal propio del régimen autoritario que nació tras el 18 de julio y la violación de los mismos principios legales por el empresariado o el soslayamiento de las funciones propias del ministerio de Trabajo y la organización sindical en la tarea de procurar que dichos principios se cumplieran; también habría que tener en cuenta el peso del individuo, dado que nos parece que lo singular de la personalidad de Girón de Velasco y el hecho de que fuera uno de los ministros que más tiempo permaneció en los distintos gabinetes franquistas ha de influir de forma decisiva en su acción de gobierno. En definitiva, hay que tener en cuenta un largo etcétera de consideraciones que se entremezclan e imbrican y que otorgan a la investigación un sesgo de globalidad.

A renglón seguido expondré las afirmaciones provisionales o hipótesis de las que pretendo partir en la realización de mi investigación. No ambiciona ser ésta una especie de carril unidireccional que dirija la investigación hacia unos presupuestos considerados apriorísticamente, sino simplemente una afirmación momentánea que habrá de ser verificada a lo largo de la investigación. Partimos de la hipótesis de que la visión predominante en el régimen franquista percibía al mundo del trabajo como una realidad necesariamente armónica que había de hermanar a trabajadores y empresarios en respuesta a una visión catastrofista del conflicto considerado como un virus destructor de lo que se percibía como las esencias de lo español. De igual manera la política social ejecutada en este período respondía al deseo de crear una base de adhesión social mayor que la existente rompiendo la tendencia al conflicto o aminorando su peso sobre todo entre aquella España derrotada tras la guerra civil. Formalmente, la construcción teórica del franquismo social partía del hecho de que, independientemente de medidas coercitivas, el medio para imponer su modelo de sociedad "de orden" partía de la consideración de la familia, en su sentido más tradicional, como la unidad básica de este modelo. Y que, por consiguiente, había que dotarla (además de un sostén físico para su desenvolvimiento: la vivienda) de un sustento material basado en un nuevo concepto del salario y del trabajo que venía determinado por el control del Estado sobre las relaciones laborales a través de las reglamentaciones del trabajo.

Sin embargo, consideramos que el planteamiento formal aquí expuesto, tras su comparación con las ejecuciones prácticas del régimen a lo largo del período de estudio, ha de revelar una importante distancia entre las promesas del franquismo y la obra efectivamente realizada por el mismo en función del carácter eminentemente propagandística de la política social en un régimen no legitimado periódica y sistemáticamente por las urnas sino por una guerra civil.

Partiendo de estas premisas comenzó esta investigación. El primer problema que se encontró el doctorando fue la dificultad para acceder a los fondos de la nueva biblioteca del ministerio de Trabajo. El traslado de fondos (tanto del ministerio como de otros organismos) y la ordenación de los mismos dificultó grandemente la tarea de este investigador por lo cual éste optó por centrarse, básicamente, en los fondos disponibles en la Biblioteca Nacional. Pondremos un ejemplo que estimamos bastante ilustrativo. Los escritos y discursos de José Antonio Girón de Velasco desde 1941 a 1952 están publicados y han sido uno de las fuentes utilizadas por el doctorando. Sin embargo, salvo con la buena memoria y generosa ayuda de los bibliotecarios más antiguos del ministerio de Trabajo (este fue el caso) sería imposible dar con dicha obra puesto que al día de hoy sigue sin estar clasificada y sin asignársele referencia alguna que permita al investigador dar con ella.

La ausencia de bibliografía abundante sobre el tema obliga a recurrir a fuentes secundarias de autores que, en numerosas ocasiones, formaban parte del coro de apologistas del régimen y que, en otros casos, pertenecían a las instituciones y organismos por medio de los cuales se realizaba la política social. Procuraremos centrarnos en la bibliografía que sobre este tema publicaba, fundamentalmente, tanto el ministerio de Trabajo como los organismos sindicales.

La búsqueda de fuentes primarias se centró inicialmente en el Archivo de la Presidencia del Gobierno (A.P.G.). En él, nos centramos en la Sección de Presidencia del Gobierno (S.P.G.) y dentro de ella en de la documentación existente en la Serie de la Junta de Defensa Nacional, Junta Técnica del Estado, Vicepresidencia y Presidencia (J.D.N.), en la serie de la Secretaría del Ministro Subsecretario (S.M.S.) y en la de la Jefatura del Estado-Varios Ministerios (J.E.)

La mayoría de la documentación utilizada proviene del Archivo General de la Administración (A.G.A.). La búsqueda de fuentes se centró en un primer momento en la Sección del ministerio de Trabajo (S.T). En esta sección se encontraba la documentación referente a familias numerosas. Ésta estaba formada por unos 12.300 volúmenes que estuvieran disponibles inicialmente para el investigador pero que posteriormente dejaron de estarlo por cambios en los criterios de los archiveros. En cualquiera de los casos no parecía una documentación de gran interés puesto que en el Anuario Estadístico de España se encontraban los datos básicos para el estudio de este aspecto y la documentación de aquel fondo aportaba exclusivamente los expedientes de cada una de las familias numerosas. Al centrarse el doctorando en los aspectos cuantitativos de esta cuestión no causó un problema a la investigación.

Otro segundo bloque lo constituía el referente a las cooperativas. El contenido de esos legajos se centraba en las actas de constitución, los estatutos de las cooperativas, así como en las actas

de disolución de las mismas. Pese a los años citados la documentación que allí consta se sale del período de estudio de esta tesis.

Bajo el título de "Prevención del Paro" existen 275 volúmenes situados cronológicamente entre 1939 y 1967 pese a lo cual, de nuevo, la gran mayoría de la documentación existente no corresponde a la época de Girón como ministro de Trabajo. Consta la documentación de justificantes de créditos de la Junta Nacional de Paro otorgados para la realización de obras de carácter variado. En ellos se justifican, junto al número de trabajadores contratados, sus salarios, vacaciones, pagas de Navidad, pagas del 18 de julio, plus de cargas familiares, y se aportan las relaciones de facturas de materiales utilizados. También existe documentación referente a proyectos enviados a la Secretaría del Ministerio de Trabajo con el objetivo de conseguir los reseñados créditos (incorpora planos de los proyectos y costes de los mismos).

La historia se repite en el caso de la "Formación Laboral." Existen 113 volúmenes sobre los años que van de 1931 a 1967 pese a la cual la documentación sobre el período Girón es escasísima, por no decir nula. El único legajo interesante hubiera sido el perteneciente al año 1955; sin embargo, aquél no fue encontrado (suponemos que por fallos en la clasificación de la documentación. Otros fondos documentales en los que buceó el doctorando fueron los de "Estudios económicos, sociopolíticos, estadísticas y documentos" en donde si encontró documentación de interés para la investigación. A renglón seguido, estudiamos las posibilidades que ofrecía la documentación de la Inspección Central del ministerio de Trabajo en donde constaban 58 volúmenes de 1955 a 1965 con actas de liquidación de seguros sociales, actas de infracción, actas de liquidación montepíos, etc. En último lugar nos centramos en el fondo de la Inspección Delegada de Hacienda y en el de la Magistratura de Trabajo. Especial mención merece el fondo sobre la Comisión interministerial para el envío de trabajadores a Alemania de 1941 a 1945.

La conclusión final del doctorando fue que la documentación podía no ser suficiente. Consideramos el hecho de la relación entre los organismos de la organización sindical y del ministerio de Trabajo en orden a ejecutar la política social y nos adentramos en la Sección de Sindicatos (S.S.) Allí nos centramos en aquellos organismos de la organización sindical cuyas atribuciones complementaban las del ministerio de Trabajo o bien sencillamente se entrecruzaban con las del éste entorpeciendo o favoreciendo su tarea. Así, la documentación obtenida de esta sección se centró mayoritariamente en la Delegación Nacional de Sindicatos, en la Secretaría Nacional y en las Vicesecretarías de Ordenación Social, Económica y de Obras Sindicales, siendo en última instancia los organismos dependientes de ésta (a nivel nacional o provincial) los que mayor documentación aportan a la investigación. Nos referimos a la Obras Sindicales como Lucha contra el Paro, Hogar, Previsión, 18 de julio, Cooperación, etc. o al

Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación. Por último, y de forma puntual hemos utilizado alguna documentación proveniente de la Sección del ministerio de Educación (S.E.) para el estudio de las Universidades laborales, obteniendo dicha documentación de la Dirección General de Enseñanza Laboral.

Estos son los aspectos formales del camino que se va a recorrer a lo largo de este intento de investigación con el objetivo de aportar algo de luz a un tema que consideramos que requiere una mayor atención de la investigación histórica.

<sup>1</sup> Cierva, Ricardo de la: Historia del franquismo. Barcelona, Planeta, 1975 y 1978.

<sup>2</sup> Suárez Fernández, Luis: Francisco Franco y su tiempo. Madrid, Fundación Francisco Franco, 1984, 8 vols.

<sup>3</sup> Carr, Raymond y Fusi, J. P.: España, de la dictadura a la democracia. Barcelona, Planeta, 1979.

<sup>4</sup> Fusi, Juan Pablo: Franco. Madrid, ed. El País, 1985.

<sup>5</sup> Payne, S. G.: El régimen de Franco. Madrid, Alianza, 1987.

<sup>6</sup> Prestor, Paul (dir.): España en crisis. Evolución y decadencia del régimen de Franco. Barcelona, Planeta, 1981. Y Preston, Paul: Franco. Barcelona, Grijalbo, 1994.

<sup>7</sup> Tusell, Javier: La dictadura de Franco. Madrid, Alianza, 1988.

<sup>8</sup> Viver Pi-Sunyer, C.: El personal político de Franco (1936-1945). Barcelona, Vicens Vives, 1978.

<sup>9</sup> Heine, Harmut: La oposición política al franquismo (1939-52). Barcelona, Crítica, 1983.

<sup>10</sup> Tusell: La oposición democrática al franquismo. Barcelona, Planeta, 1977.

<sup>11</sup> González González, Manuel Jesús: La economía política del franquismo (1949-1970). Dirigismo, mercado y planificación. Madrid, Tecnos, 1979.

## ***1ª Parte: Los fundamentos de la política social: la política familiar.***

### **Capítulo 1. Los agentes de la política social del régimen franquista.**

#### ***1.1. Un punto de partida: el Fuero del Trabajo.***

Terminada la guerra civil, una preocupación esencial del régimen de Franco fue conseguir la adhesión social del mayor número de españoles, procedentes tanto del bando nacional como del republicano. Por tanto, el modelo de Estado salido de la confrontación civil se propuso como una de sus metas, y ahí está el Fuero del Trabajo para demostrarlo, conseguir la aceptación social más amplia posible a partir de una política que formalmente había de responder a las demandas originadas por el abandono secular de los más desfavorecidos en España.

No hay que perder de vista la innegable influencia de la personalidad del Jefe del Estado tanto en el ministro de Trabajo, Girón, como en la política social llevada a cabo por su gabinete. Sin embargo, en cuanto a esta cuestión se refiere tampoco hay que perder de vista el hecho de que la referencia ideológica esencial del general Franco no fue la doctrina fascista, en general, ni tampoco su versión española, el falangismo, sino una versión "de la ideología española tradicional."<sup>1</sup>

En lo que a la previsión se refiere, el modelo del franquismo social mantuvo un doble frente. Por un lado, se intentó avanzar hacia el establecimiento de un sistema social que hiciese frente al infortunio basado financieramente en las retribuciones de los asegurados y que, por tanto, abandonase los planteamientos caritativo-benéficos que tradicionalmente habían presidido la política de los gobiernos españoles. De otra parte, en los primeros años de posguerra, la política del gobierno franquista "mantuvo un sistema de asistencia social benéfico, de carácter caritativo y paternalista mediante instituciones públicas y privadas que coadyuvaban no sólo a la construcción y legitimación de un modelo social determinado sino también al control social de los sectores marginales de la población."<sup>2</sup>

En cuanto a las posibilidades de crear un Estado verdaderamente revolucionario en lo social no parece posible afirmar que los cambios desarrollados en ese período de la Historia de España alterasen fundamentalmente las estructuras sociales de una forma drástica. De ahí la inexistencia de un plan general y las soluciones parciales tomadas a medida que se iban explicitando las deficiencias de un sistema de previsión social poco vertebrado. Partiendo del peso que la personalidad del general Franco tuvo en la política social llevada a cabo por medio del ministerio de Trabajo, se puede aceptar la siguiente afirmación de Payne como resumen de

los planteamientos que respecto a la cuestión social había en la cabeza del entonces Jefe del Estado:

“No hay ninguna evidencia de que Franco pensara alguna vez llevar a cabo la revolución nacional sindicalista de la que hablaban los falangista radicales. Igual que su régimen sincrético nunca adoptaría plenamente el fascismo, tampoco consideraría una política económica radicalmente fascista. En la economía como en otras áreas, el nuevo régimen combinaba el ultraconservadurismo con ambiciosos planes renovadores para desarrollar rápidamente la economía, transformando sólo gradualmente su marco social e introduciendo muy pocos cambios en su estructura económica básica, al menos a corto plazo.”<sup>3</sup>

En el Fuero del Trabajo<sup>4</sup> se establecían los elementos de tipo ideológico, político y económico que habían de regir el rumbo de la España salida de la guerra civil con un objetivo esencialmente propagandístico y económico-social.<sup>5</sup> En él se impusieron una serie de principios<sup>6</sup> en orden a vertebrar la política sociolaboral del régimen; principios que fueron más fieles al fuero en función de su proximidad cronológica a la guerra civil. Por el contrario, a medida que nos alejamos de estos años las incongruencias e incluso las incompatibilidades entre los principios rectores de la política social plasmados en dicha disposición y las leyes supuestamente inspiradas en él fueron creciendo. Así, al abordar los planteamientos formales defendidos por el franquismo social hay que tener en cuenta la distancia sistemática que se palpa entre el texto legal y la realidad social o los proyectos desarrollados eficazmente.

En principio, tal y como se expone en el preámbulo del decreto que le da vida, el Fuero del Trabajo representaba, formalmente, la puesta al servicio del pueblo español de la riqueza nacional mediante la subordinación de la economía a la política.

Tras los primeros intentos por imponer sus proyectos por parte de Dionisio Ridruejo y Pedro González Bueno (ministro de Organización y Acción Sindical), fue nombrada una nueva comisión, cuyos miembros más destacados eran Eduardo Aunós (máximo representante del corporativismo en la Dictadura de Primo de Rivera) y Dionisio Ridruejo. Esta solución, propuesta por Serrano Suñer, fue la que triunfó dando como resultado al Fuero del Trabajo como fórmula de transición entre el sector falangista de Ridruejo y el tradicionalista de Aunós.<sup>7</sup>

No hay que perder de vista el momento en que el Fuero del Trabajo comienza su andadura. El fuero se promulga con fecha 9 de marzo de 1938, apareciendo publicado el 10. Nace el Fuero del Trabajo en el curso de la guerra civil que todavía desolaba el territorio nacional y que era vista como “una heroica tarea militar” en la que España se constituía en salvadora de los valores

del espíritu y la cultura del mundo a costa de perder buena parte de sus riquezas materiales. Por ello, y como consecuencia de este contexto, con “aire militar” se proponía la realización de una Revolución que, impregnada de un sentimiento católico y español, devolviera a los españoles “la Patria, el Pan y la Justicia” de acuerdo a las consignas de “Unidad, Libertad y Grandeza de España.” Todo ello subordinando la economía a la política y buscando el fortalecimiento de la patria. Con ello, supuestamente, se estaba respondiendo a lo que era una demanda social y una exigencia de “cuantos combatían en las trincheras y forman, por el honor, el valor y el trabajo, la más adelantada aristocracia de esta era nacional.”

En líneas generales, el Fuero del Trabajo contenía el reconocimiento de la familia como célula primaria y fundamental de la sociedad y planteaba la retribución del trabajo en función del peso de la prole con el objetivo de que la familia pudiera llevar una vida moral y digna. Planteaba también la necesidad del subsidio familiar, el fomento de las propiedades familiares y la protección del patrimonio familiar.

El preámbulo insertaba la cuestión de la familia en un marco más amplio, propio de la tarea de reconstrucción nacional que se pretendía llevar a cabo. La familia ocupaba, teóricamente, un lugar esencial como foco que habría de iluminar a la sociedad española en este proceso revolucionario, hundiendo sus fuentes de inspiración en la tradición del Imperio y reaccionando contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista.

No es casual, en modo alguno, que la primera gran manifestación legislativa del franquismo fuera el Fuero del Trabajo. Este Decreto venía a ser el proyecto “definitivo” para la solución de la denominada “cuestión social”; para poner coto a los desmanes sociales nacidos de la invasión de “hordas” inspiradas por presupuestos ideológicos ajenos a la tradición católica, incluyendo en éstas tanto a los liberales, como a los anarquistas o marxistas. Tampoco es casual, en el contexto de la búsqueda de estandartes simbólicos por parte del franquismo, el que el día del “Glorioso Alzamiento” fuera considerado además como Fiesta de Exaltación del Trabajo, y que, por tanto, se produjera la imbricación clara entre lo laboral, lo social y lo potencialmente conflictivo, con una supuesta “Cruzada de Liberación Nacional” que enarbolaba formalmente la bandera de lo social como ariete ante el que sucumbirían los “enemigos de España, de Dios y del Hombre.”

El elemento básico al que hemos de referirnos al hablar del Fuero del Trabajo es el párrafo 3º del Título XII. En él se reconoce a la familia como elemento central de la sociedad dotado de derechos superiores a los propios del derecho positivo. Es necesario no perder este elemento de vista porque constituye un aspecto fundamental a lo largo de la investigación realizada. El párrafo al que nos referimos expresa la mencionada idea de la siguiente forma:

“Reconoce a la familia como célula primaria, natural y fundamento de la Sociedad, y al mismo tiempo como institución moral dotada de derecho inalienable y superior a toda ley positiva. Para mayor garantía de su conservación y continuidad se reconocerá el patrimonio familiar inembargable.”<sup>8</sup>

Dentro de este marco de lo social que imbricaba la noción de familia y trabajo con la de revolución, el párrafo 1º del Título II del Fuero se comprometía a prohibir el trabajo nocturno de las mujeres y de los niños, a regular el trabajo a domicilio y a liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica. Este punto, como más adelante se verá al ser tratado, manifestaba el deseo claro de sacar a la mujer española del mundo laboral en cuanto esto había sido motivado, entre otros factores, por la aparición del liberalismo, del capitalismo industrial y del marxismo dominador de la II República. Y también, en cuanto que lo que aquí se había planteado estaba en pugna con el modelo tradicional de familia en el que a la mujer le correspondía el papel de bondadosa compañera subyugada a los deseos del cabeza de familia que, de igual manera que el Señor en los Cielos, era el jefe de familia dentro de la unidad familiar.

No es baladí la referencia a la familia como elemento central al que necesariamente había de hacer referencia cualquier aspecto de la legislación social franquista. Formalmente, la familia aparece como el elemento esencial para remontar la crisis de la sociedad española, como el sostén para que una nueva sociedad diera a luz y como el elemento fundamental de socialización del régimen.

Característica fundamental de la carta magna del proyecto social franquista fue su tradicionalismo, su antimarxismo, su antiliberalismo, etc. A ello se unió como instrumento básico de la ejecución de su política la Falange.<sup>9</sup> Así convergían en el Fuero el tradicionalismo corporativista de corte carlista, el sindicalismo católico y el falangismo más revolucionario en la búsqueda de un proyecto social que permitiera poner fin a la conflictividad social que había caracterizado la realidad española en los últimos decenios.

El Fuero del Trabajo, además de desarrollar los principios rectores de la política sociolaboral, pretendía poner punto y final, por medio de su “estricta” aplicación, a la cuestión social. En dicho esquema el movimiento sindical, concebido en la forma en que se desarrolla en la II República, no tiene cabida en la medida en que, según las autoridades del régimen, imposibilitaba un orden social armónico sin luchas de clases fomentadoras de los antagonismos que habían “socavado” la convivencia de los españoles desde la aparición del maldecido liberalismo hasta lo que se entendía (en el mejor de los casos) como secuestro de la II República por parte del marxismo materialista.



En este esquema armónico, el conflicto entre los obreros y los empresarios estaba desterrado. En su lugar, la categoría del productor englobaba a ambos grupos sociales en una única realidad que fusionaba a ambos conjuntos en una misma vía de comunicación y de trabajo que imposibilitaba las disfunciones del sistema productivo. Para algunos autores, este proyecto revolucionario, que supuestamente había de mitigar la conflictividad social entre los obreros y los empresarios al integrarlos dentro de la categoría de productores, fracasó muy pronto. Llegó a su fin, incluso antes que la fase más claramente progermana del franquismo acabase. En concreto, Benito del Pozo afirma que la utopía falangista, consistente en crear un Estado nacional-sindicalista basado en la titularidad de los medios de producción y en la desaparición de las mencionadas categorías de patrono y obrero, se desmoronó en 1941.<sup>10</sup> Ello, pese a la parafernalia revolucionaria de hombres como Girón de Velasco, político que encarna el proyecto social del franquismo, lo cual alejó al mencionado ministro de Trabajo, a su época y a su proyecto del ideario revolucionario de la vieja Falange. Pese a ello los desarrollos normativos cronológicamente más cercanos a la promulgación del Fuero del Trabajo respiran con mayor intensidad el influjo de dicho fuero. De esta forma, la Ley de Bases de la Organización Sindical de 1940 y el Decreto de Reglamentaciones de Trabajo de 1942 están más próximos a los principios y a las grandes líneas plasmadas en el Fuero del Trabajo. De todas formas, la Ley del Contrato de Trabajo de 1944<sup>11</sup> estableció definitivamente el principio del fin del proyecto nacional-sindicalista y la adopción, al menos parcial, de tesis contractualistas, al imponer el elemento contractual como fuente constitutiva de los vínculos jurídicos del trabajo.

En torno a esta cuestión "...el nacional-sindicalismo interpreta el Derecho del Trabajo dentro de la corriente anticontractualista, oponiéndose tanto al contrato individual como al colectivo, abogando por la teoría de la relación de trabajo donde el igualitarismo del contrato (concebido como instrumento de mercantilización de la actividad humana e instigador de los enfrentamientos de clase) se sustituye por una inserción jerarquizada del individuo en la empresa, entendida ésta como comunidad de trabajo que vincula a sus miembros por medio de nexos de hermandad."<sup>12</sup> Y en este sentido, el Fuero del Trabajo se constituía en el elemento de propaganda fundamental en la medida en que planteaba la existencia de un futuro de felicidad y paz social en el que estos valores serían compatibles con el orden y la seguridad que un estado autoritario como el franquista reclamaba.

Elemento fundamental en el Fuero del Trabajo era el ansia de desmercantilización de la relación laboral. Esta negación del carácter mercantil del trabajo fue el soporte ideológico del intervencionismo salarial y concretamente de los decretos de política de salarios de 1944, en los que se fijaba un salario máximo. Así, en el punto 1º de la Declaración I se define al trabajo "como la participación en la producción mediante el ejercicio voluntariamente prestado de sus

facultades intelectuales y manuales, según la personal vocación en orden al decoro y la holgura de su vida y al mejor desarrollo de la economía nacional....” Y en el punto 2º se afirma que “por ser esencialmente personal y humano el trabajo no puede reducirse a un concepto material de mercancía, ni ser objeto de transacción incompatible con la dignidad personal de quien lo preste.”<sup>13</sup>

No debemos dejarnos envolver por lo que pueda parecer un mensaje transido de voluntarismo o de promesas pretendidamente efectistas que se realizaron en el contexto de la guerra civil y que tenían como finalidad ofertar un mensaje mínimamente atrayente en lo social. Pero tampoco podemos obviar el hecho de que, formalmente, este ansia de desmaterializar el ámbito laboral tenía como fundamento un precepto de origen divino en la medida en que en el párrafo 3º de esta Declaración se hacía alusión al deber del trabajo impuesto por Dios al hombre. Y ello en orden a mejorar la prosperidad de su familia, de su patria y de él mismo, independientemente de que el examen de la realidad muestre un nivel de salarios reales (por poner un ejemplo) que no admite comparación con estos deseos formales. Es decir, el ideal del catolicismo social junto a los sesgos de mayor signo falangista están presentes en el fuero y ambos son los que vertebran y dan sentido al mismo. La exaltación máxima del trabajo y del ideal del mismo se desarrolla en los puntos 6º y 7º de la Declaración I. En estos párrafos se afirma lo siguiente:

“6. El trabajo constituye uno de los más nobles atributos de jerarquía y de honor, y es título suficiente para exigir la asistencia y tutela del Estado.

7. Servicio es el trabajo que se presta con heroísmo, desinterés y abnegación, con ánimo de contribuir al bien superior que España representa.”<sup>14</sup>

En la Declaración II, el Estado franquista aparece como el garante de los derechos fundamentales del trabajador. El Estado había de ejercer la “defensa del trabajador, su vida y su trabajo.” En esta declaración se imbricaba el ámbito de lo laboral, con el de la cultura y el recreo presidido por el catolicismo inherente al régimen. Por un lado, el Estado se ofrecía como garante del ocio y el recreo de los trabajadores por medio del derecho a unas vacaciones anuales retribuidas. Se proponía igualmente el mantenimiento del descanso dominical “como condición sagrada en la prestación del trabajo.” Se encontraba así en ese modelo la articulación de un sistema para el reposo espiritual y físico del trabajador español en un contexto social y laboral que había de estar transido de armonía y paz. Si la paz exterior quedaba garantizada por mecanismos a los que no toca en este capítulo aludir, la paz interior quedaba avalada por el acceso al ocio y por el descanso dominical, a lo que se unía la celebración de las festividades religiosas sin que por ello, en éstas últimas, se perdiera la retribución.

Enmarcado dentro de este talante quimérico que caracterizaba al Fuero del Trabajo se proponía la defensa del artesanado como símbolo de lo que era una "herencia viva de un glorioso pasado gremial" con el que, al menos en parte, se pretendía engarzar. La artesanía era, para los ideólogos del franquismo social, una forma de producción que permitía la proyección completa de la persona, además de tener el valor inherente e "impagable" de estar en las antípodas de la forma de producción capitalista y del denominado "gregarismo marxista."

Esta vuelta al Edén tenía otro de sus resortes fundamentales, teóricamente, en la potenciación del mundo rural y de la agricultura. A esta cuestión aludía la Declaración V del Fuero en la que se establecía la obligación por parte del Estado de cuidar de la capacitación técnica del agricultor. El Estado autárquico que pretendía crearse, cuyas bases maduran durante la guerra civil, proponía, como forma fundamental para mantener el nivel de vida de los agricultores españoles, el control de precios como medio para garantizar unos beneficios "normales" para los empresarios agrícolas y, consiguientemente, unos niveles de vida progresivamente mejores para sus empleados. Paralelamente a la potenciación formal de la agricultura profesionalizada o tecnificada, se realizaba la apología del pequeño huerto o la pequeña parcela como instrumento para mantener la seguridad de la familia campesina y como método para atender sus necesidades más elementales. Estas pequeñas parcelas habían de constituir el soporte fundamental en épocas de ausencia de empleo. En el caso del sur latifundista esta situación era la característica durante la gran mayoría del año. Este planteamiento ruralizante de la vida española no solamente hacía alusión a variables puramente económicas sino que partía de la necesidad de potenciar el hábitat rural; concretamente, se refería el fuero a la mejora de la vivienda campesina y al mejoramiento de las condiciones higiénicas de los pueblos y caseríos de España.

Desde un punto formal, el capital y la empresa (Declaración VIII) habían de buscar unidos el bien común de la sociedad. La empresa había de ser un instrumento que subordinara cualquier elemento del proceso productivo al bien común y a la defensa de la dimensión humana de los "productores" españoles. El criterio liberal eficientista desaparece de las formulaciones teóricas para dar paso a la defensa formal de valores humanos transidos de cristianismo. El capital, desde este punto de vista, no era más que un instrumento al servicio de la producción y así el beneficio obtenido por el mismo había de dedicarse, posteriormente al establecimiento de unos intereses justos, a la formación de reservas necesarias para su estabilidad, para el perfeccionamiento de la producción y para "el mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores." Esta concepción no era comprensible fuera de estos patrones unitaristas y jerárquicos, dada la concepción de la producción nacional como "unidad económica al servicio de la Patria" (Declaración X). El crédito, de igual manera que cualquier elemento necesario para la producción, había de atender a la potenciación de la riqueza nacional

y, por tanto, el Estado se manifestaba dispuesto a perseguir todas las formas de usura (Declaración 2-X).

Si, como se expone en la Declaración I, el trabajo era la participación del hombre en la producción mediante el ejercicio voluntariamente prestado de sus facultades intelectuales y manuales, aquél adquiría unas características seudoreligiosas y moralizantes. Desde este punto de vista, el trabajo era una obligación y, por tanto, el deber de incrementar la riqueza nacional (Declaración 1-XI) era una tarea ineludible para todos los españoles hasta el punto de que la Declaración 3-XI imponía la sanción para todo aquel que provocase voluntariamente una "disminución dolosa del rendimiento en el trabajo," lo cual no era más que una forma de evitar los sistemas de resistencia del trabajador que no se desarrollaran abiertamente por medio de una huelga en su sentido clásico.

Sin embargo, esta nueva vía entre el liberal-capitalismo y el materialismo marxista, "no implicaba alteración alguna de las bases estructurales y económicas del capitalismo sino que simplemente renegaba de un liberalismo que en los años treinta había mostrado su incapacidad para superar sin alteraciones sociales la crisis cíclica del sistema. Frente a la amenaza de revolución obrera, el intervencionismo estatal se presentaba como única garantía no de un orden dominante. De ahí, que la falangista, fuese siempre la *revolución pendiente*."<sup>15</sup> Y esta postergación de la mencionada "revolución" nos pone de nuevo de manifiesto que el surco que separaba esta oferta de solución de la *cuestión social* y las realizaciones posteriores del ministerio de Trabajo que iremos desarrollando durante esta tesis (tales como paro, vivienda, seguros sociales, cooperación, política familiar, formación profesional, etc.) era extraordinariamente grande, haciendo del Fuero del Trabajo una mera enumeración de intenciones voluntaristas que sólo en cierta medida fueron desarrolladas. El Fuero del Trabajo, por tanto, como mera manifestación de intenciones no tenía el carácter de ley aplicable por los tribunales; no era más que un conjunto de principios tendentes a estructurar socialmente el estado salido de la guerra civil y que requería ser articulado por medio de leyes concretas que desarrollaran cada uno de los preceptos allí expuestos. En los casos en que estos se llevaron a cabo, la mencionada distancia entre los principios generales y la letra concreta para su aplicación explicitó la misma separación (o quizás mayor) que entre las leyes concretas y la ejecución práctica de las mismas.

### **1.2. José Antonio Girón de Velasco: su papel en el régimen de Franco.**

Girón<sup>16</sup> fue el materializador de la política de lo que hemos venido calificando como franquismo social. Con él y con el ascenso en 1941 a la Secretaría General del Movimiento de Arrese se ponía fin a una fase de "confusionismo"<sup>17</sup> en el sentido de truncar el pretendido

revolucionarismo de los elementos más abiertamente falangistas e independientes dentro del Nuevo Estado. Fue en palabras de su amigo Ismael Herraiz uno de los dos grandes hombres del sistema revolucionario sustentado sobre los ideales falangistas.<sup>18</sup>

Diseñadas las opciones fundamentales del franquismo social en el Fuero del Trabajo, el ministerio del ramo tuvo como función básica la de desarrollar los proyectos de mayor trascendencia en orden a materializar la mencionada política social. A la cabeza del ministerio de Trabajo estuvo de 1941 a 1957 José Antonio Girón de Velasco.<sup>19</sup> A lo largo de estos años su mano derecha fue el Subsecretario del ministerio cargo que fue ocupado por Manuel Valdés Larrañaga (quien duraría pocos meses),<sup>20</sup> Esteban Pérez González (de 1941 a 1945), Carlos Pinilla (hasta 1951), Ruiz Jarabo y Ambrosio López Giménez.

En lo político, la vida de Girón estaba prendida de dos tendencias. Por un lado, su ansia por participar en la guerra civil en defensa de lo que él creía eran las esencias de lo hispánico; y por otro "rehacer a España desde sus cimientos, según la propuesta joseantoniana."<sup>21</sup> Este proyecto se asentaba en la devoción inquebrantable a José Antonio Primo de Rivera, aquel hombre "dotado de una excepcional capacidad de mando...que recorrió los caminos de la patria hasta sacarla de sus casillas y poner en pie de esperanza;"<sup>22</sup> "fueron su palabra y su ejemplo de vida y de muerte los que cautivaron a nuestra generación."<sup>23</sup> Como se puede observar la personalidad de Girón aparece marcada por un intenso lirismo no exento de demagogia. "Claro está que había mucho de escenografía en aquel aparato. Pero también lo había de poético. Y ya sabemos que a los pueblos sólo los mueven los poetas," afirmaba Girón.<sup>24</sup>

La mentalidad de Girón aparece transida de un toque catastrofista. La visión que tenía de un mundo dominado por el "liberalismo y el marxismo" le hacía ver el problema de la guerra civil como una cuestión de supervivencia debido a la cual era necesario derrotar absolutamente y por medio de una labor demoledora al enemigo de España. De ahí arranca la idea de reconstruir España desde los cimientos. España era en la mente de Girón un desierto que en otra época (esa que se pretendía resucitar) había sido un vergel donde los valores del catolicismo imperaron en un ambiente social de paz y armonía próxima a la del Edén bíblico. Todo ello aparece envuelto de una confianza absoluta en los principios de la Falange.<sup>25</sup> Esa paz, según Girón, había de sustentarse sobre lo que el denominaba las tres libertades: la de mandar, la de saber y la de poseer. La libertad de saber tenía su materialización en las Universidades Laborales; la de poseer en el crédito laboral y ambas habían de ser soportadas económicamente por el gran potencial de los montepíos que se transformaban en algo más que en entidades de previsión para hacer las veces de un substitutivo de los presupuestos generales del Estado. En último lugar, los jurados de empresa habían de materializar la libertad de mandar.<sup>26</sup>

La época que Girón encarnó en parte, era para el ex-ministro de Trabajo un tiempo “infinitamente mejor que cualquier otro pasado.”<sup>27</sup> Uno de los motivos que justificaron la publicación de sus memorias en 1994 era, a su juicio, la escasa preocupación del régimen de Franco por escribir su propia historia. En teoría, el objetivo de estas memorias era contribuir a esclarecer esa parte de la Historia de España, esos “cuarenta años de libertad, paz, justicia y progreso.”<sup>28</sup> Este era para Girón el colofón de una España que había empezado a amanecer después de una contienda nacional tras la que nuestro país alcanzaría una situación “inmejorable y desconocida” en los siglos anteriores:

“...tengo que decir que si en última instancia he dado rienda suelta a ese cúmulo de recuerdos es al contemplar, al cabo de tantos y tantos años, el hundimiento vertical de la fórmula de democracia social que sobre un sistema de representación orgánica logró para España -economía, trabajo, convivencia- el período de tiempo más brillante de su historia contemporánea. Se partió de cero y se culminó no sólo en la sociedad del bienestar que en 1975 acogía a la totalidad del censo nacional, sino, simultáneamente, al engrandecimiento de nuestro pueblo...”<sup>29</sup>

El ascenso de Girón en la pirámide de poder del franquismo, aunque fraguado antes, comienza en el verano de 1939. El gobierno de agosto de 1939 supuso un golpe para algunos falangistas como el Delegado Nacional de Auxilio Social, Martínez de Bedoya. Según el testimonio de Girón fue él, quien enfrentándose a Serrano Suñer, ministro de Gobernación, logró evitar que las represalias contra Martínez de Bedoya, contrario al gobierno de agosto de 1939, fueran mayores. En el contexto de enfrentamiento de los falangistas contra un gobierno que aparentemente explicitaba el triunfo de la C.E.D.A. Girón, aupado por el Secretario General del Movimiento, el general Agustín Muñoz Grandes, era nombrado Delegado Nacional de Excombatientes. Según el propio Girón, con la aceptación de aquel puesto contravenía su propia vocación de servir a España y a la Falange desde puestos de poder distintos al de delegado nacional.<sup>30</sup>

Girón de Velasco llegó al ministerio de Trabajo a raíz de la crisis de 1941. El mes de mayo de este año fue un momento de gran inquietud entre los medios más próximos a la Falange. Algunos gobernadores civiles y jefes provinciales habían dimitido, entre ellos Miguel Primo de Rivera. “Los delegados nacionales vivíamos como una especie extraña de huelga. O de predimisión; Pilar Primo de Rivera había hecho llegar a Ramón Serrano Suñer la suya, firmada aunque sin fecha,” afirmaba Girón.<sup>31</sup>

Tres días antes del nombramiento de Girón como ministro, Serrano Suñer le había telefoneado para poner en su conocimiento que él o Jesús Rivero Meneses ocuparían la cartera de Trabajo.

El día 17 recibió la llamada del general Franco. Girón en sus memorias relata aquellos hechos, no sin apasionamiento sincero, de la siguiente manera:

“Franco me recibió sonriente, amable. Y sin más me dijo:

-Girón, va a ser usted ministro de Trabajo.

Jamás había pensado ni en ese ministerio, ni en otro; por lo menos hasta aquel instante. Tenía veintinueve años y estaba demasiado abrumado por la incorporación a la vida civil de miles y miles de excombatientes. De manera que con la espontaneidad con que siempre le hablé, sin recovecos ni valores entendidos, le contesté:

-¡No me haga usted eso, mi general! ¡Yo no sé una palabra de ese departamento!...

Me miró. Por unos instantes dejó de sonreír y se limitó a transformar la comunicación anterior en una orden. No lo dijo así, pero en la expresión de su rostro se daba por entendido sin lugar a equívocos.

-No tiene más remedio que aceptar. No se preocupe...

...No son pocos los historiadores que consideran que aquella crisis vertebró bastante al Movimiento. Los más perspicaces dicen que también sirvió de aviso para el bueno de Ramón Serrano Suñer.”<sup>32</sup>

Para Suárez Fernández, no sin un sesgo pasional en sus aseveraciones, Girón representaba, junto a Arrese y Miguel Primo de Rivera un falangismo sincero. “Eran más católicos que socialistas, más racionalistas que hegelianos, más españoles que ninguna otra cosa.”<sup>33</sup> En definitiva representaban el sector de la derecha de la falange, quizás el de mayor capacidad de adaptación y acomodamiento a una situación en la que progresivamente sus principios iban a ser paulatinamente postergados. Era la falange de “derechas” frente a “los (*pocos*) guías de la izquierda”<sup>34</sup> que pugnaban por imponer los viejos ideales de la Falange en referencia esencialmente a Ridruejo y Tovar, dos de los protagonistas de la crisis de 1941.

Por tanto, Girón apareció por primera vez en el gobierno nacido el 19 de mayo de 1941<sup>35</sup> en función de la creciente influencia del nazismo alemán a través del ministro de Gobernación, Serrano Suñer. Según Payne, para “...aumentar la representación falangista en el gobierno, Serrano sugirió a su cuñado que el ministerio de Trabajo, que llevaba en las manos del ministro de Agricultura un año y medio sin ninguna actividad, se le diera al joven camisa vieja de Valladolid, José Antonio Girón.”<sup>36</sup> Desde ese momento “Girón se convirtió en el primer auténtico ministro de Trabajo del régimen...”<sup>37</sup> La labor de éste, al igual que la de Arrese desde la Secretaria General del Movimiento o la de Fermín Sanz Orrio desde la Vicesecretaría de Obras Sociales de la F.E.T., sería la de domesticar a las instituciones emanadas del falangismo y adaptarlas a la nueva realidad que España vivía encabezada por el “Caudillo.”<sup>38</sup>

En todo momento, Girón dio muestras de su empuje y de su vitalidad política, independientemente de que esta fuera más o menos acertada. Siempre demostró su empuje, el brio de su actividad y la fortaleza de su juventud. Era un ministro puro nervio, con más fibra y romanticismo que la mayoría de los políticos de los gabinetes franquistas; enérgico y vigoroso en su vocabulario dio muestras de ello desde el día en que su nombramiento fue publicado:

“Tras las ceremonias habituales de juramento y toma de posesión me presenté en el ministerio y ocupé el despacho. Había visto en las caras de los altos dirigentes del departamento una cierta ironía, probablemente por mi juventud. O acaso porque suponían que frente a sus brillantes historiales administrativos, el joven ministro podía vacilar. Ignoraban algo bastante importante: en el ministerio de Trabajo entraba un ministro que desconocía los organigramas del ramo. Pero ignoraban también que ese ministro era un falangista con las ideas doctrinales muy claras y con la certidumbre de que los españoles llevaban más de cien años esperando la hora de la justicia social.”<sup>39</sup>

Sobre la personalidad de Girón hay otros juicios, como el de S. G. Payne, que señalan el carácter demagógico de su retórica, su conservadurismo, su lealtad inquebrantable a Franco<sup>40</sup> y su desafecto, como otros falangistas, a Serrano Suñer.<sup>41</sup> Ludevid afirma de él y de Arrese que defendían un sindicalismo concebido por encima de una lucha de clases que se proclamaba superada.<sup>42</sup> Para otros no era más que un demagogo, al igual que otros altos jerarcas de la administración franquista, que promovía la esclavitud del proletariado encadenando “discursos y viajes, ofreciendo al exterior cuanto les piden...prometiéndolo resolver los problemas que sus amos -los del poder económico- han creado...; creo que queda bastante claro el papel de asalariado de las clases patronales de Girón y compañía.”<sup>43</sup> Algunos sectores empresariales veían en Girón a un revolucionario, a un rojo<sup>44</sup> o un izquierdista.<sup>45</sup> Independientemente de estas consideraciones la figura del ministro de Trabajo aparece como claramente progermana en los años de la segunda guerra mundial.

Para Girón la crisis de agosto de 1942 nacida de los sucesos acontecidos en el santuario de Begoña (16 de agosto de 1942) no fue más que agua de borrajas, pese a que considera que en aquel momento, tras el atentado contra la vida del general Varela, ministro del Ejército, se produjo un intento de los militares por acabar con la Falange y establecer una nueva dictadura militar que prescindiera de Franco. Pese a lo trascendente del hecho, Girón no sacó más conclusión de aquellos acontecimientos que la salida de Varela, Galarza y Serrano Suñer del gabinete franquista. Independientemente de ello, Girón, como representante *de facto* de la Falange, y el general Asensio, ministro del Ejército, en vista de lo que suponía el comienzo de la operación Torch el 8 de noviembre de 1942 y el consiguiente desembarco de los aliados en el Norte de África, parecían ser partidarios de que España entrase en la guerra del lado de los



alemanes.<sup>46</sup> Inmersa Europa en la Segunda Guerra Mundial, la posición de los falangistas era abiertamente germanófila. De hecho, en el consejo de ministros del 16 de noviembre de 1942 la minoría germanófila encabezada por Girón (además de Asensio y Arrese) presionó para que España se colocara más abiertamente al lado del Tercer Reich.<sup>47</sup>

Uno de los principales frenos de Girón de Velasco a sus proyectos vino precisamente desde dentro de las entrañas del propio franquismo; concretamente del partido único. El formal empeño revolucionario de elementos procedentes del falangismo como Girón de Velasco encontró un freno en las conjuras o amotinamientos internos del Movimiento, supuestamente el apoyo fundamental de la política del régimen. Esta opinión provenía de quien acababa de ser nombrado Consejero Nacional del Movimiento. Aquél, veía en el partido único un nido de burócratas sometidos a los deseos de los plutócratas y de los conservadores que recelaban del supuesto afán revolucionario que encarnaba el ministerio de Trabajo encabezado por una figura del falangismo como Girón.

De entre los proyectos revolucionarios que Girón pretendía desarrollar a la llegada al ministerio de Trabajo merece citarse el afán por “dignificar moral, profesional y económicamente al trabajador.”<sup>48</sup> Las medidas para lograr la dignificación del trabajador comenzaron con el desarrollo del Seguro Obligatorio de Enfermedad, con la búsqueda de la estabilidad en el empleo, con el establecimiento por parte del Estado de un salario justo para el trabajador y su familia por medio del subsidio familiar, con la cobertura de los riesgos ante el infortunio del trabajador y su familia, el incremento de la producción, el fomento de la cultura entre los trabajadores, etc.<sup>49</sup> Los proyectos del franquismo social que Girón representaba hacían continua referencia al hombre con un cierto sesgo teologizante. Formalmente, la política social del ministerio de Trabajo había de tener presente en todo momento que el objetivo era lograr que el trabajador español cumpliera su destino metafísico y eterno a través del mundo del trabajo, la empresa y de las unidades sociales naturales: la familia, el municipio y el sindicato.

Ya en el año 1943 (concretamente el 12 de mayo) se produjo un intento por parte de Girón de que el Jefe del Estado interfiriera en favor de sus proyectos y en contra de los criterios del ministerio de Hacienda (una de las bestias negras de Girón), que entorpecía la capacidad financiera del Instituto Nacional de Previsión con el Proyecto de Ley de “Inversión de fondos y exención tributaria de entidades aseguradoras de fondos públicos” publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Españolas de 15 de abril de 1943. Según el ministro de Trabajo, este proyecto constituía un importante freno en la capacidad de acción del I.N.P., organismo por medio del cual se desarrollaba la política social del ministerio de Trabajo, y más concretamente la política de previsión. El ministro se expresaba por escrito al general Franco en los siguientes términos:

"No escapa a la penetración de V.E. que la labor social, llevada a cabo desde el 18 de julio de 1936 por el Estado actual, ha venido siendo entorpecida con obstaculizaciones, unas veces determinadas por necesidades circunstanciales y otras por la actividad de concepciones político-sociales rebasadas que pugnan por sobrevivir.- La dificultad de establecer con exactitud la línea que separa el obstáculo natural de la resistencia intencionada y la grave responsabilidad que entraña una acusación de obstruccionismo nos obligan a combatir y denunciar a V.E. objetivamente las orientaciones que pueden oponerse al cumplimiento de vuestras consignas prescindiendo de calificar su intención."<sup>50</sup>

La segunda mitad de los años cuarenta fue un período de incertidumbre para un falangismo que progresivamente era más marginado dentro del propio régimen pese a ser uno de sus soportes fundamentales. La labor de Girón en esas difíciles circunstancias (sobre todo desde 1945) estuvo presidida por el afán de desarrollar el mayor número de proyectos que dieran coherencia al afán supuestamente revolucionario del ministerio que el presidía:

"...Sin ministro secretario general del Movimiento...desde la crisis de julio de 1945 y con Raimundo Fernández Cuesta en el ministerio de Justicia, me propuse tres cosas: mantener mi absoluta fidelidad al jefe nacional, seguir desarrollando el esquema doctrinario del nacional-sindicalismo y no parar ni un solo día, ni un solo instante, en la obra emprendida desde el ministerio de Trabajo..."<sup>51</sup>

Para Girón el año 1947 fue un año de singular trascendencia; hasta el punto que en sus memorias afirma que este año "representa el avance prometedor de mis escuadras en pos de una revolución que yo no dejé pendiente,"<sup>52</sup> pese a lo cual, el "primer franquismo" no serviría en modo alguno para materializar los sueños joseantonianos que teóricamente había de ayudar a construir. Este año también sería el elegido para que su ministerio y su política recibieran los "hachazos del capitalismo y de algunos ilustres camaradas..."<sup>53</sup> La fuerte presión de los sectores antifalangistas, sobre todo los monárquicos, molestaba de forma evidente a Girón. Según él, nunca participó en los incidentes, en las discusiones o en las "pequeñas conspiraciones de salón."<sup>54</sup> Sin embargo, la obsesión que manifestó dos años antes por quitar de en medio al Subsecretario de Trabajo, Esteban Blas Pérez, indica que Girón, en mayor o menor medida, también luchó desde los salones por mantener la posición de los falangistas dentro del régimen del general Franco.

Sería Girón el ministro que, tras Carrero Blanco (la eminencia gris del régimen de Franco),<sup>55</sup> ocupara más tiempo un sillón ministerial junto al general Franco. Desde el 19 de mayo de 1941

al 25 de febrero de 1957. Casi dieciséis años. Con respecto respecto a la larga duración en el cargo afirma Payne:

*"No obstante, el falangista Girón, cuy flexible demagogia sería muy útil, continuó como ministro de Trabajo (un puesto que conservaría 17 años, hasta 1957, lo que le convirtió en el ministro más longevo de Franco después de Carrero Blanco."*<sup>56</sup>

La figura de Girón también fue utilizada como mecanismo de domesticación de los elementos falangistas. Dada su lealtad al general Franco, éste confiaba en él por muy demagógicas que fueran sus declaraciones públicas<sup>57</sup> porque, a través de las promesas y discursos de Girón se desactivaban las posibles protestas y demandas de los elementos más radicales del partido, imposibilitando que los viejos falangistas y sus programas penetraran profundamente en la política española.

Por supuesto, la figura de Girón tampoco fue bien recibida por la oposición al régimen. No había estallado el conflicto entre tradicionalistas (o carlistas) y falangistas el 16 de agosto de 1942 en el santuario de la Virgen de Begoña cuando el 2 de abril del mismo año estallaba una bomba en el coche de Girón, "sin que nadie resultara herido, ni los responsables fueran identificados."<sup>58</sup>

Girón logró pasar indemne la crisis ministerial de 1951 gracias a su papel "eminentemente útil y leal"<sup>59</sup> para el general Franco. Quizás por ello fueron estos los años rosas del ministro de Trabajo. Las cosas marchaban bien; la época del racionamiento (en 1952 llegó a su fin) y de la penuria dejaba paso a una época de industrialización y de incremento progresivo en el nivel de vida. En definitiva estos años cincuenta constituyeron para el franquismo su verdadera encrucijada:

*"...iba a decidirse el destino de España. Cuando esa década terminó, la España que nos propusimos desde los lejanos días de las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica o desde el glorioso amanecer del 29 de octubre de 1933, iba a ser distinta. En quince años, tras el deslumbrante milagro español...la fisonomía de nuestro pueblo cambiaría radicalmente..."*

*...No sólo el entramado del estado social cuya construcción puso en mis manos Francisco Franco, sino en todos los otros órdenes de la vida -desde la política hidrográfica a la revolución industrial- se perfilaba ya el amanecer de un nuevo tiempo, perfectamente mejor que cualquier tiempo pasado."*<sup>60</sup>

Pese al papel de Muñoz Grandes en el acceso de Girón al cargo de Delegado Nacional de Excombatientes, hasta la mitad de la década de los cincuenta su relación con éste fue muy brusca. Según Payne,<sup>61</sup> para Muñoz Grandes, Girón fue su principal bestia negra, considerándole un demagogo y una de las principales fuentes de corrupción en el gobierno. A su vez Girón había denunciado a Muñoz como uno de los principales conspiradores contra el régimen de Franco en los años cuarenta.

En cuanto a la crisis del 1956, Girón veía en ello un movimiento de desafectos al franquismo y a su obra.<sup>62</sup> El movimiento contra las esencias del régimen podría encontrar su génesis, siempre según Girón, en un artículo publicado por el miembro del Opus Calvo Serer en 1953 en París.<sup>63</sup> En él, ante lo que parecía un polarizado gabinete ministerial dividido entre la izquierda falangista y la derecha democristiana representada por Joaquín Ruiz-Giménez, el años más tarde integrante de la Junta Democrática, proponía una tercera vía que, asentada en la antigua Acción Española, "diese a la monarquía por venir el contenido doctrinal que necesitaba."<sup>64</sup>

Girón no estaría en el gobierno de febrero del 57. Su buena estrella había terminado por apagarse:

"Después de quince años sustituyó al veterano Girón, hasta entonces el único ministro de Trabajo del régimen, a quien consideraba muy bueno y extremadamente leal, pero demasiado impetuoso y políticamente comprometido por sus largos años en el cargo."<sup>65</sup>

"Así, la representación falangista en el gobierno no disminuyó numéricamente, pero esto no ocultaba el hecho de que la retirada de los proyectos de reforma y la tendencia principal del reajuste del gobierno representaban una derrota fundamental para el Movimiento y el principio de su relegación final."<sup>66</sup>

Según Girón, y sin dejar de tener en cuenta todas las salvedades que habría que hacer, en lo que a su ministerio de Trabajo se refiere la revolución "pendiente" no constituía más que un argumento retórico de sus oponentes dentro del régimen. La política social del régimen había ofrecido a España, al menos hasta la Ley de Reforma Política de 1976, "una edad de oro y...transformó la amarga faz de nuestro pueblo en el rostro sonriente del mejor tiempo vivido a lo largo de muchos siglos de historia."<sup>67</sup> Por tanto, según el ex-ministro, el general cometió el único error de su vida política al permitir la crisis de 1957; la marcha de Girón, según él mismo, deshilachaba las únicas hebras que mantenían unido el espíritu de la Falange con el régimen personalizado en el viejo general. La percepción del "león de Fuengirola" era que con ello, el embrión de la "anti-España," incubando la toxina fétida que desarticularía la obra de la Falange, había triunfado por medio de la provocación del mencionado error del general Franco:

"El error de Franco -error del que saldría cuando se iniciaba la década de los setenta- fue creer que con viviendas, frigoríficos y automóviles iban a matarse los virus de una revolución que, salvada la circunstancia de cada tiempo, obedecía a la pavorosa máquina de la anti-España."<sup>68</sup>

Girón dio sus últimos coletazos políticos a principios del año 1956. El 16 de febrero José Luis de Arrese se hacía cargo de la Secretaría General del Movimiento tras negarse Girón a que recayera en él tal responsabilidad. Sin embargo, el *león de Fuengirola* incrementó notablemente sus poderes y su peso dentro del régimen franquista cuando, nombrado Arrese, aquél se hizo cargo de la Vicesecretaría General de Obras Sociales en febrero de 1956. El hecho de que bajo su mando quedara la Delegación Nacional de Sindicatos probablemente fue un hecho decisivo que ayudó más si cabe a su caída posterior.<sup>69</sup> Girón pretendía que Ismael Herraiz, fuera nombrado Delegado Nacional de Prensa y Propaganda del Movimiento. El Vicesecretario General del Movimiento, Diego Salas Pombo, se opuso a ello pese a tener Girón el beneplácito del Secretario General. La negativa o las dificultades para que el nombramiento de Herraiz se llevara a cabo tenían como base el peligroso ascenso del propio Girón dentro de la estructura de poder del estado franquista. Estaba relativamente cerca su salida del ministerio de Trabajo, pero por estas fechas había hincado el diente dentro de la Secretaría General, había incrementado su peso dentro del sindicato y ahora se proponía dar la batalla para conseguir lo que seguramente le podría haber catapultado a cotas todavía mayores de poder a partir del momento en que la televisión comenzaba su andadura en España. Ismael Herraiz era su hombre; sin embargo, el intento no llegó a buen puerto y Herraiz acabó como agregado de prensa en Viena. Probablemente este fue un primer signo del deterioro de la figura de Girón dentro del gabinete franquista y un indicio de que el final de sus días en aquel gobierno podía estar cerca. Teniendo en cuenta la trascendental importancia que los medios de comunicación iban a tener a lo largo de la década de los sesenta en la sociedad española, la figura de Girón, encaramada por medio de Herraiz a esa fuente de poder, podía haberse defendido más vigorosamente de los grupos y las personalidades que lograrían su salida del gobierno en febrero de 1957. Según el propio Girón, "Francisco Franco había jugado la última baza en defensa de la Falange, sin que los falangistas lo advirtiéramos."<sup>70</sup>

El resultado de todo ello, como ya se ha dicho, fue la salida de Girón del gobierno en la crisis de febrero de 1957. La operación de Arrese y la subida de salarios decretada desde el ministerio de Trabajo fueron el pretexto que los sectores contrarios al falangista Girón aprovecharon para lanzar a éste fuera del gobierno. En palabras del ex-ministro, el ya conocía por boca del general Franco el resultado de la crisis desde enero de 1957:

“En los primeros días de enero de 1957, al salir de un Consejo, Franco me pidió que me quedase.

-Girón, voy a hacer un reajuste profundo del gobierno y tendré que prescindir de usted.

-Gracias, mi general.

-Le ruego que no diga una sola palabra hasta que tenga más perfilada la solución de la crisis. Hasta ese momento, todo seguirá igual.”<sup>71</sup>

La cartera de Trabajo fue a parar a Fermín Sanz Orrio y la de Vivienda a José Luis de Arrese. Su toma de posesión a punto estuvo de tener tintes violentos; evidentemente la Falange encontraba grandes dificultades para aceptar la salida de Girón del ministerio de Trabajo. La situación se complicó hasta tal punto que el discurso que el ex-ministro pronunció en la toma de posesión de su sucesor no fue publicado en la prensa escrita. De hecho, la percepción de la valía de Sanz Orrio por parte de Girón estaba en niveles ínfimos; según el *león de Fuengirola* aquel hombre no era el apropiado para continuar la labor social que España necesitaba.<sup>72</sup> A partir de aquel momento empezaba la vida de Girón como empresario aun sin abandonar la política, fase de su vida que queda fuera de esta investigación. Algunas referencias en las memorias de Girón en torno a Sanz Orrio son fiel reflejo de la idea que tenía sobre aquel personaje:

“O sea, que sin dejar de atender a las cuestiones más acuciantes de la vida política y desdeñando la ramplonería con que la Delegación Nacional de Sindicatos operaba bajo la dirección de Sanz Orrio, decidí, por lo que más urgía: conversar con los obreros...

La toma de posesión en el ministerio de Trabajo de Fermín Sanz Orrio fue tensa y estuvo a punto de ser violenta.”<sup>73</sup>

En esta línea está parte de la correspondencia entre el Delegado Nacional de Sindicatos y el ministro de Trabajo. A la luz de algunos ejemplos se puede palpar la vidriosa relación entre la organización sindical y el ministerio ante lo que para el sindicato era la dejadez de los organismos dependientes del ministerio de Trabajo y el desamparo a que se veían sometidos los trabajadores fruto de la alianza tácita entre algunos empresarios y las delegaciones provinciales del ministerio de Trabajo.<sup>74</sup>

La figura de Girón era ensalzada por los órganos periodísticos de la Falange. Y así, desde el periódico *Arriba*, el actual columnista del diario *ABC*, Jaime Campmany, publicó en el mes de noviembre de 1962, tras el accidente de tráfico que dejaría secuelas perennes en Girón, un artículo del cual reproducimos unas líneas:

“...el hombre se llama José Antonio Girón. Ver a José Antonio Girón en el rincón de una habitación de clínica es algo así como contemplar un genio metido en una botella, como ver un gigante encadenado, como ver un rayo cautivo...”

...Somos muchos los españoles para quienes siempre ha sido una tranquilidad, una confiada esperanza saber que Girón estaba ahí...Fue él quien nos anunció la conquista de tantas cosas que hoy poseemos con naturalidad; fue él quien durante muchos años nos convocaba y encaminaba hacia metas sociales y políticas que, apenas alcanzadas, él mismo remplazaba por otras más lejanas y hermosas; fue él quien simbolizó muchas ilusiones y precisamente aquellas ilusiones que han encontrado mayores y más difíciles obstáculos para hacerse realidad.”<sup>75</sup>

Como colofón a su vida dedicada al mundo de lo social Girón de Velasco recibió en 1970 la medalla de oro al mérito sindical siéndole entregada el 18 de julio de ese mismo año.<sup>76</sup> Como ya hemos mencionado, los años que van más allá de su andadura al frente del ministerio de Trabajo no son objeto de estudio, con lo cual evitaremos cualquier referencia a los mismos sin obviar el hecho de que mientras se realizaba esta tesis (concretamente a finales del mes de agosto de 1995) se producía el fallecimiento del protagonista principal de la política ejecutada desde el ministerio de Trabajo en el período que nos ocupa, con la imposibilidad consiguiente para recabar sus opiniones o puntos de vista. Pese a ello, consideramos que las memorias publicadas por él un año antes han constituido una ayuda eficaz para conocer el punto de vista del personaje.

### ***1.2.1. La función del Falangismo según Girón.***

Quizás el problema fundamental que se planteaba para el falangismo tras la guerra civil fue la pérdida de sus personalidades más destacadas. Muchas de ellas habían fallecido durante aquella. Onésimo Redondo, Julio Ruiz de Alda, Ramiro Ledesma Ramos y, por supuesto, José Antonio Primo de Rivera no pudieron constituirse en figuras significativas del régimen del general Franco porque su vida había llegado a su fin durante la guerra civil que enfrentó a los españoles a lo largo de cuatro años de lucha fratricida. Así mismo, los elementos que tras el Decreto de unificación de 19 de abril de 1937 fueron unidos en una única entidad política nacional denominada Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. tenían el problema de la llegada a los puestos de poder de personalidades como Ramón Serrano Suñer que, procedentes de la C.E.D.A., poco o nada tenían que ver con la Falange o con los ideales que inspiraron su nacimiento más que su amistad con José Antonio o sus lazos familiares con el general Franco. Junto a estos elementos “la plutocracia y el conservadurismo español”<sup>77</sup>

acechaban el torrente y el empuje que Falange pretendía catapultar al poder, según Girón de Velasco.

La consecuencia de la ausencia de líderes naturales dentro de la nueva Falange nacida en el año 1937 se resume, según Girón, en estos términos:

"No todo era brillo. También había sombras. El Partido Único, quizá intramuros de Alcalá 44, de Madrid, que fue su sede, registraba desavenencias y problemas para dar y tomar. Es necesario recordar que Falange Española, tras el sacrificio de sus fundadores, acudió acéfala, aunque briosa y potente, a la construcción del Movimiento Nacional que por aquel tiempo de norte a sur y de este a oeste, el buen pueblo español lo conocía escuetamente por el nombre de Falange."<sup>78</sup>

En el pensamiento de Girón, el problema de una Falange acéfala generaba una serie de desventajas decisivas a la hora de gobernar España, dada la ausencia de figuras capaces de regir los destinos del partido y de oponerse a la ruptura con las tradiciones y valores que habían vertebrado aquél desde su nacimiento. Sin embargo, la lealtad del que fuera ministro de Trabajo al general Franco permaneció en todo momento incólume; el fervor y la devoción por la figura del general, constante en la vida de José Antonio Girón de Velasco, no quebró ni siquiera a la hora de considerar lo cómodo que resultó para aquel militar regir los rumbos de España con una Falange sin líderes y cuyas figuras de papel permanecían domesticadas y amarradas al pesebre del nuevo régimen.<sup>79</sup>

Pese a lo que se pudiera deducir de algunos párrafos de las memorias de Girón, su percepción de lo que Franco supuso para la Falange era extraordinariamente positiva. Es más, a la altura de 1953, con un peso progresivamente menor dentro del Estado franquista, clamaba al cielo ante lo que consideraba era una injusticia.<sup>80</sup> Para Girón, el general Franco había sido siempre un fiel servidor de los principios joseantonianos y el *factótum* de la materialización de aquellos principios en la política social española. Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta que la máxima autoridad del estado franquista era, por supuesto, el general Franco, no se entiende el reproche de Girón a los que, por medio de la indumentaria falangista, procuraron engancharse a las faldas del poder y se entienden menos sus recriminaciones a los que usaron a la Falange para encuadrarse en los órganos básicos del régimen "pero obedeciendo las órdenes que emanaban del poder, aunque el poder no estuviese protegido por la autenticidad falangista necesaria."<sup>81</sup>

Aquí radicó el problema fundamental de la Falange en el seno del régimen franquista. La llegada gradual de elementos tecnocráticos, con plena claridad desde 1957, fue haciendo perder



peso específico a los elementos más puramente falangistas inundando de ideas progresivamente más liberales y "aperturistas" el panorama político español. El resultado fue la introducción en las áreas de mando del partido de hombres que tenían que ver poco o nada con la vieja Falange joseantoniana. Supuestamente, este sector de nuevos falangistas dificultó más que notablemente la labor de Girón al frente del ministerio de Trabajo y también, probablemente, influyó (por su pasividad y dejadez) en la caída del ministro de Trabajo. A ellos Girón les dedicó esta breve reflexión:

"Por estas razones, probablemente tuve siempre la animadversión soterrada de los sectores que más fraternalmente estaban vinculados a mí. Llegó un momento en que, salvo en las reuniones de la Junta Política y en los Consejos de ministros, apenas si tenía relación con los mandos falangistas."<sup>82</sup>

El primer paso ostentoso de destrucción del falangismo se dio a lo largo del año 1945. Por ejemplo, el 1 de abril de ese año, conmemorando la victoria del bando franquista, desfilaron por última vez las unidades de Falange Española. Los falangistas, lamentaba Girón, "iban a prestar a España un doloroso servicio: el discreto apartamiento de Falange Española del paisaje público. Sólo el Frente de Juventudes, a fin de cuentas organización juvenil, mantendría dignamente la presencia de nuestras camisas azules, de nuestras banderas y de nuestras canciones en las ciudades, en los pueblos y en los campos de España."<sup>83</sup> La Falange desde este momento sería progresivamente marginada. De hecho, el general Franco dejaría de exhibirse con el uniforme de jefe nacional como signo evidente del decreciente peso del partido fundado por José Antonio. Incomprensiblemente, o incluso contradictoriamente, Girón afirma que los "que creyeron que en 1945 Franco iba a clausurar a la Falange, se habían quedado con tres palmos de narices."<sup>84</sup> Para los falangistas como Girón de Velasco, el general Franco era la figura predestinada para llevar a cabo la transformación de España según los principios de la Falange joseantoniana.

Ciertamente, el gran problema de los elementos más abiertamente falangistas fue su progresivo apartamiento del poder pese a que, formalmente, el falangismo representaba el aspecto más revolucionario del régimen a partir del cual se habrían de solucionar los problemas sociales de los españoles. Así, durante la guerra civil, la Falange fue una escalera que permitió a algunos subir muchos peldaños en la estructura de poder del régimen. Sin embargo, siendo progresivamente menos necesaria la retórica falangista, sus postulados fueron paulatinamente abandonados y sustituidos por los planteamientos de los tecnócratas o sus personalidades más afines.

A pesar de ello, para Girón de Velasco la gran obra de la Falange había sido la creación del edificio de un sistema social como jamás había conocido España.<sup>85</sup> La cuestión es que cuando el 29 de octubre de 1953 se celebra el Congreso Nacional de Falange Española, momento en el que Girón estima que dicho objetivo se había logrado, la Falange tiene bastante menos peso del que retóricamente el ex-ministro de Trabajo cree. Y es que, según Girón, la Falange era él. En consecuencia, el hecho de que Girón defendiera la idea de que en España se había realizado una gran labor social era una forma de alabar su propia tarea al frente del ministerio de Trabajo.

### 1.3. La organización sindical.

La referencia a la organización sindical parece del todo necesaria en esta tesis. Por un lado, como se ha mencionado en la introducción, parte de la documentación utilizada proviene de la organización sindical o de la documentación originada por la relación de ésta con el ministerio de Trabajo. Es innegable que la ejecución final de las políticas del ministerio de Trabajo dependían en mayor o en menor medida de la participación de la organización sindical y de sus organismos. Esta tesis no se centra en la organización sindical en sí, y cuando se hace referencia a la misma hay que tener en cuenta que ello se debe a las funciones que tenían algunos de sus organismos en la ejecución de políticas cuyo diseño general correspondía al ministerio de Trabajo. Por tanto, a lo largo de la tesis encontraremos aspectos de la política social del período Girón (paro, vivienda, previsión y seguros sociales, etc.) que, por haber sido estudiados utilizando documentación de la organización sindical, nos obligan a realizar alguna referencia a la misma.

La función y las características formales de la organización sindical tienen su referente más claro en el Fuero del Trabajo.<sup>86</sup> La unidad, la totalidad y la jerarquía venían a ser los principios que inexcusablemente habían de presidir el funcionamiento del sindicato en el Estado autoritario franquista. Su función básica había de ser la de controlar a la población en la faceta laboral.<sup>87</sup> En el denominado sindicato vertical todos los sectores de la economía se encuadraban de forma obligatoria por ramas de la producción o de servicios. La definición más concreta de la forma y manera en que el sindicato se entendía la daba la Declaración 3-XIII del mencionado fuero; en torno a esta cuestión se afirmaba lo siguiente:

“El sindicato vertical es una Corporación de derecho público que se constituye por la integración en un organismo unitario de todos los elementos que consagran sus actividades al cumplimiento del proceso económico, dentro de un determinado servicio o rama de la producción, ordenado jerárquicamente bajo la dirección del Estado.”

El sindicato vertical, atendiendo siempre a los criterios expuestos en el Fuero del Trabajo, era un instrumento al servicio del Estado, a través del cual había de realizar aquél principalmente su política económica. Correspondía también al sindicato conocer sobre los problemas de la producción así como intervenir por medio de organismos intermedios en la reglamentación, vigilancia y cumplimiento de las condiciones de trabajo (Declaración 5-XIII). Le correspondía también la iniciativa en la creación, el mantenimiento y la fiscalización de organismos de investigación, de educación moral, física y profesional, de previsión y de auxilio (Declaración 6-XIII). También había de establecer las oficinas de colocación para dar empleo a los españoles (Declaración 7-XIII) y suministrar al Estado los datos estadísticos en orden a la mejora de la producción (Declaración 8-XIII).

El sindicato recibió una mayor estructuración a raíz de la promulgación de la Ley de Bases de la Organización Nacional Sindicalista de 6 de diciembre de 1940.<sup>88</sup> Dicha ley trazaba el esquema organizador cuyo antecedente más destacado en el orden normativo fue la Ley de Unidad Sindical de 27 de enero de 1940 que "afirmó provisionalmente la amplitud de las competencias otorgadas a la organización sindical y, por otro, obligó a determinados sectores de la pequeña y mediana propiedad organizados en cooperativas autónomas a ingresar, junto con los obreros que se hallaban bajo su dependencia, en las filas de la organización sindical."<sup>89</sup> La primera de estas normas fue de complicada promulgación y tenía como eje fundamental la consecución del encuadramiento y la disciplina de la masa productora.

Por tanto, siguiendo a Aparicio, se puede afirmar que el objetivo del estado franquista al poner en funcionamiento los sindicatos era "situarlos en el seno de la sociedad civil (sociedad que además se predicaba necesariamente armónica) como conjunto orgánico de canalización de los intereses generales y canal de recepción y transmisión de las incitaciones emanadas del Estado."<sup>90</sup>

El informe que elevó el Consejo Nacional de F.E.T. y las J.O.N.S. al Jefe del Estado en mayo de 1939 en torno al establecimiento de la Ley de Bases de la organización sindical tenía como único elemento diferenciador con respecto al proyecto de González Bueno el hecho de que en su Declaración 3ª establecía la sindicación como un hecho que debía ser voluntario en contraposición a la obligatoriedad que tras la promulgación efectiva de la mencionada ley se impuso. De igual manera, las funciones que el Consejo pretendía que tuviera el sindicato no radicaban más que en el ámbito del asesoramiento, la vigilancia y otra serie de funciones por delegación expresa de la autoridad, lo cual remitía directamente al ministerio de turno y, dada la estructuración del poder en el Estado Español, por vía directa o indirecta, al Jefe del Estado.

Según Payne, el sindicato, como "organización de masas, tenía el potencial para incorporar a todo tipo de gentes y organizaba el apoyo popular al régimen... También daba contenido y cuadros a la política social del régimen y servía de baluarte contra la subversión."<sup>91</sup> Y es que su función había de ser la de aunar fuerzas para superar el supuesto desastre espiritual en que había quedado el trabajador español y devolver al mismo un orgullo, un optimismo y un gozo por la dimensión moral del trabajo que supuestamente se había perdido. Paralelamente había de acometer funciones de índole económica y social con el objetivo de aunar fuerzas para el desarrollo autárquico de la nación española de acuerdo a los principios de unidad, totalidad y jerarquía.

Lógicamente, durante los años de mayor presión internacional, una de las peticiones más usuales de las democracias occidentales consistía en la necesidad de que la Falange quedara lo más apartada posible de los resortes del poder del Estado. "Franco respondió reduciendo más aún el papel de la F.E.T. y modificando parte de la terminología y la nomenclatura del régimen, pero la Falange redefinida como Movimiento Nacional siguió siendo una parte importante de la burocracia del sistema, y su cada vez más débil vida institucional se mantuvo ininterrumpidamente... Franco usaba su minimización teórica como evidencia de las reformas y de la liberalización del sistema"<sup>92</sup> con lo que su peso, progresivamente, tendió a disminuir hasta quedar transformada en una institución de individuos políticamente travestidos con un toque falangista exclusivamente patente en la parafernalia o en las vestimentas que lucían.

Progresivamente su papel fue decreciendo en importancia como se deduce de la evolución de los presupuestos a ella destinados. Desde 1946 aquél no dejó de descender, pese a lo cual fue en este año cuando se celebró en honor de multitudes el I Congreso Nacional de Trabajadores entre el 25 y el 30 de noviembre (sustituyendo a los consejos de ordenación social provinciales o nacionales). Dicho evento fue patrocinado por la Vicesecretaría Nacional de Ordenación Social de la Delegación Nacional de Sindicatos y dirigido por Fermín Sanz Orrio, como presidente, y José Solís Ruiz, como Secretario General del Congreso. En éste los Vocales de las Juntas Sociales de las distintas provincias habían de establecer contacto y dar a conocer al "mando" su parecer sobre los problemas sociales y sindicales pendientes de solución partiendo del hecho de que, formalmente, el sindicato era el órgano único de expresión de los trabajadores y, por tanto, el cauce necesario a través del cual éstos habían de elevar sus peticiones. Por otro lado, desde 1950<sup>93</sup> Franco no vistió con el uniforme de la Falange. El único Congreso Nacional del partido se celebró en octubre de 1953 como una concesión a una institución que había servido de soporte para realizar una propuesta de alteración sustancial de la estructura económica y social del país:

"El Congreso les dio la oportunidad de desahogarse, pero sin ningún efecto. Una gran reunión nacional no podía paliar el hecho evidente de que el Movimiento, como dócil organización burocrática, era incapaz de servir de vehículo de movilización política y cada vez era menos eficaz en el adoctrinamiento."<sup>94</sup>

Pero no hay que esperar a los años cincuenta para ver disminuida la actividad potencial de los falangistas. En provincias de tanto peso económico y social como Vizcaya, Guipúzcoa o en la región catalana<sup>95</sup> las centrales nacionales sindicalistas ya estaban absolutamente desprestigiadas en los ambientes obreros y languidecían con una actividad inversamente proporcional a la retórica de sus líderes sin ser capaces siquiera de controlar mínimamente la producción, distribución y consumo de los productos más esenciales. Y es que, sobre todo en las zonas agrícolas los campesinos no entregaban la cosecha requerida (o no entregaban toda) a las autoridades, prefiriendo guardarla en busca del mayor beneficio que ofrecía el mercado negro.

Y es que para hombres de peso como Carrero Blanco, el partido, que podía haber sido la solución, había complicado la gobernabilidad del país ya que su organización se había desarrollado excesivamente generándose una duplicidad de funciones y cargos en relación a la administración del Estado.<sup>96</sup>

El peso del sindicato dentro de la realidad social española estaba condicionado por el efectivo apoyo de la población trabajadora a la que pretendía proteger y se puede resumir de la siguiente forma:

"La fuerza que pudiera tener la organización sindical se debía a su status como organización burocrática oficial, no al apoyo directo de los trabajadores."<sup>97</sup>

Y ese fue uno de los factores que incrementó la competencia por las atribuciones y, en definitiva, por el poder entre la organización sindical y el ministerio de Trabajo en orden a proyectar y desarrollar la política social del régimen, lo cual incitaba a personajes señalados del régimen, como Solís, a hacer de la organización sindical un ejemplo en el que los españoles pudieran mirarse, pese a la ineficacia reconocida de dicha organización:

"...Es frecuente, por ejemplo, el informar desfavorablemente la apertura de una industria o un establecimiento, cuando los existentes son deficientes, insuficientes o existen obreros en paro. Es frecuente solicitar una subida de precios olvidando afectan éstos a los obreros que en la industria trabajan o desconociendo perjudican a otros sectores. Es frecuente solicitar reducción de plantillas, sin escuchar a la Sección Social, o, hablar de salarios, sin estar presentes los representantes económicos..."<sup>98</sup>

Ese era el camino de desorientación que el sindicato podía ofrecer a autoridades como las del ministerio de Trabajo. De todo ello era consciente el propio Delegado Nacional de Sindicatos. Y de ahí su política de potenciación de los mandos provinciales y su intento de que el aparato burocrático no se convirtiera en un nido de servilismo que redundara en desprestigio de la organización sindical favoreciendo una percepción popular que tendía a considerar los centros sindicales como organismos para el pago de servicios personales y de prebendas. Y es que para algunos elementos distantes de la burocracia falangista ni "la Junta Política, ni el Consejo Nacional han intervenido nunca en ninguna medida trascendental para el país. El propio consejo de ministros es un organismo decorativo desde que el Sr. Presidente decretó que las leyes podrían ir a la Gaceta sin la previa aprobación del Consejo."»

En el terreno de lo estrictamente social y laboral, que es lo que aquí nos interesa, la organización sindical tenía la capacidad de establecer propuestas en orden a la elaboración de las reglamentaciones del trabajo, la vigilancia y cumplimiento de las condiciones establecidas en las mismas, la elaboración de informes preceptivos en casos de crisis de empresas, el informe para faltas, sanciones y premios, etc. En materia de jurisdicción laboral debía colaborar con la magistratura, ejercer la función de conciliación sindical en los conflictos individuales (previo trámite en la magistratura) e informar y dar asistencia jurídica al trabajador.

En el ámbito de los seguros sociales desarrollaba una función activa por medio de los Servicios Sindicales del Seguro de Enfermedad, de la O. S. 18 de julio y de la O. S. de Previsión Social. Ejercía igualmente una función representativa y asesora en el Consejo de Administración del I.N.P.; coordinaba el subsidio familiar por medio de la O. S. de Previsión para el pago de los subsidios en la agricultura y en la confección del censo correspondiente por medio de su red de corresponsalías locales. En el seno de las mutualidades laborales desarrollaba una función representativa, asesora y de gestión. Así, en el Consejo Asesor Nacional del Servicio de Mutualidades del ministerio de Trabajo estaba representada por medio del Vicesecretario Nacional de Obras Sindicales y del Jefe de la O. S. de Previsión Social.

Como ya se ha mencionado, la función asistencial era, quizás, la prioritaria. La O. S. del Hogar creada en 1939 tenía como función la construcción de viviendas e intervino activamente en el desarrollo del I Plan Nacional de la Vivienda de 1954. La O. S. de Cooperación, creada en 1942, tutelaba y orientaba técnicamente las cooperativas manteniendo bajo control a dichas instituciones. La O. S. Lucha contra el Paro pretendía facilitar a la iniciativa privada la mano de obra y fomentar la disminución del paro por medio del desarrollo de una red de campamentos de trabajo. La O. S. 18 de julio se encargaba de la política sanitaria atendiendo sobre todo a los seguros de enfermedad, maternidad y accidentes del trabajo. La O. S. de Previsión Social

(nacida en 1941) colaboraba con el I.N.P. y dirigía y fomentaba las mutualidades de sindicatos y empresas colaborando, sobre todo, en el plano local a través de sus correspondencias y en el ámbito agropecuario donde la acción del ministerio de Trabajo se mostró prácticamente inexistente en los primeros años de los ministerios Girón. Por último los S.S.S.E. (Servicios Sindicales del Seguro de Enfermedad) eran el organismo a través del cual la organización sindical colaboraba en la gestión y desarrollo del S.O.E. aparte de gestionar los seguros sociales unificados (vejez e invalidez, subsidios familiares, enfermedad, paro tecnológico, etc.).

En cualquiera de los casos, si la organización sindical se convirtió en un redil de burócratas inoperantes, el falangismo (como principio teórico inspirador del régimen) inevitablemente fue perdiendo fuerza en la medida en que el jefe del Estado fue encontrando otras familias en las que apoyarse. Pero es más, la pérdida de peso de ese falangismo al que nos referimos es la pérdida de fuerza de unos elementos en proceso de metamorfosis continua lo cual permite afirmar que en 1957 el proyecto falangista, si alguna vez hubo voluntad de materializarlo, no existía en absoluto.

### ***1.3.1. Un ejemplo de las dificultades de la organización sindical para ejercer sus funciones.***

Los expedientes gubernativos abiertos por el Instituto Nacional de Previsión o por la Delegación Provincial de Trabajo respectiva eran el reflejo de una conflictividad latente cuya explicitación se daba en los conflictos individuales a los que atendían las Magistraturas de Trabajo. Los expedientes abiertos obedecían al incumplimiento por parte de las empresas de la legislación sociolaboral o a la falta de pago de las cuotas de los seguros sociales. Estos expedientes reflejaban la existencia teórica de un control estatal sobre los empresarios españoles. Es decir, deberían haber sido "un instrumento de defensa del orden laboral en manos de los organismos oficiales, correctores de la actuación antisocial de la empresa."<sup>100</sup>

Sin embargo, resultaban ser (por su escasa relevancia numérica y cualitativa) expresión, no de la inoperancia de dicho control, sino del desinterés por ejercerlo, favoreciendo con ello los intereses del capital en cuanto a obligaciones laborales se refiere. Ello se palpaba en el hecho de que el sector de ordenación social dentro del sindicato tenía como objetivo la consecución de la disciplina y el encuadramiento de los trabajadores, mientras que paralelamente en la vertiente económica de la organización sindical se dejaba, en gran medida, a los Sindicatos Nacionales bajo la influencia del empresariado. Y dado que "estos organismos debían vigilar la actuación de los primeros y, en consecuencia, como órganos de refuerzo y control de esa función disciplinaria sobre la clase obrera, completaban el cuadro general de la misión política que había sido encomendada a la organización sindical...La clase obrera quedaba de esta forma

sometida a un doble control: el ejercido directamente por la C.N.S. y el derivado de los Sindicatos Nacionales, en principio, de acuerdo con los intereses empresariales.”<sup>101</sup>

El afán por utilizar a la organización sindical como mecanismo de control por medio del encuadramiento de los trabajadores y del ejercicio de la política sociolaboral diseñada por el ministerio de Trabajo tropezó desde un principio con notables dificultades que se remontan a los años anteriores a la llegada de José Antonio Girón al ministerio de Trabajo. Nos referimos concretamente al verano de 1939. Algunos ejemplos de la correspondencia entre el entonces ministro de Organización y Acción Sindical, Pedro González Bueno, y el Vicepresidente del Gobierno, Francisco Gómez Jordana, ponen de manifiesto la endeblez del Estado franquista y de los mismos proyectos sociales que en ese momento germinaban con grandes dificultades. En el verano de 1939 un débil intento de sindicación en cinco bancos (el de España, el Hipotecario, el de Crédito Local, el Industrial y el de Crédito Exterior), en la zona naranjera de Levante<sup>102</sup> (nacido al amparo del General Aranda) y en los ferrocarriles<sup>103</sup> preocupaba al Vicepresidente y al ministro de Organización y Acción Sindical.<sup>104</sup> Estos problemas de la organización sindical no acabarían rápidamente y así, en el verano de 1945, el Delegado Nacional de Sindicatos denunciaba la existencia de entidades denominadas clasistas independientes del sindicato.<sup>105</sup>

El 29 de julio de 1939, desde Burgos, el Vicepresidente Jordana ponía en conocimiento de González Bueno las noticias que habían llegado a sus oídos en torno a los intentos de sindicación en los mencionados bancos. El 4 de agosto del mismo año Gómez Jordana recibía de González Bueno una carta en la que manifestaba su malestar por “la pasividad del gobierno” ante el surgimiento de las iniciativas de sindicación, en muchos casos, con el beneplácito de “los Departamentos Ministeriales correspondientes.”

“De esta manera, se acumulan, cada vez en mayor número, los obstáculos para la implantación de la nueva organización sindical. El Gobierno ve impasible como se va montando todo este tinglado de antiguas organizaciones que renacen espontáneamente en un clima lleno de resabios marxistas e infiltradas del espíritu de la lucha de clases y por consiguiente, que son completamente opuestas a nuestro credo político.”<sup>106</sup>

Otro ejemplo de esta dificultad para controlar el mundo del trabajo lo encontramos en los informes del ministerio de Trabajo. Desde éste se manifestaba sorpresa por el hecho de que existiesen empresas (como SNIACE en Torrelavega, provincia de Santander) en las que mayoritariamente se eligiese a los enlaces sindicales de campos no provenientes del mundo falangista.<sup>107</sup>



Este era el problema que se planteaba a la política social del régimen en sus primeros años. El establecimiento de una organización sindical capaz de controlar a los trabajadores, es decir, a la clase social que, por la deficiente situación que España atravesaba después de la guerra, podía intentar socabar las frágiles bases del régimen por medio de la conflictividad social y laboral. Los dogmas del franquismo social recibían un varapalo contundente con el nacimiento “espontáneo” de instituciones que, sino en un primer momento, podían convertirse en mecanismos para la canalización de demandas de los menos adeptos al régimen.

Pese a la importancia vital que tenía el encuadramiento de los trabajadores en la organización sindical parece ser que en estos primeros momentos, tras la victoria del bando nacional, las energías del gobierno no se encaminaban de forma fundamental a dicho objetivo y que, por tanto, sus fuerzas y recursos políticos y económicos se canalizaban efectivamente hacia otros proyectos. De ello se quejaba González Bueno cuando aludía a las dificultades de todo tipo que estaba encontrando la organización sindical para su implantación firme y adecuada en el mundo del trabajo. Pese a ello, las Centrales Nacional Sindicalistas seguían intentando desarrollarse “sin que el Estado las facilitase ningún medio económico y con la indiferencia de las Autoridades que en la mayor parte de los casos procuraban desconocer su existencia...y a pesar de la escasa ayuda que la prensa había prestado a su labor.” De todo ello, González sacaba la siguiente conclusión, de la que hacía participe al Vicepresidente del Gobierno:

“Con todo ello yo no puedo explicarme que el Gobierno entorpezca su propia obra futura dejando que se le amontonen obstáculos y dando de esta forma la sensación de que no tiene trazado su camino en orden al problema sindical, o por lo menos, no lo sigue con la debida decisión.”<sup>108</sup>

En cualquier caso lo que se puede constatar son las dificultades de los elementos sindicales para implantar efectivamente algunas de sus funciones como expresión de la que había de ser su tarea principal: el control de la masa de trabajadores como mecanismo para atemperar el malestar social y la explicitación del conflicto social.

### ***1.3.2. Defensa/control del trabajador.***

El escaso poder coactivo de los poderes públicos sobre las empresas denota que en los temas laborales la organización sindical pretendía mantener las apariencias ayudada por organismos creados para tal fin. Mediante la organización sindical, institución por medio de la cual se realizaba la conciliación entre trabajadores y empresarios, se pretende restablecer “el ambiente de concordia y hermandad que en la actual concepción de la empresa debe presidir las relaciones entre empresarios y trabajadores.”<sup>109</sup> Tapemos el conflicto, venía a afirmar el

sindicato, evitando siquiera que el conflicto individual llegase a las instituciones creadas para solventarlos, porque "cuando se sustrae el conflicto individual del ámbito fraterno del Sindicato adquiere el litigio para la parte demandada la situación de forzada violencia, suscitada fatalmente por la imposición de comparecer ante jueces y magistrados, reverdecándose así situaciones antagónicas que no se compadecen con el empeño de unidad entre los hombres y las clases de España,"<sup>110</sup> por lo que la imposición de una organización "seudomilitar"<sup>111</sup> bajo la dirección de un sector de la Falange resultaba la consecuencia lógica incluso con la pretendida función de sustituir a las magistraturas de trabajo en tales funciones. De todo ello se puede concluir que el sentido sindical de esa jerarquización ponía al descubierto el objetivo último que se pretendía y al que se debía la propia organización: "encuadrar a la clase obrera para conseguir la unidad en la producción, es decir, la eliminación coactiva del conflicto."<sup>112</sup> El camino para evitar el conflicto era el control y éste iba a ser uno de los grandes fracasos de la organización sindical. La política de encuadramiento de la población trabajadora permitió controlar en 1943 únicamente al 10 % de los trabajadores de España.<sup>113</sup> En 1947, según el Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación (cuyas cifras estaban "políticamente" hinchadas de forma sistemática) existía un 37,9 % de población activa afiliada al sindicato.<sup>114</sup>

Y de ahí la importancia de controlar a los trabajadores "díscolos" y a todos aquellos que pudieran afectar al proceso productivo. Era necesario, partiendo de estos planteamientos, controlar y vigilar rigidamente el rendimiento en el trabajo, sobre todo entre aquellos que no hubieran digerido las doctrinas del movimiento y su ejecución práctica tras la guerra civil. Los planteamientos alternativos y los trabajadores que los propugnasen habían de ser estirpados y su "influencia perturbadora lejos de ser despreciada, debe ser neutralizada cuidadosamente, incluso con severas sanciones, a fin de que no caigan los rendimientos y aumenten los costes por unidad de producción..."<sup>115</sup>

La instauración de la tan añorada paz social vendría de la mano de los principios que el Nuevo Estado entendía que instaurarían la justicia social. Y en la implantación de los mismos la organización sindical pretendía un papel fundamental por medio de la "colaboración" con la Inspección y con la Magistratura de Trabajo, lo cual suponía, de hecho, la desaparición del control del ministerio de Trabajo sobre ambas instituciones y la sustitución de éste por el sindicato. Éste esperaba controlar la inspección por medio de la Vicesecretaría de Ordenación Social y de las Juntas Sociales Provinciales; y la magistratura con la creación de la figura del promotor social:

"...creando la institución de los Promotores sociales, dependiente de la Delegación Nacional de Sindicatos, quienes fundamentalmente tendrán como misión la de procurar la estricta observancia de las Leyes y disposiciones sociales, promover la acción de la

justicia laboral e intervenir en cuantas contiendas sean planteadas ante la Magistratura de Trabajo, Tribunal Central y Sala correspondiente del Tribunal Supremo...”<sup>116</sup>

#### **1.4. Atribuciones y organización del ministerio de Trabajo.**

La primera disposición relevante para el ministerio de Trabajo fue el Decreto de 18 de agosto de 1939<sup>117</sup> que ordenaba el propio ministerio de Trabajo y en cuya virtud éste se organizaba por medio de una Subsecretaría y cuatro Direcciones Generales: Trabajo, Previsión, Estadística y Jurisdicción del Trabajo.

Ya con el gobierno del 9 de agosto de 1939, y con la consiguiente inclusión de las atribuciones del ministerio de Trabajo junto a las de Agricultura, dependiente de Joaquín Benjumea Burín, se observa la tendencia a separar las atribuciones propias del mundo del trabajo de las estrictamente sindicales. Esta separación “se mantendría durante muchos años”<sup>118</sup> y tenía como base la Ley de 8 de agosto de 1939<sup>119</sup> que materializaba el criterio expuesto el 5 de junio de 1939 por el Consejo Nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S. y que afirmaba que era necesario retornar al sindicato a la estructura del partido. Fruto de ello fue la supresión del ministerio de Organización y Acción Sindical y la distribución de sus competencias entre el ministerio de Trabajo (vertiente más claramente laboral) y la Delegación Nacional de Sindicatos (vertiente más claramente sindical).<sup>120</sup>

Por la Ley de 15 de diciembre de 1939<sup>121</sup> se organizaron los servicios de inspección y para fomentar su eficacia se promulgó el Decreto de 6 de diciembre de 1941 que los unificaba, pasando a depender directamente del ministerio de Trabajo todas las funciones propias de este servicio.<sup>122</sup> Posteriormente por Ley de 10 de noviembre de 1942<sup>123</sup> y su reglamento de 21 de diciembre de 1943<sup>124</sup> se estipuló el funcionamiento y organización de las delegaciones de trabajo en las distintas provincias.

Pese a la innegable influencia del general Franco, en todo lo que hacía referencia a la política social del régimen los ministros gozaban de una autonomía bastante amplia. Respecto a esta cuestión el ministerio de Trabajo no era una excepción. En torno a este aspecto, Payne afirma que “la relativa autonomía de los ministerios iba acompañada de una tolerancia casi total ante las irregularidades y la corrupción; incluso llega afirmar que “Franco consideraba la corrupción como un lubricante necesario para el sistema, que tenía la ventaja de comprometer a muchos atándolos al régimen.”<sup>125</sup> Este fue el trasfondo que también caracterizó la actuación del ministerio de Trabajo.

En el marco de domesticación de la Falange por la intermediación de políticos como Girón de Velasco, la política de prestaciones sociales (que se repartían entre la organización sindical, y más concretamente sus distintas obras, y el ministerio de Trabajo) era dirigida por el ministro Girón, "como según parece, prefería Franco."<sup>126</sup>

Entre los objetivos planteados por el ministerio de Trabajo estaba la propaganda. Esta fue realizada por el Instituto Social<sup>127</sup> constituido como órgano cultural e informativo del ministerio en 1952. La misión esencial de este instituto era la de constituirse en instrumento estatal para que llegasen a los trabajadores y a los empresarios los postulados de la legislación social promulgados por el ministerio. Además de ello le correspondía dar a conocer la obra social realizada por España en los países de Hispano-América, así como conocer la legislación social extranjera, informando de ello al ministerio. Su exigua vida venía determinada por la imposibilidad (o la falta de voluntad) de conferirle, en el presupuesto del ministerio de Trabajo, una cifra significativa que le permitiera prescindir de las donaciones y subvenciones que podía recibir de las entidades oficiales o de los particulares. Esta función propagandística y populista es la que lleva a M. A. Aparicio a realizar la siguiente afirmación:

"...el ministerio de Trabajo, creado por la ley últimamente mencionada, se encargará de regular autoritariamente las relaciones de producción y, a partir de cierto período, mantendrá una estrecha simbiosis con la organización sindical, alternándose sus líderes en la dirección de un cierto "populismo" bajo la advocación de la misma fuente ideológica falangista."<sup>128</sup>

Por lo que al período Girón se refiere, la disposición legislativa más relevante relacionada con la organización del ministerio fue su reglamento, promulgado por Decreto de 4 de agosto de 1952.<sup>129</sup> Siguiendo al reglamento nos encontramos con un ministro, un subsecretario del ministerio y tres direcciones generales (*de trabajo, previsión y jurisdicción del trabajo*).

De la subsecretaría dependían los siguientes organismos: Oficialía Mayor, Asesoría Jurídica, Sección de Contabilidad, Intervención Delegada de Hacienda, Sección Central de Recursos y Recompensas, Sección de Coordinación de Estadísticas, Sección Central de la Inspección del Trabajo, Sección de Inspección de Centros regidos o administrados por el Estado, Sección Central de Delegaciones de Trabajo, Sección de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, Sección de Enlace con la organización sindical y Servicio de Cultura Social. Como órgano consultivo de la subsecretaría existía el Consejo Asesor de la Inspección de Trabajo.

La Dirección General de Trabajo estaba integrada por la Secretaría General, al frente de la cual se hallaba un Secretario General con la categoría de Subdirector General. Existían también las

secciones de Asuntos Generales y Crisis, Recursos de Trabajo, Prevención de Accidentes e Higiene del Trabajo y Economatos, Secretaría Técnica de Política Laboral, Sección de Normas Generales de Trabajo, Asesoría Técnica de Política Laboral, Sección de Emigración, Sección de Colocación y Sección de Trabajadores Exteriores.

La Dirección General de Previsión estaba formada por una Secretaría General con un Secretario al frente con categoría de Subdirector General. De ella dependían las siguientes secciones: Asuntos Generales, Cálculos, Estudios Actuariales y Revisión de Balances, Seguros y Subsidios Sociales Obligatorios, Accidentes del Trabajo, Cajas de Ahorro, Cooperativas, Montepíos y Mutualidades, Familias Numerosas, Recursos de Previsión, la Jefatura Nacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad y la Inspección Técnica de Previsión Social.

De la Dirección General de Jurisdicción del Trabajo dependía el Servicio de Inspección General de la Magistratura del Trabajo, la Sección de Personal y la Sección de Asuntos Generales y Régimen interior.

Además de los departamentos mencionados, del ministerio de Trabajo dependían otros organismos tales como el Instituto Nacional de Previsión, el Instituto Nacional de la Vivienda, el Instituto Social de la Marina, la Junta Interministerial de Paro, el Servicio de Reaseguro de Accidentes del Trabajo, el Consejo Superior de Cámaras de la Propiedad Urbana, la Junta Consultiva de Cajas de Ahorro, la Sección de Trabajo de la Industria Textil Algodonera (SUBCRA), de la que era Presidente nato el Director General de Trabajo, el Servicio de Montepíos y Mutualidades Laborales, del que era jefe nato el Director General de Previsión, y la Asesoría Técnica de Previsión. También era órgano autónomo del ministerio del Servicio de Trabajos Portuarios, que dependía la Subsecretaría.

### **1.5. El nacimiento de los jurados de empresa.**

La institución de los jurados de empresa, cuyo objetivo era la armonización de las relaciones entre el trabajador y el empresario, tuvo su punto de partida en el Decreto de 18 de agosto de 1947 si bien su existencia no se percibió hasta la promulgación de su reglamento por medio del Decreto de 11 de septiembre de 1953. La esperanza para el franquismo consistía en que esta nueva institución sirviera para romper una realidad conflictiva que en algunos momentos afloraba. De forma paulatina, la organización sindical iba absorbiendo involuntariamente elementos no afectos al régimen y eso hacía de las secciones sociales elementos que, a veces, se oponían enconadamente a las secciones económicas y, por tanto, al mundo empresarial.<sup>130</sup>

El jurado estaba compuesto por un presidente, un secretario y varios vocales. El puesto de presidente coincidía con el de propietario o gerente de la empresa y el de secretario, habitualmente, con el del vocal que representaba al grupo administrativo. El número de vocales dependía de la cantidad de trabajadores de la empresa: de 51 a 250, 4 vocales; de 251 a 500, 8 y de 501 en adelante, 12. Sin embargo, la D.N.S. y la Dirección General de Trabajo tenían como elemento de control la posibilidad de determinar la proporción de vocales que tenían los cuatro grupos de trabajadores: técnicos, administrativos, mano de obra cualificada y no cualificada.

En línea con este afán por evitar que el jurado se constituyera en un elemento de ruptura del consenso social, correspondía al presidente la función de conducir los debates y de conceder o retirar el uso de la palabra a los vocales. Independientemente de esta consideración, los vocales no tenían funciones ejecutivas; su tarea básica era la de presentar propuestas o informes. Sobre ésto existía otro elemento de dominio cual era la capacidad del sindicato para sancionar a éstos elevando el expediente correspondiente a la magistratura de trabajo.

Formalmente, entre las funciones más relevantes del jurado estaba la de proponer a la empresa las medidas tendentes a elevar la producción y la productividad, la canalización de las reclamaciones de los trabajadores, la vigilancia del cumplimiento por parte de la empresa de la legislación social, la asunción de las funciones del comité de seguridad e higiene en los centros en que se hubiese instalado, el examen del balance de cuentas de la empresa, la recepción (una vez al año) de información sobre la marcha general de la producción, la elevación de informes sobre el reglamento de régimen interno, la elaboración de informes sobre las tarifas de primas y destajos, la distribución del plus familiar, el nombramiento de los representantes del personal para la administración del economato, la recepción de información sobre los expedientes de crisis o de modificación en las condiciones de trabajo, la vigilancia del cumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones con los seguros sociales y montepíos, etc.

El proceso electoral comenzaba con la convocatoria de la organización sindical. Por supuesto, este proceso era únicamente para los vocales. La máxima instancia del jurado era perpetua puesto que estaba ligada a la propiedad de la empresa. Entre las condiciones para ser elector estaban las de saber leer y escribir (cuestión que en el caso de los trabajadores no cualificados podía dejar fuera a gran parte de los mismos) así como no haber sido reglamentariamente sancionado por falta laboral grave, con el consiguiente problema para las zonas más industrializadas y más conflictivas en el caso de que algún candidato concurriera a las huelgas realizadas. Evidentemente aquel vocal que, en posesión de su cargo, incurría en dicha falta era desposeído inmediatamente de su representatividad.

De igual manera, una vez expuestas las listas de las candidaturas, podía reclamarse ante la empresa y, en último lugar, elevar recurso ante la organización sindical. Ésta, en línea con la tendencia a ejercer un control discrecional sobre los trabajadores, tenía como potestad la facultad de resolver sin que hubiera recurso posible contra su resolución. En cualquiera de los casos, siempre existía un último procedimiento, aparte de los existentes, para “depurar” las listas de posibles o manifiestos desafectos al régimen. El artículo 23 del reglamento establecía que “el Delegado sindical provincial, previo los oportunos asesoramientos de los trabajadores de la Empresa, podría eliminar de cualquier candidatura aquellos nombres que considerase perjudiciales para los fines que a los Jurados se les encomendaban.” Evidentemente cabría preguntarse sobre el núcleo de trabajadores que tendrían el privilegio de asesorar al delegado sindical sobre tal eventualidad; de igual manera, sería razonable pensar en los motivos (no explícitos) que posibilitarían dicha eventualidad. Estos aspectos no se especifican, abriendo de nuevo la puerta a la discrecionalidad absoluta con fundamento en la ambigüedad calculada del decreto. Y ello con un objeto claro cual era el de conformar el jurado como un paraíso de devotos adoradores del régimen que prácticamente imposibilitara la ruptura de esa avenencia continua que había de caracterizar la relación obrero-patrono en el seno de la empresa. De igual manera, la Dirección General de Trabajo podía suspender al jurado (todo o parte) en el momento que estimase oportuno si su actuación implicaba la “alteración de la armonía social.”

En definitiva, la referencia al marco legal nos conduce a la conclusión de que, en principio, la operatividad efectiva de cara a defender los intereses de los trabajadores había de ser necesariamente escasa, dado que el sesgo teóricamente “democrático” que el régimen pretendía vender por medio de los jurados era inexistente por las salvedades que la propia legislación establecía de cara a mantener bajo control al mundo del trabajo.

### ***1.5.1. Los Jurados de empresa.***

Como se ha mencionado, el primer paso para instaurar los jurados de empresa se da en agosto de 1947 aunque la ausencia del reglamento, hasta su promulgación por medio del Decreto de 17 de septiembre de 1953,<sup>131</sup> provocó que su tímida aplicación no se diera más que a partir de este momento con el objetivo de provocar la unidad en el ámbito de la empresa.<sup>132</sup> Pese a ello, el los jurados no empezaron a funcionar de forma efectiva hasta 1956.<sup>133</sup> En consecuencia, teniendo en cuenta la salida de Girón del ministerio de Trabajo, se puede afirmar que durante su mandato el tema de los jurados de empresas supuso un fracaso radical.

“Su creación es, en efecto, una historia de tensiones, avances y retrocesos en el seno del régimen, fruto de los temores y de las presiones de la patronal y su Estado,”<sup>134</sup> y en palabras de Girón, obedeció a la “madurez” de los trabajadores españoles.<sup>135</sup> La tardanza en su aplicación

fue debida a la mala situación de la economía, que sólo se comenzó a remontar a partir de la década de los cincuenta, y a la potencial conflictividad laboral de un régimen que no se sentía muy seguro. Sin embargo, las primeras formulaciones que solicitaban la creación de los jurados surgieron en el I Congreso Nacional de los Trabajadores en noviembre de 1946.<sup>136</sup> Ciertamente, surge esta iniciativa por medio de la voz de los sindicatos, pero de igual manera brota con restricciones que posteriormente desarrolla más clara el decreto que creó los jurados. Así, en el Congreso Nacional se solicitaba que cada representación (de técnicos u obreros) tuviese un peso proporcional a la importancia de la categoría o estamento que representase, abriendo la posibilidad para que fuera la organización sindical quien determinara el peso del mundo obrero dentro de los jurados. Como se ha mencionado anteriormente, este aspecto fue recogido por la legislación posterior. Dentro de la organización sindical el decreto de 1947 no llegó a satisfacer sus demandas. En el II Congreso Nacional celebrado en 1951, la primera comisión abordaba el tema de la transformación del régimen económico social de la empresa y en ella se lanzaron las siguientes críticas a la institución establecida:

“Que el Decreto de 18 de agosto de 1947, que crea las Juntas de Jurados de Empresas, no satisface las aspiraciones de los trabajadores españoles, por no recogerse en el mismo las conclusiones adoptadas en las diversas Asambleas por aquéllos celebradas, y especialmente las conclusiones del I Congreso Nacional de Trabajadores.”<sup>137</sup>

Como consecuencia de esta consideración previa, en el II Congreso Nacional se solicitó la derogación del mencionado decreto de 1947 “por no haber tenido virtualidad alguna su contenido y porque su desarrollo no satisfaría el deseo de los trabajadores españoles.”<sup>138</sup> Tras la promulgación del reglamento de los jurados, dentro del sindicato todavía surgieron voces discordantes que, en un tono menguado, hicieron oír su voz solicitando también la derogación del decreto de 11 de septiembre que había puesto en marcha el reglamento de los jurados.<sup>139</sup>

Por parte del ministerio de Trabajo se temía que la introducción de una institución en la que los elementos desafectos planteaban introducirse pudiera ser el gatillo que pusiera en funcionamiento la subversión contra el orden del Nuevo Estado.<sup>140</sup> Este era el motivo real de la falta de aplicación mínima de los jurados.

Independientemente de otras razones que señalaba la legislación, el objetivo fundamental de los jurados era el mantenimiento de un clima de armonía y concordia del obrero con la empresa y el Estado. La natural aversión del régimen ante cualquier mínimo atisbo de disconformidad o conflicto por medio de cualquier manifestación condujo a la institucionalización de unos comités cuyo propósito era el de hacer de la empresa un vergel de calma y tranquilidad. En los jurados, los trabajadores habían de tener la percepción de que estaban en estado de acuerdo



perpetuo y de afabilidad perenne con un sector (el empresarial) que lógicamente, por la vía de la maximización de los beneficios, recortaba las remuneraciones de sus empleados en la medida de sus posibilidades. Los jurados procuraban materializar la concepción de la empresa como "perfecta comunidad de intereses entre los diferentes elementos de la producción,"<sup>141</sup> cuestión que nacía de la declaración III del Fuero del Trabajo en la que se indicaba, sin mucha concreción, la obligación por parte de la empresa de informar de la marcha de la producción a los obreros para fortalecer su sentido de la responsabilidad. Por otro lado, se pretendía que las reclamaciones realizadas por los trabajadores supusiesen el desprendimiento "de toda posible máscara de agresividad."<sup>142</sup> A través de los jurados, se afirmaba, "será posible conseguir este clima de comprensión, con la formación de un espíritu de equipo, entre todos,...los trabajadores deben ver en la empresa, no la organización fría, interesada y calculadora, dispuesta a aprovechar para su beneficio el trabajo de ellos, sino el propio hogar y el baluarte propio en la batalla de la producción, por la grandeza de la economía nacional."<sup>143</sup>

Esa era la aspiración básica del jurado; la de lograr una avenencia sistemática entre los trabajadores y la empresa. Y en el peor de los casos, si dicha avenencia no era posible, era necesario propiciar la concordia entre el estamento empresarial y la clase obrera, canalizando los desajustes que pudieran generarse por medio de estos órganos de pre-conciliación de forma que resultara imposible que el conflicto pudiera explicitarse por medio de la materialización que más repugnaba al régimen: la huelga. En cualquier caso, el origen de los conflictos estaba en la propia pasividad de los organismos creados por el propio franquismo. Los elementos de la inspección del ministerio de Trabajo destacaban por su ausencia y, cuando existían, por su proclividad a hacer la vista gorda ante las posibles injusticias que los trabajadores pudieran sufrir.<sup>144</sup>

De esta forma, se llegaría teóricamente a la materialización de un "orden jerárquico ideal."<sup>145</sup> Pese a ello, entre algunos sectores empresariales surgió una cierta oposición por cuanto se temía que cayesen en manos de los sectores sindicales y que, por tanto, la institución sirviera para la penetración de elementos desestabilizadores<sup>146</sup> o para la socialización de la actividad industrial. Nada más lejos de la realidad puesto que la dirección del jurado correspondía al propietario o gerente de la empresa cerca del cual la función de los vocales de la junta era exclusivamente la de elevar propuestas y desarrollar iniciativas que, sin el apoyo del primero de los elementos, resultaban absolutamente inútiles.<sup>147</sup>

Evidentemente, la consecuencia deseada por el régimen consistía en que, de esta cooperación que había de fomentar el jurado de empresa, saliera especialmente beneficiada la producción y el progreso de la economía nacional mediante una especie de "conjunción espiritual"<sup>148</sup> de obreros y patronos. Es decir, otro objetivo de los jurados era proteger una política de elevación

de la productividad. En ella al jurado le correspondiera la función de mantener en estado de reposo permanente aquellas reclamaciones de los trabajadores que el franquismo percibiese como perjudiciales para la economía nacional. Sin embargo, fue la misma marcha de la economía nacional y el potencial conflictivo que encerraban los jurados el origen de ese enorme lapsus de tiempo entre la promulgación del decreto que creaba estos organismos y el que promulgaba su reglamento, si bien cuando se puso en práctica lo fue sólo en las empresas de mil o más trabajadores.<sup>149</sup> Ello servía para mostrar el carácter experimental de la medida y, por tanto, la ausencia de voluntad política para darle un verdadero sentido democrático a la institución, algo absolutamente impensable en el marco del régimen franquista.<sup>150</sup> Esta cuestión sería especialmente problemática en los primeros meses de funcionamiento de los jurados, puesto que los empresarios interpretaban el artículo 4º de forma restrictiva,<sup>151</sup> en el sentido de formar jurados sólo en las empresas que tuvieran centros de trabajo que, aisladamente considerados, igualaran o superaran el millar de trabajadores.<sup>152</sup>

Se exceptuaban de esta disposición los establecimientos militares o militarizados, las explotaciones agropecuarias y forestales y aquellas empresas que fuesen exceptuadas por el consejo de ministros. Este último aspecto es el que abría mayor hueco a la arbitrariedad. Sin embargo, no nos puede o no nos debería de extrañar el hecho de que (como en tantos otros casos) el agro español quedara fuera del campo de aplicación de beneficios o instituciones (como es el caso) que, según el franquismo social, tenían como aspiración servir al trabajador español y a la economía nacional.

Girón de Velasco describe la creación de la institución de los jurados de empresa como una creación propia nacida por su deseo, compartido con la línea del franquismo social que representa, de incorporar a los trabajadores a la rectoría de los servicios sociales creados por el ministerio de Trabajo. Los jurados de empresa, decía Girón, "pretendían hacer realidad la participación del trabajador en la empresa como un miembro más, su participación en la dirección de la comunidad del trabajo, su intervención en los consejos de administración."<sup>153</sup> Los jurados de empresa, continuando con la exposición del pensamiento de Girón, habrían de llevar al "obrero a la jerarquía de protagonista de la empresa, entregándole el honor y la responsabilidad de dirigir para sentirse en el camino del poder."<sup>154</sup>

Pese a la concepción armmonicista de Girón y a su diatriba contra el conflicto de raigambre liberal y marxista, uno de los motivos que el ex-ministro argüía para justificar el retraso en la puesta en práctica de los jurados de empresa era el problema planteado por la inferioridad dialéctica de los obreros con respecto a los empresarios. Girón afirmaba que "había que ir despacio porque el obrero no estaba suficientemente preparado."<sup>155</sup> Y es que el mundo empresarial, que detestaba profundamente a las organizaciones obreras, veía a los jurados de

empresa elementos intervencionistas y, parcialmente, reguladores de los posibles conflictos. Todo lo contrario de lo que se podía esperar de un régimen que había recibido durante la guerra civil un importante apoyo de este sector de la sociedad española. Junta a la oposición del mundo empresarial cabe citar la disconformidad con la creación de los jurados por parte de la cabeza visible del I.N.I.: Suanzes.

Los jurados de empresa, junto a las reglamentaciones laborales, muestran la faz más intervencionista del estado franquista en lo que a resolución de posibles conflictos laborales se refiere. Evidentemente habrían de surgir conflictos entre los trabajadores y las empresas. Ante ello, se consideraba necesaria la intervención del Estado dado que, de inhibirse, ésto podría generar una querella entre "los dos hermanos productores," el enfrentamiento entre trabajadores y empresarios y, consiguientemente, la materialización de algo que sólo por medio del "maligno" podía instalarse en España. Nos referimos, por supuesto, a la tan temida y denostada lucha de clases "con su trágica alternativa de dominio y dictadura, o la dictadura del dinero o la dictadura del número."<sup>156</sup>

Como se ha dicho, los jurados de empresa no fueron más que otro de los elementos cuyo objetivo era el control de los trabajadores y la creación de un ambiente de consenso entre los elementos de la producción. Cuando este logro no era posible o se preveía que la institución del jurado de empresa podía volverse contra la propia empresa o contra el Estado por ser una zona o actividad laboral especialmente distinguida por las malas condiciones de trabajo, sencillamente se procedía a disolver el jurado.<sup>157</sup>

La ley permitía garantizar al régimen que los jurados servirían para ese fin, por cuanto la organización sindical o el ministerio de Trabajo tenían elementos a su alcance para controlar las candidaturas y para encauzar el resultado final en el sentido deseado.<sup>158</sup> Los ejemplos que podemos citar sobre la ejecución de estas prácticas corroboran esta afirmación. Tomamos como ejemplo la elección de vocales de los jurados llevada a cabo en 1954 en Valencia. Las elecciones, por el volumen de trabajadores, afectaron fundamentalmente a seis empresas: Altos Hornos de Vizcaya, Factoría del Puerto de Sagunto, Materiales y Construcciones S.A., Unión Naval de Levante, Compañía de Tranvías y Yutera Española S.A. La nota característica de las elecciones fue el ambiente de escepticismo. La percepción obrera (también reflejada por los elementos sindicales) era que las elecciones, en el mejor de los casos, serían amañadas. De hecho, la tendencia fue la de excluir del censo a todos aquellos elementos sospechosos de desafección al régimen bajo el pretexto de haber incurrido en faltas o expedientes de trabajo. El hecho de que esta actitud se centrara en comunistas, simpatizantes de la U.G.T. o algunos (los menos) de la C.N.T. corrobora la idea del jurado como instrumento de control político de los trabajadores por cuenta de la empresa, del sindicato y del ministerio de Trabajo. En

consecuencia, la preocupación por el ambiente político y la baja participación en una institución que ya parecía nacer muerta eran las inquietudes fundamentales de las autoridades ante la percepción del jurado como una farsa diseñada por el ministerio de Trabajo.<sup>159</sup>

En el caso al que nos referimos, se había excluido a más de 500 de los 1.825 obreros<sup>160</sup> con derecho a voto de la empresa Unión Naval de Levante básicamente por el peso de los antiguos militantes de la C.N.T. Sin embargo, existían también ejemplos de obreros (antiguos cenetistas) a los que no se les iba a poner ningún problema para acceder a su cargo de vocal por su proximidad a la política del ministerio de Trabajo.<sup>161</sup> En el caso de los comunistas no se tenía conciencia de su presencia en las elecciones, pese a lo cual existía una vigilancia intensa en este importante centro de trabajo. En el caso de Altos Hornos se había excluido a más de 700 obreros, aunque como en la situación anterior sobresalían, por los pocos problemas que el sindicato les ponía en sus candidaturas y por la seguridad que ponía aquél en el triunfo de las mismas, los antiguos cenetistas afectos a la política de Girón.<sup>162</sup> En el caso de la Yutera Española y de la Compañía Almat se percibía una preocupación compartida por los cenetistas y miembros de la U.G.T., parece ser, de mayor peso en estas dos empresas. De cualquiera de las formas, el ambiente de frialdad entre los trabajadores no variaba de unos centros fabriles a otros, y así, en el caso de la Compañía de Tranvías se calculaba que el número de votantes no iba a ser superior al 40 % por la nula eficacia que los trabajadores otorgaban al jurado ya antes de su puesta en marcha.<sup>163</sup> En cuanto a Macosa, se estimaba que inevitablemente cenetistas<sup>164</sup> y comunistas colmarían el mayor número de vocales. En este último caso, existía una especial preocupación por el peso del P.C.E. dentro de esta empresa, hasta el punto de imposibilitar abiertamente el sindicato la presentación de sus candidaturas.<sup>165</sup>

Los resultados finales permitían que los elementos más proclives al régimen, dado el control sobre el proceso electoral, percibieran falsamente la realidad de un mundo obrero que se plegaba de forma dócil a los presupuestos teóricos de los jurados y del régimen.<sup>166</sup> Pese a ello, en los conflictos posteriores a la puesta en marcha de los jurados podemos constatar que la posición de aquéllos, tendente a favorecer los intereses de la empresa, estaba en el origen de los conflictos generados en los principales núcleos industriales del país.<sup>167</sup>

Así pues, los jurados no constituirían más que una entidad inoperante y, en gran parte de los casos, un simple adorno incluso después de la promulgación de su reglamento.<sup>168</sup> Y todo ello cuando no se daba el caso (claro está amparado por la discrecionalidad de la disposición que creó el mencionado jurado) de que el ministerio de Trabajo dispusiera arbitrariamente la supresión del jurado.<sup>169</sup>

### 1.6. Las Magistraturas de Trabajo.

La Declaración VII del Fuero del Trabajo<sup>170</sup> hacía referencia a la necesidad de crear una nueva Magistratura del Trabajo con sujeción al principio de que esta función de justicia correspondiera al Estado, lo cual habría de otorgar otro instrumento al régimen para luchar contra la conflictividad laboral.

Las magistraturas de trabajo nacieron por el Decreto de 13 de mayo de 1938<sup>171</sup> con el objetivo de dirimir en lo jurisdiccional sobre los contenciosos sociales. Hasta el año 1962 sólo tuvieron competencia en lo referente a los conflictos individuales originados entre los empresarios y sus empleados. La mencionada disposición establecía la supresión de los Jurados Mixtos de Trabajo, de los Tribunales Industriales y el paso de las atribuciones de estos organismos a las magistraturas. El artículo 5º posibilitaba que el ministerio de Organización y Acción Sindical nombrara libremente a las personas que habían de ejercer inicialmente el cargo de magistrados de trabajo, estando inicialmente al frente de la magistratura de Málaga el más tarde presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro.

Durante sus muchos años de funcionamiento se pudieron detectar enormes defectos que imposibilitaron el que mediante esta institución se llevara a cabo, de forma eficaz, la defensa de los trabajadores. Sin hacer alusión a las sentencias mismas, en cuanto a lo favorables o desfavorables que pudieran ser para los trabajadores, es de destacar la ausencia de voluntad política por parte de las autoridades del ministerio de Trabajo para tomar una medida que solucionara el problema de la ejecución efectiva de las sentencias de las magistraturas. En función de ello, era norma común la aglomeración de declaraciones laborales falladas a favor de los trabajadores que no se hacían efectivas ante la pasividad de las instituciones del Estado y de la actitud de las empresas. A ello se unía lo prolongado del trámite de ejecuciones, en la "mayoría de los casos inoperante," lo cual originaba malestar entre los trabajadores en general, e incluso entre algunos no desafectos al régimen, que veían en la organización sindical y en el ministerio de Trabajo dos instituciones languidecientes, desviadas de sus presupuestos originales y al servicio del capitalismo más recalcitrante y alejado de los principios formales de los viejos falangistas.<sup>172</sup>

Con respecto a ellas Girón de Velasco se refiere en sus memorias en los siguientes términos:

"En todos los ordenamientos laborales anteriores a nosotros, relativos a la jurisdicción contenciosa laboral, se entregaba tan delicado material a los tribunales mixtos, en los que no se hacía otra cosa que continuar la querella y resultaban inútiles. Rompimos con

el pasado y creamos la jurisdicción judicial laboral, desempeñada por magistrados y jueces procedentes de la carrera judicial y fiscal.”<sup>173</sup>

La creación de las Magistraturas derogaba la existencia de los *Tribunales Industriales* creados en 1908 y de los *Jurados Mixtos* instituidos en 1931. Las funciones de las magistraturas abarcaban toda la problemática del conflicto a nivel individual si bien el acto de conciliación fue llevado a cabo desde 1953 por los *Jurados de Empresa* (con la promulgación en este año de su reglamento) y por la organización sindical pese a lo cual podían darse excepciones.<sup>174</sup> “Se responde así a la concepción verticalista que de lo social tiene el nacional-sindicalismo: ignorada la lucha de clases, la protección individual de los derechos laborales y la conciliación de intereses de obreros y empresarios constituyen los pilares ideológicos de las nuevas relaciones de trabajo,”<sup>175</sup> afirma Benito del Pozo. En cualquiera de los casos la escasa capacidad adquisitiva del trabajador en comparación con el empresario hacía partir al primero en situación de inferioridad respecto al segundo con un resultado que muy fácilmente iba a ser contrario a sus intereses.<sup>176</sup>

Sobre la institución de las magistraturas de trabajo se asentaría, según las autoridades del régimen, la paz en el ámbito de las relaciones laborales; sobre su jurisprudencia se asentaba el clima de paz y concordia social que el franquismo pretendía que presidiese la vida nacional. En torno a la temática de la conciliación existía una competitividad latente entre la organización sindical y el ministerio de Trabajo (y por consiguiente las magistraturas) en el sentido de que esta “institución,” instrumento de la paz social, era objeto de deseo por parte del sindicalismo español basándose en el argumento de que la conciliación ante la magistratura de Trabajo “por su propia naturaleza y solemnidad, no podía tener la flexibilidad y el calor de hermandad que se precisaba para reanudar sinceramente la buena armonía entre los litigantes,”<sup>177</sup> solicitando que dicho acto de conciliación ante la magistratura desapareciera.

Las magistraturas, por Decreto de 4 de agosto de 1952, dependían para su organización y funcionamiento de la Dirección General de Jurisdicción del Trabajo.<sup>178</sup> A raíz del análisis de los conflictos individuales generados entre la empresa y los trabajadores se detecta “el control y represión empresarial ejercido sobre la mano de obra por medio de mecanismos tales como suspensión temporal de empleo y sueldo, multas y despidos que penalizan cualquier falta cometida por el trabajador, constituyéndose en medidas defensivas de la patronal frente a la alteración del orden laboral (desidia, insubordinación, bajo rendimiento)...Ahora bien, con una legislación a priori adversa a los intereses de los trabajadores, dependiendo éstos de los abogados del sindicato oficial para su defensa y considerando el amplio margen de interpretación legal que el magistrado posee, los medios de obtener una sentencia favorable a la demanda obrera resultaban limitados.”<sup>179</sup>

En esta línea, los casos denunciados por algún elemento de la organización sindical ponían en evidencia el funcionamiento de la Magistratura, del propio sindicato y de su voluntad real de defender a los trabajadores. Así, la violación sistemática de la ley por parte de los empresarios tenía como corolario la inactividad de la magistratura como se deduce de las quejas de los trabajadores, pues era típico observar como algunas reclamaciones enviadas a magistratura eran devueltas para el correspondiente acto de conciliación ante la delegación local sindical, negándose el patrono a comparecer tras lo que, con el papeleo correspondiente, el obrero desistía abandonando la pugna sin indemnización y el patrono sin sanción, "por lo que ahora no se produce reclamación alguna ya que el que siente vulnerado sus derechos adopta el procedimiento de abandonar el trabajo o irse a otra parte."<sup>180</sup>

En caso de no resolverse el conflicto por medio de los trámites de conciliación, existía la posibilidad de realizar un recurso de suplicación ante el Tribunal Central de Trabajo si la cuantía de la disputa estaba entre las 10.000 y las 100.000 pts. En caso de que excediera de dicha cifra o se tratara de accidentes de trabajo, despidos de cargos sindicales o "caballeros mutilados" podía interponerse un recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

### **1.7. La regulación de las condiciones de trabajo a través de las reglamentaciones del trabajo.**

"El Estado fijará bases para la regulación del trabajo, con sujeción a las cuales se establecerán las relaciones entre los trabajadores y las Empresas. El contenido primordial de dichas relaciones será, tanto la prestación del trabajo y su remuneración como el recíproco deber de lealtad, la asistencia y protección en los empresarios y la fidelidad y subordinación en el personal."<sup>181</sup> Esta declaración, la III-4 del Fuero del Trabajo, inspiraba la política reglamentarista e intervencionista del primer franquismo en materia laboral hasta que la Ley de Convenios Colectivos de 1958 puso fin al sueño de dirigir la vida laboral y económica del país "por decreto." Sobre la relevancia del fin de las reglamentaciones laborales y la puesta en marcha de la Ley de Convenios Colectivos afirma Albentosa lo siguiente:

"Si el plan de estabilización del verano de 1959 instrumentó el cambio de tendencia de la política económica, puede afirmarse que en el terreno laboral el giro se había producido quince meses antes, con la Ley de convenios colectivos de 24 de abril de 1958."<sup>182</sup>

Sin embargo, con anterioridad a la promulgación de la Ley de Convenios Colectivos, la organización sindical y el ministerio de Trabajo se veían obligados a transigir con la realidad que mostraba como entre empresarios y trabajadores se llevaban a cabo negociaciones sin atender lo más mínimo a las directrices marcadas por la legislación laboral.<sup>183</sup>

Con dicho planteamiento se ponían las bases para la regulación del trabajo con el objetivo de impedir la conflictividad social y dirigir la política económica del país. Y ello motivado, en parte, por el hecho de que, como desde la propia organización sindical se afirmaba, el carácter impositivo de las reglamentaciones no era "muy adecuado a la naturaleza básicamente contractual"<sup>184</sup> que había de presidir, de hecho, las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. En esa línea, el Consejo de Mandos Sindicales insistía en 1955 sobre la necesidad de "dar más flexibilidad a la política de salarios y regulación de las condiciones de trabajo, mediante convenios entre empresarios y trabajadores, en el seno del sindicato"<sup>185</sup> como forma de acentuar la influencia del sindicalismo en este ámbito. Independientemente de que el sindicalismo viera en el establecimiento de una Ley de Convenios Colectivos una posibilidad de ejercer mayor influencia en el ámbito de las relaciones laborales, la realidad es que dicha ley pretendía paliar las deficiencias notables de las reglamentaciones. Aunque altas instancias de la dirección económica del país, como el Consejo Nacional de Economía y su Secretario General (Higinio París Eguilaz), afirmaban que no se pretendía volver al sistema de pactos colectivos por cuanto ello "significaría introducir el principio de la lucha de clases,"<sup>186</sup> se caminaba precisamente hacia eso por la vía previa de una cierta flexibilización de la reglamentaciones laborales.

Se era consciente de que el intervencionismo estatal (en lo referente al mundo del trabajo) estaba llegando a su término al final de la década de los cincuenta, que el franquismo no tenía capacidad para eternizar su deseo de controlar de forma absoluta el mundo del trabajo, que la estructura germánica que se pretendía aplicar con la misma Ley de Bases de la Organización Sindical de 1940 ya no era factible. Un control que se asentaba en la organización sindical, el ministerio de Trabajo, el sistema policial y los gobernadores civiles, aparte de la inestimable disuasión del ejército, resultaba cada vez más complicado.<sup>187</sup> El Estado, por medio del ministerio de Trabajo, había pretendido asumir la "tutela" plena del mundo del trabajo y la realidad era que los trabajadores y los empresarios no aceptaban calladamente este tipo de decisiones fundamentales para la economía nacional y para ellos mismos. Como se ha mencionado, lo más preocupante para el sindicalismo español era el hecho de que "el meridiano de la economía nacional pasaba fuera de los sindicatos"<sup>188</sup> siendo meros espectadores de decisiones con las que los funcionarios del ministerio de Trabajo traumatizaban el rumbo de la economía nacional a base alteraciones drásticas en los salarios. Sin embargo, consideraban imposible la negociación colectiva por cuanto esta era homologada a una práctica "marxista"



desde el momento en que había de aceptarse la posibilidad de la discusión y la negociación por parte de los empresarios y los trabajadores.

Así pues, las reglamentaciones surgían del intento por parte del ministerio de Trabajo de ayudar a construir una política de producción que se creía coherente. Esta concepción del trabajo y su organización quedó plasmada fundamentalmente en las "reglamentaciones laborales, en el capítulo trabajo a destajo, prima o tarea de remuneración con incentivo."<sup>189</sup> Sin embargo, en el II Congreso Nacional de Trabajadores organizado por la Delegación Nacional de Sindicatos, dados los abusos que podían darse en los trabajos a destajo se solicitaba el destierro definitivo de esta modalidad<sup>190</sup> pese a que desde la propia organización sindical saldrían parte de las voces más potentes y de mayor relevancia política con objeto de potenciar dicho sistema. Concretamente, Solís elaboraba en febrero de 1952 un informe que partía de la conversación mantenida con Girón en enero de ese mismo año en Sevilla y en la que éste le conminaba a comenzar los trabajos preparatorios que permitieran alterar, a partir de 1953 (tal y como sucedería), los salarios de las reglamentaciones laborales. En torno a esta cuestión el pensamiento de Solís estaba en consonancia con el marco de relaciones laborales que rompería con el sistema reglamentaristas y tendería a elevar la productividad por medio del sistema de primas y destajos:

"En el asunto de las Reglamentaciones hemos de tratar de romper con el sistema rígido de las periódicas subidas de salarios, seguido hasta ahora. Hay que abrir las puertas a los hombres para que puedan rendir más. La igualdad en los salarios por categorías y su subida periódica nos puede llevar a la ruina y además es una invitación a la vagancia al faltar el estímulo. El sistema de primas beneficiará a los trabajadores y a las empresas sin que tenga que repercutir en los precios, como ocurre hasta ahora...El que quiera ganar más que rinda más..."<sup>191</sup>

A finales de 1952 la organización sindical elaboraba un documento en que ponía bien a las claras cual era su criterio en lo referente al establecimiento de los salarios y al condicionamiento de la elevación de éstos a la productividad centrada en el esfuerzo y la diligencia del trabajador. Se afirmaba que el criterio del sindicato nunca había sido la elevación sistemática de los salarios y, en consecuencia, se plantaba teóricamente en las antípodas de la política llevada a cabo por Girón. El salario, se afirmaba, había de abandonar el cálculo sobre el tiempo y había de centrarse en la asociación del jornal a la obra realizada para "premiar al más apto y diligente." Paralelamente, en previsión de la conflictividad que pudiera generarse entre los trabajadores al ver que la resurrección de la economía se sustentaba de forma casi exclusiva en su esfuerzo y en su muy lamentable nivel de vida, la organización sindical proponía disminuir los "trámites dilatorios para el despido justo" en los casos de los obreros que

perturbaran la marcha de la producción. Con un criterio excepcionalmente favorecedor de los intereses empresariales, se sustentaba este nuevo sistema de retribución salarial sobre unas primas que habrían de estar exentas de cotización para los seguros sociales o análogos, sin considerar al menos la salvedad del seguro de accidentes del trabajo, y además habiendo de ser declaradas exentas de todo gravamen fiscal.<sup>192</sup> El documento sobre el que nos estamos basando pasaría calcado a la conclusión 1ª de la III Comisión del Congreso Nacional de la Falange celebrado en octubre de 1953, con la única salvedad de que se solicitaba la derogación radical de la Ley de Reglamentaciones del Trabajo de 1942 y los decretos sobre política de salarios de 16 de enero de 1948 y de 23 de octubre de 1953 "para instaurar un sistema más flexible y acorde con elementales exigencias de la sociedad."<sup>193</sup> De igual manera, existe una literalidad absoluta con algunos documentos emanados con posterioridad a este congreso procedentes del Consejo de Economía Nacional. Este párrafo que a continuación citamos aparece tanto en las conclusiones del congreso de la Falange como en el documento fechado en 1952 sobre los criterios sindicales en cuanto a la política de salarios:

"Por ello se considera que debe incrementarse la tendencia a que el régimen hoy más generalmente establecido y que es el del salario calculado por unidad de tiempo, objeto de detallada consideración en las normas legales vigentes, sea complementado y progresivamente sustituido por los que asocian al trabajador con la obra que realiza y premian al más diligente y apto y al más preocupado de la transcendencia de su labor."<sup>194</sup>

Y es que aparte de los bajos salarios,<sup>195</sup> de la existencia de reglamentaciones más beneficiosas para categorías profesionales idénticas, etc., el problema de la explotación del trabajador se centraba en lo que para el franquismo social era la expresión de la glorificación del hombre: el trabajo y, más concretamente, el trabajo a destajo. Los dos elementos más distintivos de este sistema de trabajo eran la existencia de tarifas excesivamente bajas y la ausencia de fijación de una limitación máxima en el rendimiento, todo lo cual daba como resultado la explotación del trabajador,<sup>196</sup> considerando el hecho de que la remuneración estaba ligada al concepto de unidad de obra. Por tanto, si el trabajador carecía de las facultades suficientes como para encuadrarse en el engranaje productivo de la empresa con eficacia y rendimiento adecuado nunca podría conseguir un salario por encima del básico señalado en la reglamentación y permanecería en una situación de necesidad y ahogo económico. Había que imbricar de forma tenaz el interés del trabajador con el de la empresa y el Estado. Y el mecanismo fundamental para ello era un salario base escaso y la potenciación del trabajo a destajo. Por otro lado, la remuneración ligada a la productividad podía generar en muchos casos problemas por cuanto podían existir situaciones en que fuera imposible o muy difícil de aplicar en el caso de trabajos peligrosos o en los que el ritmo de trabajo dependiera de las máquinas. Para la empresa, el

trabajo a destajo o a prima tenía como elementos favorables la disminución relativa de los costes de producción y la necesidad de una menor vigilancia sobre el proceso productivo. La mayoría de los inconvenientes habían de ser para los trabajadores en el sentido de quebranto para su salud (sobre todo en un marco generalizado de salarios reales muy bajo), incremento del peligro de accidentes por disminución de las medidas de seguridad, etc.

En torno a este tema podemos decir que existía una concordancia entre el concepto de trabajo a tarea del franquismo social y las medidas que la O.I.T. intentaba desarrollar a nivel mundial salvando una pequeña pero muy relevante diferencia. En la filosofía de la O.I.T. sobre esta cuestión, se partía de la necesidad de implantar estos sistemas de retribución como elemento necesario para elevar la producción y el nivel de vida de la población. Con matices, este aspecto es idéntico a las expresiones y deseos de la organización sindical y del ministerio de Trabajo. Sin embargo, la O.I.T. recalca el hecho de que para que estos sistemas funcionasen eficazmente era necesaria la anuencia y el acuerdo entre empresarios y trabajadores.<sup>197</sup>

Pese a ello, hay que hacer referencia al hecho de que, en lo referente a las reglamentaciones laborales, su incidencia fue más o menos efectiva y eficaz en el territorio peninsular e insular. No así en el caso del protectorado español en Marruecos donde se repetía sistemáticamente el problema de la falta de legislación laboral y de aplicación efectiva de la existente. Y es que "al no estar en vigor las Reglamentaciones Laborales de la Nación Protectora, el vacío legal se acusa más aún, dificultando extraordinariamente la resolución de los conflictos laborales por no tener regulado el procedimiento para su sustanciación."<sup>198</sup>

Las reglamentaciones, en líneas generales, hacían alusión a las siguientes cuestiones: actividades en que regía, formas de organización del trabajo, clasificación del personal, ingresos y ascensos en la empresa, características de las jornadas, descansos, salarios, licencias, excedencias y permisos, premios, sanciones y normas de régimen interno de la empresa. Y precisamente esta enumeración de atribuciones y el excesivo fraccionamiento de las normas dificultaba la posibilidad de inspeccionar el mundo del trabajo de tal forma que al menos las disposiciones que pretendía instaurar el franquismo social se cumpliesen por parte de los empresarios.<sup>199</sup> En otros casos, resultaba extremadamente difícil justificar su no aplicación dándose situaciones en que los propios organismos del Estado obviaban el cumplimiento de las normas más elementales relacionadas con las reglamentaciones del trabajo. Este era el caso de la Delegación Nacional de Auxilio Social:

"Hace tiempo viene apreciándose notorio descontento entre las trabajadoras de los Talleres de Vestido y Tocado que la Delegación Nacional de Auxilio Social tiene instalados en Madrid, calle de Piamonte nº 23, porque en los mismos no se cumplen

con las operarias los preceptos de las Ordenanzas Laborales, ya que en materia de salarios perciben retribuciones muy inferiores a las reglamentarias, de forma que, en algunos casos, no llega ni al 50 %.”<sup>200</sup>

Año	Reglamentaciones aprobadas
1939	1
1940	
1941	
1942	2
1943	3
1944	3
1945	5
1946	26
1947	33
1948	26
1949	8
1950	10
1951	
1952	1
1953	1
1954	2

*\*Cuadro n° 1. Reglamentaciones laborales promulgadas hasta 1954.*<sup>201</sup>

A la altura de 1948 una parte importante de las actividades empresariales estaban ya reglamentadas pese a lo cual los elementos más inconformistas de la organización sindical consideraban insuficientes los logros sociales del régimen y poco flexibles sus contenidos. De igual manera criticaban el hecho de que los trabajadores de un mismo oficio dentro de cada localidad no gozaran necesariamente del mismo salario base en función de la empresa para la que trabajasen.<sup>202</sup> Según algunos autores, “las Reglamentaciones de trabajo dictadas en los años cuarenta lo fueron ante cierta indiferencia empresarial, manifiesta en la inhibición de la patronal a participar en la discusión de los anteproyectos correspondientes.”<sup>203</sup> Sin embargo, la distancia entre la realidad social y la norma pretendidamente impuesta por parte de las autoridades del régimen era bastante amplia y constituía un surco de notables dimensiones plasmado en los titubeantes sistemas de inspección y, en definitiva, en la inexistencia de mecanismos de control efectivo sobre los criterios laborales impuestos en las reglamentaciones. “El paternalismo estatal en materia laboral que inspira tal disposición no se corresponderá, sin embargo, con la

existencia de efectivos mecanismos de control que aseguren el cumplimiento empresarial de la normativa establecida. Esa distancia entre el texto legal y la realidad laboral constituye uno de los rasgos definitorios de las relaciones de trabajo durante el franquismo..." afirmaba Benito del Pozo.<sup>204</sup>

Existieron reglamentaciones anteriores a la ley de 1942 (ver cuadro nº 1), con lo cual a posteriori hubieron de adaptarse a la nueva legislación. Ello no quiere decir que los efectos fueran positivos para los trabajadores sino más bien lo contrario. Y es que existía la posibilidad de que, cuando los trabajadores percibían retribuciones superiores a las señaladas en la nueva reglamentación, se consideraran tales salarios revisables si en su conjunto las nuevas condiciones establecidas superaban las anteriormente fijadas, lo cual en muchos casos venía a anular las mejoras concedidas a raíz de la aprobación de la nueva reglamentación.<sup>205</sup>

Era el tema de las retribuciones el que mayores dificultades generaba dado que no había uniformidad en la concesión de los salarios, existiendo una disparidad en cuanto a las condiciones del contrato y otros aspectos como las vacaciones, las horas extraordinarias, etc., dando lugar a un cúmulo de anomalías que hacían de las reglamentaciones una maraña "erizada de dificultades."<sup>206</sup> En este sentido el Delegado Nacional de Sindicatos, Fermín Sanz Orrio, solicitaba al ministro de Trabajo que se produjera la inmediata unificación de las reglamentaciones del trabajo.<sup>207</sup>

Un ejemplo de ello puede ser la reglamentación de C.A.M.P.S.A. aprobada por Orden de 5 de abril de 1945. Ésta no concedía beneficios que si existían en otras reglamentaciones tales como las gratificaciones de 18 de julio y Navidad, la participación en beneficios, la existencia de montepíos laborales, etc.<sup>208</sup> Otro caso significativo era el de las minas de Riotinto. En aquéllas el precio del cobre blister era de 13,65 pts./kg. por Orden del ministerio de Industria y Comercio de 31 de diciembre de 1950. Tras pasar la compañía a titularidad española se produjo una petición de la Sección Económica del Sindicato Provincial del Metal de Huelva (con representación de la compañía) a la Sección Social para que apoyara la petición de subida del precio del cobre. Esta sección apoyó dicha petición y por Orden de 30 de junio el precio del cobre se elevaba a 25 pts./kg. Esta elevación suponía un aumento de más del 83 % sobre el precio anterior. Pues bien, a finales de 1955 los trabajadores no se habían beneficiado de la nueva situación por medio del aumento de la participación en los beneficios en abierta contradicción con las promesas de la empresa.<sup>209</sup>

Esto motivaba que desde las propias instancias sindicales se solicitara que las primas por producción se señalaran por mutuo acuerdo de las partes y que los pluses permanentes englobaran el salario base, planteamiento parcialmente más próximo al de una ley de convenios

colectivos que a la ortodoxia del reglamentarismo laboral. Así, encontramos casos como el del sector textil en el que ya a principios de los cincuenta se solicitaba una unificación efectiva de las distintas reglamentaciones en este sector industrial que suprimiera "la anarquía laboral existente"<sup>210</sup> derivada de esta multiplicidad de disposiciones vigentes (y concretamente de "las contrapuestas en los diversos sectores industriales") así como "una simplificación de las categorías profesionales existentes."<sup>211</sup>

Las reglamentaciones, en una España con gran peso de las actividades agrícolas, se mostraron ineficaces a la hora de extender su campo de aplicación al ámbito rural, bien por incapacidad del ministerio de Trabajo o por falta de voluntad política. En líneas generales, las reglamentaciones laborales que rigen las labores campesinas ponen de manifiesto un grado de protección muy inferior "no sólo porque las normas que regulan la relación laboral en el campo son más atrasadas e imperfectas que las de la industria, sino porque, además, es evidente que mientras en las ciudades se suelen respetar las leyes sociales en los medios rurales su cumplimiento deja mucho que desear...pueden estimarse totalmente reglamentadas las actividades agropecuarias, aunque, como se dijo, en régimen de notoria e injusta desigualdad, con respecto a los beneficios concedidos a los trabajadores de la industria y otras actividades."<sup>212</sup> La carencia del plus de cargas familiares, de las condiciones de fijeza o la eventualidad en la renovación anual constituían algunos ejemplos de este agravio comparativo.<sup>213</sup> En el I Congreso de los Trabajadores se puso de manifiesto el tremendo retraso en la aplicación de las reglamentaciones y, en el mejor de los casos, el carácter anárquico con que se desarrollaron dentro del sector que mayor ocupación daba a los trabajadores españoles. En el mencionado congreso se constató, en contra de la retórica propaganda del régimen, una percepción ciertamente próxima a la que se vivía en el campo español aunque carente de un filo más crítico propio de un sindicato que era parte integrante del Movimiento:

*"Que la política social seguida en España ha llegado a tener insospechado alcance dentro de las actividades industriales, en tanto que no se imprime parecida intensidad cuando su acción se vierte sobre el trabajador del campo;*

*Que la ausencia de los reparadores efectos de la justicia social se observa muy singularmente entre nuestros campesinos, a quienes usualmente se excluye por imposición de dificultades prácticas del disfrute de mejoras sociales que por su elementalidad benefician desde hace tiempo a los trabajadores industriales;*

*Que para ser real y auténtica la política social en España ha de operar principalmente sobre las masas campesinas, porque constituyen el núcleo humano más extenso del*

trabajo nacional...porque son el soporte firme, con su trabajo, de la base más amplia de la riqueza nacional.”<sup>214</sup>

Al menos en parte, la organización sindical pretendía arrogarse la capacidad de establecer la normativa que asentara la relaciones sociolaborales básicas en el campo español. Hasta tal punto esto era así, que se pretendía que las Hermandades Sindicales de Labradores tuvieran el poder para resolver los conflictos en torno a los usos y costumbres en el ámbito agrario, estableciendo una especie de jurisprudencia a la cual habrían de adherirse los pronunciamientos de las magistraturas de trabajo. La organización sindical nunca dejará de considerar que “a tenor de lo dispuesto en el Fuero del Trabajo, debían ser ellos mismos quienes promulgaran las correspondientes normas de reglamentación del trabajo.”<sup>215</sup>

Así pues, la pluralidad y la variedad era la característica más acusada de las disposiciones reglamentarias relacionadas con los trabajadores del campo, poniendo de manifiesto el abandono casi total en el que se veían este tipo de obreros. Las primeras reglamentaciones se promulgaron a partir del segundo trimestre de 1947.<sup>216</sup> Más concretamente la primera reglamentación puesta en vigor fue la aprobada por Orden de 30 de junio de 1947 para la región andaluza (concretamente para las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva); para la provincia de Málaga fue aprobada también el 30 de junio, entrando en vigor el 1 de julio de este mismo año.

Previamente a la promulgación de la ley de reglamentaciones laborales del trabajo, la Orden de 14 de junio de 1941<sup>217</sup> (publicada en el B.O.E. el 15 de junio de 1941, nº 166) establecía el nacimiento de una comisión cuyo objetivo era articular una serie de ponencias (tantas como ramas de la producción existiesen) con el fin de proponer al Gobierno la reglamentación del trabajo en la rama correspondiente. La comisión mencionada se puso bajo la presidencia de Girón y fue integrada por un representante de cada una de las instituciones que a continuación mencionamos: ministerio de Agricultura, Industria y Comercio y Hacienda. A ellos se añadía el Delegado Nacional de Sindicatos, el Comisario General de Abastecimientos y el Director General de Trabajo. El proyecto de orden diseñado por el ministerio de Trabajo tenía el interés de observar las correcciones del Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Luis Carrero Blanco. Podemos resumir el contenido de las correcciones de Carrero señalando que su labor ante la redacción primigenia (a veces apocalíptica del ministerio de Trabajo) consistía en limar las asperezas seudomilenaristas del titular del mencionado ministerio rebajando el tono pesimista de la misma. Así el proyecto de Trabajo exponía en su introducción lo siguiente:

“La política de salarios que en los tiempos anteriores al Movimiento era anárquica, dispersa y defectuosa, ha venido arrastrándose por necesidades del momento, no

obstante los notables avances que representan en su orientación los diversos Reglamentos Nacionales que, para diversas actividades productoras, han sido aprobados por el Gobierno Nacional."<sup>218</sup>

Por el contrario la redacción que daría al mismo párrafo Carrero fue la siguiente:

"La política de salarios que en los tiempos anteriores al Movimiento era anárquica, dispersa y defectuosa, no ha podido alcanzar aún la transformación que el Régimen persigue, no obstante los notables avances de la nueva legislación social."<sup>219</sup>

En la redacción original aprobada por Girón se partía de la premisa de que la política laboral, y más concretamente la política de salarios, había seguido una línea continuista salvo en lo tocante a los parches puestos por el ministerio de Trabajo entre los que se suponía podía incluirse la Reglamentación Nacional del Trabajo en la Banca Privada de 28 de abril de 1942. Se aceptaba que, por necesidades coyunturales, la política sociolaboral había pecado de los mismos defectos que habían originado la animosidad de los vencedores en la guerra civil contra la legislación laboral de la II República. Sin embargo, la redacción que desarrolló Carrero no pudo ser más meliflua en el sentido de que planteaba la existencia de un proyecto efectivamente aplicado y claramente diferenciado de aquel "anárquico" de la II República con un único aspecto censurable cual era el estar en vías de realización. Si partimos del texto redactado por Girón, podríamos afirmar que se estaba haciendo un ejercicio de autocritica o una confesión sobre la tardanza en la aplicación de políticas (en este caso las reglamentaciones laborales) que estaban en la mente de los ejecutores del franquismo social. Si partimos del texto-Carrero, topamos con la idea de que esa política, ya en marcha y sin retrasos en su aplicación desde el 18 de julio de 1936, veía incrementada su efectividad por medio de esta comisión y sus futuros resultados plasmados en reglamentaciones varias.

La comisión, en la redacción final que respaldó Carrero, se planteaba remediar el desequilibrio entre la cuantía de los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores, dada la alteración de los precios, por medio de las reglamentaciones laborales. Se consideraba que la solución a dicho problema, generador de miseria y hambre,<sup>220</sup> no podía llegar a través de incrementos transitorios en los salarios (muy al contrario de lo que sucedió en 1956) sino por medio de una "política de ajuste que produzca la debida armonía entre ambos conceptos, sin olvidar la exigencia de un rendimiento eficaz de la mano de obra que permita un desenvolvimiento ágil de la producción nacional."<sup>221</sup> De ahí que, haciendo tabla rasa de la situación y de los criterios que pudieron determinar la política sociolaboral de la II República, se buscara un modelo de reglamentaciones que armonizase a los productores con los empresarios en cada unidad de producción y que resolviese la asimetría entre salarios nominales y reales partiendo del



“rendimiento eficaz de la mano de obra,” lo cual había de posibilitar “un desenvolvimiento ágil de la producción nacional.”<sup>222</sup>

Partiendo de este esquema organicista de la sociedad y de la producción como elementos necesarios para la supervivencia de la nación, la empresa recibía un tratamiento jerárquicamente superior, en la medida en que el bienestar de la mano de obra se subyugaba al “rendimiento eficaz” de la misma. En definitiva, el texto de Carrero-Girón (dado que no varían en lo fundamental en este párrafo al que ahora nos referimos) planteaba el futuro de las reglamentaciones laborales como un instrumento del Estado Nacional (“mecanismo totalitario al servicio de la patria”) para la consecución de unos objetivos saludables desde este planteamiento, pero que conferían mayor importancia a la salud de las magnitudes macroeconómicas a largo plazo que a las medidas a corto. Y ello porque éstas, en la mente de los consumidores del franquismo social, yugularían el bienestar de la nación en el futuro al mejorar el nivel adquisitivo de los españoles de los años cuarenta.

Pese a ello, una de las funciones que se encomendó a los miembros de las ponencias a las que se refería la mencionada orden era el estudio de la relación de los precios con los salarios en el verano de 1941 con el fin de proponer al Gobierno las medidas oportunas en relación a sus conclusiones (según el texto-Carrero) o para proponer “al Gobierno el señalamiento de nuevos márgenes a fin de que sirvan de base para realizar la labor de reajuste que se les atribuye a las respectivas Ponencias.”<sup>223</sup> Esta última aseveración parecía obligar más al gobierno en relación a los criterios que expusieran las respectivas ponencias.

La mayor jerarquía que se pretendía conceder a la comisión por parte del ministerio de Trabajo se observa también en el texto-Girón en cuanto hace referencia a que la finalidad de la comisión debía ser la de elaborar un proyecto de decreto que articulara las ponencias que dieran lugar a las reglamentaciones del trabajo en la rama que representasen. Por el contrario, el texto corregido por Carrero concedía a la comisión únicamente la atribución de elaborar un proyecto de organización sobre la misma cuestión previamente referida, lo cual nos permite afirmar que, aunque muy levemente, introducía un factor de desvalorización de aquélla y de su labor, así como de las conclusiones generadas por la misma.

Pese al intento de reglamentar de forma eficiente la vida laboral de los españoles, a la altura de 1956 era ya evidente que las reglamentaciones laborales no servían de forma eficaz al cometido para el que habían sido creadas. Este año se caracterizó por estar inmerso en un intenso proceso inflacionario que “generó un fuerte malestar social, estrechamente vinculado al incremento de la conflictividad en los centros de trabajo durante 1956-1957.”<sup>224</sup> En cierto modo, la entrada de España en el año 1953 en la Organización Internacional del Trabajo pudo contribuir a que en

nuestro país se fuese imponiendo la tendencia a establecer un régimen laboral basado en la negociación colectiva.

### ***1.7.1. Contenido de las reglamentaciones del trabajo.***

Existe una relación directa entre un determinado modelo de Estado y la concepción jurídica del mismo plasmada en la legislación de todo tipo que en nuestro caso va apareciendo paulatinamente en el Boletín Oficial del Estado. En lo referente al mundo del trabajo, la primera manifestación del franquismo social fue el Fuero del Trabajo. Como proyección del mismo, el segundo y más importante escalón de esta concepción jurídica tendente a la consecución de la paz y la armonía social está representado por las reglamentaciones del trabajo que, en espíritu, pretendían entroncar con los estatutos del régimen gremial de la Edad Media.<sup>225</sup> Evidentemente, esta concepción llevaba aparejada un total desprecio por los derechos individuales concebidos en su vertiente más liberal. El franquismo había impuesto su modelo de Estado y su modelo de "paz social" por medio de las armas. Era la fuerza de éstas la que "legitimaba" su permanencia en el poder y por tanto, también su intervención directa, su "intervención armada," por medio de los instrumentos del derecho en el ámbito de lo social. En este caso, dicha intervención se realizaba a través de las reglamentaciones, las cuales habían de ser una vertiente más de esa capacidad del Estado franquista para imponer la armonía entre el mundo del trabajo y el de la empresa. En este marco la libertad individual no tenía cabida en las relaciones del trabajo como fuente de "malsanos" conflictos. Partiendo de ello, el derecho del trabajador (del individuo) a desarrollar libremente su actividad laboral se transformó en un deber; en el deber de trabajar dentro del planificado organigrama del mundo del trabajo en beneficio de un determinado concepto de bienestar estipulado por el régimen, en parte, por medio de las reglamentaciones del trabajo.<sup>226</sup> Y esta atribución había de pertenecer en exclusiva al propio Estado en la medida en que se partía de la concepción teórica de que el trabajo y sus consecuencias (las salariales como elemento básico) no podían fijarse por medio de las partes interesadas "porque en un sistema de unidad de empresa es imposible reconocer la existencia de intereses antagónicos entre los elementos que la componen cuyos derechos y deberes se fijan más equitativamente desde el plano superior estatal."<sup>227</sup> En consecuencia, la remuneración del trabajo no se dejaba al libre criterio de las partes por cuanto, como se ha expuesto, se defendía formalmente que no podía quedar sujeto a la ley de la oferta y la demanda algo que no se consideraba como una mercancía.

Como se ha mencionado, las reglamentaciones del trabajo tienen su punto de partida en la Ley de 16 de octubre de 1942.<sup>228</sup> Esta disposición regulaba el proceso de elaboración de las bases de trabajo en cuanto a sus condiciones mínimas y obligatorias (art. 11). Hasta 1945-46 la participación de la organización sindical en la elaboración de las reglamentaciones partía del

estudio de la sección social correspondiente. A renglón seguido, era el Sindicato Nacional el que elaboraba un anteproyecto que era sometido a informe de las secciones sociales de todos los sindicatos provinciales. Sin embargo, a partir de 1947, independientemente del informe de las secciones sociales, se ordenó la elaboración de otro informe, e incluso la redacción de un anteproyecto alternativo, por parte de las secciones económicas. El anteproyecto definitivo era redactado por una comisión mixta sindical compuesta por miembros de ambas secciones. Una vez elaborado, era revisado por la Vicesecretaría Nacional de Ordenación Económica teniendo en cuenta el informe del Jefe Nacional del Sindicato correspondiente y era este proyecto el que se elevaba al ministerio de Trabajo, lo cual en modo alguno significaba que este fuera aceptado ni total ni parcialmente.

Previamente la Decreto de 18 de agosto de 1939<sup>229</sup> atribuía al ministerio de Trabajo el establecimiento de las bases reguladoras de las relaciones laborales y el Decreto de 29 de marzo de 1941<sup>230</sup> recalca esta atribución junto a la posibilidad de asesoramiento y propuesta de la organización sindical. Esta cuestión también fue bastante polémica desde los momentos iniciales de la puesta en práctica de las reglamentaciones. Tengamos en cuenta que las relaciones laborales (en cualquiera de sus facetas) estaban determinadas por este tipo de disposiciones; consideremos que desde las filas del propio sindicalismo se daban, con cierta regularidad, ejemplos de disconformidad con la política llevada a cabo por el ministerio de Trabajo, por cuanto se percibía como totalmente alejada de los principios del viejo falangismo.<sup>231</sup> Hasta tal punto, que esta influencia que el sindicalismo pretendía tener en la construcción del mundo de las relaciones laborales por medio de las reglamentaciones del trabajo no se veía correspondida con sus expectativas. Como expresión de ese peso específico que el sindicalismo no tenía en la elaboración de las reglamentaciones, el delegado provincial de sindicatos de Barcelona afirmaba rotundamente que la función del sindicato en esta cuestión era totalmente inoperante.<sup>232</sup> En esta misma línea se encontraban algunas de las conclusiones del I Congreso Político Sindical celebrado en Madrid en noviembre de 1952:

“...se reconoce a la organización sindical intervención en la reglamentación de las condiciones de trabajo, en su vigilancia y en su cumplimiento práctico. No obstante, la realidad es que en materia de reglamentaciones la organización sindical sólo tiene facultad de propuesta y asesoramiento, que puede rechazarse libremente por el organismo estatal...Ya es hora por tanto, de reivindicar para la organización la competencia que en la reglamentación del trabajo le pertenece. Pero si escasa es la tarea que actualmente tiene la organización en materia de reglamentaciones, lo es mucho menor en la vigilancia y cumplimiento de las condiciones de trabajo, y es a todas luces necesario su inclusión...sobre todo en puntos tan esenciales como son los expedientes de crisis, modificaciones de las condiciones de trabajo, clasificación profesional...”<sup>233</sup>

En cuanto al contenido de las reglamentaciones, se establecía, en primer lugar, un ámbito de vigencia. Este tenía un triple carácter. Por un lado temporal, dado que fijaba el momento en que la reglamentación comenzaba a ser operativa. En segundo lugar, el criterio territorial podía ser nacional, regional, interprovincial o provincial; e incluso podía darse el caso de que una sola empresa tuviera una reglamentación exclusiva para sí, bien por funcionar en régimen de monopolio, bien por tener a su cargo un servicio público. En tercer lugar, el criterio funcional establecía las actividades a las que iba a afectar.<sup>234</sup>

En segundo término, la reglamentación abordaba el aspecto quizás más esencial que pretendía ordenar. Nos estamos refiriendo a la organización del trabajo. Esta cuestión variaba de unas industrias a otras.

En tercer lugar, las reglamentaciones estipulaban las condiciones del personal. Clasificaba a éste en grupos y categorías profesionales, definiendo las funciones de cada uno de ellos, si bien puede constatarse el hecho de que en algunas empresas, para evitar la conflictividad, las clasificaciones del personal y las mismas remuneraciones se encontraban muy por encima de lo que las reglamentaciones exigían como era el caso de la reglamentación de las minas de plomo.<sup>235</sup> En otros casos, podemos encontrar testimonios que reflejan el problema que se planteaba al promulgar las primeras reglamentaciones del trabajo como era el caso de la existencia de trabajadores clasificados profesionalmente dentro de una categoría en la que, obligados por la empresa, realizaban funciones de rango superior al suyo sin compensación alguna.<sup>236</sup>

Ingresos y ascensos eran la siguiente cuestión abordada. Se determinaban las condiciones para entrar a formar parte de la empresa así como el régimen de acceso a categorías profesionales superiores. En cuanto a las jornadas y descansos, las reglamentaciones establecían criterios especiales en la medida de las particularidades de las industrias que se consideraba dentro de su ámbito.<sup>237</sup>

Otra cuestión reglamentada era el vidrioso asunto de las retribuciones. Era éste un aspecto que recibía una especial atención por parte de las autoridades, dado que era el que potencialmente tenía la capacidad de soliviantar de forma más acentuada el ordenamiento social. También hacían referencia las reglamentaciones a cuestiones como la retribución de los trabajos a prima, tarea o destajo, así como gratificaciones de Navidad<sup>238</sup> y 18 de julio (desde abril de 1947),<sup>239</sup> premios de antigüedad y pluses (penosidad, peligrosidad, toxicidad,...).<sup>240</sup> En lo referente a las retribuciones, la ley estipulaba que, en caso de que un aumento de salarios pudiera influir

sensiblemente en la economía de la nación, el ministerio de Trabajo debería oír previamente al ministerio de Hacienda (art. 10).

La siguiente cuestión era la relacionada con permisos, licencias y excedencias. Variaba el tratamiento de unas reglamentaciones a otras, siendo establecidas las condiciones mínimas por medio de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944.<sup>241</sup> La normativa concreta en lo concerniente a las excedencias para el personal femenino al contraer matrimonio no se estableció hasta 1961 con el decreto de 2 de febrero de ese año. El modelo general, en lo que se refiere a las excedencias forzosas, estipulaba que el personal femenino que entrara al servicio de la empresa a partir de la publicación de la reglamentación a que perteneciese, quedaba automáticamente en situación de excedencia forzosa al contraer matrimonio, teniendo derecho a percibir una dote que variaba según las ramas de la producción pero que rondaba las seis mensualidades. Tenían derecho a reingresar sólo en caso de incapacidad o fallecimiento del marido, teóricamente, ocupando la primera vacante que se produjera en su categoría y sin que se le computase el tiempo que hubiese permanecido en situación de excedencia forzosa.

En cuanto a los premios, faltas y sanciones, la empresa tenía la potestad disciplinaria salvo que la falta fuese tipificada como grave o muy grave, en cuyo caso era necesaria la instrucción de un expediente. Esta cuestión no podía faltar en un régimen de corte autoritario que buscaba, teóricamente, la armonía de las partes y en el que cualquier mínima expresión de conflicto era percibida como una perturbación intolerable del ambiente paradisíaco e idílico que había de reinar entre trabajadores y empresarios. En ese sentido, la lealtad de las partes, sobre todo la del trabajador con el empresario, y la subordinación de aquél a éste eran componentes básicos de las estructuras del trabajo y, por consiguiente, habían de ser institucionalizadas también por medio del uso de la "fuerza", en este caso de los premios, faltas y sanciones que posibilitaban las reglamentaciones laborales. Y es que en esta concepción en la que el trabajo individual se ponía al servicio de los objetivos marcados por el estado franquista, el sistema de premios y castigos era un sistema de control de la conducta, no sólo laboral sino también política, del trabajador. Se trataba en definitiva, aplicando un planteamiento de contiendas ya pasadas, de "disciplinar la producción,"<sup>242</sup> de declarar una contienda abierta contra la beligerancia de los desestabilizadores del régimen nacido de una guerra percibida por el bando nacional como una cruzada de liberación nacional, que ahora continuaba en el frente del trabajo.

Quedaba en último lugar la referencia al reglamento de régimen interior, el cual se imponía a las empresas con un determinado número de trabajadores. Concretamente, salvo las excepciones de las industrias siderometalúrgicas y del vidrio, los reglamentos internos eran obligatorios en las empresas con más de 50 trabajadores fijos. Este reglamento había de ser aprobado por la respectiva Delegación de Trabajo, previa elaboración por parte del "Jefe de Empresa." El

reglamento de régimen interior hacía alusión a cuestiones puramente técnicas como el censo laboral, admisión de empleados, condiciones para hacer efectiva la retribución, sistema de sanciones y recompensas, régimen disciplinario, suspensiones y despidos de los trabajadores, régimen de vacaciones y descansos, periodos de pruebas, licencias y permisos. Eso sí, con la puesta en marcha de los Jurados de Empresa, “éstos intervenían en la fijación del régimen retributivo de cada categoría profesional, en la determinación de los rendimientos mínimos y en cualquier concepto de carácter económico que afectara directamente a los trabajadores, así como en las cuestiones de seguridad e higiene, formación profesional y servicios sociales.”<sup>243</sup>

Por último, las reglamentaciones estipulaban una serie de normas en donde se hacía referencia a cuestiones como las prendas de trabajo, el servicio militar de los trabajadores, las salidas, las dietas, etc., etc.

### ***1.7.2. Una valoración de las reglamentaciones del trabajo.***

Como ya mencionamos, la actitud de algunos sectores empresariales al ponerse en vigor las primeras reglamentaciones del trabajo fue de aparente frialdad, desinterés y apatía. Dado que la cuestión de las reglamentaciones del trabajo era una competencia del ministerio del ramo su reacción fue notablemente fría:

“...los empresarios se desentendieron de este asunto y al estudiarse los anteproyectos correspondientes, salvo excepciones, no intervienen en los mismos...los empresarios continúan despreocupados en lo relativo a la elaboración de las reglamentaciones de trabajo no prestando atención a ninguna otra elaboración que a la de su propia industria. Bajo estas circunstancias se realizan los anteproyectos de reglamentaciones y se aprueban más de un centenar de carácter nacional...”<sup>244</sup>

En otros casos, se constataba una tendencia a violar las normas de forma reiterada como podemos constatar en el caso de un relevante sector como el siderometalúrgico. En este caso, la reglamentación databa del 6 de agosto de 1946 y era ésta una de las que más reclamaciones originaba ante la magistratura de trabajo explicitando las deficiencias o las insuficiencias de su redacción. En líneas generales, era el concepto de los salarios el que más demandas originaba. Así, en 1940 la cuestión que más reclamaciones originó fue el concepto de plus de toxicidad y la aplicación del seguro de enfermedad; en 1947 el concepto de horas extraordinarias y el plus de penosidad y en 1949 la gratificación de Navidad y el plus de peligrosidad.<sup>245</sup> En el fondo, lo que encubría la conflictividad a través de la magistratura de trabajo era la rigidez formalista, no paliada por la política de las empresas, de mantener unos jornales bajo mínimos en un contexto en el que los precios de los productos siderometalúrgicos u otros elementos como el carbón o el

mineral del hierro se habían elevado. La alternativa de los trabajadores consistía en realizar otras actividades por horas con la consiguiente merma para su seguridad, sobre todo en las empresas de mayor dimensión como Altos Hornos de Vizcaya, sobre la que el sindicato elevaba demandas que, aunque moderadas, permiten observar la tendencia de estos grandes grupos empresariales a maximizar sus beneficios en detrimento del nivel de vida de sus empleados:

“Que es caso aparte del de Altos Hornos de Vizcaya, el cual dentro de la generalidad del problema tiene el exponente típico de su falta de espíritu social y comprensión, menoscabando y regateando a los trabajadores los propios derechos que le concede la Reglamentación.”<sup>246</sup>

Para Buesa y Molera,<sup>247</sup> en los años de imposición de las reglamentaciones laborales se estaban poniendo las bases de una nueva política empresarial que se consagraria a partir de la puesta en marcha en 1958 de la Ley de Convenios Colectivos. Esta ley venía a ser el colofón de una tendencia previamente germinada dentro de la cual las mejoras en el campo tecnológico eran apoyadas por medio de la organización científica del trabajo.

Haciendo una valoración global de los resultados que obtuvieron las reglamentaciones laborales, hay que considerar que en “la práctica, la rigidez normativa y, en consecuencia la falta de adaptación de las Reglamentaciones a las peculiaridades de las distintas actividades según la región, provincia, comarca o empresa, así como el hecho de que la mayoría de las cuestiones que expresamente recoge la ley como objeto de reglamentación pudieran haberse regulado por disposiciones generales...tuvo como resultado que profesiones y oficios similares presentasen condiciones laborales distintas en función de la reglamentación aplicada.”<sup>248</sup>

De hecho, en lo tocante a las retribuciones, el sistema establecido en las reglamentaciones laborales no respondía al sentido de distribución de los beneficios que formalmente había de tener (partiendo de las manifestaciones más puramente falangistas dentro del régimen) pues se trataba, en mayor medida, de pluses establecidos de forma apriorística en lugar de “una auténtica participación en los resultados favorables de la empresa.”<sup>249</sup> En este sentido, el sindicato de la construcción, ante la evidente violación de los principios formales de la política social del régimen, solicitaba ya en el año 1948 que se reformara el sistema de participación en los beneficios de los productores, sustituyendo el tanto por ciento vigente sobre los beneficios anuales por las cantidades que efectivamente les correspondiesen por su participación en la producción. De igual manera, se solicitaba que todos los trabajadores, cualesquiera que fuese su situación tuviesen acceso a dichos beneficios, dado que existían restricciones temporales (y en función del tipo de contrato) para la percepción de aquel beneficio. Hasta tal punto el sistema estaba viciado que entre las peticiones del mencionado sindicato se encontraba la solicitud al

ministerio de Trabajo de que los organismos oficiales que realizasen trabajos de construcción y obras públicas cumpliesen la reglamentación correspondiente sobre todo en lo referente a beneficios, jornales, montepíos y seguros sociales.<sup>250</sup>

Se daban casos sangrantes también en compañías públicas como la del metropolitano de Madrid como a continuación exponemos:

“Otro motivo de malestar entre este personal, es el de las argucias empleadas por la Empresa para la aplicación del régimen de la participación en los beneficios. La Reglamentación establece que para un dividendo hasta el 8 %, los trabajadores percibirán media paga extraordinaria y que cuando aquéllos sobrepasen el citado coeficiente, los beneficios a repartir entre los trabajadores serán equivalentes a una paga. Pues bien, las Empresas vienen repartiendo el 7,95 y 7,99 % de dividendo, con objeto de restar a sus trabajadores la percepción del referido derecho.”<sup>251</sup>

A todo ello se añadía que en el caso de las grandes empresas la participación en los beneficios efectivos de las mismas se complicaba por la existencia de una inspección de trabajo que no contaba con los medios suficientes para realizar aquélla. Y por otra parte, con respecto a las pequeñas empresas, la falta de datos sobre su contabilidad o la ausencia global de controles estadísticos mínimamente fiables no facilitaba el cálculo de los beneficios de las mismas e imposibilitaba su comprobación, con lo cual dicha participación en los beneficios no existía en la práctica.<sup>252</sup>

El fracaso de las reglamentaciones laborales se plasmó a partir de la promulgación de la Ley de Convenios Colectivos de 24 de abril de 1958. Sin embargo, las peticiones implícitas de alteración del sistema que estipulaba las relaciones del trabajo tienen sus antecedentes mucho antes. En octubre de 1951 el Jefe Nacional del Sindicato de Agua, Gas y Electricidad, Luis Nieto Antúnez, enviaba a la Delegación Nacional de Sindicatos una carta en la que se reconocía el grave problema de legitimidad del régimen tanto en cuanto se venían haciendo “desde hacía mucho tiempo promesas vagas y alargando esta situación que ya se hacía verdaderamente insostenible.”<sup>253</sup> En este sindicato, dicho problema se había materializado por medio de la amenaza de dimisión de todos los vocales de las secciones sociales provinciales. Este puede ser un ejemplo del fracaso de la política social del régimen. Pero, teniendo en cuenta el poco peso efectivo del sindicato en la regulación de las condiciones de trabajo, la petición del mismo consistía en la creación de “las Comisiones Mixtas”<sup>254</sup> con el fin de elevar los consiguientes proyectos de reglamentaciones laborales y reajustar los salarios. También es posible encontrar ejemplos en los que los conflictos laborales nacían de la negativa del ministerio de Trabajo a



reconocer los acuerdos entre los empresarios y los trabajadores con o sin la intermediación del sindicato.<sup>255</sup>

La imposición de esta ley partía del hecho de que el pacto colectivo era más positivo que la rígida disciplina de las reglamentaciones laborales. Se pensaba que llegaría a obtenerse una conformidad mayor de las voluntades de los empresarios; que las huelgas disminuirían, dado que los convenios se adaptarían con mayor facilidad a la economía moderna y que proporcionaría a los trabajadores "una indudable satisfacción"<sup>256</sup> que habría de estimularles en el trabajo.

Esta ley supuso, para algunos de los miembros de la tecnocracia franquista, un paso hacia adelante en la homologación con los países occidentales y europeos fruto de la necesidad del cambio.<sup>257</sup> Según Mozo, los efectos del cambio en las relaciones laborales producidos por la Ley de Convenios Colectivos no eran similares a los producidos en otros países occidentales y, por tanto, difícilmente se podía homologar la España de los tecnócratas franquistas con los países democráticos europeos.<sup>258</sup> En contraposición a lo que la mencionada autora afirma sobre la relación entre la ley y el Fuero del Trabajo<sup>259</sup> pensamos que la Ley de Convenios Colectivos constituye un texto opuesto en la forma y en el espíritu al mencionado Fuero. En la Declaración III, el punto 4º, afirma que el Estado fijaría bases para la regulación del trabajo, con sujeción a las cuales se establecerían las relaciones entre los trabajadores y las empresas. El contenido primordial de dichas relaciones había de ser, tanto la prestación del trabajo y su remuneración como el recíproco deber de lealtad, asistencia y protección en los empresarios y la fidelidad y subordinación en el personal. De esta forma se plasma la contradicción palmaria que existía entre ambos textos, aparte de que obviamos el hecho de que la Ley de Bases de la Organización Sindical de 6 de diciembre de 1940 prohibía que los trabajadores y los empresarios negociaran las condiciones de trabajo por acuerdo mutuo.

Por otro lado, desde el momento en que, formalmente, el objetivo de la nueva ley era la elevación de la productividad, se ponía de manifiesto el desmoronamiento del sistema de reglamentaciones en línea con la incompetencia del régimen para desarrollar la economía y el bienestar de los españoles por medio de la autarquía. Y es que "con el final de la autarquía y la apertura a la competencia exterior, la industria española no podía soportar sus niveles de productividad y era necesario estimularla, aunque sin salirse del marco del sistema verticalista."<sup>260</sup>

Sin embargo, la falta de operatividad efectiva de las reglamentaciones se manifestó en el descontento entre algunos de los elementos más devotos del régimen. Entre los antiguos requetés y falangistas de las tripulaciones de la marina mercante española corría un panfleto que

ponía a las claras las deficiencias de las reglamentaciones laborales e incluso, como es el caso, la ausencia de las mismas como forma de articular al producción:

“Ya sabemos que toda la chusma enchufada de Sindicatos de Transportes, los Navieros sin entrañas que sólo ansían acumular riquezas sin fin y algún otro “caballero” de determinado ministerio pondrán el grito en el cielo al leer estas líneas y nos acusarán de rojos y de cobardes...

...venimos observando desde hace tres meses que debía haber salido la Reglamentación de Trabajo en la Marina Mercante de España. La Ley de Bases de Trabajo en la Marina Mercante...constituye un retroceso de más de 20 años de nuestras conquistas sociales y está en fragante contradicción con el espíritu de nuestro Movimiento, ...

...Infinidad de veces hemos soportado el bochorno en países extranjeros de que determinados elementos contrarios a nuestro Régimen nos echaran en cara las condiciones casi de esclavos en que vivimos si nos comparamos con otros...países americanos donde un simple marinero gana 325 dólares al mes aunque éste sea un negro sacado del interior de la selva africana...

...Es preciso mirar más allá de nuestras fronteras y ponernos en condiciones de paridad con los países de mediana situación económica y no esconder la cabeza debajo del ala como el avestruz, como hacen nuestros navieros, nuestros dirigentes sindicales y determinados “padres de la Patria” de los que pululan por la Subsecretaría y un ministerio hartos conocidos por todos...

...procederemos a dar prueba de nuestra disconformidad de forma eficaz y que atente directamente al bolsillo de los navieros...”<sup>261</sup>

Otra cuestión que se ponía de manifiesto era el trato lesivo para las mujeres. El mundo del trabajo, formalmente, tenía como referente básico la reconstrucción de España y de la familia española tradicional. Como en otros capítulos de esta tesis se menciona, partiendo de este esquema, la función de la mujer española era la de ser madre y, en consecuencia, su lugar estaba en el hogar. La estructura jurídica o el modelo de Estado estaba montado sobre este criterio y, en consecuencia, las reglamentaciones del trabajo tendían a la exclusión de la mujer del ámbito fabril para devolverla a lo que se consideraba eran sus funciones básicas y naturales: el cuidado del hogar y la procreación, cuestión de la que era perfectamente consciente el Servicio de Colocación y Encuadramiento de la Delegación Nacional de Sindicatos:

"Hemos de hacer constar, que en virtud de las nuevas Reglamentaciones de Trabajo...las Empresas prefieren al hombre ya que la mujer, una vez casada tiene que darle la excedencia forzosa, trayendo consigo los consiguientes trastornos por lo que anteriormente dijimos prefieren colocar a los hombres, incluso en puestos de trabajo desempeñados anteriormente por mujeres."<sup>262</sup>

En definitiva, la promulgación de la Ley de Convenios Colectivos es la base para la valoración de la Ley de Reglamentaciones Laborales por cuanto la primera plasma, por la vía de los hechos, el fracaso de la España autárquica del primer franquismo.

### Notas

<sup>1</sup> Payne, El régimen, op. cit., pág. 329.

<sup>2</sup> Sánchez Pravia, María José: La política asistencial del franquismo en Murcia: La casa José Antonio, hogar provincial del niño, (1939-1945), En "El Régimen de Franco (1936-1975)," Madrid, U.N.E.D., 1993, pág. 331.

<sup>3</sup> Payne, El régimen..., op. cit., pág. 261.

<sup>4</sup> Aranzadi, 230/1938.

<sup>5</sup> Aparicio, El sindicalismo..., op. cit., pág. 53-58.

<sup>6</sup> Su inspiración esencial obedece a la Carta del Lavoro italiana de 21 de abril de 1927 y a la Ley del Trabajo Nacional Alemán de 20 de enero de 1934.

<sup>7</sup> Suárez, Francisco Franco..., op. cit., pág. 291.

<sup>8</sup> Aranzadi, 230/1938.

<sup>9</sup> Payne, Historia del fascismo...Aranzadi, op. cit., pág. 220.

<sup>10</sup> Benito, La clase obrera...Aranzadi, op. cit., pág. 133.

<sup>11</sup> B.O.E. del 24 de febrero, Aranzadi 274.

<sup>12</sup> Sempere Navarro, A.V.: Nacional-sindicalismo y relación de trabajo, Madrid, 1982; citado en Benito, del Pozo, Carmen: Ideología y trabajo. Las relaciones laborales durante el franquismo, Cuadernos Republicanos. 1993, nº 13, pág. 33.

<sup>13</sup> Aranzadi, 230/1938.

<sup>14</sup> Ídem.

<sup>15</sup> Benito, Ideología y trabajo..., op. cit., pág. 34.

<sup>16</sup> Por medio de estas líneas no pretendemos llevar a cabo una biografía del personaje central en la política realizada por el ministerio de Trabajo de 1941 a 1957, objeto de esta tesis. Dicho propósito queda lejos del ánimo del doctorando. Sin embargo, estimamos que no podemos menos que dar alguna pincelada a algunas de las circunstancias más relevantes de su vida.

Girón de Velasco nació en Herrera de Pisuergra (Palencia) el 28 de agosto de 1911 y falleció en agosto de 1995. Se matriculó en Derecho en la Universidad de Valladolid, terminando dicha carrera en 1932 en la Universidad de Salamanca. Participó en la creación de las J.O.N.S. y formó parte del Consejo Nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S. El 17 de julio participó en el alzamiento nacional en Valladolid y mandó una centuria que marchó sobre el puerto de los Leones; en agosto mando dos centurias en Puerto Ventana y en septiembre de 1936 preparó una fuerza de choque para rescatar a José Antonio en Alicante. La decantación de Manuel Hedilla por Girón le llevó en pugna con Andrés Redondo al cargo de inspector territorial. Al finalizar la guerra detentó el cargo de Delgado Nacional de Ex-combatientes. Equipo Mundo: Los 90 ministros de Franco, Dopesa, pág. 103-104.

<sup>17</sup> Ludevid, Manuel: Cuarenta años de sindicato vertical, Laia, Barcelona, 1976, pág. 21.

<sup>18</sup> Girón de Velasco, José Antonio: Si la memoria no me falla, Barcelona, Planeta, 1994, pág. 85.

<sup>19</sup> Sobre su llegada al ministerio realiza Aparicio la siguiente afirmación: "La exaltación del mundo del trabajo corresponderá en adelante, con práctica exclusividad, a José Antonio Girón de Velasco que,

dentro de la estructura gubernamental y sin contacto directo con los trabajadores, tendrá un margen de maniobra más seguro y potencialmente menos peligroso en el desempeño de esa repetitiva advocación a la clase obrera a quien se prometerá la entrega de la justicia social a través de un lenguaje que no intenta siquiera ocultar el paternalismo autoritario que le sirve de fuente inspiradora." Aparicio, *El sindicalismo...*, op. cit., pág. 203.

<sup>20</sup> Sobre él afirmaba Girón que le resultaba totalmente "inaceptable" en el cargo de subsecretario. "Por más que yo lo intentaba, no me entendía con él. Puedo asegurar que lo intenté todo para que la confianza y el entendimiento se produjesen, pero no se producían..." afirmaba el ministro de Trabajo. Girón, *Si la memoria...*, op. cit., pág. 95.

<sup>21</sup> Girón, *Si la memoria...*, op. cit., pág. 17.

<sup>22</sup> *Ídem*, pág. 31.

<sup>23</sup> *Ídem*, pág. 32.

<sup>24</sup> *Ídem*, pág. 46.

<sup>25</sup> *Ídem*, pág. 41.

<sup>26</sup> Soler Serrano e Irurozqui: Girón entre el ayer y el mañana. Barcelona, ed. Jaime Solá, 1973, pág. 153-4.

<sup>27</sup> Girón, *Si la memoria...*, op. cit., pág. 30.

<sup>28</sup> *Ídem*.

<sup>29</sup> *Ídem*, pág. 82.

<sup>30</sup> *Ídem*, pág. 52-58.

<sup>31</sup> Girón, op. cit., pág. 76.

<sup>32</sup> *Ídem*, pág. 78-79.

<sup>33</sup> Suárez Fernández, Luis: Francisco Franco y su tiempo. Tomo IV. Fundación Francisco Franco, 1984, 263.

<sup>34</sup> *Ídem*, pág. 266.

<sup>35</sup> El Gabinete quedó constituido de la siguiente forma: Gobernación, Blas Pérez González; Ejército, Fidel Dávila Arrondo; Marina, Francisco Regalado; Aire, Eduardo González Galarza; Exteriores, Alberto Martín Artajo; Educación, José Ibáñez Martín; Industria y Comercio, Juan Antonio Suanzes; Obras Públicas; José María Fernández Ladreda; Agricultura; Carlos Rein Segura; Hacienda, Joaquín Benjumea Burín; Justicia, Raimundo Fernández Cuesta; ministro Secretario General del Movimiento; José Luis de Arrese y Magra; Trabajo, José Antonio Girón de Velasco.

<sup>36</sup> Payne, S. G.: El régimen de Franco, 1936-1975. Madrid, Alianz Editorial, 1987, pág. 300.

<sup>37</sup> *Ídem*, pág. 301.

<sup>38</sup> *Ídem*, pág. 407.

<sup>39</sup> *Ídem*, pág. 79.

<sup>40</sup> *Ídem*, pág. 302.

<sup>41</sup> *Ídem*, pág. 308.

<sup>42</sup> "A partir de tal concepción de la armonía de clases surge una concepción peculiar del sindicalismo. Éste se configura como un aparato del Estado, que se estructura de forma jerarquizada y autoritaria y desarrolla un tipo de actividad sindical de tipo paternalista y asistencial." Ludevid, Manuel: *Cuarenta años...*, op. cit., pág. 22.

<sup>43</sup> Llorens Castillo, Carlos: La primera década. Una aportación al proceso político e ideológico del franquismo y a la historia del Partido Comunista de España. Valencia, Fernando Torres, 1983, pág. 154.

<sup>44</sup> *Ídem*, pág. 155.

<sup>45</sup> Equipo Mundo, op. cit. pág. 103.

<sup>46</sup> Payne, Franco..., op. cit., pág. 592.

<sup>47</sup> *Ídem*, pág. 324.

<sup>48</sup> Girón, *Si la memoria...*, op. cit., pág. 119.

<sup>49</sup> *Ídem*, pág. 119-125.

<sup>50</sup> A.P.G.; J.E.; Leg. 59, nº 2, pág. 1. Ver 8.3.6. F).

<sup>51</sup> Girón, *Si la memoria...*, op. cit., pág. 134.

<sup>52</sup> *Ídem*. Sin embargo la apreciación que Soler e Irurozqui hacen sobre los resultados de la política de Girón (pese a estar en una línea de abierta apología del personaje) pone de manifiesto la conciencia por parte del personaje de la distancia entre los deseos teóricos en torno a la pretendida "revolución" y las realizaciones efectivas: "El Girón de la España agria que desembocó en la guerra civil, el Girón que tomó partido a pecho descubierto, y dio fe de su fe, ha dado paso a un Girón pragmático, posibilista, a un político que no renuncia a sus sueños, que ha capitaneado los movimientos más audaces de la justicia social en España y que sin embargo sabe que no ha llegado ni a la quinta parte de los que él se propuso."

El subrayado es nuestro. Soler Serrano e Irurozqui: Girón..., op. cit., pág. 8. Desde otra perspectiva Payne reconoce buenas intenciones al ministro Girón como un ejemplo de los pocos que dentro del régimen se preocuparon efectivamente de la elevación del nivel de vida del trabajador español si bien su apreciación sobre el crucial tema del paro parece totalmente errónea tal y como se ha tratado en el capítulo de esta tesis dedicado a tal aspecto: "...el único falangista que alcanzó alguna popularidad a lo largo de dieciséis años de ministro del Trabajo (1941-1957) fue el antiguo jefe de milicias José Antonio Girón. Este se tomó en serio su cargo y trató de infundir en el gobierno cierta preocupación por los trabajadores. Estableció una legislación social bastante avanzada, aunque las disposiciones oficiales quedaban muy por debajo de las necesidades reales de los trabajadores. La realización más destacada de su sistema fue la garantía de estabilidad en el empleo. Existía un subempleo, pero el paro prácticamente desapareció. A pesar de estar rodeado de paniaguados, famosos por su inmundicias económicas, la gente reconocía que había intentado sinceramente mejorar la situación de los trabajadores y logro incluso cierta popularidad entre los mineros asturianos." G. Payne, Stanley: Falange. Historia del fascismo español. París, Ruedo Ibérico, 1965, pág. 203.

<sup>53</sup> Ídem, pág. 142.

<sup>54</sup> Ídem, pág. 135.

<sup>55</sup> Tusell, Javier: Carrero. La eminencia gris del régimen de Franco. Madrid, Temas de Hoy, 1993.

<sup>56</sup> Payne, El régimen..., op. cit., pág. 363.

<sup>57</sup> Ídem, pág. 408.

<sup>58</sup> Ídem, pág. 314.

<sup>59</sup> Ídem, pág. 432.

<sup>60</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 148-149.

<sup>61</sup> Payne, Franco..., op. cit., pág. 439.

<sup>62</sup> Ídem, pág. 457.

<sup>63</sup> En este año Girón perderá a su padre, don Justo Girón Gutiérrez. Concretamente el día 17 de septiembre de 1953 muere don Justo en Peñafiel (Valladolid). El día 18 por la tarde se verificó en Valladolid el entierro al que asistieron el ministro de Gobernación, ostentando la representación del Jefe del Estado, los ministros Secretario General del Movimiento, de Asuntos Exteriores y de Justicia; el Vicario Capitular, el Vicesecretario General del Movimiento, el Presidente del Consejo de Estado, el Delegado Nacional de Sindicatos, el Gobernador Civil de Valladolid, el Presidente del I.N.P., delegados nacionales de distintos servicios y otras personalidades.

<sup>64</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 154.

<sup>65</sup> Franco Salgado-Araujo, Francisco: Mis conversaciones privadas con Franco. Barcelona, 1976, pág. 182.

<sup>66</sup> Payne, El régimen..., op. cit., pág. 466.

<sup>67</sup> Girón, Si la memoria, op. cit., pág. 99.

<sup>68</sup> Ídem, pág. 194.

<sup>69</sup> Arrese, José Luis de: Una etapa constituyente. Barcelona, Planeta, 1982, pág. 26.

<sup>70</sup> Girón, Si la memoria, op. cit., pág. 164.

<sup>71</sup> Ídem, pág. 172.

<sup>72</sup> Ídem, pág. 183.

<sup>73</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 113 y 180.

<sup>74</sup> Carta de Fermín Sanz Orrio a Girón de Velasco de 29 de noviembre de 1943. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02., R/0007, N° 97-13°.

<sup>75</sup> Ídem, pág. 200-201.

<sup>76</sup> Expediente n° 2.882. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 76, 5.251.

<sup>77</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 76.

<sup>78</sup> Ídem, pág. 86.

<sup>79</sup> Ídem, pág. 143.

<sup>80</sup> Según Ridruejo el falangismo no pasó de ser un simple adorno para el régimen: "Como titulares del monopolio político, los falangistas dieron un contingente abundantísimo de colaboradores al sistema, en forma de ministros, directores generales, gobernadores, altos funcionarios, amén de cubrir otras plantillas subalternas, más las de la burocracia sindical, las organizaciones de educación juvenil y hasta el mangoneo de los deportes. Cuando estos funcionarios no eran propiamente falangistas se disfrazaban con el uniforme reglamentario y quedaban asimilados...La liquidación del falangismo ha sido más bien un vaciado. La estructura se ha ido quedando hueca. Los cuadros no encuadran más que empleados efectivos y el más o menos abundante número de afiliados que aún tiene ocupación coactiva y provechosas en los centros rurales. Ridruejo, Dionisio: Escrito en España. Madrid, ed. Toro, 1976, pág. 154.

- <sup>81</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 169.
- <sup>82</sup> Ídem, pág. 98.
- <sup>83</sup> Ídem, pág. 102.
- <sup>84</sup> Ídem, pág. 156.
- <sup>85</sup> Ídem, pág. 154.
- <sup>86</sup> Aranzadi, 230/1938.
- <sup>87</sup> Ellwood, Sheelagh: Prietas las filas. Barcelona, Crítica, 1984, pág. 124.
- <sup>88</sup> Sobre la Ley de Constitución de los Sindicatos o ley de bases afirma Aparicio lo siguiente: "Esta norma encierra dentro de sí gran parte del significado múltiple del proceso de construcción sindical, fija su función política y adelanta la clave para la comprensión del juego de fuerzas que se estaba produciendo en el Nuevo Estado". Aparicio, El sindicalismo..., op. cit., pág. 90.
- <sup>89</sup> Ídem, pág. 83.
- <sup>90</sup> Ídem, pág. 75.
- <sup>91</sup> Payne, El régimen..., op. cit., pág. 369.
- <sup>92</sup> Ídem, pág. 445-446.
- <sup>93</sup> Ídem, pág. 446.
- <sup>94</sup> Ídem, pág. 448.
- <sup>95</sup> Documentos inéditos para la Historia del Generalísimo Franco. Madrid, ed. Fundación Francisco Franco, 1994, pág. 650.
- <sup>96</sup> Primer informe de Carrero Blanco sobre la situación interior en España, 25 de agosto de 1941. Documentos inéditos..., op. cit., pág. 325.
- <sup>97</sup> Ídem, pág. 409.
- <sup>98</sup> Correspondencia de José Solís Ruiz a los delegados sindicales de provincias, 22 de octubre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/243, nº 112, pág. 3.
- <sup>99</sup> Pasquin falangista contra Franco, noviembre de 1941. Documentos inéditos..., op. cit., pág. 360.
- <sup>100</sup> Benito del Pozo, Carmen: La clase obrera asturiana durante el franquismo. Madrid, Siglo XXI, 1993, pág. 352.
- <sup>101</sup> Aparicio, El sindicalismo..., op. cit., pág. 105.
- <sup>102</sup> La "Línea" (de Murcia) del 27 de julio de 1939.
- <sup>103</sup> ABC (de Madrid) del 29 de julio de 1939.
- <sup>104</sup> A.P.G.; J.D.N.; Leg. 26, nº 9.
- <sup>105</sup> "...la necesidad de liquidar las entidades clasistas que aún subsisten y entre las que descuella por su característica actividad La Liga Guipuzcoana de Productores." Correspondencia de Fermín Sanz Orrio con ministro Secretario del Movimiento, 5 de junio de 1945. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/389.
- <sup>106</sup> A.P.G.; J.D.N.; Leg. 26, nº 9.
- <sup>107</sup> Correspondencia del Subsecretario de Trabajo a la D.N.S. sobre la nota secreta nº 12.012/13 de la Dirección General de Seguridad, 22 octubre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 90.02, r/204.
- <sup>108</sup> A.P.G.; J.D.N.; Leg. 26, nº 9.
- <sup>109</sup> I Congreso Nacional de Trabajadores. Conclusiones. Delegación Nacional de Sindicatos; Vicesecretaría Nacional de Ordenación Social, 1946, pág. 75.
- <sup>110</sup> Ídem, pág. 76.
- <sup>111</sup> Aparicio, El sindicalismo..., op. cit., pág. 100. El mencionado autor utiliza el término militar.
- <sup>112</sup> Aparicio, El sindicalismo..., op. cit., pág. 167.
- <sup>113</sup> Hay que considerar que son datos aportados por la propia organización sindical y que muy fácilmente podrían estar abultados en mayor o menor medida. Documentos inéditos..., Tomo IV, op. cit., pág. 152.
- <sup>114</sup> Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación. Informe mensual del Departamento de Encuadramiento, febrero de 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/64.
- <sup>115</sup> París Eguilaz, Higinio. Un nuevo orden económico. Madrid, ed. Fe, 1941, pág. 171.
- <sup>116</sup> I Congreso Nacional de Trabajadores. Conclusiones. D.N.S., V.N.O.S., 1946, pág. 81.
- <sup>117</sup> B.O.E. del 16 de septiembre.
- <sup>118</sup> Payne, El régimen..., op. cit., pág. 277.
- <sup>119</sup> B.O.E. del 9 de agosto.
- <sup>120</sup> Aparicio, El sindicalismo... Aranzadi, op. cit., pág. 79.
- <sup>121</sup> B.O.E. del 29 de diciembre.
- <sup>122</sup> López Valencia, Federico: Jalones de una Reforma Social. Madrid, Escuela Social de Madrid, 1946, pág. 154.
- <sup>123</sup> B.O.E. del 23, Aranzadi 1.868.

<sup>124</sup> B.O.E. del 2 de enero de 1944, Aranzadi 40.

<sup>125</sup> Aparicio, El sindicalismo..., op. cit., pág. 143.

<sup>126</sup> Ídem, pág. 408. Sin embargo, en cuanto a su ejecución práctica hay que incidir en el muy relevante peso que tuvo la organización sindical dado que por medio de sus distintas obras (cooperación, hogar, lucha contra el paro, etc., etc.) intervenía de forma muy activa en la ejecución práctica de las políticas del ministerio de Trabajo.

<sup>127</sup> Proyecto de Decreto por el que se crea el Instituto Social del ministerio de Trabajo (20 de marzo de 1952). A.P.G.; S.G.A.; Leg. 3, nº 5.

<sup>128</sup> Aparicio, El sindicalismo..., op. cit., pág. 80.

<sup>129</sup> B.O.E. del 1 de octubre.

<sup>130</sup> "En estas reuniones se ha podido observar la gran diferencia de criterio que existe entre ambas representaciones, empresarios y obreros. Hasta tal extremo que da la sensación de que en lugar de un Sindicato, tenemos agrupados en un mismo edificio, en una misma oficina dos, bien diferentes y en completa pugna. Gracias a la acertada intervención del mando político de la C.N.S., se van suavizando, todo lo posible, estas relaciones con la intención de llegar a una completa armonía. Armonía que estimo no llegará nunca hasta que la empresa actual se convierta en Empresa Nacional-Sindicalista, donde todo trabajador tenga participación. Por ellos estimo de urgencia se lleve a la práctica el Decreto de 18 de agosto de 1947, por el que se crean los Jurados de Empresa. Partes reservados de la C.N.S. de Valladolid, enero de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/214.

<sup>131</sup> Según Tamames, su aplicación a partir de 1953 se haría únicamente de forma tímida. Tamames, Ramón: Estructura económica de España. Tomo III. Barcelona. Guadiana, 1977, pág. 224-225. Maroto y de Mingo resaltan la relevancia del estudio de la documentación de los jurados de empresa de cara al estudio de la historia de las relaciones laborales. Maroto Barchino, Caridad y De Mingo, José Antonio: Para estudiar la historia de las relaciones laborales en el lugar de trabajo. Una nota sobre la documentación procedente de los Jurados y Comités de Empresas. I Jornadas de Historia Económica de las relaciones laborales. Universidad de Sevilla (Área de Historia e Instituciones Económicas), Sevilla, 14-15 de noviembre de 1996, pág. 13.

<sup>132</sup> Partiendo de este planteamiento el objetivo de la ley, en paralelo con la legislación de los nacionalsocialistas alemanes, sería "revalorizar la idea de la unidad de dirección de la industria alemana, eliminar los desastrosos antagonismos de clase y poner de relieve el principio del honor social, he ahí los fines de esta Ley, que constituye el armazón nacional y social del nuevo edificio." Arnaldos Gimeno, Pedro: Los seguros sociales en los estados totalitarios. Madrid, I.N.P., 1941, pág. 51.

<sup>133</sup> Ellwood, Prietas las filas..., op. cit., pág. 184.

<sup>134</sup> Ludevid, Cuarenta años..., op. cit., pág. 28.

<sup>135</sup> En consecuencia, hay que la característica del trabajador español hasta 1953 fue su inmadurez. Discurso pronunciado por Girón por Radio Nacional de España el día 16 de septiembre de 1953: "Y, sobre todo, sólo se ha decidido después de comprobar en la actuación de los trabajadores en los órganos erectores de sus entidades de Previsión Laboral, la existencia de aquellas dotes de inteligencia, de experiencia, de buen sentido y hasta de intuición que han quedado probadas en siete años de gestión, a través de los cuales vosotros, constituyendo mayoría en los órganos rectores, habeis llevado vuestros Montepíos a un grado de madurez, de prosperidad, de prestigio y de popularidad que no podíamos imaginar en el momento en que fueron creados..." Ludevid, Cuarenta años..., op. cit., pág. 31.

<sup>136</sup> En este momento se solicita "que se interese de los Poderes Públicos la promulgación de las oportunas disposiciones legales para que queden establecidas las Juntas de Jurados en las empresas." I Congreso Nacional de Trabajadores. Conclusiones. 1946. D.N.S.; V.N.O.S. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.393.

<sup>137</sup> II Congreso Nacional de Trabajadores Españoles. Comisión 1ª: Transformación del régimen económico social de la empresa. D.N.S.; V.N.O.S., 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.388.

<sup>138</sup> Ídem.

<sup>139</sup> Conclusiones del III Congreso Nacional de Trabajadores. Comisión 1ª: La empresa. D.N.S., Madrid, 11-16 de julio de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/280.

<sup>140</sup> Sanfulgencio Nieto, Salvador: Los jurados de empresa y su ordenamiento jurídico. Madrid, 1962.

<sup>141</sup> La Organización sindical española y los jurados de empresa. Madrid, junio de 1959. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.351.

<sup>142</sup> Pérez Botija, Eugenio: Jurados de empresa. Notas a su reglamento. Madrid, 1954, pág. 24.

<sup>143</sup> Quesada Munuera, Enrique: Los Jurados de Empresa. Vicesecretaría Nacional de Ordenación Económica, Madrid, 1956, pág. 24.

<sup>144</sup> "Por cierto, que hemos de consignar aquí que quizás una parte importante de la responsabilidad de que estos sucesos se produzcan debe atribuirse a la Delegación e Inspección de Trabajo, por la desidia y negligencia con que actúan y porque además prescinden en casi todos los casos de la más mínima relación con los Enlaces Sindicales cuando los Agentes de Inspección visitan las empresas." Partes reservados de la C.N.S. de Santander, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/214.

<sup>145</sup> Borrajo, Efrén: Política social. Madrid, Doncel, 1959, pág. 29.

<sup>146</sup> Pérez Botija, Jurados..., op. cit., pág. 37.

<sup>147</sup> Nofuentes, Manuel: El jurado, como instrumento de colaboración en la empresa. Revista del Combustible, núm. 49-50, 1949, pág. 178.

<sup>148</sup> Pérez Botija, Jurados..., op. cit., pág. 24.

<sup>149</sup> Por orden de 13 de enero de 1956 se amplió a los centros de trabajo con 500 obreros o más.

<sup>150</sup> Pérez Leñero, José: Comentario al reglamento de Jurados de empresa. Madrid, 1956, pág. 37.

<sup>151</sup> El artículo 4º se establecía lo siguiente: "Toda Empresa vendrá obligada a constituir los Jurados en la forma y condiciones que en el presente Decreto se determinan.

Dentro de cada Empresa se establecerán tanto Jurados de Empresa como centros de trabajo haya en cada una con más de cincuenta trabajadores fijos y a más de quince kilómetros entre sí."

<sup>152</sup> Para la organización sindicales eso supondría un gran fracaso: "De prevalecer el criterio restrictivo en la obligatoriedad de constituir los Jurados de Empresa, solamente en aquellos Centros de Trabajo que ocupen 1.000 o más trabajadores, sería tan insignificante el número de Juntas de Jurados a constituir, que las masas sociales, que tantas veces han exteriorizado su ilusión por este positivo avance social, quedarían defraudadas." Reglamento para los jurados de empresa. V.N.O.E., 4 de noviembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-93-53. Este criterio se extendió de forma significativa por parte de las empresas y ante la pasividad del ministerio de Trabajo tal y como se puede deducir de los resultados de una de las comisiones del III Congreso Nacional de los Trabajadores en la que se solicitaba: "Que entre en pleno vigor lo dispuesto respecto a que dentro de cada Empresa se establezcan tantos Jurados de Empresa como centros de trabajo hay con más de 50 trabajadores fijos y a más de 15 kilómetros entre sí." Conclusiones del III Congreso Nacional de Trabajadores. Comisión 1ª: La empresa. D.N.S., Madrid, 11-16 de julio de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/280.

<sup>153</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 129.

<sup>154</sup> Ídem, pág. 178.

<sup>155</sup> Ídem, pág. 129.

<sup>156</sup> Ídem, pág. 129.

<sup>157</sup> "...Se constituyó el Jurado de Empresa y el mismo día de su toma de posesión un Decreto conjunto de Hacienda y Trabajo lo suprimió. La reglamentación laboral de las minas excluye toda actividad sindical...El trabajador de Almadén no necesita para nada ni apenas si cree en nosotros... El uso inmoderado, cuando no arbitrario en la imposición de sanciones y la no posibilidad de recurrir ante la Magistratura en los casos de faltas graves, priva al obrero de la garantía mínima que necesita para su defensa, siendo desde el punto de vista de los jefes mineros esta falta de garantías, castigos y represalias que impunemente y con frecuencia manejan para lograr sumisiones muy poco acordes con el espíritu que informa nuestras leyes laborales." Informe de la Delegación Provincial de Sindicatos de Ciudad Real sobre Almadén sus minas de mercurio, 8 de julio de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.766.

<sup>158</sup> De igual manera entre las secciones sociales más constatarías, dentro de las posibilidades que ofrecía el régimen, se era consciente de su mero papel de adorno sobre todo en el momento en que alguna de las demandas realizadas fuera contraria a las directrices previamente establecidas por las autoridades superiores. "Entre las Secciones Sociales de las distintos Sindicatos Provinciales hay un descontento general...consideran sus trabajos y actividades plagados de esterilidad y por consiguiente inútiles, con el agravante de aparecer ante los productores como responsables de esta época negativa en lo que a consecución de mejoras sociales se refiere, por lo que se sienten decepcionados y deseosos de cesar en el cometido de sus cargos de representación, pues como ellos manifiestan, no tienen ninguna necesidad de dedicar atención a unas actividades que en definitiva a nada práctico conducen..."

Mensualmente se reúnen las Secciones Sociales de todos los Sindicatos Provinciales para tratar sobre los distintos problemas que les afectan y en cada ocasión levantan su actas correspondientes reflejando en ellas los acuerdos adoptados. Mes tras mes vienen haciendo lo mismo, cumpliendo con un precepto de la organización sindical y como quiera que estas actas, con estos acuerdos, rara vez prosperan va cundiendo el desaliento entre sus componentes y a veces dudan de la efectividad del poder de la organización sindical...Quieren realidades palpables, mejoras en la justicia social que entienden actualmente son poco



positivas y a lo que creen tener derecho...No quieren promesas sino hechos..." Informes reservados de la C.N.S. de Logroño, abril 52. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/213.

<sup>159</sup> Informe sobre elección de jurados de empresa de la Jefatura Provincial de Valencia. D.N.S., 8 de febrero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/263-7.

<sup>160</sup> Evidentemente esta planteamiento era incompatible con el planteamiento formal que defendía la institución del jurado como un elemento de democratización de la actividad empresarial. Borrajo, Efrén: Política social. Madrid, Doncel, 1959, pág. 30.

<sup>161</sup> En el grupo de los cenetistas afectos cita a Pedro Barrachina, Santiago Sánchez Requena, Juan Bautista Martí Leal y un tal Montesinos que según el informe (previo a las elecciones) saldría con toda seguridad. Informe sobre elección de jurados de empresa de la Jefatura Provincial de Valencia. D.N.S., 8 de febrero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/263-7, pág. 2.

<sup>162</sup> En éste destacaba un obrero de apellido Torres y un técnico, Almiñana Miret "condenado a muerte." Informe sobre elección de jurados de empresa de la Jefatura Provincial de Valencia. D.N.S., 8 de febrero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/263-7, pág. 3.

<sup>163</sup> Informe sobre elección de jurados de empresa de la Jefatura Provincial de Valencia. D.N.S., 8 de febrero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/263-7, pág. 4.

<sup>164</sup> Entre los primeros estaba Rigoberto Miana Catalá, Ricardo Esteban Calpe ("detenido después de la liberación") y Juan Rebull Prado ("discola y de menos prestigio que los anteriores") Informe sobre elección de jurados de empresa de la Jefatura Provincial de Valencia. D.N.S., 8 de febrero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/263-7, pág. 4.

<sup>165</sup> "La célula comunista de Macosa es una de las más fuertes, pudiendo calcularse que tendrá de 40 a 70 militantes y una cifra análoga de simpatizantes. Han tratado de promover la candidatura de un tal Astillero pero se ha desarticulado resueltamente este intento rechazándosele por el Sindicato. Una candidatura de elementos comunistas y simpatizantes en esta Factoría hubiera sido muy peligrosa, dada la cohesión y disciplina del grupo, al que se sumarían probablemente elementos extremistas, especialmente los procedentes de la U.G.T., con posibilidades de conseguir algún puesto en el caso de que se produjera división de votos entre otros candidatos. Pero -repetimos- ese peligro ha quedado salvado." Informe sobre elección de jurados de empresa de la Jefatura Provincial de Valencia. D.N.S., 8 de febrero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/263-7, pág. 5.

<sup>166</sup> "Tenemos que destacar bien que nuestros candidatos a los Jurados de Empresa...han sido elegidos en una proporción verdaderamente extraordinaria (cincuenta elegidos entre setenta candidatos) y estos resultados demuestran claramente que en nuestra Guardia de Franco los militantes son además de buenas personas y falangistas resueltos, profesionales que tienen en sus centros de trabajo y fuera de ellos, el mayor prestigio entre sus compañeros." Guardia de Franco. Lugartenencia Provincial de Madrid. 3 de marzo de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/270.

<sup>167</sup> En este caso de la disminución voluntaria de la producción (y consiguiente despido de 99 trabajadores) se originó a raíz del establecimiento de un compromiso verbal de la empresa por el que los obreros del tren de laminación recibirían un aumento de primas idéntico al de los obreros de los trenes fuertes de laminación en línea. El incumplimiento de la promesa condujo a la correspondiente reclamación ante el jurado que adoptó acuerdo en contra de los intereses de los obreros. Conflicto laboral en Altos Hornos de Vizcaya (Sestao), 19 octubre de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.851. Otro ejemplo lo encontramos en la empresa siderometalúrgica barcelonesa Riviere, S.A.: "RIVIERE S.A. es empresa de más de mil productores, y por tanto tiene constituido Jurado de Empresa. Pues bien, sus trabajadores, viendo que no se conseguía aumento de salarios, prescindieron de dicho órgano natural de representación y del Sindicato, y en una sección de la misma comenzaron a reducir la producción, logrando con ello forzar a la Empresa a la concesión de una importante mejora económica." Descontento de los trabajadores siderometalúrgicos de Barcelona. V.N.O.E., 30 de noviembre de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-191-55.

Un tercer ejemplo lo tenemos en la reclamación del jurado de empresa de la R.E.N.F.E. a las autoridades sindicales y a la propia empresa ante lo cual presentaban su dimisión ante la D.N.S.:

"Punto 1º. Por la constante obstaculización por parte de la Empresa de nuestra labora, reflejada en la no aceptación de todas cuantas propuestas o sugerencias se le hacen; la negativa a resolver sobre el cese automático de los antiguos representantes del personal de la Renfe, en la comisión del Economato, que debieron cesar en el momento de la toma de posesión de los Jurados de Empresa, cese éste que se ha venido pidiendo reiteradamente desde el mes de mayo del pasado año, en virtud de los que con toda claridad señala el art. 53 del Reglamento de Jurados de Empresa...

Punto 2º. Por la oposición sistemática de la Empresa a la constitución de comisiones designadas en el seno del Jurado para aportar informes o hacer investigaciones de cualquier índole, como señala el art. 46 del Reglamento antes citado...

Punto 3º. Por el desprecio que supone para estos Jurados, el que, el Sindicato Nacional de Transportes y Comunicaciones no se digne pedirnos las temas de personas que en representación del Sindicato y de los trabajadores hayan de formar parte de los Tribunales para concursos y oposiciones, como se venía haciendo antes de la constitución de estos Jurados, a través de los Enlaces y Vocales Provinciales, entendiéndose que ésta nuestra petición encaja dentro del apartado B. del art. 81 del Reglamento antes citado...

Punto 4º. Por falta del suficiente apoyo sindical en todas cuantas veces hemos necesitado de él, para resolver asuntos en los que era imprescindible la intervención de la organización sindical...

Punto 5º. Por no haber resuelto a pesar del tiempo transcurrido, desde el mes de Julio de 1954, sobre la impugnación hecha por nosotros de las elecciones que, para Vocales Nacionales y Jefe de Sección Social Central de Sindicato de Transportes y Comunicaciones, celebradas por la fecha antes mencionada." Contestaciones al informe que hacen los jurados de empresa de la RENFE para justificar su dimisión ante el Delegado Nacional de Sindicatos. D.N.S., 25 de marzo de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>168</sup> Ferri, Las huelgas..., op. cit., pág. 130-1.

<sup>169</sup> Este caso se dio en el estratégico sector de la minería de Almadén. Situación económico-social del establecimiento minero de Almadén. V.N.O.E., 20 de octubre de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-182-55.

<sup>170</sup> Aranzadi, op. cit., 230/1938.

<sup>171</sup> B.O.E. del 3 de junio, Aranzadi 596.

<sup>172</sup> Correspondencia de Francisco Gómez Ballesteros (Vicesecretario Nacional de Ordenación Social) de 6 de noviembre de 1951. A.G.A.; Sección de Sindicatos; A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>173</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 129-130.

<sup>174</sup> "La actuación del Ilmo. Sr. Magistrado de Trabajo, viene causando descontento en la clase productora, pues debido al especial criterio que dicho señor tiene acerca del procedimiento laboral, evita prácticamente entre éste en juicio, ofreciendo por todos los medios que se llegue a una avenencia en la conciliación previa, lo cual trae aparejado que sólo obtengan ventaja los demandantes temerarios, ya que los que ejercitan su derecho fundamental, al avenirse a un arreglo, necesariamente han de salir perjudicados.

En determinados casos, las invitaciones a la conciliación que el Sr. Magistrado efectúa, por ir acompañadas de la advertencia de imponer multas, si estima la demanda temeraria, ejerce cierta coacción sobre el productor y aún sobre el patrono.

Además, el criterio del Sr. Magistrado, es de atenerse a la prueba presentada por la partes, sin practicar diligencia para el momento previo, lo cual ha de resultar siempre perjudicial para el productor, que sólo puede ver garantizados sus derechos con un procedimiento en cierto modo inquisitivo por parte del Sr. Magistrado." Informes reservados de la C.N.S. de Cuenca, enero de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/213.

<sup>175</sup> Benito del Pozo, La clase obrera..., op. cit., pág. 350.

<sup>176</sup> "Pongo en tu superior conocimiento que la mayor parte de los asuntos laborales que se pierden por sentencia en contra del productor en general...en la Magistratura del Trabajo, tienen por causa la pobreza de la prueba que se aporta al juicio.

Esta deficiencia en la práctica de la prueba es debido a la falta de elementos materiales por parte del productor, ya que, principalmente los que residen fuera de esta capital, deben de pagar gastos de viaje y comida a los testigos que aportan, aparte de que en la mayoría de los casos tienen que satisfacer a los propios testigos el jornal o jornales devengados, y no hablemos de la evidente dificultad económica que representa abonar los honorarios de perito.

Frente a estas dificultades con que tropieza el productor se levanta la potencialidad económica y moral de la empresa que siempre cuenta con medios para poder aportar tantas pruebas como estime conveniente en apoyo de su posición..." Informes reservados de la C.N.S. de Gerona, marzo 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/213.

<sup>177</sup> I Congreso Nacional..., op. cit., pág. 75.

<sup>178</sup> A.P.G.; S.G.A.; Leg. 3, nº 5.

<sup>179</sup> Benito del Pozo, op. cit., pág. 351.

<sup>180</sup> Informe del Jefe Provincial de Lucha contra el paro de León a José Redondo Gómez (Jefe Nacional), 1946. A.G.A.; I.D.D. 136.01, 3.125-1.

<sup>181</sup> Aranzadi, op. cit., 230/1938.

<sup>182</sup> Albentosa Puche, Luis: El paro en España. Madrid. Instituto de Estudios Económicos, 1983, pág. 127-128. El proyecto de ley de convenios colectivos se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Españolas el día 21 de junio de 1957, núm. 559. Existía bastante urgencia en sacar adelante la ley fruto de la caótica situación de la economía española como muestra el fragmento del oficio de Sanz Orrio que a continuación citamos: "...me permito insistirte en la urgencia del programa o calendario para aplicación de la citada Ley, pues el tiempo vuela y el desánimo puede cundir fácilmente" Correspondencia del ministro de trabajo Sanz Orrio con el Secretario General de la organización sindical, José M<sup>a</sup> M. Sánchez-Arjona, 24 de mayo de 1958. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.351.

<sup>183</sup> "Convenio colectivo. Con fecha 17 de diciembre de 1951, se pactó entre el consejo de administración y un grupo de obreros (que lo hacían como representantes sindicales), un convenio en el que en síntesis se fijaban rendimientos mínimos y como compensación a ellos percibían los productores una retribución del 25 % del salario fijado en la reglamentación de trabajo. Así mismo se concertó una prima a la producción, siempre que se rebasasen los catorce mil m<sup>3</sup> anuales de mineral, por un total de dos millones de pts. por cada mil m<sup>3</sup> de mineral o la cantidad que correspondiese a las fracciones respectivas. Este convenio ha sido sistemáticamente incumplido por el Consejo, ...sirviéndose de él para sancionar los equipos de trabajo cuando no se llegó a eso mínimos..." Informe de la Delegación Provincial de Sindicatos de Ciudad Real sobre Almacén y sus minas de mercurio, 8 de julio de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.766.

<sup>184</sup> I Congreso Nacional de Trabajadores. Conclusiones. Delegación Nacional de Sindicatos; Vicesecretaría Nacional de Ordenación Social 1946, pág. 83.

<sup>185</sup> Algunos asuntos tratados en el Consejo de Mandos Sindicales. V.N.O.E., 23 febrero de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 13.01, 3.954, N-134-55.

<sup>186</sup> Correspondencia de la Secretaría General del Consejo de Economía Nacional (Higinio París Eguilaz) a V.N.O.S. (Francisco Ballesteros), 12 de febrero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 2.334-1.

<sup>187</sup> "...Prosigue la estrecha coordinación de esta C.N.S. con la Delegación de Trabajo, de Jefatura Superior de Policía y Gobierno Civil, manifestándose una vez más los excelentes resultados que con ello estamos continuamente consiguiendo..." Informes reservados de la C.N.S. de Barcelona, enero de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/212.

<sup>188</sup> Consideraciones sobre la necesidad de un régimen de convenios colectivos de trabajo que formula la sección de política social a la Dirección del Instituto de Estudios Políticos, s/f (anterior al 6 de mayo de 1957). A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.351. En este mismo documento podemos encontrar expresiones clarificadoras sobre la percepción de algunos sectores del franquismo en torno a la realidad del mundo sindical: "Lo único que se mueve dentro de la organización sindical, son las llamadas Obras Sindicales, constituidas por burócratas, los cuales pueden hacer algo en el terreno social por pura delegación de los organismos estatales correspondientes...y en el orden económico, las secciones patronales, cuando actúan lo hacen como simples colectividades clasistas de defensa...¿Puede entonces, considerarse exagerada el acta de inexistencia de los Sindicatos, de los Sindicatos considerados tal y como la doctrina oficial sostiene que deben ser parte de la realización de una democracia orgánica?..."

<sup>189</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 125. Era común el conflicto relacionado con los destajos. En varios informes de la V.N.O.E. de la década de los cincuenta se pone de manifiesto como, particularmente en las minas, este tipo de conflictos afloraban con facilidad como el caso la empresa Minas y Ferrocarriles de Utrillas (Teruel): "la organización sindical de Teruel informa que sospecha no sea la causa del citado acto de violencia el no percibir todos el día 31 una paga extraordinaria, cuyo abono se estaba efectuando sino que el origen del descontento de los trabajadores es que por el ministerio de Trabajo no se había dado solución a una reclamación general sobre revisión de destajos, tramitada a través de aquella C.N.S., en recurso cerca de la Dirección General de Trabajo contra la denegación a las pretensiones de los obreros pronunciada por la Delegación Provincial de Trabajo." Conflicto laboral en la Empresa minas y ferrocarriles de Utrillas. V.N.O.E., 13 de noviembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, sin referencia.

<sup>190</sup> "Que en armonía con la tendencia que informa nuestra legislación social se propenda a que el trabajo a destajo como sistema retributivo sea desterrado totalmente de nuestra práctica laboral, debiendo iniciarse su paulatina supresión de forma tal que en lo sucesivo no se conceda autorización para trabajar a destajo." II Congreso Nacional de Trabajadores Españoles, 1951. Comisión II: Nivel de vida del trabajador. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.388.

En el caso de las minas de Alquife (Granada) los trabajadores a la altura de 1952 cargaban en una jornada normal 30 toneladas por sueldos que oscilaban entre las 19,12 pts. y 15,19 pts. diarias. Y ello sin considerar el mal estado de los instrumentos de trabajo y la frecuencia de los accidentes. En definitiva, una forma de trabajo que el propio sindicato tenía que calificar de inhumana. Condiciones de trabajo en las minas de Alquife (Granada). V.N.O.E., 1 de agosto de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, sin referencia.

<sup>191</sup> Notas relativa a los estudios que sobre reglamentaciones de trabajo lleva a efecto la organización sindical. D.N.S. Madrid, febrero de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 2.334-1, pág. 3.

<sup>192</sup> Criterio sindical en política de salarios. Madrid, 26 de noviembre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 2.334-1.

<sup>193</sup> Conclusión 1ª de la III Comisión del Congreso Nacional de la Falange, octubre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 2.334-1, pág. 2. También en Conclusiones aprobadas por el Congreso de F.E.T. y de la J.O.N.S. que pueden ser objeto de desarrollo legislativo, octubre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 2.334-1.

<sup>194</sup> Proyecto de informe sobre criterios en la política de salarios. Consejo de Economía Nacional, Secretaría General. Madrid, marzo de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 2.334-1, pág. 11.

<sup>195</sup> En algunos casos la resistencia y el conflicto se plasmaba en deliberadas disminuciones de los rendimientos que acababan con la intervención policial. Nos referimos en este caso a los trabajadores dependientes de la industria de la piel (Reglamentación de 27 de abril y 12 de diciembre de 1946 para calzado y curtidos respectivamente) en la que, por ejemplo, los empleados de los talleres de reparación manual estaban todavía a la altura de 1953 sometidos a la reglamentación de actividades no reglamentadas "en las que subsisten los salarios más bajos de España". Solicitud de revisión de las reglamentaciones de trabajo en las industrias de la piel. Entre otras cuestiones los trabajadores tenían el problema de que las gratificaciones extraordinarias concedidas con la Orden de 28 de noviembre de 1952 que suponían para la mayoría de los trabajadores la concesión de 21 y 30 días, para los de este sector suponían únicamente una gratificación consistente en 7 días de retribución en la industria del calzado y 10 en las otras actividades básicas de curtidos. V.N.O.E., 5 de marzo de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-18-53. Caso similar encontramos en el conflicto establecido por los trabajadores del Tren Frio del Taller de Laminación de la empresa Duro-Felguera, S.A., de la Felguera: "Recientemente se procedió al despido de 46 trabajadores de dicho tren, fundando la empresa su determinación en que había existido una disminución voluntaria y continuada del rendimiento y que se habían negado a realizar ciertos trabajos extraordinarios." Conflicto laboral en la empresa Duro Felguera S.A. de la Felguera. V.N.O.E., 4 de marzo de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-15-53.

<sup>196</sup> Batlle Florensa, Juan: Las reglamentaciones de trabajo y la técnica industrial. RT, núm. 6, 1948, pág. 453-55.

<sup>197</sup> "Ningún sistema de remuneración por rendimiento puede ser aplicado con éxito si no existen buenas relaciones entre la dirección y los trabajadores interesados.

...deberán adoptarse las disposiciones pertinentes para la participación de los representantes de los trabajadores en la introducción del sistema..." Racionalización del Trabajo. Principios generales relativos al uso de los sistemas de remuneración por rendimiento. Comité Internacional de Organización Científica del Trabajo, O.I.T., abril de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 2.334-1, pág. 5-6.

<sup>198</sup> Informe de la Vicesecretaría Territorial de Ordenación Social de Marruecos, 22 de marzo de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 2909.2.

<sup>199</sup> I Congreso..., op. cit., pág. 77.

<sup>200</sup> Talleres de auxilio social en Madrid. V.N.O.E., 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, sin referencia.

<sup>201</sup> Fernández Heras, Amado: Índice de reglamentaciones de trabajo y estatutos de mutualidades laborales. Zaragoza, 1955.

<sup>202</sup> Ídem, pág. 55.

<sup>203</sup> Benito del Pozo, Ideología y trabajo..., op. cit., pág. 38.

<sup>204</sup> Ídem.

<sup>205</sup> I Congreso Nacional de Trabajadores..., op. cit., pág. 58.

<sup>206</sup> Consejo Económico Sindical de Vizcaya. Bilbao, 12-16 de junio 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 45.02, 3.

<sup>207</sup> Ténganse en cuenta que si comparamos el tema de las vacaciones, en el sector lana encontraremos periodos de 15 a 17 días, en la seda de 9 a 10 y en fibras artificiales de 7 a 10. En el caso de la paga de Navidad se retribuía con 15 días en fibras artificiales y con un mes en lana y seda. en el caso de la paga del 18 de julio lana recibía la retribución correspondiente a una semana, seda quince días y fibras artificiales y

géneros de punto 15 días. Correspondencia del Delegado Nacional de Sindicatos (Fermín Sanz Orrio) a Girón, 15 de junio de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/164.

<sup>208</sup> Nota sobre la C.A.M.P.S.A.. V.N.O.E., 17 de octubre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, sin referencia.

<sup>209</sup> Petición de los trabajadores en las minas de Riotinto. V.N.O.E., 23 de noviembre de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-189-55.

<sup>210</sup> Sindicato Nacional del Textil. Partes reservados, febrero de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/ 211.

<sup>211</sup> Sindicato Nacional Textil. Sección Social Central. Unificación de Reglamentos Nacionales del Trabajo textil, febrero de 1957. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 88, R/469.

<sup>212</sup> En este 2º congreso se combinaban expresiones razonables y ciertas sobre la realidad del campo español con peticiones de tono más abrupto y autoritario como la referencia a un peculiar mecanismo de depuración política para solucionar el problema del paro en el campo: "Teniendo en cuenta la capacidad profesional uniforme del trabajador agrícola, entendemos que sobre todo en períodos de crisis debía de establecerse la colocación por rotación de los trabajadores en paro, eliminando a aquellos de quien se tengan malos informes por su conducta o falta de rendimiento." II Congreso Nacional de Trabajadores de España. Comisión 6ª. Política social agraria. 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01. 3.388.

<sup>213</sup> Congreso Provincial de F.E.T. y de la J.O.N.S. Ponencia III: La Falange y el sistema económico español. Sindicalismo Nacional. Posiciones del Sindicalismo dentro del Estado. Fines fundamentales de los Sindicatos. Ampliación de la protección social en la industria de la agricultura. Salamanca, octubre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.805.

<sup>214</sup> I Congreso Nacional de Trabajadores. Conclusiones. Delegación Nacional de Sindicatos; Vicesecretaría Nacional de Ordenación Social, 1946, pág. 59.

<sup>215</sup> Aparicio, El sindicalismo vertical..., op. cit., pág. 107.

<sup>216</sup> "...no pueden calificarse como Reglamentaciones de Trabajo a esas tablas de salarios, siempre rebasadas y tantas veces modificadas, que sólo en escasos períodos de tiempo tuvieron real aplicación," según Espinosa. Espinosa Poveda: Las relaciones laborales en el campo. Madrid, 1949, pág. 31.

<sup>217</sup> A.G.P.; S.M.S.; Leg. 30, nº 46.

<sup>218</sup> Ídem.

<sup>219</sup> Ídem.

<sup>220</sup> A.P.G.; J.E.; Leg. 59; nº 1 y nº 53; A.P.G.; S.M.S.; Leg. 30, nº 47.

<sup>221</sup> A.G.P.; S.M.S.; Leg. 30, nº 46.

<sup>222</sup> Ídem.

<sup>223</sup> Ídem.

<sup>224</sup> Benito del Pozo, La clase obrera..., op. cit., pág. 177.

<sup>225</sup> Pérez Leñero, José: Los reglamentos nacionales del trabajo. Su sistematización jurídica. RT, 1941, núm. 15.

<sup>226</sup> "El Estado con sus reglamentos de trabajo sirve de educador y maestro, dándonos los contenidos concretos en los que se encuentra esa justicia social," afirmaba con un sentido marcadamente paternal Pérez Leñero. Pérez Leñero, José: Los reglamentos nacionales del trabajo. Su sistematización jurídica. RT, 1941, núm. 17, pág. 369. Esta concepción totalitaria se plasmaba del siguiente modo: "En la concepción totalitaria, las fuerzas morales y físicas que un pueblo puede desplegar, y las que existen latentes en el país respectivo, representan su capacidad de creación y constituyen su riqueza efectiva. Por esta razón, cada cooperador a la economía, sean cuales fueren su posición y la medida del empleo de sus fuerzas, debe sentirse responsable hacia la comunidad..." Pérez Serrano, José: La reglamentación del trabajo en el nuevo Estado español. RT, núm. 24 de 1941, pág. 398-9.

<sup>227</sup> López Valencia, Federico: Jalones de una Reforma Social. Madrid, Escuela Social de Madrid, 1946, pág. 47.

<sup>228</sup> B.O.E. del 23, Aranzadi, 1.647.

<sup>229</sup> B.O.E. del 16 de septiembre.

<sup>230</sup> B.O.E. 9 de abril, Aranzadi 683.

<sup>231</sup> Tenemos uno de estos ejemplos en el siguiente documento: "Es evidente que el aspecto en que el logro de nuestra Revolución va más atrasado, es en la definición y realización de los postulados económicos y sociales de la misma, sin lo cual viene a quedar en simple papel mojado, como aquellos derechos teóricos en casa de los famélicos a que aludía José Antonio. En este terreno el principal enemigo actual es todavía el capitalismo, que interiormente no sólo no ha sido eliminado, sino que con el pretexto de una industrialización necesaria, que somos los primeros en desear, ha crecido desaforadamente... Como consecuencia, el trabajador no encuentra hasta ahora calor ni cariño en los sindicatos, ni una asistencia

inmediata por estar concebidos éstos como función netamente burocrática, coercitiva y verdadera influencia del Estado, lo cual desvirtúa incluso el hecho de las elecciones sindicales, que se corromperán sin la asistencia popular, ya que sólo juegan en ellas intereses personalistas ajenos a los obreros. Por otra parte, la política social del Movimiento, es hasta ahora insuficiente e incompleta, reduciéndose a un conjunto de expedientes circunstanciales..." Oficio de la Jefatura del Departamento de Pedagogía de la O. S. Formación Profesional (Joaquín Úbeda de San Andrés), 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 6.01, 15.773, pág. 14. El subrayado es nuestro..

<sup>232</sup> Concretamente afirmaba que las juntas reglamentarias no servían para nada. Contestaciones al cuestionario para la reunión de delegados provinciales de sindicatos. Vicesecretaría Nacional de Ordenación Económica. Barcelona, marzo 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 5.384, pág. 14. Otro ejemplo documentado de la percepción que sobre la vida del sindicato había en torno al tema de las relaciones laborales lo encontramos en este párrafo: "...es justo reconocer que al sindicato no se le ha concedido en muchas ocasiones ni siquiera la fuerza y contenido que le confería la propia ley de su creación..." Nota informativa sobre el proyecto de disposición legal de un régimen de convenios colectivos de trabajo elaborado por la sección de política social del Instituto de Estudios Políticos. D.N.S., V.N.O.S., 6 de mayo de 1957. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.351.

<sup>233</sup> I Congreso Político Sindical. Madrid, noviembre de 1952. Tema IV: La función social sindical. (Presidente: Francisco Gómez Ballesteros, Vicesecretario Nacional de Ordenación Social. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/ 184.

<sup>234</sup> Benito del Pozo, *La clase obrera...*, op. cit., pág. 172-175.

<sup>235</sup> Sindicato Provincial del Metal de Linares (Jaén), 1952, A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 481. Pese a ello se percibía el abandono paulatino de algunos grupos de mineros en función de la dureza del empleo y de la relación que guardaba con los salarios. Necesidades de urgente solución. Jefatura Provincial del Sindicato del Metal de Jaén, 13 de septiembre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 481.

<sup>236</sup> Torres Centurión, Manuel de: El problema de algunas reglamentaciones nacionales de trabajo. RT, núm. 6, 1945, pág. 549.

<sup>237</sup> En ocasiones había abusos manifiestos que por falta de voluntad política o por dejadez administrativa se plasmaban en conflictos que sólo la "intervención" de la organización sindical o la represión policial podía controlar. Este fue el caso de la empresa Enciso Industrial, S. A. de Logroño que el día 17 de enero ponía en funcionamiento, sin la previa autorización de la Delegación Provincial de Trabajo, un nuevo horario que obligaba a entrar a sus operarios a las dos de la madrugada. Solución al conflicto laboral de la empresa Enciso Industrial, S.A., Logroño. V.N.O.E., 21 de enero de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-4-53.

<sup>238</sup> Desde la promulgación de la Orden de 6 de diciembre de 1945. B.O.E. del 9, Aranzadi 1.631.

<sup>239</sup> Orden de 15 de julio de 1947. B.O.E. del 18, Aranzadi 927.

<sup>240</sup> Benito del Pozo, *La clase obrera...*, op. cit., pág. 174.

<sup>241</sup> Aranzadi, 274.

<sup>242</sup> Suárez Mier, J.: Análisis de las regulaciones laborales mineras. RT, núm. 10, 1946, pág. 913.

<sup>243</sup> Benito, *La clase...*, op. cit., pág. 177.

<sup>244</sup> Archivo Histórico Provincial de Oviedo (A.H.P.)/ Administración Institucional de Servicios Profesionales (A.I.S.S.), Ponencias y conclusiones del II Pleno del Consejo Económico-Sindical Provincial, Oviedo Delegación Provincial de sindicatos, 1955, pág. 277-279. Citado por Benito del Pozo, *La clase obrera...*, pág. 420-421.

<sup>245</sup> Informe sobre la reglamentación siderometalúrgica. Vicesecretaría Provincial de Ordenación Social. Bilbao, 7 marzo de 1950. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 2.334-1, pág. 4-19.

<sup>246</sup> Ídem, pág. 19.

<sup>247</sup> Buesa, Mikel y Molera, José: Cambio tecnológico y procesos de trabajo: una aproximación al papel del Estado en la introducción de los métodos de la Organización Científica del Trabajo en la economía española durante los años cincuenta. RT, nº 67-68. No coincidimos con el planteamiento aquí expuesto en la medida en que el dirigismo estatal de las reglamentaciones laborales queda netamente atemperado con el nuevo marco impuesto a partir de 1958.

<sup>248</sup> Benito del Pozo, *La clase obrera...*, op. cit., pág. 176.

<sup>249</sup> I Congreso Nacional..., op. cit., pág. 26.

<sup>250</sup> "Solicitar del ministerio de Trabajo encarezca a los Organismos Oficiales que realicen trabajos de Construcción y Obras Públicas, que cumplan la Reglamentación Nacional de Trabajo, singularmente en lo que se refiere a participación en beneficios, jornales, Montepíos y Seguros Sociales." Sindicato Nacional

de Construcción, Vidrio y Cerámica. Junta de la Sección Social del 12 y 13 de noviembre de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 3336, pág. 7.

<sup>251</sup> Compañía Metropolitana de Madrid. V.N.O.E., 7 de noviembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, sin referencia.

<sup>252</sup> Batlle, Las reglamentaciones..., op. cit., pág. 457.

<sup>253</sup> Correspondencia del Jefe Nacional del Sindicato de Agua, gas y electricidad (Luis Nieto Antúnez) con el Delegado Nacional de Sindicatos, 30 de octubre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>254</sup> Correspondencia de la Jefatura de Servicios Jurídicos a la V.N.O.S., 13 de noviembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>255</sup> En este caso se planteó en el puerto de Valencia una huelga con motivo de la campaña de exportación de naranja. El motivo fue el acuerdo sobre salarios entre empresarios y trabajadores y el hecho de que la delegación de trabajo fijó unos salarios inferiores. La huelga duró del día 13 al 15 de noviembre de 1951. Correspondencia del Secretario Asesor de la Sección Social con V.N.O.S., 21 de noviembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>256</sup> Significación y características de los pactos colectivos de trabajo. Centro de Estudios Sindicales. Madrid, 1957. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 84, R/1.466.

<sup>257</sup> López Rodó, Laureano: Memorias, Barcelona, Plaza y Janés, vol. I, 1990, pág. 139.

<sup>258</sup> Mozo Gayo, Un giro..., op. cit., pág. 120.

<sup>259</sup> Aranzadi, op. cit., 230/1938.

<sup>260</sup> Mozo, Un giro..., op. cit. 123.

<sup>261</sup> Escrito que circula entre las tripulaciones de nuestra marina mercante (sin fecha). A.G.A.; I.D.D. 136.01., nº 2334.1.

<sup>262</sup> Servicio Nacional de Encaramiento y Colocación. Memoria anual de actividades, 1950. A.G.A.; I.D.D. 136.01, nº 3.575, pág. 46

## **Capítulo 2. El trabajo: concepto, características y fines.**

Con respecto a la noción de trabajo propia del franquismo social, Girón afirmaba en sus memorias que su primer objetivo al llegar al ministerio de Trabajo era dignificar moral, profesional y económicamente al trabajador español. El trabajo, formalmente, no debía ser considerado una mercancía y el salario un mero precio por la prestación otorgada. El trabajo había de ser “el generador inmediato de la producción, eje de la economía humana,”<sup>1</sup> así como un factor de armonización de la sociedad española por partirse del hecho de que había de ser el Estado el que armonizase los intereses de trabajadores y empresarios.<sup>2</sup> Con ello se pretendía conseguir “un nuevo orden de trabajo en la vida nacional,”<sup>3</sup> construido sobre las bases de jerarquía y unidad que el régimen franquista propugnaba como esenciales para la armónica convivencia de los españoles. Este planteamiento pretendía contribuir teóricamente a la victoria del trabajador español.<sup>4</sup>

“Para contemplar este principio de dignificación tenía que partir de la idea de que el trabajo no es solamente un medio de subsistencia, sino un actitud humana encaminada a empujar al hombre hacia una meta de llamamientos, ambiciones e ilusiones jamás alcanzada.”<sup>5</sup>

En la personalidad de Girón pesó de forma muy importante la lealtad al régimen de Franco y concretamente a la persona del Jefe del Estado. Desde este punto de vista, la obra social que desde el ministerio de Trabajo se llevó a cabo en la época de Girón tenía como *factotum* al general Franco. Y de igual manera, en Girón se manifestaba la idea de que había sido Franco el artífice de la elevación espiritual del concepto del trabajo y del encumbramiento de éste como un derecho de la sociedad y de los trabajadores, en vez de un castigo.<sup>6</sup> Desde este punto de vista, se separaba la idea del trabajo de lo que se consideraba como “utilitariamente frío concepto de arrendamiento de servicios o contrato de trabajo.”<sup>7</sup>

En este marco, el mundo del campo era formalmente idealizado, dado que el agricultor español representaba la salvaguarda segura de los valores que se consideraba habían de estructurar España. Pese a ello, no se dotó al agricultor español de los mismos elementos de protección que al resto de los trabajadores, puesto que “el trabajo agrícola tiene una fisonomía propia, diferente esencialmente del trabajo productivo de bienes o servicios extraños al agro. Posee caracteres peculiares, así por la esencia del trabajo en sí, como por razón del objeto sobre que recae, del lugar y del tiempo en que se efectúa, de la forma social y de la finalidad de sus ejecución, y de los medios que emplea.”<sup>8</sup> En resumen, la falta de voluntad para dotar al trabajador del campo de los mismos derechos (independientemente de su efectividad) que poseía el trabajador por cuenta ajena de la industria provocó la necesidad de justificar *a posteriori* la situación de inferioridad



palmaria que estaba en el origen de los masivos movimientos del campo a la ciudad a partir de la aceleración del proceso de industrialización en España.

Elemento básico de la consideración del trabajo es la ruptura teórica con el denominado concepto mercantil del mismo inserto en el pensamiento capitalista-liberal y en el marxismo materialista que abre el preámbulo del Fuero del Trabajo<sup>9</sup>. "El trabajo no es una mercancía," afirmaba José Antonio Girón<sup>10</sup> detestando que desde el mundo del capitalismo liberal se considerase a la criatura humana "como un simple instrumento de lucro no más apreciable, y muchísimas veces menos apreciable, que cualquier máquina por insignificante que fuera."<sup>11</sup> Supuestamente, se luchaba de esta forma contra los problemas ocasionados por la "arbitrariedad patronal que durante el siglo XIX fuera causa de tantos conflictos e injusticias."<sup>12</sup> Y se evitaba, en teoría, "el trabajo excesivo a que se veían obligados muchos padres de familia que no tenían suficiente con el salario normal y que habían de buscar un suplemento de trabajo."<sup>13</sup>

Desde esta perspectiva, se producía, teóricamente, la subordinación de la economía a la política y, por tanto, la política económica no era considerada como un fin en sí mismo sino como un medio para conseguir objetivos sociales que, paralelamente, superasen el concepto de trabajo entendido como venta de esfuerzo. Desde estos presupuestos, la empresa, la sociedad anónima, satanizada y maldecida por las directrices económicas de los falangistas más radicales, era una muestra palmaria de la incapacidad de la familia española para detentar la propiedad de los grandes complejos industriales, de los medios de producción que constituían el eje central de la vida económica del país. Y todo ello en contraposición a una época, no delimitada cronológicamente con exactitud, en la que se imponía el carácter limitado de los sistemas de producción,<sup>14</sup> con lo cual la situación de la familia se definía por las funciones que ejercitaban sus miembros y, más concretamente, el padre de familia.

Así pues, se consideraba que se estaba entrando en una "tercera era trascendental"<sup>15</sup> en la que España se estaba situando en una época de transformaciones sociales hondas y profundas. Desde el punto de vista de Girón, España tenía una misión consistente en la universalización de este concepto del hombre como productor, del trabajo y de la economía:

"...nosotros tenemos como deber de solidaridad con la tradición la necesidad de clavarnos de nuevo en vanguardia intransigente de contrarreforma. Pero si porque sabíamos rezar pudimos enseñar a rezar a dos continentes, para cumplir ahora esta misión en lo universal, que consiste concretamente en conseguir que este gran movimiento de emancipación social nazca bajo el signo cristiano ortodoxo, tenemos que predicar con el ejemplo...*He aquí la justificación más alta de la Revolución Nacional-Sindicalista. Nosotros tenemos que demostrar cómo se encarrila la más*

*profunda transformación social por los caminos del espíritu. Tenemos que enseñar prácticamente que no está en la idolatría del rendimiento y del colosalismo ni en determinadas estructuras estatales el pilar de la felicidad de los pueblos, sino en el equilibrio de una hermandad disciplinada, presidida por sentidos religiosos de la vida".*<sup>16</sup>

Y frente a esta meta final del Nacional-Sindicalismo proclamada por Girón se mantenía la idea de un período de la Historia de España apestado por los influjos del más rancio liberalismo de tintes materialistas que había degollado secularmente la célula básica de la sociedad perdiendo de vista su referencia a la hora de considerar el mundo del trabajo. Es de singular trascendencia la concepción histórica del personaje mencionado en estas líneas en la medida en que reflejaba, en una situación de deterioro continuado, la evolución del orbe mundial desde la aparición de la Modernidad. Y, por otro lado, Girón representa la percepción de que la única reacción anterior a la Revolución Nacional-Sindicalista que él representaba pecó de los mismos defectos:

*"La sociedad antigua, por un resto del feudalismo, sin duda, cometió la barbarie moral de considerar al trabajador como individualidad vendedora de trabajo, desasida de todo vínculo social. La familia del trabajador no era un factor económico que tuviera que intervenir en el contrato de trabajo... Los movimientos de rebeldía contra aquella sociedad, es decir, los movimientos sindicalistas, social-económicos, que surgieron para oponerse a lo que ese concepto tenía de injusto incurrieron en el mismo error -acaso porque operaban sobre principios igualmente materialistas- y olvidaron la familia. Toda la lucha fue montada sobre la existencia simple del trabajador aislado. Si no llegan a desconocer la familia, puede que hubieran sido invencibles."*<sup>17</sup>

El concepto del trabajo parte, igualmente, de una idea de exigencia a todos los miembros de la familia de un auténtico espíritu de trabajo que les condujese a realizar las tareas que les correspondían como productores, incrementando así el índice de producción nacional, aunque todo ello, sin la participación de la madre en la actividad productiva: "...y libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica,"<sup>18</sup> afirmaba el título II del Fuero del Trabajo. Desde esta perspectiva, el buen desarrollo de las generaciones futuras dependía de un círculo ambiental saneado en el que la ausencia de la penuria económica evitaría que la madre tuviera que compensar el déficit económico de la familia con un trabajo que la distanciara del cuidado de sus hijos para realizar una "extraña actividad materna"<sup>19</sup> que provocaría el abandono de la lactancia y disminuiría el cuidado que el hijo o hija debería recibir.

Pese a ello, no todas las voces sobre la realidad laboral de España coincidían con la línea oficial. Desde algunas posiciones, el trabajo era visto como un elemento que atentaba a la vida

familiar. Federico Rodríguez<sup>20</sup> señalaba como el horario de trabajo de los españoles era notoriamente desproporcionado con el que se practicaba en otras partes de Europa o en España hasta julio de 1936. Más radical es el panorama que sobre el mundo del trabajo presenta Fernández de Castro<sup>21</sup>:

“...el aspecto de nuestra sociedad, aunque pacífico, muestra algunos síntomas poco tranquilizadores. Ciertamente que prácticamente no hay huelgas; indudable, también, que oficialmente, no existe marxismo organizado; tampoco se puede negar que no tenemos paro en sentido estricto, ni hay abiertamente lucha de clases. Pero lo cierto es que padecemos la huelga permanente de un escasisimo rendimiento de la mano de obra; que aunque, oficialmente, no hay partidos marxistas, basta el más pequeño chispazo de anormalidad para que se descubran, según las informaciones de prensa, agentes y manejos comunistas; que si bien no tenemos, en general, parados, como en otras épocas en que se veían cientos de obreros desocupados por la calles, existe, sin embargo, exceso de obreros en muchísimas industrias, obreros, que son ya innecesarios y que están sostenidos de modo artificial en situación de trabajo, lo que viene a representar un paro mitigado y soportado, en definitiva, por la totalidad de los asalariados; que, por último, aunque no haya abiertamente lucha de clases, no es porque los motivos hayan definitivamente desaparecido, sino, por el contrario, ahí se encuentran agazapados esperando la circunstancia favorable que les permita salir a campo descubierto, la lucha sigue latente, mantenida como un rescoldo por la injusta situación que examinaremos.”

A todo ello se une, según el autor arriba mencionado, una concepción dialéctica y conflictivista de la realidad laboral contraria a los presupuestos armónicos implícitos o explícitos en la concepción que sobre el trabajo existía en la época a que nos referimos, la cual desechaba la idea de la existencia de fuerzas conservadoras y revolucionarias en pugna por la consecución del poder, dada la “clara y desdichada situación de desventaja y las penosas condiciones en que se desenvolvía”<sup>22</sup> la clase obrera o proletaria.

La concepción sobre el trabajo está influida por el catolicismo. Partiendo de esta influencia, podemos referirnos al pensamiento Pío XII, y en concreto a la relación que establece entre el trabajo, su modo de realización y la realidad familiar:

“Uno de los grandes beneficios sociales de los tiempos pasados fue aquel trabajo a domicilio, entonces tan común aún entre los hombres, que unía al marido y a la mujer en un mismo trabajo, uno junto a otro, en una misma casa, junto al hogar de los hijos. Pero el progreso de la técnica, el gigantesco engrandecerse de las fábricas y de las oficinas, el dominador multiplicarse de toda clase de máquinas ha hecho hoy del trabajo

doméstico algo muy raro fuera del campo y, muchas veces, ha obligado y separado al uno del otro a los padres y les ha arrastrado lejos de los hijos durante muchas horas al día...”<sup>23</sup>

El trabajo también era considerado como una “prima de seguro total,”<sup>24</sup> dado que, a través del mismo, el trabajador y su familia satisfacían sus necesidades más básicas comprometiéndose a trabajar según sus aptitudes, mientras que, por otro lado, la sociedad se comprometía a asegurar un nivel de vida digno al trabajador y a su familia. Esta concepción se inspiraba también en el pensamiento católico. Desde esta perspectiva, los bienes creados por Dios no habían sido puestos sobre la tierra como premios para los acaparadores dejando al resto de la Humanidad en la más absoluta miseria. La misión fundamental de los mismos era servir para llevar a cabo una de los mandamientos fundamentales del Génesis: “Creced y multiplicaos, poblad la tierra y sometedla...”<sup>25</sup> Dicha consigna sería baldía ante la falta de subsistencia y de vivienda adecuada. Así pues, desde los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia se defiende como postulado básico de la paz social y de la justicia y misericordia cristianas que al obrero se le conceda una retribución que permita el mantenimiento global y seguro de la familia dado que, de esta forma, además de cumplir con una consigna del Creador, el trabajador perdía el miedo a tener hijos a sabiendas de que la sociedad, con la implantación del seguro familiar, aseguraría su sustento más básico.

En el estudio de Severino Aznar<sup>26</sup> sobre el salario familiar se pone de manifiesto la influencia vital que para el autor tuvo el pensamiento papal en la nacimiento del salario familiar. De hecho, en la publicación a que nos referimos se explicita en su introducción que “tiene la aspiración de mostrar a rasgos grandes como unas frases escondidas como violetas fragantes en la Carta del Trabajo de León XIII han dado lugar a un movimiento mundial de doctrina y acción, ha sido como un grito resonante de cruzada amparadora de la familia y ha pasado por estas tres etapas de salario familiar, subsidio familiar y seguro familiar.” Aznar, como uno de los glosadores del pensamiento papal, defiende que una de las ideas más fértiles que se encuentra en la *Rerum Novarum* radica en la idea del salario familiar.

Desde estos presupuestos apologistas del pensamiento papal se defiende que el trabajo se caracteriza por tener dos claras dimensiones; por un lado, la dimensión personal y, por otro, su necesidad. De la primera de las cualidades nace el derecho a proveerse de las cosas esenciales para el sustento de la vida; sustento que en el caso del obrero emana de su jornal y, por tanto, del amparo del derecho natural situado muy por encima de lo convencional y del derecho positivo, lo cual conduce a la conclusión de que el salario “debe ser suficiente para la sustentación de un obrero frugal y de buenas costumbres,”<sup>27</sup> entrando esto en contradicción con la idea de que en la mencionada encíclica papal se defiende el salario familiar.

Por otro lado, sataniza el trabajo de la mujer fuera del hogar, dado que la madre “ha nacido para las atenciones domésticas, atenciones que son la salvaguardia del decoro propio de la mujer y que se adaptan naturalmente a la educación de la niñez y a la prosperidad de la familia.” Desde esta perspectiva, el trabajo de la mujer casada era una maldición para la sociedad entera, empezando por su marido y sus hijos que no podían ser atendidos debidamente. De estos presupuestos parte el propio Aznar para afirmar, concatenando estas aseveraciones papales, que en la *Rerum Novarum* se realiza la apología del salario familiar. “Cuando el Papa pone tales restricciones al trabajo de la mujer en la fábrica, presta un servicio a la sociedad. Pero si los hijos no deben trabajar, y es de la más alta conveniencia que la mujer no trabaje fuera del hogar por un salario, de hecho considera necesario que el obrero gane lo necesario para mantenerlos; defiende y prescribe el salario familiar.”<sup>28</sup>

A pesar de este encuadramiento de la idea del salario familiar dentro de las exigencias del derecho natural y dentro de los ideales de justicia social, en pasajes de otras obras del mismo autor hasta ahora mencionado se encuentra el fundamento del salario familiar no sólo en la justicia, sino también en la caridad cristiana. “Así, como amor a Dios y al prójimo entendió León XIII la caridad, y así los grandes glosadores de la famosa encíclica social. Entendido así, no excluye a la justicia; la supone y la completa. El patrono que ama a sus obreros como hermanos, ¿les negará lo que en justicia les debe?. No presentaba las desventuras de la clase obrera, que eran entonces muy grandes, como miserias fatales que fuera necesario paliar como limosnas, sino como injusticias libremente cometidas o consentidas por los hombres, que era preciso suprimir. Y así, la caridad adquiere su fuerza en la solución de la cuestión social,”<sup>29</sup> porque, así considerada, la limosna entre los católicos no era censurable en la medida en que constituía una forma usual de conversión y de muestra de amor al prójimo, una forma de solidaridad entendida como ley natural y una caridad que se constituía en placer espiritual.

Partía el mencionado Pontífice de la diatriba contra la doctrina económica liberal que concedía total libertad a la relación de contratación entre obreros y patronos. “Según León XIII, ni el patrono puede ofrecer un salario inferior a cierto límite, ni el mismo obrero puede aceptarlo sin faltar a sagrados deberes.”<sup>30</sup> Existía algo anterior a la libre voluntad de las partes; ese algo era la ley natural que, impuesta por Dios, establecía una serie de obligaciones y deberes tanto por parte del trabajador como del empresario. Por parte del primero, la obligación consistía en sustentar a su familia con su jornal; y por parte del segundo, en dar un salario justo que fuera suficiente para el mantenimiento de la familia del trabajador. En definitiva, se establecía un *mínimum* que había de ser respetado tanto por el demandante de empleo como por el empresario.

Sin embargo, según Quetglas, fue el Papa Pío XI el que establecería la relación entre salario mínimo y salario familiar fruto del trabajo: "...sin vacilación alguna y de una manera absoluta y contundente afirma Pío XI que el salario mínimo debido al obrero padre de familia es el llamado salario familiar."<sup>31</sup> Afirma el pontífice en la encíclica *Casti Connubii* que hay que "trabajar, en primer término con todo empeño, a fin de que la sociedad civil, como sabiamente dispuso Nuestro Predecesor León XIII, establezca un régimen económico y social en el que los padres de familia puedan ganar y granjearse lo necesario para alimentarse a sí mismos, a la esposa y a los hijos, según su clase y condición."<sup>32</sup> No era lícito el establecimiento de salarios mezquinos que no permitieran la atención a las necesidades de la familia, según exponía Pío XI, y había de ponerse todo el esfuerzo en que los padres de familia recibieran una remuneración suficientemente amplia para que pudieran atender convenientemente a las necesidades domésticas ordinarias. Y es que los medios de subsistencia de los hombres no podían confiarse a la benevolencia o a la caridad, sino a la justicia de la que emanaba el derecho a una remuneración suficiente para el sostenimiento de la familia.

Lo que aquí se planteaba era la resurrección de una economía moral propia de los albores de la modernidad y, por tanto, el sometimiento y subordinación de la economía a la teología católica. El liberalismo económico había distinguido y separado la economía y la moral, y frente a ello se preconizaba la vuelta a una época en que el influjo de lo religioso inspirara los criterios de acción política y en la que los conceptos de trabajo y salario tuvieran un contenido transido de cristianismo.

### **2.1. El concepto de la propiedad.**

Fundamentalmente, la problemática en torno a la realidad social se centraba en la defensa de la propiedad, lo cual "culminará en una sistematización contrarrevolucionaria, corporativa y gremialista."<sup>33</sup> Y en este contexto, la política laboral del régimen se complementaba, allí donde las prestaciones del Estado no llegaban, con donativos propios de la beneficencia arcaica decimonónica que se pretendía abandonar como explicitación de un nuevo rumbo y de una nueva época que formalmente habría de conseguir la justicia social para los trabajadores españoles.<sup>34</sup>

Desde un planteamiento formal, la producción era obra común de los propietarios de la empresa y de los trabajadores y, por tanto, los salarios representaban el capital de los obreros y los pluses obtenidos por el empresariado habían de repartirse entre el "capital-dinero y el capital-trabajo."<sup>35</sup> Desde esta vertiente, el empresario únicamente debería (¿podría?) detraer los intereses legítimos del capital que empleó en la medida en que los fundamentos de este planteamiento tenían su raíz en criterios de raigambre cristiana, molde sobre el que se sustentaba formalmente

el nuevo Estado nacido de la guerra civil. Y esto se fundamentaba en el principio de que cada hombre fuese propietario y, por tanto, también en la idea de que era tarea del Estado multiplicar y hacer asequibles a todos los españoles las formas de propiedad. Ello suponía establecer el principio formal de que los trabajadores deberían acceder a la propiedad de la empresa por medio de acciones, excepto aquellos que no prestasen “eficaz servicio a la comunidad productora,”<sup>36</sup> meta que en absoluto fue conseguida al nivel que proponían los textos básicos del franquismo social. De ahí la sistemática demanda de ejecución de estos principios que, entre otras cuestiones, legitimaban a los ojos de las autoridades franquistas el propio régimen que sustentaban.

Se partía del hecho de que el hombre no trabajaba sólo para subsistir y de ahí la concepción plasmada en el Fuero del Trabajo de la propiedad:

“El Estado reconoce y ampara la propiedad privada como medio natural para el cumplimiento de las funciones individuales, familiares y sociales. Todas las formas de propiedad quedan subordinadas al interés supremo de la Nación cuyo intérprete es el Estado.”<sup>37</sup>

Era esto lo que amparaba la posibilidad de pedir que las empresas fueran obligadas a facilitar a sus trabajadores el acceso a la propiedad de las mismas mediante la puesta en venta de acciones especiales, lo cual en modo alguno supuso que la población activa accediera de forma masiva a la propiedad de las empresas en que trabajaba y todo quedó en un mero voluntarismo que no llegaría a materializarse nunca.

## **2.2. El antiliberalismo del régimen franquista.**

En torno a esta cuestión, Benito del Pozo afirma que “los años de inmediata posguerra (1939-1942) constituyen lo que se ha definido como etapa fascista, al presentar la ideología oficial elementos tan característicos como el totalitarismo, el antiliberalismo y la supeditación de la economía a los fines políticos, con preferencia por la agricultura y los valores rurales frente a la industria y las pautas urbanas.”<sup>38</sup>

Cuando Franco hacía alusión al rechazo del régimen tanto al marxismo como al capitalismo estaba exponiendo como alternativa a aquel modelo una realidad socioeconómica española articulada por medio de la regulación estatal y del arbitraje de la organización sindical oficial sobre la economía liberal,<sup>39</sup> si bien se puede afirmar que el Fuero del Trabajo compaginaba la fe en el capital y a la vez reaccionaba contra un capitalismo que no se definía de forma radicalmente clara como cabría esperar de la carta magna de la política social del régimen.<sup>40</sup>

No se queda atrás el ministro Girón a la hora de lanzar su peculiar diatriba contra el liberalismo. Para Girón, la Falange nacía con el objetivo de romper un ideal de “vicio y perversión” con que el liberalismo había mantenido maniatado al trabajador español desde la entrada de este virus foráneo imposible de adscribir a la católica tradición española:

“...el liberalismo económico, criatura de la Revolución francesa, había obtenido una amplia cosecha de retórica formalista, y, junto a ella, el espejismo, atractivo, ¡qué duda cabe!, de la libertad y la igualdad. Pero la libertad y la igualdad son conceptos de grueso calibre que, más allá de la encendida o exquisita retórica, no sirven para nada si el hombre no puede aspirar a ellos en igualdad de condiciones con los demás hombres.”<sup>41</sup>

Y es que, según el peculiar punto de vista de Girón de Velasco, el capitalismo dejaba fuera de la solución de los conflictos laborales a los verdaderos protagonistas del enfrentamiento: el empresario y el trabajador (en ambos casos, el productor, en la terminología del régimen). “El liberalismo capitalista, tan celoso del establecimiento de leyes y códigos, quería libertad para hacer lo que le diera la gana y además tener a su servicio el aparato represivo y la fuerza material,” afirmaba Girón.<sup>42</sup>

Por otro lado, el capital era considerado, desde la promulgación de la carta magna del franquismo social, como un instrumento de la producción; pero un elemento más sin superioridad alguna sobre los restantes. El dinero tenía una función social fundamentalmente y ésta era incompatible con el sentido que le concedía el capitalismo “que considera al hombre como un elemento de producción y de consumo, al que se estimula con los bramidos de la publicidad para que cumpla su ciclo, inexorablemente, en servicio de la economía.”<sup>43</sup>

### **2.3. La persistente lucha contra el fantasma del “comunismo.”**

Girón no perdona al marxismo imperante en la II República lo que, desde su punto de vista, fue la persecución a la religiosidad del pueblo español encarnada en lo que el percibe como hostigamiento a la Iglesia católica. Pese a ello, Girón en sus memorias hace gala de una tardía tolerancia con el comunismo impropia de aquel que en el Puerto de los Leones se batía contra las “hordas del marxismo” para defender valores que, como la familia, habían vertebrado secularmente España, de lo cual surgía la necesidad de reeducar y socializar de nuevo a los adolescentes y niños “adormecidos” por los valores de lo que se entendía era la anti-España.<sup>44</sup> En las mencionadas memorias, el autor proyecta una imagen de sí mismo muy condescendiente con los restos de comunismo existente en la España franquista:



“...En el segundo viaje a Cuenca...volvi a reunirme con ellos. Fueron más. Observé tres cosas; así, al primer golpe de vista: que había crecido, como digo, el número de interlocutores, que había satisfacción en algunas caras y rasgos evidentes de mala leche en otras y que entre los concurrentes, por si volvíamos a echar pulsos, habían metido de rondón alguno que ellos suponían invencible. De pronto levanta un tío la mano y me dice:

-¡Oiga! Quiero decirle que yo soy comunista.

-Lo siento por usted: se ha equivocado de camino, si es que espera algo del comunismo.

El hombre se quedó como desarmado. Lo mismo pensó que iba a llamar a la Guardia Civil. Así que le dije:

“-¡Siéntese, hombre! Vamos a ver qué propuesta me trae usted mientras llegan los suyos, ¡que eso va para rato!...”<sup>45</sup>

Esta versión *light* y tolerante sobre el marxismo se complementaba con un temor iracundo contra las fuerzas del comunismo e incluso contra las que, encubiertas por libertades y prácticas democráticas, tenían por objeto potenciar la penetración de ese “virus” en los centros de trabajo españoles.

En octubre de 1940, tras la caída de Francia en manos de las tropas alemanas, existía en el ministerio de Trabajo un gran temor a la actividad de los servicios de inteligencia británicos infiltrados entre los trabajadores españoles, y lo que es más grave, en la estructura productiva o energética estratégica del país. Con fecha 29 de octubre de 1940, el ministro de Trabajo González Bueno ponía en conocimiento del Jefe del Estado las negativas consecuencias que a través de la empresa “La Canadiense” (Riegos y Fuerza del Ebro, S.A.) se estaban produciendo a nivel de aprovisionamiento energético en una zona tan estratégica como Cataluña.<sup>46</sup> “Al amparo de esta Sociedad, se ha venido ejerciendo, por los ingleses adscritos a la misma, en forma encubierta, servicios de información a favor de la Gran Bretaña...que se han acentuado considerablemente en estos últimos tiempos...por parte del BRITISH INTELLIGENCE SERVICE, cuyo principal órgano directivo radica en dicha Empresa,”<sup>47</sup> se afirmaba en el mencionado informe. La principal preocupación de las autoridades encargadas de controlar la masa laboral radicaba en el hecho de que, supuestamente, esta empresa poseía entre sus miembros elementos agitadores e informadores de todas clases, reclutados entre los empleados de aquella empresa o de otras, e incluso de destacados miembros de organismos oficiales

(concretamente de las jerarquías de F.E.T. y de las J.O.N.S). Se refieren a sujetos, en definitiva, que “desenvuelven sus actividades ordinarias en las altas esferas de la política y las finanzas, siendo conceptuados, por tratarse de personas de derechas, como incapaces de cometer atentados contra el régimen del Nuevo Estado Español.”<sup>48</sup>

Ahora bien, lo verdaderamente preocupante de las supuestas actividades de espionaje y alteración del orden social de los británicos por medio de “La Canadiense” era el hecho de que se albergara y se cobijara en su seno, con objetivos no confesables, a “elementos de marcada tendencia marxista y separatista” cuyos objetivos habían de ser la desestabilización del régimen franquista por medio de la alteración del orden en el caso de una posible ruptura de relaciones con la Gran Bretaña:

“Se tienen referencias, de fuente autorizada, de que en un momento determinado, que muy bien pudiera ser el de una posible ruptura de relaciones de España con Inglaterra, se proponen los elementos técnicos extranjeros que se hallan al frente de todas las instalaciones vitales de las centrales y fábricas, ayudados por el numeroso personal de tendencia marxista y separatista que trabaja en la compañía, la realización de actos de sabotaje, para la inutilización de las mismas, lo que supondría un enorme perjuicio para nuestra potencia militar y económica. Se sabe incluso que en las centrales de producción de energía en las que, durante el dominio rojo, situaron cargas explosivas con el fin de volarlas, a la llegada de las tropas nacionales, piensan establecerlas de nuevo en la misma forma, para llegar al fin que entonces no lograron.”<sup>49</sup>

La parafernalia anticomunista del franquismo (también del franquismo en su vertiente más social) no conllevaba, por lo menos en este caso, la acusación directa sobre los elementos supuestamente marxistas que operaban al amparo del servicio secreto británico. Estos supuestos elementos marxistas se dedicarían a realizar oscuras operaciones financieras destinadas a autofinanciarse, así como a repartir folletos redactados en español en los que se hiciera propaganda en favor de Inglaterra. Sí se puede afirmar que aparecen en el informe al que nos referimos tres nombres de renombrada importancia dentro del catalanismo. Nos referimos a Joaquín Maluquer Nicolau, hijo de Maluquer y Viladot y a Diego Montaner Castaño, hermano de Antonio Montaner (miembro del Partido Radical), “alto grado de la Masonería.” Otro destacado miembro del catalanismo que aparecía citado era Francisco Cambó. Aparentemente el antiguo dirigente de la Lliga Regionalista de Cataluña había tomado parte en la operación de venta que “La Canadiense” estaba intentando llevar a cabo con la “Societe Financiera de Transports et Entreprisses” (S.O.F.I.N.A.) como parecía a raíz de sus asiduos viajes de Bruselas a Portugal:

"La intervención de Cambó en ese asunto está justificada por tratarse de uno de los primates de la C.H.A.D.E., que como es sabido es filial de la antedicha S.O.F.I.N.A., teniéndose conocimiento, incluso, de que el mismo redactó la escritura de compra-venta, cuyo documento, dadas las excepcionales condiciones técnicas, financieras y políticas que concurren en su realización, es al decir de los enterados, un verdadero modelo tanto jurídico como de sagacidad en el fin perseguido."<sup>50</sup>

El marxismo, denostado por Girón, perdía, en el marco del estado nacional-sindicalista promovido por el ministro de Trabajo, su principal arma: la huelga. En esta visión apocalíptica de una España agobiada por los ataques del marxismo, éste representaba la máxima amenaza para el régimen y para su obra sociolaboral. El falangismo que Girón representaba lucharía contra él, tanto desde el ámbito normativo como desde la acción directa. La ofensiva contra el maquis tuvo como protagonistas no sólo a las fuerzas de seguridad del Estado sino también a voluntarios falangistas para operaciones especiales que recibían los elogios del "león de Fuengirola" y de periodistas más o menos adeptos al régimen:

"Tiempo adelante, el excelente periodista y escritor Emilio Romero ganaría el Premio Planeta con *La paz empieza nunca*, en la que relata la impresionante intervención de un grupo de falangistas voluntarios y de guardias civiles en una de las operaciones definitivas contra el hostigamiento que el marxismo se empeñaba en mantener a la paz de España. Lo que probablemente no sabían los maquis ni los marxistas, ni la resaca de la revolución y las guerras que se unieron a la condena de la O.N.U. para llevarla hasta sus últimas consecuencias, fue que por aquellos años Franco dio cuenta al Consejo de ministros de una oferta de Stalin al Jefe del Estado español para establecer relaciones con España. Solicitaba un determinado número de consulados, previstos estratégicamente, y, a cambio ponía en manos de Franco la liquidación física, el exterminio de cuantos comunistas estorbasen. Este hombre -dijo el Caudillo en el Consejo- no sabe que para nosotros antes que comunistas son españoles."<sup>51</sup>

En este esquema maniqueo en el que el marxismo venía a materializar las esencias del maligno sobre las superficie de la católica España el propio Girón se atribuye una perspicacia poco común cuando afirma que, estando en Roma para la canonización de Pío X, tuvo el detalle de informar al futuro Pablo VI (cardenal Montini por entonces) de los peligros que suponía para la Iglesia católica española (concretamente por medio de la H.O.A.C.) la entrada de elementos marxistas más o menos camuflados y de las consecuencias negativas que ello supondría para un régimen que tenía en la Iglesia católica uno de sus principales apoyos.<sup>52</sup>

La paranoia antimarxista provocaría (sorprendentemente) que algunos acusaran a Girón de socialista. Bajo el punto de vista del hombre que dirigía los destinos del ministerio de Trabajo en la época que se pretende investigar, su labor al frente de dicho ministerio estuvo presidida por el deseo de que ir más allá de los objetivos propuestos por el socialismo, “imprimiendo en ellos una visión cristiana que no podía ignorar todos los valores espirituales del hombre.”<sup>53</sup>

Entre las objeciones que Girón ponía al comunismo estaba lo que calificaba como carácter asistencial de sus instituciones de protección social similar al que criticaba en los primeros seguros obreros creados en los Estados capitalistas. “Como en tantas cosas el capitalismo y el socialismo vienen a coincidir en este extremo,”<sup>54</sup> afirmaba Girón en su diatriba contra el comunismo.

La labor de lucha contra el marxismo y contra su infiltración en las fábricas y talleres españoles carcomía la mente del ministro de Trabajo. El marxismo y su infiltración en el ámbito laboral español eran el enemigo a batir. El proyecto para la creación de la *Sección E*<sup>55</sup> enmarcada en el Frente Social del ministerio de Trabajo fechado a finales de agosto de 1943, da cuenta de la anterior aseveración. Las balas no sólo tenían su lugar en el campo de batalla; en las factorías y empresas españolas la guerra no había acabado, sobre todo en estos momentos de la II Guerra Mundial en que el gigante alemán había comenzado a declinar y la guerra se tornaba cada vez más rápidamente a favor de los aliados. Entre enero y febrero de 1943 las tropas alemanas eran masacradas en Stalingrado; entre el 10 de julio y el 17 de agosto del mismo año los norteamericanos controlaban la isla de Sicilia; el 25 de julio Víctor Manuel III destituía a Mussolini y lo detenía a petición del Gran Consejo Fascista, etc. En este contexto, se erguía más poderoso que nunca el fantasma del comunismo internacional acechando en las fronteras de España y, cuando no, trabajando como una tercera columna en el interior del país en sus fábricas, en sus talleres, en sus mercados o en sus tabernas.

En este contexto el régimen tenía miedo de lo que pudiera suceder sin el apoyo de sus aliados alemanes e italianos. De aquí parte la creación de la denominada *Sección E*. No bastaba únicamente con la represión policial contra los elementos infiltrados por el comunismo en el territorio nacional; era necesario combatir individualmente la penetración de unos elementos foráneos que, aprovechando la “permeabilidad” del sistema, inculcaban en las masas trabajadoras el virus del marxismo.

El documento<sup>56</sup> al que nos referimos, tiene como fecha indicativa la del día en que el Subsecretario de Presidencia, Luis Carrero Blanco, encarga archivar el documento en cuestión. La fecha, en concreto es la del 1 de octubre de 1943. Probablemente, por lo vidrioso del tema,

el documento fue elaborado por el propio Girón, o por lo menos con su visto bueno fue enviado al Subsecretario de Presidencia, el cual haría llegar aquél al Jefe del Estado.

Enmarcado en el Frente Social, cuyo objetivo era la defensa de los principios falangistas del régimen, se partía de la necesidad de fomentar la adhesión de las masas obreras en un momento en que se constataba el derrumbamiento efectivo de los ejércitos alemanes en Rusia. En este contexto se buscaba a toda costa despertar la excitación en favor de la patria y, por otro lado, defenderla de los elementos que pudieran perturbar el orden laboral y la "paz social" que el franquismo tenía como meta esencial. La incorporación de las masas obreras a la fe del falangismo era el mecanismo por el cual se pretendía conseguir esa ansiada "paz social," de lo cual se deduce la ausencia de fe en las masas de trabajadores españoles por su escasa confianza en el estado franquista y en sus logros sociales. Todo ello requería una ofensiva de tipo propagandístico fundamentada en cada uno de los logros que el régimen pudiera ir poniendo sobre la mesa. Los mecanismos para la consecución de tal objetivo serían los medios de difusión tradicionales, es decir, la prensa o la radio, pero paralelamente (y aquí se halla lo novedoso de este proyecto del que hasta el momento desconocemos su grado de aplicación) en la acción sobre el trabajador de forma individual, porque "la máxima eficacia reside en el elemento hombre, en la agitación directa, en la persuasión personal, a la que han tenido que acudir cuantos fueron capaces de cambiar la ideología de los pueblos."<sup>57</sup>

Estos son momentos, como ya he mencionado, de miedo, de un profundo terror a las consecuencias que en el interior de España pudieran deparar los acontecimientos acaecidos en los campos de batalla europeos. Las autoridades franquistas eran conscientes de que España no era falangista. Se era consciente de que lo que durante tres años se había logrado ganar en el campo de batalla había que ganarlo de nuevo, sobre todo en aquellos momentos, en el frente de batalla social. Y más concretamente, se era consciente de que, sin modificar las voluntades individuales de cada uno de los trabajadores españoles, el riesgo de declive del franquismo comenzaría de un momento a otro fomentado por la coyuntura internacional. Por tanto, era inexcusable modificar el credo de los trabajadores en un sentido falangista o, en el peor de los casos, mantenerlos bajo control. Su fe actual era peligrosa para el Estado; la doctrina que se suponía generalizada entre los trabajadores españoles (a la luz del documento, la percepción de las autoridades era que aquella no era la falangista) no coincidía con el ideario del franquismo social y, por tanto, aparte de otros mecanismos, era necesario luchar contra ella desde el ámbito de la convicción y de la modificación de las opiniones. Con ello no se hacía más que copiar las tendencias de todo Estado autoritario y los planteamientos de "los técnicos revolucionarios del mundo en la conquista de las masas."<sup>58</sup>

Los objetivos que habrían de cumplir las escuadras de la *Sección E* eran varios y diversos. Entre ellos, conseguir información sobre el desenvolvimiento de los ambientes obreros, contrarrestar lo que se calificaba como bulos o rumores de los enemigos de España, conocer y transmitir a las autoridades la acogida que tenían las nuevas leyes promulgadas por las autoridades del régimen (sobre todo en lo referente a lo promulgado desde el ministerio de Trabajo), crear un ambiente favorable de cara a preparar el camino a las futuras realizaciones de las autoridades en cuanto a medidas sociales se refiere y difundir la marcha y la dirección de las medidas llevadas por el gobierno.

Esta especie de servicio de espionaje de lo social tenía como meta luchar contra los desestabilizadores del régimen desde (por decirlo de alguna manera) “las cloacas” a las que el mundo oficial no tenía capacidad para llegar. Concretamente se referían a este aspecto de la siguiente forma:

“La eficacia de las Inspecciones de Trabajo se refuerza con una red útil para localizar desconocidas transgresiones de la Ley social y bajo otro punto de vista en los recovecos del mundo del trabajo en íntimos ambientes obreros donde el enemigo puede actuar clandestinamente, donde lo oficial no tiene posibilidades de llegar, nuestras escuadras, utilizando su misma táctica silenciosa, son capaces para ganarle batallas decisivas y vigilar sus movimientos ayudando en su servicio voluntario a nuestros organismos de información.”<sup>59</sup>

En este contexto, aunque previo a la formulación expresa de este esquema operativo se entienden informes como el referido a la actividad comunista en el sector de los ferrocarriles vallisoletanos:

“...en los talleres de los ff.cc. del Norte, en donde trabajan unos tres mil obreros, entre ellos noventa represaliados por la Compañía (todos catalanes) se ejerce una discreta y creemos que eficaz vigilancia, por medio de confidentes de confianza, encuadrados entre ellos...”<sup>60</sup>

El esquema organizativo de estas escuadras de combate social enmarcadas dentro de la *Sección E* tenía las características propias de una unidad del ejército; en este caso, una unidad de combate social cuyo objetivo era atacar al enemigo, pero no en las trincheras como ocurrió desde el 18 de julio de 1936, sino en los bares, en las tabernas, en los talleres y, en definitiva, en cualquier lugar en el que hubiera obreros susceptibles de asimilar una doctrina contraria a la del régimen.

La *Sección E* estaba integrada por escuadras compuestas de 10 hombres y un jefe. Éstos eran elegidos entre miembros voluntarios de la Falange, “preferentemente obreros, introducidos en fábricas, talleres y lugares de reunión de trabajadores.”<sup>61</sup> Las escuadras se dividían en tres grupos que atendían a servicios de naturaleza diferente. Por un lado, operaba el servicio de información social; por otro, el de ofensiva proselitista y, en tercer lugar, existía el denominado grupo especial.

Exponemos a continuación las metas que tenían cada uno de los grupos. En primer lugar, el grupo de información social tenía como objetivos primordiales:

- 1.-controlar las reacciones que la legislación social promulgada por el ministerio de Trabajo tuviera entre la población trabajadora.
- 2.-la captación de comentarios, impresiones, dificultades que presentara en el ámbito real la aplicación de la norma.
- 3.-conocer la existencia de maniobras para desvirtuar los efectos protectores de la legislación social.
- 4.-la captación de los argumentos esgrimidos por los propagandistas enemigos.
- 5.-descubrir las inquietudes sociales concretas y las modificaciones propugnadas por los trabajadores en torno a la realidad laboral que les rodease.
- 6.-el estudio de las consecuencias que la situación internacional determinase en relación con el movimiento social entre los trabajadores.
- 7.-advertir el ambiente político y sus oscilaciones.
- 8.-averiguar en cada sector laboral la naturaleza singular del “enemigo,” concretamente localizar con claridad a sus cabecillas “rojos o amarillos,” anotando su nombre y domicilio.
- 9.- descubrir (éste era un aspecto esencial) a los jefes naturales en cada grupo o unidad de trabajo.

El esquema aquí planteado era el propio de un Estado autoritario y policial en un contexto de temor ante el rumbo que pudiera tomar la situación internacional y, por tanto, ante las consecuencias que pudieran derivarse en el orden de la política y la seguridad interior. En definitiva, se puede afirmar, que lo que existía esencialmente era miedo. Lo que influía de manera determinante en la explicitación de este proyecto era el pánico y el sobrecojimiento ante lo que se le podía venir encima si los centros de trabajo se volvían en contra de las autoridades del ministerio de Trabajo y en contra del régimen. El pavor de personajes como Girón de Velasco debía ser proporcional a los mecanismos de espionaje soterrados que se mantenían en los centros de trabajo y en sus alrededores en busca del soplo, de la delación o de la confidencia de los obreros. Es por ello que las escuadras actuaban como unidades separadas sin tener conocimiento ni relación entre ellas. En función de esta táctica de acecho por parte de las

autoridades del ministerio de Trabajo; en función de esta obsesión por la investigación y la indagación de las más mínimas muestras de desafecto al régimen, si algo queda claro es que la confianza que hombres como Girón tenían en el mundo del trabajo y en los trabajadores españoles estaba bastante alejada de lo que sus discursos y sus escenificaciones parecían mostrar. Se tenía miedo a los trabajadores españoles como posible motor de un cambio en la orientación del régimen ayudado por la coyuntura internacional.

El camino para mantener el *statu quo* comenzaba por controlar las reacciones de los trabajadores ante las medidas desarrolladas por el ministerio. Era necesario recoger cualquier diálogo entre los obreros que permitiera sacar conclusiones claras a la superioridad sobre la acogida de las medidas gubernamentales. Era necesario luchar contra el "enemigo" adelantándose a sus movimientos, conociendo sus argumentaciones en torno a aquellas realizaciones sociales del régimen; había que procurar que los logros sociales del régimen no se vieran afectados por el intento de estos elementos subversivos por desnaturalizar lo que de positivo hubiera en aquellas medidas.

Hay que destacar dos elementos más. Por un lado, el interés por tener conocimiento del ambiente político entre los trabajadores en función de los acontecimientos internacionales y, concretamente, en paralelo a la forma en que se sucedían los acontecimientos en el escenario bélico europeo. Y en segundo lugar, la obsesión por conocer a los líderes del "enemigo," fueran estos comunistas o amarillos, término con el que se denominaba a los miembros de las organizaciones sindicales o seudosindicales controladas por los empresarios con el objetivo de obstaculizar la labor del sindicato oficial. Evidentemente, el mayor grado de obcecación se cernía sobre los calificados como "rojos," sobre los comunistas. Y unido a este afán por controlar a los líderes del enemigo destaca el deseo desmedido por someter a las individualidades influyentes dentro de las unidades de trabajo; por controlar y conquistar la voluntad de estos líderes naturales en cada sección de la fábrica y del taller.

El segundo grupo dentro de la escuadra social (el denominado grupo de ofensiva proselitista) tenía como objetivo fundamental el de constituirse en agente activo de la propaganda social falangista en el centro de trabajo en el que se encontrase. Para realizar esta función propagandista había de celebrarse semanalmente una reunión presidida por el jefe de la escuadra para ser adoctrinados en torno a la teoría y las directrices falangistas. Para ello se hacía uso de resúmenes orientativos que sintetizaban el ideario y el credo joseantoniano. Supuestamente, estos evangelizadores de las turbas carcomidas por el "enemigo" habían de ser hombres poco vehementes en la defensa de su fe falangista; habían de parecer indiferentes e, incluso, enemigos de los idearios de la Falange. "Cada hombre debe actuar sin mostrar un fanatismo falangista,"<sup>62</sup> se afirmaba. Su función esencial era la divulgación y expansión del



proyecto social falangista de una forma disimulada y, en cierto modo, furtiva. El agente de propaganda había de caracterizarse por su habilidad para el sometimiento de las voluntades por medio de la convicción, sin que por ello su entusiasmo en la defensa de los principios falangistas le mostrase como un topo de la organización oficial. En el taller, en los descansos, en las tabernas, su función era siempre la misma: propagar las bondades del régimen y las ventajas concedidas a los trabajadores en el Nuevo Estado. Para llevar a cabo esta misión nada se escapaba a las autoridades; el agente recibiría por escrito quincenalmente las consignas que habría de lanzar y verter en forma de noticia, de versión, de rumor o de cualquier otra forma posible. Esta consigna que habría de divulgar sería corta, clara y sencilla; por tanto, el escuadrista no habría de quitar ni añadir nada a la consigna recibida.

El tercero de los grupos, denominado especial, tenía como misiones las siguientes que a continuación enumeramos:

- 1.-la captación para el credo falangista de las individualidades o jefes naturales más influyentes entre sus compañeros de trabajo. "Extremo muy importante,"<sup>63</sup> se afirma.
- 2.-la inspección o vigilancia de las actividades de los grupos anteriormente citados.
- 3.-la cobertura, en caso de baja temporal, de alguno de los componentes de los grupos de información social y ofensiva proselitista.
- 4.-la confrontación de informes de los otros dos grupos.
- 5.-la ayuda en casos excepcionales al grupo de información o al proselitista.
- 6.-el cumplimiento de cualquier misión que, por la falta de movilidad de los otros dos grupos, no pudiera ser realizada por sus componentes.

Este grupo estaba formado por los miembros considerados como mejor preparados, "más expertos, seguros y activos." Su norma de actuación sería la individual y su principal característica había de ser la flexibilidad. Ésta permitía a la autoridad de la *Sección E* el control de un grupo de reservistas para misiones que tuvieran "dificultades imprevistas, la posibilidad de efectuar ensayos de nuevas tácticas en la misión general y la actuación en sectores aún desguarnecidos por las escuadras de ofensiva y proselitismo."<sup>64</sup>

Dentro de cada uno de los tres grupos que formaban las escuadras de la *Sección E* se trabajaba de forma individual y colectiva. El trabajo individual llevaba aparejado la obligación de anotar sistemáticamente las impresiones recogidas por los escuadristas y transmitir un informe cada tres días al jefe de la escuadra, el cual había de resumirlos en un parte que elevaría a las autoridades superiores. Sólo los hechos de trascendental importancia eran comunicados inmediatamente. Este servicio individual, en aquel lugar en el que el escuadrista desarrollara sus actividades cotidianas, tenía el carácter de permanente. Es sumamente significativo la segunda

forma de trabajo. Nos referimos al trabajo colectivo. Se desarrollaba éste de la siguiente forma: el jefe de escuadra establecía unos días y horas en los que, en un sector previamente determinado, los tres grupos desarrollarían sus funciones “en la calle, bares, tabernas y centros de reunión obrera...En casos excepcionales se actuará por elementos de tres hombres o por parejas con conocimiento del mando de la Sección, quien en este servicio recorrerá personalmente los sectores para recibir de cada Jefe la novedad.”<sup>65</sup> A continuación, el jefe debía dar un parte escrito dentro de las doce horas siguientes al servicio.

Misión general de todos los miembros de la escuadra era la búsqueda de nuevos elementos capaces de formar nuevas escuadras. La violencia contra el “enemigo” era una opción aceptada en situaciones en las que dicha actitud se calificaba como “justificable.” Para este tipo de situaciones en las que los escuadristas se veían en peligro existía una especie de servicio de guardia y un teléfono también de guardia que tenía cuyo fin era socorrer a los escuadristas en circunstancias peligrosas para su integridad física.

Todo ello viene a darnos una idea del amplio grado de preparación y de la minuciosidad con que se concebía este proyecto. Pese a la escasa concreción del documento que sirve de base a esta exposición, la articulación de mecanismos violentos y de socorro (¿o de ataque?) explicita el hecho de que, dentro de la estrategia de captación de voluntades, también se consideraba la violencia como estrategia en esta lucha contra el “enemigo,” puesto que no se trataba más que de prolongar el maniqueísmo de las trincheras al ámbito laboral de la vida civil. La guerra, por consiguiente, seguía adelante; ahora en otro escenario. Así pues, las tácticas empleadas no podían obviar la existencia de mecanismos coercitivos que hicieran uso de planteamientos y maniobras violentas.

La disciplina y el respeto a la autoridad, en este contexto de lucha contra el “enemigo,” tenía las características propias del rigor, la austeridad, la exigencia y la intolerancia espartana. La guerra civil continuaba en cierto modo. “La disciplina no será rogada sino impuesta,”<sup>66</sup> se afirmaba en torno a la forma de actuación de las autoridades de la *Sección E*. De igual manera, se prohibía toda conversación sobre las jerarquías del Movimiento entre los escuadristas.

Este marco de lucha contra todo lo que no fuera adhesión inquebrantable al sistema puede servir de guía sobre la prolongación de la “cruzada” en tiempos de supuesta paz. Como se ha mencionado, la guerra no había terminado; la lucha contra el fantasma del comunismo no llegó nunca a su fin. La calificada como ideología desestabilizadora y disgregadora por excelencia era una continua obsesión para el régimen y para el ministerio de Trabajo más concretamente. En consecuencia, aparte de consideraciones de tipo teórico, es lógico que el enfrentamiento

perpetuo contra aquel se plasmara por medio de mecanismos como el anteriormente expuesto, lo cual denota la sensación de interinidad que se percibía dentro del régimen.

#### 2.4. La influencia del catolicismo en el mundo del trabajo.

El catolicismo constituyó un factor básico en la propagación formal de la política social defendida por Girón en la medida en que la Iglesia era considerada como un soporte básico del régimen. Factor que Raul Morodo señala que se retoma del pensamiento de Acción Española,<sup>67</sup> y que supone la primacia del pensamiento católico integrista y la revalorización del tradicionalismo católico paralelamente a la desvalorización de los otros supuestos alternativos. "La nacionalización católica de la cultura significará, así, el rechazo de todos aquellos movimientos intelectuales europeistas -y, por consiguiente, considerados como "antiespañoles"- y la vuelta a los valores tradicionales teológicos de los siglos XVI y XVII"<sup>68</sup> que son los considerados como propios de España frente a la anti-España y sus "virus" bajo la forma del materialismo, el comunismo, el liberalismo, etc.

El catolicismo, en lo que se refiere a la política social realizada desde el ministerio de Trabajo, no fue un bloque monolítico caracterizado por una adhesión incondicional de todos y cada uno de sus miembros. Ya en los años cuarenta dieron muestras de un cierto carácter reivindicativo sin por ello poner en duda la legitimidad de un régimen que había salvado a la Iglesia española de la denominada "*barbarie comunista*." A mediados de los años cuarenta algunos obispos comenzaron a publicar pastorales sobre temas sociales en las que se condenaba la mala situación de los obreros del campo así como los abusos e injusticias que se cometían con ellos, dada la estructura económica que soportaba el régimen del general Franco. Estos documentos culminaron en la primera pastoral social colectiva de los obispos de Andalucía oriental de octubre de 1945, en la que recomendaban asociaciones distintas para los trabajadores y para los empresarios en sustitución del sindicato vertical oficial. Resucitando el espíritu de las tradiciones gremiales y sobre todo de las cofradías, los sindicatos inspirarían formalmente sus actividades en los "principios y en las prácticas de la moral católica a que se refiere el Fuero del Trabajo."<sup>69</sup>

Para el ministro Girón, que personifica la política sociolaboral del período que abarca esta investigación, el nacional-sindicalismo (que él identifica con la obra del franquismo) tenía por objetivo recuperar al hombre sacándolo de la inseguridad y la indigencia fruto de una realidad social colmada de conflictos y de pobreza. En esto consistía la misión salvadora del franquismo y más concretamente la tarea del ministerio de Trabajo. Y es que, según Girón, Dios había concedido al hombre el libre albedrío, "por eso una corriente ideológica que nacía de las fuentes de nuestra más depurada tradición, tenía que arrancar de esta raíz teológica."<sup>70</sup>

Este mismo carácter católico había sido el elemento fundamental que había logrado la “salvación” de España de la “persecución marxista.” El “atroz martirologio sufrido por la Iglesia católica”<sup>71</sup> durante la guerra civil había movilizó a la población, y el estado nacional-sindicalista, del que Girón hace una apología apasionada, respondía con su fundamentación católica al sentir popular que secularmente había vertebrado el territorio español. Quizás por ello, cualquier movimiento en “falso” de elementos católicos tenía una desproporcionada repercusión en la medida en que dichos indicios podrían desapuntalar al régimen y dejarle sin uno de sus soportes fundamentales.<sup>72</sup> En torno a la fundamentación espiritual de los principios sociolaborales del franquismo el propio Girón afirma en sus memorias lo siguiente:

“Nuestros objetivos, expresados aquí a grandes rasgos, calificados a menudo de demagógicos o utópicos, quedaron respaldados por unas realizaciones que nada tuvieron de ficticio; y el hacer una relación de ellos responde a mi deseo de subrayar que todos nuestros logros sociales no fueron fruto de la gestión más o menos acertada del ministro de Trabajo, sino de la fe y aplicación de unos principios que, si muchos llamaron socialistas por el afán de liquidar la lucha de clases, por la ambición por lograr la justicia social y por la defensa de los intereses de los obreros, nosotros pretendimos que fueran más allá de los objetivos propuestos por el socialismo, imprimiendo en ellos una visión cristiana que no podía ignorar todos los valores espirituales del hombre.”<sup>73</sup>

En esta línea de imbricación de la política social del régimen franquista y de subordinación formal o real a los principios del catolicismo social una parte de la Iglesia oficial intentaba jugar un papel importante no sólo en la consecución del bien espiritual de los trabajadores españoles sino como elemento al servicio del Estado cuyo objetivo también era aunar esfuerzos por medio de sus mensajes para la consecución del orden social tan deseado por el franquismo. En esta línea de actuación, la Asesoría Eclesiástica de la Organización Sindical era consciente de que los aparatos del régimen requerían que se ejecutase dicho papel a la perfección en busca del bien común de los españoles:

“En este plan de colaboración no nos corresponde la parte principal, sin que esto quiera decir que nos desinteresamos un tanto de ello, pues el bien moral y religioso de los productores repercute muy ponderablemente en el orden social que persigue nuestra Organización Sindical.”<sup>74</sup>

Nacida en abril de 1944, la mencionada Asesoría Eclesiástica surgía con la aprobación de la Santa Sede y con el objetivo de desarrollar la acción religiosa de la Iglesia y dar orientación cristiana a la Organización Sindical.<sup>75</sup> El objetivo de dicha institución era realizar una labor de

propaganda, “llevar la voz de Cristo” a las empresas y a las industrias como un elemento más de control de la fábrica y de sus empleados, sin olvidar la labor de las misiones sociales y cátedras ambulantes en el campo y en el mar. Las funciones de los asesores eclesiásticos, de los cuales había alrededor de 60 en el año 1949, se resumen de la siguiente forma:

“...imprimir...en los sindicatos el sello católico imbuyendo conducta y espíritu cristiano ...por los medios normales de acción sacerdotal. En suma la Asesoría Eclesiástica es el órgano de que se sirve la Iglesia para la acción religiosa y la orientación social cristiana en el seno de la Organización Sindical.”<sup>76</sup>

No fue uniforme a lo largo del tiempo la postura de los sectores católicos y a mediados de los años cincuenta se palpaba en las manifestaciones solemnes de algunas jerarquías de la Iglesia algunas disidencias con el régimen. Algunos elementos veían injusta la permisividad del gobierno en cuanto a que, por la vía de los hechos, generaba una situación lesiva para los intereses de los trabajadores en relación a la protección existente para los elementos patronales. Las opiniones de monseñor Morcillo, obispo de Bilbao, del Arzobispo de Valencia o de Tarragona indicaban a la autoridades del régimen que “el obispo de Málaga, Herrera, había hecho escuela” lo cual quería decir que “la reacción del Episcopado español, parecía querer dar la razón a los obreros en contra de la opinión sostenido por los empresarios.”<sup>77</sup>

Los problemas que puntualmente fue teniendo el régimen con los sectores católicos no invalidan el hecho de que los fundamentos teóricos del franquismo partían en parte del catolicismo y que, consiguientemente, los ámbitos de lo laboral y lo social también se vieron inspirados por los principios propios de la Iglesia católica independientemente de que el resultado final de esta afinidad entre el Estado franquista y la Iglesia católica diera resultados más o menos positivos para la clase trabajadora española.

### **2.5. La autarquía como marco del mundo del trabajo.**

El periodo de la Historia de España que abordamos en esta investigación se caracteriza por unos niveles de industrialización por habitante bajos en relación a las tendencias que inmediatamente le precedieron. Este periodo de la Historia española que denominaremos autárquico<sup>78</sup> se caracterizó por tener sus antecedentes en los años finales de la Restauración. Sobre sus precedentes señala G. Delgado que la autarquía fue la expresión más radical del nacionalismo económico poniendo fin a un periodo de crecimiento lento pero sostenido que se prolongaba desde el último tercio del siglo XIX y primero del XX sin aportar por ello un rasgo claro de originalidad.<sup>79</sup>

De igual manera, la guerra civil favoreció la formación de la organización industrial que fue la base del futuro estado autárquico lo cual provocó que, finalmente, las autoridades españolas se decantaran por un modelo de intervención directa por medio de la creación del I.N.I. y de las reglamentaciones laborales<sup>80</sup> cuyo objetivo era fijar las condiciones mínimas que habían de servir de base legal para el mundo del trabajo. Se tenía una fe absoluta en los resultados de la política autárquica de cara a dotar al país de "independencia económica en el mundo,"<sup>81</sup> apareciendo dicho planteamiento ante los ojos de los artífices de la política social del régimen como la panacea que iba a aliviar todos los males de España conocidos y por conocer pese a lesionar los intereses de los trabajadores poniendo su destino en manos del mundo empresarial:

"Con un plan autárquico, es decir, haciendo a todos los individuos partícipes de la gran colmena nacional y viviendo en un plan de austeridad, no de pobreza, suprimiendo servicios superfluos y organizando la producción a base, no de dar cabida al mayor número de obreros, sino por el contrario, de permitir al empresario que pueda movilizar la mano de obra y prescindir de la que no le sea necesaria pero siempre conservando los derechos de los obreros -lo que hoy día no es posible a causa del paro obrero, pero sí lo será a base de nuestro plan-, sería tan formidable nuestra potencia creadora, que sus resultados sobrepasarían a las previsiones más optimistas."<sup>82</sup>

La autarquía adoptada vertebró la política económica española durante dos décadas, hasta la puesta en marcha del Plan de Estabilización. En torno a ella Payne realiza la siguiente reflexión:

"La política era relativamente arbitraria y con frecuencia improvisada, variaba mucho de un sector a otro y no había ninguna coordinación. Tendía a minimizar el papel del mercado internacional y las exportaciones mientras que daba prioridad a las industrias de sustitución a las importaciones. Los controles estatales determinaban los precios y los salarios nominales en casi todas las categorías y la política estatal reforzaba la estructura existente de pequeñas empresas a base de créditos, por muy poco rentable que fuera la compañía."<sup>83</sup>

Es más, se puede afirmar que en sus primeros momentos se caracterizaba por el simplismo de las nociones de algunos personajes del régimen de los que en buena medida iba a depender el bienestar de los españoles. Sirva de botón de muestra la apología implícita de la sociedad rural y de la fisiocracia representada por Quesnay en la siguiente valoración de Carrero Blanco en pleno período autárquico:

“...persiguiendo como primer objetivo la anulación del déficit de la balanza comercial, la posibilidad de la máxima autarquía militar y la mejora de la vida de los españoles, llevando como objetivo el convertir a España en una nación de magníficos pueblos, reduciendo al mínimo los grandes centros demográficos inútiles que, como Madrid, son una carga y una servidumbre en tiempo de paz y una complicación en caso de guerra.”<sup>84</sup>

La incidencia y el gran peso del I.N.I. ha de entenderse partiendo de lo que fue la manifestación programática de reforma social del franquismo. Nos referimos, por supuesto, al Fuero del Trabajo.<sup>85</sup> En éste, la Declaración XI refleja el modelo que supuestamente se pretendía desarrollar desde el ámbito del gobierno franquista en orden a potenciar la producción. En un Estado intervencionista, la referencia a la bondad de la iniciativa privada (Declaración 6-XI) aparece transida de un cierto halo dubitativo. Lo privado no aparece como el *summum*, sino simplemente como una “fuente fecunda” de beneficios para España. La creación del I.N.I. adquiere pleno sentido desde el momento en que en la Declaración 1-I se establece la posibilidad de que el Estado se constituyera en empresario en circunstancias y sectores en que la iniciativa privada estuviera ausente. Sin embargo, las tendencias monopolizantes del I.N.I. estuvieron en las antípodas de los supuestos defendidos en el mencionado fuero, en la medida en que el franquismo dio rienda suelta, al menos en parte, a uno de los males que pretendía evitar: la competencia desleal.

“La autarquía se concibió, pues, como una manifestación del nacionalismo económico, sin que ello resulte una novedad del régimen franquista” dado que España “tenía ya una larga tradición, en la que confluían doctrinas diversas (regeneracionismo, maurismo, nacionalismo de entreguerras y fascismo).”<sup>86</sup>

Esta larga tradición de intervencionismo en contra del paradigma de la libre competencia, unido a factores como la influencia de un contexto internacional sumido primeramente en la guerra y posteriormente en el aislamiento momentáneo de España confluyeron, junto a las tendencias desarrolladas durante la guerra civil, a conformar un panorama intervencionista que se desarrollará, con más o menos intensidad, a lo largo de la década de los cuarenta y gran parte de los cincuenta en la forma en que ahora exponemos. Por tanto, la guerra civil y el ansia por centralizar la toma de decisiones y el control de los recursos estratégicos más necesarios para el conflicto armado influyeron en una estrategia de industrialización en la que la sustitución de importaciones constituyó el paradigma central de la misma, desvinculando el crecimiento industrial interno del comercio con los países extranjeros, haciendo uso de una estrategia proteccionista y teniendo en mente la reconstrucción de una economía destrozada por la guerra civil.<sup>87</sup>

Tal era el afán por prescindir del exterior para autoabastecerse de los productos más básicos, que a mediados de los años cuarenta se desarrollaba en Málaga una investigación con el fin de obtener "autárquicamente" la efedrina, la atropina, la belladona y el aceite del delfín. Entre otras consecuencias posibles podemos aludir a la paralización de la iniciativa privada como factor de la reactivación económica en los años de posguerra. A finales de 1943 o principios de 1944 el sindicato de Valencia interrogaba a la superioridad sobre la tardanza de las autoridades a la hora de permitir a los empresarios poner en práctica sus iniciativas:

"Ruega se averigüen las razones por qué la Jefatura de Industria entorpece y dilata la puesta en práctica de iniciativas particulares para ampliación de industrias y creación de otras nuevas de interés para la economía."<sup>88</sup>

Sobre esta cuestión Valladolid, pedía "abreviar trámites para la concesión de permisos e instalaciones que tardaban varios meses y que agotan la paciencia de la iniciativa privada."<sup>89</sup> Este intervencionismo tuvo como ejes fundamentales a partir de 1939 la reglamentación de la inversión privada, el control del cambio de la peseta y la creación de empresas públicas por medio del Instituto Nacional de Industria a cargo de Suances.

Según Tortella,<sup>90</sup> los niveles de industrialización alcanzados en 1930 no se recuperaron hasta 1952. La política del régimen franquista no favorecía de forma suficientemente intensa y eficaz el proceso de industrialización. Pese a la influencia de factores externos,<sup>91</sup> los errores de cálculo y, en definitiva, una política errónea, condujeron a España a la cola de los países industriales de la Europa Occidental. Y es que la economía del régimen franquista se caracterizaba hasta llegar a la década de los 50 por su carácter básicamente agrario.<sup>92</sup> Fue entre 1948 y 1950 cuando se produjo la transición hacia un sistema progresivamente industrializado consolidándose el cambio en el año 1951. Teniendo en cuenta que el sufrimiento económico global de España en los años cuarenta tenía gran semejanza con el de otros países inmersos previamente en la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo continuado se inició también a finales de los cuarenta, estabilizándose en los cincuenta "igual que en la mayor parte de Europa."<sup>93</sup>

A finales de los años cuarenta ya había algún indicio de que algo empezaba a cambiar en la forma de dirigir la economía nacional. Pasos muy vaporosos indicaban que ya en aquellos momentos algo se transformaba lentamente en las entrañas del franquismo. En ámbitos delicados y vidriosos, socialmente hablando, como el de los abastecimientos básicos de la población se observaban ciertos detalles propios del liberalismo económico que eran criticados por los más fieles apologistas de la autarquía. En estos momentos se comenzó a autorizar la implantación de nuevas empresas e industrias de alimentación contra el criterio que mantenía el sindicato por lo que éste denunciaba tal situación:



“...Parece que lo que se pretende es la pronta vuelta a un liberalismo económico; nadie ha estudiado mejor y más acertadamente los fallos de tal liberalismo que los mismos rojos...En nuestro país este fenómeno es bien corriente y de todos conocido...Basta recordar los años 35 y 36 para comprobar hasta que punto son tristemente acertadas las observaciones de Engels. Pero todo esto se ha olvidado, al parecer, ya estamos deseando volver a tropezar en el mismo sitio...

...Se percibe en el Estado un ansia verdadera de dejar que el comercio y la industria se rijan por la libre concurrencia y sólo cosas felices se prometen con tal sistema...supondría enlazar catastróficamente con la situación de crack económico que existía ya en julio de 1936. Indiscutiblemente, la libre concurrencia tendría como primera e inmediata consecuencia una abaratamiento, y por lo tanto, una elevación del nivel medio de vida de nuestro pueblo...todo ello, conjugado con una descabellada competencia de precios, empujaba hacia la catástrofe a nuestra riqueza industrial y mercantil. Y no se nos arguya que toda era culpa de la República; no. Aquello sucedía como lógica consecuencia del liberalismo económico.”<sup>94</sup>

En este sentido se coincide parcialmente con las tesis del marxismo científico del siglo XIX en cuanto se temía que España fuese invadida por una muchedumbre de capitalistas sedientos de plusvalías y de incrementos de la producción que no encontrarían salidas produciendo una crisis tal que la vida de los trabajadores del país sería de absoluta miseria con el consiguiente peligro para el orden recién nacido de la guerra.

Es evidente que había elementos dentro del régimen, fieles adeptos de la autarquía y deseosos de que España se constituyera en un fortín efectivo de aquella forma de dirigir la economía. Y frente a éstos, que pretendían hacer del país un reducto contra el asalto del hambriento liberalismo manchesteriano, surgían los calificados como enemigos de la “patria.”

“...los enemigos se frotan las manos antes los errores que dan pie a sus designios de revolución odiosa. Y he aquí que el Estado, con una ceguera incomprensible, espera con impaciencia el momento de restablecer un estado de cosas que habría de sernos funesto. Frente a su criterio, la Organización Sindical debería prepararse para imponer una rígida disciplina que ponga a nuestros empresarios a salvo de sí mismos en beneficio de ellos y de la masa total de nuestro pueblo...”

Y todo ello, pese a que algunos sectores del propio sindicato eran conscientes de la necesidad de incrementar la producción en sectores como el agrícola para lograr el equilibrio entre el

consumo y la producción importando maquinaria, abonos, semillas y demás elementos necesarios para el cultivo y las necesidades agrícolas. Se estaba reconociendo, indirectamente que el régimen de libre concurrencia era el único que podía estimular al agricultor para incrementar la producción, lo cual era corroborado por el relativo éxito de la campaña triguera del año 1950 en el que se había concedido una amplia libertad a los agricultores.<sup>95</sup>

Una consideración de tipo político incide de forma esencial en el nuevo rumbo que toma la economía española. El cambio ministerial de 1951 y sobre todo la entrada de Arburúa en el gabinete franquista incidieron de forma muy significativa en lo que era un leve intento de liberalización, y más que liberalización, flexibilización de la economía española. Fue también en 1951, según González, cuando maduraron las inversiones estatales de 1948. Esta evolución, según el mencionado autor, se basó en “una generación de bienes de equipo de sencillo diseño y en protección comercial intensa que comportó la acumulación de capital humano y ensanchamiento del mercado suficiente para absorber una tecnología de importación más delicada en la década siguiente.”<sup>96</sup> Así, en 1952 las importaciones de bienes de equipo, de materias primas y de semimanufacturadas dan un gran salto y se sitúan a niveles elevados hasta 1957.<sup>97</sup> También hay que considerar que fue a partir de 1951 cuando se produjo el acelerón del nivel absoluto de los precios industriales con respecto a los precios agrícolas.<sup>98</sup> En gran parte, el motor de este proceso de industrialización estuvo en el incremento de la inversión productiva como principal motor de la demanda, apoyado a su vez por mayores posibilidades en el sector exterior.<sup>99</sup> Fueron estos primeros años cincuenta aquellos en los que España comenzó un proceso de semi-industrialización que las autoridades del ministerio de Trabajo también percibieron:

“Caían las cartillas de racionamientos, la obra social en la que tanto amor puse avanzaba imparable por el empuje de los propios trabajadores. También la industria española se expandía bajo la mano inteligente y cordial de Juan Antonio Suanzes...”

...Poco a poco caían las miserias y la penuria. El mundo nos contemplaba con cierta sorpresa, tanto como el turismo, cuyas avanzadillas tomaban posiciones en la Costa del Sol o en la Costa Brava. ¡Los años cuarenta acababan de morir!, y un tiempo nuevo se abría paso para España.”<sup>100</sup>

Hay que partir de la consideración de que la mayor proximidad de la España franquista a las potencias del Eje impuso un mayor déficit de elementos fundamentales para desarrollar nuestra industria. La ausencia de bienes energéticos y de materias primas fundamentales estrangulaban la economía española en los años posteriores a la guerra civil. Este factor operó simultáneamente con un planteamiento ideológico generalizado entre las autoridades del

régimen que partía de las consecuencias negativas que podrían tener las relaciones comerciales con el mundo exterior y sobre todo con las potencias "malditas" por el triunfo que en ellas había tenido el liberalismo, la democracia (caso del Reino Unido o Francia) o el marxismo materialista imperante en la Unión Soviética. A ello se unían las necesidades de un presupuesto exhausto que dificultaba la labor de reconstrucción tras la guerra civil.

Aunando elementos externos e internos, podemos encontrar en la autarquía una opción de política económica derivada de planteamientos puramente políticos que tuvo en su base la necesidad de organizar la industria para proveer y fortalecer al ejército nacional durante la guerra civil.<sup>101</sup> De ahí que muchas de las disposiciones legislativas promulgadas en plena guerra civil se desarrollaran aproximadamente hasta 1957. En esta línea está Tusell<sup>102</sup> al poner de manifiesto como en la persona de Franco ya brillaban con luz propia estas ideas autárquicas antes de las leyes sobre industria de finales del año 1939. Todo ello pone de manifiesto también la influencia de los ideales militares y de los propios profesionales del ejército en la dirección de la economía española, al menos en lo que se refiere a estos primeros años de franquismo, lo cual se evidencia por sí mismo desde el momento en que al frente del I.N.I. se sitúa un hombre como Suanzes, marino y militar, además de amigo personal del general Franco.

Como ya se ha mencionado, otro elemento característico del franquismo anterior al Plan de Estabilización fue el acusado intervencionismo en el tema de la industrialización a través de la Ley de Protección y Fomento de las nuevas industrias de 24 de octubre de 1939 y de la Ley de Ordenación y Defensa de la industria de 24 de noviembre de 1939.<sup>103</sup> El objetivo básico de ambas disposiciones era lograr que la industria española produjera los bienes que necesitaba el Estado español sin recurrir al extranjero. De igual manera, sobre todo en la segunda de las disposiciones, se potenciaba el consumo de bienes españoles dificultando las importaciones, se establecían controles férreos de cara al establecimiento de empresas de nueva creación, se limitaba la participación de los extranjeros tanto por medio de la gestión como por medio del capital. Si consideramos las dificultades de los comerciantes y empresarios para acudir al mercado internacional podemos llegar a la conclusión de que los problemas que generaba el esquema normativo planteado por la administración franquista a aquéllos era tal que veían muy mermadas sus posibilidades de desarrollo y, por tanto, las posibilidades de la economía del país y el bienestar de los españoles.

El instrumento fundamental de la política autárquica franquista fue el Instituto Nacional de Industria (I.N.I.) creado en 1941 por la ley de 25 de septiembre y adscrito hasta 1968 a la Presidencia del Gobierno con el fin de contribuir a la autarquía económica de España y a la defensa nacional.<sup>104</sup> El Instituto, dirigido por J.A. Suanzes, fue el instrumento básico del franquismo de cara a transformar España en un moderno Estado industrial europeo. Los

planteamientos esenciales del instituto, cuyo modelo fue el I.R.I. italiano, se resumen según los criterios que seguidamente se enumeran:

“...la industrialización de España era prioritaria y por tanto había de lograrse a cualquier precio; el sector privado había resultado incapaz de lograr esta industrialización por su falta de espíritu de iniciativa, y quizá también por un mezquino afán de lucro y pobreza de medios; no se debía confiar en la importación de capital y tecnología, porque eso implicaba sometimiento a la voluntad de los demás, intervencionismo extranjero...”<sup>105</sup>

Por tanto, se puede afirmar que el modelo de la política industrial franquista se inspiraba en la política de la Italia fascista. La política autárquica y el retraso en el proceso de industrialización español incidieron y mediatizaron grandemente la política industrial española por medio del Instituto Nacional de Industria. Las líneas de acción fundamental del I.N.I. estuvieron determinadas por la necesidad de intervenir en sectores donde la competencia internacional era más fuerte y, por tanto, las posibilidades para competir de las empresas españolas eran menores.

El I.N.I. se centró en las industrias de base, concretamente en las de energía eléctrica, petróleo y siderurgia. Se instaló también en el transporte automovilístico (Pegaso-E.N.A.S.A. y S.E.A.T.), construcción aeronáutica (C.A.S.A., H.A.S.A.), transporte marítimo (Bazán, Astilleros de Cádiz), transporte aéreo (Iberia, Aviaco), químicas, (Empresa Nacional de Celulosa), mecánicas y metalúrgicas, etc. El I.N.I., afirma Tortella, “forjó una industria básica, pero con una debilidad fundamental: su falta de competitividad que, como veremos, causó graves problemas en la década de los cincuenta...”<sup>106</sup> en función de un alto nivel en los costos y de una asignación poco eficiente de recursos escasos que dificultaba la incorporación de la industria española al mercado mundial en términos competitivos.

Concretamente, entre 1941 y 1948 los sectores en los que el I.N.I. centró su atención fueron los combustibles, los fertilizantes y la electricidad.<sup>107</sup> Es decir, los sectores que recibían mayor atención del I.N.I. eran aquellos en que, en principio, el interés del sector privado era menor. Sin embargo, a medida que la década de los cuarenta llegaba a su fin, la estrategia del I.N.I. se modificó en el sentido de una mayor relajación en la defensa de la política autárquica encauzando sus demandas hacia empresas extranjeras que le proporcionaban tecnología “en un intento de suplir las restricciones a la implantación de capital foráneo por un severo control del mismo.”<sup>108</sup>

Junto a estos elementos, hay que señalar la existencia de un tipo de cambio muy sobrevalorado de la peseta que perjudicaba la capacidad exportadora de la industria y del comercio español. La

asignación de recursos se realizaba en función de criterios políticos o de prestigio; ello estaba ligado al racionamiento de las divisas y a los controles sobre la importación de bienes extranjeros que pudieran perjudicar al tejido industrial nacional, lo cual dificultaba grandemente la llegada a España de bienes de equipo tecnológicamente más desarrollados con la consiguiente incidencia negativa en la productividad de la industria española.

La política proteccionista en torno al comercio español no fue algo que monopolizara exclusivamente el franquismo, si bien hay que decir que durante el primer franquismo se potenciaron las tendencias arancelarias ya ensayadas. Desde la puesta en marcha de la Ley de Bases Arancelarias de 1869, pasando por el giro proteccionista de 1892, la Ley de Bases Arancelarias de 1901 y el "Arancel Cambó" (resultado de la revisión de la Ley de 1906) la política comercial española se había caracterizado por un marcado sesgo proteccionista. Sin embargo, la política arancelaria perdió progresivamente peso a finales de los años 20 con la Gran Depresión, potenciándose paralelamente otro tipo de restricciones como las cuantitativas y el control de divisas y cambios. El primer franquismo enarboló la bandera de esta política proteccionista e hizo de ella un elemento básico de la necesaria defensa de la España Nacional tal y como concebía ésta.

Las restricciones cuantitativas consistían en prohibiciones parciales o totales al comercio con países extranjeros. Ante la ausencia de una prohibición absoluta se establecían contingentes, es decir, se imponían cupos anuales para la importación de determinadas mercancías. Para ello se emitían licencias de importación para los comerciantes que lograban este suculento pedazo del pastel. Por medio del control de cambios el Estado franquista determinaba la paridad de su moneda en relación a las extranjeras e imposibilitaba la tenencia de divisas por parte de los comerciantes. Así, desde 1939 a 1948 el cambio oficial de la peseta permaneció fijo, manteniéndose por debajo de los cambios registrados en los mercados internacionales de divisas.<sup>109</sup> Por tanto, la tenencia de una licencia de importación no facultaba de forma directa para la mencionada importación; posteriormente era necesario solicitar al I.E.M.E. la venta de la moneda extranjera requerida para la operación. Ello originaba problemas de abastecimiento exterior que yugulaban la producción de las industrias necesitadas de bienes de equipo procedentes del exterior. Así, por ejemplo, Cádiz solicitaba para Jerez la ampliación de sus fábricas de vidrieras dado "que no bastaba para abastecer la producción local cuando antes atendía a toda España. Concedida la autorización, no se le concedieron las divisas."<sup>110</sup> Similar situación caracterizaba a la provincia de Valladolid:

"Cree convendría la intensificación y desarrollo en la provincia de la fabricación de material agrícola y accesorios y las dos grandes obras que espera la provincia, que son: la instalación de las fábricas de productos nitrogenados y transformación de la paja de

cereales, aprobado el proyecto de la primera y pendiente de las divisas para la maquinaria.”<sup>111</sup>

De igual manera, los comerciantes estaban obligados por ley a vender al Estado las divisas de resultas de sus operaciones exportadoras en el extranjero. En directa relación con lo hasta ahora expuesto se estableció el mecanismo de cambios múltiples por el Decreto del 3 de diciembre de 1948,<sup>112</sup> por el cual se vendían a distintos precios las monedas extranjeras según los países de que se tratase o de la operación que se fuese a desarrollar con la consiguiente capacidad por parte de las autoridades para, sin llegar a la prohibición absoluta, incentivar o desincentivar discrecionalmente la importación de unos bienes u otros. Se situaba así el tipo de cambio en un término intermedio entre el cambio fijo y el cambio libre, “primando con ello la exportación de productos manufacturados y la importación de materias primas, y gravando la exportación de éstas y la adquisición en el exterior de manufacturas.”<sup>113</sup>

Este tipo de restricciones comerciales comenzaron a tener menos peso en los años cincuenta coincidiendo con una fase de mayor desarrollo industrial, antecedente de la gran explosión desarrollista de los años 60 tras la puesta en práctica del Plan de Estabilización. El resultado de la política llevada a cabo en los años cuarenta fue “la caída de la exportación de mercancías como fuente de ingresos exteriores...consecuencia directa de la política de aislamiento económico,...de una pérdida de competitividad causada por varios factores: uno, la disparatada sobrevaluación de la peseta (se mantenía alta por razones de prestigio mal entendido), que encarecía los productos españoles en el extranjero, otro, la bajísima productividad, consecuencia indirecta del aislamiento, que impedía importar capital físico, capital humano, y técnicas; y consecuencia también del bajo nivel educativo y del intervencionismo ordenancista tan caro a aquel régimen (y tan arraigado en nuestra mentalidad).”<sup>114</sup>

Por otro lado, destaca el hecho de que en los años 40 los costes de producción vía mano de obra<sup>115</sup> eran lo suficientemente bajos como para afirmar que los salarios se mantuvieron por debajo de los niveles alcanzados antes de la guerra civil. Ello vino a incidir negativamente en la actividad industrial, sobre todo en la de aquellas ramas de la producción generadoras de bienes inferiores o de consumo potencialmente alto para los que eran necesarios niveles de renta real más elevados de los existentes en aquel momento. Un ejemplo de la incidencia negativa de este escaso dinamismo de la demanda lo podemos observar en el caso de la industria textil.

Además hay que considerar la incidencia negativa que tuvo la política franquista sobre las industrias de base como las del sector eléctrico. La política del primer franquismo vio con buenos ojos la congelación de los precios de la electricidad en términos nominales. El panorama inflacionista de los años 40 implicaba que los precios fueran decrecientes y la

desincentivación que para los inversores suponía ésto implicaba la desaparición de muchos de aquéllos y el posterior desbordamiento de la oferta por parte de la demanda con las consiguientes restricciones y el problema del paro provocado por la ausencia de energía eléctrica en las ramas de la producción que hicieran un uso intensivo de ella.<sup>116</sup>

Los años 50 supusieron una modificación sensible del panorama industrial español. Entramos en una etapa de "crecimiento económico y empuje industrializador"<sup>117</sup> motivado por algunas modificaciones que, aunque no alteraron lo esencial de los planteamientos del régimen, si fueron lo suficiente significativas para permitir ese superior crecimiento. De entre estos cambios, la salida del I.N.I. de una personalidad como J.A. Suanzes en 1951 y la división de las atribuciones del ministerio de Industria y Comercio entre dos (Arburúa se encargó de Comercio y Planell de Industria) tuvieron una gran relevancia. El nuevo gobierno, afirma Tortella, "fue mucho más favorable a una apertura del comercio internacional, que se reflejó en un aumento de la participación del sector exterior en la renta nacional (a niveles aún muy modestos) y en un cambio en la composición de ese comercio...este pequeño desarrollo comercial explica buena parte del crecimiento industrial"<sup>118</sup> basado también en un cambio en la estructura de las importaciones, con un mayor peso de las de bienes de equipo y una disminución paralela de las de alimentos. Es decir, el principal objetivo de este nuevo gobierno fue "reducir el intervencionismo estatal en la economía. Así, se impone una mayor ortodoxia en la administración del sector público, una tímida liberalización del comercio exterior, y una más amplia participación de la iniciativa privada."<sup>119</sup> En el ámbito agrícola se optó por una política de precios garantizados y por la tecnificación y capitalización del mundo campesino. A todo ello se unió la mayor aproximación de España a las potencias occidentales cuyo ejemplo más palmario fue la firma de los acuerdos de 1953 con los Estados Unidos de Norteamérica.

Indudablemente esta ayuda y las facilidades crediticias de los Estados Unidos incidieron positivamente en el rumbo de la economía nacional. El impacto de la *Guerra Fría* y conflictos como el coreano provocaron que los Estados Unidos se decantaran definitivamente por una política permisiva con respecto a la España de Franco. Así, en 1951 el Export-Import Bank concedió un crédito por valor de más de 62 millones de dólares a España para la compra de productos agrícolas; más tarde el régimen logró que el mismo banco le concediera otro préstamo de 24 millones de dólares con destino a la compra de algodón.<sup>120</sup> Según Manuel Jesús González este cambio se había iniciado en 1947.<sup>121</sup> "Caía el racionamiento y nacía la abundancia. ¡Estábamos al borde de la sociedad consumista!...España empezaba a cobrar lo que había pagado en sangre,"<sup>122</sup> afirmaba Girón.

La política industrial de los años cincuenta tuvo como elemento característico la relajación de los principios autárquicos a medida que disminuía el intervencionismo de la administración en

el ámbito de la empresa privada. A ello se unió la progresiva pero lenta erradicación de los problemas relacionados con el transporte y la energía. Benito del Pozo hace referencia a los tres elementos que caracterizan esta nueva coyuntura económica: la incentivación de la inversión industrial privada vía precios, el incremento de la inversión pública y el crecimiento protegido, basado en los bienes de equipo sencillo.<sup>123</sup>

Esta etapa de crecimiento evidenciaba una serie de contradicciones que harían finalmente inevitable el Plan de Estabilización de 1959. Hay también que considerar que antes de llegar a esta situación se había puesto de manifiesto la dificultad para mantener el sistema de sustitución de importaciones. A mediados de la década de los 50 se puede afirmar que la autarquía parecía inalcanzable.<sup>124</sup> Entre las contradicciones más destacadas se pueden mencionar cuatro: "...la financiación inflacionaria del crecimiento;...los estrangulamientos del sector exterior;...las tensiones del mercado laboral;...y, las rigideces de oferta que el sistema generaba."<sup>125</sup>

Los estrangulamientos en el comercio exterior dificultaban el crecimiento de la economía y del bienestar de los españoles en la medida en que la importaciones de bienes de equipo y capital no podían financiarse más que por medio de exportaciones difíciles de realizar. "La mayor parte de las exportaciones españolas eran productos agrícolas: fueron los años del auge exportador de la naranja. Pero la inflación interna, la sobrevaluación del tipo de cambio, y la protección a la producción nacional encarecían tremendamente los productos de exportación, que perdían competitividad: de ahí la continua amenaza del déficit de balanza comercial...y el estrecho control de las importaciones."<sup>126</sup> La mala cosecha de naranjas de la primavera de 1956 acabó por incidir de forma muy directa en la reforma del sistema por medio del Plan de Estabilización de 1959.

Las rigideces de la oferta estaban determinadas básicamente por los monopolios. El I.N.I. pudiera haber actuado como freno de los existentes en España. Sin embargo, en muchos casos, se constituyó en cómplice de situaciones monopolísticas para propiciar el salvamento de industrias poco competitivas incapaces de sobrevivir en un régimen de libre concurrencia. El tercer aspecto de los señalados por Tortella (la cuestión del mercado laboral) será tratado más extensamente en capítulos posteriores.

El fracaso de la política autárquica se explicita con claridad en los años cincuenta. Hay que tener en cuenta que la debilidad de la política fiscal limitaba de forma muy importante la posibilidad del régimen de llevar a cabo un desarrollo autárquico tal y como se proponían en un principio. Y es que "cualquier política tributaria más progresiva olía a socialismo o colectivismo, lo que Franco estaba decidido a evitar. El gobierno no tenía ningún interés en



redistribuir la renta a través del sistema impositivo, y así en 1948 el fisco sólo recogía el 14,76 % de la renta nacional española, en comparación con el 21 % aproximadamente de Francia e Italia y el 33 de Gran Bretaña.”<sup>127</sup>

Si en los años cuarenta la autarquía había demostrado su incapacidad para recuperar rápidamente la economía española de los efectos de la guerra,<sup>128</sup> en los años cincuenta se hizo evidente la realidad de un estancamiento prolongado basado en la imposibilidad de generar un crecimiento sostenido. La esencia antieficietista de la autarquía explica su fracaso. El régimen de Franco necesitaba unas nuevas directrices económicas que en ese momento no podían venir de una Falange que progresivamente iba a perder más cuota de poder, entre otros motivos, por la influencia, entre otros, de personajes como Carrero Blanco:

“...cualquier acentuación del falangismo sería inútil y anacrónica, además de claramente inaceptable para las principales instituciones y corrientes de opinión del país...las nuevas opciones de Franco revelaban así una pérdida de importancia radical de los falangistas y mayor énfasis en la capacidad técnica...”<sup>129</sup>

La conclusión en torno al período del imperio de la autarquía la podemos encontrar en las palabras de Tortella que resumen brevemente el panorama de este amplio período de la Historia de España:

“El crecimiento y la industrialización habían tenido lugar en un marco de controles e intervenciones que en realidad constituían otras tantas trabas al desarrollo, y sólo gracias a otra serie de reglamentaciones y excepciones habían podido las empresas zafarse del abrazo asfixiante de la burocracia. Pero toda esta maraña de disposiciones, órdenes y contraórdenes, a la larga constituían un nudo gordiano que atenazaba a la economía, un nudo que no se podía desatar pacientemente con medidas parciales. Había que cortar por lo sano, y eso es lo que hizo el Plan de Estabilización.”<sup>130</sup>

## **2.6. La entrada y la salida del trabajador del mercado de trabajo.**

El concepto de contrato, plasmado en ley de 1944,<sup>131</sup> tal y como Sempere indica, parte de la idea de la necesidad formal de evitar la mercantilización de la actividad laboral, por cuanto desconocía ésta sus virtudes espirituales y personales además de sus características degradantes para el trabajador sometido a la ley del mercado y al predominio del más fuerte.<sup>132</sup>

Pese a ello uno de los aspectos menos saludables para la salud del trabajador español en los años cuarenta era el sistema de destajo. Resultaba evidente que si el trabajo realizado por el

"productor" llegaba a su conclusión en menos tiempo del razonable ello sería fruto de sobreesfuerzos físicos, dañinos para la salud del trabajador. Paralelamente, se procuraba fomentar en aquél la dedicación al trabajo después del fin de la jornada habitual por medio de un sistema de primas que podían constituir la única manera de compensar mínimamente la debilidad de su salario base. Tal era el caso de algunas reglamentaciones laborales en las que se establecía un límite por encima del cual habían de ser rebajadas las tarifas de primas por destajo cuando el trabajador alcanzaba con ellas ingresos considerados "excesivamente" elevados en relación al salario base. Hay que tener en cuenta igualmente que la legislación en torno a esta forma de contrato no establecía ninguna limitación en cuanto al rendimiento o en cuanto al tiempo; ni tampoco imposibilitaba que un intermediario se constituyera en jefe de producción y contratara directamente a los empleados atribuyéndose el beneficio del destajo y liquidando posteriormente a sus contratados. Por todo ello, por parte de algunos sectores, se pedía que se propendiese hacia su total destierro.<sup>133</sup>

La violación por parte del empresariado de las normas vigentes en el orden laboral (también en el de la previsión) se vino materializando a lo largo de los años 40 y 50 hasta que por parte del ministerio de Trabajo se tuvo la iniciativa de retocar el marco legal con el objetivo de paliar mínimamente la situación. El sistema concreto al que nos referimos consistía en la cesión temporal por parte de una empresa de todo o parte de su personal a otros empresarios sin que éstos cumplieran las obligaciones laborales y relacionadas con la previsión que les correspondían, amparándose incluso en cesiones gratuitas por servicios benévolos o de buena vecindad. El problema radicaba en que este tipo de prácticas suponían casi el nacimiento de oficinas clandestinas de colocación ajenas creadas para tal fin por la O. S. Lucha contra el Paro.<sup>134</sup>

Desde las instancias sindicales se denunciaba, sin poner límite a dichas actividades, la profusión de reclamaciones a la Inspección de Trabajo sin ninguna posibilidad de salir adelante dado que la característica fundamental de gran parte de aquellas reclamaciones era el hecho de que los trabajadores carecían de contrato escrito que probara la condiciones en que prestaban sus trabajos. También se denunciaba por el sindicato la tendencia por parte del empresariado español a potenciar los contratos a plazo fijo que, en muchos casos, no tenían otra finalidad que la renovación del personal dentro de la misma función, evitando paralelamente que los trabajadores pudieran consolidar su situación por medio del derecho de antigüedad.<sup>135</sup>

La ineficiente protección al trabajador se ponía en ocasiones de manifiesto, por la vía de los hechos, en las peticiones de las juntas sociales de algunos sindicatos de tanto peso específico como el de la construcción, el primero por su volumen de negocio en el que se implantó la cartilla profesional. Entre las peticiones de la junta de la sección social del sindicato adoptadas

los días 12 y 13 de noviembre de 1948 estaba la de que para el personal de prueba “basta con el simple aviso verbal de la empresa a la terminación de la jornada para que dejara de acudir al día siguiente, sin necesidad de cumplir ningún otro requisito.”<sup>136</sup>

Este era parte del contexto en el que se movía el trabajador español a la hora de entrar en el mercado de trabajo el cual tenía su otra cara en la salida del mismo. Para Girón, uno de los aspectos claves de su política laboral había de ser la consecución de la estabilidad en el empleo como forma de garantizar, en parte, la justicia social que el franquismo social (que él representaba) pretendía conseguir. Formalmente, el ministerio de Trabajo buscaba garantizar el nivel de rentas del trabajador, dado que aquella era la única fuente de ingresos que poseía tanto él como su familia. Dada la inexistencia de la huelga como mecanismo de protesta y de explicitación del conflicto por parte de los trabajadores ante la injusticia social, era necesario contrarrestar dicha falta de “privilegios” impidiendo, en la medida de lo posible, que la mano de obra fuera tratada de acuerdo a parámetros liberales denostados por el régimen, lo cual no impedía la aceptación del despido, sino únicamente de lo que pudiera ser considerado como despido injusto.

“Otro punto clave en cuanto a la dignidad del trabajador consistía en garantizarle la estabilidad en su empleo. Había que protegerle contra la injusticia en que un empresario podía incurrir, especulando con lo inseguro de su puesto de trabajo. La provisionalidad debía estar subordinada al carácter del trabajo que realizaba, no al capricho del empresario. Había quien argumentaba que el no poder prescindir de un trabajador en cualquier momento, fomentaba en los obreros la indolencia y la vagancia, puesto que ya no existía el miedo a perder el puesto de trabajo. Para mí estaba claro que no se podía comparar el estrago causado por un obrero indolente con el estrago catastrófico que podía producir el despido injusto de un obrero al que se le privaba de la renta única para mantenerse a sí y a su familia. Si la empresa estaba defendida contra la huelga, el trabajador tenía que estar igualmente defendido contra el despido injusto,” afirmaba Girón.<sup>137</sup>

Una de las primeras medidas desarrolladas del ministerio de Trabajo para regular la cuestión del despido fue la promulgación del Decreto de 26 de enero de 1944<sup>138</sup> y normas para su aplicación de 5 de abril del mismo mes. Por medio de dichas disposiciones se establecían los requisitos que debían cumplirse para la suspensión o cese de una empresa. Entre los requisitos impuestos estaba la autorización previa de la Delegación de Trabajo o de la dirección General para suspender o cesar en sus actividades.

La diferencia de criterios se plasmaba en ocasiones entre el ministerio de Hacienda y su titular (F. Gómez del Llano) y el ministerio de Trabajo en torno a las medidas a desarrollar para hacer

frente a la difícil situación que se planteaba en 1956, uno de cuyos baremos era la tasa de inflación y la consiguiente negativa incidencia sobre los salarios reales de los trabajadores españoles. Desde el ministerio de Trabajo se proyectó una política tendente a elevar “por decreto” los salarios de los trabajadores. De ello debía resultar el incremento del salario base entre un 20 y un 25 % en abril de 1956, el incremento en el salario de los funcionarios en mayo del mismo año y el Decreto de 26 de octubre de 1956 que suponía la revisión de los salarios de las reglamentaciones laborales.

En este contexto Girón llevó al Consejo de ministros del 9 de noviembre de 1956 un proyecto de Decreto (luego aprobado) de despido. Éste plantaría las semillas de la discordia entre el ministerio de Hacienda y el de Trabajo hasta el punto de que “la eminencia gris del régimen de Franco”<sup>139</sup> recibió la misiva y el informe negativo del ministro de Hacienda en el que manifestaba que, en los términos en que dicho proyecto había sido redactado, lo consideraba inaceptable.<sup>140</sup>

Lo inadmisibile del proyecto tenía como base la incidencia negativa (según el ministro de Hacienda) que dicha normativa tendría sobre la economía española. Como se ha dicho, coincidía este decreto con los aumentos salariales del año 1956. El objetivo formal del proyecto aprobado en consejo de ministros era asegurar una mayor productividad que sirviera para compensar los aumentos en los sueldos durante el 56 y que, consiguientemente, evitara el encarecimiento generalizado del coste de la vida que “anularía en las clases modestas todas las ventajas económicas obtenidas.”<sup>141</sup>

El problema del mencionado proyecto radicaba en el hecho de que, por una parte, reconocía a las empresas la facultad de despedir a sus empleados sin la propuesta que previamente habían de elevar a la Magistratura de Trabajo. Ello, ni más ni menos, posibilitaba el despido libre en el pleno sentido de la palabra. Sin embargo, en el artículo 5º, regla 2ª, apartado b) se establecía que si la magistratura declaraba improcedente el despido por parte del patrón, era al trabajador y no al empresario al que le correspondía elegir entre el cobro de una indemnización equivalente al importe del sueldo de un año o la readmisión. El problema radicaba, en un momento en que se preveía la necesidad del futuro Plan de Estabilización de 1959, en el hecho de que esta pirueta normativa de Girón representaba, según el titular de Hacienda, “el mantenimiento de toda la legislación actual.”<sup>142</sup> Es decir, los nuevos criterios liberalizadores de la economía pugnaban por abrirse paso sobre una legislación social que, buscando la paz social y la prevención del conflicto laboral, pretendía dificultar o al menos limar las situaciones de desamparo real en que se podían ver los trabajadores españoles ante las nuevas circunstancias de la economía.

Otra de las quejas que planteaba el ministerio de Hacienda era el hecho de que en las indemnizaciones por despido injustificado dictadas por la magistratura no se graduaran las mismas en función del tiempo de servicio en la empresa aunque, por otro lado, se estableciera un límite: un año del salario. Ello "en vez de ser un perjuicio y, por tanto, una amenaza que mantenga el estímulo y el rendimiento, sería un verdadero negocio lucrativo."<sup>143</sup> Otro de los problemas que zarandeaban la conciencia del ministro Gómez del Llano era el hecho de que la magistratura podía establecer, en caso de despido injustificado, aparte de la indemnización mencionada, otra indemnización complementaria equivalente a los jornales devengados mientras se llegaba a una resolución en firme en función de la inseguridad de que aquélla se realizase en un tiempo prudente. También se criticaba el hecho de que en el artículo 11 se consideraba como sueldo base para la indemnización la totalidad de los beneficios que obtuviese el trabajador, en la medida en que malinterpretado (desde el punto de vista del ministro de Hacienda) podía permitir que conceptos como los destajos, las horas extraordinarias, los pluses de peligrosidad u otros semejantes fueran considerados a dichos efectos, perjudicando la estabilidad económica de la empresa.

El resultado final de estas diferencias de criterios se pueden resumir con una de las aseveraciones del informe enviado al ministro Subsecretario de la Presidencia:

"Como consecuencia de todo lo anterior, deben modificarse los demás artículos del decreto que hacen referencia a la opción del trabajador y a la obligatoriedad de la empresa de aceptar la readmisión."<sup>144</sup>

Se puede afirmar, en definitiva, que los criterios expuestos por el ministro de Hacienda caminaban directamente hacia la ruptura con la legislación laboral imperante hasta aquellos momentos (año 1956) en cuanto a lo que de paternalista y protectora pudiera tener para el trabajador español. De igual manera, se pretendía evitar que el trabajador pudiera tener la iniciativa a la hora de influir en el menor o mayor peso de la plantilla de la empresa alterando con ello la estructura de costes de la misma y, por tanto, enfrentándose a los criterios empresariales que pudieran requerir de una disminución de las plantillas para mantener la marcha fluida de la empresa. Era necesario, según Gómez del Llano, liberalizar el mercado de trabajo de forma que para los empresarios el mecanismo de despido requiriera menos trámites y que el coste de éste se minimizara a la par que la decisión de la readmisión del empleado estuviera en manos del patrono.

### Notas

<sup>1</sup> García Oviedo, Carlos: Algunas consideraciones acerca de la lucha contra el paro forzoso. Sevilla, Imprenta y librería de Elogia de las Heras, 1928, pág. 5.

- <sup>2</sup> "El rechazo del convenio colectiva se asocia al repudio del individual, por ser partícipes ambos de la criticada categoría contractual y exponentes del principio autonomista." Sempere, *Nacional-sindicalismo...*, op. cit., pág. 302.
- <sup>3</sup> Informe del Consejo Nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S. en torno a la Ley de Bases de la Organización Sindical, mayo de 1939. A.P.G.; J.D.N.; Leg. 26, nº 2.
- <sup>4</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 182.
- <sup>5</sup> Ídem, pág. 119.
- <sup>6</sup> Ídem, pág. 175.
- <sup>7</sup> I Congreso Nacional de Trabajadores. Conclusiones. Delegación Nacional de Sindicatos; Vicesecretaría Nacional de Ordenación Social, 1946, pág. 31.
- <sup>8</sup> Leal, Alejo: El trabajo y el trabajador en la agricultura. Madrid, 1953, pág. 10.
- <sup>9</sup> Aranzadi, 230/1938.
- <sup>10</sup> Girón de Velasco, J. A.: Escritos y discursos. IV volúmenes, tomo II. Madrid, ed. Altamira, 1952, pág. 122.
- <sup>11</sup> Girón de Velasco, "Escritos...", Tomo IV, op. cit. pág. 227.
- <sup>12</sup> Martín López, Enrique: El cambio social durante el régimen de Franco (1936-1975). Madrid, Actas, 1993, pág. 165.
- <sup>13</sup> Pío XII: Pío XII y la familia cristiana. Discursos del Santo Padre a los recién casados: 1939-1947. San Sebastián, ed. Pax, 1943, pág. 40.
- <sup>14</sup> Bellod, Juan José: La familia en la doctrina del Movimiento. Fascículo nº 2, Madrid, ed. C.F.E., 1958, pág. 11.
- <sup>15</sup> Girón de Velasco, "Escritos...", Tomo IV, op. cit., pág. 122.
- <sup>16</sup> Ídem, pág. 123.
- <sup>17</sup> Ídem, pág. 50.
- <sup>18</sup> Aranzadi, 230/1938.
- <sup>19</sup> Pamilla, Ampara: Protección del niño a través de la madre. Madrid, ministerio de Trabajo, 1953, pág. 122.
- <sup>20</sup> Rodríguez, Federico: Defensa económico-social de la familia. Fascículo nº 18, Madrid, ed. C.F.E., 1958, pág. 29.
- <sup>21</sup> Fernández de Castro, Ignacio: Del paternalismo a la justicia social. Madrid, Euramérica, 1956, pág. 11-12.
- <sup>22</sup> Ídem, pág. 45.
- <sup>23</sup> Pío XII, op. cit., pág. 384-385.
- <sup>24</sup> Azpiazu, Joaquín: El trabajo como prima de seguro total familiar. Revista de Trabajo (a partir de ahora RT), 1943, nº 49/50, vol. 2, pág. 897.
- <sup>25</sup> La Biblia. Génesis, 1, 28-29.
- <sup>26</sup> Aznar Embid, Severino: Del salario familiar al seguro familiar. Santander, ministerio de Organización y Acción Sindical, 1939, pág. 6.
- <sup>27</sup> Ídem, pág. 10.
- <sup>28</sup> Ídem, pág. 13.
- <sup>29</sup> Aznar Embid, Severino: Los seguros sociales. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1947, pág. 47.
- <sup>30</sup> Quetglas Gaya, Bartolomé: El salario familiar. Teoría y práctica. Biblioteca Temas Sociales, 1935, pág. 11.
- <sup>31</sup> Ídem, pág. 18.
- <sup>32</sup> Ídem, pág. 18.
- <sup>33</sup> Morodo, Raul: Los orígenes ideológicos del franquismo: Acción Española. Madrid, Alianza Universidad, 1980, pág. 193-4.
- <sup>34</sup> A.P.G.; S.M.S.; Leg. 30, nº 46.
- <sup>35</sup> I Congreso..., op. cit., pág. 25.
- <sup>36</sup> I Congreso..., op. cit., pág. 28.
- <sup>37</sup> Aranzadi, 230/1938.
- <sup>38</sup> Benito del Pozo, La clase obrera..., op. cit., pág. 7-8.
- <sup>39</sup> Payne, El régimen..., op. cit., pág. 406.
- <sup>40</sup> Aparicio, El sindicalismo..., op. cit., pág. 58.
- <sup>41</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 80.
- <sup>42</sup> Ídem, pág. 129.
- <sup>43</sup> Ídem, pág. 186.

- <sup>44</sup> A.P.G.; J.D.N.; Leg. 26, nº 4.
- <sup>45</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 114.
- <sup>46</sup> Informe se sobre la Sección E, 1 de octubre de 1943. A.P.G.; J.E.; Leg. 59, nº 1.3.
- <sup>47</sup> Ídem, pág. 3.
- <sup>48</sup> Ídem, pág. 4.
- <sup>49</sup> Ídem.
- <sup>50</sup> Ídem, pág. 8.
- <sup>51</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 145-146.
- <sup>52</sup> Ídem, pág. 152.
- <sup>53</sup> Ídem, pág. 130.
- <sup>54</sup> A.P.G.; J.E.; Leg. 59, nº2, pág. 11.
- <sup>55</sup> Ver también Girón, Escritos y Discursos, op. cit., pág. 135.
- <sup>56</sup> A.P.G.; S.M.S.; Leg. 30; nº 47.
- <sup>57</sup> Ídem, pág. 1.
- <sup>58</sup> Ídem.
- <sup>59</sup> Ídem, pág. 1-2.
- <sup>60</sup> Información general de la provincia de Valladolid, 31 de enero de 1942. Documentos inéditos..., op. cit., pág. 239.
- <sup>61</sup> A.P.G.; S.M.S.; Leg. 30; nº 47, pág. 2.
- <sup>62</sup> Ídem.
- <sup>63</sup> Ídem, pág. 3.
- <sup>64</sup> Ídem.
- <sup>65</sup> Ídem, pág. 4.
- <sup>66</sup> Ídem.
- <sup>67</sup> Morodo, Los orígenes ideológicos...
- <sup>68</sup> Ídem, pág. 141-42.
- <sup>69</sup> A.P.G.; J.D.N.; Leg. 26, nº 2. Informe del Consejo Nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S. en torno a la Ley de Bases de la Organización Sindical de mayo de 1939.
- <sup>70</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 82.
- <sup>71</sup> Ídem, pág. 86.
- <sup>72</sup> El 10 de abril de 1956 se celebró en Milán una reunión internacional de trabajadores católicos para celebrar la fiesta del 1º de mayo. Dicha celebración llegó incluso al Consejo de ministros. A.P.G.; S.G.A.; Leg. 33, nº 1.
- <sup>73</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 130.
- <sup>74</sup> Asesoría eclesiástica, 26 de abril de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 3134.
- <sup>75</sup> Asesoría eclesiástica: Informe de 24 de junio de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 3377.
- <sup>76</sup> Ídem, pág. 2.
- <sup>77</sup> Nota para nuestro Delegado Nacional de M. Primo de Rivera en torno al periodista Jean Creach y la Carta Pastoral de Monseñor Morcillo, Obispo de Bilbao y otros, 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/280.
- <sup>78</sup> Martínez Gutiérrez, Juan José: Economía de guerra después de la guerra (sobre la configuración de la política económica autárquica en el primer franquismo). En "El Régimen de Franco...", op. cit., pág. 328-329.
- <sup>79</sup> García Delgado, José Luis: Estancamiento industrial e intervencionismo económico durante el primer franquismo. En España bajo el franquismo. Josep Fontana, ed., Barcelona, Crítica, 1986, pág. 170-6.
- <sup>80</sup> Fina, Lluís: Política salarial i lluita de classes sota el franquisme. Revista Materiales, 1978, nº 7, pág. 108.
- <sup>81</sup> Informe del Consejo Nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S. en torno a la Ley de Bases de la Organización Sindical, mayo de 1939. A.P.G.; J.D.N.; Leg. 26, nº 2.
- <sup>82</sup> Bosch Aymerich, Alfonso: El paro obrero. Barcelona, Instituto de Investigaciones Económicas, 1941, pág. 56.
- <sup>83</sup> Payne, El régimen..., op. cit., pág. 397-398.
- <sup>84</sup> Primer informe de Carrero Blanco..., Documentos inéditos..., op. cit., pág. 325.
- <sup>85</sup> Aranzadi, 230/1938.
- <sup>86</sup> Benito del Pozo, La clase..., op. cit., pág. 5.
- <sup>87</sup> Fernández, Alberto: El paro. Madrid, ed. Mañana, 1977, pág. 53.
- <sup>88</sup> A.P.G.; J.E.; Leg. 59, 3.1., nº 71.
- <sup>89</sup> Ídem, nº 72.

- <sup>90</sup> Tortella, Gabriel. El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX. Madrid, Alianza Textos, 1994, pág. 268.
- <sup>91</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 132.
- <sup>92</sup> González González, Manuel Jesús: La economía política del franquismo (1949-1970). Dirigismo, mercado y planificación. Madrid, Tecnos, 1979, pág. 115.
- <sup>93</sup> Payne, El régimen..., pág. 403.
- <sup>94</sup> Correspondencia del Sindicato Nacional de Alimentación y Productos Coloniales, 20 de junio de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, n° 3336, pág. 2-3.
- <sup>95</sup> I Congreso Sindical Agrario de Levante; Valencia, marzo de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/162.
- <sup>96</sup> González, La economía política..., op. cit., pág. 117.
- <sup>97</sup> Ídem, pág. 127.
- <sup>98</sup> Ídem.
- <sup>99</sup> Ídem, pág. 125-129.
- <sup>100</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 146 y 148.
- <sup>101</sup> Martínez Gutiérrez, Economía de guerra..., op. cit., pág. 318.
- <sup>102</sup> Tusell, Javier: La autarquía cuartelera: las ideas económicas de Franco a partir de un documento inédito. Historia 16, 1985, n° 115, vol. 10, pág. 41-49.
- <sup>103</sup> Tamames, Ramón: Estructura económica de España. Tomo II. Barcelona. Guadiana, 1977, pág. 25-27.
- <sup>104</sup> Tamames, Estructura económica..., op. cit., pág. 27.
- <sup>105</sup> Tortella, El desarrollo..., op. cit., pág. 271.
- <sup>106</sup> Ídem, pág. 272.
- <sup>107</sup> Benito, La clase obrera..., op. cit., pág. 29.
- <sup>108</sup> Ídem.
- <sup>109</sup> Ídem, pág. 10.
- <sup>110</sup> A.P.G.; J.E.; Leg. 59; 3.1., n° 40.
- <sup>111</sup> Ídem, n° 72.
- <sup>112</sup> Benito, La clase..., op. cit., pág. 10.
- <sup>113</sup> Ídem.
- <sup>114</sup> Tortella, El desarrollo..., op. cit., pág. 311.
- <sup>115</sup> Ídem, pág. 272.
- <sup>116</sup> Catalán señala como el caso del sector eléctrico fue uno de los más significativos casos de repercusión muy negativa en la estructura nacional centrándose en los años de la conflagración mundial. "En el campo del suministro energético, los errores de la política industrial- y exterior- en la Nueva España explican la mucho mayor repercusión de los estrangulamientos en la industria fabril española en relación a los demás neutrales. El caso más significativo fue el de la electricidad, donde la congelación de tarifas y la prioridad dada por el I.N.I. a otro tipo de inversiones desembocaron en una caída de la oferta eléctrica en los dos últimos años de la guerra mundial." Catalán, Jordi: Autarquía y desarrollo de la industria de fábrica durante la segunda guerra mundial. Un enfoque comparativo. En García Delgado, J. L. et. al.: El primer franquismo. España durante la segunda guerra mundial. V coloquio de Historia Contemporánea de España, dirigido por M. Tuñón de Lara. Madrid, Siglo XXI, 1989, pág., 82-3
- <sup>117</sup> Tortella, El desarrollo..., op. cit., pág. 273.
- <sup>118</sup> Ídem, pág. 273-274.
- <sup>119</sup> Benito, La clase obrera..., op. cit., pág. 11.
- <sup>120</sup> Tamames, Ramón: Estructura económica de España, Madrid, 1985, pág. 213.
- <sup>121</sup> González, La economía..., op. cit., pág. 130.
- <sup>122</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 149.
- <sup>123</sup> Benito, La clase obrera..., op. cit., pág. 13.
- <sup>124</sup> González, La economía política..., op. cit., pág. 126.
- <sup>125</sup> Tortella, El desarrollo..., op. cit., pág. 277.
- <sup>126</sup> Ídem, pág. 277.
- <sup>127</sup> Payne, El régimen..., pág. 402-403.
- <sup>128</sup> Benito, La clase obrera..., op. cit., pág. 5.
- <sup>129</sup> Payne, El régimen..., op. cit., pág. 463-464.
- <sup>130</sup> Ídem, pág. 280.
- <sup>131</sup> B.O.E. del 24 de febrero, Aranzadi, 274.



<sup>132</sup> "La contratación de las condiciones de trabajo supone que cada una de las partes, empresarios y trabajadores, defiendan sus intereses: en ello se ve una palanca de enfrentamiento y lucha social que debe ser eliminada en el Nuevo Régimen." Sempere, *Nacional-sindicalismo...*, op. cit., pág. 303.

<sup>133</sup> I Congreso Nacional..., op. cit., pág. 40.

<sup>134</sup> Proyecto de Decreto-Ley estableciendo responsabilidades de carácter civil y penal por incumplimiento de leyes laborales y de previsión social (15 de febrero de 1952). A.P.G.; S.G.A.; Leg. 3, nº 4.

<sup>135</sup> I Congreso Nacional..., op. cit., pág. 95.

<sup>136</sup> Sindicato Nacional de Construcción, Vidrio y Cerámica (20 de junio de 1949). A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 3336, pág. 4.

<sup>137</sup> Girón, *Si la memoria...*, op. cit., pág. 121-122.

<sup>138</sup> Dicha disposición venía a sustituir al Decreto de 29 de noviembre de 1935.

<sup>139</sup> Tusell, Carrero..., op. cit.

<sup>140</sup> A.P.G.; S.G.A.; Leg. 33, nº 1.

<sup>141</sup> Ídem.

<sup>142</sup> Ídem.

<sup>143</sup> Ídem.

<sup>144</sup> Ídem.

### **Capítulo 3. El concepto de salario.**

El concepto de salario que el franquismo enarbolaba como elemento esencial de la justicia social estaba indisolublemente unido a un proyecto de remodelación de la sociedad española que perseguía la armonización de las clases sociales con especial hincapié en los años cuarenta en el mundo de la agricultura puesto que la mayoría de la población activa se hallaba en dicho sector. Se era consciente de la necesidad, al menos formal, de la defensa de la participación en los beneficios como fórmula de pacificación social y ello por algunos motivos que exponía el Jefe Nacional del Sindicato del Olivo consciente de la casi imposibilidad de llevar dichos principios al agro español dado que, entre otras razones, eran contadas las explotaciones que realizaban balance final de sus ejercicios:

“La remuneración del trabajo que tenga por base el jornal no logrará jamás en el campo la comunidad de obreros y empresarios al servicio de la producción, y las que se apoyan en el destajo, que no son siempre posibles, podrán ganar para la producción toda la capacidad de trabajo del obrero si la velocidad no perjudica a la calidad, pero no logrará su total incorporación a la empresa.”<sup>1</sup>

Desde la perspectiva del franquismo social, se pretendía materializar, en torno a la idea del salario familiar, un modelo de sociedad española renovada. Este planteamiento se inspiraba en la idea de que, dado que la relación de trabajo partía de un criterio preferentemente espiritualista, la retribución habría de responder a los mismos principios.<sup>2</sup>

José Antonio Girón definía en los términos siguientes lo que debía ser el concepto y la idea del salario en el estado nacional-sindicalista que él pretendía ayudar a construir:

“En cuanto a la política de salarios, la meta era hacer realidad el salario del trabajador justo y suficiente para todo su núcleo familiar. Nuestras reglamentaciones laborales no iban dirigidas solamente a fijar el salario base. Establecimos los premios por razón de antigüedad; aumentos especiales por causa de la penosidad o peligrosidad de ciertos trabajos; pagas extraordinarias conmemorando la Navidad y el 18 de julio; remuneración mediante incentivo. De este modo se hacía al trabajador partícipe en los beneficios por aumento de producción y se incrementaba la condición del salario como renta del trabajo.”<sup>3</sup>

Los conceptos de trabajo, salario y de familia aparecían indisolublemente unidos como explicitación, por otro lado, de una alternativa de sociedad que se pretendía reconstruir según

unos nuevos patrones caracterizados por ser la alternativa al mundo liberal, liberal-democrático y marxista.

El concepto de salario que se reclamaba se distanciaba de los fundamentos liberales en cuanto estos consideraban el trabajo como una mercancía sujeta a las fuerzas de la oferta y de la demanda y, por tanto, no consideraban la posibilidad del salario familiar. Se alejaban también, al menos teóricamente, de un concepto conservador-liberal que, partiendo de la misma noción liberal del trabajo, consideraba posible el salario familiar emanado de la caridad del empresario. Se pretendía, en último término, enlazar el salario con un esquema situado por encima de la mera relación interindividual que hiciera de la retribución una cuestión de justicia social. Todo ello provocaba que se defendieran un cúmulo de posturas formales (como el salario familiar) que posteriormente en modo alguno sirvieron para elevar el nivel de vida de las familias españolas.

En la mente de los panegiristas del franquismo estaba la crisis que suponía para la familia el proceso de concentración urbana en función del cual aquélla, considerada como unidad de producción, tendía a desaparecer constituyéndose el empleo en individual remunerado. Por tanto, siendo este el sostén de la familia, se mantenía la necesidad de desarrollar medidas apropiadas relativas a los salarios que sostuvieran su nivel adquisitivo, dado que el ingreso resultante del trabajo individual no era proporcional al número de personas que componían la familia. *Este era el origen del subsidio familiar como forma de materializar el salario familiar.* De todo lo cual hay que deducir que era necesario distinguir dos elementos en la retribución: por un lado, la resultante del trabajo y, por otro, la motivada por su función familiar. El primer elemento era denominado salario y el segundo sobresalario o subsidio unido al sueldo propiamente dicho, constituyendo ambos el salario familiar. "La causa jurídica del simple salario es el trabajo; la causa del subsidio o sobresalario es la familia; el subsidio se otorga, no por el trabajo, sino con ocasión del trabajo,"<sup>54</sup> afirmaba Quetglas.

El trabajo había de ser el método por el cual se produjera la regeneración espiritual y material de España. Así concebido, el trabajador español había de caracterizarse por estar en posesión de las cualidades de la abnegación, el sacrificio, el altruismo y la renuncia. Partiendo de esta visión de lo que había de ser el trabajo, el obrero español, supuestamente desprendido y generoso, tuvo como consigna "trabajar más y cobrar menos, porque así lo requería un momento de agobio de la patria."<sup>55</sup>

El productor-padre de familia adquiría desde esta vertiente una función básica: "asegurar a la esposa y a los hijos el pan cotidiano."<sup>56</sup> Y es que la esposa del obrero no debía salir de casa para

ir a trabajar en fábricas o talleres, sino que debía ocuparse de trabajos compatibles con su estancia en el hogar porque *"le femme devenue ouvrière n'est plus une femme."*<sup>7</sup>

Como se ha dicho la filosofía que del régimen emana en torno a esta cuestión se puede sintetizar afirmando que el salario debía ser la suma de dos elementos. Por un lado el valor de lo producido por el trabajador y, por otro, el originado por las necesidades de la unidad familiar a la que el trabajador perteneciese. El "productor," partiendo de estas premisas, era considerado en función de la aportación laboral que realizase, mientras que la familia era considerada en función del número de personas que la componían y según sus necesidades. La sociedad tenía una deuda con el trabajador-padre de familia como cuidador de la célula primordial para el sostenimiento de la sociedad: la familia.

En función de la percepción que desde el régimen se tenía no parece que en los años cincuenta se aceptara plenamente el funcionamiento del salario familiar. En las conclusiones del Congreso de la Familia Española se afirmaba tajantemente lo siguiente: "Y rechazamos la denominación de salario mínimo vital por considerar que el salario mínimo no debe limitarse a cubrir las necesidades mínimas de subsistencia, sino ser suficiente para que el trabajador y su familia puedan atender sus plenas necesidades," a lo cual se añadía que "la actual remuneración por trabajo es cuantitativamente irracional."<sup>8</sup> De ahí que se pidiera la "institución con plenitud del salario u otra forma de remuneración familiar que, con un automatismo reglado, se acoplara al nivel de precios...de acuerdo con los índices del Instituto Nacional de Estadística,"<sup>9</sup> lo cual era considerado como una solución plena para los problemas familiares en cuanto a su subsistencia económica se refería.

Existía en torno a esta cuestión la idea de que la prole podía constituir un freno para la contratación de los padres de familia. Alonso García se refería a esta cuestión en estos términos: "Digamos que en nuestro tiempo el tener familia se ha convertido en lo que podríamos denominar un riesgo." La organización económico-social, la estructura jurídico-laboral, y como conclusión, la insuficiencia del salario por razón del trabajo han determinado que, en condiciones de igualdad en la prestación de sus funciones, sea mucho más gravosa la existencia para el hombre cuando tiene más familia, y a medida que ésta aumenta. Esto llega a convertirse en una amenaza de miseria para la familia trabajadora, que suele ser, además demográficamente, la más numerosa.<sup>10</sup>

El obrero desde estas posiciones de defensa formal del salario familiar estaba investido de unos motivos que amparaban su demanda en torno al salario familiar. Siguiendo a Quetglas<sup>11</sup> existe, en primer lugar un motivo ligado al derecho natural; me refiero al matrimonio, dado que (siguiendo al autor mencionado) nada hay más natural al hombre que fundar una familia, lo cual

supone para el obrero la obligación natural de proveer las necesidades de los hijos y de la esposa. En segundo lugar, se puede hablar de la función social del padre de familia que prepara a los trabajadores futuros, rinde servicios al Estado criando a hijos que velarán con las armas por la seguridad del mismo o que protege a una prole que constituirá la próxima generación de ciudadanos. Y en torno a este aspecto se plantea Quetglas lo siguiente:

“¿No admitimos todos que los alcaldes, gobernantes, ministros, etc., deben ser retribuidos de una manera conveniente a la función social que realizan a favor del bien común? ¿Les niega nadie su derecho a un emolumento por gastos de representación? Si el ciudadano padre de familia cumple una función social en bien de la colectividad, la retribución de su trabajo deberá ser suficiente para que cumpla digna y decorosamente sus obligaciones, que tiene como padre de familia.”<sup>12</sup>

Una tercera cuestión que hay considerar era la obligación de renovar los instrumentos de trabajo, y en este sentido era la familia la que únicamente propiciaba que el obrero se conservara y se perpetuase. A todo esto podemos añadir la necesidad del ahorro ante el infortunio en una época en que la previsión no estaba plenamente desarrollada. Y como última motivación hay que decir que, de no ser el salario suficiente para el obrero y su familia, habría de encomendarse la defensa de ésta al Estado o debería de permanecer el obrero en estado de soltería.

Alonso García establecía tres opciones para materializar el salario familiar. Un salario mínimo proporcional al número de familiares dependientes del trabajador y la fijación de un salario suficiente para sostener a una familia media normal eran las dos primeras. La tercera era el establecimiento de un subsidio suplementario del sueldo y proporcional al número de familiares. La primera de las opciones tenía el grave problema de hacer recaer la carga económica sobre la empresa, la cual se resistiría a admitir trabajadores con cargas familiares amplias. En el segundo de los casos el problema radicaría en encontrar lo que podría ser considerado como salario suficiente para una familia media. Por tanto, según el mencionado autor, era la tercera de las opciones la más sensata a la hora de aplicar el salario familiar, en la medida en que tenía su motivación en una relación contractual pero guardando relación su cuantía con el número de familiares dependientes del trabajador.

Se partía, por tanto, de la idea de que la renta del trabajador había de ser de una cuantía suficiente para sustentar al propio trabajador y a su familia, si bien dicha renta había de constar de dos elementos: “el salario, o sea, la remuneración directa e inmediata por el trabajo prestado, y la ayuda familiar, valorada en función de las obligaciones de familia exclusivamente.”<sup>13</sup> Y es que el salario, desde un punto de vista formal era visto como algo más que una retribución, en el

sentido de que el hombre por medio del trabajo no llevaba a cabo exclusivamente un acto material de transformación del medio, ni realizaba una función sólo considerable desde un ámbito económico, sino que cumplía "un deber social, una obligación moral, un mandato divino, un servicio patriótico."<sup>14</sup> Desde esta vertiente el salario, no considerado exclusivamente como un elemento económico, debía tener unas características que le permitieran atender también a órdenes como el político, el social o el religioso, dado que constituía un bien espiritual para el individuo y su familia, y en función de que no era sólo un medio de subsistencia material sino también el fundamento de una vida moral y digna, cosa que el mundo de la economía liberal parecía haber olvidado.

Refiriéndose a Robertus, Lasalle o Adam Smith, etc., Pérez Botija les recriminaba el que para ellos la familia se estimara, "no como una célula social, sino groseramente, como un elemento de producción. Ellos veían la trascendencia puramente demográfica del salario, es decir, lo estudiaban desde un punto de vista económico. No hay en ellos el menor propósito de orden político, y mucho menos de orden moral,"<sup>15</sup> afirma Pérez.

Este concepto del salario familiar, según Jordana de Pozas,<sup>16</sup> era de raigambre católica. Vannutelli recalca el origen del salario familiar en la doctrina social católica y lo define como el salario dado al trabajador "suficiente para satisfacer, aparte de sus necesidades particulares, las inherentes a la familia."<sup>17</sup> A pesar de la crítica sistemática a lo que la República significó la Constitución de 1931 hizo suya la idea del salario familiar, y así en su art. 46 establecía que la legislación social de la República regularía entre otras cuestiones "el salario mínimo y familiar."<sup>18</sup> Sin embargo, según el mencionado autor, esta concepción del salario alcanzó su máxima expresión en las encíclicas de León XIII y Pío XI. En concreto, sobre la *Rerum Novarum* afirma Severino Aznar que "ha dado lugar a un movimiento mundial de doctrina y de acción, ha sido como un grito resonante de cruzada amparadora de la familia obrera, de sus mujeres y de sus hijos en ciego y cruel desamparo, y el eco de ese grito llega cada día más acogedor y eficaz a nuevas leyes de más numerosos Estados."<sup>19</sup> La idea de que, independientemente de la oferta y la demanda, una cosa posee un valor intrínseco es la que preside las encíclicas de los papas mencionados. Por tanto, por encima del contrato, que establece una relación entre el trabajador y el empresario, existe una ley natural que genera una serie de obligaciones ineludibles para el obrero; obligaciones que sólo puede cumplir con su salario y entre las cuales la más importante es el mantenimiento y cuidado de su familia. Dicho planteamiento vendría a constituir un lenitivo contra la lucha de clases en la medida en que el salario familiar vendría a "reducir la desproporción existente entre los ingresos de las distintas categorías sociales y profesionales."<sup>20</sup> Y es que también desde una perspectiva católica las dificultades económicas de los padres de familia debían desaparecer si se quería lograr la

felicidad familiar y que la familia pudiese cumplir con la misión que le estaba encomendada por Dios y por la Iglesia.

La concepción que del salario, en general, y del salario familiar, en particular, tenía José Antonio Girón aparecía transida de los señalados valores de lo católico junto a una tradición española que, remontándose a los tiempos de Felipe II, pretendía instaurar la justicia social. Con respecto a esta cuestión el antiguo ministro afirmaba lo siguiente:

“...el Estado Nuevo de España ha tenido siempre la precaución de huir de las fórmulas petulantes de los economistas a lo Adam Smith al mismo tiempo que huía de las imprecisiones patriarcalistas a que son tan aficionados algunos pseudosociólogos que confían a la buena voluntad de los empresarios la realización de la justicia social...Ni leyes de bronce, como las de Lasalle, ni leyes del embudo, como la de los esclavistas liberales con sus leyes de la compresión del salario. Nuestro concepto del salario justo para proporcionar al trabajador y a los suyos el bienestar, está transido de sentido humanístico, esencialmente cristiano, propia de nuestra mejor tradición jurídica y social, y está formulado en una Ley dictada por el rey Felipe II...Nuestros avances sociales no persiguen, en orden a la significación económica del trabajador, más meta que aquella meta universal, jamás alcanzada, de hacer realidad el salario justo y suficiente para todo el núcleo familiar...que el salario, como renta del trabajo, se acomode lo mejor posible a las exigencias de la justicia dentro de los límites tolerables por la economía nacional.”<sup>21</sup>

Como se puede observar la idea del salario justo o familiar aparece en estas líneas extraídas de los discursos de Girón como el fin esencial de toda la política social llevada a cabo desde el ministerio de Trabajo. La búsqueda de esta meta provocó, formalmente al menos, que el salario fuera visto no como un fruto del libre juego de las fuerzas del mercado sino como un bien moral o espiritual.

Desde este punto de vista, el orden económico se constituía en orden jurídico, ético y religioso poniéndose a debate “el problema de la cuantía mínima del salario justo planteándose...la cuestión de si para la fijación del salario se habrían de tener o no en cuenta las necesidades de la familia y no meramente las personales del trabajador.”<sup>22</sup> En cierta medida el salario familiar se constituía en fundamento de derecho natural dado que, si “el salario individual suficiente es de derecho natural, porque es necesario para cumplir el deber de mantener su vida...el salario familiar, que es necesario para cumplir el deber de mantener a los hijos, será también de derecho natural.”<sup>23</sup>

Todo se resumía en un principio de actuación salarial con respecto a la familia: "Hay que garantizar a los obreros el derecho a crear familias y los recursos para que puedan cumplir su deber de mantenerla. Hay que garantizar el derecho de los hijos a vivir y el de la sociedad a que las familias, en vez de su tortura, sean su salud y su paz,"<sup>24</sup> afirmaba Aznar Embid. Se buscaba, en principio, la defensa de las fuentes de ingresos salariales con el objetivo de mantener y mejorar el nivel de vida de las familias. Existía la idea de que el salario debía garantizar los elementos más básicos para la subsistencia de la familia, "alimentación moderada, vestidos y albergue; días de fiesta y algún recreo, educación propia para los hijos y posibilidad de ahorro para hacer frente a gastos extraordinarios, sobre todo en casos de accidentes, enfermedades y vejez."<sup>25</sup>

No parece ser que, de hecho, se hubiese implantado en España un subsidio familiar efectivo sobre todo si nos atenemos a manifestaciones como las del Congreso Provincial de Álava (antecedente del I Congreso de la familia española celebrado a finales de los cincuenta). En dicho congreso se afirma tajantemente que "por lo que tiene de justicia social, cuanto por considerarlo como imperativo de nuestra conciencia de católicos, pedimos que se vaya con toda urgencia a la implantación del salario familiar."<sup>26</sup> No es el único caso el alavés; Castellón entre sus conclusiones afirma que "es preciso que el salario familiar se eleve a cifras que constituyan verdadera y eficaz ayuda en función de las necesidades que ha de atender, arbitrando el procedimiento viable que haga llegar la compensación económica en proporción a las obligaciones familiares del trabajador."<sup>27</sup> En esta misma línea estaban las conclusiones de Madrid, en cuyo congreso se pidió "la institución con plenitud del salario familiar...que se acoplara al nivel de precios y de acuerdo con los índices del Instituto Nacional de Estadística."<sup>28</sup> Orense y Toledo coincidían con estas afirmaciones. En el primero de los congresos se afirmaba que "la protección económica de la familia debe considerarse y concretarse en un salario familiar único, suficiente y socialmente justo, que permita sin ahogos económicos atender a sus fines y desarrollo."<sup>29</sup> Y en el segundo de los casos, se ponía de manifiesto que "el salario único del cabeza de familia o patria potestad debe garantizar eficazmente el desarrollo y fines trascendentes de la familia española, en un ambiente digno y honesto."<sup>30</sup> A todo ello cabe añadir que entre las Conclusiones del Congreso de la Familia Española se pedía "el incremento de los salarios familiares en aquellos sectores donde el salario personal era más bajo."<sup>31</sup> Fundamentalmente el bajo nivel de los salarios se mantuvo en el campo, cayendo en términos reales por debajo de los niveles anteriores a la guerra civil. Ello provocó que la mecanización resultara complicada o que no resultara rentable (sobre todo en los años cuarenta) siendo invertidas las ganancias de la actividad agraria en otros sectores o dedicándose a la compra de tierras.<sup>32</sup>



Y es que la cuestión salarial generó, en algunas ocasiones, las críticas más duras para el primer franquismo. "...Y situaciones como la actual, con unos salarios que forzosamente condenan a la miseria a la gran mayoría de los obreros, en aras de lo que llaman el bien de las generaciones futuras. Los salarios superiores y acordes con el nivel de vida, dicen, no podrían ser soportados por las empresas y mataríamos la gallina de los huevos de oro. Lo mejor es que primero nos hagamos ricos, para después poder ser justos. Y, que se sepa, no se ha inventado otro procedimiento mejor que ayudar y forzar el capitalismo. Si repartimos ahora nos va a tocar a muy poco; tengamos paciencia y esperemos a que la vaca engorde para comérmola,"<sup>33</sup> afirmaba Fernández de Castro. El mensaje esencial de esta visión apocalíptica de la realidad salarial en España se resume considerando la idea de que la pobreza y el atraso de España eran fruto de las fuerzas del liberalismo que en otras épocas habían campado a sus anchas por las tierras de España, aunque por lo que Fernández de Castro describe, parece que en los años finales de la década de los 50 también ese era el caso. Respecto a ello, el mencionado autor afirma que "problema fundamental de nuestras sociedades, en primer término, es el que plantea la cuestión social, que en sí, es un problema de justicia: una clase acomodada poco numerosa detenta la casi totalidad de las riquezas del país, mientras que el resto de la nación, no tiene nada, absolutamente nada..."<sup>34</sup> Y siguiendo con esta línea demoledora de los fundamentos económico-salariales del régimen, se refiere a la masa de trabajadores como "gran masa proletaria, que hoy, debido a los pequeñísimos salarios que les impone la torpe visión de nuestras clases acomodadas, sólo pueden atender muy malamente a sus necesidades más estrictas y perentorias, pero que, de hecho, están ausentes como compradores del mercado nacional de consumo...convirtiendo en definitiva todo el sistema en una monstruosa concepción en la que una pequeña clase privilegiada hace trabajar a todo el país para que produzca solamente el pequeño número de bienes que ellos necesitan y sólo ellos son capaces de consumir."<sup>35</sup> Y añade más adelante el mismo autor en torno a los empresarios españoles:

"No puede ser paternalista un empresario que está en deuda con sus obreros, que no les paga al menos el jornal justo, y este es el caso, por desgracia, de la mayor parte, por no decir todos los patronos y empresarios españoles. En rigor las obras paternalistas de estos empresarios no las hacen con su dinero, sino con el dinero de los que de ellas se benefician...Ya no se trata de pagar unos salarios justos, sino de examinar si la situación privilegiada del patrono...es justa en un sentido moral o se deriva de unas estructuras injustas en sí...mientras los empresarios ajusten su conducta y apoyen y estructuren sus empresas en principios capitalistas, su posición privilegiada será injusta y el paternalismo que ejerciten les colocará en una usurpada posición protectora que ofenderá, sin remedio, a la dignidad del obrero, que no reconocerá en el empresario al ser naturalmente superior, sino al que, con su pretendida concesión de beneficios, trata de ocultar y defender una ventajosa situación que en justicia no le pertenece."<sup>36</sup>

En el autor que ahora consideramos la concepción que de los salarios defendía Girón de Velasco era una pura falacia. "Nadie puede negar que en España, por razones de tipo exclusivamente económico, se están pagando salarios miserables, muy por debajo del mínimo vital, y nadie, tampoco, será capaz de negar de buena fe cuál es la norma moral de la Iglesia Católica en materia de salarios. La incompatibilidad es clara; y es claro el hecho de que las normas que se siguen nacen del capitalismo y que predomina el principio económico sobre el principio moral para la conceptualización de lo que es lícito y lo que es ilícito,"<sup>37</sup> afirmaba el autor echando por tierra los planteamientos idealistas que, impregnados de retórica falangista, servían a Girón para hacer de España la vanguardia de la aplicación del salario familiar y la defensora de los principios de justicia social. Esa revolución, de la que Girón en sus comienzos fue uno de los garantes, no parecía haber llegado si consideramos las protestas en torno a los salarios de sectores del franquismo que, por otro lado, no se encontraban entre los más desafectos al régimen. Con respecto a la realidad salarial afirmaba Fernández "que un régimen de salarios es hoy tan injusto como lo fue, en su tiempo, el mismo régimen de esclavitud."<sup>38</sup>

Las clases altas eran desde el punto de vista de Fernández de Castro las principales productoras de las desgracias de los trabajadores:

"...las clases acomodadas están especialmente satisfechas de que los asalariados no pueden hacer valer su fuerza numérica debido a que, por razones políticas muy atendibles y hasta, si se quiere razonables como principio de gobierno, está prohibida su gran arma de lucha: la huelga. Los asalariados tienen que conformarse con esperar que llegue el momento en que la anunciada revolución desde arriba sea un hecho, albergando íntimamente serios temores de que tal revolución no se realice o se demore hasta otras generaciones, entorpecida por las clases más poderosas del país, que son, declaradamente, conservadoras...Las clases acomodadas...se aprovechan sin escrúpulos de esta situación...pagan los salarios mínimos legales a los obreros y hacen suyos la totalidad de los beneficios que producen sus capitales."<sup>39</sup>

Fernández de Castro lanza sus más explosivas andanadas contra los españoles que además se consideran católicos dado que se adaptan a estas formas sociales anticristianas haciendo compatible su cristianismo con sueldos dependientes de sus voluntades e inferiores a las necesidades familiares básicas. Sobre ellos, concluye taxativamente que "no son buenos católicos los que se lucran con la necesidad y la miseria defraudando salarios o prestando a intereses elevados,...piensan que quienes tales cosas dicen son comunistas, cuando no herejes, que van contra el sagrado orden vigente y contra el no menos sagrado derecho de propiedad, y hasta creen que atacamos el fundamento mismo de la Iglesia, que creen apoya su

conservadurismo burgués y capitalista...No se trata de afán de novedades, sino de una vuelta a los principios cristianos olvidados por los que han conformado su precaria religiosidad a los modos de vivir de una sociedad que ya no es cristiana...No estamos conformes con la sociedad ni con sus estructuras, en cuanto esta sociedad y estas estructuras no son cristianas.”<sup>40</sup>

A modo de conclusión general citaremos las valoraciones que sobre el tema realizó el Congreso de Valencia: “Se trata, en definitiva, de que el salario no sea sólo un medio de vivir, sino que sirva para vivir en determinadas condiciones y cuya fijación debe hacerse sobre la base del índice de vida, en cuanto a precios reales de artículos de primera necesidad.”<sup>41</sup> En definitiva, si algo deja claro la alusión sistemática y más o menos explícita a esta cuestión, a sus insuficiencias o carencias, es que la aplicación del salario familiar no se realizaba de forma eficaz sino que más bien su ámbito de acción era el propio de una medida parcial y desacertada, cuando no meramente utópica.

En cuanto a sus logros podemos citar la opinión que sobre el tema tenía a finales de los años cincuenta el obispo de Solsona como muestra de la distancia entre los objetivos planteados y los logros conseguidos:

“...el trabajo excesivo a que se ven obligados muchos padres de familia que no tienen suficiente con el salario normal y han de buscar un suplemento de trabajo...En las zonas industriales, la misma organización del trabajo (son muchas las fábricas en las que trabajan tres turnos y no todos los miembros de una misma familia trabajan en el mismo turno) imposibilita, no pocas veces, que los distintos miembros de la familia puedan encontrarse juntos para las horas de comer.”<sup>42</sup>

Se justificaba Tarancón en una referencia fundamental para la jerarquía católica; en concreto, en la “*Casti Connubi*” de Pío XI en la que se reclamaba “el salario familiar suficiente para que las necesidades familiares queden suficientemente atendidas.”<sup>43</sup>

Abordando el tema del salario desde una vertiente jurídico-laboral, la Ley de Contrato de Trabajo de 1944<sup>44</sup> describe el salario como la totalidad de bienes percibidos por el trabajador como consecuencia de su trabajo. Concretamente el artículo 37 del capítulo V describe el salario de la siguiente forma: “Se considerará salario la totalidad de los beneficios que obtenga el trabajador por sus servicios u obras, no sólo lo que reciba en metálico o en especie como retribución directa e inmediata de su labor, sino también las indemnizaciones por espera, por impedimentos o interrupciones del trabajo, así como la obtenida por uso de casa-habitación, agua, luz, manutención y conceptos semejantes, siempre que se obtenga por razón o en virtud del trabajo o servicio prestado.” Esta definición no evitaría que fuera únicamente el salario

base, pequeña porción de las retribuciones de los trabajadores, el que sirviera de base para el establecimiento de las cotizaciones en los seguros sociales con el consiguiente perjuicio para las rentas diferidas (por accidentes, vejez, invalidez u otras causas) que recibían del aparato de previsión franquista.

Otro aspecto característico del sistema salarial del franquismo y más concretamente de la estructura salarial era la desigualdad remunerativa entre los trabajadores en función de la ocupación de los mismos, de la empresa o actividad productiva en que trabajasen, del punto geográfico en que se hallasen y de otros motivos personales como la edad o el sexo. Con respecto a esta cuestión se impuso "la tendencia a la reducción del salario diferencial en la estructura española a lo largo de los años 1940-1950."<sup>45</sup> En torno a esta cuestión añade Perpiñá:

"Uno de los secretos mejor guardados, comparable incluso al sigilo diplomático o militar, es el que cubre y oculta lo que los españoles ganan con su trabajo y fuera de su trabajo. Si esto constituye de entrada una dificultad y un obstáculo para la determinación cuantitativa de la estructura económico-social de España, significa, en compensación, un dato positivo para el conocimiento cualitativo de esa estructura, ya que nos da algunas de sus características más relevantes: su irregularidad, su inestabilidad y su clandestinidad."<sup>46</sup>

Una de las polémicas en torno a las percepciones salariales de los trabajadores españoles tenía que ver con el problema de las horas extraordinarias en la medida en que gran parte de ellas se realizaban sin razón que lo pudiera justificar y por empresas que trataban de economizar jornales por no tener unas plantillas ajustadas a la capacidad productiva efectiva de sus industrias incluso en momentos en que el peso de la desocupación forzosa incidía muy negativamente en las economías familiares. En cualquiera de los casos, en modo alguno se llegó a plantear por parte de la autoridades franquistas un verdadero marco restrictivo que imposibilitase los efectos negativos en la economía nacional y menos todavía en el caso de las faenas de recolección agrícola y trabajos similares.<sup>47</sup>

En este apartado hemos intentado únicamente una aproximación formal al concepto de salario del primer franquismo, que es el concepto de salario familiar plasmado en el denominado subsidio familiar. Sin embargo, independientemente de las valoraciones más o menos positivas, ésta ha sido sólo una aproximación teórica a dicho concepto. De alguna de las fuentes que hemos utilizado podemos deducir la desproporción típica de este período que estudiamos entre la teoría y la práctica, pero de cualquier manera en los apartados siguientes<sup>48</sup> dedicados al tema

de los salarios habrá forma de comprobar si estos formalismos sirvieron o no para imponer de forma efectiva una elevación real del nivel de vida de los trabajadores españoles.

### 3.1. Salarios e intervencionismo.

Desde el momento en que en el Fuero del Trabajo se afirma que "la producción nacional constituye una unidad económica al servicio de la Patria"<sup>49</sup> la retribución de los trabajadores queda a expensas de lo que las autoridades del régimen dispongan para ello a partir de una política global ordenancista nacida tanto de la situación de urgencia de la que surge el propio régimen como de la "mentalidad defensiva y numantina"<sup>50</sup> del nuevo estado. Dentro del esquema social propuesto o impuesto por el franquismo, la armonía de los españoles ocupaba el punto central sobre el cual giraban las restantes realidades sociales y de ahí la preocupación, en función de este deseo de paz social, por estudiar la cuestión "del salario mínimo que sea conveniente establecer...teniendo en cuenta las circunstancias de potencialidad económica de la rama, esfuerzo necesario en el trabajo a efectuar y elevación del nivel de vida."<sup>51</sup> Por tanto, una de ellas, los salarios, quedaba fuera del ámbito de la libre estipulación de las partes, siendo el Estado el que estipulaba la cuantía de los mismos por medio de las reglamentaciones del trabajo en los distintos sectores de la producción (Ley de 16 de octubre de 1942). Ello suponía que trabajadores y obreros no podían negociar las condiciones de su relación laboral y que, por supuesto, quedaba fuera de su ámbito de influencia el incidir en un sentido u otro sobre los salarios, rompiendo la tónica de lo que hasta este momento había estipulado la ley de 21 de noviembre de 1931 que permitía regular los salarios a través de los jurados mixtos integrados por obreros y patronos y que establecía las denominadas bases de trabajo.

Hay que considerar igualmente que la concepción sobre las "antiguas" luchas sindicales cuyo objetivo era conseguir elevaciones reales de salarios eran percibidas como "pequeñas guerras civiles"<sup>52</sup> y por tanto la intervención del Estado, que por medio de las reglamentaciones establecía las tablas de las remuneraciones de los trabajadores, era asimilable a un tratado de paz, pero a un tratado de paz en el que una de las partes (la de los trabajadores) partía con desventaja con respecto a un Estado que imponía salarios reales bajos que beneficiaban al sector empresarial. Y es que el mecanismo para la elevación de precios de productos intervenidos y de salarios no era el mismo, sobre todo cuando la empresa ocupaba un lugar estratégico en el panorama nacional hasta quedar, de hecho, por encima de la ley. Así, en los primeros meses de 1952 se esperaba una subida de los salarios base que se postergó finalmente. Sin embargo, los precios continuaban su escalada en algunos casos sin justificación aparente. Pongamos en ejemplo. Por estas mismas fechas Altos Hornos de Vizcaya recibió la autorización para realizar exportaciones de lingote con el fin de importar cok con el objeto teórico de aumentar la producción. A esta empresa se le autorizaba la elevación de una pts. en kg. de

algunas partidas que suponían una elevación de sus ingresos. Así pues, para la elevación de los salarios era evidente que se necesitaban un sinfín de estudios y comisiones para que finalmente pudieran ser aprobados en Consejo de ministros mientras "los aumentos de precios se aprueban por la Secretaría de cualquier ministerio, sin que, al menos públicamente, se sepa si ha sido conocido y aprobado por el Gobierno."<sup>53</sup>

La lucha contra la inflación fue otro de los motivos que condujo al establecimiento de los llamados "decretos de política de salarios de 1944."<sup>54</sup> Sin embargo, el control total de los salarios no fue posible en la medida en que la prohibición de incremento en las retribuciones de los trabajadores no se realizó con carácter general sino sólo cuando esa elevación tenía un cierto grado de generalidad en un sector concreto de la producción o en un determinado ámbito geográfico. De igual manera "el Estado no pudo impedir las mejoras salariales clandestinas, reconocidas explícitamente años después con las alzas oficiales de 1956."<sup>55</sup> Sobre esta cuestión el Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación ratificaba esta realidad:

"...los verdaderos especialistas...cobran en todas la provincias jornales superiores a los establecidos en la Reglamentación de Trabajo, pero las empresas al hacer las peticiones de estos obreros les fijan los jornales que prescribe dicho texto legal, hasta tanto que conocen el grado de especialización y el rendimiento del trabajador."<sup>56</sup>

Pese a ello las primeras voces discordantes con respecto al sistema intervencionista y reglamentarista comenzaron a dejarse sentir diez años antes, cuando se solicitaba por medio de la organización sindical que se modificase el Decreto de 31 de marzo de 1944, que declaraba nulos los aumentos de salarios que libremente determinasen la totalidad o la mayor parte de los empresarios de la misma rama en una localidad o provincia.<sup>57</sup> En esta línea estaba el Decreto de 16 de enero de 1948 y contra estas dos disposiciones luchaban denodadamente los estamentos sindicales como forma de elevar sus atribuciones en tan trascendental terreno que poco a poco iba limando su credibilidad hasta generalizar la percepción de que constituían una delegación de burócratas del régimen cuya única finalidad era la de disciplinar a la masa productora del país. Y es que estas dos disposiciones exigían que, toda modificación de los salarios, independientemente de que patronos y trabajadores hubieran llegado a un acuerdo en la correspondiente junta sindical, hubiera de ser aprobada por el ministerio de Trabajo. En esta faceta como en otras (pongamos como ejemplo las reglamentaciones laborales en que la organización sindical tenía sólo capacidad de asesoramiento) el sindicato era una institución vacía de contenido integrada por un sinfín de jarrones emperifollados hasta la extenuación, un ramillete de burócratas con vocación de servir de bálsamo a una realidad social realmente dura por medio de sus aromas pretendidamente revolucionarios.<sup>58</sup>

Ese intervencionismo resultaba tremendamente negativo si se tiene en cuenta los efectos perversos que podía producir, en el sentido de que los costes salariales variaban de forma significativa en la medida en que una determinada empresa quedaba enclavada en zonas geográficas calificadas como de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta categoría, con diferencias en el coste de la mano de obra lo suficientemente significativas.

Este intervencionismo resultaba especialmente lesivo para los trabajadores por cuanto se tendía a mantener los salarios reales a niveles reales muy bajos.<sup>59</sup> Pese a ello el intervencionismo salarial tenía a veces un carácter relativo. Tomemos como ejemplo un sector básico de la economía española en los años cuarenta como era la agricultura y dentro de ella el sector del olivar. En el año 1946 el sueldo teórico de un vareador se situaba en las 12 pts. diarias; sin embargo, el sueldo por cavar los olivos (lo cual se hacía al día siguiente del vareo) era de 9,10 pts. diarias, siendo éste un trabajo más duro y menos cómodo que el anterior. Por tanto, la recolección en sí, generaba sueldos más elevados que el resto de las tareas a realizar en la agricultura sin que hubiera relación entre el sueldo y la necesidad de una especial preparación o dureza de la actividad. Por el contrario, la diferencia entre el sueldo por una y otra actividad tenía como único referente real el principio básico del liberalismo económico que encuentra en el juego de la oferta y la demanda el principio rector de la retribución de un factor del proceso productivo como el trabajo<sup>60</sup> con lo que de nuevo podemos decir que encontramos atipismos significativos a la hora de cotejar la teoría con la práctica, cuestión que se va a acentuar todavía más a medida que nos acerquemos al final de la época Girón y más concretamente al año 1956.

### **3.2. Salarios e inflación.**

#### ***3.2.1. Salarios e inflación en los años 40.***

Fueron estos años cuarenta los más duros para la población trabajadora y siguiendo a Tamames se puede afirmar que hasta llegar al año 1954 no se recuperó el nivel de renta per cápita anterior a la guerra civil siendo el año 1945 el año más perverso de todos ellos, conocido por este motivo como "el año del hambre."<sup>61</sup>

Desde un punto de vista meramente económico este período de la Historia de España que abordamos en esta investigación ha sido definido por algunos autores, entre ellos M. Jesús González, como "un proceso de industrialización basado en sustitución de importaciones indiscriminadas, alta protección y reiteradas presiones inflacionistas."<sup>62</sup> Por tanto, la sistemática intervención y control de la producción y con ello de los salarios define este período de la Historia de España:

"Pel que fa als salaris, el tret fonamental que caracteriza tota la política franquista serà la permanente intervenció i control de l'estat en el procés de la seva determinació...El Ministeri de Treball i l'Organització Sindical es converteixen en els dos instruments principals encarregats, en primera instància, de controlar i d'acomodar l'evolució dels salaris a les necessitats del capital."<sup>63</sup>

Todo ello revertiría negativamente también sobre sectores industriales que, como el siderometalúrgico de Altos Hornos de Vizcaya,<sup>64</sup> veía en la inalterabilidad de los precios de venta un elemento de grave deterioro para la economía de las empresas ante lo cual sólo la emisión de obligaciones (en otros casos el mercado negro) podía ayudarles a salir de la crisis.

Hay que tener en cuenta que en la carta magna del mundo del trabajo, es decir, en el Fuero del Trabajo,<sup>65</sup> se establece implícitamente la obligación por parte de las autoridades de controlar los diversos factores que intervienen en la producción en la medida en que "quedan subordinados al supremo interés de la Nación."<sup>66</sup> El objetivo básico de este planteamiento era desterrar los posicionamientos liberales que permitían a las partes negociar libremente las remuneraciones y por otro lado establecer una política salarial uniforme o como indica Fina:

"...d'establir un rigid mecanisme de control sobre el creixement dels salaris, el que es podria denominar un criteri de política salarial uniforme."<sup>67</sup>

Pese a ello, como señala el propio Fina<sup>68</sup> existía la posibilidad por parte de las empresas, dentro de un esquema paternalista y discriminatorio, de conceder aumentos de tipo individual al personal que, discrecionalmente e individualmente, creyera oportuno.

Existen numerosas dificultades de cara a analizar con rigor la cuestión de la inflación y los salarios "debido a la inexistencia de series estadísticas continuas y suficientemente fiables acerca de los niveles salariales prevalecientes en dichos años,"<sup>69</sup> señalan Ferner y Fina. De hecho, no fue hasta 1963 cuando el Instituto Nacional de Estadística comenzó a elaborar las encuestas sobre salarios.

Por tanto, la inflación sobresale como uno de los rasgos más acentuados del período que tratamos. González establece una serie de períodos en los que la inflación se tornó más acentuada en función del crecimiento relativo del índice de precios al por mayor con base 100 en el año 1958. En primer lugar, destaca el período 1940-1951 como una fase de fuerte presión inflacionista, caracterizado por un alza constante de los precios en el trienio 1941-43 y en los años 1950 y 1951. Estos años cuarenta pueden ser calificados como años en que la "economía española se desenvolvió en un ambiente de escasez generalizada, racionamiento y cupos de



materias primas.<sup>70</sup> Entre uno y otro período podemos establecer un tercero entre 1945 y 1947.<sup>71</sup> En la primera etapa fue la urgencia de la reconstrucción la que estuvo en el origen de modo fundamental en el proceso inflacionario, mientras que en la segunda el comportamiento de tan fundamental variable tuvo su origen en las malas cosechas y en la política monetaria. En el último de los ciclos expuestos se conocieron “las tensiones inflacionistas más fuertes desde el fin de la guerra”<sup>72</sup> a raíz de la desaparición de algunos controles que originaron un intento de equilibrio de la economía por medio de los precios.

Hay que tener en cuenta que a lo largo de la década de los 40 el P.I.B. permaneció prácticamente estancado conviviendo esta realidad con las acusadas tendencias inflacionistas de los mismos años. En estos años cuarenta los salarios nominales ascendieron mucho menos que los precios (sobre todo en lo referente a los productos alimenticios) “aunque la diferencia se compensó en parte con el pluriempleo, las actividades en el mercado negro y los comienzos del mal llamado sistema de seguridad social. En el I Congreso de Trabajadores, celebrado en 1946, se constató la idea de que el actual nivel de vida de los trabajadores no respondía a lo que se defendía desde los postulados formales del régimen. El “capitalismo puro y duro”<sup>73</sup> se abría paso en el régimen hasta tal punto que algunas voces saltaron dentro de sus propias estructuras de poder para denunciar la ausencia de una moral del dinero y la eclosión sin freno de un afán desmedido de enriquecimiento por cualquier vía.

Como ya se ha mencionado, el nivel de vida de 1936 no se superó hasta la década de los cincuenta.<sup>74</sup> En esta línea el sindicato de la provincia de Córdoba reclamaba a finales de 1943 la necesidad de que los salarios mínimos fueran elevados puesto “que son insuficientes para el sostenimiento de una familia.”<sup>75</sup> Por el contrario, a la moderación inflacionaria de 1951-1952 le correspondió un tasa de crecimiento anual acumulativo entorno al 10 %, en el primer año, y al 8,3 %, en el segundo.

La situación política de la España franquista tras el final de la II Guerra Mundial, las dificultades para que España fuera aceptada en la comunidad internacional nos ponen en contacto con la forma en que se desarrolló, por parte de las autoridades del régimen, una opción inflacionista ajena a criterios de control y de eficiencia económica que provocaron períodos inflacionarios muy intensos separados por momentos de menor intensidad pero muy cortos. “Las autoridades, consciente o inconscientemente, no parece que hayan luchado contra el clima inflacionario: La falta de ideología antiinflacionaria y la básica urgencia de reconstruir y abastecer en condiciones difíciles, inclinan a pensar que la Administración del general Franco no pretendía frenar el proceso,”<sup>76</sup> afirma González.

Estas pueden ser las notas más características de la evolución de una variable como la inflación que tanta influencia tuvo sobre el nivel de vida de los españoles en la medida en que su renta real era carcomida sistemáticamente por aquélla. Sin embargo, por lo que toca a esta tesis y sobre todo, por lo que hace referencia a los momentos más difíciles de Girón al frente del ministerio de Trabajo, son los años 50 los de mayor interés para este doctorando.

### ***3.2.2. Salarios e inflación en los años 50.***

Dentro del segundo gran ciclo inflacionista que señala González (1951-1959) se pueden establecer también varios subperiodos. Una primera fase, entre 1952 y 1956 se caracteriza por ser un momento de bastante estabilidad en los precios. Si la media del período anterior estaba en torno al 14 %, ahora nos situamos en torno al 4,3 %. La segunda fase, que se cierra en el año 1959, se caracteriza por unos niveles de inflación más elevados, en torno al 9 %. Dentro de esta segunda subfase, se puede afirmar que la inflación no fue importante por la intensidad de la misma (téngase en cuenta que entre 1950 y 1951 los niveles alcanzados superaron el 23 %), sino por el hecho de que, tras una fase de calma inflacionaria, se retornó a las tendencias de los años 40.

Como se ha señalado anteriormente las tasas de crecimiento inflacionario se disparan, si las comparamos con las de los años 40. El profesor González señala que el despegue de la industria manufacturera, de electricidad, gas y agua se localiza en 1950; en 1951 en el comercio, en 1952 en la Banca y en 1953 en las obras públicas. Ello permite afirmar, teniendo en cuenta la moderación de la inflación, que “la década de 1950, iniciada con las tasas de crecimiento más altas desde la guerra civil hasta ahora, fue escenario de hondas transformaciones económicas.”<sup>77</sup>

Las altas tasas de inflación de 1956 y años posteriores fueron motivadas, en parte, por la existencia de un sector exterior orientado a la industrialización protegida,<sup>78</sup> que no pudo adaptarse (al igual que la agricultura) a la demanda de productos de alta elasticidad-renta al menos en parte. Ese fue el origen de la elevación de los precios industriales y agrícolas en esa fase de la economía española.

Este capítulo de la tesis tiene una especial importancia en la medida en que se relaciona directamente con las medidas dictadas por Girón a finales de los cincuenta con el objetivo de elevar los salarios de los trabajadores. Según lo anteriormente expuesto, la salida de Girón del gabinete franquista no tendría una relación directa con la incidencia que sobre la inflación tuvieron sus medidas. Habría que empezar por considerar la debilidad de una economía española, una debilidad que se intensificaba más si cabe al tratar el tema de las divisas. El complicado mecanismo de control exterior generaba un tipo de cambio ilusorio que tenía por

fin mantener protegida a la industria española e intensificar el proceso de sustitución de importaciones. Hay que señalar que, en cuanto al cambio se refiere, el oficial de la peseta entre 1939 y 1948 permaneció fijo, manteniéndose en unos niveles muy por encima de los estipulados por el mercad. Sin embargo a partir de 1948, con el Decreto de 3 de diciembre la España franquista adoptó un sistema de cambios múltiples, intermedio entre el tipo de cambio fijo y el cambio libre. Estas, entre otras, eran las motivaciones reales que condujeron al cambio de gobierno de 1957 y posteriormente al Plan de Estabilización. "La inflación sólo fue importante en la medida en que contribuyó a esta crisis...quien precipitó el episodio de 1959 fue la crisis del sistema protector."<sup>79</sup> Así pues, no puede establecerse una explicación monocausal de cara a interpretar el proceso inflacionario que dio comienzo en 1956. Ni el déficit del sector público, ni la elevación de los salarios, ni la inelasticidad de la oferta agrícola explicarían totalmente el comportamiento de la inflación. Convergen en este proceso una serie de factores concatenados que pueden resumirse de la siguiente forma:

"...la explicación...debe buscarse en el conjunto de relaciones de interdependencia que iluminan el papel desempeñado por la forma de adquirir recursos que utilizó el sector público; por la disposición de las autoridades monetarias a financiar no sólo las subidas de salarios de José Antonio Girón, sino también, la mayor demanda de alimentos de elasticidad-renta que la oferta no podía atender a corto plazo sin notables subidas de precios."<sup>80</sup>

En torno al polémico tema de las subidas salariales de Girón, Tortella<sup>81</sup> plantea las dificultades que generaba un mercado laboral rigurosamente reglamentado desde el final de la guerra civil. La realidad salarial de los años 40 se caracterizó por la pérdida de poder adquisitivo real de los salarios. Ferner y Fina<sup>82</sup> caracterizan a estos años por las importantes fluctuaciones de los salarios reales, tanto de signo negativo como de signo positivo. Según estos autores:

"...las fuertes caídas de los salarios reales son debidas a los súbitos e intensos procesos inflacionistas que experimenta la economía española, originados por importantes crisis de oferta de productos agrarios, en un contexto en que los salarios nominales, fijados burocráticamente por el ministerio de Trabajo, presentan una relativa rigidez. Estos últimos, por su parte, acaban adaptándose a los nuevos niveles de precios, de forma también muy brusca, y con retrasos que podían variar según empresas o industrias concretas."

Según Girón lo verdaderamente importante en el año 1956 era poner al día el poder adquisitivo de los trabajadores españoles sin pensar que la política inflacionaria era una contradicción con el deseo de elevar el nivel de vida del trabajador.<sup>83</sup> Ese era el sentido del Decreto de 26 de

octubre de 1956<sup>84</sup> sobre salarios cuyo espíritu resume Girón en sus memorias y que viene a coincidir con la negativa al monocausalismo simplificador de Tortella:

“Otra cuestión fundamental para mí era poner al día el poder adquisitivo del trabajador español y compensar el colosal esfuerzo realizado por nuestras gentes a lo largo del tiempo inmediatamente anterior...el ritmo de crecimiento podía descompasar el presente de cualquier trabajador. Así se produjo el decreto (26 de octubre de 1956) sobre salarios por el que se autorizaba al ministerio de Trabajo para dictar cuantas disposiciones fueran necesarias sobre absorción de aumentos voluntarios y subidas de salarios. De esta forma se produjo el aumento de haberes más completo que ha conocido nuestro pueblo, toda vez fue durante más de un año estuvieron publicándose en el Boletín Oficial del Estado los aumentos de remuneraciones que afectaron a todas y cada una de las actividades laborales del país.

Después de la crisis del 57...los nuevos equipos trataron de atribuir a esta decisión mía, el margen de desestabilización que pudo producirse dos años después y que sería corregido con bastante facilidad, hasta el extremo de que España había entrado en un tiempo de bienestar del que no salió hasta los años ochenta...De todas formas, no era la política social la que inquietaba a la juventud. No eran los obreros los que cercaban al régimen de Franco.”<sup>85</sup>

Y añade Fina en su estudio de 1978:

“...els salaris de postguerra, mantinguts a un nivel nominal semblant al de preguerra, van anar perdent progressivament poder adquisitiu fins a tocar fons furant la segona maitata dels anys 40.”<sup>86</sup>

Sin embargo, el anuncio de esta elevación no sirvió más que para provocar el acaparamiento y la elevación de precios de una minoría de especuladores que buscaban elevar su margen de beneficios sin que el régimen percibiera en toda su dimensión esta posibilidad.<sup>87</sup> Por otro lado, vino a potenciar el deseo de las empresas de despedir a todo el personal eventual que fuera posible tratando de aminorar las consecuencias de la elevación de salarios.<sup>88</sup> Pese a la aparente oposición de la organización sindical desde dentro de ella se estaba favoreciendo dicha política puesto que lo que se solicitaba desde la misma era que se facultara a las empresas para despedir libremente a los empleados cuyo nivel de producción no alcanzara los límites propuestos por la empresa.<sup>89</sup> En otros casos la alternativa de la empresa podía ser la reducción de otros conceptos retributivos que equilibraban la subida de salarios.<sup>90</sup>

Considerando el caso de R.E.N.F.E., se observa que los aumentos de salarios reales más significativos se situaron en los años 1945, 1950, 1952, 1954, 1956 y 1957. El primero de ellos obedeció a la puesta en práctica de la primera reglamentación de R.E.N.F.E. A la altura de 1948, fruto del proceso inflacionista, el poder adquisitivo de los trabajadores de R.E.N.F.E. estaba en los niveles de 1943. Sólo ligeras acciones tendentes a elevar las primas atenuaron ligeramente el impacto de la inflación. "Es interesante subrayar el papel que representaron los pluses especiales para atemperar en alguna medida las caídas de salarios reales producidas por la rigidez del sistema de Reglamentaciones,"<sup>91</sup> lo cual no impide insistir en el carácter insuficiente de pluses como el de carestía de vida o el familiar. Para algunos investigadores como Solé la supuesta rigidez del sistema creado por medio de las reglamentaciones era una falacia en la medida en que el Estado "no pudo contrarrestar la fuerza de la realidad de la negociación, encubierta pero efectiva, sobre los salarios y las condiciones de trabajo ente los empresarios y los obreros,..."<sup>92</sup>

A pesar de ello entre 1946 y 1959 se puede observar como en el caso de R.E.N.F.E. el salario base, en relación a los pluses, descendió hasta constituir aquél un 73 % del total. Ello fue debido a la utilización de los pluses como "mecanismos de compensación de las pérdidas de poder adquisitivo producidas por los súbitos aumentos de los precios de las subsistencias."<sup>93</sup> En cuanto a las elevaciones de salarios de 1954 Fina recalca la influencia que tuvo el gobierno de 1951 en la medida en que comenzó a desarrollar una política económica diferente que "consisteix en el fet d'anar potenciant el mercat interior."<sup>94</sup> El de 1952 fue motivado por la paga extraordinaria concedida con carácter casi general aquel año. Adviértase, "que con la primera de estas revisiones, que comportó un incremento de los salarios monetarios del orden del 33 %, no se llegó ni siquiera a alcanzar el nivel de salarios reales establecido en la Reglamentación de 1945. Sólo con la revisión de 1954, en el contexto de una excepcional estabilidad de precios, se superó en un 3,2 % el poder adquisitivo del salario del cuarenta y cinco."<sup>95</sup>

En el caso de los mineros asturianos, Benito del Pozo<sup>96</sup> hace referencia al hecho de que sólo en 1953<sup>97</sup> se modificaron las tablas salariales de las reglamentaciones de trabajo vigentes desde 1946. La motivación de esta subida salarial estaba, según las autoridades franquistas, en la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Y ello a pesar del continuo incremento del índice general del coste de la vida. Esta modificación generalizada tuvo su origen en la decisión de Girón transmitida en enero de 1952 al Delegado Nacional de Sindicatos, Solís.<sup>98</sup>

Y es que, dentro del ámbito industrial, el salario en términos reales había estado cayendo desde el final de la guerra civil hasta 1947 pese a que los salarios en términos nominales crecían. Concretamente los salarios nominales se incrementaron en ese período en un 50 %, mientras

que los reales disminuyeron en torno al 28 %.<sup>99</sup> Esta modificación supuso un aumento del 15 % del salario base más un 10 % sobre la nómina. El plus familiar se elevaba en un 25 % y se mantenía el plus de carestía de vida, fijado desde 1950 para la minería asturiana en el 25 % de los salarios mínimos legales. El resultado o los efectos de la subida salarial en el ámbito minero asturiano se puede resumir de la siguiente forma:

“En función de los salarios base vigentes tras el alza de 1953 (zona 1ª), estimando que el total de pluses percibidos por un peón ordinario (incluyendo el plus familiar y dos quinquenios por antigüedad) incrementa su salario base en un 50 % como mínimo - excepto en minería de carbón, donde las primas de asistencia y producción duplican con creces el salario mínimo reglamentado-, suponiendo que el obrero realice una media de dos horas extras diarias (abonadas al 30 %) y aplicando el incremento de un 10 % de la nómina que concede la Orden de 27 de noviembre, resulta que el jornal nominal teórico obtenido por un peón en 1954...no permite a un matrimonio con dos hijos subvenir a los gastos familiares...que aunque referidos a 1956 no desvirtúan la desequilibrada relación ingresos/gastos del obrero no cualificado en los tres sectores productivos analizados.”

...de ello se deduce la insuficiencia del alza salarial de 1953, incapaz de compensar el constante incremento de los precios de artículos de primera necesidad, especialmente alimentación (donde se destina más de la mitad del gasto total de una familia obrera) y el bajo poder adquisitivo de los salarios obreros a mediados de los años cincuenta”<sup>100</sup>.

Y la consecuencia de esta insuficiencia había de ser necesariamente la precariedad y el enriquecimiento de un sector empresarial al dictado de una situación que favorecía la institucionalización de un mercado negro<sup>101</sup> de trabajo y la ruptura de la armonía social tan deseada por el régimen:

“Es el comienzo de una indisciplina social, que termina en la formación de pequeñas empresas en las que un patrono improvisado toma a su cargo, sin ninguna garantía contractual, a un grupo de obreros necesitados de incrementos en sus ingresos, a los que encarga la realización de los trabajos a domicilio...el salario en las empresas ambulantes reviste graves caracteres de inmoralidad, por cuanto el trabajo se contrata en un ambiente de clandestinidad, que se presta a todos los abusos.”<sup>102</sup>

Los años cincuenta supusieron un período en el que la inflación y el crecimiento industrial generaron presión para que los salarios se elevaran. Ante el aumento de la conflictividad social el gobierno comenzó a llevar a cabo revisiones de salarios como instrumentos de política de

orden público. Ferner y Fina caracterizan a este período por la importancia que ejercieron “los nuevos sistemas de regulación de las producciones agrarias,”<sup>103</sup> que vinieron a reducir las fluctuaciones en los precios de las subsistencias. Según estos autores, en los años cincuenta “se produjeron mejoras significativas del poder adquisitivo de los salarios, en un contexto de crecimiento”<sup>104</sup> dada la mayor estabilidad de los precios y la más frecuente revisión de las reglamentaciones en lo tocante a los aspectos salariales ligados a la conflictividad latente o explícita del mundo del trabajo. Pese a lo que se afirma en estas líneas, en el año 1978 Fina afirmaba que la consecuencia de la dinámica salarial establecida en función de las reglamentaciones del trabajo supuso “una drástica redistribución de l'ingrés en contra dels treballadors.”<sup>105</sup>

En torno a las valoraciones emanadas del trabajo de Ferner y Fina hay que tener en cuenta que, pese al paralelismo en la evolución salarial entre R.E.N.F.E. y el resto de la economía, la evolución pudo ser significativamente diferente de una empresa a otra, sobre todo en los años 40; en los años cincuenta “hay indicios que apuntan a que los incrementos se dieron con una mayor simultaneidad, aunque su magnitud pudiera diferir significativamente de una empresa a otra. En el caso de R.E.N.F.E., parece que los salarios reales tendieron a crecer por debajo del conjunto de la economía en los primeros años de la década.”<sup>106</sup>

Las fuertes alzas de 1955 y las medidas de apaciguamiento social sólo sirvieron para agudizar la inflación, de tal modo que al cabo de dos años el salario real se había erosionado hasta volver al nivel anterior,” afirma Tortella.<sup>107</sup> Y es que la moderada normalidad del período 1951-55 fue continuada por una reanudación de las tensiones inflacionistas amparadas en la expansión de la deuda.<sup>108</sup> La gran responsabilidad tomada por el Estado en la determinación de los salarios hizo que este tipo de medidas adquiriera un tinte puramente político. A todo ello se unía la imposibilidad de generar un incremento suficientemente significativo en el nivel de productividad y las consiguientes consecuencias negativas para la exportación.

En torno a esta cuestión hay que añadir a este análisis la variable monetaria. González<sup>109</sup> establece la existencia de dos factores desencadenantes del incremento de la oferta monetaria con respecto a la producción. Por un lado las subidas de salarios monetarios decretadas por José Antonio Girón de Velasco, y por otro, la ineficaz gestión de los recursos por parte del Estado franquista. Con respecto a esta cuestión Fina señala que las subidas de abril<sup>110</sup> (incremento del salario-base de entre un 20 y un 25 %), mayo (incremento del salario para los funcionarios) y noviembre de 1956 (revisión de los salarios de las reglamentaciones) supusieron el fin del modelo autárquico así como el comienzo de una nueva etapa en la que se iba a reconocer la posibilidad de que se produjeran incrementos salariales sin necesidad de autorización ministerial reflejando todo ello el fracaso de la vocación uiniformista de las

reglamentaciones del trabajo y la necesidad para trabajadores y empresarios de negociar colectivamente poniendo las primeras piezas de la ley de Convenios Colectivos Sindicales de 1958. Uno de los sectores que, esperando mayor peso en la toma de decisiones, apostó por el cambio fue la organización sindical probablemente porque sus reconocidas campañas de agitación entre los sectores trabajadores de cara a ganarlos para el régimen resultaban un continuo fiasco hasta el punto de negarse sibilinamente a llevarlas a cabo.<sup>111</sup>

La primera de las subidas de salarios de 1956 resultó un descalabro:

“...En el mes de abril a que se refiere este informe, y a medida que los trabajadores iban cobrando sus jornales, semanal o quincenalmente, aumentados con el 20 % dispuesto por la Ley, la desilusión iba prendiendo en los sectores laborales, al comprobar que con los nuevos salarios podía adquirir casi las mismas cosas que con los anteriores jornales...los principales artículos de consumo, alimentación y vestido, subieron de una forma solapada pero hasta tal punto que ha hecho prácticamente estéril la subida de salarios decretada por el Gobierno...Y esto es que con la reciente subida de jornales se encuentran en las mismas difíciles condiciones económicas que anteriormente”<sup>112</sup>

El 13 de enero de 1956 se producía una reunión del Delegado Nacional de Sindicatos (Solís) con los Vicesecretarios Nacionales de Ordenación Económica y Ordenación Social así como con los Jefes Nacionales de los Sindicatos. En dicha reunión la organización sindical propuso derogación de la “rígida”<sup>113</sup> ley de reglamentaciones del trabajo. No era ésta su única petición, ya que paralelamente a la relajación del sistema para la fijación de las condiciones laborales se realizaban peticiones como la supresión del expediente a incoar por las empresas cuando despidiesen a trabajadores que, según su criterio, incurriesen en bajones voluntarios del rendimiento, así como la posibilidad de que las empresas pudiesen conceder voluntariamente mejoras salariales sin permiso administrativo. Se pretendía en definitiva, dotar de mayor agilidad al sistema de despido efectivo.<sup>114</sup> Sin embargo, esto no fue una novedad específica de esta reunión de mandos sindicales puesto que en el III Congreso Nacional de los Trabajadores celebrado en 1955 ya se elevaron este tipo de demandas. Sólo la conciencia del sindicato de su escaso peso efectivo pudo ser el factor más decisivo en esta toma de posiciones ya que como afirmaba Solís “va siendo vana toda insistencia con que se pretende convencerles (*a los trabajadores*) de que es necesario, para salir de sus estrecheces, esperar por más tiempo los efectos de medidas económicas a largo o mediado plazo...”<sup>115</sup>

También en el verano de 1956 la Delegación Nacional de Sindicatos elaboraba un informe sobre los entonces posibles incrementos de salarios para el mes de octubre. En el citado informe se destacaban básicamente dos cuestiones, aparte de la referencia a la creación de un Consejo



Nacional de Salarios y Precios presidido por Girón. Por un lado, el hecho de que la elevación de salarios decretada por trabajo en abril no había afectado a los trabajadores agrícolas;<sup>116</sup> y por otro, la petición de que las reglamentaciones del trabajo dieran paso a un sistema de pactos colectivos con mayor intervención de la organización sindical esencialmente a la hora de establecer los salarios:

*"...De todas formas es indudable que el aumento del 16 % decretado el pasado mes de abril no afecta para nada a los trabajadores agrícolas y que ello es injusto. Si, en octubre se consigue un nuevo incremento en los salarios, deberá tenerse en cuenta a los trabajadores agrícolas..."*

*Es preciso que cuanto antes se rompa con la excesiva uniformidad en los salarios, aun dentro de una misma empresa...La clasificación por categorías profesionales que determinan las actuales reglamentaciones de trabajo, es simple y poco expresiva...Es petición constante de las Juntas Sociales el que se modifique la Ley de 16 de octubre de 1942. Si vamos a la conquista de un salario mínimo suficiente, ello lo hace necesario, como así el que con la modificación haya mayor flexibilidad en la política de salarios superando la rigidez hoy existente...Una razón fundamental y política hace necesario dicha modificación, y es la de que jamás podrá juzgarse nuestro sindicalismo ni ganará la calle ni calará en el hombre de trabajo, si éste, a través de sus sindicatos no participa de forma directa en el principal objeto del contrato de trabajo: el salario...*

*El sistema de acuerdos sindicales debe sustituir a la Ley de reglamentaciones. El Gobierno unificará los principios generales de todas las reglamentaciones hoy existentes, y será a través de acuerdos sindicales donde se vayan perfilando las diferenciaciones entre cada rama y dentro de éstas, entre cada empresa...a él corresponden una serie de funciones que aún hoy se encuentran en manos de departamentos gubernamentales"<sup>117</sup>*

La modificación salarial de noviembre de 1956 supuso un aumento medio del 50 % de los salarios base implantados en marzo del mismo año. Esta elevación de los salarios base no podía significar nada positivo para los trabajadores salvo que el nivel de los precios fuera controlado. Este fue uno de los objetivos imposibles del gobierno que por medio de la Orden de 27 de noviembre de 1956<sup>118</sup> de Presidencia del Gobierno dictaba normas para la vigilancia de la evolución de los precios de los artículos en régimen de libertad de comercio, lo cual era contradictorio con una política que resultaba evidentemente más favorecedora para el capital y la empresa que para el trabajador.<sup>119</sup> La mencionada orden pretendía que en el plazo de 7 días desde la publicación de esta disposición los fabricantes entregaran una declaración jurada en

que constara el precio al que vendían su producto el 1 de agosto de 1956 así como la evolución del mismo hasta la fecha de elaboración de la declaración. Los comerciantes, mayoristas y detallistas debían elevar también al sindicato correspondiente una declaración en la que debían incluir el precio de venta, su evolución, las existencias de productos así como los márgenes comerciales. Teóricamente todos ellos estaban obligados a vender a los precios declarados, cosa que evidentemente no fue así considerando la evolución de la inflación a lo largo de este año y los siguientes. El objetivo fundamental era controlar la evolución de los precios en los productos alimenticios, textiles, artículos de uso domésticos y materiales de construcción,<sup>120</sup> cuestión difícilmente conseguible.

Por otro lado, la política del ministerio de Trabajo propendió hacia la simplificación en las percepciones salariales con lo cual se derogó el plus especial establecido en septiembre de 1956 y el plus de carestía de vida que todavía regía en la minería del carbón y en la construcción. Y por este camino a partir de 1958 "las razones económicas privan sobre las ideológico-políticas."<sup>121</sup> El desequilibrio interno de la economía española produjo la derogación de los decretos de 1948 y 1953, y condujo al gobierno franquista a desarrollar una serie de medidas tendentes a flexibilizar la política salarial. "No obstante, seguía sin darse satisfacción a la necesidad social de mejorar el nivel de vida de los trabajadores."<sup>122</sup>

"...L'acceleració de la inflació subsegüent, a més de menjar-se en un parell d'anys els augmentos nominals aconseguits, va acabar d'enderrocar el model autàrquic i va fer inevitable el pla d'estabilització del 59 dut a terme pel nou govern tecnocràtic del 1957."<sup>123</sup>

La moderación de la inflación desde 1952 fue acompañada de un incremento de los gastos del sector público en inversión, en bienes y servicios desde 1954 que no se vio acompañado de una adecuada financiación a través de impuestos. Ello generó emisiones de deuda pignorable para la financiación de estos gastos que fue absorbida fundamentalmente por la banca. Los préstamos así tomados por el Estado fueron a parar a unidades de gasto que depositaron parte de este dinero en la banca. En torno a este aspecto, hay que hacer alusión a la trascendencia que tuvo la inexistencia de un sistema fiscal eficaz e insuficiente y a las condiciones particulares del régimen de Franco que dificultaba o imposibilitaba la captación de recursos del extranjero de forma que compensasen la insuficiencia de recursos internos.<sup>124</sup>

De igual manera, y como ya se ha señalado, converge en este proceso la elevación (en términos comparativos) lenta pero progresiva de rentas reales desde los años 40 fundamentada básicamente en la industria y los servicios, con una mayor productividad marginal que sectores como la agricultura. Este elemento había alterado de forma gradual la estructura del consumo a

favor de los bienes de alta elasticidad-renta. A ello hay que añadir las subidas de salarios decretadas por Girón. "Los empresarios, que no podían sustituir a corto plazo trabajo por capital, de inmediato optaron por endeudarse con el sistema crediticio, el cual a su vez acumulaba... fuertes excedentes de liquidez, éstos acabaron transmitiéndose al público; así empujaron al alza la demanda de alimentos y, por tanto, sus precios, dada la rigidez de la oferta agrícola," afirma González.<sup>125</sup> A lo cual añade, ya en relación a la cuestión de los salarios y del "gironazo":

"...el aspecto clave del alza de salarios consistió en su papel transmisor de liquidez de excedentes del sistema crediticio al público en general. Cuando los empresarios presentaron crecidas demandas de crédito para afrontar una nómina salarial que casi se había doblado, el público comenzó a experimentar excesos de liquidez respecto a sus niveles deseados y lo gastó no sólo en bienes duraderos, sino principalmente en financiar la nueva estructura de consumo de alimentos, abandonando la vieja dieta alimenticia de país pobre... La comunidad como un todo intentó reducir el exceso de efectivo tratando de aumentar sus compras; y provocó así,... un exceso general de compras que hizo ascender los precios hasta el nivel de equilibrio compatible con el nivel anterior de liquidez real."<sup>126</sup>

El mundo empresarial, ante la necesidad de incrementar los recursos para hacer frente a la elevación de las nóminas, acudió al sistema bancario para financiar las mismas, incrementándose también por esta vía el circulante durante 1956 y 1957, años en que más se intensificó el impulso alcista de los costes salariales sin que en paralelo las ganancias de productividad fueran significativas. Por este camino, afirma González, "la política monetaria fue puesta al servicio de una mal entendida política social."<sup>127</sup>

En esta dirección la banca se dedicó a colocar el excedente de liquidez potencial que había en sus manos y que el propio Estado franquista había generado. Así pues, las "autoridades monetarias, dominadas por el poder político del ministerio de Trabajo y por la pasada conducta inversora del Estado, poco podían hacer; se plegaron a una política de pleno empleo financiando mayores flujos monetarios mediante creación de dinero"<sup>128</sup> a lo cual se unía la incapacidad de los trabajadores para gastar el dinero con rapidez, lo cual incrementaba los depósitos y por tanto, también por esta vía la oferta monetaria. Todo ello no implica que los objetivos de Girón se cumplieran. Sobre esta cuestión puntualiza González en el siguiente sentido:

"...la subida de salarios no contribuyó a mejorar la posición relativa de los trabajadores... Las rentas de trabajo disminuyeron en su participación en la renta

nacional y los trabajadores vieron descender su salario real. El episodio Girón no pasó de ser un ejemplo de manual en el que la ignorancia económica y la demagogia política acaban empeorando la situación de aquellos a quienes se pretende beneficiar."<sup>129</sup>

Antes de las subidas de noviembre del 56, concretamente en marzo del mencionado año, se incrementaron en un 25 % los salarios base. Además se suprimía, salvo en la minería del carbón, en la construcción y en obras públicas, el plus de carestía de vida, creándose el plus especial (un 20 % del salario base, el cual sólo sería computable a efectos del Seguro de Accidentes de Trabajo). En torno a la política de elevación de salarios merece la pena citar la valoración del sindicato Provincial de Asturias en la medida en que juzga la política del ministerio de Trabajo y del gobierno franquista (concretamente las medidas llevadas a cabo en 1956):

"1.º Que el aumento del 20 % no ha venido a cubrir las necesidades de los trabajadores en relación con el nivel de vida actual, ya que si el referido aumento es para compensar la carestía que se sufre, este sistema viene a suponer una mayor diferenciación entre las categorías laborales, a la vez que una menor posibilidad adquisitiva en las clases inferiores. Razón por la cual los Presidentes de las Secciones Sociales de Asturias propusieron al Ilm. Sr. Director General de Trabajo en su visita a Asturias, un sistema de reparto igualitario, o bien sobre la aplicación de un tanto por ciento inversamente proporcional, al igual que el propio Gobierno propugna para sus funcionarios.

2.º Que la decepción de la clases trabajadoras nace precisamente, aparte de la insuficiencia de la elevación aplicada, de la propaganda llevada a cabo por la prensa, anunciando un amplio reajuste de precios y salarios, invocando promesas de las más altas Jerarquías del Estado; y que esta decepción resulta en la actualidad más acusada al conocer los trabajadores que el Gobierno de la Nación proyecta imprimir en favor de sus funcionarios una política de salarios mucho más elevada y a la vez más justa y más cristiana, con cuyo sistema hubiesen quedado colmadas las aspiraciones de los hombres.

3.º Que, no obstante, y con la serenidad característica de los trabajadores asturianos siempre puesta de manifiesto, esperamos que para la anunciada revisión de Reglamentaciones Laborales para el próximo mes de octubre, el Gobierno adopte las medidas pertinentes que subsanen la injusta situación creada con el aumento de salarios a que se hace referencia."<sup>130</sup>

Los conflictos sociales de 1956, estuvieron también en la base de las subidas salariales decretadas por Girón lo cual no iba a evitar voces disonantes dentro de la propia organización sindical en contra de aquellas subidas:

“Es necesario llevar a la mente del trabajador que nada hay más antisocial ni más en contra de su bienestar económico y el de su familia que el alza de salarios vacía de contenido, porque tal alza se reflejará íntegramente en los costos de producción y en los precios del producto, con lo que el desnivel existente entre precios y salarios no se remediará en modo alguno.

...Son otros, por tanto, los caminos, que el obrero debe andar, otras sus pretensiones para el logro de sus reivindicaciones sociales. La política social debe ser real y acudir a remediar los males no amordazando su efectos visibles, sino yugulando sus causas primeras.”<sup>131</sup>

Para Benito del Pozo, obviando otros posibles motivos, el rebrote inflacionista del 56 tuvo su origen en la elevación de los precios en los alimentos; fue ésta la razón que produjo conflictos sociales y, por tanto, aquí radicaría el error de las autoridades del ministerio de Trabajo en lo concerniente a la revisión salarial de octubre de 1956. El resultado en la provincia de Asturias provocó el cambio en la tendencia que había caracterizado la década anterior en lo que a la realidad salarial se refiere:

“Se produce, pues una mayor aproximación salarial entre los obreros siderometalúrgicos y los mineros del exterior, y un distanciamiento entre éstos y el personal de construcción, con lo que resulta una inversión de la tendencia existente en la década anterior. También se observa una reducción general de las diferencias salariales intercategoriales, de modo que se acortan los intervalos retributivos que las Reglamentaciones de 1946 marcaban entre trabajadores dedicados a tareas especializadas en minería y construcción y los destinados a labores menos específicas. No obstante, el abanico salarial sigue siendo muy abierto en las empresas dedicadas a extracción de carbón.”<sup>132</sup>

Sus efectos se distribuyeron a lo largo de 1956 y 1957. En este caso, “tras los incrementos salariales se dasataron intensas presiones inflacionistas que erosionaron rápidamente las ganancias reales obtenidas.”<sup>133</sup> Y así en 1956 se pone en funcionamiento el denominado “giro autonómico”<sup>134</sup> en lo que a política salarial se refiere. En función de las intensas presiones sociales se comenzó a implantar un muy escasamente desarrollado salario mínimo (que no se consolidará hasta 1963) o S.M.I.G. (salario mínimo interprofesional garantizado) por medio del

Decreto de 16 de octubre de 1956 para lo cual, atendiendo al diferente coste de la vida de unas regiones a otras, se establecieron tres zonas. En la primera se incluía a Madrid y a la grandes capitales con un salario mínimo de 36 pts. por día; en la segunda el salario era de 33 pts; y en la tercera de 31 pts. El salario mínimo para mayores de 18 años quedó fijado en 60 pts. diarias por Decreto de 17 de enero de 1963, no revisando su cuantía hasta 1966 y no creándose un mecanismo de revisión anual hasta 1969 con el II Plan de Desarrollo. Con respecto al salario mínimo podemos considerar que:

“...fue siempre superior al crecimiento del coste de vida, pero no por ello consiguió remontar la distancia que, ya desde su creación, mantuvo respecto al considerado salario vital, pues el salario mínimo real -muy devaluado- experimentó un exiguo crecimiento.

...Parece, pues, que la verdadera función del S.M.I.G. consistió en fijar bajos niveles salariales susceptibles de ser aumentados con el rendimiento y la intensificación del trabajo, dado que, ciertamente, lo que el trabajador percibía era generalmente muy superior al S.M.I.G. debido a las horas extras, primas, pluses y otros flecos salariales (entendiendo como tales las retribuciones complementarias del salario base). Se potenciaba así la contención salarial y el incentivo.”

Una vez pasada la marea de estos años de crisis que culminaron con la salida del ministerio de Trabajo de Girón de Velasco la percepción del régimen sobre los motivos que habían producido dicha situación no distaban mucho de las apreciaciones aquí expuestas. En las respuestas elevadas por el gobierno español al cuestionario remitido por la ONU se da fe de las raíces del proceso que había vivido la economía española especialmente a partir de 1956. En este informe se constataba la interacción de varios factores. En primer lugar se citaba la incidencia del descenso en la producción agrícola; una producción agrícola que había descendido con respecto al año 1954 en lo que se refiere a la producción de alimentos como el trigo, el maíz, el aceite, la remolacha o la uva. Se hacía referencia a la elevación del nivel de inversiones públicas y privadas en relación a la renta nacional (con la consiguiente creación de una tensión en los mecanismos de crédito), a la escasez de productos básicos que generaron estrangulamientos en el sistema productivo, al alza de salarios y la incidencia del comercio exterior. Por último se incidía en la influencia que pudieron tener otros factores como la ayuda norteamericana así como las expectativas de beneficios de los empresarios alentados por la favorable evolución de la economía mundial a mediados de los cincuenta.<sup>135</sup>

En cualquier caso la evolución de los salarios y las medidas tomadas por el ministerio de Trabajo para elevar aquéllos no fueron más que uno de los factores que pusieron fin a la España

de la autarquía. Fue la interacción de esta variable junto a otras lo que provocó la salida de Girón de Velasco del gabinete franquista; pero en modo alguno fue el causante del colapso de un modelo de desarrollo en decadencia, probablemente, desde su puesta en funcionamiento y, por tanto, motivo de su propio ocaso y posterior abandono.

### **3.3. La paga extra como atenuador del conflicto laboral.**

Una de las peticiones que con más insistencia se dejaron oír en el I Congreso de Trabajadores de 1946 fue la de la necesidad de que se extendieran con carácter general y uniforme las gratificaciones concedidas con motivo de la celebración del 18 de julio y de Navidad. Y es que ante la realidad de unos salarios con poco poder adquisitivo la forma de mantener, bajo mínimos (casi asistencialmente), a la población trabajadora eran las pagas extras y los pluses. Esta era la única forma concebida por los ministerios Girón de otorgar una retribución mínima, con lo cual el mundo del trabajo en España adoptaba un sesgo destajista que sólo beneficiaba al mundo empresarial e industrial y que al trabajador podía traer únicamente perjuicios para su salud y su bienestar físico.

Las pagas extras o las remuneraciones extraordinarias, independientes del salario base, no constituían más que un salvavidas y un apagafuegos en momentos en que ciertos sectores podían generar “desórdenes públicos” que, partiendo de una obsesión casi paranoica por el conflicto laboral, necesitaban de soluciones independientes de la utilización de medidas represivas.

La paga extraordinaria más relevante fue la concedida en octubre de 1952, cuestión en torno a la cual Girón se manifestaba en un tono triunfalista al comunicárselo al Delegado Nacional de Sindicatos Solís.<sup>136</sup> En esta fecha se establecieron gratificaciones extraordinarias, en principio, en favor de ciertos sectores. La gratificación equivalente a una mensualidad se estableció el 2 de octubre para las reglamentaciones de minas metálicas, minas de plomo, químicas, vidrio, cerámica, madera, banca privada, Banco de España, Banco Hipotecario, Banco Exterior de España, Banco de Crédito Industrial, Banco de Crédito Local, Cajas Generales de Ahorro Popular, seguros y papelería. Las gratificaciones equivalentes a 21 días fueron para las reglamentaciones de la siderometalúrgica, minas de carbón, agua, gas, electricidad, construcción y obras públicas, tejas y ladrillos, transportes por carretera, metro de Madrid, metro de Barcelona, corcho, cemento, derivados del cemento y tranvías.

Ciertamente este tipo de medidas estaban directamente ligadas a la conflictividad social latente o explícita que un bajo nivel de vida había de generar en un contexto deficitario en libertades políticas. Un mes antes de esta decisión cundía el pánico en el ministerio de Trabajo hasta el punto de reclamar la rápida intervención de las autoridades sindicales en la difícil situación que

se estaba planteando en varios sindicatos nacionales.<sup>137</sup> Pese a ello la extensión de la gratificación no era general. A finales de octubre quedaban trabajadores pertenecientes a las reglamentaciones a las que se había concedido la paga extra que todavía no habían sido afectados por la disposición legal del ministerio de Trabajo en un centro industrial tan importante como Barcelona (913 en las empresas acogidas a la reglamentación de la hulla, antracitas y lignitos, 3.417 en las minas potásicas, 3.637 en el sector siderometalúrgico y del plomo, 16.618 en la industria papelera, 11.700 en transportes terrestres, metros, tranvías y telefónica). En total 26.285 para un total de 5.947 que todavía no se habían visto afectadas por la paga extra.<sup>138</sup>

Aunque parezca una contradicción, lo cierto es que el sector textil a finales de 1952 no había recibido la paga extra. Las reglamentaciones más típicas de este sector eran las de la lana y el algodón promulgadas en 1943. Por ello en sus tablas de salarios todavía seguían figurando para las categorías de oficiales los salarios de 8,05 pts. diarias por ocho horas de trabajo. Las ordenanzas de 9 de enero y 23 de marzo de 1950 había concedido a este sector un plus de carestía de vida que suponía un incremento del 20 % sobre la retribución base. Sin embargo, en otros sectores la elevación había sido del 25 % estando, pese a ello, sujeta a cotización por los distintos seguros sociales y montepíos.<sup>139</sup> En esta situación lo que mayormente había solicitado el sindicato del textil era una "delicadeza moral muy consecuente a estos tiempos de alta estimación de los valores espirituales"<sup>140</sup> y en relación con el hecho de que el día 23 de octubre iba a ser la fiesta de San Antonio María Claret.

La evolución a lo largo de la década de los cincuenta del sector de Banca y Bolsa puede ser un ejemplo de la relación entre conflictividad laboral y remuneraciones extras. En el invierno de 1951 la patronal no estaba dispuesta a conceder una gratificación por el miedo a que sentara precedentes en años posteriores pese al temor ante la posibilidad de que se produjeran altercados en los meses de noviembre y diciembre de 1951.<sup>141</sup> Ya a finales de noviembre se tenía perfecta conciencia de que, como en 1949, se estaban organizando manifestaciones ante el Sindicato y el ministerio de Trabajo por lo cual el sindicato elevó la petición de una paga extra para aminorar el malestar entre los empleados del sector.<sup>142</sup> Hasta tal punto llegaba el temor a la desestabilización por tan importante sector de la economía que se solicitó de igual manera la revisión de los expedientes de depuración para aquellos empleados expulsados de algunas entidades "por sus errores políticos."<sup>143</sup> Así pues, a la paga extra concedida en mayo de 1951 a los empleados de banca y bolsa se añadió la concedida el 27 de noviembre. Sin embargo, como se ha dicho, la política de las remuneraciones extras no constituía más que un cúmulo de parches y así para el 5 de mayo de 1953 los empleados de banca en Barcelona estaban organizando de nuevo una huelga contra el régimen por no recibir la paga que se les había concedido en 1952. El proceso se inició con la tentativa de dimisión en masa de los enlaces. Posteriormente el plan consistía en encaminarse hacia gobernación para seguir las instrucciones



del autoproclamado Sindicato Libre de los Empleados de Banca.<sup>144</sup> Como es lógico, este movimiento no se realizó exclusivamente en Barcelona. En Madrid, el 17 de marzo de 1953 se llevó a cabo una concentración en la calle de Alcalá a las 7 de la tarde con el objetivo de solicitar mejoras salariales por medio de pagas extras. Según las fuentes sindicales, el número de manifestantes estaba en torno a los 300, cuestión que en principio (por el origen de la fuente) podemos poner en duda e, incluso, elevar.<sup>145</sup>

En definitiva, el bajo nivel de vida de los trabajadores se intentaba compensar, en el mejor de los casos, con la elevación voluntaria de las horas de trabajo tal y como la propia organización sindical y el ministerio sabían:

“...y ¿los trabajadores? Quien no está en dos quehaceres está en tres, quien no trabaja diez horas trabaja catorce. Esta es la pura realidad ¿y con ello resuelven sus problemas?, ni pensarlo.”<sup>146</sup>

Así pues, la política salarial centrada en salarios base excepcionalmente bajos tenía como complemento la existencia de los pluses y las pagas extras como medidas extraordinarias de utilización coyuntural a la búsqueda de un mecanismo apaga fuegos que pudiera socorrer a las autoridades del ministerio de Trabajo (y al régimen en su conjunto) en momentos en que la conflictividad social podía desapuntalar los soportes del franquismo. Pese a ello, la evolución global de este tipo de remuneraciones no supuso ni muchos menos la solución definitiva al problema de la precariedad en las retribuciones, siendo utilizada esta demanda por los trabajadores únicamente como forma de paliar levemente su situación y de manifestar las desavenencias políticas que existían con respecto a la dictadura.

### **3.4. El nivel de vida de los trabajadores españoles.**

El nivel de vida del trabajador español se vio marcado especialmente por el bajo nivel de los salarios reales<sup>147</sup> así como por la existencia del mercado negro. A ello se añadía un marco de relaciones laborales rígido que establecía la dirección por parte del Estado de la economía española,<sup>148</sup> la incapacidad para controlar la evolución de los precios, para poner fin al estraperlo o para canalizar de forma racional las inversiones públicas. La propia percepción de los elementos sindicales que en algunos casos abordaban la realidad del nivel de vida del trabajador español les obligaba a reconocer, normalmente de puertas para adentro, que las promesas del primer franquismo, en orden a elevar la calidad de la vida del español, eran promesas nunca realizadas.<sup>149</sup>

Evidentemente, la política fiscal, y concretamente el hecho de no haber desarrollado una política impositiva<sup>150</sup> eficaz, permitió favorecer a ciertos grupos empresariales que, en el

contexto de una economía que a duras penas lograba salir de la calamitosa situación de la guerra civil, propiciaba un bajo nivel de vida entre los miembros de la clase trabajadora y unas palmarias desigualdades sociales.

En este contexto Campo calcula que el importe de la ración alimenticia semanal para una familia de cuatro personas (matrimonio y dos hijos comprendidos entre cinco y diez años) era de 63,35 pts. en 1936 (índice=100), de 339,57 en 1952 (índice=536) y de 344,70 en febrero de 1954 (índice =564). Sumando a estos los demás gastos imprescindibles, se puede determinar un salario mínimo anual de 26.500 pts. en febrero de 1952 y 26.950 también en febrero de 1954.<sup>151</sup> Alonso Olea calculaba que en 1954 el sueldo anual de un trabajador de tipo medio se situaba exactamente en 12.699,16 pts.<sup>152</sup> lo cual nos pone de manifiesto el nivel de vida efectivo de un trabajador español y sus más que notables dificultades para llegar a fin de mes salvo que consideremos la realización de horas extras de forma masiva, el pluriempleo, etc., con las consiguientes repercusiones en ámbitos, en principio, menos cuantificables (salud en términos generales, salud e higiene laboral, deterioro físico o mental, etc.).

Para este mismo año 1954 Pedro Gual Villalbí,<sup>153</sup> miembro del Consejo de Economía Nacional y más tarde ministro sin cartera en los gobiernos de 1957 y 1962, calculaba hasta que punto y para que grupos de trabajadores estaban cubiertas las necesidades básicas para la subsistencia digna de sus familias tomando como referencia el salario mínimo vital diario para una familia compuesta por el padre, la madre y sólo dos hijos comprendidos entre los 13 y los 14 años (cuestión que ya de por sí nos puede crear dudas sobre la validez del cálculo realizado). Gual calculaba que en gastos de alimentación básicos se utilizaban 25,71 pts., 8,40 pts. en vestido y calzado, 3 en vivienda, 3 en gastos para la casa y 1,5 en gastos generales. En total, 41,61 pts. diarias como salario mínimo vital.<sup>154</sup> Hemos de insistir en las dificultades que se encuentran para calcular precios al por menor y en el hecho de que las series estadísticas que se hallan en el *Anuario Estadístico de España* recogen los precios al por mayor y no de todos los productos que menciona Gual. Sin embargo, el cálculo sobre sólo algunos de los productos de primera necesidad al por mayor permiten afirmar que las estimaciones de Gual son excesivamente optimistas.<sup>155</sup> Pero incluso aceptando las estimaciones ofrecidas sobre precios y salarios observamos que el sueldo diario medio de la mano de obra en España, en su mayoría no cualificada, estaba por debajo de ese nivel excepcionalmente mínimo de subsistencia. Gual afirma que el peón ayudante y el peón simple de la industria química cobraba 38,84 y 36,39 pts. diarias; que en la industrias de los curtidos el oficial varón de 2º, la mujer oficial de 1ª y la mujer oficial de 2º cobraban 38,79 pts., 29,18 pts. y 26,99 pts. respectivamente. Si tomamos el ejemplo de los empleados de la industria de transformados metálicos nos encontramos con que el sueldo diario del peón especializado estaba en 29,43 pts, el del especializado de 2º en 32, el del especializado de 1º en 34,49 pts., el del oficial de 3º en 35,73 y el del oficial de 2º en 39,73.

En el caso de las industrias de hilados y tejidos de algodón, los bataneros de 1ª cobraban 33,5 pts. y las hiladoras de 2ª 22,46 pts. y así consecutivamente. Evidentemente había grupos de trabajadores que superaban ese salario mínimo vital pero eran los menos y todo ello dando por válido el número de componentes que Gual asigna a esta familia modelo (en principio excesivamente reducida) y concediendo autenticidad a los cálculos realizados sobre los precios que, como se ha dicho, nos parecen desacertados. Y es que el estudio de Gual tenía como objetivo demostrar la inexistencia del infraconsumo y la necesidad de implantar un sistema de remuneración del trabajo basado en las primas a la productividad y en la flexibilización de las medidas para el despido como medida de coerción social.<sup>156</sup> Para el futuro ministro esto no era posible observando lo que para él eran una serie de evidencias:

“...y encontramos, como uno de los principales renglones, el capítulo de diversiones y vicio, que hoy se lleva una buena parte de los jornales. Los espectáculos -hoy caros- están abarrotados de obreros; cuando los comercios están desiertos de compradores por causa de la crisis, cualquiera puede ver que el público de productores llena materialmente tabernas, bares y barras con consumiciones costosas. El capítulo de fumar y el juego, o cualquier forma de azar o apuestas, se lleva también lo suyo.”<sup>157</sup>

Si nos situamos en 1957 y damos un cierto valor aproximativo al cálculo del poder adquisitivo del trabajador español hasta ahora expuesto encontramos que aquellos países con los que nos deberíamos de comparar sitúan, tras el consiguiente examen, la capacidad adquisitiva real de nuestros trabajadores en un nivel inferior al de Bélgica o Inglaterra de forma muy acusada en los sectores profesionales objeto de estudio: minería del carbón, fabricación de productos alimenticios, industria textil, fabricación de muebles y enseres, industrias gráficas, productos químicos, fábricas de hierro y acero, fabricación de maquinaria, transporte, construcción, electricidad y ferrocarril. Especial mención merece el hecho de que las mayores diferencias se dan al establecer el coste de la alimentación de los peones no especializados.<sup>158</sup>

Incluso, la comparación realizada por la propia organización sindical con otros países extranjeros tampoco dejaba el nivel del trabajador español en un buen lugar. El cálculo del precio de una libra (equivalente a 460 gr.) de diversos productos de primera necesidad nos situaba por debajo del nivel de vida de una serie de países, incluso de la denostada Unión Soviética tal y como muestra el cuadro nº 2.

Artículo	USA	Francia	Inglaterra	Italia	URSS	España
pan	6	9	12	13	14	32
carne	31	126	116	128	132	195
patatas	2	3	3,5	5	9	20
azúcar	4	21	20	37	110	74

manteguilla	30	135	-----	162	270	270
-------------	----	-----	-------	-----	-----	-----

\*Cuadro n° 2. Tiempo de trabajo necesario para adquirir 460 gr. de productos de primera necesidad medido en minutos.<sup>159</sup>

Concretamente algunos productos básicos en el sector de la alimentación, como la patata, estaban por encima del precio de mercado incluso en el año 1953, cuando la libertad de precios comenzaba a ser la nota más característica. Las estadísticas oficiales no permiten matizar suficientemente la evolución del precio de este producto. Si hacemos referencia a datos oficiales habremos de indicar que el precio al por mayor de la patata (en todo el territorio nacional y sin indicar diferencias de calidades y, por tanto, de precios) se situaba en 1953 en 1,46 pts./kg. Al menos en Madrid, el problema estribaba en el monopolio que mantenían unos pocos grandes comerciantes. Pese a la libertad en la contratación y circulación ningún detallista podía adquirir, de hecho, libremente este producto generándose un monopolio.<sup>160</sup> El precio de venta del agricultor de la patata de 1ª calidad estaba entre las 0,75 y las 0,90 pts./kg.; la patata de inferior calidad se encontraba entre las 0,60 y las 0,75. A esto había que añadir el transporte, los gastos de porte, impuestos, etc., que suponían una elevación aproximada de 0,40 pts./kg. con lo cual la patata de 1ª se nos situaba a 1,30 pts. vendiéndose al detallista a 2,25 y la de segunda a 1,76. En el mercado el precio al por menor se podía situar en las 2,40 en el primer caso y en las 2 pts. en el caso de la patata de inferior calidad.<sup>161</sup>

Como ya se ha dicho, en parte, el bajo nivel de vida del trabajador español estaba ligado al problema de la especulación y del mercado negro que se acentuaba más si cabe en los grandes centros urbanos y que no comenzaría a retroceder hasta la desaparición de las trabas intervencionistas. Un ejemplo de ello puede ser el mercado negro del pan en la ciudad de Barcelona. "Es un hecho innegable y por todos conocido de que en Barcelona existe un mercado negro del pan de gran importancia. Esta es una triste realidad que no podemos olvidar," afirmaba el informe del Consejo Económico Sindical.<sup>162</sup> Este caso era simplemente uno más de los ejemplos que ponía de manifiesto que la política intervencionista del estado franquista fracasaba generando perversos efectos en el nivel de bienestar de la población.

El sistema que fijaba la entrega forzosa del trigo al S.N.T. y la compra de los excedentes con una prima sobre el precio de cupo era el origen mismo del mercado negro de este producto básico. Era evidente que, dado que el mercado negro del trigo tenía su origen en los excedentes de los agricultores o en la ocultación de parte del cupo, el S.N.T. había fracasado en la adquisición de dicho producto con lo cual sólo la libre contratación podía tener alguna posibilidad de acabar con este perjuicio para la población trabajadora. Teóricamente, el precio oficial al por mayor del trigo se situó en 1947 en 1,6 pts./kg. Sin embargo, según el Consejo Económico Sindical el trigo que vendían los agricultores para el mercado negro se situaba entre las 4 y las 5 pts./kg. ofreciéndose en la ciudad de Barcelona al público a un precio que rondaba

las 12 pts./kg. en 1947. Ello suponía para la mencionada instancia sindical que un régimen que en lo económico, de hecho, se movía según parámetros capitalistas pese a las manifestaciones formales de los dirigentes franquistas, había de adoptar y aceptar también el hecho evidente de que la economía había de articularse en torno al principio del libre intercambio.<sup>163</sup>

Sobre la lamentable situación del nivel de vida real del trabajador el Diario Palentino denunciaba su situación con un expresivo ejemplo.<sup>164</sup> La percepción fuera de nuestras fronteras, en algunos casos, nos homologaba con países casi tercermundistas. Richard Lewinshn publicaba en el diario Última hora de Río de Janeiro un artículo fechado el 20 de noviembre de 1952 que transmitía una impresión lamentable sobre la situación de los trabajadores españoles:

“...los salarios reales de España son los más bajo de toda Europa...

Un obrero medio, trabajando ocho horas por día, cobra 25 pts.; aquí en Barcelona, la ciudad más adelantada y más cara de España, gana 30 pts. Esto a razón de casi 40 pts por dólar, 62 o 75 cents. americanos, o en números redondos 12, 50 o 15 cruzeiros, respectivamente. Pero hay muchos obreros que no alcanzan tal salario En Bilbao, gran centro siderúrgico, por ejemplo -y allí se trabaja duramente- gran parte de los obreros gana apenas de 18 a 20 pts. por día, es decir, de 9 a 10 cruzeiros o sea cerca de 250 cruzeiros por mes

El precio del pan varía, en las grandes ciudades entre 5 y 6 pts. el kilo. La carne de la peor calidad cuesta 15 pts.,<sup>165</sup> la de calidad cuesta de 30 a 35 pts. el kilo. Las patatas cuestan 1,5 pts./kilo y las frutas están también baratas, sin embargo, en general son de calidad mediocre, pues las mejores están destinadas a las exportación. La ropa, en relación con los salarios, está muy cara. Un par de calzado cuesta de 150 a 300 pts.; una camisa de 80 a 120 pts.

En suma, se puede decir que el poder adquisitivo de una peseta es más o menos igual al de un cruzeiro en el Brasil...un obrero en España por 200 horas de trabajo mensuales, gana un equivalente a 500 o 600 cruzeiros, y muy frecuentemente incluso menos.

El resultado es que gran parte de los operarios se ve prácticamente obligado a trabajar más de 8 horas diarias. Por la novena y décima hora de trabajo, reciben un suplemento del 25 % por las dos siguientes a estas, el 50 % sobre el salario base. Así, un operario que trabaja, sin cesar puede llegar a recibir 800 y aún incluso 1.000 pts por mes...

En resumen, se comprueba que la gran mayoría de los asalariados, en España, se ve obligada a vivir con un salario que equivale a la mitad, y en la mejor de las hipótesis a los dos tercios del salario mínimo del Brasil.”<sup>166</sup>

Los Congresos de los Trabajadores son indicativos de la percepción que los elementos ansiosos de mayores logros sociales demandaban dentro de la propia organización sindical. En uno de aquellos congresos provinciales, concretamente el celebrado en Santander en 1953, se afirmaba lo siguiente sobre los salarios vigentes en España:

“...el salario disfrutado actualmente por el trabajador español es, además de insuficiente para cubrir con decoro sus vitales necesidades en el orden individual y familiar, injusto, por no responder a los principios de equidad que la Iglesia y aún las más elementales normas de ética exigen, y siendo factible el arbitrio de medios para lograr que además de suficiente y aún holgado el salario pueda gozar de la consideración de justo, se hace preciso adoptar como sistema de retribución el salario mínimo diferencial móvil. Que la cuantía de ese salario mínimo necesario correspondiente al trabajador sin cualificación profesional (peón) se fije en 60 pts. diarias, cantidad ésta que con arreglo al coste real de vida actual se estima necesaria...”<sup>167</sup>

Esta dura realidad daba como resultado “revueltas” incluso en el seno de la propia organización sindical. Un ejemplo de ello lo encontramos en el sector del agua de Barcelona en el que en el pleno de su sección social se dieron situaciones que el Vicesecretario de Ordenación Social describía de la forma que a continuación exponemos partiendo de unos salarios que ni mucho menos permitían el nivel de vida mínimo de las familias de estos trabajadores:

“Las manifestaciones de los Vocales del Pleno, fueron violentas, pero dominando el criterio de declarar la huelga (durante 24 horas, según, unos, indefinidamente, según otros) y renunciar al cargo de Vocales de la Sección Social Nacional. Hubo un Vocal que proclamaba que la huelga era lícita según las Encíclicas Pontificas, e incluso que afirmó que esas Encíclicas autorizaban el robo.”<sup>168</sup>

Para este mismo sector del agua el B.O.E. publicó la Orden del ministerio de Trabajo de 17 de noviembre de 1953 por la que se modificaban los artículos 19 y 111 de su reglamentación con el objetivo de modificar el salario base y el plus familiar. El aumento suponía un incremento del 10 % sobre el salario base. El plus familiar pasaba a representar un 33 %. Sin embargo, se concedía a las empresas la capacidad de resarcimiento, sin limitación de tiempo, de todas las gratificaciones voluntarias que hubiesen concedido con anterioridad, con lo cual éstas podían exigir la compensación económica de cualquier retribución que hubiesen concedido desde la

última modificación del salario base en 1947. Sin embargo, este incremento era exiguo, puesto que para el personal beneficiado por el plus familiar, dicho aumento no suponía más que 1,5 o 2 pts. diarias de aumento base.<sup>169</sup>

La problemática en cuanto al nivel de vida se planteaba más duramente en los sectores que tradicionalmente se oponían con mayor virulencia al régimen. El caso del sector siderometalúrgico puede ser uno de los más evidentes por la percepción de la propia organización sindical que sentía como dicho grupo de trabajadores "había sido totalmente abandonado"<sup>170</sup> y por la problemática a nivel de conflictos sociales que se podía plantear. En la Junta Social Provincial desarrollada en Bilbao el 25 de enero de 1950 la opinión de uno de los vocales de la Junta (Enrique Ibarbia) puede ser indicativa de la percepción que los trabajadores, adeptos o no al régimen, tenían sobre la realidad social que soportaban diariamente:

"Creo que nuestra función ha terminado ya, porque de seguir en esta situación seríamos, y ya lo estamos siendo, el hazme reír de todos. Teníamos planteada la subida de salarios, desde hace tiempo hemos pedido que bajen los precios de los artículos de racionamiento, o en caso contrario que nos aumentaran el salario en el porcentaje equivalente...Se nos está dando vueltas a este asunto y no se soluciona de ninguna manera. En cambio, vemos que el Estado ha dado la solución de aumentar los impuestos a partir del 1 de enero de 1950, con lo cual es de esperar mayor carestía de vida. Estimo que estamos de más, que el Sindicato es quien debe plantear la papeleta de frente y de una vez, con hombría arremetiendo contra todos. Los trabajadores no podemos vivir...

Tenemos las conclusiones del Congreso de Trabajadores del año 1946 y dichas conclusiones han sido papel mojado;...

...nosotros no queremos estar continuamente engañando a nuestros compañeros de trabajo;...Se nos dice que apretemos el cinturón y hasta ahora lo hemos apretado, pero no podemos más porque la situación es dificilísima..."<sup>171</sup>

Algunos elementos del Sindicato Vertical del Azúcar denunciaban una situación similar en el caso de los trabajadores del campo. En 1951 los trabajadores de este sector cobraban una media de 17 pts. diarias sin que existiera de hecho participación en los beneficios, puesto que se exigía en su reglamentación que la empresa repartiera dividendos entre los accionistas a fin de ejercicio económico por un mínimo del 5 % con la consiguiente posibilidad de escamotear esta retribución a los trabajadores. Otra nota distintiva de este grupo de trabajadores era la dureza de la campaña de recogida con temperaturas casi siempre superiores a los 30 grados y la proliferación de contingentes de tuberculosos entre los mismos<sup>172</sup> en un contexto en que la

política del ministerio de Trabajo era la de negar sistemáticamente cualquier modificación de los salarios o cualquier mecanismo que supusiese un suplemento retributivo.<sup>173</sup> Por otra parte, el sector empresarial, apoyado en la negativa del ministerio de Trabajo, mantenía la postura de condicionar posibles aumentos en las retribuciones a la transmisión de éstos a los precios con lo que la mejora no recaería sobre los beneficios de los mismos sino sobre los consumidores.<sup>174</sup> Esta retribución extraordinaria no llegaría hasta el 21 de diciembre de 1952 para una reglamentación fechada el 30 de noviembre de 1946 y que "se encontraba totalmente desbordada por la realidad en el momento mismo de su entrada en vigor con unas escalas...que resultaban insuficientes a todas luces en el momento en que comenzaron a ser aplicadas,"<sup>175</sup> lo cual fue motivo para que el 16 de mayo se implantara un plus de carestía de vida en cuantía del 25 % sobre los salarios base. Sin embargo, esa elevación suponía únicamente para estos trabajadores de temporada una subida de 3,5 pts. diarias sobre un salario bruto (entonces) de 14 pts. mientras que los precios de los artículos básicos habían experimentado un alza muy superior. Así, a estos trabajadores, de cara a la adquisición de los productos más básicos, se les obligaba a trabajar más del doble del tiempo que trabajaban en 1935 para la consecución de un nivel de vida idéntico, poniendo de manifiesto la evidencia del bajón descomunal en su nivel de vida. Y todo ello en un contexto como el de la campaña 1951-52 en que la cosecha estaba siendo verdaderamente excepcional en contraste con la vida miserable de estos jornaleros tal y como muestra el siguiente cuadro.<sup>176</sup>

Artículos	1935 precio unidad en pts.	1935 horas de trabajo necesarias	1952 precio unidad en pts.	1952 horas de trabajo necesarias
aceite	1,90	1,36	12,40	2,34
azúcar	1,65	1,18	10,00	1,88
arroz	0,80	0,57	6,50	1,22
bacalao	3,25	2,33	22,00	4,15
carbón mineral	0,10	0,09	1,00	0,23
carne	3,50	2,51	27,00	5,09
garbanzos	1,10	0,99	6,00	1,41
huevos	2,50	2,24	15,00	3,53
jabón	1,00	0,90	14,00	3,30
leche	0,60	0,53	3,00	0,70
leña	0,07	0,06	0,50	0,11
pan	0,55	0,39	5,50	1,03
traje caballero	125,00	112,00	1.100,00	259,50
vino	0,30	0,27	2,50	0,59



zapatos	22,00	19,76	180,00	42,46
alpargatas	1,20	1,07	11,00	2,59

*\*Cuadro n° 3. Tiempo necesario de un trabajador del sector azucarero para la adquisición de productos básicos.<sup>177</sup>*

Este bajón significativo no se palpaba exclusivamente en la evolución del nivel de precios sino en los impuestos, en parte discrecionales, que se ponían a los trabajadores del campo originando verdaderas revueltas contra el régimen. En el otoño de 1954 las Hermandades de Labradores y Ganaderos de Orense habían aprobado en sesión plenaria el pago de una cuota para el sostenimiento de las languidecientes instituciones sindicales del campo. La oposición de algunos pueblos fue realmente feroz de lo cual dan cuenta los testimonios de la organización sindical hasta el extremo de que los recaudadores de contribuciones se negaban a prestar dicho servicio salvo que fueran continuamente apoyados por la Guardia Civil en localidades como Carballino, Taboadela,<sup>178</sup> Allariz<sup>179</sup> o San Ciprian de Viñas.<sup>180</sup>

En 1953 otro relevante sector de la economía nacional veía como las cotas de bienestar de sus trabajadores decrecían significativamente. Nos referimos en este caso al sector de la construcción, cuyos trabajadores se veían en muchos casos obligados a vivir en el hacinamiento de sus viviendas, con niños desnudos y madres que se veían obligadas, incluso, a vender las ropas para poder dar de comer a sus familias. "Es así como realmente viven nuestros trabajadores cuando no tienen además sobre sus espaldas la carga de alguna enfermedad suya o de sus familiares como fácilmente puede comprobarse con las prestaciones de nuestros Montepíos, las que en un 97 % se dedican a atender casos de tuberculosis..."<sup>181</sup> Y es que en este año, el obrero mejor dotado salarialmente y con 6 años de antigüedad a sus espaldas contaba con unos ingresos semanales de 219,99 pts. en el caso de ser oficial y de 117 pts. en el caso de ser peón "por lo que sólo tiene con ello lo necesario para hacer frente apenas dos días a las necesidades de su subsistencia."<sup>182</sup>

El problema de prestigio era fundamentalmente para la organización sindical y para el ministerio de Trabajo dado que la realidad arrolladora demostraba la incompetencia de estas instancias y del propio régimen para solucionar sus problemas cotidianos. Inutilidad que estos percibían claramente por la multitud de movimientos huelguísticos de mayor o menor importancia y el temor de que aquellos se centraran en sectores estratégicos como el de la energía y el agua porque "cuando los servicios públicos se paralizan,...ello implica que el poder no ha podido controlar ramas fundamentales,"<sup>183</sup> o mejor dicho, que los sindicatos ni sabían, ni tenían la voluntad ni la capacidad de constituirse en órganos de representación efectiva de los intereses de los trabajadores con la repercusión inmediata en las secciones sociales en el sentido de surgimiento de amenazas de huelgas, disminuciones de la producción, etc.

Se era consciente de la "pérdida de fe en la organización sindical"<sup>184</sup> por parte de los trabajadores. Y ello porque se daban casos como el del Sindicato del Agua, Gas y Electricidad que resultaban plenamente ilustrativos de la forma en que el régimen favorecía los intereses del capital con respecto a las demandas de los trabajadores. La Orden de 11 de julio de 1949 autorizaba a las compañías a establecer un recargo en las tarifas para atender al aumento de los haberes y al plus de carestía de vida de sus empleados. Sin embargo, la repercusión de esa elevación en las retribuciones no significaba más que alrededor de una cuarta o una quinta parte de la elevación que las empresas realizaban en las tarifas. Este ejemplo, puede ser bastante clarividente con respecto a la utilización del sindicato y de su supuesta política social como elemento de adormecimiento de las protestas obreras. El 23 de octubre de 1952 el mencionado sindicato elevaba a la V.N.O.S. dirigida por Francisco Gómez Ballesteros una misiva en la que constataba la imposibilidad de "entretenerlos hasta enero"<sup>185</sup> incorporando una carta de un obrero del ramo muy probablemente, por su tono excepcionalmente mesurado, adepto al régimen en la que se ponía de manifiesto el sentir de los trabajadores en cuanto a que se sentían explotados por un régimen que sólo retóricamente realizaba un discurso "revolucionario" compaginando esta estrategia sin ningún pudor con la contemplación indolente de la devaluación paulatina del nivel de vida de los trabajadores:

"Todo esto hace que el descontento de empresas y productores sea cada día mayor y que nosotros, estemos ya cansados de tanto cuento como nos largan con frecuencia esos ministerios de Industria y Comercio y Agricultura, sobre baja de precios, nivelación de precios con salarios y elevación de nuestro nivel de vida, cuando estamos viendo, que hasta ahora sólo están sirviendo esos camelos de incentivo a fabricantes y comerciantes, para seguir elevando los precios.

Pero lo más lamentable es que nuestros Sindicatos asienten a todo y nos defienden poco y así, dejaremos de tener fe y confianza en ellos, mucho más, viendo que cada día vivimos peor, pues se pretende que nos conformemos con la esperanza del ya vendrán tiempos mejores, y entre tanto, industriales y comerciantes y sus padrinos, amasando millones y gozando sin tasa de todos los placeres."<sup>186</sup>

La alternativa para el mundo del trabajo cuando, por diversos motivos, no podía ser el conflicto abierto se materializaba a través del descenso en el nivel de producción o de servicios como era el caso del sindicato de agua, gas y electricidad.<sup>187</sup> Por el contrario, la política del sindicato consistía en palabras del Jefe Nacional, Manuel F. Parceró, en "procurar ocultar la realidad" de las negativas que en Madrid sufrían las peticiones de los trabajadores del sector para evitar una publicidad que podría acarrear serios disgustos al sindicato.<sup>188</sup>

El Estado franquista, influido por el peso del mundo católico<sup>189</sup> y por la necesidad de exteriorizar su afán por lo social con medidas efectistas había promulgado la Ley de 13 de julio 1940<sup>190</sup> con el objetivo de prohibir el trabajo los domingos y fiestas oficiales de carácter religioso. En esta disposición quedaba excluido el servicio doméstico, los espectáculos públicos, los trabajos profesionales por cuenta propia, las actividades agrícolas o ganaderas, la pesca de temporada y el trabajo necesario a bordo para la seguridad, conducción y limpieza indispensable de los buques. Por supuesto, si tenemos en cuenta el nivel de vida general y concedemos un valor formal a la legislación tenemos que llegar a la conclusión de que esta disposición no era respetada con el carácter general con que la pudo diseñar el legislador.

A esta ley se añadió la que vino a establecer las vacaciones anuales retribuidas. Nos referimos a la Ley de 2 de septiembre de 1941 que derogó el artículo 56 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1931 y que pasó a ser, casi íntegro, el artículo 35 de la Ley de Contrato de Trabajo del primer franquismo.<sup>191</sup> Dicha disposición establecía el derecho a un permiso anual de al menos siete días laborales ininterrumpidos. Sin embargo, la primera ocasión en que se promulgó una medida semejante fue en el período de la II República, que por medio del Decreto-Ley de 22 de noviembre de 1931 establecía los fundamentos legales del contrato de trabajo. Concretamente, como se ha mencionado, en su artículo 56 se imponía por primera vez y con carácter general dicha obligación para las empresas.<sup>192</sup>

Creemos que si algo se ha evidenciado al desarrollar este apartado ha sido el hecho de que insistentemente se ha constatado la disparidad entre el planteamiento teórico y el nivel de vida efectivo de los trabajadores. De nuevo se constata la divergencia y la discrepancia casi radical entre la teoría de la política tendente a elevar el bienestar de la población y la realidad funcional de los planteamientos teóricos expuestos que propulsaban el resultado práctico de los discursos plagados de lirismo y buenas intenciones del ministro Girón a una distancia lo suficientemente alejada como para situar ambas cuestiones (el deseo y la realización práctica) casi en las antípodas.

### Notas

<sup>1</sup> Martín Sanz, Dionisio: Técnica y política agraria, Madrid, 1946, pág. 221.

<sup>2</sup> I Congreso Nacional..., op. cit., pág. 60.

<sup>3</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 122.

<sup>4</sup> Quetglas Gaya, El salario..., op. cit., pág. 32.

<sup>5</sup> Ídem, pág. 179.

<sup>6</sup> Pió XII: Pió XII y la familia..., op. cit., pág. 95.

<sup>7</sup> Ídem, pág. 7.

- <sup>8</sup> Estudios y conclusiones. Congreso Provincial de Madrid. Gabinete Técnico. Fascículo nº 22, Madrid, ed. C.F.E., 1959, pág. 24.
- <sup>9</sup> Ídem, pág. 31.
- <sup>10</sup> Alonso García, Manuel: Política social española en relación con la familia. Madrid, Ed. del Congreso de la Familia Española, 1958, pág. 27.
- <sup>11</sup> Quetglas Gaya, El salario familiar, op. cit., pág. 21-26.
- <sup>12</sup> Ídem, pág. 24.
- <sup>13</sup> II Jornadas técnicas sociales. Ponencia IX: La ayuda familiar en el régimen de prestaciones de la seguridad social. Madrid, ministerio de Trabajo, 1961, pág. 5-6.
- <sup>14</sup> Pérez Botija, Eugenio: Los salarios en relación con la familia y el rendimiento. Estudio de la reciente legislación española y portuguesa. Revista de Trabajo, 1942, nº 37, vol. 2 pág. 960.
- <sup>15</sup> Ídem, pág. 964.
- <sup>16</sup> Jordana de Pozas, Política..., op. cit., pág. 11-12.
- <sup>17</sup> Varnutelli, Cèsare: La tutela de la familia en el ámbito de la previsión social. Revista de Trabajo, octubre de 1940, nº 10, pág. 756.
- <sup>18</sup> La Constitución de 1931, op. cit., pág. 14.
- <sup>19</sup> Aznar Embid, Del salario..., op. cit., pág. 9.
- <sup>20</sup> Síntesis de ponencias provinciales en torno a la familia y su protección por el Estado. Gabinete Técnico, fascículo nº 18, Madrid, ed. C.F.E., 1959, pág. 25.
- <sup>21</sup> Girón, Escritos..., op. cit., pág. 166-167.
- <sup>22</sup> Leal Ramos, León: La familia, preocupación fundamental del Estado español. VII Conferencia en el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres. Jefatura. Prov. de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Cáceres. Seminario de Estudios Sociales, 1950, pág. 14.
- <sup>23</sup> Aznar Embid, Del salario..., op. cit., pág. 13.
- <sup>24</sup> Ídem, pág. 74.
- <sup>25</sup> Quetglas Gaya, El salario..., op. cit., pág. 4.
- <sup>26</sup> Nueva síntesis de ponencias provinciales. Gabinete Técnico, fascículo nº 21, Madrid, ed. C.F.E., 1959 pág. 29.
- <sup>27</sup> Ídem, pág. 33.
- <sup>28</sup> Ídem, pág. 36.
- <sup>29</sup> Nueva síntesis..., fascículo nº 21, op. cit., pág. 15.
- <sup>30</sup> Ídem, pág. 20.
- <sup>31</sup> Conclusiones del II Congreso de la Familia Española. Madrid, ed. C.F.E., 1962, pág. 16.
- <sup>32</sup> Naredo, José Manuel: La evolución de la agricultura en España (Desarrollo capitalista y crisis de las formas de producción tradicionales). Barcelona, ed. Laia, 1971, pág. 36.
- <sup>33</sup> Fernández de Castro, Ignacio: Del paternalismo a la justicia social. Madrid, Euramérica, 1956, pág. 41.
- <sup>34</sup> Ídem, pág. 42.
- <sup>35</sup> Ídem, pág. 42-43.
- <sup>36</sup> Ídem, pág. 54-56.
- <sup>37</sup> Ídem, pág. 69.
- <sup>38</sup> Ídem, pág. 175.
- <sup>39</sup> Ídem, pág. 91.
- <sup>40</sup> Ídem, pág. 157.
- <sup>41</sup> Estudios..., fascículo nº 23, op. cit., pág. 67.
- <sup>42</sup> Tarancón, Vicente: La familia hoy. Madrid, ed. Euramérica, 1958, pág. 40.
- <sup>43</sup> Ídem, pág. 199.
- <sup>44</sup> B.O.E. del 24 de febrero, Aranzadi 274.
- <sup>45</sup> Benito, La clase obrera..., op. cit., pág. 262.
- <sup>46</sup> Perpiñá Rodríguez, Antonio: La estructura de los salarios en España. Madrid, 1962, pág. 51. Citado por Benito del Pozo en La clase obrera..., op. cit., pág. 262.
- <sup>47</sup> I Congreso Nacional..., op. cit., pág. 39.
- <sup>48</sup> Algunos de estos ya formaron parte de la tesina de este doctorando que constituyó un adelanto de esta tesis.
- <sup>49</sup> Aranzadi, 230/1938.
- <sup>50</sup> Farré-Escofet, Emili: Inflación y bloqueo de la inversión (1939-1953). Banca Catalana, núm. 57, 1980, pág. 6.
- <sup>51</sup> A.P.G.; S.M.S.; Leg. 30, nº 46.

- <sup>53</sup> Pérez Botija, Eugenio: Salarios. Régimen legal v tarifas mínimas. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1944, pág. 6.
- <sup>54</sup> Partes reservados de la C.N.S. de Vizcaya, febrero de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/214.
- <sup>55</sup> Pérez Botija, Salarios..., op. cit., pág. 35.
- <sup>56</sup> Ídem, pág. 35.
- <sup>57</sup> Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación. Memoria anual de actividades de 1950. A.G.A.; I.D.D. 136.01, n° 3.575, pág. 115.
- <sup>58</sup> I Congreso Nacional..., op. cit., pág. 53.
- <sup>59</sup> Validez de los acuerdos modificativos sobre las condiciones de trabajo. V.N.O.E., 7 de octubre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-72-53.
- <sup>60</sup> Tamames, Estructura..., op. cit., pág. 214.
- <sup>61</sup> Martín Sanz, Dionisio: Técnica v política agraria. Madrid, 1946, pág. 213.
- <sup>62</sup> Tamames. Estructura económica..., op. cit., pág. 28.
- <sup>63</sup> González, La economía política..., op. cit., pág. 36.
- <sup>64</sup> Fina, Política salarial..., op. cit., pág. 106.
- <sup>65</sup> A.P.G.; S.M.S.; Leg. 30, n° 46.
- <sup>66</sup> Aranzadi, 230/1938.
- <sup>67</sup> Ídem.
- <sup>68</sup> Fina, Política salarial..., op. cit., pág. 108.
- <sup>69</sup> Ídem, pág. 110.
- <sup>70</sup> Ferner, Anthony y Fina, Lluís: La dinámica salarial durante el franquismo. El caso de R.E.N.F.E. Revista de Historia Económica, 1988, n° 1, vol. 6, pág. 131-151.
- <sup>71</sup> Benito del Pozo, La clase..., op. cit., pág. 7.
- <sup>72</sup> Afirma Tamames que la disminución de la presión inflacionista a partir del año 1947 se vio favorecida por la elevación del tipo de interés y por el control directo en la concesión de créditos bancarios a las empresas privadas. Tamames, Estructura económica..., op. cit., pág. 94.
- <sup>73</sup> Ferrer y Fina, La dinámica..., op. cit., pág. 40.
- <sup>74</sup> I Congreso Nacional..., op. cit., pág. 51.
- <sup>75</sup> Para Ramón Tamames esa fecha se sitúa en 1954 mientras que Payne ubica en 1952. Payne, El régimen..., op. cit., pág. 405.
- <sup>76</sup> A.P.G.; J.E.; Leg. 59, 3.1., n° 43.
- <sup>77</sup> González, La economía política..., op. cit., pág. 41.
- <sup>78</sup> González, La economía política..., op. cit., pág. 47.
- <sup>79</sup> Ídem, pág. 51.
- <sup>80</sup> Ídem, pág. 43.
- <sup>81</sup> Ídem, pág. 54.
- <sup>82</sup> Tortella, El desarrollo de la España..., op. cit., pág. 276.
- <sup>83</sup> Ferner y Fina, La dinámica salarial..., op. cit., pág. 153.
- <sup>84</sup> París Eguilaz, Higinio: Sentido y límites de la política social. Madrid, 1954, pág. 26.
- <sup>85</sup> Un antecedente del mismo lo tenemos en el Decreto de 8 de junio de 1956 que posibilitaba a las empresas para "establecer libremente, sin necesidad de autorización del ministerio de Trabajo, condiciones superiores a las generales y mínimas fijadas en las reglamentaciones laborales" Tamames, Estructura económica..., op. cit., pág. 215.
- <sup>86</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 160-161.
- <sup>87</sup> Fina, Política salarial... op. cit., pág. 106-107.
- <sup>88</sup> Contestación al escrito Medidas conducentes a evitar el desencadenamiento de un alza de precios elaborada por la V. N.O.E. que suscribe el Jefe Nacional del Sindicato de Banca, Bolsa y Ahorro (Ángel B. Sanz), 31 de octubre de 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 61.01, r/1.299.
- <sup>89</sup> Correspondencia de la Vicesecretaría Nacional de Ordenación Social (José M. Mateu de Ros) a D.G.T., 14 de diciembre de 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 2.339-4.
- <sup>90</sup> Consideraciones de la Vicesecretaría Nacional de Ordenación Económica, sobre el escrito enviado por la Vicesecretaría Nacional de Ordenación Social, 26 de septiembre de 1957. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 91.02, r/323-4.
- <sup>91</sup> Este fue el caso de la empresas nacionales como Calvo Sotelo que disminuyó las primas voluntarias concedidas a sus trabajadores en cuantía entre las 3 y las 6 pts. por trabajador a partir del 1 de abril coincidiendo con la primera elevación de salarios de 1956. Partes reservados de la Delegación Provincial Sindical de Ciudad Real, abril de 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.748.

<sup>91</sup> Ferner y Fina, La dinámica salarial..., op. cit., pág. 139.

<sup>92</sup> Solé, Carlota: La recesión del neocorporativismo en España. Revista de Sociología, 1990, nº 33, pág. 52.

<sup>93</sup> Ferner y Fina, La dinámica salarial..., op. cit., pág. 149.

<sup>94</sup> Fina, Política salarial..., op. cit., pág. 110.

<sup>95</sup> Ferner y Fina, La dinámica salarial..., op. cit., pág. 137.

<sup>96</sup> Benito, La clase..., op. cit., pág. 268.

<sup>97</sup> Orden de 27 de noviembre de 1953.

<sup>98</sup> El Delegado Nacional de Sindicatos indica que Girón le trasmitió en Sevilla el día 23 de enero de 1952 el deseo de que la organización sindical comenzara la preparación de los estudios tendentes a modificar los salarios de las reglamentaciones laborales con el objetivo de que el 15 de enero del siguiente año estuvieran todas en poder de su ministerio. Notas relativas a los estudios que sobre reglamentaciones de trabajo lleva a efecto la organización sindical. D.N.S. Madrid, febrero de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 2.334-1.

<sup>99</sup> Paris Eguilaz, Higinio: Diez años de política económica en España, 1939-1949. Madrid, 1949, pág. 56.

<sup>100</sup> Benito, La clase..., op. cit., pág. 270.

<sup>101</sup> Esta institucionalización del mercado negro había supuesto todavía en los primeros años de la década de los cincuenta, a pesar de su pérdida progresiva de fuerza, que dicho mercado casi igualara en casos como el del trigo o el aceite al mercado oficial en un contexto en el que podían superar en 2 y 3 veces el precio oficial y en el que la mejor garantía de cara a la impunidad era la relación o la pertenencia a los órganos oficiales destinados a controlar dicho mercado. Barciela, Carlos: El mercado negro de productos agrarios en la posguerra, 1939-1953. En España bajo el franquismo..., op. cit., pág. 193-199. En otro de sus trabajos sobre la cuestión del mercado negro, Barciela constata el hecho de que fue el sistema intervencionista el que promovió la práctica del estraperlo pero también la especulación sistemática con los productos de primera necesidad. El peso del estraperlo disminuye a medida que nos alejamos de la década de los cuarenta pero inevitablemente una medida de corte intervencionista como la elevación por decreto de los salarios había de incidir directamente en la propagación de prácticas especulativas que, por mucha voluntad que pusiera el gobierno, sería incapaz de controlar. Barciela, Carlos: La España del estraperlo. En García Delgado, J. L. et. al.: El primer franquismo..., op. cit., pág. 106-116.

<sup>102</sup> Redondo Gómez, José: Pasado, presente y futuro de un problema social. Servicio Nacional de Información y Publicaciones Sindicales, Madrid, 1955, pág. 190-1.

<sup>103</sup> Ferner y Fina, La dinámica salarial..., op. cit., pág. 268.

<sup>104</sup> Ídem, pág. 139.

<sup>105</sup> Fina, Política salarial..., op. cit., pág. 106.

<sup>106</sup> Ídem, pág. 140.

<sup>107</sup> Tortella, El desarrollo..., op. cit., pág. 276.

<sup>108</sup> "Las fuertes inversiones públicas no apoyadas por un ahorro voluntario, sino financiadas con deuda monetizable, tenían en definitiva este resultado". Tamames, Estructura económica..., op. cit., pág. 96. Sobre esta cuestión Tamames defiende que el excesivo peso de la deuda tenía como complemento y causa una fracasada reforma tributaria. Concretamente se refiere a la Ley de 16 de diciembre de 1940 ideada por el ministro de Hacienda José Larraz. Tamames justifica su fracaso en el hecho de que tuvo como una de sus consecuencias la sistemática defraudación tributaria y la necesidad de recurrir sistemáticamente a la Deuda para financiar los déficits.

<sup>109</sup> González, La economía política..., op. cit., pág. 51.

<sup>110</sup> Esta medida fue anunciada por el ministro Girón en un discurso radiado por Radio Nacional de España el 31 de enero. Correspondencia del Delegado Provincial de Granada, mayo de 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.760.

<sup>111</sup> "...pero faltaríamos a un deber de lealtad, si, en lo que a esta provincia se refiere, no informáramos en el sentido que lo hacemos, pidiendo se nos autorice a demorar la iniciación de la campaña de agitación que se nos ordena, hasta momento más oportuno, rogando a su vez se excluya de esta campaña de agitación todo aquello que pueda significar un posible enfrentamiento entre los productores y la empresa, como parece podría ocurrir ante la indicación..." Informe reservado de la C.N.S. de Gerona, 17 de marzo de 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.759. El subrayado es nuestro.

<sup>112</sup> Partes reservados del Delegado Sindical Provincial de Guadalajara, abril de 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 763.

<sup>113</sup> Correspondencia e informe del Delegado Nacional de Sindicatos (Solís Ruiz) al ministro Secretario General del Movimiento (Fernández Cuesta), 25 de enero de 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/311.

<sup>114</sup> En este sentido se realizan similares peticiones en otro informe de la V.N.O.E. de octubre de 1956. Medidas conducentes a evitar el desencadenamiento de un alza de precios. V.N.O.E., 31 de octubre de 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 61.01, r/1.299.

<sup>115</sup> Correspondencia e informe del Delegado Nacional de Sindicatos (Sólis Ruiz) al ministro Secretario General del Movimiento (Fernández Cuesta), 25 de enero de 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/311.

<sup>116</sup> En torno a esta cuestión la D.N.S. elevaba otro informe al ministro del movimiento a mediados de junio del año 1956 en el que hacía constar lo injustificado de que la elevación del salario base a partir de marzo no llegara a los trabajadores del campo:

“El salario legal de un trabajador fijo, según zonas y provincias, oscila entre las 17 y 20 pts en seco, y el de los trabajadores eventuales, en faenas específicas, entre las 20 y 25 pts, incluidos en estos últimos salarios los importes correspondientes a domingos, días de fiestas, vacaciones y gratificaciones reglamentarias... Por consiguiente el éxodo rural se verá notablemente incrementado y ha de afectarle, indiscutiblemente, en una mayor proporción a la clase campesina...

Ha de hacerse constar que en la mayor parte de las provincias españolas los salarios que figuran en las reglamentaciones provinciales de trabajo en el campo, están superados en cuantía media de un 30 %, incluso en las zonas que padecen desocupación involuntaria... Por lo cual los aumentos que se concedieran, que no debían ser en ningún caso inferiores a los reconocidos a los trabajadores industriales, quedarán incluso por bajo de los salarios reales... se están pagando jornales altos con motivo de la recolección de cereales, pero exclusivamente limitados a aquellos trabajadores que toman parte directa en las faenas de siega. No ocurre, por tanto, lo propio con el resto de los trabajadores, especialmente los fijos, cuando en realidad todos realizan jornadas extraordinarias que oscilan entre las doce y catorce horas de trabajo que aplicando los módulos reglamentarios absorben este aumento de salario que en si constituye un espejismo...” Escrito dirigido al Excmo. Sr. ministro Secretario General del Movimiento sobre situación de los obreros agrícolas por la no aplicación de los nuevos aumentos de salarios. D.N.S., 19 junio 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/311.

<sup>117</sup> Informe sobre incrementos de salarios para el mes de octubre. D.N.S. 26 de julio de 1956. A.G.A., S.S.; I.D.D. 90.02, r/297.

<sup>118</sup> B.O.E. núm. 333 del 28 de noviembre.

<sup>119</sup> Sobre esta cuestión Jané insistía en la dictadura que los salarios habían supuesto para los trabajadores en relación a los beneficios de las empresas adoptando un esquema similar al del denominado “liberalismo manchesteriano”: “Resulta extraordinariamente doloroso comprobar que la teoría salarial de la subsistencia (Adam Smith ya la formuló; David Ricardo la bautizó con un epíteto que ha llegado hasta nuestro días: ley de bronce de los salarios) tiene validez en ciertas partes y sectores de la España actual.” Jané Solá, José: El problema de los salarios en España. Barcelona, Oikos -Tau, 1969, pág. 175.

<sup>120</sup> Correspondencia del Secretario Nacional de Sindicatos (Roque Pro Alonso), 4 de diciembre de 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/297.

<sup>121</sup> Solé, La recesión..., op. cit., pág. 52.

<sup>122</sup> Benito, La clase obrera..., op. cit., pág. 271.

<sup>123</sup> Fina, Política salarial..., op. cit., pág. 111.

<sup>124</sup> Afirma Tamames que “esta ausencia total de freno en el sistema monetario hizo que la expansión fiduciaria se acelerase extraordinariamente desde 1939 como consecuencia de lo insuficientes que resultaban los ingresos ordinarios del presupuesto para financiar los gastos ordinarios y extraordinarios. El aumento de la circulación fiduciaria se realizó por el ya explicado mecanismo de emisión de deuda pública, suscripción de ella por la Banca privada y, a renglón seguido, pignoración de la misma en el Banco de España, con la consiguiente emisión de billetes... El resultado fue, naturalmente, que a medida que tenía lugar la expansión fiduciaria se elevaba el nivel de precios...” Tamames, Estructura económica..., op. cit., pág. 94.

<sup>125</sup> González, La economía política..., op. cit., pág. 56.

<sup>126</sup> *Idem*, pág. 56-57.

<sup>127</sup> *Idem*, pág. 66.

<sup>128</sup> *Idem*, pág. 69.

<sup>129</sup> *Idem*, pág. 70.

<sup>130</sup> Archivo Histórico Provincial de Oviedo, Secretaría General. Acuerdo adoptado por la Junta de presidentes de las secciones sociales el 24 de abril de 1956. Citado por Benito del Pozo en *La clase obrera...*, op. cit., pág. 272.

<sup>131</sup> Estudio económico social de las grasas vegetales. II Congreso Nacional Oleícola. Jaén, Sindicato Nacional del Olivo, 1956, pág. 458-459.

<sup>132</sup> Benito, La clase..., op. cit., pág. 274.

<sup>133</sup> Ferner y Fina, La dinámica salarial..., op. cit., pág. 138.

<sup>134</sup> Benito del Pozo, La clase..., op. cit., pág. 264.

<sup>135</sup> Contestación al cuestionario de las Naciones Unidas (Referencia ec. 121 [1] octubre de 1957). Madrid, 18 de marzo de 1958. A.G.A., S.S.; I.D.D. 45.01, 11.044.

<sup>136</sup> Correspondencia de Girón al Delegado Nacional de Sindicatos (Solís), 6 de octubre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90-02, r/204.

<sup>137</sup> La Subsecretaría del ministerio de Trabajo trasmitía a la D.N.S. la nota secreta nº 6.942 de la Dirección General de Seguridad: "Llegan a este Servicio noticias no confirmadas de que se observa ambiente de descontento entre los productores dependientes de los Sindicatos de Transportes, Banca y Bolsa, Seguro y Construcción, lamentándose de que estos Organismos se hallan totalmente dominados por la clase patronal, diciéndose que éstos logran del Sindicato o del Gremio respectivo, soluciones convenientes a sus intereses." Correspondencia de la Subsecretaría del ministerio de Trabajo con la D.N.S., 20 de septiembre de 1952. A.G.A., S.S.; I.D.D. 90-02, r/204.

<sup>138</sup> Informe sobre las pagas extraordinarias concedidas y por conceder. Delegación Provincial de Sindicatos de Barcelona, 21 de octubre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/206.

<sup>139</sup> Correspondencia del Jefe Nacional del Sindicato del Textil a D.N.S., 7 de diciembre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>140</sup> Correspondencia del Jefe Nacional del Sindicato del Textil a la D.N.S., 16 de octubre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954. Globalmente la situación de los trabajadores de la industria textil era bastante inferior a la de otros sectores. Por Orden de 17 de junio de 1946 no percibían en metálico la participación en los beneficios dado que esta constituía la aportación de la empresa al montepío. En cuanto a las vacaciones tenían derecho a siete días laborales, es decir, el mínimo estipulado por el art. 35 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944. Por la Orden de 18 de julio de 1946 tenían derecho a una gratificación de verano equivalente a 7 días. Y como se ha dicho el plus de carestía de vida concedido por Orden de 9 de enero y 29 de abril de 1950 establecía un porcentaje sobre el salario base del 20 % computable a efectos de seguros y subsidios. Nota sobre salarios y retribución vigente en el día de la fecha en la industria algodonera textil. Madrid, 22 de enero de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 2.334-1, pág. 2.

<sup>141</sup> Correspondencia de la Jefatura Nacional del Sindicato de Banca y Bolsa a la D.N.S., 8 de noviembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>142</sup> Sindicato Nacional de Banca y bolsa. Madrid, 21 de noviembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>143</sup> Correspondencia de Banca y Bolsa a V.N.O.S. Madrid, 21 de noviembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>144</sup> Jefatura Nacional de Banca y Bolsa a V.N.O.S. sobre tensión en Barcelona de empleados de banca. 1 de mayo de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>145</sup> Correspondencia del Delgado Sindical Provincial a la V.N.O.S., 23 de marzo de 1953: Informe sobre los hechos ocurridos, acerca de la manifestación pública llevada a cabo por ciertos empleados de la Banca y vistos a través del plano sindical, según enlaces y vocales de este Sindicato. Nota enviada a Jefe Superior de Policía de Madrid por el Jefe de la Sección Social, 18 de marzo de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>146</sup> Partes reservados de la Delegación Provincial Sindical de Gerona, octubre de 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.759.

<sup>147</sup> Sobre esta cuestión el Consejo de Economía Nacional reconocía que los salarios reales considerados estadísticamente como fiables no eran tales y que el nivel de vida del trabajador español era todavía inferior a lo que las estadísticas de este tipo indicaban. Información sobre los salarios reales en la industria española desde 1936 a 1941. Consejo de Economía Nacional. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/235.

<sup>148</sup> García Delgado, José Luis; Barón, Enrique; López Muñoz, Arturo: Inflación y desarrollo. Madrid, ZYX, 1967, pág. 25-26.

<sup>149</sup> "...sin embargo, respecto del salario podemos admitir que nada o muy poco se ha hecho para solucionar el problema del diario vivir del hombre del trabajo...los salarios de los trabajadores son insuficientes para permitirles la vida moral y digna por la que nuestro Movimiento Nacional sacrificó un día en los campos de batalla a un millón de sus mejores hombres...aún no se han coseguido las metas anunciadas por la Falange y por nuestro Movimiento Nacional de conseguir no sólo una mejora en el nivel de vida de estos hombres respecto a las épocas anteriores al Movimiento, sino que esta mejora tiene que



llegar a ser el lograr un justo equilibrio entre precios y salarios..." Partes reservados de la C.N.S. de Santander, marzo de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.807.

<sup>140</sup> Campos Nordmann, Ramiro: La política de salarios y la economía nacional: De economía, núm. 29, 1954, pág. 554.

<sup>151</sup> Campos Nordmann, Ramiro: La política de salarios y la economía nacional. De economía, núm. 29, 1954, pág. 529.

<sup>152</sup> Mencionaremos esta cuestión en otro apartado de la tesis pero nos parece significativa la comparación. Se considera a un empleado del sector siderometalúrgico, oficial de 2ª cuyo lugar de trabajo estaba en la zona 1ª de las cinco que comprendía su reglamentación. Se parte igualmente del hecho de que había trabajado todo el año sin interrupción (es decir, 365 días menos 52 domingos, 8 fiestas no recuperables y 10 días de vacaciones, en total 295 días). Dicho trabajador había trabajado a jornal y prima, obteniendo un rendimiento mínimo en esta última del 25 % del jornal base. Su jornada es normal y no ha realizado horas extraordinarias. No recibe pluses de nocturnidad, penosidad, toxicidad o peligrosidad. Su salario base fijado por la reglamentación vigente en 1953 fue de 19,75 pts./día (aunque dicho cálculo se realiza sobre 20). Se ha considerado, igualmente, que su antigüedad en la empresa es de 12 años. Alonso Olea, Manuel: Salarios y seguridad social. R.I.S.S., núm. 2, 1953. Alonso Olea, Manuel: Salarios y seguridad social, 1955. RISS, núm. 2, 1955.

<sup>153</sup> Notas para la política del salario por Pedro Gual Villalbí. Consejo de Economía Nacional. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 2.334-1.

<sup>154</sup> Ello suponía 600 gr. de garbanzos, arroz o judías; 1.600 gr. de patatas; 1.600 de pan, 120 de aceituna, 4 unidades de arenques, 150 de bacalao, 300 de sardinas; vino 3/4 litro y 1 huevo.

<sup>155</sup> El cálculo a precios al por mayor de sardinas (6,4 pts.), vino (1,1 pts.), garbanzos (3,4 pts.), patatas (2,06 pts.), huevo (1,6 pts.), bacalao (2,6 pts.) nos sitúa el resultado final en 17,16 pts. como resultado de una cesta de la compra a precios al por mayor en la que no se han calculado el precio del pan, las aceitunas y los arenques, cantidad que parece excesivamente alta para que el resultado final coincida a precios al por menor con las 25, 71 propuestas por Gual.

<sup>156</sup> "Es inútil hablar de aumentos en la productividad y serán ociosos cuantos estímulos se establezcan mientras se mantengan en su rigidez los actuales principios sobre inamovilidad de los productores. Para el reestablecimiento de la disciplina, para la efectividad de la jerarquía y el buen funcionamiento del trabajo, hay que restituir en parte prudencial a la empresa la facultad de despido justificado, sin trámites, expedientes ni juicios con fallo. Se propone la fórmula de que esta facultad sea hasta el 2 % de la nómina del personal total, pues sería suficientes para la ejemplaridad." Notas para la política del salario por Pedro Gual Villalbí. Consejo de Economía Nacional. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 2.334-1, pág. 14.

<sup>157</sup> Notas para la política del salario por Pedro Gual Villalbí. Consejo de Economía Nacional. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 2.334-1, pág. 8.

<sup>158</sup> El estudio de Bustinza calcula el tiempo expresado en horas que necesitan trabajar los varones adultos de un amplio grupo de profesiones para obtener una remuneración igual al coste de unas dietas idénticas para los países objeto de su estudio. Bustinza Ugarte, Pedro. El poder adquisitivo de los salarios en Bélgica, España, Italia y Reino Unido, referido al coste de alimentación. CSIC, Madrid, 1958.

<sup>159</sup> Delegación Provincial de Sindicatos. Santander, febrero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 2.334-1.

<sup>160</sup> Correspondencia del Jefe de Negociado a V.N.O.S. sobre anomalía del precio de la patata. Madrid, 25 de septiembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 2.334-1.

<sup>161</sup> Correspondencia de Jefe de Negociado a V.N.O.S. sobre anomalía del precio de la patata. Madrid, 25 de septiembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 2.334-1.

<sup>162</sup> Estudio del problema de la supresión del mercado negro del pan. Consejo Económico Sindical. Barcelona, 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.855-1.

<sup>163</sup> "...un panecillo típico de esta región llamado llonguet que anteriormente se pagaba al precio de 0,1 pts. la pieza, cuesta en la actualidad la elevada cantidad de 1,5 pts, es decir, vale quince veces más que en el año 1936..." Estudio del problema de la supresión del mercado negro del pan. Consejo Económico Sindical. Barcelona, 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.855-1.

<sup>164</sup> "...un obrero que gane, por ejemplo, quince pts., diarias no podrá comprarse jamás un traje que, por ínfimo que sea, ha de suponerle cuando menos el importe íntegro de los jornales de cuatro semanas. Adquirir unos zapatos para él y para sus hijos constituirá un imposible...Y en cuanto a alimentación, fácil es que ustedes se imaginen el déficit de calorías de este asalariado y de los que de él dependen." Diario Palentino, 7 de febrero de 1952.

<sup>165</sup> Incluso esta referencia nos parece extraordinariamente optimista. Téngase en cuenta que, oficialmente, el precio al por mayor de la arroba de carne de vaca estaba en 1952 a 194,62 pts. Si consideramos la arroba

castellana estaríamos hablando de 11,5 kg. con lo cual el precio de la carne de vaca al por mayor (no al por menor) estaría ya en las 16,9 pts.

<sup>166</sup> Correspondencia del Secretario de Despacho del Secretario Nacional de Sindicatos con la V.N.O.S. por noticia publicada en el diario "Última hora" de Río de Janeiro el 20 de noviembre de 1952 por Richard Lewinshn titulado "Salarios de miseria. El obrero español gana la mitad del salario mínimo de Brasil. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 2.334-1.

<sup>167</sup> Sobre la cuantía del salario mínimo baste decir que dicha cantidad fue establecida para los trabajadores mayores de 18 años por el Decreto de 17 de enero de 1963, 10 años más tarde y circunscrito a este tipo de empleados. Congreso Provincial de Trabajadores de Santander. Conclusiones. Delegación Provincial de Sindicatos, 31 de diciembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/225.

<sup>168</sup> Informe del Vicesecretario Nacional de Ordenación Social sobre el Pleno de la Sección Social del Textil celebrado el 14 y 17 del actual, 19 de diciembre de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, n° 2334-1, pág. 2.

<sup>169</sup> Sindicato de Agua, Gas y Electricidad, 17 de diciembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 2.334-1.

<sup>170</sup> Situación social de los productores siderometalúrgicos y mineros encuadrados en el sindicato metal. Continuación del informe de 1 de febrero. Informe confidencial. Madrid, 8 de enero de 1950. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, n° 2.334-1, pág. 1.

<sup>171</sup> Reunión en Bilbao de la Junta Social Provincial, 25 de enero de 1950. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, n° 2.334-1, pág. 1-2. También en Reunión de la Junta Social del Sindicato Provincial del Metal de Vizcaya. Bilbao, 26 de enero de 1950. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, n° 2.334-1.

<sup>172</sup> Correspondencia de la Jefatura Nacional del Sindicato Vertical del Azúcar a la D.N.S., 13 de octubre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954. "La situación de los obreros de estas industrias la acusa el aumento incesante del contingente de tuberculosos que obran en la Mutualidad Nacional de las Industrias de la Alimentación." Salarios en la industria del azúcar. Madrid, 17 de octubre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, pág. 2.

<sup>173</sup> Correspondencia de Sindicato del Azúcar con V.N.O.S., 6 de noviembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>174</sup> Correspondencia del Secretario Asesor de la Sección Social del Sindicato del Azúcar con V.N.O.S., 19 de diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>175</sup> Correspondencia de los Vocales de la Junta Central de la Sección Social del Sindicato del Azúcar a Girón de Velasco, 22 de julio de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>176</sup> Situación social en la industria azucarera, 1 de agosto de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>177</sup> Correspondencia de los Vocales de la Junta Central de la Sección Social del sindicato del azúcar a Girón de Velasco, 22 de julio de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>178</sup> "Así por ejemplo, fue preciso desplazarse a Carballino y actuar con toda energía, toda vez que se había producido un problema, casi de orden público al resistirse los labradores en número muy estimable a dejar penetrar en sus domicilios para el embargo correspondiente a los Agentes Ejecutivos...en la localidad de Taboadela, en donde los labradores, capitaneados por el cura párroco se oponen de una forma directa y personal a cuantas tentativas, amistosas o coactivas se han intentado al objeto de hacerles ver la obligatoriedad...El resto (*de los pueblos*) no paga porque no paga esta localidad." Partes reservados de la C.N.S. de Orense, septiembre de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.801.

<sup>179</sup> Partes reservados de la C.N.S. Orense, octubre de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.801.

<sup>180</sup> Informe sobre incidentes ocurridos en la localidad de San Ciprian de Viñas, por motivo de la cobranza de cuotas de la Hermandad Sindical, 25 de abril de 1957. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.801.

<sup>181</sup> Nota reiterada que el Sindicato Nacional de la Construcción dirige al Delegado Nacional de Sindicatos para elevación del asunto a Consejo de ministros, enero de 1953. También en Correspondencia del Jefe de la Sección Social Central del Sindicato de Construcción, Vidrio y Cerámica a V.N.O.S., 21 de octubre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>182</sup> En este esquema paternalista no se podía salvar, a los ojos de estos sindicalistas, el general Franco, del que se aseguraba que toleraba esta situación por desconocimiento: "Será muy crudo lo que te digo, pero bien sabe Dios que es la verdad...el único que se salva de la quema, es nuestro Caudillo, en quien ponen todas sus esperanzas, porque piensan que algún día llegue a enterarse de la situación real porque atraviesan las clases humildes de nuestra Patria. No te digo nada de lo que tenemos que oír de la organización sindical; lo que menos nos atribuyen es hallarnos vendidos al capitalismo aparte de ser totalmente inservibles para resolver efectivamente ninguna situación...o el problema de los salarios congelados, frente a una absoluta libertad de precios..." Correspondencia del Jefe de la Sección Social Central del Sindicato de Construcción, Vidrio y Cerámica a V.N.O.S., 21 de octubre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>183</sup> Correspondencia del Vicesecretario Nacional de Ordenación Social (Francisco G. Ballesteros) al Delegado Nacional de Sindicatos, 26 de octubre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>184</sup> Junta Central Social de Agua, Gas y Electricidad solicita paga extraordinaria al ministerio de Trabajo, 12 de abril de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>185</sup> Correspondencia de Sindicato Vertical de agua, gas y electricidad a la V.N.O.S., 27 de octubre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>186</sup> Correspondencia de Sindicato Vertical de agua, gas y electricidad a la V.N.O.S., 27 de octubre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>187</sup> En el caso de la empresa pontevedresa S.G.G.E. (Sociedad General Gallega de Electricidad) el sindicato provincial constataba el hecho de que los empleados contadores que debían (por el reglamento) tomar un mínimo de 140 lecturas tomaban el 50 %; que los cobradores, cuyas entregas diarias, ascendían a 75.000 u 85.000 pts, presentaban alrededor 25.000; que los inspectores, aún saliendo de inspección presentaban escasísimas actas; que las averías de baja tensión tardaban un excesivo tiempo en ser arregladas; que "los interruptores de corriente de las casetas de transformación se desconectan con frecuencia de manera inexplicable y dejan sectores enteros sin servicio y los transportes de tracción eléctrica parados." Informe reservado del Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad, 20 de febrero de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>188</sup> Correspondencia de la Delegación Provincial de Pontevedra con la D.N.S., 26 de febrero de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>189</sup> El preámbulo de la ley hace mención a las causas formales que condujeron a la derogación del Real Decreto Ley de 8 de junio de 1925 y del reglamento de 17 de diciembre de 1926: "La voluntad firme del Estado español, declarada en el Fuero del Trabajo, de renovar la tradición católica de justicia social sobre un concepto humano del ejercicio de las actividades productoras, requiera absoluto respeto a las leyes divinas, para cuyo cumplimiento la legislación positiva debe proveer una ordenación conveniente.

El descanso dominical no puede representar, en la plenitud de su significación, un gravamen económico para el obrero y una práctica disminución del salario que percibe, con olvido de que este último ha de ser suficiente para una vida normal y holgada y de que sólo el reconocimiento de éste y otros principios de hondo contenido cristiano puede restaurar la unidad moral de las empresas que el bien de la Patria requiere." B.O.E. del 18 de julio, Aranzadi 241.

<sup>190</sup> B.O.E. del 18 de julio, Aranzadi 241. Su reglamento es de 25 de enero de 1941 (B.O.E. del 5 de marzo), Aranzadi 432..

<sup>191</sup> Decreto-Ley de 26 de enero de 1944. B.O.E. del 24 de febrero, Aranzadi 274.

<sup>192</sup> La primera reacción del franquismo fue la de recortar estos beneficios para el trabajador. La Dirección General de Trabajo elaboró una Circular (nº 25 de 20 de julio de 1939) en la que se daba la posibilidad a la empresa de prescindir de esta carga: "En aquellos casos en que por necesidades excepcionales de producción, de interés general, debidamente justificadas, no sea posible a una Empresa conceder a su personal las vacaciones anuales establecidas por la legislación vigente, podrán autorizar los Delegados de Trabajo la cancelación total de dicho beneficio por el presente año, compensándose económicamente al trabajador con el abono del sueldo o jornal que corresponda a los días de descanso retribuido, añadiendo a los días que la Ley fija los correspondientes a la mitad de las vacaciones del pasado año, si no fueron disfrutadas." Sanfulgencio Nieto, Salvador. Vacaciones anuales retribuidas. Madrid, 1946, pág. 14.

## Capítulo 4. La concepción de la familia en el franquismo.<sup>1</sup>

### 4.1. El concepto de familia.

El tratamiento del concepto de la familia tiene una especial relevancia desde el momento en que, formalmente y no necesariamente de hecho, la política laboral de los años de Girón al frente del ministerio de Trabajo (1941-1957) tenía como elemento de referencia a lo largo de toda su labor al frente del ministerio de Trabajo, no al trabajador sino a la familia del "productor," si atendemos a las palabras del antiguo ministro:

"Para la política laboral española la unidad no es el trabajador, sino el trabajador con su familia. Y como veremos más adelante en orden a la previsión social, esta idea es aún más clara."<sup>2</sup>

Hasta tal punto se manifestaba formalmente la imbricación entre el proyecto político que se pretendía llevar a cabo tras la Guerra Civil y la familia, que Codón afirma que "el 18 de julio fue un movimiento de familias más que de individuos"<sup>3</sup> ante el ataque masivo de la "revolución", y que fue en el seno de la familia donde se alimentó la ideología cristiana y española que explotó ese 18 de julio recordando las luchas de "cruzada" del siglo XIX. En torno a esta reflexión el mencionado autor expone un concepto organicista de la sociedad en el que la familia ocupa el centro fundamental de producción de sociedades intermedias hasta llegar al Estado mismo:

"...entre la familia y el Estado no hay un vacío. La familia está fundada sobre el pilar del matrimonio, la más excelsa sociedad. De ella nace una doble jerarquía de sociedades naturales complementarias, como el municipio, la comarca, la región; otra de sociedades derivativas, como la Escuela, la Universidad, el Sindicato, la Cámara. Y dentro de éstas, otras sociedades espontáneas en virtud de la libre elección de la senda o vocación de cada uno. La nación es el conjunto de esas sociedades ligadas federativamente. El Estado es la unidad de orden y la necesidad de dirección que corona esta sociedad"<sup>4</sup>.

Tanto la concepción de la familia como la de la política de Estado realizada en torno a ella, aparecía transida de paternalismo. "Un reino es una gran familia; un rey ha de ser el padre de sus vasallos si la Soberana Ley de Dios impera en su corazón"<sup>5</sup>, afirmaba Codón utilizando el pensamiento de Pallés y Beltrán.

Por ello, desde estos presupuestos ideológicos, y amparándose en el pensamiento papal, en concreto en la *Divine Redemptoris* y en la *Casti Connubi*, Girón encuentra en el Movimiento una realidad política fiel a la doctrina de la Iglesia Romana partiendo del reconocimiento y la necesidad de protección de la familia “como institución y como individualidad de partida en materia de justicia social, y como sujeto del pacto entre el trabajador y la empresa”<sup>6</sup>.

De ahí la importancia y trascendencia de proteger a la familia. De igual forma que los ayuntamientos eran, supuestamente, el elemento básico y primigenio de la organización administrativa, las familias eran las células “base de la unidad moral de un pueblo”<sup>7</sup>. Por tanto, el hecho de protegerla y promoverla era la “condición misma del progreso económico, social, cultural y ético de la humanidad”<sup>8</sup>, y en consecuencia, de la propia España.

A esto, y de forma introductoria, hay que añadir que el modelo considerado más puro en cuanto a la familia se refería, era el modelo rural. La familia campesina era vista como aquella en la que pervivían las “virtudes morales, sociales y religiosas con mayor pureza y mayor unidad”<sup>9</sup>. Y por tanto, de forma explícita o implícita el modelo de orientación hacia el que se iban a dirigir las miradas era la familia rural. Y es que en la urbana o industrial se observaba un mayor refinamiento de costumbres fruto de la complejidad de la urbe, fruto de la disgregación de la unidad familiar y de la dificultad y complejidad de la vida en familia.

Además de beber del catolicismo<sup>10</sup>, el concepto que de la familia se tenía en este periodo de la Historia de España hundía sus fundamentos en el tradicionalismo y en el falangismo.

Para el tradicionalismo español “la familia es una creación directa de Dios, una institución de derecho divino”<sup>11</sup>. Para Balmes la familia era la primera sociedad organizada. Según Donoso Cortes, la familia era el fundamento inmortal de todas las asociaciones humanas, divina en su institución y esencia; la familia era el fundamento divino de la sociedad humana, podríamos concluir. “La familia es la única institución que descansa en un sacramento. La carta de ciudadanía de sus miembros es un bautizo místico. Tiene un contenido preferente y precisamente espiritual”<sup>12</sup>, afirmaba Codón.

Para Vázquez de Mella la unidad familiar española era el baluarte fundamental contra las ideas antirreligiosas y la columna más firme en que se sustentaba la Patria. La soberanía social nacía de la familia, según Mella, dado que la vida familiar era la más alta de todas las sociedades ya que era capaz de ejercer las más elevadas operaciones sobre la tierra: crear hijos, y proyectarse sobre todas las relaciones humanas.

El pensamiento tradicionalista enlazaba los textos bíblicos, el pensamiento clásico y el de integristas como Fustel de Coulanges como forma de articular los orígenes genuinos de la familia española a lo largo de la noche de los tiempos. Desde esta perspectiva, el origen de la familia española encajaría con la teoría patriarcal clásica expresada en la Sagrada Biblia, coincidente con la tipología establecida por Aristóteles en su "Política" y Fustel de Coulanges en "La cité antique". Ésta pasaría después a convertirse en la familia monogámica cristiana. Así pues, las características que definían a la familia española desde sus comienzos eran las siguientes: "...una estructura patriarcal, convertida luego en monogámica, la amplitud del lazo parental, un fuerte cimiento religioso con una moralidad estrecha de él derivada; la seriedad de las relaciones prematrimoniales el matrimonio monogámico y la consagración del varón a sustentar la familiar y de la mujer a criarla"<sup>13</sup>.

Desde el punto de vista del tradicionalismo, la familia era vista con un cierto halo romántico, paralelo a la superioridad del marido sobre su cónyuge. Junto a la unidad indisoluble del lazo conyugal y el sentido religioso se veía en la fidelidad de los esposos un elemento definidor del ser de lo español llevado incluso "hasta el extremo del homicidio *honoris causa*"<sup>14</sup>. Era en definitiva, un concepto de familia castellana cuyo modelo de orientación podría ser la familia del Cid Campeador: una familia sobria, mesurada y que reflejaba la tipología previamente señalada.

Desde el pensamiento tradicionalista, con un punto de referencia básico en la familia como fundamento de lo social, surgió el denominado *sociedadalismo* o doctrina de la soberanía, sistematizado por Vázquez de Mella. Consistía dicho planteamiento en la concepción de la sociedad como un sistema planetario, un todo orgánico, en el que de forma armónica se movían otros sistemas menores de forma interdependiente, solidaria e integrada. La soberanía social, decía Vázquez de Mella, "se concreta en la familia más que en ninguna otra sociedad ni grupo. La soberanía política únicamente en el Estado. La suma de ambas soberanías, en perfecto equilibrio, constituye el orden tradicional"<sup>15</sup>.

Según Codón, José Antonio pretendió reconstruir la sociedad española después de la crisis sufrida a consecuencia de la disolución liberal y la invasión materialista del comunismo. Esta reconstrucción exigía la concesión al hombre de un ámbito de dignidad que supuestamente le negaban todos los colectivismos absolutos o totalitarios y la resolución, a la vez, del "problema de la solidaridad social, en términos de justicia y hermandad, que el liberalismo fue incapaz de lograr dejando una secuela de anarquía y confusión social"<sup>16</sup>. Desde este punto de vista, la familia era la célula originaria de la sociedad que, para cumplir sus fines, había de hacerlo en sociedad. "Para España jamás ha existido duda alguna de que la familia es la entidad natural, fundamento de la sociedad", afirmaba Girón<sup>17</sup>. Y por tanto, la configuración de la misma

sociedad permitiera o no el desenvolvimiento fructífero de la familia. Desde este planteamiento, se promovía la ordenación de la sociedad según nuevos criterios, y en concreto apoyada en las unidades naturales: la familia, el municipio y el sindicato.

Así pues, la familia se veía como el elemento básico y primordial de la sociedad. Un elemento de marcado carácter cristiano cuyo inadecuado desenvolvimiento dislocaría la estructura social de la nación española.

En el Congreso de la Familia Española la provincia de Salamanca<sup>18</sup> presentó una encuesta con un valor sociológico formalmente cuestionable en la medida en que no se aportaban datos en torno al número de personas sobre el que se hizo la encuesta, las características de las mismas o el momento en que dicha encuesta se realizó. A pesar de ello, los resultados que de la misma emanan tienen una cierta trascendencia o dan luz sobre el concepto de familia a finales de los cincuenta. Las preguntas y respuestas fueron las siguientes:

A) ¿Cree que existe realmente, al menos con vigencia social, un concepto español de la familia?

Sí: 86 %

No: 7 %

No contestan: 7 %

Precisan: Español y universal: 8 %

“ Español y occidental: 8 %

“ Español y católico: 20 %

B) ¿Considera que dicho concepto sigue teniendo vigencia social o está, por el contrario, en crisis?

Sí: 44 %

No: 6 %

No contestan: 7 %

Crisis de disminución: 43 %

C) En el caso de estar en crisis, ¿cómo lo defendería eficazmente?

Con mejor formación religiosa: 43 %

Mejor educación: 44 %

Medidas económicas: 39 %

D) ¿Debe defenderse la ultranza o debe corregirse?

Defenderse: 53 %

Corregirse: 45 %

No contestan: 2 %

E) ¿Cuáles son las relaciones que cree deben existir entre la familia, el Estado, las Corporaciones públicas, la estructura política del Movimiento, etc.?

Relaciones de cordial y justa interdependencia (Contestaciones muy matizadas dentro de la tónica de interdependencia): 72 %

No contestan: 28 %

F) ¿Deberían buscar los cabezas de familia un organismo popular que se encargara del ejercicio de los derechos y deberes que las leyes orgánicas del Estado confieren a la familia?

Si: 81 %

No: 17 %

No contestan: 2 %

Matizan, no política: 28

Según esta encuesta, que sólo se puede asociar a la provincia de Salamanca, se puede afirmar que de forma abrumadora se creía en la vigencia de un concepto particular de lo que era la familia española. Sin embargo, dicho concepto que, como hemos visto, estaba en la base de la "Nueva España" que se pretendía crear tras la Guerra Civil aparecía en declive en los cincuenta. O por lo menos, su vigencia no se observaba de forma tan explícita. Hasta un 43 % de los encuestados opinaba que tal concepto estaba en crisis de disminución.

La tercera de las cuestiones planteadas era la que mostraba una mayor división; las opciones que se ofrecían para solucionar la supuesta crisis de vigencia no provocaban una decantación mayoritaria de los encuestados hacia ninguna de ellas. Por el contrario la variable religiosa, educacional y económica se llevaba un porcentaje muy similar de apoyos.

De lo hasta ahora expuesto, se deduce un concepto de familia tradicional y católica, adepta a los principios del Movimiento, defensora esencial de estos principios y planteamientos, y columna básica sobre la que habría de asentarse la "revolución", sobre todo en el orden laboral, que España necesitaba.

#### **4.2. El papel de las mujeres y los hombres en el hogar y en la empresa.**

Sin duda alguna la industria intervino de forma fundamental a la hora de poner en marcha a la mujer en lo que se refiere a su salida del hogar y a la búsqueda de un puesto de trabajo



remunerado fuera de él. La Revolución Industrial rompió el esquema en el cual la familia era el centro de la vida económica y el elemento propulsor de la producción. La coincidencia, en líneas generales, de consumidores y productores, y los mercados locales, comarcales o, a lo sumo, regionales, dieron paso, junto al desarrollo de los medios de transporte, a mercados integrados donde el consumismo empezaba a abrirse camino progresivamente. La desaparición del artesanado y sus sustitución por la manufactura está en el contexto en el cual las mujeres empiezan a integrarse en el mundo laboral retribuido en busca de ingresos. Este periodo de auge del capitalismo liberal es objeto de especial inquina por parte de las autoridades del régimen y en este contexto se produce la condena de lo que supone por sí mismo y en relación a la familia y a la mujer. Esto es lo que se va a condenar desde las páginas de diversas publicaciones de la época: el que “los apremios económicos (frecuentemente la necesidad de llevar a los hijos lo que no alcanza el salario del marido) suelen lanzar a la mujer casada al trabajo fuera de casa, buscando tarea coordinada -a veces mecanizada- en una organización colectiva que la remunera más que el trabajo individual hecho en el propio domicilio”<sup>19</sup>. Junto a lo anteriormente mencionado, otra de las críticas hechas al trabajo femenino es que era retribuido con un salario de explotación: “Si el salario del hombre es insuficiente para levantar la carga de varios hijos, más lo será el de la mujer, que, en general, es salario de explotación”<sup>20</sup>, señalaba Aznar.

Indudablemente la concepción que de las mujeres se tenía en la época de estudio, y consiguientemente la proyección en la norma que se realizó tuvo, entre otros, como elemento de referencia el pensamiento de la Iglesia Católica, dentro de la cual el Papa era la persona más indicada para reflejar la concepción que de la mujer, el trabajo, la familia o la sociedad se tenía y en torno a la cual se realizaba, en cierto modo, proselitismo entre las naciones europeas. Esta concepción tiene como elemento de referencia básico a la familia y a la idea de que “la familia, como célula natural de la vida social, tiene derechos propios ante los que deben ceder los de los individuos de uno y otro sexo”<sup>21</sup>. Partiendo de este punto de punto de vista los objetivos de dicho planteamiento voluntarioso y formal se resumirían en la siguiente aseveración de Girón:

“No se trata tan sólo de proteger legalmente los periodos de gravidez de la mujer, ni de preservar a su descendencia de los peligros de un alumbramiento realizado en malas condiciones; ni se trata solamente de preservar al recién nacido en las primeras semanas de su vida de los peligros que puedan amenazarle, sino que se trata de reconocer que la mujer casada debe permanecer, siempre que esto sea posible, en el hogar, como educadora de la prole en el orden físico, espiritual y moral y como administradora y compañera del trabajador”<sup>22</sup>.

Y es que el trabajo para la madre era concebido como un grave mal, ya que quemaba prematuramente su vida. La mujer había de ser dulce compañera del hombre y su utilísima cooperadora. Por ello era igualmente una desventura para los hijos y para el marido que no pudieran ser atendidos debidamente. En definitiva, era "la muerte del hogar", ya que "el hogar es la madre, y ausente, aquél se desorganiza y se disuelve".<sup>23</sup>

Las palabras de Pío XII, amparado en la idea paulina del hombre como cabeza directora de la mujer, de igual manera que Cristo lo era de la Iglesia, son esclarecedoras sobre la problemática que se plantea en torno a las mujeres, el mundo del trabajo y sus repercusiones en la sociedad y en la familia:

"Las condiciones de vida que se derivan al presente del estado económico y social, por lo que se refiere a la orientación hacia las profesiones, las artes y los oficios, y por la entrada de hombres y mujeres en las fábricas, en las oficinas y en los diversos empleos, tienden a engendrar e introducir prácticamente una amplia paridad de las actividades de la mujer con las del hombre de tal manera que los esposos se encuentran no pocas veces en una situación que casi raya en la igualdad. Marido y mujer ejercen a menudo profesiones de la misma categoría, aportan con su trabajo personal una contribución casi idéntica al presupuesto familiar, al tiempo que, por su mismo trabajo, se ven obligados a llevar una vida asaz independiente el uno del otro. Mientras tanto, los hijos que Dios les envía, ¿qué vigilancia reciben, qué custodia, qué educación, qué instrucción? Se les ve, no digamos abandonados, pero sí muy a menudo entregados desde el principio a manos extrañas, formados, y guiados por otros más que por su madre, apartada de ellos por el ejercicio de su profesión. ¿Qué de extraño tiene que se debilite y disminuya, hasta perderse, el sentido de la jerarquía familiar, si el gobierno del padre y la vigilancia de la madre no consiguen hacer grata y amable la convivencia doméstica?"<sup>24</sup>.

Esta concepción parecía haberse llevado a cabo en España con la institución del subsidio familiar. Sobre esta cuestión el Congreso de la Familia Española hacía una referencia explícita que puede tener un doble sentido. Se afirma lo siguiente:

"Conseguido el objetivo del salario familiar, se habrá conseguido, sin duda, el retorno de la mujer casada al hogar, liberándola del trabajo que fuera del mismo realiza, con perjuicio en muchas ocasiones de la auténtica función que dentro del hogar corresponde a la mujer"<sup>25</sup>.

A la altura en que se realizan estas manifestaciones, si algo parece evidente a la luz de las mismas es que la institución del subsidio o salario familiar no había sido más que un ejercicio voluntarioso sin una proyección en la realidad social que justificara las alabanzas que sobre él se realizaban desde instancias oficiales. Por todo ello, podemos afirmar que la utopía de la vuelta de la mujer al hogar no se había realizado, y que por el contrario la tendencia caminaba en sentido inverso a los planes iniciales.

Saliéndome ligeramente del período de estudio previamente establecido recurriré al II Congreso de la Familia Española<sup>26</sup> porque sus manifestaciones dan cuenta de una línea de continuidad que refuerza las afirmaciones previas y que, por tener mayor perspectiva, da luz con mayor claridad a la cuestión del fracaso del régimen a la hora de llevar a la mujer al hogar. Éste II Congreso puso de manifiesto los recargos y agravios que suponía para la mujer casada el trabajo fuera del hogar y el incumplimiento de los principios plasmados en el Fuero del Trabajo. Señalaba el II Congreso que la motivación básica que expulsaba a la mujer del hogar era la insuficiencia de ingresos del cabeza de familia, así como la inexistencia de un verdadero salario familiar, que ya se plasmaba como una utopía. Y proponía una campaña de concienciación de la sociedad española acerca de los beneficios que para el país reportaría la vuelta al hogar de las mujeres españolas, así como la revisión y actualización del plus, el subsidio familiar, la ayuda familiar, la dote y otra serie de instituciones “que han perdido, en parte, su eficacia económica.”<sup>27</sup>

No sólo la Iglesia católica o las autoridades del régimen veían con malos ojos el trabajo de la mujer. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas no condena con tanta virulencia las consecuencias negativas del trabajo de la mujer fuera del hogar aunque no por ello deja de advertir de las secuelas de su actividad en los centros de trabajo. Y es que “el empleo de las mujeres fuera del hogar puede tener efectos adversos desde el punto de vista social en el nivel de vida de la familia”<sup>28</sup>, se afirmaba.

Las consecuencias de la salida de la mujer del hogar y su incorporación al mundo laboral eran de órdenes diversos, todas ellos perjudiciales para la nación en cuanto iba en detrimento del sustento de la vida presente y futura de los españoles, y dado que desviaba las fuerzas de las españolas hacia otras misiones para las que, supuestamente, no estaban preparadas por la naturaleza. Entre las consecuencias más generalizadas de la incorporación de la mujer al trabajo señalaba Bosch Marín<sup>29</sup> la disminución de la nupcialidad y la natalidad. Esta cuestión era una de las más abordadas porque “no es ya sólo el problema de la mujer casada que trabaja en lo que no corresponde a sus aptitudes el que se nos presenta, sino también el de la que, por trabajar, por no necesitar marido para tener una posición económica o social, o por no perder su puesto, no se casa”<sup>30</sup>. Por otro lado, y siguiendo con las mencionadas consecuencias, se puede

evitar el aumento del número de abortos, el incremento de la mortalidad maternal, y el ascenso de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil.

Y es que a la mujer se le habían reservado desde las alturas los trabajos relacionados con la reproducción, con el cuidado de la casa y de los hijos. Coincide con ello las conclusiones del trabajo de Gómez Gómez y Pérez Serrano<sup>31</sup> que, independientemente de los términos con los que denomina al régimen del 18 de julio, hace referencia a las tareas que se tenían encomendadas a las mujeres en el período que analizan del siguiente modo:

“La instauración del Régimen fascista de Franco supondrá la consolidación de un modelo por el cual el trabajo de la mujer tenderá a desvincularse del ámbito fabril para desarrollarse fundamentalmente en el ámbito familiar, sobre la idea de que la principal función social de la mujer estaría en la reproducción y el adoctrinamiento de los hijos”.

Pero, en la línea de lo que afirma la exposición de Pío XII se había introducido toda una nueva serie de elementos que habían troncado las tradicionales funciones de mujeres y hombres: “Sabemos bien que del mismo modo que la paridad en los estudios, las escuelas, las ciencias, los deportes y las competiciones hacen subir el orgullo a no pocos corazones femeninos, así también vuestra susceptible sensibilidad de mujeres modernas, jóvenes e independientes, se plegará, no sin dificultades a la sujeción casera”<sup>32</sup>. Y es que sin este esquema, dentro del cual a las mujeres se les asignaba las funciones ya mencionadas se perdería el fuego básico del hogar y por tanto este dejaría de existir, al menos como se concebía en palabras del Papa. A las mujeres tocaba “tener preparado o preparar todo lo necesario en el momento oportuno; el manjar para reponerse de la fatigas, el lecho para el descanso”<sup>33</sup>, y por supuesto la tarea de la reproducción como a continuación se afirma:

“Y cuando a la esposa haya concedido el Señor en su bondad la dignidad de madre junto a una cuna... ¡He aquí la elevación de la maternidad cristiana! ¡He aquí la salvación de la esposa! Una cuna consagra a la madre de familia y muchas cunas la santifican y glorifican ante el marido, ante la Iglesia y la Patria. ¡Necias, inconscientes y desgraciadas las madres que se quejan si un nuevo pequeño se abraza a su pecho y pide alimento a la fuente de su seno!... El heroísmo de la maternidad es orgullo y gloria de la esposa cristiana...”<sup>34</sup>

Estas son a grandes rasgos las funciones que se asignan a la madre católica española. Las de una madre sumisa, sometida al cabeza de familia y a las necesidades del hogar entre las que destaca la faceta reproductiva. Todo ello debía ser para las mujeres “no sólo una obligación

natural, sino un deber religioso y un ejercicio de virtudes cristianas, con cuyos actos y méritos creceís en el amor y en la gracia de Dios”<sup>35</sup>.

Como se ha dicho, no sólo la jerarquía eclesiástica veía en la mujer el centro del hogar. El que más tarde sería ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, se refería a las mujeres con los siguientes términos no muy alejados de los hasta ahora expuestos:

“La mujer logra la plenitud en la maternidad, que, a su vez, tiene servidumbre; por eso su destino principal es la familia y el poder desarrollar en ella su personalidad, su casa, su marido, sus hijos. No es menos cierto que es imposible una familia en la que todos sus miembros puedan hacer su voluntad. Como toda institución, la familia, para realizar su fin, necesita una autoridad. Es claro que el poder familiar admite, como los demás un cierto grado de división y especialización de funciones, pero siempre ha de haber una última instancia.”<sup>36</sup>

La concepción que Girón expresa sobre esta cuestión no dista de forma significativa de lo hasta ahora expuesto; si bien, parte de que la situación de la incorporación de la mujer al trabajo tenía su origen en el capitalismo liberal y en la barbarie moral que conducía a “la destrucción de la feminidad en la mujer y que atentaba contra la augusta misión de la maternidad y aun contra el pudor y contra la virtud”<sup>37</sup>. Y es que “ni la familia ni la mujer misma pueden, por regla general, ser felices si la mujer no puede consagrarse plenamente a su tarea familiar”<sup>38</sup>, decía Girón.

Por tanto, fuera de la familia no es entendida la existencia de la mujer. El ámbito en que se garantizaba el respeto y la dignidad a las mujeres había de ser únicamente el familiar<sup>39</sup>. Y es que la “mujer es plenamente mujer cuando es madre”<sup>40</sup>; es ella el centro del hogar desde esta perspectiva y por tanto es ella la que da consistencia al hogar y la que, independientemente de que haga más o menos agradable la vida de la prole y su marido, actúa o debería actuar como elemento fundamental de socialización y, en concreto de cristianización. Este factor, quizás era el máximo elemento de preocupación del Régimen y así lo manifestaba el Congreso Provincial de la Familia Española de Orense cuando pedía que se posibilitase “la presencia permanente de la mujer casada en el hogar para evitar su inhibición en la educación de sus hijos”<sup>41</sup>.

La visión de la mujer al final del período considerado (finales de los años cincuenta) cambió en sentido de denuncia y de aceptación de una nueva realidad que lentamente se iba imponiendo. En el mencionado sentido de denuncia Tarancón aludía a la pérdida de pudor y de recato de la mujer española; y es que la mujer de los cincuenta se había hecho “desenvuelta y descocada”<sup>42</sup>, en palabras del obispo de Solsona. Paralelamente la concepción de hecho del trabajo, la familia y la mujer había cambiado o al menos había variado sus tradicionales posiciones de firmeza y

extremismo en torno a este tema. Así, en el Congreso de la Familia Española, Barcelona pidió que se fomentara la instalación de guarderías y escuelas infantiles "a fin de atender a los hijos durante la jornada de trabajo de los padres, hasta la edad escolar"<sup>43</sup>. Era tan evidente la incorporación paulatina de las mujeres a los puestos de trabajo antes realizados por los hombres que Barcelona pidió como última fórmula para romper la tendencia lo siguiente:

"Deberá establecerse una prestación económica en favor de la mujer casada, en compensación o para estímulo de su integra dedicación al hogar y condicionada, por tanto el hecho de no prestar ninguna clase de servicios o trabajos ajenos al mismo..."<sup>44</sup>

En torno al abandono del trabajo por parte de la mujer sólo parecía haber una excepción en la industria textil según manifiesta Juan B. Puig<sup>45</sup>. El trabajo de las mujeres en este sector de la producción se debía a una ley natural motivada por el hecho de que la mujer había sido la precursora de la confección de prendas. Desde este punto de vista, el trabajo fuera del hogar no constituía motivo para que la casada tejedora o hilandera fuera tildada de despreocupada o mala madre. Por eso "nadie ha puesto reparo en su participación en la industria textil...", y por eso "es en la industria textil donde más necesario es aún su cooperación y donde más puede persistir su presencia"<sup>46</sup>, y de ahí que el mencionado autor llegue a afirmar que "preferimos el trabajo femenino de hoy en la industria al de ayer en el hogar..."<sup>47</sup>.

Los cambios con respecto a la familia en la década de los cincuenta se palpan también en peticiones como la que Tenerife realizó en el Congreso de la Familia Española. Dicha solicitud consistía en potenciar los parques, jardines infantiles y parvularios donde se proporcione "alimentación y enseñanza a los hijos de padres pobres que tengan que trabajar fuera y dejan a aquéllos, entre tanto, completamente abandonados"<sup>48</sup>. Esto último muestra un cambio cualitativo fundamental en ruptura directa con principios aparentemente inmutables como el del punto 1º del Título II del Fuero del Trabajo cuyo objetivo, entre otros, era libertar a la mujer casada del taller y de la fábrica. Además de esto, se puede afirmar que se constata, en contradicción con las manifestaciones formales del Régimen, la existencia de la necesidad imperiosa de que trabajaran los dos padres en muchas ocasiones en contradicción con los ya mencionados principios formales en torno al trabajo y las mujeres.

Como ya se ha dicho todo ello conducía formalmente a la exclusión de las mujeres del mercado de trabajo. Pese a ello, como también se ha mencionado, su incorporación continuaba de forma progresiva. La consecuencia económica familiar más inmediata había sido el lanzar a la circulación un número considerable de mujeres para ejercitar las distintas profesiones y menesteres, en que no sólo competían, sino superaban a los varones. Frente a ello el régimen no

podía menos que reaccionar ante lo que atentaba contra las esencias básicas plasmadas en normas como el Fuero del Trabajo o el de los Españoles:

“Tan es verdad esto, que el Estado no ha dejado de tomarlo en cuenta, y no a otra finalidad que a reducir la competencia femenina y el desempleo de los varones conducen todas las normas de trabajo en que se prohíbe que éste sea ejecutado por mujeres casadas, o en que se obliga la empleada o funcionario a dejar su puesto vacante tan pronto como contrae matrimonio”<sup>49</sup>.

Lo referente a la salida de las mujeres del hogar y su incorporación al mundo del trabajo se plasma también en las conclusiones generales del Congreso de la Familia Española<sup>50</sup> en el que se denuncia la necesidad de las mujeres de permanecer fuera del hogar, de realizar trabajos asalariados y la inexistencia de organizaciones que las suplieran.

En los años cincuenta la visión del trabajo de la mujer fuera de su hogar cambió incluso desde las posiciones más firmes del propio ministerio de Trabajo. M. Puente Ojea<sup>51</sup> en su artículo sobre la problemática del trabajo femenino planteaba los problemas que para el hombre suponía la competencia de la mujer y las consecuencias sociales en el orden de la natalidad y de la disolución de la familia. Sin embargo, no por ello demandaba la salida de la mujer del mundo del trabajo remunerado, sino más bien la reorientación hacia las ramas del mundo laboral que se creían más apropiadas para el sexo femenino:

“...orientar a la mujer hacia aquellos empleos que convengan más a sus facultades físicas, psicológicas, intelectuales y morales, así como a las cualidades de los mismos...”

Este trabajo debe resultar un beneficio para ella y para la sociedad en que lo practica, y esto puede conseguirse si al viejo sistema de improvisación sucede un plan racional de orientación encaminado a procurar a la mujer en la sociedad los puestos más convenientes.”<sup>52</sup>

Como mal menor se acepta la posibilidad de preparar a la mujer para las profesiones propias de la maternidad, la vivienda y las actividades domésticas porque además de “una mejor formación de la mujer para la función de madre y para administrar y hacer agradable el hogar familiar, con ello se ha de obtener una buena preparación de personal para sanatorios, hoteles, pensiones, colegios y otros establecimientos donde podrán desempeñar actividades muy importantes de carácter doméstico muchas mujeres que no sean llamadas al matrimonio y a la dirección de hogar familiar.”<sup>53</sup>

Amparo Parrilla está en la misma línea de las opiniones reflejadas previamente. Es decir, potenciar al máximo el círculo ambiental que evite la penuria de los núcleos familiares como forma de evitar el trabajo femenino eludiendo la posibilidad de que la madre tenga que "compensar el déficit con un trabajo que la distancia de los cuidados que debe al hijo, procurando que sólo en caso de excepción sea precisa la extraña actividad materna, dando preferencia a la que la aleje lo menos posible del hogar y del niño"<sup>54</sup>. En definitiva, no se aconseja el trabajo de la madre, pero ante su inevitabilidad se manifiesta el deseo de que sea sólo una excepción.

Otro ejemplo de preocupación por la situación de los cincuenta y sus cambios lo expone el Congreso Provincial de Jaén al tratar la crisis que observa en este período de la Historia de España: "Al tratar de la crisis actual de la familia, la ponencia hace resaltar, siguiendo a nuestros sociólogos, que, por un lado hay un movimiento en cierto sector de la juventud que tiende a desatar los vínculos de la potestad paterna, disminuyendo el respeto y la consideración a los padres; y, por otro lado, una acción feminista que trata de colocar a la mujer en un plano de igualdad, cuando no de superioridad al hombre, eliminando así los vestigios de la antigua autoridad marital."<sup>55</sup>

Frente a ello, el hombre es visto como el jefe y cabeza de familia cuya potestad viene de Dios. "Por eso también la familia fundada por vosotros tiene un jefe investido por Dios de autoridad sobre aquella que se le ha dado por compañera..."<sup>56</sup>. Y así como Eva quedó sometida a Adán, la mujer quedó sometida al hombre para lograr su salvación por medio de la procreación. Dentro de este esquema era también al hombre al que le tocaba disponer los medios para el sustento y la subsistencia de la familia:

"Corresponde la parte principal al marido en el asegurar la subsistencia y el porvenir de las personas de la casa, en las determinaciones que comprometen a él y a los hijos para el futuro..."<sup>57</sup>

De igual manera que la mujer tenía como funciones fundamentales la reproducción, la educación y socialización de la prole de acuerdo a un esquema de valores en cuya cúspide estaban el catolicismo y la adhesión al régimen, el hombre había de tener la consideración de "jefe de una célula social"<sup>58</sup>. En cierto modo, el padre de familia era juzgado como el mando de una unidad de choque contra todos los elementos ideológicos considerados como virus foráneos imposibles de asignar a la tradición y los valores que secularmente habían dado forma a España desde tiempos del los visigodos hasta el siglo XX.



No se planteaba la esclavitud de la mujer con respecto al marido, pero su situación de inferioridad de hecho conducía a peticiones como la del Congreso Provincial de Orense. En aquél se manifestó el deseo de que se mantuviese la integridad de la capacidad civil de la mujer casada, pero eso sí, "sin menoscabo de la preponderancia del marido en el gobierno de la familia"<sup>59</sup>. Y es que estos cambios que se palpan con claridad en los años cincuenta en favor de las mujeres no son bien vistos por algunos sectores del franquismo:

"...nadie rechazará nuestra afirmación de que la autoridad del padre de familia ha ido disminuyendo en el transcurso de los siglos, que esta degeneración de la autoridad del padre de familia se ha ido acentuando durante el siglo XIX y que esa limitación de la autoridad paterna ha tenido su proyección lógica en el Código civil (precipitándose aún más por las cavilidades, probablemente exageradas, respecto a la capacidad jurídica de la mujer casada, que han arrastrado, aún hace poco tiempo, a una nueva reforma del Código civil, en que reconociéndose a la mujer casada una mayor autonomía, se ha degradado aún más la autoridad del padre de familia)"<sup>60</sup>.

El ámbito de las excedencias forzosas demuestra hasta que punto se estaba dispuesto, por parte de las autoridades del régimen, a mandar a casa a la mujer casada para la mejor realización de sus labores caseras. Sobre esta cuestión el Congreso de la Familia Española incide en que "no a otra finalidad que a reducir la competencia femenina y el desempleo de los varones conducen todas las normas de trabajo en que se prohíbe que éste sea ejecutado por mujeres casadas, o en que se obliga a la empleada o funcionaria a dejar su puesto vacante tan pronto como contrae matrimonio"<sup>61</sup>.

El modelo general en lo que se refiere a las excedencias forzosas estipulaba que el personal femenino que entrara al servicio de la empresa a partir de la publicación de la reglamentación a que perteneciese, si contraía matrimonio quedaba automáticamente en situación de excedencia forzosa, teniendo derecho a percibir una dote que variaba según las ramas de la producción pero que rondaba las seis mensualidades. Tenían derecho a reingresar sólo en caso de incapacidad o fallecimiento del marido, teóricamente ocupando la primera vacante que se produjera en su categoría y sin que se le computase el tiempo que hubiese permanecido en situación de excedencia forzosa.

A pesar de ello podemos encontrar excepciones motivadas por razones muy pragmáticas. Es el caso de la Reglamentación de Puertos y Faros puesta en vigor por la Orden de 15 de diciembre de 1947<sup>62</sup> en la que exceptuaba a las mujeres de la limpieza siempre que pudieran desempeñar normalmente su cometido. Otra notable excepción al modelo hasta ahora expuesto era la Reglamentación de Frio Industrial<sup>63</sup> en la que sorprendentemente, salvo posible errata no

corregida en los boletines posteriores, entre las motivaciones que producían la excedencia forzosa no se encontraba el matrimonio.

En otros casos, dado que la legislación se refería únicamente a las mujeres que comenzasen a trabajar en la empresa a partir del momento de entrada en vigor de la Reglamentación, se posibilitaba que las mujeres casadas antes de dicha puesta en vigor pudieran optar entre seguir en sus puestos o solicitar la excedencia con los mismos derechos ya expuestos. Este era el caso de la Reglamentación de Bancos en general aparecida en la Orden de 26 de septiembre de 1946<sup>64</sup>.

Existen otras reglamentaciones en las que se ponen importantes trabas a la vuelta del trabajo de la mujer incluso en el caso de fallecimiento del cabeza de familia. Así, por ejemplo, la Reglamentación del Cemento o de Pielés, en que se estipulaba que para el reingreso de la mujer su edad habría de ser inferior a los cincuenta años. En cuarenta y cinco años cifraba la edad máxima la Reglamentación del personal dependiente de la Organización Médico Colegial.

Más complicada era la readmisión, incluso en caso de muerte del marido, en la empresa nacional "Calvo Sotelo"<sup>65</sup>. En ésta se exigía para el reingreso un examen psicoanalítico, atendándose primero las solicitudes de reingreso de los que quedaran en estado de excedencia por motivo de enfermedad.

En resumen, se puede hablar de una concepción de las mujeres restrictiva para con sus posibilidades de desarrollo profesional. Su mundo, según los presupuestos expuestos, estaba en el hogar junto a su marido y a sus hijos, cuidando de los mismos. Las facetas que las mujeres españolas habrían de considerar como prioritarias habrían de ser las de la reproducción y los cuidados físicos y espirituales de su prole, tareas éstas que santificarían a las madres españolas ante el Estado y ante el Señor, en una nación de acentuado carácter católico. Por contra, al hombre, reproduciendo el clásico esquema patriarcal tomado de la jerarquía de los Cielos, le correspondía el cuidado y sostenimiento de la familia. Y en este reparto de funciones la normativa laboral institucionalizaba los mencionados planteamientos poniendo graves dificultades al acceso de las mujeres al mercado de trabajo, salvo en sectores excepcionales como el del textil catalán.

### Notas

---

<sup>1</sup> Los capítulos del 4º al 9º son, en parte, el resultado de la tesina presentada por el doctorando en el Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad

Complutense el 18 de junio de 1996 y que, como constaba en la misma, era una primera aproximación al estudio de la política social franquista, tema en el que se centra la presente tesis. Ese es el motivo por el que, con algunos cambios, se inserta aquel estudio con el resultado final de la investigación.

<sup>1</sup> Girón de Velasco, Escritos..., op. cit., pág. 170.

<sup>2</sup> Codón, José María: La familia en el pensamiento de la tradición. Madrid, ed. C.F.E., 1958, pág. 11.

<sup>3</sup> Ídem, pág. 32. También en Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 122.

<sup>4</sup> Ídem, pág. 18.

<sup>5</sup> Girón, de Velasco, José Antonio: La elevación de los pluses familiares será general, pero no será igual para todas las reglamentaciones. Revista de Trabajo, enero de 1954, nº 1, pág. 50.

<sup>6</sup> Melas, Reinhold: La familia ante los Seguros Sociales. Revista de Trabajo, febrero de 1954, nº 2, pág. 150.

<sup>7</sup> Ídem, pág. 150.

<sup>8</sup> López Medel, Jesús: La familia rural, la urbana y la industrial en España. Madrid, Cuadernos de Investigación, 1961, pág. 35.

<sup>9</sup> Estudios y conclusiones..., op. cit., pág. 12-13.

<sup>10</sup> Codón, op. cit., pág. 17.

<sup>11</sup> Ídem, pág. 18.

<sup>12</sup> Ídem, pág. 6.

<sup>13</sup> Ídem, pág. 7.

<sup>14</sup> Ídem, pág. 27-28.

<sup>15</sup> Estudios y conclusiones, fascículo nº 22, op. cit., pág. 13.

<sup>16</sup> Girón de Velasco, "Escritos...", op. cit., pág. 168.

<sup>17</sup> Nueva síntesis de ponencias provinciales..., op. cit., pág. 17-18.

<sup>18</sup> Mallart, Jose: Hacia un sistema integral de protección a la familia. Revista Española de Seguridad Social, marzo de 1948, nº 3, pág. 501.

<sup>19</sup> Aznar Embid, Severino: Para quién se ha dado el régimen de subsidios familiares. Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión, 1944, nº 3, pág. 310.

<sup>20</sup> Girón de Velasco, "Escritos...", Tomo IV, pág. 228.

<sup>21</sup> Ídem, pág. 228.

<sup>22</sup> Aznar Embid, Del salario familiar..., op. cit., pág. 11-12.

<sup>23</sup> Pio XII, Pio XII..., op. cit., pág. 293-294.

<sup>24</sup> Estudios y conclusiones..., op. cit., pág. 67.

<sup>25</sup> Conclusiones del II Congreso de la Familia Española. Madrid, ed. C.F.E., 1962, pág. 104-108.

<sup>26</sup> Ídem, pág. 108.

<sup>27</sup> Informe sobre una política coordinada relativa al nivel de vida familiar. Nueva York, Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 1957, pág. 11.

<sup>28</sup> Juan Bosch Marín: Trabajo, maternidad y lactancia. Madrid, Instituto Nacional de Previsión, 1943, pág. 3.

<sup>29</sup> Mallart, José, op. cit., pág. 503.

<sup>30</sup> Gómez Gómez, Carmen y Pérez Serrano, Julio: La mujer en la política laboral del fascismo a través de la Revista de Sanidad e Higiene públicas (1938-1945), en Actas de las II Jornadas de Investigación interdisciplinaria sobre la mujer. Madrid, Universidad Autónoma, 1984, pág. 207.

<sup>31</sup> Pio XII, Pio XII..., op. cit., pág. 300-301.

<sup>32</sup> Ídem, pág. 340.

<sup>33</sup> Ídem, pág. 341.

<sup>34</sup> Ídem, pág. 347.

<sup>35</sup> Manuel Fraga Iribarne: La familia española ante la segunda mitad del siglo XX. Madrid, Cuadernos de Investigación, 1959, pág. 38.

<sup>36</sup> Girón de Velasco, "Escritos...", op. cit., pág. 228.

<sup>37</sup> A. Vanderrey, M.: El subsidio a la madre en el hogar. Revista de Trabajo, nov./dic. de 1955, nº 11/12, pág. 1107.

<sup>38</sup> Manuel Fraga, La familia..., op. cit., pág. 39.

<sup>39</sup> Tarancón, La familia..., op. cit., pág. 25.

<sup>40</sup> Nueva síntesis..., op. cit., pág. 30.

<sup>41</sup> Vicente Tarancón, La familia..., op. cit., pág. 25.

<sup>42</sup> Síntesis de ponencias..., op. cit., pág. 18.

<sup>43</sup> Ídem, pág. 32.

- <sup>45</sup> B. Puig, Juan: El trabajo femenino en la industria textil. Revista de Trabajo, nov./dic. de 1945, n° 11/12, pág. 986-995.
- <sup>46</sup> Ídem, pág. 990-991.
- <sup>47</sup> Ídem, pág. 995.
- <sup>48</sup> "Síntesis de ponencias...", fascículo n° 18, op. cit., pág. 27.
- <sup>49</sup> "Estudios y conclusiones". Congreso Provincial de Vizcaya, Gabinete Técnico, fascículo n° 23, Madrid, ed. C.F.E., 1958, pág. 36.
- <sup>50</sup> Conclusiones del I Congreso de la Familia Española. Madrid, ed. C.F.E., 1959, pág. 17-18.
- <sup>51</sup> Puente Ojea, M.: Problemas en torno al trabajo de la mujer. Revista de Trabajo, abril de 1953, n° 4, pág. 441-447.
- <sup>52</sup> Ídem, pág. 444-446.
- <sup>53</sup> Mallart, José, op. cit., pág. 521.
- <sup>54</sup> Pamilla, Protección del Niño..., op. cit., pág. 120.
- <sup>55</sup> Síntesis de ponencias provinciales..., op. cit., pág. 41.
- <sup>56</sup> Pío XII, Pío XII..., op. cit., pág. 291.
- <sup>57</sup> Ídem, pág. 338.
- <sup>58</sup> Girón, Escritos..., Tomo I, op. cit., pág. 42.
- <sup>59</sup> Nueva síntesis de ponencias provinciales..., op. cit., pág. 31.
- <sup>60</sup> Estudios y conclusiones..., fascículo n° 23, op. cit., pág. 34.
- <sup>61</sup> Ídem, pág. 36.
- <sup>62</sup> Aranzadi, 312/1948.
- <sup>63</sup> Ídem, 380/1948.
- <sup>64</sup> Ídem, 1462/1946.
- <sup>65</sup> Ídem, 563/1949.

## **Capítulo 5. Los marcos de la política familiar.**

### **5.1. La política del Estado con respecto a la familia como "objetivo prioritario."**

Hay que decir que este epígrafe únicamente tiene como objetivo hacer hincapié en los planteamientos formales que en torno a la familia se hacían en el período considerado y a los objetivos deseables que se planteaban en torno a esta cuestión.

La posición formal del Estado salido del 18 de julio juzgaba como imprescindible que el espíritu que animara su política fuera la acción protectora y potenciadora de la familia en busca de su fortalecimiento, del incremento de su capacidad adquisitiva y de su nivel de vida. Era éste el objetivo formal planteado, "crear un clima, un caldo de cultivo en el cual la familia logre su óptimo, para, a su vez, poder mejor cumplir sus funciones..."<sup>1</sup>. Y es que protegiendo al niño se protegía al hombre, y por extensión a la sociedad. La familia era vista como "el núcleo alrededor del cual se cerraban los anillos familiares, manteniendo cohesionado el hogar"<sup>2</sup> y dado que la familia era la célula básica de lo social este planteamiento se extendía a la totalidad de lo social constituyéndose en elemento central de la paz y la armonía buscada por el régimen como elemento de prosperidad. Veamos un ejemplo de lo hasta ahora expuesto por medio de las aseveraciones de Fernández Heras, quien ve en la familia la génesis de la vida humana, un santuario divino sancionado por el Creador, un marco de socialización para los hijos y "un yunque donde se temple el alma de los pueblos, archivo de las santas tradiciones, célula vital de la Sociedad":

"Siendo, como es, la familia la fuente de donde recibimos la vida, la primera escuela en donde aprendemos a pensar, el primer templo en donde aprendemos a orar, hay que combatir todo lo que la destruya o la quebrante; hay que alabar y estimular cuanto favorezca su unidad, su estabilidad y su fecundidad"<sup>3</sup>.

Desde esta postura, Fraga hace referencia a una serie de países que en su ordenamiento constitucional o en la legislación general habían introducido mecanismos de protección de la unidad familiar. Por ejemplo, Portugal en su constitución de 1933, Irlanda en la constitución de 1937, Italia en su ley fundamental de 1948, Brasil en disposición de igual rango en 1946 o Uruguay en 1952. Todo ello enmarcado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 10 de diciembre de 1948 en cuyo art. 16, número 3, se afirma que "la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado"<sup>4</sup>. Y por tanto, para los juristas españoles relacionados con el tema, las Leyes Fundamentales y el derecho en todas sus facetas tenían que converger en torno al desarrollo y

potenciación de los principios protectores de la familia en orden a formar una compleja trama en torno a la unidad familiar y sus componentes.

Este planteamiento de tipo general hasta ahora expuesto se plasmó también en las conclusiones del Congreso de la Familia Española. La protección de la familia, se afirmaba, debía "fundarse en una serie de coordinadas actividades jurídicas, sociales y económico-fiscales, dotadas del suficiente dinamismo para que en cada momento contribuyan a solucionar aquellos problemas que la realidad de cada día plantee y a remediar aquellas deficiencias que se adviertan en el cumplimiento práctico de las leyes y en el desarrollo de las instituciones"<sup>5</sup>.

Esta visión globalista tenía en cuenta que los factores de orden demográfico, social o económico, de los que dependía el nivel de vida de las familias estaban ligados de forma innegable. Lejos de tratarse de elementos de influencia unilateral, "existe toda una red de influencias recíprocas entre los diversos factores y los diferentes elementos constitutivos del nivel de vida familiar"<sup>6</sup> por lo cual era necesario evitar la compartimentación de medidas. Por tanto, "la interdependencia de todos los elementos constitutivos del nivel de vida familiar y de los factores que lo afectan entraña necesariamente la interdependencia de todos los elementos de las políticas destinadas a mejorar los niveles de vida y, por tanto, exige la unidad fundamental de toda política relativa al nivel de vida familiar"<sup>7</sup>.

En la línea de las afirmaciones de Alonso García "la defensa de la familia y la preocupación por cuantos problemas afectan a ella ha de constituir uno de los fundamentos básicos de todo Estado que desee levantarse sobre bases sólidas de permanencia y de interna consistencia y significación"<sup>8</sup>. Lo que se proponía era una serie de medidas en favor de la familia por medio de una "política general del Estado, unida, coherente y continua, que atienda por igual a las causas religiosas y morales de la crisis familiar y a las de carácter social, político y económico"<sup>9</sup>. Y en este sentido, el 18 de julio de 1936 abría para las autoridades del régimen una nueva época en la que la familia inspiraría la política de España, cosa que según Jordana, era palpable en el hecho de que aquella inspiraba "las palabras del Caudillo y las actuaciones de sus seguidores"<sup>10</sup>. En esta línea, afirma Elorriaga que "resulta absolutamente lógico que, en cualquier empresa de resurgimiento, se busquen en la familia las esencias robustas para la reedificación de una sociedad nacional vigorosa".<sup>11</sup> Este es el aspecto fundamental de los planteamientos voluntariosos y protectores con respecto a la familia, y no debe ser perdido de vista a lo hora de valorar las conclusiones u objetivos logrados, también palpables en las propias críticas que desde el Régimen se hicieron a los objetivos conseguidos y no conseguidos.

Este posicionamiento se plasmó en lo legislativo en diversas facetas. Además de la cuestión laboral, y dentro de ella, el subsidio familiar, la ayuda familiar, el plus o la ley de familias

numerosas, podemos citar en el orden penal, la Ley de 12 de marzo de 1942 que tipificó el delito de abandono de familia, el restablecimiento de la indisolubilidad del matrimonio o la Ley de protección de menores de 11 de junio de 1948, entre otras.

A lo dicho hay que añadir que la intervención en lo social se plantea, al menos desde algunas instancias, en un tono paternalista. Así Mallart<sup>12</sup>, desde un planteamiento puramente moralizante exponía la necesidad de que los auxilios a la familia española fueran otorgados por medio de una relación directa entre el objeto de la necesidad y la instancia encargada de remediar la situación de deficiencia, forma ésta de que la eficacia de los auxilios no quedase a merced de los dudosos objetivos de los beneficiarios. Dentro de esta faceta del paternalismo más recalcitrante la educación y asesoramiento de los padres constituía el complemento del planteamiento expuesto.

En este marco, hay que decir que existe un mayor talante intervencionista en los años cuarenta que al final de los cincuenta. O por lo menos que las autoridades salidas de la Guerra Civil planteaban la política familiar desde una vertiente más intervencionista que veía a la familia como un baluarte defensivo ante los valores foráneos y peligrosos para la integridad material y espiritual de la familia española, que era, en definitiva, la de España. Por el contrario, en los cincuenta, surgieron voces contrarias a las medidas de apoyo directo a la familia. Un estudio del Instituto de Estudios Políticos manifestaba entre sus conclusiones una apuesta por la ayuda indirecta a la familia, es decir, por la intervención exclusiva en la política fiscal, la laboral y la de seguridad social. Excluía otra serie de facetas o ayudas no monetarias a las que nos referiremos al hablar de la familia numerosa. El posicionamiento del Instituto de Estudios Políticos se planteaba de la siguiente forma:

“...la familia misma ha de ser el primer agente de su propia ayuda y..., en consecuencia, la acción estatal no puede nunca adoptar formas tales que impliquen la socialización, consciente o inconsciente, de la vida familiar o de aspectos singulares de ella. Por el contrario, debe constituir el montaje institucional adecuado para procurar a la vida familiar su óptimo desarrollo y su mejor perfeccionamiento.

De aquí se deduce que las medidas que el Estado ha de tomar en orden a la protección de la familia deben ser lo más indirectas posibles, a fin de respetar en grado máximo su independencia y su autonomía”<sup>13</sup>.

Desde posiciones eclesiásticas el Estado estaba obligado a proteger a las familias y concretamente a las familias obreras. En cuanto a su nivel económico Tarancón<sup>14</sup> afirmaba que el Estado tenía el deber de vigilar y ordenar el campo económico para que los padres pudieran

cumplir con su deber sacratísimo, a lo cual añadía que “si en un momento determinado la organización o el estado económico de una Nación no permite que los padres ganen el salario suficiente, el Estado deberá intervenir para suplirlo”<sup>15</sup>. Esta interdependencia entre la Iglesia y el Estado no era defendida exclusivamente desde posiciones eclesiásticas. Desde el interior de las asociaciones familiares también se defendía esta postura basada en la inspiración de los criterios políticos por los religiosos<sup>16</sup> en orden a proyectar la perfección obtenida en el medio familiar sobre el todo social español. No cabe duda, que tanto en esta faceta como en otras, la imbricación del altar y el ejercicio del poder público se manifestó de forma evidente y deseable para ambas partes reconociéndose por parte de la autoridad lo justo y afortunado de que la legislación española estuviera inspirada “en un plausible afán de hacer realidad esa doctrina de la Iglesia”<sup>17</sup>.

Esta forma de entender la unidad familiar buscaba incrementar el sentido de lo social en la familia, generar un sistema integral de defensa de la misma con especial atención en la preparación para la vida del hogar, para la función de padres de familia o para la defensa de la espiritualidad tradicional de España. Y esta manera de intervenir debía tener la forma, no de favor o de subvención estatal, sino de recompensa por el trabajo y prescindiendo de las formas benéficas o asistenciales para que la familia “cumpla sus altos destinos históricos, siendo relicario de fe y de patriotismo”<sup>18</sup>.

De todas formas, desde la perspectiva de las Conclusiones del Congreso de la Familia Española se observa que las medidas del Estado para ayudar a la familia no dieron el resultado previsto. En torno a los objetivos conseguidos se hacía hincapié en “las contradicciones que una misma medida lleva consigo en su actual y vigente concreción legislativa”<sup>19</sup>. La misma faceta de descoordinación denunció el Congreso Provincial de Tarragona<sup>20</sup> al pedir la promulgación de una Ley Fundamental que fuera de posterior y obligado cumplimiento en las leyes que le sucedieran y en la que se refundieran los principios que inspiraban la doctrina del Movimiento y que se encontraban en ese momento “dispersos en múltiples textos”.

Este fue, probablemente uno de los problemas básicos de la política familiar, si ésta existió. Las medidas sociales se desarrollaron de forma urgente, tengamos en cuenta que antes de acabar la Guerra Civil ya existía el subsidio familiar, y por tanto de forma fragmentaria, sin que hubiera un planteamiento general más que el propio de los buenos deseos del Fuero del Trabajo o el Fuero de los Españoles. A estas realidades se fueron superponiendo diversas disposiciones o instituciones que por su propia génesis nacieron descoordinadas. La escasa integración de estas medidas en un plan general eficaz supuso la duplicación de medidas, la pérdida de recursos y deficiencias sociales originadas por las disposiciones dictadas a tal efecto. Otro elemento de singular trascendencia a tener en cuenta es la distinción “entre lo que es conveniente y lo que es



factible"<sup>21</sup>, afirma el citado Informe de las Naciones Unidas. Los planteamientos hechos en torno a la familia y las metas propuestas estaban en directa relación a la forma y manera grandilocuente en que se exponían dichos planteamientos a los españoles. Carecían de un mínimo realismo, de ahí las dificultades para llegar a las metas propuestas. Por ejemplo, a pesar de lo que se pudo hacer, la consecución de un salario familiar verdaderamente eficaz según los objetivos planteados era un utopía imposible de conseguir, como más adelante se verá, y por supuesto, no llegó a buen puerto.

Por otro lado, y paralelamente al abierto deseo de estimular la acción social de cara a la protección y organización de la vida familiar, se denunciaba que la política de vivienda, urbanismo, impuestos, etc., relacionada con la familia se confiaba a "la interpretación de órganos legislativos y ejecutivos normales, desprovistos de toda relación directa con la familia"<sup>22</sup>. Esto ponía de manifiesto que la idea de sustentar la Nueva Sociedad española sobre el municipio, el sindicato y la familia era una falacia en el sentido de que, de hecho, la familia carecía de los mecanismos que potenciaran su participación real en la política que a ella afectaba y por tanto se veía imposibilitada para defender sus intereses y gestionar por sí misma los remedios necesarios para solventar las deficiencias que en torno a ella y su problemática se producían.

La historia de la protección de la familia, como en los siguientes capítulos se observará, fue la historia de un proyecto incompleto, o si se quiere, la historia de una utopía. De no ser así, y teniendo en cuenta los presupuestos ideológicos de los que partía el "Nuevo Estado", no se entienden peticiones como las de Sevilla en el Congreso de la Familia Española: "Es necesario y urgente que el Estado extienda su protección jurídica a la familia, conjugando sus principios fundamentales con los preceptos de sus Leyes positivas"<sup>23</sup>, afirmaba la ponencia sevillana. La petición, por el hecho de hacerse desde dentro del Régimen, manifiesta con una nitidez cristalina la distancia entre las manifestaciones formales y las realizaciones al final de la década de los cincuenta.

Lo que hasta ahora se está poniendo de manifiesto es una idea utópica de vertebración de la sociedad en torno a la familia que choca con unas estructuras sociales, económicas y también políticas que no permiten el desarrollo de dichos planteamientos, que los refrenan y que invierten, de hecho, los procedimientos y por tanto los resultados deseados. Aunque pocas, como se ha visto, se alzaban voces discrepantes desde dentro de las murallas del régimen. Con respecto a la descoordinación entre estructuras existentes y proyectos deseados Fernández de Castro<sup>24</sup> denunciaba lo escandaloso y anacrónico de las estructuras socioeconómicas de España así como lo injusto de las ideas que las amparaban. Y es que, bajo el punto de vista del mencionado autor, frente al concepto de trabajo plasmado en el Fuero del Trabajo, a la

subyugación de la economía a la política y otros tantos principios expuestos en el mencionado Fuero, la realidad española, sin llegar al Plan de Estabilización, se movía acorde a unos presupuestos capitalistas y por tanto la legislación social veía cortada o amputada, de hecho, sus principios más esenciales por razones de tipo económico “entre las que no puede desconocerse la evidente actitud conservadora de la clase acomodada y su adhesión incondicional a los principios capitalistas”<sup>25</sup>, puntualizaba Fernández. Y añade con respecto a los supuestos principios inmutables que vertebraron España desde el 18 del julio de 1936:

“No puede considerarse como realidad vigente, porque lo que, hasta hoy, ha pasado de ser proyecto a ser principio ordenador de la economía es tan escaso que, realmente, no ha llegado a sustituir las estructuras capitalistas en vigor”<sup>26</sup>.

En definitiva, en cuanto a los proyectos planteados y a los objetivos logrados, podemos hablar de la historia de la política familiar del franquismo en este periodo como de la historia de una utopía que centraba en la familia las ansias de regeneración de una sociedad supuestamente malherida por la intromisión del liberalismo y el marxismo. Una historia que no vió plasmada de forma proporcional y tangible los objetivos planteados en torno a la familia como elemento de regeneración de la sociedad española.

## **5.2. El Fuero de los Españoles y la familia española.**

Aunque parece más adecuado un comentario sobre las referencias que existentes en el Fuero del Trabajo en torno al tema de la familia, obviamos esta consideración centrándonos únicamente en el Fuero de los Españoles dado que en capítulos anteriores hemos valorado desde una perspectiva general el mencionado Fuero del Trabajo como la carta magna del franquismo social en orden a llevar a cabo su política social.

*El Fuero de los Españoles partía también de la concepción de la familia como célula fundamental de la sociedad y santificaba la protección de las familias numerosas por parte del Estado en esta disposición legal que santificaba los derechos y deberes de los españoles.*

Entre el Fuero del Trabajo y el de los Españoles existe, con respecto al tema de la familia que aquí se trata, un paralelismo significativo. Parte el Fuero de los Españoles del reconocimiento y amparo en el artículo 22 de la familia como institución natural, fundamento de la sociedad y con derechos superiores a cualquier ley positiva. Añade este artículo dos cuestiones que no aparecían explícitamente en el Fuero del Trabajo. Por un lado la referencia al matrimonio como institución única e indisoluble. Y por otro, la referencia a la especial protección que recibirían las familias numerosas por medio de la legislación creada a tal efecto.

El artículo 23 establecía otra novedad con respecto a la familia al imponer a los padres la obligación de alimentar, educar e instruir a sus hijos, además de sancionar con la privación de la patria potestad o la transferencia de la guardia y educación de los menores a quienes no cumplieran con tales obligaciones.

Las referencias al salario familiar (no al subsidio, que no aparecen), a la propiedad y al hogar familiar responden a los mismos principios que el Fuero del Trabajo y se plasman de forma prácticamente idéntica. Por el contrario, dentro del ámbito del aparato de previsión, se concretan más los objetivos planteados de cara al establecimiento de los seguros sociales. Y dentro de estos se hace especial referencia al seguro de maternidad.

Estos son los planteamientos voluntaristas plasmados en el Fuero del Trabajo y en el Fuero de los Españoles. Dichos posicionamientos son ingredientes básicos a la hora de hacer cualquier reflexión sobre el tema tratado dado que, formalmente, son las fuentes de inspiración de la política realizada por el franquismo en torno a la cuestión familiar.

### **5.3. La imagen de la familia española antes del 18 de julio de 1936.**

El concepto negativo del pasado en relación a la familia supone la diatriba sistemática contra la industrialización, el maquinismo, el liberalismo y el marxismo concretado en el periodo republicano. En este párrafo que a continuación se expone se manifiesta la influencia de alguna de estas corrientes en España y sus efectos disgregadores en la familia española que sólo el levantamiento del 18 de julio habría sabido frenar y contrarrestar enlazando con la tradición de armonía y convivencia familiar que, se afirma, existió en la Edad Media:

“La familia en las Edades Media y Moderna, hasta la aparición del maquinismo, con sus efectos disgregadores de la misma y la formación de las masas proletarias, se vinculó al padre, y un sentimiento de parentesco mantuvo la institución familiar a lo largo del tiempo sin fisuras de ninguna clase. El liberalismo, con su exaltación del individuo, comenzó a atentar contra la unidad de la familia, aunque por fortuna y sobre todo en España no se haya roto ni perdido de modo irreparable. Nuestro país no podía sustraerse a las corrientes universales de descomposición familiar y de las costumbres, y de alguna manera comenzaron a dejarse sentir entre nosotros ciertos síntomas, favorecidos por la decadencia política de los años finales del siglo pasado y de los del presente anteriores al Movimiento Nacional”<sup>27</sup>.

El liberalismo fue la ideología sobre la que más prontamente se cargaron las tintas por lo que de incremento del individualismo supuso y por los efectos negativos que tuvo sobre la familia. En concreto los ordenamientos constitucionales nacidos del liberalismo son percibidos como armas del diablo en la medida en que no se preocupan de la familia o en cuanto abordan temas variados perdiendo de vista a la célula básica de la sociedad. Desde este punto de vista el problema no radicaba sólo en el desdén u olvido de los políticos, sino que se consideraba que fue la animadversión franca y hostilidad patente del Estado la que mantuvo a la familia en franco declive durante todo el siglo XIX y lo que iba del XX<sup>28</sup>. Todo ello suponía una crisis de la familia en todos sus aspectos posibles: crisis del matrimonio, descenso de la tasa de nupcialidad y natalidad, crisis de la unidad familiar motivada por la igualdad jurídica de los sexos, el trabajo de la mujer casada y la disminución progresiva de la patria potestad. A esto se podía añadir la crisis del patrimonio familiar, la del hogar y la del espíritu familiar en general "corroído por la literatura, el ambiente, los espectáculos, la centralización y hasta las leyes sobre cementerios"<sup>29</sup>. En definitiva, todo ello suponía un debilitamiento de la familia en la medida en que se veía impedida para reunir los elementos necesarios de fortaleza institucional que le habían sido propios en tiempos pasados y que la capacitaban para su fin primordial: la creación y educación de buenos católicos y españoles.

Fraga pone de manifiesto como las primeras constituciones del "liberalismo individualista se olvidaron de la familia"<sup>30</sup>. Por ello el ataque a la República es precedido por el asalto a los fundamentos ideológicos del liberalismo, que por otro lado venía a coincidir con el comunismo en su apego al "materialismo" y por tanto en su desconsideración absoluta en torno a la problemática familiar. El pensamiento de Girón sobre la cuestión da luz a la forma en que se percibía en esta época el tema del liberalismo español:

"El mal, por otra parte, venía de atrás. La sociedad liberal-capitalista, con sus petulancias formalistas e hipócritas que ocultaban su verdadera naturaleza tiránica, había incurrido en la barbarie mental de considerar al individuo trabajador como un elemento aislado. Para ella, para aquella sociedad que inventó el nuevo feudalismo, la familia no era nada dentro del estado económico, en el que aquella sociedad se movía. Y al rebelarse el hombre contra este estado injusto y al surgir los primeros movimientos socioeconómicos de tipo sindicalista, nacidos bajo el mismo clima que el capitalismo y para oponérsele, tampoco tuvieron el acierto de considerar a la familia como elemento primario de la sociedad y montaron su lucha sobre la existencia simple del trabajador sin apoyarla, con lo cual acaso hubieran sido invencibles, en la retaguardia de la familia. Y es que una y otra concepción, una y otra doctrina, opuestas por razones puramente tácticas, están unidas en el fondo por una coincidencia: por el materialismo,

porque ambas doctrinas estaban alejadas, cuando no en franca y resuelta oposición, del concepto trascendental de la vida, de las verdades eternas, de la Fe<sup>31</sup>.

Para las autoridades del régimen franquista "la familia española continúa inalterable en su cuadro moral hasta bien entrado el siglo XIX"<sup>32</sup>. La percepción de Codón sobre el deterioramiento de la familia enlaza con la diatriba antiliberal, coincidiendo en que el liberalismo hizo grandes esfuerzos por destruir a la familia por medio de la secularización y el absolutismo estatal. Para el mencionado autor, los grupos intermedios de la sociedad tradicional española amurallaban a la familia. Esto es, en primer lugar, por el recinto de las leyes del reino, seguidamente por las libertades regionales, por las ordenanzas del trabajo y en último lugar por los denominados fueros del hogar. Y a continuación añade:

"El liberalismo socavó el reducto, comenzando por los bastiones exteriores, atacando las libertades forales y municipales y secularizando muchas instituciones sacrales. Una maniobra diabólica dirigida a dejar al individuo impotente frente al Estado se dedicó a enfrentar a las sociedades intermedias entre sí y con la sociedad nacional, a la patria con las regiones históricas, a los municipios con la persona, cual si fueran todos enemigos, en vez de tener la calidad de miembros convivientes en una ancha coordinación nacional"<sup>33</sup>.

Siguiendo con esta exposición, la familia habría sufrido un fuerte golpe con la supresión de las propiedades comunales y con las propiedades vinculadas, así como con el espíritu de un nuevo Código Civil que no recogía las esencias de la legislación foral ni de la castellana, y que restaba poder a la autoridad paterna. El resultado fue la desintegración de la vida regional y municipal a la vez que, con respecto a la familia, "disminuyó su personalidad, melló su recinto moral y debilitó su *vita económica*, máxime con las leyes del divorcio y la secularización de la enseñanza, al menos en el aspecto oficial"<sup>34</sup>.

Como se ha podido observar, si bien la diatriba hace referencia a un período muy amplio de la Historia de España las tintas se cargan frecuentemente de forma más intensa y belicosa contra el período republicano por estar situado en las antípodas de lo que se considera como tradicionalmente español por lo que de predominio "marxista" tuvo para el Régimen. Y así, Jordana se refiere a la II República del siguiente modo:

"Llegada la República, el predominio socialista, absolutamente contrario a todo lo que significase robustecimiento de las bases orgánicas de la Sociedad, se ejerció con todo su fuerza para contrarrestar la extensión de los subsidios familiares"<sup>35</sup>.

Las palabras del ministro Girón acerca de los males de la II República proyectan el mismo tono negativo, agrandado con una retórica mucho más beligerante que identifica los males de la familia española, más que con la República, con el comunismo infiltrado en ella. Esta sería la base de la actitud antimarxista, "que nadie puede discutir, y que caracteriza la política actual" (en relación al periodo tratado)<sup>36</sup>. Pornografía, educación sexual o co-educación forman un todo que impacta en la sociedad española, reaccionando ésta, en palabras de Girón, como forma de defensa ante un ataque directo a la línea de flotación de la raza española. Podría decirse que, en cierto modo, el ataque del "comunismo" a la célula básica de lo social estaría, según estas manifestaciones, en la base del alzamiento del 18 de julio:

"El Frente Popular había cometido la imprudencia de atacar a la familia y dejarla atacar por el comunismo al tolerar, en nuestro país, la presencia de elementos tan exóticos como el malthusianismo, la pornografía, la educación sexual, la co-educación en las escuelas y todo un rosario de libertinajes morales y materiales frente a cuya presencia el español se puso alerta y finalmente, reaccionó con un sentido exacto y magnífico de la perpetuación de la estirpe hispánica. Para España jamás ha existido duda alguna de que la familia es la entidad natural, fundamento de la sociedad"<sup>37</sup>.

En esta línea tremendista estaban las reflexiones de Aznar<sup>38</sup> en torno a la familia y en la misma sintonía justificadora de la Guerra Civil en clave de defensa de una raza en declive físico y espiritual ante los ataques de las fuerzas del materialismo. Sus afirmaciones no tienen pérdida. Atacar a la familia era atacar a la sociedad y fomentar su fin. Ello suponía, ni más ni menos, que el fin de la civilización occidental. La crisis de la familia era la crisis de la sociedad, explicitada a su vez en "fatales movimientos obreros" que explicitaban el denominado problema obrero o cuestión social, en palabras del propio Aznar. Ese era el camino al que los apologistas del neomalthusianismo, el divorcio, el aborto conducían a España enarbolando la bandera, no del progresismo, sino la de los "alegres sepultureros de nuestra civilización"<sup>39</sup>, afirmaba el mencionado autor.

Fraga hace referencia también a este periodo como época de fatídicas consecuencias para la familia: "La segunda República se ocupó, en su Constitución de 9 de diciembre de 1931, de la familia, mas para deshacerla"<sup>40</sup>, según el autor. La cuestión se planteaba desde el prisma de que la República había establecido en el art. 43 de su Constitución la defensa de la familia. Dicho artículo decía lo siguiente:

"La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa.

Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. el Estado velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución. Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto de los nacidos en él.

Las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad.

No podrá consignarse declaración alguna sobre legitimidad o ilegitimidad de los nacimientos ni sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripción, ni en filiación alguna.

El Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos, y protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la Declaración de Ginebra o tabla de los derechos del niño.<sup>41</sup>

Las críticas obedecían a la aceptación de la disolución del vínculo matrimonial desarrolladas por la Ley del divorcio de 2 de marzo de 1932, así como por el establecimiento del matrimonio civil (Ley de 28 de junio de 1932), por la igualación de los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio, así como por la investigación de la paternidad. Todo ello, por su carácter laizante y poco concorde con las características “tradicionales”<sup>42</sup> supuso “un debilitamiento de las bases legales de la institución familiar y de los principios inspiradores de la tradición familiar española”<sup>43</sup>.

Frente a ello el Movimiento, como ya se ha señalado, supuso la vuelta a lo más puro de la tradición española al levantar “la bandera de la defensa de la familia”<sup>44</sup> con la Ley de 12 de marzo de 1938, que derogó la del matrimonio civil concediendo efectos civiles a los canónicos producidos durante la vigencia de la anterior, y con la de 23 de septiembre de 1939 que hizo lo mismo con la del divorcio, restableciéndose la vigencia del Código Civil y “devolviendo así a nuestras leyes el sentido tradicional, que es el católico”<sup>45</sup>. El preámbulo de la primera de las leyes referidas afirma sobre la Ley de 28 de junio de 1932 que “constituye una de las agresiones más alevosas de la República contra los sentimientos católicos de los españoles, y al instituir el matrimonio civil como único posible legalmente en España desconociendo el aspecto religioso, intrínseco de la institución, creó una ficción en pugna violenta con la conciencia Nacional”<sup>46</sup>.

Otra modificación importante fue la debida a la Ley de 11 de mayo de 1942 que volvió a incluir en el Código Penal los delitos de adulterio y amancebamiento. También, de forma posterior el Código Penal, de 23 de diciembre de 1944, perfiló la derogación de la legislación de la II República en la medida en que se consideraba perjudicial para la robustez de la familia española y sus vínculos.

Y por supuesto, ante la crisis de la familia el ideal estaba en la vuelta a ese tipo de hogar que realizaba miméticamente el ideal de la familia cristiana ante el estado de cosas que prácticamente habían destrozado el hogar español.

Los resultados, de igual manera que en el subsidio o el plus familiar, tienen cierta trascendencia pero en absoluto logran las metas planteadas. El Congreso Provincial de Vizcaya resume lo hecho para llevar a la práctica este concepto e idea de familia de la siguiente forma:

“Tal acción se está acometiendo, ciertamente, por el Estado español, pero como antes quedó señalado, de una manera dispersa, si bien ello no resta importancia a la labor señalada, aunque también hay que reconocer que la misma no ha logrado el alcance que, sin duda, se pretendió”<sup>47</sup>.

Esta era la visión que se tenía de la España anterior al 18 de julio. Una España que, en relación al tema de la familia, se caracterizaba por los ataques sistemáticos contra la célula social básica por excelencia. Una célula social que reaccionó de forma furibunda en la hora del “Alzamiento Nacional” y que, por medio de las autoridades franquistas, planteó una inflexión drástica de la labor laizante que la II República había realizado en torno a la familia española.

#### **5.4. Marco demográfico general de una época antimalthusiana.**

El presente capítulo abordará de una forma somera algunas cuestiones en torno al marco demográfico en el que la familia española se desenvolvió aproximadamente de 1939 a 1957. La parcialidad de los datos y de los estudios existentes no permite abordar de forma completa y satisfactoria todos y cada uno de los puntos que dan luz sobre la realidad demográfica a la que me he referido. Sin embargo, parece de interés reflejar mínimamente el marco general de variables como la nupcialidad o la natalidad. Ello, junto al contexto normativo y social general permiten una mejor interpretación de la realidad que viven las familias españolas en el período ya indicado.

Uno de los estudios más logrados que se pueden encontrar sobre el tema de la evolución de la nupcialidad en nuestro país es el realizado por Benito Cachimero Sánchez<sup>48</sup>. El autor comienza por definir las características del denominado “modelo europeo de matrimonio”, haciendo con ello alusión a la elevada edad al contraer matrimonio y la importante proporción de personas que nunca se casaban. Este modelo desaparecerá, afirma Cachimero, al final de la Segunda Guerra Mundial imponiéndose también en el caso español su antítesis.



Edad	1887	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1970	1975
SMAM	26,97	27,36	27,77	27,94	28,18	29,37	28,97	27,53	26,79

\*Cuadro n° 4. Edad media al matrimonio.<sup>49</sup>

En cuanto a los resultados a nivel nacional, Cachimero afirma que la edad media al matrimonio asciende lentamente desde 1887 hasta 1940. Las elevadas cifras de 1940 reflejan el impacto de la Guerra Civil: es por ello que el mayor incremento se produce entre 1930 y 1940. A partir de esa fecha la SMAMs (la edad media al matrimonio o singulate mean age at marriage) experimento un descenso continuo hasta 1975. En cuanto a los solteros permanentes, entre 46 y 50 años no pasaron nunca a lo largo del periodo considerado del 10%. Se incrementó con la Guerra Civil y se estabilizó luego en torno al 9%. Las solteras permanentes eran más numerosas; siempre por encima del 10%; se incrementó su número con la Guerra Civil alcanzando un 15% en 1950. El resto de los porcentajes de soltería evolucionó paralelamente en hombres y mujeres ascendiendo de 1887 a 1940 y descendiendo de 1940 a 1975.

Edad	1887	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1970	1975
16-20	99,4	95,5	99,4	99,2	99,5	99,8	99,6	98,9	98,1
21-25	81,6	81,5	84,6	85,9	88,4	93,5	93,8	84,0	78,1
26-30	31,2	34,2	35,2	39,4	41,0	62,8	59,4	36,8	32,4
31-35	14,1	16,5	16,7	18,8	18,6	29,5	27,7	17,0	16,4
36-40	9,6	10,5	11,1	11,9	12,2	16,7	15,9	12,8	11,9
41-45	7,8	7,6	8,5	9,0	9,1	11,8	11,5	10,1	10,5
46-50	7,3	6,4	6,6	7,5	7,6	9,2	9,6	8,6	9,1
51-55	6,2	6,0	5,3	6,8	6,8	8,2	8,5	7,4	7,7
56-60	6,2	6,0	5,3	5,7	6,3	7,4	7,5	7,3	7,1

\*Cuadro n° 5. Porcentajes de soltería entre los varones<sup>50</sup>.

Edad	1887	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1970	1975
16-20	92,0	93,3	94,9	95,9	96,0	98,8	98,5	94,5	91,9
21-25	52,4	55,2	57,9	62,3	63,8	78,6	79,1	58,2	52,3
26-30	24,9	26,3	27,0	31,5	31,4	44,4	42,6	22,0	19,6
31-35	14,4	15,8	15,7	18,6	19,5	25,2	26,8	12,8	11,8
36-40	12,8	10,0	13,2	14,3	15,8	18,7	20,0	11,7	9,6
41-45	9,5	10,2	10,4	11,1	12,3	16,2	16,2	12,0	9,9
46-50	10,9	10,2	10,2	10,6	11,7	13,7	15,2	12,3	10,9
51-55	9,4	9,5	8,8	9,2	9,7	13,1	14,4	13,4	11,6
56-60	9,4	9,5	8,8	9,2	10,1	11,2	13,3	13,6	12,8

*Cuadro nº 6. Porcentaje de soltería entre las mujeres.<sup>51</sup>*

Al abordar la cuestión de la relación entre soltería y edad al matrimonio en 1887 se observa que el matrimonio tardío y la soltería eran fenómenos paralelos en una situación de modelo europeo. La relación entre matrimonio tardío y soltería permanente pasó en los hombres del 88 % en 1887 al 57 % en 1975, lo cual indica un proceso de disminución progresiva desde el final de la Guerra Civil. Y en las mujeres del 73 % en 1887 a tasas negativas desde 1960. La soltería masculina y femenina experimentaron el mismo proceso decreciente: de un 71 % en 1887 a un 31 % en 1975. No era ésta la situación hace un siglo, lo que empuja a pensar que el modelo europeo de matrimonio sí ha formado parte en el pasado de las pautas de nupcialidad en España y que éste se ha ido extinguiendo del panorama demográfico español con el paso del tiempo y la probable sustitución de los determinantes de la nupcialidad en el siglo XIX por los propios de un país industrializado<sup>52</sup>.

Lo más significativo ocurrido en el estado civil de la población española fue la fuerte caída de la tasa de nupcialidad que venía caracterizándose por una cierta estabilidad a lo largo del siglo XX. Salvo periodos excepcionales el número de matrimonios por 1.000 habitantes no descendió por debajo del 7 %. Así, Gabriel Elorriaga<sup>53</sup> afirma que a partir de 1945 la tasa de nupcialidad rondaba el 8 %, cifra que llega al 8,28 % en 1956, la más alta del siglo.

En cuanto a los coeficientes de nupcialidad Ros Jimeno<sup>54</sup> pone de manifiesto al realizar un estudio de tipo provincial las acusadas diferencias que se observan a lo largo y ancho del territorio nacional; para el año 1957 las provincias que tenían un coeficiente de nupcialidad menor que la media nacional (situada en el 8 %) estaban situadas mayoritariamente en la parte septentrional de la Península Ibérica. Salvo en el caso de Badajoz y Málaga, la mayoría de las provincias situadas al Norte de Madrid tenían una media inferior al 8 %; quedaban excluidas Lugo, Asturias, Santander, las provincias Vascongadas, Zaragoza, Barcelona y Gerona.

También ha sufrido significativas alteraciones la edad del primer matrimonio, aunque la diferencia de edad entre el marido y la mujer ha permanecido más estable. En 1900 nos encontramos dentro de lo que se ha denominado ya modelo europeo, en el que existen altos porcentajes de matrimonios con edades superiores a los 25 años, tanto dentro de los varones como de las mujeres. En el caso de los varones se observa un descenso en el porcentaje de varones casados con menos de 25 años desde 1900, exceptuando la década de 1930 en que el porcentaje se eleva por encima del de la década anterior. Será a partir de la década de los 50 cuando comience a elevarse, aunque levemente, hasta despegar en la década de los 70, ya fuera del periodo de estudio. La tendencia se confirma en el caso de la mujeres, que partiendo de un 70,78% en 1900 vieron decrecer este porcentaje salvo en el periodo de la década de los 30, en

que volvió a elevarse para decrecer en los 40 y volver a elevarse en los 50. La conclusión final es que el porcentaje de matrimonios tempranos se incrementó progresivamente. Y es que la edad a la que decidan casarse los contrayentes tendrá una especial incidencia sobre el comienzo del ciclo vital de la familias y sobre la edad del principio de la fecundidad de la mujer, la posibilidad de coexistencia de generaciones diversas en el seno de una misma familia o la misma calidad de la vida familiar de los contrayentes.

En cuanto a las diferencias entre las edades del hombre y de la mujer al contraer matrimonio la tendencia en España era semejante a la de los restantes países europeos donde desde la década de los 50 hasta nuestros días venía igualándose la edad de los contrayentes.

Las estimaciones de Ros Jimeno coinciden con los datos obtenidos para las mismas fechas sobre la natalidad a nivel provincial; se observa como los más bajos niveles de nupcialidad se corresponden en líneas generales con las tasas más bajas o con las situadas por debajo de la media nacional, y que se sitúan igualmente en la mitad norte del país, exceptuando casi toda la región de Castilla-León. En torno a este preocupante tema (la tasa de nupcialidad) Salustiano del Campo y M. Navarro López<sup>55</sup> hacen hincapié en la falta de datos fidedignos y basan esta afirmación en que en las bodas celebradas según el rito católico los párrocos no solían cumplimentar los boletines estadísticos, ni remitían normalmente la certificación acordada. Es por ello que se abstienen de hacer generalizaciones pesimistas sobre esta cuestión.

En cuanto al número de familias y su tamaño, ya en 1959 afirmaba José Ros Jimeno que, "la mayor parte de las familias inscritas en el censo español eran familias biológicas o naturales, formadas por padres e hijos, es decir, por personas unidas por vínculos de matrimonio o de consanguinidad"<sup>56</sup>. Para los años 50 en que el autor escribe, el promedio de personas por familia estaba aproximadamente en 3,74, lo cual, puesto en perspectiva desde principios de siglo, permitía a Ros Jimeno dar cuenta de la disminución del número de miembros en función de variables como el descenso de la natalidad unido al descenso de la mortalidad. A estos factores unía el autor, no con poco tono pesimista, la influencia de la instrucción y de los estudios en el descenso del número de hijos y en el aumento de las mujeres estériles. Ros Jimeno estudió el promedio de personas por familia en cada provincia haciendo una separación entre las que tenían un promedio igual o menor al nacional y las que lo tenían mayor llegando a la siguiente conclusión: los promedios inferiores o iguales a la media se encontraban en el litoral Mediterráneo hasta Alicante, en Aragón, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Madrid, Badajoz, Huelva, Orense, Zamora y Asturias.

Los datos aportados por Ros Jimeno son criticados por Manuel Gómez Reino y Carnota<sup>57</sup> en la medida en que para considerar el promedio de personas por familia estima el autor que tendrían

que coincidir todos los criterios de definición de familia a efectos de su inscripción, cosa que no parece ocurrir en el estudio de Ros. De igual manera, el mencionado autor afirma que algunas de las oscilaciones que se producen demuestran que algunas cifras como las del año 1940 no pueden ser explicadas en función de variables tales como la natalidad, la mortalidad, etc. M. Gómez no considera que haya una relación causal clara entre el coeficiente de natalidad y el tamaño de las familias. De ser, así se plantea necesariamente la búsqueda del motivo que explicara como con coeficientes de natalidad mayores que los de los años 50, como en 1900 o 1910, no se obtienen tamaños de familia mayores que los recogidos por los datos.

Al descenso de la natalidad y de la mortalidad une Gabriel Elorriaga<sup>58</sup>, como causas del descenso del número de miembros por familia, la prolongación de la vida por la mejora de las circunstancias sanitarias de la población. En cuanto al descenso de la natalidad, señala el autor una serie de causas que por su rigor o curiosidad merecen ser enumeradas; entre las del primer grupo se incluye la colaboración de las mujeres en la industria y otras actividades económicas, la intensificación de la cultura o, quizás, la mayor ausencia del hogar. Y entre las segundas (las curiosas) merece citarse el debilitamiento del impulso sexual y el "pánico al instinto". A estos factores hay que añadir la progresiva disminución de la frecuencia media de las relaciones matrimoniales, ocasionada por las circunstancias en que se desarrollaba la vida moderna; y factores psíquicos o económicos como el racionalismo y la irreligiosidad parecían ser, según Elorriaga, las causas determinantes de la limitación voluntaria de la fecundidad y de los abortos provocados.

El contexto en el cual se escribe el libro permite interpretar el concepto de familia en este período de la Historia de España. Así, afirma Elorriaga que la familia antes de 1936 se caracterizó por ser una institución burguesa de la que se marginaban las preocupaciones intelectuales, como por ejemplo, los afanes de mejora social. Era por ello, afirma el autor, que se la atacaba entremezclando el amor libre o el divorcio con la literatura demagógica de algunas opciones políticas. Según G. Elorriaga, la Guerra Civil significó una transformación del planteamiento sobre la familia que pasó a inspirar los principios de la legislación y de la política social del país. Afirma igualmente que dentro de lo que fue la evolución de la familia desde principios de siglo a los años 60 se llegó a una situación caracterizada por el predominio de la familia pequeña e íntima. En este período destacaba la individualización y la mayor libertad de sus componentes y sobresalía la mayor ambición y amplitud en el modo de concebir el futuro destino de los hijos.

Como elemento negativo, el autor resalta la disminución del tiempo y del espacio para la vida en común de la familia española. En la concepción y mentalidad del momento histórico al que se refiere Elorriaga la familia rural venía a manifestar la pervivencia de las virtudes morales,

sociales y religiosas de forma más clara que la familia industrial en la que existían más opciones para el distanciamiento y la dispersión. Además, las dificultades para el desarrollo de la vida familiar se acrecentaban en el caso de la familia industrial por la rigidez del trabajo y la incertidumbre económica.

Si nos remontamos a fechas más lejanas es posible observar como la tendencia desde principios de siglo se encaminaba hacia el incremento del número de miembros por familia; así de los 3,87 de 1900 se asciende lentamente hasta llegar a los 4,22 de la década de los 40. A pesar de ello, a partir de este momento empieza un descenso que se ve únicamente interrumpido en la década de los 60 con una media de 4 miembros por familia.

En torno a la cuestión del tamaño de la familia resulta necesario abordar la cuestión de qué es y en qué consiste una política familiar como determinante básico del número de miembros, que exceptuando a los padres, va a tener una familia. Dicha cuestión es abordada por Jesús M. de Miguel y Juan Díez Nicolás<sup>59</sup>. Los autores parten de la hipótesis básica de que la tasa de control de natalidad depende fundamentalmente de factores socioeconómicos pero que los métodos que se escogen vienen condicionados por variables culturales. Se pone de manifiesto que el control de la natalidad es un proceso débil y tardío en relación a los restantes países de Europa: menos de la mitad de los matrimonios controlan la natalidad y menos de una cuarta parte emplea métodos eficientes. Se pone de manifiesto que no sólo han llegado tarde las prácticas de control de la natalidad sino también el análisis de esta problemática; los estudios sobre esta cuestión comenzaron a abordarse en 1964, y sólo en 1977 empiezan los estudios sobre las pautas sociales en el tema de la contracepción con lo cual nos podemos hacer una idea de la práctica inexistencia de las medidas anticonceptivas en el período central de estudio de esta investigación.

Se palpa la realidad del peso de los factores socioculturales en la pautas de control de la natalidad. De Miguel y Díez Nicolás afirman que los factores explicativos del retraso con respecto a Europa en esta materia fueron la Guerra Civil y la ideología católica integrista oficial<sup>60</sup>. Variables como la clase social, la edad y lugar de residencia vienen a converger en torno a la explicación sobre su mayor o menor uso. Ello establece una ligazón entre el grado de desarrollo socioeconómico y los procesos de urbanización y las pautas contraceptivas. En cuanto al peso de la clase, De Miguel y Díez Nicolás entienden que se produce un perjuicio para las clases bajas en la medida en que cuanto más alta es la clase social (y con ello su nivel de educación) mayores son los controles sobre la natalidad. Por tanto, la existencia en el período que va de 1938 a 1957 de una amplia España rural extensamente analfabeta pone de manifiesto, siguiendo estos principios la ausencia de medidas contraceptivas utilizadas.

En definitiva, se pasó de menos 26 millones de habitantes en 1940 a más de 30 en 1960. Un salto significativo amparado en una política de exaltación de la raza en plena Segunda Guerra Mundial<sup>61</sup> ligado a intenciones expansionistas que en los años cincuenta tiene otra versión diferenciada cuyo ejemplo puede encontrarse en el profesor Vallejo Nájera<sup>62</sup> y su concepto de la higiene racial. Abandonada toda concepción tangencialmente geneticista, propugna el autor la conformación de la raza por medio de la educación y el medio ambiente social; en definitiva hace de la religiosidad y el patriotismo, emanados de la institución familiar, los dos elementos centrales de la potenciación de la raza española y de la familia española.

### **5.5. Las prestaciones familiares por medio de los salarios.**

#### ***5.5.1. Concepto de las prestaciones familiares.***

Al adentrarnos en la cuestión de las prestaciones familiares es necesario no perder de vista el hecho de que lo que desde el poder del Estado franquista se proponía era un nuevo marco de vida social y nacional; en definitiva, un “tercer sistema”<sup>63</sup>.

Por un lado el liberalismo del XIX y el marxismo percibido en la II República habían constituido las principales amenazas para las esencias más puras de lo hispánico. Frente a ello, el cambio propuesto consistía en la reactivación de valores percibidos como más pujantes en épocas pasadas, y la abolición paralela de las “patologías crónicas” del liberalismo y el marxismo, además de sus efectos “perversos” en la familia española.

Desde este punto de vista, se puede afirmar que, tomando como fecha indicativa el 18 de julio de 1936, se pretendía acabar con algo y se ambicionaba ir hacia algo. Ese algo era un modelo de sociedad diferente al que se percibía como implantado en épocas pasadas y que había de partir de una “reforma social” ya anunciada por Franco en su discurso de 1 de octubre de 1936 y que Preston<sup>64</sup> califica como de retórica.

Sin caer en el peso determinante que Marín López concede a la persona y a la individualidad del General Franco, si es posible afirmar que “la política de tan dilatado período de tiempo está regida por ciertos principios que se mantienen inalterables y que se orientan invariablemente hacia la consecución de un tipo determinado de sociedad”<sup>65</sup>. En función de estos criterios se promueve la movilización de los municipios, de los sindicatos y de la familia, último elemento de los considerados, pero no por ello el menos importante. Y era con estos factores con los que se pretendía reconstruir España como una sociedad cristiana y orgánicamente constituida.

Al establecer el marco de referencia global de las prestaciones familiares es necesario aludir a la tendencia vaga pero real de generar un marco de previsión global o de seguridad social. Mário Roseira define la seguridad social como "un conjunto de medidas adoptadas para garantizar la salud y el bienestar del individuo y de su familia, asegurándole la asistencia médica necesaria y el otorgamiento de medios de subsistencia en caso de pérdida, de disminución substancial o de insuficiencia de los ingresos"<sup>66</sup>. En el caso español, como ya se ha señalado, no existe una verdadera seguridad social sino medidas de protección creadas según criterios específicos, con tendencia a la unificación y que no suponen la universalización de la protección para todos los componentes de la nación.

Para establecer el marco de referencia básico de aquello en lo que consisten las prestaciones familiares es necesario aportar una definición lo más concisa posible. Aníbal Rebollo González la define como "el conjunto de beneficios, en especie o en dinero, que los Poderes Públicos otorgan a la familia, con destino a elevar el nivel de vida económica, social, cultural y biológico de sus componentes"<sup>67</sup>. Desde la perspectiva del subsidio familiar lo que aquí se propone es el establecimiento de un sistema integral de protección a la unidad familiar, preparando a sus componentes desde perspectivas distintas para un único fin: la ejecución de las funciones propias de cada uno de sus componentes como tales miembros de la familia. Roseira<sup>68</sup> define las prestaciones familiares aportando nuevos matices. Alude a dichas prestaciones como "toda prestación, en dinero o en especie, cuyo objetivo sea favorecer la constitución o el desarrollo normal de las familias, ya sea aportando una contribución regular y permanente para el sostenimiento de las personas a cargo del cabeza de familia, o bien proporcionando una ayuda especial en determinados momentos de la vida de las familias y, en particular, en el momento de su constitución, pero independientemente de la idea de que cubre un riesgo social. Por lo demás, una asignación familiar puede tener como objeto secundario el fomento directo de la natalidad o la promoción de una política sanitaria".

En el caso español, y por lo que al subsidio familiar se refiere, esta contribución regular controlada y gestionada por el Estado responde en el momento de su creación, entre otras motivaciones, a la situación de crisis y a las dificultades para el mantenimiento de las rentas familiares en unos niveles que permitieran su adecuado desenvolvimiento. Evidentemente, las circunstancias posteriores a la Guerra Civil y la pérdida de un número significativo de padres o madres potenciales, unido a consideraciones ideológicas como el marcado componente católico de la legislación, venía a incidir en la potenciación de la natalidad con características distintas según el periodo en que nos situemos. Así, en los años de mayor proximidad a las potencias alemana e italiana, se observa un mayor hincapié en la apología de la idea de la raza y en la necesidad de incrementar el número de españoles dado que para la guerra y la paz el potencial de un país se medía de forma muy importante por su peso demográfico.

Partiendo de esta definición de prestaciones familiares podemos establecer dos grandes grupos de las mismas. Por un lado las prestaciones en moneda de curso legal y por otro las prestaciones en especie. Dentro de las primeras es posible establecer otra doble división y hablar de prestaciones en dinero directas y prestaciones en dinero indirectas. Las primeras se definen como cantidades de dinero que de forma regular y periódica recibe el trabajador. Y las segundas se caracterizan por ser mecanismos creados para evitar que los trabajadores pierdan renta real por medio de las cargas contributivas.

Desde estos presupuestos se comprende el motivo de la activación de la familia como sujeto de atención de la previsión. Y se entiende más si cabe, en la medida en que, como ya se ha dicho, en España en el período estudiado no existía una verdadera seguridad social. Y es que la atención a la familia se incentiva en los países en que la protección se limita a ciertos sectores de la población activa (como es el caso de los subsidios familiares en España). Ello supone "un medio técnico para extender el campo de aplicación de la seguridad social a otros miembros de la comunidad nacional"<sup>69</sup>. En cierta medida ello contribuye, en un sistema como el español en que no existía una seguridad social englobadora de todos los ciudadanos, a la universalización de medidas de protección social variadas, de entre las cuales los subsidios familiares fueron la plasmación más explícita de esta predisposición.

Todo ello viene a enmarcar la protección a la familia, dentro del régimen del 18 de julio, en un sistema en el que la unidad familiar, como célula básica de lo social, intensifica más si cabe sus funciones de socialización de los futuros trabajadores-productores de la nación. Desde esta perspectiva lo que implícitamente se propone desde los órganos de poder franquistas es un tercer sistema frente a los deshumanizadores liberalismo y marxismo. Un tercer sistema anclado en el motor de la familia con el objetivo de generar un andamiaje de adhesión social y nacional a un régimen que pretende reconstruir la sociedad según unos moldes de cambio en sentido regresivo hacia las persistencias del pasado, o hacia las estructuras tradicionales alterados por el azote del "laicismo y el materialismo"; en definitiva, hacia épocas ya pasadas en que la sociedad podía definirse, al menos en parte, como una sociedad de familias y no de individuos. Y desde esta perspectiva la familia se tornaba en un elemento capaz de modelar españoles desde unos parámetros de adhesión al régimen cuyo fundamento se encontraba de forma muy importante en la tradición católica.

Este tipo de manifestaciones se puede hallar en los discursos de los altos cargos del régimen. Citemos como ejemplo a Girón de Velasco<sup>70</sup>. El entonces Ministro de Trabajo realizó en el discurso de apertura del I Congreso Iberoamericano de Seguridad Social (23 de mayo de 1951) un alegato en torno a la importancia que el "Nuevo Estado" concedía a la familia. Partía el



210

mencionado político de la tan manida diatriba contra el marxismo materialista deshumanizador del hombre. Hombre que, por otro lado, por ser portador de valores eternos había de poseer unos perfiles esencialmente humanos. Dentro de esta línea apologista de la obra del régimen del 18 de julio, y en consonancia con el culto a la personalidad de Francisco Franco, afirmaba Girón que “toda esta gran obra de Seguridad Social que vais a conocer es obra de Franco”<sup>71</sup>. Y por último, anclado en esa concepción de la política social dotada de un trasfondo humanista del mundo y de la vida, hacía referencia a los siete rasgos fundamentales que constituían la razón de ser de la política social. De entre ellos, estos dos, que a continuación se señalan, hacían alusión a la familia como sujeto de las atenciones del régimen: “reconocimiento, exaltación y protección a la familia como célula primigenia de la sociedad; seguridad social para la familia entera del trabajador como unida básica del Estado social que es España”.

Lo que aquí se plantea, en cierta manera, es la necesidad de que la familia sea “redescubierta por el Estado”<sup>72</sup>. Era evidente, y más en la época de penuria de los años cuarenta, que la familia sufría un agobio económico sobre todo entre los núcleos de trabajadores más desprotegidos. Y desde esta vertiente, al menos formalmente, se proponía y se plasmaba en el ámbito normativo la necesidad de estabilidad del hogar como eje fundamental de la vida social y nacional.

### ***5.5.2. Objetivos de las prestaciones familiares.***

En cuanto a los objetivos de las prestaciones familiares seguiremos fundamentalmente el estudio de Aníbal Rebollo González<sup>73</sup>. Afirma el mencionado autor que existen fundamentalmente motivaciones sociales, demográficas y económicas para la creación de prestaciones familiares:

“Políticamente es un instrumento demográfico, socialmente, un medio de instaurar la justicia social, y económicamente, el logro del salario familiar”<sup>74</sup>.

Se puede afirmar que la política familiar española manifestaba, al menos en parte, unos tintes natalistas que se acentuaron con características distintas según las épocas y la evolución política del régimen. En cuanto a esta cuestión se refiere, los años más próximos a la Guerra Civil y los inmersos en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial supusieron un incremento del tono natalista cuya motivación estaba en un nacionalismo que, al menos en parte, adquirió un tono beligerante. Según Preston la retórica de la esta idea de la reforma social respondía “al deseo de armonizar con sus valedores nazis y fascistas”<sup>75</sup>. Posteriormente, en la medida en que se fue entrando en los años cincuenta, las motivaciones para potenciar la familia respondieron a razones ligadas a la necesidad de reforzar la sociedad y la nación española, ya ausentes los sesgos más retóricamente beligerantes germanófilos de la primera mitad de los años cuarenta.

En cuanto a los objetivos sociales, el mantenimiento o la elevación del nivel de vida de los niños y de las familias que los criaban era el objetivo más característico de las prestaciones familiares. Suponía ello, desde el ámbito de la política familiar española afrontar la "cuestión social", con un talante reformador y con la meta de instaurar un marco de justicia social desde la protección de la célula básica de lo social: la familia. Frente al individualismo y el materialismo imperante en la época de "perdición" previa a la victoria del régimen del 18 de julio, se exponía e imponía una tercera vía que tendía supuestamente a la materialización de un sistema de justicia social emendador de la tradición secular de necesidades en que se había desenvuelto la vida de los elementos más desprotegidos de la nación, y más concretamente sus familias.

Por otro lado, dicho planteamiento, desde la perspectiva del proyecto social-nacional franquista, suponía en la mente de los panegiristas de la política social del régimen, un mecanismo de frenado que incidiría en el mal desarrollo mental y físico de sus futuros trabajadores. Eran conscientes de que las familias con ingresos más humildes eran las más fecundas en cuanto al número de hijos, y que por tanto era la situación de éstas la que más se agravaba ante la falta de una relación adecuada entre la remuneración del cabeza de familia y las cargas que éste tuviera que atender. Por ello, afirma Rebollo, "el reparto de las cargas familiares entre toda la sociedad tiende a suprimir las desigualdades derivadas de los salarios bajos, a hacer que todas las familias cuenten con una capacidad adquisitiva normal, que tengan iguales oportunidades para criar y educar a sus hijos, para que más tarde puedan, por sí mismos, buscar el bienestar que no podrían proporcionarse si recibieran educación deficiente, crecimiento defectuoso o constitución enfermiza"<sup>76</sup>. En el caso español esto resulta evidente en la medida en que era la familia la que se tornaba en sujeto de atención de la previsión, obviando parcialmente la figura del individuo aislado. Y desde esta perspectiva la lucha contra las posiciones próximas al pauperismo se tomaba en medio para fortalecer a la raza y al medio familiar en que ésta se desarrollaba.

En otro orden de consideraciones el intento de provocar un incremento en la natalidad preside las políticas de protección a la familia por medio de las prestaciones familiares. "En consecuencia, las disposiciones legislativas sobre subsidios familiares se han integrado, frecuentemente, de una serie de medidas destinadas a fomentar y a estimular, de diferentes maneras, la maternidad y el crecimiento del número de familias numerosas, como se observa en la estructura interna de aquéllas"<sup>77</sup>. Todo ello suponía una serie de fórmulas que incentivaban la creación de familias numerosas que, en el caso español, eran una bendición del Señor y un servicio a la patria. Desde esta perspectiva la prole era vista como el resultado de la función básica a la que la familia española tenía que servir, sobre todo en un régimen en el que la

...fabricación del orden divino y el humano amparaba este servicio para el engrandecimiento de la patria por medio de la creación y socialización de acuerdo a unos moldes patrióticos y católicos de los trabajadores-productores que generaban la riqueza material y espiritual de España. Esta línea de elevación del nivel de vida de las familias suponía, por este motivo, el incremento de la natalidad y el fortalecimiento de la Patria.

Por último, las motivaciones puramente económicas presiden también el establecimiento de marcos normativos potenciadores de la familia, dado que "desde el punto de vista de los protegidos, el subsidio tiende a mantener el nivel adquisitivo de la familia, no obstante el aumento en el número de los hijos, proporcionando una renta normal constante, a fin de que la economía familiar sea inalterable y pueda, con más o menos hijos, hacer frente al mínimo indispensable de necesidades"<sup>73</sup>.

Resulta claro que la implantación del subsidio familiar en el momento concreto en que se realizó respondía no sólo al deseo de implantar el denominado "salario familiar", sino que también fue motivado por la situación coyuntural de penuria y necesidades que atravesaba la población española. Dado que las prestaciones familiares en el caso español, no respondían técnicamente a un sistema universal cuyos aportes financieros recayeran sobre un recargo contributivo parece adecuado afirmar que el fin de la justicia social aparece de forma clara sólo en parte. La idea de la redistribución de rentas entre las familias supondría la detracción del ámbito de la riqueza general de la nación de un porcentaje adecuado a las necesidades previamente estipuladas. Éste no fue el caso español, dado que el sistema de base profesional detraía únicamente de rentas del trabajo la financiación del sistema de los subsidios familiares. No era, por tanto, de la riqueza nacional de la que se detraía la financiación del régimen sino de los propios productores que veían redistribuidas sus rentas según una escala homogénea independiente del nivel de sus remuneraciones. Aunque por otro lado, la imposición sí estaba relacionada con la renta individual.

Por tanto, y para resumir, son estas tres directrices las que dan luz al establecimiento de ayudas a las familias. En cuanto al caso español, coinciden estas razones con los argumentos que catapultan las prestaciones familiares a un lugar de privilegio en la política social española y que hacen de la familia un centro de atención preferencial de la política de los diversos Ministros de Trabajo desde un punto de vista formal.

### 5.5.3. *La previsión en torno a la familia española.*

Afrontar el estudio de la previsión social es necesario en la medida en que el salario familiar se destina, al menos en parte, a subsanar las posibles complicaciones para el nivel de vida familiar que pudiera tener el incremento del número de descendientes en la familia.

En la mente de los gestores de los instrumentos de previsión del franquismo estaba indudablemente la idea de la creación de un sistema de seguridad social. Como ya se ha señalado desde la concepción de los ideales del Movimiento las medidas de previsión, los seguros sociales y su lenta evolución hacia la seguridad social son el resultado de la desaparición del régimen gremial y corporativo, y del avance del maquinismo y la industrialización.

La irrupción del individualismo generó el crecimiento de riesgos laborales y sociales ante los cuales los trabajadores quedaban desvalidos y situados ante cualquier imprevisto en la marginalidad y la miseria. De ahí arranca un concepto de solidaridad que, siendo inicialmente privado y voluntario, pasaría a constituirse con el tiempo en público y siendo coactivamente aplicado por el Estado.

En ese marco la multitud de problemas a que se veía sometido el trabajador eran casi infinitos. Y en esta situación, afirma Hernáinz Márquez<sup>79</sup>, “fue preciso darse cuenta de que la posición de necesidad y el consiguiente disgusto de los trabajadores, que constituyen la parte más numerosa de la población, es un mal que repercute sobre la colectividad y amenaza peligrosamente el bienestar, la interna seguridad, la potencia y la existencia del Estado”. Si algo queda patente en estas líneas es la idea de la necesidad del cambio hacia un sistema de previsión en función del conflicto latente o del miedo a la explicitación del conflicto enraizado “en la parte más numerosa de la población”<sup>80</sup>.

Desde esa perspectiva, hay que partir de la consideración del art. 28 del Fuero de los Españoles<sup>81</sup> en el que se aludía a la necesidad de amparo ante el infortunio y al derecho a la asistencia en determinadas situaciones como la maternidad. En el Fuero del Trabajo<sup>82</sup> también existían referencias a la necesidad de protección a la madre y a los niños, así como a la regulación de las relaciones laborales en el sentido de liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica. En ese contexto se observa la adopción de la familia como sujeto preponderante de atención del Estado, al menos desde el prisma más formal de la retórica, y el establecimiento de medidas de amparo social en las que los riesgos que se protegen son “directamente la existencia de cargas familiares, soportadas por el asegurado..., y precisamente para ayudarle a soportar estas cargas”<sup>83</sup>. En definitiva, se consideraba que el Movimiento Nacional había programado un

proyecto con "un considerable contenido social", que había reforzado el concepto de Estado por la "vía del trabajo" y que había realizado "en materia de seguros sociales una labor mucho más intensa y más efectiva que otras situaciones falsamente cubiertas con etiquetas que hacían presumir un más serio progreso social en favor de los económicamente débiles"<sup>84</sup>.

Lo que desde luego nunca hay que perder de vista es que, independientemente de que la atención a la familia por medio de la previsión y las prestaciones familiares supusiera una manera de extender técnicamente los beneficios de la previsión a un colectivo mayor, y por tanto manifestara una cierta tendencia a la universalización de los beneficios de los organismos y sistemas de previsión creados, "el tránsito de un sistema de Seguros Sociales a un sistema de Seguridad Social, se opera en una etapa que se abre con la ley de Bases de la Seguridad Social de 28 de diciembre de 1963"<sup>85</sup>, y no antes. Es decir, frente a las manifestaciones retóricas que pudieran hacer referencia a la protección de la familia por medio de la seguridad social, hay que contraponer una realidad anclada en la falta de unificación de diversos seguros y en la que sólo el Decreto de 29 de diciembre de 1948<sup>86</sup> supone un leve intento de unificación de algunos de los seguros más significativos. Otra cosa bien distinta es afirmar que la "Seguridad Social...es obra de nueva planta creada por el régimen de Franco"<sup>87</sup>, siempre que los comienzos más titubeantes se saquen del período de estudio de esta investigación y se lleven, en el mejor de los casos, a los años 60. Y no existe o no se acelera de forma significativa el establecimiento de un sistema de seguridad social complejo, según Demetrio Casado, porque "el régimen de Franco, salvo en sus últimos años, aseguró a las empresas unos holgados márgenes de beneficios, lo que permitía una financiación cómoda de su acción social"<sup>88</sup>. Ello no quiere decir que germinalmente no existiera un anhelo de llegar a un sistema de seguridad social en la mente de los progenitores del aparato de previsión franquista en los años anteriores a 1957, sobre todo si partimos, al menos en parte, de la definición de que "la Seguridad social es la manifestación más destacada del estado intervencionista que se distingue del liberal fundamentalmente en su intento de actuar ante los problemas sociales"<sup>89</sup>; y ello invita a afirmar que en algunos aspectos la política social franquista optó coyunturalmente por modelos de orientación no típicamente "españoles". La ayuda ante el riesgo como política paralela al control y la coerción tenía como correspondencia que en algunos casos se adoptaran "líneas de actuación de estilo socialdemócrata, por ejemplo, en los servicios de la Seguridad Social"<sup>90</sup> o análogos.

Según el laborista Alonso Olea<sup>91</sup>, en lo que a la familia se refiere, las instituciones y organismos pretendían otorgar a la célula básica de la sociedad una cobertura amplia concentrándose "sobre riesgos que tenían como característica común la existencia de un defecto o insuficiencia de renta individual" pero cuya repercusión incidía en el colectivo familiar, bien debido a una "disminución o desaparición de las rentas usuales o habituales, bien porque se

...diera un exceso anormal de gastos que no pueda ser cubierto con las mismas rentas usuales o habituales”.

No podemos seguir adelante sin hacer una pequeña apreciación. La obra aquí mencionada aparece casi en los años sesenta. Se observa un gran cambio con respecto a las nociones y definiciones que sobre lo social aparecen en otros textos más antiguos. Baste este ejemplo; Alonso Olea define la seguridad social como “el conjunto de medidas para la prevención y remedio de riesgos de concreción individual económicamente evaluables, consistentes en defectos de renta con que atender las necesidades usuales y habituales”. Observemos que cambio con respecto a textos de los años cuarenta e incluso principios de los cincuenta; y centrémonos, sobre todo, en la alusión al término “individual”. La familia, en cuanto a la definición de la seguridad social, no aparece por ninguna parte. Y si bien no existe una decantación hacia un modelo individualista de seguridad social si se aparta, en cierta medida, de la sacralización de la familia como objeto de la previsión social.

Pese a ello Alonso afirma que, si bien “el riesgo se concreta individualmente sobre una cierta persona y tiene o puede tener, (entre otros muchos, con toda seguridad más graves), un aspecto económico consistente en un defecto de las rentas normales para la atención de las necesidades, bien que tal defecto no surja tanto de un correlativo defecto de rentas como de un exceso de gastos”, también afirma, de forma paralela, que los que “se pueden llamar riesgos familiares son, desde luego, riesgos susceptibles de cobertura mediante medidas de seguridad social”<sup>92</sup>. Sin embargo, a lo que aquí se hace referencia no es a un sistema de seguridad social en el pleno sentido del término entendido como un sistema cuya “finalidad no sea el simple remedio de una o varias necesidades, sentidas por los trabajadores (y *sus familias*) especialmente, sino que se trate de una verdadera alteración de todo un orden económico-social, tendente a la nivelación de las clases, mejorando a las más necesitadas”<sup>93</sup>. Más bien, lo que desde el punto de vista de Alonso Olea se defiende es la idea del seguro social en el sentido de respaldo social orgánico de la comunidad ante las perturbaciones que pudiera producir lo inesperado en el núcleo familiar. Todo ello, ni que decir tiene, apartado de los conceptos del ideal asistencial o benéfico-caritativo en la medida en que lo que desarrollaba era una obra de justicia social y no una obra de misericordia y caridad, desde los presupuestos del mencionado autor. Esta última, tendía a dar solución a un estado de necesidad creado, mientras que en el caso de los seguros sociales lo que se procuraba era evitar que el estado de necesidad se produjera atendiendo a unos derechos ligados a la situación laboral de los individuos.

En este sentido, la colectividad aparece como garante de las exigencias elementales de la vida para cada uno de sus componenetes, o mejor dicho, para cada una de sus familias. En el caso español, en el que se intenta reconstruir una sociedad de familias, los postulados más básicos

de la relación asociativa obligaban a generar relaciones de solidaridad para con las familias más desprotegidas. Es por tanto la colectividad la que se preocupa de reemplazar la iniciativa particular en la justa medida de la insuficiencia de esta última. Desde esta perspectiva el ámbito de lo mutualista es reemplazado por la protección o mejor dicho, por "la seguridad social"<sup>94</sup>, en el sentido que Vannutelli lo plantea. Ello significa que la atención al riesgo, en concreto al "riesgo" del incremento de la familia, responde no a la participación del individuo en los mecanismos mutualistas sino a las exigencias de su grupo familiar inmerso en la colectividad. Y es que como el propio Vannutelli afirma, "que la familia entre y deba entrar en el campo de la tutela de la previsión es más que evidente... Es preciso, por tanto, llegar a la concepción de una tutela de la familia considerada independiente de la tutela de los riesgos del trabajo o fuera del trabajo"<sup>95</sup>. En cierta medida lo que aquí se propone y se plantea es la necesidad de extender la tutela del aparato de previsión estatal del productor-trabajador a todo el grupo familiar como ente que necesariamente se proyectará en la sociedad en el futuro (más o menos próximo) en forma de diversas funciones sociales.

Los mandatarios como José Antonio Girón de Velasco no perdían el halo romántico y exultante a la hora de referirse a la familia desde estas directrices del régimen que promovían su protección. Decía el antiguo Ministro de Trabajo:

"La seguridad social constituye una aspiración de toda la moderna política social...La política de seguridad social tiende a conseguir la cobertura universal de todos los riesgos y de todas las necesidades que puedan referirse a todos los hombres. El mundo ha descubierto una nueva libertad, la libertad de no morir en la miseria y la libertad de ser atendido en la desventura"<sup>96</sup>.

A pesar de la terminología usada para la referencia al marco de protección social ante el infortunio, más que seguridad social se puede afirmar que existía una tendencia patente de avance hacia un sistema lo más global posible de protección a la sociedad. Es en este marco y en este contexto en el que la familia se tornó, en varios aspectos de la previsión, en sujeto de atención del "Nuevo Estado". En Girón se manifiesta un ansia de monopolizar para su época, para su régimen y para su caudillo los resultados positivos de la obra social española tendiendo a la descalificación global y poco matizada de períodos anteriores de la Historia de España marcados por la presencia del "maligno y sus secuaces" sobre el territorio nacional. Desde estos presupuestos se entienden afirmaciones contundentes como éstas:

"...toda la política de seguridad social española, que es una de las más avanzadas de Europa, es obra exclusiva de nuestra Revolución. Con excepción del Seguro de Accidentes, con excepción de un tímido Seguro de Maternidad y de otro no menos

timido Seguro de Vejez, ambos más simbólicos que reales, toda esta gran obra de seguridad social que vais a conocer es obra de Francisco Franco"<sup>97</sup>.

Si bien en Girón predomina la apología del régimen franquista y su obra, hay que tener en cuenta que sus afirmaciones tienen un fundamento incuestionable al menos en parte en la medida en que, verdaderamente hasta que Girón llega al Ministerio de Trabajo, lo realizado en torno a la cuestión de la previsión social era prácticamente inapreciable"<sup>98</sup>.

En cierta manera, es posible establecer, o algunos autores establecen, una relación entre la tendencia a crear la seguridad social y la familia. Hay que partir del hecho de que la legislación social tiene como referente la evolución histórica del proceso de industrialización con características diferenciadas según los países y los tiempos en que se produjeran. La legislación social nace con el objetivo de limar las desigualdades entre los trabajadores y los empresarios. La concentración de los trabajadores en los centros industriales con salarios insuficientes generó situaciones de pobreza, unidas a la enfermedad y las malas condiciones para el alojamiento. Ello suponía un grave daño para la familia y por tanto para la nación. No era suficiente la iniciativa individual y caritativa; tampoco eran suficientes las agrupaciones, sociedades de socorros mutuos, etc. Era necesaria la intervención del Estado para conceder protección social, bien a ciertas categorías de la población, bien a la unidad básica de lo social como era la familia, ante el clima de inseguridad en que se desenvolvía su existencia y por tanto la de sus componentes. Ello sin contar, sobre todo desde la vertiente de la familia española, con la infinidad de problemas de tipo moral o religioso que llevaba aparejada la falta de seguridad para la unidad familiar. En este sentido Pierre Laroque"<sup>99</sup> afirma que "la necesidad de realizar una organización colectiva de la seguridad social ha amanecido en todos los países de un modo urgente; es todo, un fenómeno... que hay que atribuir, en la mayoría de los casos, a un debilitamiento de la unión familiar". Se plantea en la reflexión de Laroque la problemática de los riesgos de la vida social y del trabajo, y paralelamente la pérdida de la garantía fundamental ante el infortunio que la familia concedía.

Desde esta perspectiva se observan las medidas de protección social y desde esta vertiente se comprende con mayor claridad las motivaciones que conducen, sobre todo en el caso español, al establecimiento de marcos normativos y organismos potenciadores de la familia. Se había producido el decive del núcleo familiar en el que con anterioridad se basaba la solidaridad de los hombres. Ello establecía, al menos en principio, una antinomia entre familia y seguridad social; sin embargo, señala Laroque, esta "expansión del núcleo familiar en que se basa la solidaridad social es, en el fondo, solamente una creciente fraternidad entre los hombres, una fraternidad entre los pueblos"<sup>100</sup>. Pero por eso mismo no se puede perder de vista a la unidad familiar como centro de las medidas de protección social, afirma Laroque:



“La seguridad social, por necesidad, solamente puede ser de carácter familiar, no se puede concebir una seguridad social del individuo que no sea familiar”<sup>101</sup>

En el contexto en que escribe Laroque o Melas el trabajo a favor de la familia supone un trabajo a favor de la estabilidad de los países salidos de la Segunda Guerra Mundial, un trabajo a favor de la paz. Y así Melas hacía referencia al hecho de que ha “comprendido que todos los esfuerzos para promover la existencia y la estabilidad de la familia son, finalmente, una contribución esencial a los esfuerzos emprendidos en el mundo para mantener la paz”<sup>102</sup>.

La seguridad social, por consiguiente, desde la perspectiva temporal en que nos situamos, se define de forma optima de la siguiente forma: “es la garantía perenne, dada al grupo familiar, de medios decorosos de existencia...Además, por medio de su misma organización los seguros sociales, aspiran a dar una nueva vitalidad a la noción de la familia”<sup>103</sup>. Desde esta perspectiva el enfoque de Laroque es sumamente ilustrativo de las motivaciones profundas, sin olvidar los referentes ideológicos o el modelo de sociedad que se pretendía implantar, que conducen en el caso español al intento de revitalización o de fortalecimiento de la familia desde el ámbito de un Estado que, germinalmente, empieza a poner los cimientos de una sociedad con mayor amparo ante los infortunios e imprevistos, sobre todo dentro del campo laboral. De todas maneras no hay que olvidar el contexto en que, el entonces Director General de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo Francés realizó sus manifestaciones, porque resulta absolutamente necesario para comprender rigurosa y matizadamente lo que aquí se expone y se proyecta. Un problema de primera magnitud en la época en que escribe Laroque es el avance progresivo y lento a la vez de las normativas y los organismos necesarios para crear una verdadera seguridad social. Y de ahí la función de los Estados en la creación de marcos de seguridad para sus ciudadanos y sus familias basados en “la imposibilidad de satisfacer con el esfuerzo individual o familiar necesidades perentorias, esenciales, que sienten grandes masas de población, y la de evitar las repercusiones perturbadoras que eso produce en la sociedad entera”<sup>104</sup>.

En este contexto, desde el punto de vista de Melas, esta cuestión es un problema de tipo familiar: “No se puede concebir una legislación de seguridad social digna de este nombre que cubriese los gastos necesarios para la enfermedad de un trabajador, sin cubrir los gastos necesarios para la enfermedad de su mujer o de sus hijos”<sup>105</sup>, afirmaba el mencionado autor. Ello viene a coincidir, en líneas generales, con los padres del catolicismo social español, y en concreto con uno de los artífices del subsidio familiar en España. Nos referimos a Severino Aznar cuando, partiendo de la concepción de que “la sociedad se compone de familias”<sup>106</sup>, hace referencia a que aquellas tienen necesidades que han satisfacer, necesidades que en general son satisfechas por su propia cuenta. De no ser así, abandonadas ellas, “su vida sería atormentada,

insegura, como una brizna en el camino, como una planta débil, desarraigada, en la llanura en día de vendaval... y así el mundo sería un instrumento de tortura y como un infierno, donde la paz y el bien común sería un sueño, un imposible. La sociedad es un organismo vivo y no puede sentirse normal si sobre él caen como ácido corrosivo esas cataratas de miseria"<sup>107</sup>. En la mente de Aznar todas estas consideraciones son las que conducen al establecimiento de la prestación familiar por excelencia en España. Nos referimos al subsidio familiar. No obstante, el sesgo con que Aznar describe lo que es el subsidio familiar adquiere un talante caritativo-benéfico indiscutible. Así, por ejemplo, Aznar afirma que el "seguro social es obra social por su técnica, pero por sus fines y por los medios que emplea es también obra de misericordia, es caridad"<sup>108</sup>. Ello no significa que obvie lo que verdaderamente considera un derecho de la sociedad a vivir y a perpetuarse, o el derecho del trabajador a constituir una familia. De esta forma por medio de las prestaciones familiares las familias ya no tendrían el miedo económico al aumento de la prole; lo cual por otro lado vendría a responder a las motivaciones que condujeron a la implantación de los subsidios familiares. Por un lado el compromiso de Franco, la promesa del Fuero del Trabajo, la aspiración de devolver a la madre al hogar, "donde tiene misión más alta que en la fábrica, el taller o la oficina"<sup>109</sup> y la política demográfica del Nuevo Estado entre otras.

En un régimen como el español, con un modelo de sociedad por llevar a la práctica tras la Guerra Civil, era evidente que, al menos formalmente, la solución para el marco de inseguridad en que se desenvolvía o en que se pudiera desenvolver la familia no podía resolverse teniendo como punto de atención al individuo sino a la familia. "Los riesgos ante la vida, la empresa o la fortuna, de perder su colocación o su capacidad de trabajo, es hoy una amenaza que cierne sobre todos. Tales peligros no pueden extirparse solamente por la invitación teórica a oponer a lo colectivo al valer de la persona"<sup>110</sup>, afirma Melas. La insistencia en estos presupuestos y en estos referentes muestra claramente como el aparato de previsión social en lo referente a la familia pretende, en cierta medida, crear patria. Es decir, reforzar dentro de un marco nacional, en este caso el español, el sentido de la cohesión de sus miembros y por tanto la solidaridad entre los mismos.

El hecho de que el Estado llegase con sus brazos lo suficientemente lejos como para proteger situaciones de desamparo o para limar, aun parcialmente, los problemas de la familia ligados al aumento de su prole, incidía de forma más o menos destacada, pero incidía, en la generación de un sentimiento mayor de pertenencia a la comunidad nacional por encima de las nociones más elementales o sentimentales de lo que el sentimiento nacional suponía. Y en este contexto afirma Melas que:

"En el fondo mismo del problema de la ayuda a la familia, trátase de fundar nuevas familias o de asegurar la estabilidad de las existentes, hay que inscribir la creación de condiciones humanas de habitación. La vida, en realidad, no comienza para un hombre más que cuando tiene un hogar. Un alojamiento sano es la condición previa para criar hijos sanos. Esta preocupación es grande, sobre todo en los países que han sufrido más con la guerra. Por esta razón una de las tareas más esenciales de la seguridad social debe ser promover la creación de viviendas sanas".

Es decir, se apuesta por un soporte previsor que no tenga sólo como referente al trabajador sino a su familia. Ello supone una apuesta clara por la seguridad social y por el abandono de los seguros sociales en la medida en que estos últimos no conceden prestaciones a la familia o para ella.

Desde este punto de vista hagamos, tomando como ejemplo al subsidio familiar, una apreciación. Los seguros familiares tienen como misión asegurar a ciertas categorías de la población contra la inseguridad económica, sanitaria, etc. La seguridad social tiene como meta "liberar a todo el mundo de la necesidad"<sup>111</sup>. Pues bien, en el caso del subsidio familiar español nos encontramos ante un seguro que atiende a las necesidades de las familia pero, eso sí, de unos grupos profesionales definidos y predeterminados. Por otro lado, ese anhelo de universalidad de la seguridad social, se ve compensado por un tipo de seguro que, como el subsidio familiar, acoge en su seno a beneficiarios que constituyen, junto al trabajador, una familia. Para Melas, el establecimiento de un marco de seguridad social, superador de los seguros sociales, supone en cierta medida, el establecimiento definitivo de la atención a la familia y en esta línea afirma el mencionado autor lo siguiente:

"Los motivos de la evolución que va de los seguros sociales a la seguridad social fueron de orden demográfico, económico, social y cultural. La familia, en sí misma, se convirtió en objeto de protección social, sin que, para que se dé esta protección, haya necesidad de que se presente un caso ya previsto por las prestaciones de los Seguros sociales"<sup>112</sup>.

Anclada formalmente la revolución que daría lugar a un "Nuevo Estado" en la familia como organismo básico de la sociedad, el infortunio constituía la principal amenaza para el eficaz desenvolvimiento del hogar y por tanto de la sociedad entera. Desde los posicionamientos más radicales y utópicos del franquismo se pretendía poner fin a las situaciones de penuria ante imprevistos que incidieran negativamente en el nivel de la renta de las unidades familiares

españolas por medio de la creación de una aparato de prevision que tuviera como centro de sus preocupaciones a la morada familiar.

## Notas

- <sup>1</sup> Fraga Iribarne, Manuel, *La familia...*, op. cit., pág. 27.
- <sup>2</sup> Rebollo González, Anibal: *Subsidios familiares*. Madrid. Oficina Iberoamérica de Seguridad Social. Serie Estudios, 1954, pág. 41.
- <sup>3</sup> Fernández Heras, Amado: *Normas únicas para aplicación del plus familiar*. Madrid, 1959, pág. 7.
- <sup>4</sup> Ídem, pág. 33.
- <sup>5</sup> Conclusiones del I Congreso..., op. cit., pág. 13.
- <sup>6</sup> Informe sobre una política coordinada relativa al nivel de vida familiar, op. cit., pág. 21.
- <sup>7</sup> Ídem, pág. 22.
- <sup>8</sup> Alonso García, Política social..., op. cit., pág. 9.
- <sup>9</sup> Jordana de Pozas, Luis: *Política familiar del Nuevo Estado*. Santander, Aldus, 1938, pág. 6-7.
- <sup>10</sup> Ídem, pág. 35.
- <sup>11</sup> Elorriaga, Gabriel: *Acción familiar*. Madrid, ed. C.F.E., 1961, pág. 35.
- <sup>12</sup> Mallart, José: *Hacia un sistema...*, op. cit., pág. 516-517.
- <sup>13</sup> *La protección de la familia por el Estado*. Madrid, ed. C.F.E., fascículo nº 29, 1958, pág. 7.
- <sup>14</sup> Tarancón, Vicente: *La familia...*, op. cit., pág. 199.
- <sup>15</sup> Ídem, pág. 199.
- <sup>16</sup> Estudios y conclusiones..., fascículo 26, op. cit., pág. 56.
- <sup>17</sup> Leal Ramos, León: *La familia preocupación fundamental del Estado español*. Cáceres, Jefatura Provincial de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Cáceres, Seminario de Estudios Sociales, 1950, pág. 8.
- <sup>18</sup> Ídem, pág. 81.
- <sup>19</sup> Alonso García, Política social..., op. cit., pág. 17.
- <sup>20</sup> Síntesis de ponencias provinciales..., op. cit., pág. 33.
- <sup>21</sup> Informe sobre una política coordinada..., op. cit., pág. 23.
- <sup>22</sup> Bellod, La familia..., op. cit., pág. 33.
- <sup>23</sup> Síntesis de ponencias provinciales..., op. cit., pág. 12.
- <sup>24</sup> Fernández de Castro, Del paternalismo..., op. cit., pág. 31.
- <sup>25</sup> Ídem, pág. 61.
- <sup>26</sup> Ídem, pág. 62.
- <sup>27</sup> Estudios y conclusiones..., op. cit., pág. 11-12.
- <sup>28</sup> Jordana de Pozas, Política familiar..., op. cit., pág. 2.
- <sup>29</sup> Ídem, pág. 3.
- <sup>30</sup> Fraga Iribarne, La familia..., op. cit., pág. 29.
- <sup>31</sup> Girón de Velasco, Escritos..., op. cit., pág. 168.
- <sup>32</sup> Codón, La familia en el pensamiento..., op. cit., pág. 9.
- <sup>33</sup> Ídem, pág. 10.
- <sup>34</sup> Ídem, pág. 10-11.
- <sup>35</sup> Jordana de Pozas, Política familiar..., op. cit., pág. 35.
- <sup>36</sup> Fernández de Castro, Del paternalismo..., op. cit., pág. 62.
- <sup>37</sup> Girón de Velasco, Escritos..., op. cit., pág. 167-168.
- <sup>38</sup> Aznar Embid, Del salario familiar..., op. cit., pág. 22.
- <sup>39</sup> Ídem, pág. 22.
- <sup>40</sup> Fraga, La familia..., op. cit., pág. 34.
- <sup>41</sup> Constitución de la República Española. Madrid, ed. García Rico, 1993, pág. 12.
- <sup>42</sup> Elorriaga, Acción familiar..., op. cit., pág. 44.
- <sup>43</sup> Ídem, pág. 44.
- <sup>44</sup> Fraga, La familia..., op. cit., pág. 34.
- <sup>45</sup> Aranzadi, op. cit., 1359/1939.
- <sup>46</sup> Ídem, 269/1938.

- <sup>47</sup> Estudios y conclusiones... fascículo nº 23, op. cit., pag. 60.
- <sup>48</sup> Cachimero Sánchez, Benito: La evolución de la nupcialidad en España (1887-1975). Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), 1982, nº 20, pag. 81-99.
- <sup>49</sup> Información del estudio de Cachimero, op. cit., pag. 87.
- <sup>50</sup> Ídem.
- <sup>51</sup> Ídem.
- <sup>52</sup> Benito Cachimero. La evolución, op. cit., pag. 99.
- <sup>53</sup> Elomaga, Gabriel: Dinámica familiar española. Madrid, Cuadernos de Investigación, 1963.
- <sup>54</sup> Ros Jimeno, José: La familia en el panorama demográfico español. Madrid, Cuadernos de investigación, 1959.
- <sup>55</sup> Del Campo, Salustiano y Navarra López, Manuel: Nuevo análisis de la población española. Barcelona, Ariel, 1987. También en La evolución de la familia española en el siglo XX, Madrid, Alianza Universidad, 1982, y en Análisis de la población de España, del mismo autor, Barcelona, Ariel, 1975.
- <sup>56</sup> Ros Jimeno, La familia..., op. cit., pag. 13.
- <sup>57</sup> Gómez Reñto y Carriota, Manuel: La familia rural y urbana en España en La familia Española, Madrid, Centro de Estudios Sociales de la Santa Cruz del Valle de los Cardos, 1967.
- <sup>58</sup> Elomaga, Dinámica familiar... op. cit., pag. 38.
- <sup>59</sup> De Miguel, Jesús M. y Díez Nicolás, Juan: Políticas de Población, Espasa Calpe, Madrid, 1985.
- <sup>60</sup> Ídem, pag. 137.
- <sup>61</sup> Ver Giron de Velasco, Escritos..., op. cit.
- <sup>62</sup> Vallejo Nájera: Concepto de la Higiene racial. Práctica Médica, febrero de 1952, nº 107, pag. 35-40.
- <sup>63</sup> Martín López, Enrique: El cambio social durante el régimen de Franco, Madrid, Actas, 1993, pag. 159.
- <sup>64</sup> Preston, Paul: Franco, Barcelona, Grijalbo, 1994, pag. 236.
- <sup>65</sup> Ídem, pag. 158.
- <sup>66</sup> Roseira, Mário: Los regímenes de asignaciones familiares y los problemas originados por las relaciones entre las asignaciones familiares y las demás ramas de la seguridad social. Ginebra, A.I.S.S., Secretaria General, Informe XV, XVª Asamblea General (Washington, D.C. sept.-oct. de 1964), 1965, pag. 7.
- <sup>67</sup> Rebollo Gonzalez, Subsidios..., op. cit., pag. 23.
- <sup>68</sup> Roseira, Mário, op. cit., pag. 19.
- <sup>69</sup> Roseira, Mário, op. cit., pag. 196.
- <sup>70</sup> Giron de Velasco, Escritos..., Torno IV, op. cit., pag. 171.
- <sup>71</sup> Ídem, pag. 113 y 171.
- <sup>72</sup> Roseira, op. cit., pag. 528.
- <sup>73</sup> Rebollo González, Subsidios, op. cit.
- <sup>74</sup> Ídem, pag. 87.
- <sup>75</sup> Preston, op. cit., pag. 236.
- <sup>76</sup> Rebollo, op. cit., pag. 89.
- <sup>77</sup> Ídem, pag. 80.
- <sup>78</sup> Ídem, pag. 91.
- <sup>79</sup> Hernáinz Márquez, Miguel: Tratado elemental de Derecho del Trabajo. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1953, pag. 682.
- <sup>80</sup> Ídem, pag. 682.
- <sup>81</sup> García Nieto, Mª Carmen y M. Donezar, Javier: La España de Franco, 1939-1973. Madrid, Guadiana Publicaciones, 1985, pag. 194-198.
- <sup>82</sup> Aranzadi, op. cit., 230/1938.
- <sup>83</sup> Alonso Olea, Manuel y otros: La ayuda familiar en el régimen de prestaciones de la seguridad social. En las II Jornadas Técnicas Sociales, Madrid, 1961, pag. 24-25.
- <sup>84</sup> Hernáinz Márquez, Miguel, op. cit., pag. 700-701.
- <sup>85</sup> Las Heras, Patrocinio y Cortajarena, Elvira: Introducción al bienestar social. Madrid, Siglo XXI, 1985, pag. 81.
- <sup>86</sup> Hernáinz Márquez, Miguel, op. cit., pag. 702.
- <sup>87</sup> Martín López, op. cit., pag. 162.
- <sup>88</sup> Casado, Demetrio: Introducción a los servicios sociales. Madrid, Acebo, 1991, pag. 156.
- <sup>89</sup> Las Heras y Cortajarena, op. cit., pag. 73.
- <sup>90</sup> Casado, Demetrio, op. cit., pag. 208.
- <sup>91</sup> Alonso Olea, Manuel: Instituciones de Seguridad Social. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1959, pag. 3.

- <sup>92</sup> Ídem, pág. 136.
- <sup>93</sup> Hernandez Márquez, op. cit., pág. 700.
- <sup>94</sup> Vannutelli, La tutela de la familia..., op. cit., pág. 751.
- <sup>95</sup> Ídem, pág. 754.
- <sup>96</sup> Giron de Velasco, Escritos..., Tomo IV, op. cit., pág. 170.
- <sup>97</sup> Ídem, pág. 171.
- <sup>98</sup> Véase la obra coordinada por María Dolores Gómez Molleda, Los Seguros sociales en la España del siglo XX, 3 vol., Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988.
- <sup>99</sup> Laroque, Pierre: Familia y seguridad social, Revista de Trabajo, abril de 1948, vol. 1, nº 4, pág. 290.
- <sup>100</sup> Ídem, pág. 291.
- <sup>101</sup> Ídem, pág. 291.
- <sup>102</sup> Melas, La familia..., op. cit., pag. 159.
- <sup>103</sup> Ídem, pág. 291.
- <sup>104</sup> Aznar, Los seguros..., op. cit., pág. 66.
- <sup>105</sup> Melas, op. cit., pág. 292.
- <sup>106</sup> Aznar Embid, Los seguros..., op. cit., pág. 66.
- <sup>107</sup> Ídem, pág. 68.
- <sup>108</sup> Ídem, pág. 73.
- <sup>109</sup> Ídem, pág. 71.
- <sup>110</sup> Melas, op. cit., pág. 150.
- <sup>111</sup> Ídem, pág. 150.
- <sup>112</sup> Ídem, pág. 157-158.

## **Capítulo 6. El subsidio familiar, una creación del “Nuevo Estado”: 1938-1957.**

### **6.1. Antecedentes del subsidio familiar en España.**

El establecimiento en España del subsidio familiar se enmarca en un proceso que avanza en dirección al establecimiento de un marco de seguridad social. Partimos de que el concepto más básico de solidaridad y de mutualidad se encuentra en la protección mutua que se conceden padres e hijos en épocas de incertidumbre y miseria. Hasta el siglo XVIII las familias recibían ayuda de instituciones religiosas, ayuntamientos o asociaciones profesionales. Esta ayuda no se fundamentaba en el poder ejecutivo de la ley, puesto que no existía en este sentido, sino en las costumbres. La progresiva ruptura en Europa con el Antiguo Régimen, inclusive dentro de la consideración de las continuidades y permanencias que perduraron, supuso la aparición germinal y muy primaria del Estado como sustituto de viejas instituciones de solidaridad colectiva.

El proceso de industrialización puso de manifiesto la falta de regulación del mundo laboral y los principios de raigambre liberal basados en los lemas, *dejar hacer*, *dejar pasar*, dejaron al trabajador en una situación infinitamente menos privilegiada que la del patrono. Fueron primeramente las iniciativas privadas de tipo filantrópico y caritativo las que intentaron suplir las deficiencias humanas del liberalismo manchesteriano imperante. Estas iniciativas fueron sustituidas o complementadas por organizaciones asistenciales comunitarias que facilitaron ayudas a los necesitados. Los obreros, ante las situaciones cada vez más acusadas de necesidad, iniciaron la fundación de los primeros socorros mútuos. Fue a finales del siglo XX cuando la Alemania bismarckiana marcó el gran hito en la evolución de la seguridad social ante el infortunio del trabajador con el seguro de enfermedad de 1883, el seguro de accidentes de 1884 y el de invalidez y vejez de 1889. Los primeros pasos del siglo XX fueron titubeantes y se movieron dirigidos, al menos en parte tras la Primera Guerra Mundial, por la necesidad de coartar la pretensiones de implantar un nuevo modelo de sociedad de tintes soviéticos. Pese a ello no será hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, con la Carta del Atlántico y su afán por abarcar todo el campo de lo social, cuando se den los primeros pasos para crear lo que se ha venido denominando “Estado del bienestar”. En esta línea de creación de instituciones de protección de lo social e intentando encarar lo que, desde las instituciones del franquismo, se denominó cuestión social, evitando la alusión al término más subversivo de conflicto social, se encuadra el nacimiento, en plena Guerra Civil, de los Subsidios Familiares.

En torno a la evolución que conduce a los subsidios familiares afirma Rebollo González<sup>1</sup>: “Las primeras leyes se caracterizan por su protección a los económicamente débiles; después

evolucionan hasta el campo laboral, para, finalmente, universalizar la prestación, que es la característica actual con que se presentan las últimas legislaciones influidas por la nueva concepción de que las asignaciones familiares constituyen una carga nacional, una ayuda de la colectividad a todas las familias para la educación de sus hijos".

Según Luis Jordana de Pozas<sup>2</sup> el origen más primitivo de los sobresueldos para finalidades familiares está en los que las administraciones de varios estados europeos concedieron a sus funcionarios en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Lo que inicialmente tuvo un carácter coyuntural, se convirtió por iniciativa del estado en una primera iniciativa que constituiría un ejemplo para la clase patronal.

En el ámbito de lo nacional<sup>3</sup> la iniciativa privada da sus primeras muestras de interés por la cuestión del sobresueldo de finalidad familiar a principios del siglo XX. En 1904 la Compañía de Hierro del Norte estableció un humilde socorro para las familias más numerosas de su personal con sueldo inferior a 3.225 pts. En 1916 la Junta de Riegos del Alta Aragón promovió un modesto sobresalario familiar para sus trabajadores. Podría citarse una larga enumeración de empresas que tomaron iniciativas más o menos semejantes. Por supuesto, se mantuvieron todas ellas dentro de la iniciativa privada, inspirada en líneas generales por un afán filantrópico y un espíritu caritativo-benéfico de raigambre católica muy lejano de lo que sería en el futuro el establecimiento de un sistema de subsidios familiares obligatorios o un sistema de cajas de compensación, todavía privadas, que pudiera considerarse como una fase intermedia entre la iniciativa privada de empresas como la Compañía de Hierro del Norte y el régimen obligatorio de subsidios familiares establecido el 18 de julio de 1938.

La génesis del subsidio familiar privado en España, pero basado en un sistema de cajas de compensación, tiene entre uno de sus más destacados precursores a Bartolomé Quetglas Gayá. Sacerdote y sociólogo mallorquín, vino al mundo en Felanitx (Mallorca) un 19 de enero de 1900, falleciendo el 20 de enero de 1964. Ordenado sacerdote el 14 de junio de 1924, cursó estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano y la carrera de Magisterio en la Escuela Normas de Maestros de Baleares. La referencia a Bartolomé Quetglas y su obra parece obligada en la medida en que, a pesar de la poca relevancia cuantitativa que tuvo tanto por su extensión geográfica como por las prestaciones otorgadas, su labor en torno a la búsqueda de un sueldo que en parte se debiera a un criterio familiar fue la primera que se llevó a cabo en España según los criterios de la iniciativa privada y a imitación de las cajas de compensación de belgas y franceses.

Influido por el funcionamiento de las antiguas instituciones gremiales, por un pasado medieval en el que la Iglesia era un factor de peso en la vida social y política, por los escritos de P. A.



Vicent y sobre todo por las encíclicas de León XIII y Pío XI promovió un sistema germinal de subsidios familiares como método para difundir por el territorio nacional la doctrina social de la Iglesia católica y con una finalidad tanto social como moral. La concepción que Quetglas tenía de los subsidios familiares venía marcada por un cierto tono paternalista e infundido por consideraciones de tipo moral propias de una fase del desarrollo del subsidio familiar, previo al 18 de julio de 1938, en que éste más que entendido como un derecho era visto como una saludable acción fraternal de los empresarios<sup>4</sup>.

La convicción de que, mientras el Estado no actuase para otorgar a la familia española un nivel de vida digno, era necesario crear un marco de protección para el obrero-padre de familia español que comenzara por la concesión de un salario suficiente para la sustentación propia y la de la familia, llevó a Bartolomé Quetglas al estudio de instituciones de carácter privado en el extranjero que sirvieran para tales fines. La labor del padre Quetglas se centró en primera instancia en el estudio de las cuestiones de tipo técnico relacionadas con los mecanismos institucionales creados en el extranjero con el fin de otorgar a la unidad social básica, la familia, un salario familiar en todo momento atento a las necesidades específicas del núcleo familiar y al número de descendientes dependientes del padre de familia.

Según Juan Bestard Comas<sup>5</sup> la obra de Bartolomé Quetglas se puede dividir en dos grandes períodos. Entre 1930 y 1945 se encuentra el período más fructífero de la vida de Quetglas como precursor, al menos en parte, de lo que con el paso del tiempo será el subsidio familiar de régimen obligatorio. No carente de un cierto tinte apologista con el que Bestard describe la figura de su homenajeado, la figura del P. Quetglas puede presentarse como la de un auténtico precursor de un salario familiar que se materializó en las primeras cajas compensadoras de cargas familiares en Mallorca, Salamanca y Ávila. La segunda etapa de su vida, desde 1945, con su cese como delegado provincial del Instituto Nacional de Previsión, interesa escasamente al estudio que llevamos a cabo en la medida en que se sale del período en que se considera la evolución del subsidio familiar. Por otra parte hay que señalar que esta obra de Bestard constituye una especie de acto de desagravio para un hombre que inició en España la labor de extensión del subsidio familiar sustentado privadamente por los empresarios y que se vio defenestrado por el ministerio de Trabajo por unos oscuros asuntos de índole anecdótica que obviemos por dicho motivo. A pesar de ello, pero nunca olvidando el carácter hagiográfico del panfleto de Bestard, la referencia a Quetglas es absolutamente necesaria para constatar la dificultad con que en España se abrían paso las tendencias imperantes en Europa y como en el caso de llegar a nuestro país los atipismos imperantes se alejaban de forma significativa del modelo europeo citado.

El inicio de su proyecto benéfico-asistencial comenzó con visitas a Francia y Bélgica para documentarse sobre los subsidios familiares en estos países, tras lo cual dio comienzo en España una campaña propagandística centrada primeramente en sus artículos sobre "El salario familiar y las Cajas de Compensación" en junio de 1932 en el "Correo de Mallorca". Publicados sus artículos en el semanario "Acción Social", de la Unión de Derechas, y en la Sección "Libros y Revistas" de la revista "La Paraula Cristiana" persiste en su labor de divulgación de los principios benéfico-sociales a través de todos los medios a su alcance. La inestimable ayuda de Andrés Buades Ferrer, patrono mallorquín y presidente de la Unión Diocesana de Hombres de Acción Católica sería definitiva para llevar a buen puerto su primer proyecto de caja compensadora en Mallorca. Así, en la Asamblea de Cuestiones Sociales, organizada por la Juventud Obrera Católica en Vitoria en julio de 1933, Quetglas propuso que se implantasen las cajas de compensación, teniendo como modelo de orientación el caso francés y belga, y con la mente puesta en la futura implantación del subsidio familiar, siempre según se hagiógrafo, lo cual es bastante discutible. Su propuesta tenía como base los artículos publicados en el "Correo de Mallorca" según reconoce el propio P. Quetglas<sup>6</sup>.

Su labor propagandista se centraba en la divulgación de la doctrina vaticana en torno a la cuestión social, buscando la adhesión de aquellos grupos privados que, como los empresarios imbuidos por el mensaje cristiano, sintieran la necesidad de explicitar su ansia de solidaridad y fraternidad con el obrero español por medio de la institución de un subsidio familiar que superara la desatención en que el Estado mantenía a las familias obreras, en cuanto a la adecuación de sus necesidades como núcleo familiar y sus salarios, fruto de una prestación con base en el trabajo individual.

Relata el P. Quetglas<sup>7</sup> las dificultades para el nacimiento de un sistema de subsidios familiares y las trabas con que se encontró. Así, en diciembre de 1933 cuenta como algunos miembros de Acción Cristiana, concejales del municipio de Palma de Mallorca presentaron una propuesta al Ayuntamiento para introducir un sistema de ayuda familiar entre los trabajadores del municipio. La proposición fracasó. Sin embargo la labor divulgadora del P. Quetglas siguió adelante. En mayo de 1934 presentó una ponencia sobre el tema de su proyecto en la Asamblea Sacerdotal del Santuario de Lluch; en noviembre y diciembre del mismo año dirigió un curso social para sacerdotes, cinco cursos sociales para obreros y un curso social para patronos llevado a cabo por la Unión Diocesana de Hombre de Acción Católica presidida por Andrés Buades.

Los proyectos de Quetglas se materializaron el 13 de junio de 1935 con la fundación de la primera caja compensadora de derecho privado en Palma de Mallorca. En marzo había fundado, también en Palma de Mallorca, el Círculo Empresarial de Estudios Sociales, inspirado en la doctrina de la "Quadragesimo Anno" sobre la remuneración del obrero y la vida social en

concordancia con la ley evangelica. Presentados y aprobados los estatutos de su caja al Gobierno Civil y pasado el trámite de conformidad con la Ley de Asociaciones de 1887, nacia en España la primera caja de compensación de derecho privado, denominada Caja Compensadora de Cargas Familiares. "La nueva asociacion conforme rezaba el Reglamento se inspiraba en los principios de justicia social contenido en la Encíclica Quadragésimo Anno del Papa Pío XI relativos al sistema de remunerar el trabajo, y tenía por objeto primordial inmediato, establecer el sistema de subsidios familiares a favor de los obreros, cabezas de familia". Y así, de este Círculo nació la primera caja de compensación privada de España.

No son absolutamente originales los intentos de Quetglas. Con las características ya mencionadas de las empresas que por iniciativa privada conceden mejoras de tipo familiar, el 3 de julio de 1935 la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres estableció un subsidio familiar consistente en la elevación del salario un 5% en los casos en que el empleado estuviese casado y viviese con su cónyuge y otro 1% por cada hijo menor de 23 años de edad<sup>9</sup>.

Lo cierto es que, aunque muy primariamente, se habían colocado "los primeros cimientos del sistema de subsidios familiares en España"<sup>10</sup>, aun teniendo en cuenta que era un sistema de base caritativo-benéfico, fundado en la fraternidad empresarial para con el obrero susceptible de recibir su trato paternalista y que, por tanto, entendía la institución del subsidio familiar no como un derecho del obrero sino como un derecho del patrono a desarrollar sus anhelos espirituales proyectando su caridad sobre las familias mas necesitadas por el carácter numeroso de su prole.

En agosto de 1935 Quetglas viajó a Mons, Brujas, Bruselas, Lille, Aviñón, Lyon y París. Su decantación por el modelo francés y belga vino motivada porque fueron estos dos países los que más tempranamente llevaron a cabo el establecimiento de un tipo de prestación cuyo baremo se determinaba por la carga familiar del asalariado y no por su rendimiento personal. León Harmel era el prototipo de empresario caritativo francés. Su mérito fue crear en 1891 la denominada "Caisse de Famille" en la fábrica de su propiedad con el objetivo de establecer un salario de tipo familiar. La experiencia posterior en torno al desarrollo de los sistemas de subsidios familiares da luz al fracaso parcial de un sistema que como el de Harmel difícilmente prosperaría más que en establecimientos empresariales de mayores dimensiones y prosperidad económica garantizada, a lo cual hay que añadir que Harmel en sus proyectos pensaba en la fórmula de la familia de tipo medio<sup>11</sup>.

En 1918 aparecieron las cajas de compensación. Dichas cajas<sup>12</sup> venían a ser asociaciones constituidas por entidades patronales cuyo fin era repartirse entre las mismas la carga de los subsidios familiares pagados a su personal. Bestard<sup>13</sup> las define como "asociaciones de

empresas que aportan a una Caja común cantidades proporcionales, ya al número de sus obreros, ya al volumen de sus operaciones, al objeto de que la Caja entregue, a los asalariados que trabajan en las empresas asociadas, subsidios familiares". En torno a esta cuestión afirma Aznar: "El subsidio familiar en las manos de la Caja de Compensación es como un Seguro en favor de los patronos contra el riesgo de tener obreros con más hijos que el promedio de la familia obrera que para sus consocios trabaja, y asegura sobre todo al obrero con hijos el supliemento de salario que necesita para sostener su hogar y contra el riesgo que sin la Caja de Compensación tendría de no encontrar trabajo, porque le costaba más al patrono"<sup>14</sup>. En cierta media, las cajas de compensación eran una formula más próxima a lo racional que otras fórmulas para la aplicación de un subsidio familiar. Permitían conservar el principio de que a igual trabajo igual remuneración pero posibilitaban que los patronos pudieran entregar una cuota proporcional al número de sus trabajadores, a la nómina que les abonaran y que en función de esto la Caja pudiera repartir entre los empleados de las diversas empresas que a ella se afiliasen un subsidio que tendría siempre un carácter más simbólico que significativo para la economía de la unidad familiar.

Son varios los grandes problemas del sistema de cajas de compensación de iniciativa privada. En primer lugar, por el carácter de su incitativa tenían su origen únicamente en el empresariado, lo cual suponía una carga importante que en el futuro, con la evolución de la estructura demográfica, podría dejar en la ruina a las empresas que pretendieran prolongar el sistema. En segundo lugar, el Estado no intervenía de ninguna manera, siendo éste el más beneficiado, dado que las familias le nutrirían de consumidores, de brazos, de soldados y de contribuyentes<sup>15</sup>. En tercer lugar, las cajas de compensación estaban expuestas al rumbo que tomara la economía general o la empresa como a la, fluida o no, relación del empresario con sus trabajadores. Por otra parte, dada la libertad de afiliación, sólo los empresarios que lo desearan se afiliaban, bien por el sentido filantrópico de deber social o por el temor a que la escasez de recursos de sus empleados les llevase a la huelga.

El fallo más importante de este sistema libre estaba en que el derecho a un salario suficiente tenía su garantía en un régimen de libertad que sólo por la vía de la generosidad y la misericordia empresarial podía funcionar. Estaríamos por tanto más cerca de la institución privada de beneficencia que del seguro social. En el caso español la búsqueda de una mayor garantía conduciría, como en el extranjero, al establecimiento de un sistema de seguro social como el que nació con el régimen del 18 de julio de 1938.

En el extranjero los franceses fueron los pioneros en la creación de esta institución. Habían alcanzado a la altura de 1932 las 255 cajas. Deplora Severino Aznar<sup>16</sup> el caso francés pese a su carácter pionero. Según el autor mencionado, el origen de las iniciativas franceses pretendía

estimular artificialmente la producción humana para la creación de mano de obra, dado el imperante "neomalthusianismo" en aquel país. El patrono francés, haciendo gala de su *chauvinismo*, servía a su patria dando facilidades para la expansión de la prole, base de la creación de soldados, trabajadores y contribuyentes. En 1918 se fundaba la primera caja de compensación en Isère, denominada caja de compensación de los mecánicos, caldereros y fundidores de Isère. El proyecto fue iniciado en 1916 por el empresario M. Romanet. Consciente de los problemas que suponía el problema de la libre concurrencia en la economía moderna y la incidencia en los costos de producción, fruto de la concesión de sobresueldos familiares por iniciativa privada e individual de los empresarios, ideó un sistema de reparto de las cargas entre las diversas explotaciones por medio de una asociación formada por las empresas que concediesen esa mejora. Siguieron a los franceses los belgas, que fundaron sus primeras Cajas en 1922. En el caso belga las Cajas tenían un base de tipo regional o profesional y fueron creadas por asociaciones patronales cuyo ideal era la compensación de cargas, ya ensayada en Francia, y el establecimiento de asociaciones sin fin lucrativo con modalidades de funcionamiento, prestaciones y cotizaciones muy diversas<sup>17</sup>. A pesar de ello fueron los belgas los que primero establecieron un sistema de subsidios obligatorios por medio de la Ley de 4 de agosto de 1930; anteriormente la Ley de 14 de abril de 1928 había impuesto a las empresas concesionarios de trabajos públicos o de suministros al Estado la obligación de integrarse en el régimen de Subsidios Familiares. Francia adoptó un sistema similar por medio de la Ley de 11 de marzo de 1932. Dentro de esta línea de obligatoriedad que se plasma primeramente en el caso belga y francés, hay que señalar la incidencia que tuvieron las Asambleas de la "Asociación Internacional para el Progreso"<sup>18</sup> de Viena, Ginebra y París, entre 1927 y 1929. De estas asambleas saldría, en cierta medida el empuje y la justificación para el establecimiento del seguro familiar. Pretende Aznar (o así lo refleja en sus obras) constituirse en generador intelectual del sistema de subsidios familiares obligatorios en el ámbito europeo. Afirma que en la Conferencia Internacional del Trabajo de 1925 en Ginebra fue donde se pusieron las bases intelectuales del subsidio familiar. Dicha conferencia creó una Sección de Delegados con el fin de discutir las normas generales de los seguros sociales. Y afirma Aznar que fue en ella donde él expuso la necesidad de añadir otro nuevo seguro que correspondiera a un riesgo diferente como era para el trabajador el no tener un salario suficiente para vivir, por tener hijos. No está de más reconocer, como ya se ha indicado, que el mencionado autor, junto a Luis Jordana fueron los artífices fundamentales del subsidio familiar en España.

La figura de Quetglas llegó a despertar el interés de don Ángel Herrera Oria, entonces Presidente de la Junta Central de Acción Católica Española, que en mayo de 1936 le llamó para dar a conocer, por medio de una serie de conferencias, los resultados de la caja compensadora de Palma de Mallorca. Tras una de estas conferencias ante la clase patronal, relata Quetglas como algunos patronos se acercaron a él para manifestarle la intención de fundar una Caja

semejante a la de Mallorca; solo la circunstancia del comienzo de la guerra evitó dicho proyecto. En ningún momento se ha perdido de vista la falta de objetividad, o mejor dicho el halo romántico e idílico con que Quetglas describe a los empresarios que con él trabajaban. Parecen estar todos imbuidos de un talante angelical que les lleva, guiados por el sacerdote mallorquín, a crear con sus aportaciones un edén terreno para las familias de sus empleados, sin considerar ni por un sólo momento los problemas de conflictividad laboral fundados en las carencias que originaban sus iniciativas caritativo-benéficas.

No se puede obviar el hecho de que los resultados fueron de unas dimensiones bastante modestas. Siguiendo a Bestard<sup>18</sup> los patronos otorgaban libremente a la caja tres pesetas al mes por cada trabajador a su cargo, entregando la Caja a los obreros de las empresas a ella adscrita un reparto de diez pesetas mensuales por cada hijo que tuvieran a su cargo, menor de 14 años, a partir del segundo. De 1935 a 1938, fecha del cese de sus actividades, llegaron a repartirse 449.420 pts., para un total de 620 empresas afiliadas y 1.774 cabezas de familia beneficiarios. No se puede obviar tampoco la influencia de la guerra en el desarrollo y funcionamiento de la caja de Mallorca. Una forma entre propagandista y seudobelicosa de luchar contra los problemas originados por la cuestión social llevó a las autoridades locales del Movimiento a potenciar la afiliación patronal a la caja del P. Quetglas. Y así, como este señala<sup>20</sup>, el Gobernador de Baleares publicó el 13 de febrero de 1937 en el Boletín Oficial de la provincia de Baleares una circular en la que recomendaba a los empresarios que se inscribieran en la caja de Quetglas con la advertencia de que sería considerada como una deslealtad y una falta de patriotismo al Movimiento Nacional la no adscripción a dicha labor social. A finales del año 1936 se estableció en Mallorca la Organización Nacional Sindicalista dirigida por Ladislao López Bassa. Desde ésta, el mencionado Bassa promovió la obligación moral del empresariado mallorquín de elevar en una pequeña cantidad (diez céntimos diarios) el sueldo a los empleados, reclamando para el Movimiento Nacional una preocupación por la cuestión social y en concreto por el cuidado de la familia por medio de un salario que tuviera como criterio para su cuantía el peso de la prole en el núcleo familiar.

A principios del año 1937 Quetglas publicó otro folleto divulgativo titulado "¿Qué es la Caja Compensadora?"<sup>21</sup>. Dicho folleto en la línea de su actividad divulgadora constituyó un importante instrumento propagandístico.

La labor de Quetglas tuvo como corolario su marcha a Salamanca en junio de 1937, en plena Guerra Civil, y su entrevista el 2 de julio del mismo año con Franco. Indudablemente la marcha de López Bassa a Salamanca y su nombramiento como Secretario General del Movimiento influyeron de forma directa en la formación de un núcleo de personalidades que proyectarían desde ámbitos institucionales variados un programa para afrontar la denominada cuestión

social. Si consideramos la breve referencia que Quetglas y Gaya hace de su conversación con Franco<sup>22</sup>, podemos observar la importancia, al menos en el ámbito de lo formal, que para el bando vencedor de la Guerra Civil tenía el afrontar la cuestión social con un programa de justicia social que presentase a la España vencedora como garante de las futuras conquistas sociales que el productor español demandaba ante un Estado que ni mucho menos llegaba al rango de "benefactor" y que había dejado al trabajador ante la imprevisible tendencia de la caridad cristiana, en el mejor de los casos, o en la miseria ante el infortunio, en el peor. De resultados de este encuentro salió su nombramiento como Delegado Nacional del Secretariado para la creación de cajas de subsidios familiares.

Comenzó su labor fundando la segunda caja compensadora española en Salamanca en julio de 1937, siendo sus estatutos semejantes a la del Palma de Mallorca e incluyendo variaciones tanto en la cuota patronal como en la escala de subsidios en función de una realidad demográfica diferenciada de esta tierra castellana. Los resultados después de cuatro meses de actividad daban cuenta del reparto 40.000 pts. distribuidas entre un total de 841 cabezas de familia.

A partir de noviembre de 1937 promovió la fundación de cajas similares en Vizcaya y Ávila. La primera quedó constituida el 19 de agosto de 1937 y la segunda a finales de noviembre del mismo año. En su talante y forma de operar persistía la exaltación de aquella parte del mundo empresarial iluminado por los principios caritativos y misericordiosos propios de hombres, que en su afán de mecenazgo católico, veían con entusiasmo la posibilidad de contribuir en cierta medida a la paz social por medio de su actitud dadivosa en esa parte de España que proponía, de mano de Franco y la Falange, una "Revolución".

La visión que de la cuestión social tenía Quetglas le hizo decantarse sensiblemente por un marco de protección social de tipo benéfico-caritativo y no por un seguro de tipo moderno basado en la ley de los grandes números y en la técnica actuarial.

La Ley de 18 de julio de 1938 vaciaba de sentido las cajas compensadoras de derecho privado al establecer un régimen obligatorio. A finales de diciembre de 1938 dejaron de funcionar las de Salamanca y Ávila, y en enero de 1939 la de Palma de Mallorca. Sin embargo, la labor propagandista de esta institución y su conocimiento basado en la experiencia de sus cajas pioneras hicieron de Bartolomé Quetglas un hombre con un peso apreciable en el desarrollo del Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares. Como relata su hagiógrafo Bestard<sup>23</sup>, en agosto de 1938, don Severino Aznar Embid, Director General de Previsión, llama al P. Quetglas a Santander para varias consultas con vistas al proyecto de reglamento para la aplicación de la Ley de 18 de julio. Sus entrevistas con hombres de destacada presencia en la política de previsión del régimen franquista como Luis Jordana de Pozas, León Leal Ramos o Inocencio

Jiménez da luz a la relevancia que su personalidad tuvo en el nacimiento del Subsidio Familiar Obligatorio. En octubre de 1938 volvió a ser consultado sobre el proyecto definitivo de reglamento de Subsidios Familiares, tras lo cual se le ofreció la dirección de la Caja Nacional de Subsidios Familiares, cargo que rechazó tras lo cual su labor, siendo de indudable importancia, queda fuera del período de su biografía que da luz a la génesis del subsidio familiar en España.

## 6.2. Naturaleza del subsidio familiar.

Polémica fundamental en la cuestión del subsidio familiar en los primeros años de su establecimiento fue la de si éste debería basarse en un sistema de cajas de compensación obligatorias, o si por el contrario debía de otorgársele naturaleza de seguro obligatorio controlado por alguna institución dependiente del Estado.

Se planteaba, en definitiva, el problema de su naturaleza. Se esbozaba la cuestión de si debía considerarse una retribución o un sistema de previsión social. Estas son las dos grandes posiciones que en torno a la cuestión planteada se debatían.

Para algunos el subsidio familiar era un sustitutivo del salario justo y tendía a conseguir una retribución global que atendía a las exigencias de la vida del trabajador y de su familia conjugando, con graves dificultades teóricas, el principio de "a igual trabajo igual remuneración" con el principio ético del salario familiar.

Según los defensores del subsidio como parte del aparato de previsión, aquél se concebía como la materialización del salario justo (en el mejor de los casos), pero a su vez dislocaban el significado estricto del término previsión, que inducía a considerar incluido en su campo de acción sólo a los eventos futuros e inciertos, para incluir dentro de aquél al subsidio familiar.

La solución final vino dado por el establecimiento del subsidio familiar en régimen de seguro obligatorio. No hay que olvidar que las cajas de compensación no eran otra cosa que mutualidades para el reparto de las cargas originadas por un riesgo comunitariamente compartido y que este riesgo, el de la alteración de la economía familiar fruto del aumento del número de los miembros de la familia, podía ser tratado estadísticamente, aplicándose la ley de los grandes números, base del carácter técnico del seguro. Es por tanto, en cuanto seguro, técnicamente posible, puesto que respeta la ley de los grandes números, es decir, se aplica a grandes masas humanas que suponen un sólido soporte de sustentación; es valorable, lo cual supone que se puede saber cuántos hijos tienen las familias susceptibles de recibir dicha prestación; y es económicamente posible en la medida, afirma Severino Aznar, en que no cubre todo el valor del riesgo.



Plantea dudas sobre su carácter técnico el hecho de que el riesgo debe ser involuntario e incierto en la medida en que en caso contrario el asegurado tendría posibilidad de desapuntalar los cálculos actuariales e imposibilitar el hecho de que el riesgo fuera satisfactoriamente cubierto. Contra esto se puede afirmar que el hecho demográfico tiene rasgos, aunque no absolutos, de incertidumbre. Es decir no hay voluntariedad absoluta en cuanto a la determinación del número de hijos a tener o en torno al tiempo que éstos vivirán, lo cual, estableciendo un paralelismo forzado entre infortunio y riesgo posibilita el seguro en torno a esta cuestión. En esto se basan algunos autores para desvincular absolutamente de motivos demográficos la política en torno a la familia. Los subsidios familiares<sup>24</sup> serían, en este caso, más que medidas demográficas, realizaciones de justicia social tendentes a reforzar la vitalidad o la función de la familia. Ese sería el camino que conduciría al nacimiento del subsidio familiar inspirado por el ministerio de Organización y Acción Sindical de González Bueno. Sobre esta cuestión afirma el propio Girón de Velasco<sup>25</sup>:

"El Subsidio Familiar, por su carácter obligatorio, por corresponder su gestión a una entidad delegada del Estado, que es la Caja Nacional de Subsidios Familiares, y por el sistema de constitución de sus fondos participa de los caracteres intrínsecos de un seguro social"<sup>26</sup>.

Girón de Velasco aceptó de hecho el eufemismo que suponía denominar subsidio a la ley del 18 de julio, a pesar de que no era más que "un seguro social puro". Porque si un seguro de tipo tradicional cubre con su seguridad las fases anormales de la existencia del asegurado, el objeto del seguro familiar cubre con su seguridad la inestabilidad económica de la familia del asegurado ante un aumento de la prole y los gastos que ello conlleva: este es el principio formal que inspiraba la política en torno a la familia en lo que se refiere al subsidio familiar.

En esta misma línea, José Pérez afirma que la ley española de 18 de julio de 1938 "alcanza ya la perfección técnica de un verdadero Seguro Social"<sup>27</sup>. Este era "de aplicación necesariamente laboral"<sup>28</sup> y por esta circunstancia dejaba fuera del sistema a muchas familias tal como ocurría con los trabajadores particulares, pequeños vendedores, artesanos, etc. Otro de los problemas añadidos era el hecho de que al estar íntimamente unido al mundo del trabajo, la prestación es intermitente, porque se interrumpe cuando el trabajador no cotiza por paro u otras causas.

Así lo considera también Severino Aznar<sup>29</sup>. Para uno de los artífices del subsidio familiar en España, éste tiene el carácter de un seguro y por tanto pierde todas las reminiscencias asistencialistas que pudiera tener. Era un seguro, decía el autor<sup>30</sup>, porque "tener hijos es una bendición; pero tenerlos, y no poder criarlos, es un tormento, es un grave riesgo"; es por ello

que lo asegura con tres garantías técnicas del seguro: la obligatoriedad, la coacción y la fiscalización del Estado. Era un seguro para los obreros en la medida que se aseguraban contra el riesgo de no tener recursos con que alimentar a los hijos cuando su número aumentase; y era un seguro para los patronos en cuanto que cubría el riesgo de otorgar un sobresueldo por motivos familiares muy superior al que otorgarían sus competidores en el mercado. A su vez, la presencia del Estado otorgaba al sistema un carácter obligatorio jurídicamente establecido por ley, y técnicamente basado en la norma actuarial que permitía una rigurosa relación entre las prestaciones y las primas. En este marco Aznar defendía la idea de que, como seguro que era, adaptara sus prestaciones a los riesgos, es decir, a la necesidad, y que dado que no era lo mismo mantener a un descendiente de dos años de edad que de diez, la escala de prestaciones debería adaptarse a las necesidades de cada momento aumentando el subsidio. Con esta fórmula el subsidio familiar adquiriría, en parte al menos, el carácter de pensión<sup>31</sup> familiar. Buscaba el autor una forma realizable y viable que no se plasmaría en la ley de 18 de julio del 1938.

De este planteamiento, que consistía en defender formalmente a la familia por medio de un seguro se deducían toda una serie de ventajas. Por un lado desaparecía la carga únicamente llevada por el empresariado, y junto a ello se esfumaba su generosidad de tintes asistencialistas y filantrópicos que no era capaz de establecer el marco de seguridad que si establecía la forma del seguro; el subsidio era un derecho que no podía tener como fundamento un sentimiento o un capricho<sup>32</sup>. Es por ello que en la mente de sus creadores el subsidio familiar era visto como lo que se denominaba Obra Social<sup>33</sup> en contraposición a la asistencia social pero decantada a la idea de reforma social puesta en marcha en 1903 con el Instituto de Reformas Sociales. En aquella se socorría al necesitado que lo imploraba sin que este hubiese contribuido a la creación de los fondos destinados a dicho fin, por lo cual no se tenía en cuenta su trabajo; el subsidio, se decía, es un derecho, no una obra de caridad, a la que el trabajador también contribuía con su cotización. Este mismo carácter asegurador imponía la desaparición de la inestabilidad en la percepción, bien por crisis empresarial o por crisis económica global y con ello finalizaba la inseguridad en la percepción de los obreros dado que desaparecía la libertad del patrono para conceder dicho subsidio. La cotización obrera suponía un adelanto en la justicia, en la medida en que el trabajador era el más interesado en establecer vías que, aunque mínimamente, acentuaran su nivel de bienestar. Su cotización le confería plenos derechos (si lograba estar dentro de los criterios estipulados por la ley), en ruptura con el ideal altruista y asistencialistas de los magnánimos empresarios españoles, haciendo de él no sólo un mero beneficiario de la caridad patronal sino un asegurado con plenos derechos a las prestaciones establecidas. En torno a esta cuestión se establecía también la necesidad de la cotización por parte de los no casados y de los que no tuvieran descendencia dado que en cualquiera de esos casos serían beneficiarios en potencia. Partiendo de este principio de solidaridad, Aznar, en la línea de lo

argumentado por Girón de Velasco, afirma que los obreros en estas circunstancias forman una "gran mutualidad" y así en la mutualidad del seguro familiar:

"Ellos prestarían un pequeño servicio a los casados con hijos, pero en esa otra Mutualidad más amplia que abarca a toda la nación, son los casados con hijos los que se lo prestan. Gracias a las familias con hijos, hay abundantes productores, consumidores, soldados y contribuyentes. Si quedaran ellos solos, los sin hijos, ¿qué harían?"<sup>34</sup>

El Estado se unía a la protección formal de la familia planteandose el problema como una cuestión de salud pública y como un derecho ampliamente positivo para el devenir de la nación pero que, en cuanto a sus dimensiones cuantitativas, como se podrá observar, no pasaba de tener un mero carácter simbólico no ausente en la mente de los progenitores del subsidio familiar. Así por ejemplo, Aznar afirma: "Para compensar lo que pierde un obrero por sostener un promedio de hijo y medio, habría que darle subsidio o pensión familiar igual al 200 por 100, y así sucesivamente. Eso no es posible. Pretender por tanto, que los obreros casados tengan durante el período de carga creciente y sólo por el Seguro familiar el mismo nivel de vida que los célibes de igual salario (y lo pretenden inteligencias de primer orden), es soñar"<sup>35</sup>. La conclusión, como ya se ha dicho, es que no era justo que el seguro lo hiciera todo, sobre todo cuanto la familia tenía en los hijos compensaciones no mensurables, como la satisfacción de los instintos de paternidad y maternidad. En definitiva la paternidad y la maternidad, en boca de uno de los padres del subsidio familiar en España, era un mecanismo de compensación no ponderable pero sustitutivo de las carencias que un seguro familiar, cuantitativamente simbólico, suponía para los padres de familia, que en función de dichos principios y de la materialización de los mismos verían compensados muy levemente por el subsidio los desajustes económicos que el aumento de la descendencia supusiera. Y es que al no indemnizar absolutamente el riesgo, el subsidio familiar no eximía al padre de familia de sus responsabilidades y por tanto tampoco de su autoridad vía dependencia. Evidentemente en la implantación del subsidio familiar en España se consideraba implícitamente la necesidad de mantener y potenciar un modelo patriarcal y jerarquizado en la familia por medio del marco normativo, y al menos en la medida en que éste lo posibilitara por vía directa o indirecta.

Más matizada es la opinión de Rebollo González<sup>36</sup> sobre la naturaleza del subsidio familiar. Se plantea el autor si el subsidio es previsión salario y concluye, tras un repaso de lo que denomina la escuela italiana y española, que no es un salario ya que de serlo, estaría sujeto al régimen del contrato de trabajo, por tanto, a la voluntad de las partes y sería susceptible de ser estipulado o no. Esta apreciación general, pese a coincidir en lo fundamental con la concepción que fundamenta el nacimiento del subsidio familiar en España no parte de la premisa de que en este

para, por las características peculiares de su ordenamiento laboral, la libre voluntad de las partes no determina los entresijos de la relación laboral por lo menos en esta primera etapa del franquismo en la que las reglamentaciones nacionales vertebran el mundo del trabajo como manifestación de la intromisión formal del Estado y su política en la actividad económica. Atendiendo al criterio de este autor, el subsidio familiar pertenece al ámbito de la previsión y como tal es una asignación otorgada al padre de familia como coeficiente mínimo de subsistencia cuyo fin es la estabilidad económica de la familia y por tanto de la sociedad. Ello manifiesta una ligazón evidente entre el ideal implícito o explícito del trabajo en las manifestaciones formales del franquismo y la idea de hermandad entre trabajadores y empresarios, y por tanto refleja el ideal armonicista hacia el que se pretendía caminar por medio de la normativa laboral.

Evidentemente, como ya se ha señalado, y así se expone en el análisis cuantitativo que en este estudio se hace del subsidio familiar en España, éste, por su carácter puramente simbólico y por su escaso peso efectivo en la elevación del nivel de vida de las familias españolas acogidas a él, no logró por sí mismo el objetivo que Rebollo indica. Asentado el carácter no salarial de esta prestación Rebollo señala, en torno a la polémica de si es asistencia o seguro, que es “una institución dual que tiene principalmente un objetivo asistencial (pero que para su realización recoge las técnicas del seguro)”<sup>37</sup>. Acepta el sesgo que pudiera tener de seguro en la medida en que cubre el riesgo de la miseria ante el aumento inesperado de hijos por encima de los límites que la propia capacidad económica permite; a su vez está conforme con este sesgo, por el carácter obligatorio del subsidio y por el principio técnico que lo inspira basado en la mutualidad de riesgos, en función de lo cual se reparte el coste de la indemnización entre todos los asegurados. El criterio de Rebollo se basa en el hecho de que la cotización se nutre de la masa general de la población. No es así en el caso español, puesto que no existe un sistema de base nacional sino laboral, siendo por tanto los trabajadores cotizantes, a los que la ley posibilita este carácter y el de potencial receptor del subsidio, los que acarrean con las cargas de la financiación del sistema junto al empresariado y al Estado.

En la mente de Girón de Velasco el subsidio familiar “es orgánicamente una gran mutualidad”<sup>38</sup> lo cual habría sido, en palabras del autor, la base de la consolidación progresiva de un sistema de beneficios. Con el talante lírico que caracteriza los discursos del antiguo ministro este logro era visto como un derecho social del mundo del trabajo y en concreto como una victoria española, o más apropiadamente, de su ministerio, del “Caudillo” y de su persona. Destaca el ministro falangista algunos de los inconvenientes de la imposición directa como método de financiación del sistema y los peligros que dicha opción hubiera suscitado para la economía española y para el mundo del trabajo, en función de los perjuicios que hubiera originado en un competencia mercantil montada sobre la vida de las familias españolas. La

conclusión vendría a ser la consecución del salario familiar por vía indirecta. En esa línea se encuentra la afirmación de Girón en torno a la cuestión de que las "estadísticas arrojan una extraordinaria elevación del coste de la vida"<sup>39</sup>. Según Girón, se habrían elevado los jornales entre un 30 a un 85%, siempre teniendo como referente el carácter familiar del mismo, lo cual no impide percibir el hecho de que el nivel de vida de la familia española no se había incrementado en la misma proporción, como un análisis cuantitativo de dicha cuestión demuestra. No es la "mala fortuna" la que impide la elevación del nivel de bienestar familiar en la misma proporción en que lo hacen nominalmente los salarios, sino la inflación de los precios más barata que transforma en términos negativos el poder adquisitivo real de las familias trabajadoras. Frente a ello Girón afirma en otro de sus discursos que "si tomamos las industrias reguladas, que, como hemos visto ya, comprenden amplios sectores, y partiendo de la remuneración de 1936, le agregamos por una parte aumentos del jornal base, salario dominical, pluses de carestía de vida, primas y pluses de asistencia, pluses de cargas familiares y subsidio familiar, en su caso, y descontamos por otra el importe de las cuotas de Seguros Sociales y Sindical, obtendremos para familias de dos a cuatro hijos un nivel de salarios normales muy incrementados"<sup>40</sup>. La puesta en juego del factor "elevación de precios" establece, como el propio Girón reconoce, un nivel de los salarios en términos reales que no era el de 1936. La realidad era que el problema del alza de los costes de los precios para los obreros no se había resuelto; y en esta cuestión el propio ministro, cuyas manifestaciones solemnes dan luz sobre la percepción del régimen en torno a esta problemática, no se engañaba.

Se concluye en función de lo expuesto anteriormente que se niega al subsidio familiar el carácter de retribución; posee, aunque sea tangencialmente, un tinte asistencial en la medida en que, no según todos los autores, tiene una finalidad demográfica implícita en las manifestaciones solemnes en torno a los años más próximos a la Segunda Guerra Mundial en los que el talante pro-eje era más patente. Por otro lado, el carácter asegurador, dignificante del trabajador y de su familia, en la medida en que lo alejaba de las medidas asistenciales, obedece a una interpretación particular del riesgo asegurador. Este carácter emana de la consideración de resarcimiento de un daño que se transforma en satisfacción de una necesidad del núcleo familiar. En este caso se produce una transferencia de la idea de previsión del seguro al plano de la distribución de rentas provenientes del mundo exclusivo del trabajo y no de toda la sociedad, con criterio excluyente para una elevado número de familias.

Por tanto, y como conclusión, podemos afirmar que la denominación de subsidio responde a una finalidad de tipo propagandístico y que en rigor dicho término no es aplicable a la Ley de Subsidios Familiares de 18 de julio de 1938 en la medida en que aquella no tiene un marco de protección social universal sino que su base es de tipo laboral dejando a un gran número de familias fuera de su protección; y por otro lado, la carga financiera no se obtenía por medio de

figuras impositivas que hicieran diluir sobre toda la sociedad la responsabilidad familiar de las cargas del cabeza de familia. Por otra parte, el carácter de seguro que tiene el subsidio familiar impide que su prestación sea permanente por su íntima relación con la situación laboral-familiar.

### 6.3. Concepto y planteamiento del subsidio familiar.

Previamente al comienzo del proceso de institucionalización del régimen franquista tras la Segunda Guerra Mundial por medio del Fuero de los Españoles, la primera manifestación pseudoconstitucional y solemne del régimen fue el Fuero del Trabajo. En el párrafo 2º de la declaración III se expone la necesidad de crear el subsidio familiar. A esta manifestación responde la creación del Régimen Obligatorio del Subsidio Familiar el 18 de julio de 1938.

Dentro del conjunto de medidas que el Estado español intentó llevar a cabo entre 1938 y 1957, las medidas de tinte socio-laboral ligadas al subsidio familiar constituyen el ejemplo más contundente del patrón abstracto que se seguía en torno a la cuestión familiar con el objetivo de lograr, por vía normativa y real, el más adecuado desenvolvimiento de la familia, desde los principios de un modelo de convivencia social que calificaba formalmente a la unidad familiar como célula básica de la sociedad española.

En este contexto, desde los ministerios Girón se propone, en línea con el ideal falangista, la consecución de una Revolución Nacional-Sindicalista española, que en lo formal partía del principio del reconocimiento y protección de la familia como fundamento de la sociedad y como institución dotada de derechos inalienables, continuando la política de sus predecesores en el cargo, González Bueno y Benjumea Burín. En torno a esta idea se entienden las manifestaciones formales que desde el ministerio de Trabajo sitúan al subsidio familiar como la panacea de estos ideales.

El término subsidio procede de latín *subsidium*-ii y hace referencia al socorro, auxilio, refuerzo o recurso extraordinario al que se recurre en función de una contingencia. Por tanto, en función de este criterio el subsidio familiar sería un socorro extraordinario para la familia. Partiendo del hecho de que cada nuevo miembro de la prole supone un descenso en el nivel de ingresos *per capita* en el seno de la familia, y que aunque este descenso afecta a toda la familia lo hace con más intensidad en los miembros de menor edad, este auxilio tendería a ayudar a cubrir los gastos que representara para un hogar la manutención de los hijos que suelen ser en el período a que nos referimos los miembros más numerosos de la familia, los más vulnerables y aquellos en los que los métodos preventivos tienen mayor eficacia.

El subsidio familiar surge, en el caso español, como un medio para coseguir la fortaleza familiar y la garantía de una realidad demográfica próspera, a su vez expresión de un nivel de vida que fuera manifestación de un bienestar social profundo. No se puede apartar la política española de las grandes tendencias que en torno a esta cuestión están en el candelero en otros países en este momento de la historia europea. El plan Beveridge<sup>41</sup>, por ejemplo, sustentó su idea de la seguridad social en tres supuestos, uno de los cuales era un sistema general obligatorio de subsidios familiares<sup>42</sup> partiendo de la base de que los ingresos con que contaban los trabajadores eran insuficientes, entre otros motivos, por las cargas familiares. Así se afirma en dicho informe que "la abolición de la indigencia requiere, en segundo lugar, un ajuste de las rentas, en los periodos de obtención de ingresos, tanto como en los de interrupción de los mismos, con relación a las necesidades familiares"<sup>43</sup>. Junto a esta reflexión surgen otras consideraciones relacionadas con el problema de la población y la infancia; la raza británica no podría sobrevivir sino se contribuyera al incremento de la natalidad y a la mejora de las condiciones de vida y de desarrollo de los niños. La concepción del plan Beveridge se resume según De Tapia<sup>44</sup> de la siguiente manera:

"...en todo sistema de Subsidios familiares, deberá distribuirse el coste del mantenimiento de los hijos entre los padres y la comunidad. Al buscar la solución para ello, cree que lo más conveniente consiste en no conceder el subsidio a un hijo de cada familia y fijar uno más completo y elevado para cada uno de los demás. De este modo se reduce considerablemente el coste de los subsidios para la comunidad, sin perjuicio para los padres, y se aumenta la proporción del coste total soportado por la comunidad según el volumen del aumento de la familia".

La imperiosa necesidad de realizar una política de tintes natalistas lleva al establecimiento de una política protectora de la prole numerosa procurando que "este honor no produzca desequilibrio en el hogar"<sup>45</sup>, según Girón.

Severino Aznar<sup>46</sup>, afirma por el contrario, que el subsidio familiar no tiene como motivo la incentivación para el nacimiento de más hijos; no se potencia el nacimiento de más futuros soldados, contribuyentes o funcionarios sino que se establece un marco de seguridad para que, nacidos los hijos, los padres pueden criarlos. Por supuesto, obedeciendo a la consigna de proteger y elevar a la familia; pero en su tradición cristiana que es la que se defiende como vertebradora de las esencias más puras de la patria hispánica. Por tanto, la inspiración fundamental se rige por "el principio de que, siendo necesario elevar y fortalecer la familia en su tradición cristiana y en su papel de cimiento de la nación, es necesario igualmente otorgar al trabajador, sin perjuicio del salario justo y remunerador de su esfuerzo, la cantidad de bienes indispensables para que no se rompa el equilibrio económico del hogar y llegue la miseria

obligando a la madre a buscar en la fábrica o en el taller un salario que cubra la insuficiencia del obtenido por el cabeza de familia<sup>47</sup>. Es este el tipo de familia, base de la sociedad y cimiento del modelo de nación, que se propone crear el régimen salido de la Guerra Civil. No subyace la búsqueda de una sustitución total de las obligaciones del padre de familia con respecto a los miembros familiares dependientes: ni siquiera atendiendo a un criterio cuantitativo una fórmula que compense en una parte significativa las cargas, dado que dicho planteamiento sería una sustitución ilegítima de las responsabilidades que como padre le correspondería al trabajador, además de una intromisión no fundada del Estado. Será ésta la justificación que desde las altas instancias del ministerio de Trabajo, sobre todo en sus manifestaciones formales, más se utilice para obviar el carácter cuantitativamente simbólico de dicha prestación. Esta manifestación formal puede resumir el contenido más básico del objetivo político que se desprende de las manifestaciones en torno a esta cuestión.

Enmarcado en una concepción social armonicista y lírica de la realidad social, más próximo al ideal de la feliz Arcadia que a la situación real de la España que sale de la década de los cuarenta, este subsidio familiar es visto, al igual que otros seguros, como una realidad social en la que los españoles se hermanan por medio de un sistema que eleva sus cualidades morales y enaltece a la patria en un clima de bienestar y sosiego y en el que aplicando los criterios técnicos del seguro es posible resucitar con más eficacia el espíritu gremial de épocas ya lejanas en el tiempo pero vistas con añoranza y que, en cierta manera, actúan como modelos orientativos del prototipo de sociedad hacia el que se pretendía caminar. Señala Leal Ramos, no exento de cierto afán de loa que “representa por eso el régimen de subsidios familiares una completa hermandad entre todos los hombres y pueblos de España, y como los subsidios no son proporcionales a los sueldos o salarios, sino iguales para todos los subsidiados, resulta que los de salarios altos ayudan a los de salarios bajos, los solteros a los casados, los que no tengan hijos a los que los tengan y los que tengan pocos, a los que tengan muchos...”<sup>48</sup>.

#### **6.4. Definición y desarrollo del subsidio familiar.**

El subsidio familiar se define como una prestación que viene a complementar el salario normal del trabajador, fijado de una forma proporcional al número de familiares que de él dependen. Rebollo González<sup>49</sup> lo define como un “auxilio que periódicamente concede el Estado al cabeza de familia, en atención a sus cargas familiares y en proporción directa al salario percibido y el número de los componentes del hogar”. Para este autor el subsidio familiar no es compatible con el término de seguro, en la medida en que la percepción del seguro se hace de forma intermitente.



Si bien su fin directamente no era exclusivamente la promoción de la natalidad o la nupcialidad, su consecuencia sí puede producir los efectos señalados. Son necesarios los premios a la natalidad y la nupcialidad cuanto más baja es la vitalidad demográfica y son más necesarios los subsidios cuanto más alta es la natalidad y la nupcialidad. La mayoría de los autores, como José G. Pinedo<sup>50</sup>, coinciden en señalar que los subsidios familiares responden a una doble finalidad en la medida en que son factores de una política demográfica y elementos de justicia social. Afirma Pinedo<sup>51</sup> que "la disminución de la natalidad, por una parte, y el cambio de la estructura demográfica de las poblaciones como consecuencia del aumento de la duración media de la vida, debido a los progresos higiénicos, por otra, hacen prever una pesada carga sobre la futura generación, que no es lo suficientemente numerosa para soportar el peso de los viejos. De aquí que los Estados se preocupen en restablecer el equilibrio demográfico, mejorando las condiciones sociales y garantizando la seguridad de las familias, con el fin de fomentar la tendencia vital hacia una abundante prole".

Este carácter compensador del salario impone su no computación a efectos de servir de módulo para otros seguros o a efectos fiscales. Supone la concesión de una cantidad periódicamente además de su remuneración ordinaria y en atención a sus cargas familiares. La concesión a un trabajador suponía, desde la visión del mundo del trabajo emanada del régimen franquista, un mecanismo que glorificaba de la personalidad del trabajador en la medida en que, por concedérsele a él y no a un necesitado, dicha prestación no se confundía con los socorros o pensiones de tipo benéfico-caritativo o con la asistencia pública. Emanaba de la idea de que, de igual manera que el salario tenía su motivo en la prestación de un servicio o trabajo mediante el establecimiento de una relación contractual, no menos cierto era, según las declaraciones formales de las instituciones laborales del franquismo, que también debía existir una relación entre la cuantía del salario y el número de miembros de la familia dependientes del trabajador. Ello suponía que, en cierta medida, se hacía abstracción del trabajo que se realizase para considerar otra variable no puramente económica, y que por ello la remuneración total adquiría el carácter de instrumento para la adquisición de valores de solidaridad y apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad nacional susceptibles de recibir dicha prestación. De igual manera, y sin necesidad de entrar en valoraciones cuantitativas, es fácil deducir de estos principios formales una realidad laboral precaria en cuanto a sus prestaciones y necesitada de un complemento de tipo fijo y proporcional para el mantenimiento de un nivel de vida lo más alejado posible de la miseria.

En el ámbito de lo formal se pretendía sacar al trabajador español de un mundo que se calificaba como materialista y en el que era considerado como un elemento más en el proceso de producción. Siguiendo esa línea argumentativa el precio de su trabajo vendría determinado por la conjunción del sacrosanto principio de la oferta y la demanda. Dichos principios emanados

del liberalismo decimonónico eran rechazados desde las manifestaciones solemnes del mundo laboral del franquismo. El trabajo era visto como un elemento de elevación material pero también moral del hombre y éste, como trabajador, no era considerado como un ente individual con capacidad para establecer de forma libre y contractual una relación laboral con un empresario. Por el contrario, la concepción del trabajador toma un carácter militarizante y ordenancista en el que aquel es el jefe de la célula social básica: la familia. En palabras de Giron de Velasco:

“El tercer punto que queremos tratar es la consideración del trabajador como jefe de una célula social, y es la defensa de esa célula, de esa familia, lo que nos importa. Y así como en la protección social, en sentido amplio, de la familia, propugnamos un sistema ordenado y completo, apto para atender todas las posibles dificultades durante las etapas de la vida familiar, que ya es realidad en la Patria mediante el Régimen Nacional de Subsidios Familiares, aspiramos a idéntica meta en la protección sanitaria”.

Constituye una falacia propagandista denominar régimen nacional a un sistema de base laboral que deja a gran parte de las familias españolas fuera del sistema; pero en cuanto a las manifestaciones formales, la sistemática alusión a un modelo de sociedad en donde la familia sea el sostén básico de la misma como célula fundacional deja entrever una concepción organicista de la sociedad que no considera al individuo-trabajador como ente con capacidad de negociación individual en el marco laboral, e inserto a su vez en un organigrama social en el que se enmarca al frente de un “grupo de combate” al padre de futuros trabajadores que habrán de coimar las necesidades materiales y espirituales de la patria con su trabajo.

Los principios en que se inspira el subsidio familiar como modalidad de ayuda familiar vienen definidos por el establecimiento de una escala en función del número de hijos o asimilados del trabajador (en los cuales puede incluirse a algunos ascendientes como nietos o hermanos del “productor” sin derecho a subsidios por otro motivo), por la igual cuantía de las prestaciones y por un aumento progresivo de la prestación en función del aumento de hijos o hijas dependientes del trabajador.

Existen, en principio, cuatro tipos de enfoques con respecto a la concesión de las prestaciones: prestaciones para todas las familias de la nación, prestaciones para el cabeza de familia que tuviese la condición de trabajador por cuenta ajena o propia, concesión de beneficios al trabajador por cuenta ajena y protección a grupos sociales de interés para el estado como las familias económicamente débiles.

El Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares establecido el 18 de julio de 1938 optó por el tercer sistema: concesión de prestaciones teniendo como criterio el hecho de que el trabajador realizase su actividad por cuenta ajena, si bien también disfrutaban del subsidio los miembros de alta dirección de las empresas y los trabajadores del campo autónomos. Se afirma en las II Jornadas Técnicas Sociales que “el subsidio familiar es un régimen general con muy amplia base de cobertura, que prácticamente comprende a todos los que trabajan por cuenta ajena (aun los no sometidos al régimen estricto de contrato de trabajo) cualesquiera que sean sus remuneraciones”<sup>53</sup>. La caracterización como general no obedece al campo de aplicación del régimen, restringido por su alcance laboral y no nacional; a lo cual hay que añadir que las manifestaciones formales de las instituciones franquistas, en torno a la institucionalización de la ayuda familiar y su amplitud, y siguiendo la valoración que de ella se hace en las II Jornadas Técnicas Sociales, son puramente imaginarias. En relación con el aumento de las escalas en 1955 afirman los ponentes de las II Jornadas<sup>54</sup> que las prestaciones que por el mismo se conceden, aun aumentadas por el Decreto de 2 de septiembre de 1955, son puramente simbólicas”.

A pesar de ello, era una constante la consideración del régimen de subsidios familiares, que en puridad era de base laboral, como un sistema de base nacional. Así León Leal Ramos, exponiendo la génesis del subsidio familiar en época del ministerio de Organización y Acción Sindical de González Bueno, afirma que se buscaba “una organización de un Régimen Nacional, y no meramente profesional o laboral, y de carácter técnico...”<sup>55</sup>. Y así se confunde la realidad de un régimen nacional con uno de tipo laboral más restringido: “Es el régimen español de Subsidios Familiares un régimen nacional, obligatorio y técnico”<sup>56</sup>. Ello conlleva un afán, con más o menos tintes apologistas, por dar al sistema una dimensión formal que no se acredita con la puesta en práctica de sus principios; en esta línea apologista el antiguo funcionario del ministerio de Trabajo realizaba la siguiente reflexión sobre el subsidio familiar:

“...inspirada (*la ley de 18 de julio de 1938*) en un amplio concepto de la familia y en un afán muy generoso de tutela hasta donde los cálculos hechos permitiesen y la prudencia aconsejase, dejando desde el primer momento abierta, muy previsoramente, la puerta para ulteriores desenvolvimientos y avances, para ampliación de las prestaciones iniciales, sin alterar los postulados básicos del sistema que recogidos en la citada ley, se han ido convirtiendo en realidad en el correr de los años...”<sup>57</sup>.

En el marco en que se desarrolla su institucionalización el subsidio familiar se define como justo y conveniente<sup>58</sup>. Se asienta sobre la doctrina del salario justo y en la necesidad de proteger y potenciar a la familia española. Sin embargo, su referencia al salario no implica que el subsidio sea proporcional al salario del trabajador, el elemento de referencia son los

descendientes del asegurado y por tanto no es el nivel de vida del padre el que determina la cuantía del subsidio sino el número de hijos. No tiene, por tanto, la consideración de salario<sup>69</sup>. La doctrina jurídica en la que se asienta no considera el subsidio familiar como parte del salario y así se explicita en sentencia del Tribunal Supremo<sup>69</sup> de 25 de junio de 1952. Por tanto, el referente determinante viene a ser el derecho de los hijos o concretamente el derecho de los padres a unos recursos que les permitiesen unos niveles dignos de vida. Un estudio cuantitativo del Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares demuestra que en la práctica no suponía en absoluto la salvaguardia de dichos principios.

Aunque en otro capítulo de este estudio se da cuenta de la doctrina del salario justo resulta necesario hacer algún tipo de valoración sobre la cuestión. Si se parte de la idea de que el establecimiento del subsidio familiar se basa en el principio del salario justo, con independencia de otras consideraciones de utilidad como el fortalecimiento de la familia, base de la nación, se deduce que el subsidio sólo sería legítimo para los productores que trabajasen por un sueldo y no para autónomos, clases pasivas o rentistas. Si por el contrario, motivaciones de índole moral o meramente prácticas inducen a la creación de dicho subsidio y por tanto deducimos de la conveniencia social el establecimiento del régimen de prestaciones familiares, los beneficios deberían extenderse a todo el orbe de las familias españolas, con lo que la carga no debería recaer únicamente sobre patronos y asalariados sino sobre el colectivo nacional y podría ser un régimen obligatorio, como es el caso, o voluntario en función del grado de necesidad.

A posteriori, el subsidio familiar era visto como un instrumento de redistribución de la renta nacional. Desde la perspectiva del ministerio de Trabajo de José Antonio Girón de Velasco, dicho planteamiento se fundamentaba en la idea de que la familia española no sólo contribuía con la educación y procreación de sus hijos a sostener la vida laboral de la España franquista sino que también era el sostén básico de la vida y desarrollo de la comunidad nacional en la medida en que preparaba y entregaba a sus descendientes a todo tipo de servicios y actividades que contribuían a la elevación material y moral de la nación. Ello en parte, resulta inexacto o al menos incoherente, en la medida en que el sistema de subsidios familiares no poseía el carácter amplio y universal de un sistema nacional y por tanto, en la medida en que su fundamento era el laboral, dejando a gran parte de los cabezas de familia y a sus descendientes y ascendientes fuera del sistema. La sustentación de éste y otros seguros en el Tesoro Nacional, como asidero de un subsidio de base nacional resultaba, sobre todo en los primeros momentos del desarrollo del sistema, una utopía irrealizable en la situación de la España salida de la Guerra Civil. La aplicación de esta política familiar nacional en la década de los 50 obedece, como se ha señalado ya tácitamente, a la ausencia de voluntad política en la medida en que suponía la superación del principio de ayuda por el de exoneración de cargas y deberes del padre de

familia. No por ello deja de existir la falacia, en las manifestaciones más solemnes de hombres próximos al ministerio de Trabajo, en torno a la idea de que este sistema constituía un paraguas para todas las familias españolas. Así por ejemplo, señalaba Gabriel Elorriaga<sup>61</sup> que una "forma de ayuda a las cargas económicas de la familia la realiza directamente el Estado español estableciendo percepciones en favor de aquellos cabezas de familia que realicen cualquier actividad laboral".

Merece especial consideración la motivación que señala Jordana de Pozas<sup>62</sup> para el establecimiento de la mencionada institución en la medida en que, el autor, junto a Severino Aznar Embid, puede considerarse como el padre del subsidio familiar con carácter obligatorio. Señala Jordana que la institución del subsidio familiar descansa en el principio del salario justo imbuido por el pensamiento Vaticano sobre la cuestión social. El fundamento de utilidad influye de forma secundaria dado que según el autor, una vez subsanadas las causas de origen moral, religiosas y políticas que produjeron la crisis familiar en España, se resolvería saludablemente la cuestión del movimiento demográfico de la población española. Ni que decir tiene que para Jordana, en línea con las argumentaciones generalizadas de la época, la crisis de la familia española era fruto de los virus foráneos que el liberalismo disgregador de la conciencia humana y el marxismo maquillado de republicanismo trajeron a una tierra española incapaz de asimilar su naturaleza bacteriológica.

Como ya se ha señalado la doctrina del salario justo surge de una concepción católica inspirada en las encíclicas de León XIII y Pío XI fundamentalmente. En función de los criterios explícitos o tácitos de estas manifestaciones solemnes de los sucesores de San Pedro, los bienes y servicios susceptibles de comerciarse tenían un precio justo, que era independiente de la sacrosanta oferta y demanda y que tenía su origen en el valor intrínseco de la cosa en cuestión. Inmersas sus formulaciones en medio del oleaje liberal los apologistas del pensamiento vaticano diseccionaron el pensamiento papal para fortalecer la idea de que el trabajo no era una mercancía cuyo precio (el salario) se regulaba por medio de la oferta y la demanda, que por encima de la ley positiva existía una ley natural superior a esta última y que en función de ésta el trabajador tenía, por el carácter de sus obligaciones entre las cuales estaba el mantenimiento de su familia, el derecho a un salario adecuado como manifestación de la justicia social y católica. La idea que resumaba de la *Rerum Novarum*, de la *Casti Connubi* o de la *Quadragesimo Anno* era que el salario había de tener unas dimensiones apropiadas para el sustento de la familia del trabajador y para la satisfacción de sus necesidades más perentorias. Ligada a esta cuestión de la justicia social de raigambre católica aparecía la idea del complemento de la retribución como auxilio<sup>63</sup> económico, lo cual tácitamente venía a hacer revivir la concepción más caritativa de las instituciones de beneficencia anteriores a la conmoción que supuso la aparición del seguro obligatorio en España en las primeras décadas

del siglo XX y que revivía los ribetes más paternalistas de la caridad para con el trabajador sumido en la miseria por lo elevado del número de sus descendientes. En función de esta influencia vaticana Girón afirmaba que el subsidio familiar en España nacía de la influencia de las encíclicas *Divine Redemptoris* y *Casti Connubi* y que se fundaba en el principio de protección de la familia como institución y como "individualidad de partida en materia de justicia social, y como sujeto del pacto entre el trabajador y la empresa"<sup>64</sup>. De esta concepción nació la idea de la familia como unidad laboral originaria de todo el sistema político-social del régimen, sin olvidar que hacemos referencia a manifestaciones puramente formales que permiten comprender el sentido orientativo de la política en torno a esta cuestión, pero que en modo alguno suponen una identificación absoluta entre los principios y proyectos expuestos y los logros conseguidos, por otra parte bastante alejados de las metas iniciales y de la exposición lírica y majestuosa de la que, entre otros, Girón hacía gala.

En la línea de culto a la personalidad que se desarrolló durante la Guerra Civil y los años posteriores en torno a la figura de Franco, la Ley de Subsidios Familiares se presentó también como una creación personal del "ungido". Aznar<sup>65</sup> se refiere a su creación como la "mejora social más fecunda y práctica en España desde 1880, es decir, desde que hay política social y desde los días en que, entre las grietas del Derecho civil, irrumpió, medroso, el Derecho social obrero".

Como se ha señalado, enmarcado en esa tendencia al culto a la personalidad Aznar<sup>66</sup> afirma que Franco "aumentó así considerablemente sus salarios y sueldos, y no a voleo e irreflexivamente, sino humanizando el trabajo y retribuyendo al trabajador, no según su rendimiento, sino según sus necesidades positivas y obligadas. Dio la ley oportunamente; antes no hubiera tenido ambiente; más tarde, se hubiera estrellado contra intereses creados que le hubieran restado eficacia. Esa reforma social era en Franco una obsesión, no una idea, cuya razonabilidad precisamente se observa, sino un ideal calentado bien al fuego del sentimiento, idea que no sólo es luz, sino también calor, motor de actividad...Para que se comprendiera pronto en favor de quién la dio, quiso promulgarla el 18 de julio, la fiesta nacional de los trabajadores,...la dio al son de los cañones y cuando la guerra reclamaba todas las posibilidades económicas de España. Que a los trabajadores de la vanguardia no les faltara nada, ni para su sustentación ni para la lucha, pero que a los de la retaguardia se les diera lo que no se les dio nunca: no el salario que ganaban, sino el que necesitaban para la sustentación de su hogar". Destaca, dentro de la línea apologista desaforada de las creaciones del régimen y de su máximo representante, la falacia de considerar al subsidio familiar como un aumento considerable de sueldos en contraposición a su efectivo carácter simbólico; por tanto, la idea de reforma social que, según Aznar, esboza la cabeza de Francisco Franco no llega en términos efectivos más que a un leve retoque que no

altera de forma esencial la existencia de la familia, y menos en los primeros años de desarrollo del subsidio familiar en los que un estudio cuantitativo demuestra su carácter teórico.

### 6.5. Teorías y problemas para la aplicación del subsidio familiar.

En el terreno más práctico pueden señalarse varios problemas a la opción que supone el *justo salario*. Para desarrollar en la práctica dicha doctrina se planteaba la posibilidad de pagar a todos los productores nacionales un sueldo suficiente para los gastos originados por el tipo de familia más numerosa. Se podía conceder también un salario suficiente para el promedio calculado de los miembros de una familia tipo o establecer una remuneración, como tercera opción, proporcional para cada uno de los casos según una escala previamente establecida. El hecho, a todas luces evidente, de que la primera opción sobrecargaría la estructura productiva de una nación todavía sumida en la Guerra Civil imposibilitaba la primera opción. De igual manera esta motivación podía ser aplicada al segundo modelo de remuneración, a lo cual era posible añadir que se imponía la desigualdad en la medida en que la familia tipo discriminaría por exceso y por defecto a todos aquellos núcleos familiares que no coincidieran exactamente con ella. Podía plantearse la posibilidad de que la desigualdad de los costes de producción en las empresas con mano de obra mantenedora de núcleos familiares extensos pudiera hacer, como era el caso del plus familiar, que se optase por la contratación de asalariados con ausencia de cargas familiares o con éstas muy disminuidas. Sin embargo, según Jordana de Pozas<sup>67</sup>, este obstáculo se presentaba en menor medida en una nación que sometía la marcha de la economía a las directrices de la política y en el que las empresas no trabajaban en competencia con las propias del territorio nacional, siempre según el citado autor.

En torno a esta cuestión bizantina Severino Aznar<sup>68</sup> señalaba tres posibles opciones previas al establecimiento de un verdadero seguro familiar: que cada uno ganase un salario mínimo proporcional al volumen de su familia; que cada trabajador tuviese un salario mínimo suficiente para sostener una familia media normal o que el patrono concediese al productor un salario según la cantidad y calidad de su trabajo además de un subsidio según sus necesidades y en función del volumen de su familia.

1.- La primera opción resultó desechada. No era posible que el salario variase a medida que variase la familia dado que, en un estado de libre concurrencia mercantil, el incremento de la prole sería visto por el patrono como un elemento objetivo de discriminación en el mercado en la medida en que la progresiva elevación de los costes de producción, vía mano de obra, dificultaría paulatinamente el mantenimiento de su cuota de mercado. La incertidumbre en cuanto a los costes de producción haría del empresario el principal valedor de un régimen malthusiano denostado por la política familiar del ministerio de Trabajo en la medida que el

proceso de selección laboral hubiera hecho del obrero celibe el más preciado objeto de deseo por parte del empresariado. La incertidumbre o la seguridad de que en el medio o largo plazo la empresa regida por dichos principios iría a la ruina imposibilitaba la aplicación de dicho principio rector.

2.- La segunda opción que se manejaba era que el salario mínimo fuese suficiente para sostener una familia normal. La familia tipo estaría integrada por cinco miembros (tres hijos y los padres) lo cual habría implicado que antes de llegar a ese número de hijos el trabajador habría perdido ahorros. También se suponía que cuando nacieran los últimos hijos los primeros ya aportarían su cuota de aportación a la renta familiar, con lo cual, si bien dicho núcleo familiar no estaría dentro de los protegibles, sus rentas por el trabajo habrían aumentado de todas formas. De igual manera habría que tener en cuenta que el padre, en los primeros años de vida de la familia y sin llegar al número de cinco miembros protegibles, tendría más capacidad para trabajar por su plenitud de fuerzas. Por último se consideraba que la familia de más de tres hijos (o de cinco miembros) era la excepción y que para ésta la norma no había de adaptarse, porque "para las excepciones no se daban leyes".

Aznar desechó estos argumentos destacando entre sus motivaciones las de índole moral. Se planteó que dichos principios rectores expondrían a la familia a nacimientos espaciados, sólo al alcance de aquellos que utilizasen limitaciones voluntarias de la fecundidad, con la repulsa consiguiente que motivaban dichas actitudes malthusianas. Aznar poseía una visión catastrofista del estado de la civilización occidental, asaeteada por un malthusianismo beligerante que estaba en la raíz del derrumbamiento de la natalidad en los pueblos de la civilización occidental ya desde los tiempos de Roma y Grecia o en las razas indio-americanas vencidas por los conquistadores españoles<sup>69</sup>. En esta línea argumentativa, la moral cristiana deviene en salvadora de la civilización occidental como baluarte de los valores de contención del malthusianismo imperante. Y por este motivo, y en la medida en que estamos hablando de uno de los padres del régimen de subsidios familiares dichos componentes vertebran, al menos en parte, la intención de los legisladores al dar vida a dicho proyecto. No en vano las afirmaciones de Aznar se caracterizaban por el todavía persistente tono beligerante de la Guerra Civil contra todo lo que no constituyera un elemento explícito en la tradición que secularmente había vertebrado España o, mejor dicho, su noción de España. Por dicho motivo todo lo que representara un virus imposible de adscribir a dicha tradición debía ser exterminado, con más motivo si su origen y su materialización estaba en el bando contra el que se luchaba en el conflicto ya mencionado. Recuérdese, como ya se ha explicado en las primeras páginas de este estudio, lo que supone para la mentalidad católica de un hombre como el que se cita en estos momentos un marco legislativo republicano que posibilita el aborto y junto a ello el matrimonio civil y el divorcio,



tudo ello como un estilete que conformaba "una afrenta" a los valores eternos que, en boca de la propaganda nacional, conformaron España a lo largo de siglos.

3.- La tercera vía considerada por Aznar consistía en dar a cada obrero un salario según la cantidad y calidad de su trabajo y un subsidio según sus necesidades, en función del número de miembros de su familia. Se basaba este principio en un deber de justicia ante lo insuficiente de los salarios y el estado de miseria y depravación moral a que ello conducía. No era para el autor un acto de caridad o de filantropía libre. Dos hombres, L. Harmel y M. Romanet inspirados en la Encíclica de León XIII *Rerum Novarum*, dieron los primeros pasos para la creación de las cajas de compensación en las que Aznar se inspiró. Obvia Aznar el peso progresivamente creciente que va adquiriendo el movimiento obrero y la incidencia de las potenciales desestabilizaciones de tipo social que pudieran provocar las situaciones de carencia más insostenibles.

Sería esta última opción la que vertebraría el proyecto de subsidios familiares en España y la que finalmente se llevaría a la práctica dado que era la que en menor medida adoptaba planteamientos voluntaristas y asistencialistas.

#### **6.6. Características del subsidio familiar.**

El subsidio familiar, abstractamente concebido, tiene una serie de características que le confieren su carta de naturaleza. La clasificación que de las características del subsidio familiar hace Aníbal Rebollo González<sup>70</sup> se ajusta en líneas generales a la caracterización que se puede hacer del Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares de la Ley de 18 de julio de 1938. Esta clasificación meramente técnica de los elementos más característicos del subsidio familiar puede resultar excesivamente teórica pero resulta absolutamente necesaria en la medida en que disecciona este seguro de nueva planta y refleja por tanto su naturaleza interna global.

Por su naturaleza, los rasgos del subsidio familiar, siguen tres pautas: jurídicas generales (legalidad, generalidad y obligatoriedad), jurídicas especiales (inalienabilidad, temporalidad, inembargabilidad, periodicidad, irretenibilidad, irremunerabilidad e irrenunciabilidad) y técnicas (unicidad, proporcionalidad, uniformidad, tecnicidad, mutualidad y compensatoriedad).

Otra clasificación de tipo funcional organizaría las características de los subsidios familiares en cuanto al sistema organizativo (legal, general, obligatorio, técnico y mutualista) y en cuanto a la prestación (uniforme, única, temporal, proporcional a cargas e ingresos, periódica,

compensatoria, inalienable, irretenible, irrenunciable, inembargable, prescriptible y no consistente en renta o remuneración).

El elemento de legalidad supone, por su carácter normativo y por la capacidad del ente estatal para imponer coactivamente su ejecución, la generalización del sobresueldo familiar para todos los habitantes, si el campo de aplicación es nacional, o para una parte de estos teniendo como criterio el profesional (caso español). Esta primera característica, evidente a todas luces, supone el fin de la actividad potestativa de la iniciativa privada y su sustitución por el poder político que a través de la institucionalización de los órganos pertinentes intentará extender la mano del Estado a cada uno de los rincones del territorio nacional obviando la libre iniciativa privada y sus orientaciones caritativo-benéficas. Ello supone el establecimiento claramente normativizado de las condiciones y causas que dan lugar a la prestación, la cuantía, el beneficio, las obligaciones y derechos de los afiliados, de los subsidados y de la institución gestora, los derechos de los beneficiarios, las alteraciones relacionadas con la prestación, la extinción del derecho, etc. Como consecuencia de esta característica se deriva la de generalidad, es decir, la aplicación permanente y constante del derecho a todos los trabajadores que posean los requisitos exigidos por el principio de la justicia distributiva.

La obligatoriedad supone, en principio, la cobertura total de los riesgos. "La obligatoriedad ha hecho que el problema social encuentre una fórmula universal, para reducir a la mínima expresión el riesgo-miseria, ya que tiene la virtud de despertar el interés social de que todos coticen para financiar el sistema de previsión, con la esperanza de que podrían beneficiarse cuando concurriesen los requisitos necesarios exigidos por la ley"<sup>71</sup>. En el caso español, este principio de obligatoriedad no supone la existencia de un sistema de tipo universal que acoja a todos los ciudadanos bajo su paraguas, ni tan siquiera a todos los trabajadores. El Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares español no se sustenta en un régimen de tipo nacional, sino laboral, lo cual no llega a implicar a todos los trabajadores con lo que una gran parte de las familias quedaban fuera de esta prestación, que por otra parte no pasaba de tener un mero carácter simbólico.

La tecnicidad, entendida como la aplicación de la técnica del seguro es el elemento que permite aplicar las leyes de probabilidades en combinación con la estadística, y lo que por este motivo capacita para evitar el riesgo del desequilibrio financiero por desigualdades entre los ingresos y las prestaciones del régimen. La aplicación de la ley de los "grandes números", en función de las estadísticas, permite aplicar las llamadas tablas biométricas que vienen a facilitar el cálculo de los recursos para la atención de las obligaciones previsibles del régimen. Unido a todo ello, el sistema financiero suele ser el de la capitalización con el objetivo de aumentar progresivamente las prestaciones. La cuestión de la tecnicidad<sup>72</sup> y el enlace por medio de ésta

con el seguro supone la difuminación de la unión entre el subsidio familiar, en su vertiente más próxima al seguro y éste último, según el Mario Roseira. Tanto para las prestaciones familiares de origen contributivo como no contributivo emplea, el nombrado Roseira, el término de asignaciones familiares a pesar de la decantación que supone la no contribución hacia la asistencia social y la beneficencia. Sin embargo, pone de manifiesto, acertadamente, la diferencia significativa que existe entre el seguro y la asignación familiar en la medida en que el primero hace frente a riesgos no previstos y la segunda a cargas de tipo social. De ahí la relación con sistemas como el de pensiones de vejez, en el sentido de que en los subsidios familiares en muchas ocasiones (el caso español es uno de ellos) se contempla la posibilidad de que, no sólo los descendientes, sino también los ascendientes figuren como beneficiarios del subsidio familiar en la medida en que son personas dependientes del cabeza de familia. Otro elemento de sustancial importancia que relaciona la prestación familiar con los otros seguros, es su ligazón con los servicios de salud, y sobre todo con el de maternidad, en lo que se refiere a las cargas que ambos cubren, por lo cual las prestaciones familiares contribuirían de forma complementaria al cuidado de los jóvenes retoños por medio de asignaciones remunerativas cuya finalidad consistiría en mantener su salud física y psíquica por medio una especie de salario familiar.

La mutualidad emana, del principio de la compensación proveniente de la idea de la solidaridad. En principio no es más que la aplicación de un principio vital para la vida del ser humano en comunidad superpuesto al ámbito de la previsión. Se impone la reciprocidad y la ayuda entre los elementos del sistema de previsión como elemento técnico del funcionamiento del sistema pero también, sobre todo en la fase de las cajas de compensación no obligatorias, como mecanismo inspirador de valores sociales en la medida en que aúna voluntades de un colectivo necesitado de un marco de seguridad ante el imprevisto que supone, al menos en parte, la llegada de un retoño que altere el equilibrio económico de la unidad familiar. El reparto del riesgo diluye el riesgo de lo azaroso y fortuito entre el colectivo laboral susceptible de acogerse a los beneficios del régimen obligatorio de subsidios familiares español, lo cual supone no olvidar, en absoluto, que la disolución de la contingencia no se realiza en una gran mutualidad nacional porque el campo de aplicación, como se verá, no es de carácter nacional. Del principio de la mutualidad se deduce el principio de la compensatoriedad. La compensación supone la ayuda remunerada de los otros componentes de la mutualidad, además de hacer frente comunitariamente a los gastos y contribuciones. La compensatoriedad puede tener carácter nacional, regional o local, si atendemos a un criterio geográfico, o profesional y empresarial, según se refiera a los trabajadores de determinados sectores de la producción o a los de una empresa en concreto. En el caso del régimen establecido el 18 de julio de 1938, a pesar de las declaraciones formales, la realidad es que supone únicamente un sistema de base profesional restringido a sectores de la población trabajadora con unas características definidas que por su

naturaleza dejan fueran a gran parte de la misma. El sobresueldo familiar, que en principio constituía una asistencia libremente otorgada del empresario vino a dar paso, como ya se ha señalado, al sistema de cajas de compensación para evitar que los patronos fuesen perjudicados por la sobrecarga en los costes de producción que suponía la prestación familiar. En el caso español, el siguiente paso no fue el sistema de base nacional y por tanto la compensación de tipo universal, sino un sistema más restringido, de tipo profesional, que aspiraba a compensar a un cierto sector de la población trabajadora la disminuida entrada de rentas provenientes del trabajo y por tanto los problemas consiguientes para la crianza de los hijos o las consecuencias negativas que de ello se deriva para el mantenimiento de la población.

La conformación del principio de proporcionalidad está en íntima relación con el número de hijos y con el nivel de las rentas de la unidad familiar. Ante la posibilidad de optar por un sistema de escalas ascendentes o de sumas fijas por cada hijo nacido, el sistema español optó por el primero, estableciendo un sistema progresivo cuyo objetivo formal era primar a las familias con mayor número de hijos.

La periodicidad responde al fin, básicamente alimenticio, que tienen este tipo de prestaciones. Las opciones para el reparto de la prestación van desde la concesión semanal, mensual o trimestral. En el caso español, como en la inmensa mayoría de los sistemas de subsidios familiares, la opción es la mensual.

La uniformidad en la prestación es otra peculiaridad del subsidio familiar. Supone dicho principio, que no exista diferencia entre la prestación para una unidad familiar y otra, independientemente de sus ingresos, siempre que se encuentren dentro de los límites prescritos por la ley y que les capacite para recibir dichas prestaciones.

La unicidad supone que una familia reciba tan sólo una prestación en forma de subsidio. El objetivo de la percepción es el auxilio a la familia para cubrir las necesidades de la crianza de los hijos, ante lo cual la prestación ha de ser única pues si alguna familia pudiera recibir varias quebrantaría el principio de la redistribución de las rentas que sustenta el régimen de los subsidios familiares. Ello no supone, al menos en el caso español, que no puedan existir sistemas compensatorios que, respetando el mínimo establecido por la Ley de 18 de julio de 1938, eleven la prestación potestativamente respetando a la vez los mínimos establecidos por la ley.

Los subsidios familiares no pueden ser cedidos, no se puede renunciar a ellos, ni retenidos, ni embargados. Son en definitiva, inalienables. Su interés social, su función ligada a grupos por los que el Estado tiene una preocupación especial determina que estas prestaciones tengan un

uno ajustado a la finalidad que se pretende y que sólo en contados casos, reglamentados muy cuidadosamente se pueda violar este principio. No obstante, aunque inalienables, estos derechos sí prescriben, según los dictados de la ley, aunque el directamente interesado no ejercite sus derechos. Es por ello que, dado un determinado plazo, caduca la obligación de otorgar el derecho y se extingue la posibilidad de percibirlo.

El carácter no remunerativo del subsidio obedece a que es una forma de previsión directa de la sociedad. Por tanto, teóricamente, se desliga del campo salarial estrictamente concebido y en consecuencia no se incluye en el cómputo de cotizaciones y es abstraído del sistema fiscal.

La temporalidad, como elemento distintivo del subsidio, marca diferencias entre este y otro tipo de pensiones como las de invalidez o vejez, que tienen un carácter permanente. El subsidio familiar se otorga por un tiempo determinado, normalmente definido por el momento en que los hijos alcanzan la edad especificada por la ley para que dejen de ser considerados beneficiarios del sistema.

### **6.7. El subsidio familiar español: campo de aplicación, administración y financiación.**

#### ***6.7.1. Campo de aplicación del subsidio familiar.***

Previamente al estudio del campo de aplicación del subsidio familiar habremos de aclarar una serie de conceptos para el más fácil desenvolvimiento con el lenguaje del que hace uso la legislación que lo pone en marcha. En primer lugar, considera beneficiarios a los hijos o asimilados que reúnan las condiciones establecidas. Denomina subsidiado al asegurado con derecho a subsidio por tener beneficiarios a su cargo. Califica como asegurados a los trabajadores por cuenta ajena que reúnan las condiciones estipuladas. Designa afiliados a los patronos comprendidos en el régimen y por cuenta de los cuales trabaja algún asegurado.

Previamente a cualquier otra consideración se imponen dos condiciones centrales para la pertenencia a un régimen que pretende caracterizarse por su protección a la familia: la condición de nacionalidad y la condición de residencia<sup>73</sup>.

El reglamento<sup>74</sup> del subsidio familiar, en cuanto al campo de aplicación se refiere, establecía la obligatoriedad de cotización al régimen de todos los patronos, empleados o funcionarios. Imponía, por tanto, la obligación de constituirse en asegurados o afiliados a todos los patronos, empleados o funcionarios de España, si bien entre las disposiciones transitorias hacía referencia a que sería el Consejo de ministros el que dictaría las normas especiales para la aplicación de

los subsidios familiares a los funcionarios y a toda clase de trabajadores del Estado en la provincia o el municipio. En torno a esta cuestión vale la pena reseñar que las disposiciones específicas para los funcionarios son del año 1954 para los de la administración central del Estado, y de 1956, para los de la administración local. En cuanto a lo que el reglamento establece, el Estado, las Diputaciones y los Ayuntamientos de capitales de provincia o poblaciones de más de veintemil habitantes podían optar ente acogerse al régimen de la Caja Nacional de Subsidios familiares o abonar a sus empleados directamente los subsidios mínimos. Desde el ámbito de los afiliados estipulaba que todos los patronos, independientemente de su actividad, estaban obligados a constituirse en afiliados; junto a ellos el Estado, las diputaciones, los ayuntamientos, profesionales liberales con obreros y toda institución, sociedad, o asociación que ocupara a obreros o empleados. Condición necesaria para la afiliación era el tener a los obreros en el ámbito del territorio nacional con lo que los empresarios que tuvieran empleados en el Protectorado de Marruecos estaban exentos. "La razón de excluirlos es acaso la dificultad de fiscalizar allí si el beneficiario está o no a cargo del subsidiado, y de averiguar si con él tiene los vínculos de familia requeridos por la ley y si tiene más o menos de la edad que la ley quiere subsidiar"<sup>75</sup>.

Comparemos ahora la cuestión del campo de aplicación con la legislación de otros países. En el caso belga<sup>76</sup> la Ley de 4 de agosto de 1930, modificada por el Real Decreto de 30 de marzo de 1936, establecía la obligación de cotización para todos los patronos de la industria, el comercio y la agricultura. Esta ley sólo establecía el derecho a los subsidios para los asalariados de igual manera que en el caso español. El proyecto de la Ley de 10 de junio de 1937, también en el caso belga, suponía tratar la particularidad de los trabajadores independientes, como los pequeños artesanos, agricultores y comerciantes así como los de algunas profesiones liberales. Finalmente el campo de aplicación comprendió a todos los patronos incluidos en la ley del año 1930 y a los trabajadores no asalariados (independientes y profesionales liberales). Desde esta vertiente la política belga estaba más desarrollada que la española.

Del caso francés<sup>77</sup> hay que decir que la Ley de 11 de marzo de 1932 ya comprendía en su campo de aplicación a la agricultura; sin embargo, los problemas de aplicación a dicho ámbito hicieron necesario disposiciones complementarias como el Decreto de 30 de octubre de 1935 y un Reglamento de Administración de 5 de agosto de 1936 que no obstante no consiguió su objetivo. Solamente con el Decreto-Ley de 29 de julio de 1939, ampliado por el de 16 de diciembre del mismo año y el de 24 de abril de 1940 y por la Ley de 9 de septiembre de 1940, se aplicó efectivamente el subsidio familiar a la agricultura, lo cual permite ver la semejanza con el caso español en cuanto a la problemática que planteaba la aplicación de los subsidios familiares a la agricultura.

En el caso italiano<sup>7</sup>, la aplicación de prestaciones por cargas familiares comenzó con el Decreto-Ley de 17 de junio de 1937; dicha disposición establecía un campo de aplicación en el que se incluía a todos los cabezas de familia que realizaran un trabajo asalariado por cuenta ajena; excluía a los trabajadores que ganaran más de 2.000 liras al mes (a diferencia del caso español, belga, o francés), a los trabajadores a domicilio, al servicio doméstico, al personal de las Administraciones públicas, a los familiares del patrono, a los colonos y a los aparceros.

En cuanto a los asegurados, el campo de aplicación se extendía a los trabajadores por cuenta ajena, cualquiera que fuera su estado civil, edad, sexo, forma, cuantía de la remuneración y clase de su trabajo. La inclusión de la irrelevancia del estado civil obligaba a cotizar por igual a casados, viudos o solteros. En este último caso se consideraba implícitamente la posibilidad de la existencia de beneficiarios no integrados en la prole del asegurado pero con lazos familiares como el caso de hermanos o hijos reconocidos. La razón principal para incluirlos era, sin embargo, la necesidad de ampliar lo más posible el campo de financiación y las obligaciones de la cotización ante la previsible entrada en el campo de los subsidiados de los que momentaneamente fueran sólo asegurados. La ausencia del límite de edad para la cotización de los asegurados presentaba la curiosa paradoja de que permitía de hecho la cotización de menores de 14 años y mayores de 65. Los primeros, podían ser a la vez beneficiarios y los segundos seguirían ocupando un puesto en el mercado de trabajo en vez de recibir el muy modesto subsidio de vejez existente.

La falta de establecimiento de un límite en la cuantía de la percepción salarial para el cobro del subsidio familiar puede responder a un criterio injustificado, si bien hay que hacer notar que los primeros países que instalaron el sobresueldo familiar (Bélgica y Francia) no establecieron topes salariales para la prestación del subsidio. Hay que hacer notar que el hecho de que la cotización fuera proporcional al salario pero la prestación tuviera un carácter fijo, independientemente de la remuneración salarial, hacía que para los tramos de salarios más elevados el subsidio tuviera más de cotización que de prestación al contrario que en los tramos de salarios más bajos en lo cual podemos encontrar un elemento de redistribución de la riqueza nacional.

Denominaba afiliados, como ya se ha señalado, a los patronos comprendidos en el régimen y establecía para ellos también excepciones para su cotización. Los que contratasen a trabajadores a domicilio o domésticos no habrían de cotizar para ellos ampliando así el ámbito de trabajadores y de familias que quedaban fuera del sistema. Así mismo la mujer, los hijos, los padres y demás parientes del patrono, hasta el tercer grado, que tuvieran ocupación en alguno de los centros de trabajo del patrono tampoco tenían derecho al subsidio, cuando vivieran en el hogar de éste. Las motivaciones para la exclusión de los domésticos lindaban con la parvedad.

Severino Aznar<sup>11</sup> incidía en que su inclusión, más que un beneficio, hubiera sido una carga para ellos dado que no participarían de los subsidios y sí del pago las cuotas correspondientes. Dicho criterio, de aplicarse a los solteros, o viudos, hubiera imposibilitado la financiación del régimen de subsidios familiares. La exclusión de los trabajadores o trabajadoras a domicilio, muchos de ellos mujeres que trabajaban por sueldos ínfimos, parecía centrarse básicamente en la dificultad para la inspección y fiscalización de dichos trabajadores ante la falta de estadísticas. Aznar, en el artículo ya citado, expone lo que considera era un vigoroso movimiento propulsor de la artesanía por parte del "Nuevo Estado": incide en esta idea basándose, según dice, en el pensamiento de los pontífices y en la posibilidad de primar al trabajador que abandone su puesto en la fábrica para dedicarse al trabajo en el domicilio. Dicha idea bebe de la apología de una sociedad preindustrial en la que la separación espacial entre el hogar y el puesto de trabajo no existía prácticamente, en la que la familia era además de una unidad de convivencia y de socialización una unidad de producción en un mundo todavía no "infectado" por el germen del liberalismo manchesteriano y, en línea con el pensamiento de Aznar, de unas nuevas formas de producción que en lo social tuvieron sus consecuencias negativas en las familias españolas, cuya desestructuración posibilitó el triunfo de ideologías desapuntadoras de los valores intrínsecamente hispánicos y que condujeron a un enfrentamiento civil. La exclusión de la mujer, los hijos, los padres y los parientes del afiliado hasta el tercer grado que tuvieran ocupación en alguno de sus centros de trabajo, cuando viviesen en el hogar de aquél, respondía a la ya explicitada idea de que el átomo básico de la sociedad, desde una vertiente puramente formal, era la familia en su faceta social, política y económica. Todos estos miembros, se suponía, trabajaban para la misma unidad familiar y no, en puridad, por cuenta ajena.

En cuanto al campo de aplicación de los subsidiados amparaba, en teoría, a todos los que cumplieran la condición de estar asegurados y de tener beneficiarios a su cargo. A pesar de ello, y de que la ley amparaba a la asegurada casada o viuda pero con hijos no reconocidos, según lo estipulado, las aseguradas con hijos no reconocidos a su cargo solteras no tenían derecho a prestación alguna. Con respecto a este hecho la reflexión de Aznar sobre la cuestión transmite, sin duda alguna, el sustrato de moralidad que la legislación vigente pretendía implantar y el molde de sociedad que formalmente se quería establecer:

"¿Se le va a dar subsidio, premiando con él su vicio o su fragilidad?, ¿No parecerá eso un estímulo al desarreglo de la vida? ¿No conviene más bien enfrenarlo con este orden de sanciones legales, que sustituyan y estimulen las sanciones sociales, gesto reprobatorio de la sociedad, tan eficaz, pero que falta en las colectividades claudicantes y excesivamente contemporizadores y tolerante con las malas costumbres? Con sacrificio tan grande, ¿a todas las vamos a conceder subsidio como un derecho?



Abandonarlas, no. Pero tal vez sea bastante que las ampare la caridad, en vez de la justicia. Y, para ellas, el legislador ha creado el Auxilio Social, más amplio y flexible que el Régimen de Subsidios familiares. Si es suficiente o no, los hechos lo dirán”<sup>80</sup>

El marco de desprotección real en que dejaba esa situación concreta situaba a las madres solteras en el escalafón propio de seres humanos de segunda, prototipos de la depravación sólo aptos para cubrir las necesidades de conmiseración y misericordia del resto de la comunidad por medio de la caridad, en contraposición a la justicia a la que tenían derecho las mujeres que, ante esa misma situación, tuvieran la virtud o la suerte de, aun teniendo hijos no reconocidos, encontrar un marido.

Determinaba la ley que los beneficiarios serían los hijos legítimos, naturales reconocidos y los de la cónyuge, así como los nietos, hermanos y padres inválidos del asegurado que no tuvieran otro subsidio y cuyos padres hubiesen muerto o estuviesen incapacitados para el trabajo. Señala Aznar que “esa protección al hijo reconocido puede contribuir a la obra de saneamiento moral de la familia”<sup>81</sup> ya que el subsidio, si bien no era motivo suficiente para que un padre reconociera a su hijo, si era un estímulo y un premio. La protección a los nietos, nietas, hermanos, hermanas o padres inválidos está en esta misma línea moralizante de la sociedad en la medida en que era muestra de piedad familiar y robustecimiento de los vínculos familiares y todo eso era virtud y energía moral que convenía estimular. En cualquiera de los casos, salvo el de los padres inválidos, había que tener menos de 14 años o, en su defecto, estar incapacitado para el trabajo antes de dicha edad, además de vivir en el hogar del subsidiado y a su cargo. En cuanto a la edad, el criterio de los 14 años como límite para tener el carácter de beneficiario parece escaso en la medida en que a partir de dicha edad la prole no deja de ser una carga, a no ser que pasaran al mercado de trabajo, con lo cual la ley no estaría respondiendo a los objetivos formales que planteaba ni a su espíritu. Respecto a esta cuestión el legislador, dice Aznar<sup>82</sup> con un cierto anhelo de justificación, dado que la reflexión encubre en parte su propio pensamiento, no implantó un límite de edad superior porque carecía de datos estadísticos suficientes para valorarlo. Aunque parcialmente sensata, la afirmación del autor maquilla un proyecto poco ambicioso en sus orígenes motivado, en gran parte, por la situación de conflicto en que todavía se encontraba el país en el momento en que se implantó el subsidio familiar con carácter obligatorio. Por otro lado, la edad máxima de 14 años rompía la progresividad supuesta de la escala, “pues resultaba de hecho muy difícil gozar de los altos subsidios otorgados a partir del hijo número 12; de otra parte sólo se admitía la prórroga de dicho límite a los hijos inválidos cuando la incapacidad había sobrevenido antes de cumplir los 14 años”<sup>83</sup>. Por el contrario la Ley de 15 de julio de 1954<sup>84</sup> para los funcionarios civiles del Estado señaló el límite de edad en los 18 años; éste se mantenía aunque el hijo percibiese ingresos, mientras que cuando no cobraba sueldo o retribución el límite se elevaba hasta los 23 años, no habiendo limitación para

los casos de incapacidad laboral. Por tanto, el régimen de los funcionarios les confirió beneficios que no otorgó al resto de los trabajadores; era, en definitiva, más flexible al proteger a los hijos no emancipados y a los solteros que se hallaran cursando estudios de grado superior.

El reglamento<sup>85</sup> del subsidio familiar establecía la primera discriminación que demostraba la falacia que suponía, en boca de los mandatarios del ministerio de Organización y Acción Sindical y posteriormente del ministerio de Trabajo, la afirmación de que el subsidio familiar español estaba basado en un régimen nacional. En su artículo primero afirma el reglamento que "el régimen de subsidios familiares tiene por objeto proporcionar a los trabajadores, por cuenta ajena, un auxilio económico en relación con el número de beneficiarios que tengan a su cargo y vivan en su hogar, mediante el reparto equitativo de su importe entre todos los que han de contribuir a costearlo". Dejaba fuera a todo trabajador que no lo fuera por cuenta. A efectos legales, señalaba el artículo noveno que los trabajadores portugueses, los andorranos y los de países hispanoamericanos quedaban homologados a los españoles.

Era, por tanto, un sistema laboral en el que se incluía a los trabajadores por cuenta ajena derivando de su calidad de trabajador y en consonancia con el riesgo que suponía para la economía familiar el aumento del número de hijos. El trabajador, o en la terminología del régimen, el productor, que vivía de la remuneración del trabajo estaba expuesto a un bajón en su nivel de vida y al de su familia cuando ésta se incrementaba por la llegada de más hijos, los cuales podrían llegar a ser tantos que la remuneración no cubriera las necesidades de la familia. En estas condiciones, la denominación de seguro familiar, parecería más adecuada para el caso español, ya que el término subsidio implicaría la existencia de un campo de aplicación nacional y éste no era el caso. La ausencia de este talante nacional era lo que impedía la existencia de la unidad de los regímenes diversos que convivían en el ámbito de la política familiar española; la concesión del subsidio a los trabajadores que ejercían una actividad profesional determinada tenía como corolario una diversidad de regímenes con diferenciación de prestaciones abonadas, diferente organización administrativa o las dos opciones a la vez<sup>86</sup>.

La cualidad de la profesionalidad como criterio para la extensión de los derechos del subsidio singularizaba, en cierta medida, el caso español. Si utilizamos un modelo cercano geográficamente a la España de Franco podemos observar como, en el caso francés<sup>87</sup>, se empezó por una especie de elevación de salario con la Ley de 11 de marzo de 1932 y se terminó con el establecimiento de un campo de aplicación totalmente nacional con La ley de 22 de agosto de 1946.

Con respecto al caso español Aníbal Rebollo<sup>88</sup> señala que, por lo que se refiere a España, "podemos decir que, no obstante lo establecido explícitamente en la ley, el Régimen de

Los subsidios familiares tiene características de verdadera universalidad, pues la combinación del Plus Familiar, el Plus familiar, el Régimen de Viudedad, Orfandad y Discapacidad, y las prestaciones de las Mutuas, se complementan de tal modo que donde deja de actuar un régimen tiene aplicación las situaciones del otro, y así vemos que reciben prestaciones solteros, casados, viudos, divorciados con cargas familiares, hasta cubrir la totalidad de la población. Al deseo de ensanchar este campo de aplicación responde también la derogación del tope del Plus familiar, que hasta hace poco venía fijándose en la legislación correspondiente". A pesar de la aseveración de Rebollo en España no existía ningún régimen universal de protección familiar, lo cual necesariamente dejaba a familias fuera del ámbito de protección del Estado; y, por el contrario, lo que si existía era un conjunto de medidas parciales tendentes a esa universalidad pero que en absoluto lo conseguían.

En el marco de una terminología expresión de la decantación explícita hacia una concepción de la mujer que hace de ella un ser destinado únicamente a las funciones de procreación y cuidado de la prole en beneficio de la comunidad nacional, el artículo 21 del Reglamento especifica que el subsidio será abonado "al cabeza de familia" salvo que la madre fuera trabajadora subsidiada sin que lo fuera el padre, en cuyo caso podría ser entregado a ella.

#### **6.7.2. Administración del subsidio familiar.**

La administración de los subsidios familiares corrió a cargo del Instituto Nacional de Previsión a través de la Caja Nacional de Subsidios familiares, con separación completa de funciones, bienes y responsabilidades.

La gestión y organización del régimen de subsidios familiares suponía administrar los recursos del régimen obligatorio, organizar los servicios de forma que las prestaciones y cuotas se realizasen de forma adecuada, elaborar la contabilidad del régimen, formar y administrar los fondos de reserva, organizar la propaganda del régimen de subsidios, realizar los estudios necesarios para que los subsidios se asentasen sobre bases firmes, etc. La comparación con modelos foráneos, como por ejemplo el caso belga permite observar como se estableció la Caja Nacional de Compensación, con el objetivo de establecer la compensación de segundo grado entre las diferentes cajas, dado que a diferencia del caso español el régimen belga mantenía las cajas de compensación fundadas libremente por los patronos. Por el contrario, en el caso español, a raíz del establecimiento de un régimen obligatorio, las cajas compensadoras de derecho privado, como las mallorquinas de Quetglas desaparecieron.

La dirección y gestión de la Caja Nacional la llevaba su director que era delegado del Director del I.N.P. y por tanto nombrado por el ministro de Organización y Acción Sindical o



Posteriormente por el de Trabajo se propuso de aquel III director de la Caja tenía la obligación de remitir al consejo del INP, en el mes de marzo, la memoria del ejercicio último con un balance de ingresos y gastos, y en el mes de mayo el proyecto de cada año el proyecto de ingresos y gastos de la caja para el ejercicio siguiente, remitiéndolo al director del INP. Junto a la memoria antes mencionada, el Consejo del Instituto Nacional de Previsión tenía, entre otro, el cometido de elevar al ministerio la propuesta de aumento de escala de subsidios y cuotas así como la de acordar las inversiones de capital y del fondo de reserva de la caja. Junto al consejo, la comisión permanente del Instituto Nacional de Previsión había de cuidar especialmente, además de otra serie de cuestiones, de que los fondos de la Caja Nacional no se aplicasen a otros fines mas que a los autorizados.

El escaso tamaño del Estado y la dificultad para que sus manos llegaran a todo el territorio nacional hizo necesario que, para la prestación de sus servicios, la Caja Nacional tuviera la potestad de utilizar a las cajas colaboradoras del INP y de la organización sindical u otros órganos administrativos del Estado, previo establecimiento de un convenio, por tiempo definido, en que se señalasen los servicios a prestar y las condiciones y garantías estipuladas.

El carácter inmaduro del régimen se explicitaba al tener en cuenta consideraciones como que la percepción del subsidio era imposible en caso de que la entidad patronal incumpliera sus obligaciones de cotización como afiliada al regimen. O de igual forma, se plasmaba en la manifestacion de intenciones del artículo 50 en el que se afirma que "en cuanto sea posible se unificará el procedimiento de este régimen con el de los demás seguros sociales", lo cual era una manifestación de intenciones carente de la voluntad política necesaria para llevarlo a la práctica.

Existía la posibilidad de que las entidades empresariales realizasen las funciones propias de la Caja en relación con sus empleados para la declaración, liquidación y posterior pago de los subsidios, previa autorización del ministerio, oída la Caja Nacional y la organización sindical. Ello suponía que habrían de abonar o recibir de la caja, según procediera, la diferencia entre las cuotas que estuvieran obligadas a pagar y los subsidios que concediesen. Fue el Decreto de 12 de marzo de 1942<sup>29</sup> el que autorizó a las empresas a abonar el subsidio familiar al mismo tiempo que los salarios; lo hacía igualmente obligatorio en organismos, corporaciones oficiales y órganos afines.

En cuanto al pago no se realizaba por nómina, salvo en el caso de las entidades patronales autorizadas y diputaciones o ayuntamientos, sino que se abonaba mensualmente en la Delegación de la Caja a la que estuviera adscrito el interesado.

Según el *Informe sobre una política coordinada relativa al nivel de vida familiar* se pueden establecer cuatro modelos de administración de los servicios sociales para la familia:

- 1.- servicios públicos administrados por la comunidad directa y gratuitamente en beneficio de todos los elementos de la población;
- 2.- sistemas de participación voluntaria u obligatoria de las categorías de individuos o familias interesadas, dentro de un régimen de ayuda mutua o de seguro;
- 3.- sistemas de asistencia para la ayuda de los elementos necesitados, ya sea por medio de la asistencia privada o de la pública;
- 4.- sistemas basados en la responsabilidad patronal que abarcan servicios sociales determinados para el personal de los empleadores.

El grado de desarrollo del país del que hablemos y la naturaleza y el alcance de las medidas determinaran que opción de las cuatro señaladas es la elegida. Partamos del hecho de que las sociedades menos desarrolladas tienen tendencia a los sistemas asistenciales y de ayuda mutua complementados con la asistencia privada, y que el seguro es propio de una etapa mucho más avanzada en el desarrollo de la protección social. Consideremos también que los sistemas asistenciales son propios de políticas que pretenden abarcar a sectores sociales poco privilegiados mientras, que el seguro es propio de alternativas que, el menos, intentan ceñirse al máximo de elementos posibles o en el mejor de los casos a la nación entera. Y teniendo en cuenta estos hechos, podremos decir que el subsidio familiar español se enmarcaba dentro del segundo de los sistemas reseñados para categorías de familias o individuos, en este caso bajo la forma de seguro. Pero no por ello la política familiar española en la época a que se restringe el estudio supone la adhesión incondicional a uno sólo de los modelos señalados. Convivían varias formas de protección a la familia. Así, el plus familiar estaría más próximo a los sistemas de base patronal; y de igual manera persistían las instituciones mutualistas o asistenciales reservadas para aquellas familias que no tuvieran los requisitos para integrarse en el Régimen de Subsidios Familiares.

La mezcla de principios hace que el sistema de administración del subsidio familiar tenga elementos de los sistemas financiados por impuestos y de los financiados por medio de cotizaciones. En los primeros, la administración debería estar a cargo del Estado, mientras que en los segundos debería estar gestionada por organismos semipúblicos o privados. En el caso español era el Estado el que se hacía cargo de la gestión sin que existiera por ello un sistema de base nacional y pese a su carácter profesional o pese a que no se financiara por impuestos sino por medio de cotizaciones.

entenderá que estudiarlo como un problema de salud pública y en nombre de un derecho que debe garantizar y de una alta contingencia que la Nación debe asegurar, tendrá que hacer que comparen el comportamiento de sus Regim y todos aquellos a quienes interesa y presta un serie servicios, es decir, todos a través del Erario". En un segundo plano estaban las cuotas de los patronos y de los asegurados. En el caso de los patronos habian de pagar como cuota inicial al afiliarse el doble de una cuota normal mensual. La cuota normal consistía en un 6 % del salario del trabajador, de la cual el 5 % correspondia al patrono y el 1 % al empleado. El Decreto de 12 de marzo de 1942<sup>98</sup> estipulaba, con un cierto tono retórico, que el ministerio de Trabajo a petición del Instituto Nacional de Previsión consideraría rebajar la cuota establecida en el 6 % sobre el salario o sueldo.

El Decreto de 29 de diciembre de 1948<sup>99</sup> suponía una simplificación para la afiliación y cotización, no solo del subsidio familiar, sino también de los seguros de vejez, invalidez y enfermedad. Independientemente de las consideraciones que podemos hacer sobre la tendencia a implantar la gestión unificada de los seguros o hacia lo que en el propio decreto se denominaba seguro total, lo significativo era que la cotización en función del subsidio familiar no era ya del 6 % sino del 5 % (un 4 % a cuenta del patrono y un 1 % a cuenta del empleado). Comparando con el caso francés<sup>96</sup> se observa que, si bien en 1939 el porcentaje que representaban las cuotas para el subsidio familiar era pequeño, en 1946 los porcentajes se situaban en un 12 % y en 1951 en un 16.75 %, lo cual da muestras del peso relativo y de la voluntad política específica de llevar a cabo y materializar las manifestaciones solemnes plasmadas en el Fuero del Trabajo o en el Fuero de los Españoles con respecto a la familia española. Un modelo más cercano al español es el italiano<sup>99</sup>, que por Real Decreto de 17 de junio de 1937 estableció para la industria y la agricultura una cotización del 4,5 % (3,5 % a cargo del empresario y un 1 % a cargo del asalariado).

Se percibía la falta de participación continuada del Estado en el caso español. En el caso belga<sup>100</sup>, con la Ley de 10 de junio de 1937 se imponía junto a la cotización de los interesados, a unos tipos uniformes independientemente de las condiciones demográficas particulares de las zonas concretas, una subvención del Estado de 5 millones de francos. En el caso francés, la Ley de 11 marzo de 1932 establecía que los recursos se constituirían por las cotizaciones de los afiliados, variando las cotizaciones de unas cajas a otras, con la participación del Estado. En el Informe Beveridge<sup>101</sup> se pone de manifiesto como los subsidios familiares debian considerarse como una expresión del interés directo de la comunidad por la infancia; ese era el motivo de que el sistema de financiación, por ser un régimen de base nacional, tuviera su fundamento en un sistema impositivo y no contributivo. De todo ello se deduce que un elemento diferenciador del caso español era el que la presencia del Estado se limitaba, salvo en los inicios del sistema, al tutelaje e inspección de los recursos del subsidio familiar.

El pago de la cuota inicial debía realizarse dentro de fines de enero de 1939 (en el momento de la implementación del sistema) para lo cual previamente se había estipulado que la preparación del censo de los patronos y asegurados se haría entre noviembre de 1938 y enero de 1939 previa entrega del impreso pertinente en la oficina local sindical o en la Alcaldía, que vía delegación provincial sindical, la enviara a la Delegación de la Caja Nacional. Las dificultades para el cobro de la cuota inicial por parte del empresariado se pusieron de manifiesto por medio de la Orden de 27 de marzo de 1944 del ministerio de Trabajo en la que se aludía al impago generalizado de la cuota inicial por parte de los patronos amparados en las dificultades impuestas del propio ministerio de Trabajo.

Se estableció que una vez terminado un ejercicio los excedentes se destinarían a los siguientes fines: hasta cinco años después acabar la Guerra Civil, se dedicarían como mínimo el 50% de los excedentes al fondo de reserva; posteriormente se habría de fijar anualmente. El resto se destinaba a devolver el anticipo reintegrable concedido por el Instituto Nacional de Previsión con motivo de la fundación de la Caja Nacional de subsidios familiares y cuyo fin era equilibrar el desnivel entre los pagos e ingresos en el primer ejercicio. Se estableció igualmente que lo restante se destinara a reconstituir el capital fundacional si se hubiese dispuesto de él en todo o en parte, es decir en caso de que hubiera sido utilizado para el pago de subsidios y a mejorar la escala de los subsidios, la cual sería revisable, excepcionalmente, al final del primer ejercicio y posteriormente cada dos años.

El fondo de reserva de la Caja Nacional se invertía en fondos públicos u otros valores con la garantía del Estado. Hasta un 10% del fondo podía ser invertido en la adquisición de edificios de renta en grandes poblaciones.

La referencia al sistema de financiación nos conduce al examen de los mismos fundamentos del régimen dado que el subsidio familiar consistía en la redistribución de la renta de una fracción de la población trabajadora en función de las cargas familiares.

La elección del sistema de financiación estaba ligada tanto a factores técnicos como psicológicos los cuales incidían en la determinación de la elección entre un modelo de financiación basado en la recaudación de impuestos o mediante cotizaciones de las personas a las que abarcaba el subsidio. El elemento psicológico adquiría una especial importancia en el caso español en la medida en que la forma de financiación por contribución personal del asegurado permitía a cada español adquirir conciencia de su papel de contribuyente en un proyecto de salvaguardia de la familia española y de beneficiario eventual de las propias cotizaciones. Todo ello, enmarcado en un concepto de una Nación española que había de



asentarse sobre el sindicato, el municipio y la familia, permite comprender, junto a los factores técnicos que aconsejaban dicho método de financiación, la idea de la necesidad de modelar España también desde el ámbito de la política social y en torno a unos criterios tradicionalistas y católicos tendentes a hacer de la familia el núcleo central de la vida española al menos desde el terreno de las manifestaciones solemnes del régimen. No hay que olvidar el hecho de que en el caso del subsidio familiar, por un cierto matiz asistencialista o por la conciencia inicial de la fragilidad posible del sistema, se estipuló la posibilidad de que junto a la financiación por cotizaciones se incluyeran las contribuciones voluntarias y los donativos.

Por otro lado, las dificultades reales con que contaba la Caja Nacional de Subsidios Familiares se pagaba en hechos que normalmente no trascendían en los discursos desenfrenados del ministro Girón. La Ley de 18 de julio de 1938 establecía a favor de la Caja Nacional un gravamen del 10 % aplicado al exceso del 6 % en todo dividendo acordado por entidades y empresas. Continuando este desarrollo legal la Ley de 10 de diciembre de 1940 sustituía el gravamen por una subvención anual del Estado a la Caja por valor de 8 millones de pts. a partir del 1 de enero de 1940. Pues bien, ni en el presupuesto de 1941, ni en el de 1942 se consignaron dichas partidas por parte del ministerio de Hacienda.<sup>103</sup>

El *Informe sobre una política coordinada relativa al nivel de vida familiar*<sup>104</sup> hace referencia al hecho de que en muchos países se aplican sistemas de contribuciones directas, en los cuales se perciben contribuciones especiales de los asalariados mismos y de sus empleadores, a veces con la adición de subvenciones del Estado procedentes de las rentas generales. En el caso de los regímenes obligatorios por lo menos, estas contribuciones o primas constituyen en realidad impuestos especiales aplicados a grupos limitados de la población y destinados a proporcionar prestaciones especiales que no recibe el conjunto de la ciudadanía. Éste, salvo en lo referente a la adición de subvenciones del Estado procedentes de rentas generales, es el caso español. La presión impositiva sobre el conjunto de la nación no es el método de financiación del subsidio familiar español. El hecho de que sea al final de la década de los treinta y principios de los cuarenta cuando el sistema dé sus primeros pasos es un factor que ayuda a comprender la escasa ambición del proyecto en la medida en que los costes de los sistemas de seguridad ante los riesgos, ya se apliquen a toda la población o, como es el caso, a ciertas categorías de la misma, lo sufragan siempre los factores de producción y los consumidores; tras estos elementos está la productividad<sup>105</sup> y por tanto los sistemas de financiación de estas medidas de protección social entran de forma ineludible a formar parte de los costes de producción de los bienes y servicios de una España que había visto gravemente afectada su estructura productiva. Sin embargo, hay

no tener en cuenta que la incidencia en los costes no era homogénea; sobre todo si se tiene en cuenta que el basarse en un sistema de financiación asentado en una única cotización, las industrias con un uso más intensivo de mano de obra como las de base (metalurgia, edificación, extractiva) soportaban mayores cargas sociales que las industrias más mecanizadas. El tamaño del Estado, del aparato administrativo, el presupuesto, unido a la cuestión de la política fiscal, se convierte en un problema, como tal, en una cuestión como la política social con respecto a la familia, que no constituye un elemento aislado, y que más bien al contrario, se ve determinada por los cambios en la estructura económica y social, y en los presupuestos, que en el caso español, tras la guerra, se produjeron, prospectiva, en su momento.

## Notas

- <sup>1</sup> Rebollo González, op. cit., pág. 75.
- <sup>2</sup> Jordana de Pozas, Política..., op. cit., pag. 15.
- <sup>3</sup> Idem, pag. 33-36.
- <sup>4</sup> Quetglas Gaya, Las Cajas de Subsidios..., op. cit., pag. 34.
- <sup>5</sup> Bestard Comas, Juan: Un precursor de los subsidios familiares en España. El P. Bartolomé Quetglas. Revista Iberoamericana de Seguridad Social, septiembre-octubre de 1964, separata del nº 5, pág. 4.
- <sup>6</sup> Quetglas Gaya, Las Cajas..., op. cit., pag. 7.
- <sup>7</sup> Idem, pag. 7.
- <sup>8</sup> Quetglas Gaya, Las Cajas..., op. cit., pág. 9.
- <sup>9</sup> Leal Ramos, La familia..., op. cit., pág. 14.
- <sup>10</sup> Bestard Comas, op. cit., pag. 6.
- <sup>11</sup> Aznar Embid, Del salario..., op. cit., pág. 38.
- <sup>12</sup> Jordana de Pozas, Política..., op. cit., pág. 18.
- <sup>13</sup> Bestard Comas, op. cit., pág. 9.
- <sup>14</sup> Aznar Embid, Del salario..., op. cit., pag. 41.
- <sup>15</sup> Idem, pag. 45.
- <sup>16</sup> Idem, pag. 43.
- <sup>17</sup> G. Pinedo, José: Los subsidios familiares en el extranjero I. Boletín de Información del Instituto Nacional de Previsión, Madrid, abril 1942, nº 4, pag. 3.
- <sup>18</sup> Aznar Embid, Del salario..., op. cit., pág. 67.
- <sup>19</sup> Bestard Comas, op. cit., pág. 10.
- <sup>20</sup> Quetglas Gaya, Las Cajas..., op. cit., pág. 14.
- <sup>21</sup> Ha sido imposible encontrar dicha publicación.
- <sup>22</sup> Quetglas Gaya, Las Cajas..., op. cit., pág. 17.
- <sup>23</sup> Bestard Comas, op. cit., pág. 11.
- <sup>24</sup> Maillet, Hacia un sistema..., op. cit., pág. 509.
- <sup>25</sup> Girón de Velasco, La elevación de los pluses..., op. cit., pag. 50.
- <sup>26</sup> Girón de Velasco, Escritos..., Tomo IV, op. cit., pág. 231.
- <sup>27</sup> Pérez Leñero, José: Instituciones del Derecho español de Trabajo. Madrid, 1949, pág. 349.
- <sup>28</sup> Rebollo González, op. cit., pág. 79.
- <sup>29</sup> Aznar Embid, Del salario..., op. cit., pág. 53.
- <sup>30</sup> Aznar Embid, Severino: Qué es el régimen de subsidios familiares. Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión, 1944, nº 1, pág. 13.
- <sup>31</sup> Aznar Embid, Del salario familiar..., op. cit., pág. 54.
- <sup>32</sup> Aznar Embid, Qué es el régimen..., op. cit., pág. 13.
- <sup>33</sup> Idem, pag. 14.
- <sup>34</sup> Idem, pag. 71.
- <sup>35</sup> Idem, pag. 62.

- <sup>60</sup> Rebollo González, op. cit., pag. 62-71.
- <sup>61</sup> Idem.
- <sup>62</sup> Giron de Velasco, Escritos..., Tomo II, op. cit., pag. 85.
- <sup>63</sup> Idem, pag. 115.
- <sup>64</sup> Idem, pag. 115-116.
- <sup>65</sup> De Tapia, Blas: Los subsidios familiares en el plan Beveridge de seguro social unificado. Boletín de información del Instituto Nacional de Previsión, 1943, nº 5, pag. 22.
- <sup>66</sup> Beveridge, William: Seguro social y servicios afines, Madrid, ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989, pag. 8.
- <sup>67</sup> Idem, pag. 259.
- <sup>68</sup> De Tapia, op. cit., pag. 24.
- <sup>69</sup> Giron de Velasco, Escritos..., Tomo IV, op. cit., pag. 167.
- <sup>70</sup> Aznar Embid, Del salario..., op. cit., pag. 58.
- <sup>71</sup> Estudios y conclusiones, fascículo nº 26, op. cit., pag. 61.
- <sup>72</sup> Leal Ramos, La familia..., op. cit., pag. 16-17.
- <sup>73</sup> Rebollo González, Subsidios..., op. cit., pag. 60-61.
- <sup>74</sup> G. Pinedo, Los subsidios..., I, op. cit., pag. 1.
- <sup>75</sup> Idem, pag. 1.
- <sup>76</sup> Giron de Velasco, Escritos..., Tomo I, op. cit., pag. 42-44.
- <sup>77</sup> II Jornadas técnicas sociales, op. cit., pag. 8.
- <sup>78</sup> Idem, pag. 25.
- <sup>79</sup> Leal Ramos, op. cit., pag. 14.
- <sup>80</sup> Idem, pag. 16.
- <sup>81</sup> Idem, pag. 15.
- <sup>82</sup> Jordana de Pozas, Política..., op. cit., pag. 10.
- <sup>83</sup> Perez Botija, Los salarios en relación con la familia..., nº 37, op. cit., pag. 1137.
- <sup>84</sup> Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 1952. Revista de Trabajo, septiembre de 1952, pag. 922.
- <sup>85</sup> Elorriaga, Acción familiar, op. cit., pag. 49.
- <sup>86</sup> Jordana de Pozas, Política..., op. cit., pag. 11.
- <sup>87</sup> Elorriaga, Acción..., op. cit., pag. 49.
- <sup>88</sup> Giron de Velasco, La elevación..., op. cit., pag. 50.
- <sup>89</sup> Aznar Embid, Qué es el régimen..., op. cit., pag. 12.
- <sup>90</sup> Idem, pag. 12-13.
- <sup>91</sup> Jordana de Pozas, Política, op. cit., pag. 14.
- <sup>92</sup> Aznar Embid, Del salario..., op. cit., pag. 29-47.
- <sup>93</sup> Idem, pag. 34.
- <sup>94</sup> Rebollo González, Subsidios..., op. cit., pag. 100-107.
- <sup>95</sup> Idem, pag. 102.
- <sup>96</sup> Los regímenes de asignaciones familiares y los problemas originados por las relaciones entre las asignaciones familiares y las demás ramas de la seguridad social. Ginebra, A.I.S.S., Secretaría General, Informe XV, XVª Asamblea General (Washington, D.C., septiembre-octubre, 1964), 1965, pag. 17.
- <sup>97</sup> Las asignaciones familiares. Evolución de la legislación sobre Asignaciones Familiares desde 1953. Ginebra, Asociación Internacional de Seguridad Social, Secretaría General, Informe XVI, XVª Asamblea General (Washington D.C. sept.-oct. 1964), 1965, pag. 7-8.
- <sup>98</sup> Aranzadi, op. cit., 1180/1938.
- <sup>99</sup> Aznar Embid, Para quién..., op. cit., pag. 304.
- <sup>100</sup> G. Pinedo, Los subsidios familiares..., op. cit., pag. 3-5.
- <sup>101</sup> Idem, pag. 13.
- <sup>102</sup> G. Pinedo, José. Los subsidios familiares en el extranjero II. Boletín de información del Instituto Nacional de Previsión, junio de 1942, nº 6, pag. 2.
- <sup>103</sup> Aznar Embid, Para quién..., op. cit., pag. 307.
- <sup>104</sup> Idem, pag. 310.
- <sup>105</sup> Idem, pag. 312.
- <sup>106</sup> Idem, pag. 313.
- <sup>107</sup> Borrajo Dacruz, Efrén: Revisión y actualización de la ley de familias numerosas. Unión Nacional de Asociaciones Familiares Cuadernos de documentación, 1967, pag. 76.

- <sup>84</sup> Aranzadi, op. cit., 1082/1954.
- <sup>85</sup> Aranzadi, op. cit., 1180/1938.
- <sup>86</sup> Las asignaciones familiares. Ginebra, Asociación Internacional de Seguridad Social, Secretaría General, Informe II, XI Asamblea General ( París 7-11 sept. 1953 ), 1954, pag. 5.
- <sup>87</sup> Seguridad social y prestaciones familiares. Balance del sistema francés de seguridad social. Revista de Trabajo, marzo de 1956, nº 3, vol. 1, pág. 223.
- <sup>88</sup> Rebollo González, op. cit., pág. 100.
- <sup>89</sup> Aranzadi, op. cit. 499/1942.
- <sup>90</sup> Informe sobre una política coordinada..., op. cit., pág. 37-38.
- <sup>91</sup> Las asignaciones familiares, op. cit., pág. 66-68.
- <sup>92</sup> Informe sobre una política coordinada..., op. cit., pág. 50.
- <sup>93</sup> Las asignaciones familiares. Evolución de la legislación..., op. cit., pág. 110.
- <sup>94</sup> De Tapia, op. cit., pág. 26.
- <sup>95</sup> Aznar Erribid, Del salario familiar..., op. cit., pág. 54-55.
- <sup>96</sup> Aranzadi, op. cit., 499/1942.
- <sup>97</sup> Aranzadi, op. cit., 75/1949.
- <sup>98</sup> Seguridad social y prestaciones familiares. Balance..., op. cit., pág. 226.
- <sup>99</sup> G. Pinedo, José. Los subsidios familiares en el extranjero. Conclusión. Boletín de Información del Instituto Nacional de Previsión, julio 1942, nº 6, pág. 3.
- <sup>100</sup> G. Pinedo, Los subsidios..., op. cit., pág. 7.
- <sup>101</sup> De Tapia, op. cit., pág. 23.
- <sup>102</sup> Aranzadi, op. cit., 511/1944.
- <sup>103</sup> A.G.P., J.E., Leg. 59, nº 2, pág. 5.
- <sup>104</sup> Informe sobre una política coordinada..., op. cit., pág. 51.
- <sup>105</sup> Ídem, pág. 53.

## **Capítulo 7. Las ramas del Régimen Obligatorio del Subsidio Familiar.**

Consiste este capítulo en hacer una exposición de los aspectos de carácter legislativo más destacados de la política familiar del franquismo en el periodo que va del año 1938, con el nacimiento de la Ley de subsidios familiares, hasta el año 1957. En cuanto al Ministerio de Trabajo se refiere se recorrerán las épocas de González Bueno, Benjumea Burín y sobre todo de Girón de Velasco.

Previamente al repaso de las disposiciones más destacadas en relación a la política familiar hemos aludido a las manifestaciones solemnes del régimen franquista que constituyen el marco de referencia obligado para las leyes a las que habremos de hacer alusión. Como ya se ha dicho el Fuero del Trabajo y el Fuero de los Españoles disponen en sus articulados de referencias que proyectan una determinada idea de lo que la familia había de ser dentro del régimen y que amparaban el desarrollo legislativo posteriormente llevado a cabo en torno a esta cuestión.

Una aproximación general permite hablar de una serie de disposiciones que vertebran en lo fundamental el tema señalado:

- 1.- Régimen laboral de ayudas familiares. Encontramos dentro de éste el régimen de subsidios familiares para trabajadores por cuenta ajena (Ley de 18 de julio de 1938<sup>1</sup>); en el campo se aplicaba el régimen especial de seguros sociales agropecuarios (Ley de 10 de febrero de 1943<sup>2</sup>, sin olvidar por ello la de 1 de septiembre de 1939); y para los pescadores regía el Decreto de 29 de septiembre de 1943.
- 2.- Régimen de ayuda familiar para funcionarios de la administración civil del Estado (Ley de 15 de julio de 1954).
- 3.- Régimen de indemnización familiar para funcionarios militares (Decreto de 2 de marzo de 1943, art. 4º de Ley de 18 de diciembre de 1950, Decreto de 23 de noviembre de 1951<sup>3</sup>).
- 4.- Régimen de ayuda familiar para funcionarios de la administración local (Ley de 27 de diciembre de 1956).

## 7.1. El Régimen General.

### *7.1.1. La ley de subsidios familiares de 18 de julio de 1938 y su evolución posterior.*

La Ley de 18 de julio de 1938<sup>4</sup> estableció con carácter obligatorio el subsidio familiar. En dicha disposición se establecía que era “consigna rigurosa de Nuestra Revolución elevar y fortalecer la familia en su tradición cristiana, sociedad natural perfecta y cimiento de la Nación...” Se imponía la necesidad de establecer, al menos formalmente, una oferta diferenciada del modelo de sociedad denostado por los vencedores de la Guerra Civil, frente al denigrado individualismo imperante desde el siglo XIX considerado como el destructor de los más puros principios inherentes a lo español, entre ellos la familia. Así se recurría al amalgamamiento del sindicato, el municipio y la familia como elementos vertebradores de la nación española dentro del nuevo modelo de sociedad ofertada como revolucionaria y en la que la familia, como elemento básico de la triada, habría de tener un marco normativo amparador de su desarrollo y fortalecimiento. Y aquélla, considerada como célula primigenia del todo social, recibía su primer impuso formal, o mejor dicho, normativo, desde la promulgación de la ley a la que nos hemos referido.

Consecuencia de todo ello era la apología teórica del salario familiar y del hecho de que el trabajador había de recibir una remuneración que, aunque con un referente básico en la cantidad y calidad de su trabajo, tuviera un complemento fundamentado en principios ausentes en la economía de mercado como el volumen y necesidades de su familia, dado que beneficiar a ésta como célula básica era beneficiar a la propia comunidad nacional. Aparte de estas consideraciones la ley exponía como uno de los criterios que la guiaba conseguir que las mujeres españolas, consideradas únicamente en su dimensión de madres, se vieran libres del taller y de la fábrica para que, en línea con el Fuero del Trabajo, pudieran dedicarse en exclusiva a lo que constituía su principal función y aquella en la que se sentirían plenamente realizadas: la procreación y el cuidado de las hijos e hijas como arma fundamental de la nación:

“En cumplimiento de la anterior misión ha de otorgarse al trabajador (sin perjuicio del salario justo y remunerador de su esfuerzo) la cantidad de bienes indispensables para que, aunque su prole sea numerosa (y así lo exige la Patria), no se rompa el equilibrio económico de su hogar y llegue la miseria, obligando a la madre a buscar en la fábrica, o taller un salario con que cubrir la insuficiencia del conseguido por el padre, apartándola de su función suprema e insustituible que es la de preparar sus hijos, arma y base de la Nación, en su doble aspecto espiritual y material”<sup>5</sup>.

Se recalca el carácter nacional de un régimen que seguía un criterio laboral en cuanto a la asignación de beneficios a sus asegurados. Resalta la disposición a que nos referimos, el carácter armónico de su concepción de lo social. En torno a dicha idea, el subsidio familiar, resultaba un dispositivo tendente a fortalecer la célula básica de la sociedad por medio de la ayuda material, lo cual irradiaría al ámbito de lo social un halo pacificador y fortalecedor del mismo alejado de la esencia conflictivista de la denostada República en que, según el régimen, se diluía el cuerpo social a medida que la familia se veía torpedeada en sus más íntimas necesidades económicas y materiales. Esa es la idea que hacía del subsidio una gran mutualidad, basada en el principio de solidaridad y hermandad entre las familias españolas, lo cual suponía imponer el principio de obligatoriedad superador de los regímenes de libertad subsidiada:

“El principio de hermandad entre los hombres de España exige que el Régimen de Subsidios sea una Obra Nacional, y por ello se realiza con un sentido y un orden en los que impera la unidad... Se establece con carácter obligatorio, se funda en el principio de la compensación, en desvincular del salario el subsidio, en diluir los riesgos en una gran mutualidad nacional y en que el subsidio sea compensación de la carga familiar y esté en relación con su volumen, con lo que resultan más amparadas las familias más numerosas”<sup>6</sup>.

El reglamento de la ley fue aprobado por Decreto de 20 de octubre de 1938<sup>7</sup>; éste estipulaba que el subsidio familiar empezara a funcionar en febrero del 1939.

La ley estipulaba que sólo los trabajadores por cuenta ajena gozarían de los privilegios de estos subsidios dejando fuera de ellos a un amplio número de familias españolas. Entre estas las familias cuya economía dependiera del trabajo doméstico, cuya exclusión se produjo en los primeros momentos de desarrollo de este sistema de protección familiar. El Decreto de 10 de noviembre de 1942<sup>8</sup> incorporaba a la trabajadora o trabajador doméstico al subsidio familiar amparándose en el hecho de que, una vez desaparecidos los motivos coyunturales que influyeron en su discriminación, era de justicia su incorporación. En esta línea la Ley de 19 de julio de 1944<sup>9</sup> concedía a los trabajadores domésticos el subsidio familiar, de vejez y los seguros de accidentes y de enfermedad. El marco que amparaba dichas disposiciones revelaba un mundo anclado en patrones progresivamente caducos pero con permanencias evidentes por las cuales la servidumbre, en el aspecto formal, no necesariamente de hecho, era considerada como una prolongación de la familia. En principio, esta motivación era un asidero supuestamente firme para no extender a este grupo de trabajadores los beneficios de las leyes sociales.

Sin embargo, no se explica la exclusión del trabajador mas que por los mismos motivos que originaron la dificultad de aplicación del subsidio familiar al ámbito agrícola. La dificultad para establecer un censo riguroso y fehaciente sobre el cual se pudieran realizar los cálculos actuariales probablemente fue el factor que determinó su no inclusión.

Únicamente los menores de 14 años gozaban de las prestaciones dentro de una escala que unicamente comenzaba a considerar a la familia susceptible de recibir las asignaciones familiares a partir del segundo hijo y acorde a la siguiente escala:

Número de hijos	Subsidio mensual	Subsidio semanal	Subsidio diario
2	15	3,75	0,65
3	22,50	5,65	0,95
4	30	7,50	1,25
5	40	10	1,65
6	50	12,50	2,10
7	60	15	2,50
8	75	18,75	3,15
9	90	22,50	3,75
10	105	26,25	4,40
11	125	31,25	5,20
12	145	36,25	6,05

*\*Cuadro n° 7. Escala de prestaciones en pesetas según la ley de 18 de julio de 1938.*

Esta política reflejaba la preocupación del Estado por la cuestión demográfica y por el amparo a la familia, más incluso que la preocupación por el justo salario o por el salario familiar, y de ahí la trascendencia de la cuota del asegurado. Por otro lado, el talante progresivo de las prestaciones recalcaba más si cabe el talante demográfico y natalista de la política familiar.

Se establecía, igualmente que por cada hijo o asimilado que excediera de 12 se adicionarían 25 pts. mensualmente. Para entender lo que cuantitativamente significaba dicha elevación a manera de sobresueldo sobre la retribución mensual, y teniendo en cuenta que no abarcaba, ni mucho menos, a todas las familias españolas, basta con hacer alguna incursión en el nivel de precios en la época de referencia. Tengamos en cuenta que las consideraciones de los precios a los que vamos a aludir son al por mayor, lo cual en algunos casos pone de manifiesto el escaso peso efectivo de los subsidios familiares. Así, podemos observar que con las 15 pts. mensuales que se concedía a la familia de dos hijos sería difícil elevar de forma sustancial el nivel de vida familiar de la familia española<sup>10</sup>. Utilizaremos como variable de referencia el kilogramo de carne de vaca; la arroba (11,5 kg.) en canal a precios al por mayor de dicho producto arrojaba



en precio en 1938 de 52,84 pts. En torno a esta cuestión tengamos en cuenta varios elementos. En primer lugar, que la capacidad del aparato estadístico para ponderar cada una de las variables ofrece ciertas dudas entre otros motivos por los graves problemas de abastecimiento durante la Guerra Civil y el periodo de posguerra, de lo cual podemos deducir que las distorsiones entre la oferta y la demanda, sin entrar a considerar los precios posibles al por menor o sus diferencias en distintos puntos de la geografía nacional, se acentuarían de tal forma que el precio al por mayor del producto señalado, unas 4,5 pts., debería de dispararse haciendo muy difícil que una unidad familiar de cuatro miembros, como la considerada, pudiera elevar su renta mensualmente lo suficiente con el subsidio familiar como para poder adquirir un kg. de carne de vaca al mes. Puestos en estos términos, el subsidio familiar tendría un carácter puramente simbólico.

De las ingentes dificultades para la simple elaboración de un censo riguroso que permitiese tratar estadísticamente la relación entre prestaciones e ingresos y la aplicación de la técnica actuarial da cuenta la Circular de 17 de noviembre de 1941<sup>11</sup> de la Subsecretaría de Educación Nacional que, partiendo de la ausencia de voluntad o posibilidad por parte de sus departamentos para presentar los datos necesarios para la elaboración del censo ya en el año 1941, solicita a sus habilitaciones que cumplieren lo estipulado en disposiciones anteriores que inciden en la necesidad de conseguir datos estadísticos fiables.

### ***7.1.2. La modificación de las prestaciones en el subsidio familiar.***

El Decreto de 22 de febrero de 1941<sup>12</sup> suponía la primera alteración importante del subsidio familiar en el sentido de que una vez asentado el régimen y sus bases financieras procedía elevar en un 100% la escala de percepciones. Destacaba el hecho de que la elevación tenía un carácter retroactivo y que las familias recibieron un 50% de los subsidios otorgados desde que entraron a formar parte de él hasta marzo del 1941. Además permitía establecer sin nuevos recargos los subsidios de orfandad y viudedad, así como los préstamos de nupcialidad amparados en la idea de la necesidad de potenciar la creación de familias y la natalidad en España. En el caso de los funcionarios del Estado, provincia y municipios era también la Caja Nacional la que aportaba los fondos para la concesión de estos nuevos beneficios. Esto suponía que frente a las 4,5 pts./kg. de 1938, el precio del kg. de carne de vaca al por mayor se situaba en las 6,5 pts. y que atendiendo a la duplicación en las percepciones de la escala los subsidios familiares tenían un valor relativo superior al de 1938 en la medida en que, si hacemos caso a las cifras del Boletín de Estadística, los precios no se habían duplicado en términos reales. Sin embargo, suponiendo que la puesta del producto en el mercado supusiera tan sólo una elevación del doble del precio al por mayor, una unidad familiar sólo podría adquirir con el subsidio familiar unos dos kg. de

carme al mes, partiendo de su disponibilidad en el mercado y de la inexistencia de mayores elevaciones de los precios ligada a prácticas especuladoras o estraperlistas.

Nº de hijos	Escala mensual 1938	Escala mensual 1941	Escala mensual 1943	Escala mensual 1955
2	15	50	40	60
3	22.50	45	65	90
4	30	60	90	130
5	40	80	120	175
6	50	100	160	250
7	60	120	280	350
8	75	150	400	475
9	90	180	540	630
10	105	210	700	1200
11	125	250	880	2500
12	145	290	1080	4500

\*Cuadro nº 8. Modificación de las escalas del subsidio familiar.

La siguiente modificación de escalas se llevó a cabo por Decreto de 27 de julio de 1943<sup>13</sup>. Suponía éste una elevación progresiva consistente en un 33 % con respecto a la escala de 1941. Haciendo uso de nuevo de una variable que sirva para ponderar el peso en la economía familiar de estos subsidios como la carne en la alimentación, observamos, teniendo siempre en cuenta que nos referimos a precios al por mayor y considerando las rigideces del mercado, con las consiguientes elevaciones desproporcionadas en los precios al por menor, lo siguiente: al por mayor el precio del kg. de vaca se situaba en las 6,7 pts., lo cual suponía una elevación en términos reales de un 3% sobre los precios de 1941, que unido a la elevación en una 33% de la escala suponía una elevación considerable de la misma y el comienzo de la salida del subsidio de los términos simbólicos en que se desenvolvía. Por cada hijo que excediera de 12 se añadían 200 pts. mensuales si bien eran muy pocas las familias en dichas condiciones.

La siguiente elevación de las escalas se llevó a cabo por Decreto de 2 de septiembre de 1955<sup>14</sup> según un proyecto<sup>15</sup> que fue aprobado en su integridad por el Consejo de Ministros. Suponía una elevación del 50 % con respecto a la escala de 1943. Se produjo, sin embargo, un salto cuantitativo de singular trascendencia en los años cincuenta a los que nos referimos. Continuando con la variable de referencia que hemos escogido (el kg. de carne de vaca), se situaría a algo más de 19 pts. el kg. lo cual supondría, con respecto a 1943, una elevación de un

187 %. La pérdida de poder adquisitivo, comparando con la elevación de la escala, nos pone ante un marco inflacionista que imposibilitaba que los subsidios familiares cumplieran con el objetivo de salvaguardar a la familia y su bienestar. Por cada hijo que superara los doce se otorgaban 3.000 pts. más de subsidio; algo difícil de percibir en los beneficios de las familias españolas en la medida en que pocas llegaban a esas cifras de descendientes.

Una examen del incremento en el coste de la vida permite constatar el hecho de que, tomando como base el año 1940 con índice 100, en el año 1955 los precios se habían situado en un índice por encima del 341; concretamente los referidos a la alimentación en un índice por encima del 358 y los del vestido en un índice 420. O lo que es lo mismo, la diferencia entre las prestaciones de 1938 a 1941 consistía en una elevación de un 100 %, lo cual parecía significativo a no ser que se tuviera en cuenta que el incremento del coste de la vida se había situado entre 1939 y 1941 en un 50,7 %. De igual manera de 1943 a 1941 (segunda modificación de escalas) se produjo un incremento del 33,3 % unido a un aumento del coste de la vida de un año a otro de un 6,2 %. Situémonos ahora en 1955; la modificación de la escala de prestaciones suponía un crecimiento del 50 % frente a una subida del coste de la vida de un 146,9 %. La diferencia en este caso era abismal. A pesar de ello la comparación de las escalas y niveles del coste de la vida de los años mencionados permite observar que de 1938 a 1955 la modificación de las escalas supuso un incremento del 300 % y que la elevación del coste de la vida había sido de un 295,5 %. Sin embargo, tengamos en cuenta lo que significó que dichas escalas no se modificaran desde 1943 a 1955. Consideremos también que ya en 1946 la comparación con el nivel de precios de 1943 mostraba como el índice del coste de la vida se había incrementado en un 46,5 %. En el año 1947 la elevación con respecto a 1943 era del 72,5 %, lo cual demuestra que se continuaba perdiendo capacidad adquisitiva en lo tocante a este subsidio hasta el año 1955 en que se modificaron las escalas. Y demuestra en segundo lugar, que la relación entre el aumento de la escalas y el nivel de precios entre 1939 y 1955 permaneció casi inamovible si nos situamos al principio y al final de dicho período, lo cual indica la ausencia de voluntad o la incapacidad política para, por medio del subsidio familiar, materialización teórica del salario familiar, elevar el nivel de vida de las familias españolas.

### ***7.1.3. Evolución cuantitativa del Régimen General.***

Lo que primeramente se observa en el Régimen General es la progresión en los primeros años de aplicación del subsidio; progresividad palpable en el hecho de un comienzo con relativamente pocos subsidiados con respecto a lo que fue su culmen en el año 1942 con la superación plena de los quinientos cincuenta y cinco mil subsidiados (Gráfico nº 1).

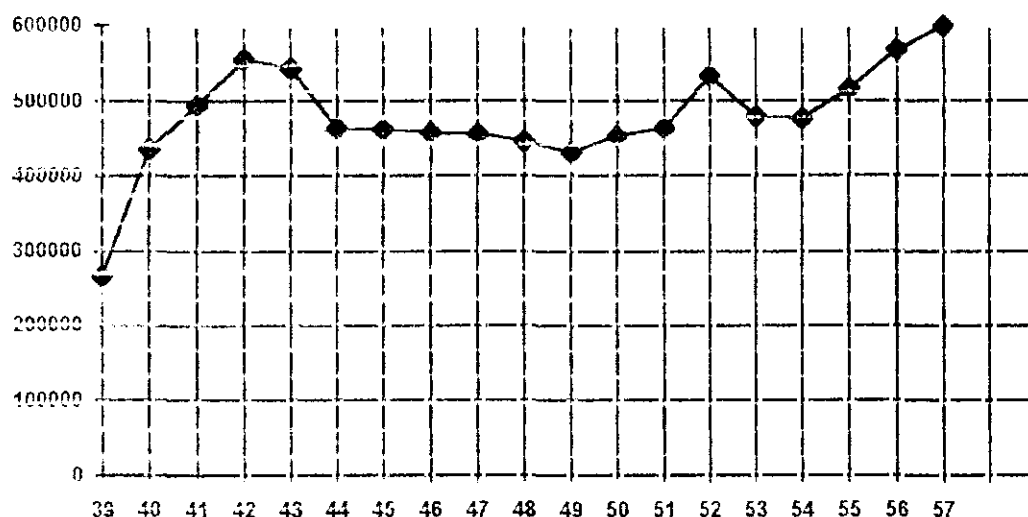


Gráfico n° 1. Evolución de los subsidiados del Régimen General de Subsidios Familiares.

Las dificultades en la aplicación de la ley, las insuficiencias del aparato estadístico o la falta de colaboración de las empresas unida a las dificultades inspectoras parecen explicar el lento camino hacia unos niveles de subsidiados semejante a la media existente en la década de los cuarenta y situada en los 456.388. Mientras tanto, en el año 1939 se superaba escasamente el cuarto de millón, tras lo cual los sucesivos aumentos, ligados a la puesta en práctica del subsidio familiar, llegarían a su cima en el mencionado año 1942.

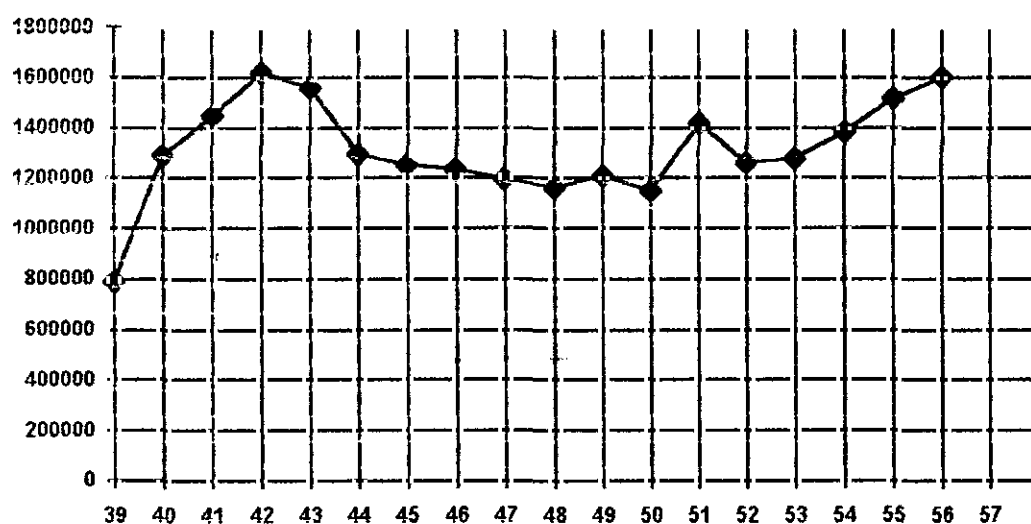
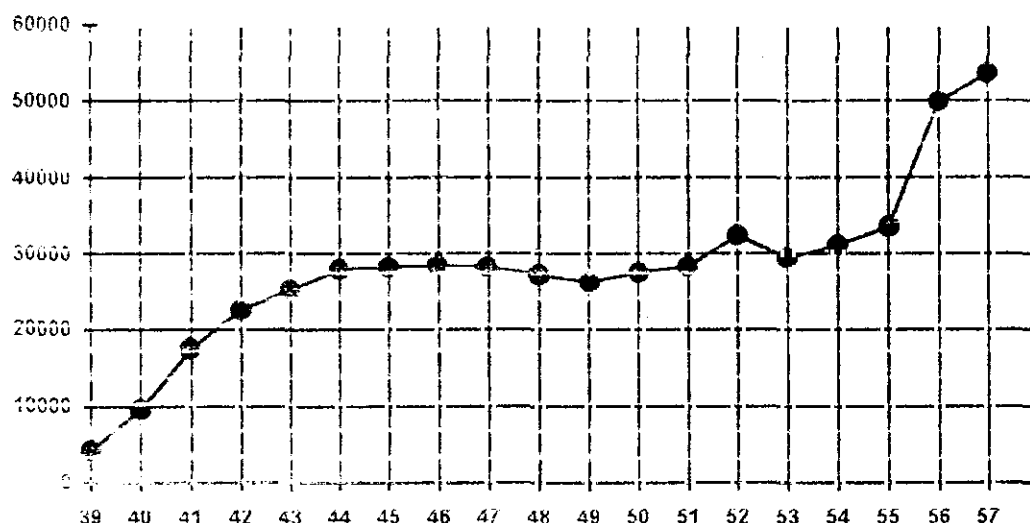


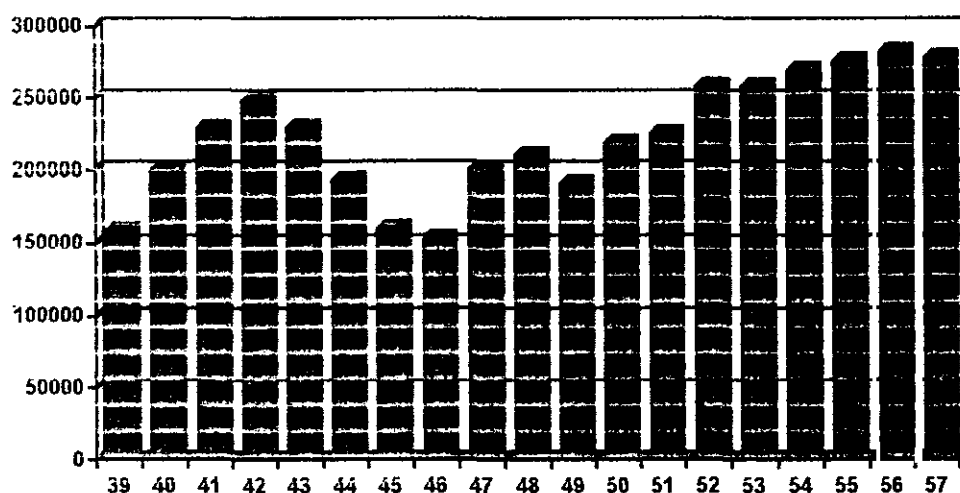
Gráfico n° 2. Evolución de los beneficiarios de la Rama General.

En paralelo, el número de beneficiarios (Gráfico n° 2) experimentó una evolución similar en estos años cuarenta expresando miméticamente el ascenso o descenso en el número de subsidiados, lo cual permite deducir que el número de miembros familiares mantenidos por el subsidiado y susceptibles de recibir el subsidio familiar era no muy dispar en líneas generales.



*Gráfico nº 3. Evolución de los subsidios de la Rama General en miles de pta.*

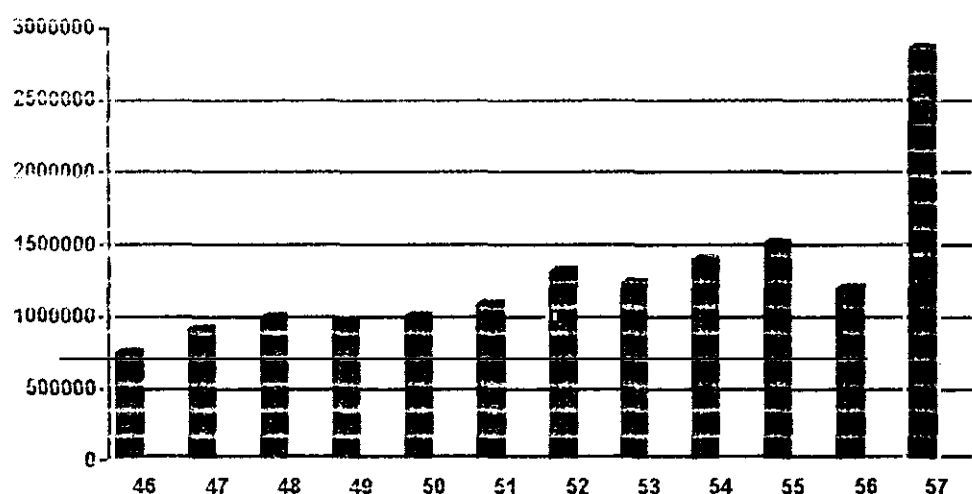
En cuanto a las prestaciones, en el Gráfico nº 3 se observa una primera etapa ascendente ligada a la implantación del subsidio, no coincidente con las tendencias del número de subsidiados o de beneficiarios en este primer período de la década de los cuarenta. En la década de los cincuenta la tendencia al incremento o decremento de las prestaciones globales se sitúa en la misma línea que el número de subsidiarios y beneficiarios con un máximo en el año 1957 por encima de los 53 millones.



*Gráfico nº 4. Evolución del número de empresas afiliadas al Régimen General.*

Una vez llegado a la cima del año 1942 se produce un descenso en el número de subsidiados hasta el año 1949; de 1944 a 1949 la cifra media de subsidiados se sitúa por encima de los 450.000 (en concreto 466.148). Ello coincide con la menor cotización de las empresas al Instituto Nacional de Previsión (Gráfico nº 4). En el período de 1939 a 1942 el número de empresas cotizantes pasa de 158.036 a 248.137 y en paralelo a la evolución del número de

subsidios desde 1940 comienza un declive que tiene su fondo en el año 1946 con algo más de 150.000 empresas cotizantes. Podemos atribuir la dispar evolución del número de empresas en la cotización, tanto a las dificultades económicas de posguerra como a la falta de colaboración de las empresas amparadas en las dificultades inspectoras de un Estado pequeño en lo referente al aparato de previsión y al control e inspección del mismo. A partir de 1950 el número de subsidiados se elevó con un máximo en el año 1952 que, seguido de unos niveles más próximos a los de la década de los cuarenta, dio paso a una línea ascendente que culminó en el año 1957 con unas cifras próximas a los 600.000 subsidiados y unos beneficiarios en torno a los 1,6 millones. En este sentido la evolución del número de empresas cotizantes experimentó un incremento desde 1947 con un descenso mínimo en el año 1949 y un continuo ascenso que situó el número de empresas cotizantes por encima de las 250.000 con un máximo en 1956 (282.686).



*Gráfico n° 5. Recaudación por cuotas de 1946 a 1957 en la Rama General*

La evolución de las cuotas (Gráfico n° 5) manifiesta un perfil ondulante en la década que va de 1946 a 1956 con un máximo en 1955 en torno a los 1,5 billones y un tope en el año 1957 situado en torno a los 2,8 billones.

## **7.2. La rama agropecuaria y de trabajadores del mar.**

### **7.2.1. La rama agropecuaria.**

La Ley de 1 de septiembre de 1939<sup>16</sup> hacía referencia al marco de dificultades en que se desenvolvía la aplicación de los subsidios familiares en el campo sobre todo por el elevado porcentaje de eventuales. Para solucionar este problema se optó por establecer un sistema indirecto de imposición relacionado con la contribución territorial, ligado a la productividad del terreno y a la proporción de obreros contratados por el patrono, y cobrado por medio de la

contribución territorial. El sistema empezó a regir desde el 1 de enero de 1940. Tenían derecho a esta modalidad los trabajadores agrícolas y pecuarios por cuenta ajena y los que, trabajando directamente, no tuvieran asalariados permanentes ni servidores domésticos.

Las dificultades no obedecían únicamente por el carácter de autónomos de un gran número de los trabajadores del campo sino también por la escasa colaboración del empresariado agrícola, lo cual condujo al Ministerio de Trabajo a establecer, por medio de la Ley de 6 de septiembre de 1940<sup>17</sup>, un mecanismo de apremio para la recaudación de las cuotas, lo cual suponía, ni más ni menos, que la capacidad de recaudación por procedimiento directo. De las dificultades para llevar al campo los subsidios de cuenta también el hecho de que fuera a las Juntas municipales y vecinales a las que se les concediera la facultad de elaborar el censo de las empresas agrícolas que debían afiliarse al régimen, las cuales por Ley de 10 de febrero de 1943<sup>18</sup>, y previa derogación de la de 1 de septiembre de 1939<sup>19</sup>, ya en época Girón, pasaron a pagar sus cuotas simultáneamente a la contribución territorial rústica.

Las operaciones en la rama agropecuaria se separaron del régimen general en 1943. La distinción básica venía determinada por el hecho de que abarcaba no sólo a los trabajadores por cuenta ajena sino también a los autónomos. Este hecho, junto a otros de quizás más relevancia, contribuyeron a que Girón de Velasco presentara un informe al Jefe del Estado en el que ponía de manifiesto las obstaculizaciones que el Ministerio de Hacienda, encabezado por Benjumea Burín, estaba poniendo a la política del Ministerio de Trabajo.<sup>20</sup> Se ponía de manifiesto con claridad la zanja existente entre los planteamientos voluntaristas de Girón y del Ministerio de Trabajo y la realidad que ponía de manifiesto que la Revolución nacional-sindicalista que él pretendía llevar a cabo tropezaba con planteamientos que él consideraba vencidos en las trincheras durante la Guerra Civil. Se traicionaba así la línea de justicia formal que supuestamente se había establecido en el Fuero del Trabajo. Pero, como ya he mencionado, la realidad del país orientaba la política del Ministerio de Trabajo por otros arrabales, incluso cuando al sector más voluminoso de la población activa se refería:

“La extensión de sus beneficios (*los del subsidio familiar*) a los trabajadores del campo, que constituyen la mayoría de la población obrera española, no ha podido llevarse a efecto por haber prevalecido el criterio del actual Ministro de Hacienda...”<sup>21</sup>

El apartamiento de los agricultores del régimen general y el establecimiento de una cuota con cargo a los empresarios proporcionada a la contribución territorial suponía el escoramiento de lo que pretendía ser un seguro social hacia un sistema más asistencial en la medida que las cuotas de los potenciales beneficiarios daban paso a un sistema de exacción cuya finalidad era sacar de la penuria a los más necesitados. Esto en la mentalidad de José Antonio Girón de

Velasco suponía un paso atrás en la medida en que esta orientación había sido la que entre 1919 y 1922 había defendido con éxito las Cámaras Agrícolas de cara al establecimiento del Régimen Obrero Obligatorio. “Y, sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha conseguido mantener aquella orientación para el Subsidio Familiar campesino”, condenaba Girón.

Tenia el seguro una ventaja fundamental sobre las cajas de compensación. En principio era posible extender sus beneficios no sólo a los trabajadores asalariados, sino también a los autónomos y sobre todo a pequeños agricultores que trabajan tierras que no eran de su propiedad. En España, el conflicto social en el campo lleva a Aznar Embid a firmar que atender a dichas demandas supone “procurar así más vigor a la vida de la Nación, de la raza, de la especie”. Subraya, por tanto, el autor una idea de nación que, siguiendo criterios darwinistas, incide en el hecho de que por medio de lo puramente normativo había que aunar esfuerzos para asegurar el porvenir de la raza, lo cual conllevaba la idea de promover una política de tintes natalistas, en la medida en que en el fundamento de la fortaleza o la decadencia de una nación se encontraba el buen o mal estado en que se hallase la masa humana que la componía.

En cuanto a la administración financiera, las cuotas eran pagadas exclusivamente por los patronos, en lugar de forma mixta, y en función de cuotas proporcionales a la contribución territorial, en vez de en función de los salarios.

En cuanto al pago, ejerció su función colaboradora la Obra Sindical de Previsión Social. La presencia de dicha institución en el marco de la expansión de los seguros sociales tenía una trascendencia básica para el ministro que abarca con su presencia el periodo que mayoritariamente se trata en este estudio: Girón de Velasco. Y ello porque “el encuadramiento en la Organización sindical de todos los trabajadores agrícolas, forestales y pecuarios a que obligaba la extensión del Subsidio Familiar en la Agricultura”<sup>23</sup> constituía la base para afrontar la unificación administrativa que tenía como meta el seguro total, fin expuesto en la Declaración II del Fuero del Trabajo.

El reglamento para la aplicación del subsidio familiar en la agricultura nació por Decreto de 26 de mayo de 1943<sup>24</sup>. Se establecía la separación entre los fondos de los restantes regímenes del subsidio familiar y el especial creado para la agricultura manteniéndose, por tanto, la compensación y solidaridad entre los trabajadores incluidos en el régimen general y el agrícola. Se imponía la necesidad de estar en el Censo Laboral Agrícola o, en caso de ser autónomo, en el Sindicato de Trabajadores Autónomos; por tanto era la Obra Sindical de Previsión la que tenía la potestad y las atribuciones para, en el caso de los eventuales y autónomos, acreditar documentalmente el trabajo del obrero con el consiguiente control sobre la población agrícola

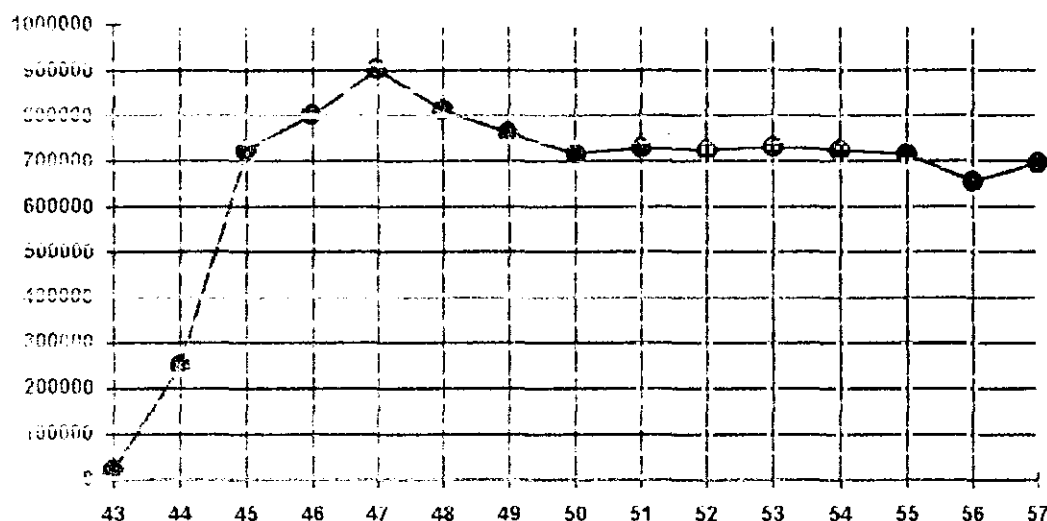


en esas circunstancias. De esta forma los eventuales cobraban también el subsidio por medio de la Ley de Previsión Social.

El Decreto de 10 de noviembre de 1944<sup>29</sup> establecía que la cuantía de la cuota que las empresas habrían de pagar para el régimen especial de seguros sociales en la agricultura sería, a partir del 1 de enero de 1945, un 10 % de recargo sobre la riqueza imponible por contribución territorial rústica y pecuaria.

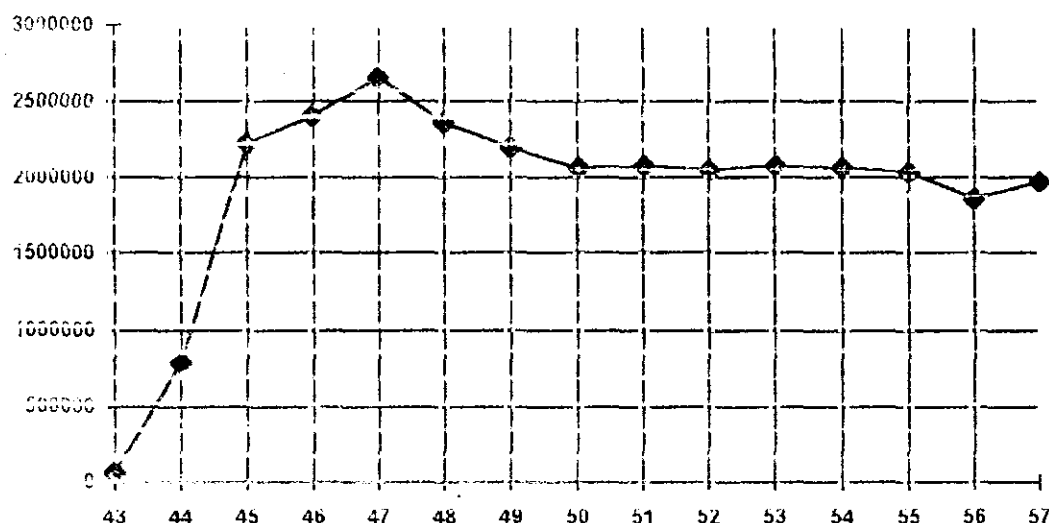
### ***7.2.2. Evolución cuantitativa de la Rama Agropecuaria.***

En cuanto al número de subsidiados en la agricultura se manifiesta, como en el caso del Régimen General, una tendencia al alza en los primeros años de aplicación. El año 1943 (ver gráfico nº 6) se caracterizó por un número notablemente bajo (20.443); sin embargo en 1944 el número se elevó hasta los 248.196, llegando a su cima en 1947 con 903.672 subsidiados. Ello pone de manifiesto las dificultades para la puesta en práctica de un sistema sin un aparato de seguridad social previamente desarrollado, pero también indica el mayor grado de dificultad de aplicación en el ámbito campesino. Tengamos en cuenta el hecho de que en 1940 más del 50% de la población activa se situaba en el sector agrícola (sin perder de vista que dentro de estos porcentajes se considera dentro del sector agrícola a los mineros), que en el año 1950 casi el 48% se situaba en dicho sector y que en 1960 la cifra se situaba casi en el 40%<sup>30</sup>. Ello nos sitúa ante una realidad eminentemente agrícola y a su vez nos permite observar que, mientras en la rama general el número de subsidiados en 1943 era de 543.702, en el caso de la agricultura la cifra se situaba en 20.443. Por tanto, un sector mayoritariamente dominante recibía un amparo minoritario del subsidio familiar. Fue en 1945 cuando la aplicación del subsidio familiar empezó a estar en consonancia con la realidad de la estructura de la población activa española. En 1944 el número de subsidiados en la agricultura era de 248.196 mientras que en la rama general era de 464.440. Sin embargo en 1945 en la agricultura la cifra se situaba en los 724.626 y en la rama general en los 463.139 subsidiados.



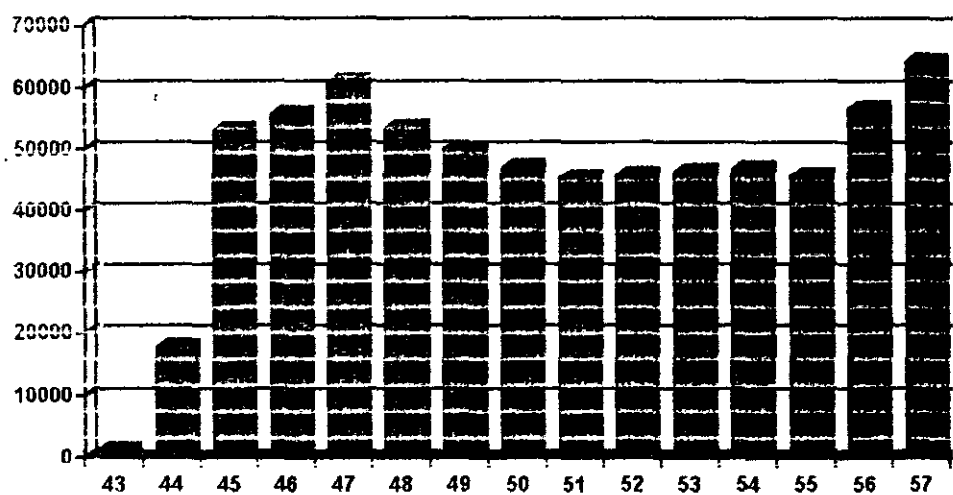
*Gráfico n° 6. Evolución de los subsidiados en la Rama Agraria desde 1943 a 1957.*

Paralelamente existía una relación más mimética todavía que en el caso de la rama general entre la evolución de los subsidiados y los beneficiarios. Como en el caso de los subsidiados el máximo se establecía en 1947 con casi 2,7 millones (ver gráfico n° 7). Se materializó posteriormente una línea descendente, que se acentuó a medida que avanzaron los años 50, ligada al lento pero progresivo abandono del campo y a la progresiva marcha a la ciudad. Pese a ello el cociente de beneficiarios y subsidiados comparativo entre la rama general, englobadora del sector industrial y servicios, y la rama agrícola también era indicativo del descenso creciente de los subsidiados en la rama agrícola en función del lento cambio de actividad. En el campo, la relación beneficiarios/subsidiados decrecía de forma más intensa dado que, si en 1943 el señalado cociente se situaba en 3,2 en 1950 ya se situaba en 2,8. Por el contrario en la rama general el descenso era menos acusado; en 1943 el cociente estaba en 2,8 y en 1950 se situaba en 2,6. El descenso se tornaba más acusado en el caso agrícola, por el carácter mentalmente más anclado en la tradición y por sus tendencias más acusadamente natalistas.



*Gráfico nº 7. Evolución de los beneficiarios en la Rama Agropecuaria de 1943 a 1957.*

En paralelo a las tendencias del número de subsidiados y beneficiarios las prestaciones (ver gráfico nº 8) se incrementaron desde 1945 de forma radical con un máximo en 1947 y un descenso lento, pero sostenido, desde finales de la década de los 40 y primer quinquenio de la década de los 50. La explicación de que el descenso en el número de beneficiarios y subsidiados en el año 1956 tuviera como contrapartida el incremento en las prestaciones obedecía a la modificación de las escalas de 1955, lo cual no implicaba, pese a lo que pudiera parecer en función de las prestaciones, un incremento del nivel de vida de las familias españolas basado en el subsidio familiar.



*Gráfico nº 8. Evolución de las prestaciones en la Rama agropecuaria en miles de pts.*

Las dificultades para la aplicación a la rama agropecuaria de los subsidios familiares se palpaba en el informe del Instituto Nacional de Previsión de octubre de 1945<sup>27</sup>. En teoría la Ley de 18

de julio de 1938 incluía a los trabajadores del campo, pero las diversas modalidades de trabajo que se daban en él impusieron un Régimen Especial por medio de la Ley de 1º de septiembre de 1938. Las dificultades para la formación del censo y, en consecuencia, para establecer las cuotas impidieron su establecimiento o aplicación hasta la promulgación de la Ley de 10 de febrero de 1943. Como muestra de las dificultades de financiación baste mencionar que para atender a los pagos efectuados en los años 1943, 1944 y 1945 las disposiciones mencionadas indicaban que durante el año 1943 (y por extensión durante el año 1944, ya que hasta noviembre no se fijó la cuantía de la cuota de Empresa), el Instituto Nacional de Previsión anticiparía los fondos precisos, y una vez conocido el montante de los mismos, por el Ministerio de Hacienda se habilitara el crédito necesario para la entrega de lo suplido y que las cuotas correspondientes al año 1945, se pagarán al Instituto Nacional de Previsión por el Tesoro Público<sup>100</sup>. La situación deficitaria de esta rama sólo se veía compensada con cargo a los excedentes de la Rama Industrial y Mercantil y con créditos habilitados por el Estado. De hecho la situación de la rama mencionada ponía en peligro el sistema global que pretendía establecer el salario familiar en España. Finalmente el mencionado informe concluye de esta forma tan ilustrativa:

“Si la recaudación de la cuota de Empresa no alcanzase el importe necesario para que en todo caso, en unión de los Excedentes de la Rama Industrial Mercantil, pudieran cubrir el montante de los gastos de la Rama Especial Agropecuaria la situación económica del Régimen General llegaría en breve plazo a ser gravísima como lo sería también si por el Estado no se habilitan los créditos solicitados y que han de solicitarse para el reintegro de las cantidades desembolsadas por la C.N.S.F. (*Caja Nacional de Subsidios Familiares*) hasta finales del año 1945 con cargo a sus Excedentes y reservas.

En efecto, si se tiene en cuenta que al término del presente Ejercicio la Caja Nacional habrá dispuesto de todos sus Excedentes libres y de la mayoría de sus reservas hasta quedar éstas reducidas tan solo a la cifra de 82 millones aproximadamente, se advierte el peligro que se cierne sobre el Régimen. Tanto más grave e inminente cuanto que, con cargo a dichas reservas, se han anticipado las cantidades necesarias para el Régimen Especial de Funcionarios Públicos, reintegro de pluses de cargas familiares en las Industrias Hulleras y para el Seguro de Enfermedad.

Por lo tanto, de no asegurarse una base firme para el desenvolvimiento normal del Régimen Especial y de no habilitarse los créditos solicitados y a solicitar no sólo el Régimen Especial en las actividades agropecuarias sino el general de Subsidios Familiares se encontraría, aproximadamente en los primeros meses del año 1946, en una situación económica tan difícil que inevitablemente habrá de traducirse en una

suspensión de pagos en la Rama Especial, y en la imposibilidad de anticipar cantidad alguna por el abono del Subsidio Familiar a los Funcionarios Públicos para el reintegro de plusas por cargas familiares, etc., etc. y posiblemente en graves dificultades en el Régimen Industrial Mercantil, la primera de las cuales sería la desaparición de las Ramas de Nupcialidad y Natalidad y una grave crisis en las de Viudedad y Orfandad que no cuentan con recursos propios”<sup>29</sup>.

En definitiva, se pone de manifiesto la existencia de unas gravísimas situaciones de carencia que pondrían en peligro no solo a la rama en cuestión, sino a todo el sistema.

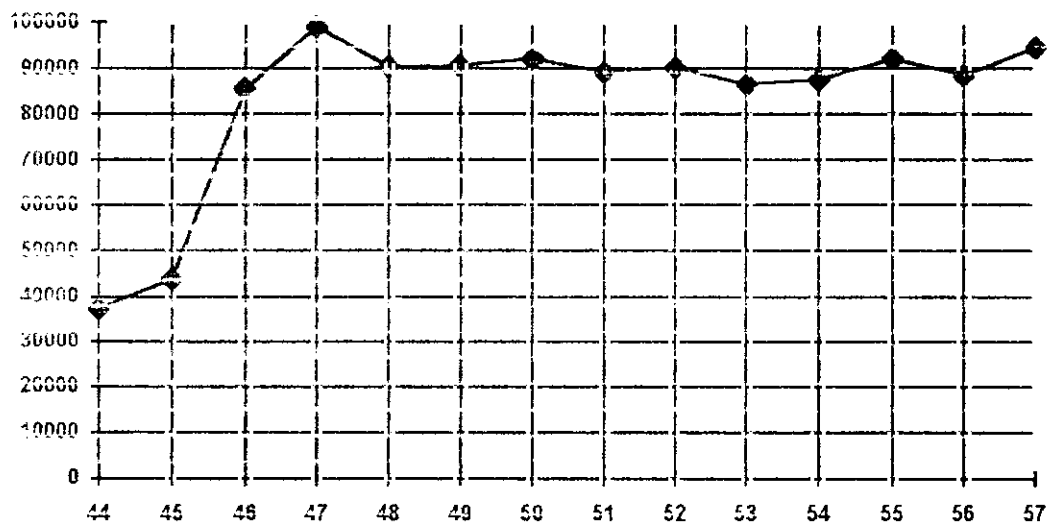
#### *7.2.4. La rama de los trabajadores del mar.*

En función de las características del sistema de remuneración de los trabajadores del mar y de sus regímenes laborales se encomendó al Instituto Social de la Marina su gestión junto a la de todos los seguros sociales en el mar por Decreto de 29 septiembre de 1943<sup>30</sup>. El preámbulo de la disposición mencionada es plenamente ilustrativo del tipo de problemas que suponía la aplicación de los seguros al ámbito marítimo-pesquero. “Las especiales características en que se realiza el trabajo de los pescadores y, más especialmente aún, de aquellos que ganan su sustento bajo el régimen a la parte, impide el debido desarrollo de las disposiciones de carácter general sobre Seguros Sociales Obligatorios... Para facilitar la aplicación a los pescadores de las leyes de previsión social, se hace necesario abstraer en un censo genérico a los productores dedicados a estas actividades para derivar de este hecho, como inmediata consecuencia, su afiliación en los distintos Regímenes. También debe resolverse equitativamente la forma de contribución de quienes tienen la condición de patronos y la de afiliados, para liquidar las obligaciones que a cada patrono impone la legislación, teniendo presente que el percibo de los salarios tiene realmente efecto bajo la aparente forma de distribución de unos beneficios al liquidar el denominado Monte Mayor”<sup>31</sup>. Estos eran los problemas más destacados de la aplicación de los seguros al ámbito de la pesca que dificultaron, como en el caso de la agricultura, la aplicación efectiva de los subsidios familiares.

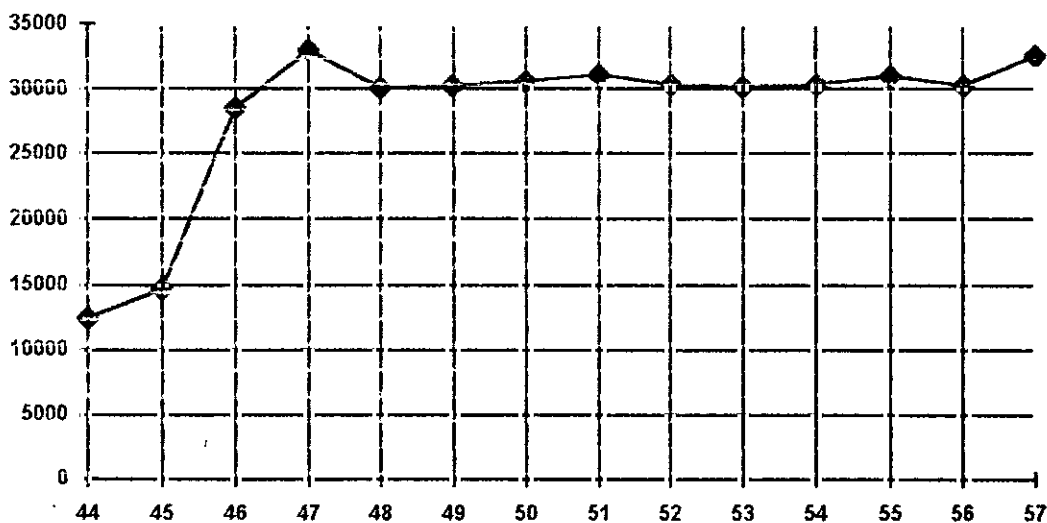
#### *7.2.4. Evolución cuantitativa de la Rama de los trabajadores del Mar.*

De igual manera que en el caso de los agricultores, se observa una gran dificultad para la implantación del subsidio familiar como la normativa existente demuestra. Solamente en 1947 los niveles de subsidiarios del sistema se aproximaron a los niveles medios que iban a tener hasta el año 1957. En 1947 el número de trabajadores marítimos subsidiarios del sistema se situaba en los 99.179 (ver gráfico nº 9 y 10). De ahí en adelante sólo en los años 1951, 1953,

1954 y 1956 se bajó de la cifra de los 90.000 subsidiados. De 1947 en adelante, tanto en lo referente a los subsidiarios como a los beneficiarios del sistema las variaciones fueron escasas.

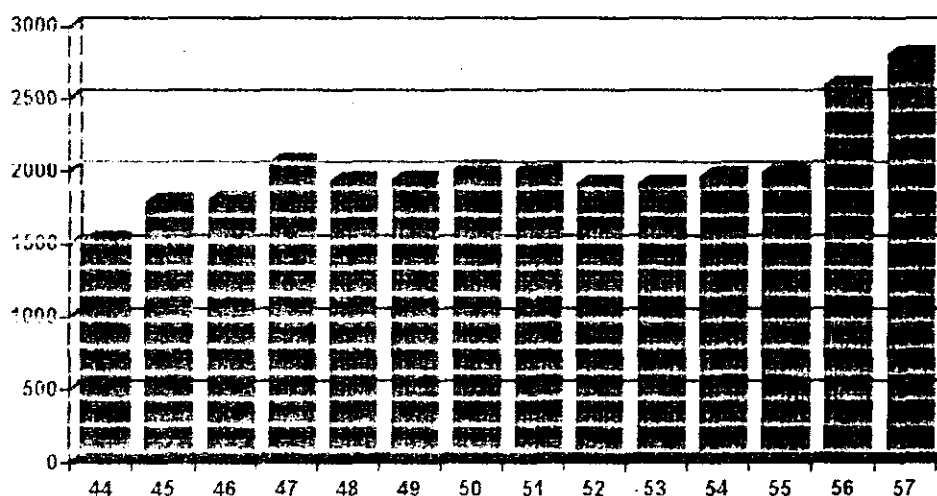


*Gráfico n° 9. Evolución de los beneficiarios en la Rama de Trabajadores del Mar.*



*Gráfico n° 10. Evolución de los subsidiados en la Rama de Trabajadores del Mar.*

En el caso de la agricultura se observaba que había una relación entre las dificultades para el aumento de subsidiarios, beneficiarios y prestaciones (ver gráfico n° 11). En el caso de los trabajadores del mar las cifras no diferían de forma tan abrupta y se mantenían entre unas prestaciones globales de 1,5 millones en 1947 y 2,8 millones en 1956; si bien como en el caso de la agricultura era evidente el salto cuantitativo de las prestaciones el año 1956, provocado igualmente por el aumento de las escalas del subsidio familiar que habían permanecido inmovilizadas desde 1943.



*Gráfico nº 11. Evolución de los subsidios en la Rama de Trabajadores del Mar en miles de pts.*

## 7.2. El funcionariado.

### *7.3.1. Funcionarios de la Administración Central y Local.*

De las dificultades para la aplicación de los subsidios familiares a los funcionarios del Estado daba cuenta el Decreto de 22 de julio de 1948<sup>32</sup>, el cual ponía de manifiesto la incompatibilidad entre la Orden de Vicepresidencia de 3 de marzo de 1939<sup>33</sup> y el reglamento de los Subsidios Familiares, en el sentido de que la primera disposición hacía uso de una definición de funcionario que imposibilitaba la aplicación del criterio expuesto en el reglamento y de ahí la necesaria aclaración que especificaba que se considerarían funcionarios “a efectos del Régimen de Subsidios Familiares, a funcionarios, empleados y obreros del Estado”. Éstos habrían de percibir sus jornales con cargo a los Presupuestos del Estado correspondientes al capítulo de personal y habrían de estar comprendidos en el Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de octubre de 1926. Por tanto, las dificultades en la administración de un seguro que no tenía siquiera carácter nacional planteaba innumerables problemas incluso dentro del marco de la administración del Estado. Las dificultades en torno a esta cuestión no finalizaron y la Orden de 22 de diciembre de 1948<sup>34</sup> así lo demostraba insistiendo en torno al mismo problema de la fijación de los criterios que delimitaban la cualidad de funcionario del Estado ya mencionada: cobrar de los Presupuestos Generales del Estado y estar comprendido en el Estatuto de Clases Pasivas del Estado.

Los despropósitos llegaron a tal límite que el Decreto de 22 de julio de 1948<sup>35</sup>, que en principio parecía la solución a los problemas administrativos relacionados con la concesión del subsidio familiar al funcionariado, fue derogado por el de 4 de abril de 1952<sup>36</sup> reponiendo la vigencia de las disposiciones anteriores, es decir, la antes poco clarificadora Orden de Vicepresidencia de 3

de marzo de 1939 y el Decreto de 8 de mayo de 1942<sup>7</sup>, que estipulaba que la Caja Nacional de Subsidios Familiares anticiparía los fondos precisos para el pago del subsidio a los funcionarios y trabajadores del Estado considerados como tales por la orden de Vicepresidencia mencionada.

La maraña de disposiciones contradictorias explicitadoras de las dificultades para llevar a cabo la aplicación del subsidio al funcionariado tuvieron su punto de inflexión en la Ley de 15 de julio de 1954<sup>8</sup> de Jefatura del Estado que establecía la denominada *ayuda familiar* para los empleados civiles de la Administración del Estado y que conducía a la separación de los funcionarios del Estado de la normativa referida a la Ley de 18 de julio de 1938. La *ayuda familiar* tenía dos vertientes: una asignación por matrimonio, siempre que la mujer no trabajase (en caso de que ambos cónyuges fueran funcionarios perderían la bonificación por matrimonio), permaneciendo así como ama de casa, y otra bonificación por cada hijo. La primera suponía 300 pts. mensuales, en el caso de funcionarios facultativos, técnicos, administrativos y auxiliares; y 240 pts. en el caso de los subalternos. La bonificación por cada hijo, en el caso de los funcionarios nombrados en primer lugar, era de 300 pts. al mes para los mayores de diez años, y de 200 pts. también al mes para los menores de esa edad; y de 240 y 160 pts. mensuales en el caso de los funcionarios del segundo grupo.

	Func. (facultativos, técnicos, administrativos y auxiliares)	Funcionarios subalternos
Asignación por matrimonio	300 pts.	240 pts.
Asignación por hijos mayores de 10 años	300 pts.	240 pts.
Asignación por hijos menores de 10 años	200 pts.	160 pts.

*“Cuadro n° 9. Escala de prestaciones de los funcionarios de la Administración Central y Local del Estado.*

Recordemos que la remodelación de la escala de los subsidios generales del año 1955 suponía para la familia con dos hijos 60 pts. mensuales, con tres 90, con cuatro 130 y así consecutivamente. De ello se puede sacar ya alguna consecuencia. En primer lugar, el funcionariado español de la Administración Central recibía un mejor trato en cuanto a sus compensaciones extrasalariales para la familia que el resto de los trabajadores españoles. La escala de prestaciones para el funcionariado, a imitación del plus familiar, tenía en cuenta el matrimonio y el primer hijo. Por otro lado, la prestación por cada hijo era notablemente superior a la existente en el régimen general. Como ya se ha señalado, frente a las 60 pts. por



dos hijos y sin prestación por motivo del matrimonio en la escala de 1955, la *ayuda familiar* suponía, dada esa misma situación (dos hijos mayores de diez años pero menores de catorce), 900 pts. al mes en el caso de los funcionarios del primer grupo y 720 en el caso de los del segundo. A pesar de las tendencias inflacionistas de los años 50 la diferencia suponía un trato de privilegio para el funcionariado que veía, a efectos reales, elevada su capacidad adquisitiva de forma muy significativa.

Otra ventaja comparativa sobre el régimen general se encontraba en el hecho de que, frente al tope de edad para los hijos beneficiarios situado en los 14 años, en el caso de los funcionarios se establecía que la bonificación se percibiría por los menores de 18 años y por los menores de 23 que careciesen de empleo o no cobrasen sueldo o retribución alguna, o por los mayores de 23 que se estuviesen incapacitados para todo trabajo. Ello permite aventurar la idea de que el funcionariado veía respaldada formalmente la prolongación de la estancia de la prole en el núcleo familiar originario y por tanto se facultaba, al menos en principio, a su prole para prolongar el período de formación con menos cargas para el padre de familia que en el caso de los trabajadores por cuenta ajena no ligados al Estado.

Como se ha señalado, los motivos para no percibir la bonificación por matrimonio se centraban en el hecho de que la mujer trabajase, o también en la circunstancia de que alguno de los cónyuges se dedicara por su cuenta a cualquier tipo de actividad ligada al comercio o la industria. Los cónyuges que fuesen funcionarios, perderían el derecho a la asignación por matrimonio.

A diferencia del régimen de subsidios del 18 de julio, en que se señala en el apartado 2º de la Base III que el "subsidio no es parte del salario, y en consecuencia no será computado a ningún efecto como tal", en la Orden de 17 de agosto de 1954<sup>40</sup> (todavía no aprobado el reglamento) se estipulaba que "las percepciones que correspondiesen a los funcionarios civiles por ayuda familiar se gravarán por contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria, con arreglo a escala". Y más tarde la Orden de 9 de septiembre de 1954<sup>41</sup> disponía que sus percepciones se gravaran por contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria al tipo uniforme del 8 %. Ello permite entender el motivo que hacía que, en relación a la modificación de escalas de 1955, las prestaciones de esta ley de 1954 fueran relativamente muy elevadas en relación al régimen general.

El Dahir de 15 de marzo de 1955<sup>42</sup> de la Administración Pública del Protectorado estableció la *ayuda familiar* para los funcionarios del Protectorado de España en Marruecos. Basado en la Ley de 15 de julio de 1954<sup>43</sup> establecía un crédito extraordinario por importe de 40.000.000 pts. en el Presupuesto del Majzen.

Normalmente, como ya se ha comentado, el objetivo teórico del desarrollo normativo en relación a la familia era crear un núcleo familiar español con unas características particulares, frente a lo que se consideraba individualismo disolvente de las esencias hispánicas. En el ámbito de lo formal se legislaba con el objetivo de establecer, en este caso desde el mundo laboral, un modelo de pautas dentro del marco familia-trabajo que condujese a una situación en la que la mujer se situara de forma exclusiva en el ámbito del hogar y en el que fuese el marido de forma exclusiva el encargado de procurar los medios económicos para la familia. La misma ley, sin embargo, produjo problemas de interpretación. En esta línea la Orden de 29 septiembre de 1954<sup>45</sup> de Presidencia del Gobierno recalca la necesaria compatibilidad de los principios en que se había querido fundamentar lo puramente normativo con su aplicación. En el artículo 7º de la Ley de 15 de julio de 1954<sup>46</sup> se estipulaba que si el cónyuge funcionario fuese la mujer, solo tendría derecho a esta asignación en los casos de incapacidad o ausencia del marido que privara a su familia de asistencia económica. Por tanto, en dicha circunstancia se establecía la presunción de que la mujer funcionaria casada cumplía los deberes propios del cabeza de familia en la medida en que con la *ayuda familiar* subvenía a las necesidades de sus hijos. Esto entraba en directa contradicción con los principios de la Ley de 15 de julio de 1954 dado que ésta pretendía crear un marco normativo que potenciara la permanencia de la mujer en el hogar. De igual manera en esta circunstancia, trabajando el marido por cuenta ajena, se establecería una situación en la que el trabajo de la funcionaria sería primado de forma superior a la forma en que lo sería el funcionario según sus cargas familiares; y ello equivaldría a fomentar el principio contrario que inspiraba la ley. De ahí la necesidad de esta orden de septiembre de 1954 para actualizar el artículo 7º de la Ley de 15 de julio de 1954.

La Ley de 17 de julio de 1956<sup>46</sup> extendía a los militares jubilados, a los funcionarios civiles jubilados y a las viudas pensionistas la protección que en concepto de Indemnización o de Ayuda Familiar se concedía al personal en activo en igual cuantía que a este personal.

Otro paso en la extensión de las prestaciones familiares a los funcionarios fue la Ley de 27 de diciembre de 1956<sup>47</sup> por la que se establecía la *ayuda familiar* para los funcionarios de la Administración Local. Se aludía en el preámbulo de dicha disposición a que sólo la difícil situación por que atravesaban las Haciendas locales pospuso la extensión de tales beneficios al señalado personal. Se basaba en lo fundamental en la Ley de 15 de julio de 1954<sup>48</sup> que establecía la ayuda familiar para los funcionarios de la Administración Central. Sin embargo se justificó la introducción de variantes con respecto a dicha disposición en la situación peculiar de las haciendas locales, lo cual exigía la implantación de la ayuda en grado reducido o muy reducido dado que las prestaciones normales hubieran generado, se dice en el preámbulo de la ley, un grave desequilibrio en la hacienda local afectada. Entre las variaciones con respecto a la

Ley de 15 de julio de 1954 estaba el hecho de que la bonificación por hijos prescindía de la categoría del empleado y consideraba exclusivamente los estudios que los hijos cursasen. En cuanto a la cuantía de la asignación por matrimonio, se establecía que la de los funcionarios de cuerpos nacionales, los administrativos, los técnicos y técnico-auxiliares sería de 300 pts. y la de los funcionarios de servicios especiales y subalternos de 240. Determinaban derecho de asignación por descendientes no emancipados, los solteros mayores de edad y menores de 25 años que estuviesen cursando estudios de grados superior o laboral y los mayores de edad incapacitados para todo trabajo. Se fijaba de igual forma la fecha de entrada en vigor del régimen obligatorio para el 1 de enero de 1957.

Destaca la diferencia de la edad que daba derecho a prestación; frente a los 23 años del régimen para los funcionarios de la Administración del Estado en este caso se situó el límite en los 25 años. En cuanto a la asignación por los hijos ya se ha aludido al hecho de que su cuantificación se fundaba en los cursos que realizasen. Así para los que cursasen estudios superiores se otorgaban 300 pts.; para los estudios medios o profesionales 270 pts.; para los estudiantes de primaria o elemental 240 pts.; y para los que desarrollasen estudios variados 180 pts. Se abordaba así un nuevo modelo de concesión de prestaciones.

Otra nueva variante la constituía el hecho de considerar como perceptores de la ayuda a los posibles beneficiarios que careciesen de ingresos propios en cuantía equivalente a la ayuda que pudieran determinar; en el que caso de que los ingresos propios fueran de cuantía inferior a la ayuda, ésta habría de ser parcial hasta completar la cuantía correspondiente a la total. Por otra parte, el art. 9 establecía otra limitación que no encontramos en las disposiciones para el resto de los funcionarios: quedaban excluidos de la *ayuda familiar* los funcionarios cuyos ingresos, unidos a los de su mujer, excedieran por todos los conceptos de 15.000 pts. mensuales, salvo que disfrutaran de los beneficios de la familia numerosa.

Como en los restantes casos señalados la nueva ley suponía la salida del funcionariado local del régimen general de subsidios generales y el que su asignación familiar estuviera sometida a la contribución de utilidades. La Circular de 17 de enero de 1957<sup>49</sup> de la Dirección General de la Administración Local establecía que estas asignaciones familiares se gravarían por contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria al tipo uniforme del 8 %.

Los graves problemas de la Administración Local condujeron a establecer un triple modelo de prestaciones. Por un lado la prestación de grado normal, es decir, la prestación en su cuantía íntegra; por otro la prestación de grado reducido, equivalente a las dos terceras partes de la cuantía íntegra en aquellas corporaciones en que los gastos de personal, fruto del establecimiento de la *ayuda familiar*, rebasasen los límites presupuestados; y por último la

prestación de grado muy reducido, equivalente a la mitad de la cuantía íntegra, en las corporaciones en que los gastos de personal, aun sin establecer el nuevo régimen de ayudas, rebasaban los límites señalados.

Para el funcionariado en general, el establecimiento de disposiciones individualizadas para su caso supuso que financieramente dejaran de estar relacionados con la Caja Nacional de Subsidios Familiares, pasando a depender de los créditos estipulados en los Presupuestos Generales del Estado; y a su vez ello suponía una descarga para ésta en la medida en que la cotización para dicha caja sólo la ejercía el funcionario.

### 7.3.2. *Funcionarios de la Organización Sindical y de F.E.T. y de las J.O.N.S.*

La Orden de 28 de julio de 1954<sup>50</sup> de la Delegación Nacional de Sindicatos establecía para los funcionarios de la Organización sindical un marco de protección similar al del resto de los funcionarios civiles; si bien previamente, por Orden de 26 de julio de 1946<sup>51</sup>, se había establecido el plus familiar para todo el personal que figurara en la plantilla de los servicios nacionales o provinciales, cuyos haberes fueran satisfechos con cargo a la Tesorería General.

Se denominaba *protección familiar* a una prestación cuantitativamente idéntica a la *ayuda familiar* para los funcionarios del Estado. Establecía los mismos criterios en cuanto a la edad límite para la consideración de beneficiarios. Por supuesto, también era imprescindible que la mujer no trabajase y en caso de que fueran los dos cónyuges funcionarios perdían la bonificación por matrimonio cobrando el marido únicamente la bonificación por los hijos. Excluía de esta prestación al personal contratado que percibiese el plus familiar, al personal directivo y al profesorado de los Centros de Formación Profesional que percibiese también el plus familiar; a los que, por compatibilizar sus servicios con otros organismos o empresas, cobrasen plus familiar o ayuda familiar. Establecía también que sólo se percibiría la mitad de la prestación en caso de trabajar media jornada y nada en caso de que no se llegase a la media jornada señalada.

La Orden de 29 de enero de 1955<sup>52</sup> de Secretaría General del Movimiento establecía para los funcionarios de F.E.T. y de las J.O.N.S. el *complemento familiar* en favor de los funcionarios de dicha institución. En lo fundamental copiaba de la *ayuda familiar* y de la *protección familiar* los supuestos básicos, si bien establecía un sistema de puntos similar al régimen general para la consecución de las prestaciones. Fijaba los puntos por matrimonio en 3 para los empleados facultativos, técnicos, administrativos o auxiliares y en 2,40 para los subalternos. Los puntos por cada hijo eran 3 para los mayores de 10 años y 2 para los menores de esta edad en el caso de los funcionarios del primer grupo; y 2,40 y 1,60 para los empleados del segundo

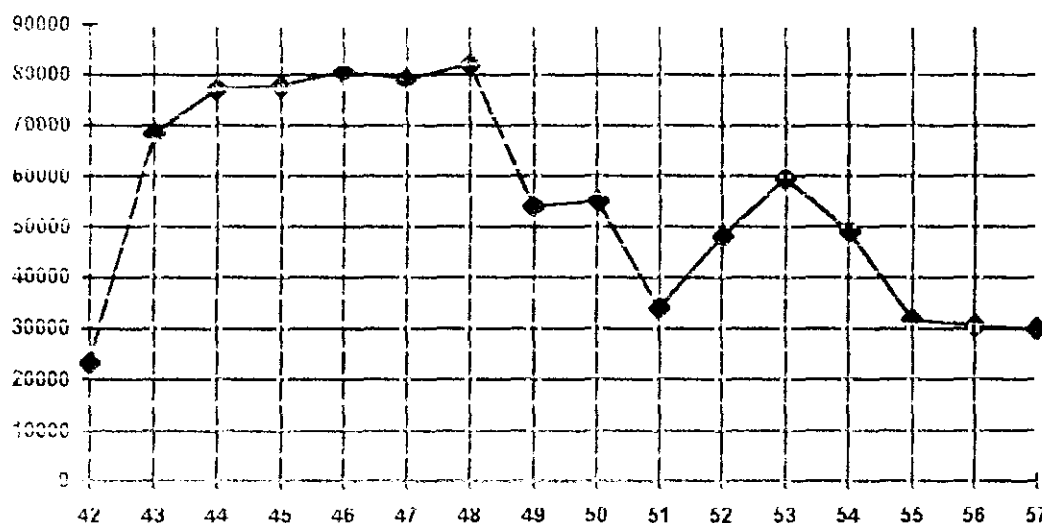
grupo. Establecía, igualmente topes en cuanto a la edad de los beneficiarios similares a los establecidos en la *ayuda familiar* para los funcionarios del Estado.

Sin embargo, hay que referirse a un hecho particular, mientras en el caso de la ayuda familiar para funcionarios se establecía el criterio de los 18 años para ser beneficiario y en el de la protección familiar se estipulaba que, además de ser menores de 18 años, no trabajasen por cuenta ajena más que en razón de contrato de aprendizaje, en el caso de los funcionarios del partido único se establecía el criterio diferenciado y a la vez privilegiado de que los hijos menores de 18 años fuesen considerados beneficiarios aun cuando tuvieran empleo y disfrutasen de sueldo o remuneración fruto del trabajo personal. Evidentemente se establecía un criterio de privilegio para los núcleos familiares más adeptos al régimen franquista. A su vez se aclaraba que la cuantía no podría exceder de la fijada por el Estado como *ayuda familiar* para sus funcionarios, que era necesario que el cónyuge no trabajase por cuenta ajena y que en caso de que el funcionario fuera la mujer sólo tenía derecho a los puntos por matrimonio en los casos de incapacidad o ausencia del marido que privase a su familia de asistencia económica.

Ni que decir tiene que tanto en el caso del complemento como de la ayuda familiar los funcionarios, en cualquiera de las dos situaciones, quedaban separados del régimen general de los subsidios familiares.

### **7.3.3. Evolución cuantitativa de la rama de los funcionarios.**

No se observan grandes diferencias en cuanto al modelo de los trabajadores agrícolas y del mar con respecto a la evolución del número de trabajadores que percibían la prestación y a los beneficiarios de la misma en el caso de los funcionarios, en justa correspondencia con el nivel de las prestaciones. Muy al contrario de los otros regímenes en los que, dentro de las variaciones, existía una moderada continuidad en el número de perceptores, en el caso de los funcionarios civiles se observan incrementos continuados hasta el año 1944 probablemente motivados, como en los otros regímenes, por la progresiva y lenta implantación efectiva del subsidio familiar: Desde 1944 se observa un número constante de subsidiados (ver gráfico nº 12) en torno a los 80.000 como cifra indicativa, y sin embargo, desde 1948 se manifiesta una caída en picado que hace que en 1949 el número de receptores del subsidio se sitúe en poco más de 50.000, llegando en 1951 a poca más de 34.000. Seguidamente se produjo un incremento progresivo hasta llegar al año 1953 a los 59.667 subsidiarios, produciéndose de nuevo un descenso que en 1957 supuso la existencia de únicamente algo más de 30.000.



*Gráfico n.º 2. Evolución de los subsidios en el la Rama de Funcionarios.*

Se palpan unas muy graves dificultades para la implantación del sistema del subsidio familiar para los funcionarios. La documentación existente en el Archivo de Presidencia del Gobierno muestra la existencia de un proceso de implantación del régimen dificultado por la falta de conocimiento exacto de los datos necesarios para el Servicio de Estadística de la Caja Nacional de Subsidios. Con fecha 8 de noviembre de 1938 el Ministro de Organización y Acción Sindical, González Bueno<sup>13</sup>, enviaba a Francisco Gómez Jordana, Vicepresidente del Gobierno, una proposición por medio de la cual el Vicepresidente debería de promulgar una Orden que supondría el establecimiento por cada una de las Subsecretarías y Servicios Nacionales de todos los Ministerios de un censo de los funcionarios en activo que constasen en sus departamentos. Proponía igualmente que antes del 20 de noviembre las delegaciones y jefaturas provinciales de los diversos Ministerios o servicios deberían enviar los datos especificados a la jefatura central de su respectivo cuerpo. Y por último se exponía la necesidad de que antes del 15 de diciembre los diversos ministerios habrían enviado al Director de la Caja Nacional las relaciones censales.

Antes de la publicación de la orden y en línea con los problemas de aplicación de la ley a los funcionarios se produjo el intercambio de observaciones entre Vicepresidencia y el Ministerio de Organización y Acción Sindical. Eran tres las cuestiones que planteaba Gómez Jordana a González Bueno, destacando entre éstas la cuestión de los plazos a lo que el Ministerio de Organización y Acción Sindical respondía que la prórroga era indispensable :

“¿cómo va a estar el día 20 de Noviembre la contestación en poder de las Jefaturas Centrales si ese día no habrán recibido todavía la pregunta? Tiene razón el Sr. vicepresidente del Gobierno, la recogida de datos y las varias centralizaciones que de ellos se ha de hacer, requieren tiempo y parece lógico que se les de plazo hasta el 20 de Diciembre”.

sin embargo, de una u otra forma, la falta de colaboración de los ministerios o la imposibilidad para cumplir con los plazos convenidos imposibilitaba la aplicación inicial del subsidio familiar a los funcionarios. En esta línea se inserta la petición del Ministerio de Orden Público<sup>42</sup> al Vicepresidente del Gobierno, transmitida por éste al Ministro de Organización y Acción Sindical el 19 de diciembre de 1938, en el sentido de disponer un plazo mayor para la creación de lo que, en buena lógica, es el elemento básico para el tratamiento estadístico y para la aplicación de la técnica actuarial necesaria para el equilibrio financiero de la institución creada. La confusión en torno a esta cuestión se expresaba en la nota<sup>43</sup> comunicada por teléfono de González Bueno sobre la necesidad de que a los funcionarios se les retuviera el 1 % de las nóminas pendientes, mientras tanto se elaborasen las normas que debiera dar el Gobierno en torno a esta cuestión. De hecho el 27 de febrero de 1939<sup>44</sup>, González Bueno enviaba una carta a Gómez Jordana en la que expresaba su malestar por el retraso continuado de la aplicación de lo que se consideraba la materialización del salario familiar rompedor de la férrea disciplina materialista del concepto liberal de la remuneración. En este texto se citaban expresiones como las siguientes:

"El 1º de marzo va a empezar a hacerse efectivo a los obreros y empleados fijos de la Agricultura, la Industria y el Comercio el Subsidio Familiar, y con ello los beneficios de este régimen alcanzarán a la mayoría de los trabajadores de la España que estaba liberada en 1938.

En mi opinión convendría tomar enseguida una determinación para que gocen también de él los funcionarios y trabajadores del Estado, la Provincia y el Municipio, pues estimo que ha de producir muy mal efecto que el Estado deje de cumplir *que poner en práctica*<sup>45</sup> una de las Declaraciones del Fuero del Trabajo.

Deseo recordar mi constante inquietud a este respecto: la Orden que como borrador y para someterla al examen de los Ministros de Hacienda y Gobernación entregué a Vd. en 1º de Febrero y las indicaciones que en todos los Consejos he hecho en el mismo sentido. Hasta ahora no se ha tomado ninguna determinación siempre pendiente de conocer el importe del Subsidio a los obreros, empleados y funcionarios del Estado, Provincia y Municipio; pero como esta cantidad no puede calcularse sin que previamente se faciliten a la Caja Nacional de Subsidios los datos precisos, la resolución se ha ido retrasando y juzgo que lo seguirá siendo indefinidamente.

Tengo el gusto de enviarle hoy el estudio realizado por la Caja Nacional con los datos que ha podido recoger que, como observará, son bastante incompletos puesto que hay

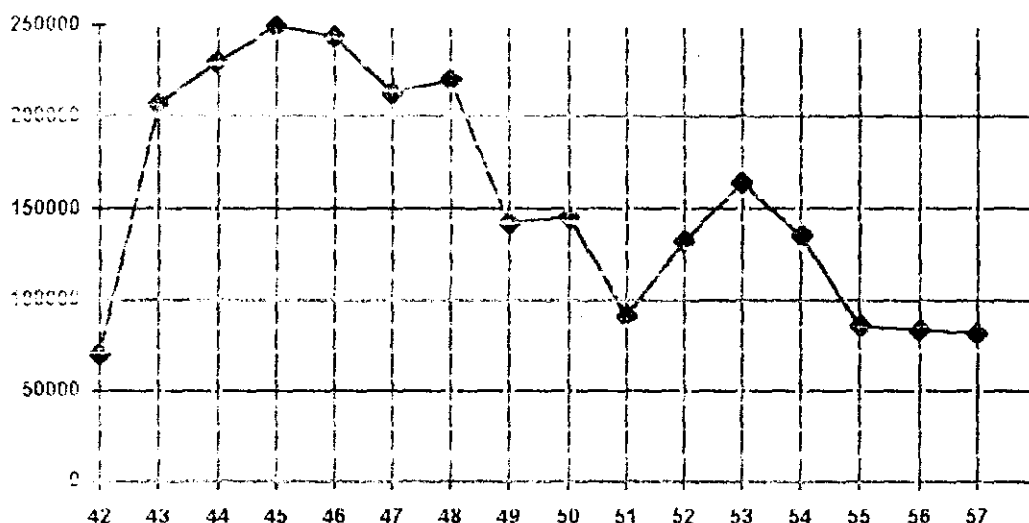
algunos Ministerios de los cuales no se ha recibido ninguno. Le incluyo también los referentes a 33 Diputaciones y 5.646 Ayuntamientos.

Celebraré que esta información resulte suficiente para poder tomar una resolución en el próximo Consejo. A fin de facilitarla me permito incluirle borrador de la que a la vista de estos datos considero mas sencilla y conveniente, que he redactado en forma de Orden<sup>58</sup>.

La nota que envió para que fuera vista por Franco ponía de manifiesto que, a excepción del Ministerio de Organización y Acción Sindical no había un sólo Ministerio que no incumpliera los términos de la ley, destacando por el casi absoluto desdén los informes solicitados a Justicia, Industria y Comercio y Defensa Nacional, explicable en este último caso, dado el todavía existente estado de guerra el 27 de febrero de 1939. El proyecto de orden a que se refiere González Bueno incide en su artículo 2º en la necesidad de que el percibo del subsidio sea reconocido a partir del 1º de febrero, momento desde el cual se haría efectivo el descuento del 1% de la cuota del asegurado sobre todos los haberes que tuviera. El hecho de que no existan datos estadísticos hasta 1942 en torno a la aplicación del subsidio familiar a los funcionarios y la gran inflexión que se produce en los dos primeros años en los que si existen datos a este respecto demuestra la dificultad para llevar a la práctica los deseos formales de proteger a la familia, en este caso del funcionario español. Hay que señalar que mientras en 1942 el número de funcionarios beneficiarios suponía algo más de 23.000, en el año 1943 la cifra ya se había situado en los 68.464.

Como respuesta a la petición de González Bueno el Vicepresidente Gómez Jordana<sup>59</sup> resolvió, a fin de que comenzaran a percibir el subsidio los funcionarios enviar una comunicación con fecha 3 de marzo de 1939 a los Ministros de Hacienda, de la Gobernación y de Organización y Acción Sindical en la que se reproducía miméticamente el proyecto de orden que González Bueno había enviado al Vicepresidente. Ello no suponía el final de las dificultades técnicas para la aplicación del subsidio. Aquellas estaban a su vez en la base de las oscilaciones tan abruptas que se percibían tanto en el número de subsidiados como en las prestaciones de éstos.

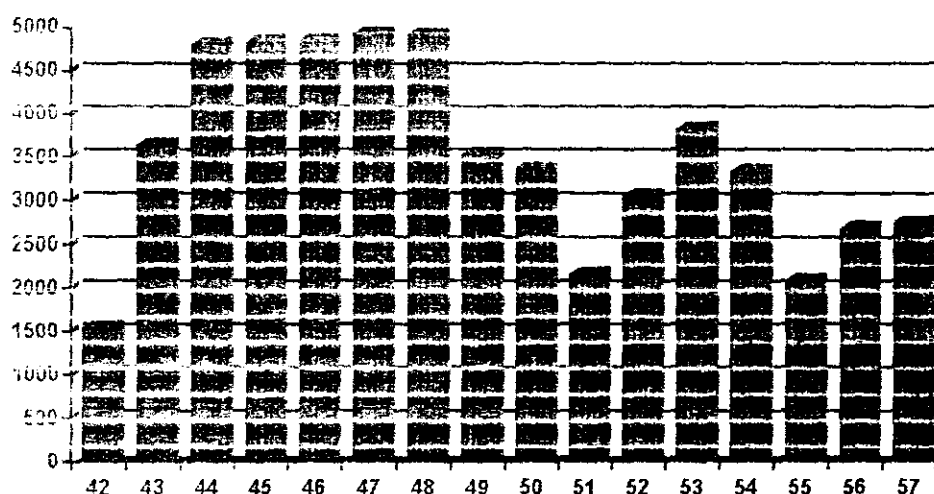




*Gráfico nº 13. Evolución de los beneficiarios en la Rama de Funcionarios.*

Con fecha 1° de noviembre de 1949 el nuevo Ministro de Organización y Acción Sindical (Joaquín Benjumea Burín fue nombrado "interinamente" por Decreto de 9 de agosto de 1939 y notificado desde Presidencia el 13 de agosto del mismo año<sup>60</sup>) dispuso la Orden de 28 de octubre de 1940 por la que se planteaba la revisión del censo<sup>61</sup> y su rectificación posterior ante las irregularidades en la aplicación del subsidio a los funcionarios. Sería un problema prácticamente sistemático durante la aplicación del régimen, plasmada esta situación de deficiencia en la evolución dispar del número de beneficiados por el sistema. Las grandes variaciones del número de subsidiarios estaban motivadas por las dificultades para la definición de la figura del funcionario. Se observa en el Gráfico nº 13 que el número de subsidiarios desciende de forma muy acusada de 1948 a 1949; la cuestión radicaba en la existencia de definiciones diferenciadas sobre el concepto de funcionario en el art. 5° del reglamento del Subsidio Familiar y en la Orden de Vicepresidencia de 3 de marzo de 1939. La solución salomónica vino por medio del Decreto de 22 de julio de 1948. En el fondo subyacía el problema de la concesión de dichos beneficios a los trabajadores de organismos paraestatales autónomos o de naturaleza análoga. Finalmente la definición del art. 1° ("se consideran a efectos del Régimen de Subsidios Familiares, funcionarios, empleados y obreros del Estado quienes perciban sus haberes o jornales con cargo a partidas consignadas en los Presupuestos correspondientes en el Capítulo de personal y se encuentren comprendidos, por razón de las funciones o cargos que desempeñen en el vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de octubre de 1926"<sup>62</sup>) imposibilitaba su aplicación al número de funcionarios al que previamente si se extendían estos beneficios, con lo cual el número de los mencionados funcionarios bajó de 219.881 a 142.333, llegando a su mínimo en 1951 con 91.563 (ver gráfico nº 14). La cuestión llegó a su fin con el Decreto de 4 de abril de 1952<sup>63</sup> sin por ello manifestar una gran visión de futuro con respecto a lo que sería la aplicación de este subsidio a los

funcionarios. Con fecha 6 de marzo de 1952 Giron envió al Ministro Secretario de la Presidencia del Gobierno, Carrero Blanco, el proyecto de decreto que derogaba el de 22 de julio de 1938 para que fuera discutido en Consejo de Ministros. Como se puede observar el decreto de 4 de abril tiene solo un artículo; en el proyecto había un segundo en el que se señalaba que "por los Ministerios de Hacienda y de Trabajo se estudiara la aplicación a los funcionarios, empleados y obreros del Estado de los demás Seguros Sociales"<sup>64</sup>.



*Gráfico nº 14. Evolución de los subsidios en miles de pta. de la Rama de Funcionarios.*

#### 7.4. El subsidio familiar en los ministerios militares.

En el caso de los ministerios militares el Decreto de 11 de diciembre de 1942<sup>65</sup> establecía que desde el año 1943 el personal dependiente de los Ministerios del Ejército, Marina y Aires cesaría de depender, en lo que se refería al Subsidio Familiar, del Ministerio de Trabajo y de la Caja Nacional de Subsidios Familiares. Se estipulaba que a partir de los siguientes presupuestos empezaría la aplicación de esta disposición.

Pese a ello la Orden de 2 de marzo de 1943<sup>66</sup> de Presidencia del Gobierno estipuló que para el personal civil y obrero dependiente de los Ministerios del Ejército, Marina y Aire, así como para los Cabos, soldados y marineros que disfrutasen dicho subsidio, subsistiría el régimen anterior de subsidio familiar. Por tanto, para el personal civil y para el militar que no tuviera la consideración de oficial o sargento subsistía el régimen del 18 de julio de 1938. El privilegio para los militares y para sus familias que, además de ser células primigenias de lo social eran garantes del orden establecido por medio de la coerción, se explicitaba en el art. 1º de la disposición referida en el sentido de que establecía que los Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y asimilados que tuvieran a su cargo algún hijo no legítimo no dejarían de percibir la prestación por este sino que permanecerían dentro del sistema general de la Caja Nacional de

Subsidios Familiares. En torno a esta cuestión la Orden de 18 de noviembre de 1943<sup>69</sup> fijaba como requisito para los oficiales en esa situación la obligación de presentar la declaración correspondiente en la Delegación Provincial de la Caja Nacional, en la que solo se incluían los hijos legítimos. La falta de aparato administrativo adecuado imposibilitaba la aplicación real de los principios normativos expuestos en la legislación. Así la Orden de 3 de noviembre de 1943<sup>70</sup>, por lo que se refería al personal civil y sin alta graduación de los Ministerios de Ejército, Marina y Aire, estipulaba la autorización de la Dirección General de Previsión a la Caja Nacional de Subsidios Familiares para que realizase el anticipo de las nominas correspondientes. En consecuencia, se constata que algunas Pagadurías Militares no cumplían con el deber de efectuar dichos pagos.

La Orden de 16 de enero de 1943<sup>71</sup> de Marina exponía el deseo del Ministerio de satisfacer una gratificación especial por número de hijos pero limitada al personal de lo que denominaba Cuerpos Patentados y al de Suboficiales. Para los primeros la prestación era de 50 pts. mensuales para los hijos menores de 10 años, y 75 para los que excedieran de dicha edad. En el caso de los varones el límite de la edad se situaba en los 23 años cesando en el momento de ingresar en filas, de acceder a alguna Academia Militar o de recibir sueldo o remuneración de algún tipo. En el caso de las mujeres percibirían dicha prestación hasta que tomaran estado o cobrasen sueldo de algún tipo. En el caso del personal del segundo grupo se les concedía 40 pts. por cada hijo menor de 10 años y 60 por los mayores de dicha edad. La prestación familiar en el ámbito del Ministerio de Marina pasaba desde este momento a depender de los Presupuestos del Estado y no de la Caja Nacional.

También, en cuanto a la Marina se refiere, la Orden de 2 de agosto de 1943<sup>72</sup> intentaba unificar y reglamentar el derecho a la prestación con motivo de cargas familiares a pesar de la infinidad de disposiciones legales existentes en torno a la indemnización por hijos para los oficiales y trabajadores civiles de este ministerio. Dicha disposición establecía la indemnización por hijos. En el caso de los oficiales de alta graduación se otorgaban 50 pts. mensuales por cada hijo menor de 10 años y 75 por cada hijo mayor de dicha edad. Para los suboficiales, incluidos algunos miembros del personal civil con asimilación a sargento o suboficial, se otorgaban 40 pts. mensuales por cada hijo menor de diez años y 60 por los mayores de esa edad. Los retirados o en reserva recibían también la respectiva indemnización según el grupo en que se hallasen. Como ya se ha señalado para el resto del personal, desde cabos, soldados, marineros o empleados civiles regía el Régimen General dependiente del Ministerio de Trabajo. La Orden de 24 de diciembre de 1951<sup>73</sup> de Marina duplicaba la cuantía de la percepción, situando la bonificación por esposa en 120 pts. La Orden de 24 de septiembre de 1944<sup>74</sup> estipulaba a su vez que la limitación para la percepción era el cumplimiento de los 23 años o la percepción de

un sueldo en el caso de los varones. En el caso de las mujeres los motivos para el cese en la maternidad eran el tomar estado, el cese de sueldo o el cumplimiento de los 23 años.

La incompatibilidad irregular en el ámbito militar de las prestaciones familiares se observa también a través de dos disposiciones de un mismo ministerio como el de Marina. La Orden de 31 de julio de 1942<sup>75</sup> del señalado ministerio tenía la compatibilidad entre el subsidio familiar y la ración de armada consistente en una compensación en metálico por número de hijos establecida en el reglamento orgánico de la Marinería y Fogoneros. Pues bien, la Orden de 7 de febrero de 1944<sup>76</sup> del mismo Ministerio estableció simplemente el principio contrario derogando la Orden previamente citada.

Por Ley de Jefatura del Estado de 18 de diciembre de 1950<sup>75</sup> se duplicó en su cuantía a partir del 1 de enero la *indemnización por hijos* transformándola en la denominada *indemnización familiar* y reconociendo a los casados el derecho a percibir por su esposa un subsidio de importe igual al que le correspondiera por un hijo mayor de diez años. Para ello se elevaban los presupuestos de 1951 en cada uno de los ministerios afectados. Así, en el caso de Gobernación, para hacer frente al aumento de los subsidios en la Guardia Civil, se elevaron los presupuestos en 25.816.000 pts. y en la Dirección General de Seguridad en 6.500.000. En el caso del Ministerio del Ejército la elevación del presupuesto era en 91.146.955, 76 pts.; en el de Marina se aumentaba en 12.460.000 pts. y en el del Aire en 13.105.860 pts. Dentro de la Sección 15, "Acción de España en África, Ministerio de Gobernación", el Ministerio del Ejército incrementaba su presupuesto en 27.377.943 y la Guardia Civil en 336.960 pts. Es de interés señalar que la línea moralizante y sancionadora de la normativa en torno al subsidio familiar no desaparece de su ámbito de aplicación a lo militar. El Decreto de 23 de noviembre de 1951<sup>76</sup> establecía la existencia de altos mandos de segunda fila en la medida en que asentaba el criterio de hacer depender del régimen general de la caja nacional a los mandos de alta graduación que tuvieran a su cargo algún descendiente que, no cumpliendo los criterios de legitimidad del decreto mencionado, si observara los criterios del art. 11 del Reglamento de 20 de octubre de 1938.

## Notas

<sup>1</sup> Aranzadi, op. cit., 780/1938.

<sup>2</sup> Aranzadi, op. cit., 315/1943.

<sup>3</sup> Aranzadi, op. cit., 1398/1951.

<sup>4</sup> Aranzadi, op. cit., 780/1938

<sup>5</sup> G. Pinedo, Los subsidios...I, op. cit., pág. 23.

- <sup>1</sup> Aranzadi, op. cit., 1153/1938.
- <sup>2</sup> Aranzadi, op. cit., 1891/1942.
- <sup>3</sup> Aranzadi, op. cit., 1050/1944.
- <sup>4</sup> Instituto demográfico de España. Presidencia del Gobierno. Instituto Nacional de Estadística, 1949. Tenganos en cuenta que la arroba (11,5 kg.) de carne de vaca estaba a 52,84 pts. al por mayor.
- <sup>5</sup> Aranzadi, op. cit., 2004/1941.
- <sup>6</sup> Aranzadi, op. cit., 451/1941.
- <sup>7</sup> Aranzadi, op. cit., 1114/1943.
- <sup>8</sup> Aranzadi, op. cit., 1457/1955.
- <sup>9</sup> A.P.G. Sección: Consejo de Ministros. Serie: Secretariado del gobierno. Antecedentes. Caja 3764, carp. 3. Legajo 2758, carp. 3.
- <sup>10</sup> Aranzadi, op. cit., 1050/1938.
- <sup>11</sup> Aranzadi, op. cit., 1517/1940.
- <sup>12</sup> Aranzadi, op. cit., 515/1945.
- <sup>13</sup> Aranzadi, op. cit., 1150/1939.
- <sup>14</sup> A.P.G. Legajo 59, nº 2, pág. 3-5.
- <sup>15</sup> Idem.
- <sup>16</sup> Aznar Embid. Del salario..., op. cit., pág. 55.
- <sup>17</sup> Giron de Velasco. Escritos..., Tomo II, op. cit., pag. 117.
- <sup>18</sup> Aranzadi, op. cit., 810/1943.
- <sup>19</sup> Aranzadi, op. cit., 1587/1944.
- <sup>20</sup> Instituto de Cultura Hispánica. Citado por Tamames. Estructura económica..., op. cit., pág. 30.
- <sup>21</sup> A.P.G. Sección: Gobierno. Serie: Jefatura de Estado. Legajo 59, nº 2.
- <sup>22</sup> Idem, legajo 59, nº 2, pág. 2.
- <sup>23</sup> Idem, legajo 59, nº 2, pág. 6.
- <sup>24</sup> Aranzadi, op. cit., 1349/1943.
- <sup>25</sup> Idem.
- <sup>26</sup> Aranzadi, op. cit., 1093/1948.
- <sup>27</sup> Aranzadi, op. cit., Orden de 3 de marzo de 1939, Boletín de 5 de marzo de 1939, pág. 183.
- <sup>28</sup> Aranzadi, op. cit., 76/1948.
- <sup>29</sup> Aranzadi, op. cit., 1093/1948.
- <sup>30</sup> Aranzadi, op. cit., 639/1942.
- <sup>31</sup> Aranzadi, op. cit., Orden de 3 de marzo de 1939, Boletín de 5 de marzo de 1939, pág. 183.
- <sup>32</sup> Aranzadi, op. cit., 800/1942.
- <sup>33</sup> Aranzadi, op. cit., 1082/1954.
- <sup>34</sup> Aranzadi, op. cit., 1268/1954.
- <sup>35</sup> Aranzadi, op. cit., 1392/1954.
- <sup>36</sup> Aranzadi, op. cit., 455/1955.
- <sup>37</sup> Aranzadi, op. cit., 1082/1954.
- <sup>38</sup> Aranzadi, op. cit., 1473/1954.
- <sup>39</sup> Aranzadi, op. cit., 1082/1954.
- <sup>40</sup> Aranzadi, op. cit., 1065/1956.
- <sup>41</sup> Aranzadi, op. cit., 1891/1956.
- <sup>42</sup> Aranzadi, op. cit., 1065/1956.
- <sup>43</sup> Aranzadi, op. cit., 69/1957.
- <sup>44</sup> Aranzadi, op. cit., 1362/1954.
- <sup>45</sup> B. O. del Movimiento, nº 306 del 1º de agosto.
- <sup>46</sup> Aranzadi, op. cit., 186/1955.
- <sup>47</sup> A.P.G. Sección: Presidencia del Gobierno. Serie: Junta de Defensa Nacional, Junta Técnica de Estado, Vicepresidencia y Presidencia. Legajo 26, nº 11.
- <sup>48</sup> Idem, legajo 26, nº 9.
- <sup>49</sup> Idem, legajo 26, nº 9.
- <sup>50</sup> Idem, legajo 26, nº 1.
- <sup>51</sup> Errata del autor.
- <sup>52</sup> A.P.G. Sección Presidencia del Gobierno. Serie: Junta de Defensa Nacional, Junta Técnica de Estado, Vicepresidencia y Presidencia. Legajo 26, nº 1.

- 
- <sup>11</sup> Mem. legajo 26, n.º 13.  
<sup>12</sup> Mem. legajo 26, n.º 8.  
<sup>13</sup> Mem. legajo 26, n.º 8.  
<sup>14</sup> Aranzadi, op. cit., 1093/1948.  
<sup>15</sup> Aranzadi, op. cit., 659/1942.  
<sup>16</sup> A.P.G. Sección: Consejo de Ministro. Serie: Secretariado del Gobierno. Antecedentes. Caja 2737, carp. 5.1.2.  
<sup>17</sup> Aranzadi, op. cit., 2022/1942.  
<sup>18</sup> Aranzadi, op. cit., 818/1943.  
<sup>19</sup> Aranzadi, op. cit., 1538/1943.  
<sup>20</sup> *Ibidem*.  
<sup>21</sup> Aranzadi, op. cit., 171/1943.  
<sup>22</sup> Aranzadi, op. cit., 1173/1943.  
<sup>23</sup> Aranzadi, op. cit., 1583/1951.  
<sup>24</sup> Aranzadi, op. cit., 1479/1954.  
<sup>25</sup> Aranzadi, op. cit., 1364/1942.  
<sup>26</sup> Aranzadi, op. cit., 303/1944.  
<sup>27</sup> Aranzadi, op. cit., 1469/1950.  
<sup>28</sup> Aranzadi, op. cit., 1398/1951.

## **Capítulo 8. El apoyo del régimen al matrimonio tradicional y la natalidad.**

Al amparo de la protección financiera que proporcionaba la Caja Nacional se desarrolló un sistema de préstamos/premios a la nupcialidad y otro de premios a la natalidad. Es innegable que ambas realidades, independientemente de otras dimensiones, son también hechos legales o jurídicos que reflejan ciertas intenciones legislativas y que producen determinadas consecuencias.

### **8.1. La re-evangelización de la familia española.**

El deseo de insuflar un halo de evangelización a la familia española conduce, en las manifestaciones que sobre la familia se realizan en el período de estudio, a proyectar un talante, que al menos parcialmente, se puede calificar como re-evangelizador del hogar español sometido “contra natura” a un período de ataques insufribles que llegaron a su culmen en el período republicano, que por otra parte era percibido de forma escasamente matizada como el intento de asalto a la familia española por parte del marxismo. “Se quiere recristianizar la familia”<sup>1</sup>, para lo cual, entre otras cuestiones, se establecen mejoras con fines demográficos. En este sentido y aparte del talante natalista de la política franquista en el período de estudio, la familia ejemplar había de proyectar su carácter de heredera de la estirpe de Adán. Interiorizado este talante bíblico, tras el período de afrentas al núcleo familiar español, volvía a resurgir a los ojos de la España oficial esa familia cuyo objetivo era la proliferación de la estirpe y de la raza española para el beneficio “de la patria y de la cristiandad”. Unido este planteamiento a la idea de que el incremento del número de españoles era una expresión del deseo del Omnipotente de que la familia sirviese para comunicar la vida y no para detener el curso de la naturaleza y evitar el nacimiento de esos hijos “sin los cuales faltaría la corona de la alegría a la felicidad”<sup>2</sup>.

Todo ello mostraba la ligazón existente entre el respeto a la función reproductora de la familia, el cuidado para con los deberes religiosos y la atención a las necesidades de la Patria ya que “una cuna consagra a la madre de familia y muchas cunas la santifican y glorifican ante el marido, ante la Iglesia y la Patria”<sup>3</sup>. Ésta, independientemente de la función que se asigna a la mujer, es la concepción que triunfa con respecto a la familia, como servidora de la Iglesia y del Estado en su función reproductora dado que, si por un lado Dios había establecido que el fin esencial y primario del vínculo marital era la generación de hijos, por otro lado la población española era considerada como “elemento básico de la prosperidad y grandeza de la Patria, ya que por nadie se pone en duda que, tanto en las tareas de la paz como en la guerra, el factor humano es el índice primordial de la potencialidad del Estado”<sup>4</sup>. Esta es la idea fundamental que vertebraba el pensamiento sobre la familia española en torno a la cuestión de la nupcialidad

y la natalidad: la familia española había de constituirse en “forjadora de una nueva generación que debía ser servicio para Dios y progreso para la Patria”<sup>5</sup>.

Late en este discurso en torno al hogar español la idea de la existencia de un escollo profundo que hundiría sus raíces en la crisis de la natalidad en nuestro país. Uno de los más influyentes hombres en el nacimiento del subsidio familiar obligatorio, Jordana de Pozas, afirmaba en 1938 que lo que se había producido era la crisis de la institución familiar como consecuencia de los ataques de que era objeto y añadía:

“Crisis del matrimonio y consiguiente descenso de la nupcialidad debido a la edad cada vez más tardía de los contrayentes..., al mayor número de personas que quedan célibes (influencia del laicismo, de la inmoralidad, etc.) y a la menor duración de muchas uniones (divorcio)...Crisis de la natalidad, secuela de la del matrimonio o producto del neomalthusianismo”<sup>6</sup>.

Existía una inquina especial contra ese neomalthusianismo imperante en las naciones “decadentes” (precisamente por este motivo). Se imponía, y así lo reflejaban las manifestaciones normativas (sin entrar todavía en las conclusiones que una cuantificación supone), la consideración de los hijos, no como una carga pesada que era necesario evitar o al menos regular para que el peso no fuera excesivo. En el trasfondo de esta idea lo que impera es la condena de toda orientación eugenésica que el Estado pudiera hacer suya y paralelamente se contraoferta un retorno a la tradición católica que se entiende alterada por las orientaciones liberales del siglo XIX y por la “avalancha” marxista de la República. La visión del siglo XIX en torno al tema que tratamos se centra en la idea, por así decirlo, de que es el siglo en que se plantea la guerra contra la familia. Los planteamientos de Malthus sobre el problema de la superpoblación y la teoría de que, paralelamente a la progresión geométrica del crecimiento de la población, las subsistencias sólo crecerían de forma aritmética conduciendo a la humanidad al precipicio de la miseria, eran vistas como armas deleznable del pecado que todavía cabalgaba a sus anchas por el orbe terrestre. Frente a esta idea las manifestaciones en torno al problema de la del número de moradores de un país se centraban en el hecho de que “el aumento de la población era causa de riqueza”<sup>7</sup>. Fue por ello que la política social, en el período de estudio, tiende a actuar, en parte, bajo el signo de lo demográfico. Y en este contexto se plantea la preocupación porque la proporción de matrimonios disminuya, porque la edad de los cónyuges al contraer matrimonio se retrase y porque el promedio del número de hijos por matrimonio decrezca. Se reproducen sistemáticamente en las publicaciones de la época la referencias a las causas que habían conducido a ello. Analizando a Tormo Cervino<sup>8</sup> se observa como se consideran variables como la económica, la social, la legislativa o la moral a pesar de lo cual “el principio que las informa (*a estas variables*) no es otro que el apartamiento



de Dios”, ratificando por tanto el talante re-evangelizador de la política en torno a la familia española.

### **8.2. Nupcialidad y natalidad como política de Estado.**

Según Ramiro Ledesma “sólo puede comenzarse a pensar seriamente en la grandeza de España, y sólo esa grandeza es efectivamente posible, cuando su población se haya, cuando menos, duplicado. Cuarenta millones de españoles en nuestra península constituyen una garantía excelente de gran futuro económico y política, es decir, mundial”<sup>9</sup>. Esta concepción, hecha propia por Franco en el discurso del primer año de la victoria, suponía el planteamiento de una política de población y demográfica.

Desde la vertiente del Estado, y más concretamente en lo tocante a las directrices del ministerio de Trabajo, el objetivo de la política familiar era desarrollar las “medidas conducentes a conseguir esa fortaleza familiar base y garantía de una buena realidad demográfica y expresión de un nivel de vida que fuera manifestación de un bienestar social de amplio y profundo sentido”<sup>10</sup>. Esta vertiente demográfica, en gran parte, es la que fundamenta la institucionalización de los préstamos/premios a la nupcialidad, los premios de natalidad y la política con respecto a la familia, independientemente de que no eran en absoluto suficientes para formar un marco de protección global y satisfactorio de la familia en justa relación con las manifestaciones formales que hacían de ella uno de los tres pilares de una sociedad española que se pretendía modelar. Y así se formula en la Congreso de la Familia española de 1958:

“Lo deseable en este aspecto es que dichas medidas se incrementasen en su extensión y en su cuantía hasta alcanzar a un número mayor que el actual de beneficiarios y hasta permitir en todas ellas una puntualidad mayor en el disfrute de dichos beneficios”<sup>11</sup>.

Parece por tanto, que al igual que en otros países las asignaciones económicas fomentadoras de la nupcialidad o la natalidad, respondían, al menos parcialmente, a motivaciones demográficas<sup>12</sup>. Se partía del hecho de que junto a otras variables, la nupcialidad incidía de forma significativa en la natalidad y que por tanto la edad de los contrayentes, su fecundidad y la duración del matrimonio determinarían la potencialidad de la nación vista en términos de desarrollo de la natalidad. Y aunque ciertamente la nupcialidad no era el único elemento influyente en la natalidad, su incidencia hacía que se viera como conveniente y necesario una política que tendiera a facilitar el matrimonio, lo cual convierte en “indiscutible su fondo de política demográfica”<sup>13</sup>. Pese a ello las conclusiones de Matoses son que “los préstamos de nupcialidad deben incrementarse, si se quiere obtener de ellos resultados positivos en el campo demográfico”<sup>14</sup>, de lo cual se puede inferir que el peso cuantitativo de la política familiar en

torno a la nupcialidad y la natalidad era meramente simbólico y que, por tanto, en absoluto se puede considerar como la espoleta que potenciara el crecimiento de la población en las décadas siguientes a la creación de los préstamos/premios de nupcialidad y de los premios de natalidad.

La cuestión se plantea en términos de bienestar de la familia. Parece de sentido común que cuando una familia ve aumentar el número de hijos disminuye el ingreso o el jornal para cada uno de sus miembros. La pugna por solucionar el dilema entre el nacimiento de nuevos miembros y la consiguiente necesidad de nuevos ingresos para mantener el nivel de vida anterior al momento del aumento de la prole se solucionaba, con el objetivo de no llegar al precipicio de la miseria, con la limitación del número de miembros en la familia. Entre las motivaciones que incidían en el descenso de la natalidad destacaban las prácticas anticonceptivas ligadas al "individualismo materialista y a la irreligiosidad"<sup>15</sup>. Eran estas causas de tipo moral las que se percibían en la mentalidad de los panegiristas de la política familiar de la época como de gran trascendencia. Entre ellas el trabajo femenino, dado que actuaba como factor de independencia de la mujer frente al hombre, era el factor más destacado; la incorporación de la mujer al mundo del trabajo era vista como causa de que un número considerable de ellas se alejase del matrimonio, potenciando su esterilidad, incluso perdiendo la confianza en el hombre y considerando la maternidad no como un don divino sino como un pesado lastre. El trabajo en estas circunstancias tenía graves consecuencias psicológicas al introducir en ellas una mentalidad antinatalista o antigenerativa, además de influir de forma negativa en su organismo.

Manuel Hervás hace una interesante referencia sobre la influencia de la emancipación cultural e intelectual de las españolas partiendo de una concepción de la mujer como persona de segunda categoría y adoptando un determinismo biológico que incompatibiliza sus funciones más primarias con el acceso a un nivel cultural sólo destinado a aquellos que gracias a los designios de la naturaleza habían quedado exonerados de la noble función de dar a luz. Se refiere, por supuesto, a los hombres. Se imponía en este caso una relación necesaria e inquebrantable en el mundo laboral entre las funciones de las mujeres y sus características fisiológicas que se expresaba en boca de Hervás de la forma siguiente:

"Solamente la febril evolución de la civilización moderna, empujada por las ciegas exigencias de la cada día más acelerada actividad económica, podía admitir el mezquino concepto de que dos seres destinados por la Naturaleza a diversas funciones, con órganos diferentes y diversa capacidad, debieran prepararse a cumplir dos funciones distintas con el mismo equipaje cultural: la mujer, formada para dar vida en su cuerpo al hijo, para nutrirle con una secreción de su organismo, para criarle y educarle, al menos, hasta la adolescencia, no obstante eso, recibe en nuestra civilización la misma instrucción que recibiría si sus funciones fueran iguales que las del hombre; lo mismo

que en las especies inferiores, donde los órganos masculinos y femeninos son iguales. No se ignora que la mujer deberá tener hijos, es decir, concebirlos, amamantarlos, cuidarlos, educarlos, mientras que las funciones del hombre serán completamente diferentes. Pues, a pesar de ello, la mujer tiene que aprender las mismas cosas que el hombre”<sup>16</sup>.

Como consecuencia, la independencia cultural generaba la independencia intelectual, con lo cual se producía la desviación de las funciones asignadas por la naturaleza a las mujeres. Una aberración para el autor antes mencionado.

Junto a estos factores y pese a su carácter más marcadamente anecdótico, merece destacarse la diatriba contra el deporte que Hervás realiza. Se consideraba el deporte como un factor con repercusiones fisiológicas negativas en la fecundidad de la mujer; no obstante eran las consecuencias psicológicas las que más preocupaban a los apologistas de la vuelta de la mujer a sus funciones tradicionales:

“En efecto, la actividad deportiva determina el alejamiento del hogar, la desviación espiritual y física respecto a la idea de familia honesta, la exaltación de los atractivos corporales, que, supervalorando la idea erótica, produce una debilitación de las cualidades morales y sentimentales que aproximan a la mujer a la idea de familia y de maternidad. No cabe negar que el ejercicio físico puede mejorar la raza; pero ha de ser en los límites de una prudente gimnasia escolar...Así, pues, el deporte femenino es un poderoso difusor de lo que alguien ha llamado ideal del desnudismo (más bien debería llamársele ideal de la inmodestia), y cuyas repercusiones sobre la moralidad general, la vida familiar y el movimiento demográfico nadie puede poner en duda”<sup>17</sup>.

En los años en que la posición de España se situaba más próxima a las potencias alemana e italiana las manifestaciones en torno al problema de la natalidad tomaron tintes muy próximos a la apología de la raza y a la necesidad del incremento cuantitativo y cualitativo de la misma por medio de una determinada política de Estado. Así en 1941 José Antonio Girón<sup>18</sup> ponía especial hincapié en la cuestión de la población, “una de las primordiales preocupaciones de los pueblos que, como el nuestro, se han impuesto así mismo el deber de ser fuertes, única posibilidad de ser respetados en el mundo”. Por tanto, unido a la prestación de servicios, las prestaciones en dinero tenían como objetivo la mejora del nivel de vida y en paralelo a esta motivación la mejora biológica de la raza. “Caso muy importante es proveer la alimentación y nutrición de la población con beneficio directo al robustecimiento de la raza, que de otro modo causaría debilidad y degeneración. Los pueblos bien nutridos consiguen una importante base material sobre la que se asienta el progreso de la actividad humana y el reforzamiento de la institución

familiar, mientras que aquellos otros donde existe marcado infraconsumo, son pueblos débiles en sus instituciones sociales y no llegan a cubrir las necesidades medias de su población, cuyas familias se disgregan y los pueblos sufren retroceso o estancamiento en su economía”<sup>19</sup>, afirmaba Rebollo González. En justa correspondencia, tanto los premios a la natalidad, como los premios a la nupcialidad, sin olvidar los subsidios familiares, eran mecanismos de frenado de la bajada del nivel nutritivo de la raza debido al incremento en el número de hijos en de familias, sobre todo en el caso de las menos dotadas de ingresos. Ello unido a un afán por incidir en este mismo sentido por la vía de la salud explicitaba una política marcada en su aspectos formales y más voluntariosos por el deseo de incrementar el número de futuros trabajadores nacidos y socializados dentro de un núcleo familiar inspirado en la tradición católica y los ideales del Movimiento.

Y es que entre los factores que son más relevantes a la hora de elaborar una política relativa al nivel de vida familiar, los de tipo demográfico ocupan un lugar muy destacado, pues tanto la distribución por grupos de edad de la población como el peso numérico global de la misma tienen una profunda trascendencia en el nivel de vida. De igual manera la distribución por edades de la población española tenía una influencia clara sobre el nivel de vida de las familias debido a las repercusiones que tenía sobre la proporción de personas a cargo de la población trabajadora.

De ahí la atención y el auxilio a la nupcialidad, motivado ello, no solamente por el decrecimiento de la natalidad y sus posibles peligros, o por las posibles incidencias de la guerra civil. También hay que tener en cuenta la mentalidad de los dirigentes como González Bueno o Girón de Velasco sobre la conveniencia de que los hijos nacieran, se criaran y se educaran en familias legal y religiosamente constituidas y de que se conservara la moral tradicional y la cultura católica a través de las virtudes de la familia, que entendida como el elemento primigenio de socialización de los individuos se constituiría de esta manera, y sobre todo en lo que se refiere al mundo del trabajo, en un elemento refrenador o regulador del posible conflicto. Esa es la formulación ideal de lo que la familia debía de constituir; otra cuestión que requiere de un análisis cuantitativo sería ver hasta que punto la incidencia de esta política incidió de forma decisiva o no en la consecución de los fines propuestos por medio de la elevación del nivel de vida.

No corría a cargo únicamente del Estado la atención de las cargas económicas que suponía el matrimonio o el nacimiento de un descendiente. El mutualismo, en líneas generales, hacía frente con aportaciones muy variadas en cuanto a su cuantía (a veces fijas, a veces proporcionales a los salarios y con un tope establecido) a las circunstancias mencionadas. Su preocupación, según

Martínez Llanos, no estaba ligada a la cuestión demográfica<sup>20</sup>, aunque según lo expuesto hasta ahora sí tuvo un peso determinante.

### **8.3. Los premios de natalidad**

Al abordar la cuestión de los premios a la natalidad nos moveremos parcialmente en lo que es el ámbito de lo normativo sin por ello dar por hechos reales las manifestaciones legislativas o solemnes de las instancias del ministerio de Trabajo u otras relacionadas con la cuestión, pero sin dejar de lado lo que se plasma en las manifestaciones solemnes como explicitación de intenciones y de proyectos políticos determinados.

Con el Decreto de 22 de febrero de 1941<sup>21</sup> dio comienzo la aplicación de los premios de natalidad. En su art. 8 se dispone que como recompensa a las familias numerosas y estímulo de la natalidad se concedieran anualmente un premio de 1.000 pts. en cada provincia y otro nacional de 5.000 pts. para el matrimonio español que mayor número de hijos hubiera tenido. De igual manera se establecían premios de igual cuantía para los matrimonios que tuvieran mayor número de hijos vivos. Al igual que los préstamos/premios a la nupcialidad, estas prestaciones corrían a cargo de la Caja Nacional de Subsidios Familiares.

La Orden de 19 de marzo de 1941<sup>22</sup> establecía la cuantía de los premios de natalidad; uno nacional de 5.000 pts. para el matrimonio español que mayor número de hijos hubiera tenido, 50 premios de 1.000 pts., para cada provincia, para el matrimonio que hubiera tenido más hijos; un premio de 5.000 pts. para el matrimonio español que conservara mayor número de hijos vivos y 50 de 1.000 pts. para cada provincia para el matrimonio español que tuviera el mayor número de hijos vivos, lo cual permitía premiar esos desastres de supervivencia en los que sobrevivían cuatro hijos de veinte habidos o uno de quince. En estos dos últimos casos era condición indispensable haber tenido un hijo el año anterior al que el premio correspondía. Los supuestos para el caso de iguales méritos de cara a un premio de los señalados dejaban traslucir una decantación por un tipo de familia adecuada a unos moldes culturales e ideológicos concretos y más próximos al modelo que se desea promover desde el Estado; así se establecía que en caso de igualdad la concesión se haría atendiendo discrecionalmente a una serie de circunstancias entre las que se encontraba el hecho de que alguno de los hijos hubiera muerto por la Patria.

El Decreto de 29 de diciembre de 1948<sup>23</sup> modificaba la cuantía de los premios, siendo los nacionales de 15.000 pts. cada uno de los premiados y los provinciales de 5.000. En 1950 se modificaba de nuevo la cuantía de los citados premios<sup>24</sup>. Se establecía uno de 50.000 pts. para el matrimonio español que mayor números de hijos hubiera tenido; 50 de 15.000 pts., uno en

cada provincia, al matrimonio que hubiera tenido mayor número de descendientes. Un premio para el matrimonio que mayor número de hijos vivos tuviera y 50 de 15.000, uno por provincia, que tuviera el mayor número de retoños vivos. En el año 1955<sup>25</sup> se aumentaban las prestaciones en el sentido de conceder dos primeros premios nacionales de 50.000 pts. y otros dos segundos premios de 25.000 pts. cada uno. En las provincias a los cien primeros se les concederían 15.000 pts. y a los otros cien segundos 5.000 pts. a cada uno. La Orden de 29 de octubre de 1955<sup>26</sup> concretaba el anterior decreto estableciendo que habría un primer premio nacional de 50.000 pts., un segundo premio nacional de 25.000 pts., 50 premios provinciales, de 5.000 pts. dentro de los premios por mayor número de hijos habidos. Dentro de los premios por mayor número de hijos vivos se concedería un primer premio nacional de 50.000 pts., un segundo premio nacional de 25.000 pts., cincuenta premios por provincia de 15.000 pts. y 50 segundos premios por provincia de 5.000 pts.

Antes de entrar más pormenorizadamente en las cuestiones relacionadas con el afán del Estado por incrementar la natalidad por medio de prestaciones económicas conducentes a lograr un mayor nivel de vida es necesario hacer referencia a la Ley de 24 de enero de 1941 de Jefatura del Estado<sup>27</sup> en cuanto es representativa de la otra variante de protección de la natalidad por medio del marco normativo. En su preámbulo la mencionada ley afirma que "la política demográfica es una de las preocupaciones fundamentales de nuestro Estado. No se concibe una política demográfica eficaz sin abordar el problema de los miles y miles de vidas que se frustran antes de nacer, por maniobras criminales. Así lo dice la experiencia y el asesoramiento de los técnicos a través de Entidades científicas competentes. El estrago harto acusado en tiempos anteriores como consecuencia de un sentido materialista de la vida adquirió caracteres de escándalo durante el régimen republicano, agudizándose aún más escandalosamente en aquellas zonas sometidas a la dominación del Frente Popular. El Gobierno, consciente de su responsabilidad, decide combatir el crimen social que el aborto provocado representa y que impide que nazcan muchos miles de españoles anualmente". Mas allá iba la ponencia de Valladolid en el Congreso de la Familia Española<sup>28</sup> en el que pedía se modificara el Código Penal en cuanto hacía referencia a la penalidad del aborto, pues al ser considerado como un parricidio debía ser castigado como tal.

En la línea de defensa del mayor número de nacidos en el Estado y de crítica de la República, este periodo de la Historia de España se refleja en el mencionado preámbulo como un momento de genocidio en el que "miles y miles de vidas se frustran antes de nacer" fertilizado por una "sentido materialista de la vida" que ahora cesa de ser operativo por el interés del Estado en combatir este "crimen social" y que impide el fortalecimiento de la nación ante el descenso del número de nacimientos. En esta línea, pero en su vertiente sanitaria la Ley de Jefatura del Estado de 12 de julio de 1941<sup>29</sup> expone la preocupación de la sociedad española por la madre y

el niño y pone de manifiesto el deseo del "Gobierno de mejorar en lo posible los factores demográficos positivos, estimulando la nupcialidad y natalidad..."

Esta apología de la familia de descendencia numerosa hace de ella una institución ejemplar a la que el Estado, formalmente, pretende elevar su nivel de vida en la medida en que es el elemento fundamental de la socialización de los "trabajadores" españoles. En esta línea estaba la Ley de 18 de junio de 1942<sup>30</sup> en la que se aludía a la elevación de las condiciones del hogar español en atención a los hijos de los trabajadores o al favorecimiento de nuevos núcleos familiares a través de los préstamos a la nupcialidad. Todo ello manifestaba claramente el afán de hacer de la familia española un ejemplo de ciudadanía ejemplar y de prestación de servicios irremplazables a la patria. Así la disposición mencionada estipulaba la inscripción en el seguro de maternidad de las esposas de los trabajadores asegurados en el Régimen de Subsidios Familiares y de las trabajadoras que, estando aseguradas en dicho régimen, no pudieran estarlo en el de maternidad por superar el límite estipulado de retribución. De igual manera autorizaba al I.N.P. a destinar el 25 % de los fondos de reserva de la Caja Nacional para la construcción y dotación de Hospitales, Clínicas y Dispensarios de Maternidad y Puericultura.

La importancia formal que confiere el régimen a la potenciación de la natalidad como base de la fortaleza nacional se plasma también en una ley de singular trascendencia como fue la de 14 de diciembre de 1942<sup>31</sup>. Es interesante para valorar la cuestión de la maternidad y la natalidad el hecho de que en el capítulo 1º ("Fines de la ley") se expusieran cuatro objetivos fundamentales, de los cuales, dos aludían a la cuestión de la maternidad y de la potenciación de los nacimientos. En el Decreto de 11 de noviembre de 1943, en el que se reglamentaba la aplicación de la ley mencionada, y dentro del Título 1º ("De los fines y ámbito del seguro de enfermedad") se establecía que entre los fines del seguro estaba la prestación de asistencia sanitaria en caso de maternidad y las indemnizaciones pertinentes en caso de maternidad. Dentro de las prestaciones sanitarias que postulaba la mencionada ley, en su art. 34 mencionaba específicamente la cuestión de la maternología, la pediatría, la puericultura y la ginecología. En esta misma línea de protección a la mujer establecía que la atención a la futura madre se iniciara desde el momento en que quedara embarazada. En el art. 50 se exponían las prestaciones ligadas a la maternidad de las madres españolas y en él se prescribía el reconocimiento durante la gestación, la asistencia en las incidencias patológicas a que diese lugar la gestación, el parto o el puerperio, la asistencia auxiliar del médico, etc.; todas ellas manifestaciones formales que en absoluto tienen un par mimético en el ámbito de la realidad, pero que sí sirven para poner de manifiesto el talante, al menos parcialmente, natalista de la política que con respecto a la familia se llevaba a cabo en España.

En esta misma línea el Decreto de 7 de junio de 1949<sup>32</sup> concedía a “las mujeres aseguradas” en el Régimen Obligatorio del Seguro de Enfermedad que dieran a luz una indemnización por pérdida de retribución originada por el descanso obligado consistente en el 60% de su retribución diaria.

A su vez hay que decir que este método protección de la natalidad que se establecía dentro de unos moldes de respeto a la moralidad vigente se transplantaba también, con todas sus consecuencias, a las colonias españolas. Así la Ordenanza de 3 de diciembre de 1947<sup>33</sup> del Gobierno General de la Colonia de Guinea establecía derechos formales en lo que al trabajo de la mujer cabeza de familia se refería; se estipulaba el derecho a abandonar el trabajo un mes antes y después del parto así como la reserva del puesto de trabajo con un máximo cifrado en veinte semanas después del fin del período de descanso. Sin embargo, en esa mencionada línea moralizante de la sociedad establece en el art. 59 que “el nacimiento del hijo después de los trescientos días siguientes a la muerte del marido de esta trabajadora, o de la disolución o separación legal del matrimonio, producirá el despido de la misma”.

La difícil situación de las madres y sus hijos explica la Circular de 24 de julio de 1948<sup>34</sup>, la cual supone el establecimiento de un plan de alimentación para los niños de cero a dos años de edad así como una alimentación adicional para la madre en los tres últimos meses de gestación. Lo que en el fondo se modificaba era los cupones de racionamiento infantil para crear los de la “madre gestante” tendentes a mantener el nivel más básico en torno a productos como el pan, las legumbres, el arroz, las patatas, el jabón, el aceite o el azúcar.

Junto a la política de protección a la natalidad respaldada por la Caja Nacional del Subsidio Familiar los estatutos de las mutualidades establecían también y como complemento al sistema general premios a la nupcialidad que desde las 250 pts. por hijo nacido del matrimonio podían llegar hasta las 1000 de los estatutos de la mutualidad marítimo nacional, las 1.500 de la banca o las 2.000 del comercio.

#### **8.4. Los préstamos/premios de nupcialidad.**

Los premios de nupcialidad fueron creados por Decreto de 22 de febrero de 1941<sup>35</sup>, siendo en su origen préstamos a la nupcialidad. El objetivo de los mismos era “favorecer la constitución de nuevas familias y la protección de los hijos”. Consistían en préstamos otorgados sin interés amortizables por mensualidades a razón de un 1%, reduciéndose su importe mediante condonaciones sucesivas al producirse el nacimiento de nuevos hijos.



El art. 7 exigía como requisitos para solicitarlo, además de estar soltero, “garantías de moralidad” para la concesión de los mencionados préstamos, lo cual da muestras de nuevo del afán por trasplantar a las manifestaciones solemnes y normativas del régimen los planteamientos moralizantes con los que se pretendía moldear a una sociedad española que provenía de un período destructivo para la familia española. El préstamo consistía en 2.500 pts. y se elevaba a 5.000 cuando lo solicitaba una trabajadora asegurada que se comprometiera a renunciar a su ocupación laboral. Dentro de la tendencia a devolver a la mujer al hogar y a sacarla del taller y de la fábrica patente en todas las manifestaciones legales del régimen, los préstamos a la nupcialidad estaban en la línea de incentivación de la mujer como madre de familia y apartada de la esfera laboral.

La Orden de 7 de marzo de 1941<sup>36</sup> imponía entre las condiciones para solicitar los préstamos para los varones los siguientes requisitos: edad inferior a los 30 años y que se casase con una mujer menor de 25 años. Además se exigía que el importe total de sus ingresos no fuera mayor de 6.000 pts. En el caso de ser mujeres, a las solicitantes se les pedía que hubieran trabajado durante 9 meses como mínimo en los dos años anteriores al matrimonio. El art. 7 daba preferencia en caso de iguales méritos para el préstamo a las mujeres solicitantes que se comprometieran a dejar su ocupación habitual y dentro de este grupo a aquellas cuyo puesto de trabajo pudiera ser ocupado por varón. Condición básica para la consecución del préstamo era la de estar asegurado en el régimen obligatorio de subsidios familiares. Los préstamos tenían una bonificación del 25% del saldo pendiente de pago por cada hijo nacido dentro del matrimonio, siempre que continuaran vivos los anteriores, por lo que al nacimiento del cuarto hijo se cancelaba totalmente el préstamo.

Evidentemente los topes establecidos para la renta eran bastante insignificantes. Ello condujo a paliarlo por medio de la Orden de 11 de octubre de 1941<sup>37</sup> que situó el máximo de renta en 10.000 pts., a lo cual añadió para los ex-combatientes en la “guerra de liberación” un límite de edad situado en los 40 años, siendo considerados éstos como grupo de preferencia para la concesión de los préstamos.

Merece especial atención la cuestión cuantificadora del esfuerzo del Estado por potenciar la nupcialidad a través de los préstamos. Atendiendo a esta variable se observa como para el año 1943<sup>38</sup> se presupuestaron 30.000.000. de pts. para un total de 12.000 préstamos.

El Decreto de 29 de diciembre de 1948<sup>39</sup> acabó con los préstamos a la nupcialidad para crear los premios a la nupcialidad. Con ello desaparecía la obligación de reintegrar los préstamos y éstos pasaban a ser concedidos a cargo del Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares como

prestación normal del mismo. A pesar del peso del proceso inflacionista se mantenía la cuantía de los premios en 2.500 pts. y la cifra total presupuestada en 30.000.000 pts.

La Orden de 5 de mayo de 1949<sup>40</sup> alteraba levemente los principios de concesión al situar el límite para pedir los premios en los 35 años de edad para los hombres y al subir la edad de las mujeres a 30 años. Otra modificación de importancia era la situación del límite de las rentas protegibles por el sistema de premios a la nupcialidad en 12.000 pts. de máximo y 3.000 pts. de mínimo. El artículo 4º disponía de un sistema de puntuación para la concesión de los premios tal y como a continuación se detalla:

EDADES (hombres)	PUNTOS
De 21 a 23 años	14
De 23 a 25 años	12
De 25 a 27 años	10
De 27 a 29 años	8
De 29 a 31 años	6
De 31 a 33 años	4
De 33 a 35 años	2

EDADES (mujeres)	PUNTOS
De 18 a 20 años	14
De 20 a 22 años	12
De 22 a 24 años	10
De 24 a 26 años	8
De 26 a 28 años	6
De 28 a 30 años	4

INGRESOS (mujeres y hombres)	PUNTOS
De 3.000 a 4.000 pts.	14
De 4.001 a 5.000 pts.	13
De 5.001 a 6.000 pts.	12
De 6.001 a 7.000 pts.	11
De 7.001 a 8.000 pts.	10
De 8.001 a 9.000 pts.	9
De 9.001 a 10.000 pts.	8

De 10.001 a 11.000 pts.	7
De 11.001 a 12.000 pts.	6

Se disponía también que en caso de empate a puntos la preferencia se estableciera según criterios de menor edad.

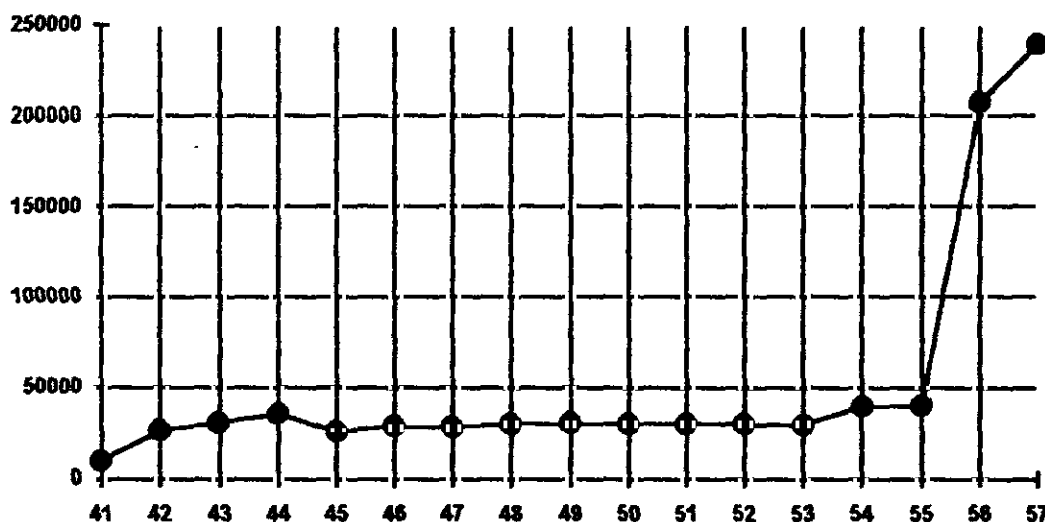
El Decreto de 23 de julio de 1953<sup>41</sup> fijaba la consignación anual a cargo del Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares en 40.000.000 pts. En esta línea de intento de elevación de las prestaciones el Decreto de 2 de septiembre de 1955<sup>42</sup> modificaba la cuantía de los premios situándolos en las 3.000 pts. sin limitación de número. La Orden de 29 de octubre de 1955<sup>43</sup> modificaba el límite de la edad protegible por los premios a la nupcialidad situándola en 40 años para los varones y 35 para las mujeres. A su vez establecía que los ingresos par la concesión habían de ser superiores a 6.000 pts. e inferiores a 24.000.

Aunque no dentro del amparo del Régimen de Subsidios Familiares en el ámbito del mutualismo, o mejor dicho, en el ámbito de los sectores productivos en que el mutualismo estaba desarrollado se impusieron premios a la nupcialidad bajo la forma de dotes o premios que abarcaban desde las 500 pts. de los estatutos de la mutualidad del aceite hasta las 9.000 de los estatutos de la mutualidad de los Seguros, pasando por las 5.000 del personal sanitario del seguro de enfermedad o las 2.500 (con posibilidad de llegar a las 5.000 de las Cajas de Ahorros). A pesar de ello los premios a la natalidad establecidos por los estatutos de las mutualidades aparecen dominados por las prestaciones en torno a las 1.000 o 1500 pts.

#### ***8.4.1. Análisis cuantitativo de los préstamos/premios de nupcialidad.***

Un análisis cuantitativo de las prestaciones de los préstamos/premios de nupcialidad permite observar como las cantidades permanecen fijas, con muy escasa variación, de 1942 a 1955 (ver gráfico nº 15). En el primero de los años la cifra se situaba en 26.615.000 pts. y en el segundo de los años en 40.138.100 pts. Sin embargo en 1956 la cifra se situaba por encima de los 200 millones de pts. y en 1957 ascendía a 239.265.900 pts. La alteración de los criterios de concesión en 1955 muestra los motivos de esta gran elevación. Hay que tener en cuenta que en 1955 los niveles máximos de renta protegible se situaban en las 24.000 pts. anuales, mientras que en 1941 el criterio existente situaba las rentas protegibles en las 6.000 pts. y posteriormente en las 10.000, mientras que en 1949 la cifra se situó en 12.000 pts. En tantos por ciento esto suponía que de 1941 a 1949 el incremento en el nivel de rentas protegibles era de un 20 %, de 1949 a 1955 un 100 % y de 1941 a 1955 un 140 %. A estos datos hay que añadir que el incremento del coste de la vida de 1941 a 1955 supuso un incremento del 177,7 %. Teniendo esto en cuenta, un solicitante de los premios cuyo nivel de renta hubiera estado en 10.000 pts.

en 1941 y en 24.000 en 1955 habría experimentado un incremento nominal en sus percepciones del 140 %; sin embargo, en términos reales ese incremento se tomaría negativo al introducirse la variable del incremento en el coste de la vida (más del 177 %). De ello se deduce que los incrementos en los niveles de rentas protegibles no están en la raíz de la elevación de las solicitudes y prestaciones de 1956 y 1957 y que más bien otro elemento habría de incidir de forma más determinante en esa variación.



*Gráfico n° 15. Importe de las prestaciones por préstamos/premios de nupcialidad en miles de pts. de 1941 a 1957.*

En 1941 la edad estipulada para poder solicitar los préstamos se situaba en 30 años para los hombres y 25 para las mujeres; en 1949 la edad máxima era de 35 para los hombres 30 para las mujeres. De la segunda fecha a la primera la variación en el criterio de rentas protegibles no suponía un 20%. Pero en 1955, unido a la variación de los criterios de la renta, se situó la edad máxima protegible en 40 años para los hombres y 35 para las mujeres. Estos dos factores unidos son los que permiten dar razón del elevado incremento de prestaciones y de premios hechos efectivos. Estas últimas, en consonancia con las prestaciones, experimentaron una subida significativa en 1956 y 1957, 69.025 y 79.764 respectivamente, cuando en 1955 la cifra era de 16.053 (ver cuadro n° 10).

Año	Solicitudes formuladas	Premios hechos efectivos
1941	7312	3496
1942	15290	8706
1943	19302	9564
1944	...	9235
1945	28209	8008
1946	28701	8831

1947	25230	8872
1948	17608	9441
1949	25714	10532
1950	32947	12191
1951	29619	12090
1952	29235	12001
1953	29977	11924
1954	41831	15911
1955	42096	16053
1956	...	69025
1957	...	79764

*Cuadro n° 10. Solicitudes formuladas y pagos hechos efectivos de los préstamos/premios de nupcialidad.*

Por provincias (ver cuadro n° 11) se observa que también hasta el año 1955 la dinámica del número de préstamos/premios por provincia tiene unas características distintas al período posterior. Hasta 1955 entre las cinco provincias con mayor número de préstamos/premios de nupcialidad se encuentran siempre Barcelona, Madrid y Sevilla. Dentro de esta apreciación hay que resaltar el hecho de que Barcelona era la ciudad con mayor número de premios hasta 1950; de ahí en adelante su posición varió situándose en tercera y cuarta posición hasta 1955. El primer lugar que ocupaba Barcelona en el período indicado pasó a ser ocupado por Madrid seguido de Sevilla, salvo en 1953 en que se intercambiaron las posiciones. Tras estas tres ciudades las que durante más tiempo se situaron entre las cinco más premiadas fueron Córdoba, Málaga y Valencia (todas ellas en seis ocasiones entre las cinco primeras) y Murcia en tres ocasiones. Por tanto, exceptuando Madrid, la zona meridional y mediterránea estaba a la cabeza en cuanto a número de premiados.

Álava	34	31	40	35	39	51	28	27	29	43	60	510	477
Albacete	119	127	142	146	106	163	128	130	130	180	170	699	807
Alicante	201	205	260	288	355	295	464	444	454	619	572	2920	2620
Almería	230	214	148	170	201	188	330	355	339	452	364	729	818
Ávila	78	73	81	68	76	115	52	52	56	80	99	274	296
Badajoz	160	224	221	236	280	339	266	251	235	353	382	1387	1841
Baleares	129	136	193	160	171	208	171	169	164	225	217	1102	1132
Barcelona	656	687	699	676	767	982	773	787	822	919	806	6454	7641
Burgos	89	100	68	72	100	186	80	63	65	96	132	739	642
Cáceres	169	156	155	116	183	260	164	157	152	208	192	646	947

Cádiz	219	220	188	281	234	226	454	448	463	597	465	1678	2092
Castellón	79	104	132	138	158	188	75	62	66	85	140	1177	1068
Ciudad Real	132	125	165	144	196	266	177	195	183	249	238	1349	1502
Córdoba	274	365	273	321	345	319	627	668	658	842	698	2561	3065
La Coruña	243	225	262	329	277	386	515	286	290	412	409	899	1135
Cuenca	68	90	74	53	95	166	52	51	47	58	54	284	463
Gerona	76	98	86	70	107	161	62	56	56	77	75	1095	1120
Granada	178	208	239	236	274	289	264	235	235	346	310	1076	1306
Guadalajara	30	43	35	24	46	93	29	21	18	32	48	243	244
Gipúzcoa	89	105	89	105	117	139	95	91	96	136	184	2066	2147
Huelva	225	206	219	191	216	204	333	343	354	447	460	1179	1237
Huesca	55	71	57	49	66	117	43	31	34	45	59	339	407
Jaén	234	224	260	367	319	364	359	375	348	511	510	1621	2223
León	147	150	157	199	195	230	126	128	123	169	196	941	1191
Lérida	53	75	72	74	90	172	44	40	40	59	73	532	735
Logroño	67	69	67	62	79	121	54	52	53	76	133	716	627
Lugo	70	77	53	59	53	90	50	43	41	60	53	240	293
Madrid	540	679	426	415	656	810	963	971	943	1301	1262	5957	8467
Málaga	306	338	233	306	297	275	739	748	765	1046	950	2216	2560
Murcia	254	284	306	343	383	336	583	589	578	726	552	1735	1949
Navarra	95	105	97	92	130	138	100	98	100	143	214	806	662
Orense	96	92	81	57	69	118	62	48	45	65	85	170	241
Oviedo	197	253	264	292	369	431	388	373	369	455	604	2157	3036
Palencia	71	64	68	84	74	111	65	62	59	85	103	590	564
Las Palmas	147	156	191	248	195	134	306	340	319	432	385	838	1069
Pontevedra	261	283	247	371	331	281	346	337	344	465	466	1249	1329
Salamanca	115	127	121	114	128	179	1147	107	106	160	194	816	851
Santa Cruz	87	90	151	171	162	149	170	180	172	227	174	434	485
Santander	127	140	222	296	239	196	209	232	214	292	316	1434	1496
Segovia	46	59	51	41	63	91	43	35	38	58	102	294	318
Sevilla	279	385	332	369	402	391	894	935	944	1202	1126	2699	3265
Soria	27	39	29	39	37	86	24	16	19	32	46	173	194
Tarragona	99	113	139	145	164	188	88	83	89	123	128	834	977
Teruel	45	66	72	48	91	149	42	37	33	52	60	417	399
Toledo	162	154	178	123	197	256	108	98	98	133	171	646	969
Valencia	385	428	349	584	587	610	529	528	510	690	931	4703	5287

Valladolid	85	103	110	109	122	146	92	89	89	114	150	1023	977
Vizcaya	131	157	229	242	219	225	201	198	206	277	398	3889	1853
Zamora	92	104	98	109	109	163	75	98	73	108	117	304	371
Zaragoza	191	205	243	2249	274	304	176	243	186	248	309	1860	1973
TOTAL	8088	8831	8872	9441	10503	12087	11935	11908	11850	15810	15942	68700	79447

*Cuadro n° 11. N° de préstamos/premios hechos efectivos por provincias.*

En el año 1956 se observa un cambio significativo. Por el orden en que se exponen, las provincias más premiadas fueron: en 1956, Barcelona, Madrid, Valencia, Vizcaya y Alicante; y en 1957, Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya y Sevilla. En primer lugar, los nuevos criterios aplicados en 1955 para la concesión de los premios y las tendencias migratorias hicieron que Barcelona recuperase el primer lugar que había perdido en los primeros cinco años de la década de los cincuenta. Madrid, por el contrario no se vio tan afectada y fue la provincia que más regularidad manifestó a lo largo del período estudiado en cuanto a la concesión de premios: siempre estuvo en el primero o segundo lugar.

Por otro lado, antes de 1955 se puede observar como, si exceptuamos a Barcelona y Madrid, existe un cierto predominio de las provincias andaluzas (Sevilla, Córdoba, Málaga). A partir de mediados de la década de los cincuenta este predominio desapareció. Y así zonas de más marcado carácter industrial, ocuparon los primeros puestos. Por ejemplo, Valencia, que había desaparecido de esta lista de los cinco primeros desde 1951, que se había sumido en un declive en cuanto al número de matrimonios se refiere y que no empezó a recuperarse hasta el año 1954, se situaba en 1956 en el tercer lugar de las provincias con más premios recibidos, lugar que conservaría en 1957.

Otro ejemplo del cambio fue la entrada en este grupo de "elegidos" de Vizcaya, que de 398 premiados en 1955 pasó a 3.889 en 1956. Todo lo cual venía a manifestar, junto al aumento en las concesiones de premios, un ligero cambio en el predominio de las provincias monopolizadoras de las concesiones y una alteración de sus posiciones en la jerarquía que venían ocupando.

### Notas

<sup>1</sup> Bosch Marin, Juan: De qué mueren los niños en España. Madrid, ministerio de Gobernación, 1950, pág. 4.

<sup>2</sup> Pió XII, op. cit., pág. 238.

<sup>3</sup> Ídem, pág. 342.

<sup>4</sup> Domínguez Ortiz, Antonio: Notas sobre la capacidad de poblamiento de España. Revista de Trabajo, nov.-dic. 1944, n° 11-12, pág. 1349.

<sup>5</sup> Personalidad y vida familiar. Madrid, Consejo Superior de las Mujeres de Acción Católica de España, 1955, pág. 8.

- <sup>6</sup> Jordana de Pozas, Política..., pág. 2.
- <sup>7</sup> Tomo Cervino, Antonio: Política demográfica. Revista Española de Seguridad Social, noviembre de 1947, nº 11, pág. 773.
- <sup>8</sup> Ídem, pág. 778-780.
- <sup>9</sup> Bosch Marin, Juan: Política familiar y sanitaria. Práctica Médica, agosto de 1952, nº 113, pág. 3.
- <sup>10</sup> Alonso García, Manuel, op. cit., pág. 10.
- <sup>11</sup> Ídem, pág. 41.
- <sup>12</sup> Las asignaciones familiares, op. cit., pág. 37.
- <sup>13</sup> Matoses Solves, Antonio: Nupcialidad y natalidad. Boletín de Información del Instituto Nacional de Previsión. 1944, nº 7, pág. 939.
- <sup>14</sup> Ídem, pág. 940.
- <sup>15</sup> Hervás, Manuel. El factor espiritual en el movimiento demográfico. Boletín de Información del Instituto Nacional de Presión, 1942, nº 3, pág. 24.
- <sup>16</sup> Ídem, pág. 26.
- <sup>17</sup> Ídem, pág. 27-28.
- <sup>18</sup> Girón de Velasco, Escritos.... Tomo I, pág. 123-125.
- <sup>19</sup> Rebollo González, op. cit., pág. 45.
- <sup>20</sup> Martínez Llanos, Nemesio: Los premios de nupcialidad y natalidad en el mutualismo laboral. Revista de Trabajo, julio-agosto de 1955, nº 7-8, pág. 379.
- <sup>21</sup> Aranzadi, op. cit., 451/1941.
- <sup>22</sup> Aranzadi, op. cit., 578/1941.
- <sup>23</sup> Aranzadi, op. cit., 75/1948.
- <sup>24</sup> Aranzadi, op. cit., 1526/1950.
- <sup>25</sup> Aranzadi, op. cit., 1417/1955.
- <sup>26</sup> Aranzadi, op. cit., 1525/1955.
- <sup>27</sup> Aranzadi, op. cit., 189/1941.
- <sup>28</sup> Síntesis de ponencias provinciales..., op. cit., pág. 12.
- <sup>29</sup> Aranzadi, op. cit., 1326/1941.
- <sup>30</sup> Aranzadi, op. cit., Ley de 18 de junio de 1942; Boletín de 3 de julio de 1942, pág. 783.
- <sup>31</sup> Aranzadi, op. cit., 1097/1942.
- <sup>32</sup> Aranzadi, op. cit., 751/1949.
- <sup>33</sup> Aranzadi, op. cit., 248/48.
- <sup>34</sup> Aranzadi, op. cit., 1023/1948.
- <sup>35</sup> Aranzadi, op. cit., 451/1941.
- <sup>36</sup> Aranzadi, op. cit., 481/1941.
- <sup>37</sup> Aranzadi, op. cit., 1775/1941.
- <sup>38</sup> Aranzadi, op. cit., 780/1943.
- <sup>39</sup> Aranzadi, op. cit., 75/1948.
- <sup>40</sup> Aranzadi, op. cit., 557/1949.
- <sup>41</sup> Aranzadi, op. cit., 1048/1953.
- <sup>42</sup> Aranzadi, op. cit., 1457/1955.
- <sup>43</sup> Aranzadi, op. cit., 1525/1955.



## **Capítulo 9. El plus familiar**

### **9.1. Concepto del plus familiar.**

El plus familiar nació en las empresas por imperativo de las Reglamentaciones del Trabajo, teniendo dos objetivos. Por un lado, conceder a los trabajadores por cuenta ajena una ayuda económica que compensara sus obligaciones familiares<sup>1</sup>; y por otro, “liberar a la mujer casada del trabajo fuera del hogar.”<sup>2</sup>

Algunos autores lo califican como seguro social. Es este el caso de Alonso Olea<sup>3</sup>. El mencionado autor divide los seguros sociales en cuatro grupos. En primer lugar, los seguros sociales extensivos a toda la población, de los cuales, a finales de los años 50 no existía ninguno en España. En segundo lugar, los seguros sociales aplicables a todos los trabajadores por cuenta ajena, de los cuales son ejemplo los seguros sociales generales, exceptuando el de enfermedades profesionales. En tercer lugar, los seguros sociales extensivos a todos los trabajadores de una cierta rama de la producción, de los cuales son ejemplo los seguros complementarios creados a la sombra de la Mutualidades Laborales. Y por último, los seguros sociales de los trabajadores de una misma empresa. Era dentro de este grupo, en el que Alonso Olea incluía el plus familiar afirmando que “es un seguro social obligatorio cuyo ámbito de cobertura se restringe a todos y a sólo los que trabajan al servicio de una empresa. El seguro es general en el sentido de que la obligación de aseguramiento se impone a una multiplicidad de empresas y, por tanto, respecto de una multitud de trabajadores; pero es especial o particular en el sentido de que cada empresa forma un núcleo de aseguramiento completamente independiente y distinto de las demás, sin que exista ninguna compensación ni dilución de riesgos entre las mismas”<sup>4</sup>.

El plus de cargas familiares o plus familiar y el subsidio familiar eran vistos como las dos medidas directas o sistemas legales concretos en que se había manifestado el valor y reconocimiento constitucional dentro del campo de la política social de carácter familiar. El plus familiar, de igual manera que el subsidio familiar o la ayuda familiar a los funcionarios públicos, estaba presidido por la idea de completar los ingresos derivados de la prestación de un trabajo con otros que correspondiesen al número de familiares que dependiesen del trabajador. Tendía “a la consecución del salario familiar, que es el ideal en materia de retribución de trabajo”<sup>5</sup>. Y por otro lado, contribuía a la “finalidad de devolver la mujer al hogar”<sup>6</sup>. Algunos autores comparan al plus familiar con el subsidio a la madre en el hogar creado en Francia, y así Rebollo González afirma que “el subsidio a la madre en el hogar está reglamentado en el Plus Familiar, ya que cuando la mujer trabaja, no se perciben los cinco puntos que se reconocen al casado”<sup>7</sup>.

Constituía una polémica interesante la naturaleza del plus, puesto que si se consideraba al plus parte integrante del salario, los empresarios estarían obligados a pagar a los trabajadores el mencionado plus con carácter ordinario y permanente; por tanto, a liquidar por sus empleados las cuotas de los seguros sociales que correspondiesen y de igual manera, a computar el plus a la hora de calcular la indemnización por accidentes del trabajo, enfermedades, despidos, etc. En el caso contrario, si el plus era considerado como un aumento del salario y no como parte integrante del sueldo mínimo legalmente estatuido, podían las empresas llevar a cabo su suspensión cuando finalizaran las circunstancias extraordinarias que llevaron a su establecimiento y, en consecuencia, no estaría sujeto a tributación por seguros sociales ni se computaría a efectos de indemnizaciones.

Para autores como Alonso Olea el plus no era un salario; el plus no tenía su causa en el trabajo sino en el riesgo o carga familiar y por eso no podía ser considerado como parte integrante del salario. Pero de igual manera, el autor afirma que "el sistema ideado para el Plus familiar es la máxima aproximación posible entre el salario y la prestación económica y dineraria de un seguro; su mismo ámbito, restringido a la empresa; su conexión estrecha con la masa de salarios que la empresa abona; su administración por un organismo íntimamente ligado a la empresa y a sus trabajadores, son datos, entre otros, que aproximan el Plus familiar al salario"<sup>8</sup>.

No era tampoco el plus un seguro mutuo en la forma tradicional que se considera ya que, por un lado, faltaba la voluntad de asociación de los trabajadores, y por otro la financiación del fondo del plus no se realizaba por medio de cuotas que abonaran los empleados. Eran, por el contrario, las empresas las que asumían la carga de la financiación del fondo del plus, si bien hay que hacer notar que el mayor o menor volumen dependía del potencial de la empresa y por tanto también, de entre otros factores, del aporte del trabajador con su trabajo a la viabilidad de la entidad empresarial en que se encontrara.

Era evidente que la situación penosa de los salarios en la década de los cuarenta condujo al establecimiento del plus, pero de igual manera fue evidente más tarde que el mantenimiento del plus se debía a una realidad salarial levemente mejorada, pero no lo suficientemente pujante como para prescindir de los pluses y dejar a los trabajadores exclusivamente con los sueldos mínimos estipulados en las reglamentaciones del trabajo. Aunque hay que recordar que los fondos del plus, necesariamente acababan en las cuentas de resultados de las empresas, incidiendo en el precio de los bienes o servicios producidos, y por tanto, era el trabajador el que también, en cierta medida, contribuía al mantenimiento del fondo del plus.

Existieron, sobre todo en los primeros momentos de la implantación del plus, problemas en cuanto se refería al concepto de nómina. Para el cálculo del importe de la nómina había que tener en cuenta no sólo los jornales, sino también lo que se pagaba por horas extraordinarias, primas, bonificaciones, recargos por trabajo nocturno y plus de carestía; así lo establecían las Resoluciones de 24 y 30 de septiembre de 1942<sup>9</sup> de la Dirección General de Trabajo.

También existieron asuntos vidriosos en torno a la cuestión de los jornales no satisfechos porque no llegaron a devengarse por motivo de accidentes temporales o por ausencias con permiso. Se planteaba el problema de si debían considerarse como integrantes de la nómina a efectos de la fijación del plus o no, resolviendo la mencionada Dirección, por la primera de las resoluciones mencionadas, a favor de la consideración de tales situaciones como contabilizables a efectos del cobro del plus. También resulta de interés la Resolución de 21 de octubre de 1942<sup>10</sup> por la que se establecía que los trabajadores que ingresasen en una empresa sujeta a reglamentación con plus, y siempre que el valor del plus estuviera previamente fijado, teniendo en cuenta que las remuneraciones del nuevo trabajador no habían podido tenerse en cuenta, cobrasen el plus anticipando la empresa las cantidades pertinentes.

Girón de Velasco, con la grandilocuencia y lirismo que caracterizaban sus intervenciones, definió el plus como una nueva institución nacida "de la relación del empresario con el trabajador", afirmaba a continuación que tenía "como base la economía de la propia empresa. Es, por lo tanto, un sistema de participación, de relación económico-social muy íntima, y de un alto valor humano. Constituye una perfección típica de la legislación española, y tiene una silueta cristiana inconfundible. Sobre la totalidad de la renta de trabajo de todos los obreros de una empresa se establece un porcentaje, que originariamente fue del 10 y del 15 por 100 y hoy es del 25 por 100 por término medio"<sup>11</sup>. El entonces ministro de Trabajo veía en la institución del plus un elemento armonizador de los intereses de los trabajadores y del empresariado, una forma de participación de los empleados en los beneficios de la empresa en un grado desmesurado, dado que la media a la que se refería Girón del 25 % no respondía a la realidad. El plus familiar había "entrado definitivamente en las costumbres españolas y era una institución popular que sólo podría desarraigarse mediante una conmoción nacional laboral"<sup>12</sup>, afirmaba Fernández Heras.

Desde la posición de otros altos cargos<sup>13</sup> del régimen, el plus familiar, además de incidencia demográfica, tenía un efecto de justicia social que reforzaba la vitalidad y la función de la familia. En las Conclusiones de la IV Asamblea Nacional de Delegados de Trabajo<sup>14</sup> se calificaba en estos términos al plus familiar y se hacían una serie de valoraciones sobre él:

“Esta Institución del Plus familiar está profundamente arraigada en la conciencia nacional, porque en ella y en íntima armonía laboral aparecen entrañablemente unidos los principales elementos que integran la comunidad de trabajo para ejercer una función gestora de intereses que le son comunes, cumpliendo dentro de cada Empresa uno de los postulados fundamentales del Fuero del Trabajo: el de la protección a la familia, y todo ello rodeado del calor humano del trabajador en el mismo centro de trabajo, sin recargo alguno en los gastos de administración y gestión, con las debidas garantías procesales y con la tutela de la autoridad laboral, y porque ella ha sido hasta ahora, en definitiva y en sus doce años de vida activa y pujante, la que ha acercado más la relación de trabajo hacia una figura asociativa”.

La versión dada por los Delegados de Trabajo sobre el plus transmite una concepción armmonicista de la realidad laboral en la que trabajadores y empresarios enlazan sus buenas voluntades en forma de asociación para la protección de la familia.

Otra expresión apologética con respecto al plus es la aportado por Alonso Olea. Con respecto a esta institución llega a decir el mencionado autor lo siguiente:

“Posiblemente el Plus familiar, los puntos como -aludiendo a la mecánica de su reparto- es llamado popularmente, sea la medida de Seguridad social de más aceptación y más arraigada en los trabajadores españoles; y el arraigo y la popularidad general de un sistema entre quienes, en definitiva, son los que el ordenamiento jurídico ha querido proteger con él, dicen mucho como respuesta a las críticas contrarias”<sup>15</sup>

Como ya se ha dicho el plus respondía a motivaciones económicas y su objeto era atender la situación de necesidad en que se hallaban los trabajadores con familiares a su cargo ante el incremento constante del coste de la vida. Consistía en el establecimiento de un fondo en cada empresa que se nutría de un determinado tanto por ciento sobre la retribución de los trabajadores y que se distribuía, no entre todos los obreros, sino entre aquellos que tenían unas determinadas cargas familiares y, en teoría, “sin acudir al procedimiento, mucho más oneroso de modificar con carácter general los salarios base a medida que se ha ido produciendo la elevación de los precios”<sup>16</sup>. Es decir, un determinado porcentaje sobre las cantidades abonadas en concepto de retribución pasaba a conformar un fondo, el cual se distribuía conforme a un baremo en atención al número de familiares.

Dividiendo el total a percibir en concepto de puntos por los trabajadores de la empresa, entre el número de aquéllos, se establecía el punto, que, multiplicado por el número de puntos que correspondiese a cada trabajador, daba el plus familiar a que se tenía derecho. Como elementos

positivos cabe citar el hecho de que los casados sin hijos o los solteros recibían el plus; y de igual manera que un sistema de puntos generaba una redistribución más equitativa en la medida en que tenía en cuenta el caso particular de cada trabajador. Sin embargo, el estar a cargo del patrono exclusivamente y formando parte de los salarios, incidía necesariamente en el coste de la producción y por lo tanto en el nivel general de precios.

Como ya se ha mencionado, nota característica del plus era su no consideración como prestación de la seguridad social. En el plus no existía afiliación, ni cotización; no había intervención administrativa ajena a la de la empresa. Como se ha dicho era satisfecho por la empresa sin aportación de los trabajadores y era ajeno a la actuación del Estado. Constituía un complemento del salario familiar. Todo ello y la propia idea de comunidad empresarial conformaba, supuestamente, un ámbito de paz y solidaridad y según algunos autores una manifestación vital de que la comunidad del trabajo que la empresa constituía era "efectivamente una forma de comunidad."<sup>17</sup>

Desde este punto de vista, el plus y la autonomía administrativa y fiscalizadora del sistema, generaba para las autoridades del Régimen un doble efecto; por un lado económico, y por otro moral. Lo primero en razón de que, dado el bajo nivel de las retribuciones salariales, éstas no hubieran podido mantenerse en esos niveles de no existir complementos salariales como el plus, aparte de que no existían los descuentos o recargos sobre las nóminas de los empleados. Desde un punto de vista moral, se veía en el plus un elemento para generar vías de normalidad y decencia de algunas situaciones: "... hoy el número de situaciones irregulares en el orden familiar y en la esfera de los trabajadores por cuenta ajena ha disminuido extraordinariamente al entrar en el general conocimiento la seguridad de que las uniones ilegítimas no crean derechos como el matrimonio al percibo del Plus Familiar"<sup>18</sup>. Y añade el autor con respecto a los hijos naturales:

"Pudiera pensarse también si el criterio moralizador que excluye a la familia ilegítima de su consideración a efectos de la percepción del Plus no debiera quebrarse cuando son los descendientes lo que sostienen las cargas de sus ascendientes naturales, porque indudable es, en el caso inverso, que la culpa propia del progenitor puede ser sancionada con la privación de estos beneficios, y aunque en algunos casos el mantener la situación irregular es una conducta contumaz de perseverancia en la misma que pudiera ser subsanada, lo que no se hace por una terca persistencia en el mal; pero, en cambio no hay razón que pueda aconsejar que al hijo, que cumple deberes para con quienes en cuanto a él olvidaron algunos, sea a su vez impuesta una sanción a la que es ajeno y que constituye, con motivo de cada distribución de puntos, un recordatorio del pecado de sus mayores del que es inocente y reiterada víctima".

Llama la atención en este párrafo la ligazón que conforman las ideas de culpa, sanción, mal y trabajo; en definitiva la capacidad punitiva del Estado para, a través de lo puramente laboral, sancionar aquellas conductas desviadas de las pautas de comportamiento socialmente admitidas por la moral católica y la sociedad española imbuida del mencionado catolicismo. También parecía constituir un motivo de descenso de las situaciones de abandono, llegándose a afirmar en la obra citada que hoy "ni los padres ancianos son llevados a los asilos ni los hijos abandonados a las instituciones benéficas"<sup>19</sup>.

Sin embargo, todo ello parece dudoso sobre todo al final de los años cincuenta si atendemos a las reclamaciones de provincias como la de Córdoba<sup>20</sup> en el Congreso de la Familia Española. En éste se pedía que la variación del plus familiar fuera el mecanismo para implantar en lo sucesivo la variación de los salarios cuando las circunstancias lo aconsejasen para que los beneficios de la subida afectaran en mayor medida a las familias numerosas.

Constituía el plus familiar un motivo de orgullo nacional entre la autoridades del ministerio de Trabajo; era considerado "una de las instituciones sociales de mayor estimación popular, que tiene además la nota de ser española, tanto por su origen como por su exclusiva aplicación en el territorio de nuestra Patria"<sup>21</sup>. Y es que con ello se entendía se desarrollaban y perfeccionaban *instituciones jurídico-sociales del mayor interés a la par que se garantizaba y aseguraba la existencia de la familia obrera*<sup>22</sup> y por otro lado se consideraba que no incidía en los peligros del "Estado-Nodriz" y su excesivo intervencionismo desplazando al padre de familia de las funciones de creador-trabajador y mantenedor de la familia.

Las empresas cuyo personal no tuviera derecho al plus habían de distribuir el importe del fondo entre todos sus trabajadores en proporción a las retribuciones que tuvieran fijadas. Existían otras diferencias con respecto al sistema del subsidio familiar. El plus no era un régimen tan extenso como el subsidio citado; por otro lado su base era la empresa generándose un fondo dentro de cada industria en forma de islotes de aseguramiento. A todo esto hay que añadir un elemento cuantitativo que diferencia sustancialmente al plus del subsidio familiar:

"Por otro lado las cantidades que se destinan a la cobertura de este régimen son mucho más importantes que las que nutren el general. Frente a unas cuotas del 5 por 100 sobre un salario-base restringido el porcentaje medio de la nómina que actualmente forma el fondo del Plus es del 20 por 100 del total de las retribuciones"<sup>23</sup>.

Sin embargo, el plus familiar implicaba, dentro de las empresas, una cuantía de carácter variable según la empresa de que se tratase. Podemos encontrar otras diferencias; así, por ejemplo, si

bien en el subsidio familiar están incluidos cargos directivos, trabajadores agrícolas y trabajadores a domicilio, en el caso del plus estos tres grupos eran excluidos.

Se inició la andadura del plus familiar con la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Banca Privada, de 28 de abril de 1942, creándose un fondo con el 15 % de la nómina total de cada empresa. Su paulatina implantación se caracterizó por la existencia de tantos por ciento distintos sobre las nóminas de las empresas según la actividad que regulase la reglamentación. La segunda etapa dio comienzo con la Orden de 19 de junio de 1945, la cual generalizó el plus determinando a su vez un porcentaje mínimo sobre la nómina de la empresa cifrado en el 5 %.

En cuanto a las críticas, la primera que se hacía al plus familiar era la innecesaria convivencia con el subsidio familiar. Afirma Miguel Fagoaga que “resulta difícil, justificar, en una régimen avanzado de seguros sociales, la existencia de dos clases distintas de prestaciones en favor de los trabajadores para que puedan atender convenientemente a las necesidades familiares. Es evidente que las dos instituciones creadas en España, los Subsidios Familiares y el Plus Familiar, tienen idéntica finalidad: elevar y fortalecer la familia, proporcionando a los trabajadores un auxilio económico en relación con sus obligaciones familiares”<sup>24</sup>.

Independientemente de las formulaciones apologistas sobre el plus familiar desde dentro del régimen también se oían voces discordantes con su funcionamiento. En el Congreso Provincial de Madrid sobre la Familia Española se referían en estos términos al plus familiar: “... ni la actual remuneración por trabajo es cuantitativamente racional, ni el sistema de Plus de Cargas Familiares llena la finalidad del salario familiar, por desigualdad de las percepciones, insuficiencia de las mismas, etc.”<sup>25</sup>.

Ello ponía de manifiesto que circunstancias ajenas a las necesidades que cubría el plus determinaban su cuantía; es decir, el volumen de negocio o el tamaño de la empresa determinaba las percepciones de las familias y no el hecho de que en la empresa hubiera más o menos trabajadores con familia o de que ésta tuviera más o menos miembros. “Las diferencias son, en este sentido, tan irritantes que constituyen, sin duda, uno de los defectos más graves con que el sistema del plus familiar se encuentra en la realidad ...”<sup>26</sup>, afirmaba Alonso García, en clara sintonía con las críticas más duras para con esta institución. Más claras todavía eran las conclusiones finales del Congreso de la Familia Española en el que se reprochaba a las autoridades “la desigualdad y efectos menos equitativos del Plus Familiar”<sup>27</sup>. En las Jornadas Técnico Sociales se ponía de manifiesto también esta grave deficiencia y la generalización de un trato diferencial para casos semejantes dependiendo de si el trabajador pertenecía a un sector económico pujante o no:

“...se acusan las grandes diferencias en el promedio del valor del punto en el mes, no solamente por provincias, sino en cada grupo profesional, que es una de las causas que aconsejan la revisión de las normas para la fijación del punto para darle una distribución en lo posible más equitativa, y sobre todo para establecer una base mínima merced a la ayuda mutua de los sectores económicamente más poderosos hacia los más modestos por el establecimiento de un adecuado sistema de compensación”<sup>28</sup>.

El perjuicio también se acentuaba para los trabajadores de empresas con poca plantilla pues el valor de su puntos sería inferior frente al de aquellas con un mayor número de empleados. Ello suponía la necesidad de fijar un valor mínimo y valor máximo en la cuantía de lo que en el plus familiar se denominaba “punto”.

En definitiva, como afirma Borrajo, el sistema del plus tenía un grave defecto social: “Trataba desigualmente la misma situación de necesidad, pues el valor del Plus, al depender de dos variables, cuales eran la cuantía de la nómina de salarios y el número de puntos, resultaba distinto para los trabajadores con las mismas obligaciones familiares de una misma localidad y de una misma categoría profesional aún dentro de una misma rama profesional”<sup>29</sup>.

En esta línea crítica se pugnaba desde las páginas de la obra del mencionado autor, como desde otras instancias<sup>30</sup> provinciales, por una mayor congruencia del aparato tributario en relación a la familia dado que no parecía lógico la aplicación del impuesto por rendimientos del trabajo personal a ingresos que, en cierto modo, no procedían directamente del trabajo, como era el caso del plus familiar o de la ayuda familiar a los funcionarios públicos. Así el Congreso Provincial de Vizcaya pedía la exención del Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal y de cualquier otro relacionado con el plus<sup>31</sup>. Y de igual manera, se insistía en la irracionalidad de varios sistemas de retribución que tenían como referencia un único elemento como era la base familiar. Y es que todos los productores venían tributando por el mencionado plus, en concepto de utilidades, el 8 % de las cantidades cobradas.

La propuestas realizadas desde las páginas de la obra de Alonso García manifestaban de forma indirecta los grandes fallos en la aplicación de la retribución familiar desde las empresas. Por un lado, se solicitaba la unificación de los tres sistemas de retribución familiar (subsidio familiar, ayuda al funcionariado y plus familiar), una de las peticiones más asiduas en el Congreso de la Familia Española<sup>32</sup>, y en concreto en los Congresos Provinciales de Logroño<sup>33</sup>, Tarragona<sup>34</sup>, Toledo<sup>35</sup>, Valencia<sup>36</sup>, etc. Por otro lado, se pedía un sistema de cotización única sobre la base de un tanto por ciento de la nómina calculado sobre conceptos computables iguales para todos los centros de trabajo y con un tanto por ciento que resultase de igual proporción en todos ellos, así como la creación de una caja de compensación que permitiera la



distribución de remanentes de las empresas que excedieran en su cuantía el valor máximo del punto entre las que no llegasen al mínimo estipulado. Esta idea se repite en los diversos Congresos Provinciales de la Familia Española; en concreto en el de Cuenca<sup>37</sup> se solicita la centralización del pago del plus en una caja nacional dependiente del Instituto Nacional de Previsión. Y es que según el Congreso Provincial de Valladolid el sistema de plus familiar restaba posibilidades de empleo a los trabajadores con familia numerosa dado que se producía “el veto de los demás trabajadores a su colocación, veto que aceptaba el patrono intimidado por la actitud de aquéllos”<sup>38</sup>, ante lo cual la solución sería el establecimiento de una caja de compensación que abonase el plus, con un valor único, a través del Sindicato. Coincide con esta argumentación Rebollo González que observa, en este sistema de compensación empresarial, que ya no sería el patrono quien seleccionaría a sus obreros, sino sus empleado dado “que serían los obreros quienes se opondrían al ingreso de otros con cargas, en vista de que ello haría bajar el valor del punto”<sup>39</sup>. Según el Congreso de Valencia el fin perseguido sería “la creación de Cajas, organizadas por localidades o por ramas de producción, en las que se integrarían los fondos que actualmente se distribuyen por todas las empresas, con un valor uniforme del punto para todos los trabajadores, pertenecientes al ámbito de la Caja, que podrá estas administrada por los trabajadores mismos”<sup>40</sup>.

Aunque no por ello todas las tendencias caminaban por esos caminos; para algunos la tentación de las cajas de compensación no constituía más que una tentación racionalista que vendría a entorpecer el buen funcionamiento del plus: “...ya que parece conveniente mantener el sistema del Plus Familiar...sin caer en la complicación racionalista de crear Cajas de compensación, que serían estériles y burocráticas...”<sup>41</sup>, afirmaba Federico Rodríguez. Sobre la misma cuestión el de Barcelona se expresaba en estos términos sobre las consecuencias negativas del plus: “...entre las que cabe citar la injusta desigualdad que origina entre trabajadores de una misma categoría ocupados en distintas empresas, y la gran dificultad con que tropiezan los padres de familia desempleados cuando, al tratar de obtener nueva ocupación, ven en muchos casos denegada su demanda por la presión de los propios trabajadores de la empresa a la que ofrecen sus servicios, por la lastimosa razón de que su incorporación supone una merma en la cuantía del Plus Familiar de cada uno de los que integran la plantilla”<sup>42</sup>. En este aspecto la argumentación de Borrajo era como a continuación se expone: “Baste considerar, al respecto, que el ingreso de un padre de familia numerosa, al variar el total del número de puntos dentro de la empresa, se traducía en un valor inferior del punto, por lo que, en muchos casos, los trabajadores presionaban sobre los servicios de selección de personal, y éstos tendían a rechazar o a preterir a dichos cabezas de familia numerosa”<sup>43</sup>.

Todo ello ponía de manifiesto que las empresas podían llevar a cabo criterios de selección de personal determinados por los propios trabajadores que presionarían sobre su compañía, pues la

entrada de nuevos trabajadores con familia numerosa suponía una disminución en la percepción del plus. Y por último, un criterio único y amplio sobre lo que debía entenderse por familiar dependiente del trabajador por cuenta ajena.

Otra cuestión debatida y en la que no había acuerdo era la cuestión del punto. En los Congresos Provinciales que hemos mencionado se manifestaba la necesidad de modificar la escala de puntos existente al final de los años cincuenta. En concreto, Barcelona<sup>44</sup> pedía que se partiese de cinco puntos para los productores casados y tres para los solteros con beneficiarios a su cargo.

Entre el sinfín de críticas que recibe el plus familiar, como ya se ha mencionado, estaba la ausencia de aplicación a la rama agrícola del plus familiar tal y como afirmaba el Congreso provincial de Albacete<sup>45</sup>.

## **9.2. El plus familiar: legislación e implantación, campo de aplicación, financiación y administración.**

### ***9.2.1. Legislación e implantación progresiva del plus familiar.***

"El plus familiar puede ser definido como una remuneración extraordinaria y transitoria que las empresas, sea cualquiera su actividad laboral y siempre que no figuren entre las expresamente excluidas, están obligadas a satisfacer a su personal sobre la retribución o emolumentos normales, pagada con cargo a un fondo aportado por la empresa, constituido por un tanto por ciento de la nómina, variable según actividades, y que se distribuye a los operarios que tienen mayores obligaciones familiares, con arreglo a un sistema de puntos"<sup>46</sup>. Así definía Salas Montilla el plus.

El plus de cargas familiares se constituyó por primera vez en la Reglamentación Nacional del Trabajo en la Banca Privada en fecha 28 de abril de 1942<sup>47</sup>. A partir de ese momento se fue generalizando su implantación por medio de las reglamentaciones del trabajo.

Fernández Heras<sup>48</sup> considera siete etapas en la implantación del plus familiar. La primera se inició con la Reglamentación Nacional del Trabajo en Banca Privada, como ya se ha mencionado. La segunda etapa comienza con la Orden de 19 de junio de 1945<sup>49</sup> por la que se generaliza la aplicación del plus a las actividades que carecían de él, fijándose como porcentaje mínimo de nómina a distribuir el 5 %. El problema sobrevino dada la diversidad de normas de aplicación del plus y la necesidad de unificarlas.

La tercera etapa de unificación dio comienzo con la Orden de 29 de marzo de 1946<sup>50</sup>, norma unificadora de la organización y funcionamiento del plus y ampliadora de su ámbito de aplicación a todos los trabajadores por cuenta ajena.

La cuarta etapa comenzó con la Orden de 15 de diciembre de 1950<sup>51</sup>, lo cual suponía la elevación del valor máximo del punto, así como que cada vez fuesen más las empresas que distribuyesen entre sus empleados un 10 % de la nómina y no un 5 %, haciéndose desde entonces obligatorio el límite del 10 %.

La quinta etapa se abrió con la Orden de 16 de octubre de 1952<sup>52</sup>. Consagraba esta orden la denominación de plus familiar frente a la de plus de cargas familiares anteriormente usada. A su vez daba nueva redacción al artículo 27 de la Orden de 29 de marzo de 1946<sup>53</sup> suprimiendo el tope en el valor máximo del punto que antes se imponía y con ello la posibilidad de la existencia del sobrante, otorgándolo a los empleados de la empresa en función de los sueldos percibidos. En torno a esta cuestión existían algunas excepciones como era el caso de la Compañía Telefónica Nacional de España, la cual tenía la posibilidad de destinar a fines sociales a favor del personal de la empresa los excedentes del plus familiar.

La sexta etapa comenzó con la Orden de 27 de noviembre de 1953, que aumentó las retribuciones iniciales de las distintas categorías y el porcentaje destinado al plus familiar. Dentro de esta etapa se enmarca la Resolución de 31 de marzo de 1954 que concedía el derecho al cobro de puntos por los ascendientes y hermanos a cargo del trabajador, aunque percibiesen pensiones, fuera cualquiera su cuantía y naturaleza. Esta disposición había sido dictada para atender las pensiones irrisorias de los familiares de los beneficiarios.

La séptima y última etapa tuvo su origen en la Orden de 24 de enero de 1956, que modificaba el artículo 28 de la de 29 de marzo de 1946 en el sentido de variar la forma de constitución de las comisiones del plus "cuyos componentes han de ser elegidos por los propios trabajadores del centro laboral, con arreglo a las normas de las elecciones sindicales, formando parte de ellas el Jefe del centro de trabajo o persona en quien delegue y un enlace sindical, remediándose la carencia de normas para renovación de las Comisiones que se dejaba sentir"<sup>54</sup>. Era constituida la comisión por el Jefe del centro de trabajo o persona en quien delegara dicha función, por el enlace sindical y por un número de vocales electivos (dos para los centros de menos de 51 trabajadores, tres para los de 51 a 250 y cuatro para los de 251 en adelante). La ausencia de control efectivo de los trabajadores se constataba en la posibilidad del Delegado de Trabajo de alterar el número de vocales integrantes.

Como ya se ha mencionado la tributación en relación al plus familiar fue motivo de polémica. Por un lado el ministerio de Trabajo estableció que los emolumentos recibidos en concepto de plus de cargas familiares estuvieran sujetos a tributación por Tarifa 1ª de la Contribución de Utilidades de la riqueza mobiliaria. Ante las continuas reclamaciones, el ministerio de Trabajo acordó trasladar al de Hacienda la resolución de la cuestión, el cual hizo uso de disposiciones del año 1943 para declarar que los emolumentos percibidos en concepto de cargas familiares estaban sujetos a la mencionada tributación. En contra de este criterio estaba la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1952 que estipulaba que las cantidades remuneradas con motivo del plus familiar no estaban sujetas a imposición por la Tarifa 1ª. El Supremo se había apoyado en la analogía con los subsidios familiares no considerados en su ley y reglamento posterior como salario, y en consecuencia, no computables ni a efectos de los seguros sociales ni a efectos fiscales:

“El supremo recoge, además, en apoyo de su tesis, la sentencia de 29 de mayo de 1931, que declaró excluidas de tributación por tarifa 1ª de Utilidades las entregas hechas a sus propias expensas por las Empresas, en atención a la situación familiar de sus empleados, y el hecho de que actualmente la diputación de Navarra tiene acordado, en forma que no puede suscitar dudas, la exclusión de estas entregas del ámbito fiscal de su arbitrio de Utilidades, tan similar al del régimen general”<sup>55</sup>.

A ello se añadía la propia ley del plus familiar que señalaba que no se computaría el mismo para la liquidación de cuotas de seguros sociales. Y es que como el mencionado autor afirma, en contradicción con la política seguida por el ministerio de Hacienda en torno a este tema, “una buena política tributaria tiene que tener un carácter eminentemente social, y oportuno sería reflexionar sobre una reforma de la Ley reguladora de la Contribución sobre Utilidades de la riqueza mobiliaria, con una desgravación de los tipos de tributación de los sueldos insuficientes, que no podrán incluirse dentro del concepto de salario justo, y un aumento progresivo del tipo impositivo en todas aquellas retribuciones del trabajo, de superior cuantía, con lo que se llegaría a un más equitativo reparto de los impuestos según exige la justicia distributiva”<sup>56</sup>. Desde este punto de vista se denunciaba la imposibilidad de contribuir al bienestar de las familias españolas únicamente con una política salarial, que por otro lado se manifestaba como claramente insuficiente, y se exponía la necesidad de buscar en la política fiscal un medio para la redistribución de unas rentas que, a juicio del autor, estaban claramente mal repartidas.

Sin embargo, las consignas del ministerio de Hacienda, plasmada en circular dirigida a las delegaciones de Hacienda en septiembre de 1952<sup>57</sup>, fue continuar con las normas de tributación previas a la sentencia del Supremo. El posterior Decreto de 24 de octubre de 1952 del

ministerio de Hacienda dispuso que las remuneraciones debidas al plus tributarían según el Decreto-ley de 15 de diciembre de 1927 dejando, de hecho, la situación exactamente igual que antes de la sentencia del Supremo. Una Circular complementaria de 1 de junio de 1953 situaba el tipo impositivo para el plus familiar en el 8 %.

Con respecto a esta cuestión Salas Montilla afirma que “se ve la necesidad de que se dicte una disposición análoga a la Ley de 17-7-51, en la que se declaró exceptuado el Subsidio familiar, o en caso contrario, se modifiquen las normas reguladoras de la Tarifa 1ª de Utilidades contenidas en el Decreto-ley de 15-12-27 y Orden de 31-7-43, incluyendo concretamente en ellas al plus familiar, ya que en la actualidad no queda otra solución que la tributar, o utilizar el recurso económico administrativo”<sup>58</sup>.

Tras la Ley de 16 de diciembre de 1954 y la resolución de la Dirección General de Contribuciones de 16 de enero de 1956, imposibilitando que el plus dejara de tributar por el impuesto de utilidades, el Tribunal Supremo, en sentencia de 16 de mayo de 1955, rectificaba la sentencia anterior resolviendo que el plus constituía un incremento de la remuneración del trabajo personal prestado por cuenta ajena y que por tanto estaba sujeto a la Contribución de Utilidades de la Riqueza Mobiliaria en su Tarifa 1ª.

En función, de lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que el plus, concebido inicialmente como una remuneración extraordinaria y transitoria y ajena a la remuneración base, se constituyó en una parte más de la remuneración total de los trabajadores en la medida en que, como para el total de las remuneraciones de aquéllos, había de tributar por la Tarifa primera del Impuesto de Utilidades. La idea de que, tanto el subsidio familiar como el plus, no eran salarios sino complementos<sup>59</sup> del mismo dado que no se daban como precio del trabajo sino como indemnización por el número de hijos o asimilados a cargo del trabajador, y que en función de ello su tributación no había de ser análoga a la del salario en si, desaparecía de hecho.

### ***9.2.2. Campo de aplicación del plus familiar.***

El art. 1 de la Orden de 29 de marzo de 1946<sup>60</sup> establecía que el campo de aplicación del plus familiar se extendería a los trabajadores por cuenta ajena fuera cual fuera su actividad laboral o el carácter de la entidad privada o pública de la que dependieran. Excluía del campo de aplicación del plus los trabajos de carácter familiar, los servicios amistosos, benévolos y de buena vecindad y el servicio doméstico. Excluía también a los cargos de alto gobierno de las empresas; en concreto a directores generales, directores o gerentes de entidad, subdirectores, inspectores generales y secretarios generales. Dentro del amplio campo de exclusiones se refería

a los trabajadores agrícolas, forestales y pecuarios, a los trabajadores a domicilio, a los trabajos en los que la mayoría del personal trabajase a la parte y al alto personal artístico.

El art. 8 de la mencionada orden establecía como sujetos perceptores del plus a los trabajadores casados, a los viudos con hijos, a quienes tuvieran a su cargo y a sus expensas a ascendientes o hermanos que vivieran en su compañía al menos con seis meses de antelación, y si estos fueran varones deberían tener cumplidos 60 años o hallarse incapacitados para el trabajo. En el caso de los hermanos, habían de ser huérfanos de padre o éste habría de tener más de la edad indicada o hallarse incapacitado para el trabajo, además de ser menores de 14 años o impedidos para toda actividad si excedían de dicha edad. Daban igualmente derecho a la percepción del plus los ascendientes o hermanos del trabajador como los de su cónyuge, siempre que cumplieran las condiciones señaladas.

Salas Montilla<sup>61</sup> establecía tres grupos de trabajadores a los que pertenecía el cobro del plus. En primer lugar, los trabajadores activos; seguidamente los trabajadores no activos, y por último, los trabajadores en situaciones especiales.

Dentro del primer grupo (trabajadores activos) se establecían tres situaciones diferenciadas: solteros con ascendientes o hermanos a su cargo, o con hijos legitimados o adoptados legalmente, viudos con hijos o sin ellos y casados. En el segundo grupo se encontraban los trabajadores cumpliendo el servicio militar, los enfermos y accidentados, jubilados, despedidos, en vacaciones de permiso, los que faltasen a la labor y los suspendidos o detenidos. Los casos especiales hacían referencia a los que trabajasen en varias empresas, a los que tuviesen a la familia ausente, a trabajadores eventuales, personal de horas extraordinarias, separados de hecho o de derecho, maridos ausentes y situaciones de paro tecnológico.

El matrimonio era la institución que comenzaba por dar derechos a la percepción del plus. Claro está, se refiere al matrimonio legítimamente contraído, siempre que los cónyuges viviesen juntos y la mujer o el marido no realizasen ningún trabajo retribuido. En el caso de separación de hecho o de derecho se perdían estos cinco puntos conservándose únicamente los correspondientes al número de hijos que el trabajador o trabajadora tuviera a su cargo.

Dentro de esta referencia a la institución del matrimonio se plasma el privilegio o la potenciación de un modelo de familia que viviese de acuerdo a los moldes de respeto a la moral católica, y más concretamente de las pautas propias de los más claramente adeptos al régimen franquista. Y de esta forma, según la Resolución de 21 de noviembre de 1942<sup>62</sup> una mujer casada, sin hijos cuyo marido residiera en el extranjero de forma habitual no tenía derecho al cobro del plus, mientras que si la estancia en el extranjero del marido era motivada por su

pertenencia a la División Azul la mujer debería percibir los cinco puntos por matrimonio (Resolución de 17 de febrero de 1943)<sup>63</sup>.

Caso peculiar era el de los trabajadores que no podían disfrutar del plus por estar separados de la familia. En el caso de que tal separación fuese debida a la ausencia de vivienda se instrumentaba la posibilidad del cobro del plus. Condición necesaria para su cobro era que el trabajador tuviese en su compañía a los familiares por los que adquiría derecho al plus, y en función de este hecho la Circular nº 91 de la Dirección General de Trabajo de fecha 17 de noviembre de 1947<sup>64</sup> resolvía que los trabajadores separados de su familia tendrían derecho al plus siempre y cuando la causa fuera el carácter transitorio de su permanencia en el lugar de trabajo, además de no trabajar los familiares a su cargo y enviar el trabajador periódicamente a la familia cantidades iguales o superiores a las que percibiera por puntos.

En el caso de que la mujer trabajadora fuera el cabeza de familia por imposibilidad o incapacidad del marido se computaban también los cinco puntos por matrimonio. Existió una notable excepción en las reglamentaciones textiles de la lana y del algodón de Barcelona y Gerona en función de la gran proporción de personal femenino empleado en esas industrias. Implantada aquélla en 1943, no privaba al trabajador de los cinco puntos del matrimonio cuando el cónyuge estaba colocado. Ni que decir tiene que los cinco puntos eran cobrados por el marido. En el Boletín de la Provincia de Barcelona<sup>65</sup> de 3 de septiembre de 1945, a raíz de la implantación a nivel nacional del plus en el año 1945, se resolvía que la mujer colocada en la industria textil, cuyo marido trabajase en otra empresa del mismo sector percibiendo el plus familiar, no tendría derecho a puntuación por dicho plus. Si lo tenía en el caso de que el marido no cobrase los puntos por matrimonio, por trabajar en una industria no textil, y lo hiciera únicamente en función de los hijos a su cargo. Por otro lado la mujer sólo percibía los cinco puntos por matrimonio, además de los puntos por hijos, en el caso de que el marido fuese sereno, pescador, taxista "a la parte", militar, policía armada o guardia civil, plasmándose un criterio que privilegiaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ni que decir tiene que la especial normativa para la industria textil de estas dos provincias tenía un supuesto carácter especial y transitorio. El privilegio para estas dos provincias no se extendió al resto de España, ni tampoco a otras actividades:

"...la Resolución de 31-1-53 declara que este régimen no es aplicable en otras provincias distintas de Barcelona y Gerona, y la de 27-6-55 no autoriza la generalización a toda España de este régimen especial. Tampoco se accede a extenderlo a las trabajadoras de otras actividades, en Resolución de 23-12-56"<sup>66</sup>.

En este caso, frente al consabido deseo de reconducir a las madres españolas al hogar, salvándolas del taller y de la fábrica, se impuso la necesidad de mano de obra femenina para la viabilidad de un sector que, como el textil catalán basaba su funcionamiento en una mano de obra femenina barata que chocaba de frente contra los principios del Fuero del Trabajo, y en concreto contra el punto 1º del Título II en cuanto se refería a la liberación de la mujer casada del taller y de la fábrica.

De igual manera se computaban los puntos por matrimonio si el trabajo de la mujer era eventual o si el trabajo de la madre se realizaba durante algunas horas al día en las tierras de las que el matrimonio fuese propietario o arrendatario dado que en este caso no existiría colocación fija y estable. El mismo caso se consideraba si la explotación era un bar o comercio del que eran propietarios los cónyuges. Pero si ambos cónyuges trabajaban en la misma empresa sólo uno tenía derecho al cobro del plus. Otro caso distinto sería el de la mujer cuyo marido estuviese en situación de paro forzoso; dada esta coyuntura la mujer no tendría derecho al cobro de los cinco puntos "ya que esta situación ha de estimarse pasajera y no permanente"<sup>67</sup>.

En cuanto a los hijos se refiere, las condiciones para el cómputo de los mismos especifican los siguientes requisitos: que fueran legítimos, legitimados o adoptivos siempre que su adopción fuera tramitada legalmente; que fueran menores de 23 años y que no gozaran de sueldo o retribución alguna. Con respecto al límite de edad en el plus se puede decir que "marcó el criterio de máxima generosidad, al proteger al hijo hasta los 23 años, incluso cuando la mayoría de edad se rebajó a los 21 por la Ley de 13 de diciembre de 1945, bastaba, al efecto, que se mantuviese la dependencia económica..."<sup>68</sup>

De igual manera se consideraban como computables los hijos que, excediendo de veintitrés años se hallasen totalmente imposibilitados para realizar cualquier clase de trabajos. La Resolución de 24 de septiembre de 1942<sup>69</sup> establecía que si los hijos estaban presos, en campo de concentración o prestando el servicio militar, no se computarían a los efectos del plus, pues mientras durase esa situación no representarían cargas familiares.

La Reglamentación de Seguros<sup>70</sup>, en lo referente a los hijos, establecía una excepción digna de mención puestos que admitía que, a petición de la mitad del personal con derecho a la percepción del plus, se reconociese idéntico derecho a quienes tuvieran a su cargo padres o hermanos, siempre que, tanto éstos como aquéllos, estuviesen totalmente discapacitados para realizar trabajo alguno.

Las percepciones se establecían por un sistema de puntos según la siguiente escala:



-casados.....	: 5 puntos.
-casados o viudos con 1 hijo.....	: 6 “
- “ “ “ 2 hijos.....	: 7 “
- “ “ “ 3 “ .....	: 8 “
- “ “ “ 4 “ .....	: 9 “
- “ “ “ 5 “ .....	: 10 “
- “ “ “ 6 “ .....	: 11 “
- “ “ “ 7 “ .....	: 12 “
- “ “ “ 8 “ .....	: 13 “
- “ “ “ 9 “ .....	: 14 “
- “ “ “ 10 “ .....	: 15 “

Por cada hijo, o familiar con la consideración de hijos a efectos de la percepción del plus que excediera de diez se concedían cinco puntos más.

Enmarcado en un contexto laboral que tenía como elemento de referencia fundamental la familia, la normativa laboral tendía a la exclusión de la mujer del mercado laboral para mejor ejercicio de las funciones para las que se consideraba que estaba dotada. La normativa del plus no era una excepción y por tanto el art. 10 establecía como requisito fundamental para la percepción del mismo que la esposa no trabajase. Para que la esposa cobrara el plus, como ya se ha mencionado, había de ser trabajadora, además de encontrarse el marido incapacitado para el trabajo o ausente por motivos como el servicio militar obligatorio. Si ambos trabajaban sólo el marido cobraba los puntos correspondientes. Por otro lado si el esposa estaba trabajando en una entidad que no otorgaba el plus o era trabajadora agrícola cobraba los puntos la esposa, con el descuento de los cinco del matrimonio, aplicándose el mismo criterio si el varón estaba en situación de paro involuntario. No existía derecho a plus si alguno de los cónyuges trabajaba por cuenta propia.

Especial atención merece el caso de los trabajadores a domicilio. La normativa referente al plus excluía de la aplicación de este sobresueldo a los trabajadores a domicilio salvo en los casos en que concretamente se dispusiera otra cosa. Entre las reglamentaciones que dispusieron el cobro del plus por los trabajadores a domicilio se encontraban las actividades que empleaban un número sustancial de empleados con estas características. “Sin embargo, la liquidación de los puntos que corresponde a este personal no puede regirse por las normas ordinarias, ni se hace conjuntamente con la de los trabajadores del taller, ya que sus jornadas de trabajo son muy irregulares, suelen laborar para varias Empresas al mismo tiempo, trabajando unas veces solos y otras con la colaboración de sus familiares o de otras personas, faltando por consiguiente unos datos tan esenciales en las liquidaciones corrientes como son el de las jornadas trabajadas y el

de la Empresa donde prestan sus servicios. Por ello, las Reglamentaciones de Trabajo suelen dar unas normas especiales para la distribución del Plus a esta clase de trabajadores..."<sup>71</sup>. Salas Montilla cita, entre las empresas que habían instaurado el plus para los trabajadores a domicilio a la industria del calzado (1946), a la de géneros de punto (1946), guantes de piel (1947), alpargatas (1947), textil del esparto (1947), cueros repujados y marroquinería (1948), textil manual, cáñamo y redes (1949), fotografías (1948), confección, vestido y tocado (1948), confección de peletería (1949). Correspondía para el plus el 20 % de la nómina en la industria del calzado, guantes de piel, alpargatas, cueros repujados y marroquinería, confección de prendas de peletería y fotográficas. El 15 % pertenecía a los trabajadores de géneros de punto, textil del esparto, textil manual de cáñamo y redes, y confección, vestido y tocado.

Es destacable el hecho de que las reglamentaciones que concedieron a los trabajadores a domicilio el plus familiar se desarrollaron en un corto período de tiempo. La más antigua, la del calzado, en el año 1946 y la más reciente, en el año 1949. En los años cincuenta ninguna actividad más desarrolló el plus familiar para el grupo de trabajadores al que ahora nos referimos.

El modelo de orientación para las reglamentaciones citadas fue la reglamentación del calzado, que por ser la más antigua, constituyó la norma orientativa de las restantes que la siguieron en el tiempo, si bien confección, vestido y tocado, y confección de peletería tuvieron normas más específicas.

Nos referiremos ahora a las reglamentaciones cuyo modelo de orientación fue la industria del calzado. La búsqueda de la erradicación de la competencia condujo a establecer una normativa diferenciada para las localidades en que hubiera una sola empresa del ramo y para las que tuvieran más de una. En esta últimas se estableció la necesidad de crear una caja de compensación para distribuir el plus entre los trabajadores a domicilio. Dato especialmente significativo era el hecho de que la administración de la caja fuera desarrollada por una comisión integrada por una serie de miembros de instancias diversas, de entre los cuales destacaba el cura párroco de la localidad en que se instauraba la caja de compensación.

Dentro de este grupo de reglamentaciones tenían derecho al cobro del plus los trabajadores que hubieran percibido, con cargo a una o varias empresas, una cantidad igual o superior al importe de 24 jornadas en el trimestre.

En el caso de la industria fotográfica no se daban normas especiales para el cobro del plus por parte de los trabajadores a domicilio, lo cual, permite deducir que, en teoría, lo trabajadores a

domicilio disfrutaban de los mismos derechos que los trabajadores de los talleres y que cobraban el plus en la misma forma que aquéllos.

En el caso de las empresas de confección, vestido y tocado y para las de confección de peletería, sus reglamentaciones establecían un 15 % del importe de las nóminas como fondo del plus. Sin embargo, las dificultades para distribuir y valorar los puntos de este personal, originaron que, por medio de la Orden de 24 de julio de 1948<sup>72</sup> (la Orden de 26 de octubre de 1956 fijó en 50 pts. el valor del punto), se estableciera como valor del punto el de 40 pts. al mes, cuando sus ingresos fuesen idénticos a los que tendrían trabajando todos los días del mes. Si los ingresos eran menores, se reducían proporcionalmente las 40 pts.

En cuanto al pago se refiere, se hacía directamente por la empresa a los trabajadores individuales; si era un grupo o "corro" no mayor de cinco miembros (incluido el jefe), la liquidación se entregaba a este último. En grupos de más de cuatro trabajadores el jefe era considerado, no como jefe de grupo, sino como patrono del trabajo a domicilio, y había de abonar a los que bajo sus órdenes estuvieran los puntos u otras remuneraciones a que hubiese lugar.

### **9.2.3. Financiación del plus familiar.**

El fondo con que se constituía el plus no era el mismo en todas las reglamentaciones y variaba en atención a la capacidad económica de las industrias o actividades reglamentadas. La Orden de 29 de marzo de 1946<sup>73</sup> establecía que el porcentaje mínimo fijado de la nómina destinado a integrar el fondo del plus sería de una 10 %. Inicialmente se excluía de este mínimo, permaneciendo el 5 %, a la Industria de Pesca Marítima, si bien en los años cincuenta su mínimo de hecho se situó en el 10 %.

Siguiendo la obra de Fernández Heras<sup>74</sup> establecemos los porcentajes de las nóminas destinados al plus a la altura de 1958. Indicaremos, en primer lugar el porcentaje de nómina destinado al plus, el número total de actividades con ese tanto por ciento y seguidamente los nombres de las actividades. Para empezar, consideramos un total de 187 actividades:

- *Treinta por ciento (1)*: Banca Privada.
- *Veintiocho por ciento (1)*: Agua, electricidad, gas.
- *Veinticinco por ciento (37)*: Abanicos de Valencia, aceite y derivados, y aderezo y relleno de aceitunas, alcoholes de melaza y azúcar, almazaras de molturación de

aceituna de cosecha propia, apuestas mutuas deportivas benéficas, asociación general de empleados y obreros de los ferrocarriles de España, azufre, fosfatos, potasa, talco y demás explotaciones mineras no comprendidas en otra reglamentación, cámaras oficiales de la propiedad urbana, cajas de ahorro popular, cervecera, colegios oficiales de médicos, empresas de limpieza pública, con reglamentaciones provinciales y locales, ferrocarriles de uso público, ferrocarriles explotados por el Estado, fósforos, jarabes y bebidas carbónicas, galletas, limpieza pública, madera, médicos de asistencia de accidentes de trabajo en servicios centralizados, mercados centrales de Barcelona, metropolitano de Madrid, minas de piritas, organización médica colegial, patrimonio forestal del Estado, piritas, practicantes de asistencia de accidentes de trabajo, químicas, resinera, resinas sintéticas y materia plásticas, seguros, sidra, talco, fosfatos, azufre, potasa y demás explotaciones mineras no comprendidas en otra reglamentación, vinícola y elaboración de sidra.

- *Veinticinco o veinte por ciento (2)*: Pompas Fúnebres (el 25 % en aquellas reglamentaciones de trabajo de la citada actividad que en 31 de diciembre de 1953 tenían asignado para plus familiar el 15 % de la nómina, y el 20 % para las que en la indicada fecha tenían fijado el 10 %), Tranvías de distintas localidades (lo mismo que para Pompas Fúnebres).
- *Veinte por ciento (115)*: Actividades no reglamentadas, agrios (manipulado y envasado para el comercio y exportación de), aguas mineromedicinales y baños, almacenaje y recolección de cueros y pieles, almadrabero (consorcio nacional), alpargatera, arroz, artes gráficas, Banco de Crédito Industrial, Banco de Crédito Local, Banco de España, Banco Exterior de España, Banco Hipotecario de España, Bazán (empresa nacional), botones, artículos de vestido, tocado y juguetería de celuloide, cal y yeso, Calvo Sotelo (empresa nacional), calzado, C.A.M.P.S.A., Canarias (elaboración de tabaco en), Canarias (empaquetado de plátano y demás frutos de), carga y descarga, "collas" y análogas, cárnicas, carbón (minas de), cartón (muñecas de), cartón (manipulado de), cemento, cerámica, cinematografía, circo, variedades y teatro, coches camas, colocación de aislamientos térmicos, comedores universitarios, comercio, confección de guantes de piel, confección de prendas de peletería, conservas vegetales, conservas y salazones de pescados y similares, consignatarios de buques, construcción y obras públicas, contratas ferroviarias, corcho, cueros repujados, marroquinería y similares, curtición de pieles para peletería, curtidos, chocolates, bombones y caramelos, deportes y espectáculos (locales de), derivados del cemento, despachos y oficinas, embarcaciones, artefactos

flotantes y ferrocarriles auxiliares de obras de puertos, embarcaciones de tráfico interior de puertos. empresas de limpieza de locales, empresas de venta de localidades de espectáculos públicos, enseñanza no estatal, envases metálicos e industria metalgráfica, espectáculos de deportes (locales de), establecimientos sanitarios de hospitalización y asistencia, exportación de pescado fresco, factorías bacaladeras, farmacias, ferrocarriles (red nacional de), frío industrial, frutos secos (manipulado y exportación de), harinera, purés, similares y piensos compuestos, helados y horchatas, juntas de obras, comisiones administrativas y demás servicios de puertos, laborales (mutualidades), lácteas, ladrillos y tejas, limpieza de locales, manipulado de papel de fumar, marina mercante, médicos al servicio de entidades de asistencia médico-farmacéutica, mercados centrales de Barcelona, mercados particulares, minas de carbón, minas de plomo, minas metálicas, música, navieras, organización mutualista laboral, panaderías, papelera, pasta de sopa, pastelería y confitería en obradores, peluquerías, personal no docente de Escuelas de Trabajo, personal no docente de Patronatos de Formación Profesional, pesca marítima, petróleo, piensos compuestos, purés y similares, pimentonera, pintura de bicicletas, motocicletas, automóviles, sillas de niños, etc., portuarios (trabajos), practicantes y matronas al servicio de entidades de asistencia médico-farmacéutica, prensa, protésicos dentales, radiocomunicación, radiodifusión, recaudación de contribuciones, salinera, servicio de trabajos portuarios, siderometalurgia, tabacalera, S. A. Tabacos de Canarias, quitamanchas y tintorerías, tierras industriales, torrefacción de café y sucedáneos, transportes por carretera, turrón, mazapán, obradores de confitería, pastelería y masas fritas, usuarios de servicio de limpieza pública domiciliaria de Barcelona, vaquerías, vidrio.

- *Quince por ciento(25)*: Acondicionamiento textil lanero, alfombras y tapices, algodón, aprovechamiento de desperdicios de algodón, boinas, cintas de carda, cintería, trencillería y pasamanería, clasificación y manipulación de trapos y demás desperdicios, Compañía Telefónica Nacional de España, confección, vestido y tocado, fibras artificiales, fibras diversas, fieltros y sombreros, géneros de punto, hostelería, cafés, bares y similares, lana, líneas aéreas, mantas de lana y mantas y muletones de mezcla, mantas y muletones de algodón, obtención de fibra de algodón y subproductos, obtención de fibra de lino, porterías de fincas urbanas de Asturias, sector manual del cáñamo y fabricación manual de hilados y redes de pesca y arrastre, sector manual del esparto, Seda.
- *Diez por ciento(4)*: Espectáculo Taurino (personal no regulado por la reglamentación de locales de espectáculos y deportes), minas de Almadén, personal

facultativo y auxiliar sanitario del seguro obligatorio de enfermedad, porteros de fincas urbanas (inexistente en la mayoría de las provincias).

- *Porcentajes diversos (2):* África occidental española (era el 10 %, según el art. 35 de la Orden de 2 de marzo de 1954; el art. 31 de la de 30 de noviembre de 1957 disponía que la cuantía del plus familiar de los productores domiciliados en el África occidental española fuera fijado por el Gobernador General aquélla, sin que su importe pudiera ser inferior al de la Empresa de mayor nómina de dichos Territorios). Personal Civil no funcionario de establecimientos militares.

Con respecto a la nómina se calculaba su cuantía teniendo en cuenta las cantidades totales abonadas en el trimestre anterior computándose no sólo los sueldos o jornales efectivos, sino también las comisiones, primas a la producción y horas extraordinarias con su recargos, así como la retribución dominical, subvenciones por carestía de vida y gratificaciones.

El art. 29 de la Orden de 29 de marzo de 1946<sup>75</sup> preveía la posibilidad de establecimiento en cada localidad de una caja de compensación local para la distribución del plus de manera uniforme entre los trabajadores de la misma actividad. De esta manera, el deseo de uniformizar las prestaciones del plus y de evitar que actividades similares recibieran percepciones por motivo del plus desiguales estaba presente; eso sí, se dificultaba la organización administrativa imposibilitando que se destinase cantidad alguna del fondo del plus para los gastos de administración.

#### **9.2.4. Administración del plus familiar.**

Se constituía la comisión integrada por el Jefe del centro de trabajo o persona en quien delegara dicha función, por el enlace sindical y por un número de vocales electivos (dos para los centros de menos de 51 trabajadores, tres para los de 51 a 250 y cuatro para los de 251 en adelante).

La ausencia de control efectivo de los trabajadores se constataba por medio de la posibilidad del Delegado de Trabajo de alterar el número de vocales integrantes, estando él capacitado para nombrarlos. De igual manera se explicitaba en la capacidad del mencionado cargo para remover a los vocales que, según su criterio, no cumplieran con sus obligaciones. Se establecía en el art. 2 de esta disposición una normativa teóricamente punitiva para los que optaran por la contratación de personal sin derecho a plus como forma de no disminuir las prestaciones a que tuvieran derecho los trabajadores de dicha empresa con derecho al mismo. Sin embargo, la ausencia de mecanismos concretos para detección de dichas prácticas fraudulentas impide saber con certeza hasta que punto pudo ser aplicada.

La distribución se realizaba por medio de una especie de comisiones obreras que presidía la representación de la empresa. En este punto surgieron numerosas dudas en cuanto a la extensión de la comisión. La Resolución de 10 de agosto de 1943<sup>76</sup> de la Dirección General de Trabajo aclaraba la cuestión de si la constitución de la comisión había de realizarse en cada centro de una empresa o sólo en la empresa en el sentido de que la expresión empresa había de entenderse en el sentido de fábrica, pues de lo contrario los trabajadores del sindicato local no podrían formular la propuesta de integración de la comisión que había de distribuir el plus.

Pese a ello, con el Decreto de 18 de agosto de 1947, que creó los Jurados de Empresa, y su reglamento (Decreto de 11 de septiembre de 1953) las Comisiones Distribuidores del plus vieron como los citados Jurados asumían sus funciones en cuanto al conocimiento de las reclamaciones que se formulaban en relación al plus. A pesar de ello, la incidencia de los Jurados, en cuanto al plus familiar se refiere, era escasa en la medida en que sólo las empresas con más de 1.000 empleados fijos el 1 de enero de 1953 estaban obligadas a constituir dicho Jurado. A su vez la Orden de 13 de enero de 1956 disponía que las empresas con 500 o más empleados el 1 de enero de 1956 habrían de poner en funcionamiento los Jurados. Entre las atribuciones que se concedía al Jurado estaba la de nombrar libremente, y sin intervención de la empresa, a su representante en la Comisión del Plus Familiar.

La administración del plus recaía en las empresas respondiendo a un criterio de autonomía y descentralización que, para algunos autores, constituía “el germen de un nuevo modo de entender la acción protectora del Estado...y un avance muy importante en el camino de auto-responsabilización de la vida familiar”<sup>77</sup>.

El grave dilema que planteaba la ausencia de la administración era la dependencia excesiva y potencialmente fraudulenta de los trabajadores con respecto a los empresarios, dado que “el dejar la administración de los servicios sociales a las empresas presenta claros inconvenientes, puesto que ello acentúa la dependencia de los trabajadores respecto de sus empleadores”<sup>78</sup>, siendo ésta la principal dificultad que se podía encontrar en la administración del plus.

#### ***9.2.5. Valoración de la política bifronte en torno al salario familiar.***

Se trata en este apartado de la investigación de exponer la valoración conjunta de la política de protección de la familia por medio del subsidio familiar y del plus familiar, exponiendo aquellos elementos positivos o negativos que se pusieron de manifiesto en la realización de estas políticas.

Como ya se ha señalado al referirnos al plus, una de las críticas que con más asiduidad se repetían en torno a las dos formas de salario familiar a que nos referimos, era la innecesaria coexistencia de dos sistemas que, supuestamente, tenían idéntico objetivo. “Urge suprimir la pluralidad de sistemas existentes en nuestro Derecho para proteger a la familia desde el punto de vista de procurarle un aumento en sus ingresos...habría que hacer frente al problema que supone subsidio familiar, plus familiar y ayuda familiar a funcionarios públicos, como sistemas que persiguen todos ellos en definitiva un mismo y única objetivo dentro de sus propias esferas”, afirmaba el Congreso de Madrid<sup>79</sup>. En esta misma línea se argumentaba en las Jornadas Técnicas Sociales lo siguiente:

“La idea que a cualquier observador se le aparece como más obvia es que la dualidad de regímenes debe desaparecer, fundiéndose en uno solo habida cuenta que la uniformidad de la contingencia a que se atiende y la idea inmediata, corolario de la anterior, es la de que la unificación debería realizarse en beneficio de un fondo nacional único que vaya hacia una uniformidad de prestaciones, de forma que las mismas sean medidas con arreglo a una circunstancia accidental y sin referencia con el riesgo protegido”<sup>80</sup>.

La problemática para la unión de ambos sistemas, radicaba en que, de hecho, el plus venían percibiéndose como un salario. Era una percepción que se cobraba cuando se estaba trabajando y que era pagada por la empresa. Por tanto, su existencia era percibida tanto por los trabajadores como por las propias empresas como “una cuestión mixta de seguridad social y salarios”<sup>81</sup>, a lo cual había que añadir los bajos costes administrativos del plus. Todas estas circunstancias jugaban a favor de la subsistencia del plus familiar, a pesar de tener otro grave inconveniente importante en las hondas diferencias del valor real del punto, resultando que “allí donde los salarios son más bajos es donde la protección es más exigua, y viceversa, lo que se compagina mal con la esencia misma de una medida de seguridad social de protección de un riesgo”<sup>82</sup>.

En torno a esta cuestión Federico Rodríguez<sup>83</sup> exponía las modificaciones que requería tanto el subsidio como el plus. De entre éstas, la unificación de ambos sobresueldos era la que más urgía y la compatibilidad de la ayuda familiar con el plus, si bien esto último afectaría, no a los trabajadores civiles, sino a los militares que podrían cobrar plus y ayuda si tuvieran duplicidad de empleos.

En torno a la coordinación de la política del nivel de vida familiar la máxima de las Naciones Unidas en el periodo a que nos referimos se centra en la problemática de la relación entre iniciativas diversas en torno a un mismo objetivo, y así se puede observar lo siguiente en el “Informe sobre una política coordinada relativa al nivel de vida familiar”:



“En los países de antiguo desarrollados, los esfuerzos sociales se hicieron a menudo de manera fragmentaria, en respuesta a necesidades urgentes o a presiones políticas sin que hubiera un plan general. A los sistemas existentes se agregaron o superpusieron múltiples instituciones y diversas disposiciones sin tomar siempre medidas para su coordinación. Aunque los resultados rara vez estuvieron desprovistos completamente de valor, como las medidas no estaban integradas en programas a largo plazo, a menudo las disposiciones adoptadas duplicaban las ya existentes o estaban en conflicto con ellas, y resultaban lagunas, deficiencias administrativas o sociales, gastos injustificados y un costo desproporcionado a la eficacia de los servicios prestados”<sup>84</sup>.

En el caso español, y en torno a la cuestión que centra el estudio, es evidente la fragmentación de esfuerzos en torno a un mismo fin; y es igualmente evidente, la ausencia de un plan global de protección a la familia, siempre que excluyamos la manifestación de intenciones del Fuero del Trabajo en torno a la familia, el salario o el trabajo. El subsidio y el plus, teóricamente, fueron sobresueldos creados para situaciones de crisis y por tanto mantenidos como ayudas de carácter extraordinario y sin afán de prolongación infinita en el tiempo. Ambas instituciones respondían, poniendo parches, a una realidad salarial que, tras la guerra civil, mantenía a innumerables familias en los umbrales de la pobreza. No fueron iniciativas tendentes a perdurar en el tiempo, si bien tras la salida de Girón del ministerio y la inflexión en la política española en el final de los 50, tanto el subsidio familiar como el plus subsistieron. Se puede decir que faltaba un plan general de protección de la familia considerando las diversas medidas de cara a la elevación del nivel de vida de sus integrantes; faltaba una integración total de consideraciones de tipo demográfico, económico, social, cultural o administrativo. No quiere esto decir que ninguna de estas variables fuera tenida en cuenta, sino que todas ellas no fueron englobadas en un planteamiento general de lo que, entre otros elementos, da cuenta la ausencia de unificación del plus y del subsidio familiar. Desde este punto de vista, lo que primeramente sobresale de la legislación familiar española es la diversidad de regímenes existentes para cumplir una finalidad única y por tanto, los supuestos diferentes sobre los cuales estos regímenes estaban montados.

Todo ello se concreta en incongruencias difícilmente comprensibles, salvo desde la vertiente de un programa de tipo global de protección a la familia. Y así podemos encontrar que el subsidio familiar era incompatible con la percepción de la ayuda familiar en el caso de los funcionarios públicos, mientras que, como ya sabemos, era compatible con el plus familiar en el caso de los empleados por cuenta ajena.

Otra incongruencia, quizás justificable en la práctica, era la exclusión de los cargos de alta dirección de los beneficios del plus. No era posible aducir una razón objetiva de fondo, “ya que

si la base de percepción de las cantidades que se reciben en concepto de plus familiar es el número de cargas familiares, como parece deducirse del propio sistema del plus y del hecho de reconocer a los cargos directivos el derecho a subsidio familiar, habrá que preguntarse por qué no se otorga también a estos últimos el plus familiar”<sup>85</sup>.

A lo dicho, y recordando lo ya expuesto al referimos al plus, se añade la incomprensible aplicación de impuestos sobre los rendimientos del trabajo a ingresos que, como el plus o la ayuda familiar, no procedían directamente del trabajo. Sin embargo, también es posible encontrar críticas al plus familiar por sus supuestos inmoderados beneficios para el trabajador. Este es el caso del Consejo de Economía Nacional que elaboraba en 1954 un informe en que hacía constar las siguientes aseveraciones:<sup>86</sup>

“El plus familiar es necesario pero hoy se hacen tangibles algunos graves defectos,...

Las modificaciones recientemente establecidas en la retribución laboral, mediante el plus familiar, han alterado sustancialmente el nivel de salarios con un aumento en los costes por obrero de un 25 % haciendo de las empresas organismos de redistribución de la renta, por consideraciones familiares y no de productividad marginal de esfuerzo.

...en la última modificación de este sistema -fines de 1953 y primeros días de 1954- el punto ha quedado sin limitación alguna y prácticamente la totalidad de las empresas españolas ven incrementado en un 25 % el total de sus salarios base...

Al no tener límite alguno la estimación del punto se han producido numerosos casos de ingresos por razón del plus familiar que exceden notoriamente el sueldo base del jefe de familia y en algunas ocasiones por aplicación del sistema a un colectivo muy reducido, una sola persona o un número limitadísimo de empleados, se reparten entre sí el 25 % del total de la nómina de la empresa con el incremento enorme y repentino de su contribución...

La escala actual de puntos no guarda relación con la variación de las necesidades familiares, ya que la curva de ingresos adicionales que obtiene el obrero con la variación de puntos a medida que se eleva la familia, no es paralela al aumento de gastos que provoca la variación en el número de miembros de la misma...

...parece necesario volver a establecer una limitación del punto...

...se ha comprobado que la cuantía de los pluses con el elevado porcentaje actual, favorece la vagancia, pues cada vez son más los obreros que encuentran pretexto en la enfermedad u otras hábiles excusas, para mostrarse remisos en acudir al trabajo, dado que les basta para sus necesidades familiares, lo que reciben por el plus familiar...”

Siguiendo con esta visión negativa de la coexistencia del plus y del subsidio, entre las Conclusiones del Congreso Provincial de la Familia Española de Madrid<sup>87</sup> se pedía la supresión del subsidio familiar. Y se brindaba esta idea desde una posición, ciertamente polémica, que asentaba las solución de los problemas ligados a la justa distribución de la riqueza en la política fiscal. Sobre esta cuestión el Congreso de Madrid concluía afirmando lo siguiente:

“El problema que se plantea, que depende primordialmente de que se llegue a una justa distribución de la riqueza nacional, encontraría su natural solución mediante la oportuna presión fiscal, que puede conducir a que la no disponibilidad de excesivos dividendos haga revertir gran parte de los beneficios empresariales, no solamente en una ampliación de medios productores (con lo que se desarrollaría el índice de inversiones y, por tanto, el coeficiente de productividad) sino también en una revalorización de los salarios, sin una repercusión en la subida de precios que, por la citada presión fiscal, debería resultar inoperante”.

Es evidente, que una presión fiscal injustificada podía, junto a los efectos que indica el texto expuesto previamente, incidir de forma negativa en la inversión privada y por tanto también en la generación de empleo. Parece, por tanto, difícil establecer una relación entre el endurecimiento de la política fiscal y la incentivación de la inversión privada tal y como aquí se plantea.

En definitiva, se exponía la necesidad de una remodelación de una política que pretendía elevar el nivel de vida de las familias españolas por medio de ingresos que no tenían que ver directamente con el trabajo realizado. Ello conducía necesariamente a la estructuración de los instituciones creadas para tal fin en una sóla; en lo que se refería al plus familiar, a la estipulación de un valor mínimo y máximo del punto, lo cual evitaría las exageradas diferencias entre unos trabajadores y otros; y por último, a la clarificación del concepto sobre lo que se entendía por familiar dependiente evitando las variaciones en torno a este criterio.

En cuanto a las conclusiones a sacar de esta serie de problemas planteados las Jornadas Técnicas Sociales<sup>88</sup>, coincidían en líneas generales con los planteamientos del Congreso de la Familia Española. Para empezar, se pedía la reunificación del subsidio familiar y el plus

familiar, la inclusión en las prestaciones de este sistema único de la ayuda familiar, los subsidios de nupcialidad, escolaridad, para la madre viuda y orfandad, los premios de natalidad y el subsidio de maternidad. Se promovía la creación de una caja compensadora que sustituyera a la Caja Nacional del Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares, quedando encuadrada en el I.N.P. En cuanto al plus se refería, seguiría existiendo en la reglamentaciones, aplicándose las cantidades obtenidas al nuevo régimen de ayuda familiar. Su fondo sería aumentado con un tanto por ciento sobre los salarios, el cual vendría a sustituir la cotización empresarial para el sostenimiento del Régimen del Subsidio Familiar.

Más distanciado en el tiempo, Paul Preston refleja una realidad social en los años cincuenta muy alejada de lo que denomina compromiso de Franco con la “retórica social falangista”. En 1950, la renta per cápita en España era la mitad que en 1926, los precios habían aumentado dos veces más que los salarios de la clase trabajadora desde 1939 y “en cualquier caso, las familias obreras tenían que comprar la comida en el mercado negro, donde era dos veces más cara que en el mercado oficial”<sup>89</sup>. Este puede ser el posicionamiento más negativo sobre la realidad a que nos estamos refiriendo. Si bien, lógicamente, el resultado final se sitúa en una posición equidistante de la apología interesada y de la diatriba demoledora.

### **9.3. La familia numerosa.**

#### ***9.3.1. El concepto de la familia numerosa.***

Si dividimos las medidas en que se concreta la ayuda a la familia española en directas e indirectas, situaremos dentro de las primeras, al subsidio familiar, al plus y a la ayuda familiar a funcionarios. Y dentro de las segundas, junto a los premios de nupcialidad y natalidad, a los subsidios de viudedad, orfandad y escolaridad, al régimen de protección a la maternidad, y por último al sistema de protección a las familias numerosas.

La potenciación de la familia, y en concreto de la familia numerosa, se encuadra dentro de una pésima visión de lo que hasta ese momento, y concretamente en la República, había sido la política con respecto a la familia española. Enlazando la percepción de la supuesta maldad del liberalismo decimonónico con el materialismo de corte marxista imperante en el período republicano, Jordana de Pozas<sup>90</sup> manifiesta su repugnancia visceral hacia la política familiar realizada hasta el momento, incidiendo en que “las causas económicas nacidas del individualismo liberal produjeron en los medios industriales y, en menor, medida, en los del artesanado y la agricultura, un descenso del nivel económico incompatible con el mantenimiento decente de una familia medianamente numerosa.”

“La familia es, señores, no cabe dudarlo, la sociedad aborigen”<sup>91</sup>, afirmaba Ambrosio López Jiménez, Subsecretario de Trabajo. Desde este punto de vista, el mantenimiento de la unidad básica de socialización (la familia) resultaba incompatible con el mantenimiento de un régimen cuyas fuentes ideológicas bebieran de una tradición política, liberal o marxista, incompatible con los fundamentos tradicionales de lo considerado como puramente español. La atención a las familias numerosas se fundamentaba en el hecho de que eran éstas las que sufrían con mayor intensidad la miseria<sup>92</sup>. Dado que las familias obreras eran las más prolíficas, cada nuevo hijo era un paso en la disminución del nivel de vida del núcleo familiar, conformándose una tendencia a la familia con un sólo hijo. Y éstas como señala Rebollo<sup>93</sup> “no son útiles a la colectividad, por no prestar los servicios necesarios para compensar lo que reciben de ella”. Por tanto si la sociedad española creía necesario mantener y elevar el número de nacimientos, y por las manifestaciones de la época ésto parece evidente, era necesario que sostuviera el nivel de vida de las familias numerosas. En esta línea, que encuentra en motivaciones demográficas, morales y sociales el fundamento de la exaltación de la familia numerosa, está el texto introductorio del estudio que sobre la Ley de Familias Numerosas realizó la Unión Nacional de Asociaciones Familiares:

“La protección a las familias con muchos hijos es un principio de naturaleza moral, un imperativo de la justicia y una exigencia de la sociedad. La familia tiene como principal fundamento la continuidad de la especie humana, mediante la procreación y la educación de las generaciones futuras. Por esa misión, la familia participa en el Plan divino de la Creación.

La justa ordenación de la sociedad requiere que el número de hijos no sea un obstáculo grave a la igual participación en los bienes de la economía y de la cultura, que caracteriza la sana ambición del hombre moderno. No se trata tanto de que los padres no vean reducido su nivel de vida como consecuencia del gran número de hijos, sino el que éstos no padezcan discriminación alguna por el mayor número de sus hermanos. Nacer en el seno de una familia numerosa no priva de la igualdad de oportunidades que caracteriza a una sociedad de nuestro tiempo bien organizada.

No son sólo razones demográficas, que tendrían un carácter meramente accidental, sino que son razones morales y sociales las que justifican un sistema de especial de protección a las familias numerosas”<sup>94</sup>.

El antecedente próximo de la Ley de Familias Numerosas se encuentra en 1926. Esta disposición consideraba familias numerosas básicamente a las formadas por ocho hijos de padres obreros y funcionarios y sus beneficios se concretaban, básicamente, en matrículas

gratuitas, auxilios diversos y rebajas en las tarifas de cédulas. Lógicamente, en comparación con la Dictadura de Primo de Rivera, figuras destacadas de la República como Largo Caballero aparecen en la obra de Jordana como las artífices de una satánica obra en contra de la familia española. De él afirma Jordana<sup>95</sup> que suprimió las consignaciones para el pago de los subsidios de familias numerosas establecidos por la Dictadura, sin reintegrar a las cajas colaboradoras del I.N.P. lo que por orden y cuenta del Estado habían pagado. “En 1932, un Decreto de la República deja en suspenso el incipiente régimen, estimando innecesaria la política demográfica de protección a la familia numerosa, lógica manifestación de un sentido disgregador del hogar”<sup>96</sup>, afirmaba con un cierto tinte apocalíptico, Girón de Velasco. Como en otras facetas de sus discursos en los años cuarenta y, en concreto antes del final de la Segunda Guerra Mundial, la apología de la figura de Franco es la norma en los discursos de Girón, se trate del tema de que se trate. En este caso Girón incidía en la importancia de la persona del Jefe del Estado a la hora de llevar a cabo ésta “Ley de Franco”<sup>97</sup>, y como bajo la égida de éste se desarrolla con la ley del 41 “un régimen de protección a la familia numerosa, entendiendo por tal a la española, sin la distinción clasista primitiva”<sup>98</sup>.

La política de ayudas a las familias numerosas se enmarca dentro de lo que ya se ha definido en páginas anteriores como intento de modelación de una sociedad en ruptura con los moldes familiares aderezados, bien por el capitalismo de corte liberal o por el materialismo de corte marxista “imperante en España antes de la guerra civil”. Como ya se ha mencionado, en la mente de Girón de Velasco y en la del falangismo que él defendía, la Ley de Familias Numerosas era un sistema para la protección del hogar, “al que la Falange Falange entiende como base de sustentación primera en la nueva estructura social”<sup>99</sup>. Y es que, como afirma Girón, en un régimen que “ha cifrado su concepción de la política en torno a la familia, no podría faltar un sistema especialmente protector de las familias numerosas, firmes puntales de la Patria”<sup>100</sup>.

Y es que la familia numerosa merecía a los ojos del régimen una especial consideración por el homenaje que imponía la “generación múltiple”<sup>101</sup>, su “sagrado respeto a las leyes divinas”<sup>102</sup>, sus “virtudes sociales”<sup>103</sup>, su “abnegación y trabajo”<sup>104</sup>. En esta línea de apología de los valores y virtudes de la familia numerosa se encuentra también la diatriba paralela para con las maldades de la situación legal o real a la que la familia numerosa se veía sometida:

“No entra el egoísmo en sus cálculos; ellas mantienen -y evitan que descienda más- nuestro índice de natalidad en sexto lugar en Europa. Ellas ofrecen brazos abundantes a la Patria, ellas son escuelas de convivencia y parcelas en las que la porción de Dios se ofrece con generosidad y alegría. Y, sin embargo, la familia numerosa encuentra aún gentes que pretenden sonrojarla o denigrarla. Halla cerrado -de hecho- muchos puestos

al trabajo de los suyos, cuando no los empujan para arrojarlos de sus puestos. Encuentra trabas administrativas -papeleo y gasto de tiempo y de dinero- para la obtención de los beneficios que la propia Ley les concede. Observa con dolor y daño cómo se cercenan por órdenes, circulares, etc., aquellos beneficios legales, o que le exigen gabelas, pagos, etc., que en el espíritu de la ley estaba liberarla. Se queja de que algunos de esos beneficios legales nunca se hayan podido ejercer por falta de norma reglamentaria -Seguro de Enfermedad, por ejemplo-. Faltan normas que deben favorecerla en orden a prioridad de colocaciones, de becas, de obtención de viviendas, etcétera. Sufre tipos tributarios en desarmonía con sus necesidades...y hasta ha de soportar ironías, sonrisas o malos tratos reales, u olvidos de cumplimientos legales que la favorecen, pretericiones, etc.

Queremos -teóricamente- tener familias numerosas; pero de hecho la sociedad y el propio Estado actúan a menudo como si pretendiesen lo contrario y aun las repudiase”<sup>105</sup>.

Y es que la familia numerosa española era el fortín contra la decadencia occidental. Si el régimen tenía éxito en la potenciación de las familias numerosas cada vez nacerían más hijos y, como afirma Aznar, “la Higiene y la Moral harían que la excepción fuera, no el tener más, sino el tener menos de tres hijos: Eso es lo que está sucediendo en las familias conscientemente católicas y en todo caso ésto es lo que debiera suceder”<sup>106</sup>. A la apología de los valores de la familia numerosa Aznar añadía otros más pragmáticos ligados a las imperiosas necesidades de los Estados:

“Y lo más injusto de este razonamiento está en que las familias numerosas son las que llevan sobre sus hombros a las naciones, las que las hacen crecer o impiden que se extingan como llamas sin aire, las que pagan por ellas y por las que tienen pocos hijos o no tienen ninguno, las que les proporcionan ciudadanos y soldados, productores y consumidores, y a esas sería a las que precisamente los Estados dejarían en desamparo. De preocuparse la ley de algún tipo de familia, debería ser de las familias numerosas más que de las otras”<sup>107</sup>.

Y es que según Aznar España necesitaba un promedio de cuatro hijos vivos por familia para que la población española creciera segura y rápidamente. En los años 30, continúa Aznar sólo un 20 % del total de las madres españolas tenía más de cuatro hijos y a continuación añadía:

“Pues sobre esa minoría (que no llega a la quinta parte) recae el peso abrumador de sostener a España y de prepararle su porvenir al menos en el aspecto cuantitativo, y no

creo que en eso España sea una excepción. Esta función de vida o muerte para un pueblo, ¿no merecerá las ayudas especiales de la Nación o del Estado así sostenidos y salvados? Si no las ayudan, las perderán poco a poco, y la Nación se disolverá como un islote de azúcar en el agua”<sup>108</sup>.

Lo verdaderamente temible para Aznar no era que descendiera el número de miembros de familias obreras pues “las familias obreras preparan a la sociedad generalmente obreros”<sup>109</sup>, sino que lo verdaderamente grave era que las clases medias fueran las que menos hijos tuviesen porque eran estos sectores sociales los que preparaban para la sociedad los médicos, los abogados, funcionarios o sacerdotes y:

“Si las familias de la clase media intelectual, proporcionan a la sociedad el material humano que necesita para sus funciones (no de conservación animal, sino de progreso, las verdaderamente humanas), si esta carga pesadísima en pro de la sociedad las aplasta, y, en cambio, la sociedad las abandona ¿qué queréis que hagan esas familias sino defenderse? Pero esta defensa, que es un suicidio para la clase intelectual, es para la sociedad la pérdida terrible de esos núcleos selectos que le son tan necesarios. Si la Nación no ha perdido el buen sentido, no puede abandonarla”<sup>110</sup>.

En esta línea, se planteaba la socialización total de la sociedad española desde unos nuevos presupuestos o moldes que tuvieran en la familia el principal agente de adhesión al régimen. Por otro lado, hay que decir que la política de protección a las familias, y concretamente a las numerosas, no dista en cuanto a los resultados materiales que se perseguían de las de otros países en lo que se refería a la búsqueda de remedios para “las necesidades siempre crecientes de las familias, particularmente de las familias numerosas”.<sup>111</sup>

A esto se puede añadir que, de la misma forma que otros países, en España tampoco se lograron los resultados apetecidos. De hecho en el Congreso de la Familia Española se insistió en que el régimen de protección a las familias numerosas debía desaparecer “por artificioso”<sup>112</sup>. Y se añadía en el mencionado Congreso de Madrid de una forma que no deja duda acerca de la utilidad real de la política con respecto a las familias numerosas lo siguiente:

“Ciertamente es que los beneficios concedidos en materia fiscal a las familias que reúnen un determinado número de hijos no cubren con mucho el objetivo que se propuso el legislador al quedar limitado a la cantidad que había de satisfacerse como impuesto de utilidades por renta del trabajo personal, mientras que en los demás impuestos directos o indirectos que ha de satisfacer el trabajador no tiene ventaja alguna”<sup>113</sup>.



A estas críticas se unían desde la misma instancia mencionada la ausencia de protección desde el primer hijo o hija, las dificultades para hacer uso de los beneficios en el transporte a no ser que viajaran simultáneamente todos los familiares en el mismo medio de transporte, ello sin tener en cuenta que los beneficios no se extendían a todos los medios de comunicación de tierra, mar y aire.

### 9.3.2. Evolución de la legislación sobre familias numerosas.

Las bases legales de la política de potenciación de las familias numerosas se articuló en dos etapas claramente diferenciadas por dos leyes. La primera la de 1º de agosto de 1941<sup>114</sup> y la segunda la Ley de 13 de diciembre de 1943<sup>115</sup>.

Ambas disposiciones responden a la exaltación de la familia como célula primaria y fundamento de la sociedad, y a la necesidad de evitar el descenso de los índices de natalidad dado que como se afirma en el preámbulo de la Ley de 1941 “solamente los pueblos de familias fecundas pueden extender la raza por el mundo y crear y sostener imperios” dado que “la vitalidad demográfica acrecienta la personalidad internacional y la potencia militar”<sup>116</sup>. Por tanto se puede afirmar que la legislación sobre la familia numerosa, “relicario de fe, de patriotismo y de voluntad de grandeza”<sup>117</sup>, obedece a una motivación demográfica y apologista con respecto a la raza cuya finalidad principal está ligada al papel español en el exterior, a su potencia militar y a su capacidad para resucitar “*el Imperio*” en este concreto momento de la Historia de España.

En primer lugar, la Ley de 1941 y su Reglamento de 1 de agosto de 1941<sup>118</sup> considera familia numerosa a la compuesta por el cabeza de familia y cinco o más hijos legítimos o legitimados, menores de 18 años o mayores incapacitados para el trabajo. La ley prorroga el límite de los 18 años hasta los 23 cuando el hijo no disfruta de ingresos por su trabajo o por rentas. A su vez clasifica a las familias en dos grupos o categorías: las de primera, de cinco a siete hijos; y las de segunda, con ocho o más hijos. La ley concedía beneficios relacionados con el transporte, la vivienda, fiscales, sobre colocación de trabajadores, colonización, enseñanza y sanidad. Para la obtención de estos beneficios sólo existía un límite en cuanto a las rentas de la unidad familiar. Este límite se situaba en las 50.000 pts. anuales.

El peso teórico que se concedía a las familias numerosas se plasmó en la creación por parte de la Dirección General de Previsión de la Sección de Protección a las Familias Numerosas por medio de la Orden de 11 de noviembre de 1941<sup>119</sup> dividida a su vez en tres subsecciones: asuntos generales, intervención y estadística y resoluciones.

Como ya se ha mencionado, la segunda etapa de la política de protección a las familias numerosas comienza con la Ley de 13 de diciembre de 1943<sup>120</sup> y su Reglamento de 31 de marzo de 1944<sup>121</sup>. La mencionada ley derogaba la de 1 de agosto de 1941 en función de la conveniencia de procurar protección especial relacionada con el medio rural y las clases humildes, las cuales, como se afirma en el preámbulo, eran las de “más fuerte vitalidad demográfica”<sup>122</sup>. Otra motivación que condujo al establecimiento de un nuevo marco de

protección para las familias numerosas fue la supresión en 1942<sup>123</sup> del impuesto de cédulas personales, una de las cuestiones de más relevancia para las familias numerosas.

La nueva ley consideraba familia numerosa a la compuesta por el cabeza de familia, el cónyuge y cuatro o más hijos legítimos o legitimados, solteros, menores de dieciocho años o mayores incapacitados para el trabajo. Si el hijo no estaba emancipado y los ingresos que disfrutaba por su trabajo o rentas no rebasaban la cifra de seis mil pesetas anuales, los dieciocho años se consideraban prorrogados hasta los veintitrés. En lo referente a los beneficios de la enseñanza la edad de 23 años se ampliaba para los varones por el tiempo de duración del servicio en filas, y para las mujeres hasta los 25. Las categorías de familias se modificaban con respecto a la ley de 1941, formando la categoría primera las que tuvieran de cuatro a siete hijos, y la segunda las de siete o más. A su vez el reglamento creaba la denominada categoría de honor. Formaban esta categoría las familias que contasen con 12 o más hijos, aunque alguno de ellos sobrepasase la edad límite establecida, siempre que hubiese cuatro o más hijos que sí cumpliesen las condiciones estipuladas. Para estas familias tampoco se atendía al nivel de ingresos exigido.

Hay que señalar que en cuanto al límite de edad existía una aparente contradicción entre la ley de 1943 y su reglamento en el sentido de que la primera establecía el límite de edad de los beneficiarios en los 23 años y el segundo en los 21. La aparente contradicción no era tal si se tiene en cuenta la fijación en 1943<sup>124</sup> de la mayoría de edad en los 21 años, corrigiendo así el art. 320 del Código civil así como las legislaciones forales.

### ***9.3.3. Los principales beneficios concedidos a las familias numerosas.***

#### **a) Fiscales.**

La ley de 1941<sup>125</sup> establecía la reducción o supresión<sup>126</sup> del denominado impuesto de utilidades por rentas de trabajo del cabeza de familia según la siguiente escala:

- 1.- hasta 6.000 pts. exención total.
- 2.- de 6.000 a 16.000 reducción del 50 % para las de 1ª y total para las de 2ª
- 3.- con más de 16.000 pts. esta exención beneficiaba únicamente a los cabezas de familia cuyas rentas del trabajo no excedieran de 2.000 pts. por hijo.

De igual manera la ley planteaba unas reducciones del impuesto de cédulas personales de la siguiente forma: para los de 1ª categoría reducción del 50 % de la tarifa que les fuera aplicable, y cédula de la última clase de la tarifa primera para los de 2ª. Dentro de la política de ayudas a las familias numerosas se insertaba la Ley de 19 de enero de 1943 de Jefatura del Estado<sup>127</sup>.

Esta disposición suponía la desaparición a partir del 1º de enero de 1943 del Impuesto de Cédulas Personales cobrado por las Diputaciones.

En cuanto al impuesto denominado del inquilinato la ley de familias numerosas de 1941 otorgaba una reducción del 50 % para las familias de la categoría 1ª y concedía la exención total a las de 2ª.

La Ley de 13 de diciembre de 1943<sup>128</sup> establecía los siguientes beneficios para las familias numerosas:

En el impuesto de utilidades:

- 1.- hasta 16.000 pts. anuales, exención total.
- 2.- desde 16.000 pts. anuales hasta 100.000, reducción del 50 % para las familias de 1ª categoría y exención total para las de 2ª.

En las cuotas del reparto municipal de utilidades y en las de los impuestos de las diputaciones que gravaban los productos del campo, cuando no excedían de 1.500 pts. anuales cada una, se reducían en un 20 % para las familias de 1ª categoría, y en un 40 % para las de 2ª las tasas fiscales.

El denominado impuesto del inquilinato concedía en este nuevo texto legal una reducción del 50 % para las familias de 1ª categoría y exención total para las de 2ª.

A su vez el nuevo marco legal establecía tres novedades. Por un lado creaba la categoría de honor para las familias de 12 o más hijos. Para éstas no se fijaba tope alguno en los ingresos. En segundo, lugar, los beneficios expuestos eran de aplicación no sólo al cabeza de familia sino también y en igual proporción a su cónyuge si sus ingresos por todos los conceptos no eran superiores a 100.000 pts. en las familias de 1ª categoría y de 150.000 en las de 2ª. En tercer lugar, y en cuanto al subsidio familiar, concedía un aumento del 10 % en las cantidades a percibir por los cabezas de familia numerosa de 1ª categoría y un incremento del 20 % en las de segunda.

En cuanto a los impuestos se refiere, el Congreso Provincial de Vizcaya<sup>129</sup> proponía la elevación de los límites de exención y reducción en el impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal de la siguiente forma:

- a) familias numerosas de 1ª categoría (de 4 a 7 hijos):

1.- Ingresos del cabeza de familia solamente:

- Exención hasta 90.000 pts. anuales de ingresos.
- De 90.000,01 a 130.000, el 75 % de reducción.
- De 130.000,01 a 160.000, el 50 % de reducción.
- De 160.000,01 a 180.000, el 25 % de reducción.

2.- Ingresos de ambos cónyuges:

- Exención hasta 150.000 pts. anuales de ingresos.
- De 150.000,01 a 200.000, el 75 % de reducción.
- De 200.000,01 a 250.000, el 50 % de reducción.
- De 250.000,01 a 300.000, el 25 % de reducción.

b) Familias numerosas de 2ª categoría (de 8 a 11 hijos):

1.- Ingresos del cabeza de familia solamente:

- Exención hasta 165.000 pts. anuales de ingresos.
- De 165.000,01 a 220.000, el 75 % de reducción.
- De 220.000,01 a 275.000, el 50 % de reducción.
- De 275.000,01 a 330.000, el 25 % de reducción.

2.- Ingresos de ambos cónyuges:

- Exención hasta 225.000 pts. anuales de ingresos.
- De 225.000,01 a 300.000, el 75 % de reducción.
- De 300.000,01 a 375.000, el 50 % de reducción.
- De 375.000,01 a 450.000, el 25 % de reducción.

El fundamento de tal petición radicaba en el siguiente argumento: el Estado, por la Ley de 26 de diciembre de 1957, establecía en el Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal la exención de las retribuciones que no excedieran de 18.000 pts. anuales. Aplicado un sistema similar a las familias numerosas y cada uno de sus hijos se establecía como límite para la exención en las familias de cuatro miembros la cifra resultante de multiplicar 18.000 pts. por cuatro (90.000 pts.). Con respecto a la reducción se tomaba como cifra tope el doble de la que marcaba el tope de exención, estableciéndose una reducción proporcionada entre uno y otro tope. El procedimiento era el mismo para las familias numerosas de segunda categoría "con lo que se evita el grave quebranto económico que para estas familias, más necesitadas de protección, supone en el sistema en vigor el paso directo de la exención al pago total, lo que ocurre frecuentemente con una modesta elevación de sueldos o ingresos, que queda

automáticamente disminuida y en muchos casos absorbida con exceso por la aplicación del impuesto<sup>130</sup>. Junto a estos motivos, el citado congreso expone como motivos para esta reforma fiscal en torno a las familias numerosas el incremento constante del coste de la vida y por tanto la necesidad imperiosa de detraer, de las sumas que iban a parar a la Hacienda Pública, las cantidades necesarias para atender las necesidades más ineludibles de las familias.

#### **b) Educativos.**

En cuanto a la enseñanza se refiere, la ley de 1941<sup>131</sup> establecía para las familias numerosas la extinción o reducción del pago de los derechos de matrícula<sup>132</sup>, iguales facilidades para la obtención de títulos o cualesquiera otros de igual naturaleza para cursar estudios en todos los centros de enseñanza oficial de cualquier grado, y en las escuelas profesionales o especiales. Las familias de primera categoría disfrutaban de una bonificación del 50 % en el pago de los mencionados derechos y las de segunda estaban exentas de los mismos. A su vez, la ley establecía que los hijos de familias numerosas, dejando a salvo los derechos reconocidos por la legislación vigente a favor de los Caballeros Mutilados, ex-combatientes y ex-cautivos, gozarían de preferencia para el ingreso en los establecimientos de enseñanza oficial o privada, para ocupar puestos en las cantinas, comedores y demás instituciones de asistencia escolar, así como para el disfrute de becas, pensiones o cualquiera otra ventaja existente o que pudiera crearse.

La ley del 43<sup>133</sup> establecía beneficios idénticos. Únicamente añadía que los que suspendieran dos convocatorias consecutivas en una misma asignatura perderían definitivamente los beneficios conseguidos. A su vez, establecía que, al sólo efecto de los beneficios de la enseñanza, el límite de la mayoría de edad, situado en los 23 años para los varones, se prolongaba durante el tiempo del servicio militar, y para las mujeres hasta los 25.

En cuanto al cumplimiento efectivo de los beneficios otorgados a la familia numerosa en el ámbito de la educación baste recordar la Orden de 29 de marzo de 1955<sup>134</sup> en la que se recuerda a los centros docentes la obligación de atenerse a la más estricta observancia de lo dispuesto en las mencionadas disposiciones legales en la concesión de los beneficios de la gratuidad en la matrícula a los titulares de Familia Numerosa. De lo aquí expuesto se puede inferir que el cumplimiento efectivo de las ventajas concedidas a las familias numerosas tampoco se ejecutaba al 100 % en el ámbito educativo.

#### **c) Transportes.**

En el ámbito de los transportes la ley del 41<sup>135</sup> y su Reglamento<sup>136</sup> establecían que las familias de primera categoría gozarían de una reducción del 20 % en los billetes ordinarios de ferrocarril

y de toda clase de empresas de transportes terrestres y marítimos. A las de segunda les correspondía un descuento del 40 %. El reglamento<sup>137</sup> de esta ley, en línea con la apología de la figura del cabeza de familia y sus funciones de mando, estipulaba que los familiares no acompañados por “el jefe de familia” debían de viajar con una autorización escrita de aquél, en la que constasen nominalmente los familiares que habían de viajar, así como el punto de partida y el de destino.

A pesar de ello los beneficios que se pretendía dar a las familias numerosas en los medios de transportes fueron una de las cuestiones más polémicas y que más enfrentaron a ministerios que tenían de forma directa o indirecta atribuciones sobre la cuestión. Así, por ejemplo, la Orden de 9 de marzo de 1942<sup>138</sup> de la Dirección General de Ferrocarriles en torno a las normas para billetes de precios reducido para familias numerosas establecía que las reducciones de la ley de 1942 se calcularían sobre la base de las tarifas generales, incrementadas con los dos 15 % del Decretos de 26 de diciembre de 1938 y de la Ley de 29 de mayo de 1934<sup>139</sup>, y con los aumentos concedidos a la Red Nacional de Ferrocarriles por los Decretos de 26 de septiembre y 4 de diciembre de 1941. Pero el incremento en el precio del billete no paraba aquí. A ésto se añadía un incremento del 25 % por el impuesto de transportes, el impuesto del timbre y el seguro obligatorio de viajeros para las familias de 1ª categoría, y un 10 % por el mismo motivo en el caso de las de 2ª, de acuerdo con el Decreto-ley de 5 de julio de 1920. A su vez existía otro incremento del 4 % establecido por Orden de 1 de septiembre de 1939<sup>140</sup>. De igual manera estos aumentos del 25 y el 10 % se extendían a todos los transportes mecánicos por carretera de carácter público.

Otro ejemplo de conflicto de competencias fue el que en 1955 resolvió Presidencia<sup>141</sup> entre Trabajo y Obras Públicas en torno a la Compañía de Tranvías Eléctricos de Vigo. Trabajo pretendía establecer los criterios sobre beneficios en los billetes de ferrocarril para las familias numerosas. Por el contrario, Presidencia estableció que a Trabajo le correspondía fijar los criterios en cuanto a lo que se entendía por familia numerosa, mientras que a Obras Públicas pertenecía lo relativo a tarifas ferroviarias, billetes, etc.

#### **d) Sanidad.**

La normativa de 1941 establecía que las familias numerosas tendrían preferencia para la asistencia sanitaria gratuita en los establecimientos de beneficencia pública y para su ingreso en los mismos establecimientos. A su vez en los balnearios, sanatorios y cualesquiera otro tipo de establecimientos de tipo privado gozarían de preferencia para su admisión, siéndoles aplicada una bonificación del 20 % en las tarifas correspondientes a los gastos ordinarios que ocasionara su permanencia, así como en los gastos de asistencia médica. Con respecto a esto último el

reglamento<sup>142</sup> de la mencionada ley establecía una limitación en el acceso a estos beneficios en el sentido de imponer que las plazas para el acceso de las familias numerosas fueran como mínimo un 20 % de las existentes en cada clase o categoría.

Las familias numerosas, según el art. 16 de la ley de 1943, además de los beneficios de la ley del 41, se podían acoger al Seguro Obligatorio de Enfermedad sin los requisitos exigidos mientras abonaran las cuotas establecidas. Según Borrajo Dacruz "el privilegio se mantuvo como una gran conquista social"<sup>143</sup>.

#### **e) Colonización.**

Lo estipulado en la ley del 41 para dar facilidades a la colonización a familias numerosas estaba al amparo de la Base 83 de Ley de Colonización de 26 de diciembre de 1939<sup>144</sup>. Iguales beneficios concedía la Ley de 13 de diciembre de 1943<sup>145</sup> en relación a la mencionada Ley de Colonización.

En esta línea de supuesto acceso de la familia a la propiedad de la tierra se situaba el Decreto de 9 de agosto de 1946<sup>146</sup>. La exaltación de la familia fecunda, "recio fundamento de una sociedad que conserva y multiplica los más altos valores", llevó al establecimiento de premios que tendían, según el preámbulo del decreto, a facilitar el acceso gratuito a la propiedad rústica a familias labradoras. Así pues, el Instituto Nacional de Colonización<sup>147</sup>, concedía diez premios o subvenciones anuales por un importe máximo de 50.000 pts. cada uno a los padres de familias numerosas campesinas que tuvieran quince o más hijos, de los cuales diez habían de vivir bajo su potestad. El premio se destinaba a la adquisición de una finca rústica que servía de base o complemento al patrimonio familiar. Entre las condiciones exigidas para la concesión de tal premio estaba el hecho de que el labrador no fuera propietario de ninguna parcela. El Decreto de 25 de febrero de 1949<sup>148</sup> vino a desradicalizar la última exigencia de la disposición anterior al establecer como condición para el establecimiento de los premios que el labrador no tuviera otras propiedades, o que las que tuviera en propiedad no fueran suficientes para cubrir sus necesidades familiares.

Destacan por su peculiaridad los criterios utilizados en el África Occidental española de cara a la concesión de tierras para la colonización, en el sentido de potenciar a aquellos elementos indígenas más asociados a los valores y la moral española, así como a aquellos con mayor número de hijos varones, con la consiguiente infravaloración de las mujeres indígenas. La propiedad de la tierra, como elemento fundamental de supervivencia, quedaba restringida a aquellos elementos indígenas que hicieran suya la parafernalia moral propia de los metropolitanos, y por tanto restringía los medios de supervivencia del resto de los indígenas no



dispuestos al abandono de su pautas culturales diferenciadoras. En este sentido, la Orden de 3 de diciembre de 1944<sup>149</sup> imponía que las concesiones destinadas a constituirse en patrimonio familiar se otorgaran según los siguientes criterios:

- a) Casados canónicamente mayores de dieciocho años que vivan con su esposa e hijos legítimos y sean "de intachable conducta".
- b) Cabeza de familia que tuviera mayor número de hijos y, siendo igual, el que tuviera más hijos varones.
- c) El que tuviera mejores informes de conducta, religiosidad, patriotismo y hábitos morales.

No se vio libre de los problemas de aplicación real la política de colocación de padres de familia numerosa. El Congreso de la Familia Española constataba las dificultades de colocación de estos padres de familia en función del elevado número de puntos que les correspondía por subsidio familiar, unido al problema del descenso en el valor del punto de los restantes compañeros de trabajo. Para tratar de superar esta situación el Congreso de Huelva<sup>150</sup> proponía que se impusiese la obligación legal de que las empresas reservaran un 25 % de la plantilla para los obreros padres de familias numerosas.

#### **f) Vivienda.**

Como marco de referencia general en cuanto a la política de vivienda para las familias numerosas no hay que perder de vista la Ley de 19 de abril de 1939<sup>151</sup> y su Reglamento de 8 de septiembre de 1939<sup>152</sup>, que si bien no hace referencia de forma directa a la cuestión de la familia numerosa, constituye una disposición de referencia para la comprensión de las facilidades que se pretendieron dar a este tipo de familias en torno al vidrioso tema de la vivienda. Estas disposiciones supusieron el nacimiento del Instituto Nacional de la Vivienda (I.N.V.) y la creación de las denominadas viviendas protegidas y de renta reducida. Se definía como tales a las que siendo de renta reducida estuvieran incluidas en los planes generales formalizados por el I.N.V. La denominación de renta reducida obedecía a la idea de que el alquiler que por ellas se pagara no debía ser superior al importe de seis días de jornal o a la quinta parte del sueldo mensual del usuario. Teóricamente dichas viviendas habían de sestar formadas por un mínimo de tres dormitorios con dos camas con el objetivo de dar albergue cómodo y digno a la prole de la familia que en ella habitase.

La Ley de Protección a las Familias Numerosas de 1941<sup>153</sup> planteaba que los cabezas de familia tendrían derecho preferente en los casos de concesión de casas baratas, económicas y viviendas protegidas. La Ley de 1943<sup>154</sup> hacía hincapié en esta misma preferencia para los cabezas de familias numerosas.

Otra disposición destacada en la política del Régimen, en la línea de protección a las familias numerosas, fue la de 26 de septiembre de 1941<sup>155</sup>. Esta ley pretendía establecer una conexión entre la cuestión demográfica y la de la vivienda procurando, en teoría, protección a las familias de más bajos recursos y con mayor número de hijos que eran las habían sabido “comprender y honrar la sagrada y fundamental institución de la familia” haciendo uso de los bienes de las que denomina “organizaciones marxistas”, las que “mayor empeño pusieron en derrumbar este básico fundamento social”. Hay que añadir que estos bienes de las denominadas “organizaciones marxistas” fueron adjudicados al Instituto Nacional de la Vivienda por Ley de 23 de septiembre de 1939<sup>156</sup>. Después del preámbulo, tan instructivo por otro lado, la ley establece anualmente diez premios consistentes en viviendas con las dependencias agrícolas o industriales anejas, según la profesión del cabeza de familia, que se adjudicarían a las diez familias que contaran con el mayor número de hijos vivos y que vivieran exclusivamente de su trabajo.

#### **g) Subsidio familiar.**

Las cantidades otorgadas a los cabezas de familias numerosas resultaban exiguas y así lo atestigua la conclusión del Congreso Provincial de Vizcaya en el que se pidió que el incremento sobre el Subsidio Familiar que la legislación otorgaba a los titulares de familia numerosa fuera elevado en un 100 % para los de 1ª categoría (hasta ese momento estaba en el 10 %) y en un 200 % para los de 2ª (situada en 1957 en un 20 %). Como se afirmaba en el mencionado congreso la exigüidad era más patente si se tenía en cuenta la insuficiencia del mencionado Subsidio Familiar, en el que no podía cobrarse más que por dos o más hijos menores de catorce años o mayores incapacitados; y si bien la escala de dicho Subsidio tenía cifras altas para un elevado número de hijos, “hay que tener en cuenta que era poco probable que se percibiera por más de seis o siete hijos al mismo tiempo, ya que el límite de edad iba disminuyendo el número de beneficiarios, aunque el de hijos fuera elevado”<sup>157</sup>.

Parece ser que pese al amparo normativo creado para la familia numerosa, en los años cincuenta y en concreto en los últimos años de ese decenio los procesos especulativos en torno a la vivienda y “el alza constante de los factores de la vivienda”<sup>158</sup>, unido a la “cortedad de los sueldos para tales fines ponía en dificultades la utopía de la creación de hogares dignos para todos las familias españolas. Ello sin contar con que las normas existentes se aplicaran rigidamente a favor de las familias más numerosas. Con respecto a esta cuestión el congreso de Tarragona pedía que en la adjudicación de viviendas protegidas se diera “preferencia y los beneficios máximos autorizados a los titulares de familias numerosas”<sup>159</sup>.

El Congreso provincial de la Familia Española en Vizcaya<sup>160</sup> pedía el aumento de 30.000 a 45.000 pts. concedidas a fondo perdido para las familias numerosas de primera categoría al amparo del decreto de 22 de noviembre de 1957, y hasta 60.000 pts. para las de segunda categoría. A su vez se pedía la elevación del crédito laboral de la vivienda que concedían las Mutualidades Laborales hasta 25.000 pts. cuando los solicitantes tuvieran la condición de familia numerosa.

Resulta evidente la diferencia de las formulaciones críticas en los Congresos provinciales de la Familia Española con respecto a las conclusiones finales del congreso central<sup>161</sup> celebrado en Madrid. Normalmente son mucho más duras e incisivas las críticas a la política con respecto a la familia en los Congresos provinciales, pese a lo cual en las conclusiones generales del Congreso central celebrado en Madrid, en lo que respecta a la cuestión de la vivienda, se puso de manifiesto la apropiación de beneficios concedidos a fondo perdido por la legislación para la construcción de viviendas de renta limitada o de tipo social no por los usuarios, favoreciendo a las cooperativas, a las constructoras benéficas o a las Mutualidades u Obra Sindical del Hogar, sino por empresas privadas. De igual manera, se puso de manifiesto la inexistencia en los planes generales de la vivienda de un tanto por ciento de viviendas destinadas a familias numerosas.

#### **h) Colocación.**

La Ley de Protección a las Familias Numerosas de 1941<sup>162</sup> establecía privilegios para la colocación de los cabezas de familias numerosas<sup>163</sup> en puestos de la Administración Pública y en cualquier clase de empleos por medio de las denominadas Oficinas de Colocación Obrera. En el reglamento<sup>164</sup> se especificaba que dentro de la Administración Pública la preferencia sería para los cabezas de familia en los cupos de provisión libre. Donde el procedimiento de ingreso fuera por oposición o concurso de méritos, en igualdad de condiciones, tenían también preferencia. De igual manera se establecían dichos criterios para las empresas privadas, pese a su dudoso cumplimiento. La ley del 43<sup>165</sup> y su reglamento<sup>166</sup> exceptuaban del cumplimiento de estas normas a la empresa privada en el caso de los denominados puestos de confianza, manteniendo el resto de los beneficios en iguales condiciones.

La supuesta facilidad para la colocación de los cabezas de familia numerosa quedaba en el ámbito de la pura utopía si, como ya se ha mencionado, se tiene en cuenta lo que posteriormente a la ley de 1941<sup>167</sup> supone, como elemento desincentivador, el alto número de puntos a recibir en concepto de plus familiar y las posibles presiones de los trabajadores para que no se produjera la contratación de empleados padres de familia numerosas.

#### ***9.3.4. Proyectos y realizaciones en torno a la ley de la familia numerosa.***

A modo introductorio y a su vez como primer resultado citaremos la conclusión final del Congreso Provincial de Tarragona en torno a la política del régimen franquista con la familia numerosa. En el citado congreso se afirmaba lo siguiente:

“Podemos resumir que los beneficios otorgados a las familias numerosas son tan limitados que no significan casi ninguna ayuda, y aún en algunos casos no tienen ninguna aplicación práctica”<sup>168</sup>.

En el mejor de los casos se puede afirmar que las ayudas familiares lograron corregir o atenuar “la degradación socioeconómica de las familias numerosas”<sup>169</sup> pero no compensar de forma efectiva las graves dificultades a las que se veían sometidas.

Es difícil encontrar una descalificación tan rotunda en relación a una cuestión como la familia, que, al menos formalmente, constituía junto al sindicato y el municipio uno de los pilares sobre los que se había de asentar el Nuevo Estado salido de la guerra civil. La dura afirmación del Congreso de Tarragona ponía de manifiesto no sólo la insuficiencia de la política realizada en torno a la familia, sino la irrelevancia de los aspectos legales desarrollados en función de la ausencia de aplicación de los mismos.

A estas afirmaciones del Congreso de Tarragona podemos añadir las de Valencia, más duras si cabe que las anteriores. Los párrafos que a continuación se insertan literalmente no tienen desperdicio en cuanto a la percepción de la política llevada a cabo hasta entonces por las autoridades del régimen:

“La vigente Ley de Familias Numerosas y su Reglamento conceden a esta clase de beneméritas familias una serie de beneficios ya actualmente escasos y con poca trascendencia para la vida familiar de ordinario.

Pero, aun en estos casos de ayuda, queda ésta, o bien impedida porque no se han dado las normas reglamentarias oportunas, por ejemplo, la aplicación del Seguro de Enfermedad, bien porque otras disposiciones reglamentarias o administrativas posteriores eliminan aquellos beneficios”<sup>170</sup>.

En cuanto a la incongruencia entre normas de rango diverso y la ley, el Congreso de Valencia exponía con claridad supina lo que implicaba una ley, en concreto la de la familia numerosa, como manifestación de intenciones, como proyecto utópico y voluntarioso, y por otro lado la

existencia de un reglamento que, desarrollado en el mismo año 1941, imposibilitaba de hecho la realización de lo que la ley imponía. Hasta tal punto el reglamento, sin entrar en otro tipo de disposiciones, impide la consecución de los objetivos de la ley, que el mencionado congreso pedía que fuese dictado con urgencia otro nuevo que permitiese “su aplicación en todos sus extremos”<sup>171</sup>, así como la eliminación de las limitaciones prácticas y administrativas que impedían su aplicación.

Menos rotundo en las descalificaciones de la Ley de Familias Numerosas resulta la opinión de Borrajo Dacruz, lo cual no imposibilita la percepción matizada pero no muy positiva de la aplicabilidad de la ley ya a finales de los años cincuenta. Sobre ella Borrajo afirma que “muchos de sus beneficios resultan hoy de imposible aplicación por tratarse de desgravaciones, bonificaciones o aumentos calculados sobre impuestos y subsidios que han desaparecido; otros han caído en desuso; alguno encontró resistencia en su aplicación, de modo que nunca llegó a tener efectividad. Por añadidura, en los cerca de veinticinco años que la Ley de Familias Numerosas lleva en vigor, se han modificado profundamente las condiciones sociales de la vida española. El acceso a la cultura, los avances de la sanidad, el nuevo concepto de las vacaciones familiares, la modificación del sistema fiscal, de acceso a la propiedad de la vivienda o su disfrute y de seguridad social, convierten a la ley de 13 de diciembre en un texto venerable, que ha cumplido una extraordinaria función protectora, pero que ha perdido la mayor parte de su valor en las circunstancias presentes de la España del desarrollo”.<sup>172</sup>

A finales de los años cincuenta, al igual que en el caso del subsidio familiar y el plus, la política destinada a las familias numerosas españolas recibió duras críticas que se plasmaron en el Congreso de la Familia Española en el sentido de suprimir la legislación vigente en torno al tema al que nos referimos. Así, en el Congreso de Barcelona<sup>173</sup> se pedía la supresión del tratamiento de familia numerosa como institución independiente, y de igual manera la derogación de la Ley de Familias Numerosas, promulgando otra ley, con rango fundamental, en la que se establecieran los beneficios y exenciones que procedieran. Lo que se estaba plasmando, con más o menos claridad, era la situación de penuria que los hogares de las familias numerosas sufrían en estos años cincuenta, y así lo expresaba el Congreso de Vizcaya con una crítica que englobaba al panorama económica general: “El signo alcista constante de la vida hace imposible cualquier propósito de ahorro, pues resulta una utopía. El futuro familiar de propios y allegados implica una tortura en hogares numerosos”<sup>174</sup>.

Como valoración de la política en torno a la familia numerosa se puede aludir a la necesidad plasmada en diversas publicaciones de la época en el sentido de aumentar la extensión y la cuantía de las ayudas para este tipo de familias<sup>175</sup>, lo cual venía a poner de manifiesto la

insuficiencia de la protección para con uno de los tres pilares del Nuevo Estado o de la Nueva Sociedad española que se pretendía crear tras la guerra civil.

Cuantitativamente lo destinado a las familias numerosas no parecía suficiente a algunos sectores del franquismo. En concreto, el Congreso de Cádiz<sup>176</sup> pedía que se dedicase el 30 % del plus familiar para incrementar el fondo destinado a las familias numerosas. Para otros congresos, como el de Madrid<sup>177</sup>, era absolutamente necesaria la supresión de la ayuda a las familias numerosas tal y como en aquel momento se entendía, estableciéndose exclusivamente en atención al número de miembros que componían la unidad familiar.

Otro aspecto que recibió fuertes críticas por la falta de concreción y por mantenerse en el terreno de la utopía fue la cuestión de las viviendas. En torno a este tema el Congreso de Valencia, uno de los más críticos en torno a la política familiar del régimen, afirmaba que debía “plantearse, sin retraso, una política de construcciones bastantes y adecuadas a las necesidades de la familia y particularmente de la familia numerosa, haciendo efectivo el derecho de prioridad de éstas a ocupar viviendas vacantes por adjudicar”<sup>178</sup>.

En junio de 1956 se celebró el Congreso Nacional de Padres de Familias Numerosas. La cuestión de la vivienda en relación a las familias numerosas fue una de las que más atención atrajo. El discurso de clausura del Subsecretario del ministerio de Trabajo fue indicativo de la polémica que hubo en torno a este aspecto de la política del Régimen y, en concreto, del ministerio de Trabajo. La clausura por parte del Subsecretario consistió, de modo muy similar a los discursos de Girón, en una larga exposición de disposiciones legales, de las cuales se desconocía si se aplicaban o no, si existían disposiciones que impedian su puesta en marcha, etc. Muy poderosas habrían de ser las críticas a la gestión del ministerio de Trabajo para que el Subsecretario hiciera en su clausura manifestaciones como las que a continuación se exponen:

“Y si esto es así, ¿en qué razones ha podido fundarse alguna afirmación que se ha hecho fuera de aquí relativa a que los organismos competentes en materia de viviendas piensan que se resuelva el problema mediante el empleo de literas como en los barcos?...Ahora bien, si algunas familias numerosas, por insuficiencia de su capacidad económica, no pudieran utilizar esas viviendas que los mencionados organismos oficiales velan por que se construyan y se vieran forzadas a ocupar otras de dimensiones más reducidas, se debería a circunstancias singulares puramente económicas y excepcionales, pero ajenas totalmente a los organismos antedichos”<sup>179</sup>.

En el terreno de la más ideal de las utopías el Congreso de Huelva<sup>180</sup> pedía el mantenimiento de un Estado con ausencia de presión impositiva sobre los cabezas de familia, lo que equivaldría a suprimir la obligación de tributar prácticamente a toda la nación.

Con respecto a la escala se puede afirmar que la progresividad de la misma en los subsidios generaba un marco de protección atractivo pues a partir del cuarto o quinto hijo los aumentos eran considerables. El problema radicaba en el tope de edad impuesto, situado en los catorce años. Éste, como afirma Borrajo, “venía a contrarrestar muy desfavorablemente dicho privilegio, pues era muy infrecuente la familia de 12 o, incluso de 10 hijos, en la que los mayores tuvieran menos de catorce años”<sup>181</sup>.

### ***9.3.5. Evolución cuantitativa de las prestaciones a las familias numerosas.***

La cuantificación de la política en torno a la familia numerosa permite contrastar, en primer lugar, las cifras que lucían las autoridades del ministerio de Trabajo y la evolución real de las mismas, algo más discreta. “Desde 1 de mayo del año en curso hasta el mes de septiembre pasado se han acogido a la protección de la Ley comentada 58.000 familias, calculándose que a fin del ejercicio en curso el número de las familias acogidas ascenderá a 100.000”<sup>182</sup>, afirmaba Girón de Velasco ante las Cortes Españolas en su discurso del 22 de noviembre de 1944. Las cifras en cuestión era ligeramente más modestas. En el ejercicio de 1944 el número de títulos expedidos o de familias beneficiadas apenas superó los 75.000. Sirva esto como ejemplo de la diferencia entre los discursos líricos de las autoridades franquistas y la realidad social.

El hecho, prácticamente anecdótico, al que nos hemos referido muestra la necesidad de tomar con cierta precaución los datos que las autoridades del Régimen daban en torno a sus actuaciones al frente del Gobierno, dado que, impulsados por el ardor de los sentimientos alicatados de una adhesión incondicional a la persona y la obra de Franco, movidos por un ansia sobredimensionadora de sus proyectos y de los objetivos conseguidos, tendían a dar un peso mayor del real a las metas conseguidas, no por ello inexistentes.

En cuanto al número de familias beneficiadas (Gráfico nº 16), las cifras modestas de los años 1942 y 1943 dieron paso a un incremento continuado durante los tres años siguientes, hasta situarse en 1946 en una cifra por encima de las ciento cuarenta mil familias beneficiadas. Este ascenso alcanzó su punto culminante en 1948 (147.063) para comenzar a decrecer durante los dos años siguientes. En 1950 se superaron escasamente las 100.000 para, posteriormente, comenzar a remontar de forma progresiva hasta llegar a las 177.927 de 1957.

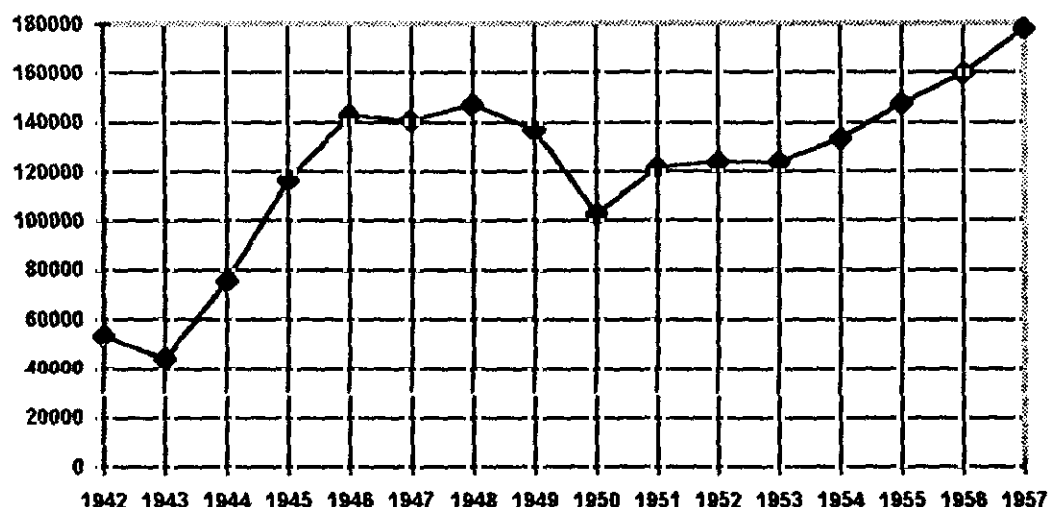
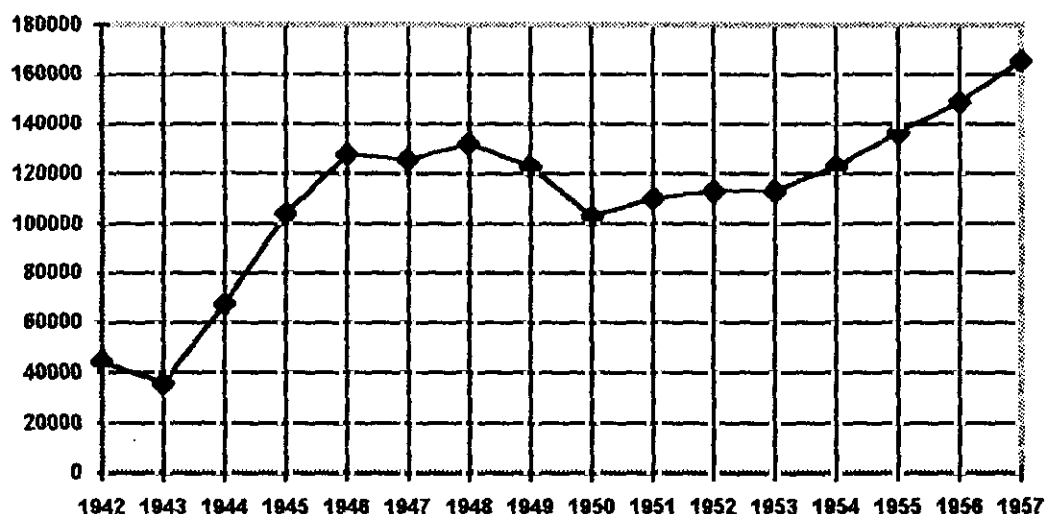


Gráfico n° 16. Evolución del número de títulos de familias numerosas.

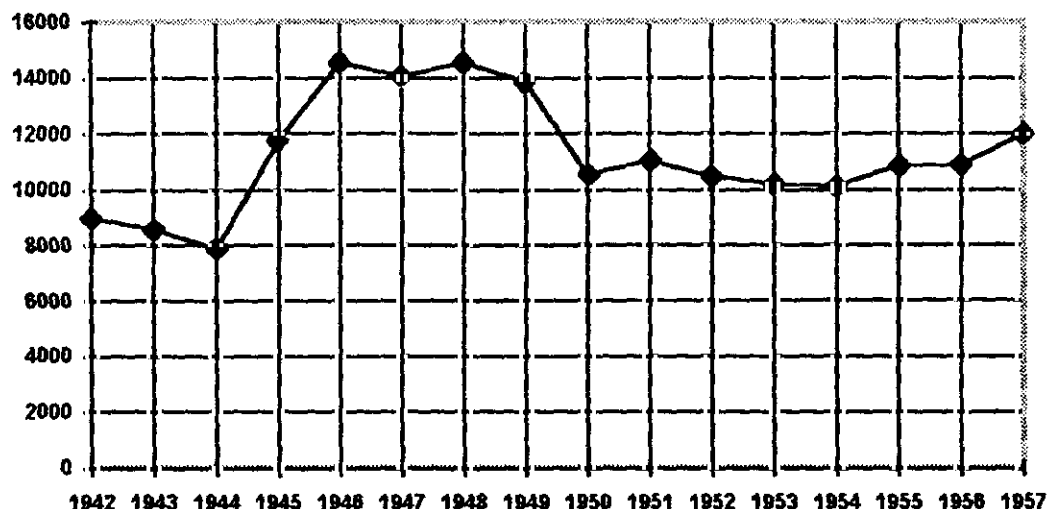
Esta línea evolutiva es muy semejante, por no decir idéntica, en los grupos de familias a considerar: de primera categoría, de segunda y de honor. Lógicamente las cifras son más elevadas en lo que se refiere a las familias de primera categoría, de cinco a siete hijos en la ley de 1941, y de cuatro a siete en la de 1943. Dentro del período considerado, para las de primera categoría (Gráfico n° 17), las cifras más bajas se encuentran en 1943, con unas 36.000 familias beneficiadas. Al igual que la tendencia del total de títulos expedidos se observa un descenso del año 1942 al 1943, y de forma idéntica las familias de primera categoría experimentan un aumento creciente en su número hasta llegar al año 1946. El mencionado año y los tres siguientes, formaron un cuatrienio abundante en cuanto el número de familias que consideramos, situándose la cifra media por encima de las ciento veinticinco mil con un máximo en 1948 (132.125). El descenso del año 50, situándose en cifras próximas al año 1945, se vio seguido por un aumento continuado a lo largo de la década de los cincuenta hasta situarse en 1957 en 165.571 familias beneficiarias.





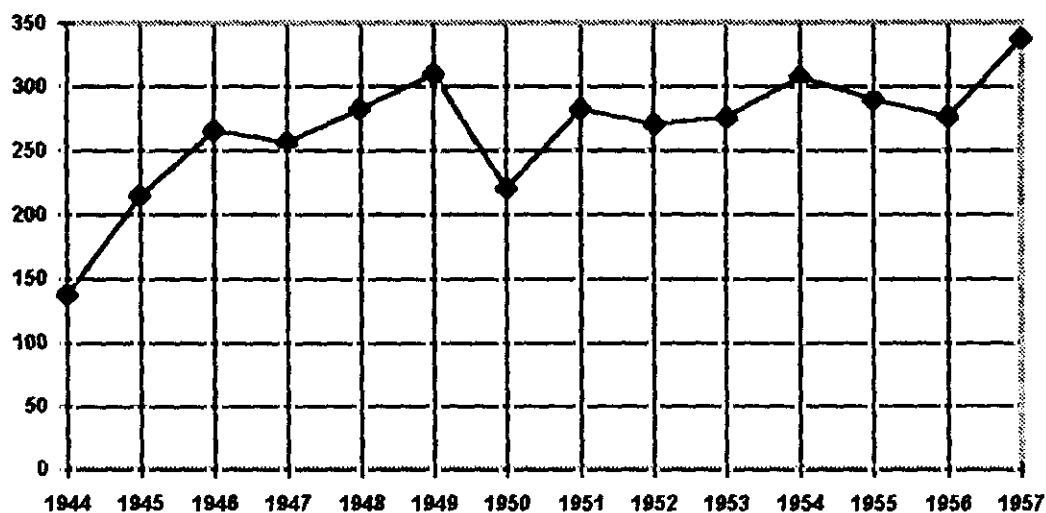
*Gráfico n° 17. Evolución de los títulos de familia numerosa de primera categoría.*

En el caso de las familias de segunda categoría (Gráfico n° 18), las cantidades son menos abultadas, en función de la necesidad de una prole más extensa para conseguir los ya conocidos beneficios. De igual manera la tendencia es más o menos idéntica a la de las familias de primera, si bien la evolución de la categoría a la que nos referimos presenta unos rasgos menos continuos y más quebrados. El descenso en el número de familias beneficiarias se acentúa más que en el caso de las familias de primera categoría. Estas, como ya hemos mencionado, comienzan su despegue en 1944, mientras que en el caso de las de segunda su descenso se acentúa en el mencionado año situándose en torno a las ocho mil unidades familiares, para posteriormente comenzar a aumentar con unos máximos en los años que van de 1946 a 1949. En este caso estas cifras no serán superadas en el resto del período considerado como ocurre con las familias de primera categoría. En este cuatrienio las cifras se situaron en torno a las 14.000 familias para posteriormente descender hasta situarse escasamente por encima de las 10.000 familias. Al contrario que la tendencia general de los títulos expedidos y que la tendencia en las familias de primera categoría, las unidades familiares de segunda se mantienen hasta 1957 en cifras semejantes a las del año cincuenta. Incluso en 1952 y 1953 (10.484 y 10.223 respectivamente) las cifras son más bajas que en el año 1950. El leve repunte que se plasma de 1955 a 1957 no invalida la tendencia general y muestra que la potenciación de núcleos familiares amplios solamente cubrió, en parte, sus objetivos en lo que se refiere a las familias de primera categoría y muy escasamente en lo que se refiere a las de segunda.



*Gráfico n° 18. Evolución de los títulos de familia numerosa de segunda categoría.*

En cuanto a las familias de la denominada categoría de honor (Gráfico n° 19) hay que hacer referencia a su escaso número. En el periodo considerado, de 1944 a 1957, no sobrepasaron los tres centenares, salvo en 1957. Su número permaneció estable en la década que va de 1946 a 1956. En este lapso de tiempo su número se estabilizó en torno a las doscientas cincuenta y trescientas familias, aproximadamente. Sin embargo, aunque su tendencia no coincida con la de las familias de primera categoría ni con las de segunda, el bache pronunciado del año cincuenta se reproduce de forma mimética hundiéndose las cifras, como en los casos ya mencionados, por debajo de las doscientas cincuenta.



*Gráfico n° 19. Evolución de los títulos de familia numerosa de la categoría de honor*

En cuanto a los niveles de renta de las familias a las que se concedían los beneficios de la ley de familias numerosas se observa una evolución a la que merece la pena hacer referencia. Hay que

tener previamente en cuenta que los dos gráficos (n° 20 y 21) que hacen referencia a esta cuestión reflejan bloques de niveles de rentas distintos. Pese a ello se puede realizar alguna interpretación en función de la tendencia de ambos y por tanto también sacar conclusiones.

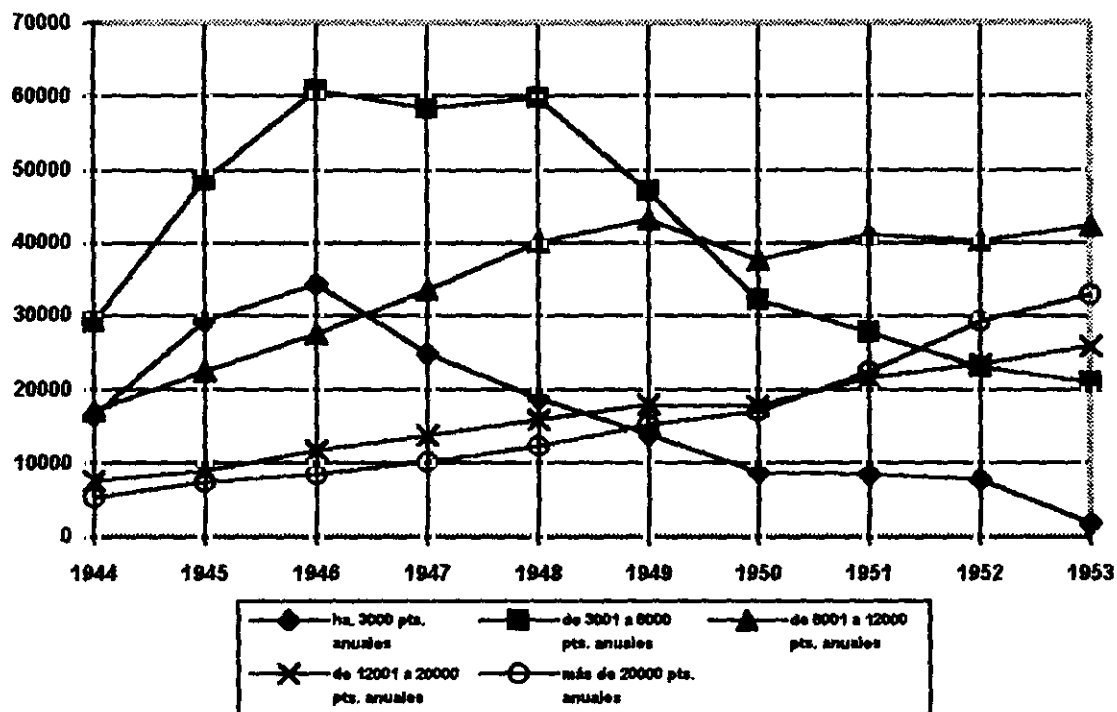


Gráfico n° 20. Clasificación, por ingresos familiares, de los titulares de familias numerosas de 1944 a 1953.

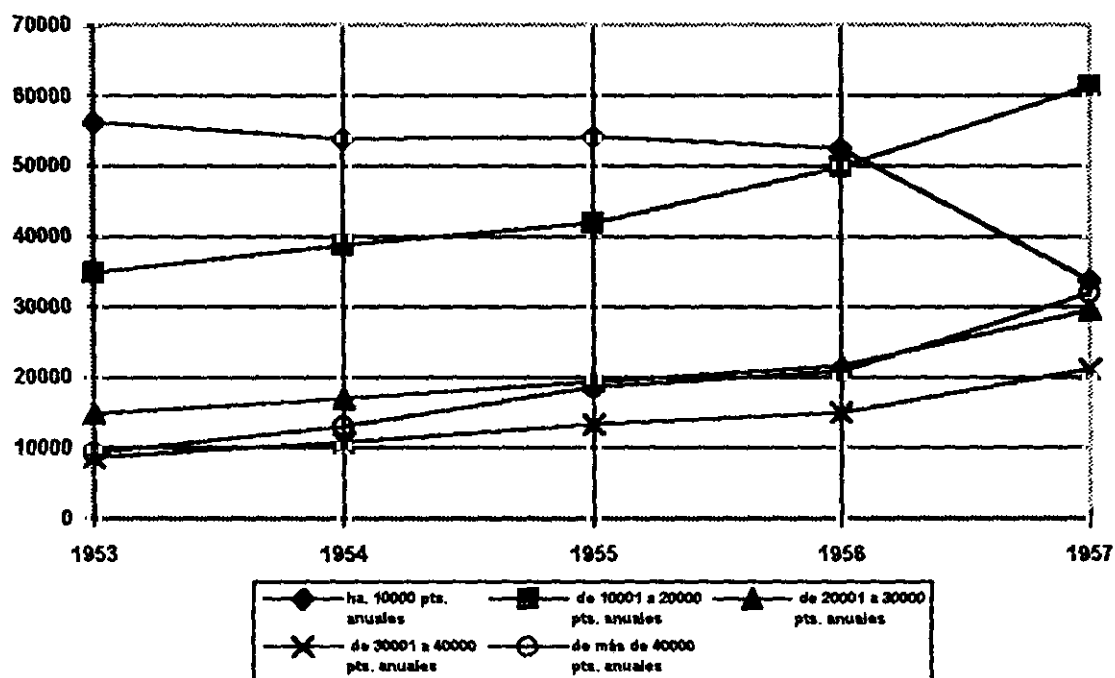


Gráfico n° 21. Clasificación, por ingresos familiares, de los titulares de familia números de 1953 a 1957.

Independientemente del dominio de uno u otro nivel de renta, surge una tendencia evidente. Los niveles de rentas más elevados mantenían una línea ascendente y progresivamente eran más las familias de más de 20.000 pts. de renta anual las que disfrutaban de los beneficios de la ley de familias numerosas, mientras que por el contrario los niveles de renta inferiores al indicado, independientemente de que estuvieran o no a la cabeza, manifestaban una tendencia a la baja. Así, observando el primero de los gráficos mencionados (nº 20), las rentas de hasta 3.000 pts. anuales pasan de 16.566 en 1944 a 34.373 en 1946, descendiendo de forma acentuadísima e imparable hasta 1953 en que superaban escasamente las 1.700. En esta misma línea, las rentas de 3.001 pts. a 6.000 se incrementan desde 1944 hasta llegar al trienio 1946-1948 en que rondan las 60.000 familias. De este año hasta 1953 se produce un descenso muy agudo que hace de este grupo de familias el segundo menos abundante dentro de las familias numerosas. Por el contrario, los niveles más elevados de renta manifiestan, dentro de este primer gráfico, una tendencia al alza imparable que, por ejemplo, sitúa a las rentas más elevadas (más de 20.000 pts. anuales) en el segundo lugar de los grupos de familias más beneficiadas por la ley. Sólo las rentas intermedias manifiestan una tendencia más homogénea dentro de la propensión al aumento. Las rentas de 6.001 pts. anuales a 12.000 en el período 1944-1953 se incrementan de 1944 a 1948 para situarse hasta 1953 en torno a las 40.000 familias sin que se produzcan grandes aumentos o decrementos.

En el segundo de los gráficos, el que va del período de 1953 a 1957 la tendencia ya indicada se prolonga. Lo que en el primer gráfico son las rentas de más de 20.000 pts. en el segundo se desglosan en tres categorías (de 20.001 a 30.000, de 30.001 a 40.000 y de más de 40.000). Pese a ello se observa la misma tendencia, dado que estos tres grupos de renta incrementan progresivamente su peso sumando entre los tres en 1953 32.815 unidades familiares que en 1957 se transforman en 82.111. De todas formas, lo que más llama la atención es que dentro de estos tres grupos, y ratificando la idea expresada al principio de la exposición, la tendencia al incremento es siempre mayor, superados los niveles medios de renta, entre los niveles más altos de las mismas. De esta forma dentro de los tres grupos de renta más elevada del segundo gráfico el que finalmente acaba obteniendo un mayor número de títulos de familia numerosa es el grupo de más de 40.000 pts. de renta anual, casi superando al segundo grupo por importancia numérica en 1957, el de hasta 10.000. Tal y como se ha señalado para el gráfico nº 20, en el nº 22 las rentas más bajas, en este caso de hasta 10.000 pts., decrecen progresivamente hasta situarse en 1957 en algo más de 33.000. Por el contrario, eran los tramos de familias de rentas medias las que se elevaban ocupando el primer lugar. Las rentas de 10.001 pts. a 20.000 son las que, además de manifestar una tendencia al alza, se destacan en el gráfico como las más abundantes de entre todos los niveles de renta por encima de las 60.000.

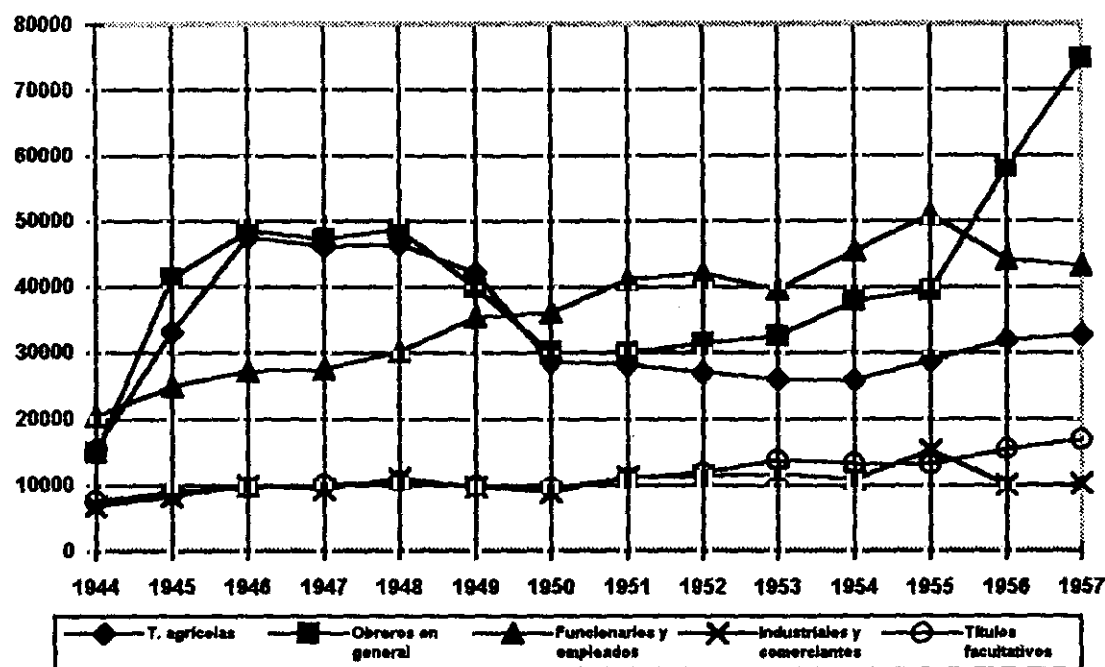


Gráfico n° 22. Clasificación, por profesiones, de los cabezas de familia numerosa.

En cuanto a la profesión de los cabezas de familia de este tipo de unidades familiares hay que hacer referencia, en primer lugar, al hecho de que las estadísticas no están elaboradas con criterios uniformes. Dentro de la categoría de trabajadores agrícolas, los datos de 1944 a 1946 diferencian entre campesinos propietarios y no propietarios.

Profesiones	Año 1944	Año 1945	Año 1946
Campesinos: Propietarios	12.951	27.946	37.285
Campesinos: Obreros	2.610	5.162	10.257
Total	15.561	33.108	47.542

\*Cuadro n° 12. Clasificación de los trabajadores agrícolas en obreros y propietarios.

Los datos muestran que el número de familias numerosas era mayor entre los trabajadores del campo propietarios que entre aquellos que vivían de un jornal. Por otro lado, dentro del grupo de los obreros en general, hay que saber que se incluye también a los trabajadores del mar, si bien hay que decir que para los años en que los datos se conservan los mencionados trabajadores representan un volumen exiguo (449 en 1944, 863 en 1945 y 1173 en 1946).

El Gráfico n° 22 muestra la existencia de un menor número de industriales, comerciales y títulos facultativos. Su tendencia permanece prácticamente inamovible desde 1944 a 1957, situándose en torno a los 10.000, en el caso de los industriales y comerciantes, y en torno a los 16.000 en el caso de los títulos facultativos. Si unimos el grupo de los trabajadores agrícolas con los

obreros en general, obtenemos para el final del periodo considerado un total de 107.525 trabajadores, lo cual supone que en el año 1957 más del 60 % de los titulares de familias numerosas pertenecían a estos grupos profesionales. Por tanto, es posible afirmar, retomando el gráfico n° 21, que son en esta época las clases sociales de niveles de rentas más bajas las que se caracterizan por tener un mayor número de hijos o hijas. El hecho de que fueran los trabajadores del campo los que más acusadamente descendieran, obedece, más que probablemente, al abandono progresivo del campo de igual manera que el incremento espectacular que manifiestan los obreros en general del año 55 al 57 está ligado al proceso de industrialización que en los mencionados años cincuenta se desarrolla en España. Por otro lado, se pone de manifiesto que el fenómeno de las familias numerosas cambió de forma acentuada al entrar en la década de los cincuenta. Si observamos el gráfico n° 23 se constata una tendencia al dominio del campo sobre la ciudad en el tema que consideramos. En el gráfico n° 22 los trabajadores agrícolas son más o menos los mismos que los obreros en general desde 1944 a 1949. Sin embargo, a partir de este año el fenómeno experimentó una inflexión drástica. Son ahora los funcionarios, empleados y obreros en general los más numerosos. En este aspecto la ciudad empezó a dominar sobre el campo y así en 1955 ambos sectores profesionales sumaban más de 90.000 cabezas de familias numerosas, lo cual suponía más de un 61 % del total de los títulos. Por el contrario, los trabajadores agrícolas, que en el año 1947 eran un 32 %, en 1954 superaban escasamente el 19% de los títulos obtenidos.

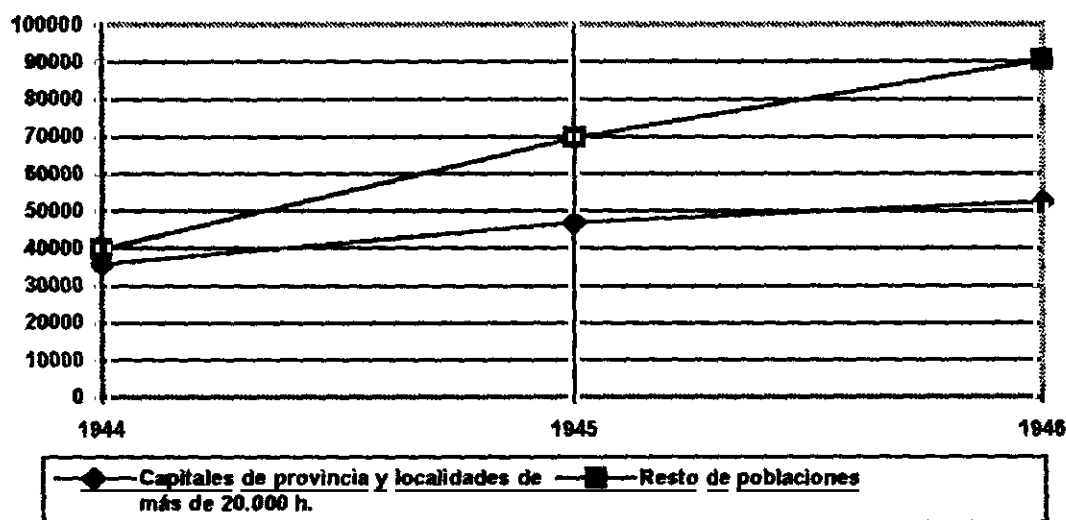


Gráfico n° 23. Clasificación de las familias numerosas por lugar de residencia

Comparando los gráficos n° 20 y 21 con el 22 se observa que el dominio creciente en los años cincuenta de las que podríamos denominar clases medias, formadas por obreros, funcionarios y empleados, venía a coincidir con la tendencia al alza de los grupos de rentas intermedias. En concreto, como ya se ha dicho, en 1957 el grupo formado por las rentas de 10.001 pts. a 20.000 suponía casi un 35 % del total y el grupo de 10.001 a 30.000 superaba el 51 %; mientras que

las rentas más bajas, hasta 10.000 pts., constituían el 18 %. Todo ello viene a poner de manifiesto que la tendencia en los años cincuenta se inclinaba a hacer del fenómeno de las familias numerosas una manifestación de clases y rentas medias y propias de cabezas de familias cuya profesión se desarrollaba en la ciudad y dentro de un sector social también medio, como el de los obreros, funcionarios y empleados.

La tendencia inicial muestra, sin embargo, que la posición de partida de los grupos profesionales difería notablemente del posicionamiento final de aquéllos en la década de los cincuenta. En los años cuarenta eran los trabajadores agrícolas y obreros en general los que predominaban numéricamente hasta el año 1949. En el año 1948 ambos grupos sumaban el 68 % de las familias consideradas. Incluso el grupo de los trabajadores del campo representaba por sí sólo un alto porcentaje, algo más del 31 %. En idéntica sintonía el gráfico nº 23 muestra como en el trienio 1944-1946 predominaban los núcleos familiares numerosos en las localidades de menos de 20.000 habitantes. Por el contrario, durante el quinquenio 1950-1955 los funcionarios y empleados manifestaron un incremento que les situó en los puestos de cabeza de las familias numerosas. En el año 1955 constituían el 34 % de los cabezas de familia descendiendo a partir de entonces para ceder el primer lugar a los obreros en general, como ya se ha mencionado.

En cuanto a la geografía de las familias numerosas hemos escogido a las diez provincias más numerosas para estudiar el supuesto predominio de unas u otras entre 1942 y 1957. La nota dominante es la situación de Madrid en el primer puesto de las provincias que más familias numerosas tenían. Salamanca era en la década de los cuarenta una de las tres más importantes; sin embargo comenzó a declinar su peso a lo largo de los cincuenta hasta situarse en 1957 en el 9º puesto de las provincias. Solamente Sevilla, junto a la ya mencionada Madrid, mantiene una línea de continuidad a lo largo del periodo considerado alternando la segunda y tercera posición, según el cuadro nº 13. Otro elemento destacado es la ausencia de Barcelona entre las diez provincias más importantes hasta 1949, no entrando en este grupo hasta el mencionado año continuando con un ascenso vertiginoso hasta llegar en 1955 a la segunda plaza detrás de Madrid. Más temprano pero menos pronunciado fue el ascenso de Valencia. En 1949 aparece en la 9ª posición llegando al cuatrienio 1954-1957 a la cuarta. El caso de la Coruña muestra un incremento en la década de los cuarenta y hasta 1952, para a continuación experimentar un descenso progresivo que la situó en el cuatrienio 1954-1957 en el 5º puesto. La tendencia que muestra el cuadro nº 13 indica que para el quinquenio 1952-1957 las tendencias estaban claramente definidas. En este periodo, a pesar de las variaciones en las posiciones, se situaban entre las cinco primeras provincias Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y La Coruña. Es decir, en los años cincuenta el predominio de las familias numerosas se había asentado en provincias con un claro dinamismo industrial, económico y social. Por el contrario, en los años cuarenta se

observa la presencia de provincias a la cabeza del cuadro nº 13 con un menor carácter industrial o económicamente menos dinámicas, más ruralizadas y con causas bien distintas para aparecer en las primeras posiciones de las provincias con más familias numerosas. Así, de 1942 a 1949 podemos encontrar entre los 5 primeros puestos a León, Cuenca, Burgos, Córdoba, etc.

	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª
1942	Salam	Madri	León	Ovied	Palen	Cácer	Navar	Guipú	Burgo	Vallad
1943	Madri	Salam	Navar	Burgo	León	Ovied	Córdo	La Cor	Sevill	Vallad
1944	Madri	Salam	Sevilla	Badaj	Jaén	Córdo	Grana	León	Guipú	Vizcay
1945	Madri	Sevilla	Salam	León	Córdo	Guipú	Cácer	La Cor	Badaj	Jaén
1946	Madri	Salam	Sevilla	León	La Cor	Córdo	Burgo	Guipú	Valenc	Vallad
1947	Málag	Tarrag	Santan	Cuenc	Lérida	Vizcay	Huelva	Zarag	Zamor	Burgo
1948	Madri	Sevilla	Salam	La Cor	León	Valenc	Vallad	Vizcay	Guipú	Badaj
1949	Madri	Salam	Sevilla	La Cor	León	Valenc	Vallad	Vizcay	Badaj	Barcel
1950	Madri	Sevilla	Salam	La Cor	Valenc	Vizcay	Barcel	Guipú	Burgo	Vallad
1951	Madri	Sevilla	Salam	La Cor	Valen	Barcel	Cádiz	Vizcay	Córdo	Burgo
1952	Madri	Sevilla	La Cor	Barcel	Salam	Valenc	Cádiz	Vizcay	Vallad	Guipú
1953	Madri	Sevilla	Barcel	La Cor	Valenc	Salam	Cádiz	Vallad	Vizcay	Badaj
1954	Madri	Sevilla	Barcel	Valenc	La Cor	Salam	Cádiz	Badaj	Vizcay	Guipú
1955	Madri	Barcel	Sevilla	Valenc	La Cor	Salam	Cádiz	Vizcay	Badaj	Vallad
1956	Madri	Sevilla	Barcel	Valenc	La Cor	Badaj	Cádiz	Salam	Córdo	Vizcay
1957	Madri	Barcel	Sevilla	Valenc	La Cor	Cádiz	Vizcay	Badaj	Salam	Córdo

\*Cuadro nº 13. Las diez provincias con más títulos de familias numerosas.

## Notas

<sup>1</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 122.

<sup>2</sup> Borrajo Dacruz, op. cit., pág. 103.

<sup>3</sup> Alonso Olea, op. cit., pág. 205.

<sup>4</sup> Ídem, pág. 206.

<sup>5</sup> Estudios y conclusiones, fascículo 26, op. cit., pág. 65.

<sup>6</sup> Girón de Velasco, Escritos..., Tomo IV, op. cit., pág. 229.

<sup>7</sup> Rebollo González, Subsídios..., op. cit., pág. 31.

<sup>8</sup> Alonso Olea, Manuel, op. cit., pág. 206.

<sup>9</sup> Toharia Cátedra, J.: El plus de cargas de familiares. Revista de Trabajo, 1942, nº 48, pág. 813.

<sup>10</sup> Ídem, pág. 813.

<sup>11</sup> Girón de Velasco, La elevación de los pluses..., pág. 50.

<sup>12</sup> Fernández Heras, op. cit., pág. 10.

<sup>13</sup> Mallart, op. cit., pág. 509.

<sup>14</sup> Citado por Cristóbal Salas Montilla en Distribución de los puntos en el plus familiar. Barcelona, ed. Rafael Salvá, 1959, pág. 5.

<sup>15</sup> Alonso Olea, op. cit., pág. 208.

<sup>16</sup> II Jornadas técnicas sociales, op. cit., pág. 16.

<sup>17</sup> La protección de la familia..., op. cit., pág. 39.



- <sup>18</sup> Ídem, pág. 42.
- <sup>19</sup> Ídem, pág. 42.
- <sup>20</sup> Síntesis de ponencias provinciales... op. cit., pág. 33.
- <sup>21</sup> La protección de la familia..., op. cit., pág. 37-38.
- <sup>22</sup> Pérez Botija, Los salarios..., n° 37, op. cit., pág. 1245.
- <sup>23</sup> Síntesis de ponencias..., op. cit., pág. 25.
- <sup>24</sup> Fagoaga G. Solana, Miguel: El plus familiar y el impuesto de utilidades. Madrid, Cuadernos de Política Social, Instituto de Estudios Políticos, 1952, n° 15, pág. 30.
- <sup>25</sup> Estudios y conclusiones, fascículo 22, op. cit., pág. 24.
- <sup>26</sup> Alonso García, op. cit., pág. 36.
- <sup>27</sup> Conclusiones del I Congreso de la Familia Española, op. cit., pág. 17.
- <sup>28</sup> II Jornadas..., op. cit., pág. 23-24.
- <sup>29</sup> Borrajo Dacruz, op. cit., pág. 108.
- <sup>30</sup> Síntesis de ponencias..., op. cit., pág. 34.
- <sup>31</sup> Nueva síntesis de ponencias provinciales, op. cit., pág. 43.
- <sup>32</sup> Ídem, pág. 33.
- <sup>33</sup> Ídem, pág. 36.
- <sup>34</sup> Ídem, pág. 39.
- <sup>35</sup> Ídem, pág. 39.
- <sup>36</sup> Nueva síntesis..., op. cit., pág. 39.
- <sup>37</sup> Síntesis de ponencias provinciales..., op. cit., pág. 34.
- <sup>38</sup> Ídem, pág. 40.
- <sup>39</sup> Rebollo González, op. cit., pág. 85.
- <sup>40</sup> Estudios y conclusiones, fascículo n° 26, op. cit., pág. 66.
- <sup>41</sup> Rodríguez, Defensa económico-social..., op. cit., pág. 29.
- <sup>42</sup> Estudios y conclusiones. Congreso Provincial de Barcelona. Gabinete Técnico, fascículo n° 7, Madrid, ed. C.F.E., pág. 28-29.
- <sup>43</sup> Borrajo Dacruz, Revisión..., op. cit., pág. 107.
- <sup>44</sup> Ídem, pág. 31.
- <sup>45</sup> Síntesis de ponencias...y su protección por el Estado, op. cit., pág. 30.
- <sup>46</sup> Salas Montilla, Distribución de los puntos ..., op. cit., pág. 5.
- <sup>47</sup> Aranzadi, op. cit., 1751/1942.
- <sup>48</sup> Fernández Heras, op. cit., pág. 10-13.
- <sup>49</sup> Aranzadi, op. cit., 875/1945.
- <sup>50</sup> Aranzadi, op. cit., 521/1946.
- <sup>51</sup> Aranzadi, op. cit., 1521/1950.
- <sup>52</sup> Aranzadi, op. cit., 13897/1952.
- <sup>53</sup> Aranzadi, op. cit., 521/1946.
- <sup>54</sup> Fernández Heras, Normas únicas..., op. cit., pág. 12-13.
- <sup>55</sup> Fagoaga, Miguel, op. cit., pág. 32.
- <sup>56</sup> Ídem, pág. 33.
- <sup>57</sup> Fernández Heras, op. cit., pág. 87.
- <sup>58</sup> Salas Montilla, op. cit., pág. 88.
- <sup>59</sup> Fagoaga, Miguel, op. cit., pág. 31.
- <sup>60</sup> Aranzadi, op. cit., 521/1946.
- <sup>61</sup> Ídem, pág. 39-48.
- <sup>62</sup> Toharia Cátedra, op. cit., pág. 814.
- <sup>63</sup> Ídem, pág. 814.
- <sup>64</sup> Salas Montilla, op. cit., pág. 67.
- <sup>65</sup> Ídem, pág. 75.
- <sup>66</sup> Ídem, pág. 76.
- <sup>67</sup> Toharia Cátedra, op. cit., pág. 814.
- <sup>68</sup> Borrajo Dacruz, Revisión y actualización..., op. cit., pág. 77.
- <sup>69</sup> Toharia Cátedra, pág. 814.
- <sup>70</sup> Ídem, pág. 814.
- <sup>71</sup> Salas Montilla, op. cit., pág. 54.
- <sup>72</sup> Ídem, pág. 57.

- 
- <sup>73</sup> Aranzadi, op. cit., 521/1946.
- <sup>74</sup> Fernández Heras, op. cit., pág. 41-45.
- <sup>75</sup> Aranzadi, op. cit., 521/1946.
- <sup>76</sup> Toharia Cátedra, El plus..., op. cit. pág. 815.
- <sup>77</sup> La protección de la familia por el Estado, op. cit., pág. 10.
- <sup>78</sup> Informe sobre una política coordinada..., op. cit., pág. 39.
- <sup>79</sup> Alonso García, Política familiar..., pág. 38.
- <sup>80</sup> II Jornadas técnicas sociales, op. cit., pág. 28.
- <sup>81</sup> Ídem, pág. 28.
- <sup>82</sup> Ídem, pág. 29.
- <sup>83</sup> Rodríguez, Defensa económico-social..., op. cit., pág. 29.
- <sup>84</sup> Informe sobre una política coordinada..., op. cit., pág. 22.
- <sup>85</sup> Alonso García, op. cit., pág. 35.
- <sup>86</sup> Proyecto de Informe sobre criterios en la política de salarios. Consejo de Economía Nacional. Madrid, marzo de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 2.334-1, pág. 7-10.
- <sup>87</sup> Estudios y conclusiones, op. cit., pág. 32.
- <sup>88</sup> II Jornadas..., op. cit., pág. 30-32.
- <sup>89</sup> Preston, op. cit., pág. 756.
- <sup>90</sup> Jordana de Pozas, op. cit., pág. 4.
- <sup>91</sup> Congreso Nacional de Padres de Familias Numerosas. Revista de Trabajo, Madrid, 1956, pág. 558.
- <sup>92</sup> Rebollo González, op. cit., pág. 48.
- <sup>93</sup> Ídem, pág. 48.
- <sup>94</sup> Borrajo Dacruz, Revisión y actualización..., op. cit.
- <sup>95</sup> Jordana de Pozas, Política..., op. cit., pág. 35.
- <sup>96</sup> Girón de Velasco, Escrito.... Tomo II, op. cit., pág. 87.
- <sup>97</sup> Ídem, pág. 87.
- <sup>98</sup> Ídem, pág. 87.
- <sup>99</sup> Ídem, pág. 89.
- <sup>100</sup> Girón de Velasco, Escritos..., Tomo IV, op. cit., pág. 249.
- <sup>101</sup> Estudios y conclusiones, fascículo nº 26, op. cit., pág. 70.
- <sup>102</sup> Ídem, pág. 70.
- <sup>103</sup> Ídem, pág. 70.
- <sup>104</sup> Ídem, pág. 70.
- <sup>105</sup> Ídem, pág. 70-71.
- <sup>106</sup> Aznar Embid, Del salario..., op. cit., pág. 34.
- <sup>107</sup> Ídem, pág. 35.
- <sup>108</sup> Ídem, pág. 56.
- <sup>109</sup> Ídem, pág. 56.
- <sup>110</sup> Ídem, pág. 57.
- <sup>111</sup> Tarancón, La familia..., op. cit., pág. 28.
- <sup>112</sup> Estudios y conclusiones, fascículo nº 22, op. cit., pág. 25.
- <sup>113</sup> Ídem, pág. 30.
- <sup>114</sup> Aranzadi, op. cit., 1557/1941.
- <sup>115</sup> Aranzadi, op. cit., 1628/1943.
- <sup>116</sup> Aranzadi, op. cit., 1557/1941.
- <sup>117</sup> Ídem.
- <sup>118</sup> Aranzadi, op. cit., 1878/1941.
- <sup>119</sup> Aranzadi, op. cit., 1966/1941.
- <sup>120</sup> Aranzadi, op. cit., 1628/1943.
- <sup>121</sup> Aranzadi, op. cit., 548/1944.
- <sup>122</sup> Aranzadi, op. cit., 1628/1943.
- <sup>123</sup> Aranzadi, op. cit., 104/1943.
- <sup>124</sup> Aranzadi, op. cit., 1616/1943.
- <sup>125</sup> Aranzadi, op. cit., 1557/1941.
- <sup>126</sup> Girón, Si la memoria..., pág. 123.
- <sup>127</sup> Aranzadi, op. cit., 103/1943.
- <sup>128</sup> Aranzadi, op. cit., 1628/1943.

- <sup>129</sup> Estudios y conclusiones, fascículo nº 23, op. cit., pág. 41.
- <sup>130</sup> Ídem, pág. 43.
- <sup>131</sup> Aranzadi, op. cit., 1557/1941.
- <sup>132</sup> Girón, Si la memoria..., pág. 223.
- <sup>133</sup> Aranzadi, op. cit., 1628/1943.
- <sup>134</sup> Aranzadi, op. cit., 590/1955.
- <sup>135</sup> Aranzadi, op. cit., 1557/1941.
- <sup>136</sup> Aranzadi, op. cit., 548/1944.
- <sup>137</sup> Aranzadi, op. cit., 1878/1941.
- <sup>138</sup> Aranzadi, op. cit., 17/1942.
- <sup>139</sup> Aranzadi, op. cit., 1024/1934.
- <sup>140</sup> Aranzadi, op. cit., 160/1939.
- <sup>141</sup> Aranzadi, op. cit., 1771/1955.
- <sup>142</sup> Aranzadi, op. cit., 1878/1941.
- <sup>143</sup> Borrajo Dacruz, Revisión..., op. cit., pág. 80.
- <sup>144</sup> Aranzadi, op. cit., 148/1940.
- <sup>145</sup> Aranzadi, op. cit., 1628/1943.
- <sup>146</sup> Aranzadi, op. cit., 1387/1946.
- <sup>147</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 149.
- <sup>148</sup> Aranzadi, op. cit., 328/1949.
- <sup>149</sup> Aranzadi, op. cit., 37/1944.
- <sup>150</sup> Síntesis de ponencias..., fascículo nº 18, op. cit., pág. 34.
- <sup>151</sup> Aranzadi, op. cit., 435/1939.
- <sup>152</sup> Aranzadi, op. cit., 1332/1939.
- <sup>153</sup> Aranzadi, op. cit., 1557/1941.
- <sup>154</sup> Aranzadi, op. cit., 1628/1943.
- <sup>155</sup> Aranzadi, op. cit., 1674/1941.
- <sup>156</sup> Aranzadi, op. cit., 1423/1939.
- <sup>157</sup> Estudios y conclusiones, fascículo nº 23, op. cit., pág. 44-45.
- <sup>158</sup> Ídem, pág. 21.
- <sup>159</sup> Ídem, pág. 27.
- <sup>160</sup> Nueva síntesis de ponencias provinciales, op. cit., pág. 35.
- <sup>161</sup> Conclusiones del I Congreso..., op. cit., pág. 13.
- <sup>162</sup> Aranzadi, op. cit., 1557/1941.
- <sup>163</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 122.
- <sup>164</sup> Aranzadi, op. cit., 1878/1941.
- <sup>165</sup> Aranzadi, op. cit., 1628/1943.
- <sup>166</sup> Aranzadi, op. cit., 548/1944.
- <sup>167</sup> Aranzadi, op. cit., 1557/1941.
- <sup>168</sup> Síntesis de ponencias ..., fascículo nº 18, pág. 39.
- <sup>169</sup> Borrajo Dacruz, Revisión..., op. cit., pág. 22.
- <sup>170</sup> Estudios y conclusiones, fascículo nº 18, op. cit., pág. 64.
- <sup>171</sup> Ídem, pág. 79.
- <sup>172</sup> Borrajo Dacruz, Revisión..., op. cit., introducción.
- <sup>173</sup> Síntesis de ponencias y su protección por el Estado, fascículo nº 18, op. cit., pág. 8.
- <sup>174</sup> Ídem, pág. 21.
- <sup>175</sup> Alonso García, Política social..., op. cit., pág. 41.
- <sup>176</sup> Ídem, pág. 33.
- <sup>177</sup> Ídem, pág. 45.
- <sup>178</sup> Estudios y conclusiones, fascículo nº 26, op. cit., pág. 76.
- <sup>179</sup> Congreso Nacional de Padres de Familias Numerosas, op. cit., pág. 560.
- <sup>180</sup> Ídem, pág. 44.
- <sup>181</sup> Borrajo Dacruz, Revisión..., op. cit., pág. 100.
- <sup>182</sup> Girón de Velasco, José Antonio: Escritos.... Tomo II, op. cit., pág. 88.

LA POLÍTICA SOCIAL FRANQUISTA: EL MINISTERIO DE JOSÉ  
ANTONIO GIRÓN DE VELASCO (1941-1957)

VOL. 2A



\* 5 3 0 9 8 4 0 2 4 7 \*  
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Doctorando: Pedro González Murillo

Director: Dr. D. Antonio Fernández García

Facultad de Geografía e Historia  
Universidad Complutense de Madrid  
Noviembre de 1997

22382  
IIa

## **IIª Parte: La política laboral**

### **Capítulo 10. El problema del paro.**

Hay que resaltar el hecho de que tanto los éxitos como los fracasos de la política de empleo se debieron al ministro Girón por cuanto, formalmente, tuvo la atribución de trazar de forma directa las directrices políticas. Y por tanto, de él dependía el mando sobre esta cuestión que de ninguna manera se planteaba legar, ni siquiera parcialmente, a sus allegados y menos a otras instituciones u organismos. De ello es ejemplo el ciclo de conferencias que organizó la Vicesecretaría de Educación Popular sobre temas sociales y en las que el entonces Subsecretario de Trabajo, Esteban Pérez González, especificó la forma en que el ministerio de Trabajo y su titular iban a considerar lo que allí se expusiese en torno a los problemas sociales de España y más concretamente en torno a la cuestión del desempleo:

“Que cuanto aquí se exponga, cualquiera que sea la jerarquía del conferenciante dentro del ministerio, no significa pauta o norma que éste haya de seguir y no tiene otro valor que el mérito doctrinal que lleve en sí la disertación y la aportación que haga para el estudio de las cuestiones sociales, pues las directrices políticas es sólo y exclusivamente el señor ministro el que las da.”<sup>1</sup>

Desde el ministerio de Trabajo se partía igualmente del hecho de que la situación de desempleo que se vivía en España era una realidad motivada, única y exclusivamente, por el liberalismo en su versión económica y por el republicanismo, tal y como afirmaba uno de los teóricos económicos del régimen al aseverar que el “fenómeno de más trascendencia de la económica liberal desde el punto de vista político, social y económico, era el de los sin trabajo.”<sup>2</sup> La conclusión que de ello sacaban las autoridades laborales del franquismo queda reflejada en parte en el informe que el ministerio de Organización y Acción Sindical elevaba a la Vicepresidencia del Gobierno el 14 de abril de 1939:

“Dicha trayectoria encierra una profunda lección; la de un país carente en absoluto de encaje oro y envuelto en una guerra de extraordinarias dimensiones, hechos ambos que tanto influyen en el aumento de las cifras de paro, no han bastado para causar a las principales actividades de la economía privada, la menor depresión, antes al contrario, dichas actividades en un medio tan poco propicio a su auge, han sabido no sólo mantener su ritmo ordinario sino, superarlo.”<sup>3</sup>

En esta misma línea de simplificación se consideraba muy a menudo que el parado era un sujeto de “cuerpo endeble,” dado a la “desesperación” y sobre todo dado a “la desesperación y el odio

que nutren los grupos enemigos de la sociedad y de un orden que podrán respetar.”<sup>4</sup> En consecuencia, la solución al problema del desempleo era considerada como una forma esencial de contribuir a la posible solución del conflicto social que todavía se palpaba tras el final de la guerra civil. Por tanto, el problema del paro no se medía exclusivamente por el hecho de que supusiera un nivel de producción inferior al potencial y, consecuentemente, un nivel de renta nacional inferior al posible. El problema del paro, en un régimen no salido de las urnas sino auspiciado por una sublevación militar, consistía en que destruía la paz social y socavaba los vínculos supuestamente armónicos de la sociedad española:

“...y es todavía más grave el hecho de que la presencia de un fuerte contingente de parados es uno de los factores que más contribuye a destruir el equilibrio social, dificultando el mantenimiento de la unidad interior, indispensable para desarrollar en todos sus aspectos una firme política nacional.”<sup>5</sup>

Este último aspecto es probablemente el más relevante que habremos de tener en cuenta puesto que el paro, independientemente de su repercusión social o económica, para un régimen legitimado por las armas constituía un problema potencial de orden público en función de una situación deplorable que obligará a los españoles a esperar aproximadamente hasta la mitad de la década de los cincuenta para recuperar el nivel de vida anterior a la guerra.

### **10.1. Antecedentes en la lucha contra el paro .**

Independientemente de sus resultados hay que partir de la idea de que desde las instancias oficiales del ministerio de Trabajo el problema de la ocupación total de la mano de obra disponible adquiriría una importancia central, porque se colocaba en la base de todos los demás problemas que habían de ser resueltos por el sistema nacional-sindicalista.<sup>6</sup> Así, la política económica, como medio para contribuir a la meta del pleno empleo, se constituye a los ojos del régimen, en un mecanismo más que económico, social, ya que era la forma de mantener la firmeza de las relaciones entre los factores de la producción, logrando una unidad social que facilitara “el cumplimiento de los fines nacionales e individuales”<sup>7</sup> para los que España y los españoles estaban destinados según esta peculiar forma de enfocar la política.

En este contexto se encuentra el sentido de los dos organismos a los que nos vamos a referir, si bien hay que hacer alusión a la especial atención prestada a los ex-combatientes del bando vencedor plasmada por primera vez con la creación el 14 de octubre de 1937 del Servicio de Reincorporación al Trabajo con el objetivo de preparar la clasificación de los que, al ser desmovilizados, se encontraban sin empleo.<sup>8</sup>

Como primer antecedente de lo que significó la lucha institucionalizada por parte del Estado contra el paro encontramos un primer episodio en la Conferencia Internacional de París de 1910 celebrada por la Asociación Internacional contra el Paro (fundada en 1909) y la celebrada en 1913 por la misma organización en la ciudad de Gante. Estas conferencias sirvieron para poner de manifiesto que, al contrario de la trayectoria de la política social llevada a cabo hasta entonces, el enfoque en torno al tema del paro había de cambiar radicalmente a nivel de normas y de planteamientos, puesto que sin la acción eficaz del Estado no era posible paliar ese problema. Para ello se planteaba la necesidad de crear oficinas o centros estatales que se constituyeran en instrumentos para neutralizar los efectos de esta enfermedad social del siglo XX. De igual manera, se pretendía el establecimiento de un seguro contra dicha plaga sin resolver la cuestión del alcance y la amplitud que dicho seguro había de tener o la forma de su financiación.

En el camino hacia la creación de la O.S.L.P. y el S.N.C.E encontramos como segundo episodio relevante la Conferencia de Washington celebrada en 1919 y organizada por la Oficina Internacional del Trabajo. En dicha conferencia se apostó por la necesidad de racionalizar la colocación de obreros por parte del Estado y por crear bolsas de trabajo u oficinas de colocación. A nivel mundial, las primeras actividades en este sentido fueron realizadas por la iniciativa privada, bien buscando el lucro o la caridad (instituciones mercantiles o de empresa, benéficas o caritativas, mutualistas, sindicales, etc.). En los artículos 1º y 2º del convenio sobre paro forzoso firmado en dicha conferencia se estipuló que cada estado que firmara dicho documento quedaba obligado a establecer oficinas de colocación públicas y sometidas al control de comités paritarios. De igual manera se hacía constar que dicho servicio debía tener carácter nacional, público y gratuito.

En el caso de España los Reales Decretos de 16 de noviembre de 1890 y de 12 de julio de 1919 sentaron un precedente. El primero organizaba la cámaras agrícolas, y recomendaba la creación de bolsas de trabajo. El segundo ordenaba la creación de aquéllas en las ciudades y pueblos de Andalucía y Extremadura lo cual suponía una diferencia notable entre la concepción legal de finales del siglo XIX y la existente casi en el segundo decenio del siglo XX en la medida en que en el decreto de 1919 se imponía el criterio de obligatoriedad frente a la recomendación estipulado en el de 1890.

En esta línea, el Real Decreto de 5 de marzo de 1910 encargaba al I.N.P. y al de Reformas Sociales la elaboración de un anteproyecto de ley sobre creación de bolsas de trabajo. También tomaron alguna iniciativa diputaciones y ayuntamientos. Así, la diputación de Barcelona creó una bolsa de trabajo que empezó a funcionar el día 2 de enero de 1912.<sup>9</sup> En 1910, en el ayuntamiento de Madrid, y como ejemplo de iniciativa municipal, el Vizconde de Eza<sup>10</sup> llevó a

cabo otro proyecto cuyo objetivo era establecer bolsas de empleo. Por Real Orden de 29 de septiembre de 1920 se creó bajo la dirección e inspección del ministerio de Trabajo el Servicio General de Colocación y el de Estadísticas de Ofertas y Demandas de Empleo señalándose una minúscula cantidad para auxilio económico de las bolsas de trabajo.

Lo hecho hasta ese momento había tenido un carácter insuficiente adobado con toques benéficos ratificados por el escaso peso de la política estatal directa. La Ley de 13 de julio de 1922 suponía la puesta en vigor del artículo 2º del mencionado Convenio de Washington y ello implicaba otra manifestación de intenciones que debería haber conducido a la creación de oficinas de colocación públicas y gratuitas, tal y como establecía dicho convenio. Por tanto, pese al avance formal, se puede afirmar que en el terreno de los hechos no se había experimentado un avance excepcionalmente significativo. A continuación, la Ley de Presupuestos de 1922 concedía al ministerio de Trabajo un crédito de 500.000 pts. para la práctica del seguro contra el paro forzoso. Este crédito debía aplicarse de la siguiente forma: a) subvencionando un sistema oficial de seguros contra el paro al que contribuyeran empresarios y trabajadores; b) concediendo subsidios a las asociaciones locales, regionales y nacionales que otorgaran a sus asociados indemnizaciones de paro.

Posteriormente, Chapaprieta, en julio de 1923, pretendió infructuosamente implantar un sistema nacional que permitiera desarrollar un seguro obligatorio de paro. Según García Oviedo, el "proyecto de Chapaprieta iba más lejos. Propendía a la organización sistemática, nacional, de un servicio de colocación, premisa del seguro contra el paro, y prescribía el establecimiento de un seguro de base obligatoria en los municipios en que radicasen los asegurados."<sup>11</sup> A este seguro deberían de haber quedado sujetos los trabajadores por cuenta ajena mayores de catorce años y menores de sesenta y cinco cuyos ingresos anuales no excediesen de 6.000 pts. Este subsidio sería diario a partir del sexto día de paro involuntario por un período máximo de 60 días laborales sin que su cuantía pudiera rebasar el 60 % del jornal medio del trabajador.

En la Ley de Presupuestos de 1927 se estableció un crédito de 100.000 pts. para auxilio a la creación y funcionamiento de bolsas y subvenciones a entidades cuyos estatutos dieran prestaciones o pagos por paro forzoso.<sup>12</sup> El Decreto-Ley de 26 de noviembre de 1926, promulgado por iniciativa de Eduardo Aunós, proyectaba un plan nacional de colocación obrera que no llegó a cristalizar eficazmente y que suponía conferir a los comités paritarios la capacidad de organizar bolsas de trabajo. En esta línea, Aunós encomendó al I.N.P. en abril del año 1928 el estudio de un proyecto de subsidio como transición para la preparación experimental de un seguro contra el paro que tampoco fructificaría.



Finalmente la Ley de Jurados Mixtos de 27 de noviembre de 1931<sup>13</sup> y su reglamento de 6 de mayo de 1932, que recogía el artículo 2º del Convenio de Washington, proyectaba un sistema estatal, público, nacional y gratuito, en el que coexistían oficinas públicas con privadas gratuitas. Era un sistema voluntario en el que las oficinas locales se atribuían a organismos mixtos formados por obreros y empresarios. Se creaba así un sistema de colocación oficial, nacional, público y gratuito, suprimiendo las empresas de colocación y las agencias de pago que habían de cesar en sus funciones a partir del año de la promulgación de la mencionada ley.

Para el cumplimiento de sus funciones se crearon cuatro órganos:

- 1.- registros locales de colocación.
- 2.- oficinas locales (una para cada cabeza de partido).<sup>14</sup>
- 3.- oficinas provinciales con la misión de coordinar los servicios locales.
- 4.- una oficina central de colocación y Lucha contra el Paro dependiente del ministerio de Trabajo y cuya misión era dirigir y coordinar la labor de las anteriores entidades.

Las funciones básicas de dichos organismos eran las siguientes:

- a) registrar a los obreros en demanda de puestos de trabajo y las ofertas de los empresarios.
- b) dar publicidad tanto a las ofertas como a las demandas de empleo.
- c) poner en relación a los obreros parados con las empresas que demandasen trabajadores.
- d) entender en lo relacionado con el aprendizaje y la orientación profesional.
- e) inspeccionar las oficinas de colocación privadas.
- f) estudiar los movimientos migratorios nacionales y extranjeros.
- g) promover servicios de asistencia, estaciones de socorro, talleres, enseñanzas, subsidios, seguros u obras para obreros sin empleo.<sup>15</sup>

A esta disposición hay que añadir el Decreto de 25 de mayo de 1931 por el que se creaba la Caja Nacional Contra el Paro Forzoso, el Decreto de 28 de mayo del mismo año que desarrollaba medidas para conceder a los ayuntamientos préstamos para siembra y recolección y las Leyes de 22 de marzo de 1934 y 7 de julio de 1934 destinadas a fomentar la ejecución de obras públicas.

Basadas en las dos leyes del año 1934 y con fecha 25 de junio de 1935 se publicó en la Gaceta de Madrid una Ley de Previsión contra el paro denominada *Ley Salmón* con la que se refundaba la Caja Nacional y la Junta Nacional contra el Paro<sup>16</sup> centrándose ésta en el fomento de la Cajas de Seguro contra el Paro, "cabiéndole el honor de ser la primera medida preventiva de política económica para mitigar el paro,"<sup>17</sup> equivocadamente según algunos autores. A renglón seguido,

por el Decreto de 29 de agosto de 1935<sup>18</sup> se autorizó a los ayuntamientos de las provincias con alto nivel de paro a establecer una décima sobre la contribución territorial e industrial. La orden de 15 de septiembre de 1939 autorizaba a las diputaciones provinciales a sustituir a los ayuntamientos en la exacción y empleo de este impuesto con arreglo a planes provinciales y comarcales. Por el Decreto de 22 de julio de 1939 se disponía que este recargo pasara a denominarse "impuesto para la prevención del paro obrero" y que el 25 % de lo recaudado se entregara al Instituto Nacional de la Vivienda por medio del ministerio de Trabajo. Posteriormente la Ley de Reforma Tributaria del 10 de diciembre de 1940 modificó estas disposiciones estableciendo que el recargo fuera de un 6,5 % para la contribución rústica, un 8 % para la urbana y un 5 % para la industrial.

Como ya se ha mencionado, comenzada ya la guerra civil, la Orden de 14 de octubre de 1937 creaba el Servicio de Reincorporación de los Combatientes al Trabajo. La Orden de 5 de enero restablecía la oficina central de colocación bajo la inspección de la Comisión de Trabajo de la Junta Técnica del Estado<sup>19</sup> y la de 31 de agosto de 1938 las oficinas locales en ayuntamientos que tuvieran más de 8.000 habitantes de hecho. Esta disposición, complementada con la Orden de 16 de marzo de 1939, creaba las comisiones de colocación provincial y local. Las primeras estaban compuestas por un presidente (inspector de migración o representante del delegado de trabajo) y siete vocales (un representante de la diputación, uno del ayuntamiento, un empresario, un técnico, un empleado obrero designado por la organización sindical y un caballero mutilado). Las comisiones locales estaban formadas por un presidente (delegado sindical) y cuatro vocales (un representante del ayuntamiento, un empresario y un obrero designado por la presidencia y un caballero mutilado).

Por el Decreto de 3 de mayo de 1940 dichas entidades pasaban a depender de la Delegación Nacional de Sindicatos y se creaba el Cuerpo Técnico de Estadística y Colocación. Esta disposición establecía que la organización y funcionamiento del servicio corriera a cargo de la organización sindical a la que se le asignaban las funciones de centralización y de control de las estadísticas de paro y colocación, así como el establecimiento de la debida conexión entre los organismos provinciales. También se establecía la obligatoriedad de comunicación, por parte de las empresas a la oficina de colocación, de las demandas de empleo que tuvieran carácter fijo o mayor duración de una semana. Por último, la Ley de 12 de marzo de 1942<sup>20</sup> establecía la dependencia de las Juntas Provinciales de Paro de la denominada Junta Interministerial de Obras para mitigar el paro.

## 10.2. La Obra Sindical Lucha contra el Paro y el Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación.

Así es como se llega a la Ley de 13 de febrero de 1943 de Jefatura del Estado,<sup>21</sup> la cual supone el nacimiento del Servicio Nacional de Colocación y Encuadramiento (S.N.E.C.).<sup>22</sup> Se concibe éste como un servicio de naturaleza sindical, público, gratuito y obligatorio. Su autonomía sindical era relativa, puesto que era el ministerio de Trabajo (artículo 8º) el que tenía la competencia sobre la vigilancia en el cumplimiento de las leyes, ejercitaba el derecho de veto en relación a determinados movimientos migratorios y poseía cierto poder disciplinario por medio del establecimiento de multas. A pesar de lo comentado, el jefe de este servicio, José Redondo Gómez, afirmaba lo siguiente:

“En cuanto al principio de autonomía, la dirección superior de los Servicios de Colocación, tradicionalmente reconocida en España, del ministerio de Trabajo, la Ley de 1943 lo respeta y acepta en su artículo 8º. Se crea para ello un órgano central; la sección del mismo nombre, dependiente de la Dirección General de Trabajo y en cada una de la Delegaciones Provinciales, un negociado.”<sup>23</sup>

Realmente dicha afirmación, en boca de Redondo, no constituía más que una mera declaración de intenciones problemática y conflictiva entre este organismo sindical, la Delegación Nacional de Sindicatos y el ministerio de Trabajo, por cuanto, aparte de la función inspectora y de vigilancia, al ministerio de Trabajo y a sus organismos dependientes, relacionados con el tema del paro y la colocación obrera, les correspondía la función de centralizar la información estadística, recibir de las oficinas provinciales los datos pertinentes y, en casos excepcionales, vetar movimientos migratorios que pudieran tener repercusiones políticas o sociales que se consideraran graves y que hubieran sido autorizadas por el organismo sindical. Y es que además, la organización y el sostenimiento del servicio era atribución exclusiva de la D.N.S.

Según la ley de 1943 las funciones del Servicio de Colocación eran las de encuadrar profesionalmente a los trabajadores, promover su colocación, llevar el registro de los contratos de aprendizaje, controlar la estadística general de colocación y de los movimientos migratorios de los trabajadores, informar en temas de aprendizaje, formación y orientación profesional. En cuanto a la organización de los Servicios de Colocación éste se organizaba de la siguiente forma: en las localidades donde no existiera delegación sindical comarcal se crearía un registro de colocación; en las que existiera delegación sindical comarcal se crearía una oficina de colocación; en las capitales de provincia, además de la oficina de colocación, se crearía una jefatura provincial de servicio para coordinar los organismos provinciales. En Madrid, se creaba

una Jefatura Nacional del Servicio con funciones directoras y coordinadoras para todo el territorio nacional.

Pese a ello la característica básica del servicio era “la improvisación y la ausencia de un plan general”<sup>24</sup> de acción lo cual generó desde el principio de su puesta en funcionamiento muchas deficiencias intrínsecas a la forma en que se había proyectado. Y es que desde un principio no había material estadístico apropiado sobre la población asalariada, su división por sexo y edad, la distribución por profesiones, densidad geográfica, cuantía de los salarios, número de parados, determinación de sus causas, etc. Por tanto, el problema del paro era difícilmente resoluble por el hecho de que, oficialmente, se desconocía cuantos parados había:

“La Estadística oficial deja en general bastante que desear en todos los terrenos en los que actúa, salvo honrosas excepciones. Pero en el caso del paro, el problema se agudiza a niveles esperpénticos. Ninguna de las tres estimaciones que se realizan sobre el paro tienen fiabilidad total y de algunas hay que desconfiar abiertamente.

El paro registrado es elaborado por el Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación de la organización sindical. Su realización no puede ser más simple: a la cifra de parados existente el mes anterior, recogida a través de las informaciones de la oficinas de colocación, se le suman las demandas de trabajo cursadas durante el mes actual en el conjunto de las oficinas de colocación y se le restan el número total de individuos que han logrado empleo por medio de las oficinas o han causado baja por cualquier razón. A esta cifra se le añade una cantidad arbitraria para corregir y así se tiene el paro registrado. La propia organización sindical reconoce que sólo recoge el 50 por 100 del paro real.”<sup>25</sup>

Sobre esta cuestión podemos añadir la valoración hecha en las páginas de la revista “Cuadernos de Política Social” en la que se expresa el siguiente criterio:

“...es seguro que en algunas épocas figuran en las estadísticas menor número de parados del que existe en realidad, de una parte, porque bastantes trabajadores en situación de paro no acuden a las Oficinas para registrarse, y de otro, porque una cierta proporción de empleos se obtienen directamente del patrono sin la intervención de las Oficinas, aunque exista la obligación de comunicarlo, que en bastantes casos no se cumple.”<sup>26</sup>

Aparte de las funciones puramente técnicas del S.N.E.C., en línea con la concepción anticonflictivista de la que bebía ideológicamente el régimen, cumplía otra función no menos importante al actuar de filtro sobre los posibles elementos desafectos al régimen y al propagar

dicho planteamiento en el sector empresarial aún cuando no fuera estrictamente necesario entre éste:

“Siempre ha existido el hecho de que los obreros no afiliados en las ideas dominantes en el Poder, han encontrado más dificultad en su colocación que los demás compañeros...Hoy, con la desaparición de los partidos, sigue, sin embargo, actuando el fenómeno político a través del proteccionismo estatal a ex-combatientes, mutilados, afiliados,<sup>27</sup> etc., y sobre todo por el recelo de las empresas a acoger en su seno a elementos que puedan provocar obstrucciones en la producción, con el quebranto económico consiguiente, o por el simple temor a que se les conceptúe como protectores de elementos no afectos al Régimen.”<sup>28</sup>

La característica esencial del S.N.E.C. en el periodo de estudio se percibe por medio de las opiniones de su jefe nacional José Redondo, en la medida en que aquél preveía la imposibilidad de que dicho servicio pudiera cumplir con éxito los cometidos que se le habían adjudicado:

“El Servicio de colocación, por mucho que lo perfeccionemos, no podrá hacer otra cosa que conseguir la ocupación rápida y si se quiere, extremando su eficacia automática, de los desocupados, en la medida en que la demanda lo permita. No podrá, de ninguna manera, tener a su disposición en todo momento una reserva de empleos capaz de cubrir las exigencias de la oferta de trabajo y, en este caso, el Estado se verá obligado a recurrir a arbitrios improvisados de fatales consecuencias siempre...Hemos de considerar que el cambio del panorama tecnológico, en la carrera asombrosa de la técnica, ha arrumbado como tópicos inservibles la mayor parte de las ideas, teorías y métodos que estaban establecidos en el mundo y, sobre todo, en España. Flaquean nuestros teóricos cuando al tratar de los problemas españoles se agarran, como si estuviésemos en el siglo XIX, a ideas que ya no responden a la realidad.”<sup>29</sup>

La Obra Sindical Lucha contra el Paro comenzó a funcionar en 1943 a raíz de la promulgación de la Ley de 3 de julio<sup>30</sup> de la Jefatura Nacional del Movimiento del mismo año con el fin de remediar y solucionar el problema del paro forzoso, sin por ello obviar un cierto sesgo caritativo propio de la insuficiencia de los jornales que se proporcionaba a sus trabajadores.<sup>31</sup> Su misión era la de elaborar planes y fórmulas para cumplir dicho fin así como el empleo de los parados en obras útiles para la economía nacional, la “readaptación” social de aquellos, la distribución de la mano de obra y la coordinación con todas las entidades sindicales que se relacionaran con el problema del paro.

Otra de las cuestiones de las que se preocupaba especialmente la ley era del control y vigilancia de los trabajadores que ponían al servicio de las empresas (base 4ª). La realidad, en cuanto a las obras públicas en España, queda bastante de lejos de los objetivos formales planteados. Sobre aquellos podría hacerse la siguiente valoración:

“...para mitigar la desocupación se suelen presupuestar obras públicas, generalmente de no mucha duración y aplicadas en cualquier aleatorio periodo del año, cuando debieran corresponder a unos módulos determinados científicamente, con lo que se conseguiría el máximo impacto.”<sup>32</sup>

Su labor en los primeros años estuvo caracterizada por la ausencia de actividad en relación al problema del desempleo según su Jefe Nacional, José Redondo Gómez. Y es que la obra resultó ser un aparato burocrático incapaz de conseguir siquiera los objetivos previamente trazados en torno al problema del paro. Básicamente se estaba operando sobre principios, enunciados y datos erróneos o falsificados voluntariamente. Ello suponía un resultado de “cero”<sup>33</sup> en orden a mitigar el paro forzoso. Todo ello era debido, entre otras cuestiones, a la falta de ordenación jurídica de la cuestión y a la pluralidad y confusión de organismos de naturaleza estatal o sindical faltos de contactos y colaboración.<sup>34</sup>

Hasta tal punto llegaba el desbarajuste operativo de esta institución que en una sociedad en que a mediados de los años cuarenta existía un paro galopante no se lograba que la obra diera empleo a la gran masa de desempleados por la ineptitud propia que imposibilitaba la colaboración de los trabajadores y que potenciaba la tendencia del empresariado a situarse lo más lejos posible del control del Estado:

“El Servicio de Colocación nos dice, por ejemplo, que en España existen 40, 50 ó 60 mil productores parados, de los que un 50 % son de la industria de la construcción, y llegado el momento, cuando hemos estudiado y meditado un proyecto para ocupar un buen tanto por ciento de esas cifras de paro (que puedo asegurar son puramente estimativas) nos encontramos, al hacer el encuadramiento o alistamiento en las plantillas de trabajo, con que resulta casi imposible el encontrar de cada mil parados inscritos, cien o ciento cincuenta que acudan a nuestro llamamiento y quieran trabajo, lo que trae como consecuencia el desmoronamiento de todo el plan trazado y la vuelta a empezar y a volver a fracasar, ayer en la realización de una obra proyectada por nosotros, hoy ante la imposibilidad de facilitar a las empresas privadas la mano de obra que solicitan, etc....hechos que tienen su fundamento en dos razones principales entre otras muchas: una, porque al margen de la Oficina de Colocación muchos de los trabajadores en paro, que figuran inscritos en la misma, se acomodan directamente en empresas u ocupan un

trabajo, sin cubrir ni el trabajador ni la empresas los requisitos establecidos por el Servicio de Colocación; y otra, porque muchísimos trabajadores en paro forzoso, no figuran inscritos en la Oficina de Colocación por esperar a encontrar el sitio donde ocuparse para luego cubrir tal requisito, en caso de que la empresa quiera legalizar su situación.”<sup>35</sup>

Y es que el afán por controlar al desempleado y los trámites burocráticos provocaban que los trabajadores prefirieran acudir directamente a las obras o a las empresas, que utilizaran los anuncios en la prensa o los contactos personales, pero que en cualquiera de los casos acudieran poco a la Oficinas de Colocación.<sup>36</sup>

En parte, lo que Redondo estaba llevando a cabo era un ejercicio de justificación ante la falta de operatividad de su servicio. Y es que el mismo Servicio de Colocación repetía hasta tres y cuatro veces ofertas de empleo a los mismos trabajadores, lo cual dejaba claro la eficacia de sus propios ficheros y su “riguroso” conocimiento de la realidad laboral española. Por tanto, en este momento se era perfectamente consciente de que, en cuestión de paro, las estadísticas oficiales eran total y absolutamente falsas<sup>37</sup> o cuando menos se puede, y se podía afirmar en los años investigados, que “las estadísticas sobre el paro en España han sido muy incompletas y de un valor práctico muy escaso.”<sup>38</sup> Esto es especialmente válido en lo referente al paro agrícola, puesto que no parece realista el hecho de que las cifras de paro en este sector posteriores a 1939 descendieran de forma paulatina “hasta el punto de que en el año 1944 el paro agrícola, según las cifras oficiales, casi ha desaparecido, ya que ha experimentado una reducción de más del 90 %...mientras que en 1936, en muchos meses, las cifras eran cercanas al medio millón de parados agrícolas e incluso le superaban en algunos meses...pero esta reducción no puede llegar a las escasas cifras que figuran en las estadísticas oficiales de 1944.”<sup>39</sup> Por ello uno de los proyectos de Redondo era constituir un nuevo censo del paro en España.<sup>40</sup>

En esta línea de desbarajuste se insertaba la circular enviada por el Jefe Nacional de la O.S.L.P. enviada a los Vicesecretarios Provinciales de Ordenación Social y Obras Sindicales y a los Jefes Provinciales de Lucha contra el Paro y Servicios de colocación el 31 de mayo de 1948, momento en que el paro empezaba a apretar de nuevo con más intensidad.<sup>41</sup> Y es que el poco prestigio (cuestión muy recurrida entre los edificadores de la política social franquista) de la organización sindical se ponía explícitamente en duda entre los trabajadores. A los Jefes Provinciales de Encuadramiento y Colocación se les notificaba en la misma fecha, y de forma reservada, que una de sus principales tareas había de ser la de procurar no cumplir con los trámites burocráticos justos repitiendo sistemáticamente informe tras informe las mismas aseveraciones que no aportaban nada al conocimiento de la situación laboral de España y que evitasen la sistemática demora en aquéllos.

De tal desbarajuste da muestra el hecho de que la ley del 43, que organizaba la colocación de los trabajadores por medio de un sistema nacional y dependiente de los sindicatos bajo la inspección y dirección del ministerio de Trabajo, vio cristalizar su reglamento con la promulgación de éste el 9 de julio de 1959, dieciséis años después. Sobre esta cuestión, en diciembre de 1951, la C.N.S. de Burgos emitía un informe reservado en que se quejaba amargamente, entre otras cuestiones, de la inexistencia del reglamento por la incidencia tan trascendente que en el orden de la política social del régimen había de tener:

“Se ha recrudecido en nuestra provincia, el problema de la colocación de los trabajadores que tiene sus raíces en la propia existencia de la ley, que tan sólo obliga a la organización sindical, a la facultad de hacer de intermediarios en la colocación del grupo laboral obrero; sin embargo, las deficiencias observadas en la ley, y la falta de un Reglamento de aplicación a pesar de estar prometido en la misma normativa, y la falta también de puesta en vigor de las cartillas profesionales, salvo construcción, hacen que esta colocación origine muchos problemas que quedan en el aire y desprestigian nuestra función sindical...”<sup>42</sup>

Y es que a finales de los años cincuenta ni el sindicato ni el ministerio de Trabajo conocían los movimientos migratorios interprovinciales con exactitud, salvo en aquellos ayuntamientos en que se había montado un buen servicio de estadística. Sólo Barcelona contaba a finales de los cincuenta con un auténtico censo migratorio sin que se supiese mucho sobre el lugar de origen de los trabajadores. En Madrid y en Barcelona se suponía que entraban anualmente unos 16.000 obreros en busca de trabajo, pero eran cifras estimativas. Como siempre, la preocupación fundamental en torno a esta cuestión era esencialmente política. Evidentemente el descontrol de los movimientos migratorios generaba concentraciones poco saludables en los suburbios incrementando el grave problema de la vivienda. Sin embargo, lo verdaderamente relevante para el ministerio de Trabajo era el hecho de que dicha situación era propicia para que calara en los trabajadores el fermento de lo que se consideraban tendencias políticas desafectas. Por ello, entre otras cuestiones, se llegó a pensar en montar residencias dirigidas por jefes con plena autoridad, donde no solo se facilitase el alojamiento a los emigrados, sino también una formación moral y social bajo el control de elementos sindicalistas.<sup>43</sup>

A este desbarajuste respondía también el proyecto de organización estadística de la Obra Sindical de Lucha contra el Paro presentado por el Jefe de Servicios de la Obra, Ángel Rubio Carsi, con fecha 13 de enero de 1949; el de estructuración y planificación del trabajo de la O.S.L.P., presentado el 12 de marzo de 1946 por Rubio Carsi y José Antonio García Durán (Secretario Nacional de la Obra) o el proyecto de organización de una empresa en el seno de la



O.S.L.P., presentado el 28 de enero de 1947.<sup>44</sup> Téngase en cuenta que la mezcolanza entre ambas instituciones no obedece sólo a que sus funciones puedan imbricarse o complementarse, sino al hecho de que también la persona a cargo de ambas en el período de esta investigación era la misma: José Redondo Gómez.

En cuanto a la cuestión estadística se refiere, el ministerio de Trabajo, por medio de la Comisaría Nacional de Paro, se quejaba amarga y sistemáticamente del lamentable resultado de los conocimientos estadísticos sobre el paro a mediados de los años cuarenta. En la correspondencia que la mencionada comisaría enviaba a la D.N.S., dirigida por Sanz Orrio a finales del año 1945, se ponía de manifiesto de forma abrupta los fallos sistemáticos que luego se aceptaban por estadísticamente veraces. A su vez, el máximo dirigente del mencionado ministerio utilizaba en sus discursos dichas estadísticas para poner de manifiesto la benignidad de la política social del régimen, pese a la conciencia de que las cantidades utilizadas, en un número importante de casos, se podía multiplicar tranquilamente por más de 20. Ello hace que, salvo que se considere fruto de una política propagandística, falseada previamente y diseñada con aquélla voluntad, no se entienda el motivo razonable por el que las estadísticas oficiales fueron las provenientes del Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación a través de la D.N.S. cuando el ministerio de Trabajo tenía perfecta conciencia de los errores o falsedades garrafales que dichas estadísticas contenían. Y cuando el propio ministerio tenía otros medios para conocer más fehacientemente cual era la realidad sociolaboral española en estos años del hambre:

“En esta Comisaría Nacional de Paro, se vienen recibiendo por conducto de nuestro Delegados Provinciales de Trabajo y por la Dirección General de Trabajo en este ministerio, estadísticas sobre la situación general del paro en España, las de ésta última con los datos suministrados por el Servicio de Estadística y Colocación de esta Delegación Nacional, y las diferencias numerosas son tales, como por ejemplo,...la existencia de un paro en la provincia de Badajoz, en el mes de septiembre de 1.547, cuando según los datos de nuestros organismos provinciales y de la propia Junta Porvincial de Paro, era de 34.135. Algo parecido ocurre con tras provincias, y en todas, por lo general, la diferencia es muy sensible...una diferencia de tal volumen no es admisible, ello lleva consigo el desdén con que se ven estas estadísticas sobre problema tan vital y fundamental, como desgraciadamente es hoy el del paro en España...de lo que no hay duda es que los datos que suministran los Gobernadores, y que son los que nos envían nuestros Delegados, sacados de órdenes concretas a los respectivos municipios, parecen aproximarse algo más a la realidad, debido a la presión de aquella primera autoridad, y por el contrario, en las respectivas oficinas de colocación...no se registran las cifras de paro con la exactitud necesaria...es admisible también que dichas oficinas,

ante la magnitud del problema, debido principalmente a la pertinaz sequía padecida, no han querido, (por no parecerle prudente), reflejar la realidad, pero en uno u otro caso, es llegado el momento de poner cuantos medios están a nuestro alcance para que el Gobierno pueda conocer el volumen real del paro y facilitar lo medios oportunos para su remedio...”<sup>45</sup>

Y como conclusión, el jefe provincial de la O. S. Lucha contra el Paro de Granada afirmaba lo siguiente con una rotundidad difícil de encontrar para respaldar la incompetencia, la ineficacia o la falta de voluntad política en pro de la competencia y la eficacia de este organismo:

“Es decir, en España existen alrededor de 600 oficinas de colocación, de éstas sólo acaso funcionan un centenar, y sobre el peso muerto de esas otras 500 que no sirven para nada, existen más de 9.000 municipios a los que no alcanza ni un leve control oficial del mercado de trabajo. Se comprenderá fácilmente la inutilidad de una Organización así montada y lo artificios de los datos que proporciona.”<sup>46</sup>

En 1957 se ponía de manifiesto una realidad similar:

“Estos datos de paro son los registrados por nuestras Oficinas a través de las correspondientes ofertas y demandas de trabajo formuladas ante las mismas, y no el paro real, ya que al no cumplimentar por una parte todos los empresarios y trabajadores lo establecido en la materia, y por otra al no existir constituidos en todo el ámbito nacional nada más que un número limitadísimo de Registros, 411 sobre 8.104 que faltan por constituir, que al ser al sector agrícola el que más contingente de paro arroja, la gran diseminación de los trabajadores del campo, la idiosincrasia de los mismos, los sistemas de contratación, etc., etc., son puntos todos ellos que nos impiden registrar el paro totalmente.”<sup>47</sup>

Cinco años después el propio Jefe del Servicio (copiando parte de este informe), al referirse a las cifras del mes de julio de 1951, exponía el siguiente argumento sobre la utilidad de los datos de su servicio:

“Debo significarte que estos datos de paro son los registrados por nuestras Oficinas, a través de las correspondientes ofertas y demandas de trabajo, formuladas ante las mismas y no el paro total real ya que al no cumplimentar por una parte todos los trabajadores y empresarios lo establecido en la materia y por otra al no existir constituidos en todo el ámbito nacional, nada más que un número limitadísimo de registros 411 sobre 8.104 que faltan por constituir, que al ser el sector agrícola el que más contingente de paro

arroja la gran diseminación de los trabajadores del campo, la idiosincrasia de los mismos, los sistemas de contratación etc., etc., son puntos todos ellos que nos impiden registrar el paro totalmente”<sup>48</sup>

Pese a ello el propio Jefe del S.N.E.C manifestaba un intencionada voluntad de describir el paro como un fenómeno diminuto sólo adscribible a estudiantes de estudios recién acabados, varones de más de 45 años y de supuesta difícil colocación, vagos, maleantes, etc. Incluso su forma tan personal de calcular la tasa de paro resulta tan simple y casi infantil que denota esa tendencia a minimizar una situación grave con una finalidad únicamente propagandística. De no ser así resultaría un error gravísimo afirmar, como se asevera en el siguiente párrafo, que la tasa de paro en España era en octubre de 1952 de 0,35 % sin realizar aclaración alguna:

“Si tenemos en cuenta que la población de España en estos momentos es del orden de unos 30 millones de habitantes, el porcentaje de paro correspondiente al mes de octubre, es de 0,35 %, es decir, el 3,5 por mil, cifra que por sí sola refleja la poca importancia que tiene hoy día el problema del paro en nuestra nación.”<sup>49</sup>

En esta línea se manifestaba el Secretario Provincial de la Central Nacional Sindicalista de Huelva :

“De una manera práctica no he llegado a conocer las ventajas de la Obra Sindical Lucha contra el Paro en las provincias donde por mandato de la jerarquías superiores he cumplido misión sindical”<sup>50</sup>

La efectividad de este servicio dependiente de la Delegación Nacional de Sindicatos era prácticamente nula. Este servicio no era más que un adorno incapaz de remediar la situación obrera. Una de sus pocas armas era la canalización de movimientos de emigración puntual de cara a realizar labores agrícolas de temporada u obras públicas, sobre todo de trabajadores proveniente del campo, puesto que la elevada cifra de población activa agraria no significa otra cosa más que “hay demasiada gente que hace profesión de la agricultura, y que el nivel de vida de la población agrícola tiene que ser miserable.”<sup>51</sup> Sin embargo, informes como el de la O. S. Lucha contra el Paro de Cuenca ponía de manifiesto la imposibilidad de desplazar a los obreros si los jornales eran tan irrisorios.<sup>52</sup> En cualquier caso, una solución instintiva potenciada parcialmente por las autoridades, era la emigración, lo cual da como resultado que “los gallegos se desplazan a Castilla para la siega del cereal; andaluces y extremeños, a la Mancha a la vendimia; bajan en invierno sorianos y serranos de Cuenca y Guadalajara a la Andalucía olivarera y acuden a Valencia de las provincias limítrofes a recoger la naranja y el arroz.”<sup>53</sup>

Independientemente de consideraciones políticas, todos estos defectos se debían también a problemas de administración y gestión. Así, a comienzos de los cincuenta, varios años después de puesto en funcionamiento el Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación se ponían de manifiesto gravísimos problemas como la falta de soportes materiales básicos. Faltaban registros, oficinas locales (sobre todo eficientes), funcionarios capaces, etc. Y es que por lo que a los funcionarios se refiere, lo típico era que aquéllos lo fueran a la vez de otros organismos “prestando sus servicios en dichos Registros con carácter voluntario y gratuito.”<sup>54</sup>

Fruto de esta falta de eficacia fue la Orden de Servicio extraordinaria de 23 de noviembre de 1944 dictada por el Jefe Nacional de la O.S.L.P. En ella se ponía de manifiesto, un año después de que esta organización comenzara a funcionar, que sus realizaciones (cuando existían) eran absolutamente estériles. La norma dentro del servicio era la desgana en el trabajo y la falta de actividad. Hasta tal punto la situación se radicalizaba en este sentido que Redondo quiso imponer por medio de esta orden la puntualidad en la entrada y salida del personal de la obra, su permanencia durante toda la jornada en su puesto, la imposibilidad de recibir visitas, despachar consultas o celebrar conferencias telefónicas particulares y la abolición efectiva de todos los que no fueran jerarquías legalmente establecidas. En definitiva, venía a poner un cierto orden en torno al reglamento de régimen interno puesto en vigor a partir del 31 de agosto de 1943. Y es que para Redondo, la obra se había convertido en algo “inconfesable, en buena ética falangista, que ni yo estoy dispuesto a tolerar, ni vosotros deseáis continúe por más tiempo...”<sup>55</sup>

Lo que se estaba poniendo de manifiesto es que los servicios del sindicalismo español constituían una fuente de sustento para la masa de adeptos o de nuevos adeptos al régimen, independientemente de su cualificación profesional, lo cual revertía negativamente en la operatividad de la obra.<sup>56</sup> Por ello, como se ha dicho, sus resultados pueden calificarse como prácticamente nulos y así se reflejaba en el informe elevado con fecha 30 abril de 1949 por el Jefe del Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación a la Delegación Nacional de Sindicatos.<sup>57</sup> En aquél se pone de manifiesto el perfecto conocimiento del jefe de dicho servicio sobre la imposibilidad de controlar el paro “en todas y cada una de las actividades industriales por la especial característica de alguna de ellas, sobre todo en agricultura.”<sup>58</sup> Ello tenía una singular trascendencia si recordamos que a la hora de tocar el tema del paro establecíamos una muy clara diferencia entre las cifras oficiales y las estimadas.<sup>59</sup> La elevación de las cifras oficiales era debido a la consideración de un paro estimado no oficial y descontrolado pero sólo (y esto es lo importante) en el ámbito agrario, no en el industrial. En este último (siempre dentro de lo que eran estimaciones superiores a las cifras oficiales) se partía de la idea de que había correspondencia entre las cifras oficiales y las reales.

Todo ello, lo que viene a poner de manifiesto es que la zanja colosal entre las cifras oficiales<sup>60</sup> y las reales se agrandaba todavía más en la medida en que el ámbito de la actividad industrial, considerado como rigurosamente conocido desde un punto de vista estadístico, no era tan conocido como parecía. Y es que "medida indispensable y previa para hacer una labor eficaz en la solución del problema del paro forzoso es el buen funcionamiento de los servicios de colocación. Sin ellos no se puede dirigir la educación y la orientación profesional, ni medir el esfuerzo financiero que ha de realizarse."<sup>61</sup> "Considerar que las cifras del paro industrial son reales en función del control que la O.S.L.P. y el S.N.E.C. afirmaban tener sobre las empresas, en cuanto a movimientos de altas y bajas, parece excesivo y consecuentemente, no aceptando esta premisa (y siguiendo la propia afirmación de Redondo), hay que concluir que el paro en dicho sector gozaba de defectos similares al del paro oficial en el sector agrícola."<sup>62</sup> Era precisamente en este sector en el que más imperfectos eran los datos estadísticos. Y es que este paro se consideraba "muy difícil de controlar...pues los agricultores en paro,...se mostraban reacios para acudir a nuestros organismos y a formalizar su situación."<sup>63</sup>

Pongamos uno de los tantos ejemplos que se pueden encontrar en boca de alguno de los órganos del Régimen, en este caso la Delegación Provincial de Sindicatos de Cuenca. En la primavera de 1955 dicha delegación emitía el siguiente juicio sobre la situación del desempleo en su provincia en el siguiente sentido:

"Los últimos datos estadísticos denuncian la existencia de unos treinta mil trabajadores agrícolas por cuenta ajena, de los cuales aproximadamente el 50 % quedan en situación de paro forzoso durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo."<sup>64</sup>

Partamos de la posibilidad de un acusado error o de un sobredimensionamiento de la situación sociolaboral de esta provincia. Tengamos en cuenta la posibilidad de un cierto acaloramiento exagerado en la exposición de las cifras. Pero de igual manera parece razonable considerar que el nivel de paro que se menciona como real se situaba en esos meses en torno a varios miles de desempleados. En esta situación lo que vuelve a parecer problemático es como dar veracidad a las cifras oficiales de paro que nos indican que en noviembre y diciembre de 1954 y enero, febrero y marzo de 1955 fueron respectivamente de 522, 522, 594, 522 y 526 desempleados. En este caso, como podemos constatar, habríamos de multiplicar la cifra oficial más elevada por 25 aproximadamente.

Hay que tener en cuenta que en muchos momentos las estadísticas oficiales mostraban como el número de colocaciones era superior al de demandas. Ello en principio indicaría una cierta salud de la economía nacional. El problema era que dicha situación se producía en coyunturas excepcionalmente negativas, lo cual quiere decir que esa neblina estadística lo único que

oscurecía era la realidad que mostraba que muchísimos obreros no acudían a las oficinas de colocación.

Una de las formas de luchar contra el desempleo por parte de la O.S.L.P. era la de crear campamentos de trabajo a los que se enviaba a trabajadores en paro. Estos campamentos fracasaron en su cometido estrepitosamente desde la perspectiva del final de los años cincuenta. Por un lado, hay que tener en cuenta que la política de industrialización dio en parte frutos y ello limitó una porción del desempleo al paro llamado estacional. Por otro lado, estos campamentos constituyeron lugares de semireclusión por medio de los que se pretendía regenerar a los que se consideraba vagos y maleantes.<sup>65</sup> El fracaso de la experiencia hizo que en el año 1955 la D.N.S. acordara disolver dichos campamentos.<sup>66</sup> En parte, ello iba a dejar sin sentido a la O.S.L.P. y por ello se encargó a dicha obra la tutela y asistencia de los repatriados de la U.R.S.S. de acuerdo a las instrucciones dadas por el gobierno. De la importancia mínima de estos campamentos da cuenta el hecho de que en el año 1949 la única obra de importancia que llevaba a cabo la O.S.L.P. era la del aeropuerto de Barajas.<sup>67</sup> En aquella obra había colocado a 2.118 trabajadores procedentes de Madrid y a 522 de otras provincias (mayoritariamente andaluces).

Años	Campamentos	Obreros
44	6	870
45	2	298
46	10	1.420
47	2	296
48	4	600
49	8	1.296

*\*Cuadro n° 13. Número de campamentos y de obreros de la O.S.L.P.<sup>68</sup>.*

En función del número de campamentos y de obreros destinados a ellos en la década de los años 40 no se puede decir que la incidencia de las obras públicas canalizadas a través de esta obra sindical fuera lo suficientemente importante para que aquélla cumpliera con los objetivos marcados en unos años donde la tendencia al incremento del número de desempleados era la tónica general.

Como ejemplo del destino de dichos campamentos y sus obreros, así como del volumen de financiación para los mismos, podemos tomar el estado de las obras justo el 1 de enero de 1949. En dicho momento el número de obreros, campamentos y el importe de las mismas a realizar era el indicado en la tabla o cuadro n° 14 siguiente:

Conceptos	Obreros	Campamentos	Pts.
Bilbao. Extracción de mineral de hierro	120	1	364.800
León. Saltos del Sil	250	1	760.000
Granada. Viviendas, caminos forestales y otras obras	450	3	1.162.800
Madrid. Sanatorio y otras obras	350	3	903.400
Totales	1.170	8	3.191.000

*\*Cuadro n° 14. Estado de los campamentos de la OSLP el 1 de enero de 1949.*

En la tercera reunión del Consejo Asesor Nacional de Obras Sindicales llevado a cabo en 1950 se ponía de manifiesto la problemática esencial de la obra que su Jefe José Redondo ponía en conocimiento de Antonio Aparisi, Vicesecretario Nacional de Obras Sindicales.<sup>69</sup> La realidad era que oficialmente hasta el año 1948 (y estas cifras son de por sí muy dudosas) la media de trabajadores que había empleado la obra había sido de 3.500 y hasta la misma fecha el número de campamentos creados había sido de 24. En parte el fundamento de esa exigua actividad estaba en la muy escasa financiación de la obra o en los criterios políticos que sólo formalmente proponían la acción directa del Estado por medio de las obras públicas para resolver el problema del paro. En torno a esta cuestión el mencionado informe del III Consejo Asesor estimaba lo siguiente:

“...con cantidades exiguas nuestra acción será reducidísima. Con cantidades exiguas y reintegrables, lo será mucho más aún. Es decir, que a más paro serán precisas mayores aportaciones a fondo perdido y entonces la labor asistencial se duplicará...Pero ¿y si no es así ?”<sup>70</sup>

La respuesta a la pregunta se obtiene observando, no tanto la estadística oficial (que con todo aumenta de forma progresiva en los años a los que ahora hacemos referencia) sino considerando los datos extraoficiales que aportaba este mismo organismo o el S.N.E.C. Pero es que para ello lo primero que habría que haber conocido era la dimensión efectiva del fenómeno del paro. Así se entiende que el Servicio Nacional de Encuadramiento planteara que el principal problema para el desarrollo de sus actividades era únicamente la falta de voluntad política para destinar recursos abundantes a la misión que este servicio y la O.S.L.P. tenían encomendados:

“No ha existido problema, propiamente dicho, en el desarrollo de dichas actividades, sino que es la escasez de medios económicos que sigue siendo un gran obstáculo para el emprendimiento de empresas de gran envergadura que vinieran a terminar con la totalidad del paro involuntario, pues bien fácilmente se desprende que para conseguir, con pleno éxito obras de tal magnitud sería preciso un presupuesto del que, desgraciadamente, se carece.

Hay pues, que limitarse a contratar con las empresas particulares la mano de obra que ha de realizar los trabajos que tienen en proyecto dichas empresas, sin que puedan directamente acometerse esos trabajos.”<sup>71</sup>

El pesimismo o la falta de voluntad política para afrontar la situación del desempleo en España se palpaba en la falta de fe en la posible solución que los responsables de dicha función tenían, lo cual suponía dejar el camino abierto a lo que desde ciertos sectores sindicales (muy minoritarios) se entendía como la entrega de su proyecto nacional-sindicalista en manos del liberalismo económico, rompiendo con los principios que teóricamente habían posibilitado el levantamiento del 18 de julio. En consecuencia, el planteamiento sobre la posible solución del paro endémico, sobre todo en el campo, tenía visos absolutamente negativos y ello porque en lo referente al campo y a la construcción (sectores más afectados por el paro) la conclusión de una de las personas que en este país tenían mayores atribuciones para luchar contra dicha plaga (Redondo Gómez) se podría resumir diciendo que no se podía hacer absolutamente nada. Que por consiguiente era un fenómeno natural y que, en consecuencia, habrían de ser las propias fuerzas naturales del mercado las que distribuyeran los recursos humanos en función de la relación oferta demanda como sucedería en los años cincuenta con los consiguientes procesos migratorios en el interior del país:

“En cuanto a lo que se pueda hacer en orden a exterminar o mitigar este paro latente, mi opinión sincera es casi negativa por las siguientes razones:

- 1.- El paro agrícola es consecuencia de un fenómeno normal y natural, que únicamente podría remediarse mediante una profunda modificación de los cultivos y vida agrícola nacional.<sup>72</sup>
- 2.- El paro en la industria de la construcción afecta exclusivamente al personal clasificado como de peonaje, lo que impediría el empleo de estos hombres en otros trabajos que pudiésemos crear en este ramo de la construcción por cuanto que nos faltaría el personal técnico preciso: albañiles, oficiales, etc., que son los que en definitiva crean el trabajo del peón, limitándose en este caso nuestra actuación, si



tuviésemos fondos para ello, a los clásicos movimientos de tierra, con el peligro de que sean improductivos o antieconómicos.

3.- En lo que al resto del paro se refiere y tomando únicamente a los que lo sufren con profesionalidad definida -paro de oficinistas-, nada se puede hacer tampoco. Las empresas tienen saturados al máximo sus cuadros de personal y es de todo punto imposible su adaptación a otros trabajos, bien por falta de aptitud física, bien por inadaptabilidad social..."<sup>73</sup>

### 10.3. Las causas del paro.

La percepción desde dentro del régimen del general Franco era que el problema del paro tenía una triple vertiente. Por un lado existía un paro crónico integrado por un número no muy elevado de impedidos "vagos e inadaptados que vivían a costa del esfuerzo ajeno apelando a ciertos procedimientos inconfesables, a los que son tan favorables las circunstancias actuales, logrando sin trabajar medios para subvenir a sus necesidades, por lo que aunque figurasen en nuestra estadísticas, por estar inscritos en las Oficinas de Colocación, no merecían la consideración legal de parados."<sup>74</sup> Y es que no tener éxito en esta cuestión era traicionar la Declaración I del Fuero del Trabajo por cuanto fue consecuencia del punto 15º de la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Desde este punto de vista, se entendía que el motivo del desempleo era la falta de adaptación del parado al medio en que vivía. Por ello se planteaban preguntas del siguiente calado: "¿es que en realidad no es el parado un fracasado en la vida social?"<sup>75</sup>

En segundo lugar, se consideraba la existencia de un paro estacional o periódico que constituía el grupo más importante integrado por la población dedicada a actividades agrícolas que veía aminorada o paralizada su actividad, influida por las diversas estaciones del año, por las incidencias climatológicas y, sobre todo, por la incidencia de los monocultivos latifundistas, dado que el predominio de un determinado cultivo en una provincia era causa necesaria de irregularidad en las necesidades de mano de obra<sup>76</sup> en función de que el latifundio, desde un punto de vista económico, representaba la forma clásica de explotación extensiva, es decir, de la explotación que precisaba de un menor número de trabajadores. Y es que para el año 1946 el 50,97 % de la superficie total cultivada en Pontevedra se dedicaba al maíz, el 46,46 % en Jaén<sup>77</sup> se dedicaba al olivar, el 46,07 % en Barcelona al mismo cultivo, el 43,65 % en Almería se consagraba al esparto, el 37,83 % en Córdoba al olivar. En Cádiz, Valladolid, Palencia, Álava, Huesca, Segovia, Navarra, y Zaragoza más del 32 % de la superficie total cultivada se aplicaba al trigo. En último lugar, citaremos el caso de Sevilla en la que el 31,15 % de la superficie se dedicaba también al olivar. Es decir, podemos resumir el estado de la cuestión afirmando que en 27 provincias el cultivo predominante era el trigo, en 5 el olivar y en otras cinco el viñedo.<sup>78</sup>

Este era el factor determinante del paro agrícola dado que “pocos propietarios es igual a muchos braceros y muchos braceros en el campo, es igual a paro e inseguridad económica,”<sup>79</sup> lo cual permitía a algunos dirigentes de la política social como el Jefe Nacional del Sindicato Vertical del Olivo afirmar que dicha situación era una realidad en un régimen que, formalmente, pretendía poner fin a la misma y que además de esto habría de perdurar necesariamente como una injusticia social.<sup>80</sup>

En cuanto al problema del paro agrícola de carácter estacional, hay que considerar el hecho de que la demanda de mano de obra tenía un ritmo mensual distinto según los cultivos. Las mayores necesidades de trabajadores en el cultivo del trigo se producían en los meses de julio, agosto y octubre; en el caso del olivar, durante enero, febrero y marzo; para el cultivo de la vid, en febrero, marzo y abril; en el caso de la patata de junio a noviembre y para la remolacha, en los meses de mayo, junio, agosto, noviembre y diciembre. Sobre todo, en lo referente al trigo y el olivo, el hecho de que la demanda mayoritaria de mano de obra se centrara fundamentalmente en esos pocos meses provocaba que el resto del año la población agricultora hubiese de buscar otra actividad en la que conseguir un jornal o bien tenía que emigrar. Y es que se consideraba que en España existía un excedente de población adscrito al campo al que había que dar algún tipo de salida, dado que se pensaba que era “una de las causas determinantes del bajo nivel de vida de la población campesina y en general de toda la nación.”<sup>81</sup> Este era el factor en el que incidían los responsables de la política de paro y colocación como José Redondo Gómez, que despreciando los planteamientos keynesianos que aludían a la desigualdad entre el coeficiente de ahorro (renta nacional no consumida) y el coeficiente de inversiones (siendo el primero mayor que el segundo) como factor generador de paro, consideraba que el desempleo era fruto de un desajuste entre las necesidades de mano de obra de la economía nacional y el tamaño de la población, sobre todo en algunas regiones de España como Andalucía y Extremadura:

“Ocurre, sencillamente, que la población agrícola es superior a la que las necesidades de los respectivos cultivos exige. Debido a ello, gran parte de la misma se encuentra en situación de paro permanente.

Se trata de un paro de signo positivo, es decir, de los que dijimos que se originaban por influencia del factor demográfico no por una reducción o crisis de trabajo.”<sup>82</sup>

La idea de darle una salida por medio de los procesos migratorios se palpa, independientemente de consideraciones ideológicas, en lo detestable que resultaban a los ojos de los mandatarios de la política social española leyes republicanas como de Términos Municipales, la cual tendía a limitar los desplazamientos de obreros agrícolas de unos términos a otros. Estas medidas se consideraban como calamitosas y perjudiciales, pero desde 1939 se generalizó la opinión

opuesta. "Creemos que es un grave error el dificultar la emigración de los campesinos. La liberación del campo de una parte de la población agrícola constituye precisamente uno de los exponentes del progreso económico-social de una nación, y el establecer por medidas legales un bloqueo de estos movimientos es un grave error. Lejos de dificultar esta emigración del campo, una razonable política económica debe favorecerla en lo posible, sobre todo en aquellas provincias donde no se produzca espontáneamente en la proporción conveniente,"<sup>83</sup> afirmaba Dionisio Martín (jefe nacional del sindicato del olivo). En este contexto, se concibieron unas políticas de corte meramente técnico, que en absoluto tenían como objetivo alterar las estructuras del campo español. Así, se desarrollaba un doble discurso por parte de los dirigentes de la política social española dado que, por una parte elogiaban al mundo campesino como depositario de las nobles cualidades nacionales y, por otra, no dudaban, con su pasividad, en mantener una situación que generaba, sobre todo en los años cuarenta, un muy bajo nivel de vida y que obligaba, como única alternativa, a llevar a cabo procesos migratorios con salidas laborales dudosas en el ámbito urbano y con residencia en zonas escasamente habitables.

En este sentido, la política llevada a cabo no se alejaba grandemente de los criterios defendidos por la O.I.T. en la creencia de que "los cambios tecnológicos, al provocar un aumento en la demanda y en la producción servirían para contrarrestar o superar los efectos del descenso en las necesidades de mano de obra por unidad de producción."<sup>84</sup>

Y es que la II República, expresión de "la abyección judeodemocrática,"<sup>85</sup> se consideraba, en el marco propagandista de la época, como una de las causas fundamentales de la "perdición" de España y el factor más decisivo de la realidad laboral española así como del gran peso del paro hasta el punto de considerar que en julio de 1936 debía haber en torno a los 900.000 desempleados en la zona republicana. Y es que a los ojos de órganos de expresión del ministerio de Trabajo como la Revista de Trabajo la dominación "roja" había sido causa excepcional del declinar de España en el ámbito del empleo por varios motivos que a renglón seguido se exponen y que tienen relevancia no por la objetividad de los argumentos dados (poco matizados, más bien maniqueos y poco sostenibles historiográficamente) sino por cuanto reflejan el esquema propagandístico y justificativo de la cruda realidad que España vivía a principios de los años cuarenta:

- "1.- El destrozo, por el vandalismo rojo a consecuencia de la guerra misma, de las zonas más industrializadas de nuestra Patria, que fueron precisamente aquellas en que con más intensidad fue preciso combatir.
- 2.- El agotamiento de las reservas capitalizadas.
- 3.- La absoluta desarticulación económica y comercial de toda la que fue zona roja.

- 4.- La escasez de instrumentos y herramientas, así como de materias primas y elementos varios necesarios para la producción.
- 5.- La carencia de valuta exterior.
- 6.- La total desconexión del transporte en todas sus formas y la pérdida total de un elevadísimo número de unidades de transporte, tanto terrestre como marítimo, con que se contaba.
- 7.- El abandono bajo el dominio rojo de amplias áreas cultivables, que en grandes zonas se habían convertido en eriales con lo que se hizo imposible la inmediata reanudación en ellas del cultivo una vez terminada."<sup>86</sup>

En definitiva, el paro en España se percibía, exceptuando el estacional, fuera de los moldes clásicos explicativos de dicho fenómeno. Dado que nuestra inactividad laboral era fruto de un paro de peones y nuestro desarrollo industrial en los cuarenta no era muy relevante, aquél no podía deberse (al menos en ese período) al avance del maquinismo. Por otro lado, dada la falta de producción y el hecho de que nuestra crisis económica no tenía como motivo la típica crisis de superproducción, la razón había que encontrarla (única y exclusivamente) en la guerra civil "que hemos tenido que librar, que, además de haber agotado nuestras reservas, de haber destruido gran número de instalaciones, de haber convertido en eriales las tierras cultivadas, ha producido un tremendo colapso ocasional en nuestra economía, del que lentamente estamos rehaciéndonos. Las causas del paro que se registra en nuestra patria deben necesariamente buscarse en la guerra, en las devastaciones causadas por los rojos..."<sup>87</sup> Desde una perspectiva distinta la destrucción generada por la guerra tuvo que incidir en la creación de una reserva de mano de obra con nulas posibilidades de presión efectiva sobre el poder lo cual habría de incidir en la bajada en términos reales de las retribuciones de los trabajadores con la canalización de plusvalías hacia otros sectores del proceso de producción distintos a la masa de los asalariados.

Este era el problema de mayor trascendencia cuantitativa para el régimen tanto por su peso específico como por la posible repercusión política. Y es que la norma programática de la Falange, redactada en noviembre de 1934, abordaba, aunque de una manera retórica y difusa, el tema del campo español señalando en su punto nº 22 que sería "designio preferente del Estado Nacionalsindicalista la reconstrucción de los patrimonios comunales de los pueblos."<sup>88</sup> Pese a que no se llegó a materializar esta idea, en plena guerra civil se suprimía el Instituto de Reforma Agraria y por Decreto de 6 de abril de 1938 se creaba el llamado Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra suprimido, posteriormente, por Decreto de 18 de octubre de 1939 y sustituido a su vez por el Instituto Nacional de Colonización cuya actividad se encauzaba esencialmente hacia los regadíos.

Sin embargo, era este tipo de paro el que se consideraba previsible y, por tanto, el que mayor posibilidad "teórica" de previsión planteaba, tanto para empresarios como para obreros, pese al hecho de que año tras año se demostraba el error de esta apreciación.<sup>89</sup> Sobre todo, esta cuestión podía ser válida para los empresarios en los años de mayor atracción del régimen por la nación alemana e italiana. Existe una tendencia en la Revista de Trabajo (órgano del ministerio de Trabajo) a desapuntalar parcialmente la idea keynesiana en torno a la incidencia del atesoramiento de las clases sociales dirigentes como uno de los factores para entender la falta de inversión y la incidencia consecuente en el nivel de empleo. Hasta tal punto se hace eco de dichos planteamientos que dicha revista se deshace en elogios del libro de Alfonso Bosch Aymerich<sup>90</sup> en el que, basándose parcialmente en el teórico de la economía del nacionalsocialismo alemán Heinrich Rittershausen y en John Maynard Keynes, exponía la necesidad de crear en España la llamada Institución Compensadora o "I.C." cuya finalidad esencial sería la de formar reservas y crear bienes fijos.<sup>91</sup> Sería éste un organismo estatal encargado de regular el volumen de inversión, sobre todo en las épocas de depresión en las que llevaría a cabo las inversiones que la iniciativa particular no materializase. La apreciación pone de manifiesto las ideas que se ponían en juego como armas para luchar contra el paro y la forma, en cierto modo simplista, con que se podía abordar. Sin embargo, los planteamientos de éste y otros autores no difieren de forma radical de los esquemas keynesianos a la hora de hacer su diagnóstico sobre la situación del desempleo en nuestro país. Y así, el mismo Bosch afirma lo siguiente:

"...podemos afirmar que la causa de una crisis es la falta de producción de bienes fijos por la falta de inversión de una parte de las rentas percibidas por la clase rentista y no destinadas a bienes de consumo, y, por tanto, que las causas de una crisis económica y del paro obrero no se han de buscar más que en aquellas personas de la clase rentista que han dejado de consumir una parte de sus ingresos."<sup>92</sup>

En esta línea de argumentación, se entiende la llegada a España del profesor Beveridge<sup>93</sup> para inaugurar en la Universidad de Madrid la Cátedra de Seguridad Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas dotada por el Instituto Nacional de Previsión en marzo de 1946. Sus palabras eran indicativas de hasta que punto se estaban haciendo propios, al menos en parte y formalmente, presupuestos propios de esquemas keynesianos en nuestro país:

"El gasto es de muchas clases: adquisición de alimentos, de vestidos y otros bienes perecederos; uso de servicios como los de agua, luz y transporte; adquisición de bienes duraderos, como casas y mobiliario; establecimientos de fábricas y adquisición de maquinaria o materias primas; servicios prestados a la comunidad por los organismos oficiales en materia de defensa, comunicaciones, educación, sanidad, etc. Para que esta

ocupación sea total, la suma de estos gastos debe ser suficientemente alta para que sea empleado todo el trabajo disponible.”<sup>94</sup>

Por el contrario, se tiende a cargar las tintas sobre el decaimiento y la falta de grandes empresarios o, lo que es lo mismo en un lenguaje de mayor sesgo fascistizante, de los llamados capitanes de industria “capaces de afrontar las dificultades económicas y morales y de coordinar con métodos e invenciones nuevas y sin residuos las fuerzas del capital y del trabajo.”<sup>95</sup> Y es que el modelo que en estos años se pretende seguir está, aunque de una forma vaga, inspirado en la política de estas naciones sobre las que sistemáticamente se realiza una apología en torno a sus realizaciones en orden a conseguir el ideal del pleno empleo:

“...ocurre que en Alemania, uno de los países empobrecidos, en el sentido moderno de la economía, y de los más afectados por el problema (*del paro*)...se absorben los brazos desocupados con un ritmo tan vertiginoso...que ya antes de la guerra actual se produce el desconocido suceso en la Europa contemporánea de la falta de trabajadores en relación a las demandas. Fenómeno análogo se ha producido en Asia con el Japón, país que precisamente no ha estado nunca sometido al Birth Control.”<sup>96</sup>

Pese a lo que acabamos de mencionar es posible encontrar aseveraciones de signo contrario en boca del que estuvo al frente durante más de diez años del Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación y de la Obra Sindical “Lucha contra el Paro”. Nos referimos a José Redondo Gómez que en torno a la persona del economista inglés afirma en 1955 lo siguiente:

“A nuestro entender, la más exacta fórmula del paro la da el economista Lord Keynes en su libro *Teoría general del empleo, el interés y el dinero*. El paro es, para Keynes, la manifestación de la desigualdad entre el coeficiente de ahorro y el de inversiones. Por lo tanto, si evitamos esta desigualdad, el paro no puede producirse. O sea, que una política contra el paro ha de dirigirse a garantizar que las inversiones consuman la totalidad del ahorro...”

De acuerdo con su teoría, Keynes confeccionó un plan contra el paro que, si en la práctica no se ha manifestado con la eficacia absoluta que pretendía la teoría, sí ha sido lo suficientemente fértil para constituir, hasta ahora, la base más sólida de cualquier sistema de acción contra el paro que se intente confeccionar dentro de cualquier estructura económico-laboral particular.”<sup>97</sup>

“Las formas de paro más graves y que nos interesan en este momento son aquellas cuya naturaleza, eventualidad y duración no pueden preverse, y que se presentan en proporciones cuantitativas importantes,” se afirmaba en la Revista de Trabajo.<sup>98</sup> Cabría preguntarse si el paro que sistemáticamente se daba en las provincias andaluzas o en Extremadura no constituía una forma de desempleo que, por su sistematicidad y previsión, no era objeto de especial atención por este ministerio y si por dicha causa se estaba permitiendo, de hecho, que el mercado de trabajo se reequilibrara de forma natural.

Sin embargo, hay que decir que siguiendo la tradicional inquina hacia el liberalismo la causa de la situación que España vivía se hacía proceder también del liberalismo y sus males:

“Es, a modo de ver, algo que, participando de fenómeno económico, se ha producido por diferentes causas y, en especial, por la abstención del Estado liberal, por olvidar los hombres los principios cristianos, por estimarse el trabajo como una mercancía con abstracción completa del hombre...”<sup>99</sup>

#### **10.4. Los remedios teóricos del franquismo contra el paro.**

Establecida esta división los remedios planificados para subsanar esta situación estaban en consonancia con un tipo de régimen esencialmente autoritario y represivo. Para el paro crónico, creación de Escuelas de Formación Profesional y fomento de la Obra Sindical “Lucha contra el Paro” multiplicando campamentos de trabajo. Y para los vagos, “lo más eficaz serán las medidas dictadas por las Autoridades Gubernativas, en la forma que estimen oportunas.”<sup>100</sup>

Para el paro estacional se preconizaba la necesidad de un extenso proyecto de obras públicas a realizar en los periodos de menor actividad, a fin de coordinar los trabajos agrícolas con los generales. No se tenía muy en cuenta que en las altas cifras de paro incidía no sólo una realidad económica esencialmente agrícola, sino también la escasez de materias primas y su más ineficaz distribución (lo cual desincentivaba las contrataciones), la dificultad en los transportes, los problemas en el suministro eléctrico que suspendía o aminoraba la actividad empresarial, etc.

La filosofía existente en torno al mundo del trabajo hacía que la reducción de la jornada no fuera aceptable en un país en el que el gran problema era, en parte, la producción. Tampoco era aceptable un seguro contra el paro de base nacional y ello en función de los “peligros” que se consideraba que traería dada la supuesta “psicología del productor.” Se entendía que el riesgo mayor de este seguro sería el de convertir al trabajador español en un pensionista.<sup>101</sup>

Las ideas (sólo ideas) para resolver la acuciante situación de los trabajadores españoles se centraban en la necesidad de fomentar las empresas particulares. Y ello sin tener en cuenta su necesidad sistemática de recurrir al mercado negro dada la insuficiencia, irregularidad y falta de calidad de los cupos. Se pretendía potenciar el consumo de los españoles para dinamizar la producción de bienes sin tener en cuenta que la falta de poder adquisitivo mantenía a una parte importante de la población en los umbrales de la pobreza. También se percibía la necesidad de desarrollar planes concretos por medio del Estado, provincias, municipios u órganos sindicales para aminorar el paro en los meses invernales. Dichos planes habrían de centrarse en las obras hidráulicas, en la construcción de casas rurales, instalación de industrias, repoblación forestal, etc., etc.

Hay que decir que, quizás, una de las fórmulas más recurridas para solucionar la situación de desempleo en las áreas rurales fue la de la mencionada repoblación forestal. Ello se debía a que ofrecía algunas ventajas como el hecho de que no se necesitaban trabajadores especializados, se constituía en base de una futura industrialización, incidía positivamente en el entorno evitando procesos erosivos intensos y sobre todo se percibía que facilitaba la autarquía.<sup>102</sup> En definitiva, grandes proyectos que en su gran mayoría no se llevaron a cabo o que cuando se desarrollaron no respondieron cuantitativamente a los fines planteados. Y sin embargo, el remedio general no podía estribar en absorber esporádicamente una mayor o menor cantidad de brazos sino en la creación de fuentes de riqueza.

Desde el sindicalismo más defraudado por el rumbo que tomaba la economía y la primacía de aquella sobre cualquier otra consideración política, se levantaban voces contra aquella política de sesgos caritativos sobre la que pululaban un sinfín de especuladores y de adoradores del becerro de oro con el fin de enriquecerse sin límite:

“No es suficiente repartir con un criterio más o menos lógico una cantidad más o menos importante, invirtiéndola en obras publicas, que no siempre son necesarias y productivas. La causa del paro es muy honda; la economía, cual un ser humano es un organismo que vive afectado por diversas fuerzas estrechamente ligadas entre sí y si queremos a fondo atacar este mal, mejor lo haremos suprimiendo las causas que eliminan lo efectos. Hay que renovar doctrinas perjudiciales para la economía patria.”

103

Las dificultades para conseguir las metas propuestas y sobre todo para restablecer el equilibrio entre precios<sup>104</sup> y salarios pasaban según la Comisión V del Consejo Nacional de Ordenación Social por integrar en un sólo organismo las funciones dedicadas a resolver y dirigir la política de la mano de obra, un problema que para el régimen tenía un sesgo no sólo social o económico



sino también político. Esto último, porque el reconocimiento del fracaso suponía admitir que el Estado franquista era incapaz de cumplir la promesa solemnemente promulgada en el Fuero del Trabajo de proporcionar un salario y un trabajo a cada productor. En lo económico cada descolocado era considerado como un parásito y como un factor negativo socialmente, dado que no producía y si consumía. En su vertiente social había que tener en cuenta que el bajo nivel de vida de los españoles era un factor que potenciaba la demonizada subversión y las teorías y doctrinas clasificadas como disolventes del espíritu nacional.

### **10.5. El paro antes de la llegada de Girón al ministerio de Trabajo.<sup>105</sup>**

Es inaudito que las cifras medias de paro para el año 1938 se situaran en términos reales en 64.297 parados.<sup>106</sup> Solamente podemos dar crédito a estas cifras si partimos del hecho de que únicamente se consideraba la población en paro dentro de la España dominada por las tropas franquistas, lo cual dejaba fuera a ciudades tan significativas como Barcelona, Madrid o Valencia. Por otro lado, el mayor coeficiente de desempleados se registraba, como no, en las actividades agrícolas y forestales en las que el coeficiente oficial se situaba en un 32,32 % (casi la tercera parte de la población española) cuando todavía en los años cincuenta alrededor del 50 % de la población activa pertenecía al sector primario. La razón radicaba en el peso de una actividad que no tenía un carácter permanente, sino estacional y en la que el monocultivo estaba extendido por amplias zonas del territorio nacional. Ello, de entrada, permite desconfiar de las cifras ofrecidas. Este será el motivo de que dediquemos una especial atención a este sector. Siguiendo a Manuel de Torres se entiende la relevancia mayúscula del mismo:

“...España ha sido, es, y será por muchos años, un país agrícola, en el sentido de que las ondas de prosperidad irradian de la agricultura. España es un país agrícola en el sentido de que el poder de compra básico residen en la agricultura; su situación determina el pulsar enérgico o el languidecer de la coyuntura del país.”<sup>107</sup>

El paro agrícola considerado por las autoridades republicanas para el 18 de julio de 1936 situado en un 66,66 % de la población activa parece más próximo a la realidad que las cifras ofrecidas por unas autoridades franquistas con tendencia a ganarse la adhesión popular por la vía de lo social y discapacitadas por el estado de guerra, por la carencia de medios y por la falta de colaboración tanto de empresarios como de trabajadores con los organismos creados para tal fin. Evidentemente iba a ser este sector el más rudamente castigado por el mal del paro y sus consecuencias sociales. Y es que “el rasgo más sobresaliente de los años posteriores a la guerra civil es sin duda el absoluto estancamiento de la producción agrícola en niveles muy inferiores a los prebélicos” lo cual “se refleja en las series de índices elaborados por el Consejo de Económico Nacional, que sitúa los niveles productivos del quinquenio 1941-1945

aproximadamente alrededor de un 25 % por debajo de los del quinquenio 1931-35<sup>108</sup> lo cual no era únicamente debido a la falta de maquinaria, de abonos o a las condiciones climatológicas. A ello hay que añadir la política económica llevada a cabo por el estado franquista y su estructura intervencionista además de la influencia del mercado negro de productos alimenticios básicos sobre la estadística oficial.<sup>109</sup>

De igual manera la industria en general se vio afectada por la falta de bienes de equipo, recambios y materias primas así como por la especulación. Todo ello, configuró un panorama de escaso crecimiento industrial<sup>110</sup> que venía a confirmar el “signo adverso que en la historia de la industrialización española tiene el decenio de 1940”<sup>111</sup> y que para algunos autores como París Eguilaz (de un forma excesivamente simplificada) sólo tendrían como causa “justificada” la ausencia de divisas:

“Sin créditos exteriores y teniendo que dedicar una parte de divisas disponibles a la importación de alimentos para evitar los efectos de la escasez, como consecuencia de la caída de la producción agrícola provocada por la guerra civil, no era posible importar maquinaria y equipos en la cuantía suficiente, y de ahí que el resultado fuera bastante limitado...”<sup>112</sup>

El siguiente grupo de actividad que más número de parados cobijaba era el de la construcción con un 18,62 % de los desempleados. El siguiente grupo más afectado era el denominado como “Otras industrias y Profesiones”, que se constituía como un cajón de sastre donde tenía cabida un número prácticamente infinito de profesiones sin una cualificación concreta y específica. El paro en este sector se había incrementado, según las autoridades, dado que un “número de mujeres han pretendido en la zona nacional, el acceso a puestos de trabajo de fácil sustitución que antes ocupaban los hombres movilizados para el frente, y además el extraordinario volumen de refugiados procedentes de la zona roja sin preparación adecuada para un oficio calificado han tratado de ocupar puestos de trabajo de carácter indeterminado...también...el extraordinario número de mujeres cabezas de familia, no sujetas a la patria potestad y ancianos carentes de pensiones de retiro que han tratado de obtener los beneficios del decreto del pago de alquileres, agua y luz que les exigía la certificación fehaciente de estar parados”.<sup>113</sup>

Continuaban en orden de importancia la industrias del mar, la confección, vestido y tocado, el comercio, las industrias de la madera, las de la alimentación, la banca, seguros y oficinas y la pequeña metalurgia todas ellas con un coeficiente por encima del 2 %. Los restantes sectores considerados oficialmente tenían un porcentaje inferior a la cifra señalada.

En definitiva, en la agricultura se centraban (si consideramos las cifras oficiales) una tercera parte de los parados y uniendo los porcentajes de ésta, la industria de la construcción y el grupo de actividades denominado "Otras industrias y profesiones" sumaban casi un 70 % de los desempleados a la altura de 1938 en la España Nacional.

En el año 1939, tras la formación del primer gobierno del general Franco, por parte del ministerio de González Bueno se partía de la apología de las naciones totalitarias del Eje como elemento de referencia básico en cuestiones laborales. Se era consciente del problema que la gran enfermedad social del siglo XX podía suponer. Es decir que, lo que en cierta manera tenía un carácter intermitente, pudiera adquirir un carácter permanente. Se partía de la idea (bastante simple) de que la coordinación de la oferta y la demanda de empleo, así como la atención a las técnicas de aprendizaje y a la reeducación profesional terminarían con el problema del paro siguiendo ese modelo de orientación mencionado que era el de las potencias del Eje:

"Conviene destacar frente a dicha trayectoria del paro en 1938 la excepcional situación de las naciones totalitarias: Alemania, Italia y Japón, que carentes de oro, han sabido dar una organización espléndida a su economía y absorber su paro -que alcanzaba cifras fantásticas- mientras los países de stocks más abundantes del mismo, Francia, Inglaterra y Norteamérica atraviesan una grave depresión y sus parados se cuentan por millones, con tendencia ascensional".<sup>114</sup>

En febrero de 1939,<sup>115</sup> todavía sin finalizar la guerra civil, la situación del paro representaba unos porcentajes de desempleo notablemente elevados, si bien, pese a las elevadas cifras que se presentarán hay que considerar el hecho de la incapacidad de las autoridades franquistas para controlar las dimensiones reales del paro así como la poco controlada situación que se sufría en aquellos momentos fruto de la guerra.

Hay que considerar también que fue precisamente en febrero de 1939 cuando se empezó a considerar (y, por tanto, a intentar controlar de forma efectiva) la estadística de colocaciones realizadas por los organismos oficiales. Hay que tener en cuenta igualmente, por lo que se refiere a las dimensiones del número de parados considerados, que Cataluña, Madrid y Castilla la Nueva así como Teruel no son consideradas en las estadísticas oficiales. Si exceptuamos las mencionadas zonas el número total de parados oficiales ascendía a 70.573 de los cuales 22.334 se concentraban en el sector agrícola, lo cual equivalía a un 31,6 % de la población activa.

Valoraciones sobre la situación sociolaboral, y concretamente sobre el paro, como las que se exponen con respecto a Palma de Mallorca parecen difíciles de aceptar, al menos en cuanto a las dimensiones microscópicas del desempleo en esta región: "Ha mejorado notablemente la situación al importarse pieles y curtidos, y seguirá mejorando a medida que las actividades de

las fábricas de calzado vayan en progresión. Frente a igual mes de 1938 ha disminuido el paro en cerca del 100 por 100.”<sup>116</sup>

Sobresale el hecho de que, considerando a la población masculina y femenina el segundo sector económico que mayor número de parados representaba era el denominado “Otras Industrias y Profesiones” en lo referente al sector femenino. Dentro de este grupo se hallaban 11.625 mujeres. Según las autoridades del ministerio de Organización y Acción Sindical dicho elevado número de mujeres aparecían como paradas en función de las posibilidades de exención de pago de alquileres y suministros gratuitos de luz y agua que exigían dicha certificación. Más bien habría que considerar el hecho de una situación familiar económicamente deprimida, con un alto número de varones en el frente de batalla cuya aportación al núcleo familiar había de ser paliada con el trabajo de las madres de familia (o su voluntad de trabajar) como forma única de compensar la pérdida de rentas aportadas por el marido o el varón de la familia.

Partiendo de la inexactitud, y de lo posiblemente erróneo de estas cifras, se habrá de concluir que el alto porcentaje de parados dificultaba desde un principio la cohesión social del ya naciente Estado franquista. Las motivaciones que incidían en el aumento del número de parados eran, según las autoridades franquistas las siguientes:

“Conviene destacar que el aumento de las cifras de paro obedece en su mayor parte, al auge en toda España de la actividad de Oficinas y Registros de Colocación que van recogiendo íntegramente el movimiento de la mano de obra que antes permanecía sin control alguno existiendo un sistema colocador inadmisibile al que ahora se va poniendo fin.

Este aumento naturalmente ha de reflejarse en meses posteriores sin que ello, repetimos, signifique un empeoramiento de la situación, sino, contrariamente, una mejor eficacia de los servicios oficiales de colocadores.

Madrid, Mayo de 1939. Año de la Victoria.”<sup>117</sup>

Así pues, el elevado número de parados se entendió, sorprendentemente, como un dato en favor de la colaboración efectiva de los trabajadores españoles y no como un índice de la depauperada situación por la que atravesaban gran parte de las familias. El caso de Santander está en línea con esta aseveración:

“La mano de obra en paro, antes alejada completamente de las instituciones oficiales de colocación, tiende a inscribirse en su casi totalidad. Apenas quedará un 5 % de la

misma sin registrar. No debe considerarse por tanto que aumente la depresión sino el auge registral que se deja expuesto.”<sup>118</sup>

En algunas provincias a la altura de febrero de 1939 el paro había disminuido fruto de la realización de actividades agrícolas o de tipo forestal. Y es con ello (la repoblación forestal), con la colonización agrícola y con un plan de obras públicas con lo que se pretendía acabar con el problema del paro en España,<sup>119</sup> siguiendo en parte la influencia de J. Maynard Keynes y la idea de la utilización de las obras públicas como mecanismo de atenuación del paro.<sup>120</sup> Era el caso de Ávila, Badajoz, Granada, Valladolid, Zaragoza, Huelva o Cáceres. En esta última se consideraba la positiva incidencia que tendría en el paro femenino la realización, por parte de las mujeres, de labores agrícolas auxiliares o complementarias cuya época correspondía a los meses inmediatos y que deberían absorber “totalmente el paro que ahora se nota.”<sup>121</sup>

En otros casos, los motivos que potenciaban el paro estaban ligados a las dificultades de transporte que impedían la llegada de materias primas fundamentales. Tal era la situación de la industria de la construcción en Burgos, Pontevedra y Orense; o Huesca en el caso de la alpargatería y los talleres de confección. En lo referente a este último caso hay que hacer referencia a “la llegada de refugiados procedentes de Cataluña”<sup>122</sup> que al ser tomada por las tropas nacionales se volvían en gran medida a sus pueblos de origen. Aun aceptando este hecho, habrá que hacer referencia a la inherente tendencia humana a huir de las proximidades de los frentes de batalla en un momento en que estaba próxima en el tiempo la caída de Barcelona (26 de enero de 1939) y el fin de la resistencia en Cataluña (10 de febrero de 1939).

Para seguir haciéndonos una idea de la situación sociolaboral de la zona franquista al final de la guerra civil haremos alusión a los datos del mes de marzo de 1939.<sup>123</sup> Por dichas fechas el número de parados totales considerados ascendía a 78.022, siendo el sector agrícola el que mayor número de parados ostentaba: 28.004 parados/as (35,8 %), si bien hay que incidir en la inexactitud de estos datos y sobre todo en la posible percepción errónea si no se insertan en un marco todavía de enfrentamiento bélico que embebía a gran parte de la población masculina para dicho fin.

Se partía del craso error, que años después se empezó a reconocer por parte de las autoridades, de que lo abultado de las cifras de paro obedecía al hecho de que en este segundo mes del año 1939, próxima a su fin la guerra civil, se inscribieron cerca del 95 % de los parados. De igual manera, se partía de este notable error o de la media verdad interesada con el objetivo de cohesionar a la población.

Lógicamente (en función de los criterios de los vencedores de la guerra civil) las dificultades notables que se podían encontrar en provincias con una situación muy complicada, como era el caso de Córdoba, obedecían “a la anárquica situación en que dejó a la mayor parte de la provincia la dominación roja.”<sup>124</sup> El caso de Granada, también supuestamente “carcomida” por la actividad de las autoridades republicanas obedecía al mismo principio, lo cual no responde siquiera al conocimiento de la situación real de dichas provincias, sino únicamente al lenguaje de campaña y combativo de un período de enfrentamiento militar.

El informe de marzo al que aludimos hacía especial referencia a la situación de Asturias y, concretamente, de las cuencas mineras, poniendo de manifiesto la alta oferta de la cuenca de Mieres para cubrir los puestos de fundidores, entivadores y barrenistas. “La terminación feliz de la guerra provocará un auge de todas las actividades consumidoras de carbón, lo que unido a la vigorización de la política del consumo de los productos estrictamente nacionales hace se pueda mirar con el mayor optimismo el porvenir de la cuenca minera,”<sup>125</sup> se afirmaba haciendo un resumen sobre la futura prosperidad de la cuenca asturiana al socaire de una política económica autárquica y de la previsible recuperación de la economía española.

En líneas generales, por lo que se deduce de los informes próximos al final de la guerra civil, la nota característica era el excesivo optimismo que todavía no percibía la realidad de un mundo del trabajo (empresarios y trabajadores) que no estaba dispuesto a colaborar de forma efectiva con los organismos creados por el franquismo social con el objetivo de controlar la situación del desempleo en el país. Pecaban igualmente de una notable incapacidad para controlar efectivamente las cifras de paro ante esa misma falta de colaboración.

La siguiente referencia que vamos a ofrecer corresponde al mes de abril de 1939.<sup>126</sup> Si atendemos a algunas consideraciones de la información que de este momento nos ha sido posible obtener comprenderemos más certeramente la necesaria y desproporcionada inexactitud de las cifras de paro manejadas por las autoridades franquistas. El ministerio de Organización y Acción Sindical partía de la idea de que, acabada la guerra civil, se había recuperado para la vida del orden y para la civilización cristiana esa otra parte de España que hasta los últimos momentos había permanecido en manos de los denostados “rojos.” Consecuentemente, la imagen que se transmite de ese período no puede ser más negativa si se parte de la consideración de que se ofrecen como cifra de paro oficial anteriores al levantamiento del 18 de julio la de 843.872 parados.

En el mes al que nos referimos, finalizada la guerra civil, las cifras de paro se elevaban oficialmente a 86.251. Hay que tener en cuenta, como ya se ha mencionado, que en los guarismos considerados no se incluía todavía a Cataluña (salvo Lérida que ya aparece en el

informe de marzo de 1939), Madrid, Castilla la Mancha ni Teruel. Es decir, el marco geográfico sobre el que el estudio estadístico se centraba era idéntico al considerado en febrero de 1939 si exceptuamos a la provincia leridana. De hecho, de febrero a abril de 1939 el paro había aumentado en un 22,2 %. Pese a ello imperaba la propagandística idea, postergada años más tarde, de que los organismos creados para combatir el paro habían obtenido unos resultados verdaderamente óptimos.

En otros casos las notables dificultades de la población tenían que suplirse a base de procesos migratorios, en ocasiones de carácter intercomarcal, como el caso de los obreros de la provincia de Granada. Lógicamente, dada la mentalidad imperante y el modelo de sociedad que se pretendía implantar, el paro femenino era considerado como un paro de segunda categoría. El hecho de que gran número de mujeres, madres de familia, sin profesión calificada se inscribieran en las oficinas y registros de colocación en la deprimida región andaluza era considerado como un ejemplo de paro de segunda categoría que únicamente perseguía la posibilidad de trabajar algunos meses en las actividades agrícolas (o conserveras, como era el caso de Huelva) para, posteriormente, reintegrarse a las actividades y quehaceres habituales y domésticos. Partiendo del modelo de sociedad que el franquismo social pretendía implantar, hay que destacar el hecho de que, como se acaba de exponer, las cifras oficiales de paro solamente hacían hincapié de forma efectiva en el paro de los varones. Con respecto a Oviedo se afirma que "no existe problema de paro ya que las demandas pendientes corresponden a solicitantes menores de 16 años y a mujeres que solicitan ocupaciones auxiliares."<sup>127</sup> Si alguna conclusión hay que sacar de la situación sociolaboral aquí reflejada es la necesidad imperiosa que tenían los núcleos familiares de que todos sus miembros útiles trabajasen para ganar el sustento, lo que puede dar idea (aunque mínimamente sin considerar otras variables) del nivel de "bienestar" real en el que se encontraban. En el caso de Santa Cruz de Tenerife se afirma que no existía paro "pues los de tal situación eran menores de 20 años."<sup>128</sup> Aunque si era cierto que en algunas zonas como Segovia, sectores como el textil, vieron como se incrementaba el número de mujeres en paro al disminuir la oferta de empleo destinada cubrir los puestos que habían dejado los varones movilizados.

En aquellos casos en que se observaba una mayor incidencia del paro las motivaciones mecánicas recurrían instintivamente al chivo expiatorio de los "rojos." En el caso de Las Baleares, el incremento de los desempleados se debía a la reincorporación a la estadística de la Isla de Menorca "donde estaba totalmente desorganizada la industria,...y que los rojos han dejado en condiciones lamentables. Esta circunstancia adversa será naturalmente vencida con la rapidez que caracteriza a la España Nacional."<sup>129</sup> Caso similar, según la autoridades del ministerio de Trabajo, era el de Córdoba, zona de notable influencia de las denominadas fuerzas

subversivas y en la que se percibían notables dificultades para el reingreso de la población civil a los quehaceres anteriores a la guerra.

La Revista de Trabajo señala que la primera estadística veraz realizada tras la guerra correspondía a julio de 1939 y en ella la cifra de parados ascendía a 455.145 (313.271 varones y 141.874 mujeres), cifra poco creíble por cuanto si en los años cincuenta la exactitud del aparato estadístico en lo referente al paro era mínima, unos tres meses después del final de dicha guerra su imperfección habría de alcanzar límites que permitirían doblar como mínimo o quizás triplicar las cifras aceptadas como oficiales. Y todo ello sin tener en cuenta el número (seguramente muy elevado) de personas que, fruto del conflicto armado, tuvieron en los meses siguientes problemas de más urgente solución que el de procurar dar a conocer su situación socioprofesional a los organismos competentes.<sup>130</sup> Por ello, en septiembre de 1939 podemos encontrar la cifra oficial de 632.513 parados. Sólo el mal funcionamiento del aparato estadístico y las depuraciones técnicas del mismo permitieron situar la cifra de parados en diciembre del mismo año en 441.388.

Independientemente de la incidencia de la llamada a filas de los varones, el número de parados considerados el 18 de julio de 1936 no permite aceptar sin más las cifras de paro que las autoridades franquistas manejaban, por ejemplo, en los meses anteriores al fin de la guerra. Ó, por el contrario, este planteamiento permitiría desconfiar de las cifras aportadas con respecto a las fechas anteriores al alzamiento y posteriores a la guerra. La consecuencia de ello era una percepción sesgada de lo nocivo y dañoso que había sido para España la semilla de la II República asimilada a la revolución social representada por el comunismo internacional:

“Hay que considerar ahora que en la zona recién rescatada existe una desarticulación completa producida por el largo dominio expoliativo de los rojos, que se traduce en graves dificultades para la puesta en marcha de los instrumentos de producción y renta por ellos destrozados y agotados.

...No será necesario un quinquenio para demostrar nuestra superioridad sobre la de 1931-36, pues en un plazo mucho más breve la comparación resultará extraordinariamente ventajosa a nuestro favor. Podemos afirmarlo por anticipado.”<sup>131</sup>

La inconsistencia de las cifras aportadas sobre los parados se palpa de forma todavía más clara desde el momento en que se considera como situación poco grave aquella en la que el paro es débil, como por ejemplo el caso de Sevilla, sobre la que se afirma que en cuanto “a la mano de obra agrícola, no existen problemas de paro ya que el registrado es parcial.”<sup>132</sup>



Casos como el de Vizcaya eran excepcionales. En esta provincia, debido a la importancia de su gran industria siderometalúrgica, existían unos altos niveles de producción, lo cual generaba una oferta de empleo relativamente amplia para obreros especializados que había de cubrirse con operarios de otras provincias. El paro femenino aumentaba en la medida en que se producía la desmilitarización de las industrias y la vuelta de las mujeres a sus hogares tras el regreso a los trabajos habituales de los varones que fueron a la guerra.

### 10.6. La sacudida del paro en la primera mitad de los años 40.

Disponemos de poca información sobre la situación del paro en los primeros años de la década de los cuarenta. Según algunos autores el número medio de parados en el año 1941 fue de 447.090.<sup>133</sup> Aunque utilizando como fuente el Anuario Estadístico de España el promedio anual fue de 450.014 (132.650 en agricultura y 66.156 en construcción) y 474.808 en 1940.<sup>134</sup>

Según las estadísticas oficiales, el paro en los cinco primeros meses de 1941 fue como a continuación se expone mostrando la difícil coyuntura económica y su consiguiente lectura social, lo cual era interpretado como el fruto de la falta de utilidad de la Falange, del Falangismo y de la organización sindical.<sup>135</sup>

Mes	Parados
enero	524.211
febrero	509.856
marzo	505.637
abril	501.852
mayo	471.426

*\*Cuadro nº 15. Parados en los cinco primeros meses de 1941.*<sup>136</sup>

Oficialmente en 1942, concretamente en su primavera, la cifra de parados ascendía a 388.192 (283.188 hombres y 104.904 mujeres). Y ello pese a que en el campo español, y concretamente en el verano habían aparecido algunos problemas para la cosecha de cereales sobre todo centrada en las siguientes cuestiones: la falta de segadores en determinadas zonas, el desconocimiento exacto de las regiones necesitadas de este tipo de trabajadores (y la consiguiente desorganización administrativa para dar solución a dicha cuestión) y la necesidad de compensaciones entre áreas deficitarias y no deficitarias de mano de obra.<sup>137</sup>

Provincia	Nº de parados en 31 de diciembre de 1942
Álava	346
Albacete	-
Alicante	4.978
Almería	3.434
Ávila	412
Badajoz	11.710
Baleares	2.105

Barcelona	12.217
Burgos	330
Cáceres	5.970
Cádiz	12.025
Castellón de la Plana	1.151
Ciudad Real	109
Córdoba	6.268
Coruña (La)	2.289
Cuenca	1.983
Gerona	2.251
Granada	5.084
Guadalajara	351
Guipúzcoa	1.383
Huelva	3.269
Huesca	66
Jaén	15.748
León	1.005
Lérida	399
Logroño	241
Lugo	1.335
Madrid	66.049
Málaga	9.725
Murcia	8.759
Navarra	367
Orense	295
Oviedo	5.263
Palencia	1.350
Palmas (Las)	4.317
Pontevedra	4.397
Salamanca	4.057
Santander	3.333
Sta. Cruz de Tenerife	3.581
Segovia	391
Sevilla	10.170
Soria	94
Tarragona	380

Teruel	236
Toledo	630
Valencia	12.541
Valladolid	2.010
Vizcaya	3.009
Zamora	1.233
Zaragoza	1.985
Marruecos	1.935
TOTAL	242.560

*\*Cuadro nº 16. Parados en 31 de diciembre de 1942*

Tomando el caso de la provincia de Valladolid podemos determinar que el incremento del paro se debía a la paralización casi completa de las obras, fruto de la escasez de materias primas, y al final de las tareas agrícolas.<sup>138</sup> El número de parados en la rama agrícola era de 3.000 (5.300 en total). Los salarios en esta provincia eran por término medio para los agricultores de 6 pts, excepto para los segadores que en el verano ganaban 16 y los del ramo de la construcción que percibían 14. Todo ello proyecta un ambiente de conflictividad latente sólo refrenable por la utilización de la coerción y la disuasión de las fuerzas de orden público, lo cual se hacía más angustioso para la población asalariada si se tenía en cuenta la sistemática violación, por parte del empresariado, de las propias normas de legislación social promulgadas por el ministerio de Trabajo:

“No debe olvidarse ni un momento que la carestía de la vida y sobre todo la escasez de artículos de primera necesidad, coloca a los obreros en una situación de desventaja tan grande que lleva consigo el que éstos, con tal de poder ganar algo para mantener a sus familiares, soporten resignadamente éstos y otros abusos, ya que por parte de los primeros (*los empresarios*) se procura ajustarlos, aunque sea con un poco más de jornal, pero sin la obligación de mantenerlos por hallar los inconvenientes de todos por un lado y por otro, por considerarse perjudicados en la valoración que en 1936 se hizo de la comida (2 pts)...en general puede afirmarse que el Estado de los obreros, no es nada envidiable, a pesar de la legislación que en beneficio de los mismos viene sancionando el nuevo Estado...”<sup>139</sup>

Sobre la exactitud de las cifras de paro a partir del año 1942, Riaza Ballesteros ofrece una opinión ilustrativa del valor que se le puede dar a los datos oficiales:

“A partir de 1942 las cifras deberían ser bastante exactas, porque las Oficinas de Colocación ya estaban reorganizadas; pero, no obstante el buen deseo de estos

organismos, dudamos de que reflejen exactamente el paro real, es decir, que probablemente existe un paro no registrado, que debe afectar fundamentalmente a las provincias del Sur de España.”<sup>140</sup>

Provincia	Parados en junio de 1943	Parados en diciembre de 1943
Álava	245	372
Albacete	18	218
Alicante	4.276	4120
Almería	3.897	2995
Ávila	199	256
Badajoz	8.719	3720
Baleares	1.333	1368
Barcelona	8.890	8404
Burgos	342	428
Cáceres	4.006	5421
Cádiz	11.456	9694
Castellón de la Plana	724	1603
Ciudad Real	111	373
Córdoba	4.487	5761
Coruña (La)	2.159	1683
Cuenca	781	909
Gerona	1.887	1606
Granada	2.274	2996
Guadalajara	233	527
Guipúzcoa	852	1000
Huelva	2.871	3005
Huesca	27	111
Jaén	12.885	17484
León	985	947
Lérida	371	740
Logroño	172	227
Lugo	415	403
Madrid	71.260	75384
Málaga	9.261	8310
Murcia	4.362	6236
Navarra	261	336

Orense	329	338
Oviedo	3.379	1299
Palencia	877	1.083
Palmas (Las)	3.071	2.657
Pontevedra	2.522	2.580
Salamanca	3.979	3.453
Santander	2.506	1.507
Sta. Cruz de Tenerife	3.111	3.065
Segovia	514	469
Sevilla	10.749	8.886
Soria	101	70
Tarragona	360	564
Teruel	164	247
Toledo	508	1.122
Valencia	12.479	12.590
Valladolid	1.276	1.129
Vizcaya	2.678	3.173
Zamora	295	565
Zaragoza	2.214	3.173
Marruecos	2.329	1.594
TOTAL	213.300 <sup>141</sup>	216.201 <sup>142</sup>

\*Cuadro n° 17. Parados oficialmente registrados en junio y diciembre de 1943.

Mes	Paro mensual 1943
enero	240.865
febrero	241.169
marzo	241.603
abril	232.844
mayo	224.198
junio	213.300
julio	212.423
agosto	217.978
septiembre	220.848
octubre	220.308
noviembre	224.182
diciembre	216.201

*\*Cuadro nº 18. Parados oficialmente registrados en el final de mes de 1943.*

En cuanto al año 1943, el informe del 11 de febrero de 1944<sup>143</sup> enviado por el Subsecretario del ministerio de Trabajo, Esteban González Pérez al Subsecretario de la Presidencia del Gobierno (Luis Carrero Blanco) reflejaba una situación sociolaboral complicada para las autoridades franquistas sobre todo en lo referente a las cifras de paro involuntario de diciembre de 1943. Pese a ello, este mismo subsecretario del ministerio de Trabajo, cuando se trataba de proyectar una determinada imagen de la realidad social española se decantaba por la más pura estrategia propagandística falseadora de la cruda realidad que se vivía en España.

Ciertamente, el paro había disminuido (siempre según cifras oficiales) en 7.981 personas. Sin embargo, el total de parados se situaba en 216.201 en diciembre de 1943. En gran medida, las autoridades achacaban los altos porcentajes de paro a la existencia de mujeres en el mercado de trabajo que con sus demandas de empleo “rellenaban” las estadísticas. La carestía de la vida hacía, ciertamente, que gran número de mujeres se inscribieran en las oficinas de colocación con la esperanza de conseguir algún medio de subsistencia.<sup>144</sup>

Las actividades más castigadas eran agrícolas y forestales así como la industria de la construcción con 45.226 y 41.388 parados respectivamente. Así lo sería durante todo el período que vamos a estudiar, tanto por el peso del sector agrario como por el hecho de que, en gran medida, el censo de parados en el ámbito de la construcción estaba compuesto de braceros agrícolas que ocasionalmente pertenecían a las estadísticas del mencionado sector.

En líneas generales, el panorama que por la interacción del paro agrícola y el existente en la construcción nos vamos a encontrar se ajusta bastante a la idea de desigualdad que Redondo Gómez, Jefe Nacional del S.N.E.C. y de la O.S.L.P., nos expone en el siguiente párrafo:

“La distribución del paro agrícola en España es sumamente desigual. las provincias de Jaén y Córdoba soportan normalmente un tercio del total; Cáceres, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva, otro tercio. El resto del censo se reparte entre las demás provincias, con cifras máximas en Albacete, Murcia, Zamora, Valladolid y Cuenca, y mínimas en Álava, Baleares, Barcelona, Coruña, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Lérida, Lugo, Navarra, Orense, Oviedo, Pontevedra, Santander, Teruel y Vizcaya.

El paro de la construcción se registra también muy desigualmente. Dos terceras partes corresponden a Madrid, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Córdoba, Cádiz, Valencia, Almería, Jaén, y Málaga, y el tercio restante, muy pequeño en número, entre las

provincias restantes. De la más ligera observación de estas estadísticas se deduce que las regiones más azotadas por el paro son Andalucía y Extremadura.”<sup>145</sup>

Por regiones, Castilla la Nueva con 78.315 y Madrid con 75.384 eran las regiones peor tratadas por la situación sociolaboral. La excepción dentro de Castilla la Nueva se encontraba en Ciudad Real. En esta provincia el problema del paro se acrecentaba y se preveía que la situación empeorara progresivamente en la medida en que el fin de la guerra mundial avanzase, puesto que ello significaría el fin o la disminución de la producción en bastantes explotaciones mineras que en aquel momento habían incrementado sus inversiones o se habían puesto en funcionamiento ante la demanda de mineral. Esta nueva situación llevaría aparejado el surgimiento de un paro más acentuado. Y así fue como el número de parados de finales del año 1944 se multiplicó por más de cuatro para 1945 situándose en 1.601.<sup>146</sup> Y es que en esta provincia el obrero agrícola vivía excepcionalmente mal dado el bajo poder adquisitivo de los salarios, siendo los mínimos de 7 pts. y 20 céntimos, a lo cual habría que añadir el incremento rapidísimo del coste de la vida. Esta situación no se solucionaba intentando elevar los sueldos míseros de los agricultores de Castilla la Nueva, sino mejorando los suministros en manos de los contrabandistas y de los miembros de la estructura del Estado que dificultaban la existencia en el mercado de productos tan básicos como el pan, el aceite, el arroz, las judías o los garbanzos.

Globalmente el sector agrícola-forestal, el del mar y el de la alimentación habían recortado la cifra de parados. En el caso del sector agrícola, el descenso se cifraba en 3.721 trabajadores fruto del comienzo en el mes de diciembre de las faenas de recolección de la aceituna, la sementera y la preparación de las tierras. El motivo que explicaba el incremento en el sector de la construcción era, básicamente, la falta de materias primas indispensables para dicha actividad.

Pese a ello, a la altura de diciembre de 1943, las únicas provincias en las que se había observado un ligero descenso del paro eran Almería, Oviedo, Barcelona<sup>147</sup> y Jaén, ésta última fruto del fuerte peso del sector olivarero. En cuanto a Barcelona, la Obra Sindical Lucha contra el Paro manifestaba la necesidad de efectuar una progresiva labor de “entretenimiento” del parado forzoso a la vez que una lucha implacable contra la vagancia mediante el uso de las fuerzas de seguridad:

“...nos encontramos con la realidad práctica de un núcleo muy reducido de parados auténticos, sobresaliendo, en contraposición, la importante cifra que se deriva del parado nominal (vago o desocupado) que busca en fuentes ilegales el lucro fácil a una actividad incontrolada. Es decir, resalta en Barcelona, con el normal y progresivo



desarrollo de la picaresca en el barrio chino, la posibilidad de empleo de los grupos disciplinados, en obras alejadas de todo núcleo de la capital, o...que permitan efectuar una labor de redención social, o eliminar, en definitiva, con su traslación a Campamentos Penitenciarios, de todos aquellos que, por su grado de perversidad, no puedan, en definitiva, cumplir una función normal dentro de la sociedad.”<sup>148</sup>

Y es que en los primeros años de la década de los cuarenta el modelo de redención por el trabajo es en parte el alemán. Así se plasma en los números de la Revista del Trabajo en los que se pueden leer las siguientes aseveraciones sobre la benignidad del trabajo forzado y de los beneficios que ello estaba produciendo en la nación alemana por medio de “batallones de trabajadores” en una terminología excepcionalmente militar: <sup>149</sup>

“Después de estas recomendaciones, Alemania convierte su servicio de trabajo voluntario en obligatorio, con disciplina militar, alcanzando resultados sorprendentes y sobradamente conocidos. Por otra parte, esta organización de brigadas de trabajadores permite la ejecución de trabajos públicos de bien general en gran escala, autopistas, ferrocarriles, allanamientos de terrenos, canales de riego, etc., sin que constituyan una carga excesiva e insoportable para el Estado, causa que ha conducido en otros países a la no terminación de multitud de obras vitales.” <sup>150</sup>

Lo que se planteaba era casi una obra de ingeniería social que debía solucionar un complejo problema creado, supuestamente, por vagos y maleantes. El objetivo era sanear de indigentes las calles de la segunda ciudad más importante de España, partiendo de la idea de que el paro constituía en ella una patología sin causa justificada en la que se percibía un carácter aventurero y antisocial por parte de los parados que se homologaban a incontrolados e indeseables.<sup>151</sup> Y es que siguiendo las propias manifestaciones formales y solemnes del régimen, el llamado Estado nacional-sindicalista no debía tributar “la menor consideración a los que no cumplían alguna función y aspiraban a vivir como convidados a costa del esfuerzo de los demás. Y así como el Fuero recoge y declara el derecho al trabajo antes referido, también lo hace, como deber social, estimándolo como tributo obligado al patrimonio nacional.”<sup>152</sup>

En otro orden de cosas, desde los órganos de expresión del ministerio de Trabajo se justificaba la situación lamentable que atravesaba el país amparándose en la coyuntura internacional. Supuestamente, España estaba encontrando en su camino los efectos de la denominada “insania roja:”

“Para lograr tales propósitos, para satisfacer nuestro orgullo Nacional-sindicalista y dar por cumplida buena parte de nuestra tarea, debemos enfrentarnos con la misma dolorosa

realidad, gallardamente, valientemente, confesándonos antes que a nadie a nosotros mismos las más duras verdades por desagradables que sean.”<sup>153</sup>

Comparando su situación con la de la provincia de Barcelona encontramos una percepción similar para este año 1943 en Logroño, provincia con un número relativamente bajo de parados. De igual manera que en el caso de Barcelona, en esta provincia se pensaba que no existía paro “ya que el mayor contingente de parados lo daba el grupo de vagos habituales.”<sup>154</sup> Para a ellos y para los que fueran despedidos de su trabajo por su carácter “inútil e indeseable” lo único que era de aplicación era la Ley de Vagos.<sup>155</sup> En parte, también hay que considerar el hecho de que el volumen y la diversidad de la producción en este punto de España permitía un desenvolvimiento económico que posibilitaba absorber la casi totalidad de la mano de obra de la provincia, así como asumir el empleo de emigrantes de otras. Por tanto, el número de parados, en la mentalidad de los dirigentes de la política social del régimen franquista, debía de estar producido por la incapacidad para el trabajo de estos individuos, por lo que habían de ser “cuidados” por medio de una obra asistencial o por medio de las fuerzas de seguridad del Estado.

La repoblación forestal y las obras de carácter general financiadas con cargo a la Junta Interministerial de Obras para mitigar el Paro explican el pequeño retroceso en la castigada provincia de Almería. En el caso de ésta, hay que tener en cuenta el notable incremento de la emigración del que las autoridades eran perfectamente conscientes. Ello, dada la difícil coyuntura de la provincia, provocaba que ésta recibiera cierta atención del ministerio de Trabajo arbitrando créditos por medio de la Junta Interministerial de Obras para mitigar el Paro, del I.N.P. y del ministerio de Gobernación para luchar contra el problema por medio de la construcción de obras diversas.<sup>156</sup>

A principios de 1943, la situación en las Islas Canarias era absolutamente insoportable dadas las dificultades de abastecimiento. Aunque las cifras son muy semejantes a las del resto de España se puede considerar la dureza de la situación para el agricultor canario considerando el hecho de que, en el primer quinquenio de la década de los cuarenta, en torno al 10 % de los varones entre los 10 y los 14 años ya trabajaba; de igual manera el 88,1 % de los varones entre los 15 y los 19 años y el 16,4 % en el caso de las mujeres. A ello se puede añadir que alrededor del 90 % de los varones de más de 60 años todavía seguía trabajando.<sup>157</sup>

El reverso de dicha situación lo constituía el contrabando. Con fecha 29 de mayo el Subsecretario del ministerio de Trabajo, Esteban Pérez, enviaba al Subsecretario de la Presidencia del Gobierno un informe extendido por el Gobernador Civil de las Palmas de Gran Canaria y elevado a la Junta Interministerial de Obras para mitigar el Paro en el que ponía de

manifiesto el grave problema que representaba para la gente humilde, no sólo el problema del paro y sus consecuencias, sino la ausencia de abastecimientos básicos que incidían muy negativamente en la alimentación necesaria de los trabajadores para realizar sus tareas y que, a su vez, tenía efectos "perniciosos" palpables en el arraigo de la tuberculosis en las islas:

"...el difícil problema de abastecimiento planteado en la provincia, repercutiendo principalmente en la gente modesta, y que de modo tan directo se relaciona con el paro obrero de la misma, manifestando que muy poco han de servir los trabajos y desvelos de esta Junta de Paro Obrero en orden a la ejecución y fomento de obras, al igual que al encontrar recursos para las mismas, con el fin primordial de absorber el paro obrero, si el elemento trabajador no tiene alimentación adecuada y suficiente, pues con notoria frecuencia está ocurriendo que el obrero deja el trabajo por falta de fuerzas para efectuarlo, o en otras ocasiones realiza aquél, con tal lentitud y desgana que su pequeño rendimiento perjudica al interés de la obra en construcción, aparte de que el esfuerzo realizado en tales condiciones habrá de traer una agravación del problema tuberculoso tan arraigado en la provincia, y en cuya resolución tanta ayuda ha prestado el Patronato de Resurgimiento Económico, empeño baldío si el contingente de enfermos por falta de alimentos ha de continuar aumentando en grandes proporciones."<sup>158</sup>

La realidad de las islas venía presidida por la falta de posibilidades de emigración rentable, que sí se dieron en el siglo anterior, así como por el hundimiento del precio del plátano desde el año 1931, la deficiente exportación de tomates y la reducción del tráfico portuario.<sup>159</sup> Sobre ello operaba la ausencia de una mediana industria y una economía agrícola con un comercio afectado por la situación internacional. Únicamente se salvaba parcialmente el sector de la pesca y sus derivados y la industria tabaquera. La segunda, por el monopolio de tabacos y, la primera, por la cercanía de los bancos de pesca africanos y la demanda regional de pescados.

En otras regiones, como Extremadura, la situación era harto complicada con 5.030 parados en Cáceres y 3.463 en Badajoz, ante lo cual las posibles medidas a tomar partían únicamente del mejoramiento forestal de una provincia que en algunas de sus áreas se consideraba como totalmente perdida para la economía productiva dada la mezcla de componentes climáticos extremos que la hacían sólo apta como refugio de alimañas.<sup>160</sup>

Como en el caso de Extremadura, en Andalucía la situación era alarmante. Nunca el estado de los desempleados había sido tan grave como a finales del año 1943 en una provincia como la de Granada pese a no ser una de las tradicionalmente asateadas por el mal del paro.<sup>161</sup> La consecuencia de ello era la desesperación de las masas obreras hastiadas por el hambre y por la falta de trabajo, la emigración consiguiente fuera del control oficial y la huida a las ciudades, de

la que deja constancia la O. S Lucha contra el Paro de Granada que únicamente tenía capacidad o voluntad de refrenar dicha situación por medio de la beneficencia y la caridad. En el mejor de los casos, esta masa de desposeídos pasaba a engrosar las aglomeraciones amorfas de un peonaje sin cualificación alguna “inflamable a todos los cánticos de sirena que les hablasen de un mundo mejor.”<sup>162</sup> Las dimensiones reales se multiplican hasta el infinito si se tiene en cuenta que los Servicios de Estadística y Colocación (de forma más acusada todavía en Andalucía) no controlaban más paro que el que se producía en las cabeceras comarcales quedando sin control las áreas de mayor paro agrícola.

Como venía sucediendo en la mitad sur de la piel de toro, Murcia tenía un porcentaje oficial de obreros en el sector agrícola de más del 58 % y por tanto eran éstos los que mayormente se veían afectados por la desastrosa situación laboral del campo. Eran los campesinos los que, no pudiendo sostener a sus familias, en muchos casos numerosas, con sueldos de 8 y 10 pts., optaban por recurrir a otro tipo de actividades como la venta o reventa de frutas y hortalizas en puestos ambulantes. Eran éstos los que, en parte, vaciaban de contenido las estadísticas de los sindicatos, en la medida en que, ante la incapacidad de éste para buscarles empleos que contribuyesen eficazmente a sostener sus hogares, obviaban su existencia, e incluso rechazaban de forma contumaz sus ofertas cuando excepcionalmente se producían.<sup>163</sup> También Murcia, como otras provincias, encontraba la causa de su alto número de desempleados en la falta de materias primas a precios oficiales, lo cual explicaba la falta de actividad en la industria. Este tipo de paro podría calificarse como desempleo accidental. Sin embargo, el paro en la agricultura tenía un carácter estructural y en el caso de esta provincia se incrementaba hasta sus mayores límites en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. La eventualidad de las labores en el campo y las largas temporadas en que obreros no encontraban ocupación hacía que su nivel de vida fuera precario. Ese era el motivo de que en los meses de invierno se practicasen desplazamientos desde esta provincia a Castilla la Mancha, Cataluña e, incluso, al Norte de España.

La nota destacada de todas aquellas provincias típicamente atrasadas consistía en que la única solución propuesta por las autoridades para combatir la situación de miseria y desempleo consistía en la repoblación de sus montes. En lo referente a la provincia de Segovia, el sindicato solicitaba la repoblación de la misma como medio más adecuado para luchar contra el paro.<sup>164</sup>

La realidad global era que el nivel de vida de los obreros era muy bajo. Tanto era así que la O. S. de Lucha contra el Paro de Valencia afirmaba en su informe anual que era necesario partir de la realidad existente para ganarse a los trabajadores y que la vida del trabajador español “antes del 36 se desenvolvía con mayor facilidad, dada la más justa relación entonces existente entre los salarios y el costo de los artículos, así como, la continuidad en el trabajo, ya que en esta

provincia en el campo, la casi totalidad de los trabajadores son contratados de manera eventual..."<sup>165</sup> En el caso de la naranjera Valencia, se entiende ese descenso por varios motivos entre los que hay que citar el Decreto de 14 de diciembre de 1942 que vino a limitar el cultivo de este frutal basado "en la conveniencia de extender la superficie dedicada a cereales y concentrar, en beneficio de cultivos de base para la alimentación humana, el empleo de los pocos fertilizantes nitrogenados."<sup>166</sup> A esto añade el propio Tamames la influencia de la mala coyuntura del comercio exterior durante la II Guerra Mundial y la escasez de fertilizantes como elementos que vinieron a incidir en la bajada de la productividad en este sector.

A las causas ya mencionadas, en esta provincia influía la disminución de las exportaciones que se acusaba de manera muy intensa en el sector naranjero; concretamente en Alcira, Gandía, Játiva y Sagunto. La causa de la disminución de las exportaciones estaba relacionada con el encarecimiento de las materias primas, con la escasez de pedidos y la falta de numerario por la ausencia de ventas, las dificultades y el encarecimiento del transporte y las dificultades puestas por los bancos para la obtención de préstamos agravadas por la situación internacional de conflicto bélico. Sobre ello operaba la disminución de la iniciativa privada en el importante sector de la construcción.

Provincia	Parados en junio	Parados en diciembre
Álava	322	272
Albacete	366	880
Alicante	4.380	4.454
Almería	2.233	3.030
Ávila	104	384
Badajoz	3.243	3.463
Baleares	1.365	1.216
Barcelona	7.124	8.045
Burgos	544	502
Cáceres	4.714	5.030
Cádiz	8.888	8.934
Castellón de la Plana	613	1.601
Ciudad Real	80	274
Córdoba	4.464	6.640
Coruña (La)	1.200	1.394
Cuenca	936	618
Gerona	1.216	1.101
Granada	2.470	2.414

Guadalajara	196	228
Guipúzcoa	1.054	818
Huelva	4.346	3.457
Huesca	230	136
Jaén	7.989	12.576
León	299	375
Lérida	173	134
Logroño	421	291
Lugo	482	511
Madrid	48.317	40.127
Málaga	2.950	2.837
Murcia	1.852	2.685
Navarra	223	261
Orense	279	76
Oviedo	1.268	1.270
Palencia	755	618
Palmas (Las)	2.939	4.928
Pontevedra	1.103	753
Salamanca	709	896
Santander	3.902	3.845
Sta. Cruz de Tenerife	1.597	1.650
Segovia	75	78
Sevilla	11.698	9.225
Soria	41	37
Tarragona	459	540
Teruel	131	113
Toledo	310	426
Valencia	5.500	5.152
Valladolid	593	929
Vizcaya	3.053	3.138
Zamora	551	564
Zaragoza	2.564	2.615
Marruecos	1.445	1.981
TOTAL	151.766 <sup>167</sup>	153.522 <sup>168</sup>

\*Cuadro n° 19. Parados oficialmente registrado en junio y diciembre de 1944.

La crítica situación del año 1944 se palpa en el *Informe sobre la situación económico-social de la provincia de Almería y posibles soluciones* que Girón envía a Carrero Blanco. En dicho informe se reflejaba “el trágico problema del hambre”<sup>169</sup> y “la miseria existente en los sectores obreros”<sup>170</sup> de esta provincia y las consecuencias que ello podía tener en el orden político a nivel de desprestigio del gobierno y de incremento de la conflictividad social. La situación era tan grave que la Dirección General de Seguridad comunicaba que, tan sólo en Cuevas de Almanzora, habían emigrado siete mil personas desde abril de 1939 a mayo de 1944. Si consideramos que tal situación podría quintuplicarse en el resto de la provincia se comprende que la situación social fuera insostenible a no ser por la tendencia de la población a emigrar o por la disuasión que pudieran ejercer las fuerzas de seguridad del Estado ante el conflicto que ello pudiera originar:

“El conflicto, como hemos repetido anteriormente, alcanza límites de verdadera tragedia y exige soluciones inmediatas, sin posible dilación. Las últimas noticias recibidas sobre esta región nos dicen que MÁS DE VEINTE MIEL FAMILIAS abandonan los pueblos de Almería y se acercan a la vega de Granada, comiendo lo que encuentran en las huertas, durmiendo al raso y haciendo una vida infrahumana que urge remediar.”<sup>171</sup>

Concretamente en esta provincia el número de parados ascendía a finales de 1944 a 3.030.<sup>172</sup> La situación descrita, caracterizada por la emigración masiva, no era incompatible con la percepción de que dicha cuestión era positiva y necesaria para el desenvolvimiento del régimen. Así, miembros destacados del ministerio de Trabajo como París Eguilaz veían en estos movimientos un principio esencial de la capitalización de la economía española sin el cual no sería posible su desenvolvimiento adecuado ni el encauzamiento de esas masas, sobre todo de campesinos, hacia la industria, las obras públicas o la construcción de viviendas. Por tanto, en línea con los planteamientos más radicales del liberalismo económico, éste factor de la producción (la mano de obra) había de caracterizarse por una flexibilidad total en sus desplazamientos como así sería a lo largo de la década de los cuarenta y cincuenta:

“...es indispensable que una masa de obreros, en cierta forma no calificados, se desplace casi automáticamente de unas industrias a otras, pues sólo así la capitalización puede realizarse sin perturbaciones. La modalidad actual de trabajo en la que, con escasos conocimientos, el obrero se capacita en poquísimos tiempo para desarrollar la función que se le señale en una fábrica o industria cualquiera, facilita grandemente esos desplazamientos de personal y es por lo tanto beneficiosa.”<sup>173</sup>

Partiendo del deseo de adormecer a la población española y teniendo en cuenta la necesidad por parte de las autoridades franquistas de ejercer una labor propagandista que ganara adeptos por

la vía de la concordia, el ministro Girón propuso hacer uso del día 1º de octubre para que, en paralelo a la exaltación de la figura del Jefe del Estado, la población almeriense recibiera en un acto publico “de honda resonancia”<sup>174</sup> las noticias y disposiciones que les hicieran percibir que el nuevo gobierno de Madrid estaba luchando por la resolución de sus problemas.

La problemática se centraba, en primer lugar, en el ámbito de la minería donde la paralización era la nota característica. En Cuevas de Almanzora la paralización era la norma, así como en las minas de hierro de Redar, Beires, Gergal, Jaravia y Lacainena de las Torres. En el caso de Somotín, Lugar, Pucherna y Urracal la reducción de la actividad se debía a la Orden del ministerio de Industria y Comercio de 22 de diciembre de 1942 por la que se prohibía el empleo del talco en la fabricación del jabón común, lo cual había disminuido la extracción de esteatita. En el caso de Rodalquilar la inactividad de las minas de oro se debía a la paralización de las labores fruto de los largos trámites con el Instituto Geológico y Minero. Si a ello unimos la carencia de lluvia y de infraestructuras que superaran esta dificultad, así como el escaso peso de la industria (sólo dos talleres metalúrgicos y una fábrica de productos químicos en la capital) se comprenden las dimensiones de los procesos migratorios de las familias almerienses.

Como en otros casos, ante esta coyuntura lo que se proponía por parte de las autoridades era la intervención por medio de las obras públicas centradas en el alumbramiento, la canalización de aguas, la repoblación forestal y la construcción de viviendas protegidas. En este caso, la situación era tan grave que la propuesta del ministerio de Trabajo por medio de su titular consistía en que la financiación de dichas obras fuera a cargo del propio ministerio, del I.N.P., pero también de la Confederación de Cajas de Ahorro, del Instituto de Crédito, e incluso del ministerio de Gobernación con cargo al Fondo Benéfico-Social a lo que se añadiría, en último término, un crédito extraordinario del Gobierno.

#### ***10.6.1. El problema del paro en Andalucía durante 1945.***

Globalmente el número de parados aumentó en el año 1945 en relación a 1944. En este país esencialmente agrícola hay que tener en cuenta la “pésima cosecha” de este año.<sup>175</sup> De los 153.522 parados en diciembre del 44 se pasaba a los 163.459 del 45.<sup>176</sup> Nunca hay que olvidar que estamos tratando, de momento, las cifras oficiales que las autoridades manejaban. En líneas generales, el Servicio Nacional de Encudramiento y Colocación consideraba que el año 1945 había sido un año caracterizado esencialmente por la grave crisis agrícola como consecuencia de la pérdida de una parte importante de las cosechas de cereales y pastos con una incidencia clara de la sequía, sin olvidar que, por otro lado, las restricciones eléctricas afectaron muy negativamente a la industria.<sup>177</sup> Sin embargo, las cifras de paro agrícola se situaban en torno a los 40.000 parados como media anual y, evidentemente, de ser esto así el problema hubiera sido



la ausencia de problema pero "no es así, y como más adelante veremos, el paro estacional, que además sólo constituye una parte del paro total campesino, es mucho más elevado..."<sup>178</sup>

Hay que considerar especialmente este último aspecto, puesto que el período 1940-53 se caracterizó por el "gran incremento del consumo, la mayor intervención estatal, la aparición de las restricciones eléctricas..., etc."<sup>179</sup> Fruto de esta situación desde el año 1944 y hasta 1955 la industria española conoció restricciones eléctricas motivadas por dos factores: "el retraso que en la construcción de nuevas centrales había originado el bloqueo de tarifas, y las dificultades de importación de equipo para las centrales y de cobre y aluminio para las líneas de conducción; la segunda causa fue la extraordinaria elevación del consumo, que pasó del 4,3 por 100 de media anual en el período de 1900-1935, al 8,5 por 100 durante 1939-1953."<sup>180</sup>

Esta realidad va unida al descenso en junio del 45 del número de parados "oficiales" si comparamos las cifras con las de 1944. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que las oficinas encargadas de la recogida de estos datos llevaron a cabo una política de depuración sistemática del censo dando de baja a personas censadas.

Provincia	Parados en 30 de junio	Parados en 31 de diciembre
Álava	253	237
Albacete	2.070	2.356
Alicante	2.272	2.824
Almería	2.390	2.648
Ávila	32	2.844
Badajoz	3.503	7.971
Baleares	1.124	824
Barcelona	7.304	7.016
Burgos	420	476
Cáceres	4.166	8.083
Cádiz	9.220	9.101
Castellón de la Plana	1.982	990
Ciudad Real	392	1.235
Córdoba	9.925	15.299
Coruña (La)	1.806	2.086
Cuenca	481	1.334
Gerona	986	1.005
Granada	2.382	3.066
Guadalajara	88	175

Guipúzcoa	572	614
Huelva	4.748	5.658
Huesca	175	255
Jaén	13.692	15.896
León	359	706
Lérida	38	157
Logroño	141	299
Lugo	207	272
Madrid	13.038	19.504
Málaga	6.062	8.310
Murcia	510	2.521
Navarra	91	226
Orense	62	77
Oviedo	1.225	1.013
Palencia	742	1.083
Palmas (Las)	8.034	8.387
Pontevedra	467	352
Salamanca	809	1.729
Sta. Cruz de Tenerife	5.668	5.432
Santander	870	594
Segovia	81	874
Sevilla	5.540	3.904
Soria	45	104
Tarragona	722	696
Teruel	96	97
Toledo	270	1.213
Valencia	5.167	4.976
Valladolid	1.107	2.194
Vizcaya	2.496	2.975
Zamora	873	1.874
Zaragoza	1.283	1.029
Marruecos	1.945	1.168
TOTAL	127.937	163.759 <sup>181</sup>

\*Cuadro n° 20. Datos oficiales de paro en el año 1945.<sup>182</sup>

En Andalucía, una de las regiones más afectadas, y concretamente en provincias como Granada, se percibía por parte de las autoridades un evidente malestar como forma eufemística de aludir al conflicto potencial que partía de la situación de penuria de esta provincia española y que tenía como base esencial la ausencia de una industrialización mínima y equilibrada. Concretamente, el Gobernador Civil de Granada afirmaba que "el efecto de que por hoy no ocurran desórdenes ni se desborden las quejas acogándose con resignación y mansedumbre a un nivel de vida inhumano, así como a toda suerte de abusos por parte de los propietarios, no es más que resultado de una mentalidad sui géneris que lo mismo da vida al espartaquismo agrario o a las desórdenes republicanos que, abatido y desmoralizado, permanece lustros en el mayor servilismo hasta que rebrota con terrible virulencia cuando parecía más apagado. La sobrecogedora desigualdad humana que existe entre la clase dominante y los -en verdad- siervos de la gleba, hace que los primeros entiendan el título registral de dominio con un sentido totalmente feudal y que las rebeliones del proletariado agrícola tengan un carácter de brutalidad inhumana pero lógicamente explicable."<sup>183</sup>

A los factores expuestos hasta aquí, no carentes de un gran subjetivismo que hundiría sus raíces en una más que discutible psicología colectiva propia del agro andaluz, habría que añadir la capacidad de un régimen autoritario para mantener en posición sumisa la conflictividad latente originada por la situación de miseria y de injusticia social que refleja la descripción del jefe provincial del movimiento en Granada.

La preocupación del Gobernador Civil se centraba en el hecho de que estaba al frente de un verdadero volcán, con una situación socialmente inestable y con visos de poder explotar en cualquier momento salvo que lo impidieran medidas coercitivas concretas que apagaran cualquier atisbo incendiario. Y todo ello, pese al supuesto carácter doméstico del trabajador andaluz "y de los resultados de la guerra civil, en la cual se impuso como nunca en estas tierras el propietario señorial."<sup>184</sup> La realidad de Andalucía estaba presidida por la ausencia de propiedades entre los agricultores, por la proletarización progresiva de los trabajadores del campo y por su abandono por parte de las autoridades franquistas, que no tenían la voluntad política de aplicar leyes que pudieran paliar medianamente su situación. El triunfo de los aliados a los macropropietarios en la guerra civil y la anuencia de las autoridades entrelazadas con esa estructura de dominación imposibilitaba la denuncia de la situación de penuria de estos trabajadores:

"Viven hoy los pueblos apretando su dolor y soportando silenciosamente las duras condiciones de vida. Los municipios desde hace años se vieron desposeídos de su bienes propios por habilidades caciquiles y jurídicas. Las leyes rigen sólo formulariamente pagándose jornales abusivos (por pagar 1 pts., y un pan he tenido que

sancionar) efectuándose labores para fomentar el paro y envilecer más aún los salarios, sin que exista valor entre los obreros para denunciar. Las llamadas autoridades y jerarquías locales han sido muchas veces gentes de escasos escrúpulos que sólo pensaban en enriquecerse aprisa cuando no tenían en su haber canalladas graves. Pocos lugares habrá en España de mayor relajación en la vida rural; la falta de personalidad de los individuos provocada por los residuos señoriales y por la falta del derecho de propiedad entre lo humildes lo tolera todo; no hay un solo Secretario de Ayuntamiento, veterinario, médico y maestro en su sitio y hasta en parte del clero existe tamaña desmoralización. El abandono y la iniquidad es la tónica dominante en muchas zonas. No se concibe como siglos de catolicismo hayan tolerado mansamente este estado de cosas.”<sup>185</sup>

La relación de “amo y perro”<sup>186</sup> era lo que potenciaba el conflicto latente. En este contexto tenían alguna posibilidad de actuar los elementos anarquistas o marxistas que tanto detestaba el régimen mientras que el paternalista dueño de la propiedad latifundista lamentaba, en el mejor de los casos, la desoladora situación económica y social de sus “gañanes” sin tener la voluntad de poner fin a dicha situación de penuria. Sin embargo, desde el poder, esta cuestión del “carácter” como motivo del desempleo en algunos casos no se circunscribía al ámbito andaluz sino que se extendía a todo el territorio nacional. A ello se añadía la falta de adaptación profesional y cultural al nuevo medio industrial, sin olvidar la ociosidad propia del sistema de “economía capitalista.”<sup>187</sup>

Si de Granada hablamos, hay que tener en cuenta que su situación se agravaba por las tendencias migratorias que se centraban en ella provenientes de Almería<sup>188</sup> y Murcia desde el momento (ya muy lejano a esta época) en que la posibilidad de emigrar a ultramar o al norte de África había desaparecido. Y es que existía en estos años del hambre un trágico triángulo de miseria y de inestabilidad social cual era el formado por las provincias de Granada, Murcia y Almería.<sup>189</sup> Estas dos últimas eran, como se ha dicho, las que mandaban a sus tropas de harapientos en un éxodo multitudinario sobre la relativamente más rica y próxima Granada. Por supuesto, ello era un factor de menor calado que la concentración de la propiedad en pocas manos dado que ésto obligaba a la existencia en amplias zonas de un proletariado agrícola sujeto a un paro estructural y reducido a un nivel de vida bajísimo. Si a ello se añade la ausencia de incentivos a la inversión y a la capitalización eficiente, el resultado, unido a factores históricos de profundo calado, era la realidad social anteriormente descrita.

En gran medida, la situación de esta provincia, pese a no ser de las más graves, reflejaba la realidad de toda Andalucía. Como algún ponente afirmaba en el I Consejo Regional de Lucha contra el Paro (celebrado en Andalucía en junio de 1945) era necesario prescindir

deliberadamente de las estadísticas oficiales que casi nada aportaban sobre la “densidad y extensión real del paro obrero.”<sup>190</sup>

La explicación de los errores en las estadísticas de unos y de los aciertos de otros estaba, como se ha mencionado anteriormente, en la mayor presión de los gobernadores sobre los ayuntamientos para conseguir que estos reflejaran más fielmente la realidad de sus localidades. Pero también estaba en el hecho de que las bases sobre las que trabajaban ambos organismos eran esencialmente diferentes, tanto en cuanto en las oficinas sindicales se registraban únicamente los parados que voluntariamente se inscribían o encuadraban mientras que los alcaldes, supuestamente, calculaban las cifras en función de una mayor aproximación a la realidad de su vecindario. Si a ello se añade que sólo funcionaba verdaderamente una de cada seis oficinas del S.N.E.C. se entiende el desamparo estadístico de la gran mayoría de los miles y miles de pueblos y localidades españolas, y más concretamente andaluzas. Es decir, la acción de los gobernadores y del sindicato iba por caminos netamente separados si bien el gobierno y el ministerio de Trabajo podían, coyunturalmente, utilizar las estadísticas sindicales con una finalidad meramente propagandística. Así, la existencia de un órgano centralizado y estatal como la Comisaría Nacional de Paro en la práctica no servía más que de filtro de falsedades insostenibles que se procuraban vender ante el mayor número de españoles de cara a traficar con esta realidad idílica que verdaderamente en estos años cuarenta encubría miseria y pobreza para la mayoría de los españoles.<sup>191</sup>

De esta forma se podía llegar a la conclusión de que en Granada un 81,07 % de la población (algo más de medio millón de personas) vivía en situación de desempleo. Era evidente que hasta que la cuestión del paro no se abordara seriamente ésta no tendría solución y una de las primeras medidas que se demandaban consistía en que los ministerios tuvieran en su seno verdaderos economistas<sup>192</sup> y de que las estadísticas no fallaran tan lamentablemente. Y es que era evidente que las oficinas de colocación obrera no funcionaban ni poco ni mucho, que sus funciones eran limitadas y que los recursos con que contaban eran extraordinariamente reducidos.<sup>193</sup> Todo ello sin considerar lo poco rentable, políticamente hablando, que le podía resultar al régimen poner de manifiesto la realidad sociolaboral de España.

La mencionada situación podía entenderse desde el momento en que se producía el predominio del latifundio, de enormes extensiones de terrenos de secano propiedad de los ricos propietarios que convivían con un colectivo amplísimo de braceros que sólo vivían por la esperanza de lograr durante un corto periodo de tiempo algún empleo en la recolección o la escarda. “...bien poco es y no acierta uno a explicarse donde encuentran esta pobre gente sus reservas para supervivir a la inactividad y al hambre de tantos meses,” se afirmaba en alguno de los informe de la O.S.L.P.<sup>194</sup> Y es que la propiedad de la tierra estaba en pocas manos. Y frente a ella se erguía

una masa ingente y desproporcionada de braceros que ponía de manifiesto la inoperancia de los organismos oficiales para controlar el desempleo, para canalizar y poner en contacto la demanda y la oferta de trabajo por medio de las oficinas creadas a tal efecto:

“...y como exponente de ello una plaza pública de contratación, verdadera lonja de trabajo como mercancía y no como un derecho en la que diariamente se concentra una multitud de forzosos desocupados esperando que alguien se digne proporcionarles la limosna de un jornal.”<sup>195</sup>

La revolución nacional-sindicalista no llegaba al campo y, concretamente, menos todavía a Andalucía. Se mantenía la realidad de una tierra pobre, de secanos poco productivos, sin inversiones. Tierras en donde vivían masas ingentes arrastrando una vida miserable ante los cuales el único panorama que se abría era el de la beneficencia y el de la Guardia Civil cuando los cien días de empleo anual (en el mejor de los casos) no daban lo suficiente para que la familia sobreviviera. El párrafo siguiente del Jefe provincial de Lucha contra el Paro no deja duda sobre el panorama casi prehistórico del campo andaluz:

“El campo andaluz es así hoy como lo fue hace cien años y como lo fue hace mil... falta sobre todo, una distribución y parcelación de la propiedad que ligando a ella el fuerte resorte del egoísmo de muchos fuerce el cumplimiento de la función social que a la propiedad corresponde.”<sup>196</sup>

La respuesta ante tal situación era la búsqueda (sólo formal) de la reforma agraria, de la alteración de la estructura económica del agro andaluz. Y es que ello carecía de sentido por cuanto la Orden de 7 de septiembre de 1939 había autorizado a la Dirección General de Reforma Económica y Social de la Tierra a devolver a sus antiguos propietarios la fincas que eran explotadas por dicha Dirección en régimen de administración directa o de arriendo provisional a particulares. Por otro lado, la Ley de 27 de febrero de 1940, regulaba como el recién creado Instituto Nacional de Colonización<sup>197</sup> debía efectuar su labor.<sup>198</sup> Tal solución, no llevaba aparejada la búsqueda de mecanismos efectivos que condujeran a buen puerto la idea de la reforma agraria en el sentido de repartición de tierras, lo cual pondría de manifiesto la notable diferencia entre las manifestaciones solemnes del régimen y sus realizaciones efectivas juzgadas en función de las intenciones previamente enunciadas. Y es que, como señala Tamames, se hizo una política contraria a la desarrollada por la II República desde el momento en que por el Decreto de 28 de agosto de 1936 se dejaba en suspenso la aplicación de la reforma agraria a lo que añade el mencionado autor que “...la nueva política significaba el paso de la reforma jurídico-social, cuyo fin primordial era la distribución de la tierra entre los

braceros, a la reforma técnica, cuyo objetivo principal era la colonización, puesta en regadío, parcelación y otras mejoras técnicas, dejando en segundo término la redistribución.”<sup>199</sup>

Esas eran las consecuencias de la realidad descrita. Se percibe la existencia de un mundo andaluz asaeteado por el paro perpetuo. La única salida para éstos trabajadores andaluces (sin incluir el hambre y la miseria) era la mendicidad y en definitiva la picaresca o el delito, que tenía como solución el uso de las fuerzas de seguridad. La pobreza llevaba necesariamente al delito o a la caridad y, en este sentido, afirmaba el Gobernador Civil de Granada que “existen ochenta casas de prostitución toleradas siendo infinitas las clandestinas y alcanzando a más de un millar las prostitutas. En Auxilio Social se dan diez mil raciones diarias sin contar las instituciones de la Asociación Granadina de Caridad y las obras benéficas religiosas.”<sup>200</sup> Y la consecuencia de ello, en un panorama que no puede ser más desolador era que todos estos parados “...viven en agujeros que excavan en las colinas y riberas de los alrededores hasta constituir un espantoso cinturón de más de un millar de cuevas donde se hacían epidemias, vicios y delitos...que han de ser fuente segura de subversión. No es extraño que tengamos hoy la triste capitalidad nacional en el problema de los llamados huidos.”<sup>201</sup>

A ello hay que añadir que a los más de 3.000 parados que arrojaban las cifras oficiales había que unir la existencia real, dadas las ayudas efectivas de la beneficencia y la caridad, de “8.000 personas que no tenían que comer” tan sólo en Granada capital. La presumible buena voluntad de las autoridades locales de nada valía ante la ingente burocracia del Estado franquista, que más que por su tamaño por su ineficacia, dificultaba el uso de los pocos resortes efectivos que podían paliar dichas situaciones. Y frente a ello, “ciertos círculos sociales viven con lujos, frivolidades o vicios...máxime cuando millones y millones duermen en las cuentas corrientes sin interés de la sucursal del Banco de España en Granada.”<sup>202</sup> Probablemente, sería complicado encontrar una imagen más negra y más negativa elaborada por un miembro del Estado franquista del que debiéramos esperar una incondicional adhesión.

Como ya se ha mencionado, uno de los sistemas para paliar dicha situación era la obtención de obras financiadas por la administración central con el objetivo de minimizar la influencia del paro en los meses de menor actividad agrícola. Sin embargo, una de las quejas más comunes en cuanto a los resultados de dichas obras consistía en que muchas de ellas eran estrictamente improductivas, dado que poca productividad (salvo la puramente coercitiva) se podía encontrar en la construcción de cárceles, cuarteles o edificios oficiales.<sup>203</sup> Cuando no, la Junta Interministerial que concedía dichas subvenciones las dedicaba a repoblaciones forestales que, en principio, tenían una productividad muy a largo plazo y que eran interpretadas desde la organización sindical como un “empeño permanente de F.E. de las J.O.N.S.” y como un “símbolo de la reconstrucción nacional.”<sup>204</sup>

La percepción sobre la lamentable situación de Andalucía en general se plasmó en el primer Consejo Regional de la O. S. Lucha contra el Paro desarrollado en Granada a partir del 5 de junio de 1945.<sup>205</sup> Nota característica de las reuniones celebradas a bombo y platillo para llegar a la resolución del problema del paro era que la percepción global manifestada tendía a identificar al andaluz con el prototipo del vago y maleante de la novela picaresca española. Prototipo que tenía su base no sólo en la "historia" del pueblo andaluz sino en los años de intensificación de dichos valores y actitudes "provocados" por la "maledicente" II República y, más concretamente, por el "fomento de la vagancia, de la mendicidad, y aun criminalidad profesional, consecuencia de los malos hábitos adquiridos durante treinta y dos meses de anarquía."<sup>206</sup>

Es necesario buscar documentación con menos posibilidad de salir a la luz pública para encontrar un juicio que sirva para matizar o poner en su justo lugar los datos oficiales que sobre paro se aportaban oficialmente. Como conclusiones de este mencionado Consejo Regional, y pese a la angustiosa situación del pueblo andaluz, se preconizaba la necesidad de depurar el censo de parados. Se afirmaba que éste era erróneo por exceso (no por defecto) y que el enfoque del problema del paro requería del análisis de la indaptación social de ciertos sectores de los obreros andaluces que "prefieren el paro a cualquier esfuerzo."

Ciertamente a mediados de los años cuarenta, pese a la tendencia a la homogeneización y simplificación del problema andaluz, existían notables diferencias de matiz entre cada una de las provincias de esta parte meridional de España. En Almería, la escasez de agua para riego dificultaba el desarrollo de la agricultura en la medida en que la mismas eran sistemáticamente aleatorias y, cuando no, deficientes y pobres. A la altura del año 1945 se había dejado notar la reducción de los transportes marinos y terrestres, la disminución de la exportación de la uva, la reducción paulatina de los pocos restos de industria minera, la carencia de cemento, hierro o maderas que refrenaban una actividad tan decisiva para la economía como la construcción o la falta de capitales abundantes que acometieran obras de envergadura en la provincia. En Almería, con 2.648 parados oficialmente reconocidos, los sectores más afectados eran la construcción y la agricultura. En el caso de la minería, el menor peso sobre el mercado laboral se debía a la emigración. Hasta tal punto el fenómeno general de la emigración era sobresaliente que las autoridades provinciales no reclamaban ayuda para solucionar el problema de la vivienda. Tal problema, formalmente no existía, dado que los pueblos se estaban destruyendo de forma muy rápida con el incremento de la pobreza y consiguientemente de los procesos migratorios.

En Cádiz el paro ascendía a más de 9.000 parados y, como en el resto de las provincias andaluzas, áquel se dejaba sentir de forma esencial en la agricultura (alrededor de una tercera



parte). De forma secundaria en la industria de la construcción, seguida a gran distancia (algo menos de 2.000 parados). En el caso de la construcción las dificultades del transporte y las comunicaciones, junto a la ausencia de materiales fundamentales como el cemento o el hierro, estaban en el origen de dicha situación. Y es que en el caso de los obreros del campo sus faenas agrícolas se prolongaban durante unos cinco meses al año no llevando a cabo prácticamente ninguna actividad entre los meses de septiembre a mayo, meses en los cuales el paro llegaba a sus más altas cotas. Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Villamartín, Olvera, Medina Sidonia y Bejer de la Frontera eran los pueblos más afectados. Y es que se constataba que, incluso en las zonas en donde se introducía levemente el regadío, se prefería seguir cultivando, por ejemplo, el cereal en vez de sembrar hortalizas por la dimensión del mercado del primero y por el hecho de que para desarrollar cultivos de secano no se necesitaba mano de obra tan abundante con los consiguientes beneficios para el empresario. La industria del mar y de la alimentación tenían una importancia secundaria en esta provincia y su problema estaba ligado, en el caso de la primera a la ausencia de combustible, y en el caso de la segunda a la ausencia de hojalata para conservas y hielo por falta de energía eléctrica. La solución a este problema en esta provincia era para algunos la parcelación. Lo que no se tenía en cuenta era que gran parte de la política de colonización y de expropiaciones se realizaba donde convenía a los propietarios y no donde el interés social lo reclamaba. En definitiva, se abordaba el problema justo al revés.<sup>207</sup>

En Córdoba el paro también era casi exclusivamente agrícola. Con más de 10.000 parados oficiales era ésta una de las provincias con una situación social más comprometida. En 1945 el número de parados afectaba a tres cuartas partes de la población activa. Como en otros casos algunos consideraban que la solución al problema era asentar a las familias sobre la tierra haciendo desaparecer los latifundios de la provincia sin caer en la cuenta de que poco más de veinte días después de la promulgación del Fuero del Trabajo "el Decreto de 6 de abril (*de 1938*) creaba el Servicio Nacional de Reforma Económico Social de la Tierra con el preciso fin de liquidar la reforma agraria desarrollada durante el período republicano y devolver las tierras a sus antiguos propietarios."<sup>208</sup> Evidentemente dicha solución no fue adoptada. Por lo cual, en un mal año se podía afirmar que en las localidades de la zona olivarera suroriental el paro tenía caracteres alarmantes dado que la siega y la recolección de cereales apenas había ocupado personal.<sup>209</sup> El recurrir a los organismos oficiales en busca de ayudas para paliar la situación tenía el problema, aparte de su característica ineficacia, de la burocratización de situaciones realmente críticas, además de la falta esencial de recursos y del hecho de que muy pocos propietarios acaparaban la mayoría de la superficie de olivar, de lo cual se puede deducir que "las decisiones de estos empresarios habían de repercutir en los problemas relacionados con la colocación de la mano de obra y con el esmero en el cultivo."<sup>210</sup>

Jaén era otra de las provincias donde el paro hacía estragos y ello pese a que existía la conciencia de que era factible, manteniendo límites de rentabilidad razonables, elevar la mano de obra utilizada en los olivares españoles.<sup>211</sup> En este año de 1945 el número oficial de desempleados se situaba por encima de los 15.000. El predominio del paro agrícola era apabullante. La situación de esta provincia favorecía que, dentro del sindicato, surgieran voces de algunos desengañados que veían en lo realizado hasta la fecha lo propio de traidores que habían engañado a un pueblo que “derramó por su triunfo raudales de sangre...No podemos consentir como católicos, que un Estado que pone en su frontis la Cruz y el Evangelio, sea teatro impasible de esta iniquidad. Mientras no se le ponga fin afirmamos, que la fe religiosa como la política, no tendrá cabida en aquellos corazones de donde salió y a los que, si deseamos la unidad de España, es necesario devolverla.”<sup>212</sup> Pero la falta de resolución de los problemas en este tipo de provincias tan afectadas por el monocultivo partía de la falta de conocimiento de la realidad, lo cual se puede ratificar por las valoraciones que desde el propio sindicato del olivo se hacían sobre las cifras oficiales de esta provincia en el año anterior:

“Si observamos las cifras de Jaén vemos que la mínima corresponde al mes de enero y la máxima al mes de diciembre, con 4.966 y 11.328 obreros parados, respectivamente; teniendo en cuenta las características agronómicas del cultivo del olivo, la demanda máxima de la mano de obra corresponde a los meses de enero y febrero, en los que se realiza la recolección y en los que es necesario incluso la importación de mano de obra; en cambio en los meses de junio, julio, octubre y noviembre la demanda de mano de obra es mínima, hasta el punto de que la diferencia de necesidades de mano de obra entre los meses de máxima y mínima demanda, es para un cultivo normal más de siete veces el número de jornales por hectárea en los meses de enero y febrero que en los meses de demanda mínima. Si tenemos en cuenta que el número de hectáreas de olivar en Jaén es de más de 300.000 distribuidas de tal forma que constituyen zonas de monocultivo en gran número de términos municipales, es evidente que las pequeñas diferencias de paro que figuran en las estadísticas oficiales, correspondientes a los meses de máxima y mínima, no reflejan en manera alguna las cifras reales, y lo mismo sucede en las restantes provincias, hasta el punto de que dichas cifras oficiales carecen de todo valor y contribuyen a dar una idea completamente equivocada de la importancia y gravedad del problema.”<sup>213</sup>

La solución para este enigma era probablemente un seguro de paro de tipo nacional. La ausencia de voluntad política para poner en marcha un seguro de paro tenía su modelo de orientación en estados totalitarios como el de la Alemania nazi sobre la cual A. Ritter expone su escaso ímpetu por poner en funcionamiento este tipo de elementos propios del *Estado del Bienestar*:

“El seguro de desempleo fue desviado para la financiación de programas de creación de empleo y para sanear el seguro de vejez, y se eliminó el derecho a las prestaciones en caso de desempleo por un examen previo de la situación de necesidad. Un Decreto de 21 de diciembre de 1938 subordinó finalmente la oficina de empleo y del seguro de desempleo al ministerio de Trabajo, convirtiéndose, vaciadas sus competencias originales, en un instrumento utilizado por el Estado para el control del trabajo y la disciplinización de los obreros.”<sup>214</sup>

Evidentemente, el ministerio de Trabajo español no tenía voluntad de poner en funcionamiento un seguro de paro en el campo. En definitiva, la solución del campo español y concretamente del andaluz se postergaba indefinidamente. En estos momentos se desarrollaban los primeros proyectos, más utópicos que otra cosa, para el establecimiento de un seguro total en nuestro país. Sin embargo, a la hora de considerar el seguro de paro no se conocía su base de aplicación, no se proyectaba que todos los españoles financiaran sus fondos de forma proporcional a su capacidad económica porque se desconocía fundamentalmente la base real sobre la que aplicar la presión fiscal. Es más, dentro de los proyectos más optimistas no se consideraba la grave deficiencia que suponía trazar un seguro total cuya base única de imposición fueran los salarios, dada la propia estructura de los mismos.

El aparato estadístico carecía de la mínima fiabilidad, lo cual suponía dar palos de ciego al desconocer los datos más elementales sobre el paro. Por otra parte, no había una presión impositiva que pudiera colmar las necesidades de un seguro como el de paro. En otros seguros, se ponía de manifiesto que la justicia social destacaba por su ausencia en la medida en que los riesgos cubiertos no lo eran de una forma auténtica y total. Por el contrario, si a las prestaciones nos referimos, observamos que no perdían su sesgo benéfico aunque combinado con imperfectos planteamientos técnicos. El resultado de todo ello era una pantomima con requerimiento sistemático de parches como forma de mantener a flote el sistema.

En la provincia de Jaén el cultivo de la superficie agrícola requería aproximadamente más de 18 millones de jornales (18.103.700 según estimaciones oficiales). La población laboral agrícola de la provincia suponía 24.044.750 de jornales, también según estimaciones oficiales. Es decir, que sobraban varios millones de jornales en la agricultura que ésta no absorbía en las condiciones en que los cultivos se desarrollaban en aquel momento. Esa era la raíz del paro endémico en dicha provincia. Y es que tras la guerra civil, la estructura atrasada de la agricultura española se mantuvo prácticamente idéntica hasta bien entrados los años cincuenta; las técnicas eran antiguas y la penuria de maquinaria y fertilizantes era la nota característica.<sup>215</sup> Y el problema, en una provincia cuya economía dependía del monocultivo olivarero, era que no resultaba factible pensar en movimientos migratorios de forma masiva y permanentes pues el

cultivo de la oliva necesitaba a la población agrícola en la época de la recolección, dejando en situación de desempleo, una vez pasadas las labores de la primavera a más del 80 % de la población activa.

Es decir, el mantenimiento de la situación de privilegio del empresario olivarero de la provincia de Jaén necesitaba del mantenimiento de una situación seudofeudal de la gran mayoría de la masa de trabajadora agrícola, pese a que durante gran parte del año sus recursos económicos estuvieran condenados a estar bajo mínimos, dado que los trabajos se recargaban en el primer semestre del año (aproximadamente) concentrándose el número de parados en el segundo. Podemos preguntarnos sobre lo que hacía el resto de la población. Evidentemente aparte de pasar hambre, dadas las insuficiencias de los trabajadores para una vida mínimamente decorosa, la alternativa consistía en mal vivir o dedicarse al estraperlo. En el mejor de los casos, algunos de los trabajadores en peor situación serían "reclutados" por la Obra Sindical Lucha contra el Paro para las obras llevadas a cabo en el campamento de Barajas.<sup>216</sup>

Concretamente el paro estacional en la olivera Jaén estaba presidido por cuatro etapas. De diciembre a abril se producía la recolección y molturación; de abril a junio se producía la transición o preparación de la recolección de cereales; de julio a septiembre la recolección de los cereales y de septiembre a diciembre se producía otra época de transición entre la recolección de cereales y la de la aceituna. Así pues, los periodos laborales agrícolas intensos quedaban reducidos a dos: el olivarero y el cerealista, lo cual ponía de manifiesto la mala distribución de la propiedad, mal que se ampliaba por el problema del absentismo de muchos propietarios en los que se concentraban gran número de hectáreas y que por comodidad y economía implantaban en sus fincas los cultivos que exigían un menor número de brazos o un uso menos intensivo de la mano de obra, motivo por el cual aplicaban los cultivos de siempre. Ante ello El Instituto Nacional de Colonización poco o nada hacía al no existir la voluntad política de dotarle de medios legales, financieros, personales y técnicos capaces de solucionar expedientes que podían tardar en resolverse años sin afirmar por ello que su resolución supusiera una solución satisfactoria para el campo andaluz o mejor dicho, para sus jornaleros. En este contexto, aparte de la beneficencia al obrero agrícola andaluz la única solución que le podía quedar era el trabajo del esparto con el cual al final de la jornada intensa podía quizás obtener un 20 % del jornal medio.

Málaga no andaba a la zaga de las provincias andaluzas en cuanto a paro. A finales del año 1945 los datos estadísticos del Anuario Estadístico de España, a su vez tomados del Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación, mostraban un número de parados por encima de los 8.000 según refrendaba el Jefe Provincial de la Obra, Juan Barrionuevo. Hay que tener en cuenta que en el año 1944 el número de parados en dicha provincia se situaba en 2.837 lo cual

motivó el Informe del Gobernador Civil y Jefe provincial del Movimiento José M<sup>º</sup> Fontana de 19 de abril de 1945 en el que pedía “socorro” para poner fin a esta lamentable situación solicitando ayuda y sacrificios a aquellos terratenientes a los que era posible exigir esfuerzos en nombre de la “caridad que define nuestro catolicismo.” La solución a la desastrosa situación había de venir en forma de “deber moral.” No se concebía en este caso como una cuestión de reestructuración de la realidad andaluza que diera lugar a la justicia social. La cuestión consistía en lograr de los grandes terratenientes que contrataran a igual número de empleados que en años anteriores sin por ello caer “en la odiosa ley de términos municipales.”<sup>217</sup>

En Sevilla la sequía había afectado grandemente a los resultados de las cosechas. El paro estacional se había centrando en los meses de julio (con el fin de la recolección de cereales) a noviembre (con el comienzo de la recolección de la aceituna). En el caso de la industria, el mayor mal había sido la restricción de fluido eléctrico. En la capital, el paro se debía principalmente a la construcción. Sin considerar la falta de materias primas, los responsables del problema del desempleo sevillano aludían como causas de dicha situación al bajo rendimiento de la mano de obra, la cual era supuestamente inferior a la de cualquier otra provincia originando por ello (increíblemente) inmigración clandestina.

Pese a que el paro no estaba tan concentrado en el sector agrícola y se repartía entre otros sectores como la construcción, alimentación u otras industrias y profesiones, el hecho de que para el año 1945 el número de desempleados no llegase a los 4.000 no puede menos que sorprender si se tiene en cuenta que en 1944 se sobrepasaban los 9.000 y en 1946 los 11.000. Sólo una revisión artificial del censo de parados del S.N.E.C. y la falta de cuantificación de la “inmigración clandestina de productores de provincias limítrofes” pueden explicar el desajuste inaceptable entre las cifras de esos tres años. Sobre todo hay que tener en cuenta los informes de circulación interna de la mencionada O. S. Lucha contra el Paro. Concretamente en uno de los pertenecientes a la provincia de Sevilla del año 1945 se pone de manifiesto la agudización del paro en los meses de verano (concretamente julio y principios de agosto) en los que las cifras sobrepasaron los 32.000 inscritos, lo cual no es ni mucho menos equivalente al número de parados efectivos que no acudían a las oficinas de colocación. Ello permite poner mucho más en duda los poco más de 3.904 parados oficialmente registrados en Sevilla el 31 de diciembre de 1945 y los algo más de 5.000 que, supuestamente, había el 30 de junio del mismo año.<sup>218</sup>

Cuando de estas provincias sureñas se habla también hay que tener en cuenta que la mentalidad de los dirigentes sindicalistas con respecto a los trabajadores del sur español no dejaba muchos espacios a la multicausalidad para explicar la situación de esta región. Volviendo al caso de Sevilla, para estos dirigentes, el sevillano (concretamente el capitalino) era un vago que “vivía de cualquier forma y que no se preocupaba grandemente en buscar trabajo.”<sup>219</sup> Hasta tal punto

es así, que la aplicación en dicha provincia de un seguro de paro se consideraba negativo por esta particular (aunque supuesta) idiosincrasia de los sevillanos que implicaba un efecto contraproducente en la mendicidad dado que se consideraba "que al tener algo con que vivir y no trabajar daría un porcentaje mayor de parados."<sup>220</sup>

Por otro lado, la situación no era muy distinta en el resto de España, sobre todo en la mitad sur, hasta el punto de producirse peticiones de delegados provinciales de sindicatos como el de Cáceres que, por medio de su Delegado Nacional de Sindicatos, Fermín Sanz Orrio, solicitaba encarecidamente al ministro de Trabajo una ayuda mínima para resolver el angustioso problema de los cacereños y concretamente del pueblo de Aldea Moret en el que, por sus bajísimos salarios, el hambre se había adueñado del pueblo.<sup>221</sup> Téngase en cuenta la mala situación en este año 1945 del sector olivarero y el progresivo abandono<sup>222</sup> y destrucción de éste cultivo siquiera de forma coyuntural. Concretamente en esta provincia el colapso del mismo era evidente en función de un precio mínimo oficial al productor de 6,5 pts./kg. de aceite de tercera de acidez. Pese a ello, el precio al por mayor del aceite se había casi triplicado en 1945 si utilizamos como año base el de 1936.<sup>223</sup> En torno a esta cuestión la política de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes no había colmado las ansias de los olivereros cacereños hasta el punto de solicitar a la autoridad que fuera de forma íntegra el Sindicato del Olivo y las Hermandades de Labradores y Ganaderos las que controlasen las sucesivas campañas.

Hay que relativizar muy mucho las afirmaciones expuestas por los empresarios olivereros, pero si hay que partir del hecho de que la realidad del olivar en Cáceres no era idéntica a la de provincias como Jaén. Las peculiaridades del campo en esta provincia extremeña no hacían tan rentable el cultivo en la medida en que existía un mayor número de propiedades minifundistas, olivares de serranía de mayores costes que los de campiña o variedades de rendimientos inferiores a las de otras provincias españolas. Es más, zonas típicamente olivereras (al menos en el seno de la mencionada provincia) como eran la Sierra de Gata y la comarca de las Hurdes carecían de una vías de comunicación aceptables y, por tanto, los costes de transporte incidían más negativamente que en otras comarcas españolas. En ambas zonas, de accidentado relieve, el olivar de serranía, el propio de cultivos abancalados, elevaba relativamente la necesidad de mano de obra y paralelamente disminuía su rendimiento con el consiguiente daño para la economía de la zona.

En el I Consejo Regional de Lucha contra el Paro se ponía de manifiesto la imposibilidad de dar una dimensión real y efectiva al gravísimo problema social que se vivía en Andalucía y en Extremadura fruto de una estructura feudalizante y de una ausencia total de voluntad política para modificarla. La simplicidad caricaturesca que envuelve algunas manifestaciones

seudocientíficas de alguno de los dirigentes del franquismo social en torno a esta problemática llega a su culmen en algunas referencias sobre el parado español enunciadas por el Jefe Nacional de la Obra de Lucha contra el Paro:

“...cuando se siente enfermo, sin fuerzas para trabajar, el temor de estar verdaderamente enfermo le lleva a las consultas públicas en las que es atendido cariñosamente y sometido a medicación. Reconcilia el sueño, recobra fuerzas y se siente curado. Busca trabajo y al no encontrarlo, se recrudecen en él los síntomas y vuelve al Dispensario...y es entonces cuando cree ha encontrado el camino para aliviar en parte su situación angustiosa, pero a cuenta de su salud, pues domina en su conciencia la idea de que sano nadie le atiende y que enfermo halla socorro, y llega a dominarle la idea de que la enfermedad es una ventaja, idea que cada vez se graba más profundamente en su conciencia hasta que toma cuerpo en él un complejo mental que produce una serie de síntomas cada vez más graves que justifican su ingreso en un hospital...Recluido en este establecimiento, poca es su mejoría y ésta empieza a acelerarse cuando alguno de su hijos se ha colocado o su mujer ha logrado trabajar...El mejor tratamiento para esta enfermedad...es el trabajo...”<sup>224</sup>

Este singular párrafo que acabamos de reproducir simplificaba la cuestión hasta tal punto que la máxima autoridad dentro de la O. S. Lucha contra el Paro, Redondo Gómez, estimaba que los mecanismos para la solución del problema del paro quedaban fuera de la jurisdicción de su obra y que, en consecuencia, existía ya el remedio eficaz para luchar contra aquella plaga. Se refería concretamente a la aplicación rigurosa de la ley de vagos y maleantes. Ésta, según Redondo, permitiría depurar los ficheros de los servicios de colocación en los que, según él, existía un gran número de inscripciones de sujetos que nunca habían tenido el propósito de trabajar. En ésta línea estaba la Comisaría Nacional del Paro cuyo representante en el I Consejo Regional de Andalucía, José María Ríaza, esgrimía la necesidad de que las cifras de paro se depurasen. Hacía falta demostrar que los más de 244.000 que se suponía había extraoficialmente no existían de forma efectiva. Hay que tener en cuenta que la cifra ofrecida como oficial estaba para el año 1945 en algo más de 163.000. Se pretendía, entre otros mecanismos de depuración, pulir los criterios de inscripción, de forma que no se considerase el paro femenino como tal dado que el verdaderamente relevante a los ojos del régimen era el existente entre los hombres.

En cualquiera de los casos, el difícil año de 1945 nos pone ante la evidencia de un descontrol absoluto y de una ineficacia total de los organismos sindicales y del ministerio de Trabajo para conocer la realidad del tema del paro en España, primer paso para ejecutar posteriormente políticas que pudieran tener alguna posibilidad de éxito más allá del conformismo y del libre juego de la oferta y la demanda de la mano de obra.

## 10.7. El paro en la segunda mitad de los años cuarenta.

### *10.7.1. Un trienio de aparente tranquilidad (1946-1948).*

La situación de los trabajadores españoles a finales de 1946 era de total penuria si se tiene en cuenta el hecho de que su poder adquisitivo había disminuido de forma drástica hasta el extremo de que las propias autoridades franquistas eran conscientes de que, aún dedicada la totalidad de sus ingresos a los gastos de manutención más imprescindibles, sus retribuciones resultaban del todo insuficientes y que incluso "algunos de los tipos únicos de tejidos y artículos de vestido y los de suministro mediante cupones, cuando por su precio resultan asequibles, iban a parar en su mayor parte al mercado negro," <sup>225</sup> planteamiento normal si se tiene en cuenta la inadecuación entre la cantidad de materias primas recibidas por las fábricas y su rendimiento medido en términos de producción final.

De nada valía la petición, tantas veces desoída en favor del establecimiento de un salario mínimo vital si no se partía del conocimiento real de los precios y de la existencia efectiva de los productos de primera necesidad cuyos datos estadísticos se consideraban. Todo ello empeoraba de forma infinita la situación de los trabajadores.

Provincia	Parados agrícolas estimados en 28 de febrero	Parados (resto de los sectores) en 28 de febrero	Paro oficial total en 28 de febrero	Paro estimado total en 28 de febrero	Parados oficiales en 30 de junio	Parados oficiales en 30 de diciembre
Álava	-	143	143	143	120	182
Albacete	2.037	899	2.224	2.936	1.154	831
Alicante	269	2.797	3.066	3.066	4.174	4.633
Almería	1.785	1.801	2.327	3.586	3.073	3.181
Ávila	2.552	87	2.531	2.639	177	1.895
Badajoz	8756	881	4.790	9.637	2.950	4.923
Baleares	40	1.025	1.065	1.065	1.120	1.329
Barcelona	26	7.584	7.610	7.610	7.815	7.119
Burgos	107	426	533	533	454	227
Cáceres	9.536	692	6.849	10.228	3.582	6.766
Cádiz	7.136	7.168	9.855	14.304	11.079	9.776
Castellón	11.625	843	4.693	12.468	2.020	1.461
Ciudad Real	7.373	355	1.084	7.728	302	832
Córdoba	10.889	4.382	15.271	15.271	12.161	10.567



Coruña (La)	394	2.241	2.262	2.635	2.105	2.308
Cuenca	1.702	194	1.325	1.896	845	806
Gerona	298	713	1.011	1.011	1.116	1.006
Granada	818	786	2.794	11.827	3.427	2.742
Guadalajara	3.394	243	268	3.637	260	359
Guipúzcoa	-	614	614	614	1.142	679
Huelva	5.746	3.650	6.169	9.396	5.867	5.738
Huesca	124	158	180	282	242	137
Jaén	20.572	2.328	20.243	22.900	19.185	19.294
León	1.479	339	718	1.818	421	374
Lérida	-	269	269	269	138	287
Logroño	1.042	165	208	1.207	174	169
Lugo	2.347	454	672	2.801	353	223
Madrid	501	21.944	22.445	22.445	29.659	30.988
Málaga	10.600	3.703	6.373	14.303	6.853	8.311
Murcia	9.813	1.456	3.076	11.269	4.636	4.247
Navarra	1.184	161	180	1.345	115	100
Orense	5	87	92	92	203	181
Oviedo	4	1.089	1.093	1.093	1.013	1.099
Palencia	1.841	837	1.694	2.678	1.193	1.069
Palmas (Las)	2.040	7.353	9.393	9.393	9.705	10.400
Pontevedra	1	483	484	484	509	479
Salamanca	4.796	1.611	1.953	6407	2.419	2.354
S. C. Tenerife	4.208	3.417	5.440	589	4.701	5.848
Santander	6	583	589	7.625	582	661
Segovia	941	209	1.150	1.150	413	603
Sevilla	13.305	1.631	4.501	14.936	10.029	11.425
Soria	31	103	134	134	21	46
Tarragona	164	482	646	646	688	405
Teruel	28	99	127	127	112	179
Toledo	8.214	388	1.323	8.602	363	990
Valencia	12.768	3.854	4.328	16.622	5.180	6.016
Valladolid	3.038	1.152	2.380	4.190	1.854	1.794
Vizcaya	1	2.867	2.868	2.868	2.886	2.726
Zamora	3.298	445	3.743	3.743	1.048	930
Zaragoza	1.957	770	1.193	2.727	1.214	805

Marruecos	10	1.418	1.428	1.428	1.209	1.199
TOTAL	189.024	97.379	175.407	2 86.403	172.061	180.699 <sup>226</sup>

*\*Cuadro n° 21. Datos oficiales de paro durante 1946.*

Este año de 1946 iba a romper la tendencia que evidenciaba un descenso oficial moderado de las cifras de paro. El promedio anual se situaba en 245.456 parados al mes<sup>227</sup> lo cual tenía su raíz en los últimos meses del año anterior en el que lo característico había sido el colapso en el ramo de la agricultura (debido a la deficiente cosecha cerealística y olivarera obtenida), de la ganadería e industrias alimenticias así como las restricciones de fluido eléctrico.<sup>228</sup>

Como se puede observar el número de parados a finales de diciembre era oficialmente de 180.699.<sup>229</sup> Sin embargo, extraoficialmente la Jefatura Nacional de la O.S.L.P. manejaba cifras que no reflejaba en las estadísticas oficiales. Concretamente en este año se afirmaba que existían 57.523 parados en el sector agrícola en 31 de diciembre y, sin embargo, Redondo Gómez aludía en el informe elevado a la D.N.S a una cantidad distinta. Concretamente hablaba de 70.782.<sup>230</sup> La mayoría de ellos se concentraban en Jaén y Córdoba y con menos intensidad en Badajoz, Cáceres, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva.<sup>231</sup> Según Redondo, en líneas generales los meses más afectados eran los que iban de noviembre a abril.<sup>232</sup> Pero de nuevo, el cotejo de los datos oficiales con los que extraoficialmente manejaba el S.N.E.C., que no transmitía para no generar un estado de alarma social, diferían notablemente. El cuadro que mostramos a continuación (n° 22) expone únicamente el paro agrícola que existía en cada uno de los meses del año 1946 por orden decreciente. La comparación del mismo, tomando como referencia el mes en que menos paro agrícola se dio (febrero con 189.024), con las cifras de paro oficial (incluyendo todos los sectores susceptibles de ser considerados) pone de manifiesto a todas luces la tendencia al engaño de los que pretendían vender una situación idílica dentro de la España de mediados de los años cuarenta. La diferencia tan brutal entre unas cifras y otras no puede obedecer exclusivamente a motivaciones puramente técnicas. Se reconocen algo más de 57.000 parados en la España agraria mientras que la O.S.L.P. eleva la cifra significativamente por encima de los 70.000. De igual manera, se afirmaba que oficialmente el número de parados en 30 de junio de 1945 era de 127.937 cuando la realidad es que se tenía perfecta conciencia de que tan sólo en campo el número de parados ascendía a 368.490. Y que de igual manera, cuando se afirmaba (también oficialmente) que para diciembre de 1945 había 163.699 parados la realidad era que también, sólo en el campo, se era consciente de que el número de personas registradas como parados (probablemente una cifra inferior a la real) era de 204.272. Todo ello, a pesar de disponer de datos parciales y fragmentarios por el carácter semioficial de los mismos, nos permite tomar las cifras oficiales por verdaderas patrañas al servicio de un sistema de propaganda oficial.

Mes	Paro agrícola extraoficial desde mayo de 1945 a febrero de 1946 <sup>233</sup>	índices del paro agrícola extraoficial en %
mayo	374.104	100
junio	368.490	98,47
julio	395.758	106,05
agosto	301.971	80,71
septiembre	275.347	73,60
octubre	242.609	64,85
noviembre	213.405	57,04
diciembre	204.272	54,60
enero	189.957	50,77
febrero	189.024	50,52

*\*Cuadro nº 22. Paro agrícola oficial a lo largo de 1945.*

Febrero de 1946 se presentaba en el campo español como un período de prósperas cosechas que habría de permitir la realización a lo largo del año de las tareas propias de las distintas estaciones. Las lluvias habían sido abundantes y en diciembre del año anterior se estaba llevando a cabo exitosamente la plantación de hortalizas, patatas, la carga del trigo y el centeno, limpia de acequias o presas, cava y poda de viñedos, repoblación forestal, etc. Así pues, se esperaba una buena cosecha de cereales cambiando la perspectiva sombría que existía en el mes de enero de 1946. Se pensaba que el problema del paro, en comparación con el año 1945, quedaría totalmente resuelto. Las cifras de paro oficial de diciembre del 46 pondrían de manifiesto que, con respecto al año 1945 la situación había empeorado significativamente a pesar de esta optimistas pretensiones.<sup>234</sup> El informe al que estamos haciendo alusión proyectaba una realidad laboral muy pesimista sobre la que no se operaba de forma muy activa considerando como mejor opción la acción meliflua y caótica que no conducía a la solución del problema.<sup>235</sup> Y es que, por ejemplo, en el año 1946 el número de colocaciones en obras para aminorar el paro había sido únicamente de 9.299.

En esta línea de desconcierto absoluto se sitúa una realidad oficial que estimaba el número de parados el 28 febrero de 1946 en 175.407 y que, por otro lado, estaba afirmando que existían 286.403 (97.379 en el sector industrial y de servicios y 78.028 en el agrícola).

El incremento que se había observado de enero a febrero de 1946 (173.155 oficialmente) era debido coyunturalmente a las malas condiciones climatológicas de los meses precedentes y ello explicaba el aumento sobre todo en el sector agrícola y muy especialmente en provincias como

Castellón en las que la pérdida parcial de la cosecha de naranjas había elevado grandemente el número de parados. Todo ello se producía en un año en el que las restricciones de energía eléctrica perdían algo de intensidad potenciando levemente las actividades industriales y sirviendo ello de alivio a la masa trabajadora, pese a que continuaban las graves deficiencias en el transporte y en el suministro de materias primas por los cupos escasos, especialmente en el sector de la construcción. Ello paralizaba infinidad de obras, que en realidad debían absorber el mayor número de parados; y así, después del paro agrícola éste era el más importante, reflejándose en la economía familiar en el mayor número de menores inscritos en las oficinas de paro que intentaban acceder a un puesto de trabajo para aliviar mínimamente la situación de sus progenitores.

La situación de Andalucía era muy grave. Concretamente en Granada, el jefe provincial (Jesús Antonio Salas) denunciaba que la situación en esta provincia era tan penosa, que en la gran mayoría de los pueblos de la provincia la actividad laboral quedaba reducida a la realizada por el médico, el maestro, el secretario del ayuntamiento, el sacerdote y la Guardia Civil. "...El resto de la provincia se encuentra en manos de grandes terratenientes, los que al no intensificar el cultivo de sus extensas propiedades, hacen que el paro adquiera proporciones alarmantes..."<sup>236</sup> En Málaga, la situación no era mejor y el problema fundamental que se planteaba a la población trabajadora era la falta de alimentos indispensables para su sustento, situación que se acentuaba cuando a partir de febrero se intensificaba el paro estacional, no sólo aquí, sino en el resto de España.<sup>237</sup>

De igual manera que en otros casos, las cifras de paro no coinciden de ninguna de las maneras con las oficiales. El mencionado informe señala la cifra de 1.094 parados para Granada cuando para el 30 de junio se reconoce la existencia oficial de 3.427 parados. Pese a no tener la capacidad para juzgar con la perspectiva temporal de la que goza este doctorando, el jefe provincial afirmaba sobre el Servicio de Colocación y Encuadramiento era un organismo sin sentido: "...es prácticamente inútil como medida preventiva de paro forzoso, pues si bien es cierto que establece la obligatoriedad de los productores a inscribirse cuando están parados y a los empresarios (*la obligatoriedad*) de presentar sus ofertas de trabajo en la Oficina, todo esto no tiene más que un valor meramente estadístico que permite conocer la situación del mercado del trabajo dicho en frase cruda, pero que responde a una auténtica realidad, y aún este conocimiento deja mucho que desear por los defectos que tiene el Servicio."<sup>238</sup>

Hay que tener en cuenta que dicho servicio, formalmente imprescindible, tenía una limitada jurisdicción pues, de forma efectiva, sólo funcionaban las oficinas en las capitales y en algunas comarcas. En la mayoría de los casos el funcionamiento de los servicios era puramente nominal y en un aspecto externo esencialmente burocrático. La situación se complicaba más si se tiene

en cuenta que el carácter coactivo de las oficinas del S.N.E.C., en cuanto a la inscripción por parte del trabajador, no tenían paralelo en el ámbito empresarial, en el sentido de que a éste le estaba permitido elegir a sus empleados, lo cual podía ser hasta cierto punto lógico dada la escasa formación profesional de los trabajadores españoles, cuestión que se aborda en otro apartado de esta tesis.

En esta línea de total desapego con respecto a los datos oficiales, la Delegación Sindical de Jaén afirmaba que la media constante de parados en España podía situarse en los 250.000 parados cuando, oficialmente, se estaba hablando de una cifra mucho menor. Sobre esta “rigurosa” base estadística no era posible técnicamente establecer un seguro nacional de paro tal y como planteaba esta misma delegación.<sup>239</sup>

La realidad era que las soluciones de los mandos sindicales en provincias como las de Jaén<sup>240</sup> no iban más allá de meras fórmulas benéfico-caritativas<sup>241</sup> y la solución para los meses de verano radicaba, entre otras, en alternativas como la emigración, la cerámica o la alfarería por cuanto éstas últimas encontraban en el olivar el suministro de ramo y de leña necesario para esas industrias. La realidad pura y dura era que, “por sus especiales características agronómicas, el cultivo del olivo, cuando predominaba excesivamente sobre los demás, forzosamente ocasionaba un fuerte coeficiente de paro forzoso, con las consiguientes repercusiones de tipo social y político.”<sup>242</sup> En el caso de Jaén, ante una cosecha no tan buena como la esperada la solución extrema fue acudir al establecimiento de cuotas (siempre voluntariamente acordadas entre los grandes terratenientes y la organización sindical) sobre los propietarios con arreglo a los líquidos imponibles u otras fórmulas también acordadas. En este tipo de situaciones extremas, ante la manifiesta ineficacia de la política diseñada por el ministerio de Trabajo la única fórmula ejecutada era ésta.<sup>243</sup>

En Sevilla la situación no le iba a la zaga. El número de parados oficialmente reconocidos era de más de 11.000.<sup>244</sup> Las cosechas, en parte fruto de la sequía, no había sido tampoco muy fructíferas. Así pues, para el trabajador del campo, el verano del 46 se caracterizó por las privaciones y ello preludiaba un invierno “terrible.”<sup>245</sup> En cuanto al campo, se refiere las estadísticas oficiales, pese a reflejar unas cifras elevadas, no proyectaban una realidad laboral que en los meses de invierno dejaba a la mayoría de los brazos inactivos en un contexto en que la política de obras públicas no tenía ni la amplitud ni la duración suficiente para ocupar a la mano de obra parada. Paralelamente, la iniciativa privada no tenía suficiente empuje y los capitales, inmovilizados en su mayoría, servían sólo para “satisfacer los menores caprichos de sus poseedores con el mínimo esfuerzo y riesgo...”<sup>246</sup>

El paro en la industria sevillana, en general, se debió a las restricciones eléctricas. Más del 80 % de los parados en este sector se encontraban en la capital, los cuales, siguiendo la tónica ya expuesta, eran considerados vagos profesionales a los que había que eliminar del censo de parados. El remedio para ellos era únicamente la represión, un alud de leyes opresivas, la utilización de la Guardia Civil y cuando eso no era suficiente la “iluminada” cabeza rectora de la política social de la provincia generaba proyectos tan peculiares como el que a continuación exponemos:

“¿Remedios? Para estos desocupados tan solo sería eficaz remedio la creación de un campo de trabajo en donde se les obligara a ingresar, quitándoles con ello la disculpa de que son obreros sin trabajo; frase que utilizan con demasiada frecuencia para poder dedicarse a la mendicidad o a otras actividades inconfesables. Contribuir a la desaparición del paro también, por lo que a esta región se refiere,...mediante la creación y puesta en vigor de una Ley de vagos que obligase a todos estos a ingresar en campos de trabajo creados al efecto.”<sup>247</sup>

En este contexto se entiende la escasa atención prestada al seguro de paro y la idea de que la redención nacional había de venir por medio del trabajo y de la creación de mecanismos que, formalmente, potenciaran el empleo de forma directa tal y como defendía el ministro Girón:

“...en una nación de modestos recursos...como la nuestra, con su economía destrozada por una guerra devastadora, afrontar el problema del paro con subsidios significaría hundir definitivamente la economía, aparte de realizar una labor de profundo sentido antisocial. Por ello la acción contra el paro no se realizó creando Instituciones de Previsión, sino centrando todo el esfuerzo gubernamental en darle la batalla directamente, creando trabajo que, en actividad fecunda, absorba el paro, al mismo tiempo que multiplique la riqueza nacional, que ha de beneficiar a todos los españoles, principalmente a los humildes, porque una economía fuerte es la base firme de los avances sociales que han de labrar su redención.”<sup>248</sup>

Y es que se consideraba que una de las responsabilidades del Estado nacido el 18 de julio era la consecución del orden por encima de todo, y en ese sentido aquél era el responsable de “reducir al mínimo el número de indigentes y de parados, verdaderos focos perturbadores de la tranquilidad pública.”<sup>249</sup>

La coerción, como se ha expuesto, era el camino elegido sin caer en la cuenta de que, en cuanto se refiere a las jerarquías y autoridades locales, su actitud era de apatía crónica y, en muchos casos, de total desinterés por prestar servicios tan necesarios como datos básicos para el

conocimiento de la situación laboral local. Sin embargo, ésto que sí constituía un problema esencial pero salvable con voluntad política, era una dificultad esencial para los parados a los cuales, sin información precisa y colaboración por parte de las autoridades, no se podía encontrar solución alguna. Ello sin contar con la tendencia por parte de las empresas a saltarse las normas básicas sobre colocación y empleo con el consentimiento tácito de las autoridades.

Murcia no era una de las regiones más destacadas por el número de desempleados y no se explicitan diferencias entre las oficialmente difundidas y las que de forma interna circulaban por el S.N.E.C. De hecho ambas cifras coinciden para la fecha del 30 de junio de 1946 (4.636 parados) aunque se estimaba que dicha realidad era falsa por defecto. Como en gran parte de las provincias españolas el paro se dejaba sentir fundamentalmente en el sector agrícola. Aproximadamente la mitad del desempleo pertenecía a este sector; concretamente un 58 %. Hay que decir que, dada las especiales características de la región murciana, el paro se concentraba de noviembre a marzo en las zonas de regadío, dada la paralización de la actividad agrícola. Pese a ello, su incidencia no suponía un alud desmesurado de inscripciones en los registros de paro en función del comienzo de las actividades en la industria del esparto y derivados. En el caso del secano, la salida era fundamentalmente la emigración para reunir las reservas necesarias de cara a soportar o por lo menos mitigar la dureza de los meses invernales.<sup>250</sup>

Frente a los casos extremos de la región andaluza podemos observar una situación en las antípodas en la provincia de Lugo.<sup>251</sup> Su caso es sintomático de la minifundista región gallega, lo cual explica la escasa incidencia oficial del paro. En general, la interrupción de las tareas agrícolas tradicionales se enjugaba con las faenas de recolección dado que éstas se realizaban en toda Galicia en régimen familiar por la extremada división de la propiedad. Después o antes de recoger su propia cosecha, todos los años, parte de los agricultores salían a trabajar a Castilla-Léon. Eso explica, al menos en parte, que las bajas cifras de paro no se disparasen de forma súbita en ningún momento. Pese a ello el jefe provincial de la O. S. Lucha contra el Paro, Eladio López Muñiz, consideraba ficticio el poco paro existente.

La provincia gallega con mayor número de parados era La Coruña. Partiendo de la situación global de la economía española y teniendo en cuenta que el censo de trabajadores ascendía a 310.194, la cifra de parados oficiales en esta provincia parece alejarse en gran medida de la realidad. Los sectores en donde se concentraba correspondían a la construcción, la hostelería y el sector de banca y seguros. El paro en las industrias del mar se centraba esencialmente en las mujeres y geográficamente en el Ferrol. Pese a ello, como se ha dicho, el paro tenía poco peso relativo en esta provincia y el existente, a los ojos del Vicesecretario Provincial de Obras Sindicales, era debido a la tendencia de muchas personas a inscribirse en las oficinas de colocación con el objetivo de obtener determinados beneficios que se concedían a los parados

por iniciativa del Gobernador Civil consistentes en “donativos de patatas y reparto de cupones-primas.”<sup>252</sup>

En esta situación sólo la caridad podía salvar a los trabajadores españoles. Un ejemplo de ello lo encontramos en políticas locales de algunas provincias como Lérida.<sup>253</sup> En este caso, pese al escaso peso del paro en esta provincia, la iniciativa para combatirlo por parte del Delegado Provincial Sindical, del Alcalde y del Gobernador Civil consistía en crear un aguinaldo del obrero parado, repartir juguetes entre los hijos de los trabajadores en paro el día de Reyes y buscar donativos gracias a los cuales en las fiestas de Navidad era posible realizar obras de saneamiento a cuenta del ayuntamiento para absorber a los parados. En el resto de los casos se pasaba de la beneficencia, a la incompetencia y la inactividad total.<sup>254</sup>

Al igual que en Cataluña (exceptuando Barcelona), en Logroño el paro era insignificante si lo comparamos con otras provincias. En su caso sólo unos cientos de parados enturbiaban el sueño del ministerio de Trabajo. Y es que dadas sus condiciones geográficas, agrícolas e industriales dicha provincia no se veía afectada por el paro de forma sensible y constante dado su nivel de producción y el desarrollo relativamente importante de sus industrias complementarias. Como en tantos otros casos, se identifica a los pocos parados oficiales con “casos de beneficencia, debido a su ineptitud, incapacidad física o avanzada edad no comprendida aún dentro de los beneficios del Subsidio de Vejez.”<sup>255</sup>

Como en el caso de Logroño, Segovia<sup>256</sup> (y por extensión Castilla y León) se veía menos afectada por el paro dado su menor número de habitantes. Pese a ello, esta circunstancia se debía a la paralización de los trabajos agrícolas y forestales durante los meses invernales. Es más, preveyendo la época de siega se reclamaba por parte de las Hermandades de Labradores y Ganaderos trabajadores de otras provincias. Como en tantos otros casos el paro que se producía en la construcción se debía a la falta de materiales.<sup>257</sup>

Los datos oficiales sobre la provincia de León hacían de ella una de las menos afectadas por el paro. Como mostraba el cuadro referente al paro en 1946 (cuadro nº 21) el número de desempleados en ningún momento sobrepasó los 1.000. Ello no minimizaba una situación terciarista que era posible identificar en el nivel de vida de gran parte de los trabajadores a mediados de los años cuarenta. Y es que el obrero leonés venía trabajando una media de diez horas diarias para poder sobrevivir. La legislación laboral no se aplicaba y como ejemplo se puede decir que “los contratos de trabajo se hacían según fluctuaciones de alza y baja, según la concurrencia de los obreros.”<sup>258</sup> Utilizando el testimonio del jefe provincial de Lucha contra el Paro, era sistemática la tendencia de los contratistas a bajar los salarios a su medida pagándoles unas veces a 80 o 90 céntimos la hora, sin domingos ni fiestas (en otras ocasiones incluso



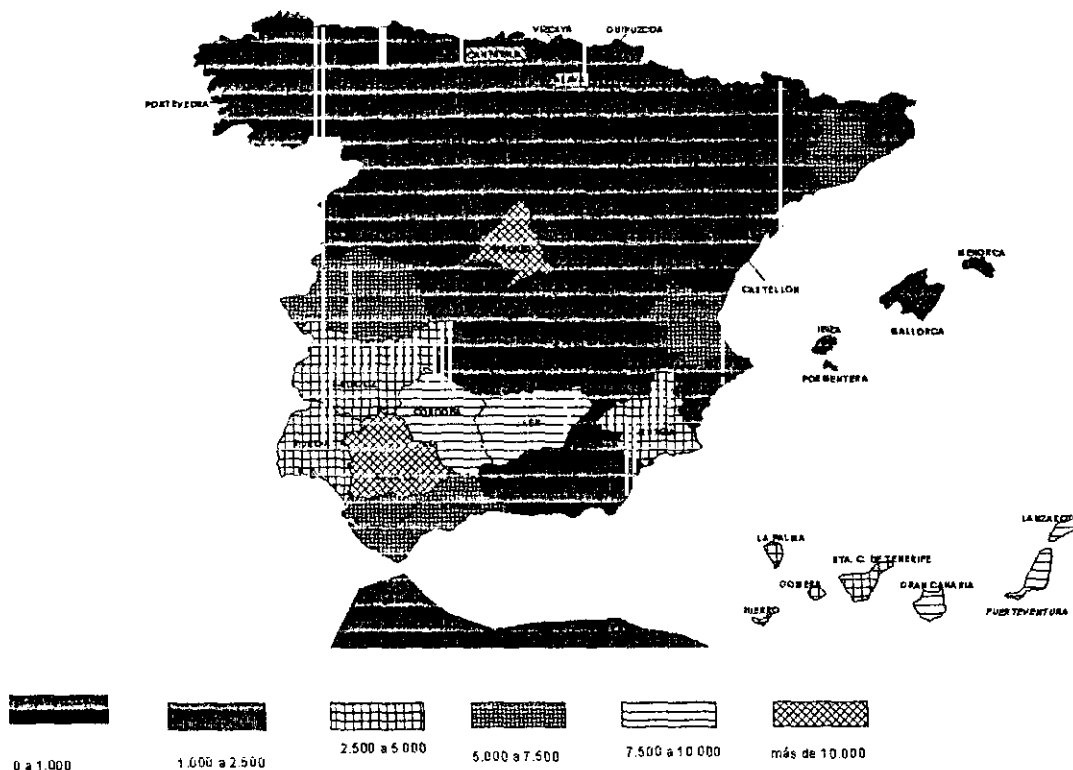
menos) y por tanto violando impunemente la legislación laboral que ya de por sí establecía unos salarios bajo mínimos. De igual manera, se constataba el hecho de que las normas referentes al contrato de trabajo se violaban sistemáticamente y aquéllas se establecían en muchos casos de forma verbal, lo cual implicaba que el trabajador únicamente cobraba las horas trabajadas, sin domingos ni fiestas. En esta línea de total desprotección del trabajador se podían encontrar ejemplos muy expresivos de la situación de los obreros leoneses en situaciones similares a la de los empleados del pantano de los Barrios de Luna que a continuación exponemos:

“En cuanto a la alimentación, vestido y alojamiento...cocinan en un chamizo de techo y comen en la vía pública, en cuyo perímetro, entre las evacuaciones y restos de comida hay un olor insoportable,...y como son muchas las necesidades, esto impide la aplicación de la Justicia, porque muchos robos de frutos no serán quizá una mala intención sino una necesidad y esto es muy frecuente.”<sup>259</sup>

Provincia	Parados en 30 de junio	Parados en 31 de diciembre
Álava	145	144
Albacete	428	280
Alicante	3.210	1.868
Almería	2.466	3.248
Ávila	359	1.444
Badajoz	2.430	3.743
Baleares	1.197	954
Barcelona	5.835	6.248
Burgos	109	125
Cáceres	4.586	5.366
Cádiz	8.728	6.866
Castellón de la Plana	1.351	1.242
Ciudad Real	224	234
Córdoba	8.746	9.540
Coruña (La)	1.963	2049
Cuenca	727	552
Gerona	975	926
Granada	2.282	1.375
Guadalajara	219	331
Guipúzcoa	393	288
Huelva	3.459	3.278
Huesca	59	112

Jaén	8.856	9.910
León	283	278
Lérida	296	427
Logroño	76	115
Lugo	153	132
Madrid	18.335	13.096
Málaga	6.498	7.482
Murcia	3.264	3.904
Navarra	63	76
Orense	108	65
Oviedo	1.250	1.000
Palencia	818	694
Palmas (Las)	10.023	8.033
Pontevedra	465	383
Salamanca	978	874
Santander	4.444	3.489
Sta. Cruz de Tenerife	629	657
Segovia	208	543
Sevilla	11.874	11.240
Soria	12	11
Tarragona	277	106
Teruel	142	112
Toledo	237	392
Valencia	6.098	5.985
Valladolid	1.046	769
Vizcaya	2.467	2.296
Zamora	496	383
Zaragoza	487	527
Marruecos	1.175	383
TOTAL	130.949	122.673 <sup>260</sup>

\*Cuadro nº 23. *Paro oficialmente registrado en junio y diciembre de 1947.*



\*Mapa n° 1. Parados en diciembre de 1947.

Como se observa en el mapa precedente la mayoría del desempleo se centraba fundamentalmente en Andalucía, Extremadura, Madrid, Valencia, Islas Canarias y Barcelona. Si utilizamos las cifras oficiales observaremos que en febrero del 47 teníamos 130.949 parados y el 31 de diciembre del mismo año 122.673. El mes de mayor incidencia fue enero con 168.350 parados registrados. Sin embargo, pese a servirnos de referencia orientativa, el jefe nacional del S.N.E.C. ofrecía como promedio mensual nacional para este año la cifra de 176.528 (138.770 de paro industrial y 76.446 de paro agrícola) lo cual muestra de nuevo la separación entre las cifras de paro oficial y estimado.<sup>261</sup> Y es que en las provincias de mayor desempleo agrícola predominaba el cultivo de los cereales y del olivo.<sup>262</sup>

Pese a ello, oficialmente podemos dar la cifra de 123.000 parados de media mensual. Si tenemos en cuenta que la población activa de España estaba en este año alrededor de los 9,9 millones de trabajadores nos encontramos con que la población activa parada oficial suponía un 1,2 %, cifra a todas luces irreal por el hecho de que las estadísticas estaban recogiendo a los trabajadores en paro susceptibles de recibir los escuálidos beneficios del seguro contra el paro y no incluían a la totalidad de los trabajadores agrícolas sino a una pequeña parte, fueran éstos pequeños propietarios, aparceros o arrendatarios, dado que no estaban sujetos a ningún tipo de seguro obligatorio de paro.<sup>263</sup> Teniendo en cuenta el porcentaje de población activa en este sector (muy superior al 50 %) la validez de las apreciaciones formuladas sobre el escaso número de parados en relación a la población activa quedaban parcialmente anuladas.

De cualquier forma el año 1947 fue un año negativo para la economía española tanto por la contracción de la expansión monetaria como por las perturbaciones en el comercio exterior. Ello tendría una especial relevancia, puesto que las medidas preventivas tomadas para aminorar el paro eran simplemente “curas de urgencia”<sup>264</sup> y no un plan establecido para un largo plazo, lo cual convivió con el colapso de la agricultura, la ganadería y de una industria (esencialmente la pequeña y mediana) muy afectada por las restricciones de fluido eléctrico.

En dicha situación, también influía el hecho de la escasa actividad de los órganos creados para luchar contra el desempleo. Concretamente la O.S.L.P. en la provincia de Almería denunciaba que carecía de personal suficiente en su oficina y que en su provincia no se desarrollaban campamentos ni existían proyectos de contrata de obras en estudio o realización.<sup>265</sup>

En esta línea estaba la mencionada obra en toda Andalucía, en donde la labor realizada se reducía a la de carácter informativo y a la redacción y emisión de informes y datos en general que ponían de manifiesto lo penosa que era la situación del obrero andaluz.<sup>266</sup> En la provincia de Cádiz encontramos 6.866 parados en diciembre de 1947.<sup>267</sup> Allí, el carácter estacional de los cultivos, los latifundios, la falta de regadíos y colonización, constituían el principal problema generador de desempleo. Dada esta situación, las únicas medidas se centraban en la construcción de caminos, accesos, refugios, casas para guardas y casas de vigilancia para prevención de incendios. Y es que las instituciones del franquismo ligadas a la política social no estaban dispuestas a alterar de forma substancial la grave situación de los obreros cuyo estado estaba motivado fundamentalmente por el monocultivo y el latifundio y menos en un momento en el que se consideraba que era necesaria la intensificación, la racionalización y la mecanización del campo español con el consiguiente aumento de mano de obra sobrante:

“Este excedente de población campesina ha de sufrir todavía un aumento con la racionalización de los cultivos pues si bien la intensificación de los mismos lleva consigo una mayor demanda de mano de obra, la mecanización que con gran urgencia e intensidad reclama el secano español dejará libres gran número de brazos, mayor aún si esta mecanización del campo va acompañada de una concentración parcelaria, que consideramos imprescindible para el progreso de la agricultura.”<sup>268</sup>

En Granada, como en el caso de Cádiz, se ofrecía oficialmente una cifra de parados de 2.282 en febrero y 1.375 en diciembre, cuando se sabía que en los meses invernales, en los que mayor incidencia tenía el desempleo fruto del fin de las tareas agrícolas, la cifra superaba los 20.000.<sup>269</sup> Al igual que en el resto de Andalucía, la política de repoblación era utilizada como un comodín, como una válvula de escape y como el único medio existente para acudir con presteza a saciar, siquiera parcialmente, el hambre de las clases trabajadoras.

Sobre esta realidad se imponía una violación sistemática de las reglamentaciones del trabajo en su vertiente salarial dado que el exceso de mano de obra, hacia que la demanda de trabajo fuera infinitamente superior a la oferta. Fruto de esta ley de hierro, se producía el abaratamiento del coste de la mano de obra sin que las autoridades sindicales controlasen de forma efectiva dichas prácticas. Y frente a ello, los representantes de una reducida minoría vivían con una ostentación y una prosperidad que contrastaba crudamente con la inmensa necesidad que pasaban los habitantes de Granada, cuestión que se percibía como perjudicial para el régimen. Y ello no tanto en función de consideraciones sociales o económicas sino esencialmente políticas “porque se encuentra falta de clase media agrícola, suprema aspiración de las directrices nacionales, que tan necesaria es al medio rural para estímulo de las economías productoras, y en el orden de las política, para consolidación del régimen.”<sup>270</sup>

Incluso cuando la política laboral pretendía ser activa, no lograba los objetivos planificados. Así, la O.S.L.P. de Ávila ponía de manifiesto como los 24 obreros enviados a trabajar al canal de Barderas, en la provincia de Navarra, habían regresado a sus hogares abandonando el campamento de trabajo dada la situación draconiana en que se les mantenía y a las deficientes condiciones de organización del campamento.<sup>271</sup>

Casos similares se pueden encontrar en provincias como las de Navarra<sup>272</sup> que ponían de manifiesto la mala situación de los trabajadores que se encuadraban en los campamentos de trabajo de la obra sindical a la que nos estamos refiriendo. El informe anual de esta obra provincial ponía de manifiesto la falta de higiene, las realizaciones puramente propagandísticas, la suciedad generalizada, la falta de elementos sanitarios y medicamentos, la ausencia de dormitorios, productos alimenticios básicos, etc., etc.,:

“En el momento de nuestra visita existían 6 pilas para la higiene personal de los albergados, con visibles muestras de haber sido instaladas aquel mismo día; pero que carecían de agua corriente, por lo que hasta que ésta no se instale, son totalmente inservibles,...La suciedad del dormitorio era evidente...Existen locales para enfermería y botiquín, si bien carecen de los elementos más indispensables, pues no solamente notamos la falta de los medicamentos más usuales, sino hasta el algodón y vendas...Para comedor se utiliza el mismo dormitorio,...El azúcar, el café, el vino y la carne, son desconocidos para los trabajadores del campamento, y el pescado se les suministra en rara ocasión...La comida que observamos, se componía, de un potaje a base de patata, arroz y judías, condimentado con pimentón, ajos, cebolla y aceite de coco, que juzgamos insuficiente en cantidad y calidad...El aspecto exterior del vestuario de los obreros, es francamente deplorable; no solamente están sucios sino rotos, con ropas

insuficientes para la crudeza del clima donde han de trabajar... Su desaseo se debe también a la falta de jabón... que no lo han conocido en los tres meses de campamento, pues si bien pueden adquirir este artículo en el economato, es mediante precio, y no podemos olvidar que después de los descuentos que se les hace por comida y cargas sociales, no llega como decimos a las 7 pts. que perciben, y con las que tienen que hacer frente, no sólo a sus propias necesidades, sino a las familiares que de ellos dependen...<sup>273</sup>

En otros casos, como el de Burgos, las repoblaciones forestales (comodín muy recurrido para luchar contra el desempleo) no se podían llevar a cabo por falta de mano de obra dado el militarismo imperante en los campamentos de trabajo de la Obra.<sup>274</sup>

Como hemos señalado, y de igual manera que en años anteriores, la gran mayoría del desempleo se centraba en las actividades agrícolas y en la construcción.<sup>275</sup> Siendo más riguroso, habría que afirmar que de forma básica el paro era una realidad en el año 1947 ligada muy mayoritariamente al ámbito agrícola puesto que la mayoría de los parados que figuraban inscritos en el ramo de la construcción eran en realidad braceros agrícolas que accidentalmente se dedicaban a la construcción en las épocas en que las tareas agrícolas no abundaban.<sup>276</sup>

Como era tradicional en las estadísticas sobre paro, oficialmente había 32.691 parados en febrero y 35.805 en diciembre. Extraoficialmente se consideraba una cifra media mensual de 70.582 parados en el sector agrario.<sup>277</sup> Pese a ello, la situación había de ser ligeramente mejor que el año anterior si se tiene en cuenta que "las beneficiosas lluvias caídas en casi toda la península habían permitido la realización de las faenas de sementera en aquellas provincias en que todavía no se había podido efectuar."<sup>278</sup> También se habían realizado las operaciones de la vendimia. Lo mismo había ocurrido con los trabajos de recolección de frutos, aceitunas, siega del arroz, recogida de la algarroba, etc.

Aproximadamente, el 33% de estos parados se centraban en tan sólo dos provincias, Jaén y Córdoba y un porcentaje similar se hallaba entre Badajoz, Cáceres, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva. En definitiva, el paro agrícola se centraba en las provincias del sur. Afirmar, como se hacía en la época, que el problema del desempleo en Andalucía y Extremadura obedecía al gran crecimiento demográfico sólo puede explicar muy parcialmente dicha realidad, sobre todo si se tiene en cuenta que entre el año 1900 y 1940 las provincias que habían visto crecer en términos absolutos más a su población rural habían sido Guipúzcoa, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Vizcaya y Pontevedra. Seguidamente encontramos a las provincias andaluzas por lo cual la razón expuesta sólo podía explicar dicha situación muy parcialmente. El verdadero problema de estas provincias era la ausencia casi total de industria, la deficiente distribución de la propiedad

agrícola o dicho de otra forma el que la gran propiedad dominara de forma abrumadora. Este sí que era el gran problema de aquellas dos regiones masacradas por el paro, dado que los grandes propietarios procuraban básicamente ahorrar jornales y hacer del cultivo extensivo la norma.<sup>279</sup> Esta era la verdadera dificultad y no el clima, la psicología del pueblo andaluz y extremeño o la falta de precipitaciones.

Esta situación podía tener una posible solución a base de una política adecuada de colonización e industrialización dificultada especialmente en este año 1947 por el hecho de que fue el de mayores restricciones eléctricas.<sup>280</sup> Lo antieconómico de la opción mencionada provocó que desde el poder se potenciaron corrientes migratorias del campo a la ciudad. Por ello, las escasas realizaciones del franquismo en torno al tema de la colonización se centraron básicamente en las zonas de regadíos. Se puede afirmar que no se consideraba rentable elevar a la condición de propietario al bracero, estableciendo el patrimonio agrícola familiar, porque los intereses de la gran propiedad no estaban de acuerdo con este planteamiento. Así “en los regadíos la parcelación no ofrece problema alguno de oposición de intereses, tan corrientes, por el contrario, en la parcelación del secano. De ahí también que la colonización o parcelación de éste último se haya prácticamente demorada”<sup>281</sup> entre otros motivos porque la colonización estaba sujeta, de hecho, a la iniciativa y a la conveniencia particular de los grandes propietarios, lo cual sólo era evitable aplicando una ley de expropiación rigurosa. De hecho, la ley creada para tal efecto con fecha de 27 de abril de 1946 estaba prácticamente en suspenso y sin práctica aplicación por la ausencia de reglamento.

Provincia	nº de parados en 30 de junio de 1948	nº de parados en 31 de diciembre de 1948
Álava	148	160
Albacete	235	119
Alicante	1.521	1.792
Almería	1.574	1.253
Ávila	18	1.492
Badajoz	2.087	5.050
Baleares	895	895
Barcelona	6.500	7.073
Burgos	81	82
Cáceres	3.113	4.807
Cádiz	7.808	7.922
Castellón de la Plana	843	1.476
Ciudad Real	336	915

Córdoba	8.213	17.219
Coruña (La)	2.446	2.320
Cuenca	444	446
Gerona	910	906
Granada	1.722	2.014
Guadalajara	187	345
Guipúzcoa	262	342
Huelva	2.685	2.926
Huesca	139	278
Jaén	7.411	6.974
León	244	211
Lérida	101	418
Logroño	125	191
Lugo	138	239
Madrid	12.542	19.886
Málaga	7.927	9.228
Murcia	3.505	3.864
Navarra	47	333
Orense	108	108
Oviedo	1.245	911
Palencia	740	719
Palmas (Las)	7.145	6.818
Pontevedra	623	467
Salamanca	806	1.191
Sta. Cruz de Tenerife	2.774	2.736
Santander	273	303
Segovia	179	866
Sevilla	7.796	14.052
Soria	14	29
Tarragona	202	374
Teruel	158	168
Toledo	140	482
Valencia	5.739	3.896
Valladolid	406	966
Vizcaya	1.702	1.824
Zamora	215	335



Zaragoza	378	805
Marruecos	1.020	119
TOTAL	105.870	139.425 <sup>282</sup>

*\*Cuadro n° 24. Parados por provincias oficialmente inscritos en 1948.*

Pese a la cifras oficiales, el número de parados para este año 1948 se situaba en 160.883 parados de media mensual.<sup>283</sup> Como todos los años, globalmente España encuentra su mayor concentración de paro en la agricultura<sup>284</sup> y la construcción. Resulta interesante observar como en el caso de la agricultura algunos de los responsables del problema del desempleo en el campo aludían a J.M. Keynes para explicar la existencia del paro endémico. En la ponencia n° 12 sobre paro obrero en la agricultura del Congreso Sindical de la Tierra celebrado en Sevilla en mayo de 1948, José Redondo Gómez exponía la explicación siguiente:

“Keynes -profundizando en el análisis del problema- nos dice: El paro proviene de una desigualdad entre el coeficiente de ahorro (renta nacional que no se consume) y el coeficiente de inversiones, por ser el primero mayor que el segundo.”<sup>285</sup>

Junto a ello habría que considerar variables como el hecho de que el porcentaje de tierra destinada al monocultivo en España era abrumadoramente dominante. Pese a lo cual, junto a los que formalmente bendecían la división de la gran propiedad latifundista existían aquellos que encontraban en dicha formulación un argumento puramente demagógico y una política antieconómica. En estos términos se explicitaba la opinión del jefe nacional del sindicato del olivo:

“Una vez planteado en sus verdaderos términos, se hace necesario revisar la actual organización agrícola española, que por someter al obrero a las más duras condiciones de vida alienta en ellos apetencias que, al conmover a la opinión pública, nos llevan a soluciones antinacionales como son aquellas que en el secano pretenden la desmembración de las explotaciones, lo que supone dar muchos pasos atrás en la capacidad técnica media de los empresarios españoles, renunciar a la eficacia en el control de la producción, mermar el ya escaso capital circulante al servicio del agro, imposibilitar el uso de la mayor parte de las conquistas de la ciencia que cada día requiere espacios más amplios, rebajar premeditadamente el rendimiento del trabajo nacional campesino, agravar las dificultades de la enseñanza y acrecentar las exigencias de movimientos cooperativistas de los que nuestro individualismo secular se encuentra ausente.”<sup>286</sup>

Ha de tenerse en cuenta que en lo referente al cultivo del cereal, en este año 1948 el porcentaje de tierra útil dedicada a dicho cultivo era el que a continuación exponemos: Cádiz 48,6 %, Badajoz 43,2 %, Huelva 37,8 %, Albacete 37,2 %, Córdoba 36,4 %, Cáceres 36,2 %, Toledo 31 %, Granada 30,8 %, Ciudad Real 30,3 %. En el caso del olivar nos encontramos con que el 48,4 % de la tierra cultivable en Jaén era dedicada a dicho cultivo, el 36 % en Sevilla, el 35,8 % en Córdoba y el 29,7 % en Málaga. Precisamente eran éstas algunas de las provincias en que más paro existía. Téngase en cuenta que, considerando variantes regionales, una hectárea de cereal podía necesitar en verano alrededor de 14 jornales, en otoño ya únicamente cinco y en invierno ninguno. En el caso del olivar, en invierno se necesitaban aproximadamente treinta veces más jornales que en primavera y otoño. En este caso, si el cultivo era normal se necesitaban al cabo del año 24 jornales por ha., si el cultivo era esmerado 43,35 y si era deficiente 13,5. En el caso del cereal, 15,86 si era normal, 19,36 si era esmerado y 11,39 si era deficiente.<sup>287</sup> Ello sin considerar el hecho de que en las provincias olivereras el paro estacional se acentuaba más debido a que el cultivo del olivo ofrecía intermitencias más bruscas que el del cereal, a lo cual hay que añadir que las cosechas de 1948-49 no fueron muy abundantes.<sup>288</sup>

Hay que considerar también que varios factores podían incidir en el mayor o menor peso del paro en época de crisis agraria. Hay que tener en cuenta la influencia de la superficie que al cultivo se dedicase en una determinada provincia o región; la mano de obra disponible en el mismo ámbito geográfico referido; la cantidad de mano de obra necesaria en relación al número de has. de dicho cultivo y las posibilidades de reducción de dicha mano de obra en función de las necesidades coyunturales del empresario. Todo ello permite afirmar que en época de crisis agraria su influencia era mucho mayor en la España oliverera que en la dedicada al cultivo del trigo. "Esto era debido al mayor grado de oscilación de las necesidades de mano de obra en el cultivo del olivar y a las mayores posibilidades del empresario agrícola de reducir el empleo de mano de obra."<sup>289</sup>

En 1948 el segundo sector más afectado era el de la construcción.<sup>290</sup> Hay que recordar las dificultades para dar cifras exactas de paro sobre todo en el sector agrícola. Sin embargo, si en algún tipo de actividad se puede dar una cierta credibilidad (muy relativa) a las cifras de paro es en el de la construcción dado que era el único en el que a principios de 1949 funcionaba la cartilla profesional. Por este motivo, el control (de haber voluntad política para ejercerlo) era relativamente más fácil que en un sector como el agrícola.

Año	Promedios anuales
1943	41.518
1944	31.659
1945	28.077

1946	36.441
1947	30.093
1948	24.211
1949	43.131

*\*Cuadro n° 25. Promedios anuales de paro en el sector de la construcción.*

Como se observa en el cuadro n° 25 ya se anunciaban algunos graves problemas que iban a explicitarse a finales del mismo año 48 y a lo largo de 1949. Téngase en cuenta que en diciembre de 1947 el número de parados en la construcción era de 23.371, en diciembre de 1948 la cifra ya se situaba en 31.864 y en el mismo mes de 1949 en 50.125, continuando su marcha ascendente en 1950 con 59.550 parados también en diciembre.

En líneas generales, se estaba palpando el empeoramiento progresivo de la coyuntura económica, lo cual permitía adelantar un próximo incremento en el número de parados empezando por el mencionado sector de la construcción.<sup>291</sup> Ello implicaba una lucha contra aquella situación que comenzaba, no con la actividad directa,<sup>292</sup> sino con la propaganda.<sup>293</sup>

En Cataluña la realidad en el verano del 48 ponía de manifiesto que se aproximaba una coyuntura muy negativa para el empleo. La situación, dada la conflictividad latente de Barcelona, era de "pánico" entre las autoridades ante el invierno que se les podía venir encima.<sup>294</sup> Y es que la provincia de Barcelona, por su carácter eminentemente industrial, había llegado a un cierto estado de saturación en algunas de sus actividades más características lo que, en principio, debía restringir el consumo con ocasión de algunos tratados comerciales realizados para la adquisición de materias primas y productos alimenticios. Esa saturación no estaba originada por estar cubiertas las demandas de productos en el interior del país. Lo que realmente estaba sucediendo en esta provincia era que existían grandes cantidades de reservas de productos en manos de los especuladores, los cuales ante la psicosis de una posible bajada en los precios estaban lanzando al mercado aquellas existencias. Favoreció dicha situación el anuncio del sector bancario de revisar los créditos, potenciando así la situación de pánico. Ello estaba restando confianza entre los industriales y empresarios; y a partir de ese momento se extendió la tendencia de aquéllos a delimitar en lo posible el número de obreros a su servicio. Esta falta de confianza se palpaba de forma más evidente en el ramo de la construcción.<sup>295</sup> Concretamente en este sector era evidente que la crisis provenía de la dificultad para obtener créditos. La paralización relativa del ramo no podía deberse al exceso de producción, dado que hacían falta muchísimas viviendas, sino por la menor seguridad en los beneficios.

Normalmente a la hora de prescindir de dichos empleados los primeros perjudicados eran precisamente los emigrantes provenientes del campo español.<sup>296</sup> En su mayoría eran peones sin

especialización alguna, muchos de los cuales tenían un carácter eventual y que no retornaban a sus lugares de origen. Su vida se consistía en el hacinamiento en lugares insalubres a lo largo de la ciudad obteniendo de la caridad los alimentos básicos para vivir.<sup>297</sup>

Del resultado de esta situación la oficina de encuadramiento y colocación afirmaba que existían 563.014 parados.<sup>298</sup> Quizás haya que tomar estas cifras con un tanto de escepticismo, pero el hecho de que las empresas modificaran las condiciones de trabajo, la jornada laboral, el cese en las actividades, la suspensión de contratos o el despido definitivo sin realizar previamente la solicitud pertinente a la Delegación Provincial de Trabajo, tal como exigía el Decreto de 26 de enero de 1944, posibilitaba un aumento efectivo de las cifras de paro tal y como atestiguaba el Jefe de la Oficina Provincial de Lucha contra el Paro, José Orero Tánger.<sup>299</sup>

Y en este contexto, constatamos que la Banca restringía el crédito mientras los trabajadores barceloneses hacían frente al alto coste de la vida mediante agotadoras jornadas laborales a lo largo de las cuales trabajaban durante doce, catorce o aun más horas en una o dos empresas. Y ello para que malcomieran y vivieran sus familiares o adquiriesen una grave enfermedad “como muchas veces hemos comprobado.”<sup>300</sup> Y es que los sueldos habían sido y seguían siendo insuficientes para mantener unas condiciones de vida decentes en cualquier capital. Hasta tal punto que se podía afirmar lo siguiente:

“De hecho en Barcelona se puede afirmar que ninguna Reglamentación de trabajo llegó a significar, en el momento de su promulgación, una mejora económica de los productores, pues los salarios que se percibían al entrar en vigencia cualesquiera de esas ordenanzas estaban superados por la acumulación de pluses de carestía, primas especiales, etc., Pero ahora resulta que quienes podían soportar este trabajo antinatural, por el que podían nivelar el presupuesto familiar, se encuentran con que han sido suprimidas las horas extraordinarias, primas de producción y otros emolumentos, o en otro caso han perdido su doble actividad profesional...”<sup>301</sup>

Dada esta coyuntura, las empresas barcelonesas seguían la táctica de reducir sus plantillas de personal. ¿Cómo? Se ofrecía a los trabajadores a los que se pretendía despedir una indemnización superior a lo que en derecho les correspondía de acuerdo a lo establecido en el Decreto de 26 de enero de 1944. La oferta se realizaba individuo por individuo sin hacer coincidir “el despido” de unos con el de otros. En esta situación, los obreros acuciados por la necesidad del momento y sin pensar en las consecuencias, caían en la tentación de aceptar la cantidad que se les proponía, y luego sucedía lo previsible: que hasta que no agotaban el dinero, no aparecían (en el caso de que lo hiciesen, lo cual es muy dudoso) por las oficinas de colocación, con lo que quedaban absolutamente desamparados.

Si comparamos la situación de la provincia de Tarragona con la de Barcelona, tenemos que llegar a la conclusión de que el paro no ofrecía la menor importancia desde un punto de vista oficial, si bien al igual que en otras provincias se ponía de manifiesto un posible aumento del desempleo que en el año siguiente iba a ser palpable.<sup>302</sup>

Como ya se ha mencionado, otro de los problemas planteados era la política restrictiva de la Dirección General de Banca a la hora de conceder créditos, siendo concedidos éstos por las entidades de crédito local. Concretamente la organización sindical de Tarragona consideraba "que el crédito barato contribuiría a la reconstrucción nacional y al aumento del potencial económico. No comprenden que existiendo organismos con dinero para hacer frente a la demandas, dificultades y trabas burocráticas no lo permitan."<sup>303</sup> En cuanto a la capacitación de los jornaleros, consideraba el mencionado informe que los obreros agrícolas estaban capacitados para cultivar por su cuenta. Lo que no se aclara es si estos eran propietarios de las tierras susceptibles de ser cultivadas o si por el contrario dependían de propietarios para los cuales trabajaban como asalariados.

Al igual que en el resto de Cataluña se estaba esperando que de un momento a otro el paro comenzara a despuntar. De hecho, en el verano del 48 el ritmo de presentación de proyectos de nuevas obras se había cortado y esto era lo que verdaderamente constituía un indicio de que aquella industria no ofrecería posibilidades masivas de absorción de mano de obra como había sucedido hasta ese momento. La crisis también se presentaba en las corcheras<sup>304</sup> y en la textil afectando más a las mujeres que a los hombres tanto en cuanto daba más trabajo a las primeras que a los segundos.<sup>305</sup> De igual manera, se detectaba que la situación de aprovisionamiento de alimentos básicos empezaba a ser muy deficiente ante la posibilidad de que volviera una población volante de provincias como la de Barcelona.

También en Lérida<sup>306</sup> se esperaba un previsible aumento del paro comenzando éste por el sector de la construcción. Sin embargo, al ser un contingente relativamente pequeño de parados, era de esperar que la falta de actividad de la iniciativa privada fuera absorbida en su mayor parte por las obras públicas.

En las provincias vascas el peso del paro era inferior. Si tomamos como ejemplo Álava encontramos un número de parados oficialmente insignificante<sup>307</sup> dado que los existentes eran considerados como parados permanentes asimilables a vagos y maleantes que no se acomodaban a ningún empleo,<sup>308</sup> pese a lo cual la tendencia señalaba un cierto incremento.<sup>309</sup>

En Asturias,<sup>310</sup> la mayor conflictividad potencial de esta zona incidió en el hecho de que hubiera una especial preocupación por dar solución a las posibles demandas sociales. Así en 1948 se concedió a la Delegación Sindical Provincial de Asturias el desarrollo del llamado Plan de Acción Asistencial de cara a la construcción en dicha provincia de viviendas, consultorios, sanatorios, etc. Se planificó que las inversiones en el quinquenio 1948-52 fueran de 30.619.175,71 pts. pese a que la cifra solicitada había sido de 62.008.209,80 pts.

En cuanto al número de parados oficialmente reconocidos, la cifra no era excesivamente alta en comparación con el resto de España (1.245 en junio y 911 en diciembre de 1948). El informe elevado por la Secretaría Sindical Provincial en 1948 reflejaba, aunque parcialmente, la realidad socio-laboral de este rincón de España.<sup>311</sup> En el ámbito campesino la distribución de los piensos por las Hermandades Locales de Labradores y Ganaderos generaba un sinfín de quejas y suspicacias dado que se violaban sistemáticamente las normas existentes al respecto y los piensos "se evaporaban siendo disfrutados por cierto número muy reducido de personas."<sup>312</sup> Otro sector con algunos problemas era el ligado al sindicato del metal, en el que las empresas de tamaño medio se veían imposibilitadas para acceder al cupo correspondiente, lo cual se unía a las tan temidas restricciones de fluido eléctrico.

En el ámbito de la minería los trabajadores tenían graves dificultades para conseguir que se aplicasen las pocas ventajas que les podía ofrecer el ministerio de Trabajo. En este sentido la Orden del ministerio de 16 de enero de 1946 establecía el descanso dominical en las minas del carbón lo cual originaba la protesta desairada de las principales empresas de la región. Sin embargo, la propia norma carecía de bases coercitivas suficientes para posibilitar que los mineros no trabajasen en domingo. Y ello por que aquélla norma era de obligatorio cumplimiento para las empresas pero potestativa para los mineros a los que era posible presionar para que hicieran uso de su libertad de elección de cara a trabajar el mencionado día. Por ello las empresas mineras solicitaban continuamente que la disposición referente al trabajo dominical exceptuara el trabajo en las minas, cuestión a la que se oponían gran parte de los enlaces sindicales con lo que este sindicato provincial llegó a solicitar al Delegado Nacional de Sindicatos que dichos enlaces fueran "depurados."<sup>313</sup>

Globalmente los parones en esta región se debieron al hecho de que, fruto de la sequía, saltos de agua importantes como el de Coiras, en la cuenca del río Navia, vieron como sus reservas quedaban muy disminuidas. A renglón seguido llegaron las restricciones eléctricas afectando sobre todo a la industria pesada. Sin embargo ello no se tradujo en un incremento excesivo del número de parados inscritos. ¿Por qué?. Probablemente debido al hecho de que los parados efectivos recurrieron a las actividades agrícolas. Y es que salvo los núcleos obreros de las grandes poblaciones y una determinada cantidad de obreros especialistas de las grandes empresas

mineras e industriales, el resto del censo laboral poseía normalmente un huerto familiar o se dedicaba a algún tipo de actividad ganadera, lo que constituía una fuente de recursos que puntualmente podían aliviar su situación. "Por eso el colapso industrial, que se registró en esta región con caracteres alarmantes, hizo sentir sus efectos en la producción y atacó de manera directa a la economía. Pero no motivó problema de paro real,..."<sup>314</sup> o mejor dicho paro oficialmente registrado.

Sin embargo, en el año 1948 la paralización de la construcción de las líneas férreas de Gijón al Ferrol del Caudillo y de Pravia a Cangas de Narcea, junto a la paralización de otras obras de gran envergadura hizo que el panorama previsible no fuera tan optimista como el planteado hasta ahora por la posibilidad de escape que suponían las actividades agrícolas y ganaderas.

En este panorama también influía la disminución de la iniciativa privada en el sector de la construcción sobre todo en Oviedo, Gijón, Avilés y cuenca minera del Nalón y del Caudal. Y ello en función de las enormes dificultades que se presentaban para conseguir las materias primas, no exponiéndose a comenzar sus obras para que no quedasen inconclusas. Y es que la especulación y el mal funcionamiento de los transportes originaba situaciones lamentables para la economía de la región. El caso de los marineros de la zona de Avilés a Vegadeo puede ser ilustrativo. Estos trabajadores de la mar veían como se hacinaban en sus puertos montículos de chicharrones y otros pescados en espera de que acudiesen los labradores a cargar con ellos para destinarlos finalmente como abono para sus campos. Por supuesto, el precio era irrisorio (alrededor de 0,3 pts./kg.) de lo cual se aprovechaban los especuladores de la industria del salazón.

El relativamente escaso peso del desempleo en esta región se podía explicar por los movimientos migratorios estacionales. Era continua la emigración de tejeros de la zona de Llanes a Castilla en el verano y su vuelta en el invierno. Según cálculos oficiales eran alrededor de 3.000. A ello se añadía el movimiento de los trabajadores del ramo de la construcción. La mayoría de ellos eran obreros que llegaron a Asturias a principios de los años cuarenta enrolados en los equipos móviles de las grandes empresas constructoras que habían contratado en Asturias obras, y que ahora, al desplazarse hacia otras latitudes el centro de actividad se alejaban de lo que ya era su hogar en muchos casos. Según cálculos oficiales eran algo más de 2.000.

En Galicia, al igual que en Santander,<sup>315</sup> el paro se dejaba sentir de una forma relativamente moderada si exceptuamos a la provincia de la Coruña como se refleja en el cuadro nº 24 referente a este año 1948. En Lugo<sup>316</sup> el paro no se dejaba sentir de forma acuciante. Al igual que en el caso de Asturias, en Galicia la estructura minifundista constituía una válvula de

escape para el grave problema social del paro. En el caso de Lugo, de los aproximadamente 5.500 trabajadores del ramo de la construcción casi un 40 % trabajaba en dicho sector de forma eventual, siendo en realidad agricultores o pequeños propietarios que se dedicaban a dicha labor cuando era posible.<sup>317</sup>

Muy similar era la situación de Orense<sup>318</sup> y Pontevedra.<sup>319</sup> Y es que su base económica era esencialmente agrícola, no existiendo zonas industriales importantes. La propiedad se hallaba muy dividida, ya que en su mayoría las parcelas de tierra no alcanzaban el promedio de media hectárea, siendo corriente encontrar fincas cultivadas de 5 a 30 áreas, e incluso de menos extensión. Este era el motivo de que las cifras del paro no se hinchasen. Por ello la lentitud de las obras públicas o privadas no motivaba mucho paro obrero oficialmente registrado, puesto que la mayoría de esos peones eran labradores de pequeñas propiedades. Así pues, la lentitud e irregularidad en el suministro de materias primas, la demora en el pago de certificaciones y las restricciones de créditos<sup>320</sup> no tenían porque repercutir de forma muy acusada sobre la provincia:

“...en cuanto al problema de productores me permito hacer unas ligerísimas sugerencias como son: en primer lugar, aquí no se observa...paro obrero, por las sencillas razones de que, de una parte, al productor (gallego-orensano) no puede considerársele en su generalidad como tal, por el mero hecho de que dispone de parcelas de terreno, más o menos grandes...en las cuales invierte con marcado provecho, el tiempo en que, o no tienen trabajo, o no quieren trabajar.”<sup>321</sup>

En Navarra, pese a su privilegiada situación, el sector de la construcción se estaba resintiendo y en el verano, momento en que se iniciaban un buen número de obras, la paralización casi absoluta era la norma. Y es que aparte de la problemática de los créditos, de los deficientes suministros, etc., los precios de los materiales alcanzaban unos niveles en el mercado negro que hacían difícil su adquisición tanto para los compradores como para los potenciales inquilinos:

“Es imposible ya lanzarse a construir pagando el cemento al doble de su valor, el hierro a 10 o 12 pts./kg. y la cerámica con un 400 o 600 % más del valor que tiene fijado. Este es el único problema y lo confirma el hecho de que sólo ven ya la posibilidad de construir cuando son obras oficiales o que tienen asignados cupos de primeras materias a los precios de tasa...tenemos que prever que el próximo invierno se presentará un grave problema de paro en la construcción...pues el volumen principal de trabajadores siempre es absorbido por la construcción particular.”<sup>322</sup>



En Castilla y León el paro se concentraba en la agricultura. En líneas generales, las cifras de desocupados, como en el resto de España, se ocultaban por motivos políticos. Si tomamos el caso de Ávila, encontramos que frente a las 18 personas en paro en junio de 1948 (cifra extraordinariamente baja pese al escaso peso demográfico de dicha provincia) encontramos un informe en que se señala la existencia en el mes de junio de 4.000 hombres parados pertenecientes al sector agrícola, con lo que se pone de manifiesto de nuevo la impresionante diferencia entre lo oficial y lo real. Téngase en cuenta que en este caso, otro de los tantos a los que haremos alusión en este capítulo, sólo se está haciendo alusión al desempleo real que no consta en las estadísticas oficiales entre los varones y entre los trabajadores del campo sin considerar por tanto el paro en otros sectores o entre las mujeres.<sup>323</sup>

También es relevante el hecho de que, frente la conciencia efectiva de que la realidad no se adaptaba a la España oficial que se vendía desde el poder, la actuación de aquél obviaba este hecho actuando en función de las necesidades propagandísticas. En el caso de Ávila y Burgos<sup>324</sup> se negaba la posibilidad de implantar campamentos de la O.S.L.P. como forma de luchar por medio de parches contra la cruda realidad de las cifras. Aunque con menos peso, la construcción era una de las actividades que podía generar un cierto número de parados, sobre todo por la incidencia en otros sectores auxiliares como el transporte, la madera, la metalurgia, las industrias extractivas de cales, arenas, arcillas, etc. En el caso de Salamanca, se ponía de manifiesto que cuando el paro en dicho sector se acentuaba obedecía a causas como las que a renglón seguido se exponen:

“...falta de medios de transporte, especialmente ferroviarios por lo que afecta a la pequeña cantidad de suministro de cupos de cemento, ya que en cuanto a otras materias primas como piedra y ladrillo, al tener los núcleos industriales más importantes (Salamanca y Béjar) proximidad de canteras de donde se surten y buenas instalaciones ladrilleras cercanas a la periferia industrial, no se hace observar tales trastornos pero si en cuanto a cementos...y cales y yesos que suministra la provincia de Valladolid...En cuanto la crisis que se deja observar con motivo de las recientes disposiciones de restricciones de créditos bancarios, esta provincia afortunadamente se ve libre de esos colapsos que se han observado...en la región levantina.”<sup>325</sup>

Este problema se unía de forma muy directa al de la vivienda puesto que el retraimiento de la construcción privada se dejaba sentir primeramente en la edificación de inmuebles de tipo modesto contruidos para la clase media “siendo así que las obras hoy en construcción todas ellas son de gran volumen lo que hace que la suma total se eleve a una crecida cifra de millones.”<sup>326</sup>

Sin embargo, habría que añadir que si el paro real no se dejaba sentir de forma más intensa en los meses de verano debía ser por el hecho de que era precisamente en estos meses veraniegos (sobre todo junio, julio y agosto) cuando se realizaban labores de recolección y siega y los obreros de la construcción participaban en las mismas. Eso sin tener en cuenta que, en épocas de menor actividad laboral, existían casos en los que el traslado a otras localidades en busca de empleo no era considerado rentable por los trabajadores.<sup>327</sup> Concretamente aludimos a provincias con escaso peso del paro y en las que cuando se dejaba sentir lo hacía con cierta fuerza en la construcción e industrias relacionadas con ésta como las fábricas de tejas o ladrillos, caso de Soria.<sup>328</sup>

Pese a ello se puede decir que el desempleo en Castilla-Léon tenía una gravedad proporcional al peso demográfico de esta región. Y que por tanto, era una zona poco afectada por el paro aunque se preveía un aumento significativo para el año siguiente<sup>329</sup> o, sobre todo, una pérdida de posibilidades de desarrollo potencial en función del mal funcionamiento del sistema de cupos de cemento, hierro, etc. Ese era uno de los temores del sector de la construcción en esta comunidad; que la urgencia de dichos cupos iba a dejar en la calle a importantes contingentes a partir de noviembre y hasta bien entrado marzo de 1949.<sup>330</sup>

Situación similar se daba en Castilla la Mancha. En Ciudad Real<sup>331</sup> las cifras de paro oficial eran muy pequeñas por lo cual hay que sospechar de ellas. Y es que pese a que no existan cifras reales no oficiales que superen las estadísticas sindicales la documentación de la O.S.L.P. prueba que no todas las comarcales sindicales que nutrían de información a esta institución enviaban los informes pertinentes, y que otras muchas no lo hacían con regularidad. Aunque parezca increíble, la realidad es que lo único que pasaba es que dichos datos, por no obrar en poder del organismo central, acababan por no constar dando una idea inversa con respecto a la situación real. En el caso de Ciudad Real tenemos que decir que las únicas comarcales sindicales que funcionaban con cierta eficiencia eran las de Almodóvar del Campo y Alcázar de San Juan. Tampoco colaboraban las empresas con la institución sindical. En el caso de la provincia a la que nos referimos y concretamente dentro del sector de la construcción en el cual había en la capital 33 empresas registradas, tan sólo emitieron los informes requeridos por la O.S.L.P. 11 “y eso por haber ido a sus respectivos domicilios.”<sup>332</sup> ¿Qué conocimiento se tenía de lo que pasaba en el resto de la provincia? Seguramente un conocimiento parcial o nulo siguiendo el viejo dicho español: “Ojos que no ven, corazón que no siente.”

En medios sindicales y del ministerio de Trabajo se argumentaba que en algunos casos las cifras de paro se elevaban artificialmente con el objeto de presionar a la Junta Interministerial para conseguir el máximo posible de subvenciones que solucionaran el problema en tal o cual provincia. Pese a ello, se era absolutamente consciente de que en provincias como Guadalajara,

en las que el paro era aparentemente pequeño, gran parte de la actividad agrícola se escapaba al control estadístico por estar los "registros locales en manos de Delegados Sindicales."<sup>333</sup> En cuanto a esta provincia se refiere, hay que tener en cuenta la construcción de grandes obras como el pantano de Entrepeñas-Buendía, dado que incidía muy positivamente en la abundancia de la demanda de mano de obra, sólo viéndose refrenada por la típica falta de materiales de construcción.<sup>334</sup>

Idéntico caso era el de la provincia de Toledo.<sup>335</sup> Los informes que constan en la sección de sindicatos del A.G.A. de este año 1948 confirman que el paro era de poca importancia, que se centraba en la construcción y en su casi totalidad en la capital. Todo ello habría que ponerlo en duda tanto en cuanto el hecho de que se controlase estadísticamente el sector de la construcción de forma relativamente más eficaz (al igual que en el resto de España) obedecía al hecho de que era el primer sector laboral en que se implantaba (con más o menos éxito) la cartilla profesional. También hay que tener en cuenta que cuando se afirma que se centra en la capital, hay que recordar de nuevo el hecho de que gran parte de las oficinas locales son lugares de apoltronamiento de funcionarios sin mérito o capacidad para llevar a cabo su tarea. Por tanto, habría que considerar el paro real no controlado en el resto de la provincia y no solamente en la capital, sobre todo entre los meses de julio a septiembre en los que, terminadas la mayoría de las tareas agrícolas, aquél era más intenso.

Como cada año, Andalucía y Extremadura<sup>336</sup> eran las regiones más castigadas por el paro. Sus ayuntamientos eran incapaces de llevar a cabo una actividad mínimamente dinámica que sirviera siquiera para refrenar mínimamente el vendaval social del desempleo.<sup>337</sup>

En provincias en las que era relativamente poco importante el paro, como en Almería,<sup>338</sup> ello obedecía a la frecuente emigración a otros puntos de España. Concretamente, a Cataluña. Sin embargo, esta emigración resolvía parcialmente el problema, pues los trabajadores dejaban allí a sus familias sin medios de subsistencia y, por otra parte, en las provincias de destino generaban a veces un exceso de mano de obra que les podía hacer atravesar por períodos de indigencia. El intento de frenar el libre movimiento del factor de producción trabajo era irreal por cuanto se partía del hecho de que existía lo que se denominaba "un error distributivo de la mano de obra disponible...y más especialmente un falso encuadramiento de los obreros, debido a la falta de conocimientos para determinar el número de hombres que deben prestar sus esfuerzos en cada uno de los sectores de la economía de un país."<sup>339</sup>

En la provincia de Huelva nos encontramos que frente a los 2.685 parados oficiales en junio de este año, existían realmente al menos 5.817.<sup>340</sup> De estos parados reales aproximadamente el 5 % se centraba en la construcción aunque para las autoridades estos desempleados "carecían de

verdadera importancia, máxime cuando un gran número de aquéllos, pertenecientes a dichos grupos, eran brazos económicamente débiles debido a escasez de fuerzas físicas necesarias para desempeñar...un puesto de trabajo, siendo rechazados...por las empresas. De igual modo, están integrados por profesionales del paro que, buscando los beneficios que la legislación social concede a los parados, acuden a nuestras Oficinas a inscribirse.<sup>341</sup> En la mayoría de los pueblos, sin embargo, el paro era esencialmente agrícola en los meses que iban de enero a junio salvo en pueblos de gran peso de las industrias del mar como Ayamonte, o de las industrias extractivas como El Campillo, Riotinto, Nerva, San Telmo o Perrumal.

meses	índice de variaciones estacionales en la agricultura
enero	109,8
febrero	108,0
marzo	105,9
abril	104,6
mayo	104,6
junio	100,1
julio	99,7
agosto	99,7
septiembre	96,5
octubre	93,7
noviembre	89,7
diciembre	87,7

*\*Cuadro n° 26. Índice de variación de la tasa de paro en la agricultura de la provincia de Huelva.*

En el caso de la agricultura onubense el paro se cebaba en los meses de menos operaciones agrícolas. En febrero la única actividad era la limpieza de árboles o poda de viñas; en marzo, aparte de aquélla, el castrado de vid; en agosto se llevaba a cabo la terminación de la siega y la trilla. Sin embargo, a partir de junio comenzaban las labores de siega de leguminosas y cereales; en diciembre y noviembre la cogida de la aceituna, la molienda y preparación de la tierra para la sementera; y en octubre se llevaban a cabo las operaciones de vendimia. La realidad agrícola de esta provincia, como la del resto de Andalucía estaba ligada al poco cuidado de los patronos absentistas con respecto a sus tierras, a la poca productividad de algunas fincas y dehesas, a la ausencia de obras o de obras eficaces de los ayuntamientos en los meses de mayor incidencia del paro, a la falta de financiación de la Junta Interministerial de Paro, etc., etc. Y todo ello en una provincia en la que, como en casi todas se escondía la cifra real de paro que en este caso se situaba en 4.035 frente a los 2.685 oficiales:

“En las 200.000 hectáreas de cultivo con que cuenta la provincia se emplean a razón de 32 jornales por unidad de superficie, o sea un total de 6.400.000 jornales. En las 750.000 hectárea de monte alto, bajo y pastos, esta cifra es solamente de 2 por ha., por lo que resultan 1.500.000 jornales; sumadas estas dos partes resulta que en la provincia los obreros agrícolas y forestales rinden un total de 7.900.000 jornales, correspondientes a los 49.000 obreros agrícolas y forestales que existen en la provincia. Como el paro agrícola y forestal aproximado es de 4.035 obreros, resulta por este concepto una pérdida aproximada de unos 650.683 jornales. Por otro lado, vemos que los 49.000 obreros que existen, trabajan un promedio de unos 160.000 días al año...el obrero agrícola pierde durante el año 120 días de trabajo, por lo que resulta un total de unos 5.400.000 jornales perdidos, que sumados a los que se pierden a causa del paro agrícola, hacen un total de unos 6.000.000 de jornales aproximadamente.”<sup>342</sup>

En Jaén, aparte de la tradicional incidencia del paro en la agricultura, éste se dejaba notar en la construcción siguiendo una tendencia alcista que comenzaría precisamente en este año. La importante labor de reconstrucción de viviendas había trasladado de un modo lento pero continuado a la mano de obra agrícola a la ciudad incorporándola al censo profesional de la construcción. En esta situación, ante la lentitud de las obras o ante el encarecimiento y dificultad para conseguir a precios asequibles los materiales en el mercado negro, este sector permanecía casi paralizado.

En Valencia, la situación no era aparentemente muy difícil si bien ya se incluía dentro de las provincias que por su peso industrial y agrícola veía como las cifras de paro aumentaban si la economía se enfriaba. “El paro real en cuanto a la capital puede considerarse idéntico a las cifras expuestas pero en cuanto a la provincia el paro real asciende al final de este ejercicio 1948 a 10.565 en la actividad agrícola y 753 en la actividad industrial,”<sup>343</sup> se afirmaba desde la O.S.L.P.

En Alicante se notaba también el agravamiento de la situación<sup>344</sup> sobre todo al finalizar el verano. Pese a ello no era en el sector de la construcción en el que más se dejaba sentir la crisis. En esta provincia, aproximadamente el 75 % del paro se debía a la crisis de las industrias del calzado, textil y metalúrgica de la juguetería. Así, en junio de este año 1948 las fábricas de calzado de Elche y Elda habían dejado de trabajar y de pagar los jornales a sus obreros. En cambio, Castellón,<sup>345</sup> en el verano del mismo año atravesaba una situación holgada ya que el último período de la campaña naranjera se había desarrollado con gran intensidad. Eso provocaba que las cifras de paro oficial en el verano de 1948 fueran las más bajas desde 1944. Y ante esta realidad, en la O. S. de Lucha contra el Paro de la provincia ni existían gestiones

para realización de obras ni contratas de ningún tipo.<sup>346</sup> Sin embargo, al igual que en el caso de Alicante uno de los grupos que más había crecido había sido el del textil y sobre todo el paro femenino ante la posible bajada oficial de precios:

“Desde luego, a partir de la Liberación, las fabricas textiles trabajaron a toda marcha, ocupando gran número de obreros, pues, si bien los cupos oficiales de algodón y demás materias primas eran sumamente reducidos, lo que hacían los empresarios era adquirir cupos extraoficialmente, con lo que podían trabajar a toda marcha, últimamente, por lo visto, y como consecuencia de las noticias alarmantes que han venido circulando, han dejado de adquirir los cupos a precios de mercado negro, con lo que el trabajo ha descendido notablemente y van despidiendo poco a poco alguna parte de su personal...En cuanto a la textil...hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría del personal ocupado en estas fábricas son mujeres, y que, en el supuesto de quedar en paro, será muy difícil que puedan ocuparse en otras actividades.”<sup>347</sup>

En el caso de Murcia, el paro se mantenía en unos niveles más o menos homogéneos entre junio y diciembre. En el primero de los meses la cifra se situaba en 3.505 y en el segundo en 3.864. Sin embargo, ésta era una provincia en el que de junio a octubre las labores del campo dejaban muy disminuido el número de parados. Aquél era uno de los motivos, pero también incidía en ello la masa de emigrantes que se desplazaba a zonas cerealistas a efectuar las faenas de recolección.<sup>348</sup> El hecho de que, al contrario que en otras provincias, el paro no se dejase notar en la construcción pese a la mala coyuntura obedecía a que los peones, en su gran mayoría también agricultores, veían como las actividades agrícolas tenían capacidad para absorberles en esta época.

En la región de Aragón, los problemas principales los generaba Zaragoza<sup>349</sup> y es que en esta provincia antes del verano de 1948 las ofertas patronales no podían ser cumplimentadas en su totalidad mientras que a partir de junio aquéllas habían comenzado a disminuir de forma preocupante.<sup>350</sup>

Como en el resto de España, las Islas Baleares<sup>351</sup> veían como se cernía sobre ellas un posible incremento del paro por retraining en el sector de la construcción<sup>352</sup> de nuevas obras así como por el declive en sectores como el de la piel, la madera, la alimentación y el vidrio.<sup>353</sup>

En el caso de las Islas Canarias se ponía de manifiesto que las cifras de paro resultaban engañosas puesto que si en junio de 1948 existían más de 7.000 parados oficiales, tan sólo dentro de la agricultura existían más de 8.000 en términos reales. En estas circunstancias, retraída la actividad constructiva privada y desarrollada la pública, con un volumen cuya

magnitud no permitía absorber y “ni siquiera remediar en una buena parte el paro,”<sup>354</sup> las cifras de éste se incrementaban en dicho sector dado que no era de aplicación un programa de implantación de campamentos de la Obra Sindical de Lucha contra el Paro.<sup>355</sup> Esta situación, extendida al conjunto de las islas, era más grave tanto en cuanto hasta finales de los años cincuenta el peso del sector agrario era muy significativo ocupando a bastante más de la mitad del total de activos y caracterizándose su situación por ser de “auténtico subempleo, rozando la pura subsistencia.”<sup>356</sup>

En Santa Cruz de Tenerife también resultaba imposible que las obras de construcción absorbieran la gran cantidad de peonaje de aquellas islas. Y es que de 1940 a 1975 el volumen de empleados en este sector se multiplicó por 5,6.<sup>357</sup> Éste se centraba sobre todo en la capital, dado que allí acudían los trabajadores sin empleo del resto de la provincia “ya que la mayoría de estos se encontraban en una situación económica bastante difícil a consecuencia de los estragos causados en el campo por la sequía, especialmente en la islas de la Gomera y el Hierro,”<sup>358</sup> si bien es difícil entender de donde salen algunos de los informes de esta provincia dado que no existía personal técnico ni administrativo de la O.S.L.P. en Santa Cruz.<sup>359</sup>

#### ***10.7.2. La ruptura de la tendencia durante 1949.***

La obtención de datos estadísticos extraoficiales ha dependido de que el doctorando diese con los informes de carácter provincial, regional, nacional, mensual, trimestral, anual, etc., de la O.S.L.P. o del S.N.E.C. El análisis del informe de la situación del paro a la que ahora nos referimos de abril de 1949 permite disparar las cifras oficiales de paro. En este caso concreto pasaríamos de los más de 169.000 parados oficiales a 282.940 uniendo el paro en la industria y la agricultura únicamente, lo cual supone un incremento de más del 66 %. La crudeza del paro era reconocida también en los oficios y en la correspondencia del máximo responsable de la O.S.L.P., José Redondo Gómez, consciente del “gran paro” que había en todo el país, sobre todo del no reconocido oficialmente.<sup>360</sup>

Provincia	Paro total oficial en febrero	Paro total estimado a finales de febrero <sup>361</sup>	Parados estimados el 30 de abril en el sector agrícola. (A) <sup>362</sup>	Parados industrial el 30 de abril. (B) <sup>363</sup>	Paro total estimado en 30 de abril (A+B) <sup>364</sup>	Paro oficial en 30 de junio de 1949 <sup>365</sup>	Paro oficial en 31 de diciembre de 1949
Álava	143	-	1	265	266	231	122
Albacete	2.224	2.946	454	119	573	913	596

Alicante	3.066	-	148	2.461	2.609	2.681	3.374
Almería	2.327	3.587	443	1.498	1.941	1.956	1.842
Ávila	2.531	2.639	1.786	93	1.879	316	2.373
Badajoz	4.790	9.637	27.976	984	28.960	3.907	4.527
Baleares	1.065	-	26	1.070	1.096	974	1.069
Barcelona	7.610	-	50	7.944	7.944	8.012	8.891
Burgos	533	-	16	272	288	187	303
Cáceres	6.849	10.228	4.277	993	5.270	3.567	6.526
Cádiz	9.855	14.304	12.351	5.777	18.128	8.136	9.643
Castellón	4.693	12.468	186	1.230	1.416	1.616	1.482
Ciudad Real	1.084	7.728	5.807	696	6.503	592	979
Córdoba	15.275	2.635	20.801	5.818	26.619	20.839	17.527
Coruña (La)	2.262	1.896	3	1.952	1.955	1.986	1.691
Cuenca	1.325	-	528	336	864	447	479
Gerona	1.011	-	303	667	870	873	803
Granada	2.274	11.827	4.404	973	5.377	2.479	2.365
Guadalajara	268	3.637	4.986	340	5.326	204	410
Guipúzcoa	614	-	-	414	414	338	461
Huelva	6.169	9.396	5.017	2.045	7.062	2.789	2.831
Huesca	180	282	2.512	201	2.713	214	370
Jaén	20.243	22.900	9.295	1.827	11.122	8.878	8.824
León	718	1.818	1	188	189	212	326
Lérida	269	-	72	529	601	210	497
Logroño	268	1.207	241	165	406	147	149
Lugo	672	2.801	29	591	620	626	715
Madrid	22.445	-	889	25.675	26.564	28.515	34.632
Málaga	6.373	14.303	32.063	7.169	39.232	9.241	9.465
Murcia	1.428	-	1.390	1.943	3.333	2.991	2.775
Navarra	3.076	11.269	547	369	916	508	419
Orense	180	1.345	7	313	320	215	287
Oviedo	92	-	1	784	785	778	772
Palencia	1.093	-	53	513	566	599	505
Palmas (Las)	1.694	2.678	1.894	3.600	5.494	5.314	3.282
Pontevedra	9.393	-	-	591	591	660	631
Salamanca	484	-	1.719	1.214	2.933	1.380	2.155
Tenerife	1.953	6407	1.430	1.313	2.743	1.904	2.079



Santander	589	-	-	304	304	310	311
Segovia	5.440	7.625	272	306	578	213	508
Sevilla	1.150	-	17.708	10.055	27.763	14.831	12.391
Soria	4.501	14.936	-	56	56	25	37
Tarragona	134	-	47	876	923	1.065	849
Teruel	646	-	7	179	186	141	177
Toledo	127	-	6.441	304	6.745	251	811
Valencia	1.323	8.602	5.313	4.618	9.931	4.673	4.831
Valladolid	4.328	16.622	169	979	1.148	829	1.477
Vizcaya	2.380	4.190	-	1.661	1.661	1.332	833
Zamora	2.868	-	128	215	343	126	354
Zaragoza	3.743	-	6.500	1.042	7.542	1.280	855
Matruecos	1.193	2.727	10	1.212	1.222	1.178	1.395
TOTAL	175.407	286.403	178.201	104.739	282.940	151.689	161.006 <sup>366</sup>

\*Cuadro n° 27. Paro oficial y estimado a lo largo de 1949.

De los informes mensuales y de rango nacional que hemos hallado en el A.G.A. exponemos las cifras de paro oficial, el estimado agrícola y la suma de éste y el industrial oficial por meses así como el tanto por ciento de incremento que ello suponía (ver cuadro n° 27 y 28). Las cifras no pueden ser más apabullantes sobre todo en lo referente al descontrol total y absoluto sobre el fenómenos del paro.

Mes	paro agrícola estimado (a)	paro industrial oficial (b)	paro total estimado (a+b)	paro total oficial	Incremento en % del paro estimado sobre el oficial
marzo <sup>367</sup>	169.884	157.060	326.944	157.014	108,2
mayo <sup>368</sup>	163.239	127.000	290.663	163.239	78,05
junio <sup>369</sup>	151.689	84.459	236.148	151.689	55,6
agosto <sup>370</sup>	160.289	98.371	258.660	160.289	61,3
septiembre <sup>371</sup>	164.222	106.286	270.508	164.222	64,7
octubre <sup>372</sup>	166.517	104.962	271.479	166.517	63,03

\*Cuadro n° 28. Parados por meses a lo largo de 1949.

En 1949 se alcanzaron unos promedios mensuales de 160.056 parados registrados oficialmente y se rompió la tendencia a la baja moderada de los años anteriores que se había iniciado en

1946.<sup>373</sup> Ello fue debido a las deficientes cosechas y a la escasez de fuerza motriz como consecuencia de la sequía. Ello conducía a que un gran número de industrias realizaran sus trabajos en jornadas restringidas o a que otras cerraran sus puertas, lo cual provocaba que el problema laboral se agravara de una forma alarmante.

El informe de abril de 1949 es uno de los que más abundante información aporta sobre la situación sociolaboral de este año a nivel nacional.<sup>374</sup> En este mes las colocaciones del S.N.E.C. superaban a las demandas en 3.491 unidades. La consecuencia que se podría extraer de ello era que la situación de la economía era progresivamente más favorable. Sin embargo, hay que partir del hecho incuestionable de que la situación de paro se agudizaba día a día y hay que considerar que el motivo de que las colocaciones superaran a las demandas era que “muchísimos de los obreros que habían quedado en paro desde el día 16 de marzo hasta el 30 de abril no habían acudido a las oficinas de colocación a inscribirse.”<sup>375</sup> Y es que desde octubre del 48 ya se estaba prefigurando la mala situación del año 1949 en función de las malas cosechas provocadas por la sequía.

Como resultado de todo ello, el Jefe Nacional del S.N.E.C. afirmaba que la cifra de parados era auténticamente espeluznante si se tenían en cuenta dos hechos. Por un lado, oficialmente en abril del 49, se reconocían 169.994 parados y por otro, extraoficialmente se aceptaba que el número de parados ascendía a 282.940. Pese a ello, esa cifra se situaba muy por encima de los trescientos mil parados incluso considerando la imperfección de las estadísticas utilizadas:

“A pesar de todo lo anteriormente comentado, es obligación nuestra informar al Mando, de que a pesar de nuestros mayores esfuerzos por controlar exactamente el paro existente en nuestra Nación, nos es imposible realizarlo...se llega a la resultante de que existe un paro sin controlar por esta Oficina de 157.060, que unidos a los de la estadística oficial, hacen un total de unos 325.000 aproximadamente.”<sup>376</sup>

Evidentemente si comparamos la tendencia del paro oficial en la última década, desde el final de la guerra civil hasta el umbral de los años cincuenta era evidente que España se encontraba en el peor momento del último decenio.

En términos relativos el paro oficial había experimentado una tendencia alcista explicitada en el año 1949. Sin embargo, ésta había tenido sus raíces en el año 1948 sobre todo por las malas cosechas, si bien su importancia se relativizaba puesto que el 23,89 % de los parados (40.599) eran trabajadores de menos de 20 años y de más de 50. Estos eran considerados como brazos económicamente débiles “que en cierto modo no debían ser tenidos en consideración en lo que se refiere a posibilidades de colocación, por falta de capacidad y de fuerza física necesaria, lo

que originaba el que las empresas no los admitieran, debido a no rendir un trabajo con normalidad..."<sup>377</sup>

La difícil coyuntura se palpaba también en el descenso de peticiones de compensación de tipo interprovincial de mano de obra especializada realizadas al Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación. Ello se constituía, en unión a algunas nuevas cargas sociales y a las Reglamentaciones del Trabajo, en un desincentivador de la actividad empresarial que trabajaba a un ritmo mínimo como "colofón a la falta de materias primas."<sup>378</sup> Así, las compensaciones llevadas a cabo en el mes de abril eran únicamente 118. Todas ellas eran de personal no especializado y en obras situadas en provincias en donde no era suficiente la mano de obra. Estas compensaciones se llevaban a cabo no por el incremento de las obras que se realizaban, sino por la reposición necesaria de obreros que habían abandonado el trabajo por no interesarles los jornales tan bajos que percibían. Tampoco es que hicieran mucho las autoridades para controlar el número de trabajadores que iban de una provincia a otra en busca de empleo por la tendencia de aquéllas a quitarse de encima el posible malestar social, antecedente del conflicto social abierto, y por tanto, facilitando el movimiento de los trabajadores de unas provincias a otras:

"Conviene también que sepas que todo cuanto nosotros hagamos sobre este asunto nunca llegará a solucionarlo, pues la experiencia nos ha demostrado que en épocas como ésta, en que el paro tiene carácter alarmante, las autoridades de las provincias más afectadas, dan toda clase de facilidades a aquellos trabajadores en paro que deseen irse a otras provincias, pues este sencillo procedimiento es una manera de evitarlo en la suya propia.

Finalmente, no comprendo tu extrañeza o el cómo no te explicas el que estos trabajadores vayan a Asturias sin control de las oficinas de colocación, cuando es sencillamente, como sabes, porque no pasan por ellas, y si esto es así mal podemos controlarles y como comprenderás nuestros funcionarios no se van a constituir en guardianes permanentes de todos los trabajadores de la localidad para ver donde van..."<sup>379</sup>

Hay que tener en cuenta que el control de la población trabajadora preocupaba sobremanera al poder franquista de lo cual dan muestra los oficios que sistemáticamente iban y venían de la O.S.L.P. a la Delegación Nacional de Sindicatos y de ésta a la Dirección General de Seguridad con motivo de los movimientos descontrolados de los trabajadores sobre todo en estos momentos de acentuada crisis económica.<sup>380</sup>

De esta negativa coyuntura del 49 da muestra también la correspondencia del Jefe Nacional de la O.S.L.P. a lo largo de este año. El 19 de agosto enviaba un oficio al Delegado Nacional de Sindicatos, Fermín Sanz Orrio, en el que ponía de manifiesto que la situación era alarmante con tendencia a deteriorarse más sobre todo en el campo y en la construcción. Sobre este último sector se avecinaba un invierno muy negativo "siendo casi seguro que de no resolverse su situación no podrán ni retirar los cupos decenales que entrega la Comisaría de Abastecimientos."<sup>381</sup> De hecho afirma que, frente a los 126.894 parados reales de julio de 1948, la cifra del mismo mes en 1949 era de 400.000 según las estimaciones del órgano que dirigía. Aunque poniendo de manifiesto que las cifras dadas correspondían a los obreros desocupados totalmente, es decir a aquellos que no percibían jornal alguno "pero es un hecho indudable que debido sobre todo a las restricciones eléctricas continuamente se cierran industrias cuyos obreros acuden a engrosar las cifras de paro; también el que innumerables industrias han solicitado el cierre de sus establecimientos o la disminución de sus plantillas. El que gran número de trabajadores, cobran el jornal diario sin producir nada o con una producción reducida en grado extremo, lo que en mayor o menor plazo producirá la quiebra de los capitales invertidos y más o menos tarde el cierre de las fábricas."<sup>382</sup>

Esta realidad se centraba en el ámbito agrícola y básicamente en la provincias extremeñas y andaluzas en las que se había producido una disminución importante en las dos últimas cosechas de cereales, leguminosas, aceitunas y viñedos. Se centraba igualmente en provincias como Madrid y Barcelona por el peso de la construcción y por las restricciones en el fluido eléctrico. Todo ello llevaba a Redondo Gómez a pensar que en los meses de octubre y noviembre, es decir, tras el final de la recolección de cereales y leguminosas, el paro tendría que ascender a "seiscientos mil desocupados."<sup>383</sup>

En este año de 1949 y en lo referente al sector agrícola el S.N.E.C. realiza un informe sobre el mes de marzo en el que, tanto las cifras de paro agrícola estimado y oficial como las del industrial no coinciden con las que acabamos de exponer.<sup>384</sup> En este sector el Instituto Nacional de Colonización no iba a lograr los resultados apetecidos por medio de la Ley de 27 de abril de 1946 de colonizaciones de interés local y, sobre todo, por medio de la de 21 de abril de 1949 sobre colonización y distribución de la propiedad de zonas regables pese a que "las cosechas catastróficas debidas a la sequía, y especialmente las de 1947 y 1948, hicieron más visible la necesidad de llevar el riego a extensas zonas."<sup>385</sup> Hasta tal punto las considera negativas Tamames que se refiere a ellas como medidas jurídica y socialmente conservadoras y, técnicamente, ya anticuadas por completo.<sup>386</sup>

El principal problema en el mes de marzo se hallaba en las provincias esencialmente agrícolas dado que las faenas en el campo, una vez concluida la recogida de la aceituna, eran mínimas. De

igual manera en la España no olivarera se estaban llevando a cabo faenas como la labra de trigos y de la cebada y la poda de viñedos, pero la escasa entidad de las precipitaciones infundía pocas esperanzas en el ánimo de lucro de los grandes propietarios “retrayéndose como consecuencia de lo anteriormente expuesto en las labores ante el peligro de que los beneficios no alcanzasen a cubrir los gastos de laboreo.”<sup>387</sup> La conclusión del propio Servicio de Colocación era la siguiente:

“...se llega a la resultante de que sobre los datos oficiales que consignamos en nuestra estadística, el paro total estimado o real, debe entenderse es de unos 300.000 parados aproximadamente.”<sup>388</sup>

Hay que tener en cuenta que la vida en el campo podía tener menos problemas, comparando su situación con la ciudad, en cuanto al abastecimiento de algunos productos alimenticios muy básicos. Sin embargo, en el campo los productos se vendían a precios oficiales e intervenidos, lo cual generaba la ocultación sistemática de los mismos dado que la evolución de ciertos productos necesarios para el funcionamiento de la agricultura experimentaba en sus precios un alza relativamente superior a la de sus productos. Ello suponía dar salida a productos básicos en el mercado ilegal agravando la alimentación de las zonas industriales.

En abril del 49 las cifras de paro estimado agrícola se situaban en 178.201; es decir, se había producido un incremento de 17.947 con respecto al mes de marzo (160.254) y de 62.597 con respecto al mes de abril de 1947 (115.604).<sup>389</sup> En este mes se generalizaron las lluvias; sin embargo, el beneficio no fue el deseado, pues ni su intensidad había sido grande ni se había alcanzado a la totalidad de las siembras, y en otros casos había llegado con un notable retraso imposibilitando la recuperación de las cosechas.

En Andalucía se preveía que, salvo en Almería, las cosechas fueran malas. De igual manera la situación sería similar en Castilla la Mancha. Sólo se salvaban muy relativamente Castilla la Vieja, las provincias levantinas y la mencionada Almería. En el resto de España la situación no tenía visos de mejorar. Ante esta coyuntura, el proyecto de Ley de Ordenación de la Propiedad que se había presentado a la Cortes Españolas defraudaría pese a que, formalmente, dicha ley pretendía convertir las grandes extensiones de secano en regadío por medio de obras hidráulicas, presas, canales, acequias, etc., y asentar a familias en dichos terrenos. Mientras tanto, las cifras de paro en la agricultura según las estimaciones más que extraoficiales (por cuanto superaban en pesimismo a las extraoficiales propiamente dichas que emanaban de los informes expuestos) cifraban el número de parados tan sólo en la agricultura en unos 200.000:

“...el paro total estimado o real en la agricultura debe entenderse es de unos 200.000 aproximadamente...; en donde estudiamos el problema agrícola iniciado con carácter grave en el mes de mayo de 1948, motivado por la sequía que originó un paro de 395.758 en el mes de julio de dicho año, cifra que desde entonces ha venido reduciéndose paulatinamente debido a las medidas extraordinarias que en todo momento se pusieron en juego y también al hecho de ir normalizándose progresivamente la producción agrícola.”<sup>390</sup>

En junio de 1949 la cifra de parados oficiales sólo en la agricultura era de 47.366, mientras que extraoficialmente se podía elevar dicha cifra a 96.132. En mayo del mismo año la cifra se había situado en 143.498<sup>391</sup> pero en junio de 1948 la cifra había ascendido a 41.669, lo cual ponía de manifiesto una coyuntura excepcionalmente alarmante. Y es que la gran mayoría de las cosechas, en el mejor de los casos, iban a ser medianas y, por tanto, la recolección era o iba a ser de corta duración, por lo que la absorción de trabajadores no iba a rebajar las cifras de paro sino que las iba aumentar en términos relativos. Así, en provincias como Badajoz el desempleo se situaba en 16.048, en Córdoba en 15.409 y en Sevilla en 10.768.

Globalmente el paro mejoraba con respecto a meses anteriores a la altura de junio, pese a lo cual el descenso no originaba mejoras sensibles de la situación. Sin embargo, la mediocre cosecha no lo iba a permitir de forma tan acentuada<sup>392</sup> y así las mayores tasas de paro, exceptuando Madrid,<sup>393</sup> se centraban en aquellas provincias de predominio agrícola y, sobre todo, en aquellas de mayor incidencia del secano o del latifundio como Las Palmas, Córdoba, Jaén, Sevilla, Cádiz, Huelva, etc.

En 1948 y en lo referente al sector industrial la situación se encontraba en punto muerto.<sup>394</sup> Uno de los sectores gravemente afectados por la crisis global era el de la construcción. En abril del 49 el 23,62 % de los parados pertenecían a este sector, siendo en total 41.841 oficialmente censados. En marzo de este año existían censados 39.554 parados<sup>395</sup> que en junio se situarían oficialmente en 41.903, lo cual nos indicaba que el 27 % del paro oficial se situaba en este sector. De ello se deduce que el paro en la construcción continuaba en su línea ascendente. Dicho aumento era imposible de evitar mientras, como se observa provincia a provincia, continuaran las causas que producían dichos desajustes. Fundamentalmente, la falta de hierro, cemento, madera, clavazón y créditos bancarios atrayentes.

Aspecto central de esta realidad era la insuficiencia en la entrega de cupos o la entrega tardía de los mismos lo cual originaba el retrainamiento de los particulares puesto que, calculada la terminación para una fecha determinada, las empresas se encontraban con la falta sistemática de materiales:

“...teniendo que recurrir en último extremo al mercado negro para conseguir el material necesario y no dejar paralizada la misma, originando un gran perjuicio, pues de esta forma la construcción y muy especialmente la que se destina a viviendas adquiere precios astronómicos, que hoy no son factibles de pagar, puesto que aquellos que pudieran hacerlo están situados y solamente faltan los que necesitan pisos de renta reducida.”<sup>396</sup>

Como se ha mencionado las principales causas de la disminución de la actividad en el sector de la construcción eran la falta de materias primas como el hierro y el cemento, el elevado coste de los materiales, la escasa incentivación del precio de los alquileres de las edificaciones más antiguas que reducían al mínimo las obras de consolidación y saneamiento, el elevado coste de los transportes, la falta de especialistas que impedían una absorción proporcionada de la mano de obra sin especialización, la restricción de los créditos bancarios, la falta de demanda de viviendas de alquiler elevado, etc.

Ante ello, las soluciones parciales planteadas consistían en la aplicación por parte de las diputaciones, ayuntamientos y organismos oficiales del fomento de las obras públicas de forma que estas aminorasen la difícil situación por la que atravesaban los trabajadores agrícolas y de la construcción.<sup>397</sup> Hay que hacer referencia al hecho de que una política de obras públicas como la llevada a cabo en España en las zonas rurales (especialmente) tenía el grave problema de que su planificación se hacía a corto plazo, como medida de urgencia, lo cual hacía de ello algo más perjudicial que beneficioso. Así, en la práctica se daba la circunstancia de que gran parte de las obras contratadas para luchar contra el paro eran realizadas en los meses en que el clima era mejor, en los que las condiciones para el empleo de los materiales eran óptimas y en los que, por tanto, se perdían menos horas de trabajo. Por otro lado, a todo ello se puede añadir la siguiente aseveración:

“...las cantidades consignadas por los distintos ministerios para la realización de obras públicas o trabajos que tengan el mismo carácter, tales como carreteras, obras hidráulicas, edificios oficiales, repoblación forestal, etc., se libran por fracciones mensuales, y esta rigidez en el gasto impide la aplicación de una política flexible de obras públicas...por lo cual convendría modificar la forma de distribuir el gasto consignado en el presupuesto para todo el año.”<sup>398</sup>

En esta línea de atención al grave problema del paro en el sector de la construcción se insertaba la correspondencia del Jefe Nacional de la O.S.L.P con el Delegado Nacional de Sindicatos, Fermín Sanz Orrio, dando cuenta de las reuniones celebradas por el Montepío Nacional de

Previsión Social de los trabajadores de la industria de la construcción y obras públicas de Madrid el 6 de abril de 1949. En uno de estas reuniones uno de los vocales (García Hernández) solicitaba se diesen los datos reales sobre los desempleados existentes en Madrid dada la negativa de los organismos oficiales a satisfacer sus demandas ante lo cual su queja se expuso muy palmariamente:

“...vistos los informes dados por la Oficina de Colocación y por la Delegación de Trabajo, no están ellos en lo cierto, y lo real es que no se atreven claramente a decir que existe paro...”<sup>399</sup>

Los restantes grupos de parados no tenían el peso conjunto de la agricultura y la construcción. El tercer sector con mayor peso era la alimentación. Sin embargo, como se ha mencionado, únicamente el 6,36 % de los parados pertenecían a dicho sector (9.659 concretamente) siendo la causa de su situación de desempleo la falta de materias primas y artículos de conservación como harina, azúcar, aceite y hojalata para envases.

Tomando como referencia el informe del Servicio Nacional de Colocación de abril de 1949 los restantes grupos de parados eran el de banca, seguros y oficinas,<sup>400</sup> hostelería, higiene,<sup>401</sup> pequeña metalurgia, comercio y textil. En el caso de la banca nos encontramos con 7.408 (4,6%). En la hostelería, la cifra es elevada a 4.743 (2,79%) fruto del escaso suministro de artículos intervenidos. En el caso de los servicios de higiene existían 4.061 (2,39 %) fruto de la carestía de la vida y de la inscripción de un gran número de mujeres con la esperanza de colocarse para subvertir las necesidades más prioritarias de sus familias. Muchas de ellas eran viudas “ya que la necesidad de sacar a flote sus casas les hace preciso trabajar en esta clase de faenas.”<sup>402</sup> Seguidamente encontramos el grupo de la pequeña metalurgia con 4.013 parados (2,36 %) influida por la escasez del mercado interno y por las restricciones de fluido eléctrico y el comercio, confección, vestido y tocado con 7.130 parados (4,19 %) lo cual era explicable teniendo en cuenta la situación de pauperización de la población, dado que las familias no tenían capacidad real para asumir sus necesidades más acuciantes como eran las de la casa y manutención. Ello provocaba que el gasto en vestido u otros artículos análogos quedara fuera de sus posibilidades. Si a ello se une la falta de lana, algodón y otras fibras en las cantidades necesarias, el número de parados debía ir en incremento en dicho sector.

Pese a que en las estadísticas no aparecía como uno de los grupos de actividad de mayor desocupación, el sector textil daba muestras de que su situación iba a empeorar afectando a provincias tradicionalmente ligadas al mismo como Barcelona, Valencia, Alicante, Baleares, etc., ya que “la mayoría de la fábricas por falta de materias primas han cerrado o se han declarado en quiebra y otras mantienen la plantilla de sus obreros pagándoles solamente el 70



% de sus jornales, encontrándose los mismos en situación económica bastante apurada, siendo éste uno de los principales motivos por los cuales los resúmenes estadísticos de paro no reflejan verdaderamente el número de obreros desocupados, puesto que éstos al percibir el tanto por ciento indicado, no pueden figurar en aquellos como parados<sup>403</sup> y ello provocado esencialmente por la paralización del mercado interior. Así, el desempleo en los sectores relacionados con la lana, el algodón y la piel adquiría progresivamente tonos más grises.

Como ya hemos mencionado el año 1949 merece una especial atención por cuanto rompe la tendencia "oficial" que mostraba un descenso en las cifras de paro. Haciendo un análisis a nivel provincial percibimos que en este año comenzó la tendencia alcista que iba a continuar a lo largo del año 1950 para comenzar a decrecer a partir de entonces. En el sindicato de Barcelona, se ponía de manifiesto el volumen creciente de expedientes de crisis que se habían incoado en la Delegación Provincial de Trabajo y los informes de la Delegación Sindical Provincial que les acompañaban.<sup>404</sup> Así, durante todo el año 1948 se habían tramitado 316 expedientes mientras que en los tres primeros meses de 1949 se habían gestionado ya 124. Todo ello en esta provincia generaba, como era normal, una situación de conflicto potencial. A finales del año 1949 la cifra de parados oficiales ascendía 8.908. De igual manera que el número de expedientes se había elevado, también lo había hecho el número de infracciones denunciadas por diversos preceptos laborales ante la Inspección Provincial de Trabajo. Como siempre, al menos de forma prioritaria, lo que realmente preocupaba a las autoridades no era la mala situación de la población trabajadora sino el hecho de que "de continuar persistiendo tal circunstancia podría degenerar en un serio conflicto de carácter laboral."<sup>405</sup>

En esta coyuntura el Delegado de Trabajo elevaba un informe ante el Consejo Económico Sindical Provincial en el que solicitaba que se fuese hacia un sistema en el que se pudiera compatibilizar un seguro de paro con la libertad absoluta de contratación y despido de los trabajadores como método para conseguir más elevados rendimientos.<sup>406</sup>

Esta crisis se palpaba en varios sectores. Entre los más perjudicados estaba el de la industria siderúrgica, metalúrgica y el comercio. Ello era debido a la incidencia de varios factores entre los cuales habría que citar la política llevada a cabo por el Gobierno con el objetivo de potenciar la producción de algunos artículos. Esta política había degenerado en una tendencia a la superproducción por encima de lo que la capacidad adquisitiva de las familias podían soportar saturando el mercado pese a que los cupos de materias primas recibidos por la industria barcelonesa se cifraban en un 10 o un 15%<sup>407</sup> de los demandados. Ello implicaba necesariamente que casi ninguna industria incrementara sus pedidos, lo cual provocaba el descenso paulatino de las plantillas. Ello presionaba al alza sobre los precios de las fuentes de energía como el carbón de cok. Concretamente la industria barcelonesa se quejaba de que las

importaciones de África del Sur, Inglaterra y Bélgica no habían llegado y que en consecuencia la esperanza de bajada en los precios de la siderurgia no se había producido,<sup>408</sup> lo cual no incentivaba la producción de industrias complementarias que en ese momento, al no poder colocar sus productos, no manufacturaban. Y es que hasta el año 1953 la producción de hierro y acero se mantendría por debajo de los niveles anteriores a la guerra civil lo cual teniendo en cuenta que la demanda era superior a la oferta incidía en la elevación de los precios.<sup>409</sup>

En el caso de la industria química barcelonesa el incremento del desempleo se debía también a la falta de materias primas. La norma en este ramo era el contrato de tres meses dando lugar a la consiguiente inestabilidad en el mercado de trabajo. Otro sector gravemente afectado había sido el de la construcción no sólo por la paralización de las obras sino por la afluencia de un considerable número de productores de otras provincias, siendo en su mayoría peones sin especialización alguna. En el caso de la textil la situación era similar dada la falta de materias primas con la salvedad de que algunos empleados textiles recibían la percepción de la Caja de Compensación por escasez de fluido eléctrico. Y ante esta situación el órgano específico para luchar contra la lacra del paro como la O.S.L.P. "...no puede desarrollar sus funciones específicas en esta provincia, ya que no posee crédito administrativo alguno,"<sup>410</sup> se afirmaba.

Una análisis comarcal permite observar que en el caso de Badalona el paro se cebaba en la construcción y en las industrias químicas. A este problema se unía el de los emigrantes tanto en Badalona como en Manlleu y otras comarcas en las que se estaba conformando un problema de orden público a los ojos del régimen.<sup>411</sup>

"...como en memorias anteriores he significado, merece especial atención la delicada situación que provocan en esta Comarca, los constantes desplazamientos de productores de otras provincias a esta localidad. Este problema, denunciado con toda rigurosidad por el que suscribe, debe ser abordado urgentemente y con todo interés para su solución, evitando con ello cuadros de verdadera miseria, que traicionan los postulados Nacional Sindicalistas de nuestro Movimiento...

...Las causas principales del paro en esta comarca, y la única solución, parece será restringir la inmigración...de todos aquellos productores que no posean una especialidad determinada, ya que todos los que inmigran, o casi todos, se refugian en el ramo de la Construcción en calidad de peones ordinarios.

...por tener siempre este ramo una buena cantidad de obreros sin una residencia fija y determinada, trasladándose a donde les es más probable hallar trabajo."<sup>412</sup>

En Granollers el grupo más afectado había sido el de la construcción; en Igualada se planteaba un grave problema con los cortes de fluido eléctrico dándose casos en que algunas industrias sólo habían funcionado durante un día. Ello incidía fundamentalmente en la industria textil que había de hacer frente también a la falta de algodón y otras materias primas así como a la competencia del nylon (siendo este caso el de Mataró).

Todo ello originaba una economía familiar de subsistencia en la que, como en San Baudelio de Llobregat durante la temporada de verano, muchos empleados se empleaban en la agricultura debido a las restricciones de fluido eléctrico como forma de conseguir una solución a su situación desesperada.

Por tanto, como causas generales del paro en la provincia de Barcelona se puede citar la restricción del suministro de fluido eléctrico, y la contracción económica que sufrían las industrias por el desequilibrio existente en la provisión de materias a precios no oficiales. De igual manera, incidía el movimiento migratorio. En el resto de las provincias los problemas tenían un sesgo más o menos idéntico.

En cuanto a la situación de la cuenca asturiana, la problemática social de los mineros y la importancia estratégica de dicho sector condujo a las autoridades en este año a conceder la exención del servicio militar a los trabajadores que, con tres meses de anterioridad a su llamamiento a filas, estuviesen trabajando en labores mineras.<sup>413</sup>

En cuanto a las provincias vascongadas y Santander<sup>414</sup> se puede deducir que el peso de la O.S.L.P. allí era absolutamente mínimo y que aquélla demostraba una ineficacia total.<sup>415</sup> Pese a ello, tanto en las provincias vascas como en Navarra, en las que existía un porcentaje relativamente bajo de parados hay que tener en cuenta que dichas cifras oficiales (como las del resto de España) engañaban y si en diciembre de 1949 oficialmente había 270 parados las estimaciones más benignas de la O.S.L.P. situaban dicha cifra en 480.

En las provincias gallegas también se ponía de manifiesto el fracaso de la O.S.L.P. y del S.N.E.C. Concretamente el jefe provincial de dicha obra enviaba a su jefe nacional el siguiente oficio en el que se explicitaba su capacidad real de acción:

"Las especiales características de la región hacen difícil el empleo eficaz de esta Obra Sindical que por ahora, creemos que debe limitarse a una labor de orientación de los productores que se desplazan a otras provincias, controlando estos movimientos migratorios en estrecha coordinación con el Servicio de Encuadramiento y Colocación."<sup>416</sup>

A esta situación colaboraba la ineficacia de la obra, la falta de cooperación de los empresarios que no reclutaban a su personal de las oficinas sino que prescindían absolutamente de ellas, y también la escasa preocupación de las delegaciones provinciales de trabajo por exigir el cumplimiento de los legislados hasta tal punto que ni procuraban el encuadramiento de los trabajadores ni el respeto a las normas legales sobre su situación laboral.<sup>417</sup> Y es que el incumplimiento de las normas laborales por parte de las empresas era la norma, dada la permisividad de las autoridades sindicales y del ministerio de Trabajo. Esta situación se palpa en un informe de la O.S.L.P. de Pontevedra en el que pide que se aplique de forma efectiva la legislación laboral creada al efecto (lo cual era ya indicativo de su no aplicación):

“...Mayor respeto al trabajador por parte de las empresas; aumento de salarios; cumplimiento exacto de las legislaciones laborales; cumplimiento del descanso dominical; pago de horas extraordinarias;...mejores condiciones higiénicas en el trabajo; subordinación a las Reglamentaciones Nacionales del Trabajo; respeto a los beneficios obtenidos; asistencia jurídica ante la Magistratura de Trabajo; ayuda en Navidad...”<sup>418</sup>

En Castilla-León la obra languidecía por falta de medios económicos y, por tanto, permanecía como en otros puntos de España englobada en el departamento de la Vicesecretaría Provincial de Obras Sindicales.<sup>419</sup> En esta región se encontraban algunos de los elementos que desde dentro del régimen resultaban más contestatarios, como el delegado provincial J. de la Mora. En algunas comarcas como la de Alar del Rey se vivía en la creencia, entre los más acérrimos elementos falangistas, de que se estaba desarrollando una gran campaña por parte de los elementos capitalistas para evitar que los obreros en una situación difícil acudieran al sindicato buscando protección. Así se explicaban el hecho de que los obreros se apartaran progresivamente de la disciplina sindical ante lo cual se planteaba la intensificación de una campaña nacional de propaganda que en gran medida llevaba años desarrollándose con un éxito muy dudoso:

“...es conveniente, para poder atraer a las masas obreras, el poder disponer de locales apropiados donde al distraerles con juegos apropiados, lectura e inclusive conferencias puedan servirnos de motivo para mantener el roce con ellos y poder darnos más cuenta de las necesidades que se les plantea,...al fomentar en ellos los deportes se conseguiría que una masa de juventud obrera fuera fácilmente atraída y más tarde instruida en nuestros estilos y conocimientos doctrinales inculcando la cultura de la Legislación Social para que de esta forma con sus conocimientos puedan defender sus derechos en

la inteligencia que defienden al mismo tiempo la justicia implantada por el Nacional Sindicalismo.<sup>420</sup>

Este ambiente de desconfianza se palpaba en la ausencia de actos oficiales de conciliación ante los sindicatos. La comarcal de Baltanas se quejaba amargamente de que, como en años anteriores, en los pueblos se prescindía de forma abierta y masiva por parte de los "patronos" de las delegaciones locales del S.N.E.C. tanto para las ofertas como para las demandas de empleo. Solamente se acudía a dichos locales en caso de conflicto laboral, para consultar temas relacionados con los seguros sociales, las reglamentaciones y los tribunales sindicales de conciliación.<sup>421</sup> Y eso daba como resultado que existiera un alto número de oficinas locales y comarcales que no registraban movimiento laboral alguno y otras en las que se fijaba sistemáticamente un censo de parados que no variaba durante meses y meses. La situación del conocimiento del paro en España era cada vez peor dado que ya en el año 1949 habían pasado algunas funciones del Servicio de Encuadramiento y Colocación a los distintos sindicatos, y ello daba como resultado un conocimiento menor por la poca eficacia de los mismos en dicha materia, ya fuera por la escasa importancia que daban a esta cuestión, por la falta de conocimientos prácticos o de material y personal adecuado. Cualquiera que fuese la razón, la realidad era que en aquellos lugares en los que, como en León, los sindicatos habían recibido atribuciones en dicho tema el movimiento administrativo registrado se había hecho progresivamente menor.

En líneas generales, los cortes de suministro eléctrico incidieron también en la paralización de la construcción en toda Castilla-León dado que las industrias fabricantes de elementos para el mencionado sector como las de cemento o ladrillo se veían claramente afectadas por los designios de la divina providencia no compensados por obras hidráulicas al efecto. Este tipo de problemas era extensivo al resto de las provincias de la mencionada región y si el número de desempleados no era mayor ello se debía al poco peso demográfico de este rincón de España.<sup>422</sup> Y ello a pesar de la extraordinaria importancia de la actividad agrícola. En provincias como Zamora más del 75 % de la población activa dependían de este sector.<sup>423</sup> Por tanto, en este caso la problemática se establecía en el ámbito campesino. En esta provincia el desarrollo económico se veía dificultado, independientemente de la coyuntura económica, por la ausencia o las deficiencias en las vías de comunicación. En general, la locomoción dependía de la tracción de animales ante lo cual uno de los problemas de los agricultores era la consecución de yuntas para los carros. Sus peticiones, evidentemente, chocaban con la realidad de que su demanda superaba en dos terceras partes la oferta de la delegación de sindicatos. Tampoco eran suficientes los cupos relativos a abonos, salvados y piensos, con el consiguiente daño para sus cabañas ganaderas. Y frente a ello la O.S.L.P. mantenía su línea de inactividad inexplicable dada la lamentable coyuntura general que atravesaba España.<sup>424</sup>

En Andalucía<sup>425</sup> la situación de paro era alarmante dado que más del 40% de los parados a nivel nacional se encontraban en aquella región. En Cádiz el número de desempleados se situaba entre los 8.000 y 9.000 oficialmente (extraoficialmente la cifra se podía elevar por encima de los 12.000).<sup>426</sup> A la altura de febrero del mencionado año el paro se había intensificado por la paralización de las faenas del campo desde la siembra a la escarda. En el sector vitivinícola el paro se había incrementado por la falta de exportación de vinos y coñacs a los mercados internacionales dado el precio de aquéllos, y ello sin posibilidad de que el consumo interno pudiera compensarlo. A esto se pueden añadir los tradicionales problemas por los que atravesaba el sector de la construcción.

Ante esta situación la política de las autoridades consistía en repartir a los trabajadores agrícolas que estaban en paro entre los empresarios con los que se había llegado a un previo acuerdo por medio del gobernador civil. Con ello quedaba solucionado parcialmente el problema durante mes y medio. En este año 49, dada la lamentable situación que elevaba el número de parados por encima de los doce mil, se llevó a cabo en la capital de Cádiz una reunión cuyo fin era crear un Montepío Agrícola, para lo cual era necesario recaudar más de diez millones entre los empresarios con el fin de sostener al menos dos meses a los trabajadores en paro. Ante la imposibilidad de llevar a efecto dicho plan se desistió desarrollándose el sistema tradicional que consistía en que cada localidad “por sí, resolviera su propio problema, mediante la distribución de obreros entre lo patronos en relación con las hectáreas cultivadas por cada uno”<sup>427</sup> lo cual no permite creer que, como se afirma, ello supusiera la absorción de un 80% del censo de parados. Todo ello ponía de nuevo en evidencia la inutilidad de la O.S.L.P., del S.N.E.C. y del propio ministerio de Trabajo así como la tendencia a dejar a expensas de la beneficencia, el mercado o la divinidad la solución del paro en España.

Dada esta situación, en provincias como Córdoba, la O.S.L.P. se planteaba la posible influencia efectiva que pudiera tener en la resolución del problema del paro en dicha provincia. En ésta, como en casi todas las provincias, se ponía de manifiesto que en el año 1949 la cifra de paro real era superior a la oficial como a renglón seguido se alude:

“Puede afirmarse que el paro en la provincia de Córdoba es exclusivamente agrícola; actualmente el paro oficial alcanza los 20.000 obreros, la cifra real es superior a los 25.000.”<sup>428</sup>

Las oficinas del S.N.E.C. arrojaban en el mes de marzo la cifra de 21.549 parados, “aunque la calculada para el mismo (*periodo*) por el Delegado de Trabajo, era de 43.890.”<sup>429</sup> Causas: falta de precipitaciones atmosféricas, deficientes cosechas de cereales, de aceite y vid, etc.

Principalmente lo que se percibía en la primavera del 49 era que la falta de perspectiva de buenas cosechas retraía al capital de cara contratar mano de obra abundante, situación calcada a la de la provincia de Jaén en la que las previsiones más optimistas, fruto de la mala cosecha de cereales en la primavera del 49, conducían a pensar que sólo a finales de año podría rebajarse muy ligeramente la tendencia alcista del desempleo. La solución a dicha situación venía dada por los desplazamientos colectivos a otras provincias que, coyunturalmente pudieran requerir mano de obra. Estas necesidades se centraban en aquél momento en poblaciones del norte de España como Bilbao y Santander, y en general en las zonas en que se desarrollaba alguna obra hidroeléctrica en el Pirineo. Sin embargo, existía la dificultad de que la desproporción entre los salarios y el coste de la vida, impedía a los trabajadores, atender a las primeras necesidades y dejar libre algún excedente para enviárselo a la familia. Ello tenía por objetivo controlar una corriente migratoria que, según las autoridades se estaba produciendo "clandestinamente."<sup>430</sup> En otros casos como el de Granada,<sup>431</sup> los fenómenos migratorios eran intra o interprovinciales. A nivel interregional los movimientos se encaminaban hacia Castilla la Mancha y hacia Jaén en la época de recolección de la aceituna. Seguía siendo típico, sobre todo en la región andaluza, el que se calificara a parte de los parados como vagos y maleantes. Estos eran considerados como los principales destructores de la paz creada por el régimen: "Paz vertida entre todas las clases sociales de España y Paz horizontal entre todos los hombres de la tierra." En estos términos se pronunciaba el Jefe Provincial de Lucha contra el Paro de Granada:

"...porque conviene diferenciar al parado auténtico del vagabundo, del maleante ocasional y parado perenne y del tarado o imposibilitado físicamente, más bien llamado a acogerse a las beneficencias que al trabajo..."<sup>432</sup>

No menos crítica era la situación en Málaga<sup>433</sup> en donde el número de parados oficiales superaba los 8.000 y los 9.000 en junio y diciembre de este año respectivamente. O en Almería, en donde la depreciación del esparto y la paralización minera eran en el verano de 1949 los dos factores más influyentes. La situación era similar en Sevilla donde en junio del 49 la cifra de parados superaba los 14.000. En la agricultura y la ganadería y en sus industrias derivadas era donde la provincia acusaba "los perfiles más sombríos."<sup>434</sup> Independientemente de otros factores la última cosecha había sido relativamente pequeña lo cual había hecho innecesaria una gran cantidad de brazos en las faenas de siega por lo que a finales de julio las cifras de paro ya resultaban alarmantes en comparación al año anterior. Así la cosecha de cereales había sido casi nula y eso repercutía en las cifras de sectores como el de la construcción que generaba una situación agobiante.<sup>435</sup> Concretamente a finales de junio y principios de julio del año 48 el número de parados era oficialmente la mitad de los existentes en 1949. La situación era lamentable hasta el punto de que el diario *ABC* en su edición andaluza denunciaba la "rapiña" que en el pueblo de Carmona se cometía al quitar a los campesinos lo equivalente a la leña de

60 olivos diarios. Concretamente en el informe a que nos referimos hacia la siguiente valoración:

“...faltan para ello piensos para el ganado, simientes de trigo y de cereales y leguminosas y el empresario agrícola carece de recursos alimenticios para sus obreros, lo que repercutirá inexorablemente en nuevos despidos que aumentarán el paro. No ha solucionado el problema de los piensos la relativa libertad de adquisición en Ciudad Real y provincias del levante porque el exceso de demanda elevó excesivamente los precios que a su vez sufren el aumento que supone entregar el treinta por ciento de cada adquisición, y al precio de tasa, al Servicio Nacional del Trigo...¿No es tanto como invitar a que se dediquen las mejores tierra a producir legumbres y cereales destinados a piensos en lugar de dedicarlas como es lógico en una buena rotación al cultivo del trigo? ¿No es la única solución importar piensos?”

En Extremadura, y concretamente en Cáceres, el número de parados era también especialmente elevado pese a lo cual la O.S.L.P. carecía de consignación presupuestaria alguna.<sup>436</sup> De hecho en el verano la situación fue especialmente mala y a pesar de estar en el período de recolección se había absorbido un muy pequeño número de obreros.<sup>437</sup>

En Badajoz, en marzo de 1949 nos encontramos con la provincia con mayor número de parados en el ámbito agrícola. Concretamente 27.541. Su situación era verdaderamente alarmante sobre todo si se tiene en cuenta que el paro registrado en el mencionado mes de marzo era tres veces superior al registrado en el mismo mes del año anterior.<sup>438</sup> Así, en abril de este año el S.N.E.C. afirma que el aumento “corresponde principalmente a la agricultura pues, a pesar de las lluvias caídas últimamente, por estar muy avanzada la temporada, no han surtido el beneficio deseado, siendo por tanto las faenas en el campo casi nulas. Consideramos la situación de esta provincia sumamente grave.”<sup>439</sup> Y es que no se acometían obras por parte del Estado o los departamentos ministeriales correspondientes que pudieran acaparar un volumen importante de parados y que condujera a la instalación de campamentos de la obra, una de las fórmulas que podían utilizarse. Para ellos evidentemente, había que dotar a dicha institución en dicha provincia, en primer lugar, de personal adecuado.<sup>440</sup>

Este era el resultado de un año donde, con toda su crudeza, se había puesto de manifiesto la incapacidad del régimen para luchar contra el paro y la voluntad del franquismo de evitar que llegase hasta la opinión pública la realidad de lo que estaba sucediendo con el paro en España como expresión de lo que una política global que tendía a hacer tanto del ministerio de Trabajo como de la Delegación Nacional de Sindicatos meros órganos de publicidad y difusión de los logros del régimen.



### 10.7.3. El repunte del año 1950.

En el año 1950 lo primero que se pone de manifiesto, siguiendo la tónica de diferenciación entre la realidad sociolaboral de España y la estadística oficial, es el hecho de que las cifras que encontramos en el Anuario Estadístico de España nos indican que a finales de diciembre del año 50 el número de parados ascendía a 175.827 mientras que según las estimaciones más benignas estas cifras se elevaban a 245.730. Ello suponía un incremento del 39 %.<sup>441</sup> Otro dato sumamente interesante es el hecho de que la media oficial de paro mensual era de 166.183 mientras que las estimaciones más generosas situaban dicha cifra en 236.242 parados.<sup>442</sup> Las zonas en las que el desajuste era evidente se situaban en Andalucía (Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla sobre todo), Badajoz, Castilla la Mancha (esencialmente Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo), Salamanca, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Zaragoza y Logroño.

Provincia	Paro oficial en 30 de junio de 1950	Paro oficial en 31 de diciembre de 1950	Parados estimados en la agricultura el 31 de diciembre de 1950 (A) <sup>443</sup>	Parados oficialmente reconocidos en la industria el 31 de diciembre de 1950 (B) <sup>444</sup>	Paro total estimado en 31 de diciembre de 1950 (A+B) <sup>445</sup>
Álava	57	62	-	62	62
Albacete	1.175	1.334	1.330	1.034	2.364
Alicante	3.580	3.656	180	3.476	3.656
Almería	2.247	2.739	245	2.494	2.739
Ávila	245	2.249	2.044	205	2.249
Badajoz	1.479	4.353	7.412	684	8.096
Baleares	1.050	919	43	876	919
Barcelona	8.569	8.908	73	8.835	8.908
Burgos	150	230	69	161	230
Cáceres	3.350	7.051	5.932	1.119	7.051
Cádiz	9.275	9.176	7.951	5.245	13.196
Castellón	1.267	1.405	420	985	1.405
Ciudad Real	582	1.517	8.625	698	9.323
Córdoba	15.434	16.497	11.796	4.701	16.497
Coruña (La)	2.464	2.566	3	2.563	2.566
Cuenca	482	646	424	429	853
Gerona	836	949	72	877	949

Granada	2.179	2.628	5.364	1.211	6.575
Guadalajara	151	460	3.903	243	4.146
Guipúzcoa	366	414	-	414	414
Huelva	3.132	3.130	1.841	2.243	4.084
Huesca	279	357	61	296	357
Jaén	12.866	12.069	9.805	2.264	12.069
León	295	380	1	379	380
Lérida	259	682	4	678	682
Logroño	107	382	614	367	981
Lugo	734	662	4	658	662
Madrid	37.853	45.108	561	44.547	45.108
Málaga	8.393	9.127	12.320	7.672	19.902
Murcia	2.757	3.009	10.310	1.978	12.288
Navarra	246	270	3	267	270
Orense	148	145	8	137	145
Oviedo	876	791	2	789	791
Palencia	301	272	72	200	272
Palmas (Las)	3.546	3.004	1.083	1.921	3.004
Pontevedra	583	468	-	468	468
Salamanca	1.982	2.434	3.716	2.026	5.742
S. C. Tenerife	1.997	1.227	1.360	754	2.114
Santander	404	393	-	393	393
Segovia	154	444	194	250	444
Sevilla	12.474	11.405	11.834	8.109	19.943
Soria	15	28	-	28	28
Tarragona	994	1.117	58	1.059	1.117
Teruel	136	622	11	611	622
Toledo	133	877	4.802	261	5.063
Valencia	5.261	4.939	1.588	4.705	6.293
Valladolid	1.350	1.959	767	1.192	1.959
Vizcaya	332	249	-	249	249
Zamora	222	418	313	105	418
Zaragoza	656	883	5.619	848	6.467
Marruecos	1.240	1.217	20	1.197	1.217
TOTAL	154.578	175.827	122.767	122.963	245.730

\*Cuadro n° 29. Paro a lo largo del año 1950.

Meses	Índices de variaciones estacionales correspondientes al año 1950 en %	Índices de variaciones estacionales de los años anteriores en %
enero	101,1	102,09
febrero	102,1	103,18
marzo	100,5	102,42
abril <sup>446</sup>	104,8	99,50
mayo <sup>447</sup>	102,9	97,25
junio	92,8	92,51
julio	91,8	93,75
agosto	96,8	97,88
septiembre	98,6	99,95
octubre	102,3	102,29
noviembre	104,6	105,32
diciembre	101,3	103,86
promedios	100,0	100,00

*\*Cuadro nº 30. Promedios mensuales de paro en relación a la media anual del año 1950.*

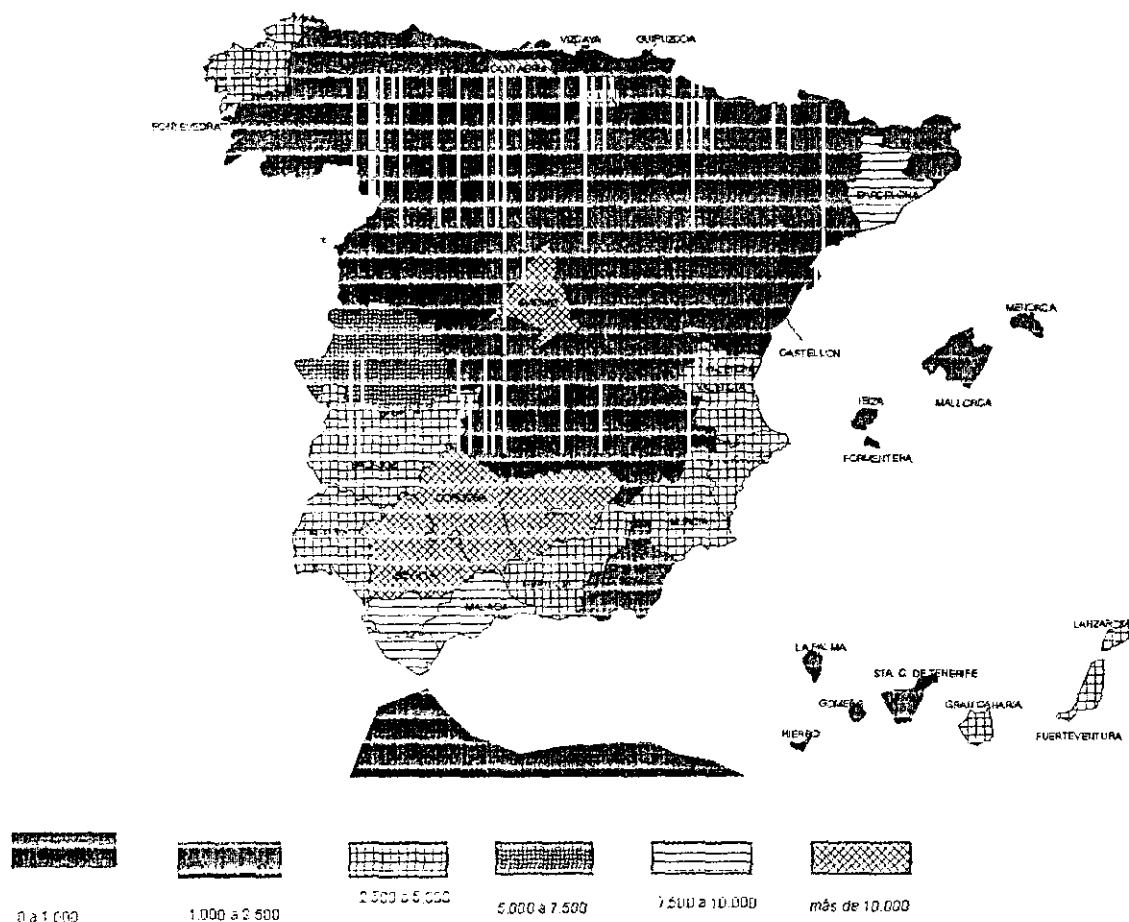
Es interesante comparar los datos estadísticos del S.N.E.C. para incidir de nuevo en los errores de bulto que se cometían. Si observamos el cuadro nº 29 y el nº 30 observaremos que el promedio en tantos por ciento nos indica que en enero la cifra se situaba en el 101 % y en diciembre en 101,3 %. Pues bien, el paro estimado en diciembre de 1950 era de 245.730 parados mientras que en enero, con un tanto por ciento similar, nos encontramos con que de la suma del paro en la agricultura y la industria obtenemos la cifra de 314.059 parados estimados. De ellos 164 646 pertenecían al sector agrícola, 70.699 a la construcción, 12.350 al ramo de la alimentación y 10.226 al sector de banca, seguros y oficinas, siendo estos sectores los de mayor peso. A estas indicativas cifras se pueden unir las estimaciones para el mes de noviembre del 50 en el que la cifra de parados alcanzaba los 288.746 (179.732 en la agricultura y 110.097 en la industria) frente a los 179.732 reconocidos.<sup>448</sup>

Provincia	Agrícola	Industrial
Álava	0	161
Albacete	24	763
Alicante	202	4.252
Almería	368	2.063
Ávila	3.402	272

Badajoz	30.819	1.038
Baleares	49	1.362
Barcelona	74	11.662
Burgos	0	400
Cáceres	7.111	1.503
Cádiz	12.081	7.603
Castellón	391	1.565
Ciudad Real	6.196	815
Córdoba	16.021	7.163
Coruña	0	2.232
Cuenca	554	425
Gerona	152	908
Granada	3.718	1.505
Guadalajara	7.618	470
Guipúzcoa	0	609
Huelva	2.050	2.627
Huesca	2.453	219
Jaén	9.553	2.095
León	0	430
Lérida	0	656
Logroño	449	170
Lugo	32	912
Madrid	675	45.039
Málaga	9.883	10.145
Marruecos	25	1.816
Murcia	10.170	2.654
Navarra	1.868	401
Orense	0	379
Oviedo	0	1.019
Palencia	38	629
Palmas	1.665	2.667
Pontevedra	0	833
Salamanca	5.237	2.341
Santander	0	411
S. Cruz de Tenerife	3.565	1.961
Segovia	385	286

Sevilla	7.385	13.117
Soria	0	49
Tarragona	18	1.103
Teruel	22	212
Toledo	7.479	566
Valencia	1.767	6.243
Valladolid	859	1.361
Vizcaya	0	1.100
Zamora	319	148
Zaragoza	10.237	1.075
TOTAL	164.646	149.413

*\*Cuadro nº 31. El paro estimado el 31 de enero de 1950 por provincias.*



*\*Mapa nº 2. Situación del paro a finales de diciembre de 1950.*

Como muestra el mapa nº 2, las provincias más afectadas por el desempleo en términos absolutos eran las de Madrid, Jaén, Córdoba y Sevilla. Un hecho peculiar durante el año 1950, ya prefigurado en 1949, fue que el peso del paro en el sector de la construcción fuera tanto en

junio como en diciembre superior al desempleo en la agricultura. Ello no puede achacarse a la mejor situación del campo español sino únicamente al hecho de que, pese a que el comienzo de la implantación de la cartilla profesional en la construcción había comenzado en 1940, el control de dicho sector no se había asentado en lo estadístico hasta finales de 1949 y principios del año 1950. Ello, por otro lado, no viene más que a evidenciar el descontrol absoluto y sistemático de los trabajadores del campo español a efectos estadísticos y la limitación del conocimiento dentro del segundo sector más relevante: la construcción.<sup>449</sup> A pesar de ello, se presentía que en lo referente al paro en este sector se estaba cerca de controlar totalmente sus dimensiones, lo cual debía ser fundamentalmente falso en la medida que la Dirección General de Trabajo recibía la petición de la D.N.S. para que no paralizara por más tiempo la entrega de la cartilla profesional en dicho sector.<sup>450</sup>

De hecho, en el informe sobre el paro del año 1950 José Redondo Gómez (Jefe Nacional de O.S.L.P.) reconocía explícitamente ante el Secretario Nacional de Sindicatos (José Montero Neria), que a pesar de sus deseos no eran capaces de controlar oficialmente el paro en todas y cada una de las actividades industriales y menos todavía en las agrícolas. En consecuencia, continuaba Redondo, los datos oficiales eran necesariamente incompletos entre otros motivos porque los agricultores se mostraban reacios a acudir a los organismos oficiales,<sup>451</sup> por todo lo cual "llegamos a la resultante de que sobre los datos oficiales que consignamos en nuestra Estadística, el paro total estimado o real, debe entenderse es de unos 288.000 parados aproximadamente,"<sup>452</sup> lo cual suponía un incremento de más del 63 % sobre el paro considerado oficial.

Ello planteaba un problema esencial en un régimen que había de buscar por medio de la represión y la política socio-laboral un contexto social armónico y carente de conflictos. Como ya se ha dicho, la política social era la justificación más relevante de la permanencia del franquismo en el poder. Su fracaso, y dentro de ello la ruina y el desmoronamiento de los resultados en la política de paro, venían a deslegitimarlo. Ello, en gran medida, explica la zanja colosal entre las cifras de paro real y las estimadas (más próximas a la realidad). Por tanto, estas circunstancias que se venían encima del ministerio de Trabajo y de la organización sindical, tenían una lectura necesaria en el orden político, en el económico y en el social:

"En lo político, por ese reconocimiento del fracaso al no cumplir la promesa solemne promulgada por el Fuero del Trabajo de proporcionar un salario a cada productor.

En lo económico porque cada productor en paro no solamente constituye un parásito, si no también, un factor negativo que consume sin producir.

En lo social porque el paro constituye el instrumento más fácil de subversión y el más propicio a las doctrinas y teorías disolventes.<sup>7453</sup>

	hombres	mujeres	totales
menores de 20	14.594	3.551	18.145
de 20 a 50	115.368	16.498	131.866
de 50 o más	24.121	1.695	25.816
totales	154.083	21.744	175.827

*\*Cuadro n° 32. Parados por sexo y edad en diciembre de 1950*

Lo primero que hay que volver a recordar es que, a pesar de que en este cuadro sí aparecen los menores de 20 años, éstos no se consideran estadísticamente como parados. Se ponía en duda hasta el hecho de considerar al grupo de los mayores de 50 años, porque eran considerados junto a los menores de 20 “brazos económicamente débiles” que no debían de ser tenidos en consideración. De igual manera y oficialmente, el paro se centraba en el grupo de los varones de entre 20 y 50 años y globalmente en la población masculina. De hecho, las mujeres únicamente representaban algo más del 12,3 % de los desempleados.

Desglosando las cifras del paro masculino encontramos que se centraba esencialmente en la construcción (59.412), en la agricultura (51.666) y muy secundariamente, y en tercer lugar, en la industria alimentaria (4.812). Sería lógico que las cifras de paro femenino fueran, al menos, ligeramente, superiores. Sin embargo, si el desempleo era la gran derrota del franquismo, la incorporación de la mujer a la actividad laboral suponía, formalmente, la derrota del mismo por su deseo formal de sacar a la mujer del taller y de la fábrica y de instaurar un salario familiar eficaz como se proponía en el Fuero del Trabajo. Pese a ello, el párrafo que insertamos a continuación es plenamente indicativo de la instauración paulatina de una nueva situación en la que la mujer jugaba un papel importantísimo en el sostenimiento de la economía familiar y en la consecución de un salario familiar próximo al suficiente:

“La mujer juega hoy en el campo económico-laboral un importante papel. Rompiendo seculares tradiciones ha ingresado en la población activa incrementándola extraordinariamente. Hasta hace poco su trabajo no significaba ningún conflicto por supeditarse exclusivamente al hogar. Más tarde, favorecida por las nuevas condiciones sociales y acuciada por la necesidad económica que se siente en estos últimos tiempos afluye a la fábrica, a la oficina, etc., en grandes masas en busca de colocación y siendo nuestra industria incapaz de facilitarles empleo, provoca el consiguiente paro...por la necesidad de buscar colocación con sueldos medios, a fin de aumentar los ingresos familiares, que en otro tiempo no eran necesarios por la suficiencia de los ingresos

masculinos. La prueba de ello es la disponibilidad de ofertas por parte del servicio doméstico y jornales de limpieza, que en general pueden ser cubiertas.”<sup>454</sup>

En el caso de las mujeres, el paro se centraba en los sectores que tradicionalmente habían recibido un mayor número de trabajadoras: la alimentación y los llamados servicios de higiene. Concretamente el número de mujeres oficialmente desempleadas era el siguiente:

- Industria de la alimentación: 4.598
- Servicios de higiene: 3.424
- Banca, seguros y oficinas: 2.353
- Otros: 1906
- Industria de confección, vestido y tocado: 1.932.
- Textil: 1.583
- Agricultura y forestal: 1.198
- Química: 997
- Hostelería: 984
- Pequeña metalúrgica: 964

En cuanto a los movimientos migratorios canalizados por las oficinas, las provincias andaluzas eran las que de forma más intensa aportaban mano de obra a otras regiones y provincias pese a lo cual no lo hacían en la proporción que dichas oficinas esperaban. Se llegaba así a la conclusión, por parte de los órganos sindicales y del ministerio de Trabajo, de que dichos movimientos eran dificultados por el “carácter del pueblo andaluz”<sup>455</sup> que hacía que la mayoría de las empresas pusiesen dificultades a su contratación, dado que afirmaban que su rendimiento era deficiente. Pese a ello existían provincias que pedían contingentes significativos, sobre todo para el sector de la construcción, en el cual se habían realizado durante el año 1950 1.914 peticiones a las oficinas de colocación.<sup>456</sup>

Como se ha mencionado, la preocupación por el desempleo de los jóvenes y de las mujeres era escasa o nula. Se consideraba que su lugar estaba en el hogar, al cuidado de su marido y de sus hijos. Y de ahí que no hubiera voluntad suficiente como para percibir el peso de los jóvenes y de las jóvenes en las estadísticas como un elemento suficientemente expresivo de la mala situación de las familias españolas, en el sentido de que dichos jóvenes eran rápidamente incorporados al mundo del trabajo con el objetivo de subsanar la mala situación de las economías familiares:

“...el paro femenino no debe preocupar a las autoridades, pues si bien es cierto que las familias obreras, con objeto de aliviar las cargas familiares colocan a sus hijos, o tratan



de hacerlo inscribiéndolos como parados en nuestras oficinas, el paro femenino no reviste importancia puesto que fácilmente se comprueba que la mayoría de las mismas al pasar de los 18 años se incorporan totalmente a las faenas de la casa por contraer matrimonio; no es por tanto necesario capacitar en gran número a las mujeres profesionalmente para el trabajo.<sup>457</sup>

Muchos de estos jóvenes tenían como única aspiración colocarse en cualquier empleo sin especialización, con lo cual su situación podía resolverse muy parcialmente en el corto plazo. Dicha situación se prolongaba haciendo de ellos obreros sin cualificación alguna y con un futuro laboral sometido a los ciclos de la economía siendo éste problema, el de la formación profesional, uno de los más graves de la industria española.

En el caso de la agricultura hay que tener en cuenta que en la difícil coyuntura del año 1950 el problema del desempleo no afectaba sólo a los asalariados, sino también a los pequeños y medianos propietarios, arrendatarios y aparceros que en muchas ocasiones tenían que buscarse otras actividades en las que trabajar como asalariados. Hay que considerar el hecho de que es en la década de lo cincuenta cuando se inicia la crisis más relevante de la agricultura tradicional española<sup>458</sup> que por medio de la emigración, tanto interior como exterior, presionó al alza sobre los salarios agrícolas lo cual iba a dar como resultado que en la mencionada década el número de personas ocupadas en el sector agrario disminuyera en medio millón.

El paro en este sector se había disparado en relación al año anterior. En diciembre, el número de parados ascendía a 52.864. Pese a ello las estadísticas oficiales a través de las oficinas de colocación no registraban este desempleo que en coyunturas difíciles podía transformarse en crónico; únicamente se registraba el de los parados que habían trabajado a salario o bien el de los pequeños propietarios, arrendatarios o aparceros que trabajaban oficialmente más de 90 jornales al año.<sup>459</sup> Ello dejaba oficialmente fuera a aquel que podía encontrarse durante una cuarta parte del año sin ningún tipo de ingresos salvo que buscara un empleo asalariado.

La agricultura no parecía tener remedio alguno. Se realizaban algunas obras públicas pero estas no eran suficientes. En el mejor de los casos no se realizaban con eficiencia, sobre todo porque dichos "auxilios" se llevaban a cabo en último extremo y sus resultados beneficiaban a pocas provincias siendo sus consecuencias "un alivio de mayor o menor duración pero nunca un plan general encaminado a la reducción del problema."<sup>460</sup> Así pues, el paro relativo tenía más importancia en las provincias de predominio agrícola Las Palmas, Córdoba, Jaén, Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva, etc.

Ante la difícil situación el campo, lo único que se planteaba, y de forma muy superficial, era la necesidad de desarrollar planes de construcción de carreteras, caminos vecinales, obras hidráulicas, repoblación forestal (dado que facilitaba supuestamente la autarquía económica), etc. Sin embargo, con ello parecía complicado elevar el poder adquisitivo de los jornales de los agricultores. Y ello porque no existía una política fiscal y monetaria adecuada. Sin embargo, todos estos remedios no parecían suficientes, sobre todo desde el momento en que no existía un órgano que centralizara el tratamiento del problema del desempleo, cuestión cuyas atribuciones se repartían entre diversos organismos como la organización sindical y el ministerio de Trabajo:

“A pesar de ello, estos remedios que en condiciones normales reducirían o eliminarían el paro, no son suficientes en las actuales circunstancias. Es preciso crear un plan nacional fuente de riqueza y bienes económicos productivos, así como también modificar algunos conceptos económicos, puesto que no es justo ni suficiente, repartir una cantidad presupuestada, para invertirla en obras públicas que no siempre son productivas o necesarias. Es menester estudiar y establecer diversos sistemas bancarios con objeto de mover los picos de interés y favorecer de esta manera la propensión a la inversión de capitales. Interesa así mismo una intensificación del consumo por medio de una igualdad entre los gastos e ingresos de las economías individuales, para que así exista en todos los hogares un remanente utilizable para su inversión en bienes. Es necesario vigilar el nivel de vida, cada día más desproporcionado sobre todo, en uno de los sectores más considerables de nuestra sociedad.”<sup>461</sup>

La situación en el sector industrial, en un sentido amplio, era también preocupante. El paro en la industria de la construcción seguía siendo de los más elevados. En diciembre de 1950 era de 50.550. Las causas seguían siendo la carencia de materiales como el hierro, el cemento, la madera, el clavazón y la dificultad en la obtención de créditos bancarios. La única manera de solventar dicha situación seguía siendo el recurso al mercado negro o la paralización de las obras y de ahí la imposibilidad de desarrollar un plan adecuado para la vivienda.<sup>462</sup> La situación era lo suficientemente dramática como para que dentro del Plan de Acción Asistencial para el año 1950 alguna Vicesecretaría Provincial como la de Badajoz planteara la necesidad de establecer un control especial sobre materias primas necesarias como la arena.<sup>463</sup>

Otro sector gravemente afectado era el de la alimentación, por la paralización de las fábricas de conservas de pescados, vegetales y dulces en función de la escasez de hojalata, dado que los cupos asignados eran insuficientes o no llegaban nunca a su lugar de destino. Por otro lado, los comerciantes al por mayor encontraban las mayores dificultades en el encarecimiento de las tarifas de transporte por carretera y ferrocarril. Situación semejante (por la escasez de suministros de artículos intervenidos) era la del sector hostelero. Otros sectores afectados,

aunque menos que los anteriores, fueron el de los servicios de higiene, pequeña metalurgia, comercio y confección, etc.; este último por la falta de materias primas como el algodón, la lana y las fibras que al elevar el precio de sus productos los hacía accesibles únicamente a las clases más adineradas.<sup>464</sup>

A nivel provincial la situación del paro era muy similar a la del año 1949. En la región de Cataluña se empezaba a percibir una pérdida adquisitiva notable del salario de los trabajadores y por tanto, las perspectivas que se podían ofrecer a aquéllos eran sumamente negativas.<sup>465</sup> Solamente en Lérida se podía prever que las obras hidráulicas en la zona pirenaica absorbieran gran parte del personal en paro. En Gerona, la paralización de la demanda de las manufacturas de corcho era otro factor que incidía ligeramente en el aumento de los parados.

El País Vasco, globalmente, no era un área muy afectada por el desempleo. Es más, en Vizcaya sobre todo la anulación parcial de las restricciones eléctricas hacía que las empresas solicitaran cada día con más intensidad el servicio de mano de obra especializada, principalmente en metalurgia y construcción.

Muy interesantes son las cifras de Madrid, sobre todo en lo referente al sector de la construcción. A principios del año 1950 (en enero) existían en esta provincia, tanto sólo en el sector industrial, 45.039 parados. En diciembre del mismo año la cifra prácticamente no había variado según las estimaciones extraoficiales (los parados ascendían a 45.108). El paro en la construcción era el más numeroso fruto de la llegada masiva de peones o supuestos peones que hacían que el desempleo en dicho sector fuera superior en un 50 % al censo laboral de dicha rama.<sup>466</sup>

En Andalucía, la situación seguía preocupando a las autoridades por los efectos políticos y sociales que pudieran generarse. En Córdoba, la cosecha había sido irregular y en Málaga, se cargaban las tintas sobre la incidencia de la sequía, la falta de fertilizantes y las restricciones de fluido eléctrico, lo cual incidía muy especialmente en el crecido número de expedientes de crisis. En Granada, se constataba la reducción de los terrenos cultivables como consecuencia de la carestía y la dificultad en la obtención de fertilizantes. Otro de los graves problemas a que se enfrentaba especialmente esta provincia era a la falta de transportes:

“...la inexistencia de carreteras hace que 92 pueblos de esta provincia, la mayoría de ellos en zonas muy productivas y fértiles que dan vida y ocupación a más de 70.000 habitantes sufran depreciaciones muy grandes en sus productos al tener que pagar el transporte a razón de quince pts. tonelada kilométrica aproximadamente.”<sup>467</sup>

En gran medida la situación de Granada era la que se vivía en toda Andalucía y así lo reflejaba la O.S. de Lucha contra el Paro de esta provincia.<sup>468</sup> La tónica en el segundo semestre del año 50 en Granada se caracterizaba por una situación de alarma ya que la sequía estaba imposibilitando no sólo la realización de los trabajos agrícolas sino que también estaba creando “un natural recelo y desconfianza entre los propietarios y labradores que paralizaban toda iniciativa ante el temor, lógicamente fundado, de labores que después por causas climatológicas no tendrían la remuneración prevista.”<sup>469</sup> La consecuencia era el hambre y la miseria generalizada, siempre considerando que la percepción sobre la realidad social desde una vertiente oficial estaba absolutamente sesgada. Téngase también en cuenta que la media mensual de parados del segundo semestre en la provincia de Granada era extraoficialmente de 25.168;<sup>470</sup> considérese que el informe de la O.S.L.P. que sirve de base a este hecho se elaboró con un censo en el que faltaban los datos de muchas juntas que no enviaron a tiempo el preceptivo informe y, por último, téngase en cuenta que el paro oficial de los meses de junio a diciembre de 1947 a 1950 no llegó nunca a los 3.000 parados reconocidos. Ello nos da pie para insistir de nuevo en el engaño oficial existente que santificaban autoridades provinciales como el jefe provincial de la O.S.L.P., Jesús Antonio Salas.

En Cádiz, la tendencia del paro endémico continuaba siendo la tónica haciendo “materialmente insostenible la vida del trabajador eventual, pues solamente tenía ocupación durante determinados meses del año, sin que los jornales percibidos en estas épocas de trabajo, pudieran sostenerlo durante éstas y las de paro.”<sup>471</sup> Aparte de esto el puerto estaba paralizado. En Almería, existían viejos problemas comunes al resto de las provincias andaluzas y al resto de España (falta de agua para el riego, restricciones de fluido eléctrico, escasez de materias primas, falta de abonos, falta de materiales, etc.). Sin embargo, sobre todo ello se cernía otro peligro más grave dado que se habían paralizado las obras oficiales que venían realizándose y que paliaban (de forma mínima) el paro estacional. Como era característico durante el régimen franquista, la homologación simplista entre el desempleo y la delincuencia en provincias donde la situación era especialmente calamitosa constituía la norma. De hecho, la Vicesecretaría Provincial de Obras Sindicales por boca de su jefe M. Viciano entendía que el paro en Almería tenía un marcado carácter voluntario y que, por tanto, no era en sí un problema laboral sino “de orden policial y judicial, toda vez que implicaba la existencia de personas inadaptables que por su situación de vagos o de maleantes implicaban una serie de problemas por su peligrosidad social y su delincuencia habitual” ante lo cual la salida “lógica,” partiendo dichos planteamientos, conducía al mencionado Viciano a solicitar la creación de campamentos para trabajadores que se dedicasen a reeducar a “esta clase de parásitos sociales.”<sup>472</sup> El párrafo siguiente describe la noción que tenía el poder de este “peculiar” parado:

“...existen zonas españolas en las que el paro de muchos de sus trabajadores se debe exclusivamente a la indolencia de su carácter, que les hace abandonar su ocupación sólo por buscar la desocupación...Estos mismos complejos biológicos degeneran a veces en factores morales: la búsqueda de la ciudad, para ocultar en ella más fácilmente las taras morales de su vida o ampliar el ámbito inmoral de sus apetencias económicas.”<sup>473</sup>

Caso semejante era el de Huelva al que se unía el problema de la crisis pesquera y la consiguiente paralización de la flota de sardina y caballa durante un mes con su consiguiente repercusión en la industria conservera. En Jaén, provincia esencialmente olivarera, parecía no tener solución el paro. De hecho, pese al volumen de la migración, se afirmaba desde el S.N.E.C. que no podía pensarse “en el desplazamiento de estos productores a otras ramas de la producción, ya que el cultivo del olivo predominante en esta provincia, necesitaba toda la población agrícola en la época de recolección, dejando en paro, pasada la labor de primavera, casi al 70 % de este censo.”<sup>474</sup> Y es que el paro en esta provincia tenía un carácter estacional fruto de la existencia de dos cultivos fundamentales como el olivo y el cereal. El paro se producía precisamente entre la roturación y molturación de la aceituna (de diciembre a abril aproximadamente) y la recolección de los cereales (de julio a septiembre también de forma aproximada) y era ese el período que presentaba en la provincia el mayor número de trabajadores sin empleo. Pese a ello en la recogida de la cosecha del año 49-50 los resultados no fueron todo lo exitosos que debieran y en enero del 50 se ponía de manifiesto lo delicado de la situación dado que, pese a hallarse en su apogeo la recolección de la aceituna, ello no permitía el empleo de los obreros agrícolas existentes, lo que por otro lado no explicaba a donde iban a parar los emigrantes de otras provincias como Ciudad Real que acudían en estas fechas a Jaén para realizar la campaña de la aceituna.<sup>475</sup>

La tónica en Castilla la Vieja era también sumamente negativa. En Toledo, las quejas se centraban en las deficientes cosechas (sobre todo de cereales y aceitunas) y en la incidencia del granizo en el área de Ocaña. Secundariamente, las quejas se centraban en la escasa cosecha de uva. En Ávila, la agricultura dependía extraordinariamente de los cereales y las legumbres; por tanto, no había más actividad que en los meses de recolección y siembra, lo cual estaba forzando la emigración a otras regiones. Eso sin tener en cuenta que, como siempre, dicho sector de la población era sistemáticamente identificado con el de los vagos y los pícaros para los que habían de crearse “adecuadas unidades de trabajo.”<sup>476</sup> Si extendemos esta situación a la totalidad de la nación se comprende la situación excedentaria de mano de obra en el campo. Y es que, partiendo de una media de 20 personas necesarias por cada hectárea para las aproximadamente 20.340.000 hectáreas cultivadas en nuestro país, serían necesarios 4.068.000 trabajadores. Y si tenemos en cuenta que para este año la población agrícola registrada ascendía a 5.271.047 (un 48,8 % sobre el total) nos encontramos con los argumentos que se esgrimían

desde los órganos de control y poder franquistas para afirmar que 1.203.107 de agricultores españoles estaban “sobrecargando la economía agraria y eran causa de índices bajos en productividad y rendimiento.”<sup>477</sup>

En Burgos aumentaba el paro por las restricciones eléctricas y por la falta de materiales de construcción. En Palencia, la incidencia mayor del desempleo se notaba en la casi paralización del sector de la piel, fruto del sistema de intervención. En el caso de Zamora, la incidencia mayor se debía a las malas cosechas de cereales y uva.

En situación prácticamente idéntica se encontraba Castilla la Mancha. En Ciudad Real la campaña olivarera fue escasa. Así, ya en enero del 50 el número de parados en el campo era de 6.196, no siendo mayor el número de desempleados por la emigración que en ese momento del año se producía en dirección, sobre todo, a Jaén.<sup>478</sup> Y en Guadalajara se planteaba el problema de que no existía amianto para su fábrica de fibrocementos con la paralización consiguiente de la actividad como rasgo más significativo en relación a la poca variación del paro con respecto al 49.

En Aragón, no se manifestaba ninguna mejoría significativa con respecto al año 1949. En Zaragoza, las causas del desempleo se explicaban por la sequía y las malas cosechas. Por otra parte, el cierre de industrias y comercios había sido la tónica a lo largo de este año.<sup>479</sup> En dichos sectores, cuando no se había producido la reducción de plantillas, se habían establecido turnos o se estaban preparando los correspondientes expedientes de crisis para la supresión de parte del personal o para el cierre definitivo de la empresa.

En Santander, se acentuaba la mala situación en la pesca, al igual que en Huelva. En este caso por la falta de raba o cebo, lo cual incidía cada vez más en el estado lamentable de numerosas familias pescadoras. En Galicia, la crisis se agravaba en el sector pesquero y concretamente en el de salazones y conservas pontevedrés. En el caso de Lugo, los barcos más afectados eran los dedicados a la pesca del chicharro. En Coruña, el paro hacía mella en el sector conservero (por la falta de hojalata) y en el de la construcción.

En la región valenciana, la provincia de Valencia presentaba un número elevado de parados en la construcción, aunque por debajo del sector agrícola. Ello era fruto del retraimiento del capital para construir dada la escasez y carestía de materiales y lo antieconómico de la edificación de viviendas, sobre todo de alquiler. En Alicante, la situación era crítica en los sectores de la construcción, piel, químicas, textil y madera. A principios de año, la situación era muy grave en la zona del puerto (prácticamente paralizado) y en la industria del calzado. En Castellón, aun no siendo la situación tan grave como en Alicante o Valencia, se palpaba entre los dirigentes

sindicales cierto malestar fruto de los resultados de la política laboral llevada a cabo. Se llegaba a afirmar que los tiempos anteriores al 18 de julio habían sido mejores para los trabajadores en paro de esta provincia:

“El paro agrícola siempre ha existido en esta provincia, incluso en los años anteriores a nuestra Guerra de Liberación...su situación es mucho más difícil que antes de nuestra guerra, pues con la actual carestía de vida, no es posible hacer ahorros para subvenir a las necesidades más perentorias en aquellas épocas de inactividad.”<sup>480</sup>

Concretamente, en Castellón se notaba muy intensamente, aparte de la crisis en el sector de la construcción, la disminución de beneficios por la cosecha de la naranja en comparación con años anteriores.<sup>481</sup>

En Murcia el paro se centró a comienzos del año 1950 especialmente en pueblos como Lorca y Cartagena. Concretamente las cifras de paro en enero de 1950 ascendían de forma extraoficial a 12.824 (10.170 en la agricultura).

En las Islas Baleares ya se empezaban a manifestar muy subrepticamente conatos de conflictos descritos por las autoridades sindicales como muestras de “nerviosismo” fruto de la inadaptación de los salarios a los sueldos, de la parálisis en la construcción y en la industria del calzado. En las Islas Canarias, y concretamente en Santa Cruz de Tenerife, había ocasiones en que resultaba complicado cubrir las necesidades de mano de obra de algunas localidades pese a la situación de desempleo, dado que la falta de alojamiento, la corta duración de los contratos de trabajo y las difíciles circunstancias en que se desenvolvía el trabajador del campo, no permitían cubrir las necesidades del agricultor con lo que éste se negaba a salir de su localidad por serle antieconómico. En parte, ello era debido al hecho de que a partir de 1950 comenzó a sentirse el descenso de la población activa agraria; concretamente este sector decrece de 1950 a 1960 a un ritmo acumulado de -0,82 % al año.<sup>482</sup> En el caso de Las Palmas la difícil situación de los agricultores obligaba a éstos a acudir a las oficinas de colocación solicitando trabajo para obtener algunos jornales y así compensar el déficit originado por la baja producción de sus huertas. Globalmente el proceso de pauperización de la mano de obra canaria se explica teniendo en cuenta el mínimo crecimiento de la industria desde los años cuarenta y el paralelo avance del sector servicios con trasvase paulatino de población del sector agrario que, en línea con el desarrollo capitalista, iba a generar trasvases sustantivos de mano de obra desde las islas menores a aquellas más beneficiadas por esta dinámica de desarrollo.<sup>483</sup>

### 10.8. Los años bisagra del problema del paro.

El paro en 1951 iba a retomar una senda más relajada. Si nos referimos a las cifras oficiales encontramos su nivel máximo en el mes de febrero con 184.568 parados. Siguiendo a Clavera y otros aceptaremos que en lo económico la frontera del 51 es clara:<sup>484</sup>

“Más nítida va a ser la frontera de 1951, no sólo por su irrupción innovadora, al menos en su planteamiento programático, sino también por sus resultados. En el primer aspecto, el nuevo equipo gubernamental entrante el 18 de julio de 1951 suponía la aportación de un nuevo programa de política económica, que de alguna manera se presentaba como salida a un cúmulo de innegables dificultades apremiantes; esta alternativa se polarizaba especialmente en torno al recién creado ministerio de Comercio (Arburúa) y también en buena medida alcanzaba al de Hacienda (Gómez de Llano). Mediaba una circunstancia nueva: los Estados Unidos estaban elaborando una nueva postura y un plan estratégico para España, a la que hacían llegar perspectivas de ayuda exterior...adelantemos que nuestra tesis es la de que nos encontramos ante una innovación substancial, tanto por lo que hace al conjunto de objetivos y medios que forman aquél, como en cuanto a su grado de formalización e incluso a la innegable mutación del lenguaje que representa: esfuerzo hacia la estabilidad ortodoxa, voluntad de ortodoxia monetaria y financiera, restitución de fe en el mercado al liberalizar progresivamente en el interior, necesidad de expansionar los intercambios exteriores y perspectiva de integración internacional, siquiera sea a largo plazo, son todos ellos elementos en buena medida nuevos, que configuran toda una orientación distinta a la de toda la década anterior y claramente antecesora de la que se impondrá en 1957-59...”

Provincia	Parados oficiales por provincias el 30 de junio de 1951	Parados oficiales por provincias el 31 de diciembre de 1951
Alava	63	52
Albacete	1.395	1.121
Alicante	3.470	3.410
Almería	2.715	1.577
Ávila	80	2.036
Badajoz	1.755	2.980
Baleares	638	446
Barcelona	8.854	8.531



Burgos	101	158
Cáceres	3.362	4.591
Cádiz	8.265	9.444
Castellón	1.126	1.009
Ciudad Real	644	532
Córdoba	11.020	6.649
Coruña (La)	3.479	3.847
Cuenca	594	589
Gerona	1.010	945
Granada	1.850	1.894
Guadalajara	216	447
Guipúzcoa	244	252
Huelva	2.932	2.806
Huesca	305	305
Jaén	10.856	7.249
León	300	355
Lérida	243	564
Logroño	352	260
Lugo	677	272
Madrid	29.191	17.860
Málaga	8.375	6.511
Murcia	2.532	2.836
Navarra	118	99
Orense	85	79
Oviedo	698	682
Palencia	133	243
Palmas (Las)	2.397	2.250
Pontevedra	672	704
Salamanca	2.123	2.114
S. C. Tenerife	1.081	896
Santander	325	354
Segovia	223	380
Sevilla	10.370	8.572
Soria	8	6
Tarragona	1.100	441
Teruel	197	193

Toledo	178	618
Valencia	5.014	4.685
Valladolid	1.554	1.900
Vizcaya	111	177
Zamora	99	175
Zaragoza	678	547
Marruecos	1.127	1.300
TOTAL	134.935	116.943

*\*Cuadro nº 33: Paro oficial en 1951.*

Pese a ello la media de los siete primeros meses del año 1951 se sitúa en los 266.708 parados en un momento en que se imponía una nueva y positiva senda para la industrialización y el desarrollo económico de España. Frente a la anterior etapa en la que se intentó conseguir la autarquía económica, en este período se produjo una parcial liberalización de la economía paralelamente a una cierta superación de los estrangulamientos energéticos, a la obtención de ayuda exterior, a la importación de materias primas y bienes de equipo, etc.<sup>485</sup>

Eso pone de manifiesto que esa senda positiva tenía una lectura retrasada en el ámbito del empleo puesto que en un momento de peores perspectivas económicas como el primer trimestre de 1957 la media estimada mensual se situaba en 161.939 parados de igual manera que a lo largo del año 1956 en que dicha media se situó en 160.053 parados.

Extraoficialmente la cantidad de parados superaba los 300.000 holgadamente. Pese a ello otros enfoques más ligados a planteamientos económicos teóricos se permitían afirmar que en España no existía paro encubierto “y si una situación de baja productividad del trabajo,” que, en último término, era una de las condiciones de dicho paro.<sup>486</sup> O dicho de otra forma, para Fernández Arias, “un descenso de la demanda del volumen de producción normal, tiene por consecuencia una transferencia de mano de obra desde ocupaciones con alta productividad a ocupaciones con baja productividad...Por tanto, podemos definir la adopción de ocupaciones de tipo inferior como paro encubierto.”<sup>487</sup> Seguía siendo relevante la diferencia entre lo oficial y lo estimado, con todas las salvedades que pudiéramos hacer a este último dato. Y seguía siendo relevante el que la forma caritativo-benéfica de luchar contra dicha realidad fuera en muchas ocasiones la del donativo en metálico o en especie.<sup>488</sup>

Mes	Parados oficialmente reconocidos (A)	Parados no recogido en las estadísticas (B)	Paro total (A+B)	Diferencia en % entre el paro oficial y el estimado
enero	178.828	119.340	298.168	66,7
febrero	184.568	126.408	310.976	68,4
marzo	167.871	114.240	282.111	68,05
abril	160.272	111.592	271.864	69,6
mayo	154.220	86.705	240.925	56,2
junio	134.935	61.270	196.205	45,4
julio	126.797	53.360	180.157	42,08

*\*Cuadro n° 34. Paro estimado en el año 1951.<sup>489</sup>*

Este año sería positivo<sup>490</sup> para las industrias agrícolas y forestales en las que se acusó un descenso significativo en las cifras de paro poniendo remedio a la penuria de años anteriores debido a las mejores condiciones atmosféricas, pese a que persistía la escasez de abonos y maquinaria. Así, la recolección de aceitunas para almazara fue óptima<sup>491</sup> y en las provincias andaluzas,<sup>492</sup> en las que predominaba dicho cultivo, fue absorbido gran parte del censo de parados durante los meses de la recolección, cosa no factible en años anteriores. Y es que “frente al período que se extiende de 1947 a 1950, en que la producción agrícola decrece cada año, en el período de 1951-57 el nivel medio de la producción agrícola aumenta sensiblemente. Prácticamente sólo en 1953 se registra una mala cosecha, año en que el índice alcanza tan sólo el 97 % del nivel de 1946, que era el más alto desde 1940...aparece un cambio de situación a partir de 1951. La producción agrícola hasta entonces había permanecido estable alrededor del índice 90; pero, a partir de 1951, la producción promedia pasa a situarse en 105, sin que aparezcan claras tendencias de crecimiento sostenido.”<sup>493</sup>

Los informes enviados por el Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación nos permiten observar la evolución del paro a través de este año.<sup>494</sup> Entre los motivos que provocaron que durante el mes de enero de 1951 el paro fuera relativamente elevado<sup>495</sup> puede citarse el retraso en las operaciones preparatorias para la siembra de primavera y, por tanto, la poca intensidad de dichas tareas. Aparte de los sectores de la construcción, la alimentación, la banca y la Hostelería, el paro en los llamados servicios de higiene se incrementaba, si bien esto se consideraba de escasa importancia por el hecho de que se suponía que no afectaba a la economía al estar “compuesto en su mayoría por mujeres que sin preparación alguna deseaban colocarse en trabajos de limpieza...”<sup>496</sup>

Las provincias más afectadas eran Madrid, Cádiz, Sevilla y Málaga. Éstas tres últimas por el escaso número de horas trabajadas en la agricultura en función de la frecuencia de la lluvia. A éstas se podían añadir Badajoz, muy afectada por el temporal de lluvia (que impedía la sementera y la preparación del suelo para los cultivos de primavera) y por la escasez de la cosecha de la aceituna. Ante dicha situación las jefaturas provinciales del S.N.E.C. resultaban inoperantes y únicamente allí donde se realizaban obras hidráulicas de grandes dimensiones tenían alguna posibilidad de colocar a algún parado.

En febrero de 1951 el número de parados estimados llegaba a 310.976, la cifra más alta del año. El desbarajuste estadístico se incrementaba más si tenemos en cuenta que, como era habitual, las cifras oficiales de este mes no coinciden con las oficiales del Anuario Estadístico de España. En esta publicación se constata que la cifra de parados de este mes era de 184.568 mientras que en el informe del S.N.E.C. de febrero<sup>497</sup> se habla de 165.800. La diferencia se puede deber a una más rigurosa consideración del paro *a posteriori* del informe que mencionamos. Como en el mes anterior, las provincias más afectadas eran Madrid, Sevilla, Málaga, Cádiz y Badajoz. En la primera y segunda se dejaba sentir la falta de materias primas y créditos en la construcción. La provincia de Málaga estaba siendo afectada por la terminación de las tareas de escarda y la capital por el fin de las tareas de manipulación y exportación de frutos secos y vinos. Sin embargo, en Badajoz el descenso se podía cifrar en torno al 50 % debido a la escarda, lo cual no impedía esperar que se produjera un aumento paulatino tras aquélla hasta el mes de mayo en que comenzarían las faenas de recolección de los cereales.

En marzo la cifra de paro estimado se situaba en 282.111; la oficial en 167.871. Con todo, el descenso producido se debía en la agricultura a las lluvias y a algunas operaciones agrícolas hasta el punto de que en el informe del mes de marzo del S.N.E.C. se afirma lo siguiente:

“...habiendo mejorado mucho con las oportunas precipitaciones de los últimos días del presente mes, ya que en Extremadura, Andalucía y Castilla la Nueva se resentía por la falta de humedad, especialmente las tierras muy fuertes, y las de poco fondo. Se encuentran algo atrasados, por el contrario los sembrados de Castilla la Vieja y León.”<sup>498</sup>

En cuanto a la provincia Madrid, seguía viéndose muy afectada en el sector de la construcción. En Sevilla se esperaba que el paro estacional llegara a su fin en el mes de mayo debido a la recolección del trigo y la cebada, la cual coincidía en el tiempo por ser la clase sembrada del primer cereal de la llamada florenxia, de ciclo muy corto, con lo que se adelantaba su recogida absorbiendo la recolección de ambas especies una gran mayoría del censo agrícola, aunque en distintas fechas, según lo avanzado que se encontrase el ciclo en cada localidad.<sup>499</sup> Hay que

decir que este sector sería siempre uno de los más problemáticos por lo que se deduce a partir de las protestas en torno a los cupos excesivos que reclamaba el Servicio Nacional del Trigo. Ello suponía, de hecho, entregas incompletas de los cupos marcados y además el “enrarecimiento” de la situación político-social.<sup>500</sup> A estos problemas se añadía la lentitud con que, en ocasiones, dicho Servicio recogía el cupo de los labradores, entre otros motivos, por carecer de locales y personal para realizar dicha función “dándose casos recientes de haber tenido que estar cuatro días un carro haciendo cola en un almacén del Servicio del Trigo, para poder hacer la entrega; ésto ha ocurrido en Miajadas y en general ocurre en toda la provincia (de Cáceres)...” A ello podemos agregar las decisiones arbitrarias de los servicios locales que en septiembre de 1951 recibían las quejas de los labradores por cuanto se consideraba la mitad de la entrega potencial como cupo forzoso y la otra mitad como excedente, sin tener en cuenta los cupos fijados “por lo que los labradores se consideraban lesionados en sus derechos al hacerseles entregar como cupos forzosos mayor cantidad que la que se les fijó inicialmente por la Jefatura Provincial distribuidora de cupos...”<sup>501</sup> Y por último, habría que tener en cuenta problemas como el de la Central Nacional Sindicalista de Guadalajara que ponía de manifiesto el enriquecimiento sistemático y desproporcionado de los grandes propietarios trigueros en detrimento de los pequeños y medianos que podían tener más problemas para llegar al cupo y, por tanto, para beneficiarse de las cantidades excedentarias:

“Se quejan los pequeños agricultores y con razón, de que mientras los grandes propietarios obtienen beneficios muy elevados al disponer de trigo procedente de cupos excedentes, los medianos y pequeños agricultores no solamente no obtienen estos beneficios sino que en la mayoría de los casos se ven imposibilitados hasta para entregar las cantidades que le han sido asignadas como cupo forzoso, vendiendo por tanto la totalidad de sus cosechas a precios que no resultan remuneradores.”<sup>502</sup>

En el mes de abril la situación se reproduce y observamos que oficialmente el Anuario Estadístico señala la existencia de 160.272 parados, el informe del S.N.C.E. de 232.043 y las cifras estimadas de este mismo informe 271.864.<sup>503</sup> En este mes las perspectivas eran positivas para los viñedos castellanos, para las leguminosas y los cereales en general. Incluso en el sector industrial el paro descendía ligeramente. Y es que si en los años cuarenta el crecimiento industrial fue lento, a partir de 1950 “cambió la coyuntura, en gran parte debido a la incidencia favorable de la ayuda americana y a la obtención de facilidades crediticias de algunos países europeos, que fueron utilizadas para la compra de bienes de equipo.” Y así “desde 1951 a 1959, el ritmo de crecimiento de la producción industrial en España fue mucho más elevado: más del doble que el de la época de la Dictadura de Primo de Rivera”<sup>504</sup> pese a lo cual algunos sectores como el siderúrgico atravesaban ciertas dificultades con una demanda superior a la oferta de mineral y con insuficiencias de material en general por la “deficiente distribución de cupos” y

por el hecho de que los materiales demandados por esta industria se “exportaban sin antes cubrir las necesidades industriales españolas.”<sup>505</sup> Sobre este período, señala París Eguilaz, que la política económica de los años cincuenta supuso la liquidación de la economía de la posguerra y la iniciación de una economía de mercado, aunque manteniendo parte de los controles existentes sobre la economía nacional.<sup>506</sup>

Las regiones relativamente más beneficiadas por el descenso eran las del Sur (Andalucía, Extremadura y zona levantina esencialmente) A nivel provincial, Madrid seguía en la misma situación y en Sevilla, pese a las buenas perspectivas del mes anterior, se había impuesto la realidad y pese a la coincidencia de la siega del trigo y de la cebada no había sido posible absorber la totalidad del censo de trabajadores agrarios. Y ello porque “la maquinaria agrícola cada día se empleaba con más intensidad”<sup>507</sup> e incluso se extendía el alquiler de la misma con lo que la única esperanza era la campaña de la aceituna siempre y cuando esta fuera abundante. Pese a la incidencia del paro en Málaga la situación empezaba a normalizarse ligeramente en el comercio y en la industria al finalizar las restricciones eléctricas. En Badajoz las áreas más afectadas estaban siendo las de Fuente de Cantos, Villafranca de los Barros, Fuente del Maestre y Hornachos así como “los latifundios existentes en Jerez de los Caballeros que estaban extendidos por su extenso término municipal y que en el mismo en gran parte, era arbolado - encinas y alcornoques...”<sup>508</sup>

En julio los 126.797 parados oficiales se transformaron en 150.313 y 180.157 estimados en el informe de este mes del S.N.E.C.<sup>509</sup> La bajada era debida a la gran intensidad con que se estaban realizando las faenas agrícolas. Salvo en el norte, en estos momentos se podía dar por terminada la siega de cereales y leguminosas. Sin embargo, el descenso en el número de parados era motivado porque las operaciones de trilla marchaban con retraso a causa de la abundancia de mies y de las interrupciones que habían originado las tormentas.<sup>510</sup> Por otro lado, a la altura de julio ya se podía confirmar que la cosecha de cereales y leguminosas iba a ser bastante abundante. La situación se veía favorecida por la nueva dinámica del sector industrial y concretamente por el tirón del textil que empezaba a trabajar a pleno rendimiento debido a las importaciones de materia prima y a la disminución de las restricciones de fluido eléctrico. Pese a ello, a finales de año zonas tradicionalmente textiles de Cataluña seguían viéndose gravemente afectadas por los paros totales o parciales de algunas fábricas ante la falta de algodón u otras materias primas.<sup>511</sup>

No se alteraba la situación en Madrid. En el caso de Sevilla, se observaba el paulatino crecimiento de los parados varones por el final de las tareas agrícolas del verano. En la industria la situación seguía siendo grave:

“...existe una inactividad muy grande por falta de pedidos, fenómeno producido hace tres años en la construcción, manteniéndose al personal y existiendo industrias como las textiles que han concedido a su personal todo el mes de agosto de vacaciones, y en la actualidad abonan medio jornal ya que no venden absolutamente nada de sus manufacturas.”<sup>512</sup>

En Málaga, una vez recogida la cosecha de cereal, sólo existía la posibilidad de realizar las labores de la recolección de higos, almendras y viñas, lo cual restringía sumamente las posibilidades de empleo.

En agosto, a los 128.949 parados oficiales del Anuario Estadístico se contraponían los 160.192 y 190.835 parados oficiales y estimados respectivamente del informe del S.N.C.E.<sup>513</sup> Como todos los años, el descenso en la mayoría de las provincias se debía al inicio de la siembra de los cereales y de las leguminosas de otoño. De igual manera en casi todas las provincias productoras de uva se había generalizado la vendimia con rendimientos positivos; se iniciaba la recolección de la aceituna verde y se estaba terminando con la recolección de la remolacha en las zonas tempranas e iniciando en las comarcas templadas. En líneas generales, el año 1951 estaba siendo un año de excelentes cosechas lo cual, unido a la mayor actividad industrial, fruto de la importación de materias primas, daba esperanzas de que la economía tomase una dirección más acertada que la de la década anterior.

Pese a ello, entre las provincias más afectadas seguían estando Madrid y Sevilla. En esta última, la coyuntura de buenas cosechas había hecho que extraoficialmente no fuera tan fácil encontrar mano de obra como en años anteriores a lo largo de estos meses veraniegos. Y ello pese a que en algunos lugares se abonaban jornales de hasta 40 pts.<sup>514</sup> Por el contrario, en Málaga las circunstancias climatológicas adversas no permitían llevar a cabo exitosamente las faenas agrícolas. Sin embargo, en la industria y el comercio se experimentaba una leve mejoría. Las químicas y la construcción eran los sectores más afectados hasta el punto de que en estas últimas no se realizaban más obras que las oficiales por la penuria de materias primas. En Badajoz aumentaba el paro al terminar las tareas de la recolección de cereales y leguminosas y se elevaba el mismo en la construcción y la alimentación. En Cáceres los problemas de la agricultura se centraban en los yunteros. La mayor parte de ellos habían sido lanzados de las fincas que cultivaban desde el año 1940 en un número superior a los 20.000 fruto de la legislación sobre arrendamientos rústicos que no protegía a esta clase social como reconocía la Central Nacional Sindicalista Cacereña. Lo que se perseguía era el “aniquilamiento”<sup>515</sup> de los yunteros. Partiendo de esta situación los desahucios se sucedían constantemente, lo cual creaba un ambiente de oposición larvada al Régimen y a su política. Y es que “muchas familias que vivían independientemente cultivando en régimen aparecería parcelas de terreno se veían en la

necesidad de desprenderse de sus yuntas al no tener donde emplearlas convirtiéndose en braceros y siendo muchos de ellos excombatientes de nuestra Cruzada, lo que hace que sea aun más grave este problema.<sup>516</sup>

En septiembre, nos encontramos con que el número de parados oficiales ascendía a 126.306; por otro lado, el Servicio Nacional nos ofrecía la cifra de 159.090 oficiales y 188.890 extraoficiales en línea con el parón invernal en la agricultura. Pese a ello, no se entendía que este paro estacional fuese grave salvo "en muy contadas provincias."<sup>517</sup> En Andalucía<sup>518</sup> se preveía que el paro habría de bajar al comenzar el invierno por la recogida de la aceituna. Y ello pese a los problemas por los que atravesaba un sector tan importante como el olivarero. La Central Nacional Sindicalista de Córdoba, en una región olivarera por excelencia, se quejaba de que los suministros para llantas con destino a carros agrícolas durante este año 1951 habían sido casi nulos resultando "una cantidad irrisoria"<sup>519</sup> y siendo ello motivo de que el transporte de los productos agrícolas se llevara a cabo con notables dificultades en un año de cosecha abundante. A ello se añadía, en el caso de Córdoba, la competencia desleal (con la consiguiente incidencia laboral) que le podía hacer una provincia como Sevilla por cuanto esta gozaba, de hecho, de cupos de sosa cáustica con destino a aderezos de aceituna mientras que otras provincias como Córdoba tenían que acudir a la sosa libre pagándola en el mercado a altos precios. A ello se añadía la situación del sector naranjero valenciano que, afectado en diciembre por un fuerte temporal, veía como parte importante de la cosecha de naranja (quizás un 40%) se perdía.<sup>520</sup>

Aparte de la incidencia en la agricultura, el mayor número de parados seguía centrándose en la construcción en función de los factores ya mencionados. A ello se añadía el retraso sistemático en los préstamos solicitados con cargo a la ley de 19 de noviembre de 1948.<sup>521</sup> Otra de las áreas profundamente afectadas era la marinera. Concretamente, en la provincia de Pontevedra a finales del 1951 eran abundantes los parados que llevaban "oficialmente" en dicha situación más de cinco años con las graves consecuencias que ello traía no sólo para la marinería sino también para las industrias derivadas de la pesca y que como casi siempre (se afirmaba) tenía como motivo el supuesto carácter "humilde y resignado con su suerte"<sup>522</sup> de los hombres del mar.

Provincia	Parados oficialmente reconocidos en 30 de junio de 1952	Parados oficialmente en 31 de diciembre de 1952	Parados estimados en la agricultura el 31 de diciembre de 1952 (A)	Paro oficial en la industria el 31 de diciembre de 1952 (B)	Paro estimado total el 31 de diciembre de 1952 (A+B)
Álava	35	54	-	54	54



Albacete	1.188	878	148	730	878
Alicante	3.403	3.574	461	3.113	3.574
Almería	2.350	2.744	258	2.486	2.744
Ávila	29	2.952	2.702	250	2.952
Badajoz	1.532	4.205	7.633	657	8.290
Baleares	284	298	21	277	298
Barcelona	7.531	7.914	109	7.805	7.914
Burgos	98	129	-	129	129
Cáceres	2.056	4.200	3.165	1.035	4.200
Cádiz	9.215	9.711	8.320	5.946	14.266
Castellón	861	1.381	663	718	1.381
Ciudad Real	395	488	576	441	1.017
Córdoba	4.819	6.243	4.649	1.594	6.243
Coruña (La)	2.845	2.990	6	2.984	2.990
Cuenca	342	292	300	164	464
Gerona	901	752	73	679	752
Granada	1.317	2.238	4.708	1.074	5.782
Guadalajara	85	453	3.563	292	3.855
Guipúzcoa	182	100	-	100	100
Huelva	1.759	1.826	933	1.430	2.366
Huesca	284	306	17	289	306
Jaén	7.814	7.633	6.216	1.417	7.633
León	249	285	1	284	285
Lérida	386	596	-	596	596
Logroño	225	260	303	249	552
Lugo	399	333	-	333	333
Madrid	16.655	15.200	528	14.672	15.200
Málaga	6.346	5.497	5.263	4.630	9.893
Murcia	2.498	2.824	3.366	1.463	4.830
Navarra	49	131	5	126	131
Orense	60	78	1	77	78
Oviedo	747	736	1	735	736
Palencia	80	93	72	66	138
Palmas (Las)	2.571	1.910	755	1.155	1.910
Pontevedra	276	402	-	402	402
Salamanca	1.799	1.890	109	1.781	1.890

S. C. Tenerife	718	813	780	689	1.469
Santander	454	462	1	461	462
Segovia	91	187	72	115	187
Sevilla	7.125	4.932	2.893	3.407	6.300
Soria	2	51	-	51	51
Tarragona	236	281	7	274	281
Teruel	75	139	12	127	139
Toledo	244	424	2.517	244	2.761
Valencia	3.362	3.858	518	3.581	4.099
Valladolid	738	1.199	617	582	1.199
Vizcaya	116	184	-	184	184
Zamora	20	108	70	38	1.08
Zaragoza	326	516	2.252	487	2.739
Marruecos	1.218	1.157	19	1.138	1.157
TOTAL	96.390	105.907	64.684	71.611	136.295

\*Cuadro n° 35. Situación del paro en el año 1952.<sup>523</sup>

Mes	Parados oficialmente reconocidos (A)	Paro total estimado (A+B)	Diferencia en % entre el paro oficial y el estimado
enero	116.467		
febrero	120.551		
marzo <sup>524</sup>	117.557	186.974	59
abril	112.556	180.593	60
mayo	106.108	164.512	55
junio	96.390	140.948	46,2
julio	92.077	102.200	10,9
agosto	97.167	112.900	16,1
septiem <sup>525</sup>	100.229	147.700	47,3
octubre	107.391	158.650	47,7
noviembre	106.128	160.939	51,6
diciemb <sup>526</sup>	105.907	154.198	45,5

\*Cuadro n° 36. Paro estimado y oficial en cada uno de los meses de 1952.

A nivel provincial, durante 1952 se puede observar que la tónica general se perpetuaba siguiendo las líneas marcadas a lo largo del año 1951. El dato más sobresaliente es el hecho de que en los meses de junio, julio y agosto encontramos un número de parados mensuales inferior a 100.000. Dicha cifra no se daba desde el año 1948. Pese a ello, de igual manera que el paro oficial descendía, se incrementaba la diferencia porcentual entre las cifras oficiales y las estimadas hasta el punto de que el paro estimado llega a ser un 60 % superior al oficial.<sup>527</sup>

El descenso oficial y estimado en las cifras de paro se vio influido por los rendimientos agrícolas de aquel año. La producción de cereales se había elevado. Lo mismo ocurrió con el cultivo de la remolacha hasta el punto de que algunas fábricas de molturación pusieron límites a la recogida de los tubérculos con la consiguiente pérdida de jornales. En este sentido era grande la frustración de los remolacheros y de los trabajadores de dicho sector. Un ejemplo de ello se daba en la provincia de Córdoba en la que la azucarera San Rafael monopolizaba la transformación de la materia prima con la consiguiente falta de alternativa para los remolacheros de la zona como se expone en el siguiente párrafo:

“Existe malestar entre los agricultores remolacheros...porque ponen restricciones en la Azucarera “San Rafael” que es la única fábrica transformadora de remolacha para admitir más cantidades... La superficie preparada para sembrar es mayor que la semilla facilitada por la azúcarera y muchos agricultores han adquirido semilla por otros medios....por otra parte es notorio que la misma empresa obtiene hoy un margen de beneficios muchos mayor en las actuaciones comerciales correspondientes a las importaciones de azúcar extranjera en que interviene, que en la fabricación normal, por lo que también es razonable pensar que experimente interés en no acrecentar la producción nacional, con lo que se reducirían las posibilidades de importación.”<sup>528</sup>

La realidad era que este sector del azúcar en líneas generales atravesaba un momento de crisis<sup>529</sup> que iba a originar pérdidas de empleo a todos los niveles a partir del año 1952. Y es que a partir del 5 de agosto de 1952 se decretó la libertad para dicho artículo. Ello afectó gravemente a la industria del estuchado del azúcar dado que la Comisaría de Abastecimientos había ordenado a éstas empresas el almacenamiento de unos tres millones de kilogramos de dicho producto correspondientes a los años 1949, 1950 y 1951 exigiendo, a partir de agosto del 52, un tanto por ciento del precio de venta y situando éste en unas 15,85 pts/kg., precio al que resultaba prácticamente imposible venderla cuando en el mercado el precio rondaba las 12,90. La consecuencia primera de todo ello era el despido de empleados, sobre todo mujeres. De igual manera, en el caso de la remolacha se estaba produciendo la limitación de la superficie de siembra lo cual significaba en el futuro mayor incidencia del paro puesto que casi ninguno de las plantas cultivables hacían uso intensivo de mano de obra en la forma en que lo hacía dicho

cultivo. Las expectativas venideras se resumían en el siguiente párrafo del informe anual del Servicio de Encuadramiento y Colocación:

“No obstante no es de esperar que el paro sea mayor que en el año 1952, ya que gran cantidad de terrenos de secano han sido convertidos en regadío, así como al disponerse de superior cantidad de tractores, será menor la cantidad de jornadas de trabajo a realizar, pero hay que tener en cuenta que como estas máquinas permiten levantar con facilidad tierras hasta los 70 centímetros de profundidad, y que pueden considerarse vírgenes ya que nunca fueron cultivadas, será mayor el número de hectáreas roturadas y puestas en cultivo, motivando todo ello la absorción de brazos que pudieran quedar en paro a la terminación de otros cultivos.”<sup>530</sup>

La recolección de la aceituna no fue tan buena como la del año 1951 ya que en algunas zonas de Andalucía los olivos se vieron atacados por la epidemia llamada de la “mosca” “que aceleró su recolección puesto que gran parte del fruto se encontraba en el suelo, perdiéndose jornadas de trabajo al mismo tiempo que el grado de acidez necesario en la aceituna.”<sup>531</sup>

En el mes de enero, las precipitaciones permitieron el desarrollo adecuado de cereales y leguminosas y la ejecución de las labores preparatorias de las siembras de primavera. El mes de marzo fue favorable por lo suave de las temperaturas y lo abundantemente de las lluvias, pese a lo cual se agravó la situación de los obreros de la recolección de la remolacha azucarera. En abril las perspectivas fueron positivas también para el litoral levantino puesto que se daba por finalizada la siembra de primavera y comenzaba la del arroz. En mayo la cosecha de cereales se presentaba de forma óptima llevándose a cabo la granazón de manera satisfactoria. De esta forma la cosecha de cereales en junio y julio ofreció buenos rendimientos persistiendo el problema de la remolacha, sobre todo, en Sevilla; ello generaba un problema, no sólo para los obreros, sino para la economía nacional global en el sentido de que el exceso de producción hacía que parte del fruto se pudriera sin que pudiera transportarse a fábricas de otras zonas sin la autorización respectiva. Para agosto, con buenos resultados, se daba por terminada la siega de cereales y leguminosas de otoño y se recogía la uva de mesa.<sup>532</sup> El mes de septiembre ya suponía una vuelta a la cifras globales de paro por encima de los 100.000 aunque continuaba la recolección de la remolacha y comenzaba la de la aceituna de verdeo. En octubre lo más destacado era la continuación de la recolección de aceituna y las dificultades en algunas provincias para la siembra. En este mes el paro agrícola ascendió a 62.206 (32.624 considerando el oficialmente registrado).

La situación era especialmente grave en Badajoz, Cádiz, Córdoba, Jaén y Málaga. En Córdoba, la marcha de la economía era también negativa en el sector industrial y así una localidad

excepcionalmente industrial como Peñarroya veía como la Sociedad Minero Metalúrgica solicitaba de forma reiterada durante este año a la Delegación Provincial de Trabajo el traslado de un número considerable de obreros a distintos departamentos y el despido de casi un centenar de trabajadores. Esa perspectiva era negativa no sólo para el área de Peñarroya sino para otras industrias cordobesas como la “Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica” y la “Sociedad Española de Construcciones Electromecánicas” que empleaban material procedente de Peñarroya. El motivo teórico de la crisis era la falta de transporte ferroviario suficiente que en esos momentos, aunque sin éxito total, se empleaba en gran parte en el transporte de la remolacha azucarera.<sup>533</sup>

El caso de Badajoz muestra la falta de voluntad política para ir más allá de las meras soluciones técnicas en la resolución de los problemas sociales de provincias excepcionalmente deprimidas como esta. La consecuencia era la transmisión del malestar entre los labradores de la provincia por parte de los Sindicatos, concretamente los de Jerez de los Caballeros, por la paralización de acuerdos ya tomados en consejo de ministros sobre la expropiación de siete fincas para su parcelación posterior entre los agricultores de la zona.<sup>534</sup> Y es que de forma paralela, pese a la altísima tasa de paro en esta provincia, otro problema social trascendental estaba siendo el desahucio y el lanzamiento de las fincas “de gran número de yunteros.”<sup>535</sup> La única posibilidad que se planteaba era la de recurrir al artículo 7 de la Ley de 28 de junio de 1940 para transformar la aparcería en arriendo en el caso de que los propietarios se negaran a continuar con el régimen de aparcería. Esta solución parcial sólo podía resolver en parte el problema, salvo que se modificase de forma significativa la ley y ello sirviera “para dar ocupación a las 20.000 familias que contando sólo con la yunta y los aperos de labranza se estaban viendo amenazadas con convertirse en simples braceros, engrosando de este modo la enorme masa de obreros en paro que existen en la provincia...”<sup>536</sup>

El paro industrial a nivel nacional ascendía a 74.767.<sup>537</sup> En este momento el S.N.E.C. consideraba que el hecho de que no bajara de forma suficientemente significativa el paro obedecía a la avariciosa política de precios de algunas empresas, a las excesivas cargas sociales y a la deficiente política crediticia. Sin embargo, se era consciente de los efectos positivos que podía tener el que la industria se fuera viendo progresivamente libre de “las ataduras intervencionistas.”<sup>538</sup>

“En otros sectores industriales existen ciertas labores y productos manufacturados que se resisten a la baja de precios, correspondiendo a estas actividades un mayor número de parados ante la escasa demanda en el mercado. Ello es motivo de una superproducción que no teniendo salida ocasiona un acumulamiento de artículos que las empresas no podrán sostener, llegando al agotamiento de sus reservas y dando lugar

al cierre de industrias y suspensiones en los trabajos. Si a esto añadimos la elevación de precios, que en algunos artículos han llegado a adquirir proporciones desmesuradas, y al mismo tiempo tenemos en cuenta que las cargas sociales representan un gravamen muy elevado y que los créditos bancarios se redujeron extraordinariamente, se comprenderá fácilmente la situación porque atraviesan determinadas industrias.”<sup>539</sup>

En noviembre<sup>540</sup> se intensificaban las labores de siembra y la recolección de la aceituna se daba por terminada casi totalmente en Andalucía donde su volumen era inferior al esperado. El paro agrícola estimado ascendía a 71.489 (el oficial a 34.575) y el industrial a 71.571. Como se ha mencionado se incrementaban las labores de sementera y de recolección de la aceituna aunque en algunas localidades a la altura de noviembre ya se había terminado su recogida por lo reducido de la cosecha, encontrándose parte en el suelo. Así pues, en muchos casos no fue necesario ni siquiera varear el árbol con la consiguiente incidencia en el número de jornales. Es sorprendente, salvo que se pretendiera minimizar la situación del desempleo en España o se utilizara con una finalidad puramente propagandística, una de las afirmaciones que en el informe de noviembre de 1952 realiza José Redondo Gómez (Jefe Nacional del S.N.E.C. y de la O.S.L.P.) en el sentido de minimizar la influencia del mismo, cuando se era consciente de que el desempleo en el ámbito agrario español era excepcionalmente más elevado del que indicaban las muy imperfectas estadísticas oficiales:

“Nuestras estadísticas registran un paro de importancia relativa, pero podemos afirmar que no corresponde al real, y únicamente podemos considerar como verdadero uno menor, ya que gran parte de los que figuran inscritos en paro se dedican a las faenas propias en pequeños huertos, etc.”<sup>541</sup>

En este mes las provincias más afectadas por el paro fueron Murcia (9.304), Jaén (8.704), Badajoz (7.321), Cádiz (6.987) y Málaga (6.298). Incluso se puede decir que en las provincias en que el paro descendía lo hacía hasta un cierto punto de forma “anormal” por cuanto ello se producía esencialmente en las provincias olivereras en las que la recolección se adelantaba por la epidemia de la mosca, como era el caso de Badajoz o Córdoba. Persistía la idea, sobre todo en lo que se refiere a estas provincias más meridionales, de que el paro estacional no tenía remedio alguno y que era imposible aminorarlo. En general, como todos los años, estos primeros meses invernales eran también negativos tanto para la industria como para el comercio sobre todo por la ausencia de importaciones vitales y también en estos años por la elevación de los precios de los materiales esenciales para esos sectores. Sobre ello operaba la debilidad de la demanda. Concretamente “la escasez de numerario, en general, obligaba al consumidor a no poder adquirir aquello que le era más necesario, limitando sus compras al mínimo y para ello cuando le era absolutamente indispensable, y como consecuencia lógica gran parte de las

industrias carecían de reservas económicas y se veían privadas de producir para almacenar, tanto más cuanto que las facilidades bancarias les imposibilitaban hacerlo, sin saber cuando, ni en que condiciones podrían dar salida a sus productos.<sup>7542</sup>

En diciembre la recogida de la aceituna para molino había terminado en casi toda España mucho antes de lo normal por la mencionada epidemia de la mosca. Así nos situamos en este mes en el que el paro no contabilizado oficialmente coincidía con el agrícola, siendo la cifra de desocupados superior a 154.000. De nuevo no podemos evitar la comparación. Si cotejamos la situación de las seis provincias con más paro estimado sólo en la agricultura en diciembre de 1952 y las cifras oficiales de paro en el mismo mes para todos los sectores encontraremos los siguientes datos que aparecen en el cuadro nº 37.

Provincia	Paro estimado en la agricultura	Paro oficial de todos los sectores
Cádiz	8.320	9.711
Badajoz	7.633	4.205
Jaén	6.216	7.633
Málaga	5.263	5.497
Granada	4.708	2.238
Córdoba	4.649	6.243

*\*Cuadro nº 37. Paro agrícola y total de las seis provincias con mayor desocupación en diciembre de 1952.*

La observación de estas cifras pone de manifiesto, en línea con lo hasta ahora expuesto, la gran diferencia entre lo oficial y lo real en el desempleo, siendo esta diferencia más acusada en aquellas provincias de mayor peso agrícola latifundista y concretamente en Andalucía y Extremadura. Podemos encontrar casos, como el expuesto de Badajoz o Granada, en que las cifras de paro agrícola estimado son aproximadamente el doble de las oficiales para el total de los sectores productivos con lo que la irrealidad de los datos estadísticos de nuevo queda en evidencia. Sobre esta cuestión hay que tener en cuenta que en el período que va de 1951 a 1957 la situación de las grandes fincas permanecería en situación idéntica al pasado dado que la acción potencial del Estado sobre las mismas las excluía de cualquier actuación debido a que entre los requisitos necesarios para que una finca fuera declarada mejorable se encontraba el hecho de que constituyera un terreno inculto.<sup>7543</sup>

Globalmente las mayores diferencias entre lo oficial y lo real se mantenían en el ámbito agrícola. En los meses de noviembre y diciembre el paro campesino registrado oficialmente era de 34.557 y 34.296 respectivamente. Las cifras estimadas del no registrado ascendían a 71.489

en noviembre y 64.684 en diciembre, lo cual quiere decir que para dichos meses el incremento del paro estimado sobre el real suponía un 89,5 % y un 88,6 % respectivamente. De los efectos del campo en las estadísticas del paro da buena cuenta la siguiente valoración:

*"...hemos de hacer constar que la cifra total de parados queda en realidad desdibujada por dos causas: una que contribuiría a aumentarla, y es el núcleo de población rural diseminado por el territorio nacional, sin control por la característica especial de contratación en el campo; y otra que tanta relación guarda con la producción y que la constituye el factor edad de los inscritos, que si bien no la disminuye contribuiría a delimitar sus efectos económicos..."*<sup>544</sup>

Por sexos tampoco se registraba adecuadamente el desempleo entre las mujeres. Los grupos más afectados eran los de alimentación (3.478 paradas), servicios de higiene (2.762), banca, seguros y oficinas (1.963), otras industrias (1.403), textil (1.201) y confección, vestido y tocado (1.003).

En el ámbito de la construcción a la altura de 1952 la cartilla profesional se había extendido a 464.812 trabajadores. Sin embargo, una disposición del ministerio de Trabajo de fecha 27 de julio<sup>545</sup> establecía la exclusión de la obligatoriedad de la posesión de dicha cartilla (y por tanto la obligación de inscribirse indirectamente en el censo de la construcción) por parte de los peones ordinarios que en 1951 ascendían a 236.280. Ello permite transferir la inseguridad de los datos oficiales sobre paro al único sector dentro de la industria que era controlado de forma más acertada por las autoridades. En esa línea de parálisis se encontraba la sindicación de trabajadores. Si en el año 1951 los sindicatos eran 4.173.324, en 1952 la cifra ascendía sólo a 4.200.000, lo cual constituía políticamente, más que un aumento, un marcado retroceso.

Pese a ello la industria y el comercio también se vieron beneficiados al recoger las medias dictadas por los ministerios de Industria y Comercio al ampliar los cupos de importación y exportación pese al resentimiento de las iniciativas que se veían parcialmente coartadas por la limitación en el volumen del capital disponible. No obstante, el paro en la industria se estimaba oficialmente en el mes de diciembre en 71.611. Y es que, aparte de otras consideraciones, como denunciaban los informes de algunas C.N.S., las industrias, en líneas generales, no percibían los cupos de materias primas asignadas o no los percibían con la puntualidad requerida. Sobre todo, ésto era especialmente válido para las pequeñas industrias por la mayor relación con los órganos de poder encargados del reparto de dichos cupos:

*"Hay que tener en cuenta que este problema, es problema de las industrias pequeñas, ya que las dos fábricas grandes de Vitoria, "Ajuria" y "Aranzábal", una de las cuales ha*



estado rigiendo la presidencia de la Sección Económica hasta el momento actual, al recibir los cupos directamente de Madrid, carecen de este problema, y no se han preocupado de las necesidades de la pequeña industria...<sup>546</sup>

A nivel provincial y pese a la mejora global, la situación de las provincias no se había alterado de forma radical. En Lérida las obras hidráulicas seguían absorbiendo gran parte del paro de la provincia e incluso se demandaba mano de obra. En Barcelona el comercio se resentía, pues el comerciante se resistía a adquirir productos en cantidad dado que el consumidor vivía con la expectativa de una bajada de los precios o con la angustia de no tener medios suficientes para adquirir lo más básico.<sup>547</sup>

En Madrid desaparecían los problemas de desempleo originados por la supresión de la electricidad y la imposición de jornadas de horario especial. Pese a ello, como en el caso de Barcelona, uno de los problemas que se acrecentaba de forma paulatina era la afluencia de trabajadores de otras provincias.

Andalucía seguía encerrando a la mayoría de los parados españoles. En Sevilla la recolección de la aceituna de molino se produjo de forma muy adelantada lo cual incidió en el aumento de la cifras de desempleo. Era evidente que uno de los problemas agrícolas esenciales era la ausencia de terrenos de regadío dado que los de secano necesitaban un volumen de mano de obra normalmente seis veces inferior al de regadío. En Cádiz, se ponía de manifiesto la idéntica falta de regadíos, el peso del monocultivo, los muy bajos rendimientos de la tierra, la falta de formación profesional y la concentración excesiva de la propiedad. Y en Jaén la cosecha de aceituna no había sido tan abundante como se esperaba. A estos factores señalados, comunes a toda Andalucía, en Almería se añadía en el año 1952 la muy pronunciada ausencia de lluvias.

En Castilla León, y más concretamente en Salamanca, se estaba poniendo de manifiesto que en la época de recolección los salarios se estaban disparando por encima de lo que las reglamentaciones laborales imponían. Se estaba llegando a pagar hasta 3.600 pts., lo cual estaba originando el desplazamiento de los trabajadores de las provincias limítrofes.<sup>548</sup> El otro dato sobresaliente y distintivo de esta año era el aportado por Ciudad Real en el sentido de que la sequía había hecho que la cosecha de aceituna fuera menor de lo que en principio se esperaba.

En Alicante, donde el paro no era especialmente preocupante, las autoridades consideraban que la incidencia del desempleo se daba únicamente entre los desarraigados de la sociedad:

“Un buen número de los parados lo constituyen los incontrolados o indeseables que por no ser buenos trabajadores, o aún siéndolo, cuentan con alguna tara que no los hace recomendables, ya por su carácter o por sus vicios.”<sup>549</sup>

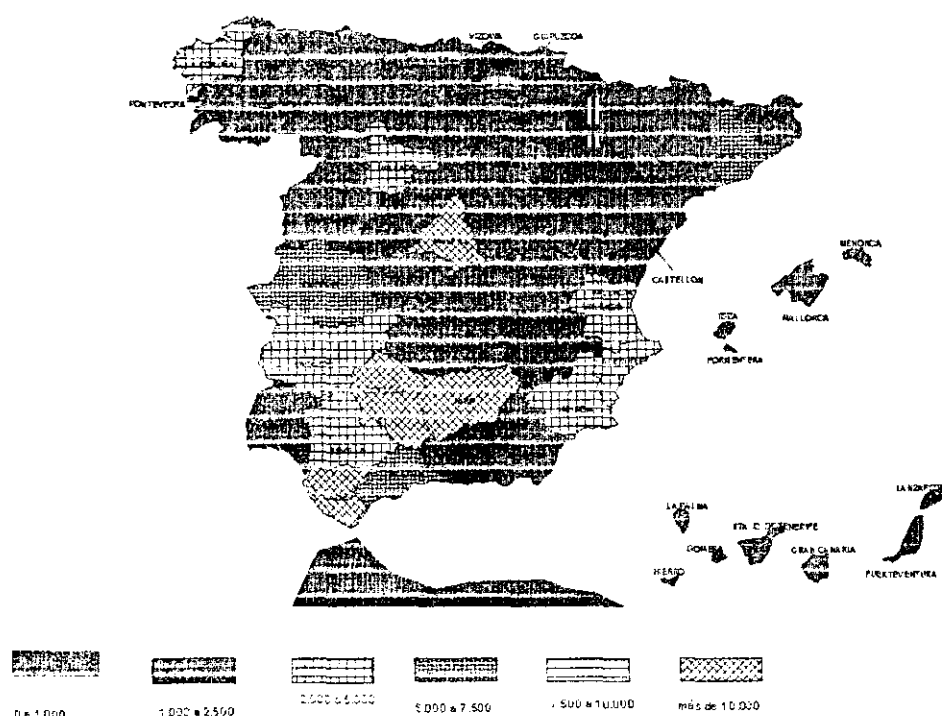
En las provincias naranjeras se dejaba sentir muy especialmente el paro en dicho sector puesto que, concretamente en Castellón, aumentaba el desempleo agrícola de modo súbito al final de la cosecha de la naranja. Y es que la mayoría de los trabajadores que a ella se dedicaban eran paralelamente peones de la construcción dentro de la cual las principales causas de desempleo eran la falta de cemento y otros materiales y la sobresaturación de los censos de trabajadores, incluso en las épocas de mayor abundancia de empleo.<sup>550</sup> Dado que por esta actividad podían cobrar alrededor de 13,5 pts. y en la recogida de la naranja hasta 32, el trasvase en la mencionada época de recolección era masivo. Todo ello implicaba el abuso de los empresarios especialmente sobre aquellos trabajadores que, provenientes de otras provincias, pretendían recoger la naranja. Así pues, en Valencia la inclinación de los empresarios naranjeros era la de contratar a los trabajadores de otras provincias dado que, fruto de su acuciante necesidad, los salarios reales que pagaban por ellos eran inferiores a los que legalmente les pertenecían.<sup>551</sup> Consiguientemente, estos movimientos de población no se incluían dentro de las llamadas compensaciones dirigidas por el S.N.C.E. De hecho, una de las dificultades básicas con las que se enfrentaba dicho organismo a nivel nacional era la escasez de viviendas para los trabajadores. Las empresas se negaban a proporcionárselas sin que el trabajador pudiera mantenerse de forma digna si alquilaba aquella. Ello constituía un factor que evitaba, no los desplazamientos masivos, pero sí los desplazamientos (masivos o no) controlados por dicho organismo salvo en lo referente a las demandas provenientes de la industria de la construcción y concretamente las destinadas a obras hidroeléctricas. Así en el año 1952 se realizaron únicamente 2.872 compensaciones de las que 2.541 eran de trabajadores de la construcción.

A lo largo del año 1953 la tónica de concentración del paro esencialmente en Andalucía, Extremadura, Madrid, Barcelona y Valencia seguía siendo la nota dominante. Oficialmente en diciembre de 1953 las provincias con un número de parados por encima de los 10.000 eran Cádiz, Córdoba, Jaén y Madrid. Siguiendo la pauta del descontrol administrativo el paro agrícola oficial abarcaba un censo de 48.800 trabajadores mientras que el estimado llegaba a 86.870, lo cual suponía un incremento del 78 % sobre el considerado oficial. En cualquiera de los casos uno más de los panegiristas de la época describía la situación de los agricultores españoles en 1953 utilizando una metáfora de la Divina Comedia excepcionalmente expresiva de las lamentables circunstancias por las que atravesaba dicho sector:

“...para ello nada más gráfico que una metáfora basada en preciosas frases de la Divina Comedia. Dante, en el canto 23 del Infierno, cuenta que allá donde se castiga a los

hipócritas encontró a unas gentes que giraban en torno a paso muy lento *piagendo e nel sembiante stanca e vinto*, llorando y con el semblante cansado y vencido. Llevaban deslumbrantes capas doradas *ma dentro iutte piombo, e gravi tanto che Federigo le metteva di paglia*, más por dentro todas plomo y tan pesadas que las que Federico II ponía a los reos de lesa majestad parecían de paja a su lado. *O in eterno faticoso manto*, concluye el poeta...

Pues bien; nuestros encorvados y plañideros agricultores están sufriendo una condena semejante sin ser reso de hipocresía ni de lesa majestad, en este caso lesa patria o lesa economía nacional;...<sup>552</sup>



\*Mapa n° 3. Distribución del paro en diciembre de 1953 por provincias.

De igual manera, el paro total oficial que ascendía en diciembre a 119.052 trabajadores se entendía como elevado en un 31,9 %, lo cual situaba dicha cifra en los 157.122 parados (ver cuadro n° 38). De la misma forma que con la comparación de la cifra de paro estimado se llega a la conclusión de que el incremento de diciembre de 1952 al mismo mes del año 1953 suponía un 15,2 %. Pese a lo dicho el mismo informe permite observar que junto a la cifra dada con anterioridad (157.122) se dan otras dos cifras de paro estimado para la misma época del año: 164.147 y 160.941. Con respecto a la primera cifra la diferencia se sustenta en las estimaciones del propio S.N.C.E. Se afirmaba que el paro agrícola estimado era de 86.870 trabajadores, lo cual sumado a los 70.252 parados en el ámbito industrial controlado oficialmente, nos da la cantidad de 157.122 parados estimados. En éste la diferencia entre el paro estimado del mes de diciembre de 1952 y el de 1953 resulta ser superior al 20 % (concretamente un 20,4 %) estando

ello en contra de la tendencia oficial que a lo largo de los años cincuenta se presenta a través del Anuario Estadístico de España.

Provincia	Parados oficialmente reconocidos en 30 de junio de 1953	Parados oficialmente reconocidos en 31 de diciembre de 1953	Parados estimado en la agricultura el 31 de diciembre de 1953 (A)	Paro oficial en la industria el 31 de diciembre de 1953 (B)	Paro estimado total el 31 de diciembre de 1953 (A+B) <sup>553</sup>
Álava	23	16	-	16	16
Albacete	833	1.224	505	719	1.224
Alicante	3.699	3.430	333	3.097	3.430
Almería	2.983	3.102	316	2.786	3.102
Ávila	133	2.049	1.979	70	2.049
Badajoz	1.623	3.055	5.806	392	6.198
Baleares	384	504	21	483	504
Barcelona	6.980	6.705	78	6.627	6.705
Burgos	119	148	-	148	148
Cáceres	1.815	5.216	4.444	772	5.216
Cádiz	9.535	10.704	7.325	5.727	13.052
Castellón	1.202	1.026	448	578	1.026
Ciudad Real	333	706	1.394	517	1.911
Córdoba	5.496	11.464	8.517	2.947	11.464
Coruña (La)	3.403	4.123	2	4.121	4.123
Cuenca	239	288	148	140	288
Gerona	670	710	73	637	710
Granada	1.666	2.147	5.202	1.334	6.536
Guadalajara	112	330	3.418	168	3.586
Guipúzcoa	102	103	-	103	103
Huelva	1.586	1.632	460	1.330	1.790
Huesca	310	184	-	184	184
Jaén	8.090	16.645	15.570	1.075	16.645
León	305	399	4	395	399
Lérida	233	294	1	293	294
Logroño	196	258	272	224	496
Lugo	323	214	1	213	214
Madrid	12.401	12.990	452	12.538	12.990

Málaga	6.322	6.085	5.291	5.489	10.780
Murcia	2.598	2.558	3.759	1.412	5.171
Navarra	62	93	1	92	93
Orense	76	104	1	103	104
Oviedo	722	685	1	684	685
Palencia	80	226	126	100	226
Palmas (Las)	2.004	1.954	775	1.179	1.954
Pontevedra	334	381	-	384	384
Salamanca	1.813	928	82	846	928
S. C. Tenerife	580	539	747	422	1.169
Santander	306	424	-	424	424
Segovia	100	188	100	88	188
Sevilla	3.804	4.269	2.951	3.129	6.080
Soria	22	19	-	19	19
Tarragona	329	307	23	284	307
Teruel	111	317	34	283	317
Toledo	196	500	6.334	363	6.697
Valencia	3.972	4.448	3.441	4.147	7.588
Valladolid	962	2.691	2.009	682	2.691
Vizcaya	110	108	-	108	108
Zamora	64	285	131	285	285
Zaragoza	891	1.038	4.279	1.006	5.285
Manuecos	1.151	1.236	16	1.220	1.236
TOTAL	91.463	119.052	86.870	70.252	157.122 <sup>554</sup>

<sup>554</sup>Cuadro n° 35. Paro a lo largo del año 1953.

Como se puede constatar las provincias en que no coincidía el paro oficial con el estimado según siendo, en líneas generales, las más afectadas por el paro: cinco andaluzas (Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla), tres de Castilla la Mancha<sup>555</sup> (Ciudad Real, Guadalajara y Toledo), además de Badajoz, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Zaragoza.

En términos relativos, el paro agrícola se incrementó en Andalucía al ponerse en práctica las disposiciones que reducían el número de hectáreas dedicadas al cultivo de la remolacha, cuestión muy importante tanto por el número de obreros que requería como por el carácter casi permanente de la mano de obra necesaria para dicho cultivo.

Mes	Parados oficialmente reconocidos	Paro total estimado	Diferencia en % entre el paro oficial y el estimado
enero <sup>556</sup>	109.228	160.873	30,6
febrero <sup>557</sup>	109.717	163.942	49,4
marzo <sup>558</sup>	110.389	174.154	57,7
abril <sup>559</sup>	107.491	169.469	57,5
mayo	96.905	137.867	42,2
junio	91.463	127.836	39,7
julio <sup>560</sup>	93.961	100.279	6,7
agosto	104.370	138.083	32,3
septiembre	108.634	145.501	33,9
octubre	116.040	151.625	30,6
noviembre	118.885	160.941	35,3
diciembre <sup>561</sup>	119.052	164.147	37,8

*\*Cuadro n° 39. Diferencia en % entre el paro oficial y el estimado en 1953.*

La recolección de aceitunas no redujo sensiblemente el paro ya que la cosecha no había sido demasiado grande. Y es que el fruto había sido de poco peso y al eliminarse el hueso el beneficiado había sido el molinero y el almazarero, ya que todo era aceite. Pero, por el contrario, el olivarero y el obrero que la habían retirado del árbol habían salido perjudicados puesto que tanto uno como otro obtenían su rendimiento económico según el peso del fruto.<sup>562</sup> En consecuencia, la norma de la campaña olivarera, por parte de los empresarios, había sido la de ser muy meticulosos con el número de empleados contratados.

Así pues la duración de los trabajos fue menor que en años anteriores y como en años precedentes las obras públicas, la construcción de viviendas potenciadas por el Estado o las donaciones especiales a las provincias más afectadas no habían sido suficientes para remediar el desempleo en gran medida porque, independientemente de manifestaciones formales antiliberales en lo económico y lo político, se estaba esperando a que el mercado de trabajo se autoregulase naturalmente con los consabidos movimientos migratorios que habían de redistribuir a la población según las necesidades de la producción. Nada más lejos de las declaraciones teóricas de los apologistas del régimen.

En cuanto al resultado de las cosechas, el mes de enero se caracterizó por las bajas temperaturas lo cual vino a favorecer el sembrado del cereal y de las leguminosas. Hasta el mes de abril no se

hicieron presentes las lluvias, desenvolviéndose de forma aceptable la granazón de los cereales. Fueron estas las que globalmente obstaculizaron las labores en toda la Península. Las condiciones fueron favorables tanto en junio como en julio para la cosecha de cereales salvo en Extremadura donde aquella se vio muy reducida por el mal tiempo. En el mes de agosto el paro se incrementó proporcionalmente comparándolo con años anteriores por la rápida recolección de los cereales en función de la merma de la cosecha. En septiembre, y fruto de la sequía de los meses anteriores se retrasaron las tareas de otoño restringiéndose la producción olivarera. En octubre el paro se estacionó y se incrementó sobre todo en Andalucía por el retraso en la maduración de la oliva, así como por la lentitud en la recolección de la misma dado que las fábricas no admitían nada más que las cantidades que les era posible molturar. En el mes siguiente la escasez de la lluvia provocó que la siembra de los cereales se llevara a cabo en condiciones de falta de humedad.

Evidentemente, todavía en 1953, gran parte de la población pertenecía al sector agrícola. Concretamente la población total ascendía a 26.869.925 millones de habitantes. La población activa no llegaba a los once millones (en torno a los 10,8 millones). En 1950 la población activa en el sector agrícola suponía alrededor de un 49 % de la población.<sup>563</sup> Y por tanto, los parados que en diciembre del 53 existían en este sector representaban el mayor problema para la política laboral del régimen. Pese a ello las Hermandades Nacionales de Labradores y Ganaderos no generaban ningún programa efectivo que coadyubara a la solución de este problema tal y como se proponía en los Consejos Nacionales de Trabajadores del Campo.

Según el informe del S.N.C.E., la industria y comercio empezaban a mejorar dada la menor falta de materias primas. Se puede afirmar que los principales problemas se concentraron en las industrias textiles. En este sector el problema radicaba en la falta de demanda en función de unos precios elevados que generaban una sistemática falta de ventas. De igual manera, en los últimos meses del año 1953 el número de parados por restricciones de fluido eléctrico aumentó y fue en este año en el que, concretamente en noviembre, se adoptó un plan de desarrollo eléctrico cuyo evolución se proyectaba en dos quinquenios (1954-58 y 1959-63).<sup>564</sup> Precisamente en septiembre de 1953 la D.N.S. elevaba un informe en el que ponía de manifiesto la gravedad de la situación al constatar que las restricciones facultaban a las empresas para no abonar los salarios completos dándose el caso de que algunas se situaban al borde de la quiebra, a todo lo cual se acumulaba la impaciencia y a la conflictividad latente entre los trabajadores por cuanto no se acometía eficazmente la revisión de sus salarios.<sup>565</sup>

En la construcción comenzaba a intensificarse el ritmo de trabajo pese a lo cual la escasez "oficial" de cemento y ladrillos limitaba la actividad por el hecho de que los cupos seguían

llegando tarde y de forma insuficiente absorbiendo entre un 31 y un 33 % de los parados de España.

Por sexos el 86,1 % (102.546) del paro registrado era de varones y el resto (16.506) de mujeres. Pese al muy escaso peso oficial del paro femenino, si algo se ponía de manifiesto ya oficialmente era el peso que las mujeres estaban adquiriendo en el mercado de trabajo remunerado no supeditándose de forma exclusiva al hogar. Y es que favorecida "por las nuevas condiciones sociales y acuciada por la necesidad económica que se siente en estos últimos tiempos afluye a la fábrica, oficina, etc., en grandes masas en busca de colocación...por la necesidad de buscar colocación con sueldos medios, a fin de aumentar los ingresos familiares, que en otro tiempo no eran necesarios por la suficiencia de los ingresos masculinos. La prueba de ello es la disponibilidad de ofertas por parte del servicio doméstico y jornales de limpieza, que en general pueden ser cubiertas."<sup>566</sup> Pero todo ello suponía la derrota del franquismo en una de sus metas formales más deseadas: la materialización de un salario familiar efectivo y la consiguiente vuelta de la mujer al hogar con el fin de dedicarse esencialmente a la educación/socialización de sus hijos de acuerdo a los valores tradicionales que el franquismo pretendía sostener. Y eso a pesar de que las reglamentaciones potenciaban la contratación de varones, dado que las mujeres habían de acogerse a la excedencia forzosa una vez casadas. Quizás por ello, oficialmente, el paro femenino carecía de gravedad "oficial" y se asentaba fundamentalmente en diciembre del 53 en la industrias de la alimentación (3.972), los servicios de higiene (2.544), el sector de la banca, seguros y oficinas (1.937) y las industrias textiles (1.892).

Este es uno de los años que de forma más completa puede ser estudiado por medio de los informes del S.N.C.E. en lo referente a la realidad no oficial que consta en los mencionados informes. Por ello haremos un análisis mes a mes del mismo.

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
enero <sup>567</sup>	70.221	36.706	51.645	72.522	160.873 <sup>568</sup>

\*Cuadro n° 40. Parados en enero de 1953.

En este mes de enero el paro se incrementó debido a que la recogida de la aceituna para almazara se dio por finalizada antes de lo esperado por su escasa abundancia y por ser afectada por la epidemia de la mosca. Globalmente y de forma oficial las provincias más afectadas fueron Cádiz (8.760 parados), Badajoz (8.414), Málaga (6.486) y Jaén (6.394). La situación empeoraba en relación a diciembre de 1952 por que el régimen de lluvias y nieves fue poco favorable así



como las temperaturas bajas. Las labores, por consiguiente, se paralizaron por el mal estado de los terrenos y por la falta de humedad. Las siembras de cereales y leguminosas del otoño daban resultados desiguales y el único lugar en que se habían adelantado había sido en Andalucía y Extremadura porque las lluvias habían sido mayores resintiéndose la comarca de los Monegros y zonas mediterráneas por la falta de humedad.

No debe de extrañar que en la tabla anteriormente expuesta (nº 40) no coincida el paro agrícola estimado con la suma del paro oficialmente registrado más el que se estimaba como no controlado oficialmente. En el mismo informe encontramos la negación parcial de dichas cifras. Es interesante y vislumbra el conocimiento sobre los propios datos aportados por el S.N.C.E. el que introduzca los datos que a continuación aportamos.

mes /año	parados oficiales	totales	paro agrícola estimado (oficial más no registrado)	Paro total estimado
enero de 1953		109.228	70.221	179.449
enero de 1952		116.467	65.823	182.280
diciembre de 1952		105.907	64.684	170.591

*\*Cuadro nº 41. Parados en enero de 1952 y 1953 y en diciembre de 1952.*

Pero el hecho mismo de que el S.N.C.E. esté contabilizando el paro estimado de esta manera no puede más que conducir a la afirmación, ya mencionada anteriormente, de que se era perfectamente consciente de la falsedad de los datos oficiales y de la gran dimensión del desempleo por encima de lo que se pudiera vender a la población, cuestión que se reproduce de forma casi sistemática, informe tras informe, y que obviaremos por ser estimaciones sobre las estimaciones pese a que muy probablemente pudieran ser más próximas a la realidad que las de los datos no oficiales que utilizamos.

En esta situación entre las provincias más afectadas estaba Madrid sobre todo, como siempre año tras año, en el sector de la construcción. En Sevilla aumentaba el desempleo por la terminación de la recogida de la aceituna para almazara así como otras labores preparatorias de siembra y labores ligadas a la remolacha.

En el mes de febrero el paro se manifestó según se explicita en la siguiente tabla:

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
febrero <sup>569</sup>	73.097	37.041	54.225	72.676	163.942 <sup>570</sup>

\*Cuadro n° 42. Parados en febrero de 1953.

En este mes el paro estacional se dejó sentir por las temperaturas extremas y el recrudecimiento de los temporales de nieve, lo cual repercutió en las pocas faenas que se realizaban. Sobre ello operaba la interrupción parcial o la mayor dificultad en las comunicaciones que traía como secuela trastornos económicos de orden general. Pese a ello la comparación con el año 1952 permite decir que la situación era menos negativa en este año 53 dado que en febrero del anterior año el número de parados estimados ascendía a 185.304. Por provincias las más afectadas en el ámbito agrícola eran Cádiz (8.592), Jaén (7.071), Granada (6.346) y Málaga (6.319). En las provincias esencialmente agrícolas la sementera se había desarrollado correctamente lo cual hacía prever que el trabajo sería moderadamente abundante de mayo en adelante si bien, sobre todo en lo referente a las provincias andaluzas, el número de hectáreas dedicadas a la remolacha había disminuido dejando sin efecto gran parte de los jornales que en años anteriores había sido necesario utilizar. A las ya mencionadas hay que añadir Madrid, en donde el paro se seguía centrando en la construcción.

En lo referente a esta industria se empezaban a entrever horizontes de recuperación "dándose el caso de que en algunas provincias se habían agotado los materiales que se encontraban almacenados desde hacía bastantes años siendo necesario importarlos de otras provincias."<sup>571</sup> Pese a ello el problema de la distribución de cupos seguía siendo cuestión básica para comprender las demandas de que los mismos se repartieran "equitativamente"<sup>572</sup> dado que evidentemente no lo eran, existiendo una mayoría de industrias que recibían, en el mejor de los casos, el 50 % de los cupos asignados y con un gran retraso. Ello dificultaba la evolución de este sector desde un punto de vista oficial que no consideraba en muchas ocasiones la incidencia del mercado negro, todo lo cual hacía que desde algunos sectores del sindicalismo se solicitara la apertura total del intercambio comercial con el extranjero, el incremento de las exportaciones y la erradicación del sistema autárquico.<sup>573</sup>

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
marzo <sup>574</sup>	85.013	39.076	63.765	71.313	174.154

\*Cuadro n° 43. Parados en marzo de 1953.

En el mes de marzo el paro estimado seguía aumentando por la falta de faenas en el campo teniendo la organización sindical la percepción segura de que "si se acometieran los proyectos que se tienen en diferentes comarcas españolas relativos a traídas de agua, electrificación de zonas para la implantación de grupos de electrobombas, etc., habría la seguridad de que se crearía verdadera riqueza y se cubrirían con exceso los desembolsos hechos en la ejecución de la obras necesarias."<sup>575</sup>

Las provincias más afectadas por el paro agrícola fueron Málaga con 9.418 parados, Cádiz (8.886), Zaragoza (7.695), Jaén (7.143), Sevilla (6.912) y Córdoba (6.504). En líneas generales el campo se estaba resintiendo de la falta de humedad. La sementera ya había crecido y por lo que se refiere a las especies de verano ya habían sido plantadas.

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
abril <sup>576</sup>	81.469	37.091	61.978	70.400	169.469 <sup>577</sup>

\*Cuadro n° 44. Parados en abril de 1953

En este mes las faenas en el campo seguían siendo más bien escasas aunque el paro había descendido según las estimaciones oficiales en relación con el mes anterior. Ello era debido a la mayor intensidad de las lluvias que, pese a todo, habían beneficiado a los sembrados. Hemos dicho anteriormente que en los informes del S.N.E.C. se dan estimaciones de paro por encima de las que se consideran reales y por tanto muy superiores al oficial. Estaríamos hablando de estimaciones sobre las estimaciones y así la percepción del S.N.C.E. en este mes era que, pese a que el paro era inferior al del mes anterior e inferior también al del mes de abril de 1952, la realidad era que el desempleo existente en la agricultura era superior a las cifras oficiales (e incluso al desempleo estimado) "ya que debido a la sequía padecida se ha retrasado bastante el total desarrollo de algunos cereales de invierno en determinadas provincias, aun cuando es de esperar que en el próximo mes el paro se reduzca sensiblemente al iniciarse con cierta intensidad las labores propias del mes que comentamos."<sup>578</sup> Por tanto, los cereales de invierno se estaban desarrollando, al igual que el olivo, en condiciones casi óptimas. Las plantas de verano se habían beneficiado de la climatología siendo esto especialmente aplicable a los garbanzos, el maíz, el tabaco, el lino y las hortalizas sembradas en seco. Por todo ello, como se ha dicho, se esperaba abundancia de empleo en el campo a finales de mayo. Las provincias con mayor paro agrícola eran Zaragoza (10.708 parados), Málaga (8.394), Cádiz (8.325), Jaén (7.442) y Sevilla (6.293).

La lamentable situación por la que atravesaba Andalucía tenía su proyección en hechos como el intento de recabar la atención paternal del Jefe del Estado. De ello tenemos un ejemplo, entre otros muchos, en la solicitud de adopción del pueblo de Motril por el "Caudillo" dada la situación social de una zona cuyas características se podían extender en gran medida al resto de Andalucía en cuanto a los efectos perversos que originaba el latifundismo y el monocultivo sobre su población campesina:

"...dificultan más nuestra recuperación las circunstancias económicas y agrícolas que caracterizan a nuestra tierra. La propiedad no está bien distribuida y parte de ella pertenece a familias o empresas que no viven en el término, sino en Madrid, Barcelona o Granada, fomentándose con ello el mal del absentismo. Esto motiva que...haya pocos propietarios pequeños y muchos productores a jornal. Pero como el cultivo tradicional y adecuado a la condición de grandes zonas de esta vega es la caña de azúcar, que sólo precisa labores de abril a septiembre, se produce fatalmente el paro estacional y con él la miseria de las clases obreras y la crisis industrial y comercial...Resultado de esta mirada paternal que nos ha dirigido el Caudillo, es la reciente aprobación por el Consejo de ministros del Proyecto de los Nuevos Riegos y Canal de Carchuna, que derivando aguas del Río Guadalfeo, en una obra de cien millones de coste, convertirá en fértiles tierras de regadío 2.600 has., duplicando la zona de cultivo actual, creando un importante aprovechamiento hidroeléctrico y una nueva fuente de riqueza para Motril y para España..."<sup>579</sup>

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
mayo <sup>580</sup>	59.702	28.689	40.962	68.216	137.867 <sup>581</sup>

\*Cuadro n° 45. Parados en mayo de 1953.

En el mes de mayo el paro disminuía porque la recolección había dado comienzo en las zonas más adelantadas con unas cosechas que se preveían buenas sobre todo en lo referente al trigo y la vid. Las provincias más afectadas por el desempleo eran Zaragoza (8.624), Jaén (7.967) y Málaga (6.204). Sevilla estaba siendo muy perjudicada, aunque menos que en los meses precedentes, ya que en mayo existía poco trabajo en las zonas en que había una excesiva dependencia del cultivo del cereal de invierno "pues, ni aun la escarda, que realmente tenía poca importancia, apenas absorbía algunos centenares de obreros, especialmente mujeres."<sup>582</sup>

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
junio <sup>583</sup>	43.845	24.270	36.373	67.193	127.836 <sup>584</sup>

\*Cuadro nº 46. Parados en junio de 1953.

El bajón del paro en junio, comparado con el mes anterior, se debía al comienzo de la recolección en la mayoría de las provincias. En Cáceres y Badajoz, pese a todo, el paro se mantenía estacionario en relación con el mes anterior principalmente porque las cosechas de cereales se habían visto reducidas notablemente fruto de condiciones meteorológicas adversas "así como por el extraordinario aumento de la maquinaria agrícola que había adelantado la recolección, dándose el fenómeno de que en el mes de mayo se había trabajado con mayor intensidad que en junio como era lógico."<sup>585</sup> Las provincias más afectadas por el desempleo agrícola fueron Jaén (7.220 parados), Cádiz (4.431), Zaragoza (4.123), Córdoba (3.746), Murcia (3.628), Málaga (3.466), Badajoz (3.218) y Granada (3.106).

Pese a todo la mejora general en el número de parados se debía a la excelente cosecha, la cual había superado las expectativas que la primavera anunciaba. Pese a ello, existían zonas donde el número de parados era considerable y eran estas, esencialmente, aquéllas en las que la recolección del cereal había sido excesivamente corta y en las que se había reducido el número de hectáreas dedicadas a la remolacha. Todo ello aparecía sistemáticamente envuelto en un alo de inevitabilidad y victimismo siendo esto explicación de la escasa actividad del Estado franquista a la hora de incidir en una reforma agraria que pudiera siquiera paliar mínimamente la situación de los agricultores:

"Las causas de este paro como es sabido, parten de la mayor o menor productibilidad de las tierras e incluso de forma ocasional del rendimiento de la producción de determinadas épocas, influenciadas por el régimen de lluvias favorables o no, para los campos. Causas, que por su carácter general no son objeto de estudio, sino de simple mención, dado que aún no está supeditado al hombre la modificación de los estados del terreno producidos por la sequía, con la creación de riegos que proporcionarán a los campos la humedad necesaria."<sup>586</sup>

En estos meses veraniegos otro de los problemas que adquiriría notas dramáticas para algunos agricultores era la mecanización<sup>587</sup> que privaba a la masa de agricultores de forma paulatina de parte de sus ingresos. En este sentido el informe del S.N.E.C. de junio explicitaba las siguientes ideas sobre la mecanización de la agricultura:

"Hoy una moderna máquina segadora, o más aún, las llamadas cosechadoras, pueden sustituir de por sí el trabajo que antes hubieran de realizar varias cuadrillas en algunos días, y esto que indudablemente es una fuente de progreso, representa un notable problema para el trabajador agrícola puesto que, no estando preparado para otros trabajos, se sume en un agobiante paro de consecuencias funestas, ya que la mecanización, ha de correr pareja con la industrialización inherente a la transformación de los productos del agro, pues de esta forma, la máquina, repercute favorablemente en la economía del país. Por el contrario, si la industria no se desarrolla al unísono, se origina un doble problema: la inestabilidad económica y lo que es peor aún, un paro de caracteres alarmantes, por la inactividad de grandes masas de trabajadores, que no se encuentran capacitados para otras actividades."<sup>588</sup>

Sobre esta cuestión la consecuencia fundamental iba a ser, señala Naredo, el "afianzamiento y desarrollo de las relaciones de producción capitalistas, constituyendo un paso más en la división social del trabajo, fomentando la especialización funcional y aumentando la dependencia de las explotaciones mecanizadas respecto del mercado, al incrementarse la adquisición de medios de producción y materias primas de producción industrial, obligando a contabilizar adecuadamente estos costes y a racionalizar la gestión de las explotaciones. Al mismo tiempo, la mecanización hace jugar a las economías de escala en favor de la gran explotación...impidiendo que las grandes explotaciones mecanizadas puedan dividirse en pequeñas parcelas..."<sup>589</sup> Además de estas consideración se producía el trasvase de 62.293 españoles del sector agrario hacia otras actividades de 1940 a 1950 y de 1.087.322 entre 1950 y 1960. Pese a ello y pese a las duras consecuencias que ello traía para los agricultores españoles desde las filas de la organización sindical y desde el ministerio de Trabajo se hacía hincapié en la necesidad de la mecanización de la agricultura.<sup>590</sup> Como indica Tamames, con la Orden de 20 de febrero de 1953, que creaba el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria, se ponía el segundo pilar de la política agraria consistente en el intento de desarrollo de regadíos y en la lucha contra el minifundismo.<sup>591</sup>

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
julio <sup>592</sup>	47.812	27.778	6.318	66.183	100.279 <sup>593</sup>

\*Cuadro n.º 47. Parados en julio de 1953.

En julio la recolección de los cereales de verano había finalizado ya. En ello influyó el hecho de que la cosecha no fuera abundante y la paulatina mecanización de las labores. En igual situación se encontraba la recogida de la remolacha (sustituida en parte por el maíz) y de la

patata. Por provincias, las más afectadas por el paro agrícola eran Jaén (8.301 parados), Córdoba (5.289), Cádiz (4.327), Málaga (4.269) y Zaragoza (4.065). Por el contrario, el sector de la producción industrial evolucionaba de forma más favorable y debido a la terminación de obras oficiales se incrementaba levemente el censo de parados en dicho sector. Globalmente, entre la provincias más afectadas continuaba Madrid en lo tocante al sector de la construcción. En Sevilla, la situación no mejoraba por las restricciones eléctricas lo cual estaba generando la posibilidad de un conflicto en algunos sectores de la provincias que era descrito por el S.N.C.E. de una forma eufemística:

“En la industrias por haberse impuesto en numerosas fábricas la reducción de jornadas por restricciones eléctricas, la situación económico-laboral de los productores encuadrados en los grupos profesionales afectados es desfavorable por el malestar que se observa en los mismos ante la reducción de jornales.”<sup>554</sup>

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
agosto <sup>555</sup>	63.474	36.543	33.713	67.827	138.083 <sup>556</sup>

\*Cuadro n° 48. Parados en agosto de 1953.

El aumento de agosto en relación al mes anterior se debía al hecho de que en Andalucía y Extremadura las actividades agrícolas habían terminado como consecuencia de la rápida recolección de cereales de verano. Ello hacía de éste un mal año para el empleo tanto si lo comparamos con el mes de julio como si lo hacemos con el mes de agosto del año precedente en que las estimaciones situaron el paro 144.904. Con todo, se era consciente de que gran parte de las provincias españolas seguían registrando erróneamente las cifras de paro por defecto. Entre ellas estaban Badajoz, Huelva, Cádiz, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Guadalajara, Logroño, Málaga, Murcia, Palencia, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, Valencia y Zaragoza. Dentro del ámbito agrícola las provincias más afectadas este mes fueron Córdoba (9.850), Jaén (9.578), Málaga (6.537), Granada (5.173) y Badajoz (5.012).

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
septiembre <sup>557</sup>	70.735	40.661	36.867	67.973	145.501

\*Cuadro n° 49. Parados en septiembre de 1953.

La situación en septiembre no variaba mucho con respecto al mes anterior si bien hay que mencionar que entre las provincias más afectadas por el desempleo agrario estaban Córdoba (10.439 parados), Jaén (9.448), Málaga (7.353), Badajoz (6.372), Granada (5.602), Zaragoza (5.413) y Cádiz (5.291). No obstante, se había producido un leve aumento del paro estimado por encima de los 145.000. La única nota positiva era el ligero descenso del paro en la construcción en la provincia de Madrid y la mejora de la situación en Jaén a raíz de la recolección de la aceituna para mesa.

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
octubre <sup>598</sup>	74.577	45.996	35.585	70.044	151.625

*\*Cuadro n° 50. Parados en octubre de 1953.*

A la altura de octubre el incremento del paro era debido al fin de las faenas agrícolas. En Andalucía las causas fundamentales eran el retraso en la maduración de la oliva, así como el hecho de que se llevara a efecto la recolección con lentitud y "sin emplear toda la mano de obra disponible entre otras causas, por no admitir las fábricas nada más que las cantidades que les era posible molturar en una jornada"<sup>599</sup> y por el retraso en la maduración del fruto. Las provincias más afectadas por el desempleo agrícola fueron Córdoba (13.254), Jaén (9.246), Málaga (6.434), Badajoz (5.914), Granada (5.603), Cádiz (5.488) y Zaragoza (5.190).

Por regiones la situación más problemática en diciembre del año 53 era la de Andalucía. En Almería faltaba agua, electricidad y aperos para la labranza. De esta provincia se afirmaba lo siguiente:

"El problema fundamental que actualmente pesa sobre la provincia de Almería lo constituye la pobreza extrema, el lamentable nivel económico-social en que viven los sectores más numerosos de su población obrera...La amplitud de estos sectores populares y el grado ínfimo de su nivel de vida, al determinar el tono general de la provincia, han hecho de ella la más pobre y necesitada de cuantas integran nuestra Nación."<sup>600</sup>

Y es que sus 359.730 habitantes malvivían de una agricultura deficitaria siendo prácticamente inexistente la actividad minera que hasta principios de siglo había tenido un decisivo peso en la provincia. Y es que en Almería, por lo que a la agricultura se refiere, alrededor del 43 % de la superficie productiva estaba dedicada al esparto y a la altura de 1953 era la cuarta provincia española por intensidad en el monocultivo. A ello se añadía la postración de la industria, de la



pesca y de la actividad portuaria ante la ausencia de exportaciones, todo lo cual se combinaba con un desarrollo industrial escaso. Era por esto que la población almeriense, acuciada por la miseria y abandonada secularmente por el Estado, tendía a emigrar de forma incesante con objetivos geográficos nacionales o ultramarinos. En el Plan de Ordenación Económico-Social de la provincia de Almería para el año 1953 que elaboró la Presidencia del Gobierno se estimaba que el número de almerienses que ilegalmente habían salido para América en el año 1950 había sido de 1.245, cantidad más o menos similar a los emigrados legalmente. A esta cifra habría que añadir la de los 3.000 que en viajes de ida y vuelta acudían al Marruecos francés, y los 4.000 o 5.000 que en las épocas de recolección cerealista o aceitunera abandonaban sus hogares para emigrar en busca de trabajo esencialmente a Jaén, Córdoba, Sevilla, Granada y Murcia. "Prueba de la importancia que esta cifra adicional de emigrantes tiene a los efectos de estimar el paro real permanente es que, mientras éste ha aumentado en los últimos años, la cifra total de la población obrera disminuye, toda vez que si hoy es, como se ha dicho de 119.860 hombres, en 1944 era de 120.328,"<sup>601</sup> se afirmaba desde la Presidencia del Gobierno.

En Sevilla el paro se debía a que la recolección de la aceituna de molino se había completado. En Huelva continuaba la ausencia de actividad en el sector pesquero, lo cual a su vez paralizaba la industria conservera y de salazones. En Jaén la situación había empeorado con respecto al año 52 dada la escasa cosecha de aceituna representando incluso el 200 % de la cifra de paro estimado como real en dicho año,<sup>602</sup> lo cual teniendo en cuenta que el número estimado en el mes de diciembre de 1952 ascendía a 6.216 nos situaría en el mismo mes del año 1953 en una cifra en torno a los 12.500 parados. En Córdoba la situación era muy similar a la del resto de las provincias olivereras semejantes, caso de Toledo o Ciudad Real (donde la recogida de la aceituna duró más o menos 20 días) y Cáceres o Badajoz en las que el descenso del paro en el mes de diciembre del 53 en relación al 52 obedecía a "las disposiciones dictadas por el Gobernador Civil restringiendo la colocación de mujeres en estas faenas"<sup>603</sup> (en referencia a las cerealísticas y olivereras).

En lo referente a Badajoz, aparte de estos altos niveles de paro, persistía el problema de 23.026 aparceros y arrendatarios "carentes de tierra o con extensiones insuficientes"<sup>604</sup> ya en diciembre del año anterior. Pese a que estas cifras aportadas por las Hermandades Sindicales daban por válida la cantidad mencionada, el hecho de que hubiese pasado un año no permite afirmar que hubiera mejorado su situación o que, como se afirma en el mencionado informe, esa cantidad fuera válida para diciembre de 1953. En todo caso cabe esperar que fuera notablemente más elevada como más elevado era el paro que se suponía existía. Frente a los 3.055 parados oficiales en diciembre de 1955 la organización sindical de esta provincia lamentaba que la situación real situara dicha cifra en torno a los 20.000 y que incluso con el Plan Badajoz más

del 50 % de los yunteros no recibieran solución efectiva a sus problemas. En lo referente al paro, los pueblos con más de 500 "ociosos" eran Fuente de Cantos, Fuente del Maestre, Granja de Torrehermosa, Ribera del Fresno, Usagre, Valverde de Leganés y Villafranca de los Barros. Si damos una cierta validez a las cifras sobre aparceros con falta de tierras los pueblos con más de 500 personas en dicha situación era Campanario, Casas de San Pedro, Don Benito, Oliva de la Frontera, Orellana la Vieja, Peñalsordo, Talarrubias y Villanueva de la Serena. Esta situación se podía resumir por medio de la siguiente aseveración:

"La organización sindical de Badajoz reitera la gravedad del problema que tiene planteado en aquella provincia, como consecuencia del elevado número de trabajadores agropecuarios que se encuentran en situación de paro forzoso y de los aparceros y arrendatarios, actualmente sin tierra o con tierras insuficientes, cuyo número aumenta de modo alarmante por los continuos desahucios de fincas rústicas, producidos a la terminación de cada año agrícola. Como detalle significativo interesa señalar que a la terminación del presente año agrícola se encuentran amenazados de desahucio 509 colonos protegidos que vendrán a incrementar la elevada cifra de 23.026 aparceros y arrendatarios carentes de tierra o con extensiones insuficientes para resolver su capacidad de cultivadores directos."<sup>605</sup>

Y es que pese a los efectos propagandistas que pudo tener la Ley de 17 de abril de 1946 promulgada con motivo de la visita del Jefe del Estado y que posibilitaba la expropiación de fincas de secano en los pueblos ligados al Plan Badajoz la realidad era que hasta finales del año 1953 las solicitudes de expropiación habían ascendido a 55.382 hectáreas mientras que el número de hectáreas expropiadas ascendía únicamente a 14.137, el número de fincas expropiadas a 26 y el número de colonos asentados a 1.766. Es de destacar que una de las localidades en las que mayor era la demanda de expropiaciones era Herrera del Duque con 14.000 hectáreas frente a una sorprendente realidad oficial que reflejaba que allí no había ni un sólo parado en diciembre de 1953 y ningún agricultor con falta de tierra.<sup>606</sup> Especial atención merecía el caso de Oliva de la Frontera que demandaba 5.432 has. y el de Jerez de los Caballeros en el que la cifra ascendía a 4.922 hectáreas.<sup>607</sup>

Problema similar era el que también persistía en Cáceres con los yunteros, lo cual se venía plasmando en los informes de la organización sindical desde años atrás:

"La organización sindical de Cáceres señala, una vez más, la agudización del problema de los pequeños arrendatarios y yunteros sin tierra. Este mal inveterado en la provincia, está adquiriendo proporciones no conocidas que pueden convertir el campo de Cáceres en amenazante foco de intranquilidad social, pues se ha proletarizado a un extenso

sector de nuestros campesinos -puede cifrarse en 20.000 aproximadamente-, acostumbrados a vivir con independencia económica y a poseer un modestísimo patrimonio propio.

...estas familias campesinas, hoy desarraigadas del suelo que trabajan, poseen un cierto espíritu de empresa y de ahorro, están acostumbradas a trabajar de forma eficaz, puesto que lo han hecho siempre para ellas mismas, lo que les caracteriza y les distingue de simples asalariados. La desaparición de esta clase social ha de traducirse en una pérdida económica grande que pudiera evitarse si se les diera tierra para su cultivo, constituyendo de esta forma una base fuerte para la elevación económica y el sosiego político-social de la provincia<sup>608</sup>

Ello tenía como fundamento la estructura latifundista de la provincia y la tradición que había hecho del arrendamiento y la aparcería la forma típica de explotación agraria. Todo ello daba como resultado unas nuevas condiciones "verdaderamente leoninas" y el descenso de esta categoría social a la de "obreros."<sup>609</sup> Lo que verdaderamente preocupaba a las autoridades era el hecho de que ello se pudiese traducir en altas tasas de desempleo y, por consiguiente, en "intranquilidad social" (eufemismo para hacer referencia al posible conflicto abierto) que hiciera de estos agricultores una "masa fácilmente manejable por propagandas extremistas cuando podía ser un freno a esa clase de actuación y una base permanente para la estabilidad del Régimen."<sup>610</sup>

Todo ello tenía su fundamento en la naturaleza perversa de la legislación sobre arrendamientos rústicos. En función de aquélla los propietarios reclamaban para sí la explotación directa de sus fincas expulsando a los arrendatarios y yunteros, centrándose posteriormente en la ganadería y cultivando sólo una porción mínima de la finca "habiéndose hecho aparición en la provincia una modalidad de contratación aparcería, desaparecida afortunadamente desde los últimos tiempos de la Monarquía"<sup>611</sup> ante lo cual las Hermandades de Labradores y Ganaderos proponían como una de las varias soluciones al problema la expropiación de fincas en las siguientes localidades en las que el problema social era especialmente grave: Arroyo de la Luz, Zorita, Trujillo, La Cumbre, Madroñera, Brozas, Alcantara, Navas del Madroño, Villa del Rey, Mata de Alcantara, Malpartida de Plasencia, Plasencia, Casas de Millán y Mirable. Finalmente la proposición conservó la naturaleza y esencia de éste vocablo y quedó en eso: en proposición.

Hay que tener en cuenta que en lo referente a esta provincia la mayor oferta de empleo por parte de los propietarios solía centrarse en la segunda quincena de mayo en la que comenzaba la siega de la cebada, para continuar con la del centeno, avena y trigo. A continuación se desarrollaban las tareas de la recolección en los meses de junio y julio. Pues bien, en este contexto de

desaparición masiva de los yunteros y de mecanización paulatina, sobre todo en las tareas de la trilla, se situaba la incidencia de los procesos migratorios en esta provincia.

Y todo ello pese a un contexto general que pretendía transmitir la impresión de que protegía los intereses de los agricultores. Concretamente la Orden del ministerio de Agricultura de 3 de febrero de 1949 establecía la obligatoriedad de las labores de escarda empleando un número mínimo de jornales por hectárea. Por cada hectárea sembrada de trigo había de utilizarse de 8 a 20 jornales y 6 para cada hectárea sembrada de otro cereal o leguminosa. Sin embargo, el hecho de que los coeficientes no sobrepasaran el número de trabajadores que cada empresa agropecuaria venía ocupando<sup>612</sup> era indicativo del afán por no alterar en lo sustancial los intereses de los grandes propietarios extremeños o de otras provincias españolas pese a que ello tuviera una incidencia negativa en las cifras reales de desempleados.

Con este año se pone punto y final a una corta etapa de descenso del paro tanto oficial como estimado y volvemos a asistir a un repunte significativo de las bolsas de parados.

### 10.9. El cambio de tendencia de 1954.

De nuevo hay que tener en cuenta, observando el paro del mes de mayo de 1954, la diferencia abismal entre el paro real y el estimado además de las valoraciones que sobre dicha cuestión hacían los propios gerentes de la política social española lo cual nos obliga a estimar como cifras de paro real unas mucho mayores que la estimadas por esos mismos organismos. Y es que, en definitiva, el paro existente se veía como el aspecto menos loable de una política de saneamiento y modernización que arrancaba grandes masas de trabajadores del campo para arrastrarlas a los suburbios de las grandes ciudades en beneficio de la potenciación económica de la nación:

“En este sentido, es paro camuflado o latente toda la ocupación en servicios ambulantes y aleatorios e incluso gran parte del servicio doméstico que, como es sabido, se nutre de miembros de familias obreras, generalmente campesinas, que la inseguridad económica que castiga a nuestros campos lleva a los centros urbanos de mayor población. Así, pues las cifras de las anteriores estadísticas<sup>613</sup> han de ser aumentadas en una proporción muy difícil de contabilizar, pero que de ninguna manera representa un número despreciable por su pequeñez.”<sup>614</sup>

Provincia	Parados oficialmente reconocidos en 30 de junio de 1954	Parados oficialmente en 31 de diciembre de 1954

Álava	12	7
Albacete	848	904
Alicante	3.632	3.449
Almería	3.343	3.256
Ávila	67	2.846
Badajoz	2.016	2.126
Baleares	500	494
Barcelona	7.044	7.291
Burgos	143	99
Cáceres	2.295	8.284
Cádiz	9.827	9.721
Castellón	1.170	1.167
Ciudad Real	449	947
Córdoba	7.111	10.523
Coruña (La)	5.237	5.531
Cuenca	179	522
Gerona	1.223	1.340
Granada	1.204	1.801
Guadalajara	93	205
Guipúzcoa	152	157
Huelva	1.768	1.966
Huesca	156	54
Jaén	15.746	19.442
León	481	667
Lérida	238	118
Logroño	242	225
Lugo	142	197
Madrid	12.570	14.845
Málaga	6.573	7.201
Murcia	1.999	3.203
Navarra	86	315
Orense	115	103
Oviedo	719	642
Palencia	234	333
Palmás (Las)	1.849	1.751
Pontevedra	565	667

Salamanca	1.053	1.670
S. C. Tenerife	625	451
Santander	281	173
Segovia	72	219
Sevilla	3.747	5.854
Soria	13	21
Tarragona	460	380
Teruel	76	87
Toledo	181	413
Valencia	4.411	3.037
Valladolid	1.108	2.024
Vizcaya	160	84
Zamora	374	425
Zaragoza	945	658
Maruecos	1.024	1.071
TOTAL	164.558	128.966

\*Cuadro n° 51. Paro oficial en el mes de junio y diciembre de 1954.

Mes	Paro oficial	Paro estimado	Diferencia en % entre el paro oficial y el estimado
enero	123.909	179.145 <sup>615</sup>	44,5
febrero	131.280	185.860 <sup>616</sup>	41,5
marzo	130.187	183.722 <sup>617</sup>	41,1
abril	123.719	174.466	41
mayo	114.076	153.476 <sup>618</sup>	34,5
junio	104.558	137.081	31,1
julio	108.841	139.221	27,9
agosto	116.209	155.920	34,1
septiembre	122.556	167.567	36,7
octubre	133.069	195.972	47,2
noviembre	133.867	191.953 <sup>619</sup>	43,3
diciembre	128.966	191.953	48,8

\*Cuadro n° 52. Paro mensual oficial, estimado y diferencia en % entre ellos en 1954.

Y es que hay que tener en cuenta que en este año se admite oficialmente el repunte del desempleo en paralelo al final de un período, tras el cual, a partir de 1954, comienza una cierta recesión, vuelve a aparecer la inflación junto al desequilibrio en la balanza exterior y, en resumidas cuentas, disminuye el ritmo de crecimiento de la economía.<sup>620</sup>

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
enero <sup>621</sup>	94.777	51.261	43.516	72.648	174.689 <sup>622</sup>

<sup>620</sup>Cuadro n° 53. Parados en enero de 1954.

El mayor volumen de parados en el mes de enero se centraba todavía en la actividad agrícola, sector que seguía siendo el más complicado de controlar estadísticamente:

“...el paro en la agricultura es difícil de controlar por la naturaleza eventual o trabajo de temporada que dificulta grandemente el registro de parados con exactitud. Asimismo la inexistencia de registros en algunas zonas rurales, es otra de las causas de que el paro agrícola no se pueda determinar estadísticamente y sin error alguno...ya que siempre encontraríamos una falta de realidad en los datos con la dificultad de controlar los movimientos que se repiten durante la época en que no se llevan a efecto trabajos en el campo y que por este motivo los obreros agrícolas tratan de encontrar colocación en otras industrias afines a sus aptitudes en cualquier otra comarca o zona, desplazándose por su cuenta y sin dar conocimiento de ello a nuestras Oficinas de Colocación.”<sup>623</sup>

En este año de 1954 se incrementaba el paro con respecto al año anterior y ello en boca del Delegado Nacional de Sindicatos, Solís Ruiz significaba una situación que de hecho desamparaba al trabajador:

“Se incrementa el número de expedientes de crisis, si bien aquella cifra no es lo suficientemente expresiva de la situación actual ya que al criterio restrictivo seguido por las autoridades laborales en las peticiones planteadas en este procedimiento se suma la necesidad de buscar soluciones a situaciones inaplazables y obligan a adoptar caminos más expeditos, bien mediante el acuerdo de cese con trabajadores, o bien despidiendo lisa y llanamente a los ocupados cuyos eventuales derechos derivados de la medida arbitraria, no pueden en la mayoría de los casos tener efectividad por el estado de insolvencia de los antiguos patronos.”<sup>624</sup>

En Andalucía el paro se incrementaba en este mes invernal por estar a la espera de las lluvias para llevar a cabo las siembras de primavera con garantías mínimas, lo cual significaba que hasta finales de marzo o principios de abril no habría prácticamente ninguna actividad agrícola salvo en las zonas olivareras en las que se llevara a cabo la recogida de la aceituna. Así pues las provincias que tenían más de 5.000 parados en el sector agrícola eran Jaén (16.309), Badajoz<sup>625</sup> (8.200), Granada (7.525), Cádiz (7.462), Córdoba (7.027) y Toledo (6.551).<sup>626</sup> Un ejemplo de la situación que vivían las provincias latifundistas españolas era Córdoba donde se podía atestiguar que la situación económico-laboral empeoraba con respecto al año anterior pese a que había un ligero descenso en las cifras de paro, lo cual era debido, en gran medida, a las rectificaciones puramente técnicas en los censos.<sup>627</sup>

Otra realidad palpable en este mes de enero era la incidencia de unos rendimientos en la recolección cerealística inferiores a los esperados lo que no permitía, al contrario que en años anteriores, realizar trabajos extraordinarios especialmente en las zonas olivareras una vez terminada la recogida de la aceituna. Ello hacía suponer que en los meses siguientes y concretamente hasta marzo el paro habría de aumentar.

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
febrero <sup>628</sup>	101.697	54.768	46.980	76.512	178.209 <sup>629</sup>

*\*Cuadro n° 54. Parados en febrero de 1954.*

La situación permanecía estacionaria en el mes de febrero con motivo de la mayor incidencia del paro estacional y de la ausencia de labores en el campo. Todo ello manifestaba una especial incidencia en Andalucía:

“En la zona andaluza si se exceptúan los trabajos de escarda en terrenos más o menos montañosos, donde por su aridez es preciso cuidar más las plantas de invierno, no se verifica en la actualidad ninguna otra labor. Sin embargo, conviene anotar que los daños producidos en el olivar por las nevadas no alcanza la amplitud que en principio de mes dijeron tanto los labradores como otro personal técnico que a primera vista consideraron el daño considerable.”<sup>630</sup>

Por provincias, la mayor incidencia del paro agrario se daba en la olivarera Jaén con 18.083 parados. Le seguía Badajoz (9.714), Cádiz (8.444), Granada (7.525), Sevilla (5.704), Cáceres (5.583), Córdoba (5.562) y Málaga (5.007), todas ellas por encima de los cinco mil parados. Esta situación de aumento del desempleo iba a proseguir con su curva ascendente hasta finales



de marzo o principios de abril, momento en que entraban en período de relativa actividad otros cultivos, concretamente los derivados de la siembra de primavera. En líneas generales, la situación, sobre todo para los trabajadores del campo, había empeorado con respecto a febrero del año anterior por los motivos expuestos habiéndose agravado aquélla por la limitación de terrenos para el cultivo de la remolacha.

El caso de Cáceres puede ser de los más instructivos para observar el déficit crónico de ofertas de empleo fruto del predominio del monocultivo y el latifundio. Esta provincia tenía 1.994.000 hectáreas de superficie; de ellas se cultivaban 398.800 (alrededor del 20 %) con un censo agrícola de 133.777 trabajadores. Si tenemos en cuenta que éstos, a 300 jornadas anuales, suponían un total de 40.133.100 jornadas que representarían 321.064.800 horas de trabajo (suponiendo que trabajaran exclusivamente ocho horas diarias), observaremos que al repartir las horas de trabajo entre las necesarias para la ocupación de todos ellos nos encontramos unas 805 horas de trabajo por hectárea "y siendo necesarias para ocupar a un operario 2.400 horas de trabajo por año, ocurre que cada hectárea de tierra de Cáceres representa la ocupación de un bracero durante unos 100 días."<sup>631</sup> Y todo ello sin que tengamos en cuenta la gran cantidad de población campesina que no figura en las estadísticas oficiales por haber buscado en el servicio doméstico o análogos una forma de llevar un jornal al hogar librando a dichas estadísticas de este duro peso y de la carga política que supondría elevar hasta cifras astronómicas la verdadera realidad de Cáceres y de la región extremeña.

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
marzo	98.922	53.261	45.825	77.090	176.012 <sup>632</sup>

\*Cuadro n° 55. Parados en marzo de 1954.

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
abril <sup>633</sup>	90.546	48.332	42.214	75.387	165.933 <sup>634</sup>

\*Cuadro n° 56. Parados en abril de 1954.

Comparando el mes de marzo y abril, observamos que el descenso tanto de las cifras oficiales como de las estimadas se debía al hecho de que en el campo había comenzado la escarda y la poda de viñas en las zonas más templadas, así como otro tipo de labores más eventuales. Las perspectivas eran en este momento muy positivas hasta el punto de que se hacían aseveraciones del siguiente tipo:

"...en las zonas más cálidas las espigas están en pleno desarrollo, esperándose...que la actual cosecha será una de las mayores del siglo..."<sup>635</sup>

Por provincias (en el mes de abril) Jaén tenía en su campo 15.818 parados, Badajoz (9.422), Cádiz (8.234), Valencia (6.709), Málaga (5.890) y Córdoba (5.854). De la envergadura del paro en este mes da muestra uno de tantos informes que nos permiten contrastar las cifras oficiales con las que se consideran más reales o más aproximadas a la realidad. En este caso haremos alusión al *Informe sobre el paro en la provincia de Córdoba* que elaboró la Delegación Provincial de esta provincia a finales de abril de 1955. En dicho informe se alude a la incidencia, no sólo en este rincón de España, del proceso de mecanización y de racionalización de las labores agrícolas como factor que estaba incidiendo de forma sustancial en las cifras del paro estacional, transformando éste en permanente. De ello se deducía la mayor incidencia relativa del desempleo entre los meses de septiembre a octubre y de marzo a abril. Lo relevante vuelve a ser la zanja entre la realidad estimada (más próxima a la real) y la oficial. Teóricamente en abril de 1955 existían en la provincia de Córdoba 8.761 parados.<sup>636</sup> La Delegación Provincial estimaba que dichas cifras eran radicalmente falsas y que la cantidad rondaba los 16.000 lo cual suponía una diferencia de más de un 82 %.<sup>637</sup>

Efectivamente el paro agrícola había comenzado a descender, siendo previsible su intensificación por el comienzo de la siega de los cereales, habiéndose iniciado ya la de la cebada en algunas comarcas de zonas templadas. Pese a ello la situación en términos de colocación obrera era peor que en el año 1953.<sup>638</sup>

En cuanto a la actividad comercial lo característico seguía siendo la falta de ventas dada la incompatibilidad entre el poder adquisitivo de los trabajadores y el elevado coste de la vida. Ese era el principal motivo de que la cifra de los parados en dicho sector se mantuviera más o menos estacionaria.

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
mayo <sup>639</sup>	73.876	41.735	32.141	72.341	146.217 <sup>640</sup>

\*Cuadro n° 57. Parados en mayo de 1954.

El descenso del paro agrícola en el mes de mayo, no por ello superior al de mayo de 1953, se debía al "magnífico"<sup>641</sup> aspecto de los sembrados y sobre todo a los cereales cuya cosecha se preveía extraordinariamente abundante hasta el punto de considerarse como la mejor desde la

terminación de la guerra civil y una de las mejores del siglo sobre todo por la mayor cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo del cereal. Por provincias, Jaén continuaba a la cabeza del paro agrícola con 16.851 parados seguida de Cádiz (6.671), Málaga (6.053), Valencia (5.560), Córdoba (5.277) y Badajoz (5.000). Este descenso en el paro agrícola se traducía también en una incidencia pronunciada en el sector de la construcción dado el elevado número de agricultores que en este momento se daban de baja en el censo de dicho sector al intensificarse las tareas de la recolección. Las perspectivas eran tan exageradamente positivas que se esperaba que el paro en el campo desapareciese totalmente y que incluso en provincias muy cerealísticas fuera preciso "efectuar traslados de productores de aquellas zonas en que existiese mano de obra en paro."<sup>642</sup>

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
junio <sup>643</sup>	59.211	33.766	25.445	70.792	130.003 <sup>644</sup>

\*Cuadro n° 58. Parados en junio de 1954.

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
julio <sup>645</sup>	61.391	38.086	23.305	70.755	132.146 <sup>646</sup>

\*Cuadro n° 59. Parados en julio de 1954.

Todas las perspectivas excepcionalmente positivas que a principios de año se daban en el ámbito de la agricultura se tomaron en negros nubarrones en el verano. En el informe del mes de julio del Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación se afirmaba lo siguiente:

"...se ha producido un fenómeno anormal en el presente año y lógicamente en algunas provincias por no haberse podido emplear mayor cantidad de productores, debido al empleo, cada vez en mayor número de maquinaria agrícola."<sup>647</sup>

Lógicamente el empleo progresivamente creciente de tractores y el comienzo en la fabricación de dichas máquinas en estos años cincuenta reducía el número de obreros. Y ello porque al utilizar dicha maquinaria, la recolección se iba a realizar en un menor número de días dándose el caso "de que en algunos pueblos, determinado número de dichos obreros no han trabajado una sola jornada en todo el verano."<sup>648</sup> Pese a ello en las provincias eminentemente cerealísticas castellanas sí había sido preciso buscar mano de obra y autorizar el traslado de trabajadores de otras provincias (sobre todo segadores) para realizar a tiempo las tareas de siega. Así pues, el

problema de la entrada de máquinas en el campo español no era especialmente grave en Castilla y sí en Extremadura y Andalucía, fruto del aumento del número de máquinas cosechadoras:

“...pues a pesar de las disposiciones dictadas para aquellos agricultores que empleen medios mecánicos y por las que se asignan un número determinado de obreros a cada una de ellas, estas disposiciones son burladas en la mayoría de los casos y como consecuencia de ello se hace presente un paro tecnológico que hace preciso la reeducación de estos trabajadores y un severo estudio para evitar en próximos años un problema de paro de gran envergadura.”<sup>649</sup>

Y todo ello, pese a que la recolección resultaba más económica para el empresario, sin que repercutiera de forma significativa en la bajada de los precios con el consiguiente perjuicio para estos trabajadores del campo que veían disminuir el número de jornadas laborables y que a la vez no veían disminuir los precios en forma proporcional al descenso de su capacidad adquisitiva. Así pues Jaén<sup>650</sup> seguía al frente de las provincias con mayor paro agrícola con 16.261, seguida de Badajoz (6.962), Córdoba (5.370), Málaga (4.695), Zaragoza (4.281) y Cádiz (4.183).

La situación de Jaén<sup>651</sup> puede constituir un modelo para mostrar como vivían aquellas provincias andaluzas ligadas al monocultivo (en este caso del olivar) y las consecuencias negativas que ello tenía a nivel de empleo. El Consejo Económico Sindical de esta provincia manifestaba que uno de los déficits más grandes de Jaén consistía en la inexistencia de ahorro y en su falta de crecimiento en forma proporcional al volumen de población que en estos momentos se cifraba en 770.081 con un censo aproximado de 238.700 trabajadores (según la ponencia en realidad dicha cifra pasaría escasamente de los 167.000) pese a lo cual lo verdaderamente relevante era la irregularidad de la oferta estacional de trabajo.

Este marco era el que hacía que el paro avanzara a medida que lo hacía la primavera para disminuir algo a partir de julio y de nuevo elevarse desde agosto con un máximo entre octubre y noviembre. Aunque pudiera parecer innecesaria, descrito este panorama, otro problema añadido era la emigración estacional de peones provenientes de provincias como Soria o Guadalajara que se desplazaban a Jaén en la época de la recolección de la aceituna. Y no tanto porque casi el 50 % de la superficie cultivada de la misma se dedicara a dicho cultivo, sino porque en términos como Orcera, Torres de Albarsánchez y Carchelejo el olivo ocupaba más del 95 % del terreno cultivable por lo cual en dichos pueblos se recurría “a la contratación de mano de obra forastera en cuantía que no tenemos elementos de juicio para fijar pero que posiblemente oscilaba para toda la provincia entre 5.000 y 15.000 trabajadores.”<sup>652</sup> No obstante, hay que decir que ello quedaba compensado por la afluencia de peones jienenses para realizar la siega y

la recolección de cereales durante los meses de agosto a Castilla y para la recolección del arroz en Sevilla en octubre.

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
agosto <sup>653</sup>	77.210	44.553	32.657	71.656	148.866 <sup>654</sup>

*\*Cuadro n° 60. Parados en agosto de 1954.*

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
septiembre <sup>655</sup>	89.613	51.688	37.925	70.868	160.481 <sup>656</sup>

*\*Cuadro n° 61. Parados en septiembre de 1954.*

La tendencia al alza del paro se palpa más acusadamente en este mes de septiembre. Globalmente la cifra oficial se situaba en 122.556 parados. Se entraba por tanto en un período de incremento del paro estacional que se iba a incrementar hasta la siguiente primavera. A ello se añadía el problema secular de la sequía que podía incidir de forma doblemente negativa sobre el paro, dado que si continuaba se implantarían con mayor fuerza las restricciones de corriente eléctrica con el consiguiente aumento del número de parados. A ello había que añadir el establecimiento de jornadas y turnos de trabajo que vendrían a reducir todavía más los jornales de los trabajadores y su poder adquisitivo.

Por provincias, Jaén continuaba llevándose la palma en lo referente al paro agrícola con 19.230<sup>657</sup> parados seguida de Córdoba (10.040 transformados tras revisión posterior en 13.172), Málaga (8.694), Badajoz (8.428), Sevilla (6.214),<sup>658</sup> Cádiz (5.760) y Murcia (5.037). Sobre Córdoba hay que añadir que el número de parados se elevaba en realidad por encima de los 17.000 parados en el mes de septiembre únicamente en cuanto al paro rural se refiere. Éste se centraba esencialmente en Guajalcan, Montilla, Baena, Cabra, Puente Genil, Priego y Rute.<sup>659</sup> Tanto en Sevilla como en Córdoba se agudizaba el problema del paro a raíz del uso de maquinaria con la consiguiente reducción del número de jornadas de trabajo. Sólo lo positivo de las cosechas había permitido que momentáneamente el paro fuera mínimamente inferior al del año anterior o que se mantuviese estacionario con respecto al mismo.<sup>660</sup> Concretamente las perspectivas para la provincia sevillana eran sumamente negativas:

“Las perspectivas agrícolas no son muy halagüeñas ya que es de esperar que en el próximo mes quedará terminada parte de la recolección de aceituna de verdeo y como

las faenas de otoño, las realizan en buena parte los tractores, gradas, etc., la desocupación será mayor a no ser que, de continuar las actuales faltas de lluvia, se anticipe la recolección de aceituna de molino.”<sup>661</sup>

La preocupación del sindicato se producía por cuanto la combinación de cosechas no tan excelentes como se esperaban y el consiguiente paro generaban un ambiente político-social muy negativo para el prestigio de la organización sindical más si cabe cuando la propia organización era consciente de que “no se había hecho nada en absoluto para aminorarlo.”<sup>662</sup> Y así, tanto la población como los integrantes de los sindicatos tenían la percepción de que el Estado o sus instituciones dependientes no tenían la voluntad política de luchar de forma eficaz contra aquella lacra social.

Como ya se ha mencionado, Jaén era la provincia en que la situación seguía siendo más preocupante a lo largo de todo el año puesto que si de julio a marzo el paro se centraba en las tierras dedicadas a cereales en el caso de las dedicadas al olivo se hacía especialmente intenso de enero a noviembre. En septiembre de 1954 la C.N.S. de dicha provincia daba la cifra de 35.000 parados frente a los alrededor de veinte mil reconocidos oficialmente. En la primera de las cifras no se incluían a unos 10.000 desempleados que en las últimas semanas habían emigrado.<sup>663</sup> Ante dicho panorama el Delegado Provincial de Jaén, Cesar Gallo Arnedo, elevaba el 3 de septiembre de 1954 al Secretario Nacional de Sindicatos un informe del cual hemos extraído unas líneas excepcionalmente significativas en la medida en que proyectaban la realidad de la situación socioeconómica de esta provincia que tampoco se solucionaba con el llamado Plan Jaén:

“...ante la terrible experiencia del año 1945, en que fueron varios los miles de fallecidos por inanición...Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el nivel de vida y la situación de millares de hogares sigue siendo francamente casi inhumana...se ven forzados a vivir constantemente con gentes desesperadas y hambrientas,...pero pese a que nuestro Caudillo y su gobierno, comprendiendo la gravedad del caso, han aprobado y puesto en práctica el Plan de Industrialización, Electrificación y Riego de Jaén, la verdad es que, según personalmente voy viendo, el aumento constante de la población, la mecanización del campo (que comprendo de absoluta necesidad si se quiere producir más y más barato, aunque incidentalmente esto produzca menos ocupación de mano de obra) y otros factores, como decía antes, absorben casi por entera la mano de obra que la implantación por el Plan de nuevos regadíos supone anualmente, encontrándonos, en definitiva, con el mismo exceso de mano de obra que antes teníamos...También es cierto que las obras de construcción de acequias de riego, nuevos poblados, pantanos, etc., dan ocupación eventual a centenares y aun quizás millares de brazos, pero no lo es

menos que estos trabajos resuelven sólo el problema de varios pueblos cercanos al lugar donde se realizan las aludidas obras...pero la inmensa mayoría de los habitantes de los demás pueblos, continúan, desgraciadamente en la misma situación..."<sup>664</sup>

Por provincias, e integrando el paro agrícola con el industrial, podemos citar la gravedad del problema de Almería en la que el desempleo registrado oficialmente en el ámbito agrícola se debía sobre todo a la escasez de lluvias y de infraestructuras para captar las pocas precipitaciones existentes, a la deficiente calidad de los materiales y utillajes empleados en los cultivos y a la falta de abonos que hacían de esta provincia una de las más deprimidas en cuanto a la agricultura se refiere. En cuanto a la pesca, el paro registrado en esta misma provincia se debía a la ineficacia de la explotación, dado que los equipos de sus barcos eran excepcionalmente antiguos, y a la ausencia de materias primas básicas como redes, hilo sisal, etc.<sup>665</sup>

La situación de Barcelona se veía agravada como consecuencia de la constante emigración de trabajadores sin cualificación alguna procedentes del campo y cuya colocación, necesariamente, se realizaba en el peonaje de la construcción, incrementándose las cifras de paro en dicho sector. Este no era un problema únicamente de la mencionada provincia. Sobre el paro en Gerona Redondo Gómez realizaba la siguiente aseveración:

"En cuanto a los grupos profesionales, el más afectado por el paro es el correspondiente a las industrias de la construcción, que obedece, en primer lugar, a la afluencia de productores procedentes del Sur de la Península, y, en segundo, a la resistencia que oponen las empresas a ocupar el personal no especializado, casado y con hijos."<sup>666</sup>

La gran dicotomía entre el mundo minifundista y el latifundista, entre la España del Norte y la del Sur seguía presente, muy especialmente en el ámbito agrícola. En el Norte se podía afirmar, ciertamente de forma metafórica, que la consecuencia de la parcelación era tan antieconómica que era prácticamente imposible que una sola gota de agua pudiera caer en el terreno de un único propietario. Obviando la exageración se calculaba que podía hacer perder alrededor de 4.000 millones de pts. al año:

"...para hacerse una clara idea del parcelamiento de los terrenos, principalmente en el Norte de España, que una gota de agua es imposible que pueda caer en una sola parcela de terreno...Se puede afirmar que de cada cien explotaciones agrícolas más del setenta por ciento están subdivididas en multitud de pequeñas fincas en que la mayoría de los casos no llegan a ocupar un área de terreno."<sup>667</sup>

Por el contrario, en el sur lo que formalmente se echaba de menos era la parcelación del terreno. Y digo formalmente porque, de hecho, la política del Instituto de Colonización no tenía esta misión, lo cual daba lugar a manifestaciones, siempre formales, de la organización sindical en el sentido de que la solución del campo andaluz había de venir por dicha vía:

“La necesidad (*la de la parcelación*)<sup>668</sup> de esta obra se hace cada día más perentoria, ya que año tras año la cruda realidad de los obreros agrícolas, no ha recibido el remedio de una política eficaz y eficiente a pesar de los esfuerzos que realiza la Organización sindical por medio de la Hermandad de Labradores y Ganaderos...una vez reconocida la incongruencia y los perjuicios de esta subdivisión...”<sup>669</sup>

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
octubre <sup>670</sup>	115.192	59.633	55.559	73.436	195.972 <sup>671</sup>

\*Cuadro nº 62. Parados en octubre de 1954.

En este caso el incremento del paro estimado sobre el oficial suponía “únicamente” un 47,2 %. En lo referente al paro agrícola el aumento se debía al final de las labores del campo agravándose esta situación por la sequía que había retrasado las operaciones de siembra y otros trabajos. De igual manera, en Andalucía la recogida de las aceitunas para molienda se había retrasado por la falta de humedad en la tierra con el problema de que, dada dicha situación, era necesario iniciar de forma masiva la recogida para evitar la pérdida de frutos que caían a la tierra por falta de savia. Todo ello presentaba un panorama muy similar en las provincias del norte, pero especialmente preocupante en Andalucía y Extremadura, puesto que las medidas para evitar el paro tecnológico por uso de maquinaria eran sistemáticamente violadas por los grandes propietarios con el consiguiente perjuicio para los peones.<sup>672</sup> Jaén<sup>673</sup> estaba a la cabeza de las provincias más perjudicadas por el paro agrícola con 20.196 desempleados; la seguían, en orden decreciente, Sevilla (17.466), Málaga (12.401), Córdoba (10.925) y Badajoz (9.061).<sup>674</sup> Aparte del número de parados es de notar que se preveía, como luego así sucedió, que el número de jornadas trabajadas por los obreros del campo que lograran empleo serían muchas menos que en años anteriores, caso concreto de la recolección de la aceituna:

“Por ello la falta de lluvias ha ocasionado en gran parte esta diferencia de parados en relación con el año anterior y no sólo perjudicará a la producción de aceituna sino que también el número de jornadas de trabajo serán mucho menor que en años anteriores, pues gran parte del fruto se cae al suelo antes de madurar, por cuyo motivo y para impedir que el mismo se pudra, de continuar éstas condiciones atmosféricas se iniciará



la campaña de recolección de aceitunas para molienda en los próximos días del mes de noviembre.<sup>675</sup>

En definitiva, si la situación no se presentaba de forma muy negativa en las provincias más cerealísticas de España, y concretamente en Castilla, en un sentido amplio la situación era muy distinta y realmente negativa en las provincias eminentemente productoras de aceite.

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
noviembre <sup>676</sup>	108.883	58.356	50.527	75.511	191.953

\*Cuadro n° 63. Parados en noviembre de 1954.

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
diciembre <sup>677</sup>	108.883	58.356	50.527	75.511	191.953

\*Cuadro n° 64. Parados en diciembre de 1954.

Como en el mes anterior, en noviembre, las tareas no se realizaban con normalidad, lo cual estaba originando que el paro siguiera siendo bastante elevado si se comparaba con el año 1953.<sup>678</sup> Lógicamente en este mes de noviembre el paro había de bajar en las provincias olivareras pese a lo cual se era consciente de que la oliva iba a ser recolectada en poco tiempo y que el aceite que se iba a producir iba a ser de gran densidad perjudicando tanto al almazarero y como al molinero dado que la falta de lluvias había impedido que el fruto se desarrollara con normalidad. "Por tanto podemos conceptuar el presente año como desfavorable para el industrial aceitero como consecuencia lógica del aumento en las cifras de paro agrícola,"<sup>679</sup> se afirmaba desde el S.N.E.C.

Sin embargo, la peor parte se la iba a llevar el jornalero de cuya situación poco se sabía si partimos del hecho de que el S.N.E.C. a finales del año 1954 barajaba entre sus valoraciones que los datos estadísticos conocidos sobre Badajoz, Cádiz, Huelva, Ciudad Real,<sup>680</sup> Granada, Guadalajara, Logroño, Málaga, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, Valencia y Zaragoza (al menos) eran erróneos por defecto y que, por tanto, minimizaban sistemáticamente el peso del desempleo. Obviando este hecho, Jaén<sup>681</sup> persistía al frente de las provincias con más paro agrícola con 19.410 desempleados. Era seguida por Málaga (12.024), Córdoba (10.066), Sevilla (9.837) y Badajoz (9.593).

Evidentemente, la falta de agua tenía que incidir de forma muy decisiva en esta situación y si en el campo se reducían las jornadas de empleo en las fábricas el resultado había de ser el trabajo por turnos y las jornadas reducidas, siendo Madrid una de las provincias más afectadas por dichas restricciones si bien tanto esta cuestión como el paro en sentido general afectaba de forma muy inferior a la normal al grupo de los llamados ex-combatientes. Y ello porque el paro registrado de excombatientes era únicamente el 0,5 % del total. En líneas generales, como en el caso de Cataluña, el problema de la provincia de Madrid se debía a la inmigración incesante agravada por la carestía de los materiales de construcción y a la falta de materias primas básicas para la industria. Era esa inmigración masiva la que generaba un desajuste significativo entre la mano de obra cualificada y el peonaje sin especialización que dificultaba la ampliación de plantillas.

Provincia	Parados oficialmente reconocidos en 30 de junio de 1955	Parados oficialmente en 31 de diciembre de 1955
Álava	18	15
Albacete	556	1.282
Alicante	3.177	3.194
Almería	3.478	3.556
Ávila	101	3.298
Badajoz	1.881	2.966
Baleares	437	537
Barcelona	7.394	6.163
Burgos	104	74
Cáceres	3.689	7.458
Cádiz	7.809	7.265
Castellón	1.451	2.060
Ciudad Real	497	778
Córdoba	4.033	5.827
Coruña (La)	4.605	3.515
Cuenca	529	608
Gerona	1.471	1.546
Granada	1.171	2.200
Guadalajara	20	258
Guipúzcoa	173	218

Huelva	1.988	2.094
Huesca	20	41
Jaén	14.707	15.063
León	480	352
Lérida	135	140
Logroño	162	117
Lugo	193	287
Madrid	11.558	9.989
Málaga	6.434	6.930
Murcia	3.348	3.706
Navarra	111	168
Orense	108	252
Oviedo	686	673
Palencia	106	174
Palmas (Las)	1.527	1.636
Pontevedra	713	833
Salamanca	1.041	1.445
S. C. Tenerife	519	575
Santander	253	124
Segovia	65	366
Sevilla	4.402	5.538
Soria	8	5
Tarragona	469	474
Teruel	61	266
Toledo	144	526
Valencia	3.223	3.573
Valladolid	635	1.094
Vizcaya	85	103
Zamora	104	424
Zaragoza	738	723
Manizcos	763	698
TOTAL	97.558	111.207

\*Cuadro nº 65. Paro oficial el 30 de junio y el 31 de diciembre de 1955.

Mes	Paro oficial	Paro estimado	Diferencia en % entre el paro oficial y el estimado
enero <sup>682</sup>	125.289	175.119 <sup>683</sup>	39,7
febrero	129.522	196.159	51,4
marzo	127.590	186.423	46,6
abril	118.713	167.718	41,2
mayo	104.197	144.551	38,7
junio	97.380	130.531	34
julio	98.915	133.006	34,4
agosto	102.510	144.120	40,5
septiembre	106.618	154.921	44,5
octubre	111.626	166.017	48,7
noviembre <sup>684</sup>	111.644	161.274	44,4
diciembre	111.207	160.803	44,5

\*Cuadro n° 65. Paro mensual oficial, estimado y diferencia en % entre ellos.

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
enero <sup>685</sup>	96.346	53.694	42.652	75.272	179.145 <sup>686</sup>

\*Cuadro n° 66. Parados en enero de 1955.

En este mes de enero de 1955 era nota destacada el hecho de que tanto en la industria como en el comercio persistían los mismos problemas por las restricciones de fluido eléctrico que afectaban en su totalidad a todas las provincias. La percepción sobre la posible evolución del desempleo era bastante negativa por cuanto a finales de este año el jefe nacional del S.N.E.C. exponía su visión sobre la evolución que iba a sufrir España contradiciendo lo que las cifras oficiales mostraban al país:

"La trayectoria nos parece clara, de manera que no se necesita acudir al espíritu profético para asegurarse de que la curva de paro en España ha de seguir un camino ascendente contra el que hay que precaverse tomando las oportunas medidas preventivas."<sup>687</sup>

Es de suponer, pues, que por las diversas causas tecnológicas y económicas, y las permanentes estacionales y climatológicas el paro en España no puede ser reducido en su porcentaje actual, sino que más bien tenemos que afrontar para los años venideros un aumento en el paro cuya curva ascendente es imprevisible,...<sup>688</sup>

El sector más afectado por sus consecuencias era el de la construcción seguido de las industrias agrícola-forestales. Precisamente, para luchar contra este problema de las restricciones eléctricas se firmó en noviembre de este año 1955 un contrato entre Iberduero, Fenosa y Saltos del Sil con Electricité de France (contrato más conocido como Hispamelec) en virtud del cual las empresas españolas habían de suministrar energía a Francia durante los meses de noviembre a abril. Por el contrario, de mayo a octubre era Francia la que proporcionaba fluido eléctrico a España.<sup>689</sup> Era esta una de las formas de luchar contra el déficit de energía eléctrica que comenzó en los años cuarenta. Los aumentos de la oferta no se produjeron con claridad más que a partir de 1954. Más concretamente, fue en este período en el que empezaron a notarse los efectos de la política de creación de centrales térmicas e hidroeléctricas.<sup>690</sup>

En cuanto al paro agrícola, Jaén encabezaba las provincias con más desempleo con 13.726 parados registrados,<sup>691</sup> seguida de Sevilla (8.724), Málaga (8.442), Badajoz (7.397), Cádiz (6.673) y Cáceres (6.313). Hay que destacar que en las provincias eminentemente cerealísticas se registraba un paro muy similar al de años anteriores ya que gran parte de los peones agrícolas habían encontrado ocupación en la construcción de viviendas lo que motivaba la absorción artificial del censo de parados:

“...es de significar que en casi todas las provincias se llevan a buen ritmo numerosas construcciones, tanto particulares como estatales, provinciales o municipales, lo que da lugar a la absorción de la casi totalidad de los especialistas en este importante Grupo Profesional, por cuyo motivo la cifra mayor de paro corresponde a personal no especializado.”<sup>692</sup>

El caso de Cáceres puede ser indicativo de la necesidad de una reestructuración de la propiedad como uno de los factores necesarios para reordenar el territorio y la riqueza de una provincia. Y es que las supuestas medidas de protección al agricultor no daban resultados positivos. Concretamente la Orden del ministerio de Agricultura de 3 de febrero de 1949 establecía la obligatoriedad de las labores de escarda empleando un número mínimo de jornales. Por cada hectárea sembrada de trigo habían de utilizarse de 8 a 20 jornales y 6 para cada hectárea sembrada de otro cereal o leguminosa.

Pese a ello, en 1955 3.956 familias abandonaron la provincia. En toda la primera mitad del siglo XX el incremento de su población fue muy reducido siendo sistemática la emigración. En esos cincuenta primeros años, mientras que Badajoz crecía a un ritmo del 1,14 % y Jaén lo hacía al 1,23 %, Cáceres únicamente situaba su crecimiento en el 1,03 %. La población laboral estimada a finales de estos años cincuenta era de algo más de 180.000 personas, de las que un 80 % (unas 144.000) se dedicaban a la agricultura o la ganadería. El estudio del que nos valemos constata el hecho de que el Gobierno era consciente de que “unas 58.600 familias vivían de salarios o ingresos insuficientes o discontinuos”<sup>693</sup> con unos salarios sumamente bajos determinados, para las actividades agrícolas, forestales y ganaderas, por la Orden de 26 de octubre de 1956 que estipulaba un salario mínimo para los trabajadores en secano y regadío intensivo de 24 pts. y en labores de huerta de 28,80 pts. diarias. Para los temporeros eventuales la cantidad era de 30 pts.

Aparte de esta cuestión, un problema esencial que perduraba en Extremadura era el de los yunteros que trabajaban en régimen de aparcería. Estos agricultores normalmente trabajaban en régimen de rotación y no labraban dos años seguidos las mismas tierras por lo cual no gozaban de las condiciones típicas de los colonos y arrendatarios. Sus contratos, comúnmente, eran verbales pese a lo cual se consideraban colonos fijos. Con la II República los contratos de arrendamientos rústicos fueron revisados lo cual generó demandas de arrendatarios y aparceros a los Jurados Mixtos de la Propiedad Rústica sobre los propietarios con el fin de rebajar las rentas que satisfacían. Terminada la guerra y con la posibilidad de la revisión de los contratos por parte de los propietarios se fue produciendo de forma paulatina el desahucio y la expulsión de estos trabajadores del campo en función de lo determinado por la Ley de 15 de marzo de 1935, cuyo artículo 49 estipulaba que las aparcerías concertadas voluntariamente duraran, como mínimo, una rotación de cultivo, sin derecho a prórroga más que por voluntad expresa de ambas partes, lo cual posibilitaba que el aparcerero fuera expulsado al terminar la rotación. En el mejor de los casos, al amparo de las nuevas leyes, los propietarios transformaron los antiguos contratos verbales en contratos escritos de renta mucho más alta con los consiguientes desahucios posteriores por falta de pago. “Esa situación la agravó la Ley de 23 de julio de 1942 sobre arrendamientos de fincas rústicas, ya que con ella se inició la ejecución de las sentencias de desahucio en suspenso por el Decreto del ministerio de Agricultura de 1940 y 1941.”<sup>694</sup> Todo ello lo que determinaba era un futuro negro para los yunteros y su evolución hacia la situación de braceros dado que “en Cáceres más del 64 % de la superficie total catastrada estaba en manos de 853 propietarios, con una superficie media de 870 has. por propietario.”<sup>695</sup>

La consecuencia inmediata de ello era que “el cultivo directo de las fincas por sus propietarios y la mecanización del campo, puede decirse que casi en su totalidad, había motivado la extinción de este modesto labrador, que al tener que vender sus yuntas y útiles de trabajo, por no tener

donde emplearlos, había engrosado el censo de braceros, aumentando el paro endémico campesino que siempre había azotado esta aparte de Extremadura.”<sup>696</sup>

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
febrero <sup>697</sup>	111.406	52.473	58.933	77.049	188.455 <sup>698</sup>

\*Cuadro n° 68. Parados en enero de 1955.

En el marco del desempleo agrícola el incremento con respecto al mes anterior era debido a que el mes de febrero constituía un período de transición entre la recolección de la aceituna y el principio de las labores de primavera. Un factor que incidía de forma especial en que dicha tendencia se viera incrementada era el hecho de la reducción de los trabajos de repoblación forestal, así como al incremento del uso de maquinaria agrícola.<sup>699</sup> En este mes nos encontramos con que, excepcionalmente en relación a la tendencia, Sevilla<sup>700</sup> ocupaba el primer lugar en cuanto al desempleo rural con 17.959 parados (si bien las cifras oficiales ofrecían la cifra de 9.121), seguida de Jaén (15.491), Granada (11.271), Cádiz (8.864),<sup>701</sup> Málaga (7.998) y Badajoz (6.500). Resulta desproporcionado, pero a la vez indicativo, que en torno a la realidad de la provincia de Toledo podamos citar como cifra oficial de parados la de 514 en el mes de febrero y que por otro lado podamos encontrar un parte de la Delegación Provincial Sindical de Toledo en el que la cifra se sitúa en los 20.000.<sup>702</sup>

Por otro lado, en cuanto al control efectivo de los parados en el campo, las provincias cuyas cifras oficiales y estimadas se consideraban más alejadas de la realidad eran Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Granada, Guadalajara, Huelva, Logroño, Málaga, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, Valencia y Zaragoza.

En lo tocante al resto de España, Madrid tenía reconocidos 16.102 parados oficialmente. La mayoría de ellos pertenecían a los sectores de la construcción, seguros, oficinas y comercio en general. “El paro en estas industrias resulta muy difícil su eliminación, dado que en el primero de ellos la mayoría de los inscritos corresponden a peonaje en general, sin especialización de ninguna clase; en el segundo, por carecer casi todos ellos de aptitudes profesionales para desempeñar los puestos que solicitan y el tercero por la escasez de ofertas, motivadas por las restricciones de fluido eléctrico que le fueron impuestas en meses pasados y que produjeron la reducción de su personal,”<sup>703</sup> consideraba el S.N.E.C.

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
abril <sup>704</sup>	87.245	45.655	41.590	73.158	167.718

*\*Cuadro n° 69. Parados en abril de 1955.*

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
mayo <sup>705</sup>	69.523	35.989	33.534	68.208	144.551

*\*Cuadro n° 70. Parados en mayo de 1955.*

Como todos los años, en el mes de mayo las cifras globales de paro bajaban. En lo que se refiere al paro agrícola Jaén estaba de nuevo a la cabeza con 14.862 parados seguida de Murcia (7.245), Málaga (6.963), Cádiz (6.290) y Zaragoza (4.282). Pese a ello hay que señalar que el descenso global estaba muy influido por el descenso no sólo en el ámbito rural sino en el del trabajo industrial, dado que la baja en dicho sector indicaba que los que hasta ese momento podían estar inscritos como parados ahora formaban parte de los trabajadores activos del campo español. La causa del excesivo peso del paro en el sector agrícola en este mes de mayo obedecía a que no se habían iniciado con total intensidad las faenas de recolección y siega de los cereales en algunas provincias. Por el contrario, en líneas generales, en la mayoría de Andalucía había bajado por el adelanto de la recogida de los frutos y ello era debido a los calores habidos en el mes de abril los cuales habían producido una granazón prematura de los cereales. Ello necesariamente implicaba que el desarrollo no podía ser óptimo y que la mayoría de los sembrados presentarían un aspecto deficiente en cuanto a la cantidad de grano por espiga.

A nivel general destacaba la tendencia alcista de provincias como Alicante en las que se estaba dejando notar el incremento del desempleo en fábricas de zapatos como las de Elda. El paro en esta industria estaba determinado en gran parte por las "trabas o inconvenientes con que tropezaban los productores de mercancías destinadas a la exportación."<sup>706</sup> En Badajoz, la ligera mejoría puede atribuirse a la incidencia del Plan Badajoz. En Madrid, la tendencia a la baja era debida a la moderada recuperación del sector industrial al llegar a su fin las restricciones de fluido eléctrico. En el caso de Zaragoza, "únicamente el paro industrial había reducido sus censos de paro, correspondiendo, la mayoría de los colocados a industrias de la Construcción en cuyo Grupo Profesional podía considerarse como nulo, ya que los que permanecían inscritos en paro, lo componían productores que por diversas causas, de orden físico, moral y profesional hacían muy difícil su colocación."<sup>707</sup> Junto a estos casos merece especial atención el de Córdoba, provincia en la que a pesar de declararse oficialmente la existencia de 6.903 parados



en el mes de septiembre nos encontramos con la realidad de que la cifra real debía rondar los 15.000<sup>708</sup> tan sólo en el ámbito agrícola, dado el final de las tareas de recolección de cereales y leguminosas. Como casi siempre, la solución se encontraba en la creación de caminos rurales, en la repoblación forestal y en el incremento de las subvenciones de la Comisaría Nacional del Paro además de alguna solución menos convencional como la que a continuación se expone por demanda de la Delegación Sindical de Córdoba:

“Desplazamiento de la mayor parte posible de esta mano de obra vacante a las obras que se están efectuando en la Base de Rota o en otras similares, que requieran el adecuado empleo de braceros.”<sup>709</sup>

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
octubre <sup>710</sup>	92.998	46.430	46.568	65.196	166.017

\*Cuadro n° 71. Parados en octubre de 1955.

mes	paro agrícola estimado	paro agrícola registrado oficialmente	paro agrícola sin controlar oficialmente	paro industrial	paro total general estimado
noviembre <sup>711</sup>	88.886	47.096	41.790	64.548	161.274

\*Cuadro n° 72. Parados en noviembre de 1955.

En noviembre, únicamente en cuanto al paro agrícola se refiere, la única provincia que sobrepasaba la cifra de 10.000 parados era Jaén con 17.178, seguida de Málaga con 9.896, Granada con 7.312 y Badajoz con 7.059 parados. La bajada en el ámbito agrícola estaba muy influida por la recogida de la aceituna, sobre todo de molienda. Pese a ello las lluvias del otoño habían ocasionado la caída de una cantidad importante de fruto lo cual iba a originar una pérdida también significativa en la cantidad de los jornales “ya que en vez de ser pagados estos trabajos a destajo, al no alcanzar los obreros el mínimo imprescindible de recogida de aceitunas, eran contratados por jornales fijos”<sup>712</sup> lo cual por sus negativas consecuencias sociales había de tener mayor trascendencia por cuanto se estimaba que en 1955-56 la cifra de personas dependientes del olivar en toda España ascendía a 521.250.<sup>713</sup>

El paro industrial se mantenía ligeramente estacionario como consecuencia de los trabajos que se estaban realizando en el campo y fruto de la absorción de gran número de peones de industrias como la de la construcción, lo cual conducía a pensar que “...las perspectivas del paro en general, en el presente mes, eran favorables.....”<sup>714</sup> Ello no podía responder de forma veraz a

la realidad dado que, de forma paralela, se evidenciaba el hecho de que la sustitución de los trabajadores del campo por máquinas era lenta pero que avanzaba sin pausa, lo cual, de forma paulatina, estaba dejando proporcionalmente a más peones sin empleo. Pese a ello, si tomamos como referencia las diferencias anuales medias de paro, la situación había mejorado con respecto al año 1954. La media de dicho año era de 122.603 parados oficiales, mientras que en el año 1955 dicha media estaba en 112.109. Ello suponía un descenso del 9,3 %. Provincias de excepcional peso económico a nivel nacional como Madrid se encontraban en este mes de noviembre con 9.134 parados oficialmente reconocidos cuando en el mismo mes del año anterior la cifra se situaba en 14.289. Todo ello parecía indicar que, en parte, la actividad económica iba recuperando vitalidad y que paulatinamente empezaba a adquirir un desarrollo y desenvolvimiento más aceptable y normal. Sin embargo, hay que considerar que de la comparación de la media mensual de paro oficial y estimada del año 1954 observamos que de los 122.603 parados oficialmente registrados a los 182.373 estimados existe un aumento del 48,7 %. Si comparamos los cifras del año 1955 llegamos a una conclusión similar. De la media mensual oficial de 112.109 pasamos a la estimada de 160.053 lo cual indica un aumento del 42,7 %.

Provincia	Parados oficialmente reconocidos en 30 de junio de 1956	Parados oficialmente en 31 de diciembre de 1956
Álava	16	13
Albacete	995	851
Alicante	3.734	2.669
Almería	4.088	3.912
Ávila	63	2.542
Badajoz	1.783	2.988
Baleares	447	551
Barcelona	6.106	5.846
Burgos	62	94
Cáceres	2.463	4.897
Cádiz	7.175	6.543
Castellón	1.881	2.585
Ciudad Real	500	608
Córdoba	4.190	4.693
Coruña (La)	3.618	3.217

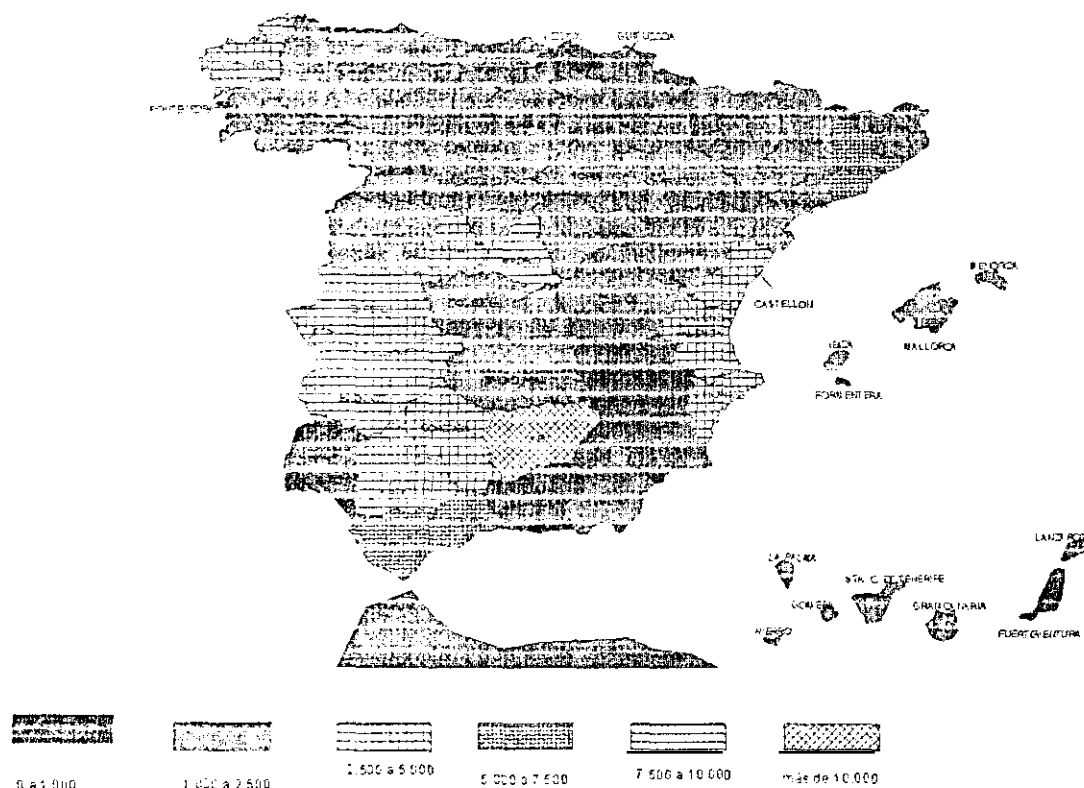
Cuenca	691	745
Gerona	1.211	920
Granada	1.563	2.005
Guadalajara	108	255
Guipúzcoa	255	201
Huelva	2.274	2.262
Huesca	21	23
Jaén	15.391	19.188
León	275	327
Lérida	183	163
Logroño	86	58
Lugo	437	521
Madrid	8.550	9.109
Málaga	7.266	6.455
Murcia	3.804	1.041
Navarra	116	138
Orense	140	179
Oviedo	708	697
Palencia	93	250
Palmas (Las)	1.923	2.016
Pontevedra	768	723
Salamanca	464	976
S. C. Tenerife	457	545
Santander	105	87
Segovia	321	201
Sevilla	5.335	4.904
Soria	4	13
Tarragona	566	472
Teruel	107	123
Toledo	81	305
Valencia	3.321	3.300
Valladolid	390	978
Vizcaya	92	59
Zamora	107	409
Zaragoza	610	545
Marruecos	653	477

TOTAL	95.597	102.679
-------	--------	---------

\*Cuadro n° 73. Paro oficial en 1956.

Mes	Paro oficial	Paro estimado	Diferencia en % entre el paro oficial y el estimado
enero <sup>15</sup>	114.908	166.775	45,1
febrero	119.071	203.705	71
marzo	121.735	207.384	70,3
abril	114.940	194.787	69,4
mayo	107.006	175.958	64,4
junio	95.597	149.978	56,8
julio	94.681	144.487	52,6
agosto	100.467	153.886	53,1
septiembre	101.263	155.290	53,3
octubre	97.768	153.693	57,2
noviembre <sup>16</sup>	100.530	153.543	52,7
diciembre	102.679	154.111	50

\*Cuadro n° 74 Paro mensual oficial, estimado y diferencia en % entre ellos.



*Mapa nº 4. Paro oficial en diciembre de 1956.*

La tónica general del año 1956 seguía la senda de 1955 pero empeorando los resultados en línea con el cambio de tendencia comenzado en 1954. La situación económica global no manifestaba diferencias notables con respecto al año anterior. Sobre la validez de las cifras del paro tomamos como referencia la valoración que sobre las estadísticas oficiales de diciembre de 1956 Riaza Ballesteros:

“Tenemos la impresión de que el paro real de nuestra agricultura es bastante superior al que se deduce de las estadísticas, es decir, los 42.631 parados en diciembre de 1956, en el sentido de que es una cifra muy superior la del grupo de trabajadores que no ingresan anualmente más salarios que los que obtienen por el trabajo realizado durante una tercera parte del año, si bien estas jornadas de trabajo estén distribuidas a lo largo del año agrícola.”<sup>717</sup>

En este mismo sentido Manuel de Torres juzga que la economía española estaba mermada por sus embotellamientos, que era deficitaria en minerales y materias primas para el sector de la construcción, entre otros, todo lo cual se veía empeorado por el carácter de exportador de materias primas que tenía nuestro país situándose en una situación “autofágica.”<sup>718</sup>

Sí hay que destacar el hecho de que de manera paralela al empeoramiento de la situación económica y al descenso oficial de las cifras de paro la realidad mostraba un signo opuesto. Es decir, la media mensual oficial de paro del año 1956 se situaba en los 105.887 parados. La media estimada estaba en 167.799. Es decir, si en el año 1954 el tanto por ciento en que había que elevar la cifra de paro oficial era de un 48,7 % y en 1955 esa diferencia era de un 42,7 %, en el año 1956 (a medida que la situación empeoraba) la diferencia ascendía a un 58,4 %, poniendo de manifiesto la utilización política de la verdadera situación sociolaboral de los españoles a medida que se aproximaba el cambio de gobierno del 57.

#### *10.10. Una valoración sobre el tema del paro.*

Creemos que a lo largo de las páginas dedicadas al estudio del tema del paro hemos constatado contraponiendo las fuentes existentes sobre esta cuestión la acusada diferencia entre las cifras “vendidas” por la España oficial franquista y las cifras más próximas a la realidad. No vamos a insistir en este apartado sobre el aspecto cuantitativo. Sin embargo, la existencia de esta especie de doble contabilidad no significa en modo alguno que desde las filas del franquismo social no se conocieran las cifras estimadas y más abultadas de desempleo en función de que los mismos organismos que nutrían al Anuario Estadístico de España y a cada uno de los ministros del

gabinete franquista de cifras voluntariamente limadas eran los mismos que emitían informes de circulación interna que desmentían los datos ofrecidos públicamente.

De manera fundamental, el Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación, organismo sindical que pretendía controlar las dimensiones del paro, transmitía voluntariamente una información sesgada al ministerio de Trabajo. Sin embargo, el ministro del mencionado ramo tenía medios para conseguir por otros caminos estimaciones distintas y extraordinariamente más elevadas y precisas que las cifras estimadas (no oficiales) dadas por el S.N.E.C., pese a lo cual la línea de los discursos del ministro Girón se nutría de las estadísticas oficiales silenciando el conocimiento de una realidad laboral profundamente deteriorada.

Este planteamiento responde a la lógica que considera el tema del paro como una cuestión básicamente política. Evidentemente el desempleo tiene otras muchas dimensiones. Sin embargo, la preocupación del régimen se centraba en las repercusiones que para la perdurabilidad del franquismo pudieran tener unas tasas de desempleo extraordinariamente elevadas. El miedo, tanto de la organización sindical como del ministerio de Trabajo, emanaba precisamente del hecho de que esta situación o el conocimiento masivo de la misma pudiera favorecer un posible levantamiento contra el régimen. En este sentido, durante la mayor parte de la etapa de Girón al frente del ministerio de Trabajo el régimen jugó con una ventaja importante al operar sobre una España en gran medida agraria. Y es que el campo español (en este y en otros aspectos) era un verdadero desconocido, lo cual era sumamente "positivo" para el régimen en la medida en que la mayor incidencia del paro podía centrarse en aquel sin que por otro lado se supiera con certeza cual era su verdadero estado. Solamente algunos sectores, y fundamentalmente el de la construcción, generaban datos muy parcialmente fiables con lo cual el resultado final podía favorecer el deseo del régimen de ocultar en lo posible la verdadera faz del problema del paro.

Este, en definitiva, era el verdadero objetivo: evitar el conocimiento de lo que en realidad estaba pasando con el empleo en España, y sobre todo silenciar la rudeza de la vida del campo español. Si a esto añadimos la inexistencia de un seguro de paro<sup>719</sup> creemos que se puede afirmar que, pese a las formulaciones teóricas del franquismo social, sólo se esperaba que, de hecho, el mercado equilibrara el panorama existente a base de movimientos migratorios de masas harapientas que sin especialización laboral alguna buscaban desesperadamente salir de un estado próximo a la indigencia.

## Notas

<sup>1</sup> Pérez González, Esteban: Consideraciones sobre el paro. RT, abril de 1941, vol. 2, nº 30, pág. 331.

<sup>2</sup> París Eguilaz, Higinio. Política de creación de empleo. Madrid, ed. Fe, 1940, pág. 29.

<sup>3</sup> A.P.G.; J.D.N.; Leg. 26, nº 7.

<sup>4</sup> El paro estacional campesino. Madrid, Sindicato del Olivo, 1946, pág. 15.

<sup>5</sup> París Eguilaz, Política..., op. cit.

<sup>6</sup> V. López Comide: El paro en el sistema de producción nacional-sindicalista. RT, mayo de 1941, vol. 1, nº 19, pág. 649.

<sup>7</sup> París Eguilaz, Un nuevo orden..., op. cit., pág. 219.

<sup>8</sup> Su puesta en funcionamiento se reguló también por el Decreto de 14 de octubre de 1938 que creó las comisiones provinciales de reincorporación de los combatientes al trabajo. De igual manera el reglamento del cuerpo de caballeros mutilados de guerra del 5 de abril de 1938 les reservó determinados destinos para su colocación. El Decreto de 25 de agosto de 1939 disponía que el 80 % de las vacantes producidas con posterioridad al 18 de julio de 1936 habrían de ser cubiertas preferentemente por excombatientes nacionales. Una ley de la misma fecha que la anterior disposición ordenaba reservar el 80 % de las vacantes existentes el 18 de julio de 1936 o producidas desde esa fecha, en las categorías inferiores de las plantillas de los ministerios y corporaciones que realizasen servicios públicos para las categorías siguientes: el 20 % para caballeros mutilados; el 20 % para oficiales provisionales o de complemento; el 20 % para los restantes excombatientes; el 10 % para los excautivos por la causa nacional y el 10 % para los huérfanos u otras personas dependientes económicamente de las víctimas de guerra. López Valencia, Jalones de una Reforma..., op. cit., pág. 95.

<sup>9</sup> Se constituyó ésta por iniciativa del Museo Social de Barcelona bajo el régimen de una junta paritaria constituida por un delegado del Museo Social como presidente (institución a cuya iniciativa se debía la bolsa de trabajo), un representante del Fomento del Trabajo Nacional y otro de la Cámara de Comercio Industria y Navegación y dos vocales obreros, uno del sindicato productor de Obreros Picapedreros y otro de la Unión Profesional de Hiladores, Tejedores y Similares de Barcelona.

<sup>10</sup> Por medio de la sección española de la Asociación Internacional para la protección legal de los trabajadores, dirigida por el Vizconde de Eza y constituida el 30 de marzo de 1910 afloaron algunos estudios sobre el tema del paro forzoso. Así por el Real Decreto de 5 de marzo de 1910, siendo ministro de Fomento Ferrnín Calbetó, se encomendó al I.N.P. el estudio del planteamiento del seguro popular en sus diversas manifestaciones, figurando entre ellas la del seguro contra el paro. De igual forma se encomendó al I.R.S. un proyecto de organización de bolsas de trabajo para lo cual se nombró una ponencia truto de la cual surgió el trabajo realizado por Gonzalez Rojas y Oyuelos titulado Bolsas de Trabajo y seguro contra el paro forzoso (Madrid, I.R.S., 1914). García Oviedo, Carlos: Consideraciones acerca del "empleo total". RESS, núm. 2, 1948, pág. 44.

<sup>11</sup> García Oviedo, Algunas consideraciones..., op. cit., pág. 47.

<sup>12</sup> Se aplicaron al primer concepto 27.500 pts. y al segundo 77.500. García Oviedo, Algunas consideraciones..., op. cit., pág. 45.

<sup>13</sup> Como es lógico desde la línea argumentativa del franquismo ligada a la demolición de todo lo que tuviera algo que ver con la II República, esta ley fue igualmente criticada por el hecho de que supuestamente creó una serie de entidades frías que no aportaban datos estadísticos fidedignos. Servicio Nacional de Encuadramiento y colocación.

<sup>14</sup> En algunos casos se las dividía en secciones (agricultura, industria, comercio y profesiones liberales) en los pueblos más importantes. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, Nº 3.575.

<sup>15</sup> Redondo, Pasado, presente..., op. cit., pág. 122.

<sup>16</sup> Por medio de las Órdenes de 22 de diciembre de 1939 y 11 de marzo de 1940 se transforma en Junta Interministerial de obras para mitigar el Paro y por medio de la ley de 25 de noviembre de 1944 en Junta Nacional del paro.

<sup>17</sup> Gonzalez Jiménez, Luciano: Estructura económica del paro en España. En De economía, (marzo-abril de 1951), año IV, suplemento monográfico nº 1, pág. 123.

<sup>18</sup> Esta disposición tuvo su antecedente en el Decreto de 7 de julio de 1931 por el que se autorizó a las provincias andaluzas y extremeñas particularmente, y a todas las que lo desearan, a establecer el recargo de la décima de la contribución territorial a industrial con destino a obras publicas para luchar contra el paro.

<sup>19</sup> De igual manera se procedió a suprimir las comisiones inspectoras creadas por la Ley de 27 de noviembre de 1931. Su principal fallo era lo que desde las instituciones del franquismo se denominaba

talante "clasista" por cuanto que, creadas como un órgano paritario, dejaban la presidencia de las mismas en manos de los representantes obreros, lo cual constituía para el régimen del 18 de julio el mayor peligro de los peligros. Las atribuciones de dichos organismos pasaron a depender de los delegados provinciales de trabajo y de los Alcaldes.

<sup>20</sup> B.O.E. del 17 de marzo de 1942.

<sup>21</sup> Aranzadi, 5.780; B.O.E. del 2 de marzo de 1943. El reglamento se aprueba por Decreto de 9 de julio de 1959 (B.O.E. de 24 de julio de 1959).

<sup>22</sup> El Decreto de Jefatura del Estado de 5 de mayo de 1940 traspasaba los Servicios de Colocación, que hasta el momento pertenecían al ministerio de Trabajo, a la organización sindical. Sobre este organismo podemos encontrar observaciones del siguiente tipo: "...tuvo el triple y diverso efecto de aumentar la estructura burocrática sindical, poner en manos de los sindicatos el encuadramiento obligatorio para la distribución de la oferta de mano de obra y, por último, en la medida en que tal Servicio hubiera sido efectivo, proceder a la colocación forzosa de mano de obra contribuyendo así a la disminución del paro obrero... A tenor de las contradictorias cifras sobre peticiones de trabajo, número de obreros en paro y colocaciones suministradas por distintos organismos sindicales en diferentes momentos, no es posible extraer conclusión alguna sobre la incidencia de los mencionados organismos salvo la de que las estadísticas ofrecidas fueron utilizadas más para enaltecer al delegado provincial de turno que con la pretensión de explicar la situación real existente... La importancia del servicio de colocación no tenía un sentido de control técnico en el reparto de mano de obra con miras a una mayor productividad sino de un añadido - y quizás innecesario - control político sobre la base obrera." Aparicio, *El sindicalismo...*, op. cit., pág. 123.

<sup>23</sup> Redondo Gómez, *Pasado, presente...*, op. cit., pág. 130.

<sup>24</sup> Informe sobre la colocación obrera en España, Madrid, agosto de 1946. A.G.A.; I.D.D., 136.01, 3.388, pag. 45.

<sup>25</sup> Fernández, *El paro...*, op. cit., pág. 67.

<sup>26</sup> Ríza Ballesteros, José María: Análisis del paro forzoso en España. Cuadernos de Política Social, nº 37, 1958, pág. 17.

<sup>27</sup> El subrayado es nuestros.

<sup>28</sup> Pérez Leñero, José: Factores sociales del paro forzoso. RT, mayo de 1945, vol. 1 nº 5, pág. 449-450.

<sup>29</sup> Redondo Gómez, José: *Pasado, presente y futuro de un problema social*. Servicio Nacional de Información y Publicaciones Sindicales, Madrid, 1955, pág. 138.

<sup>30</sup> B.O.E. de 26 de julio de 1943.

<sup>31</sup> "Frecuentemente se les entregan a los obreros donativos, con el fin de que, si les es preciso y no cuentan con medios económicos necesarios, puedan trasladarse a sus casas o lugares de trabajo, que la Obra les proporciona por medio de las Empresas con las que está en contacto." Memoria de la O.S.L.P., enero de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 14.

<sup>32</sup> Asenjo Martínez, José Luis: Consideración estadística del paro español. En *De economía*, (enero-febrero 1953), año VI, nº 22, pág. 64.

<sup>33</sup> Informe sobre un nuevo plan de acción que eleva a la aprobación del Delegado Nacional de Sindicatos la O.S. Lucha contra el Paro, 25 de enero de 1945. A.G.A.; I.D.D., 136.01, 3.116-1, pág. 1.

<sup>34</sup> Informe de la O.S.L.P. sobre la conveniencia de fundir en una misma jefatura los servicios de encuadramiento y colocación y Lucha contra el Paro, 24 de enero de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.388.

<sup>35</sup> Informe sobre un nuevo plan de acción que eleva a la aprobación del Delegado Nacional de Sindicatos la O.S. Lucha contra el Paro, 25 de enero de 1945. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.116-1, pág. 2-3.

<sup>36</sup> Fernández, *El paro...*, op. cit., pág. 67.

<sup>37</sup> Informe sobre un nuevo plan de acción que eleva a la aprobación del Delegado Nacional de Sindicatos la O.S. Lucha contra el Paro, 25 de enero de 1945. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.116-1, pág. 4.

<sup>38</sup> *El paro estacional...*, op. cit., pág. 5.

<sup>39</sup> *El paro estacional...*, op. cit., pág. 9.

<sup>40</sup> En esta línea Redondo afirmaba que era "necesario confeccionar un fichero totalmente independiente de los de Servicios de Colocación, que nos dé datos ciertos..." A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.116-1.

<sup>41</sup> A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.134.

<sup>42</sup> Informes reservados de la C.N.S. de Burgos, diciembre de 1951, A.G.A.; S.S.; I.D.D., 90.02, R/212.

<sup>43</sup> Propuesta informe que presenta la jefatura de la Obra Sindical Lucha contra el Paro al Secretario General de la organización sindical, 15 de octubre de 1957. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.387.

<sup>44</sup> A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.369-2.



<sup>44</sup> Correspondencia de la Comisaría Nacional de Paro del ministerio de Trabajo con D.N.S., 11 de diciembre de 1945. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/18.

<sup>45</sup> Elevaba excesivamente el número de oficinas (411 en 1951) pero acertaba en el planteamiento. Memorias de la O.S. Lucha contra el Paro, 12 julio de 1946, A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, N° 3160.1, pág. 3.

<sup>46</sup> S.N.E.C., 5 de febrero de 1957. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/328.

<sup>47</sup> Subrayado nuestro. Correspondencia del Jefe del Servicio Encuadramiento y Colocación, julio de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/162. Sobre la cuestión del descontrol en el paro agrícola informaba la C.N.S. de Cádiz en un informe reservado de abril de 1952 en estos términos: "Las cifras de la estadística oficial, no reflejan la realidad del paro agrícola por dificultades de control de estos trabajadores, pero ..." Informes reservados de la C.N.S. de Cádiz, abril 52. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/212.

<sup>48</sup> Habría que tener en cuenta que el error es mayor si se considera que la población española en diciembre de 1952 ascendía a 26.869.925 habitantes si bien ello resulta puramente anecdótico frente a las consideraciones que encontramos en este párrafo. Correspondencia de José Redondo Gómez a la D.N.S., 29 de noviembre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/198 n° 65(3°).

<sup>49</sup> Reunión de Secretarios Provinciales de C.N.S. (19 al 22 de junio de 1951) en respuesta a un cuestionario de la Vicesecretaría Nacional de Obras Sindicales. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 91.02, R/1.854.

<sup>50</sup> Sobraban, según el autor, 1.207.000 en el año 1948. Leal, *El trabajo...*, op. cit., pág. 47-48.

<sup>51</sup> Memoria de O.S. Lucha contra el Paro de Cuenca, 1945. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, n° 3160.1, pág. 2-3. En este informe se ponía de manifiesto como los obreros se negaban a ser trasladados ya que "con ocho o nueve pts. diarias de jornal, el productor se ve precisado a atender a su manutención y a pagar su alojamiento, haciendo un recorrido medio diario de 9 km...".

<sup>52</sup> El paro estacional..., op. cit., pág. 15.

<sup>53</sup> Informe del Jefe del Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación (José Redondo), 31 de enero de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, n° 3.575, pág. 139.

<sup>54</sup> Orden de Servicio extraordinaria de 23 de noviembre de 1944. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.396-4, pág. 2-3.

<sup>55</sup> Propuesta informe que presenta la jefatura de la O.S.L.P. al Secretario General de la organización sindical, 15 de octubre de 1957. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.387.

<sup>56</sup> Informe del Jefe del Servicio de Colocación y Encuadramiento, 30 de abril de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.426, n° 3.

<sup>57</sup> Informe del Jefe de Servicio de Colocación y Encuadramiento, 30 de abril de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.426, n° 3, pág. 2. También sobre esta cuestión se lamenta Luciano González de la imposibilidad de conocer el estado real del paro en la agricultura: A pesar de ello no se han podido conseguir todas las cifras correspondientes al paro agrícola estimado debido a la falta de datos de nuestra estadística de paro; cuya ausencia lamentamos en este cuadro, por ser de suma utilidad para conocer el paro efectivo." González Jiménez, *Estructura económica...*, op. cit., pág. 118.

<sup>58</sup> Sobre esta cuestión Alejo Leal afirma que "la pretensión de conocer con exactitud la composición de la población activa agrícola en España sería vana, porque no existen estadísticas completas ni exactas." Leal, *El trabajo...*, op. cit., pág. 47. Es difícil, si damos una mínima veracidad a esta afirmación, (la cual se ve respaldada por la comparación de las cifras oficiales de paro y las estimadas, entre otros factores) no percibir la dificultad mayor de encontrar fuentes estadísticas oficiales y veraces en torno a temas de relevancia social y política como la cuestión del paro. También tenemos que llamar la atención sobre el hecho de que dicha afirmación se elabora en el año 1953 lo cual viene a recalcar el estado en que la estadística se hallaba a mitad de la década de los cuarenta. A su vez habría que tener en cuenta la incorporación creciente de la mujer al mundo del trabajo y el hecho de que, pese a ello, "tampoco se refleja en las estadísticas, tal y como se produce en la vida real, el paro femenino... Sin embargo, consideramos muy probable que el paro real femenino se refleje, aun menos que el masculino, en las estadísticas, porque las mujeres no ven grandes perspectivas de colocación y rehusan inscribirse, ..." Riaza Ballesteros, *Análisis del paro...*, op. cit., pág. 27.

<sup>59</sup> "De otra parte, la falta de base científica para la recogida de estos datos otorga escasa confianza al resultado final," afirmaba Luciano Gléz., en torno a la validez de las estadísticas oficiales de paro. González Jiménez, *Estructura económica...*, op. cit., pág. 118.

<sup>60</sup> Pérez, *Consideraciones sobre el paro...*, op. cit., pág. 338.

<sup>61</sup> Y todo ello sin tener en cuenta que el paro de los menores de 20 años no aparecía en las estadísticas.

<sup>62</sup> Servicio Nacional de Encuadramiento y colocación. Memoria anual de actividades de 1950. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, n° 3.575, pág. 25-26.

<sup>64</sup> Aplicación a Cuenca del Decreto de ocupación permanente de trabajadores agrícolas, mayo de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.054, N/156-55.

<sup>65</sup> Sobre utilidad real y sobre su futuro el Jefe Provincial de la O.S.L.P. de Barcelona contestaba al cuestionario que se le había enviado con anterioridad a la reunión de delegados provinciales a celebrar en marzo de 1949: "*Pregunta:* ¿Cuál puede ser su cometido? ¿Piensas en algún medio para actuar con eficacia en orden a la más acertada política de plenitud de empleo? *Respuesta:* "No he creído nunca en la eficacia de esta Obra. Solamente podía dedicarse a reclutar, de acuerdo con la Autoridad Gubernativa, mediante la aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes, hombres de este tipo para dedicarlos, en campos de concentración a reeducarlos y devolverlos a la Sociedad útiles para el trabajo normal. Pero esto creo que no es labor sindical, aunque tampoco lo es la creación de campos de tipo parecido como los que mantiene esta Obra. Contestaciones al cuestionario para la reunión de delegados provinciales de sindicatos, marzo 1949. Barcelona. A.G.A.; I.D.D. 58.02, 5384, pág. 57.

<sup>66</sup> Los informes de la O.S.L.P. mencionan ya con fecha 30 de abril de 1953 que durante el mes en curso su actividad era nula debido al levantamiento del campamento de Guadarrama "y de otra por órdenes mandadas directamente de la Secretaría Nacional de Sindicatos, por las que se ordenaba la suspensión de haberes del personal, de determinados Campamentos y el cierre definitivo de los mismos. En la actualidad solo quedan dos en Vizeaya: Concha I (Ortuella) y Gallarta con 192 y 102 empleados." Memoria de la O.S.L.P., abril de 1953. A.G.A.; I.D.D.; S.S.; 136.01, 14.

<sup>67</sup> O.S.L.P. Memoria de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.145.1.

<sup>68</sup> Informe de O.S.L.P., 3 de julio de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, nº 3.377. En enero de 1953 existían los siguientes campamentos: Barajas, Guadarrama, Mataporquera (fábrica de cementos Alfa; en construcción de fábrica de carburos de calcio y explotación de minas calizas para la Empresa García Jimeno e Hijos), Baracaldo (extracción de hierro para empresa Orconera Iron-Ore Company), Gallarta (extracción de hierro para la Empresa Franco Belga S.A.). Memoria de la O.S.L.P. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 14.

<sup>69</sup> III Reunión del Consejo Asesor Nacional de Obras Sindicales. La O.S.L.P. Labor realizada de 1943 a 1949 y problemas de 1950. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, nº 3.387-3.

<sup>70</sup> III Reunión del Consejo Asesor Nacional de Obras Sindicales. La O.S.L.P. Labor realizada de 1943 a 1949 y problemas de 1950. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.387-3, pág. 6.

<sup>71</sup> Memoria del S.N.E.C, octubre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.972.

<sup>72</sup> No tenía en cuenta Redondo realidades sociales como la que describía el Delegado Sindical de Castellón: "Como consecuencia de la sequía se produce además un paro obrero que no puede escapar a nuestra consideración aunque muchas veces no se registre en los partes de la oficina correspondiente. Sabido es que aquí apenas existe el bracero que carezca en absoluto de propiedad. Son muchos los que poseen tierras pero no la suficiente para vivir y han de buscar jornales la mayor parte del año. Estos no suelen inscribirse en las oficinas de colocación pero ahora están pasando por una delicada situación..." Informe Delgado sindical de Castellón de junio de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.922.

<sup>73</sup> Correspondencia de José Redondo Gómez a la D.N.S., 29 de noviembre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R-198 nº 65 (3°).

<sup>74</sup> Informe del Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación elevado a la D.N.S. en febrero de 19

<sup>75</sup> Pérez Leñero, Factores sociales..., op. cit., pág. 448.

<sup>76</sup> En torno a la causa central del paro agrícola señalaba el jefe del S.N.E.C. que "la gran propiedad propende instintivamente a provocar el paro." Redondo Gómez, José: *El paro agrícola en España*. Madrid, 1948, pág. 12.

<sup>77</sup> Eso sin considerar la existencia de términos en los que el tanto por ciento era superior al 90%. En Orcera el 99,44, en Torres de Albánchez el 95,96 y en Carchelejo el 94,93. Por otro lado, hay que considerar que el agravamiento del paro en las zonas olivateras había de ser mayor que en relación a las zonas cerealísticas puesto que el cultivo del olivar ofrecía intermitencias mas bruscas que el de los cereales.

<sup>78</sup> El paro estacional..., op. cit., pág. 25.

<sup>79</sup> Redondo Gómez, Pasado, presente..., op. cit., pág. 183.

<sup>80</sup> "El problema social se ha planteado violentamente por el abuso, hasta el advenimiento de la República y aún después, de algunos patronos agrícolas, desconocedores de sus deberes sociales; pero en la mayoría de los casos, por desgracia, el problema social se plantea sin vía de solución..." Martín Sanz, Técnica y política..., op. cit., pág. 111.

<sup>81</sup> El paro estacional..., op. cit., pág. 128.

<sup>82</sup> Redondo Gómez, El paro agrícola..., op. cit., pág. 12.

<sup>83</sup> El paro estacional..., op. cit., pág. 127-128.

- <sup>84</sup> Desempleo y cambios de estructura. O.I.T., Ginebra, 1962, pág. 26.
- <sup>85</sup> Bosch Aymerich, Alfonso: El paro obrero. Barcelona, Instituto de Investigaciones Económicas, 1941, pág. 1.
- <sup>86</sup> Bouthelier, Antonio: En torno al problema del paro forzoso en España. RT, septiembre de 1941, vol. 3, nº 23, pág. 232.
- <sup>87</sup> Bouthelier, Antonio: En torno al problema del paro forzoso en España. RT, septiembre de 1941, vol. 3, nº 23, pág. 236.
- <sup>88</sup> Marcelo Corchado, Antonio: Contribución al estudio del problema del paro obrero en la provincia de Cáceres. RT, mayo de 1956, vol. I, nº 5, pág. 402.
- <sup>89</sup> López Cornide, El paro..., op. cit.
- <sup>90</sup> Bosch Aymerich, Alfonso: El paro obrero. Madrid, ed. Fe, 1941.
- <sup>91</sup> Bosch Aymerich, El paro..., op. cit., pág. 96.
- <sup>92</sup> Bosch Aymerich, El paro..., op. cit., pág. 52.
- <sup>93</sup> Beveridge, Full employment..., op. cit.
- <sup>94</sup> Mallart, José: El ahorro y la supresión del paro. Boletín de Información del Instituto Nacional de Previsión. Noviembre de 1946, vol. 2, nº 11, pág. 2719.
- <sup>95</sup> López Cornide, El paro..., op. cit.
- <sup>96</sup> Jato, David: Consecuencias del paro de los trabajadores jóvenes. RT, marzo de 1941, vol. 1, nº 17, pág. 390.
- <sup>97</sup> Redondo Gómez, Pasado, presente..., op. cit., pág. 56.
- <sup>98</sup> López Cornide, El paro..., op. cit.
- <sup>99</sup> Pérez González, Consideraciones..., op. cit., pág. 332.
- <sup>100</sup> Informe del Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación elevado a la D.N.S., febrero de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.426-3, pág. 28-29.
- <sup>101</sup> Informe del Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación elevado a la D.N.S., febrero de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.426-3, pág. 29-30.
- <sup>102</sup> Informe del Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación elevado a la D.N.S., febrero de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.426-3, pág. 31.
- <sup>103</sup> Informe del Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación elevado a la D.N.S., febrero de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.426-3, pág. 31.
- <sup>104</sup> En relación a la influencia de los precios sobre los salarios es posible encontrar afirmaciones como la que a continuación vamos a exponer lo cual da luz sobre lo no muy complejo de las aseveraciones de un órgano de expresión del ministerio de Trabajo sobre la relación precios-nivel de empleo." ... la rigidez del salario es una de las causas del paro". López Cornide, El paro..., op. cit., pág. 652.
- <sup>105</sup> La utilización como fuente fundamental de los informes del Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación ( y secundariamente de la Obra Sindical de Lucha contra el Paro ) obedece al hecho de que la Ley de 10 de febrero de 1943 por la que se crea el S.N.E.C. (B.O.E. 2 marzo de 1943) establecía el control directo por parte de este organismo de la D.N.S. A cargo de delegación quedaba el sostenimiento y la organización del S.N.E.C. En el ministerio de Trabajo se creaba una sección central dependiente de la Dirección General de Trabajo así como un negociado en cada Delegación Provincial de Trabajo. Se instituyó también una Jefatura Nacional del S.N.E.C. en Madrid, a la cabeza de la cual iba a estar José Redondo Gómez. Por lo que se refiere a los informes, las oficinas provinciales de este servicio habían de cursar uno semanal y mensualmente destinado a la Jefatura Nacional y al Delegado Provincial de Trabajo, el cual elevaba un informe-resumen a la Sección central de la Dirección General de Trabajo. De igual manera la Jefatura Nacional del S.N.E.C. formulaba la estadística mensual de toda la nación remitiéndola al ministerio de Trabajo por lo que, en cuanto a las estadísticas oficiales se refiere, las eventuales aparecidas en la RT coinciden milimétricamente con las de aquél.
- <sup>106</sup> El mismo S.N.E.C. a la altura de 1953 emitía un informe en el que afirmaba taxativamente que no se tenían datos o éstos eran muy incompletos para el año 1937 y 1938. Entendemos que dicha afirmación se puede hacer extensiva al resto del periodo de estudio de esta tesis. "... no se tienen datos o son muy incompletos las cifras de paro correspondientes a los años 1937 y 1938" se afirmaba concretamente. Memoria anual de actividades de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, nº R/261, nº 65 (1ª), pág. 29.
- <sup>107</sup> De Torres, Manuel: Juicio de la actual política económica española. Madrid, Aguilar, 1956, pág. XIII.
- <sup>108</sup> Clavera, Esteban, Monés, Montserrat, Ros Hombravella. Capitalismo español: De la autarquía a la estabilización (1939-1959). 2 vol. Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1973, pág. 47. Concretamente con base 100 en el periodo 1931-35 el índice de producción agrícola para el año 1945 se situaba en 65,1.

- <sup>109</sup> Clavera y otros, *Capitalismo español...*, op. cit., pág. 48. Sobre el trigo, señala Tamames, desde 1939 hasta 1947 disminuyó el área de cultivo. Tamames, *Estructura...*, op. cit., pág. 210.
- <sup>110</sup> Clavera y otros, *Capitalismo español...*, op. cit., pág. 49-50.
- <sup>111</sup> García Delgado, José Luis: La industrialización y el desarrollo económico de España durante el franquismo. En *La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica*. Barcelona, Ariel, 1987, pág. 155.
- <sup>112</sup> París Eguilaz, Higinio: 50 años de economía española (1930-1980). Madrid, 1981, pág. 67.
- <sup>113</sup> París Eguilaz, Política de creación..., op. cit., pág. 30.
- <sup>114</sup> Ídem.
- <sup>115</sup> A.P.G.; J.D.N.; Leg. 26, nº 7.
- <sup>116</sup> Ídem. El subrayado es nuestro.
- <sup>117</sup> Ídem.
- <sup>118</sup> Ídem. El subrayado es nuestro.
- <sup>119</sup> Pérez González, Consideraciones..., op. cit., pág. 339.
- <sup>120</sup> Tallada Pauli, José María: El ciclo económico y el paro forzoso. RT, enero de 1945, nº 1, pág. 24.
- <sup>121</sup> A.P.G.; J.D.N.; Leg. 26, nº 7.
- <sup>122</sup> A.P.G.; J.D.N.; Leg. 25, nº 7.
- <sup>123</sup> Ídem.
- <sup>124</sup> Ídem.
- <sup>125</sup> Ídem.
- <sup>126</sup> A.P.G.; J.D.N.; Leg. 26, nº 7.
- <sup>127</sup> Ídem.
- <sup>128</sup> Ídem.
- <sup>129</sup> Ídem.
- <sup>130</sup> Bouthelier, En torno al problema del paro..., op. cit., pág. 233.
- <sup>131</sup> A.P.G.; J.D.N.; Leg. 26, nº 7.
- <sup>132</sup> Ídem.
- <sup>133</sup> Suárez, Francisco Franco..., op. cit., pág. 253. En este caso no se citan las fuentes de las que emanan dichos datos.
- <sup>134</sup> El S.N.E.C. eleva esta cifra hasta 507.903 para el mes de diciembre (136.779 en agricultura y 371.124 en el resto de los sectores). Cuadros estadísticos, por provincias, del paro total registrado con expresión de meses, en los años 1942 a 1956, ambos inclusive. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.376.
- <sup>135</sup> Informe reservado D.G.S. Gran descontento contra la Falange en Barcelona, mayo de 1941. documentos inéditos para la Historia del Generalísimo Franco. Madrid, De. Fundación Francisco Franco, 1994, pág. 157.
- <sup>136</sup> Bouthelier, En torno al problema del paro..., op. cit., pág. 234.
- <sup>137</sup> González Gallego, Rafael: La siega en relación con el paro. RT, agosto de 1942, vol. 2, nº 34, pág. 870.
- <sup>138</sup> Información General de la provincia de Valladolid. Documentos inéditos..., op. cit., pág. 239.
- <sup>139</sup> Ídem, pág. 364.
- <sup>140</sup> Raza Ballesteros, José María: Análisis del paro forzoso en España. Cuadernos de Política Social, nº 37, 1958, pág. 19.
- <sup>141</sup> Pertenecían al sector agrícola 43.625 y al de la construcción 40.530.
- <sup>142</sup> Pertenecían a la agricultura 50.295 y a la construcción 41.343 de 1941.
- <sup>143</sup> A.P.G.; S.M.S., Leg. 30, nº 47.
- <sup>144</sup> Informe de la Obra Sindical Lucha contra el Paro de Álava, 1943. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, Nº 3.134.
- <sup>145</sup> Redondo Gómez, José: Pasado, presente y futuro de un problema social. Servicio Nacional de Información y Publicaciones Sindicales, Madrid, 1955, pág. 144-145.
- <sup>146</sup> Informe de Delegación Provincial de Ciudad Real, 7 de diciembre de 1943. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.134-1.
- <sup>147</sup> Algunos informes dan para Barcelona la cifra poco creíble de 8.000 parados la mayoría de los cuales eran para las autoridades "gente poco o nada laboriosa". Documentos inéditos, Tomo IV, op. cit., pág. 132.
- <sup>148</sup> Memoria de la provincia de Barcelona, mayo de 1943. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.134.
- <sup>149</sup> Jato, David: Consecuencia del paro de los trabajadores jóvenes. RT, marzo de 1941, vol. 1 nº 18, pág. 512.
- <sup>150</sup> Jato: Consecuencia del paro..., op. cit., pág. 511.

- <sup>151</sup> Memoria anual de O.S. Lucha contra el Paro de Barcelona, 30 de diciembre de 1943. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.134.
- <sup>152</sup> Pérez González, Consideraciones...op. cit., pág. 331.
- <sup>153</sup> Bouthelie, En torno al problema del paro...op. cit., pág. 231.
- <sup>154</sup> Delegación Provincial de Sindicatos, Logroño, 1943. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.134. En el informe anual de la O.S. Lucha contra el Paro de Valladolid (A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.134) se afirmaba que existía un "número aproximado de asociales y vagos de la capital. Unos 200, estando perfectamente controlados por la Oficina de Colocación 47 en los momentos actuales..." poniendo de manifiesto la homologación de una situación de origen sociolaboral con una patología social sin conexión con la acción de gobierno.
- <sup>155</sup> Pérez González, Consideraciones sobre el paro...op. cit., pág. 334.
- <sup>156</sup> Paro obrero en Almería (noviembre de 1943); obras de alumbramiento de aguas y nota referente a trabajos de la minas. A.P.G., op. cit., Leg. 30, nº 1.
- <sup>157</sup> Díaz Rodríguez, M<sup>a</sup> del Carmen y Martín Ruiz, Juan Francisco: Población, empleo y paro en Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, 1983, pág. 16-17.
- <sup>158</sup> A.P.G.; S.M.S., Leg. 30, nº 37.
- <sup>159</sup> Informe sobre el paro obrero en la provincia de la Palmas de Gran Canarias. Causas y posibles remedios, 18 de marzo de 1943. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.400.
- <sup>160</sup> Repoblación de la "Siberia Extremeña". fórmula de mejoramiento del trabajo forestal. correspondencia del Delegado Provincial Sindical de Badajoz, Antonio Eguagaray, para el Jefe Nacional de Lucha contra el Paro, José Redondo, 10 de abril de 1943. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, Nº 3.134.
- <sup>161</sup> O.S. Lucha contra el Paro de Granada, 1943. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.134.
- <sup>162</sup> Ídem, pág. 11.
- <sup>163</sup> Lucha contra el Paro, Murcia, 7 diciembre de 1943. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.134.
- <sup>164</sup> Informe de la Delegación Provincial de Segovia de abril de 1943 sobre conveniencia de la repoblación forestal de la vertiente septentrional de la Cordillera Carpeto-Betónica como medio de Lucha contra el Paro. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.134. Igual postura era la de Murcia y provincias andaluzas en general.
- <sup>165</sup> O.S. Lucha contra el Paro de Valencia, 6 de diciembre de 1943. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.134.
- <sup>166</sup> Tamames, Estructura...op. cit., pág. 214.
- <sup>167</sup> 32.290 pertenecían al sector agrícola y 27.436 al de la construcción.
- <sup>168</sup> 40.734 pertenecían al sector agrícola y 26.911 al de la construcción.
- <sup>169</sup> A.P.G.; S.M.S.; Leg. 30, nº 47. Por las referencias insertas dicho informe se elaboró con datos provenientes del año 1944 aunque la cronología efectiva del Archivo de Presidencia únicamente lo sitúa entre octubre de 1941 y abril de 1945.
- <sup>170</sup> Ídem.
- <sup>171</sup> Las mayúsculas no son del doctorando sino del informe.
- <sup>172</sup> Nos referimos al 31 de diciembre de 1944. El 30 de junio de 1944 la cifra ascendía a 2.233.
- <sup>173</sup> País Eguilaz, Política de creación...op. cit., pág. 82.
- <sup>174</sup> Clavera y otros, Capitalismo español...op. cit., pág. 287.
- <sup>175</sup> El paro tendría una media mensual estimada de 294.799 parados. González Jiménez, Estructura...op. cit., pág. 125.
- <sup>176</sup> S.N.E.C. Memoria anual de actividades de 1950. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.575.
- <sup>177</sup> El paro estacional...op. cit., pág. 9.
- <sup>178</sup> Tamames, Estructura..., tomo I, op. cit., Tomo II. Barcelona. Guadiana, 1977, pág. 101.
- <sup>179</sup> Tamames, Ramón: Estructura económica de España. Tomo II. Bar op. cit., Leg. 30, nº 47.
- <sup>180</sup> Ídem.
- <sup>181</sup> 254.525 era la cifra de paro estimada en esta misma fecha de lo que 204.272 pertenecerían al sector agrícola. González Jiménez, Luciano: Estructura económica del paro en España. En De economía, (marzo-abril 1951), año IV, suplemento monográfico nº 1, pág. 125.
- <sup>182</sup> Tamames, Estructura económica..., tomo I, op. cit., pág. 103.
- <sup>183</sup> Informe del Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento de Granada de abril de 1945. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.116-2.
- <sup>184</sup> Informe del Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento de Granada de abril de 1945. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.116-2.
- <sup>185</sup> Informe del Gobernador Civil, op. cit., Granada, de abril. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.116-2. En el mencionado informe, como ejemplos ilustrativos de la victoria del mundo latifundista sobre los no

propietarios se citan dos que pueden ser esclarecedores del lugar en donde residía la autoridad y el concepto de justicia social en esta provincia andaluza:

<sup>186</sup> El ex-diputado de la C.E.D.A. Sr. Moreno Ávila me contaba que al liberarse Cacán se presentó el administrador del Sr. Marqués de Salvatierra vestido de requeté y con un fusil, encabezando una manifestación que se dirigió a la Iglesia y llegados allí, el citado Sr. se subió al púlpito donde espetó un sermón exigiendo en nombre de Dios (y sobre todo lo que representaba en aquel momento) que los colonos pagaran las rentas adeudadas del período rojo. Un cabo de la Guardia Civil que lo oyó le puso las esposas y se lo llevó a Granada... pero el citado cabo perdió la carrera.

En otro caso la intervención de los algunos oficiales en Granada impidió que un propietario llamado Luis Quesada terminara de apalear a los obreros que salieron a recibirle al ser devuelto su cortijo”.

<sup>187</sup> Ídem, pág. 2.

<sup>188</sup> Conclusiones acerca de las causas, importancia actual y soluciones del paro, julio de 1945. O.S. Lucha contra el Paro. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.388.

<sup>189</sup> Sin embargo, según estimaciones oficiales la mayoría de los emigrantes de Almería se dirigían fundamentalmente a Cataluña ya que las especiales circunstancias de la guerra mundial les impedían hacerlo hacia Argelia o América.

<sup>190</sup> La emdeza de las afirmaciones del Gobernador Civil de Málaga, José María Fontana, en torno al problema de la emigración en Almería no dejaban duda sobre la necesidad de introducción de cambios drásticos en la política llevada a cabo en dicha provincia. En la 3ª sesión del I Consejo Regional sobre el paro en Andalucía, llevado a cabo en junio de 1945, afirmaba lo siguiente en línea con el liberalismo más duro de épocas ya pasadas: “Es cosas dura de decir que objetivamente mirado que resulta benéfico para la provincia el que en la misma la vida sea dura, pero así es, puesto que la gente al emigrar resuelve por si mismo el problema de cada lugar.”

<sup>191</sup> O.S. Lucha contra el Paro. Informes sobre paro de 1945 por provincias y memorias de la obra de 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.304.

<sup>192</sup> Conclusiones acerca de las causas, importancia actual y soluciones del paro, julio de 1945. O.S. Lucha contra el Paro. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.388.

<sup>193</sup> Actas del I Consejo Regional de Lucha contra el Paro en Granada de los días 5, 6 y 7 de junio de 1945. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.304-4.

<sup>194</sup> Informe de la O.S. Lucha contra el Paro de Santa Cruz de Tenerife, 1945. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.125-1.

<sup>195</sup> O.S. Lucha contra el Paro. Informes sobre paro 1945 por provincias y memorias de la obra de 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.304, pág. 9.

<sup>196</sup> O.S. Lucha contra el Paro. Informes sobre paro 1945 por provincias y memorias de la obra de 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.304, pág. 10-11.

<sup>197</sup> Ídem. El subrayado es nuestro.

<sup>198</sup> Por Decreto de 18 de octubre de 1939, y antes el Servicio Nacional de Reforma Económico-Social de la Tierra por Decreto de 6 de abril de 1938. Tras la anterior disposición la Ley de 26 de diciembre de 1939 sentó las bases para la colonización de grandes zonas sobre las que Tamames señala que “tuvo muy escasa eficacia, puesto que apenas se construyeron empresas colonizadoras...” Tamames, Estructura...Tomo I, op. cit., pág. 77. Siguiendo el criterio cronológico la ley de colonizaciones de interés local de 25 de noviembre de 1940, completa a las anteriores.

<sup>199</sup> Clavera y otros, Capitalismo español...op. cit., pág. 136.

<sup>200</sup> Tamames, Estructura..., Tomo I, op. cit., pág. 74.

<sup>201</sup> Informe del Gobernador Civil, op. cit., Granada, de abril de 1945. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.116-2, pág. 3-4.

<sup>202</sup> Informe del Gobernador Civil, op. cit., Granada, de abril de 1945. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.116-2, pág. 3-4.

<sup>203</sup> Informe del Gobernador Civil, op. cit., Granada, de abril de 1945. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.116-2, pág. 5-6.

<sup>204</sup> En el año 1945, en la provincia de Granada los pantanos del río Cacán y Cubillas no habían sido terminados. El primero había sido comenzado hacia once años y estaban únicamente preparados los cimientos dado que los Marqueses de Ruchena e Ibarra y el Sr. Moreno Agrela, notable y terrateniente de la provincia, no lo deseaban pese a que con ello se hubiera duplicado el área regable de la provincia.

<sup>205</sup> Marín Sanz, Técnica...op. cit., pág. 119.

<sup>206</sup> O.S. Lucha contra el Paro. Informes sobre paro 1945 por provincias y memorias de la obra de 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.304.

<sup>206</sup> Bouthelie, En torno al problema del paro...op. cit., pág. 233.

<sup>207</sup> O.S. Lucha contra el Paro. Informes sobre paro 1945 por provincias y memorias de la obra de 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.304 pág. 4.

<sup>208</sup> Aparicio, El sindicalismo vertical...op. cit., pág. 63.

<sup>209</sup> Tamames señala que este año la cosecha no fue buena imputándoselo a la sequía y a la falta de reconstrucción de los olivos. Ello estaba mediatizado por el hecho de que los productores habían de entregar la producción a la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes lo cual, unido a un precio tasado bajo, provocaba el recorte de costes disminuyendo el uso de mano de obra. Tamames, Estructura..., Tomo I, op. cit., pág. 233-4. En cuanto a los argumentos expuestos viene a coincidir casi totalmente con los dados por París Eguilaz en la medida en que éste indica que la caída de la producción agrícola hasta el año 1951 se debió a la escasez de abonos, a la disminución del ganado de labor y de la maquinaria agrícola y a una política de precios oficiales bajos en los artículos de consumo básicos. París Eguilaz, 50 años de economía...op. cit., pág. 62.

<sup>210</sup> Estudios sobre la economía del aceite. Madrid, Sindicato Vertical del Olivo, 1945, pág. 50.

<sup>211</sup> En Estudios sobre la economía del aceite (Madrid, Sindicato Vertical del Olivo, 1945, pág. 126-128) se hace la siguiente afirmación: "...si pasamos de un cultivo normal a otro más esmerado, el aumento posible de jornales empleados en el olivar puede alcanzar el 80,6 % y las posibilidades admisibles del trigo no exceden del 23,8 %. Es, pues, el cultivo del olivar, después del viñedo, la fuente más caudalosa de trabajo por hectárea del secano español, y al mismo tiempo la más sensible a la voluntaria decisión de los empresarios...Así la decisión de los empresarios olivareros, según cultiven con mayor o menor esmero, tiene una gran influencia para disminuir o agravar el paro estacional, y en este sentido la responsabilidad de los propietarios de olivares, desde el punto de vista social, es extraordinaria. " La cuestión es que para niveles de rentabilidad admisibles y razonables, las posibilidades calculadas de descenso de la mano de obra en el caso del trigo se situaban, según el estudio dirigido por el Jefe del Sindicato Vertical del Olivo, en un 28,4 %, mientras que en el caso del olivo dicha cifra se situaba en el 43,8 %. Más que posiblemente la opción globalizada entre el mundo empresarial del aceite se decantaba por esta última de cara a reducir costes.

<sup>212</sup> O.S. Lucha contra el Paro. Informes sobre paro 1945 por provincias y memoria de la obra de 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.304, pág. 1. Pese a la ausencia de firma en el documento citado las duras palabras que se enuncian deberían corresponder al Jefe Provincial de la O.S. Lucha contra el Paro de Jaén.

<sup>213</sup> El subrayado es nuestro. El paro estacional campesino. Madrid, Sindicato del Olivo, 1946, pág. 10.

<sup>214</sup> A. Ritter, El Estado social...op. cit., pág. 168.

<sup>215</sup> Naredo, La evolución de la agricultura...op. cit., pág. 35.

<sup>216</sup> Informe de la O.S. Lucha contra el Paro de Jaén, 1945. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.125-1.

<sup>217</sup> Informe del Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento de Málaga enviado a los jefes locales y alcaldes de la provincia, 19 de abril de 1945. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.304. También en informe de O.S. Lucha contra el Paro de Málaga, 1945. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.125-1.

<sup>218</sup> Memoria anual de O.S. Lucha contra el Paro de Sevilla firmada por el Jefe Provincial de la obra Jiménez Montoya, 1945. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.125-1.

<sup>219</sup> Nos referimos en este caso a A. Jiménez Montoya, Jefe provincial de la O.S. Lucha contra el Paro en su discurso del 17 de mayo de 1945.

<sup>220</sup> O.S. Lucha contra el Paro. Informes sobre paro 1945 por provincias y memorias de la obra de 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.304, pág. 23.

<sup>221</sup> Correspondencia de Fermín Sanz Orrio (Delegado Nacional de Sindicatos) a José Antonio Girón de Velasco, 7 de mayo de 1945. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 90.02, r/18.

<sup>222</sup> El descenso mencionado se palpaba en las afirmaciones vertidas en la asamblea provincial de productores olivareros de Cáceres celebrada en octubre de 1945: "Es un hecho plenamente demostrado que el cultivo del olivar en nuestra provincia ha descendido a límites insospechados, ...el Estado reconoce esta realidad al decir en el art. 2 de la disposición reguladora de la campaña para el presente año, que se obligue por la Jefaturas Agronómicas a los planes mínimos de labores..." A.G.A.; S.S.; I.D.D., 90.02, r/24.

<sup>223</sup> Conclusiones aprobadas por la Asamblea provincial de productores olivareros celebrada en Cáceres, 3 de octubre de 1945. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/24.

<sup>224</sup> Actas del I Consejo Regional de Lucha contra el Paro en Granada los días 5, 6 y 7 de junio de 1945. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 90.02, r/8.

<sup>225</sup> Congreso Nacional de Trabajadores. Conclusiones. Delegación Nacional de Sindicatos; Vicesecretaría Nacional de Ordenación Social, 1946, pág. 44.

<sup>226</sup> 242.213 estimados de los que 119.037 pertenecerían al sector agrícola. González Jiménez, Estructura económica...op. cit., pág. 125.

<sup>227</sup> Luciano González cifraba la cantidad media mensual de parados estimados en 294.799. González Jiménez, Estructura económica...op. cit., pág. 125.

<sup>228</sup> Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación. Memoria anual de actividades de 1950. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, N° 3.575, pág. 19-20.

<sup>229</sup> Téngase en cuenta que la población total de España en este año era de 27.485.199 habitantes (13.240.980 de hombres y 14.244.219) y la población activa era de 10.413.105 (8.272.353 hombres y 2.140.752 mujeres).

<sup>230</sup> Consideraciones que José Redondo Gómez, vocal de la Comisión 12 del I Congreso Nacional de Trabajadores, formula para el estudio y resolución de dicho organismo, en relación con las conclusiones que ha recibido sobre Política de plenitud de empleo, 25 de noviembre de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.388.

<sup>231</sup> Según datos oficiales las siguientes provincias tenían en número de parados agrícolas que se indica entre paréntesis. Jaén (17.247), Córdoba (6.174), Cáceres (5.639), Badajoz (4.114), Cádiz (3.133), Huelva (2.118).

<sup>232</sup> El orden de incidencia sería como se indica: marzo, noviembre, enero, febrero, diciembre y abril. Por el contrario las estadísticas oficiales indican que el mes más afectado por el paro fue mayo con 184.683 parados lo cual permite incidir en la idea de que existía una conciencia clara de que se transmitían datos falsos sobre el mundo del desempleo y de que paralelamente se conocían datos más creíbles que únicamente tenían una circulación interna. Informe de la O.S.L.P. sobre el año 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.159.2.

<sup>233</sup> Los datos aquí expuestos han sido extraídos del Informe del Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación elevado a la D.N.S. en febrero de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.426-3.

<sup>234</sup> Informe del Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación elevado a la D.N.S. en febrero de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.426-3, pág. 1-5.

<sup>235</sup> En Albacete las actividades realizadas se centraban en la potenciación de la línea de ferrocarril de Baeza a Utiel, en la reparación de caminos vecinales y en la distribución de aguas en la capital. En el caso de Ávila los obreros colocados por la O.S.L.P. lo habían sido en reparación de carreteras y caminos vecinales, limpieza de montes y algunas labores agrícolas. En Badajoz la solución venía dada por medio de los trabajos de escarda y ello en una provincia en la que se era consciente que había mucho que construir y en la que, por tanto, una política agresiva de obras públicas, afectaría muy positivamente al descenso en el número de parados. En Cádiz, lo poco que se hacía estaba paralizado totalmente por falta de consignación, medios de trabajo y materiales. En Castellón, la situación era desesperada por la pérdida de la cosecha de naranja, fruto de la helada del mes de enero, dando como resultado que localidades como Burriana con alrededor de 20.000 estaban casi en su totalidad en paro dada su dependencia absoluta de este cultivo. En La Coruña la política se centraba en la construcción o reparación de viviendas rurales. En Huesca se realizaban obras de captación y traida de aguas. En Jaén, no se llevaba a cabo ninguna política concreta salvo la de esperar a que la buena cosecha de cereales iniciara descender el número de parados que se había incrementado a partir del final de la recolección de la aceituna en febrero. En León, se llevaba a cabo la construcción de caminos vecinales y viviendas en áreas rurales. En otros casos, como el de Salamanca, la norma era la inactividad por falta de consignaciones de la Junta Provincial de Paro. Las apreciaciones sobre el resto de las provincias no difieren en lo esencial de la casuística hasta aquí expuesta y lo verdaderamente relevante era la nulidad de las políticas llevadas a cabo y la falta de voluntad para dotar de presupuestos de peso a un organismo tendente a luchar contra el paro. Informe del Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación y elevado a la D.N.S. en febrero de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.426-3, pág. 6-10.

<sup>236</sup> Granada. Memoria de O.S. Lucha contra el Paro de 12 julio de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.160.1, pág. 1.

<sup>237</sup> Informe del Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación elevado a la D.N.S. en febrero de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.426-3, pág. 12-45.

<sup>238</sup> Granada. Memoria de O.S. Lucha contra el Paro de 12 julio de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, n° 3160.1, pág. 1.

<sup>239</sup> El mencionado seguro consistía en la imposición de un 2% sobre toda clase de sueldos, jornales e ingresos de cualquier clase por concepto de trabajo e igual porcentaje sobre la renta de la riqueza nacional, sin excepciones. Se calcula la media constante de parados en 250.000 parados y los jornales medios en 10 pts. con lo que se afirma que se necesitarían al año 912.500.000 pts. Se afirma en este informe que tal y



como se planteaba se recaudaría el doble de la cantidad mencionada. Informe sobre desempleo de la Delegación Sindical de Jaén, 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.207-1, pág. 8-9.

<sup>240</sup> En esta provincia el número de parados en el sector agrícola y forestal ascendía oficialmente a 17.247 parados el 31 de diciembre de 1946. Salvo en la construcción, en que el número de parados era de 1.106, el desempleo se centraba de forma apabullante en el mencionado sector por lo cual el problema de paro, como en otras provincias, era un problema esencialmente agrícola.

<sup>241</sup> Correspondencia del Jefe Provincial de O.S. Lucha contra el Paro de Jaén (Antonio Arenas) a su jefe Nacional (José Redondo Gómez), 10 de mayo de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.125-1.

<sup>242</sup> Estudios sobre la economía... op. cit., pág. 129.

<sup>243</sup> Notables eran los casos en que dada la ausencia de fondos presupuestarios las jefaturas provinciales de la Obra Sindical Lucha contra el Paro se negaban o se veían imposibilitadas para cumplir con las misiones que supuestamente tenían encomendadas. Ejemplo de ello se encuentra en el Informe de la O.S. Lucha contra el Paro de Cuenca, 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.160-1. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, una provincia con casi 6.000 parados oficiales en diciembre de 1946, Lucha contra el Paro reflejaba en sus informes aseveraciones tan lapidarias como la que a continuación se expone: "Sin labor, por falta de orientación, se carecen de instrucciones en concreto, ordenes, etc. Así como de créditos, consignaciones para atender a obras y trabajos..." O.S. Lucha contra el Paro de Santa Cruz de Tenerife, 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.125-1. En otros casos la incompetencia se justificaba en la supuesta ausencia de necesidad de acción política. Y así en el caso de Teruel se afirmaba que la ausencia de actividad de dicha obra se debía a que no existía paro en absoluto. En O.S. Lucha contra el Paro de Teruel, 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 136.01, 3.125-1.

<sup>244</sup> Sectorialmente el mayor número de parados lo encontramos en el sector denominado "otras industrias profesionales" (3.650), seguido de industrias de la alimentación (1.988), construcción (1.695) y agrícolas-forestales (1.325). En el resto de los sectores el número de parados no ascendía por encima de las 1.000 unidades.

<sup>245</sup> Informe de O. S. Lucha contra el Paro de Sevilla, 27 de junio de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.125-1, pág. 1-2.

<sup>246</sup> Ídem, pág. 5.

<sup>247</sup> Ídem, pág. 12.

<sup>248</sup> Girón, Escritos..., op. cit., pág. 150.

<sup>249</sup> García Oviedo, Algunas consideraciones..., op. cit., pág. 13.

<sup>250</sup> Informe de la OSLP. Estudio del paro en Murcia, 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.125-1.

<sup>251</sup> Informe de OSLP de Lugo, 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.125-1.

<sup>252</sup> Las cifras extraoficiales, no muy discordantes de las oficiales, daban para el 16 de mayo de 1946 un número de 2.254 parados. Informe del Vicesecretario Provincial de Obras Sindicales de La Coruña, Alberto Leira Varela, 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.125-1.

<sup>253</sup> Memoria anual de Jefatura Provincial de la OSLP de Lérida, 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.125-1.

<sup>254</sup> Sobre la actividad del organismo citado a continuación el jefe provincial del mismo afirmaba la siguiente: "...y dadas las pocas atribuciones que le están conferidas, sería un caso muerto, ya que esta obra en cuestión, no existe más que oficialmente..." Informe de la OSLP de Tarragona, 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.125-1.

<sup>255</sup> Informe de la Delegación Provincial de Sindicatos de Logroño, 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 1.325-1.

<sup>256</sup> En mayo de 1946 había oficialmente 758 parados únicamente. Informe de la OSLP de Segovia, 7 de mayo de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 1.325-1.

<sup>257</sup> Informe de la OSLP de Segovia, 7 de mayo de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 1.325-1. Y también en Informe de OSLP de Soria, 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 1.325-1.

<sup>258</sup> Informe del Jefe Provincial de Lucha contra el Paro de León a Redondo Gómez (Jefe Nacional), 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 1.325-1.

<sup>259</sup> Ídem.

<sup>260</sup> 165.919 estinados de los 79.051 pertenecían al sector terciario. González Jiménez, Luciano: Estructura económica del paro en España. En la revista De economía (marzo-abril de 1951), año IV, suplemento monográfico nº I, pág. 125.

<sup>261</sup> Redondo, El paro agrícola... op. cit., pág. 6.

<sup>262</sup> En el caso de los cereales Cádiz destinaba el 43,6 % de la superficie a dicho cultivo, Badajoz, un 43,2 %, Huelva un 37,8 %, Córdoba un 36,4 %, Cáceres un 36,2 % y Granada un 30,8 %. En cuanto al olivar,

Jaén dedicaba a dicho cultivo el 48,4 % de su superficie, Sevilla un 36 %, Málaga un 29,7 % y Córdoba un 35,8 %. Ídem, pág. 10.

<sup>267</sup> La tasa de paro desde 1941 sería la siguiente: 1841 (4,7 %), 1942 (3,0 %), 1943 (2,2 %), 1944 (1,6 %), 1945 (1,8 %) y 1946 (1,8 %). De Figueroa Martínez, Emilio: ¿Es aplicable a España la teoría del pleno empleo?, en *De economía*, (marzo-abril de 1951), año IV, suplemento monográfico nº 1, pág. 57.

<sup>268</sup> González Jiménez, *Estructura económica del paro...*, op. cit., pág. 119.

<sup>269</sup> Concretamente tenía un oficial y un auxiliar que tenían a su cargo las secciones provinciales de las restantes Obras sindicales. Informe de la OSLP de Almería, 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1. Idéntica situación era la de Cuenca (Memoria de la OSLP de Cuenca. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.142-1, Murcia (Correspondencia de Jerónimo Torres (Jefe Provincial de la OSLP de Murcia, 4 de enero de 1947, a Jefatura Nacional. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 1.325-1), Lugo (Delegación Provincial de Sindicatos de Lugo, 1947. Memoria anual de las actividades desarrolladas por la Jefatura Provincial de la OSLP de Lugo durante el año 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.136-2), Zaragoza (Memoria de la OSLP de Zaragoza, 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.142-1) y Vizcaya (Informe de la OSLP de Vizcaya del tercer trimestre del año 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1).

<sup>270</sup> OSLP de Cádiz. Informe del año 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1.

<sup>271</sup> En febrero la cifra ascendía a 8.728 pese a lo cual en el Informe anual provincial de la OSLP de Cádiz se da una cifra superior a los 20.000.

<sup>272</sup> El paro estacional...op. cit., pág. 128.

<sup>273</sup> Memoria de la OSLP de Granada de 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.141-1.

<sup>274</sup> Ídem, pág. 12.

<sup>275</sup> OSLP de Ávila, 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1.

<sup>276</sup> Informe anual de la OSLP de Navarra, 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.136-2.

<sup>277</sup> Ídem.

<sup>278</sup> Memoria OSLP de Burgos, 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1.

<sup>279</sup> Consideraciones generales en torno al problema del paro en España. Madrid, mayo de 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.388.

<sup>280</sup> Fontana, José María: *El paro agrícola en España*. Madrid, 1946, pág. 11.

<sup>281</sup> Consideraciones generales en torno al problema del paro...op. cit., A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.388. 56.322 en septiembre y 55.452 en agosto el mes pasado según Informe del SNEC de septiembre de 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, 1.64.

<sup>282</sup> Consideraciones generales en torno al problema del paro...op. cit., A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.388.

<sup>283</sup> Seguidamente aparecen los porcentajes de grandes propiedades en las siguientes provincias: Málaga (50,92 %), Almería (más 40 %), Jaén (51,17 %), Granada (50,02 %), Córdoba (57,54 %), Sevilla (65,81 %), Huelva y Cádiz (70 %), Cáceres (más del 60 %) y Badajoz (más del 60 %).

<sup>284</sup> Tamames, *Estructura económica...*, tomo II, op. cit., pág. 103. Citando las restricciones eléctricas y su repercusión en la economía española (Conferencia Mundial de la Energía, sesión parcial de Madrid, junio de 1960, ponencia I B/15, presentado por M. Gallardo, J. Iribarren, F. Prieto, F. Barceló. J.M. Trejo), e incidencia de las restricciones eléctricas sobre la economía nacional (Ídem, ponencia I B/11 presentada por José Castañeda y José Luis Redonet).

<sup>285</sup> Hasta esta fecha la colonización se regía por la Ley de 26 de diciembre de 1939 sobre colonización de grandes zonas y por la Ley de 25 de noviembre de 1940 de colonización de interés local. Hasta el año 1947 se había intervenido en 148 fincas, de 111.000 hectáreas y para comprarlas se habían invertido 182.000.000 pts. y afectando a 14.000 colonos según datos oficiales. Consideraciones generales en torno al problema del paro en España. Madrid, mayo de 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.388. pág. 22.

<sup>286</sup> 232.978 estimados de los 128.616 pertenecían a la agricultura. González, *Estructura económica del paro...*, op. cit., pág. 125.

<sup>287</sup> Ídem.

<sup>288</sup> Congreso Sindical de la Tierra. Junta Nacional de Hermandades, DNS, Sevilla, mayo de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.400.

<sup>289</sup> Ídem, pág. 4.

<sup>290</sup> El paro estacional...op. cit., pág. 18.

<sup>291</sup> Congreso Sindical de la Tierra...op. cit., A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.400, pág. 5-6.

<sup>292</sup> Tamames, *Estructura...*, tomo I, op. cit., pág. 233.

<sup>293</sup> El paro estacional campesino...op. cit., pág. 149.

<sup>294</sup> Monografía sobre el paro en la industria de la construcción, 1943-49. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.369.

<sup>431</sup> "Desde hace algunos meses se viene registrando y observando una serie de fenómenos sobradamente característicos, de una coyuntura económica desfavorable... causa determinantes de paro, lo que por la manera y frecuencia con que se producen en el completo proceso económico, nos permiten casi asegurar la proximidad de un fenómeno de paro de carácter grave en algunas actividades... principalmente en las de construcción y piel..." Correspondencia del Jefe Nacional al Secretario Nacional de la OSLP, 23 de septiembre de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.134. En la correspondencia del Jefe Nacional de la OSLP de 1 de junio de 1948 en que afirma la necesidad de "facilitar al gobierno los datos precisos para redactar los planes que en un futuro muy próximo han de ejecutarse para combatir el paro, que por razones que de sobra tu conocerás ha de producirse casi con toda seguridad..." A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.134.

<sup>432</sup> Ver nota 65.

<sup>433</sup> Luis Arranz Ayuso (Secretario Nacional del Servicio de Información y Publicaciones Sindicales) envió el 26 de julio de 1948 un cuestionario al jefe nacional de la OSLP para que seleccionara de entre un cuestionario las preguntas que deseaba responder al diario *Arriba* "al mismo tiempo que le significa que puede modificar cualquiera de las preguntas del mismo..." A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.134 preguntas.

1.- Actualmente ¿es grave el problema del paro en España?

2.- Con relación a otros países ¿cuál es nuestra situación general de paro?

3.- A la vista de los ensayos realizados en años anteriores ¿qué medidas se han adoptado por esta obra sindical?

4.- Causas que motivan el paro, época del año y regiones en que éste se agudiza más.

6.- Número de productores empleados por Lucha contra el Paro, pts. invertidas en obras y jornales y labor realizada durante el tiempo comprendido entre el 18 de julio pasado y el anterior.

7.- Perspectiva para un próximo futuro.

<sup>434</sup> Informe sobre la situación del paro en Barcelona de la Oficina de Encuadramiento y Colocación, 7 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1.

<sup>435</sup> Acta y conclusión de la Ponencia nombrada para buscar solución a la crisis del ramo de la construcción en Barcelona, cuya constitución promovió esta jefatura de Lucha contra el Paro y cuya última reunión tuvo lugar el día 19 de agosto de 1948 en el sindicato provincial. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1, Anexo nº 4, pág. 1.

<sup>436</sup> "En razón con la cuestión que acabamos de reseñar, cabe decir que a la capital de Barcelona afluyen mensualmente centenares de trabajadores de todas las regiones de España en busca de trabajo..." por supuesto en condiciones de alojamiento y manutención muy por debajo de lo considerado como humano. Informe del Servicio de Encuadramiento y Colocación de Barcelona, 30 de agosto de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1, pág. 2.

<sup>437</sup> *La Prensa*, diario de Barcelona del 10 de agosto de 1948.

<sup>438</sup> Los sectores más afectados eran el textil con 206.510 parados; construcción con 65.136; metal con 64.110; transportes y comunicaciones con 36.686 y químicas con 25.808. Estas cifras comparadas con las oficiales no deben conducir más que a considerar su validez o su mayor aproximación a la realidad por el hecho de que sistemáticamente sea posible mostrar documentación relativamente abundante que pone de manifiesto las diferencias abismales. Informe sobre la situación del paro en Barcelona de la Oficina de Encuadramiento y Colocación, 7 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1, pág. 1-5.

<sup>439</sup> *Idem*, pág. 7.

<sup>440</sup> *Idem*.

<sup>441</sup> *Idem*.

<sup>442</sup> Informe de la OSLP de Tarragona, 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.142-1.

<sup>443</sup> A.P.G.; J.E.; Leg. 59, 3.1., nl 54

<sup>444</sup> Estas sobre todo en Palamós, Palafrugell, Llagostera y San Feliu de Guixols sufrían periódicamente agudas crisis.

<sup>445</sup> Informe de la OSLP de Gerona, 9 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1.

<sup>446</sup> Servicio de Encuadramiento y Colocación de Lérida, 3 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1.

<sup>447</sup> Memoria de OSLP de Álava, 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.344.

<sup>448</sup> Vicesecretaría Provincial de Obras Sindicales, 7 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1.

<sup>449</sup> Vicesecretaría de Ordenación Social de Álava, 3 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1.

<sup>450</sup> Delegación Provincial de Asturias, 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 72.04, nº 714.

<sup>451</sup> Informe de la Secretaría Sindical Provincial de Asturias, 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 72.094, nº 38.

<sup>312</sup> Ídem, pág. 2-5.

<sup>313</sup> Ídem, pág. 15.

<sup>314</sup> "El campo, por otra parte, sigue ofreciendo como en todas las ocasiones la panacea que resuelve de momento los problemas laborales, brindando en toda ocasión a los que salieron de su seno para colaborar en la industria, ocupación transitoria en los instantes de colapso." Ídem, pág. 2-5.

<sup>315</sup> OSLP de Santander, 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.142-1.

<sup>316</sup> OSLP de Lugo, 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.344. Y también en A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.136-2; Lugo, Memoria del tercer trimestre de la Delegación Provincial de Sindicatos de Lugo.

<sup>317</sup> Servicio de Encuadramiento y Colocación de Lugo, 7 de julio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1, pág. 1.

<sup>318</sup> Informe de Lucha contra el Paro de Orense, 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.136-2.

<sup>319</sup> Pontevedra. Servicio de Encuadramiento y Colocación, 2 de julio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1.

<sup>320</sup> En algunos informes se pone de manifiesto la incidencia de este aspecto en la iniciativa privada. Orense. Encuadramiento y Colocación, 12 de julio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1.

<sup>321</sup> Correspondencia del Jefe de la OSLP de Orense a Redondo Gómez, 16 de julio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 136-2.

<sup>322</sup> Informe de Santos Cuadra López, Jefe Provincial de Colocación, con el visto bueno de la Delegación Provincial de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Navarra, 7 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.136-2.

<sup>323</sup> Servicio de Encuadramiento y Colocación de Ávila, 7 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1, pág. 1.

<sup>324</sup> Vicesecretaría Provincial de Ordenación Social de Burgos, 7 junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1. En un informe del Servicio de Encuadramiento y Colocación de 3 de junio de 1948 sobre la provincia de Burgos (A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1) se afirmaba lo siguiente: "Así pues no creo haga falta en esta capital, y núcleos de población más importantes, abogar por la implantación de otras medidas que las de años anteriores, las que se adoptan en el periodo invernal, único en el que se registra paro, es decir, el subsidio de paro dado por el Montepío correspondiente y las que arbitra el Gobierno Civil proporcionando a los parados suministros de viveres gratuitos, ya que numéricamente son reducidos los parados, porque si bien en invierno se inician obras, las empresas suelen tener para estas épocas trabajos de repartimiento y acabados de interiores."

<sup>325</sup> Lucha contra el Paro, Salamanca, junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1.

<sup>326</sup> Ídem, pág. 3.

<sup>327</sup> Memoria de la OSLP de Ávila, 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.142-1.

<sup>328</sup> Encuadramiento y Colocación de Soria, 2 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.142-1.

<sup>329</sup> OSLP de Valladolid, 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.142-1.

<sup>330</sup> Encuadramiento y Colocación. Zamora, 3 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1.

<sup>331</sup> Informe de Lucha contra el Paro de Ciudad Real, 5 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.142-1.

<sup>332</sup> Ídem, pag. 3.

<sup>333</sup> Informe del Jefe Provincial de Encuadramiento y Colocación de Guadalajara (M. Atienza Espeja), 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.136-2.

<sup>334</sup> Informe de la Delegado Provincial de Sindicatos de Guadalajara a la OSLP, 1 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.136-2.

<sup>335</sup> Informe de la OSLP de Toledo. 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.142-1.

<sup>336</sup> OSLP de Cáceres, 25 de febrero de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.142-1.

<sup>337</sup> Informe del Teniente-Alcalde del Ayuntamiento de Almería, 10 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.136-2.

<sup>338</sup> Almería. Jefatura Provincial del Servicio de Colocación y Encuadramiento, julio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.136-2.

<sup>339</sup> El mismo autor señala "que el ideal nacional sería que el menor número de brazos útiles se invirtiera en producir el alimento necesario, ...Solo un 21 por 100, aproximadamente, de la población activa sería precisa para dar de comer a toda España." Martín Sanz, Técnica y política...op. cit., pág. 201-2.

<sup>340</sup> Frente a los 3.459 se afirma que existían realmente 6.679. Informe sobre el paro en la provincia de Huelva, junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.136-2.

<sup>341</sup> Informe sobre el paro en la provincia de Huelva, junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.136-2, pág. 2.

<sup>342</sup> Ídem, pág. 6-7.

<sup>342</sup> Por el contrario a finales del año 1948 la cifra de parados se situaba en 3.896, muy lejos de los 11.318 reales. Memoria de la OSLP de Valencia, 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.142-1.

<sup>344</sup> Vicesecretaría Provincial de Ordenación Social, Alicante, 7 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1.

<sup>345</sup> Castellón. Servicio de Encuadramiento y Colocación. Informe sobre paro actual y futuro realizado por Luis A. Sales, 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.136-2.

<sup>346</sup> OSLP de Castellón, 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.344.

<sup>347</sup> Castellón. Servicio de Encuadramiento..., 10 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.136-2, pág. 3-6.

<sup>348</sup> Servicio de Estadística y Colocación de Murcia, 7 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1.

<sup>349</sup> Teruel. Jefatura Nacional de Encuadramiento y Colocación, 3 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.142-1. También en Memoria de la OSLP de Zaragoza, enero a marzo de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.142-1.

<sup>350</sup> Informe del Jefe Provincial del Servicio de la OSLP de Zaragoza (Antonio Nebot), 4 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1.

<sup>351</sup> Vicesecretaría provincial de Obras Sindicales de Baleares, 7 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1.

<sup>352</sup> Encuadramiento y Colocación de baleares, 8 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1.

<sup>353</sup> Vicesecretaría Provincial de Ordenación Social de Baleares, 8 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1.

<sup>354</sup> Informe del Jefe Provincial de la OSLP de Las Palmas, 12 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1.

<sup>355</sup> Concretamente en este año 1948 la obra tenía campamentos en Madrid (aeropuerto de Barajas), en Guadarrama (sanatorio antituberculosos), Granada, Cáceres, León y Bilbao, poco bagaje para tanta parafernalia. Memoria nacional de OSLP, 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.134.

<sup>356</sup> "Al mismo tiempo, este sector agrario desempeñaba la función de reserva de mano de obra, en particular los pequeños campesinos y asalariados de las zonas de agricultura de subsistencia y abastecimiento del mercado interior." Martín Ruiz, Juan Francisco: Dinámica del empleo, trasvases de población activa y envejecimiento rural en Canarias (1940-1979) en *Canarias ante el cambio*, Santa Cruz de Tenerife, Universidad de la Laguna, 1981, pág. 118.

<sup>357</sup> Ídem, pág. 121.

<sup>358</sup> Informe sobre el paro en la industria de la construcción en Santa Cruz de Tenerife, 16 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.142-1.

<sup>359</sup> La OSLP de Santa Cruz, en su memoria del año 1948 afirmaba lo siguiente: "...no tiene créditos de ninguna clase, así como tampoco personal técnico ni administrativo, estando atendida por el Vicesecretaría Provincial de Obras Sindicales cuya vicesecretaría ostenta la jefatura de la misma. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.142-1.

<sup>360</sup> Correspondencia del Jefe Nacional de la OSLP, 23 de enero de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.142.

<sup>361</sup> En aquellas provincias en que coincida la cifra oficial y la estimada sólo se ha reflejado la primera.

<sup>362</sup> Estadísticas de OSLP. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.426.

<sup>363</sup> Ídem.

<sup>364</sup> Ídem.

<sup>365</sup> Los datos pertenecientes a junio y diciembre provienen del Anuario Estadístico de España.

<sup>366</sup> 245.461 estimados de los que 132.309 pertenecían al sector agrícola. González, Estructura económica del paro..., op. cit., pág. 34.

<sup>367</sup> Informe de mayo del SNEC. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, 1/95.

<sup>368</sup> Ídem.

<sup>369</sup> Ídem.

<sup>370</sup> Ídem.

<sup>371</sup> Ídem.

<sup>372</sup> Ídem.

<sup>373</sup> Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación. Memoria anual de actividades de 1950. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.575, pág. 19-20.

<sup>374</sup> Delegación Nacional de Sindicatos. SNEC, abril de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.426, nº 3.

<sup>375</sup> Ídem, pág. 3-4.

<sup>376</sup> Téngase en cuenta que la cifra oficial para este mes ascendía a 169.884 y que por tanto el paro suponía un 191,3 % sobre el oficialmente ofrecido a la opinión pública. Delegación Nacional de Sindicatos. SNEC, abril de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.426, nº 3, pág. 4.

<sup>377</sup> Delegación Nacional de Sindicatos. SNEC, abril de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.426, nº 3, pág. 21.

<sup>378</sup> Ídem, pág. 55.

<sup>379</sup> Correspondencia de Jefatura Nacional de la OSLP al Delegado Provincial de Oviedo sobre desplazamientos de productores en Asturias, 8 de junio de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/95.

<sup>380</sup> Correspondencia de Jefatura Nacional de la OSLP al Delegado Nacional de Sindicatos sobre trabajadores desplazados a Huesca, 6 de junio de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/95.

<sup>381</sup> Ídem.

<sup>382</sup> Ídem.

<sup>383</sup> A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/95.

<sup>384</sup> Las cifras ofrecidas eran las siguientes:

-paro agrícola estimado: 160.254.

-paro agrícola registrado oficialmente: 55.561.

-paro agrícola sin controlar oficialmente: 104.693

-paro industrial: 101.453.

-paro total general estimado: 261.707.

En SNEC. Informe mensual de paro, marzo de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/95.

<sup>385</sup> Tamames, Estructura...tomo I, op. cit., pág. 77.

<sup>386</sup> Ídem, pág. 79.

<sup>387</sup> SNEC. Informe mensual de paro, marzo de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/95, pág. 11.

<sup>388</sup> Ídem, pág. 19.

<sup>389</sup> Delegación Nacional de Sindicatos. SNEC, abril de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.426, nº 3, pág. 3.

<sup>390</sup> Ídem, pág. 11-14.

<sup>391</sup> Informe de junio de 1949 del Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90-01, r/95.

<sup>392</sup> Ídem, pág. 17.

<sup>393</sup> En el caso de Madrid, la mayor incidencia era debida al paro en la construcción sobre el cual el Informe de junio del SNEC (A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/95, pág. 38) afirmaba que sería "en línea ascendente comentada en nuestros Informes, perteneciendo su mayor parte a la industria de la construcción,...el volumen de obras desciende vertiginosamente..."

<sup>394</sup> Informe mensual de paro del SNEC de junio de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/95.

<sup>395</sup> SNEC. Informe mensual de paro, marzo de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/95.

<sup>396</sup> Delegación Nacional de Sindicatos. SNEC, abril de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.426, nº 3, pág. 21-22.

<sup>397</sup> Informe mensual de paro del SNEC de junio de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/95, pág. 19.

<sup>398</sup> El paro estacional..., op. cit., pág. 168-9.

<sup>399</sup> Correspondencia del Jefe Nacional de la OSLP a DNS. Madrid, 28 de abril de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/95.

<sup>400</sup> Sobre el paro en este sector y en línea con el escao aprecio social del parado argumentaba Riaza Ballesteros que el paro en este sector estaba constituido por "aspirantes a oficinistas, sin una marcada profesionalidad, puesto que el sector de la Banca y los Seguros se desenvuelve prósperamente y no puede hablarse de crisis en el mismo. En este grupo quizá estén refugiados todas esa gama de inadaptados y fracasados que no quieren trabajar en un oficio, de estudiantes que han abandonado sus estudios y de gentes de escasa capacitación. A nuestro juicio, al paro existente en el grupo mencionado no merece la pena dedicarle una marcada atención." Riaza Ballesteros. Análisis del paro...op. cit., pág. 26.

<sup>401</sup> "Cerca de las dos terceras partes del paro del grupo *Otras industrias y profesionales*, lo constituyen también mujeres, a las que la Oficina de Colocación, a la que acuden, no sabe cómo encuadrar porque están dispuestas a aceptar cualquier trabajo, y en la práctica no obtienen ninguno, o lo consiguen al margen de la misma como asistentes, recaderas, etc. En el grupo agrícola y forestal se refugia otro porcentaje y en cifra un poco inferior en las Industrias de la Alimentación." Riaza, Análisis del paro..., op. cit., pág. 27.

<sup>402</sup> Delegación Nacional de Sindicatos. SNEC, abril de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.426, nº 3, pág. 32.

- <sup>402</sup> Informe mensual de paro del SNFC de junio de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/95.
- <sup>403</sup> Memoria del Departamento de Reglamentación, Política Laboral y Relaciones Individuales de Trabajo de la Vicesecretaría Provincial de Ordenación Social del sindicato Provincial de Barcelona, 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 72.04, 38.
- <sup>404</sup> Ídem, pág. 10.
- <sup>405</sup> Ídem.
- <sup>406</sup> Ídem, pág. 7.
- <sup>407</sup> Con base 100 para el año 1940 los precios del cok fueron idénticos en 1948 y 1949: 967,8.
- <sup>408</sup> Para hacer frente a esta situación se creó en diciembre de 1940 la Delegación Oficial del Estado en la Industria (DOEIS) se constituyó en 1950, por medio del INI, la Empresa Nacional de Siderurgia (ENSIDESA). Tamañes, Estructura..., tomo II, op. cit., pág. 176.
- <sup>409</sup> Memoria del Departamento de Reglamentación, Política Laboral..., 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 72.04, 38, pág. 10.
- <sup>410</sup> Ello se pone de manifiesto en Informes como el de la OSLP de Gerona del año 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.337-3.
- <sup>411</sup> Memoria del Departamento de Reglamentación, Política Laboral..., 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 72.04, 38, pág. 12-16.
- <sup>412</sup> Carta del Jefe de la OSLP de 25 de febrero de 1949 al Delegado Provincial de Sindicatos de Oviedo. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.344.
- <sup>413</sup> Santander. Memoria de la OSLP de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.344.
- <sup>414</sup> Memoria de la OSLP de Álava, 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.145-1. También en A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.344; Memoria de la OSLP de Vizcaya, enero a marzo de 1949.
- <sup>415</sup> Correspondencia de 4 de marzo de 1949 de Jefatura Provincial de la OSLP de Lugo a Jefatura Nacional. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.344.
- <sup>416</sup> Vicesecretaría Provincial de Obras Sindicales. Memoria de la OSLP de Orense, 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.145-1, pág. 1.
- <sup>417</sup> OSLP de Pontevedra. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.346.
- <sup>418</sup> OSLP de León, 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.145-1.
- <sup>419</sup> Memoria de la Delegación Provincial de Sindicatos de Palencia, primer trimestre de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 70.04, 715.
- <sup>420</sup> Ídem, pág. 2.
- <sup>421</sup> Lucha contra el Paro de Soria, 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.344.
- <sup>422</sup> Memoria de la provincia de Zamora, 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 72.04, 718.
- <sup>423</sup> En el Informe que se cita a continuación se afirmaba que "las actividades de esta obra sindical, son llevadas de una manera directa por la Vicesecretaría Provincial de Obras Sindicales, siendo tan reducidas y en escasas proporciones, que consideramos no merecen ser expuestas en la presente Memoria." Memoria de la provincia de Zamora, 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 72.04, 718, pág. 172.
- <sup>424</sup> El número de parados en 31 de diciembre de 1949 era oficialmente de 64.488 parados (algo más del 40 % del desempleo nacional) el 30 de junio del mismo año ascendía a 69.149 (45,5 % del paro nacional).
- <sup>425</sup> Correspondencia de Jose Pongibone, Jefe Provincial de la OSLP de Cádiz, 18 de febrero de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.344. El Informe del SNEC del mes de marzo de 1949 (A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/95) da como cifra extraoficial para Cádiz tan sólo en el ámbito agrícola la de 15.148.
- <sup>426</sup> Ídem.
- <sup>427</sup> Informe sobre posibilidades de intervención de la OSLP (elevado por la Secretaría Provincial) en la solución del problema en Córdoba, 23 de febrero de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.344.
- <sup>428</sup> SNEC. Informe mensual de paro, marzo de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/95, pág. 32.
- <sup>429</sup> Informe sobre las posibilidades de intervención..., 23 de febrero de 1949, op. cit.
- <sup>430</sup> Informe sobre emigración de la Jefatura Provincial de Lucha contra el Paro. Granada, 20 de febrero de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.145-1.
- <sup>431</sup> Conferencia del Jefe Provincial de la OSLP en el seminario de estudios político-sociales. Granada, 23 de noviembre de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.145-1.
- <sup>432</sup> Correspondencia del Delegado Sindical Provincial de Málaga a la Jefatura Nacional, 31 de enero de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.344. Málaga, en marzo de 1940 estaba situada a la cabeza de las provincias con más paro agrícola, concretamente el Servicio de Colocación daba la cifra estimada (no oficial) de 32.101. SNEC. Informe mensual de paro, marzo de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/95.

- <sup>434</sup> Informe conjunto de la Vicesecretaría Provincial de Ordenación Económica y Social sobre la coyuntura económico-social de la provincia de Sevilla (mes de junio y julio), 11 de agosto de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.344, pág. 1-2.
- <sup>435</sup> Informe de la Delegación Provincial de Sindicatos de Sevilla, 11 de agosto. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.344.
- <sup>436</sup> Memoria de la OSLP de Cáceres, 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.145-1.
- <sup>437</sup> Informe mensual de paro del SNEC de junio de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/95, pág. 33.
- <sup>438</sup> SNEC. Informe mensual, marzo de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/95, pág. 21.
- <sup>439</sup> SNEC, abril de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.426, nº 3, pág. 36.
- <sup>440</sup> Correspondencia del Jefe Provincial de Cáceres de la OSLP a Jefatura Nacional, 18 de marzo de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.575.
- <sup>441</sup> Utilizamos para diciembre de 1950 los datos más optimistas dentro de lo que son las estimaciones extraoficiales. De diciembre de 1950 existe otro informe del SNEC (A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/162) que sitúa la cifra de parados en 288.741 (175.827 en la agricultura y 112.000 en la industria). Según otros autores la media mensual del paro estimado ascendería 257.333 parados. Así en Gléz. Jiménez, *Estructura...*, op. cit., pág. 125.
- <sup>442</sup> SNEC. Memoria anual de actividades de 1950. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.575.
- <sup>443</sup> Informe Nacional del mes de diciembre de 1950 del SNEC. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.575.
- <sup>444</sup> Ídem.
- <sup>445</sup> Ídem, pág. 26.
- <sup>446</sup> La mayor incidencia se debió a la falta de lluvias.
- <sup>447</sup> En este mes la cifra de paro estimado era de 257.333 de las cuales 136.216 pertenecían al sector agrícola. Gléz. Jiménez, *Estructura...*, op. cit., pág. 125.
- <sup>448</sup> Noviembre fue el mes de mayor incidencia del desempleo. Informe de noviembre de 1940. OSLP. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/162.
- <sup>449</sup> Informes estadísticos del paro al 31 de enero de 1950 por provincias y grupos de actividad con expresión de las causas principales que lo motivan en el agrícola e industrial. SNEC. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.387-3.
- <sup>450</sup> SNEC. Memoria anual de actividades de 1950. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.575, pág. 15-23.
- <sup>451</sup> Ídem, pág. 38.
- <sup>452</sup> Ídem, pág. 42.
- <sup>453</sup> Ídem, pág. 66.
- <sup>454</sup> Ídem, pág. 46.
- <sup>455</sup> Ídem, pág. 114.
- <sup>456</sup> El segundo sector con más solicitudes había sido el de la hostelería con 100 solamente. Por provincias el mayor número de peticiones habían sido realizadas por Lérida (632), Madrid (532), León (274), Santander (170), Guadalajara (110) y Palencia (100), todas superando el centenar de peticiones a la oficina de colocación.
- <sup>457</sup> SNEC. Memoria anual de actividades de 1950. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.575, pág. 125. El subrayado es nuestro.
- <sup>458</sup> Naredo, *La evolución de la agricultura...*, op. cit., pág. 37.
- <sup>459</sup> Oficialmente las 10 provincias con más paro agrícola eran por este orden: Málaga, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén, Ciudad Real, Cádiz, Badajoz, Cáceres, Zaragoza, Granada, Toledo, Guadalajara, Salamanca, Ávila, y Huelva. SNEC. Memoria anual de actividades de 1950. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.575, pág. 24-30.
- <sup>460</sup> El término auxilios ya nos ponen en contacto con una política social más sesgada hacia lo benéfico o caritativo que hacia otros extremos. Ídem, pág. 47.
- <sup>461</sup> Ídem, pág. 64-66.
- <sup>462</sup> Ídem, pág. 67.
- <sup>463</sup> Plan de acción asistencial para 1950 de la Vicesecretaría Provincial de Obras Sindicales de Badajoz. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.975.
- <sup>464</sup> SNEC. Memoria anual de actividades de 1950, op. cit., pág. 76.
- <sup>465</sup> Ídem, pág. 90-95.
- <sup>466</sup> Informes estadísticos del paro al 31 de enero de 1950 por provincias y grupos de actividad con expresión de las causas principales que lo motivan en el agrícola e industrial. SNEC. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.387-3.
- <sup>467</sup> SNEC. Memoria anual de 1950, op. cit., pág. 86.



- <sup>468</sup> OSLP. Resumen de la labor de 1950 y 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.972.
- <sup>469</sup> Ídem, pág. 1.
- <sup>470</sup> Ídem.
- <sup>471</sup> SNEC. Memoria de 1950, op. cit. pág. 82.
- <sup>472</sup> En Informe de la OSLP de Almería de 20 de febrero de 1950. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.387-3.
- <sup>473</sup> Pérez Lefiso, Factores sociales..., op. cit., pág. 449-450.
- <sup>474</sup> SNEC. Memoria de 1950, op. cit., pág. 89.
- <sup>475</sup> Informes estadísticos del paro al 31 de enero de 1950, op. cit., pág. 9.
- <sup>476</sup> Informe expresivo del grado y medida en que puede realizar la OSLP la función de asistencia que le está encomendada. Ávila, enero de 1950. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.387-3, pág. 1.
- <sup>477</sup> Estudio económico-social de las grasas vegetales. II Congreso Nacional Oleícola. Jaén, Sindicato Nacional del Olivo, 1956, pág. 444.
- <sup>478</sup> En líneas generales, fue a partir de los años cincuenta cuando las transferencias de mano de obra agraria hacia los otros sectores hicieron disminuir la población activa del sector agrario, disminución que se acentuará en los años sesenta. Naredo, La evolución de la agricultura..., op. cit., pág. 106.
- <sup>479</sup> Hay que partir del hecho de que el intento de frenar la inflación elevando el tipo de interés y controlando directamente la concesión de créditos bancarios a las empresas a partir de 1947 incidió en el cierre de empresas y en el incremento de las cifras de paro desde el mencionado año hasta 1950. Tamames, Estructura..., tomo III, op. cit., pág. 95.
- <sup>480</sup> SNEC. Memoria de 1950, op. cit., pág. 83.
- <sup>481</sup> Informes estadísticos del paro al 31 de enero de 1950, op. cit.
- <sup>482</sup> Martín Ruiz, Dinámica del empleo..., op. cit., pág. 119.
- <sup>483</sup> Ídem, pág. 113.
- <sup>484</sup> Clavera y otros, Capitalismo español..., op. cit., pág. 27-28.
- <sup>485</sup> Ídem, pág. 115.
- <sup>486</sup> Fernández Arias, Carlos: La Teoría General, el paro encubierto y la política fiscal. En De economía, (marzo-abril de 1951), año IV, suplemento monográfico nº 1, pág. 66.
- <sup>487</sup> Ídem, pág. 74.
- <sup>488</sup> Partes reservados de la CNS de Toledo, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/214.
- <sup>489</sup> Los datos han sido obtenidos de los informes a nivel nacional del SNEC de los meses señalados.
- <sup>490</sup> Clavera y otros afirman que la de 1951 fue una "cosecha extraordinaria." Clavera y otros, Capitalismo español..., op. cit., pág. 193.
- <sup>491</sup> SNEC. Memoria anual de actividades de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/261, n1 65 (1<sup>a</sup>), pág. 34-35.
- <sup>492</sup> Sobre la difícil situación de las provincias andaluzas y extremeñas Emilio de Figueroa reclamaba desde las páginas de la revista De economía un plan de inversiones e industrialización global para España pero especialmente centrado en estas dos regiones y en Castilla: "A nuestro juicio, sería preciso que, dentro del plan de inversión proyectado se destinaran la mayor parte de los gastos del mismo a realizar inversiones en las zonas central, andaluza y extremeña." De Figueroa, Emilio: ¿Es aplicable a España la teoría del pleno empleo?. En De economía (marzo-abril de 1951), año IV, suplemento monográfico, nº 1., pág. 63.
- <sup>493</sup> Clavera y otros, Capitalismo español..., op. cit., pág. 20.
- <sup>494</sup> SNEC. Memorias mensuales de actividades de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.575.
- <sup>495</sup> En enero de 1951 los parados oficiales eran 178.828; en enero de 1950, 160.756.
- <sup>496</sup> Memoria del mes de enero de 1951. SNEC. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.575, pág. 5.
- <sup>497</sup> Memoria del mes de febrero de 1951. SNEC. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.575.
- <sup>498</sup> Memoria del mes de marzo de 1951. SNEC. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.575, pág. 6.
- <sup>499</sup> Ídem.
- <sup>500</sup> Informes reservados de la CNS de Albacete, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/212.
- <sup>501</sup> El subrayado es nuestro. Informes reservados de la CNS de Cáceres, septiembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02 r/212.
- <sup>502</sup> Informes reservados de la CNS de Guadalajara, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/213-
- <sup>503</sup> Memoria del mes de abril de 1951. SNEC. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.575.
- <sup>504</sup> Tamames, Estructura..., tomo III, op. cit., pág. 43.
- <sup>505</sup> Informes reservados de la CNS de Alava, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/212.
- <sup>506</sup> París Eguilaz, 50 años de economía... op. cit., pág. 73.
- <sup>507</sup> SNEC, memoria de abril de 1951, op. cit., pág. 5.
- <sup>508</sup> Ídem, pág. 6.
- <sup>509</sup> Memoria del mes de julio de 1951. SNEC. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.575.

- <sup>510</sup> Ídem, pág. 2.
- <sup>511</sup> Informes reservados de la CNS de Gerona, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/213.
- <sup>512</sup> Memoria del mes de julio de 1951, op. cit., pág. 2.
- <sup>513</sup> Memoria de agosto de 1951. SNEC. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.575.
- <sup>514</sup> Ídem.
- <sup>515</sup> Informe reservado de la CNS de Cáceres, 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/212.
- <sup>516</sup> Ídem.
- <sup>517</sup> Memoria del mes de septiembre de 1951. SNEC. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.575.c
- <sup>518</sup> No solamente la situación del olivar andaluz (y la de los jornales que podía dar) era tan positiva. En Ciudad Real se calculaba que la cosecha sería excelente (en torno a los 15.000.000 millones de kilos) hasta tal punto que se temía por el almacenamiento del aceite y por el hecho de que los almacenistas no apostarían por producir toda la cosecha con el consiguiente resentimiento para el empleo de los jornaleros. Informes reservados de la CNS de Ciudad Real, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/212.
- <sup>519</sup> Informe reservado de la CNS de Córdoba, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/212.
- <sup>520</sup> Partes reservados de la CNS de Valencia, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/214.
- <sup>521</sup> Informe reservado de la CNS de Barcelona, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/212.
- <sup>522</sup> Informe de la Delegación Provincial de Pontevedra, 5 de diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 2.980.
- <sup>523</sup> Las cifras del paro oficial de esta tabla provienen del Anuario Estadística de España. Las del paro estimado del Informe del mes de diciembre de 1952 del SNEC. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/198, nº 65 (3ª).
- <sup>524</sup> Los datos estimados de marzo a agosto han sido obtenidos de los informes del SNEC de dichas fechas. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/198, nº 65, (2ª).
- <sup>525</sup> Los datos de paro estimado fueron obtenidos de los informes del SNEC de dichas fechas. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/198, nº 65, (3ª).
- <sup>526</sup> Los datos han sido obtenidos del informe del SNEC del mes de diciembre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/230, nº 65, (1ª).
- <sup>527</sup> SNEC. Memoria anual de actividades, 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/198, 65 (3ª).
- <sup>528</sup> Informes reservados de la CNS de Córdoba, febrero de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/212.
- <sup>529</sup> Problema de crisis y paro en las industrias de estuchado y comprimido de azúcar, 8 de abril de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N/33-53.
- <sup>530</sup> SNEC. Memoria anual de actividades, 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/198, 65 (3ª), pág. 37.
- <sup>531</sup> Ídem, pág. 35-36.
- <sup>532</sup> Todo ello no impedía que entre los agricultores trigueros, sobre todo, siguiese calando el descontento con el SNT por los excesivos y largos trámites establecidos para cobrar el importe del trigo entregado a los almacenes de dicho servicio. Informes reservados de la CNS de Burgos, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/212.
- <sup>533</sup> Crisis laboral en Córdoba por deficiencias de transportes, 13 de enero de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N/2-53-
- <sup>534</sup> Informes reservados de la CNS de Badajoz, enero de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/212.
- <sup>535</sup> Ídem.
- <sup>536</sup> Ídem.
- <sup>537</sup> SNEC. Informe de octubre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/230, nº 65 (1ª)
- <sup>538</sup> Informes reservados de la CNS de Castellón, marzo de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/212.
- <sup>539</sup> SNEC. Informe de octubre de 1952, op. cit., pág. 12-13.
- <sup>540</sup> SNEC. Informe de noviembre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/230, nº 65 (1ª)
- <sup>541</sup> Ídem, pág. 11.
- <sup>542</sup> Ídem, pág. 30.
- <sup>543</sup> Clavera y otros, Capitalismo español..., op. cit., pág. 107-108.
- <sup>544</sup> SNEC. Memoria anual de actividades, 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/198, 65 (3ª), pág. 58.
- <sup>545</sup> B.O.E. nº 209 del mes de julio.
- <sup>546</sup> Informes reservados de la CNS de Álava, febrero de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/212-
- <sup>547</sup> SNEC. Memoria anual de actividades, 1952, op. cit., pág. 97.
- <sup>548</sup> Ídem, pág. 107-108.
- <sup>549</sup> Ídem, pág. 95.
- <sup>550</sup> Informes reservados de la CNS de Cádiz, abril de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/212.
- <sup>551</sup> SNEC. Memoria anual de actividades de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/261, 65 (1ª).

<sup>562</sup> Leal, El trabajo y el trabajador, op. cit., pág. 8.

<sup>563</sup> La no coincidencia de la cifra de paro estimado del mes de diciembre con respecto al informe que más abajo se cita puede ser reflejo de la descoordinación administrativa de un servicio como el que utilizamos como fuente extraoficial. Informe del SNEC, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/261, nº 65, (1<sup>a</sup>).

<sup>564</sup> Paris Eguilaz estima que el paro mensual medio exclusivamente agrícola debía estimarse en unos 900.000 hombre (sólo considera a los varones). En cuanto al sector industrial estimaba que el paro ascendía a unos 200.000 lo cual situaba la cifra de parados por encima del millón de trabajadores. Paris Eguilaz, Higinio: *Los seguros sociales y la economía española*, Madrid, 1951, pág. 145.

<sup>565</sup> El Congreso Sindical Agrario de Castilla la Nueva y Albacete reclamaba una especial atención a esta provincia por los desahucios en masa de cultivadores, principalmente aparceros, y su sistemático éxodo como estrategia de supervivencia. IV Congreso Sindical Agrario de Castilla la Nueva y Albacete. Conclusiones. VII Ponencia. Régimen jurídico de la propiedad de la tierra. Cuenca, 31 de octubre de 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/304.

<sup>566</sup> SNEC. Informe de enero de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/230, nº 65 (1<sup>a</sup>).

<sup>567</sup> Ídem.

<sup>568</sup> SNEC. Memoria de marzo de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/230, nº 65 (1<sup>a</sup>).

<sup>569</sup> Los datos de abril, mayo y junio tienen como fuente los informes de dichos meses del SNEC. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/230, nº 65 (2<sup>a</sup>).

<sup>570</sup> Los datos de julio a noviembre incluidos tiene como base los informes de dichos meses del SNEC. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/231, nº 65.

<sup>571</sup> Los datos de diciembre provienen de los informes de dicho mes del SNEC. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/261, pág. 10.

<sup>572</sup> SNEC. Memoria anual de actividades de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/261, nº 65 (1<sup>a</sup>), pág. 43.

<sup>573</sup> Artola, Miguel (dir.): *Enciclopedia de Historia de España*. Tomo 6<sup>o</sup>. Madrid, Alianza Editorial, 1993. Citando a Nieckau, Roser: La población en *Estadísticas de España, siglos XIX-XX*, 1989, pág. 605.

<sup>574</sup> Tamarit, Estructura..., tomo II, op. cit. 104.

<sup>575</sup> Restricciones eléctricas, 15 de septiembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 13601, 3.954, N/68-53.

<sup>576</sup> SNEC. Memoria anual de actividades de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/261, nº 65 (1<sup>a</sup>), pág. 66.

<sup>577</sup> SNEC. Informe de enero de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/230, 65 (1<sup>a</sup>).

<sup>578</sup> Por tanto, si tenemos en cuenta que el paro oficial se situaba en 109.228 existía un 47,2 % más de paro que el que oficialmente se confesaba. Según las mismas estimaciones del SNEC la cifra ascendía a 179.429 con lo cual la diferencia porcentual se situaba en un 64,2 %.

<sup>579</sup> SNEC. Informe de febrero de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/230, nº 65 (1<sup>a</sup>).

<sup>580</sup> Según las mismas estimaciones del SNEC la cifra sería de 182.814 lo cual suponía que había que incrementar la cifra de paro oficial (109.717) en un 66,62 %.

<sup>581</sup> SNEC. Informes de febrero de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/230, 65 (1<sup>a</sup>), pág. 13.

<sup>582</sup> Ídem, pág. 31.

<sup>583</sup> Ídem.

<sup>584</sup> SNEC. Informes de marzo de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/230, 65 (2<sup>a</sup>).

<sup>585</sup> Ídem, pág. 10.

<sup>586</sup> SNEC. Informe de abril de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/230, 65 (2<sup>a</sup>).

<sup>587</sup> Se estimaba por parte del SNEC la cifra de 188.960 parados lo cual quería decir que pese a lo que indicaban las estadísticas oficiales (107.491 parados en abril del 53 y 112.556 en abril del 52) la realidad era que el número de parados estimados según el propio SNEC se había incrementado con respecto al mismo mes del año 52 en el que los parados estimados eran 185.805.

<sup>588</sup> SNEC. Informe de abril de 1953, op. cit., pág. 10.

<sup>589</sup> Correspondencia del Alcalde de Motril (Granada) al ministro de Gobernación (Blas Pérez), 14 de abril de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.760. El subrayado es nuestro.

<sup>590</sup> SNEC. Informe de mayo de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/230, nº 65 (2<sup>a</sup>).

<sup>591</sup> Según las estimaciones del SNEC la cifra de parados ascendía a 156.611.

<sup>592</sup> SNEC. Informe de mayo de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/230, 65 (2<sup>a</sup>), pág. 34.

<sup>593</sup> SNEC. Informe de junio de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/231, 65.

<sup>594</sup> En el mismo mes del año 52 el paro estimado ascendía a 140.948. Según estimaciones del propio SNEC la cifra total sería de 135.308.

<sup>595</sup> SNEC. Informe de junio de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/231, nº 65, pág. 10.

<sup>596</sup> Ídem, pág. 32.

<sup>587</sup> Tamames, *Estructura...* tomo II, op. cit., pág. 218. Hay que tener en cuenta que por los Decretos de 15 de febrero y 14 de junio de 1952 del ministerio de Industria se convocaron dos concursos para el montaje de fábricas de tractores ganados por Lanz Ibérica y Motor Ibérica, y que a partir del año 1953 la fabricación nacional de tractores se vio incrementada paulatinamente del modo siguiente: en 1953, 47 unidades; en 1954, 60; en 1955, 850; en 1956, 750 y en 1957, 1.508.

<sup>588</sup> SNEC. Informe de junio de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/231, nº 65, pág. 32.

<sup>589</sup> Naredo, *La evolución de la agricultura...*, op. cit., pág. 82.

<sup>590</sup> Como factor principal para realizar la defensa de la mecanización del campo español se incidía en sus efectos positivos sobre la productividad del campo vía disminución de costes laborales. Leal, *El trabajo y el trabajador...*, op. cit., pág. 25-26.

<sup>591</sup> Concretamente afirma que "se desarrolló una política agraria dirigida fundamentalmente en dos direcciones: colonización y concentración parcelaria, para hacer frente a dos problemas básicos: la necesidad de aumentar la superficie de regadíos y la de acabar con el minifundismo." Pese a ello la primera ley sobre concentración parcelaria se promulgó el 20 de octubre de 1952 y la disposición definitiva el 20 de julio de 1955. Tamames, *Estructura...* tomo I, op. cit., pág. 75.

<sup>592</sup> SNEC. Informe de julio de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/231, nº 65.

<sup>593</sup> Según el SNEC la cifra podría ascender a 141.773 parados.

<sup>594</sup> SNEC. Informe de julio de 1953, op. cit., pág. 32.

<sup>595</sup> SNEC. Informe de agosto de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/231, nº 65.

<sup>596</sup> Según el SNEC la cifra podría ascender a 167.844 lo cual indica que en relación a la cifra oficial de paro (104.370) habría que considerar un 60,8 % más de desempleo.

<sup>597</sup> SNEC. Informe de septiembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/231, nº 65.

<sup>598</sup> SNEC. Informe de octubre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/231, nº 65.

<sup>599</sup> *Idem.*

<sup>600</sup> Proyecto de Plan de ordenación económica-social de la provincia de Almería. Presidencia del Gobierno. Secretaría General para la Ordenación Económico-Social, 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 88, r/473.

<sup>601</sup> *Idem.*

<sup>602</sup> SNEC. Memoria anual de actividades de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/261, 65 (1ª), pág. 105-106.

<sup>603</sup> *Idem.* pág. 100.

<sup>604</sup> Ampliación a la nota sobre Política social agraria en Badajoz, 1 de diciembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N/106-53, pág. 1.

<sup>605</sup> Política social agraria en Badajoz, 23 de noviembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N/104-53, pág. 1.

<sup>606</sup> *Idem.*

<sup>607</sup> "Urgo resolver, especialmente, las expropiaciones de las fincas de Jerez de los Caballeros declaradas ya de interés social, y donde los agricultores, entre los que se encuentran 400 aparceros y arrendatarios sin tierras o con insuficiencia de éstas, esperan con ansiedad la tramitación y resolución de los expedientes respectivos," se afirmaba en Política social agraria de Badajoz, op. cit., pág. 7.

<sup>608</sup> Problema de los yunteros en Cáceres, 13 de noviembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N/103-53, pág. 1-2.

<sup>609</sup> Problema social agrario de la provincia de Cáceres. Delegación Provincial Sindical de Cáceres, oficio nº 6.334, de 3 de noviembre. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N/103-53, pág. 2.

<sup>610</sup> *Idem.*

<sup>611</sup> Problema de los yunteros..., op. cit., pág. 2.

<sup>612</sup> Marcelo Corchado, *Contribución al estudio...* op. cit., pág. 404.

<sup>613</sup> Se refiere a los 290.087 parados de mayo que se contraponen a una cifra oficial mucho menor.

<sup>614</sup> Redondo Gómez, *Fusado, presente...*, op. cit., pág. 170.

<sup>615</sup> Otras estimaciones dan la cifra de 174.689 parados. SNEC, enero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/287, 65 (1ª).

<sup>616</sup> SNEC. Informe de febrero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/287, 65 (1ª).

<sup>617</sup> SNEC. Informe de marzo a octubre de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/262, 65 (2ª).

<sup>618</sup> Redondo da para este mes la cifra de 290.087 (casi doblando las cifras oficiales que su propio organismo ofrecía como más veraces), de los cuales 215.393 pertenecerían al sector agrícola y 80.825 al industrial, siendo la provincia con más paro agrícola Sevilla con 27.254 y con más paro industrial Madrid, con 11.066. Téngase en cuenta que habría que elevar en un 154 % la cifra de paro oficial para llegar a la que el Jefe Nacional del SNEC estimaba como más veraz. Redondo, *Pasado, presente...*, op. cit., pág. 170.

<sup>619</sup> SNEC, noviembre de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/287, 65 (1ª).

- <sup>620</sup> Clavera, *Capitalismo español...*, op. cit., pág. 28.
- <sup>621</sup> SNEC. Informe de enero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/261, 65 (1<sup>o</sup>).
- <sup>622</sup> Las estimaciones de este mismo mes llegan a utilizar la cifra estimada de 185.860 parados.
- <sup>623</sup> SNEC. Informe de enero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/261, 65 (1<sup>o</sup>) pág. 10.
- <sup>624</sup> Correspondencia de la FNS con la Secretaría Nacional de Sindicatos (M. Vizcaino Márquez) de 14 de junio de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.750.
- <sup>625</sup> En el caso de Badajoz había acabado ya la recogida y molturación de la aceituna y no habían comenzado los trabajos de escarda por la sequía y las heladas que impedían el crecimiento de la siembra.
- <sup>626</sup> Según los informes reservados de la Delegación Provincial de esta provincia se estimaba que el paro, independientemente de cifras oficiales, entre un 60 y un 70 % superior al paro del año 1953. Informes reservados de la Delegación Provincial Sindical de Toledo, mayo de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.748.
- <sup>627</sup> SNEC. Informe de enero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/261, 65 (1<sup>o</sup>), pág. 20.
- <sup>628</sup> SNEC, febrero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/262, 65 (2<sup>o</sup>).
- <sup>629</sup> En este mismo informe se da la cifra estimada de 185.860 parados, lo cual supone un incremento del 41,5 % con respecto a la cifra de paro oficial (131.280).
- <sup>630</sup> SNEC, febrero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/262, 65(2<sup>o</sup>), pág. 10.
- <sup>631</sup> Redondo, *Pasado, presente...*, op. cit., pág. 171.
- <sup>632</sup> La cifra más pesimista, usando como fuente este mismo informe, era la de 183.722.
- <sup>633</sup> SNEC. Informe de abril de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/262, 65 (2<sup>o</sup>).
- <sup>634</sup> La cifra de 174.466 es la más alta de las estimadas.
- <sup>635</sup> SNEC, abril del 54, op. cit., pág. 10.
- <sup>636</sup> Partimos del hecho de que la revisión de la cifra anteriormente dada está más próxima a la realidad que la de algo más de cinco mil parados.
- <sup>637</sup> Informe sobre paro en la provincia de Córdoba. Delegación Provincial de Sindicatos de Córdoba, abril de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.750. Para el mes de septiembre se aporta la cifra de 18.630 frente a los 13.172 reconocidos oficialmente.
- <sup>638</sup> Entre los 169.469 estimados de abril de 1953 y los 174.466 del mismo mes de 1954 había un 2,9 % de incremento.
- <sup>639</sup> SNEC, abril de 1954, op. cit., pág. 10.
- <sup>640</sup> La cifra estimada más elevada era la de 153.476 parados.
- <sup>641</sup> SNEC, abril de 1954, op. cit. pág. 10.
- <sup>642</sup> Ídem, pág. 29.
- <sup>643</sup> SNEC. Informe de julio de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/262, 65 (2<sup>o</sup>).
- <sup>644</sup> En este mismo informe se daba la cifra de 137.661 parados.
- <sup>645</sup> SNEC. Informe de julio de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/262, 65 (2<sup>o</sup>).
- <sup>646</sup> En este mismo informe se daba la cifra de 139.221.
- <sup>647</sup> SNEC, julio de 1954, op. cit., pág. 10.
- <sup>648</sup> Ídem.
- <sup>649</sup> Ídem, pág. 30.
- <sup>650</sup> Sobre Jaén, en el informe del SNEC encontramos la siguiente aseveración comparando la situación del paro estimado: "...continúa el paro siendo relativamente grave registrándose un paro superior al del pasado año en un 95 % aproximadamente siendo las perspectivas de los meses venideros poco halagüeñas al presentarse escasa la próxima cosecha de aceituna." SNEC, julio de 1954, op. cit., pág. 32.
- <sup>651</sup> Consejo Económico Sindical de Jaén, 8-10 de junio de 1954. Ponencia sobre el paro obrero. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 481.
- <sup>652</sup> Ídem.
- <sup>653</sup> SNEC. Informe de septiembre de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/287.
- <sup>654</sup> La cifra estimada más elevada era de 155.920 parados.
- <sup>655</sup> SNEC, septiembre de 1954, op. cit.
- <sup>656</sup> La cifra estimada más elevada era de 167.567.
- <sup>657</sup> Esta cifra se eleva a 20.502 (si tomamos como referencia los Informes del SNEC de 1956: A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.376) y a 35.000 (tomando como referencia el informe titulado *Grave problema de paro obrero en la provincia de Jaén*, septiembre de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 481).
- <sup>658</sup> Redondo señala que, pese a las cifras expuestas, la provincia española con un mayor problema de paro era Sevilla y da (sorprendentemente) la cifra de 34.043 en septiembre (28.754 en el sector agrícola y 5.289 en el industrial) sobre una población activa de 439.749 trabajadores y trabajadoras. Sobre ello afirma lo

siguiente: "El paro agrícola sevillano obedece a un complejo de causas, algunas de ellas, como la mecanización de las faenas del campo, irá acentuando su influencia cada vez más. Estamos, pues, ante un paro agrícola de tipo estacional, climatológico y tecnológico, abierto a un futuro de suma gravedad." Redondo, *Pasado, presente...*, op. cit., pág. 165.

<sup>659</sup> Grave problema de paro obrero..., op. cit.

<sup>660</sup> SNEC, septiembre de 1954, op. cit., pág. 20.

<sup>661</sup> *Ibidem*, pág. 35.

<sup>662</sup> Partes reservados de la Delegación Provincial de Albacete, marzo de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.525.

<sup>663</sup> Grave problema de paro..., op. cit.

<sup>664</sup> El subrayado es nuestro. Informe de la Delegación Provincial de Jaén (Cesar Gallo Arnedo) al Secretario Nacional de Sindicatos, 3 de septiembre de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 481.

<sup>665</sup> SNEC, septiembre de 1954, op. cit., pág. 17.

<sup>666</sup> Redondo, *Pasado, presente...*, op. cit., pág. 153.

<sup>667</sup> SNEC, septiembre de 1954, op. cit., pág. 31.

<sup>668</sup> La anotación es nuestra.

<sup>669</sup> SNEC, Informe de septiembre, op. cit., pág. 31-32.

<sup>670</sup> SNEC, Informe de octubre de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/287.

<sup>671</sup> En este caso la cifra dada como estimada coincide con la del informe general del año 1954, si bien rompe la tónica del cálculo del paro estimado de los anteriores meses al no sumar la cifra del agrícola estimado con la del industrial, de lo cual resultaría que la cifra menos optimista de parados (normalmente la utilizada como cifra estimada por el SNEC) sería la de 188.628.

<sup>672</sup> SNEC, octubre de 1954, op. cit., pág. 11.

<sup>673</sup> La situación en esta provincia aparece descrita de esta forma: "...continúa aumentando el paro en esta Provincial, revistiendo importancia ya que el mismo se ve agravado por la falta de lluvias que impiden realizar trabajos complementarios en el campo, al mismo tiempo que ha perjudicado notablemente la cosecha de aceituna, cayéndose gran parte de este grupo por falta de la humedad necesaria." SNEC, octubre de 1954, op. cit., pág. 22.

<sup>674</sup> En Badajoz, la mayor incidencia del paro se debía a la sequía que impedía el comienzo de las labores de siembra con lo que las ofertas de empleo se centraban únicamente (y de forma escasa) en la vendimia y en la aceituna de verdeo.

<sup>675</sup> SNEC, octubre de 1954, op. cit., pág. 31.

<sup>676</sup> SNEC, Informe de noviembre de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/287.

<sup>677</sup> SNEC, Informe de enero de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/287. Sorprendentemente las cifras de diciembre coinciden con las de noviembre, lo cual viene a poner de manifiesto el carácter aproximado de las estimaciones, los errores en el aparato estadístico y lo elevado de las cifras reales.

<sup>678</sup> 164.147 en 1953 frente a 191.953 lo cual suponía un incremento de un 16,9 %.

<sup>679</sup> SNEC, noviembre de 1954, op. cit., pág. 10.

<sup>680</sup> La cifra relativamente elevada de parados a finales del año 1954 en esta provincia se podía deber, entre otras causas, a las que exponía la CNS de dicha provincia:

"Las causas del mismo son: las tres malas cosechas consecutivas que ha tenido esta provincia y que en este año de 1954 han sido una excepción en España, la prohibición de nuevas plantaciones de viñas y la reposición de las pérdidas que ocupaban durante los meses de noviembre y diciembre a los obreros agrícolas, la escasa cosecha de aceituna, que invertía durante los meses de enero, febrero y marzo a la mayoría de nuestros campesinos, la falta de obras de carácter municipal y provincial. Por otra parte, la pasada crisis vitivinícola y las disposiciones sobre arranque de viñas puestas en tierras de regadío y en las de secano susceptibles de dar doce quintales de trigo, han creado una alarma en el campo que no podemos desconocer en una provincia que solo vive de la vid y del vino." Partes reservados de la Delegación Provincial Sindical de Ciudad Real, diciembre de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.748.

<sup>681</sup> El informe mensual del SNEC afirma sobre Jaén que "cada día adquiere mayor importancia y caracteres de gravedad el paro en esta provincia, ya que el registrado en el presente mes es superior al cincuenta por ciento del mismo mes del pasado año y aunque en la actualidad se llevan a efecto con cierta intensidad las faenas de recolección de aceituna para almazara, éstas no son suficientes para absorber la totalidad de brazos en paro, agravado a su vez por la falta de lluvias que ha restringido la cosecha de este fruto. SNEC, noviembre de 1954, op. cit., pág. 34.

- <sup>662</sup> Los informes mensuales de enero a octubre (inclusive) del SNEC provienen de A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/287.
- <sup>663</sup> 179.145 según el mismo informe del mes de enero de 1955 del SNEC. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/287.
- <sup>664</sup> Los informes de noviembre y diciembre provienen de A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/304.
- <sup>665</sup> SNEC, Informe de enero de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/287.
- <sup>666</sup> Dicha cifra supera en 4.026 la aportada por el informe anual citado anteriormente.
- <sup>667</sup> Redondo, *Pasado, presente...*, op. cit., pág. 137.
- <sup>668</sup> Ídem, pag. 178.
- <sup>669</sup> Tamames, *Estructura...*, op. cit., pág. 104 citando a F. Llanco: Desarrollo de las interconexiones y a S. Castro Cardús: Intercambios internacionales de energía eléctrica, ambos en I.C.E., núm. 408, agosto de 1967.
- <sup>670</sup> Clavera y otros, *Capitalismo...*, op. cit., pág. 124.
- <sup>671</sup> 14.787 tomando como referencia Informes del SNEC, 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.376.
- <sup>672</sup> SNEC, enero de 1955, op. cit., pág. 29-33.
- <sup>673</sup> Proyecto del Plan de ordenación económico-social de la provincia de Cáceres. Presidencia del Gobierno. Secretaría General para la Ordenación Económico-Social, 1957. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 88, 473.
- <sup>674</sup> Ídem.
- <sup>675</sup> Ídem.
- <sup>676</sup> Mateo, *Contribución al estudio del problema del paro...*, op. cit., pág. 403.
- <sup>677</sup> SNEC, Informe de febrero de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/287.
- <sup>678</sup> 196.159 según el informe anual.
- <sup>679</sup> SNEC, febrero de 1955, op. cit., pág. 10-29.
- <sup>700</sup> "La causa (*del desempleo*) es la inactividad en el campo por lo pequeño de la cosecha de aceituna y agravado por las lluvias que paralizaron las labores de siembra y escarda" afirmaba el SNEC en su informe de febrero de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/287, pág. 25.
- <sup>701</sup> Cádiz estaba siendo gravemente afectado por la falta de dinamismo de las industrias vitivinícolas que veían como disminuían sus mercados exteriores al elevarse los precios de sus mercancías. Ídem, pág. 150.
- <sup>702</sup> Concretamente se refiere a la cuestión de la siguiente forma: "El ambiente político social de la provincia se ha enrarecido aún más de lo señalado en los partes anteriores ya que el paro estacional de la agricultura...en estos últimos días alcanza la cifra de 20.000 parados,..." En este caso habríamos de multiplicar la cifra oficial por casi 39. Parte reservado del Delegado Provincial Sindical de Toledo, febrero de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 5.382.
- <sup>703</sup> SNEC, febrero de 1955, op. cit., pág. 30.
- <sup>704</sup> SNEC, Informe de mayo de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/287.
- <sup>705</sup> Ídem.
- <sup>706</sup> Redondo, *Pasado, presente...*, op. cit., pág. 146.
- <sup>707</sup> SNEC, mayo de 1955, op. cit., pág. 25.
- <sup>708</sup> Problema del paro obrero en la provincia de Córdoba, septiembre de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N/178-55, pág. 1.
- <sup>709</sup> Ídem, pág. 2.
- <sup>710</sup> SNEC, Informe de noviembre de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/304.
- <sup>711</sup> Como ya se ha mencionado el sustento documental básico del estudio sobre el paro son los informes del SNEC existentes en el fondo de Sindicatos del Archivo General de la Administración. Desde la primavera de 1955 los informes mensuales existentes o con los que el investigador ha podido dar disminuyen de forma drástica por lo que en este momento, al contrario de lo que ha sido la tónica, se pasa de las referencias del mes de mayo directamente al mes de noviembre, teniendo únicamente como referencia de los restantes meses las cifras de paro estimado total que aparecen en el cuadro referente al año 1955. SNEC, Informe de octubre de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/304.
- <sup>712</sup> SNEC, noviembre de 1955, op. cit., pág. 28.
- <sup>713</sup> Estudio económico-social de las grasas vegetales...op. cit., pág. 442.
- <sup>714</sup> SNEC, noviembre de 1955, op. cit., pág. 11.
- <sup>715</sup> Los informes de enero a octubre de 1956 se encuentran en SNEC. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/328.
- <sup>716</sup> Los informes de noviembre y diciembre de 1956 se encuentran en SNEC. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/328.
- <sup>717</sup> Riala Dallesteros, *Análisis del paro...*, op. cit., pág. 21.
- <sup>718</sup> De Torres, *Juicio de la actual política...*, op. cit., pág. 81.
- <sup>719</sup> Esta cuestión se trata más ampliamente en los capítulos en que se aborda el tema de la previsión social.

## **Capítulo 11. La cooperativa como instrumento de armonización social.**

El desarrollo del sistema cooperativo en España arranca con la Ley de Asociaciones de 1887 completada, por lo que se refiere al campo, con la Ley de Sindicatos Agrícolas de 18 de enero de 1906. Dicha disposición articuló el sistema cooperativo campesino hasta la puesta en marcha de la ley de 1942. Los Sindicatos Católicos Agrícolas creados a la luz de la ley de 1906 fueron bastante numerosos y se agruparon en Federaciones diocesanas y éstas en la llamada Confederación Nacional Católico-Agraria, fundada en el año 1916.

La segunda etapa se abrió con el Decreto de 4 de junio de 1931 (posteriormente Ley de 9 de septiembre de 1931). Esta disposición establecía la existencia de cooperativas de consumidores (distributivas o de consumo, de suministros especiales, sanitarias y de servicios diversos como restaurantes, enseñanza, etc. y de viviendas.), de productores (a su vez subdivididas en agrícolas, pecuarias y forestales, pesqueras, mineras y minerometalúrgicas, industriales, de construcción, transportes y comunicaciones, comerciales, etc.) de crédito, ahorro y seguros, mixtas e indeterminadas y escolares. Sin acabar la guerra civil se promulgó la Ley de Cooperación de 27 de octubre de 1938 (derogada por la Ley de Unidad Sindical de 26 de enero de 1940) cuyo objetivo era subyugar a las cooperativas existentes al Nuevo Estado. En esta disposición se asentó con rotundidad la capacidad del ministro de Organización y Acción Sindical para destituir o poner su veto a cualquier nombramiento en el seno de las cooperativas.<sup>1</sup>

La tercera etapa se corresponde con la Ley de Cooperativas<sup>2</sup> promulgada el 2 de enero de 1942.<sup>3</sup> El anteproyecto de Ley sobre el Concepto y Ordenación Jurídica de la Sociedades Cooperativas que consta en el Archivo del Presidencia del Gobierno fue el antecedente de dicha ley.<sup>4</sup> Hay que partir del hecho de que la Ley de Unidad Sindical de 26 de enero de 1940<sup>5</sup> modificaba el régimen jurídico de las asociaciones profesionales y de las cooperativas para conectar la legislación sobre dichas instituciones con las líneas maestras plasmadas en el Fuero del Trabajo. El presente anteproyecto tenía como fin dictar una "reglamentación de derecho suficiente para que organizase y disciplinase en sentido jerárquico y unitario la acción cooperativa." Sin embargo, esta realidad chocó, con el deseo por parte del ministerio de Trabajo, de desarraigar en los aspectos más esenciales a las cooperativas agrícolas de las atribuciones del sindio o de otros ministerios como el de Agricultura que reclamaba la creación de una sección para las cooperativas que sirviera para controlarlas de forma efectiva.<sup>6</sup>

La nueva ley establecía la existencia de cooperativas del campo, del mar, de artesanía, industriales, de viviendas protegidas, de consumo, de crédito y del Frente de Juventudes. Con respecto a la ley de 1931 desaparecían las de seguros y las escolares. Sin embargo, aparecían las



del Frente de Juventudes que, en el período de estudio de esta tesis, no tuvieron vigencia alguna como se constata por el hecho de que hasta 1963 no se creara ni una sola.<sup>7</sup>

Se pretendía amueblar el concepto de la cooperativa según los criterios de los subcapítulos 4 y 5 del capítulo XI del Fuero del Trabajo apartándose "del espíritu mercantil...eliminando el fin de lucro...evitando con ello la posibilidad de llegar al concepto de competencia desleal."<sup>8</sup> Paralelamente se desechaba el criterio de cooperativa profesional, considerado en pugna con los principios más elementales del ordenamiento jurídico del Estado nacional-sindicalista. En definitiva, se buscaba animar e incitar el espíritu de "hermandad económica" capaz de situarse felizmente en un punto intermedio entre el capitalismo y el socialismo. En el marco amoniacista que pretendía instaurar el franquismo las cooperativas habían de ser una de aquellas "novedades revolucionarias"<sup>9</sup> que habían de oponerse al lucro de la economía capitalista a la vez que combatían el materialismo socialista, estableciendo un marco formal de relaciones entre los hombres basado en el espiritualismo, el catolicismo y la solidaridad, como muestra de lo cual el consiliario ocupaba un lugar preferente en el marco organizativo de las mismas. Ello era ejemplo de la tendencia a romper con la lucha de clases. La introducción del sacerdote consiliario nombrado por el obispo de la diócesis no era más que otro ejemplo de la idea de que en un régimen, confesionalmente católico, el sistema cooperativo era también una nueva forma de hacer apostolado, de estructurar la sociedad española y la actividad económica cooperativa según los principios rectorés del régimen.

Pero frente a ello la realidad del funcionamiento de la economía nacional se distanciaba notablemente de las manifestaciones formales y de los deseos de las autoridades del Estado franquista. De hecho las cooperativas se ejercitaban en la competencia con los almacenistas en los años de predominio del mercado negro. Y así, "estando prohibido el establecimiento de nuevos almacenes de carbón, hierro, etc, creando una cooperativa se soslaya esta prohibición y al mismo tiempo se dañan los intereses legítimos de los almacenistas ya establecidos."<sup>10</sup> Todo ello permitía que, con el disfraz de las cooperativas, particulares obtuviesen de los organismos estatales autorizaciones, cupos de materias e incluso mayor campo de libertad para sus ventas con el objetivo de ampliar su cuota de mercado en sectores intervenidos. Este era el caso del sector textil que a mediados de los años cuarenta se presentaba como un caso de claro intrusismo de particulares instrumentalizando cooperativas fantasmas.<sup>11</sup>

El primer artículo del anteproyecto definía la necesidad de que existiese un contrato de sociedad cooperativa en el siguiente caso: "cuando diez o más personas naturales o jurídicas se obliguen a combinar sus esfuerzos con capital variable y sin ánimo de lucro, al objeto de lograr fines comunes de orden económico, sometiéndose expresamente a las disposiciones formales de la presente Ley."<sup>12</sup>

Las normas generales que debían regir la constitución de la cooperativa eran las que a continuación se citan:

- 1.- variabilidad del capital social para las sociedades constituidas con un capital declarado inicialmente.
- 2.- no limitación del número de socios (salvo en las cooperativas viviendas), teniendo cada uno de ellos iguales derechos.
- 3.- limitación del valor de las participaciones que los socios tuvieran en la sociedad.
- 4.- previsión en los estatutos del destino del capital social resultante tras la liquidación de la sociedad cooperativa.
- 5.- existencia de un denominado fondo de reserva no repartible.
- 6.- transferibilidad de las participaciones en el capital social solamente entre los socios.
- 7.- exclusión de los socios en concepto de empresarios, contratistas, socios capitalistas o semejantes.

La organización jerárquicamente superior que tenía como fin ser el órgano que recogiese y dirigiese las iniciativas y el desenvolvimiento económico de las cooperativas era la Unión (artículos 18 y 19). Dentro de estas Uniones se concebían cinco tipos distintos según sus finalidades: del campo, industriales, marítimas, viviendas protegidas y de consumo.

El control efectivo de los elementos rectores de dichas Uniones se llevaba a cabo por el ministerio de Trabajo en la medida en que era a éste al que le correspondía dar el visto bueno a los nombramientos de los elementos directivos de las mencionadas uniones. De igual manera los organismos rectores de las cooperativas habían de gozar del consentimiento de las autoridades en la medida en que anualmente habían de remitir al servicio de cooperación, aparte de los balances y del extracto de la cuenta de pérdidas y ganancias, los cambios en los órganos directivos a los efectos de aprobación.

En este sentido, el dictamen sobre el Reglamento de la ley de cooperación del Consejo de Estado de 16 de abril de 1943<sup>13</sup> aprobaba dicho reglamento con ciertas salvedades. En él se pretendía comprobar si la redacción del mismo daba cumplimiento a las normas contenidas en la mencionada ley. Mención aparte merece la escasa eficacia de las autoridades del ministerio de Trabajo para promulgar el presente reglamento dentro de los plazos estipulados por la ley (60 días desde la promulgación de ésta).

El reglamento en cuestión presentaba una orientación imprecisa en función de los criterios expuestos en la ley. Regulaba parcialmente el proceso de constitución, de modificación y de

extinción de las cooperativas. A la hora de desarrollar los diversos tipos de cooperativas lo hacía de una forma parcial e incompleta. No se diferenciaba con claridad a los entes cooperativos frente a las mutualidades, no prohibiéndose con total claridad la posibilidad de que las cooperativas del campo pudieran constituirse con el fin exclusivo de la previsión, con lo cual se dificultaba la delimitación entre aquéllas y las mutualidades.

Entre sus órganos de gobierno se encontraba la Asamblea General en la que todos los socios estaban representados. Igualmente a la Junta Rectora, por delegación de la Asamblea General, le correspondía la gestión y representación de la cooperativa. Aquélla estaba integrada por un Jefe, un Secretario y cuatro Vocales como mínimo. Paralelamente, se proponía en este anteproyecto, la existencia de un Consejo de Vigilancia compuesto por tres socios, nombrado por la Asamblea General y que tenía como fin esencial controlar la labor de la Junta Rectora.

Sin embargo, el problema fundamental se planteaba en orden a la relación en el seno de la cooperativa de la iniciativa privada, el Estado y los organismos sindicales:

“Con respecto a estos problemas se ofrecían al legislador tres soluciones extremas: considerar a las sociedades cooperativas como organismos del Estado, considerarlas como organismos estrictamente sindicales, y por último, considerarlas como producto de la iniciativa privada a la que se habrían de reservar todas las atribuciones sometidas sólo al control puramente jurídico del Estado.

De estas tres soluciones se optó principalmente por la última...aunque no de modo exclusivo ya que la iniciativa privada, sin freno ni más regulación que la estrictamente jurídica del Estado, habría de rozar con principios e instituciones de éste; se buscó, por lo tanto, su intervención y la de la organización sindical, regulándola cuidadosamente a fin de conseguir, de una parte, la cristalización de los postulados fundamentales del Nuevo Estado, Unidad y Jerarquía en el movimiento cooperativo; y mantener, de otro lado, el principio de la iniciativa privada en todo lo compatible con dichos principios fundamentales...”<sup>34</sup>

Todo ello se plasmaba en los preceptos relativos al nacimiento, constitución y extinción de la sociedad cooperativa; en lo referente al gobierno de la misma y en lo alusivo a su encuadramiento, como ya se ha mencionado. Y en torno a todo ello, se establecían los mecanismos de control de las autoridades del ministerio de Trabajo y de la organización sindical. Por ese motivo nació la Obra Sindical de Cooperación el 2 de enero de 1942 con el objetivo de organizar jerárquicamente todo el movimiento cooperativo español, promoviendo y dirigiendo dicho movimiento.

Así pues, la iniciativa para la constitución permanecía en manos de los particulares. La organización sindical no tenía en esta primera etapa de la vida cooperativa más funciones que las de trámite e información. Es decir, se mantenía el gobierno de la sociedad cooperativa en las manos de los asociados si bien este poder no era ostentado en su plenitud por la masa inorgánica de los socios, sino que se la dotaba, en función de los fundamentos ideológicos básicos del régimen de un molde jerárquico que permitía el control por parte del Estado. Es por ello que la responsabilidad de la gestión de la cooperativa recaía en la junta rectora y no en la asamblea general en línea con la natural superioridad de éste órgano sobre aquél. Es decir, se estructuraba el gobierno de la sociedad cooperativa a base de la iniciativa privada pero configurando ésta de un modo plenamente jerárquico que no dejaba resquicio a la libre iniciativa que se defendía teóricamente como ideal de gestión. En este sentido, la organización sindical actuaba en direcciones diferentes. Por un lado y de modo inmediato, por medio de los delegados provinciales, los cuales tenían la facultad de veto sobre la elección de la Junta Rectora y también a través de la Obra Sindical de Cooperación, haciendo responsables ante ésta a las cooperativas, recibiendo datos, organizando el movimiento cooperativista a través de la uniones y ejerciendo funciones de tutela y vigilancia:

"De lo expuesto se desprende que el criterio adoptado por la Ley para la distribución de facultades de gobierno entre la iniciativa privada, el Estado y la organización sindical, no ha seguido una separación estricta entre esos tres factores, según la función que concretamente se tratase de ejercer, salvo en lo relativo a sanciones económicas, íntegramente reservadas al Estado."<sup>15</sup>

De igual manera, en esta línea de control de la institución cooperativa se establecía el derecho de veto contra los acuerdos de la asamblea general y de la junta rectora por parte de los delegados provinciales de la Obra Sindical de Cooperación. Este derecho de veto, desde el peculiar punto de vista de la organización sindical, debía entenderse limitado a la facultad de "corregir las posibles desviaciones" del verdadero sentido de la sociedades cooperativas, lo cual abría el paso a todo tipo de decisiones arbitrarias con un trasfondo político relacionado con la simple actitud de desafección de los integrantes de la asamblea general y de la junta rectora con respecto al régimen del general Franco. Es por ello que ni siquiera se establecía la regulación de las cooperativas para recurrir ante la Jefatura Nacional de la Obra Sindical de Cooperación ante el posible veto a sus decisiones. Consiguientemente, el supuesto margen de libertad para la iniciativa quedaba tan desnaturalizado y coartado que, en la práctica, su actividad era presidida por planteamientos en las antípodas de la idea de libertad. En torno a ello el mencionado dictamen del Consejo de Estado afirmaba lo siguiente:

"Debiera suprimirse...lo referente a la intervención que respecto a plazos y condiciones dicta la Obra Sindical de Cooperación ya que esta regulación desvirtúa el espíritu de la Ley que quiere dejar la elección en manos de los socios...sin que intervenga la organización sindical hasta que esté elegida la Junta Rectora. Se evitarán además con esta supresión, no intromisiones en la elección, que no habrían de producirse, sino la sospecha de que eso pudiera suceder, robusteciéndose así la autoridad y el prestigio que siempre debe rodear a la organización sindical."<sup>16</sup>

Inevitablemente la reacción de los organismos sindicales y del ministerio de Trabajo, ante las muy leves críticas del Consejo de Estado, se escoraba hacia la negación de su deseo de entrometerse en el ámbito de la libertad de la institución cooperativa.<sup>17</sup>

Las exenciones contempladas en el anteproyecto no superaban las previamente existentes. Entre ellas estaba el pago de la contribución industrial, el pago de la contribución sobre utilidades de la riqueza mobiliaria (sólo en ciertos casos), el pago del impuesto del timbre y los derechos reales por su constitución, modificación, unión o disolución. De igual manera, se disponía que los derechos de aduanas satisfechos por maquinaria, aperos, semillas, materias primas o ejemplares reproductores selectos para mejorar la ganadería serían devueltos a instancias de la cooperativa por el ministerio de Hacienda, previa la declaración por el ministerio de Trabajo sobre la utilidad de dicha importación.

Dentro del ámbito punitivo se establecía la sanción de 5.000 pts. para las sociedades o empresas que operasen ostentando indebidamente la condición o nombre de cooperativa.

De un examen comparativo entre la legislación vigente hasta la promulgación de la Ley de Cooperativas de 1942 y este anteproyecto se deducen que las finalidades a que respondía éste eran básicamente cuatro:

- 1.- la sustitución del criterio democrático de la legislación precedente por otro de tipo jerárquico y unitario más en la línea de lo que representaba el régimen del general Franco.
- 2.- la eliminación teórica del sentido del lucro en estas entidades.
- 3.- la supresión de las cooperativas profesionales dado que, en el marco del Nuevo Estado franquista, aquéllas habían de quedar encuadradas dentro del sindicato.
- 4.- y la interpretación de las cooperativas como asociaciones de esfuerzos personales y no de capitales.

Cabe recoger entre las contradicciones del presente anteproyecto la existente entre la prohibición para las cooperativas de consumidores de vender al público con el apartado b) del

artículo 54, en el que se exime del pago de la contribución sobre utilidades de la riqueza mobiliaria a estas cooperativas por los beneficios repartidos a sus socios.

Pese a ello el aspecto fundamental de la ley lo constituye la tendencia a robustecer los lazos de dependencia con el ministerio de Trabajo dado que se declaraba que la personalidad jurídica de la cooperativa no quedaba establecida hasta que ésta fuera inscrita en el registro correspondiente, "acentuando más el carácter estatal de su creación, a diferencia del criterio mixto de la legislación actual más vacilante y según la cual la inscripción es sólo un requisito para poder operar con terceros."<sup>18</sup> Como digo, quizás este sea el aspecto más relevante del anteproyecto al que nos referimos en la medida en que reglamenta la actividad de unas instituciones formalmente autónomas que, de hecho, quedaban subyugadas a los criterios gubernamentales por medio del ministerio de Trabajo y a través del control por parte de éste de sus élites dirigentes.

Paralelamente, llama la atención que se omita la prohibición, hasta ese momento vigente, de que las personas jurídicas formaran parte de las sociedades cooperativas de responsabilidad ilimitada, "tal vez por considerarla innecesaria dada su infrecuencia,"<sup>19</sup> lo que podía ser un peligroso vacío en la ley. En cuanto a la dirección de la cooperativa se recalca el esquema *uniformista y rígido* que enclavaba la actividad de las cooperativas dentro de un marco general dirigido por el ejecutivo "marcando la diferencia entre la concepción liberal y la del Nuevo Estado."<sup>20</sup>

Con respecto a la legislación anterior al anteproyecto, establecía otra diferencia comprensible en el seno de un régimen autoritario. Entre los tipos de cooperativas en función de su fines se establecían las del campo, las de la industria, marítimas, de consumo y de viviendas protegidas, etc. Sin embargo, quizás eran las de viviendas las que, en contradicción con los principios formales propugnados, cumplían un papel más modesto y, cuando no, insignificante.<sup>21</sup> Se suprimían las profesionales y, por supuesto, las de trabajadores. Estas últimas no se consideraban necesarias en una única organización sindical, aparte de la connotación subversiva que su existencia tendría dada su capacidad de servir de paraguas para posibles actividades de elementos contrarios al régimen que la autoridades pretendían exterminar por todos los medios posibles.

En definitiva, salvo por lo que hacía referencia al afán por controlar desde las instancias de poder y autoridad a las sociedades cooperativas, el anteproyecto al que nos referimos no representaba un giro fundamental en las normas que regían el funcionamiento de dichas instituciones. Téngase en cuenta que había varios artículos eran idénticos a la ley de septiembre de 1931. Por ejemplo, el artículo 2º era igual al 6º de la vigente hasta ese momento. El 3º (como

el 2º, dentro de las declaraciones de tipo general), era una síntesis del 4º y del 5º. Los artículos del 9º al 12º (sobre los socios) se copiaron literalmente del 8º vigente. En cuanto a las relaciones jurídicas externas, el artículo 35, 36 y 37 reproducían también la legislación vigente.

Pero esto explica que, pese a ello, uno de los problemas principales que tuvo el ministerio de Trabajo fue la tendencia a monopolizar todo lo referente al mundo cooperativo. Al detestar el ideal de la lucha de clases de los sindicatos tradicionales, supuestamente se había instalado en la vida sindical un espíritu de hermandad y solidaridad entre los integrantes de la comunidad propia de las cooperativas que, por otro lado tenían un desarrollo modesto si lo comparamos con otros países. Desde este punto de vista, el trabajador dejaba de ser asalariado de la clase patronal; se había de sentir más estimulado y, por tanto, debía abandonar la idea de desarrollar conflictos o convulsiones sociales.<sup>22</sup>

Desde este punto de vista, "las cooperativas deben estar sometidas a la disciplina política de la organización sindical...deben estar encuadradas en la organización sindical...y el sindicato debe valerse de las cooperativas para la realización de muchos de su fines asistenciales."<sup>23</sup> Ello originó en los comienzos del movimiento cooperativo, sobre todo en el campo, roces con la misma Confederación Nacional Católica-Agraria por cuanto para ésta la legislación promulgada suponía la subyugación de sus instituciones a los principios del Nuevo Estado que en los primeros años cuarenta parecían adquirir un sesgo fascistizante y, en consecuencia, el sometimiento a las Hermandades de Labradores y Ganaderos. Entre ambas realidades se desarrolló, más que cooperación, competencia por el control de la actividad cooperativa. Y es que, jurídicamente se planteaba el lógico problema en torno al hecho de si las hermandades, sometidas al derecho público, podían desarrollar actividades de tipo económico, dado que éstas estaban normalmente atribuidas a las cooperativas.

El afán de control por parte de la organización sindical tenía, en parte, una razón puramente política en la medida en que se era consciente de que gran parte de las cooperativas nacidas al amparo de la ley de 18 de enero de 1906 eran antiguos sindicatos que constituían focos potenciales desestabilizadores del "orden y la paz" creada por el nuevo régimen.

Esta tendencia al encuadramiento se manifestaba esencialmente, como se ha mencionado, en el campo y secundariamente en el mar, donde las cooperativas creadas para la protección de los marineros dependían del Instituto Social de la Marina y permanecían a la postre fuera de las disciplina sindical

Esta tendencia a controlar el movimiento cooperativo por parte del sindicato respondía el afán por crear una institución que tuviera como finalidad la propaganda oral y escrita del mundo

cooperativo. En este caso dicha función fue desarrollada por medio del Instituto Sindical de Formación Cooperativa dependiente de la Obra Sindical de Cooperación. El supuesto descuido en que dicha función estaba a mediados de los años cincuenta y lo rezagado de España en torno a esta cuestión, no encubría más que el intento de acaparar parcelas de poder sobre las que las atribuciones del sindicato eran mínimas o inexistentes.<sup>24</sup> La materialización de este proyecto queda fuera del período de estudio de esta investigación, pero se puede afirmar que el objetivo formal era la "conquista del ambiente en la esfera intelectual y en los medios populares"<sup>25</sup> a favor de un cooperativismo controlado por el sindicato.

Una de las finalidades más inmediatas que perseguía el desarrollo del cooperativismo (sobre todo en lo referente a las cooperativas de consumo)<sup>26</sup> era el intentar resolver el problema de la vigilancia en la distribución de los víveres más esenciales para la población. Este y el supuesto abaratamiento de los productos al suprimirse parte de los intermediarios fueron objetivos "utópicos" que se mantuvieron únicamente como metas tendenciales no conseguidas. Quizás éstas fueran las que habrían de realizar un papel más relevante en la medida en que se pretendía hacer de ellas un instrumento de combate que ayudara a la recuperación de la normalidad en la economía y un regulador del mercado y de los precios, dado que se consideraba como "incuestionable"<sup>27</sup> que la potenciación de éstas había de generar una baja constante de los artículos de consumo incrementándose así el bienestar de la población, algo evidentemente no sostenible muy pocos años después de que el máximo responsable del cooperativismo sindical hiciera estas valoraciones. Pese a ello, durante la crisis inflacionista que precede a la salida de Girón del ministerio de Trabajo, el movimiento cooperativo fue visto como una fórmula eficaz para acabar con una crisis económica que traducida en crisis ministeriales iba a suponer otro episodio de la caída en picado del falangismo en el régimen de Franco.

Este afán fue el que provocó que el mundo del comercio viera un enemigo tenaz en las cooperativas en la medida en que éstas, al amparo de la ley de 1942, estaban exentas parcialmente de ciertos tributos. El mundo del comercio pretendía reducir las funciones de las cooperativas al campo y al mar por el hecho de que las restantes se dedicaban a comerciar en un sentido amplio, no restringiéndose a sus asociados. Por ello la obsesión de este sector de la economía era que desapareciesen las cooperativas de consumo (y los economatos de las empresas) dado que eran las que podían distribuir productos manufacturados y de primera necesidad.<sup>28</sup>

Pero esto no era lo más relevante. Como hasta ahora ha quedado expuesto lo fundamental para el régimen era hacer del cooperativismo un instrumento de desarrollo económico, teóricamente



apartado de los postulados económicos liberales que sirviera para estructurar la economía nacional y a la misma sociedad particularmente en el ámbito rural.

### 11.1. El desarrollo del movimiento cooperativo.

Al terminar la guerra civil existían aproximadamente 3.000 cooperativas. De ellas, en torno a las 2.000 eran Sindicatos Agrícolas Católicos encuadrados en la Confederación Nacional Católico-Agraria que asociaban a unas 200.000 familias. Otras 300 eran cooperativas de consumo con unos 150.000 asociados: alrededor de 100 eran cooperativas de producción industrial que agrupaban a unos 10.000 trabajadores y 40 eran cooperativas de viviendas con unos 2.000 socios.<sup>29</sup>

Al intentar cuantificar el desarrollo de las cooperativas se tropieza con un primer problema como es la ausencia de datos estadísticos veraces. Hemos acudido, independientemente de los documentos que se citan, al Anuario Estadístico de España. Las cifras de 1942 y 1943 incluyen el número de cooperativas que existían en cada uno de estos años. A partir de 1944 únicamente se considera el número de cooperativas que el ministerio de Trabajo autorizaba anualmente. Y así, si comparamos el número de cooperativas existentes en 1949 (4.513) podemos constatar que dicha cifra no coincide con la que se deduce al sumar las cifras aportadas por el Anuario (7.330 en 1949). Es más, llegamos a la conclusión de que los datos que oficialmente se hacían públicos (como en otros casos tratados en este estudio) tendían a sobredimensionar el peso del cooperativismo con una finalidad política: buscar el prestigio del régimen. Así, pese que el Anuario afirma que en 1942 existían 2.162 cooperativas, de la documentación de la O. S. de Cooperación podemos deducir que existían únicamente 1.755, bien porque no se daba de baja a las que dejaban de operar, bien por el motivo antes mencionado.<sup>30</sup>

Tomando con un carácter meramente orientativo los datos que para 1942 aporta la propia O. S. de Cooperación repetiremos que el número de cooperativas ascendía este año a 1.755.<sup>31</sup> Las cooperativas del campo eran las más numerosas con un total de 1.145, destacando las provincias de Navarra (162), Salamanca (121), Soria (92), Valladolid (72), Castellón (66), Alicante y Palencia (60 respectivamente). Las de consumo se centraban predominantemente en Lérida (25), Vizcaya (23), Guipúzcoa (20) Sevilla (13) y Huelva (11) estando el resto por debajo de las diez. 118 pertenecían al grupo de cooperativas industriales y de ellas 67 se encontraban en Barcelona siguiéndola, en segundo lugar, Valencia con 14. 75 eran de viviendas protegidas, de las cuales había 16 en Barcelona y Valencia (respectivamente), 14 en Santander y 13 en Alicante. Existían 43 eran cooperativas del mar siendo las más numerosas las de la provincia de la Coruña (13). Por su peso cuantitativo, aparecían en último lugar, las cooperativas de crédito en

número de 18 no destacando ninguna provincia por su número salvo Barcelona (con 3) y Madrid (con 2)

En el año 1949 los resultados cuantitativos del movimiento cooperativista se desenvolvían dentro de unos niveles reducidos en comparación con los objetivos formulados en la ley de cooperación del año 1942.<sup>32</sup>

En este año (1949) existían 4.513 cooperativas. 3.379 eran cooperativas del campo; 338 industriales; 456 de consumo; 150 de crédito; 89 de viviendas y 101 del mar. El número de asociados ascendía a 958.619 repartidos en los siguientes tipos de cooperativas, si bien el predominio de las del campo era abrumador:

Tipo de cooperativa	Nº de cooperativas
campo	767.005
industriales	22.710
consumo	127.910
crédito	16.990
viviendas	14.882
del mar	9.122
TOTAL	958.619

*\*Cuadro nº 75. Cooperativas y cooperativistas en 1949.*

El número de personas afectadas por las cooperativas ascendía a las cifras que seguidamente se exponen según el tipo de cooperativa:

Tipo de cooperativa	Nº de afectados
campo	3.835.025
industria	113.550
consumo	500.000
crédito	84.950
viviendas	72.410
del mar	45.610
TOTAL	4.651.545 <sup>33</sup>

*\*Cuadro nº 76. Afectados por las cooperativas en 1949.*

En el campo, ámbito en el que la intención política era más evidente, el número de asociados fue creciendo desde mediados de los años cuarenta. Pese a ello una de las parcelas que no

habían de descuidar las cooperativas, como era el caso de los créditos agrícolas, aparecía bastante abandonada a finales de los años cuarenta. En este sentido las cantidades adscritas para créditos agrícolas ascendían únicamente a 1.876.000 en el año 1946; a 22.423.350 en el año 1947 y a 47.865.850 en el año 1948.

Año	Asociados
1944	473.940
1945	541.951
1946	646.295
1947	705.345
1948	767.005

*\*Cuadro n° 77. Asociados cooperativistas de 1944 a 1948.*

La realidad era que, pese a que el cooperativismo estaba formalmente concebido como un elemento superador del capitalismo y del marxismo tan denostados por el régimen, el sistema cooperativo sufrió de algunos de los defectos congénitos de la economía de mercado cayendo algunas de ellas en manos de aquello contra lo que, en principio, pretendían luchar. Fernando Muñoz Grandes en la Asamblea Nacional de Cooperativas del Campo celebrada en 1958, como presidente de este grupo de cooperativas, se veía obligado a reconocer como en el ámbito agrícola se daban casos en los que los agricultores eran utilizados por las empresas sin que el Estado hiciera nada para remediarlo. Este era el caso de algunas centrales lecheras que acababan asociadas a empresas mercantiles en un régimen de paridad que rápidamente daba pie a la subyugación de los ganaderos a las empresas y, por tanto, al establecimiento de condiciones de hegemonía absoluta para los segundos.<sup>34</sup> En otros casos, el perjuicio para las gentes del campo no provenía de las empresas sino de los propios organismos sindicales que se entrometían en su vida por medio de las Hermandades de Labradores. Concretamente la organización sindical de Barcelona constataba este hecho:

“En cuanto a la Unión Territorial de Cooperativas del Campo,...hemos de hacer hincapié en que existen factores de difícil solución, mientras no se elimine en este aspecto la intervención de las Hermandades en la distribución de las materias primas asignadas a nuestros cooperadores del campo que, aun siendo exiguas las partidas, destinadas para su laboreo, no llegan a ellas en la mayoría de los casos, y las escasas cantidades, que perciben, con bastante gravamen, razones por las que nuestros socios cooperadores muestran disgusto y hasta cierto punto descontento, por lo que se muestran negligentes a las ofertas y requerimientos de esta Jefatura...”<sup>35</sup>

No en vano el Jefe Nacional de la O. S. Cooperación, Francisco Giménez Torres, señalaba en 1952 (cuando teóricamente las dificultades iniciales habían de estar superadas) que la rama que más dificultades ofrecía de cara a su integración en la organización sindical era la del campo sobre todo en lo referente a la relación de los cooperativistas con las hermandades.<sup>36</sup>

Caso similar era el descrito por el Consiliario de la Unión Nacional de Cooperativas del Campo (M. I. Sr. D. Alejandro Maisterrena) que pese a la alabanza hecha a las cajas rurales constataba el hecho de que, en gran medida, el dinero depositado por los campesinos en dichas entidades no servía para financiar sus obras ni para elevar su nivel de vida, dándose el caso de que dichos depósitos eran canalizados hacia actividades de especulación inmobiliaria en centros urbanos.<sup>37</sup> Y todo ello pese a que el cooperativismo del campo nacía teóricamente con el objetivo de superar la insuficiencia económica del agricultor a través de la asociación porque al ampliar la base personal aumenta el soporte de la responsabilidad y multiplica las posibilidades de obtener créditos y dinero para la empresa económica que es también la cooperativa.<sup>38</sup> Por tanto, esa supuesta transformación revolucionaria de la vida de la familia campesina por medio del sistema cooperativo no fue más que otro factor de los muchos que potenciaron los movimientos migratorios del campo a la ciudad.

Similar problema tuvieron las cooperativas industriales dada su escasa capacidad financiera por la tendencia de la banca a canalizar sus recursos hacia sectores considerados como más rentables y a buscar la inmediatez en la búsqueda del beneficio. En este sentido Navarro constataba el hecho del abandono por parte del sector bancario de las cooperativas industriales en las que el régimen había puesto formalmente tantas esperanzas:

"La gran barrera que se opone a este cristiano deseo es, como ya al comienzo advertíamos, la falta de capacidad financiera. El capitalista, curtido en la práctica de la simple y rentable especulación, en la ganancia de un dinero fácil, obtenido con un mínimo riesgo, no se adviene a soportar su colaboración a una nueva y más cristiana fórmula de capital-trabajo, en régimen cooperador, donde el primero podría dar al segundo la potencia financiera precisa para hacer triunfar esta nueva idea y coadyuvar a crear una mejor y más cristiana sociedad.

Pero, hoy por hoy, el capital está de espaldas a este problema. El simple interés legal, que la ley vigente propugna como única compensación a la colaboración del dinero, no le satisface. El altruismo es virtud infrecuente en el mundo de la finanza..."<sup>39</sup>

Podía haber sido este sector uno de los más importantes del sistema cooperativo y sin embargo constituyó un "fracaso"<sup>40</sup> en función de las objeciones que suscitaba el manejo de empresas por

parte de los trabajadores y por el miedo a las doctrinas políticas “democrático-igualitarias.”<sup>41</sup> A su vez estos temores estaban en la base de que la ley dedicase a este tipo de cooperativas un sólo artículo (el 40) caracterizado por su imprecisión con la consiguiente falta de regulación para la constitución de este tipo de cooperativas. En algunos casos las únicas cooperativas que lograban pasar por cooperativas industriales no eran más que sociedades en quiebra que buscaban una salida a su deplorable situación financiera.<sup>42</sup>

Se dieron casos en los que no era la intromisión de la iniciativa privada la que dañaba a la cooperativa sino la intromisión de sus dirigentes, situados a dedo y en función de su influencia política. Este fue el caso de la Unión Nacional de Cooperativas Industriales que al final del ejercicio de 1953 tenía una “sorprendente” existencia en caja que ascendía a 37,86 pts.<sup>43</sup> En 1942 la Delegación Nacional de Sindicatos nombraba a Luis González Abela (antiguo teniente coronel del ejército) presidente de la unión y a Carlos Closa secretario de la misma. Fue la D.N.S. la que aportó 100.000 pts. como anticipo reintegrable (nunca devuelto) para que comenzaran sus actividades, evidenciando la construcción del sistema de arriba hacia abajo y no al revés. A su vez se infló la nómina de empleados con una cantidad, en principio, superior a la necesaria (16 en total) con una nómina anual que rondaba las 150.000 pts. considerando exclusivamente los salarios base. El resultado fue un déficit por encima del millón de pts. en 1946. Este mismo año el presidente de la unión fue sustituido por Nemesio Fernández Cuesta el cual consiguió incrementar las importaciones concedidas a la unión a base de “sus relaciones personales, suministrando a las cooperativas y a particulares (más a éstos que aquéllas) con resultado de beneficios que se repartieron a boleo entre cooperativas y operaciones desafortunadas” que en nada beneficiaron a la unión hasta el punto de que surgió la percepción entre los cooperativistas de que aquello no era más que “un tinglado sólo provechoso para los que percibían haberes y para los que a su sombra medraban como intermediarios en sus operaciones,” en clara alusión a Fernández Cuesta.<sup>44</sup> A lo largo del “reinado” de Fernández Cuesta se adquirió la cooperativa industrial metalúrgica con lo que la unión perdió 150.000 pts; la mina de cobre “Dos Hermanas” con cuya operación se perdieron 425.000 pts. (siempre según estimaciones oficiales). De igual manera, en 1951 se le concedió la licencia para importar caseína a un tal Meganto y a un socio de éste. Ambos sujetos importaron dos tercios del total autorizado a la unión. Sin embargo, la financiación de la operación se hizo por parte de la unión nacional firmando con el Banco Exterior de España una póliza que cubría el importe de la operación, la cual fue rubricada exclusivamente por Fernández Cuesta y sin conocimiento del secretario de la unión. No siendo vendida la caseína fue ésta subastada por el banco pese a lo que se le continuó adeudando la cantidad de 211.000 pts. que los socios privados de Fernández Cuesta nunca abonaron a la unión.<sup>45</sup> En 1948 y 1950 se obtuvieron préstamos de la caja de compensación del paro (POFDE) que “sólo sirvieron para haberes, viajes, etc.”<sup>46</sup> y para retenerlos a cooperativas que ya los tenían previamente concedidos. Otro rasgo distintivo del

funcionamiento de esta unión fue el hecho de que en los últimos años los empleados no recibieron sus sueldos y no se realizaron las cotizaciones por ellos en los distintos seguros sociales

En este contexto, en julio de 1952 se hizo cargo de la presidencia de la unión nacional el propio Jefe Nacional de la O. S. Cooperación, Francisco Giménez Torres, momento en que, entre otras cuestiones, se comenzó por reconocer la falsedad sistemática de las estadísticas (por lo menos) de las cooperativas del sector industrial, en la medida en que las encuadradas en dicho sector no existen ya o no han llegado a funcionar, por lo que el auge de la cooperación en los medios industriales es muy inferior al aparente.<sup>467</sup> Pese a todo lo expuesto y al hedor a corruptelas con protección de autoridades superiores, dada la relación familiar de Fernández Cuesta con el ministro Secretario General del Movimiento, la opción del presidente de la unión y a la vez Jefe Nacional de la O. S. de Cooperación (Giménez Torres) fue la de correr un tupido velo para cubrir las irregularidades y el enriquecimiento ilícito que a la sombra de dicho personaje se había llevado a cabo.<sup>468</sup>

Este fue el resultado del desarrollo del cooperativismo. Nacido para actuar de calmante ante las desigualdades sociales su desarrollo cuantitativo, muestra la efectividad real de un sistema que encubrió prácticas privadas y cuando no corruptelas con un paraguas político que inutilizaba cualquier intento de persecución.

### **11.2. El control de las cooperativas por parte del Estado franquista.**

El afán por extirpar las esferas de libertad de acción en cualquiera de sus facetas está presente en el desarrollo del sistema cooperativista durante el primer franquismo y se plasma en primer lugar en las disposiciones legales que dieron vida al sistema cooperativista. La Ley de cooperación de 2 de enero de 1942<sup>49</sup> establecía en su artículo 5º que las cooperativas se relacionarían con el ministerio de Trabajo en cuanto a su constitución y disolución por medio de la Obra Sindical de Cooperación. A través de estos dos instrumentos, aunque en última instancia era el ministerio mencionado el que tenía mayor capacidad efectiva de control, las cooperativas constituían, al menos en parte, meros tentáculos a las órdenes de la política del Estado y sus miembros quedaban automáticamente encuadrados en los sindicatos locales o hermandades.

En el fondo, la función teórica que se asignaba a estas entidades era muy similar a la de la organización sindical, aunque subyugada a ésta. Ese afán por controlar a las cooperativas también se plasma en el lenguaje utilizado y en la profusión de verbos activos como promover,

dirigir, proteger, vigilar, inspeccionar, tutelar, encuadrar, disciplinar, etc. que desnaturalizaban la libertad del movimiento.

El nombramiento de la Junta Rectora de la cooperativa correspondía a la Junta General; sin embargo, la delegación sindical provincial tenía la capacidad de vetar cualquier nombramiento (art. 26). A su vez existía un Consejo de Vigilancia nombrado por la O. S. de Cooperación cuya misión era fiscalizar la vida de la cooperativa e informar a los órganos superiores, bien a la organización sindical o bien al ministerio (a través de aquélla).

Como ya se ha dicho, las cooperativas podían formar Uniones (territoriales o nacionales) siempre a través de la O. S. de Cooperación. Estas uniones de cooperativas se regían por juntas. En el caso de las territoriales sus miembros eran nombrados en última instancia también por la O. S. de Cooperación y en el caso de las uniones nacionales el nombramiento de su junta rectora dependía en última instancia de la Delegación Nacional de Sindicatos. De igual manera sobre las juntas de las uniones (territoriales o nacionales) existía el correspondiente consejo de vigilancia. Siguiendo la lógica expuesta, en el caso de las territoriales, el nombramiento de sus miembros dependía de la Delegación Nacional de Sindicatos y en el caso de las nacionales, del ministro Secretario General del Movimiento. Por consiguiente, tras las justificaciones que hacían alusión a criterios como la moralidad o la honorabilidad de los miembros de la dirección de la cooperativa que podían condicionar la toma de decisiones de los organismos superiores, se escondían simples criterios políticos que pretendían dejar fuera de aquellas instituciones o de cualquier otra a los elementos potencialmente disconformes con el régimen y que pudieran utilizar las cooperativas como plataformas para desarrollar actividades políticas.<sup>50</sup> Este era el motivo de que entre las cooperativas y sus uniones territoriales surgieran algunos amagos de lo que, desde la organización sindical, se calificaba como indisciplina.<sup>51</sup>

En esta línea el reglamento<sup>52</sup> de la ley de cooperación establecía que el presidente y el secretario de la Junta General y de la Junta Rectora de la cooperativa actuarían bajo la vigilancia de la O. S. de Cooperación (art. 34). El veto ejecutado por las autoridades sindicales a los integrantes de los órganos directivos de la cooperativa podía ser apelado ante la Jefatura Nacional de la O. S. de Cooperación y en el caso de las uniones territoriales o nacionales ante la D.N.S., cuestión que, en principio, debía resultar intrascendente puesto que eran esas mismas instancias las que tomaban la decisión de apartar de la dirección de la cooperativa a determinados sujetos distinguidos por sus supuestas actividades contrarias al régimen.

El reglamento de la ley iba más allá que ésta puesto que el artículo 71 establecía la capacidad de la Delegación Nacional de Sindicatos para apartar de sus cargos, no sólo a las más altas instancias gestoras de la cooperativa, sino a los gerentes, directores o "cuantas personas con

cualquier denominación sumen funciones efectivas, rectoras o de alta gestión" según lo aconsejaran "los supremos intereses de la comunidad nacional-sindicalista."

Pese al cúmulo de disposiciones que establecían el control de las cooperativas por parte de la organización ésta tenía la percepción de que la ley necesitaba de una reforma que potenciara el principio de unidad sindical. En esa línea Solís Ruiz, Delegado Nacional de Sindicatos, en el I Consejo Político Sindical reclamó la aplicación práctica de las facultades que la ley concedía al sindicato para encuadrar y disciplinar a las cooperativas dentro del marco de la organización sindical. En este sentido, se reclamaba, aparte de la potestad para nombrar a los miembros rectores, a los miembros del consejo de vigilancia de las cooperativas, uniones territoriales y nacionales, una disposición que concretara de forma más precisa la forma en que el sindicato había de ejercer su influencia:

"Sin perjuicio de la actuación del Jefe de la Unión Territorial, los Delegados Provinciales de Sindicatos darán traslado de la convocatoria a las Cooperativas interesadas realizarán la propaganda necesaria par reducir al mínimo las abstenciones de los electores aconsejándoles y orientándoles además, acerca de la forma en que han de ejercitar su derecho, advirtiéndolos muy especialmente que los propuestos han de tener necesariamente la condición de militante o adherido a F.E.T. y de la J.O.N.S. y han de ser socios de alguna de las Cooperativas de la Unión."<sup>53</sup>

Ante esta falta de influencia se proyectó en 1954<sup>54</sup> la creación de un Instituto Sindical de Formación Cooperativa con la finalidad de potenciar la propaganda en el ámbito de la cooperación y "conquistar el ambiente en la esfera intelectual y en los medios populares" desde la O. S. de Cooperación.<sup>55</sup> Sin embargo, la crisis de gobierno de 1957 acabó por retrasar el proyecto.<sup>56</sup>

No faltaba quien justificaba la contradicción palmaria entre la necesaria libertad del cooperativismo y la existencia de un marco opresor que controlaba a las cooperativas como si se tratase de potenciales partidos políticos desafectos. Entre estas justificaciones se puede encontrar la referencia al derecho natural de gobernación. Este derecho facultaba al Estado franquista para ejercer el poder en beneficio de un bien común que obligaba a las cooperativas a colaborar sistemáticamente con la autoridad para desarrollar unas bases armónicas de cara a favorecer la convivencia de los españoles, partiendo del hecho de que la actividad cooperadora había de estar "bien ordenada en orden a la escala jerárquica de fines que conducen al hombre, a través de sus múltiples ocupaciones, hacia Dios."<sup>57</sup>



## Notas

<sup>1</sup> Partiendo de la primera de las disposiciones el asociacionismo cooperativista intentó potenciar los positos agrícolas (graneros comunales encargados de prestar el grano para la sementera), las colonias agrícolas (creadas por la Ley de Colonización y Repoblación Interior de 30 de agosto de 1907), los pósitos de pescadores (asociaciones de pescadores para las que se dio el Real Decreto de 10 de octubre de 1919, creando la Caja Central de Crédito Marítimo), los Sindicatos Industriales y Mercantiles (para los que se dio el Real Decreto de 31 de julio de 1915 con el objetivo de revestir estas instituciones bajo la forma de una compañía anónima y por acciones), los sindicatos de consumo y de casas baratas (creadas con la Ley de casas baratas de 12 de junio de 1911 y su reglamento de 11 de abril de 1922 o la ley de 10 de diciembre de 1921 y su reglamento de 8 de julio de 1922). Del Arco Álvarez, José Luis: Temas cooperativos. Obra Sindical de Cooperación. Madrid, 1963, pág. 20-21.

<sup>2</sup> Las cooperativas se definían según Fernández de la siguiente forma: "Es Sociedad Cooperativa la reunión de personas naturales o jurídicas que se obligan a aunar sus esfuerzos con capital variable y sin ánimo de lucro, al objeto de lograr fines comunes de orden económico-social, sometiéndose expresamente a las disposiciones de la legislación. Únicamente las así constituidas pueden ostentar la calificación de Cooperativas." Fernández Heras, Tratado Práctico de legislación..., op. cit., pág. 268.

<sup>3</sup> B.O.E. del 12, Aranzadi 76. Su reglamento se promulgó el 11 de noviembre de 1943. B.O.E. del 14 de febrero de 1944, Aranzadi 883.

<sup>4</sup> A.P.G.; J.D.N.; Leg. 26, nº 2.

<sup>5</sup> B.O.E. del 31 de enero de 1940.

<sup>6</sup> En este sentido se afirmaba el Presidente y Jefe de la Unión Nacional de Cooperativas del Campo, Fernando Muñoz Grandes: "No se que razón llevó al legislador al promulgarse la Ley de Cooperación a desarraigar a las cooperativas agrícolas del ministerio de Agricultura...Esto no supone, ni mucho menos -y que esto quede bien sentado-, desafecto por nuestra parte hacia el ministerio de Trabajo, en el que actualmente nos encuadramos...No; no supone, ni muchos menos, desafección por nuestra parte este natural deseo que tenemos de que sea establecida, dentro del ministerio de Agricultura una Sección Cooperativa, como la tuvieron antes los antiguos Sindicatos Agrícolas, que permita resolver nuestros problemas, no de la manera esporádica en que ahora lo hacemos, sino de manera permanente...De contar con dicha Sección no se producirían acaso algunas de esas anomalías que reflejan nuestra Memoria." Actos celebrados con motivo de la Asamblea General de la Unión Nacional de Cooperativas del Campo. Madrid, 1958. Acto celebrado en el Salón de Actos de la D.N.S. el 19 de junio de 1958, pág. 19-20.

<sup>7</sup> Del Arco Álvarez, Temas cooperativos..., op. cit., pág. 25.

<sup>8</sup> A.P.G.; J.D.N.; Leg. 26, nº 2.

<sup>9</sup> Del Arco Álvarez, Temas cooperativos..., op. cit., pág. 39.

<sup>10</sup> Acta de la tercera sesión de la comisión permanente interina del sector industrial del Consejo Económico Sindical de 8 de marzo de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3133.

<sup>11</sup> Correspondencia del Jefe Nacional del Sindicato del Textil (José María Fontana) a Redondo Gómez. Jefe Nacional del Servicio de Encuadramiento y Colocación (26 de junio de 1949). A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3373.

<sup>12</sup> "Diferentes entidades con nombres de Cooperativas que en la mayoría de los casos no eran más que un hábil disfraz de especulación, obtuvieron de los Organismos competentes diferentes autorizaciones para conseguir raíz directamente y cierta libertad de venta". (pag. 51)

<sup>13</sup> Acta de la tercera sesión de la comisión permanente interina del sector industrial del Consejo Económico Sindical de 8 de marzo de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3133.

<sup>14</sup> Dictamen del Consejo de Estado en torno al reglamento de la ley de cooperación de 2 de enero de 1942. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/7, Topo 36/40, 97-13<sup>a</sup>. En la elaboración del presente dictamen intervinieron entre otros el Director del Instituto Nacional de Previsión Luis Jordana de Pozas y Alberto Martín Artajo.

<sup>15</sup> Dictamen...reglamento de la ley de cooperación, op. cit., pág. 11.

<sup>16</sup> Idem, pág. 13.

<sup>17</sup> Idem, pag. 18.

<sup>18</sup> Correspondencia del Jefe del Servicio de Cooperación, B. Aragón, dirigida al Sr. Subsecretario del ministerio de Trabajo, mayo de 1943. Correspondencia del Subsecretario del ministerio de Trabajo, 6 de mayo de 1943. Correspondencia del Delegado Nacional de Sindicatos, Fermín Sanz Orrio, al Subsecretario de Trabajo, 25 de mayo de 1942. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02. R/7, Topo 36/40. Nº 97-13<sup>a</sup>.

<sup>19</sup> A.P.G.; J.D.N.; Leg. 26, nº 2.

<sup>20</sup> Idem.

<sup>20</sup> Ídem.

<sup>21</sup> I Congreso Político Sindical..., op. cit., A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/ 184.

<sup>22</sup> Contestaciones al cuestionario para la reunión de delegados provinciales de sindicatos. Vicesecretaría Nacional de Obras Sindicales. Barcelona, marzo de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 5.384.

<sup>23</sup> I Congreso Político Sindical, Madrid, noviembre de 1952. Tema VIII: La cooperación como sistema económico social del sindicalismo. Presidente: Franco Jiménez Torres (Jefe Nacional de la Obra de Cooperación). A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/ 184.

<sup>24</sup> Informe presentado del Secretario Nacional de Sindicatos el 23 de mayo de 19. A.G.A., S.S.; I.D.D. 90.02, R 1.823.

<sup>25</sup> El reglamento del mencionado instituto tiene fecha de 22 de abril de 1958. Los primeros proyectos de reglamento se materializan a principios de 1957 con lo cual la crisis ministerial de febrero de este mismo año retrasa significativamente la salida adelante del proyecto.

<sup>26</sup> En noviembre de 1956 existían 720 cooperativas de consumo registradas; siendo 565 las que llevaban a cabo su función sin violar la legislación vigente. Correspondencia de la Jefatura Nacional de la O. S. Cooperación (Francisco Giménez Torres) a D.N.S., 6 de noviembre de 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/300.

<sup>27</sup> Ídem.

<sup>28</sup> Consejo Económico Sindical de la Coruña. Ponencia: Cooperativas y economatos, 2 de julio de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/185.

<sup>29</sup> Del Arco Álvarez, Temas cooperativos..., op. cit., pág. 29.

<sup>30</sup> Las Obras Sindicales, 1942. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 72.08, L-2 en topo 36/39.

<sup>31</sup> Ídem.

<sup>32</sup> Obra Sindical de Cooperación, año 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.373.

<sup>33</sup> Ídem. Por su carácter estimativo estas cifras no permiten generar suficiente fiabilidad.

<sup>34</sup> Actos celebrados con motivo de la Asamblea General de la Unión Nacional de Cooperativas del campo. Madrid, 1958. Acto celebrado en el Salón de Actos de la D.N.S., 19 de junio de 1958, pág. 22.

<sup>35</sup> Memoria del Departamento de Reglamentación, Política Laboral y Relaciones Individuales de Trabajo. Vicesecretaría Provincial de Ordenación Social del Sindicato Provincial de Barcelona, 1949. A.G.A.; SS; I.D.D. 72.04-38, pág. 2.

<sup>36</sup> Correspondencia del Jefe Nacional de la O. S. de Cooperación a D.N.S., 8 de octubre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 4.01, 16.795.

<sup>37</sup> "...ha llegado a realizar este año y poner la primera piedra de una obra que no se si vosotros habréis podido valorar en todo lo que vale y de todas las premisas de que está enriquecida: me refiero a la Caja Rural Nacional. Posiblemente, una de las cosas mejores que se han realizado en el campo de la cooperación española es la constitución de la Caja Rural Nacional.

La realidad es que el dinero del campesino no financia sus obras ni se invierte en sus obras. Esta es, señores, la tremenda realidad de los Bancos. ésta es la tremenda realidad de las Cajas de Ahorros. Por ejemplo, yo puedo citar una Caja de Ahorros andaluza que está invirtiendo el dinero que recoge de los pequeños campesinos en conceder créditos a inmobiliarias para que construyan viviendas en Madrid. Encuentro absurdo que el dinero del campo venga a financiar las obras de las ciudades y no revierta al campo invirtiéndose en las mejoras de los propios campos y familias en las que se recoge el dinero..."  
Actos celebrados con motivo de la Asamblea General de la Unión Nacional de Cooperativas del campo. Madrid, 1958. Acto celebrado en el Salón de Actos de la D.N.S., 19 de junio de 1958, pág. 38.

<sup>38</sup> Del Arco Álvarez, Temas cooperativos..., op. cit., pág. 79.

<sup>39</sup> Navarro Villedo, José: Por el camino de la solidaridad, Madrid, 1962, pág. 30.

<sup>40</sup> O. S. de Cooperación. Reforma de la Ley de Cooperación por José Luis del Arco, 27 de julio de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 91.02, r/1.828.

<sup>41</sup> Ídem.

<sup>42</sup> Memoria del Departamento de Reglamentación, Política Laboral y Relaciones Individuales de Trabajo. Vicesecretaría Provincial de Ordenación Social del Sindicato Provincial de Barcelona, 1949. A.G.A.; SS; I.D.D. 72.04-38.

<sup>43</sup> Informe sobre la Unión Nacional de Cooperativas Industriales elevado por el Secretario General de la Unión (Manuel Lara Arjona), 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 4.01, 16.795.

<sup>44</sup> Téngase en cuenta que en 1951 accedía al cargo de ministro Secretario General del Movimiento R. Fernández Cuesta. Informe sobre la Unión Nacional de Cooperativas Industriales elevado por el Secretario General de la Unión (Manuel Lara Arjona), 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 4.01, 16.795.

<sup>42</sup> *Producto con el que se fabrica galletita, colas, aprestos, fibras textiles, etc.*

<sup>43</sup> Informe sobre la Unión Nacional de Cooperativas Industriales elevado por el Secretario General de la Unión (Manuel Lara Arjona), 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 4.01, 16.795.

<sup>44</sup> *Idem.*

<sup>45</sup> En carta de Giménez Torres al Delegado Nacional de Sindicatos (Solís) este le manifiesta de forma implícita los problema que podría acarrear la apertura de expedientes en relación a la labor de un personaje con una red de relaciones tan importante como Fernández Cuesta. Todo ello sin considerar que tanto Giménez como José Solís eran dos subordinados de Raimundo Fernández Cuesta: "Aunque estimo inevitable la apertura del expediente solicitado por el Secretario de la Unión, se me ocurren dudas acerca de su oportunidad teniendo en cuenta la personalidad de algunos de los que estuvieron implicados en las actividades de la Unión, cuando se produjeron los hechos denunciados." Correspondencia del Jefe Nacional de la Obra Sindical de Cooperación, F. Giménez Torres, a D.N.S., 9 de marzo de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 4.01, 16.795.

<sup>46</sup> P.O.E. del 12 de enero.

<sup>47</sup> Principios del cooperativismo. O. S. Cooperación. Madrid, 1965, pág. 13.

<sup>48</sup> "...Los elementos integrantes de la Unión Territorial de Cooperativas se habían mostrado siempre, no sólo alejados de la organización sindical, sino indisciplinados con ésta..." Indisciplina a la que incluso se adherían los asesores religiosos que manifestaban abiertamente su negativa a acudir a las reuniones organizadas por la organización sindical. Informes reservados de la C.N.S. de Álava, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02. R/212.

<sup>49</sup> *Reglamento de 11 de noviembre de 1943 para aplicación de la ley de cooperación. B.B.O.O. núms.55 de 24 de febrero y 76 de 16 de marzo de 1944.*

<sup>50</sup> El subrayado es del documento firmado por el Jefe Nacional de la Obra y por el Delegado Nacional de Sindicatos, Solís Ruiz. Jefatura Nacional de la O. S. Cooperación (F. Giménez Torres), 18 de diciembre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 91.02, r/1828, pág. 3.

<sup>51</sup> Informe presentado por el Secretario Nacional de Sindicatos, 23 de mayo de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R.1.823.

<sup>52</sup> Proyecto de Instituto Sindical de Educación Cooperativa, octubre de 1956. También en Nota informativa referente al proyecto de reglamento del Instituto Sindical de Formación Cooperativa remitido por la O. S. Cooperación, 28 de febrero de 1957. Vicesecretaría Nacional de Obras Sindicales. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/1.823.

<sup>53</sup> Nota para el Vicesecretario Nacional de Obras Sindicales sobre el Instituto Sindical de Formación Cooperativa, 10 de febrero de 1958. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02. R/1.823.

<sup>54</sup> Puy Muñoz, Francisco: *La cooperación y el derecho natural*. O. S. Cooperación. La Coruña, 1968, pág. 16.

## Capítulo 12. El régimen ante la huelga.

La huelga era según Girón de Velasco, un "arma parricida"<sup>1</sup> que era necesario apartar de las manos de los obreros españoles. De ahí el desarrollo de un sistema esencialmente corporativo que establecía como inevitable la obligatoriedad de afiliarse a los sindicatos verticales. Se fundamentaba este criterio político en el hecho de que toda persona económicamente activa era enmarcable dentro de este sistema de representación. Solé cita la definición de Schmitter como la más completa para definir el concepto del corporativismo:

"Un sistema de representación de intereses, en el que las unidades constituyentes se organizan en categorías, limitadas en número, específicas, obligatorias, no competitivas, ordenadas jerárquicamente y diferenciadas funcionalmente; categorías reconocidas o permitidas (si no creadas) por el Estado y a las que se garantiza, deliberadamente, un monopolio de representación a cambio de observar algún tipo de control sobre la selección de los líderes y la articulación de demandas y apoyos."<sup>2</sup>

Ello tenía un soporte parcial en los fundamentos ideológicos de Acción Española. El Nuevo Estado había de tener un sesgo corporativo como mecanismo de defensa del orden social tradicional frente a las amenazas de los denominados enemigos de la tradición española que supuestamente concebían la política al servicio de la economía y no al revés.<sup>3</sup> Este posicionamiento era envuelto por un esquema maniqueo que recurría de forma sistemática a la contraposición entre el mundo del bien y del mal, entre el mundo del maligno y el mundo de los elegidos. Este maniqueísmo había de servir para llevar a cabo una misión cuyo objetivo era la "salvación de España" ante el fracaso de las doctrinas materialistas (incluyendo en este grupo tanto al marxismo como al liberalismo) a la hora de solucionar la "cuestión social." Se partía de la idea de que España tenía una asignatura pendiente (la cuestión social) y que aquella había de encontrar su solución definitiva en un sociedad perfectamente jerarquizada en la que una misma institución recogiera las demandas de los trabajadores y los empresarios evitando el desamparo de amplias masas de "productores." Todo ello suponía despolitizar a la sociedad española insertando a todos estos elementos en el seno de la única organización sindical permitida.

La interrupción del trabajo se percibía como la manifestación más execrable de la peor de las patologías de una nación. Sin llegar a ella existían otras formas que servían igualmente para explicitar el conflicto cuales eran la bajada voluntaria en el nivel de producción o la disminución de la calidad del acabado del producto en cuestión.<sup>4</sup> La huelga era considerada como una toxina contra la que el régimen había de luchar. Y todo ello en reconocimiento implícito de que la disensión y el conflicto entre empresarios y trabajadores era una tarea en la que el sindicato, elemento de conciliación entre los mismos, no lograba los objetivos

apetecidos. La tarea de "incorporar espiritualmente" al trabajador español a los objetivos del nuevo régimen estaba siendo un fracaso. Paralelamente el nivel de vida de los españoles nos situaba en los umbrales de la miseria y esa supuesta hermandad del mundo del trabajo se tornaba en conflictos que sólo por la vía de la represión podían ser controlados.

Y contra esta semilla de desunión social, el régimen planteó una estrategia que se plasmó, entre otros aspectos en el Código Penal. El artículo 222 del mencionado Código de 1944 tipificaba como delito de sedición el derecho de huelga. "Fue Girón precisamente el que tuvo que hacer la condenación de las huelgas viendo en ellas lo que son, el instrumento más eficaz para la defensa de los intereses del trabajo," se constata a desde la izquierda opositora al franquismo.<sup>6</sup> El nuevo orden laboral surgido de la Guerra Civil e impuesto por las armas perseguía desterrar el "satánico" conflicto social y sus resultados "perversos." Este nuevo orden socio-laboral se consideraba como absolutamente necesario ya que sin él se entendía que "no sería posible evitar la lucha de clases a la que los dolores de la guerra y las consiguientes dificultades económicas prestaban fácil abono y especulación sectaria."<sup>7</sup>

En las memorias de Girón, enredadas y sin un claro ordenamiento cronológico, se hace referencia a lo que fueron unos, supuestamente, primeros contactos con los elementos cenetistas (sobre todo en Valencia) menos remisos a entablar negociaciones con el ministerio de Trabajo. Según Girón, estos contactos dieron unos resultados maravillosos. Por ello afirmaba el propio ministro que a los cenetistas se les acusaba por parte de los exiliados fuera de España de estar contemporizando con el ministerio de Trabajo y con su titular.<sup>8</sup> El sentimentalismo del ex-ministro explota súbitamente llegando a su cenit al desarrollar de forma hagiográfica una especie de apología de un cenetista que en su lecho de muerte reivindicaba el derecho a la vida eterna y el triunfo de la religión católica que, en parte, daba sentido y vertebraba la mentalidad de Girón de Velasco:

"De aquellos cenetistas recuerdo especialmente a uno de sus cabecillas, llamado José María Chornet Capilla. Y le recuerdo especialmente por las reflexiones que me hizo antes de morir. Era un hombre duro, con un temperamento luchador y un sentido de la justicia fuera de lo común. Traté mucho con él. Cierta día me enteré de que estaba gravemente enfermo, a las puertas de la muerte, y me fue a verle. El, que siempre se había declarado ateo, me hacía partícipe de lo que debía ser el resultado de una profunda meditación:

-El hombre es capaz de pensar, de crear, de luchar.... y cuando muere ¿se acaba todo? ¡Eso es imposible! Sería la peor injusticia que se le puede hacer al ser humano. ¡La

nada, no! ¡La nada es mentira! Si he de condenarme, lo prefiero a la injusticia de la nada...

Reivindicaba el derecho a la otra vida, no con el argumento de la fe, sino con el argumento de la justicia. El suyo fue, sin pretenderlo, uno de los testimonios que más me han impactado a lo largo de mi vida."<sup>9</sup>

Ciertamente, en los plenos que la C.N.T. celebró en la ciudades francesas de Marsella (diciembre de 1943) y en Muret (mayo de 1944), y paralelamente al intento de desarrollo de una estrategia tendente a buscar una alianza con partidos de izquierda capaz de frenar el crecimiento de la Unión Nacional Española promovida por el P.C.E., surgió otra línea que por medio de ciertas relaciones con elementos del falangismo adoptó una postura colaboracionista que según Malerbe se prolongó hasta 1947.<sup>10</sup> Esta colaboración debió prolongarse mucho más en el tiempo y de ahí la preocupación de la D.N.S. por la expulsión de los cenetistas colaboracionistas de la Asociación Internacional de Trabajadores en su VIII congreso celebrado en Puteaux (Francia) el 20 de julio de 1953.<sup>11</sup>

Pese a su declarado talante, visceralmente contrario a todo lo relacionado con el marxismo o a todo lo opuesto a lo que él entendía como esencias católicas y tradicionales españolas, Girón, de una forma un tanto autoaduladora, se erige en sus memorias como negociador tolerante y habilidoso con los elementos anarquistas y comunistas.<sup>12</sup> Quizás, lo que verdaderamente intranquilizaba el pensamiento de hombres como éste era ver como aquellos movimientos, que pretendían desapuntalar la armadura que sostenía al régimen, eran apoyados por grupos de católicos representados en las Hermandades Obreras de Acción Católica y por las Juventudes Obreras Católicas. Eso sí que constituía un grave problema para un régimen que veía ya con claridad como en los primeros años cincuenta parte del catolicismo español se separaba progresivamente de él. Y así de forma metódica y persistente esos elementos comenzaron a enfrentarse a las autoridades que habían colaborado a encumbrar a los mismos mandatarios del Estado actual.

Desde este punto de vista podemos deducir que en la mente del ex-ministro lo preocupante para el régimen, como él mismo afirma, no eran los obreros españoles, sino la separación progresiva de la Iglesia católica,<sup>13</sup> tanto del franquismo (en un sentido genérico) como del franquismo social (representado, entre otros, por Girón de Velasco), y la fuerza de grupos que luchaban abiertamente contra el decadente poder de la Falange dentro del Estado.

Paralelamente era preocupante el hecho de que esta cuestión fuera "uno de los temas tratados con mayor predilección en la prensa mundial. Prensa que hacía numerosos comentarios contra

el régimen de policía que todavía padecía España bajo al figura del dictador Franco.”<sup>14</sup> Así, el periódico de izquierdas sueco “Ny Dag” desarrolló una intensa labor publicitaria en favor a los treinta y cuatro miembros del Partido Socialista Unificado de Cataluña (P.S.U.C.), detenidos por haber participado en las huelgas de la primavera del 51. En Francia, *Liberation*, *Le Populaire* y *Franc Tireur* recordaban que el socialista español Eduardo Villegas había sido condenado en 1947 a 30 años de cárcel. O, por ejemplo, La Unión de mujeres italianas enviaba a la O.N.U. la siguiente nota:

“Manifestando su profunda indignación por la detención de los 34 obreros de Barcelona torturados amenazados de muerte por el Gobierno franquista, las mujeres italianas piden la intervención de la O.N.U. cerca de Franco para obtener la liberación inmediata de estos defensores de la libertad. Especialmente ansiosas en cuanto a la suerte de Isabel Vicente una de las 34 amenazados nuevamente detenidos después de haber conocido durante 9 años los horrores de las cárceles franquistas.”

Lo relevante era que la prensa extranjera recalca el peso de la situación socioeconómica para dar una explicación en torno a lo sucedido en importantes ciudades españolas y así no tener que recurrir al fantasma del comunismo internacional para explicar la conflictividad laboral tal y como se hacía de forma sistemática desde las filas franquistas. Así el periódico italiano *Il Tempo* de Milán realizaba un análisis del nivel de vida en la ciudad de Barcelona poniendo de manifiesto la existencia en la misma de sólo 30 familias con un nivel de renta superior al millón de pts. declaradas. Igualmente en las cárceles existían 31.084 detenidos, de los cuales 3.637 eran presos políticos. En esta línea se situaba *Le Populaire* en Francia, recalcando la escasa capacidad adquisitiva de los salarios españoles comparados con los franceses.

### 12.1. Las huelgas de los años cuarenta.

En el desarrollo de las huelgas del período 45-46, “los estratos desafectos más numerosos fueron, como habitualmente, los obreros industriales y los campesinos más pobres y sin tierras.”<sup>15</sup> En esta década, ya en 1945 tuvo cierta relevancia la huelga de la empresa metalúrgica Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona. El 2 de septiembre 1.800 empleados no se presentaron a trabajar por la tarde y al cabo de unos días se negaron a trabajar por la noche en protesta por el mínimo plus de desempleo que cobraban los parados por restricciones eléctricas.<sup>16</sup> Pocos días después, el 7 de noviembre estallaba en Valencia la huelga de 1.000 obreros en la fábrica Macosa en petición de subidas salariales.

En los años 1946 y 1947 las actividades huelguísticas se centraron en el País Vasco y Cataluña fundamentalmente, culminando con la gran huelga en Vizcaya iniciada el 1 de mayo de 1947.

Sin embargo, según Alba la primera huelga relevante contra el franquismo se llevó a cabo a principios de 1946 en Manresa.<sup>17</sup> A ésta le siguió la declarada en la fábrica de Tolrà, de Castellar del Vallès a partir del 2 de febrero logrando un aumento de 15 pts. más por la percepción regular del plus de carestía de vida y posteriormente el establecimiento de un economato.<sup>18</sup> A lo largo de 1946 se desarrollaron en Cataluña diversos conflictos motivados, al menos en parte, por las nuevas reglamentaciones del trabajo (especialmente en el sector textil) que suponían en algunos casos un descenso en el nivel de las percepciones reales de los trabajadores.<sup>19</sup> En noviembre, de este mismo año se desató una huelga en los altos hornos de la empresa *Inductal* de Vizcaya en demanda de aumentos salariales que posteriormente fueron en la huelga del 1 de mayo de 1947 cuyo fin acabó el 7 del mismo mes.

El resultado de la gran huelga de Vizcaya del 1 de mayo de 1947 se puede resumir de la siguiente manera: 60.000 trabajadores en huelga, 7.000 detenidos y 14.000 despedidos. Según Payne, "la actividad opositora de los trabajadores empezó a disminuir después de 1947."<sup>20</sup> Sin embargo, para Preston el resultado de las huelgas de estos años fue un ejemplo de la suerte del régimen del general Franco pues sirvieron para convencer "a Londres y Washington de la necesidad de apuntalar su posición como baluarte contra lo que percibían como una revuelta tramada por los comunistas."<sup>21</sup> En cualquiera de los casos, las huelgas de los años cuarenta estuvieron presididas por un importante sesgo de espontaneidad fruto de un muy bajo nivel de vida plasmado primeramente en enfrentamientos verbales con los enlaces sindicales y capataces de la empresa, "en disminuciones del ritmo de trabajo, de la productividad, o en algunos casos, epidemias de enfermedades simuladas, ... sabotajes menores de la producción, provocadas averías de maquinaria, desperdicio de materias primas, piezas mal acabadas, etc."<sup>22</sup> Todo ello, según Alba, minimizando la eficacia de la propaganda del P.C.E. que había comenzado desde 1946 una estrategia de penetración en la C.N.S., si bien hay que añadir a esta afirmación que esta estrategia no fue exclusiva del P.C.E. sino de otros sindicatos clandestinos como la CNT.<sup>23</sup>

Esta huelga, que hará tambalearse al régimen del general Franco, se desarrolló en un contexto en que el precio del litro de aceite ascendía (en algunos casos) a las 60 pts., el kg. de pan a las 16 y el de patatas a 7. En este contexto el Consejo de Resistencia del Pueblo Vasco convocó una huelga a la que el gobernador civil de Vizcaya, Jenaro Riestra, y el ministro Girón reaccionaron con el planteamiento represivo tradicional ante un amplio movimiento huelguístico que agrupó a alrededor de 60.000 trabajadores. La ocupación de Bilbao por parte de las fuerzas de seguridad y la detención de unos 7.000 obreros fue la respuesta del gobierno hasta que el día 9 de mayo comenzó a decrecer la fuerza de un movimiento que fue quizás el más significativo de ésta década.<sup>24</sup>



## 12.2. Las huelgas de los años cincuenta.

Los años cincuenta, coincidiendo con la tesis de González,<sup>25</sup> fueron años en los que el nivel de vida comenzó a mejorar. Ello contribuyó a una atmósfera social relativamente tranquila, pese a lo cual marzo de 1951 fue un mes especialmente destacado por la influencia del movimiento huelguístico:

“En Barcelona, el descontento por la persistencia del racionamiento y los bajos salarios se manifestó en un boicot al transporte público en protesta por una nueva subida del precio de los billetes y rápidamente se extendió a la industria...se convirtió en el movimiento huelguístico más importante de la historia del régimen y fue secundado varias semanas después por paros menos numerosos en Vizcaya y Guipúzcoa.”<sup>26</sup>

Para los apologistas del franquismo social, caso de Girón, el conflicto plasmado en las huelgas del año 1951 no supuso más que un momento en el que se explicitó la violencia obrera catapultada por las fuerzas del comunismo internacional gracias a la financiación de grupos de desestabilizadores en el interior o, sorprendentemente, el reflejo de que el fin del “aislamiento y la penuria”<sup>27</sup> daban el pistoletazo de salida para el retorno de los movimientos marxistas que buscaran la significativa fecha del 12 de marzo para realizar sus movimientos, por ser el día después en el que Franco había recibido el homenaje del sindicato en el Palacio de Oriente y en el que se escuchó el mensaje radiofónico de Pío XII. Evidentemente, se obviaba el hecho de que el precio de la docena de huevos alcanzaba las 29 pts., el litro de aceite de peor calidad las 30 pts. litro o el kilo de carne las 50 o 60 pts./kg.<sup>28</sup> El objetivo, según Girón de Velasco, era la agitación interior y el lanzamiento de consignas cuya meta era la destrucción de los logros sociales del régimen, sin pensar que probablemente su verbo florido y sus excesos verbales, contrastados con la realidad, fueron un detonante básico de los movimientos huelguísticos de principios de la década de los cincuenta. Fue el año 1951 uno de tantos avisos para las autoridades del régimen que percibieron por medio de la inestabilidad social las dificultades para mantenerse eternamente en el poder:

“...contemplados hoy aquellos amagos de huelga en Cataluña, Vizcaya y Madrid, resultan prácticamente inapreciables. Pero para un pueblo que había vivido en paz podía significar cuando menos la certidumbre de que no todo estaba ganado...”

“La huelga de la primavera del cincuenta y uno fue un fracaso para sus organizadores, pero un punto de atención, muy sensible, para quienes nos afanábamos en la gobernación del Estado.”<sup>29</sup>

Esta sería "la primera gran acción de masas"<sup>30</sup> no atribuible a las fuerzas residuales del movimiento obrero enraizado en la II República. El 1 de marzo comenzó en Barcelona un boicot al tranvía acompañando la protesta por la subida del precio del billete de 50 a 70 céntimos con demandas relacionadas con la carestía de la vida y la política represiva del gobierno que condujo a un llamamiento a la huelga general el día 12 de marzo. La huelga cesó el día 14<sup>31</sup> con una orden de la Delegación de Trabajo ordenando a las empresas el despido de los trabajadores arrestados y el descuento de las retribuciones de las horas de huelga pese a lo cual corría entre la organización sindical el temor de que algunos de sus elementos pudieran haberse desentendido de la disciplina debida, cooperando con las actividades "desestabilizadoras."<sup>32</sup>

El 21 de abril de 1951 comenzó la huelga en los astilleros Euskalduna de Bilbao extendiéndose a otros centros como Altos Hornos de Vizcaya, Basconia, Babcock&Wilcock, etc.<sup>33</sup> El gobierno en el exilio del País Vasco lanzó la consigna de la huelga de 48 horas el 23 de abril. La situación era fácilmente previsible por parte del ministerio de Trabajo y del sindicato en función de la clara conciencia del desequilibrio entre el coste de la vida y los salarios. Se temía que de igual manera que en 1947, el 1º de mayo fuera la fecha clave para el comienzo de los movimientos aunque, como se ha dicho, habría que esperar casi un año para que aconteciera algún suceso importante.<sup>34</sup> Ante ello la estrategia de algunos elementos del sindicalismo en la provincia era la de adelantarse a las peticiones de los obreros ante la conciencia de que la consecución de demandas fruto de una huelga constituía una victoria moral para aquéllos y una derrota para los que debieran ser sus interlocutores oficiales.<sup>35</sup> Esa "derrota" sindical podía ser más fácilmente perceptible en el sector siderometalúrgico con motivo de que en abril de 1950 las revisiones salariales no habían llegado todavía a este sector dado que la propuesta de revisión estaba paralizada ante la necesidad del informe previo del ministerio de Industria y Comercio. Esta situación y el incremento de las hojas clandestinas de la U.G.T., C.N.T. y Solidaridad de Obreros Vascos era lo que hacía pensar en la posibilidad de movimientos el 1 de mayo.<sup>36</sup>

En Madrid, el 22 de mayo se elevaron los precios del metro y ello provocó un plante similar al de Barcelona aunque la huelga, promovida por el P.C.E., no llegó a estallar.<sup>37</sup> Era la "huelga blanca," denominada así porque no consistió en la paralización de la actividad laboral sino en una manifestación generalizada ante la subida de los precios de los productos más básicos y el escaso poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores madrileños.<sup>38</sup> En general, la situación era preocupante entre los trabajadores del agua, el gas y la electricidad por la singular repercusión que podía tener en el resto de las actividades productivas la paralización de servicios e industrias básicas como éstas. Y es que había motivos más que suficientes para conceder a estos trabajadores una elevación del salario base o una paga extraordinaria. La Orden de 12 de julio de 1949 autorizaba un aumento en las tarifas eléctricas cuyo objetivo

inicial era compensar el plus de carestía de vida que el ministerio de Trabajo había concedido en julio de 1949 siendo más que evidente que el incremento de los ingresos por dicho motivo superaba clarísimamente el mencionado coste del plus.<sup>39</sup>

Tras las huelgas de la primavera de 1951 se plantearon otro tipo de problemas que tenían que ver con la forma en que los empresarios aprovecharon la coyuntura para sustituir unos trabajadores por otros, independientemente de que el despido estuviera "justificado" por la ausencia al puesto de trabajo o no. Tras las huelgas se produjo el acuerdo en Consejo de ministros de notificar a los gobernadores civiles de las provincias más afectadas (Barcelona, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava) el indulto pero, como se ha dicho, el problema más grave se planteaba por la tendencia a detraer de las magistraturas de trabajo los conflictos sociales en tanto que la huelga era considerada un delito político del que estas instancias habían de quedar relegadas a un lugar secundario si así se decidía por parte del aparato franquista:

*"Como consecuencia de las sanciones impuestas y de la anulación de los contratos de trabajo, se produjeron algunos despidos. Estos fueron de dos clases: Unos, justificados por falta de asistencia al trabajo; otros, inmotivados, ya que algunas empresas aprovecharon la ocasión de las huelgas y las sanciones para desprenderse de personal que, por cualquier causa distinta de aquél conflicto, no les interesaba conservar a su servicio.*

*En cuanto a los despidos justificados se pregunta si por aplicación del perdón han de ser repuestos los despidos. En caso afirmativo se piden normas para resolver la situación que plantea la existencia del personal que entonces se contrató en sustitución del despedido que ahora se readmite.*

*Parece ser que se interpusieron recursos ante las Magistraturas del Trabajo contra algunos despidos, inhibiéndose éstas por razón de la especialidad y carácter político y de orden público de los conflictos. Se pregunta si cabe ahora reinstalar ante dicha Jurisdicción tales procedimientos."*<sup>40</sup>

En marzo de 1952<sup>41</sup> en algunos centros fabriles de Barcelona se llevaron a cabo plantés y en mayo de 1953, la autorización del aumento de precios en algunos productos básicos originó el plante de los metalúrgicos de la ciudad de Barcelona en demanda de aumentos de salarios. Probablemente ayudó a ello la celebración el 27 de mayo de 1952 en Barcelona del XXXV Congreso Eucarístico Internacional, lo cual generó una gran preocupación por parte de la organización sindical y del ministerio de Trabajo.<sup>42</sup> Preocupación que llegaba a niveles increíbles de paranoia ante posibles "levantamientos populares" hasta el punto de que en

núcleos de poco peso específico en los movimientos huelguísticos contra el franquismo como Logroño se percibía por la misma organización sindical como contraproducente la intensificación de las medidas de control policial.<sup>43</sup>

Todo ello serviría para explicar, al menos en parte, la paga extraordinaria del mes de octubre de 1952 (no a los trabajadores agrícolas) o el aumento en un 25 % de los salarios llevado a cabo en julio de 1951. Sin embargo, en líneas generales el transcurso del año 1952 fue relativamente tranquilo<sup>44</sup> pese a la extenuante obsesión del régimen ante la posibilidad de un estallido de insubordinación local en puntos del territorio nacional como Madrid, País Vasco<sup>45</sup> y Cataluña:

“Cunde en los trabajadores de Cataluña y especialmente en los de Barcelona, la esperanza de que con motivo del Congreso Eucarístico Internacional, se otorgue algún beneficio económico.

Esta situación expectante de la clase trabajadora, pudiera ser explotada, en su día, por agitadores procedentes del extranjero, aunque no se señalen demasiadas probabilidades para su éxito. Ha circulado material de propaganda subversiva, en considerable parte recogida por la policía.

Aunque la situación sea sensiblemente mejor que la del mismo mes del año precedente, persiste en los medios laborales catalanes, al igual que en las otras regiones, la ansiedad ante posibles medidas gubernamentales que hagan efectivo el equilibrio de precios y jornales.”<sup>46</sup>

Así a principios de este año sólo se detectaban pequeños puntos de conflicto en Gerona (zona corchera), en Ponferrada (León),<sup>47</sup> Cádiz (fundamentalmente en Jerez de la Frontera), Pontevedra (Vilagarcía), Ceuta, Barcelona y Bilbao. En algunos sectores del sindicalismo español se achacaba el aumento de la conflictividad a “la apertura” del régimen y más concretamente a la “libertad en el decir y escribir.”<sup>48</sup> En Bilbao, el conflicto más relevante se produjo en Sestao en la Constructora Naval:

“...tuvo su origen en el accidente de trabajo registrado en la Factoría de la Constructora Naval durante la reparación del barco Monte Ulia. A causa de la rotura de un andamio cayeron dos obreros a la bodega, muriendo uno de ellos en el acto a las 11,30 horas de la mañana. El cadáver no fue levantado ni fue avisada la familia ocurriendo el lamentable episodio de que cuando la esposa de la víctima acudió con la comida, se encontró el cadáver del marido. El Ingeniero Jefe informó de la desgracia por la tarde y los compañeros de la víctima quisieron manifestar su disgusto y su dolor acudiendo al

entierro. La Empresa solo concedió el permiso a los compañeros de departamento del accidentado, abandonando el trabajo los obreros de la totalidad de las dependencias de la factoría, salvo dos de ellas. El entierro del cadáver tuvo lugar aquella tarde en Sestao, concurriendo en efecto los obreros de la Naval con excepción de los de las dos dependencias citadas. Naturalmente, la empresa ante el hecho de que casi todos los obreros habían abandonado la Fábrica sin permiso, lo puso en conocimiento de la Autoridad. Por esta se dispuso la detención de 10 trabajadores corriendo entre la masa de estos la voz de que si no se dejaba en libertad a los detenidos se anunciaría una verdadera huelga. Cabe agregar que la inspección practicada por la Delegación de Trabajo ha comprobado que el accidente ha sido por negligencia de la Empresa, ya que el andamio no estaba en buenas condiciones.<sup>49</sup>

El año 1953 se distinguió por las huelgas en el País Vasco y más concretamente en la empresa Euskalduna. Antes de producirse este conflicto los obreros de la Constructora Naval de Sestao,<sup>50</sup> Babcock&Wilcock y Altos Hornos de Vizcaya<sup>51</sup> ya habían mostrado sus deseos de ir de nuevo a la huelga a comienzos de agosto.<sup>52</sup>

En el caso de Babcock&Wilcock la empresa, para evitar la paralización de la producción, había accedido a principios de noviembre a recibir a una representación "no legal" de los obreros para atender "a las justas aspiraciones de los trabajadores"<sup>53</sup> cuyo resultado era la concesión voluntaria, por parte de las empresas, de subidas sin la autorización sindical. Esta comisión fue dirigida por el capellán de la empresa, padre Arrinda ("de notoria afiliación y actuación separatista"<sup>54</sup>) que según él mismo, venía en nombre de la H.O.A.C. y especialmente del obispo de Bilbao, monseñor Casimiro Morcillo.<sup>55</sup> Este era el principal problema de la organización sindical; no sólo se sentía apartada de la toma de decisiones por parte de entidades estatales superiores, sino que la percepción de ese hecho evidente entre los trabajadores y las propias empresas suponía un paso más en la pérdida de prestigio y de peso progresivo de la misma. Y es que la H.O.A.C. había irrumpido en la vida laboral siendo muy atacada porque algunos de sus miembros planteaban "los problemas duramente y sin ambages,"<sup>56</sup> exactamente lo contrario del lo que hacía la organización sindical, salvo excepciones. El problema se multiplicaba tanto en cuanto se percibía en el sindicato de Vizcaya que detrás de la huelga se encontraba la H.O.A.C. intentando apropiarse de la representación de los trabajadores y procurando entrar en negociaciones con las autoridades, saltando por encima de la organización sindical.<sup>57</sup> En otro informe del 4 de noviembre, el Delegado Provincial de Vizcaya reconocía como, en líneas generales, las empresas habían venido elevando voluntariamente los salarios, siendo un 50 % más elevados que las tablas estipuladas en las reglamentaciones siderometalúrgicas de 1946, pese a lo cual el problema no se había solucionado.<sup>58</sup> En definitiva, el sindicato observaba con gran preocupación como las actividades de algunos eclesiásticos y de sus organizaciones

tomaban iniciativas que, teóricamente, correspondían a la organización estatal, vaciando todavía más de contenido a ésta.

En el caso de Euskalduna la huelga estuvo en el origen de los aumentos salariales de febrero y marzo de 1954. El 30 de noviembre de 1953 la empresa anunciaba a los trabajadores que se suspendía el "cuarto" o prolongación de la jornada laboral durante dos horas extraordinarias, y el 1 de diciembre los 200 trabajadores de los talleres de maquinaria de la empresa declaraban la huelga de brazos caídos, secundada posteriormente por gran parte del resto de los talleres e, incluso, indirectamente por parte de la jerarquía eclesiástica. Concretamente la afirmación del Obispo de Valencia a finales de 1953 de que un matrimonio sin hijos necesitaba un mínimo de 60 pts. para vivir dignamente contrastaba con una realidad en la que muy excepcionalmente se superaban las 20 pts. diarias.<sup>59</sup> De forma paralela, según el sindicato provincial se estaba divulgando por los distintos departamentos de la empresa que se iba a desarrollar una "reunión de arzobispos para plantear al Caudillo la formación de sindicatos católicos libres y que entonces se quedaría la organización sindical de Falange sin productores."<sup>60</sup> Este era un factor que preocupaba especialmente al régimen franquista puesto que era sumamente preocupante que misiones dirigidas por miembros de la Iglesia católica como la "Misión del Nervión" sirvieran para inculcar en los obreros ideas como la que a continuación exponemos:

"...los obreros de la Euskalduna manifiestan que como en la reciente misión del Nervión se les había dicho que la huelga es lícita siempre que no sea violenta, que se hallen agotados todos los procedimientos legales y en tanto en cuanto que ni el Gobierno, ni los Sindicatos les hacían caso en sus reclamaciones y los salarios no satisfacen las necesidades del nivel de vida..."<sup>61</sup>

A las 11.30 de la mañana el paro era casi total y allí acudieron el Vicesecretario Provincial de Ordenación Social y el Jefe de la Sección Social Provincial del Sindicato del Metal, sin que por ello lograsen que los obreros volvieran al trabajo.<sup>62</sup> Esa misma noche del 1 de diciembre la policía detenía a 14 trabajadores<sup>63</sup> y el día 4 se anunciaba el despido de todos los huelguistas a lo cual respondieron los obreros solicitando al obispo de Bilbao su mediación en el conflicto. Paralelamente el Secretario Nacional de Sindicatos (Vizcaino Márquez) se vanagloriaba, en misiva enviada al Secretario General del Movimiento Raimundo Fernández Cuesta, del comportamiento ejemplar de los enlaces sindicales para deshacer la huelga hasta el punto de ensalzar el hecho de que incluso algunos "acudieron a la fuerza para conseguir el restablecimiento de la normalidad."<sup>64</sup> El resultado fue que el día 2 de diciembre sólo 100 de los 2.000 trabajadores de Euskalduna habían ido a trabajar. Dos días antes (por el 1 de diciembre) paraba la empresa Naval,<sup>65</sup> (aunque a principios de año ya se había desarrollado otro conflicto grave en la misma empresa)<sup>66</sup> y el mismo día 4 paraban los Astilleros del Nervión.<sup>67</sup> El día 5 se

colocaba en el tablero de la compañía una nota por la que se instaba a los trabajadores despedidos a solicitar de nuevo la admisión con el objetivo de realizar una selección que dejara fuera de la empresa a los elementos más destacados en la huelga,<sup>68</sup> siendo detenidos aquéllos que los rompieron en medio de comentarios "de resistencia y oposición."<sup>69</sup> El día 7 continuaban trabajando 1.170 empleados y la empresa "como premio a su conducta" les concedía un aumento diario de 2 pts.<sup>70</sup> en un contexto en el que las reuniones de los huelguistas ponían de manifiesto una cierta reticencia de los especialistas a volver al trabajo ante la pérdida de antigüedad que contrastaba con la mayor disposición de los no especialistas a retomar lo antes posible a la empresa.<sup>71</sup> Y el día 8 de diciembre, los trabajadores de Euskalduna volvían al trabajo con 19 despedidos por parte de la empresa<sup>72</sup> aunque finalmente se levantarían las sanciones y se pondría en libertad a los detenidos días después.<sup>73</sup>

Sin embargo, como es lógico, el conflicto se venía larvando con anterioridad hasta el punto de que, para el delegado sindical provincial, la situación a mediados de noviembre era ya de "evidente peligro"<sup>74</sup> ante la impotencia de un sindicato consciente de su función secundaria dentro del régimen,<sup>75</sup> sabedor de que su única misión era la de contener las "justas demandas de los 70.000 trabajadores"<sup>76</sup> del sindicato del metal en un contexto de elevación de precios, de aumento de las tarifas de la electricidad, de incremento de los beneficios de los empresarios, etc. En torno a esta última cuestión, resultaba sangrante para el mundo trabajador observar como una leve subida de un plus como el de carestía de vida llevaba aparejada la posibilidad de elevar oficialmente los precios de los productos realizados por los trabajadores de este sindicato (caso del acero especial en torno al 30 o 40 %). "Reconocemos que los precios oficiales actuales de los productos siderúrgicos están muy por bajo de los que rigen en las naciones europeas para esta clase de materiales, pero más vale no hacer comparaciones, pues si las establecemos para la mano de obra española con la de dichas naciones, sacaremos consecuencias que tendrían un significado deprimente..."<sup>77</sup> concluía el informe elaborado en abril de 1953 por el sindicato del metal. De hecho, aunque tenga un carácter anecdótico, el bajo nivel de salarios en relación con otros países se manifestaba también en los procesos migratorios que se producían en el Marruecos español en dirección al francés.<sup>78</sup>

Aparte de la alteración del "orden público" el mayor efecto que sobre el régimen tenía el conflicto laboral era la manifestación evidente de la inutilidad de la organización sindical. Ésta realmente se sentía ninguneada. Se ha insistido en la existencia de otros conflictos (menores) en otros centros fabriles del País Vasco antes de comenzar el conflicto en Euskalduna en diciembre de 1953. En algunos casos la solución a los mismos quedaba totalmente fuera de las posibilidades de actuación de la organización sindical, incluso cuando afectaba a empresas tan importantes como Altos Hornos de Vizcaya. En la mencionada empresa, radicada en Baracaldo, a las 2.15 de la tarde del 23 de septiembre se llevó a cabo un plante de los trabajadores. Lo

relevante para la organización sindical no era el plante en sí, sino el hecho de que éste se resolviera sin que la mencionada organización tuviera conocimiento del mismo hasta quedar totalmente solucionado:

"...la Organización sindical de Vizcaya se queja una vez más de que esta Empresa soslaya sistemáticamente la actuación de las entidades sindicales y aún de los organismos laborales, dándose la circunstancia de que manteniendo, en general, una conducta intransigente en el aspecto social, en cambio, cede ante las presiones de la acción directa de los trabajadores. Con esto no sólo padece el prestigio de la Organización sindical, sino la necesaria disciplina y constituye un ejemplo peligroso para los obreros de las demás Empresas que contemplan la eficacia que en éste centro de trabajo tienen los procedimientos de acción directa, tan contrarios a nuestro sistema y al orden social."<sup>79</sup>

En líneas generales, la percepción sobre la situación social en el año 1953 era negativa tal y como muestra parte del siguiente informe de la Vicesecretaría Nacional de Ordenación Económica con una preocupación especial centrada en el sector eléctrico, del agua y el gas, en la banca madrileña y en la industria pesada del norte de España:

"Se observa que el ambiente social y laboral continúa agravándose por la prolongación del ya dilatado periodo de congelación de salarios, mientras que los precios siguen ofreciendo una tendencia al alza, comprobada no sólo en aquéllos que se fijan espontáneamente en el mercado, como consecuencia de tarifas que vienen siendo autorizadas últimamente."<sup>80</sup>

Como ya se ha mencionado, la intervención de algunos elementos del clero vasco, más concretamente de miembros de la H.O.A.C. e incluso del obispo de Bilbao, confirieron a la huelga de Euskalduna y de las demás empresas un carácter más problemático para las autoridades del régimen que tenían que afrontar incluso acusaciones sobre su falta de caridad cristiana. Pese a ello, paulatinamente, los trabajadores fueron entregando las solicitudes de ingreso encontrándose mayor oposición entre los especialistas pese a lo que "en la tarde del martes...sobre las siete, llamó a la primera autoridad el Sr. Obispo,"<sup>81</sup> interesando recibiera una comisión de trabajadores, respondiendo dicha autoridad que lamentaba no acceder a su ruego, pero que él no podía tratar con huelguistas, y que cualquier problema laboral podían exponerlo en Sindicatos."<sup>82</sup> Para el sindicato el paulatino incremento de las solicitudes en paralelo a la llamada del obispo de Bilbao demostraba la pérdida de fe de los huelguistas en la consecución de sus demandas.



El año 1953, no se distinguió únicamente por este tipo de macroconflictos. Podemos encontrar otros muchos casos con una potencialidad relevante. Este es el caso del sector de la industria papelera en el que parte de las empresas, conscientes de que su actividad era determinada por una de las reglamentaciones más antiguas (3 de abril de 1946) y con la única concesión de un plus de carestía de vida del 25 % (Orden de 3 de mayo de 1950), concedían mejoras por su cuenta ante las amenazas de dimisión colectiva de todos los enlaces sindicales en regiones como la levantina.<sup>82</sup> Otro ejemplo, puede ser el plante de los trabajadores de la empresa siderometalúrgica Elma de Mondragón<sup>84</sup> o los realizados desde agosto en la empresa Maquinista Terrestre y Marítima de San Andrés (Barcelona) al negarse los trabajadores a realizar las horas extras en las condiciones estipuladas.<sup>85</sup>

Posteriormente, a raíz del III Congreso Nacional de Trabajadores del 11 al 16 de julio de 1955, el partido comunista lanzó un llamamiento a la huelga en octubre de 1955 y febrero de 1956<sup>86</sup> que pese a la elevación de salarios de marzo de 1956 dio como resultado algunos movimientos reivindicativos en Pamplona, Valencia, País Vasco y Barcelona en los meses siguientes. Concretamente en Barcelona, en algunas fábricas textiles, hubo huelgas de brazos caídos.<sup>87</sup> En el caso del País Vasco se dieron algunos conflictos puntuales en la Constructora Naval de Sestao en paro el 17 de noviembre<sup>88</sup> o en Altos Hornos de Vizcaya.<sup>89</sup>

De nuevo, en enero de 1957, en Barcelona, a raíz de la elevación del precio del billete del tranvía se produjo otro boicot similar al de 1951, al que siguió un intento análogo en Madrid desarrollado durante los días 7 y 8 de febrero.<sup>90</sup> De nuevo surgió el pavor entre las filas del régimen ante la posibilidad de una huelga general.<sup>91</sup> Y es que en Bilbao las subidas del precio del billete suponían un aumento que oscilaba entre el 60 y el 125 % y en San Sebastián en torno al 45 %. En Barcelona la subida provocó un aumento del precio del billete de 60 a 80 céntimos (en metro, tranvías, trolebuses y autobuses) y en Valencia un incremento mínimo de 20 céntimos o 60 sobre el precio antiguo.<sup>92</sup> Y es que estas subidas en el billete de los tranvías, en algunos casos, no tenían como justificación la elevación de los salarios de los trabajadores en estos sectores, trabajadores que por otra parte estaban en muchos casos "al margen de toda defensa social y sindical" siendo habituales los casos "de despido de cobradores y conductores, sin que les quepa recurso contra las determinaciones de este carácter."<sup>93</sup> Así, en noviembre de 1953, en la provincia de Granada se dio el caso de un "gran malestar" (término eufemístico utilizado muy asiduamente para referirse a un conflicto laboral)<sup>94</sup> a raíz de una elevación de tarifas que no revirtió en los trabajadores (en algunos casos con sueldos de 13,65 pts. diarias). Situación idéntica se vivía en la compañía del metropolitano de Madrid en la que el alto personal percibía pluses y gratificaciones libremente concedidas por la empresa incluidas en los "gastos de explotación" mientras que el personal sometido a la reglamentación cobraba salarios de incluso 8,25 pts. diarias.<sup>95</sup>

En este marco de huelgas puntuales, la minería, concretamente la asturiana, no manifestó la conflictividad de Cataluña, el País Vasco o Madrid. La minería asturiana "en todos estos años vivió ausente de toda esta problemática social" en lo cual tuvo una gran influencia el hecho de que este sector dependiera laboralmente de un mercado protegido, la militarización de las minas hasta la década de los cuarenta y el hecho de que fuese (por su potencial conflictividad) un sector con más privilegios que el resto, en el sentido de beneficiarse de las pocas ventajas que el régimen otorgaba a los obreros: servicios sociales, viviendas, exención del servicio militar, etc.<sup>66</sup> Ese fue el motivo de que hasta marzo de 1957 no se produjera en Asturias ninguna huelga de importancia.

Sin embargo, en otras zonas mineras, la inexistencia de conflictividad no suponía ni mucho menos que el trato fuera privilegiado tal como se puede observar en el informe que la Vicesecretaría Nacional de Ordenación Económica elaboró a mediados de los años cincuenta en torno a las minas de Riotinto y Tharsis, en Huelva. En ellas los trabajadores habían estado sometidos a un sistema de "explotación colonial" que no se había alterado con el cambio de titularidad en la empresa. La situación de los mineros se caracterizaba por la acusada escasez de viviendas, la falta de condiciones de salubridad en las mismas, el hacinamiento, la falta de sanidad e higiene, aparte del "dominio que las empresas ejercen sobre la totalidad de los respectivos términos municipales que determinan que muchas veces, las Autoridades Locales y Delegadas se vean influidas en sus decisiones, y no ostenten la independencia necesaria para imponer el cumplimiento de las leyes," forma eufemística de reconocer la corruptela generalizada del poder político. A ello se podía añadir lo siguiente: "además de que en cuanto a retribución y condiciones materiales de trabajo la situación no es satisfactoria, ésta se ve agravada por el trato poco humano que en general sufren los trabajadores y el ambiente que perciben de arbitrariedad y falta de garantía en sus derechos."<sup>67</sup> Podemos agregar que entre los trabajadores de las minas no estaba generalizada la obligación por parte de las empresas de entregar ropas de trabajo, que carecían de comedores adecuados, que carecían de los servicios más elementales del Seguro Obligatorio de Enfermedad, que el reglamento de enfermedades profesionales no llegaba a éstos, etc., etc.

Este puede ser el panorama de la conflictividad social durante el primer franquismo. Un panorama que nos pone en contacto con un bajo nivel de vida que determinaba movimientos huelguísticos en los que las cuestiones estrictamente laborales (determinantes de aquél nivel de vida) ocupaban un lugar fundamental.

## Notas

<sup>1</sup> Girón, *Si la memoria...*, op. cit., pág. 175.

<sup>2</sup> Solé, *La recesión del neocorporativismo...*, op. cit., pag. 51.

<sup>3</sup> Morodo, *Los orígenes...*, op. cit., pág. 187-218.

<sup>4</sup> Era común este tipo de práctica ante un marco en el que la organización sindical en muchas ocasiones no actuaba más que como desmadrador de enredos y conflictos en favor de la empresa: "La Empresa dice que los obreros están saboteando la producción y que los generos son de inferior calidad a la normal, debido a que los operarios mezclan hilos voluntariamente con el propósito de causar perjuicio a la producción." Situación en la empresa Edmundo Bebie, S.A. de la Farga de Bebie (Gerona). V.N.O.E., 20 de octubre de 1933. A.G.A., S.S., I.D.D. 136.01, 3.954, N-78-53.

<sup>5</sup> Secretaría de despacho del Delegado Nacional de Sindicatos, 12 de julio de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.336.

<sup>6</sup> Llorens, *La primera década...*, op. cit. 156.

<sup>7</sup> A.P.G.; I.D.N.; Leg. 26, n° 2. Informe del Consejo Nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S. en torno a la Ley de Bases de la Organización sindical de mayo de 1939.

<sup>8</sup> Ídem, pág. 85 y 116.

<sup>9</sup> Ídem, pág. 116-117.

<sup>10</sup> "Los pocos que aceptan, Corbella, Fornells, creen que así se podría evitar una nueva guerra civil, eco de la propaganda oficial, y tener alguna influencia en la Organización sindical falangista. Forman pues, en 1944, un efímero Partido Laborista con algunos republicanos y marxistas. Tolerado por el régimen, pero condenado por la CNT, este Partido Laborista desaparecerá hacia 1947, cuando se suspenden esas negociaciones estériles." C. Malerbe, Pierre: *La oposición al franquismo 1939-1975*. Madrid, Naranco, 1977, pág. 55.

<sup>11</sup> En este documento se hace referencia a la imposibilidad de la CNT española y colaboracionista (al menos parcialmente) de enviar delegados a dicho congreso por la detención de Cipriano Damiano González (Secretario General del Comité Nacional de la CNT en España) y de Emilio Quiñones (Secretario Político del Comité Nacional de CNT en España. Nota urgente y confidencias para nuestro Delegado Nacional, 25 de septiembre de 1953. Asunto: La CNT de España es expulsada de la Asociación Internacional de Trabajadores en su VIII Congreso, merced a las gestiones de la C.N.T. de España en el exilio. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 38.02, 4.835.

<sup>12</sup> Ídem, pág. 114.

<sup>13</sup> Girón, *Si la memoria...*, op. cit., pág. 161.

<sup>14</sup> Ministerio de Información. Informe sobre la prensa extranjera, Madrid, 23 de noviembre de 1951. A.G.A., S.S.; I.D.D. 90-02, n°204-n° 97 (4°).

<sup>15</sup> Payne, *El régimen...*, op. cit., pág. 369.

<sup>16</sup> Ferri, Llibert; Muixi, Jordi; Sanjuán, Eduardo: *Las huelgas contra Franco*. Barcelona, Planeta, 1978, pág. 75-76.

<sup>17</sup> En este caso los obreros del sector textil fundamentalmente se negaron a recuperar las horas perdidas por las restricciones eléctricas, cuestión que quedó resuelta al aceptar la empresa abonar las horas sin recuperarlas. A renglón seguido los trabajadores pidieron un aumento de salarios apoyada en la huelga de brazos caídos de la fábrica Bertrán y Serra ante lo cual la patronal ofertó un aumento de 45 pts. mensuales en concepto de subsidio de vida cara. Pero el 25 de enero al ir a cobrar los trabajadores del turno de tarde se llevaron la sorpresa de que el sueldo del día anterior es abonado lo cual provoca de nuevo la huelga de brazos caídos. Reuniones sin éxito, intervención del gobernador civil de Barcelona (coronel Barba), intervención de la policía armada y la guardia civil. Estos fueron los siguientes capítulos del estallido de Manresa que acaba 8 días después de su comienzo con una serie de concesiones retiradas en el momento en que los trabajadores volvieron a la fábrica. Alba, Víctor: *Historia de la Resistencia Antifranquista*. Barcelona, Planeta, 1978, pág. 276.

<sup>18</sup> También el movimiento de Manresa estuvo en el origen de otros brotes huelguísticos en Barcelona, el Vallès y el Maresme a lo largo del mes de febrero. Así los obreros de Maquinista Terrestre y Marítima exigían la liberación de cinco trabajadores encarcelados en la huelga de 1945 y en los Altos Hornos de Hospitalet 1.000 obreros fueron también a la huelga. Igualmente el movimiento se deja sentir en algunos puntos de Murcia, Alicante, Andalucía y en el Ferrol, donde en el mes de junio 5.000 empleados de Bazán exigieron aumentos de sueldos. Ferri, *Las huelgas contra Franco...*, op. cit., pág. 77-86.

<sup>19</sup> Ídem, pág. 91.

<sup>20</sup> Payne, *El régimen...*, op. cit., pág. 388.

<sup>21</sup> Preston, Paul: *Franco. Caudillo de España*. Grijalbo, Barcelona, 1994, pág. 710.

<sup>20</sup> Alba, *Historia de la Resistencia...*, op. cit., pág. 270.

<sup>21</sup> "...puede recoger la información de que elementos extraños a nuestra Organización, principalmente pertenecientes a la CNT y que seguían obedeciendo consignas clandestinas, se preparaban a acudir a nuestras elecciones en las que esperaban, presentándose muy unidos, obtener triunfos más bien que por su propia influencia sobre la masa trabajadora (que sin ser grande hay que reconocer no es despreciable), en la gran dispersión de nuestros afiliados...es preciso hacer una selección muy rigurosa y mantener una vigilancia muy tensa sobre los elementos que durante muchos tiempo nos han sido hostiles y han estado apartados de nosotros" Informe del Jefe Nacional del Sindicato de Construcción, Vidrio y Cerámica sobre el de Barcelona y Valencia, 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 88, r/468.

<sup>22</sup> Ferri, *Las huelgas contra Franco...*, op. cit., pág. 93-114.

<sup>23</sup> Ver en González, *La economía pública del franquismo...*, op. cit.

<sup>24</sup> Payne, *El régimen...*, op. cit., 429.

<sup>25</sup> Ídem, pág. 467.

<sup>26</sup> Ferri, *Las huelgas contra Franco...*, op. cit., pág. 149.

<sup>27</sup> Girón, *Si la memoria...*, op. cit., pág. 149-150.

<sup>28</sup> C. Malerbe, *La oposición al franquismo...*, op. cit., pág. 71. "Unos 300.000 obreros no van al trabajo", según estimaciones de Alba citando a la Agencia France-Presse. Alba, *Historia de la Resistencia...*, op. cit., pág. 296.

<sup>29</sup> El 13 según Alba. Alba, *Historia de la Resistencia...*, op. cit., pág. 297.

<sup>30</sup> Informe reservado del Delegado Provincial de Burgos al Delegado Nacional de Sindicatos, 22 de mayo de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/162.

<sup>31</sup> C. Malerbe, *La oposición al franquismo...*, op. cit., pág. 74.

<sup>32</sup> Por supuesto, ni que decir tiene, que la fecha del 1º de mayo despertaba todo tipo de temores e incluso paranoias ante la posibilidad de que se rompiera la calma laboral sobre todo cuando afectaba a una gran empresa que pudiera actuar de espoleta en alguna región industrial como el País Vasco. Concretamente el 20 de abril de 1952 el ministro de Industria (Joaquín Planell) se disponía a visitar la Naval de Sestao para lo cual se pretendió imponer a sus trabajadores la permanencia en la empresa más allá del horario establecido a lo que en principio se negaron. La resistencia sólo pudo romperse con la actuación intimidatoria de los enlaces sindicales que como en tantas otras ocasiones actuaron de apagafuegos. *Incidente laboral en Sestao (Vizcaya)*. V.N.O.E., 30 de abril de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, sin referencia.

<sup>33</sup> "Estamos todavía a tiempo para, reconociendo la verdadera necesidad de atender esas aspiraciones, acceder a ellas, puesto que si por el contrario las situaciones de disgusto se exteriorizan en forma ilegal antes de haber mejorado la situación económica de los trabajadores, hacerlo después pudiera parecer a estos como un triunfo alcanzado por esas actividades lo que debilitaría la función de la Organización sindical..." Delegación Provincial de Sindicatos de Vizcaya (Gonzalo Marcos Chacón), 10 de abril de 1950. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 2.334-1.

<sup>34</sup> Tarifas de salarios en la industria siderometalúrgica. 14 de abril de 1950. Vicesecretaría Nacional de la Delegación Nacional de Sindicatos (Francisco G. Ballesteros). A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 2.334-1. Por lo que se refiere a la organización sindical vasca existía una especial inquietud por controlar sus puntos de actuación en Vergara y Eibar (Guipúzcoa). *Situación social en Guipúzcoa*. V.N.O.E., 26 de marzo de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, sin referencia.

<sup>35</sup> La huelga llegó el 24 a Vitoria y el 25 a Pamplona. Alba, *Historia de la Resistencia...*, op. cit., pág. 300.

<sup>36</sup> Ferri, *Las huelgas contra Franco...*, op. cit., pág. 190.

<sup>37</sup> Situación inquietante entre los obreros de agua, gas y electricidad. V.N.O.E., 7 de noviembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, sin referencia.

<sup>38</sup> Cuestiones que plantea el perdón de los sancionados en la pasada huelga. V.N.O.E., 25 de octubre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, sin referencia.

<sup>39</sup> Con anterioridad se había producido un paro en 3 fábricas de géneros de punto en Calella (Barcelona) por las discrepancias en torno a la gratificación de Navidad que la empresa redujo desde 1949 y que hasta 1952 no había sido resuelto por el ministerio de Trabajo. Nota para el Delegado Nacional. V.N.O.E., 8 de enero de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, sin referencia.

<sup>40</sup> Concretamente se temía la materialización del rumor que insistía en que la jerarquía eclesiástica, con ocasión de este congreso, iba a solicitar de los poderes públicos "la concesión de un plus de carestía de vida, gratificación, paga extraordinaria o cosa análoga, para todos los trabajadores. Atendiendo a este hecho, se solicita sea considerada la conveniencia de que la Organización sindical haga con anterioridad

esta petición. " Nota sobre la situación social V.N.O.E., 18 de marzo de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, sin referencia.

<sup>42</sup> "En los últimos días del mes que nos ocupa y ante la proximidad del 1º de mayo, nos fue dada la alarma de una posible producción de disturbios o conatos de paro huelguístico, pero puestos en contacto con los enlaces sindicales y secciones sociales de nuestro sindicato, pudimos comprobar que eran totalmente infundadas tales informaciones... Considero pues, de todo punto contraproducente el alarde de fuerza pública que se hizo en las proximidades de las concentraciones industriales, que provocó, como reacción, el disgusto de nuestros productores... sin que exista razón material para estas manifestaciones de patrullas numeras con armamento de guerra..." Informes reservados de la C.N.S. de Logroño, abril de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/213.

<sup>43</sup> Informe sobre la situación socio-laboral. V.N.O.E., 7 de enero de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-1-53.

<sup>44</sup> En cualquiera de los casos todavía se vivían las consecuencias de los movimientos huelguísticos: "En el aspecto político desaparece, o por lo menos se encuentra bastante quieta, la presión... de lo que pudimos llamar el enemigo, es decir el frente rojo-separatista... Por otra parte la petición fiscal a los todavía pendientes del sumario de la huelga del pasado mes de mayo, en su aspecto político todos ellos dirigentes nacionalistas, con la pena menor, según noticias que se tiene, de 20 años y un día por los delitos de subversión y asociación ilegal..." Informes reservados de la C.N.S. de Álava, febrero de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/212.

<sup>45</sup> Situación en Barcelona. V.N.O.E., 16 de mayo de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, sin referencia.

<sup>46</sup> Allí radicaba la zona de la RENTE a la que iban destinados los trabajadores represaliados con los que se cometían cotidianos abusos de autoridad.

<sup>47</sup> "...Ambiente social de descontento fomentado por la cada vez mayor libertad en el decir y escribir que se viene apreciando, tanto en la prensa, como en las conversaciones." El subrayado corresponde al informe de la C.N.S. Informes reservados de la C.N.S. de León, enero de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/213.

<sup>48</sup> Información sobre situación social. V.N.O.E., 20 de febrero de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, sin referencia.

<sup>49</sup> En el caso de la Naval la huelga se había declarado el día 21 de octubre de 1953. El motivo era la promesa de la empresa de conceder una gratificación extraordinaria si se aumentaba la producción. En el mes de se procedió a repartir la gratificación. Sin embargo, el personal administrativo y técnico recibió el importe de un mes de sueldo mientras que los obreros recibieron lo proporcional a 10 días de salario. Conflicto laboral en la constructora Naval de Sestao. V.N.O.E., 4 de noviembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-88-55.

<sup>50</sup> En el caso de Altos Hornos se explicitaron con anterioridad varios conflictos. El 28 de octubre de 1952 se había producido una huelga de brazos caídos al no aceptar los trabajadores del taller de forja pequeña el nuevo sistema (BEDOUN) de trabajo impuesto por la empresa. El problema radicaba en la tendencia a explotar al máximo la mano de obra por parte de la empresa. Tradicionalmente los trabajadores realizaban su trabajo por medio de un sistema de primas que les garantizaba un sueldo superior en un 60 % al salario base, aproximadamente. La imposición del nuevo sistema motivó la bajada del rendimiento de los empleados y el despido, primero de siete, y posteriormente de todos los miembros del taller. Es curioso como la organización sindical, que reconoce en sus informes la inexistencia de actitud negociadora por parte de la empresa, denunciaba paralelamente que el motivo del conflicto (se utiliza, como es habitual, otro tipo de términos enfermísticos para referirse a esta cuestión) era el afán de los obreros por trabajar "poco y sin control". Conflicto laboral en un taller de Altos Hornos de Sestao. V.N.O.E., 28 de octubre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, sin referencia. También Conflicto laboral en un taller de Altos Hornos de Sestao. V.N.O.E., 13 de noviembre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, sin referencia.

El 18 de febrero de 1953 los trabajadores del departamento del tren semicontinuo comenzaron a "bajar la producción normal, en un cincuenta por ciento en el primer relevo, y al comprobarlo la empresa y manifestar el segundo relevo que seguía la misma conducta que el anterior, se les suspendió a todos de empleo y sueldo, a resultas de un expediente. En vista de ello, el tercer relevo se negó a entrar al trabajo, quedando parado el Departamento..." Solución al conflicto laboral en la fábrica de Sestao de Altos Hornos de Vizcaya, S. A. V.N.O.E., 25 de febrero de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-13 bis-55.

<sup>51</sup> En el caso de Babcock&Wilcock el motivo inicial era la negativa de los obreros a trabajar la parte de jornada que realizaban como extraordinaria. Informe sobre el conflicto existente en la empresa

Babcock&Wilcock Delegación Provincial de Sindicatos de Vizcaya, 5 de agosto de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.851. Sobre la evolución del conflicto en Babcock&Wilcock: Solución del conflicto laboral en la empresa Babcock&Wilcock. V.N.O.E., 4 de noviembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-87 bis-53. Y también en Información del sindicato provincial del metal sobre problemas sociales. Vizcaya, 5 de agosto de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.851.

<sup>52</sup> Correspondencia del Delegado Sindical en Vizcaya (Manuel del Valle Pando) al Delegado Nacional de Sindicatos (Soñs) sobre sociedad española de construcción Babcock&Wilcock, de 4 de noviembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.851.

<sup>53</sup> Informe de Delegación Provincial de Vizcaya sobre Babcock&Wilcock elevado al Gobernador Civil, 4 de noviembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.851.

<sup>54</sup> Correspondencia Delegación Provincial de Vizcaya con Secretaría Nacional, 8 de diciembre de 1953 e informe. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.851.

<sup>55</sup> Informes reservados de la C.N.S. de Alicante, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/212.

<sup>56</sup> Correspondencia de la Delegación Provincial de Vizcaya con Secretaría Nacional, 22 de diciembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.851.

<sup>57</sup> Informe de la Delegación Provincial de Vizcaya sobre Babcock&Wilcock elevado al Gobernador Civil, 4 de noviembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.851.

<sup>58</sup> Boletín reservado del ministerio de Información. "España en las ondas", 4 de diciembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.851.

<sup>59</sup> Correspondencia del Delegado Provincial Sindical de Vizcaya, Manuel del Valle Pando, al Secretario Nacional de Sindicatos, Miguel Vizcaino Márquez y a D.N.S., de 3 de diciembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.851.

<sup>60</sup> Nota recibida a las 10 de la mañana del día 2 de diciembre desde la Delegación Sindical Provincial de Vizcaya. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.851.

<sup>61</sup> Correspondencia del Delegado Provincial Sindical de Vizcaya, Manuel del Valle Pando, al Secretario Nacional de Sindicatos, Miguel Vizcaino Márquez y a D.N.S., de 3 de diciembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.851.

<sup>62</sup> 20 según la delegación provincial de sindicato. Nota recibida a las 10 de la mañana, el día 2 de diciembre de 1953 desde la Delegación Sindical Provincial de Vizcaya destinada al Gobernador Civil de Vizcaya y Jefe Provincial del Movimiento (Genaro Riestra Díaz) A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.851. La misma cantidad de detenidos se repite en "Conflicto en la empresa Euskalduna de Bilbao, 2 de diciembre de 1953." A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.851.

<sup>63</sup> Correspondencia de la Secretaría Nacional para la Secretaría General del Movimiento, 4 de diciembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.851.

<sup>64</sup> Nota recibida a las 10 de la mañana, el día 2 de diciembre de 1953 desde la Delegación Sindical Provincial de Vizcaya destinada al Gobernador Civil de Vizcaya y Jefe Provincial del Movimiento (Genaro Riestra Díaz) A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.851. En otros documentos elaborados por Valle (Delegado Sindical de Vizcaya) se pone de manifiesto el temor que supuso la entrada en la huelga de la Naval en el sentido de que ello "pudo fácilmente haberse transformado en una huelga general" en la cual también pudo influir el momento del año en que se produjo la huelga con las pagas extraordinarias y las fiestas de Navidad de por medio.

<sup>65</sup> En este caso la manzana de la discordia fue la reducción por parte de la empresa en un 50 % de la prima de asistencia al trabajo lo cual originó una huelga de brazos caídos el día 17 de enero. Conflictos Laborales en Vizcaya. V.N.O.E., 27 de enero de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-5-53.

<sup>66</sup> Aunque hay que considerar la tendencia del sindicato y del ministerio de Trabajo a minimizar los efectos de la huelga, según sus propias fuentes, el día 4 de diciembre ya iban a la fábrica 1.174 trabajadores. En el caso de la Naval parece ser que el peso de la huelga recayó más claramente en el día 4 de diciembre reproduciéndose la secuencia de la huelga de 1951 y afectando, según cifras oficiales a 1.300 trabajadores. Correspondencia del Delegado Provincial Sindical de Vizcaya (Manuel del Valle Pando) al Secretario Nacional de Sindicatos (Miguel Vizcaino Márquez), 4 de diciembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.851.

<sup>67</sup> Informe sobre la situación de la Compañía Euskalduna de construcción y reparación de buques S.A. y de la Sociedad Española de Construcción Naval. Correspondencia Delegado Provincial del Sindicato de Vizcaya a la Secretaría Nacional de Sindicatos, 5 de diciembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.851.

<sup>68</sup> Informe sobre la situación de la Compañía Euskalduna y situación general en la zona de la zona industrial de la ría. Delegación Provincial Sindical de Vizcaya, 7 de diciembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.851.

<sup>71</sup> *Situación general en Euzkalduna*, 7 de diciembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02. 4.851.

<sup>72</sup> Correspondencia del Secretario Nacional de Sindicatos con el ministro Secretario General del Movimiento (Ramundo Fernández Cuesta), 7 de diciembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02. 4.851.

<sup>73</sup> Fern, *Las huelgas contra Franco...*, op. cit., pág. 217-220. También en Alba, *Historia de la Resistencia...*, op. cit., pág. 303.

<sup>74</sup> Correspondencia de Gobernador Civil de Vizcaya con Delegación Provincial de Sindicatos, 24 de diciembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02. 4.851.

<sup>75</sup> Delegación Provincial de Sindicatos Vizcaya, 18 de noviembre de 1953. Nota para el Excmo. Sr. Gobernador Civil. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02. 4.851.

<sup>76</sup> "...la tremenda situación de injusticia es padecida por multitud ingente de trabajadores, que son la mayoría de la población vizcaína, de hecho repercute desfavorablemente en la Organización sindical, porque el comentario del indiferente y el hostil -y aquí son muchos de lo uno y lo otro- es ¿qué hacen los sindicatos en este problema social?...la forma de tratar este tema, con todos los respetos a la Jerarquía, es contraproducente, sólo se logra enrarecer más el ambiente...seguramente si nosotros quisiéramos hacer comentarios tan duros sobre el problema social divulgados a los cuatro vientos en la prensa diaria, o campañas fuertes en este sentido, creo que no se nos permitiría...Lo triste es que tienen razón y que nosotros, que debemos llevar la bandera de la justicia social más alta que nadie, por la falta de atribuciones y medios eficaces para actuar y por la, a mi juicio, errónea política del Gobierno en este problema, de promesas y dilaciones que ya duran años, en realidad sólo nos cabe el derecho, como a cualquier español de petición y el de pataleo si no nos hacen caso. El adjunto recorte hoy, y la pastoral del Arzobispo de Valencia ayer, hacen sentirse a los trabajadores reforzados en su postura de queja...no sabemos precisar hasta donde podemos llegar en la actitud pasiva y de remolque de una política laboral que consideramos enóneas postulados de justicia social que todos sentimos y que, en definitiva, no sólo no se cumplen, sino que se contratanan..." Correspondencia de la Delegación Provincial de Vizcaya (Valle) dirigida a Solís, sobre pastoral en torno a la Santa Misión del Nervión, 13 de noviembre. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02. 4.851. La pastoral del Arzobispo de Valencia, Monseñor Olasechea, (por cierto hijo de un trabajador de Altos Hornos de Vizcaya) llevaba fecha del 19 de febrero de 1952. El subrayado es nuestro.

<sup>77</sup> Escrito elevado al Delegado Nacional de Sindicatos y al Jefe Nacional del Sindicato del Metal, por los Jefes de las Juntas locales y provincial del Sindicato del Metal de Vizcaya, 14 de marzo de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02. 4.851.

<sup>78</sup> En algunos casos hasta del 100 %. Escrito elevado al Delegado Nacional de Sindicatos y al Jefe Nacional del Sindicato del Metal, por los Jefes de las Juntas locales y provincial del Sindicato del Metal de Vizcaya, 14 de marzo de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02. 4.851.

<sup>79</sup> "Se viene notando en nuestra Zona del Protectorado en Marruecos un éxodo de trabajadores hacia el Marruecos francés y Argelia. Las causas parecen ser las diferencias de salario que existen en las plaza últimamente indicadas.

Los desplazamientos afectan principalmente a los obreros de siderometalurgia, carpintería y construcción. Esta situación merece que se le preste atención ya que se nota la falta de mano de obra, para evitar que pudiera adquirir mayores proporciones". Situación laboral en la zona del protectorado de Marruecos. V.N.O.E., 2 de octubre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01. 3.954, sin referencia.

<sup>80</sup> Breve planta en el departamento de coque de Altos Hornos de Vizcaya, S.A. de Baracaldo. V.N.O.E., 5 de octubre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01. 3.954, N-71-53. En fechas anteriores se producía una situación similar en el departamento de Coque: "La Empresa, sin contar para nada con la Organización sindical, entabló negociaciones con los huelguistas, cediendo a sus pretensiones...La Organización sindical estima improcedente la conducta de la Empresa, al prescindir de los cauces sindicales para la solución de un conflicto, en la que, además, se ha abandonado la postura inicial ante la coacción de la huelga." Conflictos laborales en Altos Hornos de Vizcaya, S.A. V.N.O.E., 10 de junio de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01. 3.954, N-46-53.

<sup>81</sup> Informe sobre la situación social de España. V.N.O.E., 18 de marzo de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01. 3.954, N-23-53. Concretamente en Madrid se había producido a las 7 de la tarde del día 17 de marzo una manifestación (según fuentes oficiales de tan sólo 500 empleados de banca) ante los locales de la C.N.S. de Madrid.

<sup>82</sup> Monseñor Casimiro Morello.

<sup>83</sup> Informe sobre la situación en la Compañía Euzkalduna de construcción y reparación de buques, S. A. y resto de las empresas. Delegación Provincial de Sindicatos de Vizcaya, 10 de diciembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02. 4.851.

<sup>63</sup> Descontento entre los trabajadores de la industria papelera, 8 de abril de 1953. V.N.O.E., noviembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 3.954, N-34-53.

<sup>64</sup> El plante de los trabajadores fue motivado por la alteración del horario por parte de la empresa. En este caso el resultado de la huelga de brazos caídos fue desfavorable para los trabajadores: "Los trabajadores que se habían distinguido por su falta de disciplina, como principales instigadores del plante y que abandonaron el servicio, con notorio quebranto para los intereses de la empresa, y que eran unos cincuenta, fueron sancionados con multas de diez pesetas, que incrementarán el fondo del plus familiar. También han perdido los haberes correspondientes a los días del plante." Solución de un conflicto laboral en Mondragón (Guipúzcoa). V.N.O.E. 3 de febrero de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-7-53.

<sup>65</sup> Tensión en los centros metalúrgicos de Barcelona. V.N.O.E., 3 de septiembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-39-53.

<sup>66</sup> "Las huelgas de la primavera de 1956 no solo habían sido las más importantes desde el final de la guerra, sino que también constituyeron, como ya hemos dicho, una muestra de las nuevas reivindicaciones, de nuevas formas de acción y de presunta organización del movimiento obrero." Tuñón de Lara, Manuel y Biescas, José Antonio (dirigida por Tuñón): España bajo la dictadura franquista (1939-1975). Tomo X. Labor, Barcelona, 1980, pág. 290.

<sup>67</sup> Concretamente en la casa Trinxet y Batlló, en Hurtado y Costés (Caldas de Montbuy) y en la fábrica SEAT. Ferri, Las huelgas contra Franco..., op. cit., pág. 223.

<sup>68</sup> Conflicto Laboral en Constructora Naval. V.N.O.E., 17 de noviembre de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-186-55.

<sup>69</sup> En el caso de Altos Hornos el conflicto estalló en el taller de laminación de chapa fina. Anteriormente la huelga en los trenos fuertes de laminación en línea había producido la elevación de las primas a la producción y los primeros obtuvieron la promesa verbal de la empresa de que dicho taller tendría idénticos beneficios. Al no producirse la ejecución de la promesa y no encontrar amparo en el jurado de empresa los trabajadores de chapa fina recurrieron a la huelga siendo despedidos un total de 99 ante su decisión de volver a trabajar a jornal con la consiguiente disminución de la producción. Conflicto laboral en Altos Hornos de Vizcaya (Sesiao) V.N.O.E., 19 de octubre 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-181-53.

<sup>70</sup> C. Malerbe, La oposición al franquismo..., op. cit., pág. 79.

<sup>71</sup> Correspondencia de Delegado Nacional de Sindicatos con Vicesecretaría General del Movimiento, 12 de enero de 1957. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, p332.

<sup>72</sup> Delegación Nacional de Sindicatos. Nota informativa sobre malestar existente entre los trabajadores de las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Barcelona y Valencia, por los recientes aumentos de la tarifas de los ferrocarriles de vía estrecha, tranvías, autobuses, trolebuses y metro. Madrid, 8 enero de 1957. Hay que tener en cuenta el grave problema de orden público que suponía la alteración del normal discurrir del sector de los transportes. Fruto de esta incidencia podemos poner como ejemplo la realmente poco complicada labor de los trabajadores de la E.M.T. en el mes de noviembre de 1953 hasta el punto de lograr el día 25 de este mes la subida del plus de carestía de vida del 25 al 35 % con tal de evitar su reclamación ante la Magistratura de Trabajo número 3 de Madrid. Solución al conflicto laboral de la empresa municipal de transportes de Madrid. V.N.O.E., noviembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 3.954, N-105-53.

<sup>73</sup> Situación de los obreros de la compañía municipal de transportes de Madrid. V.N.O.E., 7 de noviembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>74</sup> Situación tranvías de Granada. V.N.O.E., 8 de octubre 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-76-53. También Situación tranvías de Granada. V.N.O.E., 5 de noviembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-94-53.

<sup>75</sup> Compañía metropolitana de Madrid. V.N.O.E., 7 de noviembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, sin referencia.

<sup>76</sup> Marín Angulo, Francisco: Los mineros ¡acusan! ¡las huelgas!. Madrid, Sedmay, 1977, pág. 69.

<sup>77</sup> Situación de los trabajadores mineros de las empresa de Riotinto y Tharsis. V.N.O.E., 1 de junio de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-160-55.



## Capítulo 13. El sistema de previsión social.

### 13.1. Concepto, fines y características.

El tema de la previsión social se enmarca dentro de un concepto más amplio denominado política social que tiene un especial desarrollo tras la II Guerra Mundial y a la que España, con los atipismos propios del régimen que la regía, no fue inmune, tanto en cuanto constituyó un mecanismo de legitimación del franquismo que dicho Estado asumió formalmente como un factor más de cohesión de la sociedad española pese a lo cual su carta social (el Fuero del Trabajo) no se llevó a cabo nunca de forma plena y eficiente. Desde este punto de vista, los seguros sociales fueron un camino más de cara a establecer un férreo control social en el marco del nuevo Estado utilizando la taxonomía de Furniss y Tilton:

“El *Positive State*, que destaca los seguros sociales, descansa en el individualismo y en la protección de intereses corporativos, no garantiza ninguna forma de sustitución de la propiedad (*surrogate forms of property*) para todos los ciudadanos, excluye de hecho a los obreros que no tengan un trabajo fijo y utiliza la seguridad social como un medio de control social.”<sup>1</sup>

Utilizando el pensamiento de Ridruejo diremos que en el desarrollo de la política social, en líneas generales, tuvo más peso el conjunto de motivos de defensa que los de consecuencia. “Bastaría para demostrarlo el hecho de que las zonas más intensamente atendidas por los seguros sociales fueron, ante todo, las más peligrosas y de ningún modo las más necesitadas.”<sup>2</sup> A lo cual habría que añadir que algunos de los logros del régimen (seguros, montepíos, subsidios) “no habían sido mejoras económicas reales” por cuanto provenían del ahorro forzoso “que, pagado nominalmente por cuenta del obrero y del patrono, figura en la contabilidad de este último en la partida que corresponde a la mano de obra.”<sup>3</sup>

En el caso español podemos hallar los primeros antecedentes de los seguros sociales del franquismo en el seguro de accidentes de trabajo implantado en 1900 y en el retiro obrero obligatorio (1919). Pero tal y como afirma Benito del Pozo “la obligatoriedad de los seguros sociales corresponde a una etapa del desarrollo de la previsión social que se inicia con anterioridad a 1939, aunque su generalización se verifica en los años cuarenta.”<sup>4</sup> Se constituyó un aparato de previsión que pretendía romper con lo asistencial y que tuvo un desarrollo parcial e incompleto ante la ausencia de un proyecto de estructuración general que tendió a unificarse a partir de 1948. Así, para el ministro Girón, a la altura de los primeros años cincuenta, se “había conseguido sentar firmemente las bases del desarrollo, la transformación social -verdadera revolución si se contempla a la luz de la España recibida!...”<sup>5</sup>

Este planteamiento era coherente con la demagogia que se plasmaba en afirmaciones con un sentido polivalente como la que incidía en el hecho de que "España era una unidad de destino en lo universal" y que intentaba legitimar el control absoluto sobre el cuerpo y el alma del individuo. Sobre el alma, en la medida en que el régimen se sentía legitimado por una Iglesia católica que en parte importante había encontrado en el bando vencedor un valedor del catolicismo, y sobre el cuerpo, por cuanto era misión del Estado poner a cada hombre en funcionamiento dentro del engranaje de fortalecimiento de la Patria tal y como se expone en las siguientes líneas.

"Se puede especular económicamente con infinidad de cosas pero jamás con la vida o la salud del hombre; éste posee un alma, que pertenece a Dios, y un cuerpo, propiedad de la Patria, y solo un Estado como el nacional-sindicalista, profundamente católico y humano, puede garantizar o utilizar sus vidas en servicio de un destino universal, cumplimiento terrenal del destino eterno que nos impuso el Creador."<sup>6</sup>

Así, partiendo de este planteamiento no existiría un nacimiento simultáneo entre el estado social y la moderna democracia de masas dado que la intervención del Estado en la vida socioeconómica del país fue algo típico (en distinta medida) en los estados autoritarios o socialistas contemporáneos del franquismo. Partiendo de un concepto de la política social que no incluyera como único objetivo de la misma la previsión social (pensiones y seguros) habríamos de considerar que la política social también incluye la vivienda, la política sanitaria, la educación, el sistema fiscal, la reglamentación de las condiciones en el mercado de trabajo y en definitiva todo aquello que, por medio, de la acción del Estado interfiriera el "natural" desenvolvimiento de la sociedad con las consecuencias negativas que ello pudiera generar. Ello tenía por objetivo evitar la agudización de los conflictos sociales y estabilizar el régimen político salido de la guerra civil que no olvidaba el lenguaje de combate propio de una conflagración que, en palabras de Franco, fue fruto de la injusticia social "manipulada" por las distintas fuerzas políticas de la II República:

"...llevábamos muchos años contemplando cómo el motor que animaba a nuestros enemigos, el fuego que la revolución roja encendía, era el motor de la injusticia social, movido y explotado por todos los partidos. Y, mirando a la Historia, vimos cómo se había quebrado la línea y el destino de un pueblo, cuando éste perdió su fe y su espíritu de solidaridad; cuando a caballo de la masonería y del liberalismo, se introduce el capitalismo, destruyendo los gremios y hermandades, y de aquel trato social, continuación del familiar, que era entonces el trato del obrero, pasábamos al que el capitalismo entraña, con sus masas de parados; a las colas, en las puertas de las grandes

manufacturas; el comercio humano; el hombre-mercancía, que no importa ya que se desgaste ni que perezca, porque hay una masa esperando para relevarlo.”<sup>8</sup>

No se puede olvidar que el desarrollo de la previsión y del derecho en cuestiones laborales es indicativo de la tutela que el Estado pretendía extender al desamparado, al trabajador. Esto ponía de manifiesto que se partía del concepto o de la idea básica de que el obrero era un posible sujeto de explotación por parte del empresario y de la necesidad por parte del Estado de intentar legitimarse por esa vía contrarrestando las posibles expectativas de sustitución por otros regímenes.

Otros modelos estaban demostrando que la política social podía ser plenamente eficaz en la defensa de formas de gobierno dictatoriales. Desde los órganos de expresión del ministerio de Trabajo se establecían paralelismos con el régimen peronista:

“¿quién apoya el régimen argentino? Es esa masa enorme de descamisados que siguen ciegos y obedientemente, a través de una organización sindical gubernamental, que actúa con carácter casi de monopolio. Esto es la función política de la política social.”<sup>10</sup>

“La política social es la manera más evidente que la política tiene de manifestarse y de actuar.”<sup>11</sup> Esta aseveración puede ser la conclusión de la cita anteriormente expuesta. Esta sociedad nueva o mejor dicho, este nuevo estado, encontraba en la política social la forma más eficiente de defenderse así mismo y de perdurar en el tiempo.

En consecuencia, hay que hacer referencia a lo que de propagandista tenía el sistema de previsión en cuanto, como se ha dicho, materializaba una serie de medidas que pretendían estabilizar socialmente a la sociedad española y contribuir a demostrar lo que de positivo traía el franquismo a una nación como la española en la que el desarrollo del aparato de previsión destacaba por su ausencia. “En definitiva, la política de previsión social del régimen -donde los beneficiosos efectos de las prestaciones formales quedaban notoriamente disminuidos por la reducida cobertura real de las mismas- participaba de ese carácter propagandístico que impregna toda su actuación en el ámbito laboral. Por otra parte, el malestar obrero generado por la inseguridad ante la contingencia laboral es un factor nada desdeñable a la hora de clarificar la casuística conflictiva en los centros productivos,” afirma Benito del Pozo<sup>12</sup> en relación a la realidad socio-laboral de los mineros asturianos.

Este es el camino que conducía desde un determinado modelo de justicia social<sup>13</sup> hacia el efectivo control de la sociedad por medio de la política social tanto en cuanto esta hermandad no posibilitaba la liberación efectiva de las necesidades y por tanto la independencia social,

sino la constitución de un aparato cuyo objetivo era la socialización y la mediatización de la sociedad española sin por ello cumplir plenamente sus objetivos y constituyendo uno más de los sistemas de control establecidos por el franquismo.<sup>14</sup> Este era el concepto de "redención social"<sup>15</sup> del franquismo. Por ello, el ministro de Trabajo Girón tenía la idea de que la justicia social era consecuencia de la caridad.<sup>16</sup>

Este año por legitimar el régimen se plasmó en la acción exterior y paralelamente a nuestra incorporación paulatina a los organismos internacionales en la década de los cincuenta. Ello se forjó en eventos como la celebración en España del I Congreso Iberoamericano de Seguridad Social celebrado en Madrid entre el 23 de mayo y el 3 de junio de 1951. En dicho congreso el ministerio de Trabajo y sus más altas jerarquías pretendieron vender al mundo el proyecto de reforma social realizado en nuestro país por el nacional-sindicalismo. Hay que tener en cuenta que esta incorporación había supuesto que en 1950 la Agencia Laboral de Seguridad Social de Washington incluyera por primera vez en su anuario sobre legislación de seguros sociales los existentes en España.<sup>17</sup>

Dicho esto, hay que añadir que la previsión, desde una vertiente puramente individual, se caracteriza por posponer el consumo potencialmente realizable en el presente con el objetivo de poder realizar dicho consumo en un futuro próximo o lejano. Partiendo de dicho planteamiento, podemos definir la previsión social o colectiva como aquella en la que cada individuo de un colectivo determinado busca y encuentra apoyo ante el posible infortunio en la previsión de riesgos en la comunidad con los semejantes con los que conforma un colectivo. Según Alonso Olea "la seguridad social puede ser definida, en suma,...como el conjunto de medidas para la prevención y remedio de riesgos de concreción individual económicamente evaluables, consistentes en defectos de renta con que atender las necesidades usuales y habituales."<sup>18</sup>

Dentro de la previsión distinguimos, por un lado el ahorro (que representa una previsión de tipo primario) y por otro el seguro. A su vez dentro de este último podemos realizar una triple división. Así pues, podemos hablar, en primer lugar, del seguro mercantil o de prima fija. Se define éste como aquel seguro ante el infortunio, del tipo que sea, que basa su operatividad en un contrato en el que el elemento asegurador responde ante el mencionado infortunio sobre las personas o las cosas pagando unas cantidades estipuladas al asegurado a cambio de una cantidad determinada. Un segundo tipo de seguro es el mutualista. En él, por medio de contrato previamente establecido, varias personas se obligan a hacerse cargo de los perjuicios ocasionados por un suceso adverso sucedido a uno de los mutualistas haciéndose cargo solidaria y conjuntamente de la pérdida acaecida al mencionado mutualista. Y por último, los seguros sociales se distinguen de los anteriores elementos de previsión por la aparición del Estado como factor organizador e inspector, así como por su apoyo económico en muchos

casos. Inocencio Jiménez definía los seguros sociales como "los organizados por los Estados, generalmente con su apoyo económico, en favor de los trabajadores, con la finalidad de neutralizar las consecuencias económicas que a los mismos o a sus derechohabientes ha de producir la pérdida del salario por la imposibilidad de aplicar la actividad de aquéllos a trabajos remunerados, imposibilidad motivada por causas que se derivan directamente de la organización o el ejercicio de la industria agrícola, manufacturera o comercial, paro forzoso, accidentes del trabajo o por enfermedad, invalidez, vejez o muerte".<sup>19</sup>

Como se puede observar, en líneas generales, la definición de Jiménez coincide con las directrices por las que se va a lanzar Girón a lo largo de los años que pasa en el ministerio de Trabajo. A lo largo de estos años van a surgir los problemas ligados a la ausencia o la insuficiencia del aparato de previsión español en cada uno de las cuestiones que quedan planteadas en la anterior definición. De hecho, si partimos de la manifestación normativa básica a partir de la cual el franquismo afronta el tema de la "cuestión social" o del conflicto social se detecta la trascendencia que para el régimen tenía el abordar este problema y el ansia por cohesionar la nación utilizando los mecanismos de intervención social. Con ello se pretendía imposibilitar la desintegración del sistema que se pretendía institucionalizar, ante lo cual el sistema poco estructurado de seguros sociales creado o desarrollado por el primer franquismo se mostraría incapaz de lograr la mejora del nivel de vida de las familias marcadas por la desgracia.<sup>20</sup>

Así, en el Fuero del Trabajo<sup>21</sup> se afirma que la "previsión proporcionará al trabajador la seguridad de su amparo en el infortunio." A renglón seguido se manifiesta que se "incrementarán los seguros sociales de vejez, invalidez, maternidad, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, tuberculosis y paro forzoso tendiéndose a la implantación de un seguro total. De modo primordial se atenderá a dotar a los trabajadores ancianos de un retiro obrero".<sup>22</sup> No se puede obviar el hecho de que el Fuero del Trabajo no pasa de ser una mera manifestación de intenciones que no obliga a nada de hecho a los vencedores de la guerra civil y que, por tanto, se plantean de una forma absolutamente impersonal las tendencias que habrían de imperar en el ámbito de la previsión en cuanto al incremento de las prestaciones y las metas tendenciales hacia las que se había de caminar. Todo ello sin imponer límites o establecer con claridad objetivos concretos en un proyecto más pormenorizado y que tenía como meta final el seguro total. Este era el camino por el cual la España franquista pretendía incorporarse a la nueva "era social".<sup>23</sup>

Aparte de las influencias italianas plasmadas en el Fuero del Trabajo el proyecto de ordenamiento social en la España franquista de los primeros años cuarenta manifiesta una influencia clara del proyecto nacionalsocialista alemán y de la fascismo italiano.<sup>24</sup> Ello se

plasmaba en publicaciones realizadas por el I.N.P. en las que se enlazaba directamente el orden social y su aparato de previsión con los pilares básicos del nacionalsocialismo alemán: las leyes fundamentales de 12 de enero de 1934 sobre reglamentación del trabajo, de 24 de octubre del mismo año sobre creación del Frente Nacional del Trabajo y de 26 de junio de 1935 sobre el Servicio Nacional del Trabajo. En dicho texto podemos encontrar afirmaciones como la que a continuación citamos y que el ministerio de Trabajo asumía totalmente:

“Alemania, donde la ciencia del Seguro ha llegado a su desarrollo más completo, es la rectora del mundo en este orden de cosas, y sus concepciones científicas, verdaderamente geniales, constituyen hoy día las experiencias que más se ajustan a la normas del rigor científico del Seguro, pese a los sacrificios económicos que la reforma de sus Seguros Sociales le ha costado. Es en este país donde la doctrina totalitaria, en el aspecto del derecho administrativo, ha tenido la más justa interpretación.”<sup>25</sup>

Y es que, para los apologistas del franquismo, en los estados totalitarios, los seguros sociales constituían la forma de poner de manifiesto que los intereses generales de la nación estaban por encima de los partidismos y de los enfrentamientos interclasistas.<sup>26</sup> Con un criterio populista se exponía la necesidad de elevar el nivel de vida de la clase trabajadora para hacer frente a la contingencia de un posible levantamiento contra el régimen. En esta misma línea argumentativa García Oviedo ponía de manifiesto como la Alemania bismarckiana había sido la gran maestra en el desarrollo de los seguros sociales como mecanismo “para unir fuertemente a los estados alemanes” y como forma de “apretar a las masas proletarias del nuevo Estado y vincularlas con un espíritu de férrea y entusiasta adhesión al Imperio recién creado. El Imperio debía ser para estas clases amparo y providencia”<sup>27</sup> con el único objetivo de lograr la paz social.

Al menos en parte, lo que se planteaba en la España franquista era la necesidad de una política de apaciguamiento ante el temor de un estallido social que pudiera hacer tambalear los cimientos del régimen sin por ello abordar, al menos dentro del período que abarca esta tesis, una reforma estructural amplia y acorde a un plan general. “El Gobierno no debe creer que por el hecho de dar donativos puede eludir la gran responsabilidad de tratar de que el desempleo y la enfermedad sean reducidos al mínimo,”<sup>28</sup> se afirmaba en el Informe Beveridge en contradicción con esta política a veces meliflua que se abstenía de abordar la “cuestión social” desde una perspectiva más enérgica. Independientemente de otras influencias, no cabe duda de que el Estado franquista intentó copiar en parte una tendencia, existente tras la II Guerra Mundial, con el objetivo de evitar que el malestar social pudiera generar mayor presión de la existente sobre el propio sistema y su estabilidad.<sup>29</sup> “De ahí que la disciplina social espontánea y la disciplina política estén en razón inversa: a mayor solidaridad social menor compulsión política.”<sup>30</sup> Este intento de aproximarse a patrones extranjeros compatibilizándolos con las

esencias propias<sup>22</sup> no sirve, a nuestro juicio, para homologar la política social realizada desde el ministerio de Trabajo con la efectuada en el resto de Europa o en el mundo occidental.

Enmarcado en esta concepción de la previsión, Girón defiende como uno de los grandes logros de su época, de su ministerio y de su persona la creación de un aparato de previsión social amplio en un contexto de secular abandono de la protección ante el infortunio, tanto del trabajador como de su familia. En este sentido se pretendía desechar el liberalismo dado que, formalmente, "la nueva teoría totalitaria"<sup>23</sup> del Estado español pretendía plasmar en la legislación social la caridad cristiana como forma de atender a las necesidades de la familia española y no del sujeto individualmente considerado. Girón se dejaba llevar del apasionamiento político; para el antiguo ministro de Trabajo lo creado bajo su mandato era el cuerpo de la "Seguridad Social". Por el contrario, habría que decir que, sobre una política social desierta de decisiones revolucionarias los ministerios Girón pusieron los primeros cimientos de lo que posteriormente (desde 1963) paso a ser un sistema primitivo de Seguridad Social que progresivamente se iría imponiendo:

"Otro objetivo fundamental era conseguir la cobertura universal de todos los riesgos y necesidades que pudieran referirse al trabajador y a su núcleo familiar. De este objetivo nació la Seguridad Social. Nos encontrábamos con que en España, en este campo, no había absolutamente nada, con excepción del seguro de accidentes y un tímido seguro de maternidad y otro no menos tímido seguro de vejez, conocido como seguro de la perra gorda;..."<sup>24</sup>

El término seguridad social no se utilizará para referirnos al período de estudio de esta tesis y cuando se haga uso de él será para reflejar el sentido propagandístico que dicho concepto tenía para el régimen. Y ello porque la utilización de dicho término presupone la universalización de unos derechos sociales efectivos de los que carecían los españoles, por cuanto la base de su campo de aplicación seguía un criterio laboral, y por el hecho de no contar con una colaboración relevante del Estado al no existir un sistema tributario que sirviera para financiar el sistema en su conjunto.<sup>25</sup>

Pese a ello en la mente de los gestores de los instrumentos de previsión del franquismo estaba, indudablemente, la idea de la creación de un sistema de seguridad social. Como ya se ha señalado desde la concepción de los ideales del Movimiento las medidas de previsión, los seguros sociales y su lenta evolución hacia la seguridad social son el resultado de la desaparición del régimen gremial y corporativo, del avance del maquinismo y de la industrialización, proceso al que se encamina España a marchas forzadas a partir de los años 50. De igual manera, en sus proyectos latía la idea de que la lucha contra el estado de pauperización

en que se encontraba la población española en los años inmediatamente posteriores a la guerra civil requería un sistema de redistribución de la riqueza y de la renta basado en el seguro social y, formalmente, en las necesidades familiares. Para el franquismo la irrupción del individualismo generó el crecimiento de riesgos laborales y sociales ante los cuales los trabajadores y sus familias quedaban desvalidos y situados ante cualquier imprevisto en la marginalidad y la miseria. De ahí arranca un concepto de solidaridad que, siendo inicialmente privado y voluntario, pasaría a constituirse con el tiempo en público y siendo coactivamente aplicado por el Estado.

En ese marco la multitud de problemas a los que se veía sometido el trabajador eran casi infinitos. Y en esta situación, afirma Hernández Márquez,<sup>35</sup> “fue preciso darse cuenta de que la posición de necesidad y el consiguiente disgusto de los trabajadores, que constituyen la parte más numerosa de la población, es un mal que repercute sobre la colectividad y amenaza peligrosamente el bienestar, la interna seguridad, la potencia y la existencia del Estado.” Si algo queda patente en estas líneas es la idea de la necesidad del cambio hacia un sistema de previsión en función del conflicto latente o del miedo a la explicitación del conflicto enraizado “en la parte más numerosa de la población.”<sup>36</sup>

Desde esa perspectiva, hay que partir de la consideración del art. 28 del Fuero de los Españoles<sup>37</sup> en el que se aludía a la necesidad de amparo ante el infortunio y al derecho a la asistencia en determinadas situaciones como la maternidad. En el Fuero del Trabajo<sup>38</sup> también existían referencias a la necesidad de protección a la madre y a los niños, así como a la regulación de las relaciones laborales en el sentido de liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica. En ese contexto se observa la adopción de la familia como sujeto preponderante de atención del Estado, al menos desde el prisma más formal de la retórica del franco-falangismo, y el establecimiento de medidas de amparo social en las que los riesgos que se protegen son “directamente la existencia de cargas familiares, soportadas por el asegurado..., y precisamente para ayudarle a soportar estas cargas.”<sup>39</sup>

Pese a este planteamiento formal de defensa de la familia como objeto básico de la previsión social hay que considerar que el momento de tránsito de un sistema articulado por medio de seguros sociales hacia la seguridad social no se produjo antes de la promulgación de la Ley de Bases de la Seguridad Social de 28 de diciembre de 1963.<sup>40</sup> Es decir, frente a las manifestaciones retóricas que pudieran hacer referencia a la protección de la familia por medio de la seguridad social, hay que contraponer una realidad anclada en la falta de unificación de diversos seguros y en la que solo el Decreto de 29 de diciembre de 1948<sup>41</sup> supuso un leve intento de unificación de algunos de los seguros más significativos. Otra cosa bien distinta es afirmar que la “Seguridad Social... es obra de nueva planta creada por el régimen de Franco,”<sup>42</sup>



siempre que los comienzos más titubeantes se saquen del período de estudio de esta tesis y se lleven sus comienzos, en el mejor de los casos, a los años 60. Esto no es contradictorio con la idea de que el intento de perfeccionamiento del sistema de previsión social y el anhelo de armonizar la sociedad mediante los seguros sociales estaba ligado a la distribución inadecuada de los beneficios en el seno de la empresa lo cual hacía de los seguros sociales algo absolutamente necesario como mecanismo de desproletarización de las masas.<sup>42</sup>

Este concepto de justicia social tan apegado a la sobrevaloración de lo político sobre lo económico empezó a resquebrajarse a principios de los años cincuenta bien por la incompetencia del sistema, bien por la unión de este factor a las críticas realizadas desde el propio régimen. De no ser así no se entendería como desde los órganos de propaganda y expresión del ministerio de Trabajo podía afirmarse la necesidad de minusvalorar los factores ideológicos (supuesto sostén del régimen) en favor de planteamientos más rigurosamente económicos:

“De esta forma, el querer conseguir una elevación total del nivel de vida y una serie de mejoras cada vez más amplias en el terreno social -sin contar con que la economía en que la sociedad se base, aun siendo elástica, no pueda llegar a lo tirante, y mucho menos a su dislocación-, constituye un gravísimo error.”<sup>44</sup>

Pese a ello entre los padres del catolicismo social español existía la idea de que el seguro de un estado como el español (salido de la guerra civil) había de tener un cierto toque benéfico y así Severino Aznar afirmaba que “utilizar la caridad-limosna para hacer católicos, no es censurable” porque “sabida es la eficacia con que la practican hoy los párrocos de nuestros suburbios.”<sup>45</sup> Por tanto, el seguro social era fruto también de la caridad, dado que los asegurados formaban una amplia hermandad, ahora nacional, en la que se diluían los riesgos de la comunidad y el seguro era, desde este punto de vista, la materialización de un proyecto de ordenación social según los patrones católicos del Estado del 18 de julio.<sup>46</sup> Así pues, lo social no era más que el corolario indispensable al carácter oficialmente católico del régimen y un factor que venía a demostrar teóricamente la importancia de la justicia social para estructurar de nuevo a España y para sustraer a los españoles “de la influencia perniciosa de la mística tremenda del comunismo destructor y antihumano.”<sup>47</sup> Matizando más el concepto del seguro social, en la España franquista se podría afirmar que “el seguro social es una combinación de la mutualidad, del seguro mercantil y de la asistencia social”<sup>48</sup> dado que tomaba del seguro mercantil la técnica de las leyes matemáticas y estadísticas; de la asistencia social el principio por el que había de ser la comunidad la que paliara el infortunio de uno de sus miembros, lo cual justificaba la aportación del Estado (mínima en el caso del primer franquismo); y de la

mutualidad tomaba el principio de la solidaridad como mecanismo de compensación colectiva de riesgos.

En este sentido, la colectividad aparecía como garante de las exigencias elementales de la vida para cada uno de sus componentes, o mejor dicho, para cada una de sus familias. En el caso español, en el que se intenta "reconstruir una sociedad de familias," los postulados más básicos de este planteamiento obligaban a generar relaciones de solidaridad con las familias más desprotegidas. Es por tanto la colectividad la que se preocupa de reemplazar la iniciativa particular en la justa medida de la insuficiencia de esta última. Desde esta perspectiva, el ámbito de lo mutualista es reemplazado por la protección o por "la seguridad social"<sup>49</sup> en el sentido en que dicho término era entendido por el franquismo social.

Este intento de lucha contra las situaciones de miseria en las que muchas familias se encontraban se repite en otros países europeos.<sup>50</sup> Se planteó por primera vez en la Historia de Europa, considerando en un lugar secundario la beneficencia, la necesidad de luchar contra la miseria por medio de una arquitectura institucional que fuera capaz de luchar contra la interrupción o la destrucción de la capacidad de obtener ingresos. Se planteaba por tanto, la necesidad de sustituir los subsidios gratuitos y caritativo-benéficos a cargo del presupuesto público o de entidades privadas, por beneficios a cambio de una determinada cotización. Sin embargo, en el caso español es posible encontrar en los órganos de propaganda del I.N.P. afirmaciones contrarias en el sentido de que los seguros sociales constituirían "una administración perfeccionada de lo que en tiempos se llamó beneficencia"<sup>51</sup> y que ejercían a la para el I.N.P. y las mutualidades y montepíos.<sup>52</sup>

Un factor destacado para comprender la ausencia de aplicación de los seguros sociales a ciertos sectores de la población trabajadora estaba en la masa ingente de legislación existente. Ello producía la consiguiente desorientación y desorganización del aparato administrativo creado para poner en marcha los seguros sociales. La ausencia de criterios homogéneos y la existencia de varios organismos de administración e inspección incidía en el incremento de la burocracia, en el aumento de los gastos de administración y, en bastantes casos, en la duplicidad en el trabajo.<sup>53</sup> Sin embargo, el factor decisivo fue la ausencia de voluntad política para establecer un sistema fiscal capaz de soportar un sistema de previsión público.

Como ya se ha señalado, obviando por un momento la retórica grandilocuente y falangista de la que Girón hacía gala en ocasiones, la idea de "Revolución" encierra aspectos que, pueden tener un cierto carácter revolucionario, con otros que parecen más propios del desarrollo natural de las tendencias aseguradoras que muy someramente comienzan a desarrollarse en España a finales del XIX. En ello, la España de Girón tampoco estaba alejada de los planteamientos

formales defendidos en otras latitudes: "El plan propuesto aquí es, en algunos aspectos, una revolución, pero en otros campos más importantes es un desarrollo natural de lo realizado en el pasado. Es una revolución británica,"<sup>54</sup> aseveraba W. Beveridge.

Si bien en Girón predomina la apología del régimen franquista y su obra, hay que tener en cuenta que sus afirmaciones tienen parcialmente un fundamento incuestionable en la medida en que, verdaderamente hasta que Girón llega al ministerio de Trabajo, lo realizado en torno a la cuestión de la previsión social era prácticamente inapreciable.<sup>55</sup> Y también, hay un cierto rigor al establecer un paralelismo entre la política llevada a cabo en Europa desde el final de la II Guerra Mundial y la que se intentaba llevar a cabo en España. En el Reino Unido el 20 de noviembre de 1942 Sir William Beveridge entregaba el informe del Comité Interdepartamental sobre Seguro Social y Servicios Afines creado por Arthur Greenwood, en junio de 1941. Tras la II Guerra Mundial se tiene la percepción de que el mundo se encamina, en el ámbito de la previsión y de los seguros, hacia "un tiempo revolucionario en la historia del mundo...un tiempo para las revoluciones, no para poner parches."<sup>56</sup> El objetivo central de dicho informe consistía en proponer el seguro social obligatorio con la asistencia social nacional y el seguro voluntario como métodos secundarios:

"Cuenta con las asignaciones por los niños dependientes del asegurado como una parte del mismo. El plan defiende también el establecimiento de unos servicios generales de salud y rehabilitación y el mantenimiento del empleo, es decir, la evitación del desempleo de la masa, como condiciones necesarias para el éxito de la seguridad social. Estas tres medidas -las asignaciones por los hijos, los servicios de salud y rehabilitación y el mantenimiento del empleo- son descritas como los supuestos A, B y C del Plan..."<sup>57</sup>

En cierta manera, es posible establecer, o algunos autores establecen, una relación entre la tendencia a crear la seguridad social y la familia sin entrar a considerar sus resultados efectivos. Hay que partir del hecho de que la legislación social tiene como referente la evolución histórica del proceso de industrialización con características diferenciadas según los países y los tiempos en que se desarrollaron. La legislación social nace con el objetivo de limar las desigualdades entre los trabajadores y los empresarios; de hacer de esos dos sectores sociales, tradicionalmente enfrentados, una comunidad armoniosa también en el orden del desarrollo del aparato de previsión con vista al objetivo básico: producir.<sup>58</sup> Esos tres elementos van a estar presentes en la política de Girón: la protección a la familia, los seguros relacionados con la salud (enfermedad, enfermedades profesionales) y la política de empleo. Sin embargo, en cuanto a los resultados se refiere los logros efectivos quedarán lejos de los objetivos planteados.

La concentración de los trabajadores en los centros industriales con salarios insuficientes generó situaciones de pobreza, unidas a la enfermedad y las malas condiciones para el alojamiento. Ello suponía un grave daño para la familia y por tanto para la nación. No era suficiente la iniciativa individual y caritativa; tampoco eran suficientes las agrupaciones, sociedades de socorros mutuos, etc. Era necesaria la intervención del Estado para potenciar la protección social a los grupos sociales más desprotegidos y, más concretamente, a la familia como unidad social básica.

Así pues, la política social a favor de la familia suponía un trabajo a favor de la estabilidad en un régimen como el del general Franco que había logrado sobrevivir a la II Guerra Mundial, dado que dicha política constituía un trabajo a favor de la paz social. Según este planteamiento “a nadie interesa más la paz y el progreso de la nación que a la masa de modestos y trabajadores” aunque en dicho objetivo tuviera un singular papel el control social y la coerción del Estado sobre aquellos que no apoyaran incondicionalmente al mismo.<sup>59</sup> Por ello los esfuerzos formales para promover la estabilidad económica de la familia eran una contribución básica para mantener la paz interior del país.

Las realidad era que la base principal de los seguros en la época Giron respondía a un criterio profesional y no nacional o universal. De ahí que las pocas voces que se levantaban, no sin una cierta carga demagógica, dentro de la organización sindical pidieran la asunción del criterio universal para materializar la aspiración del Fuero del Trabajo de establecer un aparato de Previsión Social en España tal y como se solicitaba ya en el I Congreso Nacional de Trabajadores en el que se abogaba por la homologación de los derechos de los trabajadores independientemente de la rama profesional a la que perteneciesen.<sup>60</sup> Ello ponía de manifiesto como el gironismo estaba anclado en una concepción del estado social fundamentada en la familia como eje fundamental; pero de igual manera, constataba su incapacidad para armonizar deseos y realizaciones. Y así, conectando los deseos formales del franquismo social con la evolución salarial de los años cuarenta podemos constatar como el poder adquisitivo de las familias españolas decreció paulatinamente. Y es que como afirma Benito del Pozo, “una de las fórmulas que acompaña a los bajos salarios en los países poco industrializados es la propensión a completar la remuneración monetaria de los trabajadores con un conjunto de servicios que, con la denominación genérica de asistencia social, ofrecen las empresas: servicio médico, comedor, vivienda, economato, becas de estudio, residencias veraniegas.” Éste, si nos atenemos a lo que eran las prestaciones empresariales, podía ser el caso español aunque en lo que se refiere al aparato de previsión este tipo de elementos asistencialistas fueron dando progresivamente paso al establecimiento de unos seguros que iban a poner paulatinamente las bases del sistema de seguridad social de 1963. Pese a lo cual, para los más críticos del “gironismo” los seguros sociales no fueron más que un truculento negocio que representaba

miles de millones de pts. que vino a caracterizarse por los sistemáticos desfalcos, estafas, ocultaciones, cuando no, realizados, por los hombres de Girón.<sup>61</sup>

### **13.2. El campo de aplicación de la previsión social.**

La crítica más relevante que podía recibir el aparato de previsión creado o potenciado en el período Girón era el hecho de que el campo de aplicación tenía un sustento laboral y basado en la protección teórica a los económicamente débiles.<sup>62</sup> Dicho planteamiento dejaba de lado a gran parte de la población activa dedicada a la agricultura y la ganadería pese a lo que (ante la evidencia del fracaso) las manifestaciones públicas del ministro Girón no obviaban en sus discursos los buenos deseos que en modo alguno se habían ejecutado a lo largo de su mandato:

“...y queremos sobre todo, extender la seguridad social en toda su ambiciosa amplitud hacia la inmensidad agraria de España...Esos son los autores de una Revolución de la que todavía no han disfrutado, una Revolución cuyos frutos primeros han cedido a otros trabajadores...”<sup>63</sup>

Se nutría de un planteamiento un tanto inconsistente dado que, de forma teórica, era la población económicamente activa la que constituía el sujeto protegido de los seguros sociales “revistiendo la forma de una protección discrecional que el Estado administraba a su entero arbitrio.”<sup>64</sup> Así en el II Congreso Nacional de Trabajadores, celebrado en 1951, se insistía en la necesidad de aplicar los beneficios de los seguros sociales a los trabajadores agrícolas, tradicionalmente desamparados ante los infortunios que la previsión social pretendía cubrir.<sup>65</sup> En la misma línea se declaraba el IV Congreso Sindical Agrario de Castilla la Nueva, poniendo de manifiesto el especial perjuicio que suponía para la organización sindical el hecho de que el campo español estuviera abandonado a su suerte por el franquismo.<sup>66</sup>

Y es que se partía del hecho de que el seguro servía para cubrir los infortunios que, individualmente, el trabajador no podía superar. Se consideraba que los que podían defenderse a nivel individual contra los riesgos sociales habían de recurrir con sus rentas al seguro mercantil o a las mutualidades, tal y como hacían los profesionales liberales. En el caso de los funcionarios del Estado tenían derechos pasivos contra el riesgo de vejez y se organizaban en mutualidades para defenderse colectivamente ante posibles riesgos que no estuvieran cubiertos por este seguro. Todo ello, aunque parezca una incongruencia, tenía como consecuencia el abandono del campo español (y de otros profesionales) ante la inseguridad de dichos riesgos en abierta contradicción con los planteamientos teóricos.

En línea con la demanda de mayores competencias en el ámbito de los seguros sociales la organización sindical se oponía de forma muy enconada al Instituto Nacional de Previsión en la medida en que interpretaba que aquella institución y por consiguiente, el ministerio de Trabajo y su titular, no valoraban debidamente la tarea desarrollada por el sindicato en torno a la cuestión de la previsión social en el campo español. Entre otras cuestiones, por la supuesta desatención a que se veían sometidas las Hermandades Sindicales por parte del ministerio de Trabajo, en el sentido de ver en ellas instituciones complementarias, y no la base fundamental, para la aplicación de los seguros en el ámbito agrario. Ello convertía a estas instituciones en instrumentos del Instituto Nacional de Previsión desarrollando "directrices ajenas y distintas de las que la Delegación Nacional de Sindicatos venía proclamando..."<sup>67</sup> que era el ámbito en donde se establecían los criterios diferenciados entre la organización sindical y el ministerio del ramo en torno a la política social del régimen. Esta era una de las demandas esenciales de la organización sindical y concretamente de su mayor abanderado, el Delegado Nacional de Sindicatos, José Solís Ruiz:

"Me preocupa la marcha de nuestras cámaras y hermandades...En el campo está más de media España y la organización sindical agraria tiene una extraordinaria fuerza que hemos de conseguir se duplique en este año".<sup>68</sup>

Por ello se demandaba que a nivel provincial los órganos rectores del seguro social agrícola fueran las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias (C.O.S.A.) en las que a su vez estaban encuadradas las correspondientes hermandades porque de lo contrario, a los ojos del sindicato, el agricultor estaría doblemente encuadrado. Y es que, aparte de consideraciones puramente técnicas o administrativas, la deficiente aplicación a los agricultores de los seguros era un factor de desprestigio y de deslegitimación de la organización sindical en un campo español que, teóricamente, había de ser el baluarte más sólido de los valores tradicionales que habían de sustentar la "reforma" que el Nuevo Estado pretendía realizar tras la guerra civil. Precisamente ese campo básico de proselitismo era el más abandonado por el ministerio de Trabajo con las consecuencias ya mencionadas palpables en las apreciaciones de algunas delegaciones provinciales de sindicatos.<sup>69</sup>

Igual contradicción se observaba en la aplicación de los seguros sociales a los socios-trabajadores de las cooperativas. Hasta tal punto llegaba la sinrazón de las disposiciones del ministerio de Trabajo que la Orden de 10 de enero de 1948 disponía que sólo recibiesen prestaciones sociales los socios de las cooperativas en las que únicamente éstos tuviesen la categoría de socios-trabajadores de la misma. En dicha situación aquellas cooperativas en las que se admitía eventualmente a un trabajador no socio inmediatamente desposeía al resto de los socios-trabajadores de las prestaciones de los seguros sociales.<sup>70</sup>

Otro de los sectores de trabajadores (en este caso fundamentalmente trabajadoras) no atendidos por los seguros sociales fue el de las empleadas domésticas.<sup>71</sup> En parte, dicho abandono se debía al enfoque típicamente paternalista de la política social del régimen franquista. Se partía del hecho de que, dado que en las familias de corte más patriarcal el personal del servicio doméstico era considerado como una prolongación de la familia, dichas trabajadoras eran atendidas por la propia familia ante los infortunios que pudieran sufrir. Evidentemente existían otros motivos que el ministerio no afrontó de forma solvente de cara a incluir a dichas trabajadoras en el marco de la previsión social. Por un lado, se presentaban dificultades evidentes de inspección; una parte importante de estas trabajadoras eran mujeres que podían abandonar dicho trabajo al casarse con lo cual su período de cotización podía no ser suficiente para adquirir derechos a las prestaciones económicas posibles sobre todo en seguros como los de vejez, invalidez y muerte; y por otro lado, parte de su retribución se recibía en especie y, en consecuencia la recaudación de cuotas planteaba dificultades. Así pues al establecerse el subsidio de vejez en 1940 se dejó fuera de su campo de aplicación a las domésticas.

En lo referente al seguro de maternidad se consideraba que las domésticas casadas eran poco frecuentes y que en cuanto a las solteras, dicha protección era inútil;<sup>72</sup> en el seguro de accidentes del trabajo<sup>73</sup> y en el régimen obligatorio del subsidio familiar estas trabajadoras también fueron excluidas por la vía de los hechos en la mayoría de las ocasiones. En el caso del seguro de enfermedad la situación continuó siendo casi idéntica, puesto que lo único que prescribía la ley en su origen era que la afiliación de dichas trabajadoras corría a cargo del cabeza de familia. Pese a lo dicho, existía evidentemente una mayor dificultad que en otros sectores laborales para el establecimiento de un régimen especial por la dificultad de determinar los sujetos que habían de contribuir con su cuota al fondo de dicho régimen, por la dificultad para fijar la cuantía de las cuotas, dado el peculiar sistema de remuneración, y por la dificultad, por tanto, para señalar las futuras pensiones a recibir.<sup>74</sup>

Pese a ello el resultado era que "...el servicio doméstico, no sólo estaba excluido de todas las leyes corrientes de protección obrera, sino que estaba excluido de todos los seguros y subsidios sociales, con excepción del de enfermedad"<sup>75</sup> y del subsidio familiar en el régimen agropecuario a partir de 1943. Resumiendo, se puede afirmar que en 1959 no se habían cumplido los preceptos de la ley de 19 de julio de 1944 que disponía la extensión de los seguros sociales obligatorios a este grupo de trabajadores, dado que fueron excluidos por pura conveniencia. En cierta medida, la propia organización sindical influyó en el sentido de que no fuera posible el establecimiento de un sistema homologable al existente en los regímenes especiales (naranja, cáñamo, resina, etc.) con el fin de propiciar el desarrollo de los seguros para los domésticos por el temor un tanto insostenible a que dicho principio estableciera una especie de asociación

profesional que quedara parcialmente fuera de la organización sindical contradiciendo así la ley de unidad sindical.<sup>76</sup>

A estas dificultades para la aplicación de los seguros a ciertos sectores de la población se añadía el aparato burocrático y administrativo que retardaba la aplicación de las leyes sociales ya de por sí enrevesadas como pone de manifiesto este testimonio:

“Se hacen prácticamente inútiles las medidas de Seguridad Social, pues si en definitiva se le dan, al menos entre nosotros, lo cierto es que, necesariamente y por virtud del sistema legislativo y administrativo, de forma tan lenta y dilatada, que a veces resultan estériles, sobre todo en lo que a enfermedad se refiere...

...por no tener un seguro social o una ley protectora del trabajo si junto a ella no contábamos con un procedimiento rápido, sencillo y eficaz -concepto que no excluye su tecnicismo- que diera vida, realidad y solución veritable a sus preceptos, sin el cual aquéllos serían letra muerta, en unos casos, o escarnio imperdonable en otros.”<sup>77</sup>

Probablemente, en el campo de los logros sociales habría que establecer un balance más negativo que positivo si, utilizando los argumentos del propio Girón, “la enumeración de los objetivos logrados, tiene exclusivamente la significación de un parte de guerra.”<sup>78</sup>

Otra de las cuestiones que invalidaba el modelo de los seguros sociales creados hasta el año 1957 era el hecho de que los trabajadores por cuenta propia<sup>79</sup> que estaban encuadrados, y que constituían una respetable cifra, no eran beneficiarios de los seguros sociales que disfrutaban los trabajadores por cuenta ajena. Ciertamente la ausencia de cotización era el motivo inmediato que imposibilitaba dichos beneficios, pero es que ello era debido a la falta de voluntad política para crear una organización que recaudase, encauzase y representase a quienes voluntariamente desearan adscribirse<sup>80</sup> para que estos fueran partícipes, cuando menos, de algunos seguros entre los sectores del pequeño comercio o los industriales sin personal asalariado. Y es que, en gran medida, podían ser asimilables en cuanto a nivel de vida y renta a los trabajadores a los que el Estado intentaba imponer la cotización para dichos sistemas. Las nulas prestaciones que recibía el trabajador por cuenta ajena, sobre todo cuando realizaba esta labor en el propio hogar, le excluían de los beneficios que reportaban los seguros sociales. Sólo a partir de los años cincuenta comenzó una cierta sensibilización en favor de los trabajadores de dicho sector de la economía española. Para romper esta tendencia la reglamentación del calzado estableció las llamadas cajas de compensación con el objetivo de conceder a dichos trabajadores unas prestaciones homologables a las de los seguros sociales. Pese a ello fue el propio sindicato el que más hizo porque dicho proyecto no saliera adelante puesto que los gastos de tales cajas habrían de correr por cuenta de la organización sindical.<sup>81</sup>



En otro orden de cosas al I.N.P. se le planteaba un grave problema, en este caso de prestigio, ante la realidad, a todas luces evidente, de que el considerable número de trabajadores que desarrollaban su actividad en el Protectorado español de Marruecos no gozaban de los beneficios de los que en el orden social disfrutaban los “trabajadores” en España. El único deseo de las autoridades del I.N.P. con respecto a éstas carencias era que el Jalifa promulgara un Dahir que obligara a las empresas a pagar por los españoles (sólo por los trabajadores españoles) un determinado tanto por ciento en el que se comprendieran todos los seguros sociales. Solamente el posible “dumping social” de los trabajadores no españoles privaba a las autoridades del ministerio de Trabajo de materializar dicho proyecto a la altura de 1946.<sup>82</sup>

### **13.3. El sistema de financiación en los seguros sociales.**

Al hacer referencia al tema de la financiación del sistema de previsión español del primer franquismo estableceremos previamente una distinción más elemental en torno a esta cuestión. Existen dos sistemas básicos para establecer el régimen económico de los seguros a los que haremos alusión: el sistema de reparto y el sistema de capitalización.<sup>83</sup>

En el primero de los casos, para la prestación de los servicios correspondientes únicamente hay que calcular el coste de las prestaciones, los gastos de administración y las reservas técnicas estipuladas y distribuir el resultado final entre los asegurados obteniendo así la prima que anualmente tienen que satisfacer. En el caso del sistema de capitalización es necesario calcular el valor actual de las prestaciones en curso y aquellas que están en período de constitución.

La ventaja del sistema de reparto en aquel momento de expansión de los seguros sociales partía de la idea de la obligatoriedad de los seguros y de la imposibilidad, por parte del órgano gestor, de seleccionar a los asegurados (o diferenciar su cotización como podía ocurrir en el seguro privado). Sin embargo, su máximo bondad radicaba en el hecho de que se centraba, no tanto en prestaciones muy diferidas en el tiempo, sino en prestaciones concedidas a corto plazo.<sup>84</sup>

La combinación de ambos sistemas fue la tónica del período 1941-57. Sin embargo, ya a finales de los años cuarenta desde el propio I.N.P. se veía un mal futuro para un sistema de previsión que se decantaba paulatinamente por el procedimiento de reparto dadas las dificultades crecientes para acometer los pagos por parte del mencionado instituto o por los problemas que se preveían en un futuro en el que el sistema de reparto presidiera seguros de renta diferida como el de vejez,<sup>85</sup> con el consiguiente desajuste financiero.<sup>86</sup> Hasta principios de los años cincuenta el sistema predominante fue el de reparto. Ese fue el caso de los subsidios familiares,

del seguro de vejez y del seguro de enfermedad. Funcionó en régimen de capitalización el seguro de accidentes del trabajo.<sup>87</sup>

La cotización de los regímenes obligatorios del seguro de vejez e invalidez, subsidio familiar, enfermedad y paro de aquellos trabajadores se llevaba a cabo por medio de una cuota única, calculada sobre las retribuciones percibidas por los mencionados trabajadores en función de lo estipulado por los Decretos de 29 de diciembre de 1948<sup>88</sup> y 17 de junio de 1949.<sup>89</sup> Dicha cotización se establecía sobre un concepto de salario que incluía formalmente entre las retribuciones sometidas a cotización las horas extraordinarias y el plus de carestía de vida. Previamente el Decreto de 1 de marzo de 1948 había pretendido establecer un instrumento unificador en torno al concepto de salario base para la liquidación de las cuotas de los seguros sociales con la incongruencia de establecer un amplio campo de aplicación en el artículo 1º, siendo modificado éste por el 2º, 3º y 4º, haciendo así “la excepción de la excepción.”<sup>90</sup> El cúmulo de desatinos se prolongó a partir de mayo de 1950 poniendo de manifiesto la realidad innegable de que el salario a efectos de cotización era regulado por disposiciones contradictorias y, cuando no, dispares. Así los pluses de carestía de vida inicialmente establecidos en 1950 podían no cotizar a efectos de seguros sociales con la aprobación del ministerio de Trabajo. A partir de mayo de 1950 el mencionado ministerio declaró exentos de cotización la totalidad de los pluses que iba regulando.<sup>91</sup>

En torno a esta cuestión hay que tener siempre en cuenta el problema de la sistemática pérdida de valor de la moneda en función de la incidencia del proceso inflacionario, lo cual hacía que las cifras barajadas en muchos momentos fuesen insuficientes para planificar una política adecuada de bienestar en la medida en que dichas macrocifras perdían su valor por la depreciación de la moneda.<sup>92</sup>

Hay que decir que hasta el año 1956 la participación del Estado en la financiación de los seguros sociales se llevó a cabo por medio de subvenciones fijas, “cuyo valor real se fue deteriorando con la inflación.”<sup>93</sup> Según uno de los jefes de sección del I.N.P. “el día 23 de marzo de 1956 ha de quedar como fecha trascendental en el curso de la legislación española sobre Seguros Sociales”<sup>94</sup> no tanto, por la elevación de salarios acordada por el Consejo de ministros de esa fecha sino por el cambio operado en orden al aparato de previsión a partir del método indirecto que se procuró utilizar para evitar la repercusión que pudieran tener en los precios dicho aparato de previsión. Para algunos fue el final del desfase de la política social española.<sup>95</sup> A partir de esta fecha (aunque por un corto período de tiempo) el Estado asumió el papel de financiador del aparato de seguros sociales intentando hacer de esta cuestión un problema de política fiscal por lo que se refiere a los ingresos necesarios para cubrir las necesidades de los mismos. El objetivo inicial consistía en no recargar las contribuciones de los

trabajadores y las empresas para dichos seguros. En cierta medida, ello pretendía romper una lanza a favor de aquellos sectores no industriales que, fruto de su actividad laboral, no gozaban de sus beneficios tanto en cuanto un marco de financiación nacional parecía legitimar su derecho a gozar de dichas prestaciones sociales. Sobre esta cuestión Perpiñá recalca la ruptura con una etapa anterior de desentendimiento absoluto del Estado en torno al tema de los seguros sociales:

“En los orígenes no faltó, sin duda alguna aportación del Estado; pero de un lado, era a título de subvención, es decir, como auxilio o ayuda a algo que se entendía que quedaba fuera del patrimonio del estado mismo y de sus obligaciones normales...Y, de otro lado, tal subvención era proporcionalmente tan exigua que tenía un valor puramente simbólico. Más estos simbolismos unas veces denuncian la intención de hacer efectivo en su momento con todas las energías posibles el apoyo a una empresa...; pero otras veces, en cambio, expresan un deseo de desentenderse de lo mismo a que formalmente apoyan... En nuestro caso, el simbolismo debía entenderse más bien en el segundo sentido. Pero ahora todo ha cambiado: la aportación estatal ha venido a hacerse substancial, sustituyendo en muy buena parte la añeja contribución patronal, y a la vez se declara solemnemente el propósito de defender la Previsión desde el Estado con todas sus fuerzas. El Decreto ley de 23 de marzo obliga incondicionalmente a la Hacienda a mantener la prestaciones sociales en vigor.”<sup>96</sup>

En todo ello había, en parte, un deseo de evitar que el ministerio de Trabajo, actuara de forma independiente y de que la cuestión de la previsión social (incluyendo al I.N.P. e instituciones como los montepíos y mutualidades laborales) recibiera un tratamiento integral sometido a las necesidades de la economía nacional y de los anhelos de planificación según más novedosos criterios que acabarían por imponerse a partir de la remodelación ministerial de febrero de 1957. Hasta tal punto esto era así que para algunos (de forma un tanto exagerada) representaba el “New Deal”<sup>97</sup> de la economía española.

El resultado de este intento de participación del Estado en la financiación de los seguros sociales supuso un crédito extraordinario de 1.125.000.000 de pts. Siguiendo a Clavera<sup>98</sup> los objetivos del decreto de marzo de 1956 eran básicamente dos: por un lado, elevar las rentas salariales en términos reales y por otro aumentar la aportación del Estado a los seguros. Sin embargo, este plan dura tan sólo unos pocos meses. Y por lo que se refiere al segundo de los objetivos, el establecimiento por el Decreto de 26 de octubre de 1956<sup>99</sup> del sistema antiguo puso de manifiesto el fracaso de esta política<sup>100</sup> situando de nuevo la aportación del Estado español al sistema de previsión a la cola de los europeos básicamente por la ausencia de una eficiente y equilibrada política fiscal. De forma paralela a esta alteración breve de la

financiación de los seguros se producía una desvalorización monetaria muy aguda de los fondos de reservas de los seguros, de las mismas cuotas, etc. Ello obedecía, al menos en parte, a la incidencia de una escala móvil en los salarios que podía elevarse en función de los criterios del ministerio de Trabajo, a la imposibilidad de mantener los salarios reales sin controlar la evolución de los precios y, en definitiva, sin tener voluntad para establecer una limitación efectiva de las rentas de los no asalariados.

Según Benito del Pozo<sup>101</sup> el que el concepto de salario fuera variable perjudicaba notablemente a los trabajadores en la medida en que no había relación de las tablas de salarios de las reglamentaciones con el concepto de salario a efectos de cotización para las cuotas de los seguros sociales.

Partiendo de la legislación mencionada se consideraba salario base<sup>102</sup> la total remuneración que en forma de salario o haberes percibía el trabajador por los servicios que prestaba por cuenta y bajo dependencia ajena, en dinero, en especie o en cualquier otra forma, dándose igualmente la consideración a efectos legales de salario a la indemnización legal o prestación económica que el trabajador recibía por incapacidad consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad y la que por iguales causas recibiese en virtud de lo dispuesto en las reglamentaciones de trabajo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los pluses de carestía de vida, cifrados aproximadamente en un 25 % y concedidos a gran parte de los sectores laborales a partir de los años cincuenta no gravaban la economía de la empresa en la medida en que dichas cantidades estaban exentas de cotización por seguros sociales y montepíos laborales<sup>103</sup> no revirtiendo posteriormente en beneficio de los trabajadores. De igual manera se observa que la definición de retribución<sup>104</sup> excluía las pagas extraordinarias de cotización pese a su equiparación real con el salario, por lo cual las prestaciones económicas periódicas de los seguros sociales no daban derecho a la paga extraordinaria proporcional y, por tanto, se establecía un desequilibrio entre la cotización y las prestaciones que los trabajadores percibían. Todo ello sin considerar las circunstancias que podían hacer que dichas prestaciones se cobraran con retrasos significativos.<sup>105</sup> En definitiva, el sistema (teóricamente y de hecho) favorecía claramente a la empresa al minimizar sus cotizaciones e incrementar paralelamente sus beneficios.<sup>106</sup>

Así, el decreto de diciembre de 1948 aplicaba el mismo concepto de salario para las cuotas o primas, en el caso de las empresas, incluso para el S.O.E. y el seguro de accidentes del trabajo. El decreto de 1949 completaba y modificaba el anterior al eliminar algunos ingresos y al establecer límites a determinadas retribuciones complementarias e incluía en el seguro de accidentes del trabajo todos los ingresos del trabajador

La tendencia a la unificación técnica de la cotización en los seguros se rompió con el Decreto de 5 de junio de 1953 que establecía un criterio diferencial en cuanto al salario base a efectos de cotización en el seguro de accidentes y en el de enfermedades profesionales. Posteriormente el Decreto de 22 de junio de 1956 confirmaba el establecimiento de un criterio singular en el caso de estos dos seguros independientemente de los criterios aplicados a otros.

Estas restricciones que perjudicaban las rentas diferidas que recibían los trabajadores se plasmaban igualmente a la hora de considerar el concepto de participación en los beneficios.<sup>107</sup> El concepto mencionado, establecido en las reglamentaciones del trabajo se exceptuaba del cómputo a la hora de determinar los salarios a efectos de cotización sin considerar que dichas percepciones estaban teóricamente generalizadas y reglamentadas por el ministerio de Trabajo. Por otro lado, las horas extraordinarias tampoco eran consideradas en su totalidad en el salario base a efectos de cotización con la consiguiente discriminación ante la débil capacidad de los salarios en términos reales y ante la influencia de la inflación sobre los mismos.

Y es que el Decreto del 17 de junio de 1949 consideraba como parte del salario base las horas extras mientras no superaran el 15 % del salario contractual lo cual venía a recortar las prestaciones de los seguros sociales de forma especialmente acentuada, no comulgando dicho principio con la idea de la "cristiana redistribución de la riqueza"<sup>108</sup> que suponía la desconexión entre la cotización abonada y la prestación a recibir.

Las cuotas ya unificadas de los regímenes de los seguros sociales de paro, subsidios familiares, enfermedad, vejez e invalidez eran satisfechas mensualmente por las entidades y empresas durante el mes siguiente al que correspondiesen las cuotas, recargándose éstas con un 20 % en el caso de ser liquidadas fuera del plazo estipulado por el Instituto Nacional de Previsión, en quien recaía la responsabilidad del sistema de seguros.<sup>109</sup>

A finales de 1955 (Decreto de 9 de diciembre de 1955)<sup>110</sup> y entrando en vigor desde el 1 de febrero de 1956, se estableció la nueva cuota global de cotización para seguros sociales, habiéndose desarrollado antes la unificación de afiliación y cotización de los seguros de enfermedad, familiar, vejez e invalidez y paro tecnológico. Como se ha mencionado, la administración de dichos seguros corría a cargo del I.N.P. Se recogía con ello la experiencia de la unificación de los seguros comenzada en 1949 con la capacidad inherente para el I.N.P. de establecer comunicación de fondos entre los distintos seguros sociales mediante la aplicación de los excedentes de unos con destino a saldar los déficits de otros. En dicha cuota se incluía la destinada a formación profesional y a la organización sindical.

Las cotizaciones establecidas hasta el año 1956 se realizaban según los siguientes baremos, salvo en lo referente a los regímenes especiales de pescadores, naranja, cáñamo, resina y aprovechamientos forestales madereros:

a) Empresas y entidades de régimen general:

- por los trabajadores que percibiesen ingresos hasta 30.000 pts. anuales el 24,85 % (19,15 % la empresa y 5,7 % el trabajador)
- por los trabajadores que percibiesen más de 30.000 pts. anuales el 8,85 % (7,15 % la empresa y 1,7 % el trabajador)

b) Empresas de régimen general:

- por los trabajadores a domicilio con ingresos hasta 30.000 pts. anuales el 14,85 % (12,15 % la empresa y 2,7 % el trabajador)

c) Patronos de la rama especial agropecuaria el 11,5 % (8,3% la empresa y 3,2 % el trabajador). En las provincias de Navarra el 24% % por el personal fijo (18,8 % la empresa y 5,7 % el trabajador ) y 13 % por el personal eventual (10,5 % la empresa y 2,5 % el trabajador)

d) Entidades estatales y de administración local:

- por el personal no funcionario cuyos ingresos no excediesen de 30.000 pts. anuales el 18,35 % ( 14,15 % la empresa y 4,2 % el trabajador).
- por retribuciones superiores a 30.000 pts, anuales, el 2,35 % (2,15 % la empresa y 0,2 el trabajador).

e) Organismos oficiales que no persiguen fin de empresa de índole económico:

- por el personal con ingresos hasta 30.000 pts. anuales el 23,35 % (17,65 % la empresa y 5,7 % el trabajador).
- por el que exceda de 30.000 pts. anuales, el 7,35 % (5,65 % la empresa y 1,7 % el trabajador).

La pauta a seguir por el sistema de previsión español pretendía aproximarse al modelo inglés. El modelo de financiación que proponía el Plan Beveridge partía de la premisa de que la prestación tipo fuera la correspondiente a un hombre y a su mujer, siendo aquélla reducida en el caso de que el hombre no estuviese casado o la mujer realizase un trabajo remunerado al igual que el marido. "Considera que el hombre paga sus cotizaciones por sí mismo y su mujer, como por una pareja en la cual cada uno de sus miembros es esencial por igual, y da la prestación para ambos. Hace frente a los costos de las diversas prestaciones requeridas por la categoría especial de las amas de casa, en parte mediante las cotizaciones hechas por sus maridos, y en parte mediante las cotizaciones hechas por los hombres y las mujeres antes y después del

matrimonio,<sup>111</sup> se afirma en el informe Beveridge. La razón para dar a las mujeres tipos de prestaciones inferiores a los hombres respondía al deseo de evitar imponer a las mujeres unas cotizaciones excesivas para sus salarios, inferiores a los de los hombres para situaciones laborales análogas. Y es que la comunidad había de tener en cuenta las distintas formas de vida de los diferentes sectores que conformaban la sociedad, entre ellos de “los que prestan servicios gratuitos vitales”<sup>112</sup> como las amas de casa. Desde este punto de vista, las mujeres casadas habían de ser “consideradas como empleadas en un trabajo que es vital, aunque no esté pagado, sin el cual sus maridos no podrían realizar su trabajo remunerado y sin el cual la nación no podría continuar.”<sup>113</sup> Las mujeres británicas adquirirían, según estos presupuestos, un estatus social y económico nuevo, con derechos y riesgos que eran distintos de los que tenían en su vida como solteras. Con el matrimonio la mujer ganaba derecho legal al mantenimiento por parte del cabeza de familia; de igual manera “se ve expuesta a nuevos riesgos, incluido el riesgo de que su vida matrimonial acabe prematuramente por viudedad o separación.”<sup>114</sup> Se establecía un nuevo marco de posibilidades ante el infortunio o ante lo inesperado en el que se incluían hechos como el matrimonio, la maternidad, la interrupción de los ingresos del marido por desempleo, incapacidad o retiro, viudedad, separación (y por tanto el final del mantenimiento por parte del marido debido a separación legal), o la incapacidad para las tareas del hogar. Y por tanto “toda mujer, cuando se casa, se convierte en una nueva persona que adquiere nuevos derechos y que no aporta al matrimonio derechos a las prestaciones de desempleo o de incapacidad con relación a las cotizaciones realizadas antes de casarse...todas las mujeres casadas seguirán adquiriendo también durante el matrimonio derecho a las pensiones en la vejez mediante las cotizaciones realizadas por sus maridos. Las mujeres no debían depender de la asistencia pública en caso de pérdida de su sustento como ama de casa, si esta situación se había producido sin su consentimiento. Algunos de los nuevos derechos, como el de compartir la prestación debida al desempleo del marido o a su incapacidad, se aplican sólo a las mujeres casadas que no están trabajando remuneradamente. Algunos, como la prestación de maternidad a añadir al subsidio de maternidad, se aplican a las mujeres casadas que están trabajando remuneradamente.”<sup>115</sup> Así pues, se daba la posibilidad a las amas de casa y trabajadoras asalariadas (por cuenta ajena o autónomas) de pagar las cotizaciones íntegras obteniendo prestaciones por desempleo o incapacidad a tipos reducidos o bien pedir la exención de sus cotizaciones obteniendo sólo la prestación por maternidad. En este último caso, el empresario que la contratara sí estaba obligado a pagar las cotizaciones correspondientes.

Este último aspecto (el de las prestaciones a tipo reducido) permite establecer un cierto paralelismo entre la política franquista y el Plan Beveridge. El hecho de que estas prestaciones fueran de un tipo inferior obedecía a que, al igual que en el caso español, la unidad considerada era la familia. Por tanto, se juzgaba que las necesidades de las mujeres casadas eran, en general, menores que las de las mujeres solteras cuando se encontraban desempleadas o incapacitadas,

porque su casa estaba atendida por los ingresos del marido o por las prestaciones del mismo en situación de paro o de incapacidad temporal. Por eso la propuesta de prestaciones para las mujeres trabajadoras establecía que éstas habían de tener una prestación por desempleo e incapacidad consistente en dos tercios de la que percibiera el marido; y que, en cambio, la prestación por maternidad fuera un 50 % superior de la prestación normal del marido en las situaciones previamente descritas.

Pese a ello el modelo británico difiere en numerosos aspectos del español, más dependiente de una tradición católica y de sus valores que eran incorporados a la legislación del primer franquismo. La carta magna de la seguridad social británica, al contrario que la legislación social española, en la que se establecían mecanismos punitivos ante las situaciones "matrimoniales" irregulares, establecía que un hombre casado que estuviese conviviendo con una mujer (a semejanza de la esposa) que no trabajase remuneradamente debía poder obtener durante las épocas de paro o incapacidad una asignación por este miembro dependiente de él. De igual manera, la prestación por maternidad y el subsidio de maternidad debían ser, según el Plan Beveridge, concedidos por el interés del niño independientemente de la relación marital de los padres. No ocurriría lo mismo en la caso de la prestación por viudedad o tutela, sólo pagada a la esposa legal del fallecido; o en el caso de las pensiones de retiro, que no deberían pagarse con cargo a las cotizaciones que no fueran las propias de la mujer, excepto a la esposa legal del trabajador jubilado. Así pues se proponía lo siguiente:

"Si una persona soltera, con derecho a las prestaciones por desempleo, incapacidad o aprendizaje tiene, viviendo con ella, a una persona que haya pasado la edad de las asignaciones por la infancia, que no esté trabajando remuneradamente y que dependa de ella, se añadirá a la prestación correspondiente una asignación que estará sujeta a unas disposiciones que pueden requerir el registro previo del dependiente y que definirán la dependencia."<sup>116</sup>

Pese a que para las autoridades del I.N.P. la salud financiera de la institución, y por tanto, de los seguros sociales, era la tónica, la realidad era que atravesaba por problemas de financiación y de administración.<sup>117</sup> Hasta tal punto llegaba el descontrol y la ausencia de conocimiento sobre las finanzas del instituto que la revisión de los balances del año 1944 y 1945 se llevó a cabo en 1951. En este mismo año el Consejo del I.N.P. ponía de manifiesto los elevados saldos a favor de los diversos seguros, lo cual venía a perjudicar notablemente la robustez financiera de la institución dado que retrasaba las inversiones. En el año 1949 el saldo a favor de los seguros ascendía únicamente a 78 millones de pts. En la Tesorería la cifra existente era de 287 millones de pts., lo cual venía a indicar que en principio se habían destinado 67 millones previa disposición del organismo al que nos referimos.<sup>118</sup>



Para el año 1952 los resultados de los diversos seguros del I.N.P. eran los que refleja el cuadro siguiente :

seguros	excedentes	déficit
seguros libres	1.857.419,26	---
seguros de amortización préstamos	147.876,22	---
seguros de accidentes	7.571.045,77	---
de vejez e invalidez	---	246.306.834,06
subsídios familiares	226.062.355,85	---
seguros de enfermedad	---	78.741.524,07
SUMA	235.638.697,10	325.048.358,13

*\*Cuadro n° 78. Déficits y superávits de los seguros a cargo del I.N.P. en 1952.<sup>119</sup>*

El resultado final era bien indicativo de que era el seguro de vejez (el ansia de la población trabajadora por garantizarse una ancianidad con un nivel de vida mínimo) y el seguro de enfermedad los que originaban los déficits sistemáticos en la tesorería del I.N.P. En sentido contrario, el superávit de los subsidios familiares es la prueba palpable que explica su perduración en el tiempo a pesar de haber perdido su vigencia de cara a ser la materialización del salario familiar tal y como se formuló tras su puesta en marcha en el año 1938.

Seguros	excedentes	déficit
seguro de vejez e invalidez	4.365.619,87	---
subsídios familiares	94.508.302,47	---
seguros de enfermedad	---	33.049.549,25
sumas	98.873.922,34	33.049.549,25

*\*Cuadro n° 79. Operaciones de ejercicios anteriores a 1952.*

Los presupuestos del año 1955 del I.N.P. reflejaban el poco interés o la poca capacidad del Estado para incrementar la solvencia del Instituto Nacional de Previsión como ejecutor de una política formalmente revolucionaria que, desde este punto de vista, resultaba la coartada más explícita y justificadora que venía a explicar la perpetuación del régimen en la forma y manera que hasta el momento lo había caracterizado. Las subvenciones del Estado, cifra significativa de lo previamente expuesto, ascendían a 36.913.799,30 pts. (36.899.367,34 en 1954). Ello valorando el crecimiento de la inflación y la depreciación de la moneda ponía de manifiesto la

nula voluntad política de incurrir en gastos en beneficio de la política social que se defendía como la panacea de lo realizado en toda Europa y cuando no en el mundo entero.

De igual manera se ponía de manifiesto que, en lo referente a ingresos la salud financiera del I.N.P. seguía dependiendo absolutamente del inoperante subsidio familiar (2.703.440.624,5 pts.). Es cierto que los ingresos del seguro de enfermedad (3.152.410.000 pts.) eran muy superiores pero la realidad es que este seguro junto al de vejez, cuyos ingresos previsibles ascendían a 1.316.621.688 pts. resultaban sistemáticamente deficitarios.<sup>120</sup>

### **13.4. El aparato de previsión y su incidencia en la empresa.**

Otra de las críticas que se cebaron sobre el modesto sistema de seguros sociales durante el período Girón fue la supuesta incidencia negativa que tenía sobre el crecimiento económico real del país. Para algunos autores como París Eguilaz, partiendo de la aceptación de que la participación de los asalariados en la renta nacional había disminuido, al menos hasta el comienzo de la década de los cincuenta, los seguros sociales incidían negativamente en el nivel de renta de los mismos dado que eran "los propios asegurados los que prácticamente hacían frente a la casi totalidad del pago de las prestaciones y de sus gastos de administración" sin que ello afectara al nivel de beneficios del empresariado o a la participación del Estado.<sup>121</sup> Dicha polémica surgiría con cierta claridad a partir de la remodelación ministerial de 1951 incluso a las páginas de los órganos de expresión y propaganda del ministerio de Trabajo como la Revista de Trabajo.<sup>122</sup> Se ponía así de manifiesto que para algunos sectores del franquismo la política social española estaba presidida por la arbitrariedad y la toma de decisiones demagógicas desprovistas de las reflexiones necesarias sobre su incidencia en los precios y en la evolución de los salarios. Este refreno al desarrollo de la política social se plasmó de forma más evidente en la ausencia de un seguro de paro de carácter general que presidiera el desarrollo de todo el sistema de previsión, dado que se partía del hecho de que no era positivo un "excesivo" esfuerzo de los individuos y menos de las empresas a favor del sistema de previsión puesto que ello iría en contra de la producción y de la eficacia; y en este sentido desde el I.N.P. y desde el ministerio de Trabajo se defendía esta postura:

"En modo alguno se debe pedir a los individuos más privaciones de lo necesario para constituir fondos de previsión, porque ello sería la mayor de las imprevisiones. Tampoco se pueden pedir excesivas cargas a las empresas y entidades productoras, ya que se dificultaría su desarrollo y su propio existir. Pero a la mayoría se les puede pedir que mejoren el rendimiento de sus actividades, que aprovechen metódicamente el tiempo y los esfuerzos laborales...

...Si el obrero administra debidamente la energía de las máquinas que maneja y la de su propia máquina humana se tendrá un aumento de potencial con el que se podrá pagar gran parte de las instituciones de previsión si el productor...aprovecha convenientemente los tiempos de su labor, pueden tenerse aumentos considerables de producción y de eficacia; si el esfuerzo inteligente y tecnificado de todos los que tienen confiada una tarea consigue un mayor rendimiento de los elementos que están a su alcance, se tendrán importantes reducciones en el coste de los trabajos y se podrá tener mayor margen para las atenciones sociales.

Lo mismo en la esfera pública que en la privada, no sólo hay que trabajar más, sino que hace falta, principalmente, que los esfuerzos sean metodizados y organizados científicamente, con vistas a la máxima eficacia.”<sup>123</sup>

Este tipo de planteamientos se radicalizaron a partir de la década de los cincuenta, y en abierta oposición a la política llevada a cabo desde el ministerio de Trabajo, partiendo de la radical oposición entre lo económico y lo político y de la necesidad de “estimular el valor personal de los individuos y las fuerzas creadoras”<sup>124</sup> como mecanismos para evitar la cristalización de las clases sociales. Para los sectores más liberales en lo económico del régimen la imposición del aparato de previsión obligatorio ponía de manifiesto una concepción de la masa social como menor de edad<sup>125</sup> al imponerles la obligación de realizar obligatoriamente lo que por propia iniciativa, muy probablemente, no harían por falta de conciencia o de recursos. Concretamente París Eguilaz partía del hecho de que existía una excesiva presión sobre el mundo empresarial por parte del ministerio de Trabajo y que ello, en un sistema generalizado de reparto, disminuía los beneficios de los empresarios, incidía negativamente en el ahorro y, en consecuencia, en el nivel de empleo, inversiones y precios. A mediados de los años cincuenta el pensamiento del mencionado autor aparecía con mayor claridad en aseveraciones como las que a continuación exponemos:

“...nunca la población en su conjunto ha de quedar satisfecha y por tanto lo que se llama problema social será permanente.

Frente a esta posición realista, ha surgido en los últimos decenios una tendencia que invocando razones sociales, pretende resolver el problema económico de lograr la máxima satisfacción de las necesidades, por métodos diferentes de los que se deducen de la doctrina económica.

...sólo a través de lo económico se puede llegar a lo social, es decir, al bienestar del mayor número y que si se abandona el principio de racionalidad económica, no se puede realizar ninguna política social efectiva.

...la necesidad de implantar los seguros obligatorios, lo que indica es la existencia de una economía enferma, con moneda inestable, bajo nivel de vida y sin hábito de ahorro; por tanto, los seguros sociales no son un índice de progreso social y económico, sino al contrario son una prueba de que el sistema económico social funciona en forma deficiente.

...El ideal y por tanto la tendencia de la política económica y social, debe ser conseguir que el sistema funcione en condiciones que hagan innecesarios los seguros sociales;...

La obsesión por la seguridad, por eliminar de la vida la incertidumbre y el riesgo, a nuestro juicio es una idea decadente,...<sup>126</sup>

Esta negativa a potenciar el sistema de previsión estaba ligada a la preocupación porque un sistema generalizado basado en el régimen de reparto pudiera influir sobre el nivel de inversión con efectos negativos sobre el nivel de ocupación. Por otro lado, se temía que una posible expansión del crédito desestabilizara el sistema incidiendo sobre los precios. De ahí, que desde algunos sectores de corte más liberal en lo económico se hiciera hincapié en la bondad de un sistema de capitalización y en la necesidad de disminuir la aportación del Estado a dicho sistema.<sup>127</sup>

La realidad era que la cotización de los empresarios a la seguridad social era un anticipo que recuperaban al vender sus productos, con lo cual era finalmente el consumidor el que pagaba el sistema de seguros sociales en un régimen en el que no se controlaban de forma activa los beneficios desmesurados que pudieran obtener las empresas. Ello podía constituir una medida "injusta" para algunos sectores del régimen en la medida en que eran los empresarios los que se beneficiaban de la paz social sin colaborar en mayor medida con un aparato de previsión que pretendía fomentar dicha paz.<sup>128</sup>

Podemos observar en el cuadro n° 80 el tanto por ciento que representaban las cotizaciones de los seguros sociales a la altura de 1949 en relación a los salarios:

seguros y subsidios	empresarios	trabajadores	total
subsidio de vejez	3		3
subsidio familiar	3	1	6

SOE ha. 1 de enero de 1947	2,507	2,506	5,013
SOE de. 1-1-47 ha. 1-1-48 <sup>129</sup>	3,18	3,17	6,35
SOE de. 1-1-48 ha. 1-7-49 <sup>130</sup>	4	4	8
seguros de maternidad <sup>131</sup>	1,9	1,85	3,75
seguros de accidentes de trabajo <sup>132</sup>			
seguro de silicosis <sup>133</sup>	---	---	---

\*Cuadro n° 80. Tanto por ciento de salarios que representaban lo distintos seguros sociales hasta 1 de julio de 1949.<sup>134</sup>

		1953 <sup>135</sup>	1954 <sup>136</sup>	1955 <sup>137</sup>	1956 <sup>138</sup>	1957 <sup>139</sup>
Remuneraciones directas	Jornal	5.900,- <sup>140</sup>	6.785,-	6.785,-	8.466,15	12.380,-
	Primas	1.475,- <sup>141</sup>	1.689,25	1.689,25	2.115,15	3.245,-
Remuneraciones indirectas	Domingos	1.040,- <sup>142</sup>	1.196,-	1.196,-	1.492,40	2.288,-
	Fiestas no recuperables	160,- <sup>143</sup>	184,-	184,-	229,60	352,-
	Vacaciones	250,- <sup>144</sup>	287,50	287,50	358,70	550,-
	Navidad y 18 de julio	400,- <sup>145</sup>	460,-	488,75	609,80	880,-
	Plus de carestía de vida	1.925,- <sup>146</sup>	2.213,75	2.213,75	---	---
	Plus especial	---	---	---	1.767,15	---
	Quinquenios	770,- <sup>147</sup>	885,50	885,50	885,50	1.649,-
Seguros sociales	Subsidio Familiar	399,80 <sup>148</sup>	459,45	459,45	141,67	853,76
	Seguro de Enfermedad	599,70 <sup>149</sup>	804,04	804,04	70,83	1.067,20
	Seguro de Vejez	299,85 <sup>150</sup>	344,59	344,59	70,83	640,32
	Seguro de Paro	---	---	40,30	---	---
	Seguro de Accidentes	953,60 <sup>151</sup>	1.096,-	1.96,-	1.274,76	1.707,52
	Mutualidad	799,60 <sup>152</sup>	918,90	918,90	1.133,39	1.494,08
	Plus Familiar	1.788,- <sup>153</sup>	3.425,-	3.425,-	3.541,86	4.268,80
	Cuota Sindical	149,92 <sup>154</sup>	173,30	173,30	212,50	320,16

	Cuota Formación Profesional	---	91,10	91,10	141,67	213,44
Totales						
Remuneraciones directas		7.375,-	8.474,25	8.874,25	10.581,67	15.625
Remuneraciones indirectas		4.525,-	5.226,75	5.255,30	5.342,95	5719,-
Seguridad Social		4.990,47	7.313,18	7.353,48	6.587,51	10.565,28
	COSTE TOTAL	16.820,47	21.014,18	21.083,23	22.512,13	31.909,28

\*Cuadro n° 81. Coste del trabajador para la empresa

		1953	1954	1955	1956	1957
Remuneraciones directas	Jornal	5.398,50	6.194,71	6.194,71	7.831,51	11.451,50
	Primas	1.349,63	1.542,29	1.542,29	1.956,52	3.001,25
Remuneraciones indirectas	Domingos	951,60	1.091,95	1.091,95	1.203,47	2.116,46
	Fiestas no recuperables	146,40	168,-	168,-	212,38	325,60
	Vacaciones	228,75	260,49	260,49	331,80	508,75
	Navidad y 18 de julio	366,-	420,-	446,23	564,06	814,-
	Plus de carestía de vida	1.925,-	2.213,75	2.213,75	---	---
	Plus especial	---	---	---	1.767,15	---
	Quinquenios	704,55	808,47	808,47	819,09	1.525,33
Totales						
Remuneraciones directas		6.748,13	7.737,-	7.737,-	9.788,03	14.452,75
Remuneraciones indirectas		4.322,30	4.962,66	4.988,89	4.999,95	5.290,08
	COSTE TOTAL	11.070,43	12.699,16	12.725,89	14.787,98	19.742,83

\*Cuadro n° 82. Percepciones reales de un trabajador.

En el caso de 1953 (ver cuadro nº 81 y 82) las remuneraciones directas suponen un total de 7.375 pts., las indirectas 4.545 y las de la seguridad social 4.990,47 pts. Descontando la cotización del trabajador la percepción efectiva era de 6.748,13 pts. por remuneraciones directas y 4.322,30 por las indirectas (11.070,43 pts. en total). Así, para el año 1953 las cuotas de los seguros sociales suponían el 67,6 % de las remuneraciones directas y el 41,8 % del total de las remuneraciones siendo excepcionalmente menos importante el salario indirecto (diferido o no) que recibía o podía recibir el trabajador por cuanto la suma de las cotizaciones sociales más las remuneraciones indirectas suponían el 128,2 % de las remuneraciones directas. Si consideramos que los costes sociales para las empresas podían variar en torno a 5 puntos más o menos con respecto al 41,8 % mencionado se puede suponer que dichas cargas sociales podían estar entre el 35 y el 45 % de las remuneraciones directas.

Las situación en 1954<sup>155</sup> había cambiado puesto que desde finales de 1953 se había incrementado el salario base de las reglamentaciones. Dicha subida afectaba sólo a los salarios base y se autorizaba a las empresas a absorber o compensar tales aumentos con los que voluntariamente hubieran sido concedidos por las empresas, previa autorización por el ministerio de Trabajo.<sup>156</sup> Esta situación trastocaba el marco legal en la medida en que aquél pretendía prohibir taxativamente las subidas de salarios generales no autorizadas mientras que las elevaciones del salario base realizadas a lo largo de 1953 y 1954 producían la impresión de que el ministerio de Trabajo, con esa posibilidad de compensar la subidas ya existentes, pretendía legalizar este mecanismo que las empresas individualmente fomentaban con tal de evitar el conflicto social. La elevación del salario base fue de alrededor del 15 %. También se elevó el plus familiar. Se aumentaba de forma paralela en un 1 % la prima del seguro de enfermedad a cargo de la empresa con lo que pasaba a ser del 10 %, del cual un 7 % era la cuota de empresa y un 3 % la del trabajador. Se elevaba en un 1 % la cuota con destino a formación profesional.<sup>157</sup> De igual manera, a partir de 1954 el campo de aplicación de seguros como el de enfermedad, vejez e invalidez incluía a los trabajadores cuyos ingresos no excedieran de 30.000 pts. Se redactaban de nuevo una serie de artículos del reglamento del seguro de accidentes del trabajo y del de enfermedades profesionales y se fijaba la cifra de remuneración máxima computable, a los efectos de estos seguros, en 36.000 pts. anuales o 100 pts./día sin que alcanzara responsabilidad alguna al patrono por la diferencia entre esta cantidad y la que realmente percibiese. Así, en 1954 las remuneraciones directas ascendían a 8.474,25 pts., las indirectas a 5.226,75 pts.; al descontar la cotización del trabajador la remuneración directa ascendía a 7.737 pts. y la indirecta a 4.962,66 pts. (12.699,66 pts.). Así pues, el trabajador contribuía a los seguros sociales con el 7,3 % de sus remuneraciones. Y partiendo de la remuneración bruta del trabajador la suma de las cotizaciones de trabajador y empresa suponía un 60 % aproximadamente de las remuneraciones.

La incidencia del coste del trabajador en la empresa se vio elevada por la incidencia que tuvo la creación del seguro de paro tecnológico por Decreto de 16 de junio de 1954.<sup>158</sup> Ello suponía un incremento de la cuota de los seguros sociales en un 0,35 % a cargo íntegramente de las empresas.<sup>159</sup> Se modificaron las bases de pago de las gratificaciones de Navidad y de 18 de julio (en el caso de la industria siderometalúrgica que consideramos).<sup>160</sup> Así para el año 1955,<sup>161</sup> como para el año 1954, las cuotas de los seguros sociales suponían un 53,88 % de las remuneraciones. Sin embargo, como en el año anterior, en 1955, los costes de los seguros sociales del trabajador en relación a su remuneración directa eran nada menos que el 86,29 % y el 107,78 % de los jornales.

El incremento de la aportación del Estado a los seguros sociales a partir de 1956 fue el motivo de que la cuota global pasara a ser un 9 % de la remuneración del trabajador a partir del 1 de abril de 1956 cuando anteriormente suponía un 24,85 %.<sup>162</sup> La incidencia efectiva de dicho cambio favoreció únicamente al sector empresarial puesto que globalmente el descenso del 24,85 % al 9 % fue la reducción global de la cuota. Para los trabajadores, ésta descendió del 5,7 % al 4,5 % mientras que para los empresarios se pasó de un 19,15 % a un 4,5 %.<sup>163</sup> Esta aportación del Estado suponía, según el Decreto-Ley de 23 de marzo de 1956, un crédito extraordinario de 1.125 millones del pts. al I.N.P. con el que se pretendía sufragar los gastos del primer trimestre.

Por otro lado, en función del acentuado proceso inflacionario, los seguros de vejez e invalidez y el de enfermedad, que cubrían a los trabajadores cuyos salarios cotizables no sobrepasaran las 30.000 pts. anuales, extendieron su campo de aplicación al incluir a los trabajadores que no superasen las 40.000 pts. En el caso del seguro de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo se elevó el tope a la misma cantidad.

Las cotizaciones se vieron también afectadas por las alzas salariales de abril de 1956. Por ello se refundió en el salario mínimo el plus de carestía de vida y se estableció un plus especial sobre los nuevos salarios mínimos que ascendía al 16 % (o aproximadamente un 20 % de elevación sobre los salarios mínimos antiguos). Este nuevo plus no estaba sujeto a cotización salvo en el caso del seguro de accidentes del trabajo. Entre los motivos de ello pudo estar el hecho de que el empresariado desarrollaba sus propias estrategias para el mantenimiento de la armonía en el seno de la empresa por medio del establecimiento de sistemas de primas a la producción bien a nivel de taller, dependencia o sección, topándose con las posibles actas de infracción que podía levantar la inspección de trabajo. Evidentemente ello tenía una especial relevancia en el sistema de financiación de los seguros sociales puesto que la tendencia entre el empresariado era la de no deducir la cuota pertinente de dichas primas a la producción (algo obligatorio) con el consiguiente perjuicio para las rentas diferidas de los trabajadores al



consolidar posibles prestaciones en función de los salarios estipulados en la reglamentaciones y no en los reales.<sup>164</sup> Ante esta cuestión, los empresarios se manifestaban totalmente opuestos por considerar que todo lo relacionado con los pluses voluntarios había de ser ajeno a las cotizaciones para los seguros sociales hasta el punto de diseñar una estrategia para refrenar los proyectos que perjudicaban sus intereses<sup>165</sup> amparada por los propios sindicatos nacionales y por la Vicesecretaría Nacional de Ordenación Económica recelosa de cualquier incremento en las cargas sobre el empresariado.<sup>166</sup>

A partir de 1956 cambió la base de cotización. Hasta ese momento se cotizaba, en principio, por el conjunto de remuneraciones directas e indirectas adicionadas al salario y vigentes a partir de la promulgación de los Decretos de 29 de diciembre de 1948 y de 17 de junio de 1949. A partir del mes de abril de 1956 se cotizaba por el salario mínimo establecido en la reglamentación y por las remuneraciones indirectas con la diferencia de que si el salario real en 31 de marzo de 1956 era mayor que el salario mínimo vigente el 1 de abril de 1956 se continuaba cotizando a los seguros sociales por el primero de estos. Se establecía también la exención en la cotización de los salarios reales que excedieran el mínimo de la reglamentación, considerando la posibilidad de acuerdos contractuales entre trabajadores y empresas. En torno a esta cuestión la excepción la representa el seguro de accidentes del trabajo y el plus familiar para los que se consideraba el salario real del trabajador.

Otro hecho peculiar que aconteció en 1956 fue la desaparición de la cotización para el seguro de paro tecnológico aunque las prestaciones se mantuvieron a cargo del ministerio de Trabajo. Así, en 1956 las cuotas de la seguridad social suponían un 41,39 % de las remuneraciones del trabajador.

Sin embargo, como ya se ha mencionado, el cambio radical iniciado el 1 de abril de 1956 tuvo vigencia únicamente hasta el 1 de noviembre del mismo año.<sup>167</sup> Se volvía así al sistema tradicional según el cual los seguros eran financiados, no por el Estado, sino por las cotizaciones de empresarios y trabajadores. A la vez, se producía una nueva elevación al revisarse los salarios de las reglamentaciones. Una de las primeras consecuencias de esta permuta fue la elevación de las cuotas de los seguros sociales a las empresas del 4,5 % al 14,5 % permaneciendo inalterada la aportación del trabajador.

El alza en los salarios mínimos de las reglamentaciones nacionales del trabajo de noviembre (la mayoría con fecha de 26 de octubre de 1956) suponía la desaparición del plus especial del 16 % (absorbido por la subida de salarios). En cuanto a la problemática sobre si los aumentos concedidos libremente por las empresas eran absorbibles por los nuevos beneficios, se estipuló que sólo los concedidos con posterioridad al 15 de julio<sup>168</sup> podían gozar de dicha prerrogativa

mientras que los anteriores tendrían la posibilidad de absorber los incrementos de salarios con un límite en el 16 % del plus especial establecido a partir de 1 de abril de 1956. La base de cotización se ampliaba puesto que a partir del 1 de abril se cotizaba por el salario mínimo y a partir del 1 de noviembre de 1956 se cotizaba por los salarios reales independientemente de la cuantía de los mismos. En esta nueva situación las cuotas de los seguros sociales importaban un 49,49 % de las remuneraciones.

### **13.5. Los problemas originados por la financiación de los seguros sociales entre los ministerios de Hacienda y Trabajo.**

Las dificultades que en el orden de la previsión social se encuentra Girón de Velasco en su primer quinquenio de mandato, tienen su primer ejemplo en los anhelos del sindicato por dominar el aparato de previsión del Estado español<sup>169</sup> y de las empresas por minimizar las posibles cargas sociales que recaían sobre ellas.<sup>170</sup> La organización sindical, como “órgano natural” de representación de los trabajadores, demandaba mayor intervención de la que poseía en los seguros sociales así como mayor representación en el Instituto Nacional de Previsión.

Otra traba para el ministerio de Trabajo tenía como referente al ministerio de Hacienda y concretamente al entonces ministro del ramo, el “primorriverista”<sup>171</sup> Benjumea Burín. A ello se añadía el hecho de que las escalas de tributos eran burladas por los empresarios y convertían al propio Estado franquista en “participante del despojo público” que unos pocos realizaban sobre el solar patrio.<sup>172</sup>

Hay que partir del hecho de que para el entonces ministro de Trabajo, José Antonio Girón, el avance en la mejora de las instituciones de previsión social era, en principio, el elemento principal del “servicio” que tenía que llevar a cabo según las “consignas” recibidas por el general Franco. Por consiguiente, podemos presuponer que cualquier supuesto entorpecimiento a su política, en cualquiera de sus vertientes, o más concretamente cualquier posible freno que pudiera encontrar a la hora de desarrollar el aparato de previsión del Estado y sus instituciones sería considerado, en su mentalidad no carente de maniqueísmo, como una afrenta a la “obra social” que el régimen del 18 de julio pretendía realizar por medio de su persona y su departamento. El problema que se planteaba a la altura de mayo de 1943<sup>173</sup> no era el refreno conyuntural que su política pudiera sufrir en función de la complicada situación socioeconómica que vivía una España prácticamente recién salida de la guerra civil, sino los obstáculos que sufría la política social del ministerio de Trabajo en función de criterios políticos, ideológicos y sociales que no gozaban de la simpatía de Girón y que, propios de algunas familias del régimen, se hallaban bastante alejados de los planteamientos doctrinales nacional-sindicalistas de este ministro.

A los ojos de Girón el Proyecto de Ley de 13 de marzo de 1943 del ministerio de Hacienda sobre “Inversión de fondos y exención tributaria de entidades aseguradoras de fondos públicos,” publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Españolas el 15 de abril de 1943, constituía un serio contratiempo a su labor. Según el “león de Fuengirola” este proyecto “dejaría sin efecto los avances más importantes conseguidos hasta el presente, imposibilitaría los futuros y significaría prácticamente en lo social un cambio absoluto de orientación

abiertamente en pugna con las consignas doctrinales del Estado nacional-sindicalista, con las órdenes del Fuero del Trabajo y con el espíritu que ha presidido siempre el pensamiento y la palabra de V.E., esperanza de tantos hogares trabajadores de la Patria".<sup>174</sup>

El problema entre uno y otro ministerio partía del hecho de que hasta el momento, el I.N.P. había basado su viabilidad económica en un sistema de inversiones que le permitían unos rendimientos considerados suficientes para mantener la operatividad de la institución. Frente a esta relativa libertad en la inversión de fondos públicos el proyecto del ministerio de Hacienda imponía la obligación de que las inversiones se realizaran exclusivamente en efectos públicos que en principio podían tener un rendimiento inferior. En la mentalidad de Girón los criterios eficientistas considerados como necesarios para el fortalecimiento de la economía española eran incompatibles con la necesidad de solventar el problema financiero de la institución básica que había de establecer un sistema de protección ante el infortunio. Las consecuencias en cuanto a la obra del ministerio de Trabajo quedan bien claras para Girón en las valoraciones que a continuación se exponen:

"Cuando el progresivo desarrollo de las instituciones sociales hace necesaria una ayuda resuelta para los organismos que la sirven, cuando ante la mayor complejidad de la función debe ser primera preocupación del Estado nacional-sindicalista robustecer la potencialidad y acrecentar la agilidad económica del órgano, el proyecto significa, por el contrario, una merma trascendental de su capacidad y un entorpecimiento grave para el desenvolvimiento de sus actividades económicas que han de tener repercusión inmediata en la vía de las instituciones de previsión, -especialmente en los seguros sociales- y cuyas consecuencias habrá de sufrir, en último extremo, las economías trabajadoras protegidas por ellas.

...el Instituto Nacional de Previsión constituye en la actualidad la mejor arma de que disponemos para imponer la justicia a través de una red de instituciones nuevas que protegen al trabajador en las dificultades de su vida, toda medida que tienda a disminuir su rendimiento y su eficacia dificultan nuestra labor sirviendo indirectamente a orientaciones contrarias.

En este sentido el Proyecto constituye el golpe más certero que puede asestarse a nuestros avances revolucionarios en lo social."<sup>175</sup>

El proyecto, en definitiva, venía a procurar que prevalecieran los criterios de saneamiento de la economía nacional frente a los proyectos particulares de un ministerio como el de Trabajo. Pero ello iba en detrimento de la "ofensiva de justicia" que se planeaba desde que se promulgó el

Seguro Obligatorio de Enfermedad con la Ley de 14 de diciembre de 1942<sup>176</sup> y su posterior Reglamento de 11 de noviembre de 1943<sup>177</sup> en la medida en que el fortalecimiento de una economía nacional maltrecha postergaba el afán por materializar el concepto de justicia de José Antonio Girón. La ortodoxia eficientista de Benjumea Burín en su deseo por controlar desde el Estado las instituciones de previsión social mediante la vigilancia, verificación o examen de la actividad inversora del I.N.P. iba en contra o suponía una negativa frontal a la sensibilidad social que debía de caracterizar la política social del régimen, por supuesto, "inspirada por voluntad de V.E."<sup>178</sup> y supuestamente enfrentada a fuerzas o familias contrarias a estas consignas.

Por tanto, lo que Girón defendía desde su perspectiva subjetiva, era que la política social del régimen no se llevase a cabo exclusivamente desde el ministerio que el presidía, sino que la coordinación de la política global del gobierno tuviera como referente básico la primacía de los criterios políticos de inspiración joseantoniana frente a las necesidades más urgentes que manifestaban las macromagnitudes económicas básicas de la nación. Ese hubiera sido el camino de la transformación social de la que Girón hacía gala en sus discursos. Y frente a ello el ministerio de Hacienda representaba un baluarte de consignas y de formas de actuación política concretas que contradecían sistemáticamente esta orientación. Como podemos observar, el planteamiento que Girón defendía, independientemente de otras consideraciones, estaba cargado de un maniqueísmo exultante que dividía, no sólo el mundo o España sino al propio gobierno de la nación, en buenos y malos, en gironistas y antigironistas. Por supuesto, Benjumea, artífice del proyecto quedaba inscrito en el segundo de los grupos. Y es que el "ministerio de Hacienda ha mantenido sistemáticamente la orientación contraria a través de una serie de medidas y de imposiciones que si hasta el momento actual sólo han tenido como consecuencia retrasar la rapidez y la profundidad de nuestro avance, hoy por las consecuencias que acarrearía el Proyecto presentado a las Cortes...constituiría un determinante de retroceso en la obra social del Estado nuevo."<sup>179</sup>

Un problema concreto se plantea desde el momento en que el proyecto de Hacienda hace referencia a la elevación de los precios de los inmuebles sin que se merme el tipo de interés líquido de las inversiones del I.N.P. e instituciones análogas. El problema que se originaba era que dichos planteamientos, lesivos para los intereses del I.N.P., parecían desproporcionados a la luz del peso de los inmuebles propiedad del mencionado instituto. Las inversiones autorizadas en inmuebles no habían rebasado el 10 % autorizado por ley y por otro lado el número de inmuebles propiedad del I.N.P. era de 15 en el total del territorio nacional. El descrédito político que suponía la elevación de los precios de las fincas urbanas tenía como aparente solución un mayor intervencionismo en las formas de financiación de instituciones como el mencionado instituto por medio del ministerio de Hacienda y ante ello se argumentaba por parte del ministerio de Trabajo que esta elevación no tenía relación con la política del I.N.P. dado

que aquellos edificios habían sido "adquiridos en todos los casos mediante estudio y tasación técnica, en los que para obtener la renta líquida se descuenta la tercera parte de los ingresos brutos comprobados sin que se haya tenido en cuenta en la valoración la exención tributaria,"<sup>180</sup> de todo lo cual se deducía que el precio de aquellos inmuebles era superior al del precio inventariado con la finalidad de realizar su compra.

Pese a lo expuesto, el principal problema que para el sano desarrollo de las instituciones de previsión se planteaba venía de la mano del artículo 1º del proyecto anteriormente mencionado. Éste determinaba la obligación de intervenir exclusivamente en valores públicos los recursos económicos no ligados al cumplimiento inmediato de las obligaciones, necesitándose la autorización expresa del Gobierno (previo informe favorable del ministerio de Hacienda) para la adquisición de inmuebles o de cualquier otra clase de valores o efectos. La consecuencia inmediata era la consiguiente disminución en el rendimiento de las inversiones del I.N.P. y el descenso en el nivel de las prestaciones o la subida de las primas del seguro para mantener el nivel de dichas prestaciones. Ello implicaba una baja efectiva en el nivel de los salarios en la medida en que el mantenimiento de los seguros sociales creados desde el ministerio de Trabajo necesitaba de una mayor sustracción en las rentas del trabajo por medio de la primas. Contra ello se argumentaba lo siguiente:

"Por otra parte, el Instituto no puede ser tachado de sistemática oposición a las inversiones en valores públicos. La mayor parte de sus fondos se invierten en ellos y sólo se busca en otros valores una compensación necesaria al rendimiento inferior que los fondos públicos producen para cubrir las obligaciones que la función social exige."<sup>181</sup>

Y es que a la luz de los datos los préstamos financieros ofrecían un rendimiento medio del 5 % y las inversiones sociales del ministerio de Trabajo un 4,5 %. Frente a esta realidad las inversiones en valores públicos ofrecían un tipo de interés del 3,5 %. Además de esta consideración sobre rentabilidad que hacía menos atractiva la inversión en valores públicos existía el inconveniente de que estas últimas no permitían la inversión de los fondos del I.N.P. de forma rápida con la consiguiente pérdida de rentabilidad. El ministerio de Trabajo, por boca del ministro del ramo, venía a negarse a que suprimieran las inversiones sociales y a que se dificultase la autonomía de los órganos de previsión social a la hora de invertir en valores más atractivos que los públicos; pero fundamentalmente se negaba a que el impresionante volumen de fondos del I.N.P. o de otras instituciones de previsión como las mutualidades se escapara de su control. "De estas consideraciones, apoyadas en datos concretos y comprobables en cualquier momento, se desprende que la inversión total de los fondos del Instituto Nacional de Previsión en valores públicos determinaría un aumento en las cuotas de los seguros que pudiera llegar a constituir una anulación práctica en su eficacia y desde luego un determinante político

negativo y antipopular por la reducción real de jornales que entraña,"<sup>182</sup> concluía el informe de Girón.

Se estaba planteando, en cierta medida, una lucha por parcelas de poder y por determinadas atribuciones entre uno y otro ministerio. Se pretendía, por parte del ministerio de Hacienda, controlar la actividad económica y social del I.N.P. Y frente a ello, en cierto modo, Girón estaba casi presentando a Franco su dimisión al frente del ministerio de Trabajo dado que el falangismo ortodoxo que él creía representar se veía arrollado por el avance de fuerzas "enemigas" de la "Revolución" nacional-sindicalista:

"Si se consigue convertir al Instituto Nacional de Previsión en un ente inerte, disminuido en sus posibilidades de acción económica y social, sometido al control - prácticamente absoluto- del ministerio de Hacienda todo nuestro entusiasmo y nuestro esfuerzo se harán estériles faltos de elementos con que servir en la realidad las directrices de la doctrina. La intensidad de los avances estará supeditada al criterio del ministerio de Trabajo que habrá perdido en la realidad su facultad de orientar la política social conforme a los postulados de justicia que V.E. ha establecido como consignas. Si este criterio hubiese de imperar, el ministerio de Trabajo, desposeído de su misión esencial, debería quedar reducido a los límites de una Dirección General y ser suprimido como departamento estatal encargado de dirigir la línea nacional-sindicalista en el frente del trabajo. Ello implicaría para el país un retroceso en la orientación revolucionaria y en la preocupación social del Estado nuevo, pero habría de servir al menos con un paralelismo más exacto entre las realidades y las apariencias, para demostrar un noble criterio de sinceridad."<sup>183</sup>

De hecho, considerada por Girón esta cuestión como trascendental para el futuro político y social de la nación, el nuevo ministro de Trabajo solicitaba un sucesor de forma inmediata para el puesto que hasta entonces él representaba haciendo gala de su talante maniqueo y de un lenguaje que a todas luces ponía de manifiesto la concepción que Girón tenía de la política como un frente de batalla similar al que había encontrado durante la guerra civil, sólo que ahora con enemigos menos definidos y más arropados por las instituciones vencedoras del conflicto al que nos referimos:

"Cercados cada vez más estrechamente por una serie de medidas que anulan progresivamente todos nuestros movimientos, en el intento de lograr para la Patria justas realidades sociales, V.E. debe atender nuestra petición de no permanecer por más tiempo al frente de una unidad inutilizada en su capacidad de acción.

Mi deber de soldado me marca el dilema irrevocable de lograr posibilidades de eficacia en el sector que se me encomienda o abandonar una posición desde la que no se puede

combatir, en la cual sólo conseguiría desprestigiar el ideal que sirvo y traicionar la confianza de V.E. con leyes aparatosas sin efectividad.

...ruego en consideración, que V.E. no me obligue a presidir impasible el derrumbamiento de una obra en que había puesto todas mis ilusiones de españoles y de falangistas.”<sup>184</sup>

Pese a estas afirmaciones el proyecto iba a salir adelante en el verano de 1943 y la dimisión de Girón, implícita en las anteriores líneas, nunca se llegó a producir. El proyecto, como ya se ha comentado venía a dañar los proyectos del ministerio de Trabajo con respecto a la puesta en marcha del Seguro Obligatorio de Enfermedad en la medida en que dificultaba la construcción de los centros sanitarios que se requerían para que el seguro fuera mínimamente operativo. Teniendo en cuenta que el criterio de cara a la financiación de las instalaciones necesarias era que el Estado no contribuyera, el Instituto Nacional de Previsión veía dificultada la puesta en marcha de dicho seguro. Y estas “maniobras” del ministerio de Hacienda eran percibidas como obstáculos intencionados que minimizaban el esfuerzo del ministerio de Trabajo por poner en marcha una estructura de seguros sociales eficiente. A la vez, dicha forma de mermar los mencionados esfuerzos eran una muestra de la “complicidad desde el Estado en apoyo de concepciones enterradas en las trincheras de la guerra...”<sup>185</sup>

En este proyecto se veía, por parte del ministerio de Trabajo el enfrentamiento de dos tendencias socioeconómicas antagónicas en cuanto a sus fines y en cuanto a la estrategia definida para lograr la paz y la justicia que Girón se planteaba como objetivo esencial. “Económicamente el Estado no solo no apoya con sus elementos la obra social en marcha, sino que intenta restar eficacia a los órganos específicos que la llevan a cabo,”<sup>186</sup> concluía el informe poniendo de manifiesto la escisión que existía entre los criterios del ministerio supuestamente saneador de la economía nacional y el ministerio supuestamente constructor de un sistema de justicia social que pretendía traer la paz definitiva a España. El aparente impulso revolucionario que la llegada de Girón suponía al ministerio de Trabajo encontraba un freno en una realidad económica que progresivamente iba a alejarse de la idea de que los principios políticos habrían de dirigir la vida económica del Nuevo Estado. Frente a semejante planteamiento utópico la realidad que progresivamente iba a imponerse suponía la imbricación de ambas dimensiones (la económica y la política) para manifestarse de forma progresiva la imposición de la primacía de los planteamientos economicistas y eficientistas que culminarían con el Plan de Estabilización.

Estos planteamientos que refrenaron los objetivos del ministerio de Trabajo se materializaron también en la negativa por parte del ministerio de Hacienda a continuar con las autorizaciones de préstamos que el I.N.P. concedía a los ayuntamientos para obras de carácter social.



Continuación de este enfrentamiento entre el ministerio de Hacienda y el de Trabajo fueron las Leyes de 5 de noviembre de 1940 y de 13 de marzo de 1943 y a la Orden de 6 de abril de 1943. Dichas disposiciones suponían, en líneas generales, la unificación del funcionamiento del organismo que supuestamente fraccionaba la unidad económica del Estado. De forma indirecta se estaba aludiendo al Instituto Nacional de Previsión. Estos preceptos facultaban al ministerio de Hacienda para modificar las estructuras de dicho organismo (u otros homologables), para intervenir en sus disposiciones de fondos, aprobar sus presupuestos obligadamente perfilados al modo de los estatales, ordenando que dejaran de recaudarse, a partir de la fecha que se prescribiera, los recursos que no fueran autorizados en los mencionados presupuestos.

Desde la perspectiva del ministerio de Trabajo esta política potenciada por el ministerio de Hacienda constituía un entorpecimiento de las funciones sociales que había de desempeñar el I.N.P. Y es que por la salud financiera del mencionado instituto no podía, entre otras cuestiones, dejar de recaudar los recursos no existentes en el presupuesto aprobado por Hacienda porque dentro de ese capítulo había de considerar las primas de los seguros sociales que eran debidas a leyes especiales de cada seguro o a contratos voluntarios de los asegurados. Y es que para Girón "el criterio del ministerio de Hacienda de debilitar la potencialidad económica del Instituto Nacional de Previsión y su autonomía necesaria, constituía una peligrosa directriz contrarrevolucionaria e impugnadora de las consignas de V.E."<sup>187</sup>

El planteamiento del ministerio de Hacienda constituía un modelo de estatalización y control exclusivamente económico de la previsión social que debilitaba el instrumento básico de desarrollo de los seguros sociales en la España del "primer franquismo." Esta tendencia al encuadramiento administrativo de un organismo autónomo resultaba inexplicable para Girón pese a que, doctrinalmente, era aceptable desde el momento en que se enmarcaba en la tendencia nacional-sindicalista hacia el control estatal y hacia la unidad de la economía del Estado. Pese a ello en este planteamiento se veía una tendencia hacia la concepción liberal-capitalista de la asistencia ligada a concepciones sociales que, supuestamente, habían de ser superadas por el franquismo social, en este caso, ligadas a sistemas asistenciales que se pensaba había que abandonar. Pese a ello tales tendencias, que supuestamente habrían de superarse, persistieron. Eso sí, la nota esencial de la política social del régimen sería la ausencia de mecanismos de financiación eficaces que evitaran la carencia sistemática de medios, lo cual motivaba la conciencia de que había sido poco lo avanzado en el ámbito de la política social.<sup>188</sup>

La "guerra", si se la puede denominar así, surgía del afán de ambos ministerios por controlar los recursos del I.N.P. El modelo que Girón defendía pretendía que el instituto, como institución autónoma, estuviera separado de la administración pública, salvo en lo referente al ministerio de Trabajo. El segundo planteamiento, el del conde de Guadalhorce, suponía que fuera el Estado

(y concretamente el ministerio de Hacienda que el dirigía) el que controlase a las instituciones encargadas de materializar la política social por medio de la fiscalización de sus recursos económicos.

Lo que en cierta manera se pretendía era ligar los recursos del I.N.P. a la Hacienda Pública a efectos de control (no de financiación) con la posible tendencia a fortalecer a la misma hacienda por medio de lo que Girón califica como "incumplimiento de los fines sociales"<sup>189</sup> para los que fue concebido el instituto. En esta tendencia a imbricar los fondos de las instituciones de previsión y los del Estado se veía un cierto sesgo asistencialista:

"La concepción de la Asistencia tiende, por el contrario, a confundir sus fondos con los generales del Estado. No entiende la protección social como un gran sistema justo de previsión para los trabajadores sino como una benéfica ayuda que el Estado dispensa a los menesterosos. Se nutre con impuestos y subvenciones que constituyen una limosna, no como primas de los propios asegurados que confieren un derecho. La tendencia a estatificar los organismos de protección es una concepción rebasada de regímenes viejos -la de Asistencia-, en oposición a la verdadera doctrina de la autonomía y el apoyo que debe concederse a una institución de cuya prosperidad depende el bienestar de los hogares trabajadores."<sup>190</sup>

En esta coyuntura al Comisario del Instituto Nacional de Previsión, Luis Jordana<sup>191</sup> no le parecía en modo alguno, como se propugnaba desde el ministerio de Hacienda, que el I.N.P. contribuyese al fraccionamiento económico de la nación. Ciertamente había que reconocer que remontándose a la ley fundacional del I.N.P. de 27 de febrero de 1908, la personas que lo integraban no tenían necesariamente carácter de funcionarios, su presupuesto no formaba parte del presupuesto del Estado y por tanto no era aprobado por el Gobierno ni por el ministerio de Trabajo sino por el Consejo, sus operaciones no estaban sometidas a la intervención de Hacienda ni sus cuentas habían de ser presentadas ante el Tribunal de Cuentas, sus fondos no tenían carácter público y el control del Estado se realizaba por medio de una comisión especial que vigilaba la marcha financiera, contable y actuarial de la institución. Hay que tener también en cuenta que la exigencia de dar un trato similar a las tasas y exenciones que a las cuotas de los seguros sociales contribuía a desapuntalar lo poco que se había hecho en el terreno de los seguros sociales (en este año alrededor de seis millones de personas pertenecían al I.N.P., de las cuales la mayoría lo hacían de forma voluntaria y no obligatoria) con la consiguiente mayor decantación hacia lo propiamente benéfico.

Resultaba igualmente complicado presentar, por parte del instituto, un presupuesto riguroso de ingresos y gastos en la medida en que también resultaba parcialmente aleatorio conocer el número de personas o entidades que iban a contratar con el instituto prestaciones en uno u otro ámbito. El cumplimiento rígido de dichos principios podría dejar a los beneficiarios de ciertos

beneficios ante una determinada coyuntura sin las prestaciones a que tendrían derecho por su cotización. Por otro lado, la apertura de una única cuenta de este organismo integrada en el Tesoro Público originaba el peligro de que los seguros sociales (muy escasamente desarrollados) no pudiesen ser cobrados en función de posibles dificultades de tesorería que imposibilitarían las obligaciones contraídas por el instituto.

Hay que tener en cuenta también la importancia que pudo tener el peso de algunos grupos de presión financieros al absorber parte de sus potenciales fuentes de riqueza, como hacía el I.N.P. Y es que en la mente del ministro de Trabajo que más tiempo ocupó esta cartera durante el franquismo la prosperidad de las instituciones de previsión y su autonomía financiera real podía “facilitar mañana la viabilidad de nuestra tendencia nacional-sindicalista a la nacionalización de la Banca que consideran lesiva e injusta,”<sup>192</sup> cuestión en torno a la cual el sindicato no daba credibilidad a las intenciones del ministro de Trabajo.<sup>193</sup>

El resultado más relevante de esta pugna entre Trabajo y Hacienda fue la ley de 29 de junio de 1943. Dicha ley estipulaba que los fondos del I.N.P. habrían de invertirse en un 60 % en títulos de la deuda del Estado, un 10 % en valores mobiliarios y en un 30 % en inversiones de carácter social cuya finalidad había de consistir en el acceso a la propiedad, la colonización interior, la construcción de viviendas protegidas, la repoblación forestal, etc.<sup>194</sup> En el caso de los montepíos el Decreto de 23 de enero de 1953 disponía que el 65 % de dichos fondos habrían de invertirse en valores garantizados o emitidos por el Estado y un 15 % en otros fondos públicos españoles negociados en bolsa. El 20 % podía ser invertido en inmuebles que ofrecieran garantías en cuanto a valor y productividad o bien en títulos privados de renta fija o variable contratable en bolsa. También este 20 % podía ser destinado a obras de tipo social que rentaran un mínimo de un 3,5 %. Las inversiones que se consideraba se ajustaban a los criterios de seguridad, rendimiento e interés social eran las siguientes:

- 1.- gastos para el primer establecimiento de los seguros sociales.
- 2.- inmuebles indispensables para la instalación de los servicios de los seguros.
- 3.- deuda del Estado.
- 4.- valores mobiliarios de “plena seguridad.”
- 5.- inversiones de carácter general.

El plan de instalaciones del S.O.E. se encuadraba dentro del primer tipo de inversiones. Concretamente a finales de la década de los cincuenta los anticipos efectuados para dicho plan se referían a unas sesenta obras y la cantidad total ascendía a 821.428.291,98 pts. reintegrables en 50 años. En cuanto al segundo grupo, en 1950 los gastos por dicho concepto ascendían a 500 millones de pts. El 31 de diciembre de 1951 la deuda del Estado y los valores mobiliarios de “plena seguridad” superaban los mil millones de pts. En el grupo 5º destacaban los 100

millones de pts. concedidas para la construcción de viviendas y adquisición de fincas a la organización sindical, 40 millones al Instituto Social de la Marina, 56 millones a R.E.N.F.E., etc. En el caso de los montepíos y mutualidades laborales su inversión más característica fue la dedicada a la construcción de las universidades laborales.

Realmente, como ya se ha dicho, lo que aquí se jugó fue un pulso entre Hacienda y Trabajo por el control de una parte del succulento pastel de la riqueza nacional y, en definitiva, una pugna en la que, al salir derrotado Girón, se impuso un criterio que desposeía al ministro de Trabajo de un resorte más de poder.

### **13.6. El abandono del campo español por parte del ministerio de Trabajo.**

“No habrá seguridad social completa mientras no se haya establecido un verdadero y efectivo sistema de Seguros Sociales en el Campo, con miras a la implantación de un seguro total en condiciones nunca inferiores en cuanto a la índole y cuantía de sus prestaciones, que las correspondientes a la industria”<sup>195</sup> se afirmaba en el IV Congreso Sindical Agrario de Castilla la Nueva y Albacete celebrado en 1956. Se ponía así de manifiesto como la etapa de Girón al frente del ministerio de Trabajo no había logrado llevar de forma eficiente la previsión social al campo español.

En el mejor de los casos cuando algunas de las prestaciones de la previsión social llegaban a aquél se consideraba que este camino era excepcionalmente ineficaz dado que se daba paso a proyectos nunca realizados durante el período que aborda esta tesis como la elaboración de un proyecto de bases del seguro social agrícola que pretendía abarcar los casos de enfermedad, maternidad, vejez, invalidez, muerte, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, paro estacional, natalidad y escolaridad.<sup>196</sup> Concretamente la organización sindical manifestó su disconformidad con un proyecto que, como tantas otras veces, concedía a dicha institución un lugar secundario y subordinado al ministerio de Trabajo relegando a las hermandades a un papel de acompañantes en una política que, a sus ojos, podía generar pingües beneficios políticos a la organización sindical.<sup>197</sup>

Y es que uno de los problemas básicos con que se encontraba la aplicación de los seguros sociales en el campo<sup>198</sup> era la ausencia de un conocimiento profundo de la realidad del agro español en orden a la aplicación de los mecanismos de seguridad social. Casi a mediados de los cincuenta la formación de un censo laboral agrícola y la expedición de las cartillas profesionales agrícolas como formas de control del medio rural estaban a medio desarrollar, según la O. S. de Previsión Social.<sup>199</sup> A ello había que añadir que las dimensiones que tomaba el medio rural en comparación con las que formalmente se consideraban eran realmente titánicas,<sup>200</sup> cuestión que Girón justificaba recalcando el peso excesivo que podría tener dicha

política sobre la industria.<sup>201</sup> En esta línea de justificar la no universalización de los beneficios de los seguros sociales estuvo el discurso que realizó Girón ante las Cortes en el año 1944:

“...la previsión tiene un límite en el campo de extensión de los riesgos que cubre y en la cuantía de las prestaciones para cada uno de ellos. Mas allá de un servicio médico, farmacéutico y clínico completo, no se atisba el mañana de la prestación sanitaria en el seguro de enfermedad. Más allá de elevar la indemnización económica a un 75 o a un 85 por 100 del jornal, no hay en él perspectivas ulteriores de perfeccionamiento, porque un Seguro, si no quiere convertirse en fomentador del fraude, nunca debe cubrir del todo el riesgo contra el que defiende. El seguro total, estado superior al de la simple unificación de seguros, implica, sin embargo, la necesidad de cubrir previamente esta etapa unificadora en lo administrativo. Es preciso un reajuste de cuotas para determinar la única forma capaz de cubrir todas las prestaciones mediante la formalización por las empresas de un censo de datos y antecedentes. Es necesario el establecimiento de la uniformidad de regímenes de protección en industria, agricultura y mar...Hasta el presente, la unificación administrativa no era viable por la inexistencia de términos hábiles para el cálculo estadístico sin conocer el número posible de beneficiarios de los seguros sociales...”<sup>202</sup>

La percepción de los organismos sindicales era que todos los esfuerzos de los organismos estatales por implantar los seguros sociales en el campo habían “fracasado rotundamente”<sup>203</sup> entre otros motivos porque en el ámbito agrícola había un número abundante de trabajadores autónomos que se consideraban oficialmente como patronos u obreros sin considerar la peculiaridad de su actividad y su carácter eventual. A ello se añadía un sinnúmero de disposiciones que modificaban sustancialmente el criterio de las anteriores, a lo cual se podía añadir que no se habría “logrado resultado positivo alguno” sobre todo por la falta de colaboración del sector empresarial.<sup>204</sup>

El intento de implantación de un régimen especial de seguros en el campo se plasmó en la promulgación de la Ley de 10 de febrero de 1943 y en la publicación de su reglamento el 26 de mayo del mismo año. Su ineficacia se fundamentaba en el hecho de que, como para otro tipo de cuestiones, se carecía de un mínimo conocimiento estadístico veraz sobre los trabajadores del campo español;<sup>205</sup> se carecía de personal administrativo suficiente y adecuadamente preparado, tanto por parte del I.N.P. como por parte de la O. S de Previsión Social; no se disponía de un sistema de normas mínimamente aplicable en función de su imperfección y creación improvisada y, por último, había que contar con la resistencia numantina del elemento patronal dada la suspicacia de este sector ante la posibilidad de que el desarrollo del sistema de previsión tuviera repercusiones de tipo fiscal.<sup>206</sup>

En lo referente al seguro de enfermedad los trabajadores del campo eventuales estaban formalmente incluidos en su ámbito de aplicación a partir de la promulgación del Decreto de 29 de diciembre de 1949 pero, de hecho, continuaron excluidos del mismo aplazándose indefinidamente esta situación. Ésta se sustentaba en la posibilidad legal que establecían las disposiciones transitorias de la misma disposición<sup>207</sup> por lo que todavía en 1956 se solicitaba desde medios sindicales la extensión efectiva a los obreros agrícolas y eventuales del campo del seguro de enfermedad, insistiendo en aspectos puramente técnicos como el desolador panorama ante la ausencia de equipamiento y bienes inmuebles capaces de dar dichos servicios en el campo español.<sup>208</sup>

El problema radicaba en que la “Revolución Nacional Sindicalista” preconizada para todos los españoles no llegaba al campo como a la altura de 1953 denunciaba retóricamente el Consejo Político Sindical.<sup>209</sup> Prueba de este abandono eran los datos sobre trabajadores inscritos a lo largo de los años 1952 y 1953<sup>210</sup> y el hecho de que por el Decreto de 21 de marzo de 1952 se estableció que por los trabajadores del campo los empresarios cotizarían con 5 pts. por trabajador fijo y mes y 5 pts. por cada trabajador eventual cada dos meses, sin lograr que esta disposición se aplicara de forma rigurosa por la poca presión ejercida sobre los empresarios.<sup>211</sup> La O. S. de Previsión Social (y en consecuencia la D.N.S.) tenían parte de la culpa de esta situación caótica tal y como muestran las siguientes líneas manifestando la negativa de Previsión Social a colaborar con Trabajo en función del carácter supuestamente “antipolítico” de algunas de las misiones que se les encomendaba:

“...para prevenirte en relación con unas ordenes de la Sección Central de la Inspección del ministerio de Trabajo y Dirección de Subsidios y Seguros Unificados del I.N.P. en las que se asignan unas funciones a nuestras corresponsalías locales de la O. S. Previsión Social, que me parecen totalmente antipolíticas. La orden del primero de los organismos lleva fecha 31 de enero y la del segundo 28 de febrero. En ambos se trata de reglamentar la intervención de la inspección de trabajo y de los interventores C.Y.E. en la responsabilidad de los empresarios agrícolas por no exigir a sus obreros estar al corriente en el pago de los cupones del censo laboral agrícola y después de decir que la organización sindical ya ha enviado las órdenes oportunas, las que aún no han llegado a nuestro poder, establece que nuestros corresponsales y entidades locales, enviarán a la inspección lista de los empresarios cuyos obreros están en descubierto en sus cotizaciones, para después la inspección comprobar y levantar actas de inspección, hechos que de producirse desprestigiarian gravemente a nuestra entidades.”<sup>212</sup>

La mayor impericia en la administración de los seguros se tenía que sufrir en el campo y por parte de la O. S. de Previsión Social dada la tendencia de dicha institución a ceder sus corresponsalías a alcaldes, jefes del movimiento y delegados sindicales, personas sin preparación ni, en los mejores casos, medios para aplicar la política de previsión social en el campo.<sup>213</sup> La consecuencia de ello era la invalidez sistemática de sus informes y el desconocimiento absoluto sobre la realidad del campo español y la concesión de los beneficios de los seguros sociales a modo de dádiva o concesión benéfica de los adalides de la organización sindical con las consiguientes irregularidades por exceso o por defecto de los mismos y la discrecionalidad absoluta en la concesión de los beneficios posibles.

La mencionada institución (la O. S. de Previsión Social) nació el 11 de agosto de 1941 con la misión de aplicar y divulgar los seguros sociales así como fomentar y tutelar políticamente a las mutualidades de previsión. Su acción básica se centró en el campo español para lo cual firmó con el I.N.P. un convenio con el objetivo de que éste pudiera servirse de sus corresponsalías. "A este fin le fue confiada la implantación de los seguros sociales de la rama agropecuaria, y su labor se desenvolvió confeccionando los censos pertinentes, pagando los subsidios, pensiones y premios previstos, no solamente en la mencionada Ley de Bases del Subsidio Familiar, sino abonando también todos aquellos beneficios derivados de las disposiciones sobre Vejez e Invalidez, Viudedad, Orfandad, Premios de Natalidad y Nupcialidad, etc."<sup>214</sup>

En este sentido su labor a lo largo del período Girón se centró en la elaboración de varios censos que a continuación se citan. El de ancianos (1942), el inicial de subsidiados del subsidio familiar (1943), el de octogenarios (1944), la depuración del censo del subsidio familiar (1946 y 1948-51), el de pensionistas de vejez (1950), el primer (1952), segundo (1954) y el tercer censo agrícola (1955).

Si a esto añadimos la especial preocupación de la O. S. de Previsión Social por actividades como la revisión del censo del subsidio familiar en la agricultura se puede entender más certeramente la escasa afición del campesinado a contar con los servicios y el asesoramiento de dicha institución pese a que su función básica fuera la extensión de la previsión social al campo.<sup>215</sup> Y así, los datos disponibles nos ponen de manifiesto que el campo de aplicación general de los seguros abarcaba en 1953 a algo más de 873.000 agricultores en un momento en que la población española superaba los 27 millones de habitantes y el total de trabajadores en el campo ascendía a 4.901.040.<sup>216</sup>

Sin embargo, dejando aparte esta descoordinación de criterios entre organismos creados para un fin idéntico o similar, la problemática en torno a la cuestión del establecimiento de un sistema de previsión radicaba en que en el año 1955, como mínimo, se era totalmente consciente del

incumplimiento de los principios de la carta magna de la política social del régimen. Nos referimos, por supuesto, al Fuero del Trabajo, y concretamente al hecho evidente de que el trabajador del campo español seguía sin avanzar de forma significativa en la elevación de su nivel de vida fruto, entre otros motivos, de la política de previsión aplicada a otros sectores laborales.<sup>217</sup> Para el final de 1954 oficialmente existían 1.770.703 trabajadores del campo que podían percibir algunos de los beneficios de los seguros del sistema de previsión español; en 1955 la cifra oficial ascendía a 2.006.549 trabajadores autónomos del campo español.<sup>218</sup> Entre los pretextos que utilizaba el I.N.P. para justificar la no aplicación al campo de los seguros se citaba la resistencia a la inscripción, la mentalidad de los trabajadores agrícolas, la morosidad o la desconfianza del sistema. Sin embargo, habría que introducir nuevos factores como la depuración del censo de agricultores del seguro de vejez que supuso para muchos el quedar en la más absoluta indigencia.<sup>219</sup> O el hecho de que en muchos municipios la valoración del líquido imponible era muy superior a las rentas de rústica y pecuarias y que, por tanto, se sobrepasaba en muchos casos las 2.500 pts. por lo que el trabajador en su día no podría percibir el subsidio de vejez en el caso de que persistieran dichos topes.<sup>220</sup> No podemos olvidar el hecho, quizás más evidente todavía, de que muchos de estos trabajadores tenían unos niveles de renta real que hacía verdaderamente indispensable el procurar no caer en las manos del "control" del I.N.P. por la necesidad de cubrir sus necesidades materiales más inmediatas.

Entre otras cuestiones en el I Congreso Sindical Agrario de Levante,<sup>221</sup> celebrado en Valencia en marzo de 1951, se reclamaba la implantación del seguro de enfermedad obligatorio para los trabajadores agrícolas y la equiparación del seguro de accidentes de la agricultura<sup>222</sup> al de la industria dado que las prestaciones de aquellos procedentes del aparato de previsión social franquista eran extraordinariamente menores que las percibidas por los trabajadores del sector secundario así como la creación de un montepío laboral agrícola y la implantación de la cartilla profesional agrícola. Esta realidad era reconocida por el propio ministro de Trabajo en su discurso ante la III Asamblea de Delegados Provinciales de Trabajo de la Escuela de Capacitación Social de Trabajadores celebrada el 25 de mayo de 1953 en la que se afirmaba lo siguiente:

"...es verdad que millares de labriegos, que envejecen en caminatas tremendas bajo los cielos o bajo los soles abrasadores, no están cubiertos por la protección ni poseen sistemas de defensa perfectos y seguros contra la adversidad. Y ésta es otra tarea, camaradas."<sup>223</sup>

Por ello se puede afirmar que, en líneas generales, los planteamientos de este primer franquismo social en torno a la seguridad social en el campo estaban cargados de un profundo sentimentalismo y de un voluntarismo no compaginado con una efectiva acción política que



conducía, en los congresos en que se trataban este tipo de cuestiones,<sup>224</sup> a afrontar el tema con sentimentalismos alancetando al campo español con una abundante lista de buenos deseos y de prestaciones idílicas que se escapaban de toda posibilidad práctica y que sólo tenían como resultado la llegada tardía de los proyectos del ministerio de Trabajo en el mejor de los casos.<sup>225</sup> Y es que en lo referente a los seguros sociales, en general, las diferencias en la industria y la agricultura eran muy acusadas. Pongamos un ejemplo concreto: mientras las indemnizaciones en caso de incapacidad permanente y muerte se establecían en concepto de rentas en el caso de la industria, en la agricultura dichas indemnizaciones se fijaban a tanto alzado lo cual constituía un tipo de cobertura indiscutiblemente menor y el desamparo absoluto del trabajador en otros tantos casos.

Sólo con la promulgación del Decreto de 5 de septiembre de 1958, por el que se estableció en la Dirección General de Previsión el Servicio Nacional de Seguridad Social Agraria, comenzó a paliarse ligeramente la mala situación del campo en cuanto al desarrollo y aplicación de los seguros, en la medida en que se le encomendaba la aplicación efectiva de las normas sobre seguridad social existentes y aplicables al campo así como la creación de la Mutualidad Nacional de Previsión Agraria (Decreto de 23 de abril de 1959).<sup>226</sup>

### Notas

<sup>1</sup> Furniss, Norman y Tilton, Timothy: *The Case for the Welfare State. From Social Security to Social Equality*. Bloomington, 1977; citado en A. Ritter, Gerhard: *El Estado social, su origen y desarrollo en una comparación internacional*. Madrid, ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991, pág. 27.

<sup>2</sup> Ridruejo, Escrito en España..., op. cit., pág. 135.

<sup>3</sup> Ridruejo, Escrito en España..., op. cit., pág. 134.

<sup>4</sup> Benito del Pozo, *La clase...*, op. cit., pág. 325.

<sup>5</sup> Girón, *Si la memoria...*, op. cit., pág. 157.

<sup>6</sup> De la Fuente, Alfonso: Consigna: El Estado, las empresas y los seguros. BIINP, núm. 8-9, vol. 2, 1942, pág. 4.

<sup>7</sup> A. Ritter, *El Estado social...*, op. cit., pág. 37.

<sup>8</sup> Franco, Francisco: Discurso en su visita al I.N.P., 27 de marzo de 1942. BIINP núm. 3, vol. 1, 1942, pág. 3.

<sup>9</sup> Perpiñá Rodríguez, Antonio: El sujeto protegido por las leyes de previsión social. Conceptualismo jurídico y finalidad social. BIINP, núm. 7-8, vol. 2, 1945, pág. 1.313.

<sup>10</sup> El subrayado es nuestro. Función política de la política social por el Ilmo. Sr. D. Marcelo Catalá Ruiz. ministerio de Trabajo. Madrid, 1952, pág. 17.

<sup>11</sup> *Función política de la política social...*, op. cit., pág. 10.

<sup>12</sup> Benito del Pozo, *La clase...*, op. cit., pág. 407.

<sup>13</sup> Fernández Heras, *Tratado práctico...*, op. cit., pág. 190.

<sup>14</sup> Serrano Guirado, Enrique: Las relaciones humanas en la seguridad social. Madrid, ministerio de Trabajo, 1959, pág. 5. En las páginas de esta autor se defendía la idea del aparato de previsión social como la materialización del espíritu cristiano y de la hermandad entre el colectivo nacional y un mecanismo en el que "la planificación es un modo a través del cual la administración configura la sociedad de nuestros días..." Ídem, pág. 46.

<sup>15</sup> Franco. La obra social de España. RT, núm. 10, vol. 1, 1943, pág. 2. Discurso el 1 de octubre de 1943 ante el Consejo Nacional de F.E.T. de las J.O.N.S.

<sup>16</sup> Girón: Revista "El Español". RT, núm. 2, vol. 1, 1954, pág. 172.

<sup>17</sup> I Congreso Iberoamericano de Seguridad social; se celebra entre el 23 de mayo al 3 de junio de 1951. RT, núm. 5, vol. 1, 1951, pág. 441.

<sup>18</sup> Alonso Olea, Instituciones de Seguridad Social..., op. cit., pág. 3.

<sup>19</sup> Citado por Fernández Heras, Amado y Fernández Mendiola, Amado, en Derecho laboral y seguridad social. Madrid, Gráficas Reunidas, 1960, pág. 137-138.

<sup>20</sup> "...lo que la sociedad no pague en un sistema de previsión eficiente, lo pagará irremediabilmente en merma de la capacidad productiva y, en lo que es su más inevitable consecuencia, en la desintegración social, que genera el abandono de este deber humano. Para la consecución de esta finalidad no son plenamente aptos los sistemas de seguro social existentes; todos ellos son sistemas de protección condicionada, tanto por su duración como por su cuantía. El resultado es, las más de las veces, el abandono de la población enferma a su propia suerte, tras de una protección deficiente para la integridad del restablecimiento orgánico." Mingarro y San Martín: José. Síntesis de la doctrina de la seguridad social. RT, núm. 7-8, vol. 2, 1949, pág. 624.

<sup>21</sup> Aranzadi, 230/1938.

<sup>22</sup> Hay que hacer una especial mención al hecho de que la creación más novedosa del período Girón (el seguro obligatorio de enfermedad) no se menciona en el Fuero del Trabajo.

<sup>23</sup> Martí Buñil, Carlos: Presente y futuro del seguro social. Madrid, Studium, 1947, pág. 15.

<sup>24</sup> Arnaldos Gimeno, Los seguros sociales en los estados totalitarios..., op. cit., pág. 193-196. A ello se une la influencia del Estatuto do Trabalho Nacional portugués aprobada por el Decreto-Ley de 23 de septiembre de 1933.

<sup>25</sup> Arnaldos Gimeno, Los seguros sociales en los estados totalitarios..., op. cit., pág. 349.

<sup>26</sup> López Valencia, Jalones de una Reforma Social..., op. cit., pág. 109.

<sup>27</sup> Aparte de influencias más concretas no podemos olvidar que las medidas en favor de la previsión por parte de los poderes públicos no dieron comienzo hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Y que el primer Estado que desarrolló un sistema de seguros sociales fue la Alemania bismarckiana. Su pistoletazo de salida fue dado por el emperador Guillermo I con un discurso dirigido al Reichstag. A raíz de este discurso se estableció el seguro de enfermedad en 1883, el seguro de accidentes en la industria en 1889 y el de vejez e invalidez en 1889. García Oviedo, Carlos: La seguridad social y el derecho del trabajo. RESS, núm. 10, vol. 2, 1950, pág. 1.550.

<sup>28</sup> Beveridge, William: Seguro social y servicios afines. Madrid, ministerio de Trabajo y Seguridad, 1989, pág. 15. Ver también Informe acerca del proyecto británico Beveridge de seguridad social, 21 de marzo de 1943 en Documentos inéditos..., Tomo IV, op. cit., pág. 188-196.

<sup>29</sup> Barceló, José Luis: La seguridad social en la postguerra. RESS, núm. 7-8, vol. 2, 1948, 1.473. Ashford pone de manifiesto la decisiva influencia que el miedo al desorden social o la inquietud de la masa en el desarrollo del estado del bienestar. Su afirmación se basa en la idea de que esta aportación es fruto de la democracia movida por los resortes mencionados pero nos parece que el planteamiento inicial es igualmente aplicable a estados autoritarios como el franquista. E. Ashford, Douglas: La aparición de los estados de bienestar. Madrid, ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989, pág. 15. "...se ha llegado a él (estado del bienestar) a través de un proceso gradual y a menudo uniforme, impulsado tanto por políticos ambiciosos y funcionarios más o menos visionarios, como por la noción abstracta de un orden social en crisis o por los temores a una gran inquietud social."

<sup>30</sup> Borrajo, Política social..., op. cit., pág. 12.

<sup>31</sup> Pérez González, Esteban: Soluciones a los problemas sociales en la legislación española. RT, núm. 11-12, vol. 2, 1944.1.345-1.347. En este artículo el entonces subsecretario del ministerio de Trabajo situaba los logros españoles en el terreno de la política social al nivel del *New Deal* de los Estados Unidos o de las directrices de la Conferencia de Filadelfia.

<sup>32</sup> Arnaldos Gimeno, Los seguros sociales..., op. cit., pág. 351.

<sup>33</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 123.

<sup>34</sup> Fernández Gléz., Víctor: En torno al concepto de la seguridad social. RT, núm. 3, vol. 1, 1945, pág. 267.

<sup>35</sup> Hernáinz Márquez, Miguel: Tratado elemental de Derecho del Trabajo. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1953, pág. 682.

<sup>36</sup> Ídem, pág. 682.

<sup>37</sup> García Nieto, La España de Franco..., op. cit., pág. 194-198.

<sup>38</sup> Aranzadi, op. cit., 230/1938.

- <sup>39</sup> Alonso Olea, Manuel y otros: La ayuda familiar en el régimen de prestaciones de la seguridad social. En las II Jornadas Técnicas Sociales, Madrid, 1961, pág. 24-25.
- <sup>40</sup> Las Heras, Introducción al bienestar social..., op. cit., pág. 81.
- <sup>41</sup> Hernáinz Márquez, Miguel, op. cit., pág. 702.
- <sup>42</sup> Martín López, op. cit., pág. 162.
- <sup>43</sup> Ríaza Ballesteros, José María: La empresa en el sistema de la seguridad social. RESS, núm. 7-8, vol. 2, 1950, pág. 1.057.
- <sup>44</sup> Bermejo, Francisco: Economía y justicia social. RT, núm. 5, vol. 1, 1950, pág. 394.
- <sup>45</sup> Aznar, Severino: La caridad y el seguro social. RT, núm. 5, vol. 1, 1946, pág. 1.161.
- <sup>46</sup> Por tanto el seguro social era la plasmación del espíritu de hermandad de la colectividad nacional y un factor de cohesión social de los españoles en el "nuevo estado." Casares, Francisco: Los seguros sociales: una base de equilibrio y justicia. BIINP, núm. 12, vol. 2, 1943, pág. 24-25.
- <sup>47</sup> Fernández Gléz., Víctor y Martí Buñill, Carlos: La política de Seguridad social Española y sus realizaciones. Madrid, ministerio de Trabajo, 1953, pág. 16.
- <sup>48</sup> Borrajo, Política social..., op. cit., pág. 64.
- <sup>49</sup> Vannutelli, op. cit., pág. 751.
- <sup>50</sup> Beveridge, Seguro social..., op. cit., pág. 10.
- <sup>51</sup> Dantín Gallego, J.: Posibilidades de la higiene del trabajo en los nuevos seguros sociales. BIINP, núm. 8-9, vol. 2, 1944, pág. 1.067.
- <sup>52</sup> Básicamente el I.N.P. gestionaba el seguro de vejez e invalidez, el subsidio familiar, el seguro de accidentes del trabajo, el de enfermedades profesionales, parte del S.O.E. y los seguros libres. El servicio de montepíos y mutualidades laborales dependía del I.N.P. y controlaba la gestión del mutualismo laboral. Paralelamente la organización sindical prestaba el aparato de la O. S. de Previsión Social para desarrollar los seguros en el campo. Las entidades colaboradoras tenían un especial papel en el desarrollo del S.O.E. en la medida en que gestionaban parte del mismo bajo la supervisión de la Caja Nacional del S.O.E. del I.N.P.. Las empresas se hacían cargo, a través de comisiones distribuidoras especiales, de la distribución del plus familiar.
- <sup>53</sup> Correspondencia del Sindicato Vertical del Seguro al Director General de Seguros y Ahorro, de 26 de septiembre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/202 (nº 96).
- <sup>54</sup> Beveridge, Seguros sociales..., op. cit., pág. 23.
- <sup>55</sup> Véase la obra coordinada por María Dolores Gómez Molleda, "Los Seguros sociales en la España del siglo XX", 3 vol., Madrid, ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988.
- <sup>56</sup> Beveridge, Seguro social, op. cit., pág. 6.
- <sup>57</sup> Ídem, pág. 8-9.
- <sup>58</sup> Jordana de Pozas, Luis: La función de la empresa en la seguridad social de nuestros días. Madrid, ministerio de Trabajo., 1959, pág. 13-18.
- <sup>59</sup> Discurso del Caudillo, 18 de julio de 1944. RT, núm. 7, vol. 2, 1944.
- <sup>60</sup> "...cuantos avances y mejoras se proponen en el régimen, prestaciones y gestiones de los actuales Seguros y Subsidios Sociales, jamás podrán lograrse simultáneamente fuera de un sistema fundado en la más completa hermandad de todos los españoles, orientado en lo jurídico dentro de un régimen de obligatoriedad y en lo financiero sobre una conjunta consideración de los riesgos cuya cobertura se estima indispensable..." I Congreso Nacional de Trabajadores. Conclusiones. Delegación Nacional de Sindicatos; Vicesecretaría Nacional de Ordenación Social, 1946, A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.393, pág. 63.
- <sup>61</sup> Llorens, La primera década..., op. cit. pág. 158.
- <sup>62</sup> Aznar Gerner, Sara: El Seguro social de los económicamente débiles. RESS, núm. 1-2, vol. 1, 1951, pág. 34.
- <sup>63</sup> Mensaje de Girón el 18 de julio de 1956. C.N.S. de Madrid.
- <sup>64</sup> Mingarro, Síntesis de la doctrina de la seguridad social..., op. cit., pág. 628.
- <sup>65</sup> II Congreso Nacional de Trabajadores. D.N.S.; V.N.O.S. Comisión 4ª: Seguridad Social. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.388.
- <sup>66</sup> IV Congreso Sindical Agrario de Castilla la Nueva y Albacete. Conclusiones. Cuenca, octubre de 1956. Ponencia IX: Seguridad social para los trabajadores agrícolas. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.753.
- <sup>67</sup> Informe sobre la seguridad social de los trabajadores del campo. s/f. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 2334.1, pág. 3.
- <sup>68</sup> Correspondencia de Solís Ruiz a los delegados sindicales de provincias, 22 de octubre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/243, nº 112. En esta misma línea estaba el recelo del Delegado Nacional en oficio

enviado al Presidente del I.N.P. insistiendo en las mismas demandas que ya se habían proclamado en el Consejo Político Sindical, en el Congreso de la Falange y en el III Congreso Nacional de los Trabajadores:

“Ha sido motivo de constante preocupación para nuestra Organización, la intervención que en la aplicación práctica de las distintas normas sobre los Seguros Sociales en la rama especial agropecuaria han de tener las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos en el ámbito provincial”

Correspondencia del D.N.S. con el Presidente del I.N.P., 9 de diciembre de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/292, nº 9, 7-7ª.

<sup>69</sup> “El criterio sustentado por el I.N.P., para la concesión del subsidio de vejez a los titulados autónomos, está creando un ambiente político en nuestra contra pues en casi todas las ocasiones es denegado en unos casos porque no emplean noventa jornales al año y falta la habitualidad y en otros por el contrario por existir un poco más de tierra y estimar que tienen beneficios superiores a la irrisoria cantidad de 2.500 pts. Todos nuestros esfuerzos para aumentar el censo laboral agrícola se están volviendo ineficaces, y lo que es peor se está perdiendo la fe en nosotros.” El subrayado es nuestro. Delegado Provincial Sindical de Castellón, diciembre de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.922.

<sup>70</sup> Morón Albar, Gabriel: Los trabajadores de las cooperativas ante los seguros sociales. RT, núm. 2, vol. 1, 1952, pág. 128.

<sup>71</sup> P. Arnaldos: Extensión de los seguros sociales obligatorios al personal del servicio doméstico. BIINP., núm. 4, vol. 1, 1946, pág. 841.

<sup>72</sup> P. Arnaldos, Extensión de los seguros..., op. cit., pág. 847.

<sup>73</sup> En el caso de la ley de accidentes de trabajo de 8 de octubre de 1932, su artículo 8º establecía el siguiente criterio cuanto a la inclusión del trabajo doméstico: “...el que se presta mediante jornal, sueldo, salario o remuneración de otro género, o sin ella, y que se a contratado, no por un patrono, sino por un amo de casa que no persiga fin de lucro, para trabajar en una casa o morada particular al servicio exclusivo del contratante, de su familia, de sus dependientes, bien se alberguen en el domicilio del amo o fuera de él.”

<sup>74</sup> Martín de Nicolás, Isidro: El servicio doméstico en su relación con los seguros sociales. RT, vol. 1, 1943, pág. 31.

<sup>75</sup> Pérez Gléz., Aspecto social del servicio doméstico..., op. cit., pág. 123.

<sup>76</sup> Nota para el Consejo de ministros sobre el anteproyecto de orden ministerio creando el Montepío Nacional de los servidores domésticos, Madrid 5 de febrero de 1959. Informe de la organización sindical. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 58.02, 4.325.

<sup>77</sup> Bernal Martín, Salvador: Los trabajadores eventuales y el seguro obligatorio. RESS, núm. 10, vol. 2, 1948, pág. 2.053-2.054.

<sup>78</sup> Girón: Discurso ante Franco en su visita al I.N.P., 27 de marzo de 1942. BIINP núm. 3, vol.1, 1942, pág. 5.

<sup>79</sup> I Congreso Sindical Agrario de Levante. Valencia, marzo de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/162.

<sup>80</sup> Parte reservado de la Secretaría Nacional elevado por el Jefe del Sindicato de Actividades Diversas al Vicesecretario Nacional de Obras Sindicales el 9 de diciembre de 1950. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.02, nº 8042.

<sup>81</sup> Correspondencia del Sindicato de la Piel de 8 de noviembre de 1951. A.G.A.; I.D.D. 136.01, nº 3954.

<sup>82</sup> Correspondencia de Jefe Nacional Obra Sindical de Previsión Social al Delegado Nacional de Sindicatos de 16 noviembre de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D.; 90.02 r/46 nº 67(3ª).

<sup>83</sup> El sistema de financiación de la época Girón era un híbrido en el sentido de que existía el sistema de reparto y el de capitalización complementado con las reservas técnicas sometidas a un régimen de inversión reglamentado que, por ejemplo, en 1950 (sin incluir a montepíos y mutualidades laborales) ascendía a 2.831.676.652,34 pts. cantidad superior al importe de las prestaciones totales realizadas en un sólo año como el mencionado. Nueva orientación sobre la Seguridad social. III Pleno del Consejo Económico Sindical de Burgos, febrero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.567.

<sup>84</sup> De U., J. A.: Problemas Financieros del seguro de enfermedad. RESS, núm. 6, vol. 1, 1948, pág. 1.024-1.025.

<sup>85</sup> “Dentro de pocos años el volumen de su crecimiento será tal, que el instituto no tendrá recursos para pagarlos sino se pone remedio al mal...O el seguro total ha de vivir de sus propios recursos o ha de tener como almohada el Tesoro Público. Si lo primero, tiene que establecer reservas monumentales indispensables para enjugar los tremendos aumentos de su coste, previsto en el ejemplo anterior. Si lo segundo, hay que ser leal con el Estado y decirle lo que se espera, y entonces no hay ministro de Hacienda

ni Gobierno que se decida a ese suicidio." Aznar, Severino: *El sistema de reparto o el de capitalización en los seguros sociales*. RESS, núm. 1-2, vol. 1, 1947, pág. 8.

<sup>86</sup> De Ipiña, Francisco: *El equilibrio financiero en la ordenación técnica de los seguros sociales*. RESS, núm. 11, vol. 2, 1947, pág. 762.

<sup>87</sup> París Eguilaz, Higinio: *Los seguros sociales y la economía española*. Madrid, 1951, pág. 60.

<sup>88</sup> Boletín, 23; Aranzadi 751.

<sup>89</sup> B.O.E. del 18 de enero de 1949, Aranzadi, 74.

<sup>90</sup> Langa García, Luis: *El salario base de cotización para los sistemas de previsión social obligatoria*. Madrid, ministerio de Trabajo, 1960, pág. 11.

<sup>91</sup> Nueva orientación sobre la Seguridad Social. III Pleno del Consejo Económico Sindical de Burgos, febrero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.567.

<sup>92</sup> Información General de la provincia de Valladolid, 31 de enero de 1942. Documentos inéditos..., Tomo III; op. cit., pág. 365.

<sup>93</sup> Berito del Pozo, Ideología y trabajo..., op. cit., pág. 326.

<sup>94</sup> Perpiñá Rodríguez, Antonio: *New Deal en la Previsión Social Española. Comentario a las disposiciones recientes sobre financiación de los Seguros Sociales*. RT, núm. 7-8, vol. 2, 1956, pág. 619.

<sup>95</sup> Rodríguez, Federico: *Tendencias actuales de la política social*. Madrid, Ateneo, 1955, pág. 34.

<sup>96</sup> Perpiñá Rodríguez, New Deal..., op. cit., pág. 628.

<sup>97</sup> Perpiñá Rodríguez, New Deal..., op. cit., pág. 632.

<sup>98</sup> A continuación se presentan los resultados financieros de los distintos seguros sociales en 1956.

Seguros	Resultados corrientes
Seguros voluntarios	3.050.343
Amortización de préstamos	870.963
Accidentes de trabajo	- 5.805.307
Vejez e invalidez	- 481.711.285
Ampliación de beneficios a la vejez	- 18.712.833
Subsidios familiares	377.935.365
Seguro de Enfermedad (sólo el gobernado por el I.N.P.)	- 94.185.549
Paro tecnológico	21.721.870
Total	- 196.835.432

Los resultados de 1956 supusieron un déficit cifrado en 196.835.432 pts. El déficit parcial se cubrió por el sistema compensación entre los distintos seguros y el déficit global por medio de la descapitalización con lo cual las inversiones y la tesorería disminuyeron con respecto a 1955 en 275.000.000 de pts. según datos oficiales. Clavera, Esteban, Monés, Montserrat, Ros Hombravella. *Capitalismo español: De la autarquía a la estabilización (1939-1959)*. 2 vol. Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1973, pág. 149.

<sup>99</sup> Dichos criterios debían ser revisados antes del 31 de diciembre de 1956 con la consiguiente sensación de interinidad de dicha política y con el antecedente de un Decreto que, como el de 23 de marzo de 1956, tuvo tan escasa vigencia temporal. Correspondencia del Jefe Nacional del Sindicato de Cereales (Aquilino Salgado Bravo) a la Secretaría Nacional de Sindicatos, 13 de noviembre de 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.351.

<sup>100</sup> Rull Sabater, A.: *Consecuencias fiscales de una mayor participación del Estado en la financiación de la Seguridad Social*. Revista de Trabajo, Madrid, 1970. Citado en Clavera y otros.

<sup>101</sup> Idem, pág. 40.

<sup>102</sup> Fernández Heras, Derecho laboral..., op. cit. pág. 148-149.

<sup>103</sup> La única excepción se refería a la parte del plus que incrementara las pagas extraordinarias de 18 de julio y Navidad. En Informe sobre Cotización por seguros sociales de los pluses de carestía de vida, Madrid, 2 de septiembre de 1952. A.G.A.; I.D.D. 90.01, nº R/231, nº 69.

<sup>104</sup> Decreto de 21 de agosto de 1956, B.O.E. del 20 de noviembre.

<sup>105</sup> Los informes reservados de la C.N.S. de Alicante de 1951 ponían de manifiesto el retraso en el pago de las prestaciones del subsidio familiar y del de vejez, ambos con dos meses de retraso en diciembre de 1951. Informes reservados de la C.N.S. de Alicante, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/212.

<sup>106</sup> Este es el caso de los trabajadores de las cuencas ligníferas de Torrente del Cinca (Huesca). La empresa, pese a que formalmente afirmaba que los trabajadores cobraban a jornal, mantenía un sistema a destajo que provocó la intervención de la delegación de trabajo sin que por ello llevara hasta el fin las

sanciones posibles por el chantaje de la empresa. "La Delegación de Trabajo de Huesca, rechazando la voluntariedad de tales primas, calificó como de destajo el sistema de trabajo para regularizar las declaraciones en libros oficiales y levantando incluso diferentes Actas de Infracción, que no se consiguieron hacer efectivas debido a las malas condiciones económicas en que se desenvuelven las empresas y el peligro de que planteando expedientes de crisis, cerrasen las explotaciones y dejaran en paro a los trabajadores que mantienen a su servicio, con los consiguientes perjuicios y conflictos de carácter político y social." V.N.O.E., 24 de marzo de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 3.954, sin referencia.

<sup>107</sup> Este aspecto está desarrollado en las siguientes disposiciones: Orden de 11 de octubre de 1943, resoluciones de la Dirección General de Previsión de 29 de marzo, 14 y 23 de mayo, 19 y 21 de julio y 14 de septiembre de 1947.

<sup>108</sup> De Cuenca y Gléz.-Ocampo, Juan Antonio: Cotización de primas en la seguridad social. RESS, núm. 1-2, vol. 1, 1951, pág. 52.

<sup>109</sup> Álvarez Ude, José: Los criterios financieros de los seguros sociales. Madrid, M. de Trabajo, 1946, pág. 15-16.

<sup>110</sup> A.P.G.; S.G.A.; Leg. 69, nº 1. B.O.E. de 31 de diciembre de 1955.

<sup>111</sup> Beveridge, Seguro social..., op. cit., pág. 77.

<sup>112</sup> Ídem, pág. 206.

<sup>113</sup> Ídem, pág. 77.

<sup>114</sup> Ídem, pág. 78-79.

<sup>115</sup> Ídem, pág. 222.

<sup>116</sup> Ídem, pág. 217.

<sup>117</sup> I.N.P.; ministerio de Trabajo. Comisión revisora de los balances del Instituto Nacional de Previsión. Informe 1944-1945. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/173.

<sup>118</sup> Sesión llevada a cabo el 30 de noviembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/173.

<sup>119</sup> Memoria del balance técnico general del I.N.P. correspondiente al ejercicio de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02 R/237, 97-7<sup>a</sup>

<sup>120</sup> En último lugar los ingresos por accidentes de trabajo ascendían a 615.988.000 pts. Presupuesto general del I.N.P. para 1955, A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, t/ 269. Y también en Liquidación del presupuesto general del I.N.P. de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/ 308.

<sup>121</sup> París Eguilaz, Los seguros sociales..., op. cit., pág. 87-88.

<sup>122</sup> "La política de seguridad social, integrante de la política de seguros sociales y de la de salarios, está siendo objeto de las más enconadas críticas..." Domínguez y Tenreiro, Francisco: Necesaria coordinación entre la política económica y la de seguridad social. RT, núm. 6, vol. 1, 1953, pág. 693-695.

<sup>123</sup> Mallart, José: Posibilidades económicas de la seguridad social. BIINP, núm. 12, vol. 2, 1944, pág. 1.555.

<sup>124</sup> París Eguilaz, Los seguros sociales..., op. cit., pág. 29.

<sup>125</sup> Lasheras Sanz, Antonio: Contribución al estudio de los métodos de financiamiento de los seguros sociales. RT, núm. 7-8, vol. 2, 1950, pág. 550.

<sup>126</sup> París Eguilaz, Sentido y límites de la política social..., op. cit., pág. 10-71.

<sup>127</sup> "...no se debe aumentar el volumen actual de fondos de los seguros sociales, podría ser un factor de inestabilidad económica y de freno al progreso en el aumento de renta real," afirmaba París. París, Seguros sociales y estabilidad económica..., op. cit., pág. 9.

<sup>128</sup> Pérez Leñero, José: Fundamentos de la seguridad social. Madrid, Aguilar, 1956, pág. 240.

<sup>129</sup> Incluido el recargo para amortización del Plan de Instalaciones.

<sup>130</sup> Incluido el recargo para amortización del Plan de Instalaciones.

<sup>131</sup> Nos referimos a pts. trimestrales.

<sup>132</sup> Variable, según riesgo.

<sup>133</sup> Variables, según el reparto de cobertura de renta.

<sup>134</sup> París Eguilaz, Los seguros sociales..., op. cit., pág. 29.

<sup>135</sup> Se está considerando el ejemplo de un empleado del sector siderometalúrgico, oficial de 2<sup>a</sup> cuyo lugar de trabajo estaba en la zona 1<sup>a</sup> de las cinco que comprendía su reglamentación. Se considera igualmente que ha trabajado todo el año sin interrupción (es decir, 365 días menos 52 domingos, 8 fiestas no recuperables y 10 días de vacaciones, en total 265 días). Dicho trabajador ha trabajado a jornal y prima, obteniendo un rendimiento en esta última mínimo del 25 % del jornal base. Su jornada es normal y no ha realizado horas extraordinarias. No recibe pluses de nocturnidad, penosidad, toxicidad o peligrosidad. Su salario base fijado por la reglamentación vigente en 1953 fue de 19,75 pts./día (aunque dicho cálculo se realiza sobre 20). Se considera, igualmente, que su antigüedad en la empresa es de 12 años. Alonso Olea, Manuel: Salarios y seguridad social. RISS, núm. 2, 1953.

- <sup>136</sup> Alonso Olea, Manuel: Salarios y seguridad social. RISS, núm. 3, 1954.
- <sup>137</sup> Alonso Olea, Salarios..., 1955, op. cit..
- <sup>138</sup> Alonso Olea, Manuel: Salarios y seguridad social. 1956. RISS, núm. 2, 1956.
- <sup>139</sup> Alonso Olea, Manuel: Salarios y seguridad social. 1957. RISS, núm. 1, 1957.
- <sup>140</sup> 20 pts de jornal base diarios multiplicado por 295 días.
- <sup>141</sup> 25 por 100 del jornal base multiplicado por 295 días.
- <sup>142</sup> 52 domingos por 20 pts. de jornal.
- <sup>143</sup> 8 fiestas por 20 pts.
- <sup>144</sup> 10 días de vacaciones por la suma de 20 pts. de jornal diario, más 5 pts. de prima diaria.
- <sup>145</sup> 10 días de gratificación de Navidad, más 10 días de gratificación de 18 de julio, por 20 pts. de jornal diario.
- <sup>146</sup> Como el plus de carestía de vida se tiene en cuenta para el pago de domingos, fiestas, vacaciones y gratificaciones de Navidad y 18 de julio, e importa el 25 por 100 del salario base, multiplicamos 5 (25 % de 20) por 385 días.
- <sup>147</sup> Como los quinquenios se tienen en cuenta para el pago de domingos, fiestas, vacaciones y gratificaciones de Navidad y 18 de julio e importan cada uno el 5 por 100 del salario base, y por hipótesis, nuestro trabajador tiene acreditados dos, multiplicamos 2 (10 por 100 de 20 pts) por 385.
- <sup>148</sup> 4 % de la suma de todos los conceptos de remuneración, salvo el plus de carestía de vida.
- <sup>149</sup> 6 % sobre la misma base del anterior.
- <sup>150</sup> 3% sobre la misma base.
- <sup>151</sup> El 8 % sobre todos los conceptos de remuneración, incluido el plus de carestía de vida.
- <sup>152</sup> 8 % de la suma de todos los conceptos de remuneración, salvo el plus de carestía de vida.
- <sup>153</sup> 15 por 100 sobre todos los conceptos de remuneración, incluido el plus de carestía de vida.
- <sup>154</sup> 1,5% sobre la suma de todos los conceptos de remuneración, salvo el plus de carestía de vida.
- <sup>155</sup> En este año dentro de la organización sindical se recalca la gravedad del hecho de que la aportación del Estado a la financiación de los seguros siguiera descendiendo. Téngase en cuenta que en 1950 la aportación estatal ascendió a 36.125.000,00 pts.; dicha cantidad superaba levemente el 10 % de los gastos de administración. Sin embargo, de 1941 a 1951 se duplicó el gasto de administración sin que aumentase la aportación estatal lo cual hacía que fueran las cuotas las que sustentasen el gravoso sistema administrativo (el 2 % de las cuotas de accidentes de trabajo; el 9 % desde el Decreto de 29 de diciembre de 1948 para el subsidio familiar, seguro de enfermedad y seguro de vejez, aunque antes fue el 10 %. En el caso del seguro de enfermedades profesional se fijaba el coste de la administración anualmente. Los montepíos y mutualidades tienen un límite en el 5 %. La aportación del Estado en 1940 había sido de 24.018.000,00 pts., en 1945 de 124.066.400,00 pts., en 1948 de 83.802.393,82 pts. y en 1949 de 103.786.400,65 pts. Nueva orientación sobre la Seguridad social. III Pleno del Consejo Económico Sindical de Burgos, febrero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.567.
- <sup>156</sup> Tal y como imponían los Decretos de 16 de enero de 1948 y 23 octubre de 1953.
- <sup>157</sup> El 0,8 % era aportado por la empresa y el 0,2 por el trabajador. La recaudación se repartía de la siguiente forma: ministerio de Educación Nacional 40 %, Secretaría General del Movimiento 40 %, ministerio de Agricultura 10 %, y ministerio de Trabajo 10 %.
- <sup>158</sup> B.O.E. del 25 de julio de 1954.
- <sup>159</sup> La cuota se gira sobre todos los conceptos de remuneración que en él se consideran salvo el plus de carestía de vida.
- <sup>160</sup> Según la modificación para los productores que trabajen a prima, tarea o destajo, el plus de carestía de vida, en la parte en que integra las mencionadas gratificaciones, ha de calcularse sobre el 12 % del salario base, mientras que dicho plus integrante de las gratificaciones se calculaba pura y simplemente sobre este salario base.
- <sup>161</sup> En 1955 las deducciones de las remuneraciones por los conceptos de los seguros sociales eran las siguientes: 1 % con destino al subsidio familiar (no se computa el plus de carestía de vida), el 3 % para el seguro de enfermedad, 1 % para el seguro de vejez e invalidez, 3 % para la mutualidad laboral, 0,5 % para cuota sindical y 0,2 % con destino a formación profesional.
- <sup>162</sup> Ya en el III Congreso Nacional de Trabajadores la organización sindical en su comisión 7ª sobre la Seguridad Social se hacía eco de la necesidad de la aportación del Estado con fondos propios a los seguros sociales de forma que la política de previsión social fuese mantenida por la política fiscal. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02 1/280.

Seguros	Empresa	Empresa	Empresa	Trabajad or	Trabajad or	Trabajad or	Total	Total	Total
	En 31-3-56	En 1-4-56	En 1-11-56	En 31-3-56	En 1-4-56	En 1-11-56	En 31-3-56	En 1-4-56	En 1-11-56
Subsidio Familiar	4	1	4	1	1	1	5	2	5
Seguro de Enfermedad	7	0,5	5	3	1,5	2	10	2	7
Seguro de Vejez e Invalidez	5	0,5	3	1	1,5	1	6	2	4
Cuota Sindical	1,5	1,5	1,5	0,5	0,3	0,3	2	1,8	1,8
Formación Profesional	1,3	1	---	0,2	0,2	---	1,5	1,2	---
Paro Tecnológico	0,35	---	1,2	---	---	0,2	0,35	---	1,2
<b>TOTAL</b>	<b>19,15</b>	<b>4,5</b>	<b>14,5</b>	<b>5,7</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>24,85</b>	<b>9</b>	<b>19</b>

<sup>164</sup> Los seguros sociales y las primas a la productividad. Madrid, agosto de 1955. Vicesecretaría Nacional de Ordenación Económica. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N/171-55.

<sup>165</sup> "...las noticias allí recibidas son de carácter privado, que es grande el malestar que existe entre empresarios y trabajadores y que su propósito es desplazar a una comisión a esta capital para celebrar entrevistas en la Delegación Nacional de Sindicatos, en la Secretaría General del Movimiento y en el ministerio de Trabajo." Información de Barcelona sobre modificación de la base impositiva de los seguros sociales obligatorios. Madrid, julio de 1955. Vicesecretaría Nacional de Ordenación Económica. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N/121-33.

<sup>166</sup> Cotización por seguros sociales. Madrid, 11 de mayo de 1955. Vicesecretaría Nacional de Ordenación Económica. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N/144-55.

<sup>167</sup> A partir de este momento las cuotas del trabajador serían las siguientes: 1 % con destino a subsidio familiar, 2 % a seguro de enfermedad, 1 % a seguro de vejez e invalidez, 3 % a mutualidad laboral, 0,3 % a cuota sindical y 0,2 % a formación profesional.

<sup>168</sup> El Decreto de 8 de julio de 1956 (B.O.E. del 15 de julio de 1956) derogaba los de 16 de enero de 1948 y 23 de octubre de 1953 y autorizaba a las empresas a establecer libremente y sin la necesidad de la autorización previa del ministerio de Trabajo prestaciones salariales mayores de las generales y establecidas como mínimas en las reglamentaciones laborales.

<sup>169</sup> Informe del Consejo Nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S. en torno a la Ley de Bases de la organización sindical de mayo de 1939. También I Congreso Nacional de Trabajadores. Conclusiones. Delegación Nacional de Sindicatos; Vicesecretaría Nacional de Ordenación Social, 1946. A.P.G.; J.D.N.; Leg. 26, nº 2, pág. 73.

<sup>170</sup> Ídem, nº 46. Carta de J. Molina (Director Gerente de Altos Hornos de Vizcaya) a Carrero Blanco (Subsecretario de Presidencia).

<sup>171</sup> De Miguel, Amando: *Sociología del franquismo*. Barcelona, Euros, 1975.

<sup>172</sup> I Congreso Nacional de Trabajadores..., op. cit., pág. 51.

<sup>173</sup> Informe del ministro de Trabajo, Sr. Girón, sobre obstáculos para la mejora del I.N.P. A.P.G.; J.E.; Leg. 59, nº 2., pág. 1.

<sup>174</sup> Ídem.

<sup>175</sup> Ídem, pág. 2.

<sup>176</sup> Aranzadi, op. cit., 2097/1942.



<sup>177</sup> Ídem, 1535/1943.

<sup>178</sup> Ídem, J.E.; Leg. 59, nº 2, pág. 3. se refiere, claro está, al Jefe del Estado al que iba dirigido el informe al que estamos haciendo alusión.

<sup>179</sup> Ídem, pág. 3.

<sup>180</sup> Ídem, pág. 12.

<sup>181</sup> Ídem, pág. 14.

<sup>182</sup> Ídem, pág. 14.

<sup>183</sup> Ídem, pág. 16.

<sup>184</sup> Ídem, pág. 17.

<sup>185</sup> Ídem, pág. 15.

<sup>186</sup> Ídem, pág. 15.

<sup>187</sup> Ídem, pág. 10.

<sup>188</sup> Correspondencia del Jefe Nacional del Sindicato de Cereales, Amador Villa, de 1 de julio de 1949: "...Poco se ha podido hacer en lo que se refiere a labor asistencial por la carencia de medios económicos...". A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 3.336, pág. 3.

<sup>189</sup> Ídem, pág. 11.

<sup>190</sup> Ídem, pág. 11.

<sup>191</sup> Escrito elevado al Jefe del Gobierno y al ministro de Hacienda por el Comisario del Instituto Nacional de Previsión sobre conveniencia de no aplicar a dicho organismo el proyecto de ley sobre inversiones de fondos y exención tributaria de las entidades administradoras de fondos públicos, 15 de marzo de 1943. A.P.G.; J.E.; Leg. 59, nº 2.

<sup>192</sup> Informe Girón sobre el I.N.P., op. cit., pág. 12.

<sup>193</sup> I Congreso Nacional de Trabajadores..., op. cit., pág. 117.

<sup>194</sup> Nueva orientación sobre la Seguridad social. III Pleno del Consejo Económico Sindical de Burgos, febrero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.567.

<sup>195</sup> Seguridad social para los trabajadores agrícolas. IX ponencia del IV Congreso Sindical Agrario de Castilla la Nueva y Albacete. Conclusiones. Cuenca, 31 de octubre de 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/304, pág. 13.

<sup>196</sup> I Asamblea General del I.N.P., 1953. La Seguridad social de los trabajadores de campo. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/243, pág. 15.

<sup>197</sup> Concretamente se afirma que "en primer lugar las Hermandades Sindicales, lejos de estimarse su participación complementaria, deben ser la base fundamental de este Seguro Social Agrícola. Representan y disciplinan, localmente, los intereses económicos o sociales del agro español y sólo con su colaboración total en esta tarea pueden lograrse resultados positivos en los medios rurales." La seguridad social de los trabajadores del campo, 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/243, pág. 3.

<sup>198</sup> Todo ello a pesar del cúmulo de normas que pretendían servir a la aplicación de los seguros sociales al campo. Entre estas disposiciones destacaremos las siguientes: Ley de 10 de febrero de 1943 (crea el régimen especial de seguros sociales en la agricultura); Decreto de 26 de mayo de 1943 (aprueba el reglamento para la aplicación del régimen especial de seguros sociales en la agricultura); Decreto de 11 de noviembre de 1943 (establece normas para aplicación uniforme a los trabajadores de la escala del subsidio familiar); Decreto de 10 de noviembre de 1944 (fija cuantía de cuota para seguros sociales en la agricultura); Decreto de 11 de septiembre de 1945 (establece cuantía de cuota de empresa para seguros sociales en la agricultura durante el ejercicio de 1946); Orden de 14 de junio de 1946 (regula aplicación en cuentas y el pago al I.N.P. del recargo sobre el líquido imponible de la contribución rústica y pecuaria para atender los seguros sociales en la agricultura); Decreto de 17 de julio de 1947 (modifica los recargos para la exacción de la cuota de empresa del régimen de seguros sociales en la agricultura); Orden de 17 de diciembre de 1947 (procedimiento transitorio para solicitud del subsidio de vejez por los trabajadores agropecuarios); Orden de 3 de febrero de 1949 (establece la cartilla profesional agrícola); Orden 19 enero de 1950 (fija cuota del productor en el régimen especial agropecuario); Orden de 6 de junio de 1950 (incluye en el art. 4 de la Orden de 3 de febrero de 1949 las labores de limpieza, monda y desbroce de acequias, brazales e hijuelas y faenas de riego realizadas a determinados patronos o entidades); Orden de 30 de junio de 1951 (modifica y da nueva redacción al art. 3 de la Orden de 3 de febrero de 1949).

<sup>199</sup> Correspondencia de la D.N.S.; O. S. de Previsión Social (febrero de 1953). A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01; nº R/231, nº 69.

<sup>200</sup> "El número de productores que han solicitado la inclusión en el censo laboral agrícola asciende a 943.445, cifra que rebasa el doble del número de subsidiados actuales..." se afirmaba en el parte mensual de febrero de la O.S. de Previsión Social de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01; nº R/231, nº 69.

<sup>201</sup> Girón: *Contra el apasionamiento en el rencor, el apasionamiento en la hermandad*. RT, núm. 7, vol. 2, 1944.

<sup>202</sup> Girón: *Orientaciones sociales del Gobierno, discurso del Excmo. Sr. ministro de Trabajo en las Cortes españolas*. RT, núm. 11-12, vol. 2, 1944, 1.338.

<sup>203</sup> Informe que formula la O. S. de Previsión Social. Madrid, 12 de octubre de 1942. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 8, 7.591.

<sup>204</sup> Sobre esta cuestión afirmaba la O. S. de Previsión Social: "Es más, si alguna localidad o provincia gracias al esfuerzo de la organización sindical (ahí está el ejemplo de Valladolid) había logrado en la medida de lo posible la implantación del régimen de subsidios familiares en la agricultura, tomando como base las disposiciones generales dictadas y las especiales para la industria, la promulgación del Decreto de 5 de mayo de 1941 ha dado al traste con todo nuestro esfuerzo, pues claro es que los patronos que creyeron que como consecuencia del expresado Decreto iban a imponérseles los gravámenes tributarios que en el mismo se preveían, se negaron a seguir satisfaciendo las cuotas patronales que con carácter voluntario aportaban para la asistencia de los subsidiados... Que el patrono agrícola o pecuario y el obrero de esta empresa tengan que cumplir los requisitos que hoy la Caja Nacional de Subsidios Familiares exige, es desconocer en absoluto lo que el campo es en España e igualmente pretender la exhibición de contratos de trabajo escritos, implica un olvido total de la formación en que la actividad humana se presta en la agricultura y ganadería..." Subrayamos el término asistencia por cuanto de estas líneas se deduce claramente un concepto de previsión social más próximo a la idea de la caridad y la beneficencia que al modelo de justicia social sustentado en las cotizaciones de empresarios, trabajadores y Estado. Por otro lado, se pone de manifiesto el importante papel que desempeñó un sector importante del mundo patronal agrario en el escaso desarrollo de los seguros sociales en el campo y su ligazón con la organización sindical así como, partiendo del escaso desarrollo del mencionado sistema a finales de los 50, la escasa voluntad del gobierno de llevar la previsión social al campo español. Informe que formula la O. S. de Previsión Social. Madrid, 12 de octubre de 1942. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 8, 7.591.

<sup>205</sup> En este sentido al I.N.P. llegaban quejas del sector de la naranja por las deficiencias notables en la elaboración del censo de trabajadores de la rama especial de la naranja elaborada por el Sindicato de Frutos y Productos Hortícolas (en función de la Orden del ministerio de Trabajo de 17 de febrero de 1953) lo cual estaba ocasionando multitud de quejas ante la imposibilidad de dichos trabajadores de recibir los beneficios de los seguros. Oficio del Presidente del I.N.P. dirigido a la D.N.S., 11 de mayo de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/ 269.

<sup>206</sup> I.N.P. Caja Nacional de Subsidios Familiares. Rama Agropecuaria. Depuración del censo de subsidiados; Madrid, 18 octubre de 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 8, 7.593.

<sup>207</sup> "Todos los productores agropecuarios carecen de una protección de tan extraordinario alcance y extensión como el Montepío Laboral, hoy abarcados prácticamente de toda la industria." Congreso Provincial de F.E.T. de la J.O.N.S. Salamanca, octubre de 1953. Ponencia III: La Falange y el sistema económico español. Sindicalismo Nacional. Posiciones del Sindicalismo dentro del Estado. Fines fundamentales de los Sindicatos. Ampliación de la protección social en la industria de la agricultura. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.805.

<sup>208</sup> Congreso Regional Agrario de Andalucía Occidental. Cádiz, 1956. Ponencia IX: La Seguridad Social para los trabajadores agrícolas. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/296, nº 6. En 1956 la población activa del sector agrícola ascendía a 4.099.771 trabajadores: 2.091.779 de trabajadores autónomos (51%), 419.871 fijos (10,2 %) y 1.588.121 eventuales (38,7 %).

<sup>209</sup> "El Consejo Político Sindical considera pendiente la Revolución Nacional en lo que al campo se refiere .. Resulta que todavía funcionan las llamadas Juntas Locales Agrícolas y Juntas Locales de fomento Pecuario y que no hay integración en las Hermandades Locales". I Congreso Político Sindical (1953). A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/221, 4º-2º

<sup>210</sup>

	1952	1953	Total
trabajadores inscritos	601.892	873.942	1.475.834
cotización recaudada	2.114.170	50.904.050	53018220
bajas censo subsidiados del seguro de vejez	-----	13.477	13.477

Comisión especial para aplicación de los seguros sociales en la agricultura. Memoria de las actividades realizadas en 1953, 27 de enero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 8, 7.591. Y es que como se afirmaba desde

los sectores más populistas del sindicalismo español: "...no podrá hablarse de triunfo y realidad de la Justicia Social en España, hasta que no se haya conseguido llevar esta congruente equiparación a los trabajadores agrícolas, ya que en el campo y del campo vive en nuestro país el 65 % de la población total." Congreso Provincial de F.E.T. de la J.O.N.S. Salamanca, octubre de 1953. Ponencia III: La Falange y el sistema económico español. Sindicalismo Nacional. Posiciones del Sindicalismo dentro del Estado. Fines fundamentales de los Sindicatos. Ampliación de la protección social en la industria de la agricultura. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.805.

<sup>211</sup> Sobre cotizaciones de trabajadores agrícolas. ministerio de Trabajo. I.N.P. Dirección de Subsidios y Seguros Unificados, 28 de febrero de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.803.

<sup>212</sup> El subrayado es nuestro. Oficio del Delegado Sindical de Palencia (Armando Fernández Martínez) del 18 de abril de 1955 al Secretario Nacional de Sindicatos (Miguel Vizcaino Márquez). A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.803.

<sup>213</sup> "Existe una red de 386 corresponsales, en cuya designación no se tuvo en cuenta la necesidad de efectuar una adecuada selección, sino que se fue acumulando, en cada localidad, dicho cargo a la persona que ostentaba la Alcaldía, Jefatura Local del Movimiento o Delegación Sindical, no reuniendo bastantes de los corresponsales las cualidades que han de ser exigidas para el desarrollo de la función que hoy tienen encomendada..." Informe general sobre la organización sindical de la provincia de Salamanca, septiembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.805.

<sup>214</sup> Memoria de las actividades desarrolladas por la Obra Sindical de Previsión Social (1941-1963) A.G.A.; S.S.; I.D.D. 72.08, L-1 en topo 36/39.

<sup>215</sup> Memoria de la provincia Zamora, 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 72.04, 718.

<sup>216</sup> Según el Anuario Estadístico de España para 1950 la cifra superaría los 5,2 millones. Sin embargo, para 1953 el censo de las Hermandades da la cifra de 4.289.285; el censo de las delegaciones del I.N.P. daba la cifra de 3.613.207 labradores.

<sup>217</sup> Actas de la reunión de Presidentes de la Sección Social de Toledo celebrada el 19 de febrero de 1955. A.G.A.; I.D.D. 136.01, nº 2.909-2.

<sup>218</sup> Comisión para aplicación de los seguros sociales en la agricultura. Memoria 1955. I.N.P.. Dirección de subsidios y seguros unificados. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 8, 7.591. Según la misma comisión la cifra para el 31 de diciembre de 1954 sería algo menor (1.454.369 agricultores). Comisión para la aplicación de los seguros sociales en la agricultura. Memoria, 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 8, 7.591.

<sup>219</sup> Informes de los consejos provinciales sobre los problemas que plantea la cotización de los trabajadores agropecuarios autónomos; Almería, 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 8, 7.591.

<sup>220</sup> Informes de los consejos provinciales sobre los problemas que plantea la cotización de los trabajadores agropecuarios autónomos; Barcelona, 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 8, 7.591. También en informe de igual año de Guipúzcoa: "...no cotizan porque saben que no van a cobrar. Ello se confirma con el dato de que en la actualidad existen en Guipúzcoa solamente 675 subsidiados de vejez en la rama agrícola."

<sup>221</sup> A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/162.

<sup>222</sup> Para finales del año 1950 la población activa agrícola (de 14 a 64 años) asegurable consistía en 2.040.000 de autónomos (51 %), 440.000 de trabajadores fijos (11 %) y 1.520.000 de eventuales (38 %); en total unos cuatro millones de trabajadores (únicamente agricultores) para un total de 301.700 empresarios.

<sup>223</sup> Girón de Velasco, J. A.: Discurso ante la III Asamblea de Delegados Provinciales de Trabajo el 25 de mayo en la Escuela de Capacitación Social de Trabajadores, RT, núm. 5, vol. 1, 1953, pág. 626.

<sup>224</sup> Nos referimos a la Asamblea del I.N.P.

<sup>225</sup> 2ª ponencia de la I Asamblea General del I.N.P., 1953: La seguridad social de los trabajadores del campo. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/243, nº 112.

<sup>226</sup> El Decreto de 23 de julio de 1959 fijó la cuota de empresarios y trabajadores para sostener el sistema y se aprobaron sus estatutos por Orden de 18 de agosto siguiente. Estas dos disposiciones quedaron en suspenso por Decreto de 29 de octubre de 1959. Creación del Servicio Nacional de Seguridad Social Agraria. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, nº 60.

**ABRIR VOLUMEN 2B**





**ABRIR VOLUMEN 2A**

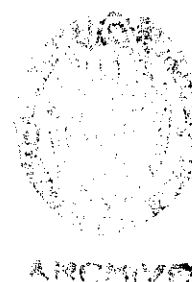
LA POLÍTICA SOCIAL FRANQUISTA: EL MINISTERIO DE JOSÉ  
ANTONIO GIRÓN DE VELASCO (1941-1957)

VOL. 2B



Doctorando: Pedro González Murillo

Director: Dr. D. Antonio Fernández García



Facultad de Geografía e Historia  
Universidad Complutense de Madrid  
Noviembre de 1997

22382  
Ilb

## **Capítulo 14. El Seguro Obligatorio de Enfermedad.**

### **14.1. La evolución legislativa del seguro de enfermedad.**

La primera disposición que hizo alusión al seguro de enfermedad fue el Real Decreto de 5 de marzo de 1910. En el año 1917 se desarrolló una conferencia sobre los seguros sociales convocada por el gobierno para ilustrar al poder público sobre la necesidad de que aquéllos fueran obligatorios y en 1919 se publicó el Real Decreto de 20 de noviembre con un plan de seguros sociales atribuido al I.N.P. en el que se mencionaba la necesidad de un seguro de enfermedad. En el año 1922 el gobierno de España ratificaba el convenio de Washington (1919) en lo referente al tema de la maternidad lo cual dio como resultado la convocatoria de la Conferencia de Barcelona que sirvió para tratar el tema de los seguros de maternidad, invalidez y enfermedad. En dicha conferencia se votaron unas conclusiones que habían de servir teóricamente para encontrar la forma de aplicar dichos seguros. A raíz de esta conferencia se dictó la Real Orden de 27 de agosto de 1923 por la que se abría una información pública sobre el seguro de enfermedad.

De esta forma hasta llegar a la promulgación de la Constitución de 1931 la cuestión del seguro de enfermedad no se volvería a abordar. Al año siguiente, por la ley de 8 de abril se ratificaban dos convenios adoptados en Ginebra en el año 1927. El primero hacía referencia a los trabajadores en la industria, el comercio y a los servidores domésticos; el segundo hacía referencia al tratamiento de los trabajadores agrícolas. Posteriormente la Orden de 10 de mayo de 1932 encargaba al I.N.P. un proyecto sobre el seguro de enfermedad, invalidez y muerte y un estudio sobre la unificación de los seguros sociales lo cual dio como resultado la aprobación en 1936, por el patronato del I.N.P., de un anteproyecto sobre unificación de seguros sociales dentro del que se englobaba el de enfermedad. Así es como, en lo referente al seguro de enfermedad, llegamos al Fuero del Trabajo, en el que no se le presta especial atención. Si se alude explícitamente a él en el Fuero de los Españoles.

Ya en el periodo de Girón como ministro de Trabajo se creó por Decreto de 11 de julio de 1941 una comisión encargada de redactar un anteproyecto de ley para poner en funcionamiento el S.O.E. Dicho comisión fue presidida por el Director General de Previsión y formaban parte de la misma los siguientes miembros: tres consejeros del I.N.P. (de los cuales uno era de los designados por la organización sindical), el comisario del I.N.P., un representante de la Dirección General de Sanidad, otro del Patronato Nacional de Lucha Antituberculosa, un miembro del Consejo General de los Colegios Médicos nombrado por este organismo, un representante de la Obra 18 de julio, el actuuario jefe del I.N.P. y el Médico Jefe de la Obra Maternal e Infantil del I.N.P. Esta comisión acabó sus trabajos en marzo de 1942. A renglón

seguido el ministerio de Trabajo dispuso, por Orden de 28 de octubre de 1942 que se crease una segunda comisión que habría de formular el proyecto que fue posteriormente la Ley de 14 de diciembre de 1942 (B.O.E. de 27 diciembre de 1942). Dicha comisión fue presidida por el Subsecretario del ministerio de Trabajo e integrada por el comisario y el subcomisario del I.N.P., el inspector general jefe de la Inspección de Entidades Aseguradoras de Accidentes del Trabajo de Instituciones de Previsión (entonces encargado de la Dirección General de Previsión), el jefe de la O. S. 18 de julio, el inspector de sanidad de la provincia de Madrid, el secretario nacional de ex-combatientes, el jefe del Servicio Matemático del I.N.P. y el jefe de la Sección de Seguros Sociales del ministerio de Trabajo que actuó como secretario de la comisión.<sup>1</sup>

A continuación otra ponencia del I.N.P. redactaba un anteproyecto de reglamento terminado en abril de 1943 y sometido a otra comisión más amplia el 9 del mismo año. Aprobado este proyecto, se elevó el mismo al ministerio de Trabajo promulgándose el reglamento por el Decreto de 11 de noviembre de 1943 de conformidad con el informe previo del Consejo de Estado.

Así pues, nació el Seguro Obligatorio de Enfermedad con la Ley de 14 de diciembre de 1942<sup>2</sup> y el Reglamento de 11 de noviembre de 1943,<sup>3</sup> no entrando en vigor hasta el 1 de septiembre de 1944 con el objetivo de cubrir por medio de él una etapa muy significativa de la "reforma social"<sup>4</sup> y de la "nueva política demográfica que pretendía garantizar al trabajador su salario y los medios de curación en caso de enfermedad."<sup>5</sup> El nuevo seguro había de ser una herramienta eficaz y potente al servicio del Estado nacional-sindicalista. La enfermedad del trabajador dejaba de ser considerada como una maldición bíblica y, por tanto, la atención médica al obrero pasaba a ser examinada teóricamente como un elemento básico para el desarrollo de la nación con lo cual resultaba lógica para el régimen la atención sanitaria al trabajador, no al ciudadano español.<sup>6</sup>

Así pues, esta "materialización" de los deseos globales del Fuero del Trabajo tenía una clara fundamentación demográfica más intensa en los años de mayor sesgo fascista del régimen del general Franco. En este sentido, se pensaba que la población sufriría un incremento demográfico sin precedentes en la historia de España, lo cual haría más rico y pujante al Estado, consideración ésta que había de afectar (en principio) de forma fundamental a la agricultura palpándose sus primeros resultados al potenciar una mano de obra más vigorosa necesaria para esa economía agraria que había de hacer autosuficiente al país. De igual manera se pensaba que ello desactivaría la emigración del campo a la ciudad y que ayudaría a disminuir el paro en los centros industriales que comenzaban a transformarse en la "Meca" de un número cada vez más crecido de "peregrinos" provenientes del campo español.<sup>7</sup>



Hay que hacer alusión al hecho de que la ley del seguro de enfermedad se ponía en funcionamiento recortando las metas que se habían diseñado en la Conferencia de Barcelona (1922) y que formaban parte del proyecto de ley de unificación de seguros sociales elaborado por el I.N.P. en 1932. En ese sentido, no se abordaban cuestiones relativas a invalidez y muerte conjuntamente con el tema de la enfermedad y la maternidad.<sup>8</sup>

Según Jordana de Pozas, el seguro de enfermedad era un seguro social obligatorio, contributivo y técnico, concebido como una empresa política revolucionaria, basado en la solidaridad nacional, unitario, de inspiración cristiana y financieramente autónomo.<sup>9</sup> A ello habría que añadir que, con el tiempo, su carácter supuestamente revolucionario se vio matizado por simples modificaciones técnicas que no supusieron el logro de sus objetivos y que la solidaridad no tuvo un carácter nacional dejando fuera del seguro de enfermedad a un importante sector de la población trabajadora "económicamente débil" como era el caso de los trabajadores autónomos.

Pese a ello una de las asignaturas pendientes del seguro de enfermedad iba a ser su aplicación dentro del sector agrícola en el que se situaba la mayoría de la población en edad laboral. Así pues, promulgada la Ley del Régimen especial de los Seguros Sociales agropecuarios de 10 de febrero de 1943 y su Reglamento de 26 de mayo de 1944, éstos quedaban fuera de la Ley del Seguro de Enfermedad y únicamente se podían beneficiar de los Subsidios Familiares y del Seguro de Vejez, salvo que exceptuemos a los trabajadores agrícolas, forestales y pecuarios que tuviesen la condición de fijos, imaginable, por ejemplo, en la mayoría del campo andaluz.<sup>10</sup>

Consideraciones políticas hacían de la creación de este seguro una necesidad urgente para el ministro Girón. De hecho, junto con las Universidades Laborales, el propio Girón consideraba que el S.O.E. fue una de sus grandes obras:

"La primera y más urgente (*tarea*) era el establecimiento del Seguro Obligatorio de Enfermedad. Había que cerrar el paso a la inevitable catástrofe que antes se cernía sobre el trabajador con la presencia de la enfermedad. Necesitaba un seguro que le proporcionara no sólo una asistencia sanitaria completa, sino también que supliera, hasta donde fuera posible, la falta de ingresos que el trabajador padecía durante su enfermedad."<sup>11</sup>

En este sentido, para el ministro Girón, el hecho de que el 1 de mayo de 1944 comenzara la afiliación al seguro era el ejemplo de la victoria del nacional-sindicalismo y del sentido cristiano de su legislación.<sup>12</sup> Así en su discurso del 4 de febrero de 1943 en la toma de posesión

de la Presidencia del Consejo del I.N.P. Girón afirmaba que el seguro de enfermedad constituía el avance más profundo en lo social que el estado nacional-sindicalista había logrado.<sup>13</sup>

En esta línea de descalificación del período histórico que precedió al franquismo, el preámbulo de la ley de 1942 afirmaba que “el seguro de enfermedad, establecido en muchos países de Europa, no se había implantado en España como consecuencia de las luchas imperantes entre los diversos partidos políticos, en los que los intereses particulares en juego impedían esta realización”<sup>14</sup> encontrando en ello la causa del abandono de los trabajadores por parte del Estado.

Quizás fue esta una de las medidas de política sociolaboral que más costó poner en práctica al ministro de Trabajo. El mundo de la medicina profesional veía en este proyecto de Seguro Obligatorio de Enfermedad un intento de socializar la práctica médica y por tanto, un intento de rebajar su nivel de vida vía salarios. “La mayor dificultad la encontré en el Instituto Nacional de Previsión, al que estaba asignado el Seguro de Enfermedad, que lo dirigía Jordana de Pozas. Éste tenía un meritísimo curriculum que le había puesto al frente del I.N.P. y le gustaba llevar las cosas con tranquilidad, demasiada para mi urgencia,” afirmaba Girón.<sup>15</sup> Probablemente en la aceleración de la puesta en marcha del S.O.E. influyó de forma positiva el establecimiento de las entidades colaboradoras en la medida en que, aunque escasamente, permitió una menor incidencia en el aparato administrativo del Instituto Nacional de Previsión. Para Girón, el resultado de todo ello fue la creación de “un seguro de enfermedad muy superior al que se disfrutaba en las demás naciones” y, por tanto, quedaba abierto el camino para la creación de las primeras residencias y ambulatorios del S.O.E.<sup>16</sup> Presentes las alabanzas al general Franco como inspirador de la obra social del régimen, Girón, fervoroso devoto de las materializaciones de la denominada “Revolución nacional-sindicalista,” veía en las residencias del S.O.E. “un monumento vivo e irrevocable a la victoria de la revolución.”<sup>17</sup>

Si hablamos del subsidio familiar o del plus familiar como métodos de ayuda directa a las familias españolas, centro de referencia que nunca hay que perder de vista al estudiar la política sociolaboral de esta época, insertamos el S.O.E. dentro de las medidas de protección indirectas destinadas también al núcleo familiar. Perseguía este seguro conceder asistencia sanitaria en caso de enfermedad y maternidad, así como proporcionar indemnizaciones económicas por la pérdida de retribuciones derivadas de los riesgos anteriores y para gastos funerarios al producirse el fallecimiento de los asegurados.

Hay que tener en cuenta las cifras generales<sup>18</sup> que sobre sanidad y previsión se barajaban en los años cuarenta. Sin pretender pormenorizar todavía en torno a este aspecto, y de modo introductorio, téngase en cuenta que para el año 1940 la esperanza de vida al nacer estaba en los

50 años, la mortalidad infantil se situaba en el 12,5 % y la mortalidad general en el 1,5 %. A ello se puede añadir, según las mismas fuentes que pese a la introducción del seguro de enfermedad, en 1945 sólo un 37,8 % disfrutaba de estas prestaciones. Según datos de 1944, en lo referente a la medicina general, el 43 % de los españoles era atendido médicamente por la beneficencia, un 30 % recibía atención por medio de la remuneración directa al médico, un 15 % a través de la igualá y un 12 % a través de seguros privados.<sup>19</sup> En lo referente a la atención por especialidades y a la hospitalización el 84 % recibía este tipo de servicios de la beneficencia, un 8 % pagaba directamente por esta atención y otro 8 % recibía esta servicio por medio de las sociedades de seguros. Independientemente de estas consideraciones también hay que tener en cuenta que, de hecho, el seguro de enfermedad no cubrió en ningún momento de los ministerios Girón, el riesgo de hospitalización médica, excepto en lo referente a los beneficiarios menores de 7 años, por lo que no ingresaban (salvo muy excepcionalmente) en instituciones cerradas más que aquellos enfermos que precisaban intervención quirúrgica.<sup>20</sup> Esta breve referencia sirve para poner de manifiesto las deficiencias del sistema de salud y previsión en España y la acuciante necesidad de implantación de un sistema destinado a paliar dichas defectos. Según Girón, tanto trabajo le costó sacar adelante el Seguro Obligatorio de Enfermedad que su boda se retrasó hasta el 31 de julio de 1945.<sup>21</sup>

Por medio de la Orden de 27 de junio de 1944 se estableció el día 18 de julio de este año como fecha simbólica para la implantación del seguro en todo el territorio nacional, toda vez que la recaudación de primas y la prestación de asistencias reglamentarias, conforme a lo dispuesto en dicha orden, debía comenzar el día 1 de agosto, fecha correspondiente a la aplicación de la segunda fase en el desarrollo del nuevo régimen. Sin embargo, fue a partir del 1 de septiembre de 1944 cuando, en virtud de la Orden de 27 de junio, tanto los trabajadores asegurados como sus familiares beneficiarios, tuvieron derecho a la asistencia del seguro recibida por la caja nacional o por la entidad colaboradora elegida por la empresa.

A renglón seguido el Decreto de 13 de diciembre de 1946 abría la segunda etapa a que se referían las disposiciones transitorias quinta de la ley y primera del reglamento, al declarar implantadas con carácter preceptivo, el 1 de marzo de 1947 y en todo el territorio nacional, las prestaciones de cirugía general y hospitalización quirúrgica, oftalmología, otorrinolaringología, radiología, laboratorio y análisis clínicos y el servicio de practicantes. De igual manera, se dispuso también que el 1 de enero de 1948 se implantaran de modo preceptivo el resto de las prestaciones y servicios expresados en el reglamento, "excepto la hospitalización médica que se condicionaba al plan de instalaciones del seguro."<sup>22</sup>

Al retrasarse la publicación del Decreto de 13 de diciembre de 1946 hasta el 29 de diciembre las especialidades cuya implantación estaba prevista no lo fueron hasta el 1 de enero de 1947. Y

así la Orden de 16 de enero de 1947 en la que se fijaban las normas para la aplicación del Decreto aplazó su establecimiento hasta el 1 de febrero de 1947.

En el caso de la maternidad la Ley de Contrato de Trabajo establecía igualmente el derecho de la mujer trabajadora a abandonar su ocupación seis semanas antes, y hasta seis semanas después del parto, así como a disfrutar de una hora diaria de descanso dentro de la jornada laboral, mientras durara el período de lactancia. Así mismo, establecía el derecho a la asistencia médica y a la hospitalización durante el embarazo y el parto, además de las prestaciones económicas reglamentariamente establecidas consistentes en siete pts. por semana e hijo con un plazo máximo de diez semanas para los partos simples y quince para los múltiples.

En cuanto al campo de aplicación, ante las dificultades técnicas para la puesta en práctica del nuevo seguro, el ministerio de Trabajo estableció la posibilidad de imponer ritmos diferenciales para la obligación de afiliar a los trabajadores por parte de las empresas en función de que estos fueran trabajadores eventuales, a domicilio o servidores doméstico. Con respecto a la continuidad de las prestaciones del seguro de enfermedad en forma de ayuda familiar el plazo de las prestaciones se extendía de seis a doce meses según se preveía en el Decreto de 26 de enero de 1944 y en la Orden de 5 de abril de 1945.

La Ley de 14 de diciembre de 1942<sup>23</sup> establecía el seguro de enfermedad en España atendiendo, según se refleja en su preámbulo, al desarrollo de este ámbito de la previsión en muchos países de Europa. Sin embargo, en el ámbito europeo se observaban una serie de elementos distintivos como el hecho de que "la esposa, y en muchos países la compañera,"<sup>24</sup> quedara asegurada contra la enfermedad durante el tiempo en que el marido "(o el amante)"<sup>25</sup> estuviera asegurado. Evidentemente, en la católica España y en un marco de moralización y recristianización de la sociedad española como el desarrollado desde el final de la guerra civil, este tipo de actitudes, colindantes con el laicismo hermanado con el liberalismo o las formas de vida materialistas contra las que se había levantado la "Cruzada de liberación nacional", no encontraban cabida pese a lo cual se seguía denunciando por los elementos más radicales la mezcolanza en el *seguro de enfermedad español de elementos mixtos con predominio de los componentes liberales* cual era el caso de la existencia de cajas colaboradoras.<sup>26</sup> Por el contrario, la norma favorecía la creación de matrimonios formalmente constituidos según las directrices de la Iglesia católica y según las pautas de conducta imperantes en el período a que nos referimos. Ejemplos de este tipo de comportamientos transplantados al ámbito legal se pueden observar, por ejemplo, en el ámbito de las prestaciones monetarias ligadas al mayor o menor número de hijos siendo éste el caso del plus familiar.

En línea con la diatriba permanente contra épocas pasadas se afirmaba que la ausencia de implantación<sup>27</sup> del S.O.E. hasta el año 1942 se debía a las luchas imperantes entre los diversos partidos políticos y al juego de los intereses particulares que impedían esta conquista social. Las referencias históricas permiten hacer un repaso en torno al avance que supuso el establecimiento en el Fuero del Trabajo<sup>28</sup>, y en concreto en su declaración décima, de una meta como el seguro total de carácter obligatorio para los productores económicamente débiles, lo cual venía a colmar el gran abismo que suponía el abandono de la salud de extensos sectores de la población.

Los fines perseguidos por esta ley se plasmaron en el capítulo I. En este se especificaba la prestación de asistencia sanitaria en caso de enfermedad y de maternidad, la indemnización económica por la pérdida de retribución derivada de los riesgos determinados anteriormente y la indemnización por gastos funerarios al fallecer el asegurado. Hay que considerar igualmente que el S.O.E. se planeó como una “empresa de saneamiento moral y material de todo el pueblo español”<sup>29</sup> que por medio del sistema educativo y de la clase médica debía borrar “cuantos gérmenes enfermaron la mente y la salud”<sup>30</sup> del mismo tal y como se ponía de manifiesto en el mensaje del gobierno nacional el 2 de febrero de 1938. En definitiva, tal y como expresaba José Castro Rial, Director General de Previsión, era un “movimiento de hermandad”<sup>31</sup> que cumplía tres fines “uno, terapéutico, es decir, reparación del daño físico al curar la enfermedad; el otro, preventivo, procurando anular la causa de la misma, o al menos atenuar su acción; el tercero es económico por cuanto se dirige, por medio de indemnizaciones en metálico, a subsanar el daño sufrido por la pérdida del salario.”<sup>32</sup>

El discurso que el 16 de enero de 1944 pronunció Girón en el Teatro Coliseum de Madrid presentaba bien claramente los objetivos políticos del S.O.E.:

*“Piensen los trabajadores de la Patria, empresarios y obreros, cuántas huelgas, cuántas jornadas de sangre, sin resentimiento para la fábrica y sin jornal para el hogar, hubiera costado entonces, nubladas todas las pupilas por el apasionamiento y el odio, llevar a cabo esta obra de justicia que ahora realizamos alegremente entre todos, con las manos abiertas, sin armas, como un símbolo contra la amenaza y la mezquindad.”*<sup>33</sup>

En estos mismos términos se expresaba G. Posada al asegurar que el S.O.E. era uno de los servicios sociales que más podía contribuir a acallar y limitar las diferencias sociales, así como también a frenar y mitigar muchos “pensamientos turbios elaborados por los descontentos y resentidos de nuestros tiempos.”<sup>34</sup> Por tanto, lo esencial del conjunto de los seguros sociales de la época Girón era su valor como mecanismo de subsistencia de las estructuras político-sociales

instaladas tras la guerra civil, cuestión reconocida incluso por los propios apologistas del franquismo social.<sup>35</sup>

Por tanto, el seguro de enfermedad era una garantía de lucha contra la rebeldía de las clases económicamente débiles y la herramienta básica de reforma social con que el Estado franquista contaba y cuyo fin era, entre otros robustecer la raza<sup>36</sup> e incrementar el amor a la patria en palabras del Jefe del Estado:

“...en la unidad, en repartir el infortunio entre todos los españoles, para que todos toquemos a un poquito, y, de este modo, se aleje de otros a los que ha de llegar también el sol, el calor y la vida, aumentando así su amor hacia la Patria.”<sup>37</sup>

Los planteamientos más eugenésicos se centran en torno a los años que rodean a la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo de ello lo encontramos en el artículo que Vallejo Nágera publicó en el Boletín del Consejo General de los Colegios Médicos de España. “La vigorización y regeneración de la raza mediante una política adecuada constituye biológicamente el problema capital de la revolución nacional-sindicalista en marcha, y de sus soluciones depende nuestro porvenir nacional e internacional,”<sup>38</sup> afirmaba el doctor desde un órgano como el boletín de la clase médica española. Defendía el mencionado autor un modelo de racismo, no tanto etnicista, como fundamentado en componentes ideológicos. Para Vallejo Nágera la verdadera raza de los españoles era la de “los patriotas selectos que, con sus esfuerzos, reconquistaron el territorio nacional, arrebatándolo al marxismo internacional”<sup>39</sup> lo cual llevaba aparejada la necesidad de realizar una política racial selectiva para evitar su “degeneración” tal y como sucedía en los países democráticos que potenciaban, según el autor, el desarrollo de “los inferiores y mediocres, en perjuicio de los selectos,”<sup>40</sup> lo cual se palpaba en el hecho de que aquellos, “inferiores biopsíquicamente,” caían paulatinamente en la indigencia. Esto, según Vallejo, había de ser evitado por la clase médica mediante la “purificación” física y espiritual de la raza. En líneas generales, no se puede afirmar que estos planteamientos perdurasen a lo largo de todo el período de Girón al frente del ministerio de Trabajo, pero las alusiones a la potenciación de la raza y a la necesidad de su protección, con matices más o menos radicales, permite afirmar que su proliferación en el período de mayor proximidad del franquismo al fascismo italiano y al nacionalsocialismo alemán influyó, en mayor o menor medida, en la puesta en práctica del seguro de enfermedad por cuanto entre los fines que pretendía cubrir estaba esta idea (radicalizada en el caso de Vallejo Nágera) de la potenciación de la raza. Esta potenciación podía lograrse, entre otros mecanismos, por la legislación laboral que facilitaba el acceso al mundo del trabajo (privado o público) de los denominados ex-combatientes y ex-cautivos.

El seguro de enfermedad había de ser, en este sentido, la mayor conquista del derecho social en España<sup>41</sup> en la medida en que por medio de él se “hermanaban” armónicamente empresarios, trabajadores, médicos y farmacéuticos coincidiendo formalmente en sus intereses y encontrando una especie de piedra angular que estabilizaba socialmente al país controlando el mundo del trabajo, por medio de la legislación amplia generada al efecto, y al mundo de los profesionales de la medicina y de la farmacia por medio de la O. S. 18 de julio. Era, por tanto, el más importante de los seguros sociales<sup>42</sup> dado que las incapacidades temporales por motivo de enfermedad eran las que más afectaban a la masa trabajadora.

Estos criterios se defendían con mayor virulencia en el período de desarrollo de la II Guerra Mundial. Concretamente, el profesor Bosch Marín justificaba, en su artículo titulado “Como ha resuelto la Italia de Mussolini el problema demográfico,”<sup>43</sup> que el mundo de la sanidad había de tener como objetivo básico la promoción de una serie de medidas de eugenesia y progreso demográfico en la línea de las creaciones del fascismo italiano como la Confederación Olímpica Nacional Italiana, el Instituto Nacional Fascista de Previsión Social, etc.

Con esta política de saneamiento físico y “moral” se estaba potenciando al país según el ministro Girón. Su argumento se plasmó en alguno de los números de la Revista de Trabajo en la siguiente forma:

“La enfermedad representa un grave problema para la industria, porque la producción depende de la eficacia del trabajador, definida en su parte más notable por su estado de salud...si aproximadamente hay en España cinco millones de trabajadores que cada año pierden, como promedio, nueve días cada uno por enfermedad, cuanto se haga por reducir esos cuarenta y cinco millones de jornadas perdidas es favorecer la potencialidad económica de la Patria...La indemnización...significa que el conjunto de los trabajadores de la Patria podrá gastar 225 millones de pts. más por año, aumentando el consumo y contrapesando para el industrial el gravamen obligatorio.”<sup>44</sup>

En esta línea de potenciación de la medicina como método para la mejora de la raza se encontraba también G. Pinedo dado que consideraba que el seguro proporcionaba al “patrono” una mano de obra sana y vigorosa que producía más y mejor, evitando la pérdida de jornadas de trabajo e incrementando el desarrollo de la empresa y sus ganancias. Para el Estado, el seguro había de ser un beneficio dado que aumentaba y vigorizaba a la población evitando el desgaste prematuro de las energías humanas, “elevando el tipo medio biológico,”<sup>45</sup> contribuyendo al desarrollo demográfico del país y a su nivel biológico general “del cual dependen, en última instancia, todos los valores intelectuales y todas las energías físicas.”<sup>46</sup>

El reglamento del seguro establecía los siguientes servicios: medicina general, cirugía general, maternología, pediatría y puericultura, ginecología, enfermedades de los aparatos respiratorio y circulatorio, enfermedades del aparato digestivo, dermatología, oftalmología, otorrinolaringología, odontología, nutrición y secreciones internas, urología, neuropsiquiatría, electrología y radiología, laboratorio y análisis clínicos. Se especificaba que habría otra serie de servicios en los cuales se procuraría la colaboración con las instituciones encargadas de la medicina preventiva e higiénica del ministerio de Gobernación. Serían éstas la tuberculosis, venerología, asistencia psiquiátrica, enfermedades infecciosas y la medicina preventiva.

En cuanto a la duración de las prestaciones se fijaba un período de asistencia médica de 26 semanas por año y 13 para los asegurados. Este plazo era ampliable cuando las circunstancias del enfermo lo aconsejasen y el ministerio de Trabajo lo acordara. En este caso podemos observar con toda nitidez como el reglamentarismo de un Estado proteccionista también tenía sus versiones incluso a la hora de regularizar la atención médica y como, por tanto, podían darse, teóricamente, circunstancias que dejaran fuera de las prestaciones sanitarias y económicas a personas necesitadas imperiosamente de atención médica o que incluso prolongándose el período de estancia en establecimientos clínicos la prórroga había de ser autorizada por las instancias del ministerio de Trabajo. En cuanto a la hospitalización se preveía un límite de doce semanas por año para los asegurados y de seis para los beneficiarios. El fundamento de la limitación en la prestación tenía una base económica dado que para el I.N.P. las enfermedades crónicas o incurables no podían depender eternamente del S.O.E. puesto que sería un "peso económico que derrumbaría todos los recursos del seguro."<sup>47</sup>

El S.O.E. establecía la asistencia farmacéutica por un período de 26 semanas para el asegurado (13 para sus familiares) y mientras se prestara la asistencia médica. Se ponía así de manifiesto una de las críticas más certeras sobre este seguro por establecer límites a las posibilidades de enfermar de los españoles y españolas en función de su carácter de asegurado o beneficiario. De igual manera, se establecían inicialmente unos topes en cuanto a la posibilidad de hospitalización a cargo del seguro diferenciando la duración de los períodos según se estuviese tratando de asegurados o de beneficiarios. En el caso de los primeros, el tiempo de hospitalización no superaba las 12 semanas por año y en el caso de los segundos las 6, aunque como en el caso de la asistencia médica se establecía la posibilidad de que este plazo se ampliase si las circunstancias lo requerían y si lo autorizaba el Instituto Nacional de Previsión.

En cuanto a las prestaciones farmacéuticas se establecía en la ley de 1942 una cierta advertencia al colegio farmacéutico en cuanto a la posibilidad de no llegar a un acuerdo sobre las tarifas para el seguro y a las posibles medidas tomadas por el ministerio de Trabajo. Concretamente se afirmaba que el Instituto Nacional de Previsión concertaría con el Consejo General de los



Colegios Farmacéuticos un convenio en el que se garantizara una tarifa reducida especial para el S.O.E. dado que, de no llegarse a un acuerdo en el plazo de dos meses a partir del comienzo del seguro, el I.N.P. establecería farmacias propias y el ministerio de Trabajo establecería una tarifa obligatoria para las localidades en donde no existiesen. Esto sería especialmente importante por cuanto el aumento progresivo de los precios de las especialidades del petitorio desde la implantación del S.O.E. iba a tener una evidente repercusión en el mismo y en su salud financiera con la incorporación de los antibióticos y las nuevas drogas surgidas tras el final de la II Guerra Mundial.<sup>48</sup> De hecho, una de las preocupaciones del S.O.E. era el incremento paulatino de los gastos farmacéuticos pese a lo cual ni el seguro estableció farmacias propias ni a la altura de 1950 se había fijado lista alguna de productos farmacéuticos que pudieran prescribirse.<sup>49</sup> Este era el motivo de que Aznar afirmara desde la R.E.S.S.<sup>50</sup> que un enemigo destacado del S.O.E. era la clase farmacéutica y concretamente sus "precios excesivos, abusos y monopolio"<sup>51</sup> del sistema. Tomando como ejemplo los datos disponibles de los años 1953 y 1954 se observa como al final del primero de los años el gasto farmacéutico ascendía a 689.452.563,43 de pts. mientras que en los primeros nueve meses del año 1954 la cifra se elevaba a 520.291.732, 59 de pts.<sup>52</sup> Sobre esta cuestión desde medios sindicales se ponía de manifiesto el malestar entre algunos beneficiarios del seguro por la tendencia de los médicos a evitar las recetas de antibióticos:

"...Se observa que por los facultativos adscritos a la institución del Seguro de Enfermedad, sustituyen, con bastante frecuencia dicho tratamiento por otro que aunque consiga iguales resultados lo hace con evidente lentitud lo cual, a nuestro juicio, desnaturaliza los fines para los cuales ha sido creado el Seguro de Enfermedad..."<sup>53</sup>

Sin embargo, las "amenazas" a los farmacéuticos no fueron más que papel mojado dado que, ciertamente, la ley del S.O.E. establecía la posibilidad de que el propio seguro tuviese sus farmacias. Ello habría podido servir para que el seguro ahorrara unos 300 millones de pts. en el año 1952<sup>54</sup> (en los años anteriores de la década de los cincuenta los farmacéuticos recibían como pago de sus servicios al S.O.E. entre 700 y 800 millones de pts.) Ello no fue posible por la falta de voluntad política para "socializar" los servicios farmacéuticos y así, aunque dicha posibilidad existía en la ley de 1942, la Ley de Bases de la Sanidad de 25 de noviembre de 1944<sup>55</sup> disponía que sólo los farmacéuticos individualmente o asociados podrían ser propietarios de las oficinas de farmacia.

Para los parados se establecía su protección por la asistencia médico-farmacéutica en relación a la permanencia en el régimen durante los 365 días anteriores a la fecha de comienzo del desempleo: de 91 a 180 días de permanencia, 1 mes; de 181 a 270 días, 5 meses; y de 271 en adelante, 9 meses.

En relación con la cuestión de la maternidad la ley estipulaba que todas las mujeres beneficiarias del seguro tendrían derecho a la asistencia facultativa proporcionada por el S.O.E. en los períodos de gestación, en el puerperio y en el parto así como a la utilización gratuita de las obras de protección a la maternidad y a la infancia relacionadas con el seguro de enfermedad. En concreto, las mujeres aseguradas que daban a luz tenían los mismos derechos que en el seguro de maternidad, integrado ahora en el S.O.E. De igual manera las beneficiarias, aseguradas o no, que amamantasen a sus hijos tenían derecho a un subsidio de lactancia cuya cuantía y duración se estipulaba en el reglamento. En esta vertiente asistencial quedaban incluidas las trabajadoras aseguradas y las esposas de los trabajadores comprendidos en el régimen de subsidios familiares que no lo estuvieran en el de enfermedad por superar las 40.000 pts. de salario anual (según los criterios de 1956). En los partos normales la permanencia en hospitalización era de 8 días. La indemnización económica en los casos de maternidad ascendía al 60 % del salario para las trabajadoras aseguradas. Aquella se percibía en las seis semanas posteriores al parto en caso de prescribirlo el médico; en caso contrario, éste período computaba como descanso voluntario y en esta situación la indemnización no existía. Esta ayuda era incompatible con la de enfermedad. A esta prestación económica se añadía el subsidio de lactancia que se concedía durante un plazo máximo de 10 semanas en los partos simples y de 15 en los múltiples.

La indemnización económica suponía que, perdida la retribución fruto del trabajo, el obrero recibía del seguro la mencionada indemnización con la única condición destacable de llevar asegurado por lo menos seis meses. Los cotizantes que no reuniesen este tiempo de cotización quedaban al amparo de otras formas de protección de la salud como las ligadas a la beneficencia con el arcaísmo que ello suponía en un sistema que según sus creadores avanzaba progresivamente hacia el seguro total. La mencionada indemnización suponía el 50 % de la retribución del trabajador con arreglo a la cual cotizase. De igual manera, dada la fecha de establecimiento del seguro de enfermedad y la no existencia del seguro de paro los trabajadores enfermos podían continuar percibiendo las prestaciones de los demás seguros sociales por el mismo tiempo que las prestaciones económicas del seguro de enfermedad con cargo a los fondos de los respectivos seguros. Lo menguado de las prestaciones económicas, el hecho de que la retribución únicamente supusiera el 50 % de la retribución con arreglo a la cual cotizase el asegurado, se basaba en el hecho de que no se consideraba posible que el seguro sustentase la carga de la indemnización total. Independientemente de ello no se consideraba conveniente dado que se entendía que se estimulaba que el siniestro sobreviniera y así se fomentaba el fraude.<sup>56</sup>

Posteriormente, el reglamento estableció que no abonar las primas por razón de paro no implicaba perder el derecho a la asistencia médica, farmacéutica y a la indemnización económica, siempre que se hubiesen satisfecho las primas correspondientes a 13 semanas dentro del año inmediatamente anterior al primer día de su enfermedad.<sup>57</sup> Por otro lado, la indemnización era debidamente abonada en los casos en que la enfermedad tenía una duración mínima de 7 días y a partir del quinto de enfermedad hasta las 26 semanas estipuladas como máximo. En el caso de ser hospitalizado y percibir indemnización el asegurado recibía únicamente el 10 % de su jornal si nadie vivía a sus expensas. De igual manera, en el caso de tener derecho a prestaciones económicas en otro seguro, éstas unidas a las del seguro de enfermedad no podían superar el 90 % de su jornal. En los casos de trabajadores asegurados en situación de desempleo la duración de la indemnización respondía a los mismos criterios temporales de las prestaciones médicas y farmacéuticas.

En cuanto a las metas temporales, la Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad imponía tres etapas en lo referente a la implantación del mencionado seguro. La asistencia domiciliar se debía de prestar en el plazo máximo de seis meses a partir de la publicación del reglamento del S.O.E. Supuestamente el Instituto Nacional de Previsión había de elevar al ministerio de Trabajo en el plazo de seis meses el proyecto de reglamento para su aprobación. Y los servicios de especialidades y de sanatorios, dentro del término de dos años a contar desde la publicación del reglamento.

En lo referente a la facultad de inspección, las atribuciones quedaban fuera del ámbito del ministerio de Trabajo. En concreto, dependía de la Dirección General de Sanidad el establecimiento de las condiciones sanitarias mínimas exigibles a la asistencia médico-farmacéutica del seguro de enfermedad. Esta dirección dependía del ministerio de Gobernación<sup>58</sup> (por Ley de 25 de noviembre de 1944). A su vez, la mencionada Dirección tenía la facultad inspectora de la asistencia médico-farmacéutica que se prestaba a los beneficiarios del seguro tanto si la entidad aseguradora tenía carácter público como privado. Le correspondía también la inspección de las instalaciones sanitarias; había de estar representada en los tribunales que juzgasen oposiciones y en los concursos destinados a cubrir las plazas de médicos, odontólogos, farmacéuticos, practicantes, enfermeras y comadronas; y de igual manera, tener conocimiento de los beneficiarios en los pueblos para rectificar la clasificación de los mismos en cuanto al número de médicos de asistencia pública domiciliaria de cada municipio.

En este nuevo esquema de desarrollo de la salud laboral la elección formal de médico por los asegurados representaba una cuestión política de primer orden tal y como lo entendía el Jefe de los S.S.S.E. (Agustín Aznar) en oficio dirigido al Director General de Previsión y el Delegado

Nacional de Sindicatos (Sanz Orrio) en oficio dirigido a Girón de Velasco. Ambos miembros de la estructura sindical ponían de manifiesto ante el ministerio de Trabajo la imperiosa necesidad de que los "productores" eligieran efectivamente la entidad para la prestación de los servicios del seguro puesto que la "no apertura de dicho plazo exacerbaría aún más la situación de tirantez que se apreciaba en los productores de muchas empresas."59

### 14.2. El Seguro de Maternidad: Consideraciones generales y evolución legislativa.

En la mente de los ideadores del sistema de previsión español lo referente a la salud de la madre y su retoño estaba ligado en los años cuarenta a un cierto ideal exaltador de la raza en un momento en que, próxima España a la Alemania nazi y a la Italia fascista, veía en el potencial demográfico<sup>60</sup> un elemento básico del bienestar de la nación y el factor esencial para una potencial política expansiva que permitiera desarrollar la obra de colonización cultural deseable por aquellos que seguían viendo a España como un instrumento de la cristiandad en cruzada permanente contra los enemigos de Cristo. Este aspecto, presente en el S.O.E. se radicalizaba más si cabe en lo referente al seguro de maternidad. Con respecto a la primera finalidad, en cierto modo belicista en cuanto a su fin último, las palabras de Girón son indicativas de la mentalidad del ministro sobre la cuestión que aquí se plantea así como en torno a la política de la II República considerada básicamente como un instrumento de desintegración de la familia y con ella del núcleo fundamental y originario de la vida española:

“La reducción de los coeficientes de mortalidad es una de las primordiales preocupaciones de los pueblos que, como el nuestro, se han impuesto así mismo el deber de ser fuertes, única posibilidad de ser respetados en el mundo...

Para hacer realidad el sueño de grandeza que estamos decididos a hacer vivir a la Patria, es necesario no malograr vidas (cuya pérdida significa una merma en la capacidad de energía de nuestro pueblo) y, destacan entre los índices de mortalidad los correspondientes a la infancia y a la maternidad...

Lo apremiante de la situación hizo reaccionar, siquiera débilmente, aun a aquel anémico Estado español anterior al 18 de julio, que en 1929 creó el Seguro de Maternidad. Después de titubeantes iniciativas del régimen liberal, el año 1940, el Estado Nacional-Sindicalista creó la Obra Maternal e Infantil; se instalan en las capitales de provincias dispensarios de maternología y puericultura con enfermeras visitadoras; la lucha por arrancar a la muerte muchas vidas preciosas se entabla esta vez, decidida y eficazmente, por uno de los organismos más útiles que podemos aprovechar para proteger el avance social: el Instituto Nacional de Previsión...”<sup>61</sup>

No se puede afirmar que esta euforia pro-natalista fuera propia exclusivamente de la España franquista. La anti-nazi y anti-fascista nación británica manifestaba un talante muy semejante en todo lo referente a la necesidad de incrementar el número de británicos.

En torno a la misma cuestión las apreciaciones de Beveridge se expresaban de la siguiente manera:

“El primero de los dos hechos es la pirámide de edad de la población, poniendo en claro que las personas que sobrepasen la edad que es vista ahora como la del final de la vida de trabajo, representarán una proporción mucho más amplia, dentro del conjunto de la comunidad, de lo que nunca lo fuera en el pasado. El segundo hecho es la baja tasa de reproducción de la comunidad británica en la actualidad: a menos que esta tasa aumente muy claramente en el futuro próximo, no podrá prevenirse un rápido y continuo declinar de la población. El primero hace necesario encontrar caminos para posponer la edad de jubilación, en lugar de acelerarla. El segundo hecho hace imperativo conceder un primer lugar en el gasto social al cuidado de los niños y a la salvaguardia de la maternidad.”<sup>62</sup>

De hecho, uno de los elementos básicos del Plan Beveridge era un proyecto para el seguro social contra la interrupción o la destrucción de la capacidad de obtener ingresos y por el gasto especial producido por el nacimiento y la maternidad.<sup>63</sup> Y es que, como afirmaba Beveridge, “en los próximos treinta años las mujeres casadas, en tanto que madres, tendrán que realizar un trabajo vital asegurando una adecuada continuación de la raza británica y de los ideales británicos en el mundo.”<sup>64</sup>

*Pasados los momentos de mayor efusión germanófila por parte de las autoridades españolas los planteamientos en torno a esta cuestión adquirieron unos tintes menos épicos y la potenciación o protección de la familia, de la madre y de su prole por medio de la sanidad respondió formalmente a planteamientos de tipo higienicista o ligados al bienestar global de la nación.*

El seguro de maternidad adquiría unas características particulares<sup>65</sup> en la medida en que las prestaciones que concedía se acercaban por una parte a la asistencia sanitaria, y por otra a las indemnizaciones por enfermedad o por incapacidad temporal para el trabajo. Por otro lado, desde una perspectiva médica la maternidad se transformaba en el problema social fundamental de la medicina pues, según afirmaba M. de la Riva, “no sólo debemos estudiar en esta culminación de la feminidad llamada maternidad, a la mujer como madre del ser que va a nacer, sino a la mujer como eje de la familia, considerando a la familia como núcleo central de la estructura social,”<sup>66</sup> planteamiento que implica la imposibilidad de la incorporación de las mujeres al mundo laboral y que las encerraba en torno al núcleo familiar viendo en este planteamiento “el óptimo familiar.”<sup>67</sup> Es decir, la trascendencia del concepto de maternidad se define en cuanto a su función social, adquiere sentido en cuanto hace referencia a la madre

como elemento básico de la estructura de la sociedad, porque es ella la esencia y el "núcleo metafísico"<sup>68</sup> de la célula en que se asienta todo el orden social actual.

Esta atención hacia la salud de los españoles que partía de la necesidad de proteger al niño a través de la madre<sup>69</sup> se basaba en las deficiencias del círculo interno, del recinto familiar. Nos estamos refiriendo a las condiciones higiénicas, a la vigilancia y asistencia de la madre, a sus características físicas, etc. Ante este tipo de deficiencias la política del Estado había de centrarse en la potenciación del círculo externo dado el posible déficit sanitario que rodeaba a la madre. Este segundo círculo, externo y extrafamiliar, trataría de compensar las deficiencias del primero, contrarrestándolas o anulándolas, relacionando a la madre con las instituciones protectoras creadas a tal efecto. En resumen, se trataba de contrarrestar las posibles deficiencias del ambiente social en que vivía la madre gestante, vigilando su salud y evitando la influencia nociva que sobre ella y el feto pudiera tener ese mencionado ambiente social situándola en unas condiciones ambientales adecuadas antes, durante y después del alumbramiento.

No estaba lejos la política llevada a cabo desde el ministerio de Trabajo de los planteamientos generales (muy generales) que presidían la política de otras naciones en torno al problema de la maternidad. "Toda mujer en cinta, esté asegurada ella misma o participe solamente del Seguro del cabeza de familia como miembro de la misma a su cargo, tiene derecho, durante el embarazo, el parto, y en el tiempo que le sigue, a la asistencia médica y farmacéutica y a los cuidados ginecológicos;"<sup>70</sup> este era el espíritu que presidía la legislación europea en torno al tema en cuestión según Melas. En cuanto a las prestaciones en metálico, y en consonancia con este modelo de orientación europeo, al que en principio vamos a aceptar que se dirigía la España franquista en sus planteamientos y en sus fines más generales, los sistemas de asistencia a la maternidad preveían para la futura madre durante el embarazo y el parto un derecho legal a la cesación del trabajo así como las mencionadas prestaciones para compensar la pérdida del salario.

Enmarcado en este planteamiento, la medicina y en concreto la vertiente puramente maternal adquieren un sentido social. Girón se refiere al desarrollo de la medicina como instrumento con un objetivo claro: proteger a la madre y a su retoño mediante la "medicina social,"<sup>71</sup> aunque dicho planteamiento había de tener graves deficiencias si atendemos a reclamaciones hechas dentro del propio régimen que ponían de manifiesto la ausencia de centros de atención a la maternidad, especialmente en las zonas rurales.<sup>72</sup> Todo ello enmarcado dentro de "un sistema ordenado y completo, apto para atender todas las posibles dificultades durante las etapas de la vida familiar, que ya es realidad en la Patria mediante el Régimen Nacional de Subsidios Familiares, con el que aspiramos a idéntica meta en la protección sanitaria."<sup>73</sup> Desde estos presupuestos, y sin abandonar el armonicismo patente en cualquiera de las manifestaciones de

Girón, se apuesta por la generación de un sistema de instituciones (no un marco único y universal) para poder hacer frente a todas las posibles adversidades e infortunios que un español o española pudieran encontrarse a lo largo de su vida. De las palabras de Girón se puede deducir como primera consecuencia la conciencia clara de la inexistencia de un sistema de protección eficaz en favor de la salud de los españoles, tanto en líneas generales como en lo que se refiere a la sanidad materno-infantil. Y desde estos presupuestos la Ley de 18 de junio de 1942<sup>74</sup> venía a constituir un avance dada la ampliación del campo de aplicación del mencionado seguro de maternidad y la creación de clínicas de maternidad y puericultura. Pese a ello dicho seguro no era más que una ampliación del régimen de subsidios familiares como indicaba su preámbulo y el artículo 1º de dicha ley.<sup>75</sup>

Con ello, supuestamente, se pretendían superar las prestaciones del seguro de maternidad creado en 1929<sup>76</sup> por la Dictadura primorriverista, el cual concedía una serie de subsidios a las mujeres afiliadas al Retiro Obrero en forma de prestaciones médicas y farmacéuticas, indemnizaciones económicas durante el descanso estipulado de seis semanas posteriores al parto (con un máximo de 180 pts.) y un subsidio durante el período de lactancia de 50 pts., prestación a todas luces insuficiente.<sup>77</sup> Este subsidio con motivo de la lactancia<sup>78</sup> tenía como objetivo estimular a las madres españolas a criar por sí mismas a los hijos. La mencionada ley lleva fecha de 22 de marzo y su reglamento se aprueba el 29 de enero de 1930, comenzando su aplicación a partir del 1 de octubre de 1931.

La historia más cercana en la evolución hacia el seguro de enfermedad comienza con la ley de 13 de marzo de 1900 que fijaba las condiciones del trabajo de las mujeres y de los niños. Con la reforma sufrida por la ley de 8 de enero de 1907 se prohibía el trabajo de la mujer después del parto durante 4 o 6 semanas y dicho plazo se aumentaba en 5 o 6 días con certificación médica. Por la Ley de 13 de julio de 1922 España ratificaba el Convenio de Washington de 1919. Dicho convenio proponía un descanso obligatorio de 6 semanas después del parto y el derecho a descansar hasta 6 semanas antes del mismo además de una indemnización otorgada por el Estado o por medio de un seguro, derecho a asistencia médica y a comadrona, derecho a descanso de media hora en el trabajo para posibilitar la lactancia del bebé y derecho a conservar su puesto de trabajo durante los plazos aquí expuestos.<sup>79</sup> De lo escaso de los objetivos del Estado español da muestra el hecho de que por la ley de 26 de julio de 1922 se consignaba un crédito de 100.00 pts. para hacer efectiva la aportación del Estado al seguro, lo cual indica su más que notable insuficiencia.

Así, el Decreto de 21 de agosto de 1923 creaba el subsidio de maternidad que modificaba el artículo 9 de la ley de 1900 en el sentido indicado por el convenio de Washington, aunque con



menos tiempo de descanso antes del parto y concediendo a cada mujer asalariada que tuviese un hijo un subsidio de 50 pts. con cargo al presupuesto del Estado.

El intento de superación por parte del ministerio de Trabajo de este período que, como se ha dicho, constituía una etapa de dominio del imperio del maligno sobre el solar patrio se desarrolló progresivamente a lo largo de una serie de etapas. En primer lugar, en 1940 se ampliaron los beneficios del seguro de maternidad a las mujeres afiliadas al subsidio de vejez. En 1941 y con fecha 12 de julio se promulga la Ley de Sanidad Infantil y Maternal<sup>80</sup> que pretendía ordenar las instituciones que habían de ocuparse de la infancia y la maternidad y evitar el hecho evidente de que "la mortalidad maternal e infantil fuese mucho más elevada entre las mujeres obreras que entre las que no trabajaban."<sup>81</sup>

En 1942 se desarrolló la ampliación de los mencionados beneficios a las esposas de los trabajadores encuadrados en el subsidio familiar. Por la mencionada ley de 18 de junio de 1942 se incluía en el seguro de maternidad a las esposas de los trabajadores asegurados en el régimen de subsidios familiares y a las trabajadoras que, siendo por sí aseguradas en dicho régimen, no pudieran serlo en el de maternidad por superar el límite de las retribuciones estipuladas (9.000 pts./año).<sup>82</sup> Igualmente se autorizaba al I.N.P. a invertir el 25 % de los fondos de reserva de la Caja Nacional de Subsidios Familiares en la construcción y en la dotación de hospitales, clínicas y dispensarios de maternidad y puericultura, lo cual ponía de manifiesto el acusado déficit de centros preparados para la lucha contra la mortalidad maternal, la mortinatalidad y la mortalidad infantil.<sup>83</sup>

Dentro de lo que era un intento de perfeccionamiento de la atención a la madre y al niño/a se creó en 1940 la Obra Maternal e Infantil. A su vez, un paso en la evolución hacia la unidad en el ámbito de la previsión fue la absorción del seguro de maternidad dentro del S.O.E. Ese paso se dio en 1948 a partir del Decreto de 9 de julio de dicho año.<sup>84</sup> Este decreto tuvo la virtud de materializar con más de 25 años de diferencia una de las conclusiones aprobadas en la Conferencia Nacional de Barcelona desarrollada en 1922 dado que aquella ya preveía la fusión de ambos seguros.<sup>85</sup>

Este paso hacia la unidad fue una de las tantas medidas parciales desarrolladas en torno a la cuestión de los seguros sociales en España teniendo como meta la unidad global de un sistema de defensa ante el infortunio, la enfermedad o la convalecencia por motivos de maternidad que estuvo en la mente de los hombres al servicio del ministerio de Trabajo, pero que nunca acabó por materializarse de modo efectivo en la forma y manera en que se planteaba en la mente de aquellos hombres. "Esta es la transformación definitiva del Movimiento en el régimen de protección a la mujer durante su servicio más glorioso a la Patria,"<sup>86</sup> afirmaba Girón. Todo ello

enmarcado dentro de la idea de protección a la familia, de la reconstrucción material y espiritual de España basada en una familia recristianizada y conformada según la "prístina esencia de la doctrina vaticana."<sup>87</sup>

Todo ello venía a ser el esquema defensivo y protector desde el ámbito de la sanidad que había de constituirse en soporte de la nueva familia española en una remozada estructura social que se pretendía modelar desde el poder sin olvidar, por otro lado, que la política que se intentaba llevar a cabo coincidía, en líneas generales, con los presupuestos generales que en 1944 en la Conferencia de Philadelphia se expusieron en torno al tema de la asistencia médica a la madre embarazada. El planteamiento general allí expuesto giraba en torno a la necesidad de vigilar y prevenir los posibles problemas originados para la salud de la madre por medio de reconocimientos obstétricos pre y post-natales. A ello se añadía la necesidad de que la madre trabajadora percibiera prestaciones monetarias semejantes al salario normal en un momento en que, fruto de su convalecencia, podían originarse gastos extras de origen variado. Es de destacar que la carencia de medios sanitarios para atender a las madres españolas era, al igual que en otras facetas de la previsión desarrollada desde el ministerio de Trabajo, muy inferior en las zonas rurales. Sobre esta cuestión tenemos que considerar que para el año 1941 figuraban afiliadas al seguro 746.164 trabajadoras industriales y 15.134 agrícolas.<sup>88</sup> Si consideramos que en 1940 el número de trabajadoras controladas estadísticamente en el ámbito agrícola superaba las 262.000 y que el número total de trabajadoras superaba el millón cien mil se pone de manifiesto la debilidad del seguro de maternidad en el ámbito campesino. Ello daba la razón a la afirmación de Leal Ramos que consideraba escasas las realizaciones del seguro en el campo español:

"Espléndido en sus realizaciones en los grandes centros urbanos, su experiencia es casi totalmente nula en los campos....siendo así de escasa, por no decir nula, eficacia, en los medios rurales..."<sup>89</sup>

Probablemente la mayor incidencia en el campo se debía al hecho de que, en lo referente al subsidio de vejez, no era obligatoria la cotización, aunque sí la afiliación ya que era con este subsidio con el que había de realizarse la afiliación en el seguro de maternidad. Era esta confusión entre cotización y afiliación la que dejaba sin inscribirse a un importante número de trabajadores agrícolas y al no cotizarse por ellos en el subsidio de vejez tampoco se hacía en el seguro de maternidad. A ello había que añadir el carácter eventual de las asalariadas, sobre todo en el campo.

La capacidad inspectora, al igual que en el caso del seguro de enfermedad, correspondía a la Dirección General de Sanidad, dependiente del ministerio de Gobernación,<sup>90</sup> la vigilancia de las

instituciones de maternología y puericultura, así como la capacidad de proponer medidas legislativas de tipo social a favor de la madre y del niño, entre otro tipo de facultades.

No conviene perder de vista el deseo de potenciación de los matrimonios de acuerdo a los moldes morales, espirituales y sociales normativamente sancionados por medio de la ley. Tampoco en este aspecto la legislación española se situaba en las antípodas de otras potencias históricamente más secularizadas y carentes del carácter nacional-católico del régimen franquista. El Plan para la Seguridad Social ideado por Sir William Beveridge premiaba y potenciaba el matrimonio:

“La posición de las mujeres casadas queda reconocida en forma y contenido. Se reconoce tratándolas, no como dependientes de sus maridos sino como compañeras que comparten las prestaciones y las pensiones cuando no hay ingresos que compartir. Se reconoce en contenido en la provisión enormemente mejorada que se hace para las necesidades reales de la viudedad o la separación por la maternidad, en ayuda y prestación por la misma, en las asignaciones por los hijos y en las prestaciones médicas para las mujeres y para los hijos, de cuyo cuidado aquéllas son especialmente responsables.”<sup>91</sup>

*Financieramente, antes de la incorporación del seguro de maternidad al de enfermedad en 1948, aquél era deficitario. El análisis que el propio I.N.P. hizo de los años 1946 y 1947 ponía de manifiesto el carácter deficitario del seguro de enfermedad.<sup>92</sup> Concretamente la recaudación de 1946 supuso un resultado un 14,05 % más deficitario que el de 1945.*

M. de la Riva llega a afirmar que “la mortalidad materna en el servicio maternológico del S.O.E., a nosotros encomendada, es nula.”<sup>93</sup> Lógicamente la valoración que sobre sus resultados emanaba de los círculos próximos al ministerio de Trabajo resumaba optimismo y un talante poco medurado. En el año de la celebración del décimo aniversario del S.O.E. y de las bodas de plata del seguro de maternidad, Bosch Marín<sup>94</sup> resaltaba las repercusiones positivas sobre la morbilidad y la mortalidad en la nación española: “...ni se equivocaba tampoco el sociólogo Inocencio Jiménez, Aznar, Sangro y Jordana de Pozas, entre otros, al defenderlos como obra social indispensable para la protección sanitaria de las masas trabajadoras.” Su visión apologista del tema se explicita en las valoraciones que a continuación se exponen:

“...a pesar de la rapidez en la implantación de profundas reformas, que tanto han modificado la tradicional forma del ejercicio de la medicina, a pesar de la falta en un principio de establecimientos que hubo que concertar, adaptar o improvisar; a pesar de la falta de educación social de las masas de beneficiarios y por ende de su falta de

colaboración en esta hora que ha de ser apreciada, cuidada y estimada por todos, dadores y perceptores de beneficios, pudieron superarse dificultades y el médico español que no escatimó sacrificios en sus tareas castrenses, se aprestó a colaborar con toda eficacia en la lucha colectiva y organizada contra la enfermedad.”<sup>95</sup>

Por lo expresado en relación a la implantación del S.O.E. convendría poner en serias dudas esta afirmación. Más bien su colaboración fue escasa y obligada, ello sin contar con las escasas dotaciones dispuestas para su trabajo. En un provincia como Cáceres (básicamente agraria) en la que en 1942 había 511.377 habitantes y con una extensión de 19.960 kilómetros cuadrados sólo existían 7 tocólogos y 62 comadronas oficialmente (lo cual posibilita poner en duda dicha cifra por exceso). Los primeros ejercían en las 3 o 4 poblaciones más relevantes y las comadronas, habitualmente, no residían en los pueblos más pequeños, que eran la mayoría.<sup>96</sup>

El resultado final de esta política sanitario-social, siempre según Bosch, sería la consecución de *una digna posición de la nación española entre las restantes del mundo y un porvenir sanitario esperanzador* porque “nuestros hijos, por el hecho de ser españoles, no tienen ya menos probabilidad de vivir que si hubieran nacido en otras naciones de características geobiológicas parecidas a las nuestras.”<sup>97</sup> El mismo Bosch,<sup>98</sup> asesor de política demográfica y tocólogo, exponía en 1956 los resultados de una política social que influyó en la disminución de la mortalidad relacionada con la maternidad. En 1955, según Bosch se habían atendido 217.711 partos, un 19,21 % más que en el año anterior. De ellos 203.630 habían sido normales y 14.081 (un 6,4 %) distócicos o con complicaciones. Nacieron 219.656 fetos, de los cuales 214.847 nacieron vivos y 4.809 muertos, representando este último grupo un 2,2 %. Al contrario de lo que se pudiera pensar, dada esta exposición pormenorizada de los datos más significativos en torno a la cuestión de la maternidad en España, la tasa de defunciones maternas que ofrece Bosch (0,2 %) resulta de una recogida de datos incompleta de las diversas Jefaturas Provinciales encargadas de proporcionar los mismos. De ello podemos deducir, que probablemente, la cifra real de defunciones maternas sería algo más elevada de la que ofrece el autor mencionado dado que, conseguidas las restantes, no habría motivo para que las Jefaturas desconocieran la tasa de mortalidad maternal.

En otra de sus numerosas publicaciones De la Riva<sup>99</sup> señalaba la mejoría fundamental que había experimentado a mediados de los cincuenta la atención terapéutica al poder administrar con la magnitud apropiada todos los medicamentos. De igual manera, y siempre según el mencionado autor, tuvo una importancia fundamental la capacitación formativa asistencial del personal técnico auxiliar aunque en líneas generales se podía afirmar de este personal que no tenía una categoría académica elevada<sup>100</sup> pese a lo cual, sorprendentemente, pudieron desarrollar “eficazmente” su trabajo debido a “la interpretación que hicieron de la caridad. Caridad sentida,

no como inoperante compasión peyorativa, sino como mutua inteligencia psicodinámica entre técnico y paciente, enraizada tanto en la sensación de cumplimiento del deber como en el más estricto sentido de la responsabilidad.”<sup>101</sup> Asombra, en función de estas aseveraciones, la ligazón que se establece por prestigiosos maternólogos del Estado como De la Riva entre factores puramente técnicos y elementos de carácter moral, ético o religioso. Asombra, en definitiva, la operatividad y eficacia que adquieren elementos puramente médicos por medio de consideraciones que en absoluto tienen que ver con la sanidad aplicada a la maternología. Obviamente, como ya se ha señalado en otros capítulos de esta investigación, prácticamente nada del mundo sociolaboral o socio-sanitario, como en este caso, queda aislado de consideraciones morales propias de una España impregnada por el nacional-catolicismo y en la cual el peso de éste se explicita, sino en todas, en la gran mayoría de las manifestaciones sociales y políticas relevantes. En cualquiera de los casos, al igual que en lo referente a las prestaciones o pensiones de viudedad, orfandad y escolaridad, la percepción de la importancia cuantitativa en torno a las prestaciones por maternidad era negativa. Era vista como exigua e insuficiente.

### **14.3. El campo de aplicación del S.O.E.**

Dentro del campo de aplicación del S.O.E. se incluía a todos los denominados productores económicamente débiles,<sup>102</sup> sin otra excepción que la establecida en el art. 9 de la ley de 1942 que hacía referencia a los funcionarios públicos o de corporaciones cuando obtuvieran beneficios iguales o superiores a los que concediera este seguro, tanto a nivel de prestaciones sanitarias como económicas. De igual manera, la ley facilitaba la posibilidad de establecer un régimen de afiliación voluntaria, consciente de las deficiencias en el corto y medio plazo que la aplicación de un seguro novedoso iba a plantear. Se pretendía con ello establecer una diferencia entre el pobre dependiente de la caridad y el trabajador. Con el seguro de enfermedad, éste último, se enaltecía así mismo y a su nación con el trabajo realizado.<sup>103</sup>

Pese a ello la tendencia dominante a raíz de la Conferencia de Philadelphia del año 1944 consistía en que el criterio a seguir fuera el de incluir a la totalidad de la población sin distinción de criterios tales como el laboral o el derivado de los económicamente débiles, dado que toda persona debía estar cubierta ante el riesgo de enfermedad. Pese a darse esta tendencia hacia el seguro de base nacional, a finales de los años cuarenta sólo cinco países habían aplicado dicho criterio. Concretamente el Reino Unido, Francia, Yugoslavia, Suecia y Nueva Zelanda. Se basaban en un criterio laboral Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Costa Rica, Checoslovaquia, Chile, Ecuador, Grecia, Guatemala, Hungría, Irlanda, Italia, Méjico, Polonia, El Salvador y la U.R.S.S. El campo de aplicación determinado por el criterio de los “económicamente débiles” era el utilizado en Colombia, China, Dinamarca, Noruega, Países

Bajos, Panamá, Perú, República Dominicana, Rumania y España (que combinaba este criterio con el laboral).<sup>104</sup>

En el caso español el voluntarismo inicial no tuvo paralelo con las realizaciones efectivas. Uno de los artífices del seguro, Jordana de Pozas, ponía de manifiesto en el año 1944 que con la política de protección a los económicamente débiles (trabajadores con una renta anual inferior a las 9.000 pts.) se rompía con "los motivos clasistas y con las timideces estrechas en virtud de las cuales quedaban excluidos de estos seguros los agricultores, los trabajadores a domicilio, el servicio doméstico, los empleados públicos o privados, las profesiones liberales, los artesanos, los pequeños propietarios, cultivadores y demás trabajadores autónomos, y, en suma, todos aquellos que no formaban parte del proletariado fabril."<sup>105</sup>

Sin embargo, la realidad contradecía totalmente dicha afirmación. Jordana consideraba que separar a la hora de otorgar las prestaciones al trabajador rural del frabril obligaba al Estado a suplir aquella insuficiencia con los presupuestos del Estado que habrían de recaudarse por medio de impuestos que, a su vez (según él), habrían de ser pagados por los sectores más desfavorecidos.<sup>106</sup> Así pues, la orden de 17 de mayo de 1944, al mencionar a los trabajadores obligatoriamente asegurados en la primera etapa del seguro excluía a los eventuales, a los portuarios y a los trabajadores domicilio, lo cual dejaba fuera a la mayoría de los trabajadores del campo español<sup>107</sup> excluyendo a una parte muy importante de la población si tenemos en cuenta que más de 5,2 millones de españoles pertenecían en 1950 al sector agrícola o pesquero para un total de población activa de algo más de 10,7 millones. Por eso en 1958 el Jefe de Asuntos Generales del S.O.E. estimaba que, con respecto a la incorporación de la población del campo al seguro, no se conocían con una mínima certeza los datos estadísticos.<sup>108</sup> Se era consciente de la traición del "Nuevo Estado" a ese mundo rural que representaba la panacea de los valores que aquél había pretendido implantar tras la guerra civil. Carlos Pinilla reconocía en el Boletín Informativo del I.N.P. de fecha 14 de junio (un día después de clausurarse la I Asamblea del I.N.P.) que los trabajadores del campo no disfrutaban de los beneficios del seguro de enfermedad.<sup>109</sup> Sólo podía establecerse la excepción para los trabajadores fijos, partiendo del hecho de que, pese a ello, éstos no recibían las prestaciones complementarias de los seguros sociales generales en los casos de jubilación, invalidez, viudedad u orfandad. El mismo Girón reconocía en el Boletín del I.N.P. de la misma fecha que en lo referente al seguro de enfermedad (y al resto de los seguros) se había permitido que el campo español quedara huérfano de protección ante la adversidad, lo cual venía a influir (junto a los bajos salarios) en la despoblación paulatina del campo y en el incremento paralelo de los problemas de los suburbios infectos de algunas de las más importantes ciudades españolas.<sup>110</sup>

La idea de que la familia española había de ser el marco de referencia fundamental en todo lo referente a la legislación sociolaboral se plasma también formalmente en el seguro de enfermedad. Si comparamos con otros ámbitos de la previsión relacionados con la familia como el de los subsidios familiares se observa que en el caso del S.O.E. se consideraba un concepto de trabajador-productor algo más amplio. En este caso se define como productores a "todos aquellos que con su trabajo intervengan en España en un ciclo cualquiera de la producción, bien sea por su cuenta o por cuenta ajena, así como a los que trabajan en su domicilio y los colocados en servicios domésticos (art. 4º de la ley de 1942)." En el caso de los trabajadores manuales se establecía su afiliación independientemente de la renta con la salvedad de que la base de cotización era el máximo salario asegurable el cual, en el caso del reglamento de 1943, se situaba en las 9.000 pts. De hecho, el seguro de enfermedad tuvo como característica básica la de restringirse prácticamente a los trabajadores por cuenta ajena, pese a las manifestaciones demagógicas hechas desde los organismos del ministerio de Trabajo.<sup>111</sup>

La disposición transitoria sexta establecía la posibilidad de establecer la obligación de afiliación por parte del ministerio de Trabajo en fechas distintas para los trabajadores fijos, eventuales, a domicilio y de los servicios domésticos. Ello constituyó la base legal para postergar la incorporación de algunos de estos grupos y para que el campo de aplicación fuera más reducido del que aparentemente imponía el artículo 7º de la ley. En el caso de los trabajadores por cuenta propia se establecía que su afiliación había de realizarse corporativamente a través del organismo sindical correspondiente. Estos productores tenían la posibilidad de elegir a los organismos o entidades que habrían de facilitarles las prestaciones del seguro según el Decreto de 13 de diciembre de 1946 y su orden complementaria de 16 de enero de 1947.<sup>112</sup>

Como se ha mencionado, en cuanto a los topes salariales protegibles, se estipuló en principio un límite situado en las 9.000 pts. para los trabajadores en general y sin estipulación alguna para los trabajadores manuales. Más tarde dicho límite se situó en las 12.000 pts. y por el Decreto de 29 de diciembre de 1948 se incluyó en este régimen a todos los trabajadores cuyos ingresos básicos no excedieran de 18.000 pts.<sup>113</sup>

En cuanto a las prestaciones, a mediados de los años cuarenta la carestía de la vida evidenciaba claramente que las prestaciones económicas resultaban insuficientes, hasta tal punto que los trabajadores que superaban los sesenta años no eran amparados de hecho por el seguro en el momento de su vida en que más necesaria les era su atención. Eso sin considerar la ausencia generalizada en el campo de dispensarios, las dificultades en su origen para que el S.O.E. atendiera a los enfermos de tuberculosis o los problemas que representó en sus primeros años el tiempo de carencia fijado para el percibo de las indemnizaciones.<sup>114</sup> Y es que como la propia

Jefatura Nacional del S.O.E. reconocía a la altura de 1952 "quedaban fuera de los beneficios del seguro de enfermedad considerables masas de productores agropecuarios que, por no disfrutar de la estabilidad en su ocupación, habían quedado relegados para una segunda fase."<sup>115</sup> Pese a ello, entre el sindicalismo español existía la creencia de que el buen funcionamiento del seguro de enfermedad partía de la revisión de los beneficiarios incluidos en las cartillas del seguro y de la limitación del plazo de asistencia farmacéutica a la reglamentariamente establecida.<sup>116</sup> Todo ello, para Girón, no representaba un fracaso sino un paso hacia adelante en la consecución de los objetivos del S.O.E. Para el ministro de Trabajo no podía "sacrificarse la rapidez de un avance importante al prurito del efectismo y los detalles"<sup>117</sup> lo cual legitimaba el dejar sin el amparo del seguro a los trabajadores a domicilio, a los desempleados y a los trabajadores por cuenta propia.

El Decreto de 8 de enero de 1954 estipulaba la ampliación del S.O.E. a los trabajadores por cuenta ajena con ingresos hasta las 30.000 pts. anuales, si bien disposiciones posteriores impedían que dicha norma fuera aplicada a los empleados con título universitario o de Escuelas Especiales que realizasen en las empresas sujetas a reglamentación los trabajos propios de su profesión.<sup>118</sup> El mencionado decreto fue debido a la modificación substancial de un número importante de reglamentaciones en un intento por parte de las autoridades del ministerio de Trabajo de acomodar los salarios a los costes de la vida, lo cual dejaba fuera del campo de aplicación del seguro de vejez e invalidez a los que sobrepasaban la cifra de ingresos estipulada.<sup>119</sup> Para el año 1956 la cifra máxima considerada era la de 40.000 pts. para los trabajadores por cuenta ajena, manuales o intelectuales, mayores de 14 años, fijos o eventuales. Se seguía exceptuando a los empleados con título facultativo de Escuelas especiales, que realizasen actividades peculiares de su profesión dentro de las empresas y a los periodistas con carnet profesional contratados como tales, cuyos sueldos no fueran superiores a las 18.000 pts. anuales.

Todo ello daba como resultado que el número de asegurados ascendía a 4.110.314 en el año 1956 y el de beneficiarios a 10.168.787.<sup>120</sup> En 1957 el número de asegurados era de 4,5 millones y el de beneficiarios estaba en torno a los 7 millones lo que daba un total inferior a los 11 millones de españoles (10,2 millones) amparados por el seguro con una población para el año 1960 de más de 30,5 millones de habitantes o de 27,9 para 1950. En cualquiera de los casos el número de españoles sin protección por parte del seguro era muy superior al de aquellos que gozaban de sus prestaciones,<sup>121</sup> lo cual reducía el margen de protesta del sector médico en función del alto número de posibles clientes cuyo único refugio era la medicina privada.<sup>122</sup> La diferencia entre el mundo de los deseos y de las fábulas pone de manifiesto una zanja existente entre los 16 millones de españoles<sup>123</sup> que había de cubrir el S.O.E. diez años después de su puesta en funcionamiento y los nueve millones que cubría oficialmente en dicha



fecha. Pese a ello podemos encontrar testimonios como el de Severino Aznar<sup>124</sup> que, en 1949, cuando el número de beneficiarios del seguro alcanzaba (según las más optimistas apreciaciones) los 8,3 millones, afirmaba que el seguro amparaba a más de 15 millones, cifra inimaginable en aquel momento. Los datos ofrecidos son fruto de la tendencia a sobredimensionar las realizaciones del régimen, algo típico en cualquier aspecto de la política social.

El estudio realizado en esta tesis sobre el paro ha incidido en la diferencia entre las cifras oficiales y las estimaciones más próximas a la realidad. En el caso de los seguros tenemos que tener en cuenta estos mismos principios, no sólo cuando la fuente resulta ser un informe de un funcionario del ministerio de Trabajo sino cuando observamos que las cifras del Anuario Estadístico de España (provenientes a su vez de la Dirección de Asistencia Sanitaria e Instalaciones del S.O.E.) son inferiores a las barajadas líneas más arriba. Concretamente, según esta fuente, para el año 1956 el número de asegurados ascendía oficialmente a 3.978.337 y el de beneficiarios a 9.805.882; en 1957 el número de asegurados suponía 4.141.382 y el de beneficiarios 10.221.209. En cualquiera de los casos las cifras (incluso sin ponerlas en duda) ya rebajarían las apreciaciones realizadas con anterioridad.

Año	Asegurados	Beneficiarios
1947	3.034.106	8.320.504
1948	3.166.296	8.546.451
1949	3.131.501	8.379.853
1950	3.064.641	8.180.636
1951	3.145.194	8.402.395
1952	3.297.287	8.766.544
1953	3.719.362	8.707.754
1954	3.621.110	8.999.579
1955	3.784.376	9.380.752
1956	3.978.337	9.805.882
1957	4.141.382	10.221.209

*\*Cuadro n° 83. Número de asegurados y beneficiarios del S.O.E. de 1947 a 1957.*

Ello, en la práctica, propiciaba situaciones esperpénticas como que, a la altura de 1947, un trabajador manual que ganara 50 pts. diarias quedara encuadrado en el seguro de enfermedad mientras que un trabajador de menores recursos (con un sueldo diario de 35 pts.) pero no manual quedara fuera del seguro<sup>125</sup> cuando (evidentemente) la repercusión de la enfermedad (y la consiguiente falta de salario) era superior en el segundo pese a su carácter no manual. La incongruencia del sistema no acababa ahí dado que, si bien el seguro de enfermedad protegía al

trabajador manual con esas rentas diarias del trabajo, el sistema de previsión español no hacía lo mismo a la hora de considerar el seguro de vejez e invalidez.

Sin embargo, dentro de la clase médica se levantaban voces que denunciaban la amplitud del campo de aplicación y el peligro para el seguro de intentar abarcarlo todo con el consiguiente riesgo de no hacer nada eficazmente en la medida en que, habiendo enfermedades sociales tan graves como la tuberculosis, éstas no recibían solución eficaz por medio del S.O.E. dada la política titubeante y “el callejón sin salida donde hemos pasado tantos años.”<sup>126</sup>

#### **14.4. La financiación del seguro obligatorio de enfermedad.**

La financiación originaria del seguro de enfermedad partió de la autorización, por parte del ministerio de Trabajo, al Instituto Nacional de Previsión para anticipar al seguro de enfermedad las cantidades precisas para constituir su capital fundacional con cargo a los excedentes y fondos de los regímenes de subsidios y seguros sociales a cargo de dicho instituto, cantidades éstas que habrían de ser reintegradas por el seguro de enfermedad. Este capital fundacional ascendió a la cantidad de 50 millones de pts. La aportación del Estado, según el reglamento del seguro, se constituía con las siguientes aportaciones: 65 pts. por cada parte asistido por el seguro; 50 pts. por cada beneficiaria e hijo que lactase; durante el primer trienio la cantidad de 250.000 pts. anuales, y posteriormente el 25 por 100 del promedio anual del coste de las prestaciones sanitarias de maternidad. Es decir, la colaboración económica del Estado era insignificante<sup>127</sup> de lo cual da ejemplo el presupuesto del ministerio de Trabajo del año 1950 en el que se fijaba una subvención de 45 millones de pts. de los cuales 36 millones se dedicaban a gastos de administración, 5 a reservas y 4 a amortización del capital fundacional.

Sin embargo, el proyecto originario para la puesta en funcionamiento del seguro de enfermedad había partido del texto creado por una comisión en la que el subsecretario de Hacienda (uno de sus integrantes) había formulado la idea de que la financiación inicial de los gastos se realizase por parte del I.N.P. y por medio de la aportación de un capital fundacional que supuestamente habría de correr a cargo de los presupuestos aprobados por el ministerio de Hacienda. A pesar de ello, el ministro del mencionado ramo, Benjumea, se opuso en consejo de ministros a que el art. 39 (en el cual se establecía dicho mecanismo de funcionamiento) tuviese esa redacción estipulándose que el Instituto Nacional de Previsión anticipara las cantidades necesarias para constituir el capital fundacional y financiara los gastos de primer establecimiento, una carga para el mencionado instituto que no habría de favorecer la implantación del S.O.E. Y esto no habría sucedido así “si las normas de colaboración y apoyo del Estado en una obra de tan gran trascendencia social y política no hubiesen sido sustituidas por el más absoluto desasistimiento.”<sup>128</sup>

Su régimen financiero fue el de reparto simple<sup>129</sup> y se establecía la existencia de un fondo para hacer frente a las necesidades ordinarias del seguro y para compensar las desviaciones del presupuesto, así como a reparar las desviaciones en casos extraordinarios. Estos fondos de reserva se nutrían de los eventuales excedentes, del 5 % de las cuotas y de los intereses de los propios fondos. Su cuantía máxima era la mitad del valor medio anual de las prestaciones del seguro en el quinquenio anterior para el primer fondo y el duplo de este valor para el segundo. El reglamento establecía que el fondo de reserva destinado a compensar las desviaciones normales entre ingresos y gastos se nutriera con el 3 % de las primas, el 40 % de los excedentes anuales y los intereses del propio fondo. El fondo de reserva destinado a compensar las desviaciones entre los ingresos y los gastos en los casos extraordinarios se nutría con el 2 % de las primas, el 40 % de los excedentes anuales y los intereses del propio fondo. Se preveía que cuando se alcanzase en ambos fondos el tope establecido, el 5 % de las primas y el 50 % de los excedentes se dedicaran al aumento de las instalaciones, al incremento de las prestaciones y al establecimiento de otras prestaciones complementarias.

La cuota del S.O.E. estaba englobada en la cuota unificada determinada por los Decretos de 29 de diciembre de 1948 y 17 de junio de 1949, correspondiendo inicialmente de la cuota total un 7 % al salario de los asegurados (un 5 % a cargo de la empresa y un 2 % a cargo del trabajador).

De la violación de la propias normas promulgadas por el ministerio de Trabajo da cuenta la intención de la mencionada autoridad de prolongar a la altura de 1952 la capacidad de los organismos y entidades aseguradoras para autoexonerarse de la obligación que imponían los artículos 152 y 153 del Reglamento del Seguro de Enfermedad en la medida en que establecían la necesidad de constituir unos fondos de reserva obligatorios, posibilitando con ello que dichos fondos pudieran ser utilizados para el pago de prestaciones.<sup>130</sup>

Esta faceta sería una de las que más difícil resolución tendría a lo largo de los años de existencia del S.O.E. Entre otras cuestiones no existía una compensación nacional efectiva entre los diversos órganos que prestaban los servicios sanitarios, "lo que permitía a unas entidades que habían seleccionado sus riesgos o trabajaban en regiones de altos salarios tener superávits, mientras que las que no habían hecho esta selección tenían una cuota media insuficiente."<sup>131</sup> En este sentido la Jefatura Nacional de la O. S. 18 de julio recalaba a la Delegación Nacional de Sindicatos que el problema del seguro era la ausencia de unidad y concretamente el hecho de que el seguro "fuese concebido con base unitaria en la ley y desarrollado posteriormente en régimen de entidades colaboradoras."<sup>132</sup> Esta ausencia de unidad era lo que diferenciaba a la seguridad social de un sistema descoordinado de seguros sociales relacionados con el tema de la salud (maternidad, invalidez, accidentes y sobre todo enfermedad) tanto en cuanto su objetivo era devolver la salud y la capacidad de trabajo al que se

veía privado de ella. Pero era precisamente éste el motivo de que fueran éstos (y no toda la nación) los que debieran contribuir a financiarlo con sus primas. En la mentalidad de los dirigentes del I.N.P. como Severino Aznar hubiera sido injusto incluir las cuotas obreras o empresariales en el presupuesto general de la sanidad pública "porque no se puede obligar a esas clases ni destinar sus fondos a previsión, a procurar la salud de las otras clases, ni a pagar dos veces, una como ciudadanos y otra como factores de los seguros, las prestaciones que de la sanidad pública recibieron los asegurados."<sup>133</sup> En esta línea se encontraba el artífice principal del seguro, el ministro Girón. Según éste, el seguro de enfermedad no podía gravitar "peligrosamente"<sup>134</sup> sobre las economías privadas ni sobre el presupuesto del Estado; había de constituir una unidad económica que se bastara a sí misma.

A ello se unía el problema de la morosidad que llegaba al 20 % de los afiliados en el caso de los servicios sindicales. Así mismo, entre los mismos servicios la defraudación entre los empresarios estaba bastante extendida porque lo hacían por cantidades menores de las que debían, por menor número de trabajadores de los debidos, por menos días de los trabajados o por salarios inferiores a los reales. "Tal defraudación llega al escándalo en el campo donde tan sólo se cotiza, salvo rara excepción, por el salario mínimo..., cuando los reales son, a veces, el doble de los mínimos establecidos."<sup>135</sup> Por ambos motivos, los servicios sindicales dejaban de recaudar, según estimaciones propias, unos 600 millones de pts. anuales sobre los 517.865 asegurados (137.649 en RENFE) que tenían en 1953. Y es que los Servicios Sindicales del Seguro de Enfermedad también eran deficitarios desde el momento de su nacimiento. En 1953 el déficit de dicha entidad ascendía a 27.025.066 pts., ello sin incluir los más de 62 millones adeudados al I.N.P. o los más de 24 a la O. S. 18 de julio.<sup>136</sup> El déficit del año 1952 no fue tan acusado. Concretamente ascendía a 1.610.823,07 de pts. con unos ingresos totales de 328.100.525,39 pts.<sup>137</sup> En 1951, por el contrario el superávit de caja de los S.S.S.E. ascendía a 8.777.371,90 pts.

Por lo que se refiere al seguro regido por el I.N.P. a principios de los años cincuenta la situación financiera era deficitaria. En lo que respecta al seguro de enfermedad el déficit ascendía a 53.371.848 pts. en el año 1951.<sup>138</sup> En el año 1950 el déficit fue de 17.852.614 pts. Sin embargo, el déficit real tenía que ser mayor si se tiene en cuenta que las cuotas pendientes de cobro y su montante eran inferiores a las obligaciones que había de pagar el seguro. Eso era lo que permitía afirmar que sistemáticamente el seguro había de ser deficitario año tras año. En el año 1952 el déficit ascendía a 78.741.524,07 pts.<sup>139</sup> Dicha cifra podía rebajarse levemente sólo por medio del artificio contable que permitía, por el decreto de 1952, prescindir de las reservas del seguro. La caja nacional del S.O.E. cerró en 1953 con un déficit de 52 millones de pts. oficialmente pese a lo que otras fuentes indican que dicha cantidad ascendió a 71.907.904,18 pts. En 1954 su situación mejoraría en función de un artificio contable

sustentado en el Decreto de 8 de enero de 1954 que posibilitaba la ampliación del campo de aplicación del seguro al considerar como asegurables las rentas anuales inferiores a 30.000 pts. y al incrementar la cuota media por asegurado. Ese fue el motivo de que el déficit de la Caja Nacional del Seguro para 1954 ascendiera a 50.047.032,83 de pts.<sup>140</sup>

Las causas de dicha situación se pueden deducir de informes como el que la Dirección de Asistencia Sanitaria elevaba al I.N.P. con fecha de 19 de septiembre de 1951.<sup>141</sup> A partir de dicho informe se constata la preocupación por el hecho de que, ya en 1948, se inició un proceso deficitario en el seno del seguro de enfermedad que el I.N.P. era incapaz de frenar partiendo de la conciencia de que el mayor peso del incremento de los gastos no obedecía exclusivamente al gasto farmacéutico sino a los incrementos de los salarios de la clase facultativa.

Pese a ello, el incremento del gasto farmacéutico tenía una especial trascendencia no fundamentada en el proceso inflacionario (con un valor medio entre 1940 y 1951 en torno al 14 %)<sup>142</sup> sino en la búsqueda de mayores ganancias por parte del sector farmacéutico. Éste había comenzado a comprender que si la presión del ministerio de Trabajo no se ejercía de forma efectiva sobre el mismo era porque estaba comenzando a poseer, gracias a la política gubernamental, un mercado cautivo al que podían tranquilamente duplicar el precio de sus servicios como efectivamente así sucedió.<sup>143</sup>

Otro factor que influía de forma acentuada era la falta de previsión. Concretamente, el Servicio Matemático del I.N.P. había programado que el promedio del gasto farmacéutico por asegurado debería situarse en las 4,38 pts./mes, cantidad que muy pronto se vio aumentada (por el propio servicio matemático) en un 0,43 % cifrándose dicho gasto medio mensual en 4,81 pts., cantidad muy alejada de las más de 13 que constituyen la media del año 1950. Independientemente de las motivaciones ya señaladas, del aumento de los beneficiarios y del fraude (atención a familiares del asegurado no dependientes del seguro, certificados de "complacencia" por parte de los médicos del seguro, posibles prolongaciones indebidas de la atención médica, etc., etc.) dos causas incidían de forma decisiva en el incremento del gasto: la falta de residencias y ambulatorios propios del Seguro de Enfermedad y la falta del petitorio oficial del seguro.<sup>144</sup> Todo ello permitía a las autoridades plantear la impopular medida de que, como remedio contra dicho desfase, se obligase a los asegurados a contribuir con un porcentaje del precio de la medicación al mantenimiento de la salud financiera seguro. De igual manera, se planteaba la posibilidad de sancionar a los médicos "antieconómicos"<sup>145</sup> y de eliminarlos de los cuadros médicos, aparte de plantear la lucha contra el déficit por medio de las sanciones contra farmacéuticos, médicos y asegurados que fraudulentamente abusaran del seguro.

En cuanto a la evolución de los salarios de los facultativos hay que tener en cuenta que su influencia sobre el déficit del seguro fue menor que la evolución de los costes farmacéuticos. La Orden de 27 de julio de 1944 establecía los honorarios y el cupo de familias asignables a cada facultativo de medicina general ordenándose que el número de familias no excediese de 500 y computándose cada 3 afiliados individuales como una sola familia. Los honorarios se fijaban en 4,50 pts. por cada familia y mes en las poblaciones de más de 100.000 habitantes y en 4 pts. en el resto de las localidades. A partir del 1 de abril de 1946 rigieron nuevos criterios.<sup>146</sup> Los honorarios seguirían siendo de 4,5 pts. por familia y mes, computándose dos asegurados individuales como una familia. A partir del 1 de junio de 1949 el sueldo se elevaba a 5 pts. por mes y familia considerándose cada asegurado individual como familia. A renglón seguido, la Orden de 19 de julio de 1949 establecía la cantidad máxima de 650 asegurados por facultativo.

A la hora de aludir a la incidencia en los gastos de los honorarios de los especialistas del seguro hay que tener en cuenta que el establecimiento de dichos servicios se desarrolló por fases. Desde el 1 de septiembre de 1944 hasta el 31 de enero de 1947 se ejecutó una primera fase en la que el seguro únicamente atendió a la asistencia en medicina general, farmacia y a las indemnizaciones económicas por enfermedad. A partir del 1 de febrero de 1947 comenzó formalmente la implantación de las siguientes especialidades: cirugía general y hospitalización quirúrgica, oftalmología, otorrinolaringología y radiología como medio de diagnóstico, laboratorio y análisis clínicos y servicio de practicantes. La disposición que estableció dichas prestaciones fue la Orden de 16 de enero de 1947 y en ella se estipulaba igualmente que a partir del 1 de febrero de 1948 se implantaran el resto de las prestaciones excepto la hospitalización médica, atención que dependía de la construcción de las instalaciones necesarias. En cualquiera de los casos, el hecho de que la primera residencia del nuevo plan no se inaugurara hasta septiembre de 1949 pone de manifiesto el escaso peso que dicho capítulo podía tener en que a partir de 1948 el seguro de enfermedad fuera deficitario.

Año	Promedio mensual de gasto farmacéutico por asegurado en pts.	Promedio mensual de gasto en salarios de facultativos de medicina general por asegurado en pts.	Promedio mensual de gasto en salarios de facultativos especialistas por asegurado en pts.
1944	0,198	2,415	
1945	2,540	3,341	0,123
1946	4,472	3,583	0,382
1947	5,809	3,778	1,221
1948	7,624	4,076	3,254

1949	10,380	4,730	3,860
1950	13,720	4,770	4,690

\*Cuadro n° 84. Evolución de algunos gastos del SOE de 1944 a 19550.

Hay que prestar atención al volumen de fraude generado por la cotización inferior a la debida por parte de los empresarios o a la simple ausencia de cotización por parte de los mismos. Sobre esta cuestión el I.N.P. recibía esta información:

“La exclusión de los productores ha sido el concepto que ha comprendido el mayor número de descubiertos y la mayor cuantía de los mismos. Sobre todo en los primeros años de aplicación del Seguro la discriminación entre manuales y no manuales, produjo verdaderos estragos. Y en todo tiempo ha sido y seguramente seguirá siendo la causa de descubiertos, sobre todo cuando se trata de trabajadores con fuerte retribución y en que la cuota a pagar por ellos es elevada, pues es más fácil el acuerdo entre empresarios y trabajadores en las empresas de reducido número de asegurados y más aún en aquellas en que estos están ligados con la empresa por vínculos de amistad o de familia.”<sup>147</sup>

A esta realidad había contribuido de forma esencial el propio ministerio de Trabajo dado que por medio del Decreto de 17 de junio de 1949 se establecía el concepto de salario base y los conceptos por los que empresarios y trabajadores habían de cotizar. Ello era utilizado por el mundo empresarial para desvirtuar los conceptos allí utilizados interpretándolos en el sentido más favorable para sus intereses y sus beneficios dado que se exceptuaban de la cotización varias retribuciones que anteriormente si se consideraban sujetas a la misma o al menos la ejecución de la cotización era parcialmente interpretable por el empresario. La inspección del seguro había detectado en el periodo 1944-1946 un fraude que ascendía entre las empresas a 79.327.472,51; en el periodo 1947-1950 el fraude ascendía a 68.407.942 lo cual suponía un total de 147.735.415,15 pts. lo que sumado al posible fraude calculado por los organismos del I.N.P. (tan sólo en la cotización por el seguro de enfermedad) suponía un total 236.444.629,15 pts. teniendo en cuenta que no todo el fraude posible era jurídicamente recuperable para las finanzas del seguro puesto que, en gran medida, el seguro era consciente de que muchas de aquellas defraudaciones habían prescrito por incompetencia o por voluntad política del I.N.P.<sup>148</sup>

Esta situación deficitaria se iba a prolongar hasta la salida del ministerio de Trabajo de Girón de Velasco como así consta en el Informe sobre la estadística económica del S.O.E. referente al periodo de 1954 a 1957. Dicho informe, entre otras cuestiones, destacaba el hecho de que el 67 % de los beneficiarios eran atendidos de forma directa por la asistencia privada.<sup>149</sup>

conceptos	público <sup>150</sup>	semipúblico	empresas	comercial	nacional
-----------	------------------------	-------------	----------	-----------	----------

n° de afiliados	1.515.845	712.448	233.949	1.555.509	4.017.751
cuotas cobradas (miles)	1.240.663	800.746	378.223	1.780.397	4.200.029
cuota anual (por asegurado)	818,46	1.123,90	1.616,69	1.144,75	1.045,38
cuota mensual	68,20	93,66	134,72	95,40	87,11
sueldos medios	974,27	1.338	1.924,57	1.362,85	1.244,42

*\*Cuadro n° 85. La situación del S.O.E. en 1957.*

De los datos expuestos (cuadro n° 85 y 86) se deduce que sólo el I.N.P. tenía cuotas inferiores a la media nacional mientras que las cuotas más elevadas eran las de las mutualidades que cubrían salarios más elevados, las de las empresas (algunas de las cuales tenían, como Telefónica o el Banco Hispano-Americano, cuotas medias mensuales por trabajador que ascendían a 185,14 pts. y 171,19 pts. respectivamente). Y es que este esquema pseudoprivado de la sanidad pública provocaba un efecto no deseado por el ministerio de Trabajo. Y es que el I.N.P. tenía que asegurar a toda empresa mientras que las otras entidades semipúblicas o privadas no tenían porque aceptarlas como clientes y por tanto el I.N.P. había de recibir con los brazos abiertos a aquellas industrias con grupos de trabajadores con posibles crisis futuras, con salarios más bajos e inestables o con una mayor morosidad por parte de las empresas.

prestaciones	público	semipúblico	empresas	comercial	nacional
económicas	13,2	18,01	17,3	19,48	17,15
personal	25,42	17,50	13,40	17,56	19,5
farmacia	32,97	29,33	33,41	24,52	27,74
instituciones sanitarias	16,82	12,98	9,63	12,67	13,68
otras prestaciones	1,7	2,41	7,92	3,66	3,22
total	90,11	80,23	70,66	77,89	81,29
excedentes	9,89	19,77	29,34	22,11	18,71
cuota cobrada	100	100	100	100	100
gastos y reservas medios	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
déficits	8,61				
superávits		1,27	10,84	3,61	0,21%

*\*Cuadro n° 86. Porcentajes en % de las prestaciones sobre la cuotas cobradas en 1957.*



Observando la referencia entre cuotas y prestaciones se observa que, las porcentualmente más elevadas, eran las del I.N.P. y que por tanto era la única entidad deficitaria, proceso inverso al de las empresas y entidades aseguradoras privadas que vivían del seguro con sistemáticos superávits año tras año.

prestaciones	público	semipúblico	empresa	comercial	nacional
económicas	9	16,87	23,31	18,58	14,94
personal sanitario	17,34	16,39	18,05	16,75	16,99
farmacia	22,48	27,47	30,19	23,39	24,16
instituciones sanitarias	11,47	12,16	12,97	12,09	11,92
otras prestaciones	1,16	2,26	10,67	3,49	2,80
total prestaciones	61,45	75,15	95,19	74,30	70,81
inspección 2,5 %	1,70	2,34	3,37	2,39	2,18
reservas 5%	3,41	4,68	6,74	4,77	4,36
gastos generales 11%	7,5	10,30	14,82	10,5	9,58
total gasto	74,06	92,47	120,12	91,96	86,93
pérdida	-5,86	---	---	---	---
ganancia		1,19	14,60	3,44	0,18
cuotas medias	68,2	93,66	134,72	95,40	87,11

*\*Cuadro n° 87. Distribución de las cuotas medias mensuales en pts. de 1957.*

La diferencia de prestaciones era debida al hecho de que los salarios que las sustentaban también eran distintos. En el I.N.P. las cotizaciones de las empresas más fuertes servían para equilibrar los de las empresas más débiles. En consecuencia, las primeras tendían a crear sus propias cajas de empresas o bien a asegurarse en otras entidades. Cualquiera de los planteamientos era contrario a una política social de solidaridad o de compensación nacional. En consecuencia, el grupo de españoles (en absoluto el resto) que estaban asegurados en el S.O.E., al no existir una Caja Nacional de compensación que efectivamente se comportara como tal, no tenían ni iguales deberes ni iguales derechos. Y es que las cajas de las empresas afiliaban a los trabajadores de la misma empresa o grupo de empresas de sectores industriales idénticos

con lo que sus características económicas y demográficas podían ser, en gran media, homologables. Y todo ello sin contar con el hecho de que desde la puesta en funcionamiento del seguro 133 entidades colaboradoras dependientes del seguro habían desaparecido sobrecargando las obligaciones del I.N.P. O sin considerar la incidencia negativa que habían de tener en la economía del seguro las autorizaciones a partir de 1956 para que dejaran de cotizar ciertos conceptos por los que antes se cotizaba, las mejoras parciales en prestaciones sanitarias o económicas y la subida de los precios, factores todos ellos que habían de incidir muy negativamente en los costes de hospitalización y farmacia. Por tanto, el hecho de que no se procediera a trabajar con un colectivo nacional (con un sistema de caja de compensación nacional efectivo) era uno de los elementos que más perjudicaba la estabilidad financiera del seguro en su vertiente estrictamente pública.

Por ello el I.N.P. tenía que utilizar, en parte, un imperfecto sistema de caja única, por el cual compensaba con los fondos de los demás seguros estos déficits crónicos, gracias al régimen de Tesorería General, manteniendo los déficits mencionados. Todo ello entraba en el terreno de la lógica, tanto en cuanto, los sindicatos no podían realizar una selección de cartera, mientras que las demás entidades colaboradoras podían renunciar libremente a las empresas morosas y de ahí la lucha entre sindicato y ministerio de Trabajo para lograr que este último enjugase los déficits del primero a cargo de los fondos públicos. En definitiva, la realidad estaba pidiendo un régimen general unificado y nacional con un específico sistema de compensación nacional que resolviera los desequilibrios previamente citados.

Ello era causa de que la actividad del Plan de Instalaciones a principios de los años cincuenta languideciera ante un futuro incierto. Y es que el 82% del presupuesto de los gastos de administración se lo llevaban los gastos de personal. En el año 1951, el Plan se replegaba sobre sus objetivos iniciales. Las posibilidades financieras del I.N.P. eran mínimas. Hasta el momento se habían invertido 1.500 millones de pts. en cifras redondas pero faltaban aproximadamente unos 1.300 más para acabar con la primera fase. La única solución para Carlos Pinilla, el entonces Presidente del Instituto, consistía en que el ministerio de Hacienda permitiese la emisión de obligaciones para financiar dicho plan. Sin embargo, dicha emisión únicamente suponía 965 millones que no daban para terminar esta primera etapa.<sup>151</sup> Y es que el Instituto no estaba dispuesto a arriesgar su, ya de por sí mala, salud financiera en este plan.

De hecho, el fondo de reserva no se constituía y el déficit era sistemático,<sup>152</sup> si bien hay que tener en cuenta que la culpa no era íntegramente del I.N.P. dado que, si bien era el máximo responsable de los aspectos económicos, no lo era de la gestión en su totalidad. Ello era causa de que las entidades colaboradoras no pagaran sus deudas incidiendo más si cabe en la mala salud financiera de la institución.

### 14.5. La administración del S.O.E.

El seguro obligatorio de enfermedad quedó a cargo del Instituto Nacional de Previsión como entidad aseguradora única a través de la Caja Nacional del S.O.E.<sup>153</sup> Para encauzar y dirigir la administración del seguro, se creó la Jefatura Nacional del Seguro de Enfermedad, encuadrada en la Dirección General de Previsión del ministerio de Trabajo. Como órgano asesor del ministerio de Trabajo y de la Dirección General de Previsión se creó el Consejo Nacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad.

La prestación de los servicios médicos del seguro se realizaba a través de la O. S. 18 de julio, salvo que, con informe favorable de dicha obra, quedase a cargo de otras instituciones dependientes del Estado, provincia, municipio, montepíos y mutualidades laborales, cajas de empresa o instituciones privadas. Este era uno de los puntos de menor coordinación entre el I.N.P. y la O. S. 18 de julio. Este posicionamiento de la ley resultó papel mojado para la Delegación Nacional de Sindicatos y a la altura de 1953 dicha delegación se quejaba amargamente del pequeño papel que se le reservaba en el Seguro de Enfermedad generando un “declive” en el que la organización sindical estaba perdiéndolo todo. Y es que la ley establecía que fuera la obra quien organizara los servicios médicos encuadrando a todos los médicos dentro de su disciplina. No es que dicho objetivo no se consiguiera; es que con la creación de los Servicios Sindicales<sup>154</sup> del Seguro de Enfermedad a partir de 1953 la obra dejó de tener “existencia legal”<sup>155</sup> dado que los servicios sindicales operaban al nivel de una entidad colaboradora impidiendo que el mundo del trabajo percibiera la labor que la obra realizaba a su favor con el consiguiente desprestigio para la misma tal y como refleja la siguiente aseveración en la que se incide en el papel, cuando menos parcial, de la política social del régimen franquista como mecanismo de adhesión de las masas trabajadoras:

“...es fundamental para nuestro sindicato, que tan pocas cosas efectivas puede ofrecer a los trabajadores, mantener aquellas acciones de carácter asistencial que son verdaderamente gratas y en este aspecto ninguna ha calado tan hondo ni puede promover mayores extremos de adhesión y afectos que la médico-asistencial.”<sup>156</sup>

La mencionada Obra Sindical 18 de julio fue creada en 1940 por la Delegación Nacional de Sindicatos para desarrollar un sistema de asistencia médica para los trabajadores. La tardía organización en Madrid se debió a la necesidad de esperar al cumplimiento de aquellas disposiciones que determinaban el destino de los bienes de los partidos y sindicatos de la II República<sup>157</sup> lo que, finalmente, puso a su disposición las primeras instalaciones que en su origen pertenecieron a la Mutualidad Obrera, entidad filial de la U.G.T. La obra tenía tres

secciones: médica, sanitaria y de medicina del trabajo. La sección sanitaria tenía como función esencial atender al seguro de enfermedad; la sanitaria atendía a las cuestiones que incidieran sobre los grandes factores demográficos que representaban las enfermedades venéreas, la protección a la maternidad y la infancia, la lucha contra la tuberculosis, el cáncer y las enfermedades epidémicas. La sección de medicina del trabajo atendía a la inspección de centros de trabajo y a la protección contra las enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, inspección sanitaria de los trabajadores, asistencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Los mencionados Servicios Sindicales adquieren carta de naturaleza con la publicación en el Boletín del Movimiento de la orden de 1 de junio de 1944 en la que se crean dichos servicios situando a su frente como Jefe Superior a Agustín Aznar Gener, dependiendo dicha institución de la organización sindical con facultades de mando divididas entre la O. S. de Previsión Social y la 18 de julio.<sup>158</sup> Su sucesor a partir del 19 de agosto de 1952 fue Luis Burgos Boezo.<sup>159</sup> La orden de 4 de mayo de 1944 del ministerio de Trabajo establecía las normas reguladoras de los conciertos entre esta entidad sindical y la Caja Nacional del S.O.E. en la que los S.S.S.E. adquirirían la categoría de entidad colaboradora.

En este sentido la acción del sindicato era fundamental, dado que su implicación en el S.O.E. pretendía dar un sentido de convivencia y familiaridad en favor de las relaciones de aquél con los afiliados del S.O.E. El hecho de delegar en los sindicatos la afiliación de los trabajadores autónomos convertía a dicha institución en una especie de juez incorrupto en la valoración de la debilidad económica de los futuros afiliados velando por la salud de quienes habían quedado bajo su patrocinio.<sup>160</sup>

Otro vertiente de la política de prestigio sindical se basaba en el control de los médicos y en su encuadramiento en la organización sindical tal y como Adolfo Gómez Ruiz (Jefe Nacional de la O. S. 18 de julio) manifestaba a la D.N.S.:

“...manteniendo esa asistencia en los consultorios, controlamos un número de médicos que constituyen para nosotros una fuerza política inestimable y en definitiva, es la que está haciendo valer su influencia en estos momentos ante los organismos rectores del seguro, frente a la vacilante y gris actuación de los Colegios Médicos Profesionales...¿cómo no hemos de valorar la enorme fuerza política que supone en España más de cinco mil médicos encuadrados en nuestra organización? En la provincia que abandonemos habremos dejado escapar este resorte de nuestras manos...”<sup>161</sup>

Desde este punto de vista, la puesta en marcha del seguro en su vertiente administrativa dependía de esas dos muletas: el I.N.P. y la O. S. 18 de julio. Sin embargo, pese a los preceptos que señalaban las atribuciones de la obra en este ámbito, la realidad era muy diferente “pues después de publicarse la ley y el reglamento que glosamos, el ensanchamiento se ha producido en el Instituto Nacional de Previsión, y la contracción en la obra”<sup>162</sup> lo cual era motivo para la Delegación Nacional de Sindicatos de que el seguro no hubiera alcanzado las metas propuestas y de que la ley y su reglamento fueran “letra muerta en orden a la O. S. 18 de julio y su misión.”<sup>163</sup>

El servicio médico era organizado por el Instituto Nacional de Previsión. La primera fase de concertación con entidades privadas no tuvo un éxito muy notable a tenor de la reforma que el ministerio de Trabajo llevó a cabo en 1954 para regular las facultades del Instituto Nacional de Previsión en lo referente al S.O.E.<sup>164</sup> Se buscaba con ello regularizar y endurecer los criterios que regían las relaciones entre las entidades que no fueran la Obra Sindical 18 de julio y el I.N.P.

A la altura del año 1942 la Obra controlaba 31 dispensarios en León, Palencia, Salamanca (2), Segovia, Madrid (13), Guadalajara, Zaragoza, Valencia (5), Cuenca, Almería y Sevilla. En cuanto a los sanatorios disponía de 11 en Barcelona (2), Zaragoza, Guadalajara, Madrid, Cuenca, Valencia, Almería, Málaga, Huelva, Granada. A ello se añadían cinco consultorios (Tánger, Ceuta, Melilla, Jaén y Huelva) y seis clínicas (una en Barcelona, Alicante, Córdoba respectivamente, y tres en Tarragona)

Indudablemente, la organización sindical tenía un papel fundamental a la hora de llevar el S.O.E. a los trabajadores por medio de los Servicios del Seguro de Enfermedad creados para tal fin el 18 de julio de 1944. Su finalidad consistía en prestar la asistencia médico sanitaria a los productores, especialmente a los del ámbito agrícola entre los cuales el fraude y el déficit de caja era la nota distintiva a mediados de los años cincuenta. Ello explica que su afán por controlar un servicio de prestigio de cara a los trabajadores españoles se tomara a mediados de los años cincuenta en un afán desmesurado por descargar sus presupuestos del peso del seguro de enfermedad.<sup>165</sup> Ese era el motivo de que se solicitara la rescisión de la relación del mundo sindical con el seguro y que la Caja Nacional se hiciera con el total de la prestaciones del mismo solicitando “la rescisión del concierto establecido con el I.N.P., cediendo a la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad la prestación del referido Seguro, a cuyo efecto los actuales afiliados en los Servicios Sindicales pasaran a la referida Caja Nacional y también el personal médico y sanitario y demás medios personales y materiales que se consideren necesarios.”<sup>166</sup> A este motivo hay que añadir la consideración de que no existía un verdadero régimen de compensación nacional, tal y como en principio se concibió el seguro, lo cual permitía que la

elección de la entidad colaboradora con la que se deseaba concertar el seguro perjudicase claramente los intereses de la O. S. 18 de julio y de los S.S.S.E. al determinar el número de afiliados en las mismas su solvencia financiera. En cuanto al fraude en el campo se era consciente de que en aquél las cantidades no declaradas eran elevadas en función de que la cotización se realizaba por parte de los empresarios en función del salario mínimo aun cuando los salarios reales fueran más elevados.<sup>167</sup>

La elección por parte del asegurado de la Caja Nacional del S.O.E. o de la entidad colaboradora dependía formalmente de él y no de la empresa. En 1947 se llevaron a cabo elecciones con el fin de cubrir dicho servicio estando previstos nuevos comicios por períodos trienales según el Decreto de 30 de enero de 1953.<sup>168</sup> Sin embargo, las elecciones quedaron suspendidas por medio de otro Decreto, en este caso el de 21 de agosto de 1956, con lo que las elecciones de 1947 resultaron ser para plazo *sine die*. Así pues, las empresas creadas con posterioridad a 1947 elegían la entidad que más convenía a sus intereses sin que los trabajadores pudieran tomar esa decisión que en origen les pertenecía.

Ante las dificultades económicas, la organización sindical se mostró remisa a aceptar un excesivo número de atribuciones en la aplicación de este seguro considerado por Girón y su equipo como la piedra básica del edificio de la previsión social española. En principio, la organización sindical se quejaba de que carecía de la organización necesaria para poner en práctica dicho seguro, lo cual a la larga la llevaba a plantearse aspiraciones que no estaban en el terreno de la realidad en función de los medios materiales y humanos efectivos de que disponía. En definitiva, el ministerio de Trabajo y el Sindicato se lanzaban “a empresas de proporciones que después dejaban en la estacada. Concretamente en la actualidad está embarcada en el empeño de llevar a cabo la Ley del Seguro de Enfermedad en cuya realización se ha arrogado una serie de funciones que en manera alguna podrá abarcar.”<sup>169</sup> Es por ello que la organización sindical se negaba a organizar y gestionar la totalidad de los servicios sanitarios del seguro de enfermedad.

Sólo algunos de los sindicatos se lanzaron a la difícil misión de garantizar este seguro social a sus miembros. Concretamente fue la empresa R.E.N.F.E. la que más hizo en este sentido para procurar sacar ventaja de la relativa autonomía en la prestación y administración de estos servicios.<sup>170</sup> Pese a ello, el resultado no fue excesivamente positivo en la medida en que dichos servicios, por estar centralizados en el caso de la R.E.N.F.E., cumplían insatisfactoriamente con las prestaciones que tenían a su cargo. Y todo ello para generar un maremagnum de órganos que habían de prestar servicios idénticos con el consiguiente perjuicio para los trabajadores que veían como la empresa para la que trabajaban y por la que eran reconocidos a través de sus servicios facultativos no era la que estaba obligada a concederles todas las prestaciones del

seguro de enfermedad. Ante esta realidad dentro de las filas de sindicatos de tanto peso como el de la construcción se solicitaba en la década de los cuarenta que dichas prestaciones fueran concedidas únicamente por un montepío nacional de la construcción y que, de no ser así, las prestaciones fueran otorgadas por una entidad en la que interviniesen los trabajadores como la Obra Social 18 de julio. Hasta tal punto llegaba el desbarajuste administrativo en la prestación de los servicios sanitarios que dicho sindicato solicitó que el seguro de enfermedad fuera disuelto y que cada trabajador se asegurase individualmente en la entidad colaboradora que eligiese justificándolo ante la empresa.<sup>171</sup>

Junto a la O. S. 18 de julio, y como entidades colaboradoras reguladas por el Decreto de 13 de diciembre de 1946, existían también otras instituciones como el Instituto Social de la Marina que participaba en el seguro a través de la caja nacional de seguros sociales de los pescadores, las mutualidades, los montepíos e igualatorios de asistencia médico-farmacéutica que tuvieran sus servicios organizados antes del 18 de julio de 1936, las compañías y mutuas mercantiles de seguros que operaran en el ramo antes de aquella fecha y las cajas de empresas creadas para más de 500 asegurados y reconocidas por medio de la orden de 16 de enero de 1947 por parte del ministerio de Trabajo.<sup>172</sup>

Del peso de las entidades colaboradoras da cuenta el hecho de que en 1954, junto a la Caja Nacional del S.O.E., existían 4 cajas especiales, 47 cajas de empresa, 2 cajas de federaciones provinciales e interprovinciales, 6 cajas igualatorios (formadas por médicos), 12 montepíos, 24 mutualidades laborales nacionales, 26 mutualidades interprovinciales, 46 mutualidades provinciales, 5 compañías mercantiles y 6 montepíos laborales, lo cual suponía un total de 181 entidades colaboradoras.<sup>173</sup> Según datos de 1946 existían aproximadamente 300, lo cual constituía un perjuicio notorio para las relaciones administrativas que sembraban de complejidad la relación entre aquéllas y la Dirección General de Previsión y la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad.<sup>174</sup>

Uno de los problemas que se originaron después de tan sólo un año de experiencia fue que al convertirse en aseguradas, escudándose en disposiciones oficiales transitorias o de excepción, procuraban en su mayoría, permanecer desconectadas de la caja nacional del seguro. En consecuencia, sus médicos, elegidos por ellas, obraban individualmente, sin recibir orientaciones del seguro "en cuanto la práctica de la medicina social y creaban ambientes de descontento entre los compañeros, contribuyendo a prolongar, en bastantes casos, el sistema fracasado y sin aplicación al Seguro de Enfermedad de las antiguas Sociedades médico-farmacéuticas."<sup>175</sup>

Dichas cajas fueron definitivamente organizadas por el Decreto de 21 de julio de 1950 de la Jefatura Nacional del Seguro de Enfermedad (Dirección General de Previsión). Uno de los

principales problemas que acarreaba el sistema de cajas colaboradoras era la dificultad de inspección de los servicios contratados en los conciertos. Según la Jefatura Nacional del S.O.E. resultaba del todo imposible la comprobación de las cantidades que habían que abonar al centro aparte del hecho, comprobado por la inspección del servicio, de que el alojamiento y atención a los asegurados, en general, era muy inferior a la de los enfermos particulares.<sup>176</sup>

Todo ello ponía de manifiesto las carencias absolutas de España en el tema de la sanidad y la excesiva rapidez e improvisación con que se realizó la aplicación del S.O.E., lo cual evidenciaba también la ausencia de un compromiso efectivo por parte del ministerio de Trabajo. Así, se estipulaba que en cada localidad se montara un número de consultorios en relación con el número de familias pero sin incluir criterio alguno sobre la *ratio* a utilizar para aplicar dicho principio ni sobre los ritmos o períodos a partir de los cuales dichos consultorios debieran haber estado en funcionamiento. De igual manera, todo lo referente a la inspección médica quedaba incomprensiblemente en el aire.

#### **14.6. Hospitales y ambulatorios: El Plan Nacional de Instalaciones del S.O.E.**

El origen del plan de instalaciones se haya en la orden de 19 de enero de 1945 que aprobó aquél para suplir las deficiencias que, en la aplicación del seguro, suponía la ausencia de edificios adecuados para el desarrollo del S.O.E.<sup>177</sup> La comisión creada para tal fin estaba presidida por el Subsecretario de Trabajo y formaban parte de ella los Consejeros Presidentes de las ponencias de personal, presupuestos e inversiones, de obras y suministros y del seguro de enfermedad, el comisario del I.N.P. y el Director de la Caja Nacional del S.O.E. que actuaba como secretario.

Las dificultades para la financiación del plan de instalaciones dieron como resultado que el consejo del I.N.P. resolviera en su sesión del 20 de diciembre de 1945 el establecimiento de un primer plan de financiación que luego sería modificado por el consejo en su reunión del 26 de marzo de 1947. Pese a ello la falta de medios siguió siendo la tónica y el Decreto de 11 de enero de 1952 autorizó al I.N.P. a emitir obligaciones por valor de 965 millones de pts. con el objetivo de financiar la construcción de ambulatorios y hospitales.<sup>178</sup>

La puesta en marcha del plan se aprobó el 19 de febrero de 1945. A renglón seguido se creó, por orden de 15 de marzo de 1945, una comisión de enlace y por Orden de 5 de julio de 1945 se creó una ponencia en el seno del consejo del I.N.P. que recibió el encargo de desarrollar y poner en práctica el plan con una participación muy activa de la O. S. 18 de julio que posteriormente no se vería materializada pese a las manifestaciones formales del ministro



Girón.<sup>179</sup> Esta ponencia determinó que se necesitaban 61.378 camas para la asistencia de los 18.000.000 de beneficiarios que se suponía dependerían del seguro en 1960, si bien la limitación de medios hizo que dicha cantidad quedara reducida. En marzo de 1946 el I.N.P. convocó un concurso de proyectos de ambulatorios y residencias sanitarias para atender al seguro.<sup>180</sup>

	residencias/número	residencias/camas	ambulatorios
1º fase de ejecución inmediata	32	8.775	31
2º fase de ejecución diferida	35	7.225	175
totales	67	16.000	206

*\*Cuadro nº 88. Secuenciación del plan de instalaciones del S.O.E.*

Se presentaron 16 anteproyectos a la exposición celebrada en el Círculo de Bellas Artes del 11 al 25 de noviembre de 1946. El objetivo inicial era crear "...86 residencias sanitarias con quinientas o cien camas cada una; 149 ambulatorios completos y 110 ambulatorios reducidos, para la consulta y asistencia de los asegurados y beneficiarios."<sup>181</sup> Dicho planteamiento se vería contrapesado por una realidad muy distinta. Y así en 1954<sup>182</sup> tendremos un total de 14 residencias del S.O.E., la primera de las cuales fue inaugurada el 15 de septiembre de 1949 en el Ferrol por el general Franco.<sup>183</sup> En este contexto, afirmaciones como las de Miguel Hernáinz Márquez, desde "Cuadernos de Política Social" no merecen crédito alguno salvo en la medida en que patentizan el deseo de vender una política social sin considerar las realizaciones efectivas de aquélla. Desde dicha revista el mencionado autor afirmaba en 1955 lo siguiente:

"Para la realización de los fines privativos de este seguro se ha procedido a la construcción de unas cincuenta residencias sanitarias -una por provincia- verdadero motivo de orgullo..."<sup>184</sup>

Esta tardanza en la puesta en marcha de las instalaciones del seguro de enfermedad era la causa de la insuficiencia e imperfección de los servicios. Y es que, como afirmaba Aznar en relación al tema de la inspección, ésta sería posible únicamente si de forma previa existían las clínicas, sanatorios u hospitales suficientes dado que en ellos la inspección sería relativamente fácil (o al menos factible técnicamente) cosa excepcionalmente difícil (cuando no imposible) a la altura de 1949.<sup>185</sup>

Aunque ya en los años cuarenta se era consciente de que, pese a las promesas, lo costoso de las instalaciones hacía suponer que muchas de ellas no serían realizadas "por no haber posibilidad humana ni económica de ello"<sup>186</sup> por lo cual se tenía la idea de que dicho plan se habría de desarrollar en diez años. Evidentemente, a la luz de los resultados, dicho plan no se realizó

según los mencionados términos sino de forma más modesta. Inicialmente se pretendían levantar las residencias sanitarias en las capitales de provincia y en los núcleos de población importantes e instalar los ambulatorios esencialmente en los centros rurales.

Para ello se convocaron tres concursos. Uno para anteproyectos de ambulatorios completos con premios de 18.000, 11.000 y 7.000 pts. para el primero, segundo y tercer clasificado respectivamente. Otro para anteproyectos de residencias sanitarias para 100 camas premiado con 20.000, 12.000 y 8.000 pts. para el primer, segundo y tercer premiado. Y un tercero para anteproyectos de residencias sanitarias para 500 camas con premios de 70.000, 40.000 y 30.000 pts. para los tres primeros clasificados.<sup>187</sup>

El Decreto de 7 de febrero de 1947 dispuso la constitución de una Comisión del Consejo del Instituto dedicada a la realización de dicho plan. Por medio de la Orden de 26 de febrero de 1947 se aprobó la relación de instalaciones y las variantes introducidas en el mismo con respecto al plan aprobado por Orden de 19 de enero de 1945. Esta plan comprendía 67 residencias con un total de 16.000 camas, 62 ambulatorios completos y 144 reducidos. La mencionada comisión continuaría con sus trabajos hasta que, por el Decreto de 14 de julio de 1950 se reorganizó el I.N.P. y se creó la Comisaría del Plan Nacional de Instalaciones y su Junta Ejecutiva que inició su actuación el 14 de febrero de 1951. La función básica de esta institución y su antecesora fue la compra de solares, la aprobación de proyectos, la ejecución de las obras y la adquisición del mobiliario y del material necesario para dotar a las instalaciones del plan. Previamente, por medio de la Orden de 18 de diciembre de 1950, se había constituido en la Dirección General de Previsión la Junta Coordinadora del Plan Nacional de Instalaciones.

Se establecía que las instalaciones comenzaran preferentemente por los núcleos industriales importantes alejados de los centros urbanos; que siguieran, en orden de preferencia, las instalaciones en zonas de intensa actividad agrícola y marítimo-pesquera, habida cuenta del propósito del ministerio de que en dichas zonas se hiciese sentir en su día los beneficiosos efectos del seguro; que de acuerdo con el Decreto conjunto de los ministerios de Educación Nacional y Trabajo de 12 de abril de 1949, en las capitales de distrito universitario donde existiera Facultad de Medicina se actuase de acuerdo con dicha Facultad en cuanto a las instalaciones; y que la ejecución del plan se coordinara con las instalaciones sanitarias de toda índole que poseyeran tanto las entidades colaboradoras como otras organizaciones, siempre que reuniesen los requisitos determinados por la comisión especial.<sup>188</sup>

El 1 de marzo de 1948 comenzó a construirse el primer edificio de nueva planta del plan.<sup>189</sup> Sería esta la primera pieza de lo que se pretendía que fuera una "potente red de artillería defensiva de la vida del trabajador."<sup>190</sup> De acuerdo con este plan se construyeron cuatro tipos de edificios: ambulatorios, ambulatorios reducidos, ambulatorios completos y residencias. El

ambulatorio se definía como aquella instalación cuya misión era el diagnóstico y tratamiento para enfermos en régimen de consulta. El ambulatorio completo comprendía la asistencia de medicina general y las especialidades médico-quirúrgicas con posibilidad de hospitalización en el caso de la cirugía de urgencia. El ambulatorio reducido comprendía la medicina general y un número variable de especialidades médico-quirúrgicas según las provincias. La residencia era un centro sanitario que tenía como misiones el diagnóstico y tratamiento de enfermos en régimen de internado y comprendía un hospital y un ambulatorio completo.

Provincia	R. S. R. <sup>191</sup>	A. C. R. <sup>192</sup>	A. R. R. <sup>193</sup>	R. S. P. <sup>194</sup>	A. C. P. <sup>195</sup>	R. R. P. <sup>196</sup>
Álava	1			1	1	2
Albacete	1			1	2	3
Alicante	1	1	1	2	3	3
Almería	1			1	1	1
Ávila				1	1	4
Badajoz	1	1		1	4	3
Baleares	1		1	2	2	3
Barcelona	1	2	2	4		6
Burgos	1		2	1	1	4
Cáceres	1	1	2	2	2	2
Cádiz	1			2	3	6
Castellón		1		1	1	2
Ciudad Real		1		1	3	
Córdoba	1			1	3	2
Coruña (La)	2	1		1	3	1
Cuenca		1		1	1	2
Gerona	1	1		1	1	3
Granada	1			1	3	2
Guadalajara	1			1	1	2
Guipúzcoa				1	3	1
Huelva	1			1	1	4
Huesca		2		1	3	
Jaén		1		1	2	2
León				2	4	5
Lérida	1	1		1	1	4
Logroño	1	3		1	2	4
Lugo	1	1		1	2	3

Madrid		5	2	2	4	3
Málaga	1	2		1	3	
Murcia				2	2	4
Navarra		1	1	1	1	2
Orense		1		1	1	2
Oviedo	2	2	1	3	3	4
Palencia	1	1	1	1	1	2
Palmas (Las)				1	1	4
Pontevedra	1			1	2	5
Salamanca				1	1	4
Santander		1	1	1	3	3
S. C. de Tenerife				1	3	2
Segovia		1		1	1	2
Sevilla	1			1	2	3
Soria			1	1	1	2
Tarragona		3		1	3	2
Teruel	1	1		1	3	
Toledo				1	3	
Valencia	1			1	2	5
Valladolid	1	3		1	4	
Vizcaya	1	2	1	2	4	3
Zamora	1		1	1	1	3
Zaragoza	2		1	2	2	4
Marruecos				2	2	
TOTAL	33	42	18	66	103	133

*\*Cuadro n° 89. Desarrollo del plan de instalaciones sanitarias del S.O.E. a finales de 1951.*

Sin embargo, estas cifras son corregidas por los propios informes del año 1951 de la Jefatura Nacional del S.O.E. que afirmaba que en el plan de instalaciones figuraban 67 residencias sanitarias. Sin embargo, esta jefatura añadía que sólo 6 de las mismas estaban totalmente acabadas, “dos están a punto de terminarse, 14 están avanzadas, 10 ya comenzadas, 35 han sido proyectadas”<sup>197</sup> con una cantidad máxima de camas posibles en torno a las 17.000. Este enfoque parece más próximo a la realidad por cuanto un informe elevado al I.N.P. en septiembre de 1951 ponía de manifiesto el retraso con que se estaba realizando el plan de instalaciones hasta el punto de que a esta altura de este año las residencias del plan en funcionamiento eran las de Santa Cruz de la Palma (Tenerife), la Coruña, Guadalajara y Valencia, “éstas tres últimas recientemente”<sup>198</sup> y los ambulatorios de Bilbao, Pampliega (Burgos), Puertollano (Ciudad

Real), El Ferrol del Caudillo, Madrid, (Ruiz de Alda y Puente de Vallecas ) y Calatayud (Zaragoza). En definitiva, 4 residencias y 7 ambulatorios. Por un lado, el lento ritmo de las construcción incidía levemente en el déficit del seguro pero la consecuencia indirecta de esta evolución, la instituciones provisionales, elevaban notablemente el gasto:

“El hecho de que algunas de ellas resulten antieconómicas estriba, de una parte, en que estando enclavadas en edificios arrendados, muchos de ellos contruidos para fines muy distintos, es necesario realizar gastos de alguna importancia para la instalación, quedando en la mayoría de los casos en beneficio del inmueble y teniendo que destinar cantidades elevadas en su amortización que ha de ser rápida por la corta vida de estas instituciones. De otra parte los gastos de carácter fijo de estas instituciones pequeñas, contribuyen a que resulte más caro su sostenimiento.”<sup>199</sup>

La posible compensación de este fracaso sólo maquillado por el equilibrimo de los datos estadísticos se pretendía paliar por medio de las entidades colaboradoras. Sin embargo, la realidad era que la utilidad de las camas que quedaban fuera del plan de instalaciones era, en gran medida, nula dado que no iban acompañadas de un adecuado sistema de asistencia ni de dotación de medios de terapia o de diagnóstico adecuados. “Por ello, al seguro las camas no le sirven al 100 por 100 más que en las localidades correspondientes al plan de instalaciones,” se afirmaba desde instancias oficiales<sup>200</sup> en clara referencia a las camas que proporcionaban las entidades colaboradoras. Eran las dificultades de desenvolvimiento del seguro las que obligaban al mismo a recurrir a las mencionadas entidades, pero a su vez, su misma existencia ponía de manifiesto el hecho de que el S.O.E. utilizaba instalaciones improvisadas, inadecuadas y que sus servicios distaban “mucho de ser satisfactorios en este aspecto.”<sup>201</sup> Así, encontramos casos como el de la residencia de Guadalajara que, en principio, contaba con 100 camas (aproximadamente) para los diferentes servicios quirúrgicos y para el de maternidad y que, sin embargo, a la altura de 1953 no concedía la hospitalización para casos médicos, teniéndose que realizar la atención al enfermo en el domicilio propio.<sup>202</sup>

La ejecución real del Plan de Instalaciones del S.O.E. y su notable imperfección permitía que el sindicato de Jaén afirmase taxativamente a la altura de 1952 que “los servicios instalados en el local de la C.N.S. son mediocres e insuficientes, ya que es considerable el número de productores de todas las actividades que reciben las prestaciones del S.O.E. a través de la Organización sindical.”<sup>203</sup>

Un año más tarde la O. S. 18 de julio de Salamanca<sup>204</sup> incidía en el grave problema que representaba la falta de instalaciones y la agudización del problema con el incremento de la afiliación libre reclamando un mayor número de consultorios y de camas. En este caso concreto,

la problemática giraba en torno al hecho de que la Obra (como el sindicalismo español en general), deseosa de potenciar su prestigio entre los elementos obreros por medio de la asistencia sanitaria, logró de la Caja Nacional del seguro el compromiso de no construir residencias sanitarias en esta provincia con el objeto de vincular totalmente los mismos a la O. S. 18 de julio. Semejante incongruencia nacía de un “querer y no poder” de la Obra. Por un lado, su deseo de prestigio la conducía a procurar hacerse cargo de dichas prestaciones pero, por otro, la necesidad de recursos económicos distaba mucho de poder cubrir sus deseos ante lo cual dichas posturas se hacían compatibles con los deseos de algunos de abandonar el S.O.E. en manos del I.N.P. por las “reducidas dimensiones” de sus instalaciones sanitarias. Por ese camino, se llevaron a cabo acuerdos entre la Obra y el I.N.P. con el objetivo de cerrar instalaciones que dejaban en manos del ministerio de Trabajo los servicios del seguro. Concretamente, en el año 1954 se llegó al acuerdo de cerrar las instalaciones de la obra en las provincias de Cáceres, Granada, Palencia y Zamora pasando éstas a depender de las residencias del Plan Nacional de Instalaciones. Así mismo, en Alicante, Badajoz, Burgos, Guipúzcoa, Jaén, Málaga, Vizcaya y Zaragoza se mantenían sus sanatorios para la asistencia exclusiva de los afiliados directos de los Servicios Sindicales.<sup>205</sup>

Utilizando las referencias realizadas en la I Asamblea del I.N.P. celebrada en el verano de 1953 tenemos que extraer una valoración no muy positiva de lo realizado hasta ese momento.<sup>206</sup> En 1952 se habían puesto en funcionamiento 7 residencias<sup>207</sup> y 10 ambulatorios.<sup>208</sup> En 1953 dentro de las instalaciones en funcionamiento de la primera fase había 9 residencias<sup>209</sup> y 18 ambulatorios.<sup>210</sup> Dentro de las instalaciones terminadas y de próximo funcionamiento encontramos la residencia de Valladolid y 14 ambulatorios.<sup>211</sup> Entre las residencias comprendidas en la primera fase y todavía en vías de ejecución con un mediano o largo período de espera hasta su entrada en funcionamiento había 24 residencias<sup>212</sup> y 4 ambulatorios.<sup>213</sup>

En 1953 funcionaron únicamente 12 residencias del plan nacional y algunas con un número limitado de días que se incluye entre paréntesis a renglón seguido: Almería (69 días), Puertollano, La Coruña, Granada (102 días), Guadalajara, Huelva (275 días), Logroño, Santa Cruz de la Palma, Teruel, Valencia, Valladolid (161 días), y Calatayud (12 días). En el caso de las residencias de tipo provisional dieron servicio a los beneficiarios del seguro Almería (296 días), Ávila, Barcelona (dos residencias), Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Granada (273 días), Guipúzcoa, Huelva (90 días), Ponferrada, Lérida, Madrid-maternal, Madrid-Ibiza, Madrid Santa M<sup>a</sup> de la Cabeza, Orense, Oviedo, Las Palmas, Sevilla-Nervión, Sevilla-Carmen, Valladolid (204 días) y Zaragoza. Es decir, en 1953 la sanidad pública del S.O.E. se servía de 12 residencias del plan nacional y de 22 de tipo provisional. En total, las residencias del plan atendieron a 19.912 beneficiarios y las provisionales a 23.883 haciendo un total para ambas de

43.795, lo cual pone de manifiesto el carácter provisional e imperfecto del plan y la ausencia de dotaciones materiales propias de un sistema que pretendía ser la panacea de la sanidad pública.

Durante el primer trimestre de 1954 funcionaron las residencias del plan nacional de Almería, Cádiz (3 meses), Puertollano, La Coruña, Granada, Guadalajara, Huelva, Logroño, Mieres (4 meses), Santa Cruz de la Palma, Teruel, Valencia, Valladolid y Calatayud (14 días). En definitiva sólo las residencias de Mieres y Cádiz habían comenzado a prestar sus servicios y durante un corto período de tiempo. En el caso de las provisionales habían prestado sus servicios las de Ávila, Barcelona (dos residencias), Cádiz (3 meses), Ciudad Real, Córdoba, Guipúzcoa, Ponferrada, Lérida, Madrid-maternal, Madrid-Ibiza, Madrid Santa M<sup>a</sup> de la Cabeza, Orense, Oviedo, Las Palmas, Sevilla-Nervión, Sevilla-Carmen y Zaragoza. Por tanto, en el primer semestre del año 1954 el sistema sanitario del S.O.E. dependía de 14 residencias del plan y 17 provisionales (tres menos que en el año anterior). De igual manera el número de atendidos fue menor (aunque hay que tener en cuenta el hecho de que estamos considerando únicamente el primer semestre del año de referencia); en total fueron 27.686 (17.012 en las residencias del plan y 10.674 en las provisionales).

Tomando también como referencia los datos del año 1954, la situación de la O. S. 18 de julio manifestaba la existencia de ambulatorios en 43 provincias (13 de ellos no operaban en este momento con lo que la cifra se reduciría a 30) y de sanatorios en 31 provincias mientras que la Caja Nacional del Seguro poseían residencias en 32 provincias (si bien sólo 14 correspondían al plan).<sup>214</sup>

Provincia	sanatorios	ambulatorios	camas
Álava	1	1	68
Albacete	-	1	2
Alicante	1	5	38
Almería	1	2	41
Ávila	-	-	-
Badajoz	1	4	85
Baleares	1	7	17
Barcelona	1	1	80
Burgos	1	3	52
Cáceres	1	-	38
Cádiz	1	6	32
Castellón	1	1	42

Ceuta	-	1	-
Ciudad Real	1	1	37
Córdoba	-	5	-
Coruña	1	4	38
Cuenca	1	2	28
Gerona	-	1	-
Granada	1	-	42
Guadalajara	-	1	-
Guipúzcoa	1	1	37
Huelva	1	2	20
Huesca	1	-	50
Jaén	1	10	24
Las Palmas	-	2	-
León	1	1	16
Lérida	1	-	-
Logroño	-	1	-
Lugo	1	-	36
Madrid	3	23	170
Málaga	1	2	100
Melilla	-	1	-
Murcia	2	5	54
Navarra	-	1	-
Orense	1	-	18
Oviedo	2	24	161
Palencia	1	1	30
Pontevedra	-	4	-
Salamanca	1	4	66
S. Cruz de Tenerife	-	1	-
Santander	1	1	25
Segovia	1	-	51
Sevilla	-	3	-
Soria	1	1	23
Tarragona	-	2	-
Teruel	-	-	-
Tetuán	2	2	17
Toledo	-	2	-



Valencia	2	8	283
Valladolid	1	1	40
Vizcaya	1	4	49
Zamora	1	1	24
Zaragoza	1	4	68
TOTAL	43	158	2.002

*\*Cuadro n° 90. Centros sanitario de la O. S. 18 de julio en 1954.*

A esta capacidad de oferta se sumaban 29 ambulancias. En cuanto al número de afiliados, para estas fechas los Servicios Sindicales del Seguro de Enfermedad tenían 519.926 afiliados (de los cuales 140.113 pertenecían a R.E.N.F.E., 32.088 a diversos sectores y 347.725 estrictamente a los S.S.S.E.). La Obra tenía 100.992 afiliados lo que junto a la cifra anterior nos da un total de 620.918 afiliados. Esta era la fuerza sindical en el ámbito del seguro de enfermedad y era a este sector de la población al que, si la organización tenía suficiente presupuesto, no estaba dispuesta a dejar en manos de otras entidades por cuanto su control era expresión directa de su peso político o del poco peso político que progresivamente le iba quedando.

Provincia/Residencia	n° de camas
Almería	300
Cádiz	150
Puertollano	32
La Coruña	250
Granada	408
Guadalajara	100
Huelva	250
Logroño	200
Mieres	125
Palencia	100
Santa Cruz de la Palma	26
Sevilla	500
Teruel	175
Valencia	236
Valladolid	300
Zamora	150
Calatayud	52
Total (17)	3.364

*\*Cuadro 91. Residencias permanentes del Plan Nacional de Instalaciones del S.O.E. en servicio en marzo de 1955 con expresión del número de camas.<sup>215</sup>*

Provincia/residencia	camas
Ávila	22
Barcelona-quirúrgica	50
Barcelona especialidades	30
Córdoba	12
Ciudad Real	49
Guipúzcoa	35
Ponferrada	35
Lérida	30
Madrid (maternal)	39
Madrid (Ibiza)	71
Madrid (Santa María de la Cabeza)	39
Orense	40
Oviedo	72
Las Palmas	52
Zaragoza	33
TOTAL	609

*\*Cuadro n° 92. Residencias provisionales del Plan Nacional de Instalaciones del S.O.E. en servicio en marzo de 1955 con expresión del número de camas.*

Las cifras hasta aquí expuestas nos indican que a principios del año 1955 el número de residencias del plan ascendía a 17 permanentes y 16 provisionales; en total 33 residencias, cifra lejana a las 43 que desde la Revista del Seguro de Enfermedad se indicaba que estaban en funcionamiento extendiendo “su acción por todo el país” con un total de 3.973 camas.<sup>216</sup>

En total tenemos 33 residencias en funcionamiento en marzo de 1955. Y junto a ello un conjunto de residencias incluidas en la primera fase del plan nacional que no se encontraban todavía en 1955 en funcionamiento y que originaban un déficit de camas que se situaba en torno a las cinco mil.<sup>217</sup> Ello se traducía en quejas encubiertas o no como la de la Central Nacional Sindicalista de Huelva que en 1951 emitía un informe reservado insistiendo de nuevo en las dificultades para la aplicación práctica del S.O.E. en el caso de los productores (no necesariamente trabajadores del campo) para desplazarse a la capital con el fin de recibir atención especializada del seguro.<sup>218</sup>

Si consideramos el número de camas de la O. S. 18 de julio a finales de 1954 y el número de camas de las residencias del S.O.E. (incluyendo las permanentes y las provisionales) encontramos que los objetivos del plan estaban cumplidos deficientemente por cuanto, considerando las más de 9.000 que surtían los servicios sanitarios del S.O.E., existía al menos un déficit confesado de más de 5.000 con el consiguiente perjuicio para los beneficiarios del seguro,<sup>219</sup> sin considerar el hecho de que las primeras estimaciones sobre el número de camas necesarias elevaba éstas por encima de las 60.000. A ello se añadiría un cuerpo médico formado por un total de 18.377 profesionales.<sup>220</sup>

Provincia/residencia	nº de camas
Vitoria	150
Albacete	150
Alicante	300
Badajoz	400
Palma de Mallorca	300
Mahón	100
Barcelona	700
Burgos	300
Cáceres	230
Córdoba	350
Gerona	250
Lérida	275
Lugo	100
Málaga	300
Viga	250
Bilbao	650
Zaragoza	500
Total de camas	5.305

*\*Cuadro nº 93. Residencias sanitarias comprendidas en la primera fase del plan nacional de instalaciones, que nos encuentran en funcionamiento*

De cara a la aplicación médica del plan de sanidad del Seguro se creó en 1944 una comisión de enlace en el I.N.P., la cual nombró a dos ponentes que diseñaron las líneas generales de un plan de asistencia sanitaria. Primitivo de la Quintana López, consejero del I.N.P. elaboró el plan general de asistencia médica y de medicina preventiva. Por otro lado, Joaquín Espinosa

Ferrándiz, inspector médico del seguro de maternidad en Barcelona, diseñó lo referente a maternología y puericultura.<sup>221</sup>

En cuanto al Plan General de asistencia médica y medicina preventiva elaborado por Quintana se trazaba aquél partiendo de un grupo modélico de 100.000 beneficiarios del que excluía los servicios de maternología y puericultura. La primera consideración interesante de dicho estudio era la afirmación de que el rigor del mismo había de ser necesariamente mínimo puesto que en nuestro país no existían datos estadísticos básicos para llevar a cabo dicho estudio.<sup>222</sup>

Este proyecto resulta sumamente interesante para medir las dimensiones que separaban los planteamientos formales del ministerio de Trabajo y sus realizaciones prácticas al final del período Girón. En dicho informe, se partía del hecho de que la población española para el año 1960 iba a ser de unos 30 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 18 serían los beneficiarios del seguro (aproximadamente un 60 % de la población). Quedaría a cargo de la beneficencia el 12 % (3,6 millones de españoles que progresivamente se pensaba pasarían a depender del seguro hasta situar el tanto por ciento de personas dependientes de la beneficencia en el 3 %) y 8,4 millones (el 28 %) recibirían libremente su asistencia.<sup>223</sup> Si consideramos (tal y como se trata en otro apartado) que a finales del año 1956 el número de beneficiarios (según datos oficiales) superaba (en el mejor de los casos) escasamente los 10 millones podemos establecer una clara zanja entre aquellos planteamientos demagógicos iniciales y las metas finalmente conseguidas según las propias autoridades del régimen.

En este estudio se partía del hecho de que en los países occidentales y en los Estados Unidos la cifra de camas por cada 1.000 habitantes era aproximadamente de 7 unidades. Si consideramos que la suma del número de camas disponibles de la O. S. 18 julio y de las residencias permanentes y provisionales del plan a finales de 1954 ascendía a 9.349 con una población de 26.869.925 habitantes llegamos a la conclusión que el número de habitantes por cama llegaba a la cifra de 2.874 con lo cual podemos concluir que en este aspecto también se hizo, cuando menos parcialmente, un ejercicio de demagogia por parte del ministerio de Trabajo.

Se señala igualmente que por cada 100.000 habitantes el número de camas necesarias sería de 280 lo cual sirve para insistir en que no se cumplieron las perspectivas del seguro. Y ello pese a considerar que en este estudio no se contabiliza la totalidad de la población sino, siguiendo un criterio laboral, los 18 millones de supuestos beneficiarios de 1960 a los que habría que restar los menores de tres años con lo que nos quedaría una cifra en torno a los 16,6 millones. Partiendo, por tanto de la relación 100.000 habitantes/280 camas, el número total de camas necesarias debería estar ligeramente por encima, al menos, de las 50.000 si bien en este estudio se da la cifra de 47.719. La comparación con el número de camas del año 1954 sirve para

insistir de nuevo en la diferencia mencionada entre la política de los discursos grandilocuentes y las realizaciones efectivas. Ante lo cual, concluye Quintana con la siguiente afirmación utilizando unas cifras que estaban muy lejos de las que efectivamente podía lucir el seguro:

“Si tomamos como medida el índice aceptado y existente en todos los países del occidente europeo que tiene establecido el Seguro de Enfermedad, y en Norteamérica, aun sin tenerlo, que se cifra en siete camas por cada 1.000 habitantes, para la población actual de España nos daría una totalidad de 182.000 camas, y para la calculada de 30.000.000 en veinte años, de 210.000 camas para todas las necesidades. Si el Seguro ha de asistir el 60 por 100 de la población actual, y se toma la población-tipo futura de 30.000.000 para dentro de veinte años, le correspondería 126.000 camas.”<sup>224</sup>

A esto hay que añadir que el mencionado informe rebajaba el índice de 7 a 5,5 camas por 1.000 habitantes. Incluso en este caso las propias estimaciones del ponente nos indican que el número de camas estaría en torno a las 40.000 camas. Téngase en cuenta que según datos del año 1936 en España podía haber alrededor de 65.000 camas de hospital (cifra que consideramos excesivamente elevada) pertenecientes a organismos oficiales o fundaciones benéficas pero no todas ellas utilizables. Estimándose que alrededor de un 20 % de las mismas pudieran colaborar con el seguro y partiendo de unas necesidades (erróneas) de 40.000 camas, al seguro le quedaría la tarea de poner en funcionamiento alrededor de 34.000.

Sobre esta necesidad de 34.000 camas se idea la exigencia de crear a nivel nacional 3 grandes instalaciones de 10.000 camas, 45 medianas (tipo provincial) de 300 camas cada una, 100 clínicas rurales de 50 camas, 10 establecimientos psiquiátricos a 250 camas, 3 grandes establecimientos psiquiátricos a 750 camas más unas 3.600 camas destinadas a convalecencia. En total 34.000 camas.<sup>225</sup>

En cuanto a la ponencia sobre un Plan Nacional de asistencia a la maternidad e infancia en el S.O.E. realizado por Espinosa Ferrándiz, éste concebía el Servicio de Maternidad e Infancia separado del resto de las prestaciones del S.O.E. Se basaba para ello en el hecho de que, más que un servicio de enfermedad, constituía un servicio “social e higiénico-sanitario para asistir aquello que, encuadrado dentro de una función fisiológica, tenía características propias, aunque pudieran derivarse de ello enfermedades o desviaciones de lo normal en la asistencia maternal-infantil.”<sup>226</sup>

Jefatura provincial	Medicina general	Especialistas	Total
Álava	76	30	106
Albacete	176	56	232

Alicante	277	163	440
Almería	249	35	184
Ávila	196	33	229
Badajoz	282	96	378
Baleares	178	118	296
Barcelona	1.131	1.007	2.138
Burgos	300	60	360
Cáceres	276	59	335
Cádiz	196	121	317
Castellón	225	63	236
Ciudad Real	259	103	299
Córdoba	154	94	319
La Coruña	179	113	172
Cuenca	237	29	183
Gerona	164	76	255
Granada	237	85	322
Guadalajara	164	29	193
Guipúzcoa	190	133	323
Huelva	168	62	230
Huesca	141	40	181
Jaén	241	91	332
León	262	97	359
Lérida	192	6	252
Logroño	15	61	216
Lugo	128	56	184
Madrid	907	563	1.470
Málaga	253	76	329
Murcia	215	116	331
Navarra	247	63	310
Orense	139	49	188
Oviedo	330	242	572
Palencia	182	44	226
Las Palmas de Gran C.	120	94	214
Pontevedra	191	97	288
Salamanca	300	68	368
Santa Cruz de Tenerife	105	71	176

Santander	178	99	277
Segovia	190	27	217
Sevilla	345	202	547
Soria	140	25	165
Tarragona	212	70	282
Teruel	164	33	197
Toledo	305	51	356
Valencia	587	303	890
Valladolid	255	78	333
Vizcaya	318	222	540
Zamora	218	49	267
Zaragoza	372	132	504
Ceuta	12	16	28
Melilla	15	16	31
Total	12.601	5.776	18.377

*\*Cuadro n° 94. N° de médicos y especialistas, que trabajan para el seguro, el 31 de diciembre de 1954.*

En 1959 el I.N.P. se elaboró un informe muy esclarecedor en torno a las instalaciones del S.O.E. que iluminaba sibilina o explícitamente los logros del mencionado plan.<sup>227</sup> Era evidente el retraso con que a España llegaba este seguro y de ello se podía partir para establecer la hipótesis básica de que dichos servicios habían de resultar insuficientes. Por lo que se refiere exclusivamente a las residencias del plan hasta el 31 de diciembre de 1957 se habían invertido 3.370 millones de pts. y el gasto de sostenimiento de dichas instalaciones estaba en torno a los 431 millones de pts.

También se ponía de manifiesto que para los 29.802.931 de habitantes de 1 de julio de 1958 el límite teórico de beneficiarios del seguro estaba en el 85 % (según estimaciones del I.N.P. en 25.332.491 beneficiarios) mientras que el número efectivo de beneficiarios (siempre según cifras oficiales extraídas del Anuario Estadístico de España) superaba escasamente los 10,5 millones de beneficiarios lo cual venía a suponer un 35,3 % de la población total y un 41,6 de la población susceptible de ser asegurada según el I.N.P.<sup>228</sup>

A ese límite teórico del 85 % sólo se aproximaba Vizcaya con un 81,2 % de la población y un 95,5% de la población asegurable, lo cual ponía de manifiesto el fracaso de la política del S.O.E. Sólo en 5 provincias se superaba el 50 % de la población asegurable; concretamente en Vizcaya, Guipúzcoa, Oviedo, Barcelona, y Madrid, totalizando 6.677.88 habitantes o de 3.801.491 beneficiarios. Es decir, se puede afirmar que en el 33,6 % de la población española

se encontraba el 36 % de la población asegurada (concretamente los cinco centros de atracción y emigración interna más importantes de España).

A renglón seguido se ponía de manifiesto que las provincias de Santander, Álava, Valladolid, Cádiz, Huelva, Palencia, Gerona, Alicante, Zaragoza, Las Palmas, Baleares, Murcia, Castellón, León, Ciudad Real, Ceuta, Valencia, Pontevedra, Navarra y Tarragona tenían aseguradas entre el 30 y el 50 % de su población, lo cual suponía 10.023.799 de habitantes, y 3.667.253 de beneficiarios. Es decir, en ellas se concentraba el 34,8 % de los beneficiarios del S.O.E. y el 33,6 de la población española.

En otras 20 provincias se daba el caso de que la población asegurada oscilaba entre el 20 y el 30 % de sus habitantes. Estos ascendían a 9.090.017, mientras que los beneficiarios sumaban 2.333.253, lo cual representaba el 30,5 % de la población del país y el 22,2 % de los beneficiarios del S.O.E. Éstas eran Soria, Lérida, Burgos, Sevilla, Córdoba, Salamanca, Melilla, Teruel, Huesca, Logroño, Santa Cruz de Tenerife, Almería, Badajoz, Albacete, Ávila, Málaga, Toledo, Segovia, Jaén, y Guadalajara.

Provincia	Tanto por ciento de la población asegurada	Orden de mayor a menor
Álava	45,247	7
Albacete	24,641	39
Alicante	38,498	13
Almería	24,917	37
Ávila	23,794	40
Badajoz	24,681	38
Baleares	36,054	16
Barcelona	53,451	4
Burgos	29,126	28
Cáceres	19,396	46
Cádiz	41,729	9
Castellón	34,293	18
Ciudad Real	33,902	20
Córdoba	28,616	30
Coruña (La)	18,350	47
Cuenca	17,596	48
Gerona	40,293	12



Granada	17,004	49
Guadalajara	21,366	45
Guipúzcoa	62,281	2
Huelva	41,375	10
Huesca	25,723	34
Jaén	22,416	44
León	34,257	19
Lérida	29,390	27
Logroño	25,361	35
Lugo	10,187	51
Madrid	52,034	5
Málaga	23,266	41
Murcia	34,586	17
Navarra	31,663	24
Orense	10,128	52
Oviedo	59,281	3
Palencia	40,766	11
Palmas (Las)	36,830	15
Pontevedra	32,551	23
Salamanca	27,267	31
Santander	47,399	6
Sta. C. de Tenerife	25,339	36
Segovia	22,968	43
Sevilla	28,858	29
Soria	29,842	26
Tarragona	31,268	25
Teruel	26,715	33
Toledo	23,163	42
Valencia	32,971	22
Valladolid	44,329	8
Vizcaya	81,119	1
Zamora	14,451	50
Zaragoza	36,884	14
Marruecos: Ceuta: 33,441(21), Melilla 26,964(32)		

*\*Cuadro n° 95. Asegurados por provincias sobre la población total de la misma y número de orden que ocupaban por el número de asegurados<sup>229</sup>*

Era evidente que sólo en las provincias de alto desarrollo industrial se lograban unas cifras de beneficiarios mínimamente aceptables, siempre dejando claro que en ninguna de ellas se cumplían la propias metas planteadas por el I.N.P. En el resto de España, en la parte más ligada a la economía rural no era posible pensar en que la llegada de la sanidad pública fuera efectiva y así el campo quedaba muy desamparado ante el infortunio y la enfermedad.

Aunque no constan los motivos en que se fundamenta el Informe sobre la explotación de las instalaciones sanitarias del Seguro Obligatorio de Enfermedad elaborado por el I.N.P. en 1959, éste ponía de manifiesto la posibilidad de que existiera “una deficiente asistencia médica” en las residencias de 12 provincias (Badajoz, Cádiz, Alicante, Córdoba, Coruña, Lugo, Gerona, Cáceres, Valladolid, Almería, Teruel, Lérida) y un deficiente estado sanitario en las residencias de otras 11 (Álava, Logroño, Vizcaya, Valencia, Huelva, Zaragoza, Sevilla, Zamora, Jaén, Barcelona, Albacete). De igual manera, se destacaba la posible mala gestión de 16 residencias situadas en las siguientes provincias: Palencia, Baleares, Pontevedra, Albacete, Jaén, Cádiz, Málaga, Badajoz, La Coruña, Alicante, Álava, Zamora, Lugo, Teruel, Cáceres, Gerona.<sup>230</sup>

Por tanto, en lo referente al plan de residencias, una vez finalizada la etapa de Girón al frente del ministerio de Trabajo, se ponía de manifiesto que la construcción de dichas residencias no se había adecuado a la demanda del seguro puesto que de las cinco provincias de mayor número de asegurados sólo dos tenían residencias construidas por el seguro, mientras que de 7 provincias que tenían una población asegurada que no alcanzaba al 20 % de la población 4 estaban dotadas de importantes instalaciones. Y de igual manera, la magnitud de las instalaciones era desproporcionada en el caso de 12 residencias con la máxima demanda posible ya que el número de habitantes por cama era inferior a 2.000.<sup>231</sup>

En lo referente a los ambulatorios, a finales de 1957, se ponía de manifiesto que 22 provincias, con una población asegurada de 4.472.104 de habitantes, que representaba el 42,81 % de la población asegurada total, tenían en sus centros un exceso de beneficiarios por hora<sup>232</sup> lo cual venía a poner de manifiesto que, en principio, dicha población tenía una asistencia muy deficiente. Sin embargo, entre estas 22 provincias (en su mayoría con poca población asegurada) aparecían Vizcaya, Guipúzcoa, Barcelona y Álava, que ocupaban los lugares 1º, 2º, 4º y 7º respectivamente en cuanto a población asegurada, con porcentajes respectivos del 81, 62, 53 y 45 %, lo cual refuerza la idea de que la atención por medio de ambulatorios tenía carencias significativas. El déficit de horas de consulta de estas 22 provincias ascendía a 1.173 que de mayor a menor se distribuían de la siguiente forma:<sup>233</sup> Barcelona (407), Vizcaya (201),

Badajoz (116), Murcia (54), León (50), Cáceres (44), Toledo (42), Guipúzcoa (32), Burgos (30), Teruel (25), Lérida (24), Ávila (12), Salamanca (23), Segovia (20), La Coruña (16), Navarra (14), Cuenca (13), Álava (12), Guadalajara (12), Pontevedra (10), Baleares (3), y Palencia(1).<sup>234</sup>

Así, resultaba evidente que tampoco se había adecuado el montaje de los ambulatorios a las exigencias del seguro ante la evidencia de que, al menos 22 de las provincias españolas, tenían una deficiente dotación en cuanto a las instalaciones y que esa deficiente asistencia se materializaba en las “frecuentes reclamaciones”<sup>235</sup> al I.N.P. por parte de los beneficiarios.

Por tanto, el estudio del I.N.P. sobre los resultados del plan de instalaciones ponía de manifiesto que, terminada la época Girón, la población tutelada por el seguro estaba en torno al 35,3 % de la población total del país y en torno al 41,6 % de la asegurable teóricamente según el seguro, unos porcentajes muy escasos que ponían de manifiesto la anómala aplicación del S.O.E.

Del mismo modo, se ponía de manifiesto la necesidad de sustituir las instalaciones provisionales o aquellas en donde los servicios del S.O.E. se daban previo contrato con otras instancias. Y es que a mediados de 1958 existían 14 provincias con hospitalización contratada (Murcia, Castellón, Ceuta, Navarra, Tarragona, Soria, Burgos, Salamanca, Melilla, Huesca, Toledo, Segovia, Cuenca y Santander) 8 con residencias provisionales (Guipúzcoa, Oviedo, Madrid, Las Palmas, León, Ciudad Real, Ávila y Orense) y otras 8 que, por sus insuficientes dotaciones, requerían la construcción de las instalaciones básicas de la residencia (Murcia, Navarra, Burgos, Toledo, Guipúzcoa, Oviedo, Madrid, y Ciudad Real).<sup>236</sup>

#### **14.7. Evaluación de algunos aspectos polémicos en el desarrollo del S.O.E.**

Un objetivo de primera magnitud dentro el S.O.E. era conseguir que la medicina tuviera un componente básicamente social. Este cambio era concebido como algo irremediable y que tendría como punto final una “Humanidad somática y espiritualmente perfecta y totalmente libre de enfermedades.”<sup>237</sup> El problema que este proyecto planteaba tenía directa relación con el corporativismo y la expectativas económicas de un importante número de médicos españoles que veían como, paralelamente a la socialización de la medicina su nivel de vida bajaba y la calidad de la medicina también descendía.<sup>238</sup> Fruto de ello era la conciencia de la “crisis” de la clase médica reflejada ampliamente en la prensa profesional y no profesional, no sólo en los primeros años de implantación del seguro, sino a mediados de los años cincuenta, cuando según el ministro Girón este problema ya no existía.<sup>239</sup> Pese a los problemas que ponía la clase médica, el tema de las remuneraciones resultó a la larga menos conflictivo de lo que pudiera

parecer puesto que, a pesar de que existía un escalafón, los facultativos, independientemente de sus años en el seguro, cobraban siempre una cantidad fija por cada uno de los asegurados que tenían adscritos a su cargo.<sup>240</sup>

Este fue el motivo de la insistencia de Girón en el sentido de hacer del médico el principal agente del seguro y su defensor más resuelto,<sup>241</sup> lo cual suponía impregnar de mordazas el sistema médico con el objetivo de que las críticas al desenvolvimiento del seguro fueran las menos posible o, en el mejor de los casos, ninguna:

“El Seguro de enfermedad es una empresa demasiado trascendente y demasiado seria para que en nada de lo que le atañe, aun accidentalmente, pueda permitirse la alegría de las críticas desde fuera, que a la larga sería difícil distinguir de las críticas desde enfrente...es la mejor afirmación de nuestra capacidad española de disciplina y de organización...Afortunadamente, en España las opiniones personales sólo pueden ser ya, en el mejor de los casos, motivo de pasatiempo, y los cartuchos de papel no sirven para decidir las batallas.”<sup>242</sup>

De ahí la importancia del control de la clase médica y de aquellos elementos que pudieran utilizar su posición dentro del esquema de la sanidad como paraguas público para derruir la obra del régimen. Había que hacer de los médicos los agentes más eficaces de una nueva “concepción social y política”<sup>243</sup> que tenía por objetivo, entre otros, hacer de España un pueblo de más de cuarenta millones de habitantes. Por tanto, el concepto individualista del libre ejercicio profesional había de plegarse a los intereses superiores que demandaba el Nuevo Estado y es aquí donde entraba en juego la O. S. 18 de julio tanto en cuanto, para conseguir una actuación eficaz desde el punto de vista técnico, se percibía como necesario el encuadramiento de los médicos de forma disciplinada en dicha organización sindical.<sup>244</sup>

Parte importante de la profesión médica se sentía excluida de las decisiones tomadas en torno al tema de la salud; se sentía incorporada a un proyecto que no era exclusivamente el suyo y en el que, en muchas ocasiones tenía poco que decir. Este sector de la profesión médica se sentía mal remunerado, confesaba su escasa dedicación a la salud de los asegurados del S.O.E. y sólo encontraba en el incremento de sus remuneraciones una forma de dar solución a este problema. Hasta tal punto era así que cundía la alarma en los sectores sindicales por la conciencia de que en algunos puntos de la geografía nacional los médicos del seguro estaban cobrando ilegalmente a sus pacientes la diferencia entre la cuota del seguro y la igualá.<sup>245</sup> Siguiendo este planteamiento, las reflexiones del Dr. Casas eran plenamente ilustrativas del malestar del colectivo al que me he referido en estas líneas, y al igual que con respecto a otras cuestiones,

rompían con el halo de romanticismo que, normalmente, rodeaba las manifestaciones de las autoridades franquistas en torno al tema de la política social:

“Es posible que sea un grave error para el futuro de la Medicina la oposición que la clase médica está haciendo a esta evolución de su profesión, oposición que unas veces se presenta de una manera clara y frontal, y otras simplemente se limita a una resistencia pasiva. No hay ninguna razón poderosa para poder asegurar tajantemente que la Medicina Social tenga que ser irremediamente perjudicial para la clase médica.

Pudiera ser un error la oposición sistemática que, en general, se observa, porque además de la razón acabada de exponer, vamos a gastar la totalidad de nuestros esfuerzos en luchas contra algo que es superior a nuestra capacidad de lucha. Debemos más bien procurar que esta Medicina nueva se implante por unas vías que sean las más adecuadas para el progreso futuro...

...la realidad es que aquí nos hemos incorporado rápidamente, casi de la noche a la mañana, unos miles de médicos que no estábamos preparados para hacer Medicina Social...

Debe ser molesto para el médico actual ver cómo transcurren los acontecimientos, ver cómo cambian tantas cosas que parecían tener una gran estabilidad, dada por siglos de existencia y permanecer en una actitud pasiva esperando qué le deparará el futuro. Quizás piense que con él, simple peón en este juego que estamos viendo pasar, nadie ha contado y se sienta minusvalorado...

...el médico está hoy mal pagado por los Seguros Sociales, y paralelamente al pagarle mal se le exige poco. Ambas circunstancias son nefastas para las organizaciones asistenciales actuales, se llamen Seguro de Enfermedad o Seguros Libres.”<sup>246</sup>

Estas aseveraciones entroncan con las de algunos que argumentaban desde dentro de las filas del franquismo sobre el fracaso de la aplicación del seguro de enfermedad. De esta manera, uno de los factores que habría contribuido a que el seguro de enfermedad fuera un fracaso sería de tipo psicológico. La familia, según este planteamiento, habría adquirido el hábito de que fuera un médico el que atendiera a sus miembros siempre y, por tanto, al imponer a aquélla otro desconocido la garantía de la seguridad médica estaba perdida. Semejantes argumentos pueden parecer poco sólidos o rigurosos pero sirven para explicitar la percepción que los miembros de la estructura de poder del franquismo tenían en torno al desarrollo de este seguro social y sus resultados efectivos:

“Uno de los factores que han contribuido a que el Seguro de Enfermedad fuera al fracaso es de tipo psicológico, lo que no puede ocurrir en el paro. En el Seguro de Enfermedad ha ocurrido que aquellas familia que por tradición familiar la mayoría de las veces, se había hecho al hábito de que fuera un médico determinado quien les asistiera de siempre, el cual tenía ya una garantía antes ellos. El Seguro les ha impuesto un desconocido para ellos el que no cuenta a veces ni con su simpatía ni con su confianza y de esta forma, se les ha quitado esa garantía...”<sup>247</sup>

Desde el ministerio de Trabajo el personaje que con mayor insistencia se opuso a la mala propaganda que la profesión médica realizaba en torno al S.O.E. fue Severino Aznar. En su conferencia pronunciada el día 9 de marzo de 1934 en el Ateneo Científico y Literario de Madrid ya estaba prefigurando la polémica soterrada que en los años cuarenta se iba dar a partir de la parcial socialización que supuso la promulgación de la ley del seguro de enfermedad. Para este representante del catolicismo social la razón del seguro de enfermedad se encontraba en la necesidad de “conservar, robustecer y dar estabilidad a la familia obrera”<sup>248</sup> al evitar que la enfermedad del cabeza de familia trajera al hogar de aquél la miseria. En ese sentido, no era asumible la oposición fiera de la clase médica, dado que oponerse a dicha política suponía arremeter contra el bien común de la nación. Sobre esta cuestión Martín Bufill ponía de manifiesto las dificultades a la hora de poner en práctica el S.O.E a partir del verano de 1944 por la existencia de “encontrados intereses particulares en pugna con cualquier solución de tipo general.”<sup>249</sup> Evidentemente, se estaba refiriendo a la oposición de la clase médica española a la implantación del seguro.

Y es que la clase médica temía que el seguro fuera una especie de “proletarización” de la medicina y con ella de su principal instrumento humano: el médico. Temían la pérdida de su clientela mientras que Aznar estimaba que las clases medias y las clases ricas, dado que el campo de aplicación iba a ser bastante estrecho, seguirían siendo sus clientes. Temían un descenso en su nivel de ingresos a partir de la aplicación de dicho seguro<sup>250</sup> sin considerar que los seguros sociales en España realmente eran seguros laborales sustentados “en la piedra fundamental del concepto de trabajador por cuenta ajena”<sup>251</sup> y que se dirigían al trabajo como objeto de contrato y no al trabajo como hecho social. Precisamente en esta línea argumentativa se movían las afirmaciones de Francisco Lamas, inspector de los servicios sanitarios del S.O.E., desde las páginas de la Revista Española del Seguro de Enfermedad. El mencionado autor utilizaba los argumentos y conclusiones de la Comisión designada por la Academia de Deontología para realizar un informe en torno a la evolución del S.O.E. durante el año 1948 y 1949. Entre dichas conclusiones se podían encontrar afirmaciones como las siguientes:

“La finalidad cristiana y social del Seguro de enfermedad no debe cumplirse exclusivamente a expensas del sacrificio de los profesionales técnicos que la integran...

El Seguro de Enfermedad contradice la moral católica si su organización favorece la socialización de la Medicina...

La actual organización del seguro de enfermedad español favorece la lucha de clases, por lo cual resulta antideontológico.”<sup>252</sup>

Resulta evidente que un sector importante de la medicina en España entendía el tema de la salud colectiva de la población a la luz de argumentos como el lucro personal sin considerar el hecho poco ético de que el dolor ajeno pudiera tener como mecanismo compensador la entrega del sector médico en manos del seguro. Era ésto lo que permitía que la mencionada comisión deontológica pusiera de manifiesto como, según el punto de vista de un importante sector de los médicos, el seguro de enfermedad burocratizaba la profesión médica y farmacéutica, estaba imperfectamente organizado en su vertiente quirúrgica, obstetricoginecológica y psiquiátrica y perjudicaba la investigación científica y la enseñanza de la medicina y la farmacia.<sup>253</sup> Aparte de ésto, los médicos veían desaparecer las creencias y tradiciones que hasta el momento habían sustentado su actividad y que les permitían moverse con una cierta seguridad en el ámbito de la sociedad a la que pertenecían.

En torno a la cuestión del campo de aplicación del seguro, un grave problema que se denunciaba al final de los años cincuenta era la falta de amparo para una parte importante de la población trabajadora. Su ámbito de aplicación, por consiguiente, no podía considerarse universal sino restringido en función de criterios laborales. Así pues, el Congreso Provincial de Madrid<sup>254</sup> pedía la ampliación de la protección del mencionado seguro a los trabajadores autónomos, a los profesionales liberales, a los pequeños industriales y empleados del Estado, provincia y municipio, fueran o no funcionarios. En cuanto a los funcionarios, hay que destacar un hecho sobresaliente también denunciado desde el Congreso de la Familia Española y en concreto por parte de la delegación de Álava.<sup>255</sup> Acusaba la mencionada delegación la falta de protección para el funcionariado, sobre todo en lo referente a los grupos de renta que no sobrepasaban el tope máximo señalado para este seguro. Encontramos aquí otra ejemplificación de las dificultades para la universalización de los seguros sociales; en este caso concreto centrándonos en las dificultades para la uniformización de criterios en el caso del seguro de enfermedad. En líneas generales, el mencionado congreso denunciaba la necesidad de incrementar en su extensión y en su cuantía las prestaciones de este seguro “hasta alcanzar a un número mayor que el actual de beneficiarios y hasta permitir en todas ellas una puntualidad mayor en el disfrute de dichos beneficios.”<sup>256</sup> Tropezamos aquí de nuevo con la zanja abierta

entre la realidad, en este caso de la percepción popular, y los planteamientos grandilocuentes y tocados de un cierto romanticismo de las autoridades del régimen, y los resultados conseguidos por medio de sus políticas. Este fracaso de la política sanitaria se plasmaba también en la situación de desprotección palmaria que se adentraba de lleno en la década de los años cincuenta cuando, en teoría, el S.O.E. debiera haber estado a pleno rendimiento. Podemos encontrar sangrantes agravios comparativos como el ejemplo que a continuación vamos a citar en el que la delegación provincial de sindicatos de Badajoz denunciaba el burocratismo y la falta de atención a los pacientes que habían de recurrir a las urgencias:

“La Delegación Provincial de Sindicatos de Badajoz traslada acuerdo adoptado por la Junta de Presidentes de Secciones Sociales de todas las Entidades Sindicales de aquella capital, en la que recaban se dicte una disposición por el ministerio de Trabajo en la que se ordene expresamente se presente servicio, en los casos de urgencia, a los productores que lo precisen y lo recaban de los Ambulatorios Sanitarios y demás centros dependientes del Seguro Obligatorio de Enfermedad, sin necesidad de que le sea exigido justificante alguno para la prestación médica de urgencia, en evitación de que el cumplimiento de trámites burocráticos les ocasione perjuicios irreparables a los asegurados.”<sup>257</sup>

En otros casos, el campo de aplicación se restringía por la vía de los hechos en los casos de trabajadores sometidos a condiciones de dureza por encima de la media. Nos referimos a los mineros y concretamente a los de la zona de las minas de Río Tinto y Tharsis. En esta zona de la provincia de Huelva los servicios del S.O.E. funcionaban con una notable falta de eficacia hasta el punto de que los mineros habían de desplazarse a Huelva para ser asistidos “con gastos personales que no bajaban de las 220 pts.”<sup>258</sup>

La insuficiencia del S.O.E. en lo tocante al ámbito de la maternidad se explicita en las políticas paralelas llevadas a cabo para evitar el deterioro de la salud de las mujeres imposibilitadas para acogerse al mencionado seguro. He aquí otra de las denuncias realizadas en torno a este elemento de la previsión social española. En este caso nos estamos refiriendo a las prestaciones que pretendían ser equivalentes a las del seguro de enfermedad provenientes del ámbito de los subsidios familiares. Las prestaciones otorgadas por el Régimen de Subsidios Familiares ofrecían servicios diferenciados para situaciones también distintas. En el caso de las esposas de los trabajadores asegurados en el mencionado régimen con una cotización mínima de ciento veinte días en los nueve meses anteriores a la fecha en que solicitasen los beneficios, se le concedían los servicios asistenciales maternos e infantiles del seguro de enfermedad. En el caso de las trabajadoras aseguradas en el ya mencionado régimen y exceptuadas del seguro de enfermedad, recibían todos los beneficios concedidos por el S.O.E.



Implícitamente y con menos virulencia que en el caso anteriormente expuesto, en las II Jornadas Técnicas Sociales se ponían de manifiesto las dificultades para la universalización del sistema de protección sanitaria para la maternidad como consecuencia de problemas financieros o por falta de voluntad política. En esta misma línea, y siguiendo con los ejemplos de percepción negativa de lo que era la política social del ministerio de Trabajo, cabe citar la proposición de que los beneficios concedidos por el seguro de enfermedad se extendieran a los trabajadores por cuenta propia y a los de empresas o entidades oficiales excluidas del campo de aplicación del mismo, "ya que por ahora, y por no haber normas expresas de aplicación de tal beneficio para los mencionados titulares, éstos no pueden disfrutar del Seguro."<sup>259</sup>

En cuanto a las prestaciones médicas, el reglamento había impuesto la meta de que en el espacio de dos años a partir de la publicación de dicho reglamento los servicios de especialidades y sanatorios<sup>260</sup> fueran operativos pese a lo cual en provincias altamente proletarizadas como Asturias y en instalaciones "ejemplificantes" de la labor del S.O.E. no se había logrado instalar un simple banco de sangre a la altura de 1948. En este sentido el Anuario del I.N.P. de 1946 y 1947 destaca el hecho de que los asegurados de Asturias junto a los de Extremadura, Baleares y Andalucía<sup>261</sup> fuesen los que más prestaciones consumían excediendo el importe de la recaudación al de los gastos. Concretamente, en lo referente a los andaluces, durante el año 1945 sus recaudación ascendía 17.378.036,40 pts. mientras que las prestaciones suponían 17.422.637,99 pts.

Las deficiencias en la aplicación de la política sanitaria por parte del ministerio de Trabajo se plasmaban en las deficiencias de este sanatorio Girón y en las demandas de los cirujanos del mencionado sanatorio de fecha 19 de noviembre de 1948. En dicha petición, se solicitaba a la Jefatura Nacional de la O. S. 18 de julio la importación de preparados inyectables de aminoácidos esenciales (de los que carecía el mercado español) con destino a la reanimación de heridos, se insistía en la deficiente iluminación de los quirófanos y en la carencia de aparatos de anestesia con personal adecuado para su puesta en funcionamiento; de igual manera se hacía hincapié en la necesidad de dotar al sanatorio de grupos electrógenos para evitar la falta de funcionamiento de los servicios de electrocirugía y radiología por las restricciones eléctricas así como en la falta de penicilina especialmente en Gijón y Avilés. Se reiteraba la necesidad de mejorar la salubridad de los locales y concretamente hacía una afirmación sobre la policlínica de Sama de Langreo que por muy moderada que fuera en su expresión denotaba la realidad de sus servicios clínicos:

“Nuestros locales de la Policlínica de Sama de Langreo, como ya hicimos constar en nuestra memoria del año anterior, los consideramos francamente deplorables, dado el grupo de más de 6.000 asegurados con que contamos en ese Sub-sector.”<sup>262</sup>

Las carencias del sistema se plasmaban en la necesidad de concertar con los hospitales de caridad de la provincia así como en la relación entre el número de asegurados y el de médicos del seguro que originaba la petición de establecer la plantilla “ideal.” Y todo ello se concretaba en solicitudes que ratificaban el mismo criterio expuesto. Y así, en el programa de necesidades de la provincia de Madrid elaborado por la Presidencia del Gobierno en el año 1950 se ponía de manifiesto que tan sólo en Madrid había un déficit sanitario significativo hasta el punto de demandar la creación inmediata de 35 centros primarios, dos secundarios y 39 centros en las otras localidades de la provincia.<sup>263</sup>

Esta realidad, más pegada a las deficiencias lógicas que había de tener el sistema, contrasta con el tono propagandístico de quienes pretendían destacar la magnanimidad cuasi-caritativa del S.O.E. en favor de los trabajadores españoles. En esta línea estaba la memoria de la Vicesecretaría Provincial de Ordenación Social de Barcelona en la que se derramaban alabanzas sobre el seguro y sobre su labor en la vertiente que dependía de la Delegación Nacional de Sindicatos. Ello constituía un elemento para “vender” a los trabajadores españoles la forma en que la organización sindical y el Estado franquista cuidaban de la salud de los trabajadores:

“En las inspecciones periódicas que durante todo el año se hacen a los consultorios de la Clínica, Policlínica y domicilios de los médicos, se ha podido comprobar, que tanto por parte de todo el personal sanitario como el auxiliar se cumplen las órdenes que dicta esta Dirección Médica a fin de que los asegurados a quienes se presta servicio estén atendidos debidamente, hasta el extremo de que en el año 1949 ha sido tan exiguo el número de quejas que prácticamente se puede considerar nulo. Nuestros servicios funcionan con magnífica regularidad, saliéndose incluso de las prestaciones habituales, superándolas constantemente con afán de hacer sentir al productor el máximo de beneficios que nuestra Organización les presta.”<sup>264</sup>

Uno de los problemas por los se que caracterizó el Seguro de Enfermedad fue la ligazón con las entidades colaboradoras que eran apéndices del órgano único de gestión: el I.N.P. Sin embargo, en la práctica, las entidades colaboradoras absorbían 4/5 partes del ámbito del seguro dado que en el año 1947 (momento en que los trabajadores dejaron oír su voz) los obreros eligieron mayoritariamente la afiliación al seguro por medio de las entidades colaboradoras incitados indirectamente o por iniciativa propia. Hay que decir que el propio sistema estaba montado sobre la *incentivación indirecta* de esta realidad y que, por tanto, gran parte de los asegurados

optaron por entidades que representaban el ánimo de lucro.<sup>265</sup> Esta polémica en torno al sesgo privado del sistema del seguro de enfermedad nació en función de los problemas que a mediados de los cincuenta comenzaban a surgir en las finanzas del S.O.E. Entre los motivos que lo originaban estaba la considerable desconexión entre los servicios estrictamente médicos y los instrumentos administrativos, lo cual conducía, entre otras cosas, al aumento del gasto en farmacia. Así surgían voces dentro del I.N.P. que se levantaban en favor de las entidades colaboradoras y de la mayor privatización del seguro de enfermedad.<sup>266</sup>

El último, pero no el menos importante, de los aspectos que originó desde la puesta en marcha del seguro mayores problemas fue la ausencia de una normativa clara en cuenta a su aplicación. Hasta tal punto llegó esta situación que la legislación relacionada con el S.O.E. a la altura de 1959 era todavía "caótica"<sup>267</sup> dándose el caso de que disposiciones sobre temas decisivos ni siquiera habían sido publicadas en el B.O.E. adoptando la forma de circulares internas de los organismos del seguro.

## **14.8. El tratamiento de las enfermedades profesionales.**

### ***14.8.1. La evolución legislativa del seguro de enfermedades profesionales.***

El primer seguro de estas características se creó al promulgarse la Ley 13 de julio de 1936 que nunca llegó a aplicarse. Se estableció definitivamente el primer seguro de enfermedades profesionales (el de silicosis) en 1941. El Decreto de 10 de enero de 1947<sup>268</sup> y su Reglamento de 19 de julio de 1949<sup>269</sup> implantaron definitivamente el seguro de enfermedades profesionales, en teoría con carácter general.

Se calificaban como enfermedades profesionales aquellas que producían como consecuencia del trabajo, y con una evolución lenta y progresiva, un daño tal al trabajador que le incapacitara para el normal ejercicio de su profesión o que en último término le ocasionara la muerte.<sup>270</sup>

El Seguro de Enfermedades Profesionales tenía una serie de características distintivas. En primer lugar, cabe citar la obligatoriedad del reconocimiento facultativo para todos los asegurados. Para dicho reconocimiento la caja nacional había creado algunos dispensarios<sup>271</sup> en los puntos de mayor concentración de trabajadores sometidos a esta enfermedad pese a lo cual a la altura de los años cincuenta el propio I.N.P. tenía que reconocer que existían lugares especialmente afectados por la silicosis como la provincia de Jaén en donde su número y “rendimiento total era muy limitado e insuficiente.”<sup>272</sup> En los puntos de menor concentración obrera (sin dispensarios) la inspección médica del seguro concertaba con especialistas del aparato respiratorio la realización de los reconocimientos. Formalmente, se determinó que, si tras el reconocimiento resultaba que el empleado tenía una enfermedad profesional que supusiese peligro, éste sería trasladado, dentro de la misma empresa, a otro tipo de funciones donde no existiesen riesgos para su enfermedad. Si esto no era posible, se imponía la obligación de darle de baja con un subsidio equivalente al 50 % del salario durante el tiempo que permaneciese en esa situación. En este caso corría a cargo de la empresa el primer año del subsidio y los seis meses siguientes a cargo del seguro. En tercer lugar, el seguro de enfermedades profesionales imposibilitaba el recurso por vía judicial sin que el demandante hubiera agotado previamente la vía administrativa, dando prevalencia a esta vía sobre la de la magistratura o, lo que equivaldría a lo mismo, al régimen frente a la ley.

Como se ha mencionado, los primeros pasos para la creación del seguro de enfermedades profesionales se centraron únicamente en la silicosis y así el ministerio de Trabajo encargó a la Caja Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo una investigación sobre esta enfermedad en las cuencas mineras asturianas por si hubiera sido necesaria la implantación del seguro en las minas de carbón. Aquella investigación fue desarrollada por los doctores Cosío y Pumarino

siendo publicada en 1934. La investigación dio como resultado la ley de julio de 1936. La ley de Bases de Enfermedades Profesionales de 13 de julio de 1936<sup>273</sup> preveía la enfermedad denominada neumociosis (silicosis) con o sin tuberculosis, antracosis y otras enfermedades respiratorias sin que ello supusiera indemnización alguna, lo cual dejaba la situación tal y como estaba. "Esta Ley, aunque no llegó a ser desarrollada a consecuencia de nuestra guerra civil, fue el germen de lo que posteriormente había de hacerse al terminar el Movimiento Nacional. En ella, no se definía la enfermedad profesional, pero se enumeraban una a una las 22 que se calificaban como tal y, además, se determinaban las industrias en las cuales podían originarse las enfermedades debidas a las materias que utilizaban."<sup>274</sup>

La Orden de 7 de marzo de 1941<sup>275</sup> daba normas para su prevención e indemnización. Ésta había de ser satisfecha directamente por el patrono o los patronos prorrateando la misma con arreglo a los últimos 5 años, según el tiempo que en cada una de las empresas hubiera trabajado. Continuando con el desarrollo legislativo, el Decreto de 3 de septiembre de 1941<sup>276</sup> establecía el seguro de enfermedad profesional denominado silicosis. Esta disposición partía del hecho de que cuando la enfermedad productora de la incapacidad tenía una relación directa con el trabajo realizado debía ser conceptuada como cualquier accidente en función de la ley de accidentes de 8 de octubre de 1932. Dicha disposición establecía con carácter obligatorio el seguro de silicosis en las industrias en que dicha enfermedad fuese más usual. Se constituía en la Caja Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo la Sección del Seguro de Silicosis, concretamente en las industrias mineras del plomo,<sup>277</sup> del oro<sup>278</sup> y en las industrias de cerámica en que se empleara el chorro de arena y las demás de este sector en que existiera riesgo de silicosis.

Por este decreto, los potenciales enfermos habían de ser calificados como sanos, enfermos de silicosis (no incapacitados) con riesgo en su actual trabajo y enfermos de silicosis en grado de incapacidad permanente. En el segundo de los casos era trasladado dentro de la misma empresa a otro trabajo sin riesgo de enfermedad. De no ser posible, como ya se ha mencionado (aprobándolo la inspección de trabajo), se le daba de baja y percibía un subsidio equivalente al 50 % de su jornal durante un año a cuenta de la empresa y durante un máximo de seis meses más a cargo del seguro. Si era declarado incapacitado, el enfermo era sometido a tratamiento a cargo del seguro percibiendo una indemnización igual a las tres cuartas partes del jornal durante un máximo de un año. La mitad de esta percepción era pagada por el seguro y la otra mitad por la empresa (o empresas) para las que hubiese trabajado durante los cinco años anteriores. Pasado ese año se regulaba su enfermedad según la ley y el reglamento de accidentes del trabajo en función de la incapacidad permanente. Al ponerse en vigor esta disposición se temía, entre algunos sectores del propio ministerio de Trabajo, que se utilizara dicho seguro por parte de las

empresas para reducir costes provocando que el seguro tuviera que hacerse cargo de los operarios afectados por la enfermedad.<sup>279</sup>

El reglamento del seguro de silicosis se promulgó por medio de la orden de 14 de noviembre de 1942. En él se establecían de forma definitiva las siguientes indemnizaciones:

1.- En el caso de la silicosis de primer grado se establecía el traslado del minero al exterior con percibo del jornal de su nuevo trabajo o, de no existir vacante, indemnización equivalente al 50 % de su salario, durante un año por cuenta de la empresa y 6 meses más por cuenta del seguro, tal y como lo prescribía la ley. Sin embargo, la realidad era que cuando un minero era declarado silicótico de primer grado era difícil que fuera recolocado en los trabajos del exterior y quedaba en el más absoluto desamparo dado que le resultaba difícil que otro empresario le diera otro empleo debido a su enfermedad. Y es que si caían enfermos, dichos empresarios, tenían que pagarles por una enfermedad que el obrero no había contraído en sus empresas; ello, sin considerar que enfermaban frecuentemente y que, por tanto, no rendían en su trabajo.

2.- Para la silicosis de segundo grado se establecía el percibo del 37,5 % del salario a cargo del seguro. En este caso lo más habitual era que las pensiones no se concedieran, por la vía de los hechos, con arreglo a lo que el minero ganaba en la mina por el hecho de que no existía un precepto legal que con claridad así lo estipulase. Y ello sin tener en cuenta el hecho de que las pensiones se calculaban sobre el salario nominal de los trabajadores y no sobre el real.

3.- Para la silicosis de tercer grado se fijaba la percepción del 50 % del salario a cargo del seguro.<sup>280</sup>

El Decreto de 29 de septiembre de 1943 incrementó las pensiones de la siguiente manera. Los de tercer grado pasaban a percibir un 75 % del salario y los de segundo un 55 %. La orden de 26 de enero de 1944 extendía el contenido del seguro a las industrias de la minería del carbón. El Decreto de 29 de marzo de 1946<sup>281</sup> aprobó el nuevo reglamento del seguro. Se consideraba así la existencia de un seguro obligatorio, específico y administrado por un organismo estatal, centrado en la silicosis y organizado sobre la base de una gran mutualidad en la que se incluía a todas las empresas comprendidas en las disposiciones legales vigentes. Sin embargo, no se consideraba el hecho de que "técnicamente, en silicosis no existía la incapacidad temporal"<sup>282</sup> de hecho puesto que, una vez declarada la enfermedad, esta no tenía cura posible que permitiera considerar al trabajador como absolutamente curado y que le permitiera dedicarse a otra actividad o a la misma que realizaba.

Por Decreto de 10 de enero de 1947 se creó en el seno de la Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo del I.N.P., el Servicio del Seguro de Enfermedades Profesionales y por tanto el seguro del mismo nombre. Esta disposición instauraba el sistema a que habría de ajustarse dicho órgano administrativo. La gestión del servicio se ponía en marcha considerando la silicosis en las industrias de la minería del plomo, del oro y del carbón así como en las de cerámica y sus derivados. Además, se introducía una larga lista de enfermedades con el objetivo de incluirlas.

En el establecimiento de este seguro tuvo una influencia trascendental el deseo de atender una de las zonas tradicionalmente más conflictivas y que más inestabilidad y ausencia de armonía social podían generar para el régimen franquista. Nos referimos a la cuenca minera asturiana. Y es que en la provincia de Asturias se concentraba principalmente el problema de la silicosis.<sup>283</sup> Sin embargo, este paso, que fue identificado por el propio Girón como una etapa crucial en la defensa de las enfermedades profesionales, no constituyó más que una disposición que resumía lo anteriormente hecho en este ámbito de la previsión.<sup>284</sup>

Por último, la orden de 19 de julio de 1949 aprobaba el reglamento de la ley. Se establecía que su gestión se llevara a cabo a través de la Junta Administrativa del Seguro y del Servicio del mismo. Su art. 79 prescribía, como nota más destacada, que los silicóticos de primer grado pudieran seguir prestando servicios, incluso dentro del interior, en trabajos exentos de riesgo pulvígeno, percibiendo, aun cuando el trabajo fuese de inferior salario, el mismo base que tuvieran en la categoría de procedencia. En las condiciones de precariedad tercermundista en que se mantenían los mineros jienenses el seguir trabajando, supuestamente, en puestos sin riesgo de existencia de agentes pulvinígenos, era considerado, sorprendentemente, todo un logro y una victoria social, pese a lo cual existían circunstancias en función de las cuales el trabajador podía ver rebajado su sueldo con el beneplácito de la Delegación Provincial de Trabajo. Por tanto, en el mejor de los casos “el verdadero seguro de enfermedades profesionales comenzó a funcionar en el año 1950.”<sup>285</sup>

En el mencionado reglamento se consideraba período de incapacidad temporal, a efectos de indemnización y asistencia del trabajador, el tiempo necesario para el estudio médico de la silicosis de cara a fijar el diagnóstico de la enfermedad y la determinación del grado de la misma. Este llamado “período de diagnóstico” no debía durar más de tres meses y daba derecho a la percepción del 75 % del salario a cargo de la empresa en que estuviera trabajando el obrero. Diagnosticada la silicosis, el reglamento estipulaba que los tres primeros meses corrían a cargo de la empresa y el resto (hasta un año) por cuenta del seguro rebajando lo estipulado en la ley de 1947. Se instauraba igualmente la clasificación médica legal según los siguientes criterios: normal, cuando no se padecía silicosis; en observación, cuando existían síntomas que, sin

definir la existencia de silicosis, y sin incapacidad temporal, requerían la vigilancia médica del trabajador. En ambos casos, el trabajador permanecía en su puesto habitual. Se consideraba primer grado de silicosis al supuesto que comprendía los casos de silicosis típica sin que originara disminución en la capacidad funcional para el trabajo. La silicosis de segundo grado era aquella que daba derecho a indemnización por incapacidad permanente total para el trabajo habitual cuando dicha enfermedad imposibilitaba al trabajador para ejercer cualquiera de los trabajos en la industria a la que perteneciese. Y, por último, la silicosis de tercer grado era aquella que generaba indemnización por incapacidad permanente absoluta y que se manifestaba al menor esfuerzo físico imposibilitando para cualquier tipo de trabajo. Por último, se definía la sílico-tuberculosis como la silicosis en la que aparecía asociada la tuberculosis. A efectos de prestaciones se homologaba la silicosis de segundo grado a la incapacidad permanente total para el trabajo habitual según el Seguro de Accidentes de Trabajo en la Industria, y el tercero y la sílico-tuberculosis a la incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio.

Como se ha mencionado, el reglamento posibilitaba cambiar de puesto dentro de la misma empresa a aquel trabajador con silicosis de primer grado (artículo 79). Esto suponía un grave problema para los mineros pues esta facultad que se confería al enfermo y a la empresa dependía de la voluntad del primero para el que el cambio de puesto resultaba económicamente perjudicial dado que dejaba de cobrar la mayoría de los emolumentos de su anterior categoría profesional y esto resultaba especialmente lesivo tanto en cuanto la enfermedad se cebaba singularmente en picadores y barrenistas que eran los que mayores salarios recibían dentro de la mina. De ahí que fuera habitual que mientras eran conscientes de que su enfermedad estaba en el primer grado no solicitaran el traslado a un puesto adecuado a su estado porque ello significaba una reducción en sus ingresos, aun cuando eso era el origen seguro de la adquisición de la silicosis de segundo grado. En otro caso, podía adquirir la tuberculosis que no daba lugar a incapacidad, dado que la llamada sílico-tuberculosis exigía una silicosis de segundo grado.<sup>286</sup>

De hecho, se dejaba fuera del sistema del seguro a enfermedades de tanta relevancia como el nistagmus.<sup>287</sup> Esta enfermedad se presentaba entre los trabajadores del interior de la mina y básicamente en las de extracción de hulla. La causa fundamental era la falta de iluminación y el ámbito geográfico en que se desarrollaba era el de las provincias de Asturias y León. En 1947, según un estudio realizado por la Jefatura de los Servicios Médicos de la Dirección Técnica del I.N.P. se constató que en la zona de Asturias existían 17.000 operarios de este tipo de minas en la zona de Sama de los que 13.000 trabajaban en el interior de la mina y 4.000 eran picadores. En la Sociedad Hullera Española trabajaban 5.500 obreros de los que 1.000 eran picadores y alrededor de 4.500 trabajaban en el interior. En la zona de Mieres la población minera ascendía a 2.414 mineros de los que sólo 447 eran picadores. “En el momento del estudio fueron



considerados como bajas por nistagmus: en el grupo a), 80 casos; en el grupo b), 35, y 8 en el grupo c). Eran, pues, un total de 123 casos, lo que suponía un 0,49 por 100 de la población minera estudiada, y un 2,25 por 100 del número de picadores correspondientes a la misma.<sup>288</sup> No se consideraba su inclusión dentro del seguro de enfermedades profesionales de forma efectiva por el hecho de que se consideraba inicialmente que no existía incapacidad permanente absoluta y que el trabajador podía continuar trabajando aunque no en el interior de la mina.<sup>289</sup> Sólo la Orden de 6 de octubre de 1951 establecería el aseguramiento obligatorio de esta enfermedad.

Inicialmente al imponerse en 1941 el seguro de silicosis el régimen financiero establecido fue el de reparto de cobertura de capitales hasta la promulgación del Decreto de 23 de diciembre de 1944 por el se establecía el régimen económico de reparto de rentas (al menos para algunos sectores). A partir del Decreto de 10 de enero de 1947 el régimen financiero establecido definitivamente fue el de reparto de rentas.<sup>290</sup> El importe anual de las pensiones se repartía entre todas las empresas aseguradas las cuales satisfacían sus cuotas trimestralmente.

Una de las dificultades con que se encontraba el establecimiento del seguro de enfermedades profesionales era el hecho de que no se daba vigencia efectiva y real al seguro ante la existencia de entidades aseguradoras privadas, dado que la Ley de 13 de julio de 1936 había estructurado en parte la resolución de éste problema sobre la existencia de entidades aseguradoras privadas autorizadas por el I.N.P. conforme a lo estipulado en la ley de accidentes del trabajo de 1932. El problema radicaba en el hecho de que nunca se desarrolló el reglamento de la mencionada ley y dicha situación perduró hasta 1941 en que se promulgó el seguro de silicosis que comenzó a aplicarse en las empresas mineras de plomo, oro e industrias cerámicas y posteriormente (con la Orden de 26 de enero de 1944)<sup>291</sup> en las minas de carbón. A partir de ese momento, el órgano encargado de realizar las prestaciones del seguro era la Caja Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo y más concretamente su sección del seguro de silicosis. Es decir, se eliminaba como susceptible asegurador al seguro privado que se estructuró a partir de 1947 con lo que formalmente los mencionados aseguradores privados quedaban excluidos del seguro.<sup>292</sup> Por tanto, fue la legislación incompleta desarrollada a partir de 1936 la que permitió extender el deber de reparación en las enfermedades profesionales dada la problemática a la hora de diferenciarla de una enfermedad común y de establecer así la responsabilidad patronal. Ello motivó las reclamaciones (sobre todo en las zonas mineras) a los tribunales ante la negativa de las entidades aseguradoras a cubrir dicho riesgo, dado que dicha responsabilidad específica no se consideraba en las pólizas del seguro de accidentes del trabajo.

La ausencia de reglamentación sufrió un leve traspiés a raíz de la sentencia de la sala cuarta del supremo de 2 de mayo de 1941 en la que calificaba como accidentes del trabajo el caso

expuesto por un afectado de silicosis. A raíz de la persistencia del sistema de entidades colaboradoras en la I Asamblea General del I.N.P. se planteó la necesidad de establecer algún sistema de compensación de los costes de los siniestros por silicosis entre todas las entidades que participasen en el seguro de accidentes del trabajo en la industria en proporción a su cartera de primas pese a lo cual el problema continuaría planteándose.<sup>293</sup> Ahí se quedaron los intentos de solucionar este grave problema.

#### **14.8.2. El problema de la silicosis entre los mineros españoles.**

Evidentemente, hablar de enfermedades profesionales conduce a abordar el tema de la silicosis entre los mineros españoles que todavía en los años próximos a la salida de Girón del ministerio de Trabajo estaban en una situación similar a la de la Edad de Piedra<sup>294</sup> y muy inferior a la de algunas de las minas situadas en el cercano Marruecos. Ello no evitaba las protestas de los sectores empresariales representados en la junta administrativa del seguro.<sup>295</sup> E incluso la Caja Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo criticaba la situación del seguro a mediados de los años cincuenta basándose en dos hechos muy perjudiciales: por un lado la capacidad efectiva de la medicina para diagnosticar dicha enfermedad y el importante número de afectados que, conscientes del derecho que les amparaba, procuraban obtener las prestaciones pertinentes del seguro.<sup>296</sup>

Rama	Pensionistas	Pts.
Carbón	4.768	89.224.010,81
Cerámica	364	5.629.118,78
Plomo	889	12.631.823,72
Oro	6	65.108,21
Total	6.027	107.550.061,52

*\*Cuadro nº 95. Pensionistas y pagos efectuados en el seguro de enfermedad hasta 31 de diciembre de 1950.*<sup>297</sup>

El drama principal de esta enfermedad profesional era la percepción de su inevitabilidad tal y como se refleja en las siguientes líneas que pretenden justificar la ausencia de indemnización económica para la silicosis de primer grado:<sup>298</sup>

“Este recargo, ¿procede en todos los casos? Desde luego en el segundo y tercer grado del mal, que podrían haber sido evitados, y que tienen indemnización de renta taxativamente asignada, no cabe duda alguna; pero ¿y en el primer grado, que es prácticamente inevitable? Esta cuestión presenta más dificultad, porque ha de tenerse también en cuenta que aunque se practique con normalidad el reconocimiento, este

primer grado surge siempre; así pues, si el trabajador que no ha sido reconocido nunca, se encuentra mal y acude al médico, el resultado será virtualmente el mismo que si hubiese existido tal reconocimiento: apreciar un primer grado de silicosis.”

Año	Obreros afiliados de la rama del plomo	Obreros afiliados de la rama de cerámica	Obreros afiliados a la rama del carbón	Total
1943	4.806	16.231	---	21.037
1944	5.246	17.915	72.395	95.556
1945	5.392	19.211	68.033	92.636
1946	5.848	25.987	75.328	107.163
1947	5.627	26.271	77.461	109.359
1948	6.177	29.479	78.349	114.005
1949	7.660	30.927	86.252	124.839
1950	8.912	26.458	88.424	123.794
1951	9.079	28.327	88.787	126.193
1955	11.150	31.971	89.600	132.721
1956	11.789	33.587	91.492	136.868
1957	9.691	36.408	89.260	135.359

*\*Cuadro n° 96. Evolución del número de afiliados al seguro de enfermedades profesionales desde 1943 hasta 1951.<sup>299</sup>*

La mencionada situación era perfectamente válida para las minas situadas en Jaén, concretamente en Linares y La Carolina, lo cual originaba un conflicto latente entre los mineros hasta el punto que resultaba complicado encontrar trabajadores dispuestos a actuar de enlaces y vocales en las secciones sociales del sindicato por el hecho de que entre ellos podían colarse “elementos izquierdistas” que, en contacto con las jerarquías, ponían de manifiesto la situación misérrima y antihigiénica en que se desenvolvían los mineros sin que se hiciera nada para solucionar ese estado de cosas de forma real y efectiva.<sup>300</sup>

Dicha situación sanitaria se veía agravada por salarios muy bajos al no haberse renovado la reglamentación, sobre todo en lo referente a los trabajadores mineros, y más concretamente para los que trabajaban en profundidad. Y es que los salarios de estos obreros eran casi iguales a los que cobraba un trabajador del campo. A ello se añadía la escasa diferenciación salarial en dicha reglamentación entre las distintas especializaciones de los trabajadores mineros, lo cual actuaba de desincentivador entre los mismos.

El verdadero problema sanitario se debía a la falta de higiene dentro de la mina y concretamente, en cuanto al tema de la silicosis se refiere, a la ausencia de instrumentos adecuados para la explotación de los yacimientos:

“...jornadas de siete horas de trabajo diarias, prestadas en unas condiciones casi dantescas por el calor y la falta de aireación y el polvo...ya que las perforadoras usadas generalmente, por no tener ni inyección de agua, ni aspirador de polvo alguno, lo producen en tal cantidad, que, corrientemente, es difícil ver una luz a más de dos metros, respirando en esta atmósfera insana...todos los trabajadores del interior en un plazo más o menos largo, casi nunca superior a los diez años y en muchas ocasiones al cuarto o quinto año, contraen fatalmente esa terrible enfermedad de la silicosis,...llevándole indefectiblemente por evolución en un período de quince o veinte años a una muerte segura...Resulta desolador comprobar, lo difícilísimo que es encontrar un minero que haya cumplido más de 55 años...no pudiendo alimentarse convenientemente con un jornal tan miserable; pues juntando los pluses, puntos y primas que las empresas dan, como acicate, la verdad es que la media que un martillero cobra en estos destajos, con todos su emolumentos, no llega a 1.300 pts. mensuales, y esto teniendo la completa seguridad y certidumbre de que haciendo este trabajo, antes de diez o doce años, ha de ser un silicoso incurable...”<sup>301</sup>

Resumiendo este párrafo de indudable riqueza, la situación de los mineros de nuestras minas de plomo estaba condicionada por unos salarios realmente insuficientes a mediados de los años cincuenta a lo que se unía una esperanza de vida realmente baja en función de la rapidez con que se hacían acreedores a sufrir la silicosis. Ello condicionaba su vida laboral presente así como la futura, tanto en cuanto sus posibilidades de encontrar un nuevo trabajo disminuían de forma inversamente proporcional al avance de su enfermedad, lo cual a veces no llegaba a ser necesario pues en minas como la de Sierra Almagrera y en Rodalquilar, un martillero se mantenía sano únicamente durante un período que oscilaba entre los 3 y los 8 años. Si a ello añadimos, una vida diaria en viviendas inhóspitas e infrahumanas sin las condiciones más elementales de higiene, estrechas, sucias y, por tanto, foco de enfermedades, se comprende la conflictividad latente entre los mineros en general, y entre los jienenses en particular, conscientes de que les aguardaba una muerte prematura e inevitable. En torno a esta cuestión reconocía la veracidad de la situación lamentable por la que atravesaban los mineros y las consecuencias que ello tenía en su salud en la medida en que vivían en unidades permanentes de contagio de enfermedades tales como la tuberculosis:

“...es consecuencia de un abandono de muchos años en cuanto a la labor social para los mineros se refiere y que desde hace muchísimo tiempo se ha debido procurar que los

trabajadores de las minas de plomo dispongan de viviendas higiénicas, puesto que en esta ciudad no se ha construido ni una sola vivienda para mineros y como consecuencia de ello y de la insalubridad y hacinamiento de estos trabajadores en reducidas habitaciones, unido a la clase de trabajo que desarrollan hace que el índice de tuberculosis entre estos productores sea tan elevado y que si la silicosis hace estragos, no lo hace menos el ambiente de contagio en que se ven obligados a vivir, que ha hecho que cunda el pánico y el reparo para los trabajadores del interior de las minas..."<sup>302</sup>

En otros puntos del sur español como Cartagena, la situación era homologable hasta el punto de que "la escasez de viviendas es tan grande que la mayoría de los productores que no viven como alimañas, han de hacer antes de entrar al trabajo recorridos por sus propios medios, de más de 20 km."<sup>303</sup> Paralelamente a las consideraciones sociales que sobre el tema se puedan hacer era evidente que la repercusión de este problema de salud había de ser de una envergadura relativamente importante en la medida en que las entidades aseguradoras solicitaron un sistema de compensación de los costes de los siniestros entre todas las que practicasen el seguro de accidentes del trabajo en proporción a su grado de siniestralidad.<sup>304</sup>

En definitiva, se daban situaciones tercermundistas en función de los bajos salarios que establecía la propia reglamentación a lo cual se añadían las jornadas agotadoras con el calor asfixiante del fondo de la mina, el polvo producido por lo rudimentario de los viejos perforadores carentes de todo sistema que eliminara el peligro de contagio, etc. Así pues, se comprendía el hecho de que los obreros quedasen afectados por la enfermedad al cabo de cinco o diez años. A ello se unía el hecho de que los martilleros cobraban de unas 1.300 a 1.400 pts. mensuales, incluidas las primas al rendimiento, sin que por ello se corrigiesen las desigualdades flagrantes que se producían en las clasificaciones profesionales y en los salarios de los mineros en función del peligro que corrían y sin que se modificaran las jornadas de los llamados *endobles* durante las cuales se trabajaban 14 horas seguidas. Todo ello traía como consecuencia que esta tarea tan penosa diese como resultado que sólo en la provincia de Jaén hubiera en 1955 alrededor de 5.000 mineros de los cuales 1.500 eran silicóticos reconocidos por el I.N.P.<sup>305</sup> sin que, por otro lado, se pudiera afirmar que los médicos de zona tuvieran el material adecuado para su atención.

Esta situación en el orden de la salud no era más que otro ejemplo del estado de explotación de los mineros en función de su situación en un sector estratégico para la economía nacional que hacía que fundamentalmente los mineros españoles recibieran un "trato poco humano" a la par que arbitrario y falto de garantías para la defensa de sus derechos.<sup>306</sup> Ejemplos concretos de esta explotación podemos encontrar varios. Así, la Orden del ministerio de Industria y Comercio de 31 de diciembre de 1950 y de 30 de junio de 1955 por las que se elevaba el precio del kg. de

cobre primero hasta las 13,65 pts. y luego hasta las 25 sin que la empresa concediera participación inicial en los beneficios a los trabajadores a partir de las subidas.<sup>307</sup> La capacidad de respuesta del minero era mínima por no decir nula, y más en el contexto político en que se desenvolvía ya que cualquier protesta podía recibir la respuesta firme de la empresa o de los aparatos de control del Estado.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la Sociedad Minera de Río Tinto y Tharsis, en este rincón de España, lo era todo en el sentido de que prácticamente cualquier hueco era propiedad de la misma con la posibilidad de desahuciar (por despido, jubilación o muerte) a los habitantes de las casas “estrechas e infectas”<sup>308</sup> de su propiedad a las que rodeaba un ambiente que muestra las siguientes líneas del informe que citamos a continuación:

“Yo he visto en pleno día sacar los excrementos en cubos para verterlos en sumideros que ellos llaman carros. Yo he oído pedir cajones vacíos de dinamita para que hicieran de cuna a los hijos de los mineros. Yo he presenciado jornadas en contramina de más de dieciseis horas, jornadas pedidas por los obreros y concedidas por la empresa con la complicidad de la Delegación de Trabajo, porque los salarios son insuficientes para lograr una vida moral y digna. Yo he visto a los obreros salir de Nerva para Río-Tinto (a 5 km.) a las seis de la mañana y tener que esperar dos horas antes de entrar al trabajo, porque el horario de los trenes se ajusta a la conveniencia de la empresa sin tener en cuenta las necesidades humanas...Durante seis horas he padecido en algunas galerías del interior y en la misma función temperaturas infernales, superiores a los sesenta grados y agravadas por gases atosigantes, sin que la reglamentación mencione siquiera los trabajos penosos, tóxicos y peligrosos. He oído en Tharsis renegar a los obreros de la triste suerte de sus hijos, porque más de doscientos no tienen cabida en las escuelas. Y he oído a los médicos prever el peligro de una epidemia general por el amontonamiento de las personas, que han habilitado incluso corrales y lavaderos de la empresa para vivir...”<sup>309</sup>

Todo ello tenía una solución relativamente realizable de haber existido voluntad política por parte de las autoridades políticas para poner coto a la situación, ocupándose de obligar a las empresas para que tomaran las debidas medidas preventivas. Y es que a mediados de los años cincuenta los mineros andaluces estaban en el más absoluto de los abandonos por las autoridades en cuanto a medidas de sanidad e higiene laboral se refiere.<sup>310</sup> Para ello había de empezar a extender el uso de martilleros de inyección de agua, siendo refractarias las empresas a su uso por sus elevados costes,<sup>311</sup> que frenasen la incidencia del polvo sobre los pulmones de los mineros, para lo cual no servía eficazmente la careta marca “clora universal,” que aprobada por el ministerio de Trabajo, era rechazada por el trabajador pues dificultaba la respiración

generándole más cansancio e imposibilitando su trabajo. Este era el motivo de que los mineros despreciaran por su parte las más elementales formas de higiene y seguridad respirando sistemáticamente el nocivo polvo, dado que la respiración por ellas se hacía muy penosa y cuando los obreros martilleros y chaveteros se las quitaban (suponiendo que se las pusiesen) para descansar, el polvo al posarse caía dentro de la careta, y al ponérsela de nuevo aspiraban dosis masivas de sílice.

Otros métodos para evitar la muerte anunciada de aquellos mineros eran de sobra conocidos y consistían en la utilización de procedimientos de perforación con humedad, en seco o en el uso de aparatos con el fin de medir la densidad del polvo. En el primero de los casos se procedía a la supresión del polvo mediante la inyección de agua en la veta a través del uso de barrenas helicoidales huecas. Otro sistema consistía en pulverizar agua con rociadores o pulverizadores mixtos que cortaban el polvo de las voladuras de los frentes. Estas medidas eran utilizadas con profusión en Francia, Alemania y Bélgica.

Si algo resultaba evidente para los mineros españoles de mediados de los cincuenta era que sólo la conflictividad laboral podía reportarles conquistas ante el régimen. En la zona de Linares-La Carolina prácticamente no se había construido ninguna vivienda para mineros, mientras que a la altura de 1955 en Asturias se habían construido aproximadamente unas 10.000, por lo cual la llama de los denominados "partidos izquierdistas" seguía prendida entre los mineros andaluces con la consiguiente preocupación de las autoridades del régimen, temerosas de cualquier posible estallido social fruto de la postergación y el abandono a que se veían sometidos.

El abandono efectivo de los mineros españoles proseguía con la violación sistemática de preceptos legales nacidos de las propias autoridades que consentían la ausencia de su aplicación. Así, por ejemplo, el artículo 73 del reglamento de 19 de julio de 1949 afirmaba que tenían la consideración de incapacitados temporales, a efectos de la asistencia e indemnización, los trabajadores en los cuales se estuviera estudiando si padecían o no silicosis. Este período, que no podía exceder de tres meses, daba derecho al obrero a percibir el 75 % del salario a cargo de la empresa en que se encontrara trabajando. Pues bien "...este período de diagnóstico no existe, puesto que los productores afectados de silicosis en grado indemnizable, inexplicablemente, durante la tramitación del expediente...continúan prestando sus servicios en su habitual trabajo, hasta que se les concedía aquella, y como quiera que en la sustanciación del mencionado expediente, por regla general, suele tardarse dos o tres meses, el padecimiento del obrero...viene a agravarse...",<sup>312</sup> lo cual sólo podía ser explicado por el egoísmo inhumano y desmedido de la empresa y por el desdén de las autoridades. A ello se añadía que, una vez reconocido y diagnosticado como silicótico en el dispensario (dependiente del Patronato Nacional de Defensa Sanitaria en la Industria), el minero había de esperar a que la otra junta (la

administrativa, dependiente del seguro de enfermedades profesionales) le reconociese como tal. Entre uno y otro control podían pasar varios meses, tiempo durante el cual el trabajador seguía prestando sus servicios a la empresa.

Y todo ello sin contar la situación de abandono en que quedaban la mayoría de los trabajadores enfermos de silicosis. Por ejemplo, el sanatorio para silicóticos proyectado en Jaén ya en el año 1943 estaba sin construir a la altura del año 1955. Y siguiendo con los ejemplos, al contrario de lo que pudiera pensarse, la silicosis de primer grado no era considerada como accidente de trabajo con pérdida parcial de capacidad laboral tal y como determinaba la Ley de Accidentes del Trabajo en la Industria. Ésto le daba derecho a la percepción de una pensión vitalicia equivalente al 37,5 % del salario, pero pudiendo prestar sus servicios en cualquier otra clase de trabajo fuera de la minería, percibiendo en este caso un jornal distinto al del resto de los trabajadores con capacidad normal pero que completara el anterior. Esa sería la forma que habría de evitar que fueran rechazados por otras empresas pues la última que lo contratase habría de hacerse cargo de la indemnización a su muerte. De igual manera los trabajadores en esta situación que se encontrasen en paro perdían los beneficios que concedía el seguro de enfermedad.

Todo ello (y era esto lo que más preocupaba a las autoridades) generaba un ambiente de desasosiego y el descorazonamiento de una población minera que comenzaba a pensar en el conflicto abierto contra el régimen por la lamentable situación en que se encontraban<sup>313</sup> por culpa de las autoridades y de un mundo empresarial absolutamente reacio a cualquier fórmula que, incidiendo en los costes de producción, pudiera influir positivamente en la seguridad e higiene laboral de sus empleados.<sup>314</sup> Este descontento se fundaba básicamente en tres aspectos:

“...se hizo constar la personal comprobación del gran desaliento y malestar existente entre los mineros, que puede resumirse en tres causas fundamentales: salarios muy bajos en la antigua reglamentación de minas de plomo, agobiante escasez de viviendas y la más grave de todas está constituida por las desfavorables condiciones en que se realiza el trabajo, y que ocasiona terribles índices de morbilidad y mortalidad entre los mineros por silicosis.”<sup>315</sup>

La patética situación que vivían los mineros del sur era reflejada en las mismas visitas oficiales a dichas minas:

“No existen frases suficientemente patéticas para describir con fidelidad la triste suerte del minero, del trabajador de la mina del Sur y del Levante español. Algo indefinible, angustioso y agresivo, flota en el ambiente de las cuencas mineras.



Vidas sin proyectos taradas desde la infancia, sin posible deserción de sus destinos. vidas sombrías, vidas oscuras, en la profundidad de las minas y en la profundidad de las almas. Epilépticos morales, a los que el dolor les ha despojado de toda sensibilidad ajena a su propia tragedia.”<sup>316</sup>

Se palpaba en la realidad laboral de estas minas que las instituciones creadas por el franquismo para surtir sus necesidades estaban muertas, que las soluciones propuestas (únicamente) eran verdaderamente intrincadas y que las normas promulgadas para tales fines resultaban insuficientes e ineficaces para resolver su situación. Es decir, la nota característica era la pasividad de las autoridades y, en casos concretos, la negativa del mundo empresarial a corresponsabilizarse de un crédito de 10 millones de pts. con el fin de mejorar el caduco instrumental de sus minas.

La silicosis, que había hecho su aparición masiva con la mecanización de las minas y en función de la extracción violenta y masiva del mineral que originaban las atmósferas pulvígenas, tenía su solución en la eliminación del polvo, lo cual suponía dotar a las minas de una adecuada ventilación. En definitiva, de ventiladores automáticos modernos cuando la existencia de los pozos o chimeneas fuera escasa o la profundidad elevada. Tal era el caso de las minas jienenses. Era sorprendente el hecho de que, conociendo que el martillo de absorción era un medio apropiado para luchar contra la silicosis, su uso se restringiera prácticamente a las minas del Rif en función del coste (alrededor de las 38.000 pts.) y de su prematuro desgaste. Ese era el principal problema que retraía a las empresas para la adquisición de dichos materiales pese al inhumano hecho de que en minas como las de Sierra Almagrera y en Rodalquívir existiese la constatación médica sistemática de que la vida de un martillero se desarrollaba de forma sana durante un período que oscilaba entre los tres y los ocho años, lo cual podía dejar a los mineros sin ninguna garantía sobre su salud en la medida en que “muchas empresas mineras no se hallaban incluídas dentro del Seguro de Enfermedades Profesionales.”<sup>317</sup> Y es que antes incluso que el desarrollo de nuevas formas de protección para los mineros de lo que verdaderamente se trataba era de que la ley fuera cumplida por los empresarios y que, en caso contrario, la voluntad de hacerla cumplir llevara a las autoridades a aplicar de forma efectiva dicha ley.<sup>318</sup>

Esta situación de los mineros de Jaén e inmediaciones era más o menos idéntica a la que sufrían los mineros de Andalucía Oriental y Levante, sobre todo en las minas metálicas.<sup>319</sup> Ello fue lo que obligó a las autoridades del régimen a buscar modelos en el exterior en los cuales fundamentar la solución de un problema para el que, por otro lado, ya se conocía la solución.<sup>320</sup>

Por último, habría que decir que la silicosis no era únicamente una enfermedad de los mineros. Afectaba a todas aquellas labores en las que se encontrara en suspensión polvo silíceo. Por ejemplo, en canteras, obras públicas, industrias de cerámica, fundiciones y, sobre todo, en trabajos de perforación, trituración, clasificación y manipulación de materiales que contuviesen sílice. La presión más efectiva sobre el ministerio de Trabajo provenía de la Confederación Nacional de Entidades de Previsión Social. Concretamente esta confederación elevó el 5 de octubre de 1950 un informe a la Dirección Técnica del ministerio de Trabajo (con el apoyo de esta última instancia)<sup>321</sup> con el objetivo de dar solución a los quebrantos económicos que le suponía la silicosis en canterías, perforaciones de túneles, minas no aseguradas, etc. Se pretendía establecer un modelo de aseguramiento análogo al sistema de cobertura de riesgos catastróficos y el establecimiento de un régimen económico de capitalización para las pólizas de este tipo de seguro. Se pretendía incluir dentro del seguro a las minas de naturaleza metálica (hierro, zinc, estaño, antimonio, wolframio...), a las explotaciones de tierras y piedras industriales (perforación de túneles, tributación de piedras, etc.) y a la industria del vidrio y del cemento. Probablemente el factor que más condicionaba la pasividad del ministerio de Trabajo ante estas demandas fue el sistema de beneficios que había establecido y los ingentes problemas económicos que podría acarrear la ampliación del campo de aplicación del seguro. En definitiva, en todo aquello en que existiera un alto grado de mecanización. "Seguramente por eso, porque la mecanización ha sido frenada en España por nuestro lamentable atraso industrial, la silicosis no ha representado hasta ahora en nuestra Patria el terrible problema que en otros países,"<sup>322</sup> afirmaba el informe elaborado por la comisión encargada de estudiar este problema sanitario.

En cualquiera de los casos la ineficaz lucha contra la silicosis se puso de manifiesto en la necesidad de crear a mediados de 1957 una comisión interministerial para el estudio de las medidas oportunas de cara a la prevención y reparación de la silicosis en áreas especialmente afectadas por dicho mal como las minas de plomo de Linares y la Carolina.<sup>323</sup> Sobre ello hay que tener en cuenta que la principal estrategia de protección para el trabajador se centraba en el uso de la máscara protectora en auge desde el final de la I Guerra Mundial como aplicación para la paz de los conocimientos adquiridos en la guerra. Pese a ello, como se ha mencionado, su efectividad para la inhalación continuada ofrecía problemas hasta el punto de considerarse absurda su utilización en beneficio del saneamiento del ambiente. "Debemos insistir en que la máscara no es hoy, ni mucho menos, un ideal preventivo,"<sup>324</sup> afirmaba Dantín Gallego porque producía más perjuicios que beneficios dado que, debido a su incomodidad en el trabajo, disminuía la resistencia respiratoria del minero, producía un calor difícilmente soportable y, en definitiva, en gran número de empleos su utilización era prácticamente imposible.<sup>325</sup> Así pues, las alternativas se centraban en los aspiradores de polvo, en la humedad en la zona de labores con uso de aspiradores que evitaran la existencia masiva de vapor de agua o el martillo

neumático húmedo pese a lo cual la lucha contra las partículas de anhídrido silícico resultan prácticamente inoperantes.

### Notas

- <sup>1</sup> Ucelay Repollés, Mariano: Previsión y seguros sociales. Madrid, Gráficas González, 1955, pág. 269-270.
- <sup>2</sup> Aranzadi, op. cit., 2097/1942. De esta forma calificaba Franco el S.O.E.: "...el Seguro obligatorio de enfermedad, que constituye la mejora más notable en la asistencia de las clases trabajadoras y el adelanto más importante que haya sufrido jamás la sanidad española, y muchos otras obras de asistencia social, aprendizaje y artesanía, que escapan a esta somera relación de hechos. Franco: Discurso ante el Consejo Nacional, septiembre de 1943. RT, núm. 47, vol. 2, 1943, pág. 695.
- <sup>3</sup> Ídem, 1535/1943.
- <sup>4</sup> Aznar, Severino: Los peligros del seguro de enfermedad y su inspección sanitario. RESS, núm. 12, vol. 2, 1948, pág. 2.455.
- <sup>5</sup> Dr. Benítez Franco: El seguro de enfermedad y la lucha antituberculosa. RT, núm. 31, vol. 1, 1942, pág. 480.
- <sup>6</sup> De la Fuente Chaos, A.: Concepto nacional-sindicalista de la Medicina del Trabajo. BIINP, núm. 3, vol. 1, 1943, pág. 1.
- <sup>7</sup> Nuevo seguro social. BIINP, núm. 12, vol. 1, 1942, pág. 4.
- <sup>8</sup> L. Teijeiro, Leopoldo: El seguro de Enfermedad. RT, núm. 11-12, vol. 2, 1945, pág. 245.
- <sup>9</sup> Jordana de Pozas, Luis: Características del seguro español de enfermedad. Madrid, I.N.P., 1944. También en BIINP núm. 5, vol. 1, de 1944, pág. 4. (Conferencia pronunciada en el Círculo de la Unión Mercantil de Madrid, el 20 de mayo de 1944).
- <sup>10</sup> A.P.G.; S.G.A.; Leg. 17, nº 2.
- <sup>11</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 119.
- <sup>12</sup> Girón de Velasco, J. A.: Ante una ofensiva nacional. El Seguro de Enfermedad visto por quienes lo crean y organizan (discurso). Madrid, I.N.P., 1944. Girón, 30 de abril de 1944, pág. 7.
- <sup>13</sup> Girón de Velasco, José Antonio: La futura empresa de los Seguros sociales. Madrid, I.N.P., 1943. Discurso pronunciado el jueves, 4 de febrero de 1943 en el salón de Consejos en el acto de toma de posesión de la Presidencia del Consejo del I.N.P., pág. 23.
- <sup>14</sup> Ley de Jefatura del Estado de 14 de diciembre de 1942. B.O.E. de 27 de diciembre, Aranzadi 2.097.
- <sup>15</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 120.
- <sup>16</sup> Ídem, pág. 120 y 149.
- <sup>17</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 176.
- <sup>18</sup> Datos tomados del estudio de Martín López, Enrique: El cambio social durante el régimen de Franco. Madrid, Actas, 1993, pág. 162.
- <sup>19</sup> De la Cámara, Juan Pedro: El seguro de enfermedad y su tiempo. R.E.S.S., núm. 5-6, 1954.
- <sup>20</sup> Datos asistenciales del Seguros Obligatorio de Enfermedad correspondientes a la Provincia de Ciudad Real. Ciudad Real, ministerio de Trabajo, 1959, pág. 233.
- <sup>21</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., 110.
- <sup>22</sup> Ucelay, Previsión y seguros sociales..., op. cit., pág. 282.
- <sup>23</sup> Aranzadi, op. cit., 1097/1942.
- <sup>24</sup> Melas, La familia ante los Seguros Sociales..., op. cit., pág. 151.
- <sup>25</sup> Ídem.
- <sup>26</sup> Bikkal, Dénes: La seguridad social en España. RISS, núm. 3, 1954, pág. 412.
- <sup>27</sup> Evidentemente lo adecuado sería referirse únicamente a la promulgación de la ley.
- <sup>28</sup> Aranzadi, op. cit., 230/1938.
- <sup>29</sup> Bosch Marín, Juan: Asistencia médico-social en Madrid. Madrid, ministerio de Gobernación, 1948, pág. 3-4.
- <sup>30</sup> Ídem, pág. 3-4.
- <sup>31</sup> Ante una ofensiva nacional..., op. cit., pág. 10.
- <sup>32</sup> Sánchez, Adrian: La medicina en el seguro social de enfermedad. Madrid, I.N.P., 1945, pág. 6.
- <sup>33</sup> Girón de Velasco: La colaboración en el seguro de enfermedad. RT, n 1, vol. 1, 1944, pág. 10. En torno a esta cuestión afirmaba Serrano Guirado lo siguiente: "La salud es necesaria para la paz, que es el supuesto básico para la prosperidad de los pueblos...Las enfermedades hacen nacer la desesperación y la miseria, que en el orden político son desorden y anarquía; es necesario para la seguridad hacer disminuir, por los

medios precisos, la clase de los descontentos. La potencialidad política y económica está cercenada fundamentalmente por los fenómenos morbosos." Serrano Guirado, *El Seguro de Enfermedad...*, op. cit., pág. 26-27.

<sup>34</sup> González Posada, Carlos: Los seguros sociales obligatorios en España. Madrid, Revista de Derecho Privado, 1949, pág. 320.

<sup>35</sup> L. Teijeiro, *El seguro de Enfermedad...*, op. cit., pág. 244.

<sup>36</sup> Aznar, Los peligros del seguro de enfermedad..., op. cit., pág. 5-15.

<sup>37</sup> Rememorando discurso de Franco ante el I.N.P., Jordana de Pozas, *Características del seguro español...*, op. cit., pág. 15.

<sup>38</sup> Vallejo Nagera, A.: Necesidad de una política biológica racial. Boletín del Consejo General de los Colegios Médicos de España, núm. 8, noviembre de 1940, pág. 2-3.

<sup>39</sup> Ídem, pág. 2-3.

<sup>40</sup> Ídem, pág. 2-3.

<sup>41</sup> Girón, *La colaboración en el seguro de enfermedad...*, op. cit., pág. 3.

<sup>42</sup> González Posada, *Los seguros sociales...*, op. cit., pág. 327-329.

<sup>43</sup> Bosch Marín, Juan: Como ha resuelto la Italia de Mussolini el problema demográfico. Madrid, ministerio de Gobernación, 1942, pág. 16.

<sup>44</sup> Girón: Seguro de enfermedad. RT, núm. 1, vol. 1, 1943, pág. 3.

<sup>45</sup> G. Pinedo, *La función político-social...*, op. cit., pág. 782.

<sup>46</sup> Ídem, pág. 783.

<sup>47</sup> Lamas, Francisco: Coordinación sanitaria del seguro de enfermedad con el mutualismo y la beneficencia. RESS, núm. 9, vol. 2, 1950, pág. 1.393.

<sup>48</sup> Proyecto de orden de 28 de abril de 1953 sobre información entre los asegurados en el seguro de enfermedad sobre sistema de servicios de farmacia. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/225.

<sup>49</sup> Serrano Guirado, Enrique: El Seguro de Enfermedad y sus problemas. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1950, pág. 284. En este mismo sentido el Consejo Económico Sindical de Vizcaya ponía de manifiesto que el problema fundamental del S.O.E. era "el de la prestaciones farmacéuticas, en progresión siempre creciente, apenas detenido circunstancialmente por medidas que no han logrado resolverlo en su esencia." Consejo Económico Sindical de Vizcaya; Bilbao, 12-16 junio 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 45.02.

<sup>50</sup> Revista Española de Seguridad Social.

<sup>51</sup> Aznar, Los peligros del seguro..., op. cit., pág. 2.475.

<sup>52</sup> Jefatura Nacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad, 21 de marzo de 1955. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, 209.

<sup>53</sup> Informes reservados de la C.N.S. de Huelva, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/213.

<sup>54</sup> Pisani Ricci, Rómulo: La experiencia sanitaria del Seguro social en España y la evolución económico-social de Venezuela. Madrid, OISS, 1953, pág. 60.

<sup>55</sup> B.O.E. del 26 de noviembre (nº 331), Aranzadi nº 1.611.

<sup>56</sup> Jordana de Pozas, *Características del seguro español...*, op. cit., pág. 9.

<sup>57</sup> En lo referente a la indemnización económica el período requerido se extendía a 26 semanas.

<sup>58</sup> Aranzadi, op. cit., 1611/1944.

<sup>59</sup> Servicios Sindicales del Seguro de Enfermedad.

<sup>60</sup> Girón de Velasco, *Escritos...*, Tomo I, op. cit., pág. 123-125.

<sup>61</sup> Ídem, pág. 42-44.

<sup>62</sup> Beveridge, *Seguros sociales...*, op. cit., pág. 9.

<sup>63</sup> Ídem, pág. 10.

<sup>64</sup> Ídem, pág. 83.

<sup>65</sup> Roseña, *Los regímenes de asignaciones familiares...*, op. cit., pág. 33.

<sup>66</sup> De la Riva Labarta, Ángel M.: La madre en el concepto universal de ginecología. Revista del Seguro de Enfermedad, julio de 1954, nº 4, pág. 16.

<sup>67</sup> Ídem, pág. 17.

<sup>68</sup> De la Riva Labarta, Ángel M.: Pragmatismo de la Sanidad Social en maternología. Revista del Seguro de Enfermedad, nov. de 1955, nº 20, pág. 15.

<sup>69</sup> Pamilla, *Protección del niño...*, op. cit., pág. 47.

<sup>70</sup> Melas, *La familia...*, op. cit., pág. 155.

<sup>71</sup> Girón, *Escritos...*, op. cit., pág. 42-44.

<sup>72</sup> En el II Congreso Nacional de los Trabajadores se ponía de manifiesto la ausencia o la inadecuación de las pocas instalaciones dedicadas a fines maternos en las zonas rurales de España. II Congreso Nacional

de Trabajadores. Conclusiones. Delegación Nacional de Sindicatos; Vicesecretaría Nacional de Ordenación Social, 1951. A.G.A.; I.D.D. 136.01, S.S.; 3.388.

<sup>73</sup> Ídem.

<sup>74</sup> El preámbulo de dicha ley es ilustrativo del carácter natalista de la misma y de otras disposiciones creadas para tal fin: "En el desarrollo de la política nacional de protección familiar, destaca por su importancia la legislación relativa al Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares. Merced a su aplicación resultan mejoradas las condiciones económicas del hogar en atención a los hijos de los trabajadores, se favorece la constitución de nuevos núcleos familiares en el régimen de préstamos nupciales, se premian como actos de ciudadanía ejemplar los casos de fecundidad en el matrimonio y, finalmente se atiende, al fallecimiento de sus asegurados, a sus viudas y huérfanos." Aranzadi, 1.027. El subrayado es nuestro

<sup>75</sup> Perpiñá Rodríguez, Antonio: El sujeto protegido por las leyes de previsión social. Conceptualismo jurídico y finalidad social. BIINP, núm. 7-8, vol. 2, 1945, pág. 1.320.

<sup>76</sup> El precedente directo de este seguro fue el subsidio de maternidad establecido el 23 de agosto de 1923. Dicho subsidio preveía el derecho a un mes de descanso antes del paro y seis semanas después del mismo conservando su puesto de trabajo y pudiendo descansar dos veces al día, durante media hora, para alimentar a su hijo. Aparte se le reconocía el derecho a la asistencia médica. Ley de sanidad infantil y maternal. RT núm. 9, 1941, pág. 11.

<sup>77</sup> Searle, José Antonio: Periodo de descanso y prestaciones económicas de las embarazadas. RESS, núm. 12, vol. 2, 1947, pág. 1.067.

<sup>78</sup> Melas, La familia..., op. cit., 156.

<sup>79</sup> González Posada, Los seguros sociales..., op. cit., pág. 214.

<sup>80</sup> B.O.E. del 18 de julio.

<sup>81</sup> Ley de sanidad infantil y maternal..., op. cit., pág. 11.

<sup>82</sup> El Decreto de 6 de diciembre de 1941 había elevado a 9.000 pts. el tope para estar incluido en el seguro de maternidad.

<sup>83</sup> Bosch Marín, Juan: Seguro de Maternidad. BIINP, núm. 8-9, vol. 2, 1942, pág. 12.

<sup>84</sup> Decreto de 9 de julio de 1948. Aranzadi, 956. Este decreto suponía la extinción de la Obra Maternal e Infantil del I.N.P.

<sup>85</sup> Jefatura Nacional del S.O.E. de España: Organización de la prestaciones médicas en los Seguros Sociales. RISS, núm. 6-7, vol. 1, 1951, pág. 913. También en Girón, Orientaciones sociales..., op. cit., pág. 1.310.

<sup>86</sup> Ídem, pág. 87.

<sup>87</sup> De la Riva Labarta, Pragmatismo de la Sanidad..., op. cit., pág. 15.

<sup>88</sup> Leal Ramos, El seguro de maternidad..., op. cit., pág. 1.

<sup>89</sup> Ídem, pág. 1.

<sup>90</sup> Aranzadi, op. cit., 1611/1942.

<sup>91</sup> Beveridge, Seguros sociales..., op. cit., pág. 83.

<sup>92</sup> Anuario del Instituto Nacional de Previsión, 1946-47. Madrid, I.N.P., 1947, pág. 299-300.

<sup>93</sup> M. de la Riva, La madre..., op. cit., pág. 17.

<sup>94</sup> Bosch Marín, Juan: Maternidad, infancia y seguridad social. Revista del Seguro de Enfermedad, ag./sept. de 1954, nº 5/6, pág. 33.

<sup>95</sup> Ídem.

<sup>96</sup> Leal Ramos, El seguro de maternidad..., op. cit., pág. 8.

<sup>97</sup> Ídem, pág. 35.

<sup>98</sup> Bosch Marín, Juan: Asistencia ticológica prestada por el S.O.E. durante el año 1955. Revista del Seguro de Enfermedad, junio de 1956, nº 27, pág. 4-5.

<sup>99</sup> De la Riva, Pragmatismo de la Seguridad..., op. cit., pág. 17.

<sup>100</sup> Ídem.

<sup>101</sup> Ídem.

<sup>102</sup> Perpiñá Rodríguez, El sujeto protegido..., op. cit., pág. 1.320.

<sup>103</sup> Girón: Seguro de enfermedad. RT núm. 1, vol. 1, 1943, pág. 5.

<sup>104</sup> Díaz Martín, Julio Antonio: Estudio comparativo del Seguro de Enfermedad. RESS, núm. 4, vol. 2, 1949, pág. 869.

<sup>105</sup> Jordana de Pozas, Características del seguro..., op. cit., pág. 8.

<sup>106</sup> Ídem, pág. 14-15.

<sup>107</sup> Martínez Blasco, Nicolás: Nuevo avance en el Seguro obligatorio de enfermedad. RT, núm. 3, 1946, pág. 264.

- <sup>108</sup> Informe sobre la explotación de las instalaciones sanitarias del Seguro Obligatorio de Enfermedad. Madrid, I.N.P., 1959, pág. 10.
- <sup>109</sup> Boletín informativo del I.N.P., 14 de junio de 1953, núm. 8.
- <sup>110</sup> Boletín informativo del I.N.P., 14 de junio de 1953, núm. 8.
- <sup>111</sup> Alonso Olea, *Instituciones de Seguridad Social...*, op. cit., pág. 162.
- <sup>112</sup> A.P.G.; S.G.A.; Leg. 16, nº 4.
- <sup>113</sup> I Congreso Nacional de Trabajadores. Conclusiones. Delegación Nacional de Sindicatos; Vicesecretaría Nacional de Ordenación Social, 1946. A.G.A.; I.D.D. 136.01, S.S.; 3.393, pág. 66. En este congreso también se pondría de manifiesto el malestar de algunos componentes de la organización sindical por lo insuficiente de las prestaciones, por el hecho de que el seguro no amparara a los trabajadores sexagenarios, por la ausencia de libertad en la elección del médico, por la falta de dotación de los médicos rurales o por las dificultades que ponía el seguro para atender a los tuberculosos o por la no inclusión en el mismo de los servidores domésticos. Hay que añadir a lo dicho que la pérdida de fuerza del falangismo y de los elementos sindicales se plasma en la repetición mimética de demandas realizadas al ministerio de Trabajo en los siguientes congresos de los trabajadores. Concretamente las peticiones (en lo referente al seguro de enfermedad) realizadas por la Comisión 4ª del II Congreso Nacional de los Trabajadores celebrado en 1951 repite prácticamente lo mismo que la 6ª del I Congreso celebrado en 1948, lo que nos sirve para cuantificar la influencia que dichos congresos y la Delegación Nacional de Sindicatos a través de la Vicesecretaría Nacional de Ordenación Social podían tener en el diseño efectivo de las política ejecutadas. Bajo nuestro punto de vista, muy escasa. II Congreso Nacional de Trabajadores. Conclusiones. Delegación Nacional de Sindicatos; Vicesecretaría Nacional de Ordenación Social, 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.388.
- <sup>114</sup> Ídem, pág. 65.
- <sup>115</sup> Jefatura Nacional del S.O.E. de España: Organización de las prestaciones médicas en los Seguros sociales: Seguro Social de Enfermedad. RISS, núm. 6-7, vol. 1, 1951, pág. 959-960.
- <sup>116</sup> Parte reservado de la C.N.S. de Oviedo, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 90.02, r/214. Parece que este fenómeno tuvo que tener una cierta relevancia a nivel nacional a finales de 1951 al aparecer repetidamente este tipo de referencias: "A pesar de las numerosas correspondencias de esta provincia que en la actualidad rebasan el número de doscientas, y pendientes de creación otras tres más, la gestión económica de pagos y devoluciones, se ha realizado durante el mes que ha transcurrido con toda normalidad, si bien es verdad no ha seguido la norma del año pasado, de quedar abonados el mes de la fecha a todos los subsidios pendientes, pero naturalmente esto escapa de los medios de esta Jefatura y de sus correspondencias, siendo el organismo ejecutor la Delegación Provincial del I.N.P., que por causas que se ignoran adeuda a la mayor parte de los pueblos de la provincia los subsidios de los meses de octubre y noviembre, amén del de diciembre, en trámite aún de bastanteo..." Parte reservado de la C.N.S. de Valladolid, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/214.
- En esta línea el I Consejo Económico Sindical de Orense organizado por F.E.T. y de las J.O.N.S. en junio de 1954 especificaba en su XIV ponencia la necesidad de perfeccionar el S.O.E. como paso previo a la ampliación de su campo de aplicación poniendo así cortápisas a la llegada de sus beneficios a los sectores más necesitados de él, especialmente el campo español. I Consejo Económico Sindical de Orense. F.E.T. de las J.O.N.S. Conclusiones. Junio de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 45.02, 1.
- <sup>117</sup> Girón, *El seguro de enfermedad...*, op. cit., pág. 549.
- <sup>118</sup> Decreto de 12 de febrero de 1954. A.P.G.; S.G.A.; leg. 18, nº 1.
- <sup>119</sup> Proyecto de 7 de enero de 1954. A.P.G.; S.G.A.; leg. 18, nº 1.
- <sup>120</sup> Conferencia pronunciada en Vigo el día 20 de septiembre de 1957 en el XV curso universitario de verano por el presidente del I.N.P., Francisco Labadie Otermin. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/331. Téngase en cuenta que utilizando cifras oficiales extraídas del Anuario Estadístico de España la cifra de beneficiarios no llega a los 9,9 millones. Anuario Estadístico de España, 1962, pág. 284.
- <sup>121</sup> Ideas que sugiere la lectura del informe de estadística económica del S.O.E. (1954-1957), 29 de septiembre de 1959. Fue elaborado por el actuario Juan Serra Perpiña. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.375.
- <sup>122</sup> Consideraciones actuales sobre el seguro de enfermedad. R.S.S., núm. 20, 1955, pág. 4.
- <sup>123</sup> Girón, *Orientaciones sociales del Gobierno...*, op. cit., pág. 1.322.
- <sup>124</sup> "Con las prestaciones económicas protege a más de 6 millones de obreros, empleados y agrícolas autónomos; pero en las prestaciones sanitarias, a muchos más, a más de 15 millones." Aznar, *Los peligros del seguro...*, op. cit., pág. 7-8.
- <sup>125</sup> Martí Buñill, *Presente y futuro del seguro...*, op. cit., pág. 162-163.
- <sup>126</sup> Dr. Benítez, *El seguro de enfermedad...*, op. cit., pág. 484.

<sup>127</sup> Serrano Guirado, *El Seguro de Enfermedad...*, op. cit., pág. 99.

<sup>128</sup> A.P.G.; J.E.; Leg. 59, nº 2.

<sup>129</sup> Sobre el motivo de que el sistema escogido fuera éste Serrano Guirado argumenta en dicho sentido: "Las propias necesidades económicas del seguro no permiten el régimen de capitalización porque o la prima habría de ser tan elevada que no pudiera soportarse o las prestaciones no podrían ser efectivas hasta transcurrido un largo período; la eventualidad del riesgo no aconseja la acumulación de excesivos fondos ni que éstos fueran inferiores a las posibles necesidades normales. Todo ello abona que el sistema consagrado en el Seguro Social de enfermedad haya sido el llamado de reparto simple." Serrano Guirado, Enrique: *El Seguro de Enfermedad y sus problemas*. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1950, pág. 375-376.

<sup>130</sup> A.P.G.; S.G.A.; Leg. 17, nº 1.

<sup>131</sup> Nota sobre los servicios sindicales del seguro de enfermedad (año 1953). A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 2.334-I.

<sup>132</sup> Informe de la Jefatura Nacional de la O. S. 18 julio elevado a la D.N.S., 25 de febrero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.375.

<sup>133</sup> Aznar Embid, Severino: *Las fronteras de los seguros sociales*. Madrid, I.N.P., 1942, pág. 16.

<sup>134</sup> Girón, *Seguro de enfermedad...*, op. cit., pág. 3.

<sup>135</sup> Ídem.

<sup>136</sup> Correspondencia de la Vicesecretaría Nacional de Ordenación Administrativa (Roque Pro Alfonso) a la D.N.S., 25 de enero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.375.

<sup>137</sup> Servicios Sindicales del Seguro de Enfermedad. Memoria, balance de situación, cuenta de resultados y anexos correspondiente al ejercicio 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 29.01, L-1.096.

<sup>138</sup> Sesión del Consejo del I.N.P. llevada a cabo el 30 de noviembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/173.

<sup>139</sup> Memoria del balance técnico general del I.N.P. correspondiente al ejercicio de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02 R/237, 97-7ª.

<sup>140</sup> Ministerio de Trabajo. I.N.P. Dirección de Seguros y Subsidios Unificados. Dirección de Asistencia Sanitaria e Instalaciones del Seguro de Enfermedad. Memoria del Balance del S.O.E. gestionado directamente por el I.N.P., correspondiente al ejercicio de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/292, nº 9 (7-7ª).

<sup>141</sup> Informe que se emite por la Dirección de Asistencia Sanitaria en relación con el oficio de la Presidencia del Instituto de fecha de 10 de agosto de 1951, Madrid, 19 de septiembre de 1951. A.G.A.; I.D.D. 90.02; S.S.; r/173.

<sup>142</sup> Con base 100 en 1959.

<sup>143</sup> Informe que se emite por la Dirección de Asistencia Sanitaria...Madrid, 19 de septiembre de 1951, op. cit., pág. 3-4.

<sup>144</sup> Ídem, pág. 4-5.

<sup>145</sup> Ídem, pág. 6.

<sup>146</sup> De acuerdo a la Orden de 19 de febrero de 1946.

<sup>147</sup> Informe que se emite por la Dirección de Asistencia Sanitaria...Madrid, 19 de septiembre de 1951, op. cit., pág. 11.

<sup>148</sup> Sobre esta cuestión puntualiza la Dirección de Asistencia Sanitaria lo siguiente: "Pero estas cifras no se refieren a todas las empresas existentes puesto que por diversas causas todavía no han sido intervenidas 100.341 empresas radicantes en pueblos. Aplicando a esta cifra el coeficiente medio de 41,80 % de empresas con liquidaciones de descubierto que ha resultado de las intervenciones hechas a otras 101.725 empresas en pueblos, nos daría como resultado probable la existencia de 41.800 empresas con liquidaciones de descubierto entre las 100.000 no intervenidas todavía.

Si aplicáramos para el primer período, el promedio de 983,66 pts. por empresa a las 41.800 empresas que nos ocupan, nos daría un importe aproximado de descubiertos en liquidaciones de 41.116.988,00 pts., que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y que en aquel primer período regía como plazo de prescripción el de tres años, podemos señalar como recaudación perdida por haber prescrito el derecho al cobro.

Si aplicamos para el segundo período el promedio de descubiertos por empresas de 1.138,57 pts. tendremos (41.800 empresas por 1.138,57 pts.) 47.592.266,00 pts. que son recuperables por no haberse cubierto el plazo de prescripción." Informe que se emite por la Dirección de Asistencia Sanitaria...19 de septiembre de 1951, op. cit., pág. 12-13.

<sup>149</sup> Ideas que sugiere la lectura del informe de estadística económica del S.O.E. (1954-1957), 29 de septiembre de 1959. Fue elaborado por el actuario Juan Serra Perpiña. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.375.

<sup>150</sup> El término público hace referencia a los asegurados directamente por el I.N.P. La referencia al semipúblico incluye los Servicios Sindicales del Seguro de Enfermedad o mutualidades como la de la siderometalúrgica de Madrid o de la minería asturiana.

<sup>151</sup> Sesión del Consejo de Administración del I.N.P. correspondiente al día 20 de diciembre de 1951, pág. 1-2. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/17.

<sup>152</sup> Informe que sobre la Memoria del Balance Técnico General del I.N.P. correspondiente al Ejercicio de 1952, emitido por la Ponencia designada a tal efecto por el Consejo de Administración el 28 de mayo de 1953 (emitido el 25 de noviembre de 1953). A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/237 97-7<sup>a</sup>.

<sup>153</sup> Para la administración del seguro existía dentro de la Caja Nacional una Subdirección Médica, una Inspección de Servicios Sanitarios y una Subdirección Administrativa. La Subdirección Médica comprendía varios departamentos: Investigación y Medicosocial, Estadística, Enseñanza, Publicaciones y Propaganda; Asistencia Médica y Personal Sanitario; Luchas Sanitarias y Medicina Preventiva; Maternidad y Puericultura; Instituciones Sanitarias y Concierto; Instalaciones, Material, Suministros y Transportes; y Farmacia. Cada uno de estos departamentos estaba integrado por varias oficinas técnicas a cuyo frente se hallaba un médico.

La Inspección de Servicios Sanitarios tenía tres departamentos: asistencia, personal y material y asuntos generales.

Por último la Subdirección Administrativa constaba de 7 departamentos: Afiliación, Cotización, Indemnización y Subsidios, Estadística, Entidades Colaboradoras, Intervención y Contabilidad y Recursos y Sanciones. Anuario del I.N.P., 1945. Madrid, I.N.P., 1946, pág. 239.

Igualmente para examinar y estudiar los problemas la Caja Nacional tenía una Junta o Comisión de Enlace con la Dirección General de Sanidad y demás organismos oficiales integrada por elementos técnicos de la caja y representaciones de la Dirección General de Sanidad, del Patronato Nacional Antituberculosos, de los Consejos Generales de los Colegios Médicos y Farmacéuticos de España y de la Dirección General de Administración Local. Sánchez, Adrián: La medicina en el seguro social de enfermedad. Madrid, I.N.P., 1945, pág. 18.

<sup>154</sup> Junto al régimen especial de los Servicios Sindicales del Seguro de Enfermedad, que había de atender preferentemente a los funcionarios de F.E.T. y de las J.O.N.S., a los de la organización sindical, a los empleados de ambos, los afiliados a la Obra Sindical 18 de julio y a los trabajadores autónomos, existían también otros regímenes especiales como el del Instituto Social de la Marina y el de los ministerios militares que comprendía a su personal civil. Serrano Guirado, El Seguro de Enfermedad..., op. cit., pág. 271-272.

<sup>155</sup> Correspondencia de la D.N.S., 2 de noviembre de 1953 (Adolfo Gómez Ruiz). A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.375.

<sup>156</sup> Ídem. El subrayado es nuestro.

<sup>157</sup> La Obra Sindical 18 de julio, 1942. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 72.08 S L-2.

<sup>158</sup> Boletín del Movimiento número 119, Orden de 1 de junio de 1944.

<sup>159</sup> Los servicios sindicales del seguro de enfermedad, s/f. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.375.

<sup>160</sup> Nuevo seguro social. BIINP, núm. 12, vol. 1, 1942, pág. 5.

<sup>161</sup> Informe del Jefe Nacional de la O. S. 18 de julio a sus jerarquías superiores, como ampliación del emitido con fecha 2 de noviembre de 1953, 9 de marzo de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.375.

<sup>162</sup> Informe sobre la misión atribuida por la Ley a la Obra Sindical 18 de julio en la aplicación del seguro de enfermedad, 18 de febrero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.375.

<sup>163</sup> Ídem.

<sup>164</sup> Decreto de 20 de julio de 1954.

<sup>165</sup> En 1952 el déficit fue de 10.388.194,97; en dicho año se calculaba en 50 millones el déficit para 1953. Su situación en este año sería grave por cuanto el subsanamiento del déficit requería de financiación extrapresupuestaria. Concretamente para el año 1953 el coste por asegurado era de 52,66 pts., lo cuales suponía que con una prima individual de 40,55 por individuo de media el déficit era de 12,11 pts. por afiliado con un total que ascendía a 55.252.980 pts. Correspondencia de la D.N.S. con el ministro Secretario del Movimiento, 26 de noviembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.375. En el informe titulado Probable situación económica en 1954 se desvela una situación similar de dichos servicios. A.G.A.; S.S.; I.D.D., 58.02, 4.375. En este informe se estima que el déficit por afiliado (30.000 aproximadamente) ascendería a 55.334.979 pts. fruto del fraude sistemático y extraordinario.



<sup>166</sup> Correspondencia de la D.N.S. con el ministro Secretario General del Movimiento, 26 de noviembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.375.

<sup>167</sup> Nota sobre los servicios sindicales del seguro de enfermedad, 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.375.

<sup>168</sup> Alonso Olea Instituciones de Seguridad Social..., op. cit., pág. 166.

<sup>169</sup> Ídem.

<sup>170</sup> Informe del Sindicato Nacional de Transportes y Comunicaciones. Memoria desde su fundación el 18 de junio de 1942 hasta el año 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 3.373, pág. 2.

<sup>171</sup> Acta de la reunión de la Junta de la Sección Social Central del Sindicato Nacional de la Construcción, el Vidrio y la Cerámica del 12 al 13 de noviembre de 1948 en Pamplona. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 3336.

<sup>172</sup> Alonso Olea, Instituciones de Seguridad Social..., op. cit.

<sup>173</sup> Bikkal, La seguridad social..., op. cit., pág. 438.

<sup>174</sup> Martínez Blasco, Nuevo Avance en el Seguro..., op. cit., pág. 263.

<sup>175</sup> Sánchez, La medicina en el seguro social..., op. cit., pág. 18-19.

<sup>176</sup> Organización de la prestaciones médicas en los Seguros sociales..., op. cit., pág. 953.

<sup>177</sup> Martí Bufill Presente y futuro..., op. cit., pág. 156-157.

<sup>178</sup> Asamblea General del I.N.P. Sección III: Diversos problemas actuales del seguro de enfermedad y de su Plan Nacional de Instalaciones. Junio de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D.; 58.02, 4.853.

<sup>179</sup> En palabras de Girón a la Obra le pertenecería la decisión sobre la ubicación de los centros del plan de instalaciones cosa que posteriormente no sucedería. Girón, Seguro de enfermedad..., op. cit., pág. 6.

<sup>180</sup> Edificios sanitarios para el Seguro de Enfermedad. Madrid, I.N.P., 1947.

<sup>181</sup> Ídem, pág. 4.

<sup>182</sup> El Consejo Económico Sindical ponía de manifiesto en 1954 una visión negativa de la evolución del plan de instalaciones: "...hemos de informar dentro del plano de honradez que preside la intención de la ponencia, que el plan de instalaciones del Seguro de Enfermedad no se ha ajustado en la mente popular a la practicada que debe presidir todo función creadora, particularmente la construcción de magníficos ambulatorios del seguro de enfermedad, en centros comarcales de limitado número de afiliados, lo que les condena a priori al cierre e incluso a su aborto sin inauguración, por resultar antieconómico su mantenimiento." Nueva orientación sobre la Seguridad social. III Pleno del Consejo Económico Sindical de Burgos, febrero de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.567.

<sup>183</sup> Inauguración del primer edificio de nueva planta del Plan Nacional de Instalaciones del Seguro de Enfermedad. Revista del Combustible, núm. 49-50, 1949.

<sup>184</sup> Hernáinz Márquez, Realizaciones de la Seguridad Social..., op. cit., pág. 16.

<sup>185</sup> Aznar, Los peligros del seguro..., op. cit., pág. 10.

<sup>186</sup> Seguro de Enfermedad. Estudio de un Plan General..., op. cit., pág. 8.

<sup>187</sup> El resultado emitido por el jurado el 1 de noviembre de 1946 fue el siguiente:

1.- Ambulatorio completo:

Desierto el primer y segundo premio. Tercer premio para Ambrosio Arroyo Alfonso. Accésits de 6.000 pts. a José Osuna Fajardo y Francisco Robles Jiménez.

2.- Residencia para 100 camas. Primer premio a Manuel Martínez. Chumillas y Luis Laorga. Segundo: Francisco Lucini Bayod. Tercero: Alfonso Fungairiño Nebot y Juan Castañón de Mena.

3.- Residencia de 500 camas. Primer premio: Aurelio Botella Enríquez y Sebastián Vilata Valls. Segundo: Fernando García Mercadal y Ramón Anibal Álvarez. Tercero: Luis Cabrera Sánchez. Tres accésits de 15.000 a Vicente Figuerola Benavent, José Marcide Odriozola y Rafael Aburto Renovales, y Antonio de la Vega Martínez.

<sup>188</sup> Ucelay, Previsión y seguros sociales..., op. cit., pág. 282.

<sup>189</sup> Plan Nacional de Instalaciones Sanitarias. Madrid, ministerio de Trabajo, 1951.

Al comenzar el funcionamiento del Plan de Instalaciones se asignó a una Asesoría Médica de Proyectos la función de efectuar el planeamiento de las edificaciones necesarias. Una vez terminado el edificio entraba en juego la Asesoría Médica de Montajes que elaboraba el pliego de necesidades para dotar al edificio de los servicios necesarios. Hecho el pliego de necesidades se remitía dicho informe al Parque Central del Seguro de Enfermedad donde se convocaba un concurso para adquirir el material. Previamente la Proveduría o Parque Central solicitaba a la Asesoría Médica de Material las características a que había de ajustarse el concurso. A su vez, existía una Junta Económica que abría los sobres donde vienen las propuestas, seleccionándolos y devolviéndolos abiertos y sellados a la Oficina Central de la Proveduría. Ésta los remite a la Asesoría Médica de Material para que los examíne y emitiese un informe relativo a las adquisiciones a realizar. En ocasiones dicho informe se complementaba con otro de expertos

ingenieros o técnicos en la materia. Estos informes se elevaban a la Proveduría donde se obtenía la aprobación de la Dirección de Asistencia Sanitaria e Instalaciones del Seguros de Enfermedad. La mencionada Proveduría tenía tres negociados:

- 1.- De adquisiciones, que intervenía en la tramitación de compras cuyas facturas posteriormente tramitaba el Departamento de Intervención.
- 2.- De existencias, que intervenía desde la entrada del material al depósito hasta la distribución en las instituciones correspondientes
- 3.- De instituciones, que se encargaba del material distribuido a los ambulatorios, hospitales, etc., hasta que ese material era dado de baja o reemplazado; efectuaba además un control permanente del artículo.
- 4.- Depósito Central, que era el almacén de todo el material comprado para ser distribuido. Cada provincia tenía su depósito provincial.

Pisani Ricci, *La experiencia sanitaria...*, op. cit., pág. 59.

<sup>190</sup> *Consignas y consideraciones políticas sobre Previsión Social. I Asamblea General del I.N.P. Madrid, ministerio de Trabajo, 1953. Discurso de Carlos Pinilla Turiño, Presidente del I.N.P. y Vicepresidente segundo de la Asamblea General, pág. 44.*

<sup>191</sup> Residencia sanitaria realizada.

<sup>192</sup> Ambulatorio completo realizado.

<sup>193</sup> Ambulatorio reducido realizado.

<sup>194</sup> Residencia sanitaria en proyecto en los próximos diez años.

<sup>195</sup> Ambulatorio completo en proyecto en los próximos diez años.

<sup>196</sup> Ambulatorio reducido en proyecto en los próximos diez años.

<sup>197</sup> Jefatura Nacional del S.O.E. de España: Organización..., op. cit.

<sup>198</sup> Informe que se emite por la Dirección de Asistencia Sanitaria en relación con el oficio de la Presidencia del Instituto de fecha de 10 de agosto de 1951, Madrid, 19 de septiembre de 1951. A.G.A.; I.D.D. 90.02; S.S.; r/173, pág. 14.

<sup>199</sup> Ídem, pág. 16.

<sup>200</sup> Jefatura Nacional del S.O.E. de España: Organización de la prestaciones médicas en los Seguros Sociales: Seguro Social de Enfermedad. RISS, núm. 6-7, vol. 1, 1951, pág. 954.

<sup>201</sup> Ídem, pág. 962-963.

<sup>202</sup> Pisani Ricci, *La experiencia sanitaria...*, op. cit., pág. 30.

<sup>203</sup> Necesidades de urgente solución. Informe de la Jefatura Provincial del Sindicato del Metal de Jaén, 13 de septiembre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 481.

<sup>204</sup> Informe general sobre la organización sindical de la provincia de Salamanca, septiembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.805.

<sup>205</sup> Informe del Jefe Nacional de la O. S. 18 de julio a sus jerarquías superiores, como ampliación del emitido con fecha 2 de noviembre de 1953, 9 de marzo de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.375.

<sup>206</sup> I Asamblea General del I.N.P. Sección III: Diversos problemas actuales del seguro de enfermedad y de su Plan Nacional de Instalaciones. Junio de 1953. A.G.A.; I.D.D.; S.S.; 58.02, 4.853.

<sup>207</sup> Puertollano, Guadalajara, La Coruña, Logroño, Santa Cruz de la Palma (Tenerife), Valencia, Catalayud.

<sup>208</sup> Pampliega (Burgos), Puertollano, El Ferrol del Caudillo, Madrid (Ruiz de Alda, Dr. Esquerdo, Modesto Lafuente, Puerta de Toledo), Bilbao, Calatayud y Trujillo.

<sup>209</sup> Puertollano (Ciudad Real), Guadalajara, Huelva, La Coruña, Logroño, Santa Cruz de la Palma (Tenerife), Teruel, Valencia y Catalayud (Zaragoza).

<sup>210</sup> Mieres (Asturias), Pampliega (Burgos), Puertollano, El Ferrol del Caudillo (La Coruña), Doctor Esquerdo, Modesto Lafuente, Puerta de Toledo y Ruiz de Alda (los 4 últimos en Madrid), Bilbao, Calatayud, Jaén, Zafra (Badajoz), Mataró (Barcelona), Trujillo, Lérida, Caspe (Zaragoza), Gerona y Tarragona.

<sup>211</sup> Alicante, Medina de Pomar (Burgos), Navalmoral de la Mata (Cáceres), Jaca, Haro (Logroño), Málaga, Barco de Valdeorras (Orense), Cervera del Río Pisuerga (Palencia), San Leonardo de Yagüe (Soria), Baracaldo (Vizcaya), Medina del Campo (Valladolid), Medina de Rioseco (Valladolid), Guernica (Vizcaya) y Sana de Langreo (Asturias).

<sup>212</sup> Vitoria, Albacete, Almería, Mieres, Palma de Mallorca, Mahón (Baleares), Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Santiago (La Coruña), Gerona, Granada, Lérida, Lugo, Málaga, Palencia, Vigo, Sevilla, Bilbao, Zamora y Zaragoza.

<sup>213</sup> Ciudadela (Baleares), Logroño, Quintana (Madrid) y Pamplona.

<sup>214</sup> Datos provisionales para el estudio del Plan de Instalaciones del seguro de enfermedad, con expresión de los centros sanitarios de la O. S. 18 de julio, valoración de sus bienes muebles y afiliación en los distintos seguros; D.N.S. marzo de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.375.

<sup>215</sup> Jefatura Nacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad, 21 de marzo de 1955. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, 209.

<sup>216</sup> Espíritu y apariencia en las Instituciones Sanitarias del S.O.E. Revista del Seguro de Enfermedad, núm. 19, 1955, pág. 2.

<sup>217</sup> Ello es el motivo de que en 1948, un año después del comienzo teórico de la segunda etapa, el I Congreso Nacional de los trabajadores solicitara la puesta en práctica de la segunda etapa del seguro. I Congreso Nacional de Trabajadores..., op. cit., pág. 65.

<sup>218</sup> Informes reservados de la C.N.S. de Huelva, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/213.

<sup>219</sup> Jefatura Nacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad, 21 de marzo de 1955. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, 209.

<sup>220</sup> Alrededor de 11.000 en el año 1944. Jefatura Nacional del S.O.E. de España: Organización de la prestaciones médicas en los Seguros Sociales: Seguro Social de Enfermedad. RISS, núm. 6-7, vol. 1, 1951, pág. 875.

<sup>221</sup> Seguro de Enfermedad. Estudio de un Plan General de instalaciones de asistencia médica. Madrid, I.N.P., 1944.

<sup>222</sup> Ídem, pág. 7.

<sup>223</sup> Ídem, pág. 8.

<sup>224</sup> Ídem, pág. 33.

<sup>225</sup> El precio o coste por cama de hacer un hospital es de 35.000 pts. para las grandes instalaciones, de 25.000 para las medianas y 20.000 para las clínicas rurales. El coste de construcción e instalaciones del plan que propone ascendía a un total 838.750.000 pts., con un tiempo de realización de 10 años.

<sup>226</sup> Seguro de Enfermedad. Estudio de un Plan..., op. cit., pág. 70.

<sup>227</sup> Informe sobre la explotación de las instalaciones sanitarias del Seguro Obligatorio de Enfermedad. Madrid, I.N.P., 1959.

<sup>228</sup> Se ha de llamar la atención sobre la cifra de población asegurada; es el total de beneficiarios del parte correspondiente al mes de mayo de 1958 del Servicio de Seguros Unificados. Frecuentemente se toma la suma de asegurados y beneficiarios, cuando, en realidad, sólo se debe tomar la segunda, pues de lo contrario resultaría que Vizcaya, por ejemplo, tendría una población asegurada de 684.820, superior a la población, que es de 617.014.

<sup>229</sup> Informe sobre la explotación de las instalaciones sanitarias..., op. cit., pág. 10.

<sup>230</sup> Informe sobre la explotación de las instalaciones sanitarias..., op. cit., pág. 18-19.

<sup>231</sup> Informe sobre la explotación de las instalaciones sanitarias..., op. cit., pág. 20.

<sup>232</sup> Eran Badajoz, Ávila, Segovia, Vizcaya, Teruel, Cáceres, Toledo, Barcelona, Guadalajara, Burgos, León, Lérida, Álava, Cuenca, Murcia, Salamanca, Guipúzcoa, Navarra, La Coruña, Pontevedra, Baleares y Palencia. Informe sobre la explotación de las instalaciones sanitarias..., op. cit., pág. 22-23.

<sup>233</sup> Entre paréntesis consta el número de horas en cada una de las provincias.

<sup>234</sup> Informe sobre la explotación de las instalaciones sanitarias..., op. cit., pág. 25.

<sup>235</sup> Informe sobre la explotación de las instalaciones sanitarias..., op. cit., pág. 28.

<sup>236</sup> Informe sobre la explotación de las instalaciones sanitarias..., op. cit., pág. 29.

<sup>237</sup> Casas Carnicero, A.: Medicina científica y Medicina actual. Revista del Seguro de Enfermedad, ag.-sept. de 1956, nº 29/30, pág. 8.

<sup>238</sup> No solamente la clase médica planteó graves problemas para la puesta en funcionamiento del seguro de enfermedad. El seguro lesionaba los intereses preexistentes de las mutualidades, montepíos y del seguro privado y ninguno de ellos abandonaría sin resistencia sus posiciones. L. Teijeiro, El seguro de Enfermedad..., op. cit., pág. 244.

<sup>239</sup> De la Cámara, El seguro de enfermedad..., op. cit., pág. 31.

<sup>240</sup> Pisani Ricci, La experiencia sanitaria..., op. cit., pág. 59.

<sup>241</sup> Girón de Velasco, La futura empresa..., op. cit., pág. 23.

<sup>242</sup> Girón, Seguro de enfermedad..., op. cit., pág. 2-3.

<sup>243</sup> De la Quintana, Primitivo: Problemas de Medicina social. Boletín del Consejo General de los Colegios Médicos de España, núm. 2, 1940, pág. 5.

<sup>244</sup> Ídem, pág. 3.

<sup>245</sup> Informes reservados de la C.N.S. de Burgos, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/212.

<sup>246</sup> Casas, Medicina científica y Medicina actual..., op. cit., pág. 8-9.

- <sup>247</sup> Informes sobre de la O. S. Lucha contra el paro de 1945 por provincias y memorias de la obra de 1947. 4ª sesión de 6 de junio de 1945; palabras del Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento Fontana. A.G.A.; I.D.D. 136.01, nº 2.334-1.
- <sup>248</sup> Aznar, Severino: El seguro de enfermedad y los médicos. Madrid, I.N.P., 1934, pág. 23.
- <sup>249</sup> Martí Buñil, Presente y futuro..., op. cit., pág. 155.
- <sup>250</sup> Aznar, El seguro de enfermedad..., op. cit., pág. 53-54.
- <sup>251</sup> Lamas, Francisco: Los médicos y la medicina en el Seguro Español de Enfermedad. R.E.S.S., núm. 1, vol. 1, 1948, pág. 18.
- <sup>252</sup> Ídem, pág. 6.
- <sup>253</sup> Ídem, pág. 22-25. También en Villar Salinas, Jesús: Pasado, presente y futuro de la profesión médica. RESS, núm. 2, vol. 1, 1949, pág. 235-237.
- <sup>254</sup> Estudios..., fascículo nº 22, op. cit., pág. 33.
- <sup>255</sup> Síntesis de ponencias provinciales en torno..., op. cit., fascículo nº 18, pág. 30.
- <sup>256</sup> Alonso Olea, Manuel: Política social española en relación con la familia. Madrid, ed. C.F.E., 1958, pág. 41.
- <sup>257</sup> Informes de la Vicesecretaría Nacional de Ordenación Económica. Asistencia del seguro de enfermedad, en caso de urgencia, a productores enfermos. Madrid, mayo de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01 3.954, N/155-55.
- <sup>258</sup> Informe sobre la actual situación en la zona minera de Huelva elaborado por el Letrado de la Sección Social Central del Sindicato Nacional del Metal (Francisco Casaurran Sánchez), abril de 1955, 26 desmayo de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.766.
- <sup>259</sup> Estudios y conclusiones, fascículo nº 23, ..., op. cit., pág. 45.
- <sup>260</sup> Informe de la Secretaría Sindical Provincial de Asturias, 1948. A.G.A.; S.S., I.D.D. 72.04, nº 38.
- <sup>261</sup> Anuario del Instituto Nacional de Previsión, 1946-47. Madrid, I.N.P., 1947, pág. 297.
- <sup>262</sup> Informe de la Secretaría Sindical provincial de Asturias, 1948. A.G.A.; S.S., I.D.D. 72.04, nº 38.
- <sup>263</sup> Programa de necesidades de la provincia de Madrid. Secretaría General para la Ordenación Económico-Social de la Presidencia del Gobierno, 1950. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/132.
- <sup>264</sup> Memoria del Departamento de Reglamentación, Política Laboral y Relaciones individuales de Trabajo la Vicesecretaría Provincial de Ordenación Social del Sindicato Provincial de Barcelona, 1949. A.G.A.; S.S., I.D.D. 72.04, 38.
- <sup>265</sup> Ministerio de Trabajo. I.N.P.. Ponencia especial encargada del estudio de los problemas del seguro de enfermedad. Sesión del día 31 de octubre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/204, pág. 2.
- <sup>266</sup> Ídem, pág. 6.
- <sup>267</sup> Alonso Olea, Instituciones..., op. cit., pág. 161-162.
- <sup>268</sup> B.O.E. del 21, Aranzadi 168.
- <sup>269</sup> B.O.E. del 19 de agosto, Aranzadi 1.039.
- <sup>270</sup> Fernández Heras, Derecho laboral..., op. cit., pág. 159. Otra definición podría ser la aportada por De Andrés Bueno: "Es toda lesión o trastorno corporal que el obrero adquiere de una manera lenta y gradual, debida exclusivamente a la influencia repetida del medio en que se desenvuelve el trabajo o a la índole particular del trabajo mismo, y que generalmente se manifiesta después de un lapso de tiempo mayor o menor desde el momento de su producción." De Andrés Bueno, Vicente: El concepto actual de enfermedad profesional. RT núm. 12, vol. 1, 1942, pág. 17.
- <sup>271</sup> Ídem, pág. 159.
- <sup>272</sup> Informe que la Dirección técnica del I.N.P. eleva a la Presidencia del mismo, respecto al seguro de enfermedades profesionales, posibilidades de ampliar su campo de aplicación y situación actual del mismo. Madrid, 4 de septiembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/173, pág. 12.
- <sup>273</sup> Aranzadi, 1.406.
- <sup>274</sup> Avilés Caballero, Julián-Ángel: La silicosis de los mineros y sus problemas médico-legales. Oviedo, 1969, pág. 5.
- <sup>275</sup> B.O.E. del 18 y Aranzadi, 543.
- <sup>276</sup> B.O.E. de 7 enero de 1942. Aranzadi, 35. Reglamento de 29 de marzo de 1946 (Aranzadi 596)
- <sup>277</sup> Se centraban éstas de forma básica en Jaén y secundariamente en Azuaga (Badajoz), La Unión y Mazarrón (Cartagena) y Minas del Priorato (Tarragona). La evolución de este sector supuso el paso de 36 empresas con 4.806 asegurados en 1943 a 92 empresas con 9.079 asegurados en 1951.
- <sup>278</sup> Carecía de sentido el campo de aplicación a las minas de oro porque a principios de los años cincuenta no existían empresas industriales en la minería del oro desde la desaparición por quiebra de Rodalquilar, S.A. Solamente el I.N.I., por medio de su "Empresa Nacional Adaro" realizaba a principios de los

cincuenta investigaciones en la zona de Rodalquilar, en el término de Níjar (Almería), estudios en busca de filones de oro. Informe que la Dirección Técnica del I.N.P. eleva a la Presidencia del mismo, respecto al seguro de enfermedades profesionales, posibilidades de ampliar su campo de aplicación y situación actual del mismo. Madrid, 4 de septiembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/173, pág. 6.

<sup>279</sup> Dantín Gallego, Juan: La nueva organización oficial del seguro de silicosis. Madrid, I.N.P., 1942, pág. 4.

<sup>280</sup> Siempre que la enfermedad se relacionase con la tuberculosis se entendía encuadrada en este tercer grado.

<sup>281</sup> "Los profundos cambios introducidos por el expresado Decreto (*se refiere al Decreto de 23 de diciembre de 1944*) hicieron que la reglamentación inicial de 14 de noviembre de 1942 resultase totalmente inadecuada y que cada día fuera más intensa la necesidad de unificar las normas en vigor para que trabajadores y empresarios pudiesen conocer, con la precisión y claridad apetecidas, el contenido y alcance de sus derechos y obligaciones," afirmaba Ucelay, Inspector Jefe de 1ª del Cuerpo de Inspección Técnica de Previsión Social, Abogado, Diplomado del ministerio de Trabajo, Profesor de la Escuela Social de Madrid, y Secretario Nacional de la Obra Sindical de Previsión Social. Ucelay, Previsión y seguros..., op. cit., pág. 328.

<sup>282</sup> González Posada, Los seguros sociales..., op. cit., pág. 228.

<sup>283</sup> Avilés Caballero, La silicosis..., op. cit., pág. 55.

<sup>284</sup> Así se puede deducir de los informes del servicio técnico del I.N.P.: "No obstante, el campo de aplicación del aseguramiento establecido en dicha disposición, (*se refiere a la orden de 19 de julio de 1949*) no se extiende más allá de lo que venía siendo materia propia del anterior Seguro de Silicosis..." Informe que la Dirección técnica del I.N.P. eleva a la Presidencia del mismo, respecto al seguro de enfermedades profesionales, posibilidades de ampliar su campo de aplicación y situación actual del mismo. Madrid, 4 de septiembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/173, pág. 1.

<sup>285</sup> Bikkal, La seguridad social..., op. cit., pág. 425.

<sup>286</sup> Avilés Caballero, La silicosis..., op. cit., pág. 61-62.

<sup>287</sup> El nistagmus consistía en la oscilación regular, no voluntaria y rítmica de los globos oculares.

<sup>288</sup> Nofuentes G. Montoro, Manuel: Nistagmus del minero. Su existencia como enfermedad profesional y régimen legal del seguro. RISS, núm. 3, 1952, pág. 728.

<sup>289</sup> Alonso Olea, Instituciones de Seguridad..., op. cit., pág. 97.

<sup>290</sup> Bikkal, La seguridad social..., op. cit., pág. 424. También Decreto de 23 de diciembre de 1944 (B.O.E. del 10 de enero de 1945 y Aranzadi 71) cambiando el régimen del seguro de silicosis.

<sup>291</sup> B.O.E. del 2 de febrero.

<sup>292</sup> Garrido y Comas, Juan José: El seguro de enfermedades profesionales (Aspectos de su implantación en España) RT, núm. 60, 1948, pág. 495.

<sup>293</sup> "La indemnización de los casos de silicosis no comprendidos en el seguro de Enfermedades profesionales y su repercusión en los Regímenes de Accidentes de Trabajo. I Asamblea General del I.N.P., 8 de junio de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/243, nº 112.

<sup>294</sup> Minas de plomo de la provincia de Jaén. V.N.O.E., mayo de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-152-55.

<sup>295</sup> Así el vocal representante del sector carbón en la junta administrativa del seguro manifestaba a finales de la década de los cuarenta la injustificado del incremento del 0,7 % de la cuota que había de aportar las empresas de dicho sector al seguro por su repercusión sobre los costes del sector:

"La Junta acuerda por unanimidad, y atendiendo a requerimiento del Jefe del Sindicato, prestar su aprobación a los nuevos coeficientes, no obstante lo cual la totalidad de los asistentes manifiestan la grave preocupación que les produce el incremento del número de pensionista y los sensibles perjuicios que el absentismo y éxodo de personal ha de producir en la falta de mano de obra especializada que en la industria carbonera se viene produciendo desde hace años, y...les alarma las desviaciones que la beneficiosa legislación del seguro viene teniendo en la práctica,...todo lo cual viene a demostrar y a afirmar el criterio de la necesidad de perfeccionar los sistemas de valoración médica, y que en definitiva la Junta Médica, oficialmente constituida, disponga de aquellos elementos que garanticen la exactitud de su diagnósticos." Informe de la Secretaría Sindical Provincial de Asturias, 1948. Informe del vocal representante de la rama del carbón en la junta administrativa del seguro de silicosis sobre los aumentos de cuotas para el año 1948. A.G.A.; I.D.D. 72.04, nº 38, pág. 12-13

<sup>296</sup> Concretamente en uno de los informes emitidos por la Caja Nacional de Seguro de Accidentes se afirmaba lo siguiente:

"El tratar de cubrir este riesgo, con el incremento de las primas es muy difícil, por cuanto que se llegaría a cifras verdaderamente extraordinarias...(por eso las privadas no lo cogen)..."

Pero es que además ocurre, que esta enfermedad profesional está cada día más estudiada y es más perfecta y seguramente diagnóstica y por otra parte los trabajadores tienen un mayor conocimiento de sus derechos y de las características del mal. Todo ello determina que la siniestralidad por silicosis va aumentando en proporciones insospechadas. Así pues, la Caja Nacional, tuvo en el año 1950 siniestros por silicosis que importaron pts. 2.342.398,25, en tanto que en 1952 el mismo concepto alcanzó la cifra de 3.863.116,26 pts., siendo la contrapartida de ingresos tan sólo de 84.215,02 pts." Informe de la Ponencia sobre la Caja Nacional de Seguro de Accidentes de Trabajo. Ministerio de Trabajo. I.N.P., 27 de marzo de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, t/ 269.

<sup>297</sup> Indudablemente el sector más afectado era el de la minería de la hulla. En 1950 el número de pensionistas ascendía a 4.034 y las prestaciones a 23.913.433,08 pts. Informe que la Dirección técnica del I.N.P. eleva a la Presidencia del mismo, respecto al seguro de enfermedades profesionales, posibilidades de ampliar su campo de aplicación y situación actual del mismo. Madrid, 4 de septiembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/173, pág. 18.

<sup>298</sup> Aguirre Lostau, Joaquín: El reconocimiento médico en la silicosis y el art. 34 de la ley de accidentes del Trabajo en la industria. BIINP, núm. 7, vol. 2, 1946, pág. 1.700.

<sup>299</sup> Los datos de 1943 a 1941 provienen del Informe que la Dirección técnica del I.N.P. eleva a la Presidencia del mismo, respecto al seguro de enfermedades profesionales, posibilidades de ampliar su campo de aplicación y situación actual del mismo. Madrid, 4 de septiembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/173, pág. 6-8. Los datos de 1955 a 1957 provienen del Anuario Estadístico de España, 1958, pág. 632.

<sup>300</sup> Informe del Delegado Provincial de Sindicatos de Jaén (César Gallo Arnedo) al Secretario Nacional de Sindicatos (6 de marzo de 1955). A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 2.339.5. A la altura de 1955 la población minera de la cuenca Linares-La Carolina era de 5.500; existían 1.100 silicóticos de primer grado y 1.333 de segundo y tercer grado.

<sup>301</sup> Informe del Delegado Provincial de Sindicatos de Jaén...(6 de marzo de 1955). A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 2339.5, op. cit., pág. 2.

<sup>302</sup> Sindicato Provincial del Metal de Linares (Jaén), 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 481.

<sup>303</sup> Informe complementario de la Delegación Provincial de Sindicatos elevado al Secretario Nacional de Sindicatos, en relación con el problema de la enfermedad profesional denominada silicosis en sus diferentes aspectos (25 de marzo de 1955). A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 2339.5, pág. 4.

<sup>304</sup> 5ª ponencia de la I Asamblea del I.N.P., 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/243, nº 112.

<sup>305</sup> Informe que eleva la Comisión encargada del Estudio del problema de la enfermedad profesional denominada silicosis en las minas de plomo de la provincia de Jaén (1955). A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 2339.5, pág. 1-3.

<sup>306</sup> Situación de los trabajadores mineros de las empresas de Río Tinto y Tharsis, 1 de junio de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.766.

<sup>307</sup> Petición de los trabajadores de las minas de Río Tinto, 23 de noviembre de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.766.

<sup>308</sup> Informe sobre la actual situación en la zona minera de Huelva elaborado por el Letrado de la Sección Social Central del Sindicato Nacional del Metal Francisco Casaurran Sánchez, 26 de mayo de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.766.

<sup>309</sup> Ídem.

<sup>310</sup> Informe del Delegado Provincial de Sindicatos de Jaén...(6 de marzo de 1955). A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 2339.5, op. cit., pág. 3.

<sup>311</sup> Informe complementario de la Delegación Provincial de Sindicatos...enfermedad profesional denominada silicosis...(25 de marzo de 1955), op. cit., A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 2.339-5.

<sup>312</sup> Ídem, pág. 4.

<sup>313</sup> Correspondencia del Inspector Provincial del Seguro de Enfermedad de Jaén, Cayetano Fernández Quesada, (4 de junio de 1955) al Delegado Provincial de Sindicatos de Jaén, A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 2339.5.

<sup>314</sup> Correspondencia del Delegado Provincial de Sindicatos de Jaén al Secretario Nacional de Sindicatos de 8 de junio de 1955. En dicha correspondencia se pone de manifiesto la negativa de los empresarios se pone de manifiesto la negativa de los empresarios mineros jienenses a responder del préstamo que les

concedería la Dirección General de Previsión Social con destino a la mejora de sus instalaciones con el objetivo de mejorar la higiene de las minas. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 2339.5.

<sup>315</sup> El problema de la silicosis en la minas metálicas y de Andalucía Oriental y Levante, Madrid 28 de julio de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 2339.5, pág. 1-2.

<sup>316</sup> Informe del letrado de la Sección Social del Sindicato del Metal, camarada Francisco Casauran Sánchez, sobre su visita a la zonas minera de Levante y Andalucía elevado al Vicesecretario Nacional de Ordenación Social (23 de junio de 1955). A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 2339.5.

<sup>317</sup> Ídem, pág. 3.

<sup>318</sup> Acta de la reunión para constituir la Junta Nacional de Silicosis (Madrid, 7 de octubre de 1955): "...de lo que se trata es de obligar a su cumplimiento...se trata de lograr el estricto cumplimiento de las normas jurídicas, con lo cual se reduciría la enfermedad profesional de silicosis en cerca de un cincuenta por ciento...". A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 2.339-5, pág. 4.

<sup>319</sup> El problema de la silicosis en la minas metálicas y de Andalucía Oriental y Levante, op. cit.,... nº 2.339-5.

<sup>320</sup> Informe Técnico sobre la medidas preventivas de la silicosis en las minas adoptadas actualmente por diversos estados extranjeros (Alemania, Australia, Bélgica, Estados Unidos Francia, Holanda, Inglaterra, Unión Sudafricana) elaborado por el Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo de Obra Sindical de Previsión Social. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 2.339-5.

<sup>321</sup> Informe que la Dirección técnica del I.N.P. eleva a la Presidencia del mismo, respecto al seguro de enfermedades profesionales, posibilidades de ampliar su campo de aplicación y situación actual del mismo. Madrid, 4 de septiembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/173, pág. 3.

<sup>322</sup> Informe-propuesta de la comisión de silicosis, s/f. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 2.339-4, pág. 2.

<sup>323</sup> Por Orden de la Presidencia del Gobierno de 26 de julio de 1957 se creó una Comisión Interministerial para el Estudio de las medidas oportunas para la prevención y reparación de la silicosis en Linares y la Carolina y sus minas de plomo. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.325.

<sup>324</sup> Dantín, La nueva organización..., op. cit., pág. 14.

<sup>325</sup> Aguirre Lostau, Joaquín y Alvarez Valdés, Camilo: Importancia social de la función médica en la silicosis. RESS, núm. 4, 1947, pág. 487.

## **Capítulo 15. Otros aspectos de la previsión social.**

### **15.1. El seguro de accidentes del trabajo: una obra nunca acabada.**

La evolución legal del seguro de accidentes en el trabajo comienza con la Orden de 8 de octubre de 1932<sup>1</sup> con el establecimiento del seguro en el mundo de la industria. Su reglamento se promulgó por Decreto de 31 de enero de 1933.<sup>2</sup> Los pasos más relevantes dados en la época Girón fueron la Ley de 22 de diciembre de 1955<sup>3</sup> que unificaba los accidentes de trabajo en la agricultura con los de la industria y el Decreto de 22 de junio de 1956<sup>4</sup> que refundía lo regulado por la ley y el reglamento mencionados. En cualquier caso, el seguro de accidentes estuvo muy influido por el talante liberal en su ejecutoria.

Para restringirnos al período de Girón como ministro de Trabajo obviaremos las referencias a la ley de 1932 y su reglamento. Por tanto, nos centraremos en las disposiciones de 1955 y 1956. En el caso de la primera se establecía en su artículo 1º la aplicación a los trabajadores agrícolas de las mismas disposiciones que regían para la reparación de los accidentes del trabajo en la industria. Esta disposición no entrañaba modificaciones sustanciales con respecto al sistema anterior. Suprimía, eso sí, el sistema creado para la pequeña agricultura, establecía el carácter obligatorio del seguro de incapacidad temporal y la indemnización en el caso de mutilaciones y deformidades.<sup>5</sup> En el caso de las pequeñas explotaciones agrarias<sup>6</sup> se daba una gran diferencia con respecto a los accidentados en las actividades industriales. En el caso de los trabajadores del mar el Decreto de 4 de junio de 1940 establecía que el accidentado recibiera una pensión vitalicia. En el caso de los mencionados trabajadores del campo existía la posibilidad de recibir una indemnización consistente en una entrega de capital por una sólo vez. Podían darse circunstancias como que un trabajador fijo metalúrgico pudiera cobrar hasta 27.000 pts. anuales (en el mejor de los casos) durante el resto de su vida mientras que si trabajaba en una pequeña explotación agropecuaria (considerando que pudiera ganar anualmente el tope protegible, 36.000 pts.) sólo percibiría en el mejor de los casos 72.000 pts. en total.

En principio, el campo de aplicación del seguro incluía a toda persona que trabajase por cuenta ajena. Pese a ello, de hecho, quedaban fuera del seguro de accidentes la gran mayoría de los agricultores españoles, los trabajadores autónomos y los trabajadores a domicilio.<sup>7</sup>

Entre las prestaciones que concedía a los accidentados estaban las sanitarias consistentes en atención médico-quirúrgica y farmacéutica. Según la diferente situación en que se encontrasen los trabajadores recibían una serie de indemnizaciones. Tratamos ahora el sistema de indemnizaciones a la altura de 1956. En concepto de compensación, por pérdida del salario, el trabajador percibía una indemnización del 75 % de su retribución durante un año y medio como



máximo. En el caso de accidentes que ocasionaran mutilaciones o deformidades que no constituyesen incapacidades permanentes, se concedía un capital que podía oscilar entre las 1.750 pts. (en el caso de pérdida de la tercera falange del dedo meñique izquierdo) y las 25.000 pts. (en los casos de deformidades del rostro de la mujer). Cuando la incapacidad era permanente parcial y el trabajador podía continuar desempeñando el mismo trabajo (con menor rendimiento) se le concedía un 35 % del salario; dada la incapacidad permanente total en la que el trabajador no podía ocuparse en su misma actividad se le concedía un 55 % y en el caso de la incapacidad permanente absoluta se le podía conceder el 100 %. Teóricamente cuando la incapacidad era tal que, fruto del accidente, el trabajador no podía realizar las actividades cotidianas de su vida (gran invalidez), además del 100 % del salario podía concedérsele un 50 % por la persona que lo atendiera. En los casos de incapacidad permanente y gran invalidez podía elevarse en un 50 % la prestación en el caso de que se demostrase que la causa del mismo había sido fruto de la negligencia de la empresa.

La administración del seguro corría a cargo del Instituto Nacional de Previsión, a través de la Dirección Técnica que administraba la Caja Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo. Previa autorización del ministerio de Trabajo dicha administración podía correr a cargo de compañías o sociedades de seguros y de las mutualidades patronales.

El sistema para financiar el seguro de accidentes corría a cargo de cuotas que pagaban exclusivamente los empresarios. El régimen económico era el de capitalización parcial en el que además del valor actual de las prestaciones en curso había de calcularse el de las consolidadas que se iban pagando.<sup>8</sup>

Supuestamente en ese seguro no había déficit. Sin embargo de los debates en el seno del propio Consejo del I.N.P. se deduce que el déficit real en el año 1951 era de 51 millones de pts. y de 7,5 millones en 1952.<sup>9</sup> Eso sin contar con que existían beneficiarios reconocidos del seguro que no percibían su pensión por dejación del sistema administrativo y de gestión.<sup>10</sup> La realidad era que financieramente el seguro había de funcionar con graves dificultades. Téngase en cuenta que los cálculos actuariales (al menos hasta mediados de los años cincuenta) se realizaban sobre tablas de mortalidad francesas por el desconocimiento estadístico de la realidad española.<sup>11</sup> Entre las causas de su déficit se puede citar el retraso en la constitución de las rentas y la demora en la inversión de los fondos del seguro, la distinta evolución de la mortalidad seguida por la población española frente a las previsiones oficiales de la caja nacional, el deficiente cálculo de las reservas matemáticas, el incremento del número y cuantía de las rentas vitalicias y temporales, la concesión por el Decreto de 31 de marzo de 1950 de los beneficios del S.O.E. a los pensionistas del seguro de accidentes del trabajo,<sup>12</sup> los fallos administrativos fruto de la deficiente e insuficiente mecanización, etc.

### ***15.1.1. La repercusión efectiva del seguro de accidentes del trabajo.***

Es quizás éste uno de los seguros de mayor necesidad en época de declive económico y bajos salarios. Tomando como ejemplo la minería de Almadén en el año 1942, comprenderemos que el número de accidentes, tan sólo en ese establecimiento, fuera de 1.028 (según cifras oficiales) en función de unos bajísimos salarios que se situaban entre las 7,20 y las 8 pts. diarias.<sup>13</sup> En 1955 el Consejo Económico Sindical de Vizcaya ponía de manifiesto que en este año se habían dado más de 350.000 accidentes laborales clamando al cielo contra el hecho de que hubiera un accidente por minuto. “Tenemos ante nuestros ojos una realidad desoladora, jamás en nuestra patria, las estadísticas de muerte, por accidente de trabajo alcanzaron unas cifras tan elevadas como las que se registran actualmente... Según trabajos efectuados se sabe que lo que al empresario viene a costar como mínimo el accidente de trabajo es de cuatro a cinco veces lo que el obrero percibe en concepto de compensación, cantidad no asegurable, ya que va a cargo del bolsillo del empresario, el cual lo carga a la producción...” se concluía en el mencionado congreso.<sup>14</sup> En otros casos como la minería de Riotinto (Huelva) la reacción era rápida por parte del ministerio de Trabajo para evitar que la inseguridad en el trabajo fuera raíz de conflictos.<sup>15</sup>

A estos se añadía la sistemática falta de medios de seguridad, las lamentables condiciones de trabajo en que se desenvolvía su actividad o la deficiente alimentación de los mineros. Y es que “si la plaga económica de la era preindustrial había sido la sequía, la de la era industrial lo fueron, y en buena medida lo siguen siendo, el paro forzoso y el accidente de trabajo,”<sup>16</sup> pese a lo cual el estado franquista no llevó a cabo los primeros cambios hasta mediados de la década de los cincuenta. Aparte de otras consideraciones, la cuestión del accidente laboral tenía también trascendencia porque en los casos en que obedecía a la negligencia de la empresa podía desencadenar conatos de huelga que las autoridades no podían evitar.<sup>17</sup> Por otro lado, la negligencia podía ser fruto de la combinación de una serie de factores como la excesiva celeridad de las obras, la falta de seguridad en las mismas y el riesgo de que los trabajadores se vieran obligados a tomar ante la escasa capacidad adquisitiva de sus salarios.<sup>18</sup>

Pese a la imperiosa necesidad de mejorar el seguro no sería hasta 1955 cuando se realizó una leve reforma técnica del mismo. Pese al carácter intervencionista del Estado franquista la mayor deficiencia achacable al seguro de accidentes era su “carácter liberal.” Es un seguro, se argumentaba, “que tiene poco de social y mucho de mercantil.”<sup>19</sup> Y es que este seguro se confundía prácticamente con un seguro privado ya que, inicialmente, el empresario podía cubrir los riesgos de incapacidad temporal por sí mismo o por medio de una entidad aseguradora. Esto permitía que se escatimaran las prestaciones por incapacidad temporal y que se intentara frecuentemente que los accidentados fueran atendidos por el seguro de enfermedad. A su vez

eran corrientes las dificultades para los incapacitados permanentes, dado el largo proceso administrativo y las trabas médicas o la oposición de las entidades aseguradoras a reconocer el derecho de pensión, con la consiguiente repercusión para las economías débiles al tener que recurrir a la magistratura.<sup>20</sup> Uno de los elementos más evidentes a la altura de 1953 era que las enfermedades que no permitían la recuperación de los enfermos, una vez cubiertos los períodos de asistencia reglamentarios, dejaban desamparados a los trabajadores y a sus familiares dada la inexistencia de sanatorios del Estado con capacidad suficiente para ampararlos y porque, en definitiva, pese a las formulaciones teóricas, no se garantizaba la continuidad de la asistencia médica a aquellos a los que la salud les abandonaba definitivamente.<sup>21</sup> Caso de todos aquellos que requerían asistencia médico-farmacéutica por incapacidad temporal después del primer año de tratamiento.<sup>22</sup>

Año	Número de accidentes de trabajo
1941	355.500
1942	346.439
1943	360.953
1944	376.081
1945	383.721
1946	424.487
1947	442.211
1948	442.478
1949	408.960
1950	423.412
1951	426.967
1952	457.127
1953	478.973
1954	500.805
1955	522.350
1956	671.537
1957	987.720

*\*Cuadro n° 97. Accidentes de trabajo de 1941 a 1957.*<sup>23</sup>

Y todo ello para obtener unas “reducidas y limitadas prestaciones,”<sup>24</sup> muy probablemente fruto de la escasa conciencia del peligro general del accidente de trabajo en las primeras décadas del régimen franquista pese al aumento de este tipo de infortunios.<sup>25</sup> Ello respondía al hecho de que la ley de accidentes del trabajo de 30 de enero de 1900, luego modificada por la ley Matos de 10 de enero de 1922, se basaba en el principio del riesgo profesional. Es decir, consideraba que

el daño causado por el dueño de un objeto o instalación debía repararse por el dueño del mismo imponiendo al empresario la obligación de compensar el daño causado por el accidente mediante la entrega de un capital contratable con una sociedad de seguros.<sup>26</sup> Posteriormente el Decreto de 12 de junio de 1931 sobre accidentes del trabajo en la agricultura, convertido el 9 de septiembre en ley, y la ley de 4 de julio de 1932 que refundía la legislación sobre accidentes en la industria, se fundamentaba en el mismo principio.

La importancia de las entidades de seguros mercantiles tenía una especial relevancia para el I.N.P. como muestra el "Informe que la Dirección Técnica del I.N.P. tiene el honor de elevar a la presidencia del mismo, respecto a la suficiencia o insuficiencia de las tarifas en el seguro de incapacidad permanente y muerte, y los problemas planteados a los de incapacidad temporal e incapacidad permanente y muerte como consecuencia de la concurrencia del seguro privado y mutualidades patronales."<sup>27</sup> Esta competencia de las entidades del seguro mercantil e incluso de sociedades mutualistas que, bajo ese nombre, encubrían sociedades anónimas de seguros, era más pronunciada por el hecho de que las tarifas fijadas por Orden de 14 de mayo de 1943 fueron las mismas hasta el año 1949. Los problemas de la caja nacional se acentuaban porque se desconocía el número de trabajadores expuestos al riesgo de accidentes del trabajo (sobre todo en el ámbito agrícola) y por tanto era complicado realizar una clasificación certera de la siniestralidad. Esta política facilitó que a partir de 1942 la vida de la caja nacional se caracterizara por su languidez basada en la imposibilidad de competir abiertamente con las entidades aseguradoras que sólo parcialmente se intentó evitar.<sup>28</sup> La forma en que las entidades del seguro mercantil hicieron frente a esta nueva situación supuso la adopción de diversas estrategias entre las que podemos citar el no cumplimiento del artículo 149 del reglamento del seguro por medio del cual se prohibía que dichas entidades pudieran operar con primas inferiores a las de la caja nacional. Sin embargo, este obstáculo podía ser salvado mediante el extorno de las primas, es decir, mediante la devolución al asegurado de parte de la prima satisfecha, con lo cual aparentemente se respetaba el artículo 149 pese a aplicar, de hecho, un coeficiente de prima inferior al estipulado en la tarifas oficiales. Otra fórmula utilizada por estas entidades era la bonificación por escasa siniestralidad generando igualmente los mismos efectos finales.

El menor carácter intervencionista del Estado franquista se plasmaba en informes fiscalizadores que ponían de manifiesto el peligro de los agentes intermediarios. El estudio realizado sobre 19 pólizas de la caja nacional del seguro de accidentes en el año 1954 exponía la ausencia de unidad de criterio en las mismas, los errores matemáticos y un tono actuarial más que insuficiente.<sup>29</sup> Y es que los agentes que elaboraban estas pólizas y que a su vez se las proporcionaban a la caja nacional recibían comisiones que hasta 1946 habían sido del 10 % y a partir de ese año del 15 %. Ello daba a la misma institución estatal un cierto tono mercantil,

puesto que, no buscando beneficios para si misma, si se los otorgaba a terceros por medio de estos abonos que encubrían en el fondo una rebaja de la prima en la medida en que dichos agentes eran comunmente los gerentes o mandatarios de las empresas que contrataban dichas pólizas.<sup>30</sup>

Hay que tener en cuenta que la revalorización de las pensiones otorgadas en el marco del seguro de accidentes del trabajo por incapacidades absolutas y permanentes tenía un baremo establecido el 1 de enero de 1944 cuya actualización no se planteó pese a la presión inflacionista hasta junio de 1954.<sup>31</sup> De igual manera que la alteración del tope máximo de la retribución computable a efectos de los deberes patronales y de los derechos de los beneficiarios no se modificó hasta el año 1953 reconociéndose por parte de las autoridades del ministerio de Trabajo que a "pesar de dichas disposiciones, es evidente que no se ha logrado aún el encaje exacto dentro de los postulados de justicia social de los derechos conferidos y personas amparadas por esta legislación, quedando fuera de sus preceptos muchos trabajadores por cuenta ajena cuya falta de protección no parece hoy justificada, como tampoco lo está la subsistencia de desigualdades de derechos que es necesario unificar para que la justicia quede debidamente cumplida."<sup>32</sup> Había que tener necesariamente en cuenta que dichas alteraciones de los criterios en cuanto a las rentas protegibles estaban directamente relacionadas con los aumentos de los salarios nominales y de las retribuciones complementarias computables a efectos de estas prestaciones. Y que, por tanto, en la medida en que dichas prestaciones no se revisaban periódicamente con el incremento del nivel del coste de la vida las pensiones veían reducida su capacidad adquisitiva real, ello sin contar con la inexistente equiparación entre el trabajador industrial y el campesino a efectos de la misma.<sup>33</sup> Estas mismas prestaciones podían originar desigualdades sociales tan evidentes como la que podía resultar de un accidente de un trabajador del sector siderometalúrgico. En caso de fallecimiento por accidente del trabajo su viuda percibía un 37 % del salario mientras que si ese mismo trabajador hubiese fallecido fruto de una pulmonía su mutualidad le abonaría una pensión mensual equivalente al 45 % del sueldo,<sup>34</sup> eso sin considerar la tardanza sistemática con la que se concedían las prestaciones económicas en el caso de viudas y huérfanos.<sup>35</sup>

La alteración de los topes para las rentas protegibles en el seguro de accidentes del trabajo establecía en 36.000 pts. anuales o 100 pts. diarias el salario protegible si bien hay que tener en cuenta que lo conceptuado como remuneración incluía lo ganado por el trabajador en dinero o en cualquier otra forma ya fuera en forma de sueldo, salario fijo o a destajo, por horas extraordinarios o primas de asistencia o de trabajo, manutención, habitación, etc., con lo cual se detraía de la economía familiar del trabajador una cantidad variable que hacía que el salario efectivamente percibido por el empleado fuera menor de lo formalmente cobrado por el mismo.

Siguiendo esta línea argumentativa se percibía desde la propia fortaleza del régimen la insuficiencia sistemática de las prestaciones del seguro pudiéndose encontrar en el Boletín Informativo del I.N.P. reproches como las que lanzaba Nogales:

“...la reparación económica en los ya declarados con incapacidad permanente no alcanza, ni con mucho, a satisfacer las necesidades más imperiosas...al ser la pensión en relación al jornal que disfrutaban, y como éste, en la generalidad de los casos, máxime hoy día, no alcanza siempre a cubrir con suficiencia las principales necesidades, es obvio que sólo una cuarta o tercera parte de dicho salario, que justamente es la pensión más frecuente, porque es la de la incapacidad total o parcial, ha de ser a todas luces escasa.”<sup>36</sup>

Esta descripción de los beneficios del seguro de enfermedad se hacía en 1944. Pero a la altura de 1951, desde otro órgano de expresión del ministerio de Trabajo, se vertían los mismos calificativos sobre las deficiencias del sistema:

“...creemos que nuestra ley de accidentes no tan sólo falla en el debido control de la asistencia, sino que su acción es muy modesta, tanto en la función preventiva del accidente como en la rehabilitadora de las incapacidades permanentes que se producen. En esta última fase su ausencia es más dolorosa, ya que las pensiones de incapacidad con la disminución en la capacidad adquisitiva del dinero resultan harto insuficientes y a veces prácticamente nulas para cubrir las mínimas necesidades de un obrero y de su familia si, como tantas veces ocurre, afecta la incapacidad a un obrero en su mejor edad.”<sup>37</sup>

Otra de las polémicas que se planteaban en torno a la extensión de este seguro era la unificación del seguro de accidentes en la agricultura y en la industria,<sup>38</sup> cuestión que no se llevaría a cabo hasta 1955,<sup>39</sup> (no sería hasta el 1 de enero de 1956 cuando comenzasen a aplicarse dichos criterios de equiparación) y que suponía una desigualdad patente entre los trabajadores del campo y los de la industria en detrimento de los primeros.<sup>40</sup> Los proyectos de equiparación entre la industria y el campo a lo largo de los años cuarenta y cincuenta no fueron más que bulos cuyo objetivo era calmar a la gente del campo.<sup>41</sup> Esta desigualdad se plasmaba en situaciones en las que un incapacitado permanente y absoluto de la industria recibía una pensión vitalicia equivalente al 75 % del salario base mientras que en el caso de la agricultura recibía una indemnización igual al salario de dos años. Sólo hubo un corto período de tiempo en que la agricultura tuvo un sistema relativamente más beneficioso que la industria entre julio de 1931 y marzo de 1933 en que, manteniendo las mismas sumas globales de indemnización, existía una mayor garantía para los trabajadores del campo.<sup>42</sup>

Pero fue a raíz de la Ley de 22 de diciembre de 1955 y del Decreto de 22 de junio de 1956 cuando se suprimió parcialmente el régimen especial en la agricultura y su irritante desigualdad. Estas dos disposiciones hacían referencia a las tres variantes existentes. La gran agricultura (explotaciones con más de seis obreros fijos o con motores inanimados), la pequeña agricultura (con menos de seis obreros y que no usaran máquinas a motor) y en tercer lugar, el trabajador autónomo. Para el primer grupo ya regía la ley de 1931; para el segundo la legislación de 1955 y 1956 le suponía una leve mejora. En el caso de los autónomos su situación seguía inalterable. Pese a ello el resultado final era "que para la mayor parte de las explotaciones agrícolas afectadas por la unificación, la reforma había supuesto simplemente duplicar el coste del seguro."<sup>43</sup>

De igual manera, se constataba la problemática en torno a la necesidad de unificación de los seguros sociales y más concretamente del seguro de accidentes del trabajo con el de enfermedades profesionales, el de vejez e invalidez o el S.O.E. Y es que este seguro no era más que un sistema de escape para la responsabilidad civil de los empresarios en la medida en que, fundado sobre la idea del riesgo profesional, permitía a aquellos traspasar sus obligaciones a una entidad aseguradora.<sup>44</sup> Sólo abandonando este principio el seguro de accidentes desaparecería pudiendo hacerse cargo de las incapacidades temporales el seguro de enfermedad y de las permanentes o de la muerte el seguro de invalidez con el desahogo consiguiente para la industria de una responsabilidad que motivaba que la cotización para dicho seguro recayera exclusivamente en la empresa (y no en el trabajador). Evidentemente, ello hubiera otorgado a dicho seguro un sesgo más social que hasta entonces no poseía basado en la idea de la responsabilidad colectiva y, por tanto, en la aportación (mínima) del Estado con el consiguiente encuadramiento en el derecho social.

Otro de los problemas que se planteaba en torno a cubrir la seguridad de los accidentados era la conciencia de que la atención a los mismos no era ni mucho menos rápida ni eficaz dada la carencia de personal preparado en especialidades como la de traumatología y de instalaciones de asistencia y diagnóstico adaptadas y organizadas en función de las necesidades de estos servicios. Ello se debía, entre otras causas, al hecho de que todas las clínicas y sanatorios que la caja nacional del seguro utilizaba (exceptuando la Clínica del Trabajo de Madrid<sup>45</sup> y las Residencias del Seguro de Enfermedad de Ávila, Orense, Segovia, Puertollano, Barcelona y Teruel) eran de propiedad particular y la especialización de las mismas en función de las demandas existentes era notablemente deficiente "...ya que...orientadas hacia la cirugía general y todas las demás especialidades quirúrgicas, y con un lógico y natural fin comercial no disponen en sus instalaciones materiales, ni mucho menos en su régimen interno, de las condiciones necesarias para la aplicación de una asistencia traumatológica..."<sup>46</sup> siendo causa de

prolongados espacios de tiempo en las mismas así como de algunas incapacidades permanentes dado que las residencias del seguro de enfermedad, aunque mejor dotadas de medios materiales o instalaciones, no eran adecuadas ni por su número ni por su emplazamiento. Ello lo que ponía de manifiesto era la incapacidad de la caja, o mejor dicho, del ministerio de Trabajo para montar centros de hospitalización con carácter provincial y la necesidad, todavía a la altura de la década de los cincuenta, de desarrollar un plan de instalaciones adecuado a las necesidades del país y con personal dependiente de las autoridades públicas como la única forma de garantizar una unidad de criterios y calidades sanitarias, así como que el Estado pudiera ejercer, por medio de la inspección sanitaria, el adecuado control y vigilancia sobre aquellos servicios.

La mayor muestra de preocupación del Estado franquista por el mundo de los accidentes del trabajo se plasmó en la celebración en Bilbao del Congreso Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo celebrado en dicha ciudad del 16 al 21 de agosto de 1943<sup>47</sup> del cual saldría la creación del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo fundado por el Decreto de 7 de julio de 1944 como el centro técnico superior de organización, investigación, enseñanza, asesoramiento y propaganda en torno al tema de la seguridad laboral en el trabajo. A este le precedió la elaboración de un reglamento general de seguridad e higiene del trabajo que no fue más que otra de las leves reformas técnicas que no llegó a ser operativa. A partir de 1950 dicha institución quedó incorporada al I.N.P.<sup>48</sup> Y todo ello en un contexto en que oficialmente ocurrieron 350.000 accidentes en 1940 (cifra que habría que elevar), en un país en que cada dos minutos (también oficialmente) ocurría un accidente laboral y en el que las industrias con más accidentados eran las de la construcción (25 %), transportes (18 %), minas (8 %), etc.<sup>49</sup>

Sobre los accidentes de trabajo la labor propagandista de la Obra Social de Previsión Social condujo a la publicación de artículos en los que se hacían aseveraciones como las siguientes:

“Con lo expuesto en materia de accidentes y sobre prevención de riesgos profesionales no se resume la actividad de la Obra dentro de esta campaña emprendida en favor de los trabajadores para la prevención de los riesgos profesionales, sino que, en su loable deseo de ir perfeccionando la tarea y ampliando la labor, está dispuesta a mantener una continuidad en el camino emprendido que, a su vez, ha sido impuesta por el entusiasmo despertado entre los elementos de la empresa, pues tanto patronos como trabajadores han solicitado...incrementar el contacto con la obra para ampliar lo más posible estas campañas preventivas.”<sup>50</sup>

A este tipo de manifestaciones retóricas le acompañaron eventos como la creación por parte de la inspección de trabajo de Bilbao de un museo permanente de elementos preventivos de accidentes del trabajo y la organización por la Dirección General de Trabajo de un concurso de



carteles de prevención de accidentes laborales con exposiciones celebradas en Madrid, Barcelona y Bilbao.<sup>51</sup>

## **15.2. El tratamiento de la vejez: El Seguro de Vejez e Invalidez.**

### ***15.2.1. El tortuoso camino hacia un Seguro de Vejez e Invalidez.***

El Seguro de Vejez fue el primero que se desarrolló en España. Comenzó su funcionamiento con carácter de libertad subsidiada desde 1908. Desde 1919 pasó a denominarse retiro obrero obligatorio, transformándose en 1939 (Ley de 1 de septiembre de 1939<sup>52</sup> y Reglamento de 2 de febrero de 1940)<sup>53</sup> en subsidio de vejez.<sup>54</sup> Con la ley de 1 de septiembre “se inició un programa de previsión social estatal, aunque no se extendió a los trabajadores agrícolas hasta febrero de 1943...”<sup>55</sup> Tenía una trascendencia importante pese a su escaso peso por las dificultades para imponer un substrato normativo que impidiese a las empresas despedir al personal que por deficiencias en sus facultades físicas, fruto de la vejez o causas similares, vieran mermadas sus posibilidades para desempeñar el trabajo encomendado.<sup>56</sup> Pese a ello, en el mencionado año 1943 sectores como el de la minería de Almadén, de relevancia para la economía española, veían como sus empleados después de 35 años de servicios percibían 3,5 pts. diarias en concepto de jubilación; después de entre 25 y 30 años, 2,5 pts. y entre 20 y 25, 2 pts. Así pues, todos los ingresados después del año 1925 no adquirían derechos quedando al criterio discrecional de la empresa el concederles graciosamente 30 pts. como prestación única.<sup>57</sup>

La incapacidad del sistema para otorgar una pensión digna a los ancianos estuvo en el origen del desarrollo a partir de 1913 de los homenajes a la vejez creados en Cataluña por el director de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Barcelona, Francisco Moragas y Barret.<sup>58</sup> Éste era otro ejemplo de la beneficencia pública y se basaba en la creación de patronatos benéficos tutelados por el IN.P. que concedían pensiones a los ancianos desvalidos que quedaban fuera del campo de aplicación del Retiro Obrero. Con este fin, anualmente, se celebraban actos públicos que coincidían normalmente con las fiestas patronales y que servían para verificar el reparto de libretas de pensiones a los más desfavorecidos “procurando que dichas solemnidades fueran altamente reverenciales para la ancianidad y que, por su elevado contenido social, no pudieran confundirse nunca con otras de menor espiritualidad.”<sup>59</sup>

El Decreto de 18 de abril de 1947<sup>60</sup> y su Orden de 18 de junio del mismo año transformaron el subsidio en Seguro de Vejez e Invalidez incrementándose sus prestaciones con los Decretos-Ley de 2 de septiembre de 1955<sup>61</sup> y de 14 de septiembre de 1956. Por lo menos, hasta 1947 se puede afirmar que el trato a la vejez tuvo un marcado carácter benéfico y caritativo<sup>62</sup> dándose paralelamente un problema básico para los pensionistas como era el de la revalorización de sus,

ya de por sí, mínimas pensiones por debajo de los incrementos porcentuales de los salarios de la población trabajadora.<sup>63</sup>

Con respecto a la resistencia de los obreros a retirarse del ámbito laboral se puede encontrar un motivo determinante en la necesidad de los mismos de prolongar su período activo ante la dificultad para mantener un nivel de vida digno al depender de una pensión de jubilación normalmente limitada y exigua.

### ***15.2.2. Metas del seguro de vejez: el campo de aplicación y las prestaciones a los ancianos.***

En 1956, coincidiendo con los últimos meses de los ministerios Girón, el campo de aplicación del seguro de vejez e invalidez abarcaba a todos los trabajadores españoles por cuenta ajena, manuales o intelectuales, mayores de 14 años (fijos, eventuales o a domicilio) cuyas rentas del trabajo no excedieran de 40.000 pts. Se excluía a los servidores domésticos, funcionarios y obreros del Estado. Por la vía de los hechos, la agricultura, como en el resto de los seguros sociales, quedaba ampliamente discriminada. Su régimen especial, en el caso del seguro de vejez, se estableció el 26 de mayo de 1943 y se reformó por medio de la Orden de 17 de diciembre de 1947 (ver cuadro nº 98).<sup>64</sup> Esta disposición que, en principio, iba a solventar el problema de la aplicación en el campo del seguro de vejez, impuso una serie de requisitos que dificultaban el acceso de los agricultores a dicho seguro.<sup>65</sup>

Para los que alcanzasen la edad de jubilación	días de trabajo de fijos y autónomos	días de trabajo de eventuales.
de 1940 a 1943	300	600
en 1944	600	1.200
en 1945	900	1.800
en 1946	1.200	2.400

*“Cuadro nº 98. Criterios para la obtención del seguro de vejez para los trabajadores agrícolas (Orden de 17 de diciembre de 1947)”*

A partir del 1 de enero de 1947 el período de carencia representaba 1.500 días para los fijos y autónomos y 3.000 para los eventuales. Sin embargo, otro de los apartados de esta disposición estipulaba que era necesario alcanzar, entre el 1 de enero de 1940 y el 31 de diciembre de 1947 los 65 años de edad (o los 60 en caso de invalidez). Eso imposibilita que un productor, que cumpliera la edad establecida en 1940 percibiera los beneficios del seguro, dado que el período de carencia no se computaba más que a partir del 1 de enero de 1940 con lo que se veía obligado a continuar trabajando un año más en el caso de ser un trabajador fijo o autónomo. Si

era un trabajador eventual el período activo habría de prolongarse al menos dos años más en el mejor de los casos (dos años que podrían ampliarse por el carácter no continuo de este tipo de trabajadores).

A estos problemas legales se añadía la tremenda separación entre el campo español y las medidas de previsión social que el ministerio de Trabajo diseñó para otros sectores productivos. Así se lo comunicaba el Delegado Nacional de Sindicatos, Fermín Sanz Orrio, a Girón en oficio del 16 de junio de 1945:

“Pero no es menos evidente que la ignorancia de dichos productores por un lado, y la escasa difusión agravada con las distancias en que se encuentran muchas localidades y aldeas de los pueblos en donde aquellas fueron dadas a conocer, impidieron que miles de estos productores gozaran en la actualidad de los beneficios establecidos con tan amplio criterio laboral...*(por lo que solicita que)* se amplie el censo establecido por la repetida orden de 12 de enero de 1942 o, en su defecto se dicte una nueva en la que tengan acogida dichos ancianos...”<sup>66</sup>

Era el desarrollo de un censo con finalidades depuratorias lo que más preocupaba a los elementos sindicales en los enclaves rurales en que con más dificultad podía llegar el seguro de vejez. Ello no tanto porque se pudiera dar de baja a ancianos sin motivos, como era el caso, sino por el enorme “desprestigio” que suponía para la organización sindical en el campo español.<sup>67</sup>

El nivel adquisitivo de los pensionistas del seguro de vejez a principios de los años cincuenta era realmente bajo.<sup>68</sup> En la I Asamblea del I.N.P. se solicitaba que se elevase la percepción máxima a 1.750 pts. anuales en función del aumento del coste de la vida y del escaso poder adquisitivo de las percepciones recibidas.<sup>69</sup> Ello parecía escaso a algunas delegaciones, solicitando por ello que el límite se situase en las 2.500 pts., lo cual tampoco podía colmar las aspiraciones sociales de un sector de la población ahora inactiva. Sobre ello la ponencia de Segovia presentada a la I Asamblea del I.N.P. afirmaba lo siguiente:

“También se acordó elevar una propuesta según la cual debe desaparecer el actual subsidio de vejez -notoriamente insuficiente para cubrir las más perentorias necesidades de cualquier anciano trabajador- y que todos los productores españoles perciban su pensión de jubilación a través del correspondiente montepío, creando éstos para aquellos trabajadores que aún no lo tuvieran.”<sup>70</sup>

Y es que hasta 1947 la percepción diaria de los pensionistas era de 3 pts. lo cual, aparte de consideraciones puramente sociales, era profundamente antipolítico para algunos elementos del

sindicato. Con fecha 8 de enero de 1946 un procurador sindical en Cortes elevaba a las mismas una propuesta tendente a enmendar la legislación del subsidio de vejez con argumentos que no dejaban duda alguna sobre la efectividad de dicho subsidio:

“Son dos defectos capitales los que encontramos a primera vista y en este instante a nuestra legislación de protección a la vejez.

El primero el que la cuota de 3 pts. diarias es hoy insignificante. En el año 1939 tenía un valor superior la moneda como pieza de cambio, pero hoy ha disminuido realmente, y su capacidad adquisitiva en relación a los precios es menor en un tanto por ciento variable, pero sin duda equivalente en el mercado a un quinto si tomamos como comparación el año 1936...esta pensión vitalicia que hoy se les concede no alcanza como tal subsidio a cubrir las más elementales necesidades de la clase trabajadora...

...como segundo defecto...hallamos el de que los expedientes que se instruyen para la concesión del beneficio son hartos laboriosos ya que son gran cantidad los ancianos, que no habiendo tenido en su vida otra fuente de ingresos que su propio trabajo, hoy día por estas dificultades burocráticas que se multiplican porque los mismos incumplieron algún requisito que hoy exige su expediente o burlaron sus antiguos patronos que cerrilmente se niegan a darles las facilidades precisas para su inclusión en el censo, se encuentran con que en última instancia se les rechaza firmemente y sin esperanza alguna su ilusionada petición...dando entrada en su censo a muchos miles de trabajadores que hoy viven tristemente en una mendicante miseria...”<sup>71</sup>

En esta misma línea estaba Sánchez Monís:

“Por consiguiente, un seguro que presente soluciones desproporcionadamente reducidas, es un seguro totalmente ineficaz, incapaz de cumplir su función social, que de subsistir en tal estado por sólo el imperativo de la ley y la fuerza de la costumbre inerte, no sólo no colabora como debiera a la realización de una cumplida justicia social ni al establecimiento de una paz social nacida de ella, sino que servirá de instrumento de escándalo, de desprestigio y de descontento de cuantos con él se relacionan, sea como beneficiarios, sea como aseguradores o cotizantes.”<sup>72</sup>

La verdadera eficacia del subsidio de vejez podía ser medida por la percepción que del mismo tenían las autoridades del régimen. Entre las ponencias provinciales llegadas a la I Asamblea del I.N.P. la de Santander era plenamente ilustrativa de la conciencia de la efectividad de este seguro:

“...aunque sería de desear que se suprimiera el subsidio de vejez, puesto que, por un lado, las cantidades que se pagan por este subsidio son de muy poca importancia económica y por otro lado, que, en definitiva, las pensiones de jubilación tienden a garantizar la vejez del trabajador, creando la existencia de este subsidio una dualidad de prestaciones que prácticamente es innecesaria.

Además, coinciden los asistentes en señalar que el subsidio de vejez actual está tremendamente perjudicado por la adición al mismo como beneficiarios de los productores de la rama agropecuaria que, sin apenas tributación al mismo hasta ahora, sin embargo, han obtenido beneficios tremendos, estimando que de los mil millones que aproximadamente se cotizan por el seguro de vejez, más de setecientos cincuenta son percibidos por los trabajadores pertenecientes a la rama agrícola...ya que la rama industrial ha de cargar por lo menos con las tres cuartas partes de las cotizaciones precisas.”

En función de lo cual “...en la actualidad se está haciendo una revisión de los subsidios concedidos en el campo, habiéndose anulado multitud de expedientes aprobados.”<sup>73</sup>

Definición	Disposición ministerial	Requisito salarial	Benéficos mensuales	Cuotas
Régimen obligatorio	R.D. 11-3-1919	hasta 4.000 pts.	365 pts. al año a los que tuvieran menos de 45 años al afiliarse o devolución del capital ahorrado cuando excedieran de dicha edad	3 %
Subsidio de vejez	Ley de 1 septiembre de 1939	hasta 6.000 pts.	90 pts.	3 %
Subsidio de vejez	Orden de 6-10-39			
Subsidio de vejez	Orden 2-2-40			
Subsidio de vejez	Orden 6-12-41	hasta 9.000 pts	90 pts.	3 %
Seguro de Vejez	Decreto de 29-12-48	hasta 12.000 pts	90 pts.	3 %
Seguro de Vejez e Invalidez	Decreto 29-12-48	hasta 18.000 pts.	125 pts.	empresario 3% trabajador 1 %

*\*Cuadro n° 99. Evolución del seguro de vejez desde 1919 hasta 1948.<sup>74</sup>*

El escaso peso de las retribuciones generaba la impresión de que el régimen podía prescindir perfectamente del seguro de vejez y dejarlo en manos de las mutualidades. Y es que el seguro estaba demostrando una total ineficacia para cumplir las funciones que tenía encomendadas; su peso no difería esencialmente de la protección implantada en 1919. Podemos afirmar que se trataba de un seguro que se había convertido en “una ridícula donación asistencial”<sup>75</sup> dada la carencia de un verdadero sistema coercitivo sobre el sector empresarial que dotara al sistema de una eficacia inmediata y segura. De ahí la tendencia a abandonar las prestaciones por vejez a las mutualidades tal y como muestra el siguiente caso:

“Supongamos un productor que gane 700 pts. mensuales como promedio y su patrono haya venido cotizando por el durante 30 años, con lo que tendremos que, en un mes, habrá satisfecho 21 pts. y en un año 252. En 30 años su aportación alcanzará la suma de 10.080 pts.

Por este productor, en alguno de los montepíos creados, pongamos por ejemplo el de la Dependencia Mercantil, cuya cuota es del 12 % del salario, su patrono deberá abonar por los mismos 30 años trabajados 30.240 pts.

Es decir, que la diferencia es de 20.160 pts. cantidad que, de momento podrá parecer desproporcionada. Ahora bien, fijémonos en los beneficios obtenidos. Siguiendo en el supuesto de asignar un promedio de vida de 15 años, después de cumplir la edad reglamentaria de los 65 años,...”<sup>76</sup>

Pese a ello desde algunos sectores se consideraba que la evaluación médica de los ancianos de cara a conseguir su prestación por vejez o invalidez generaba desajustes financieros cuya raíz era la compasión que producían ante los médicos y las presiones de orden moral a las que supuestamente se veían sometidos los mismos. En consecuencia, para el sector menos asistencialista del I.N.P. el subsidio (luego seguro de vejez)<sup>77</sup> constituía un grave peligro para el sistema de previsión español.

El Decreto de 8 de enero de 1954 estipuló la ampliación del seguro de vejez e invalidez a los trabajadores por cuenta ajena con ingresos hasta de 30.000 pts. anuales, si bien disposiciones posteriores impedían que dicha norma fuera aplicada a los empleados con título universitario que realizasen en las empresas sujetas a reglamentación los trabajos propios de su profesión por cuenta y dependencia de la empresa,<sup>78</sup> a los trabajadores autónomos y del servicio doméstico.<sup>79</sup> El mencionado decreto se debía a la modificación substancial de un número importante de

reglamentaciones en un intento por parte de las autoridades del ministerio de Trabajo de acomodar los salarios a los costes de la vida lo cual dejaba fuera del campo de aplicación del seguro de vejez e invalidez a los que sobrepasaban la cifra de ingresos estipulada.<sup>80</sup>

La pensión mensual para los beneficiarios de este seguro perceptores de prestaciones a partir del 1 de enero de 1956 respondía a la siguiente escala mensual:

- Trabajadores por cuenta ajena de la rama general, pescadores con derecho a pensión de mutualidades y montepíos y trabajadores autónomos de la rama agropecuaria, 250 pts.

- Trabajadores por cuenta ajena de la rama general, pescadores sin derecho a pensión de mutualidades o montepíos y de la rama agropecuaria, 400 pts.

- Para los que se hubiesen jubilado con anterioridad al establecimiento de la normativa mencionada la cuantía era de 225 pts. para los del primer caso y de 300 pts. para los del segundo.

En cualquiera de los casos las prestaciones seguían siendo notablemente insuficientes estando “muy por debajo del nivel mínimo de subsistencia” por lo que se suponía que los ancianos seguían trabajando, que tenían otras fuentes de ingresos o que vivían a expensas de un familiar<sup>81</sup> lo cual, al menos en lo tocante a las dos primeras cuestiones, constituía una suposición muy alejada de la realidad.

Las condiciones para la obtención, por parte de la posible viuda del beneficiario, de una pensión con cargo a la Caja Nacional del Seguro de Vejez e Invalidez eran verdaderamente draconianas si tenemos en cuenta que aquélla había de tener cumplidos los 65 años de edad (en caso de tener más de 50 conservaba dicho derecho hasta que cumpliera la anterior edad) o encontrarse totalmente incapacitada para todo trabajo. A esta condición se añadían otros requisitos: que no tuviese derecho al Seguro de Vejez e Invalidez, que hubiese contraído matrimonio por lo menos con diez años de antelación a la fecha del fallecimiento del causante y que hasta la fecha del fallecimiento del esposo hubiera convivido con él, ya que en caso de separación sólo se concedía la prestación cuando aquélla no se hubiese producido por culpa de la mujer. En cualquiera de los casos la prestación para la viuda únicamente era la mitad (imposibilitando a ésta para trabajar legalmente) de la que hubiera recibido su marido, ya de por sí bastante reducida.

Tenían derecho a la petición de las prestaciones del Seguro de Vejez los trabajadores que hubieran llegado a la edad de 65 años. Además, habrían de haber satisfecho las cuotas

correspondientes al período de carencia (1.800 en 1957), habiendo de abonar las cotizaciones correspondientes hasta que concluyese tal período los trabajadores que al llegar los 65 años siguieran trabajando.

En el caso de la invalidez se disfrutaba una pensión de igual cuantía que la de vejez. Se definía la invalidez como la situación que provocara la pérdida de actividad de un trabajador imposibilitándole para obtener una retribución en un trabajo acorde a su capacidad e instrucción consistente en una tercera parte de lo que pudiera ganar un empleado de igual categoría y de instrucción análoga. No se consideraba como impedido para el trabajo a aquel cuya invalidez fuera imputable a él mismo o provocada por enfermedad profesional indemnizable o por accidente de trabajo.

Se exigía también que la afiliación al régimen fuera realizada con cinco años de antelación con respecto a la fecha en que se declaraba la invalidez. Se exigía igualmente un período de carencia de 1.800 días y que tuviera cincuenta años cumplidos, edad que se veía rebajada a los treinta en los casos de invalidez con pérdida total en partes esenciales de la extremidades inferiores o superiores, pérdida de movimientos semejantes a la resultante de la mutilación de las extremidades, pérdida total de la visión o enajenación mental no curable.

Continuaba, a pesar de persistir la percepción por invalidez, la capacidad de las empresas para contratar personal pensionista por aquél motivo pudiendo rebajar el salario mínimo estipulado en la misma cuantía de la pensión que se estuviera percibiendo.

Así pues, uno de los problemas esenciales con que se encontraba el subsidio de vejez era su escaso campo de aplicación. Por poner un ejemplo, y pese a ser un sector de población relativamente pequeño, todavía a la altura del año 1951 no se consideraba como perceptores de este subsidio a los nacidos con anterioridad al año 1875 que debieran haber sido los que con más intensidad reclamaran dicho subsidio.<sup>32</sup>

### ***15.2.3. Bases económicas del seguro de vejez.***

Según el Decreto de 12 de febrero de 1954<sup>33</sup> la cotización en el seguro de vejez se llevaba a cabo según los siguientes criterios:

- a) el 6 % del salario para la rama general (5/6 partes la empresa y 1/6 el trabajador)
- b) el 5 % en la rama de pescadores.
- c) En la rama agropecuaria se seguían los siguientes criterios para el establecimiento de la cuota de empresa:



- El 45 % de la riqueza imponible correspondiente a los no comprobados o rectificadas por la Hacienda después de 1922.
- El 22,5 % de la riqueza comprobada o rectificada.
- El 20,1 % de la riqueza imponible correspondiente a los términos municipales en que se aplicasen con carácter general nuevos tipos evaluatorios por riqueza rústica y pecuaria.

En el caso de los agricultores la cuota se situaba en 5 pts. para los trabajadores fijos por cuenta ajena y en la misma cantidad para los autónomos, ascendiendo a 2,2 pts. la cantidad establecida para los restantes.

En cuanto a su situación financiera el informe de la Dirección de Subsidios y Seguros Unificados del año 1951 ponía de manifiesto que la situación de este seguro era de extrema gravedad tras un decenio de existencia en función de una serie de consideraciones entre las cuales destacaba la insuficiencia del recargo sobre la contribución rústica y pecuaria como forma de financiar el subsidio de vejez en la agricultura y, por consiguiente, el crónico déficit de dicha rama que había de ser enjugado por el régimen general.<sup>64</sup> A ello se añadía el alto número provisional de expedientes de concesión del subsidio. Y ello sin tener en cuenta que en el momento de la realización del informe al que nos referimos quedaban por resolver aproximadamente 90.000 expedientes en la rama agropecuaria y el promedio de nuevos expedientes mensuales a favor de trabajadores del campo era de 10.000 al mes. La evidente falta de armonía entre las prestaciones potenciales y la financiación tenía como solución incidir en el sistema fiscal con el objetivo de incrementar los ingresos:

“El resultado de los cálculos efectuados fue el siguiente: según la Caja Nacional de Subsidios Familiares, los recargos establecidos del 15 % sobre la riqueza imponible correspondiente a valores no comprobados o rectificadas por la Hacienda después de publicada la Ley de 22 de enero de 1942, y del 7,5 % sobre la riqueza comprobada o rectificada, tanto en régimen de catastro como en amillaramiento, deberían ser fijados, respectivamente en un 40 % el primero y en un 20 % el segundo, aumentos que representaban un 166, 77 % sobre la base actual, según la Caja Nacional del Seguro de Vejez e Invalidez, los referidos coeficientes habrían de ser elevados al 49,65 % sobre los valores no comprobados y al 24, 82 % sobre los valores comprobados.”<sup>65</sup>

Este déficit sistemático estuvo en la base de la colaboración entre el ministerio de Trabajo y la organización sindical.<sup>66</sup> En esta línea, Francisco Norte (Asesor Nacional de Sindicatos) fue puesto al frente de una comisión cuyo objetivo era intentar la implantación en la rama agropecuaria de un seguro de vejez efectivo partiendo de la cotización de empresarios y trabajadores.<sup>67</sup> El objetivo de dicha comisión era hacer contributivo el seguro de vejez en el

campo para evitar la carga que gravitaba sobre el sistema general (industrial) y poner fin al sistema especial que regía en la agricultura desde el 6 de noviembre de 1943.

Otra de las soluciones posibles era la ayuda estatal ante lo cual las autoridades no manifestaban, a principios de los años cincuenta, especial predilección. La vía que más simpatía originaba consistía en la no elevación de los tipos impositivos sobre los empresarios agrícolas y en la ausencia de potenciación de la financiación estatal. Por el contrario, el planteamiento que más predilección generaba era el de la depuración del censo de pensionistas y el incremento de las exigencias para el disfrute de la pensión entre los trabajadores del campo español. En este orden de cosas el I.N.P. era consciente de que era frecuente que las autoridades locales o algunos elementos patronales otorgaran certificaciones que permitían a algunos trabajadores del campo percibir la pensión a que nos referimos. Fue esto, al menos en parte, lo que provocó que ya en 1950 comenzara la depuración del censo, no tanto por las posibles desviaciones de la normativa vigente sino por la necesidad de sanear las arcas de la caja nacional y evitar un posible colapso de este seguro pese a lo cual dicha depuración se cumplió sólo parcialmente. Otro de los caminos propuestos era la creación de un censo laboral (implícitamente exigido desde 1943) que a la altura de 1951 no se había creado. Por ello, "es de todo punto evidente que si a lo que se aspiraba era a la formalización de un censo que fuese fiel reflejo de la realidad o lo más aproximado a ella, sería aconsejable desligar, de momento, al inscripción en el censo, de dichas operaciones recaudatorias. Lo contrario traería como consecuencia una intensa corriente abstencionista o desinscribitoria para eludir el consiguiente pago de las cuotas."<sup>88</sup>

#### Ejercicio 1940

Régimen general		Diferencia
Ingresos	241.197.474,40	
Pagos	103.329.917,71	-137.867.556,69

#### Ejercicio 1941

Régimen general		Diferencia
Ingresos	166.134.300,51	
Pagos	172.521.319,20	-6.387.018,69

#### Ejercicio 1942

Régimen general		Diferencia
Ingresos	175.743.698,73	
Pagos	171.209.092	4.534.605,96

#### Ejercicio 1943

Régimen general		Diferencia
Ingresos	196.903.146,69	
Pagos	178.633.326,38	18.269.820,31

## Ejercicio 1944

Régimen general		Diferencia
Ingresos	217.879.777,34	
Pagos	180.130.467,21	37.749.310,13
Rama agropecuaria		
Ingresos	22.230.000,00	
Pagos	-----	22.230.000,00
Total		
Ingresos	240.109.777,34	
Pagos	180.130.467,21	59.979.340,13

## Ejercicio 1945

Régimen general		Diferencia
Ingresos	230.601.172,93	
Pagos	191.378.694,72	39.222.478,21
Rama agropecuaria		
Ingresos	-----	
Pagos	7.124.065,50	-7.124.065,50
Total		
Ingresos	230.601.172,93	
Pagos	198.502.760,22	32.098.412,71

## Ejercicio 1946

Régimen general		Diferencia
Ingresos	259.102.505,44	
Pagos	190.970.692,84	68.131.812
Rama agropecuaria		
Ingresos	-----	
Pagos	37.539.869,11	-37.539.869,11
Total		
Ingresos	259.102.505,44	
Pagos	228.510.561,95	30.591.943,49

## Ejercicio 1947

Régimen general		Diferencia
Ingresos	309.963.469,85	
Pagos	217.970.019,24	91.993.450,61
Rama agropecuaria		
Ingresos	-----	
Pagos	23.499.650,84	-23.499.650,84
Total		
Ingresos	309.963.469,85	
Pagos	241.369.670,08	68.493.799,77

## Ejercicio 1948

Régimen general		Diferencia
Ingresos	362.525.515,76	
Pagos	221.148.024,11	141.377.491,65
Rama agropecuaria		
Ingresos	2.565.180,08	
Pagos	49.373.330,30	-46.808.150,22
Total		
Ingresos	365.090.695,84	
Pagos	270.521.354,41	94.569.341,43

## Ejercicio 1949

Régimen general		Diferencia
Ingresos	539.828.186,04	
Pagos	270.194.053,22	269.634.132,82
Rama agropecuaria		
Ingresos	60.742.663,33	
Pagos	252.278.335,30	-191.535.671,97
Total		
Ingresos	600.570.849,37	
Pagos	252.278.335,30	78.098.460,85 <sup>99</sup>

## Ejercicio 1950

Régimen general		Diferencia
-----------------	--	------------

Ingresos	778.784.938,64	
Pagos	449.578.264,66	329.206.673,98
Rama agropecuaria		
Ingresos	174.364.678,75	
Pagos	661.457.429,68	-487.092.750,93
Total		
Ingresos	953.149.617,39	
Pagos	1.111.035.694,34	157.886.076,95

*\*Cuadro n° 100. Relación de ingresos y gastos del subsidio de vejez e invalidez de 1940 a 1950.*

La realidad financiera del seguro de vejez ponía de manifiesto que en 1950 atravesaba por una grave situación. El déficit tenía también su raíz en el hecho de que las obligaciones de pago eran muy superiores a las disponibilidades del I.N.P. Y es que para 1951 había 50.000 subsidiados con derecho a percibir atrasos que hasta el 1 de enero de 1951 representaban 150 millones.<sup>90</sup>

La realidad de la situación financiera del seguro era bien distinta de la que pudiera parecer en un principio; sobre todo si se tiene en cuenta la coordinación entre las propias instancias del seguro. Si se compara el déficit de la rama agropecuaria del siguiente cuadro se observará que las cifras no son coincidentes con las del cuadro precedente (ver cuadro n° 100).<sup>91</sup>

Años	Déficit (en pts.)
1948	38.083.640,34
1949	168.991.336,62
1950	452.518.542,26
1951	556.876.069,87
1952	575.016.387,16

*\*Cuadro n° 101. Déficit de la rama agropecuaria del seguro de vejez e invalidez.<sup>92</sup>*

Las razones de dicho desfase obedecían al hecho de que hasta el año 1952 los trabajadores agropecuarios no habían hecho aportación alguna al seguro. Por otro lado, al comenzar a cotizar lo obtenido de sus recursos se dedicaba exclusivamente al seguro de vejez; y además hay que tener en cuenta que la cotización patronal era muy inferior en este seguro a la de los empresarios del sector industrial.

Concepto	rama industrial	rama agropecuaria	total
aportación patronal	941.000.000	203.000.000	1.144.000.000

cotización obrera	234.000.000		234.000.000
total	1.175.000.000	203.000.000	1.378.000.000
asegurados	3.900.000	3.500.000	7.400.000

*\*Cuadro n° 102. Ingresos por seguros sociales de 1952.*

	rama industria	rama agropecuaria
subsidio familiar		
a) beneficiarios	456.000	700.000
b) total de ingresos	1.000.000.000	200.000.000
coeficiente b:a	2.193	286
subsidio de vejez		
a) beneficiarios	215.000	360.000
	710.000.000	100.000.000
coeficiente b:a	3.214	278

*\*Cuadro n° 103. Relación beneficiarios-ingresos en el subsidio familiar y en el seguro de vejez.*

Comparadas estas cifras (cuadro n° 103) se observa que con un censo más o menos igual, el fondo financiero de la rama industrial es casi seis veces superior que el de la rama agrícola. Por otro lado, para un censo, como se ha dicho similar, el número de beneficiarios es casi el doble en la rama agropecuaria. Es decir, que el censo de subsidiados se hallaba recargado de una forma superior a su capacidad de sostenimiento, entre otros motivos por la entrada de autónomos lo cual, para las autoridades, indicaba la necesidad de una depuración que, como se ha mencionado, comenzó en el año 1950. Pese a ello la depuración sólo suponía un descenso del censo del 7 % compensado con la adquisición de derechos de prestación de otros 60.000 subsidiados para el año 1952.<sup>93</sup>

Téngase en cuenta el estado caótico de la propia institución. Las cifras correspondientes al año 1952 utilizadas hasta ahora corresponden a la revisión de la memoria de ese mismo año. La utilización de la memoria en sí aporta un déficit de casi 246,5 millones de pts.<sup>94</sup> Lo relevante resulta de la comparación de la revisión de esta memoria con la cifra expuesta en el sentido de que tan sólo el déficit en la rama agropecuaria significaba más de 575 millones de pts. confesados. Y es que esta rama, la agropecuaria no generaba suficientes recursos. Es más, absorbía los excedentes de la rama general y de las reservas.<sup>95</sup> Aparte de la desproporción entre ingresos y gastos hay que tener en cuenta el factor de la carestía de vida que progresivamente iba a generar una mayor presión sobre las prestaciones impulsando a muchos a solicitar su inclusión, pese a que hasta ese momento no habían recurrido al seguro "por el reducido importe de la pensión"<sup>96</sup> habiendo desechado los beneficios del mismo siguiendo en su trabajo por

cuenta ajena mientras les aguantara el cuerpo. La nueva coyuntura abría el camino al empleo precario paralelamente a la búsqueda de prestaciones extras por medio del seguro o cualquiera otras posibles. La única solución parecía ser la de recurrir al mencionado crédito o al equilibrio con los fondos de seguros de salud inquebrantable como el subsidio familiar que se había tornado con el paso de los años en un instrumento ineficaz para elevar el nivel de vida de las familias españolas pero muy útil de cara a suplir los déficits sistemáticos de los demás seguros.<sup>97</sup>

En el año 1954 la realidad financiera del seguro de vejez e invalidez había cambiado drásticamente. El saldo desfavorable sobre los pagos no superaba los seis millones de pts. En la rama general el excedente ascendía a 554.851.601,33 pts. fruto, tanto de la mayor recaudación de cuotas como de la incorporación al régimen de nuevos cotizantes. Igualmente resultaba inestimable la "ayuda" de las delegaciones y agencias del I.N.P. y de la banca a la hora del cobro de las cuotas. En el caso de la rama de trabajadores del mar el déficit fue de 8.666.235,18 de pts., 2.533.957,65 pts. más que el año anterior. Por último, en la rama de invalidez el déficit ascendía a 87.513.561,21 pts. (41.419.045,08 en 1953) y en la rama agropecuaria el déficit era de 464.115.268,78 pts. Con respecto al año anterior había descendió en 40.408.140,51 pts.

En esta última rama (la agropecuaria) persistía el mismo problema. Era absolutamente imposible controlar el agro español porque no había voluntad política para establecer un aparato estadístico riguroso que sirviera de base para el control y evaluación de las cifras sobre las que trabajaba la técnica actuarial. Pero además hay que considerar que la recaudación obtenida por medio de la aportación del trabajador-agricultor era un tercio de la calculada inicialmente (en torno a los 150 millones de pts).<sup>98</sup> El agricultor español estaba en una situación real tal que, independientemente de los incumplimientos de las leyes sociales por parte de los empresarios, su capacidad para cotizar era excepcionalmente reducida. Por otro lado, el subempleo y el desconocimiento de los derechos de los mismos agricultores fomentaba esta realidad incuestionable que rebajaba de forma radical los supuestos logros sociales del régimen en una España en la que todavía más del 50% de la población activa estaba en el campo. Las soluciones dadas por el I.N.P. a tal situación seguían siendo puramente técnicas. Se seguía cacareando sobre la necesidad de aumentar la depuración del censo, concretamente en lo referente a la población agrícola.

En los mejores resultados del I.N.P. influyó igualmente el hecho de que la recaudación de las cuotas se había centralizado en las oficinas del I.N.P. evitando con ello la posible morosidad por parte de las antiguas entidades gestoras. Sin embargo, surgía un nuevo peligro en función del Decreto de 16 de junio de 1954 que implicaba mayores prestaciones al establecer una

pensión complementaria para los pensionistas por incapacidad permanente y absoluta del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales pero con cargo al seguro de vejez.

Como conclusión la comisión evaluadora del balance del año 1954 determinaba lo siguiente:

“El examen de las distintas cuentas de resultados y la comparación de sus partidas con el ejercicio anterior, demuestra que el exceso de recaudación de la Rama General puede cubrir, ampliamente los déficits de las otras ramas, y especialmente el de la rama agropecuaria, (porque las restantes son obligaciones generales del régimen) que viene siendo disminuido, de año en año, gracias a la mejor recaudación del recargo sobre la contribución rústica y pecuaria y por la extrema vigilancia ejercida sobre el pago de las prestaciones y sobre el reconocimiento de los derechos a la percepción del subsidio.”

De todo ello se puede deducir que era un sector concreto de la población trabajadora el que financiaba el sistema, no siendo éste el mayoritario, lo cual no quiere decir que la presión efectiva sobre los empresarios fuera homogénea. Esta presión era más fácilmente ejercitable (si verdaderamente lo era cosa dudosa por el escaso desarrollo del sistema estadístico y de inspección) entre los empresarios industriales, no así en el ámbito de los grandes propietarios agrícolas. En consecuencia, hay que poner en duda el incremento del control sobre los ingresos. Verdaderamente lo que si constituía la norma desde el comienzo de los años cincuenta era el incremento de la presión sobre las prestaciones por medio del rigor a la hora de exigir los documentos acreditativos que daban derecho a la pensión; es decir, era la llamada “depuración” del censo lo que mantenía una parte importante de la población en edad de jubilación (sobre todo en el campo) en unos niveles de subempleo ante la dificultad para demostrar sus derechos y ante la escasa capacidad adquisitiva que proporcionaba el seguro en el caso de obtenerlo.

Para el año 1955 la situación de los ingresos previstos era de 1.316.621.688 pts. lo cual en principio prolongaba la situación de falta de agobio de los años anteriores.<sup>99</sup> En 1956 las personas aseguradas por el seguro de vejez e invalidez ascendían únicamente a 8.147.426. La cifra de beneficiarios era de 807.432 según el I.N.P. todo lo cual, en función de su escaso campo de actuación, coadyuvaba a la mejor salud financiera del sistema por medio del mecanismo del recorte.<sup>100</sup> Como habitualmente sucede con los datos estadísticos de relevancia política, cuales eran estos relacionados con el seguro de vejez, tenemos que volver a insistir en lo dudosamente aceptables que pueden ser los mismos. En el cuadro que a continuación incluimos las cifras mencionadas varían significativamente rebajando las obtenidas de la conferencia dada por el Presidente del I.N.P., Labadie Otermin.

Año	Asegurados	Subsidiados
-----	------------	-------------



1941	1.902.495	167.269
1942	2.004.467	171.059
1943	2.283.452	179.075
1944	2.383.134	282.015
1945	2.524.896	276.174
1946	2.028.311	300.944
1947	2.079.287	303.551
1948	2.183.621	285.395
1949	1.965.315	356.772
1950	2.403.318	519.909
1951	2.341.511	564.288
1952	2.944.187	679.114
1953	2.698.078	679.065
1954	2.929.203	665.799
1955	2.970.004	693.387
1956	3.299.243	735.195
1957	3.367.448	817.266

\*Cuadro n° 104. Asegurados y subsidiados del seguro de vejez de 1941 a 1957

Este desfase sólo se podía combatir con una evolución contradictoria del seguro de vejez. Por un lado, aumentaba el número de afiliados, no tanto en función del establecimiento de nuevas empresas como de la tendencia por parte del I.N.P. a simplificar el procedimiento de afiliación y recaudación. Ello producía la eliminación de una parte de la ocultación de empresas que no cumplían sus obligaciones de cotización con el seguro.<sup>101</sup> Sin embargo, el número de obreros afiliados en 1946 había sido de 496.585, un 19,67 % menos que en 1945. Ello era fruto únicamente del aumento experimentado en los salarios, lo cual provocaba que un porcentaje paulatinamente mayor de los trabajadores quedara fuera del campo de aplicación del seguro por exceder sus salarios de 9.000 pts. anuales. A partir de este año se marca una tendencia sorprendente en el sentido de que se pasa de algo más de 2,5 millones de afiliados en 1945 a algo más de dos en 1946 hasta llegar en 1949 a la cantidad de 1.965.315 fruto, en gran medida de la depuración del censo.

a) Ingresos	1956	1957
recaudación cuotas patronal y obra	456.413.372,41	555.335.443,27
50 % subvención del estado	11.513.900,02	11.513.900,02

suman los ingreso	467.927.272,43	566.849.343,29
a deducir gastos de administración	22.819.205,30	27.766.772,15
ingresos líquidos	445.108.067,13	539.082.571,14

b) Gastos		
importe subsidio de vejez	1.253.510.460,07	1.752.858.708,51
importe subsidio de invalidez	73.006.207,96	101.002.690,51
importe subsidio de viudedad	493.263,52	5.106.015,57
suma	1.327.009.931,55	1.858.967.414,59
gasto de administración	62.675.523,00	87.642.935,43
total gastos	1.389.685.454,55	1.946.610.350,02

c) Liquidación		
déficit del ejercicio	944.577.387,42	1.407.527.778,88
a cargo del I.N.P.	485.591.775,73	485.591.775,73
a cargo del Estado	458.985.611,69	921.936.003,15

*\*Cuadro n° 105. Evolución del seguro de vejez a lo largo de 1956 y 1957 valorado en pts*

La intensificación de la crisis financiera del seguro de vejez a partir de 1955 estaba relacionada con el Decreto-Ley de 2 de septiembre de 1955. Dicho decreto estableció la prestación mensual en 250 pts. para evitar la posible tensión social originada por la pérdida sistemática de capacidad adquisitiva.<sup>102</sup> En el caso del seguro en el ámbito agrario, se fijó una cuota para los trabajadores de 10 pts. y se elevó el recargo para los empresarios agrícolas en la contribución rústica. Todo ello resultó absolutamente insuficiente para cubrir las prestaciones del seguro. Así el déficit ascendió en 1956 a 458.985.611,69 pts. y en 1957 a 921.936.003,15 pts.

### 15.3. El difícil camino hacia el seguro de paro.

A nivel mundial los años treinta forman parte de un período en que se intensifican las medidas estatales para instituir un sistema organizado de seguro de paro para los desempleados con el objetivo de dejar atrás las diversas formas caritativo-benéficas o asistenciales que constituían el único sostén económico ante la pérdida del trabajo. "El mismo impulso que llevó a mejorar los sistemas ya existentes apareció nuevamente después de la II Guerra Mundial, ante el peligro de

un grave desempleo”<sup>103</sup> aunque en el caso de España hay que incidir en la necesidad de justificar la permanencia del régimen teniendo como fundamento la política social global y concretamente la de empleo, independientemente de los resultados obtenidos.

Aunque ya se había implantado con resultados muy modestos el régimen de libertad subsidiada<sup>104</sup> con la Ley de Presupuestos de 1912 y el Real Decreto de 27 de abril de 1923, el desarrollo de un seguro de paro tiene su primer antecedente lejano en la idea de crear en 1890 unas Oficinas de Colocación y en 1919 (Real Decreto de 18 de marzo) con la concesión por parte del Estado de una subvención a las organizaciones mutualistas de trabajadores que se dedicasen al ejercicio del seguro de paro. El siguiente paso se encuentra en la Ley de Presupuestos del año 1922, la cual establecía posibilidades de subvención a entidades que ejerciesen este tipo de seguro. Este paso tuvo como fundamento la ratificación el 13 de julio de 1922 del Convenio de Washington. Así pues, se autorizó un crédito de 500.000 pts. para subvencionar un sistema oficial de seguro de paro a las asociaciones que practicasen entre sus afiliados el mencionado seguro.

Por Real Orden de 29 de abril de 1928 el Instituto Nacional de Previsión formuló un proyecto de subsidio contra el paro aunque la primera realidad tangible en torno a esta cuestión se materializó con la creación de la Caja Nacional contra el Paro Forzoso el 25 de mayo de 1931 por parte del I.N.P. Esta disposición fue derogada por la Ley de 25 de noviembre de 1944.<sup>105</sup> Entre sus misiones estaba la de recoger y recopilar datos estadísticos, asesorar al gobierno sobre estos temas, difundir y fomentar la previsión contra el paro, estudiar un sistema de seguro y bonificar a las entidades que se dedicasen al ejercicio de este tipo de seguros de paro.<sup>106</sup> A pesar de crear la mencionada Caja Nacional contra el Paro Forzoso se excluía del concepto de paro el producido por incapacidad física (bien fuera enfermedad profesional, accidente, invalidez o vejez) así como el originado por conflictos del trabajo. La caja subvencionaba a las entidades que concediesen indemnizaciones de paro sin fines de lucro. Para que dichas entidades disfrutasen de dicha financiación habían de formar un fondo de solidaridad con un 5 % de sus fondos y las bonificaciones recibidas podían ascender al 50 % de la cantidad que la entidad abonase a sus afiliados, los cuales habían de tener entre los 16 y los 65 años de edad y cobrar un sueldo inferior a 6.000 pts. Este auxilio tenía una duración máxima de 60 días y nunca podía superar el 60 % del salario.

El siguiente paso se dio en junio de 1935. En este año la Ley de 25 de junio creaba la Junta contra el Paro cuya misión era la de informar a los departamentos correspondientes y proponer al Consejo de ministros la realización de obras con el objetivo de disminuir el paro. El objetivo era luchar contra el desempleo por medio de la construcción de caminos vecinales, alumbramiento, abastecimientos de aguas, saneamientos, etc., potenciando dichas obras por medio de subvenciones estatales. El presupuesto de este departamento entre 1935 y los primeros meses de 1936 ascendió a 200 millones (65 durante 1935).<sup>107</sup> Con lo cual llegamos a la Ley de 25 de noviembre de 1944 que creó la Junta Nacional del Paro presidida por el ministerio de Trabajo cuyas Juntas Provinciales eran dirigidas por los gobernadores civiles.

El escaso desarrollo de la previsión social en torno a la cuestión del paro se puede entender desde el punto de vista de los problemas técnicos que la puesta en práctica de un seguro de este tipo y de base nacional podía acarrear. Pero de igual manera, hay que partir de la incidencia de factores de tipo ideológico que hacían del trabajo la verdadera panacea para el hombre, paralelamente a la percepción dentro de un régimen, como el franquista, que veía en todo lo que era la previsión un sistema de incentivación de la vagancia y, por tanto, un último recurso. Por otro lado, se partía de la creencia sin fundamento riguroso de que no existía necesidad de implantar el seguro de paro porque dicho problema no se había presentado con agobio, según el ministerio de Trabajo.<sup>108</sup> Se tenía la idea de que con un seguro de paro se potenciaba una política de subsidios que hacía que el obrero en paro perdiera progresivamente el hábito del trabajo y que lo transformaba en "un pensionista" sin afán ni mentalidad para desarrollar su actividad profesional, lo cual podía resultar extremadamente peligroso en países "en que la pereza es tradicional,"<sup>109</sup> en alusión directa a España.

Esta era la opinión de uno de los Subsecretarios del ministerio de Trabajo que en cierta manera transcribía el planteamiento del propio Girón de Velasco:

"Vemos, pues, señoras y señores, que se trata de estudiar y resolver el problema del paro por su peligrosidad social y por los males sociales y económicos que ello reporta, y de ahí que, como se encuentra ausente la idea de la justicia social, se considere como panacea para remediar este mal la Previsión y el Seguro Social, que para nosotros es el último extremo al que hemos de acudir, y siempre con carácter transitorio, pues como entendemos que no es justo que se pueda negar el derecho al trabajo, sólo mientras el

Estado cumple el deber de proporcionar la ocupación puede hacer uso del Seguro o Subsidio contra el paro.”<sup>110</sup>

Otra expresión del nulo aprecio por el seguro de paro lo tenemos en el siguiente párrafo:

“La lucha contra el paro ha inspirado a los gobernantes de todos los países las más diversas fórmulas neutralizadoras de esta plaga social de nuestro tiempo. En algunos países se ha llegado a establecer el Seguro contra el Paro, entendido como seguro social y, por tanto, dirigido por el Estado y con participación del empresario y del productor en la prima. La práctica ha condenado este sistema, cuyos resultados en lo económico, en la moral del trabajador y en la política de los pueblos que lo establecieron ha sido catastrófico.”<sup>111</sup>

En esta línea se hallaban las opiniones del máximo responsable del sistema de colocación de la Delegación Nacional de Sindicatos. Nos referimos a José Redondo Gómez, Jefe Nacional del Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación que justificaba la poca relevancia dada al seguro de paro con una apología sobre los supuestos resultados obtenidos en el ámbito de la colocación como forma eficiente de luchar contra la lacra de esta enfermedad social:

“No cabe discusión alguna en torno a la superioridad que, en todos los órdenes económico-laborales tiene la colocación como medio de combatir el paro sobre cualquiera otros procedimientos y métodos, toda vez que se trata de un método de combate directo que ataca el problema en su mismas causas productoras.”<sup>112</sup>

Y argumentando en el mismo sentido, afirmaba López Valencia<sup>113</sup> que la “experiencia enseña que, aunque parezca una paradoja, el único remedio contra el paro es proporcionar trabajo a quienes no lo tienen. Así lo hizo Alemania, a partir de la instauración del socialismo nacional, consiguiendo, no sólo eliminar el paro, sino alcanzar una situación de escasez de mano de obra, aun antes de que la guerra aumentara considerablemente su demanda. Esto se consiguió con la reorganización de la economía, la revalorización de la producción agrícola, la iniciación de grandes obras públicas y de regeneración del utillaje nacional, y sobre todo, con la paz social, producto de un régimen más justo en la organización del trabajo, aspectos básicos en los que parece estar inspirada la política de colocación obrera del nuevo Estado español.”<sup>114</sup> En consecuencia, la alternativa eran las obras de caridad irregularmente repartidas.<sup>115</sup>

Es fundamental este planteamiento puesto que el empleo total era considerado como el factor fundamental para la consecución de la paz social y como el determinante básico para apaciguar

los espíritus, para evitar la lucha de clases y para disciplinar a las masas trabajadoras e imponer el orden y la armonía en el país.<sup>116</sup>

Aparte de consideraciones puramente técnicas, ese es el motivo por el cual el seguro de paro, cuando se diseñó, cubrió un espectro tan limitado de situaciones. Por un lado, se consideraba que este fenómeno no tenía trascendencia en el caso español, que la base para su solución estaba en la creación de trabajo. Pese a ello se consideraba la necesidad coyuntural de instalarlo pero con diseños tan peculiares como el de Arias, que en el Boletín de Información del I.N.P. publicaba un artículo en el que defendía la necesidad de instalar un seguro que cubriera el riesgo de paro involuntario basado en las prestaciones en “especie” porque “el subsidio de paro debe cubrir las dos necesidades naturales al hombre: comida y habitación...la prestación en especie así concedida es de estricta y cristiana justicia...”<sup>117</sup> Y es que la cuestión del paro se media no según un criterio de previsión sino de rigurosa caridad, amparándose en que no era posible aplicar la técnica actuarial a dicho “seguro”<sup>118</sup> aunque la realidad es que se temía fundamentalmente su coste y la incidencia que pudiera tener una financiación del mismo al indisponer a sectores empresariales contra el Estado.<sup>119</sup>

Y es que, citando al mismo autor, parecía que el establecimiento de un seguro contra el paro llevaba aparejado el reconocimiento por parte del Estado franquista del fracaso de lo que mayormente podía justificar su permanencia indefinida en el poder.<sup>120</sup> Partiendo de este argumento el seguro de paro había de ser un “medio secundario en la lucha contra el paro forzoso”<sup>121</sup> y en consecuencia, resultaba evidente la imperfección del sistema político y económico que resultara incapaz de absorber la mano de obra nacional, de ponerla a producir generando beneficiosos efectos para el resto de la comunidad. Nos referimos a la política social en un sentido global y a la política de empleo más concretamente:

“...establecer una Ley de Seguro contra el Paro equivale a una declaración solemne del fracaso del Estado para resolver mediante adecuadas reformas del sistema económico, el mencionado problema. Es algo equivalente bajo el aspecto de la política estatal económica, a lo que sería en relación con el orden público el que el Estado estableciese un Seguro Obligatorio contra el riesgo de motín o revolución; es decir, que un Seguro Social contra el paro es el reconocimiento por el Estado de su impotencia absoluta para desarrollar una eficaz política económica.”<sup>122</sup>

En torno a la cuestión puramente técnica se planteaba el problema del cálculo del riesgo dado que todo seguro había de estudiarse sobre una base que sirviera de estructura a su construcción técnica y jurídica. Esta cuestión tenía dificultades para su cálculo y más en un país con un gran peso de lo rural y, por tanto, sometido especialmente a los vaivenes de la producción agrícola y

ganadera. Lo fundamental, en el aspecto técnico, era la carencia de estadísticas. A ello se pueden añadir otros factores, que por otra parte, no han perdido vigencia con el paso de los años: "... pensemos en los trabajadores típicamente eventuales, de un modo especial en los del campo, en los que puedan realizar trabajos a domicilio, en los núcleos familiares en que algunos elementos no autónomos económicamente trabajan y otros no, etc., y con todo ello quedará suficientemente fundamentada esta primera dificultad para la implantación de un seguro de paro."<sup>123</sup> De ahí que formalmente se pretendiera luchar contra el paro endémico del campo español por medio de fórmulas como las obras públicas en dosis muy controladas y esencialmente mínimas, basadas en préstamos como los concedidos por la Comisaría Nacional del Paro. Este sistema pretendía ser "una modalidad de seguro indirecto"<sup>124</sup> frente a dicho riesgo concediendo a municipios o "entidades de solvencia moral y económica" préstamos cuyo fin era realizar obras que generasen puestos de trabajo. Pero estas causas no eran las únicas esgrimidas desde los órganos de expresión del ministerio de Trabajo. Se consideraba también que el trabajador español carecía de un verdadero sentido de responsabilidad para no potenciar el fraude y la falta de solidaridad de los propios trabajadores que, supuestamente, se negaban a implantar este seguro.<sup>125</sup>

Y es que las bases económicas sobre las que había de ser trazado debían basarse en índices elevados, lo cual encarecía y podía originar graves problemas de aceptación en el mundo empresarial que veía en el régimen un sólido soporte de sus intereses. Por otro lado, la distinta incidencia con que se presentaba el problema del paro hacía que, como se puede observar en la época en que Girón fue ministro, los seguros de paro desarrollados tuvieran una base profesional. Así, la década de los 40 y 50 estuvo presidida por la ausencia de un seguro contra el paro que mantuviera mínimamente el nivel de vida de los agricultores españoles y ello pese a que la "realidad presente del agro español, fuente principal del paro, era la de una masa primitiva y rutinaria y una distribución de la propiedad con rasgos acusados de feudalismo y arbitrariedad."<sup>126</sup>

Como resultado de lo anteriormente expuesto, se puede concluir que no existía un seguro de paro, y menos aún una estructuración del mismo en un plan general de seguridad social; sólo promesas que no se desarrollaron en su integridad.<sup>127</sup>

De todo ello podríamos deducir que la realidad era que en España no había problema de paro. Sin embargo, como en otro capítulo de esta tesis se ha estudiado, el nivel de paro real de nuestra economía estaba muy por encima de lo oficialmente reconocido hasta el punto de que según París Eguilaz el número de parados en 1950 (sin incluir mujeres, ni considerar el paro parcial de ciertos sectores industriales no recogidos en las estadísticas oficiales) daba como resultado un número de desempleados en torno al millón cien mil.<sup>128</sup> Así pues, el mencionado

autor calcula que un subsidio de paro de 8 pts. diarias ascendería a 3.358 millones de pts., gasto que el Estado no estaba dispuesto a realizar.

### ***15.3.1. El Seguro de Paro Tecnológico.***

Fue creado por Decreto de 16 de junio de 1954 y desarrollado por la Orden de los ministerios de Trabajo e Industria de 31 de marzo de 1955. Iba a ser el de mayor trascendencia una vez comenzado el proceso de semi-industrialización español dado que “el progreso técnico produce paro por falta de habilidad técnica de los trabajadores...”<sup>129</sup> Suponía este seguro de paro un subsidio equivalente al 75 % del salario base (al cual se añadía durante doce mensualidades como máximo el mismo porcentaje del plus) para los trabajadores al servicio de una empresa que hubiese sido autorizada por el ministerio de Trabajo (previo informe del de Industria) debido a la introducción en ella de mejoras técnicas o nuevos métodos en el trabajo que persiguieran el mismo fin y que generasen incrementos en la productividad. Quedaban excluidos de esta normativa los empleados de empresas agrícolas, lo cual en absoluto podía incentivar la alteración de las estructuras más tradicionales del campo español. En este sentido, dentro del sindicato se tenía la percepción de que, dada la magnitud creciente del fenómeno del desempleo, el seguro de paro tecnológico sería básicamente “insuficiente”<sup>130</sup> para afrontar con garantías dicho problema.

Administraba este seguro la Caja Nacional del Seguro de Paro Tecnológico del Instituto Nacional de Previsión cuyos gastos se nutrían de una cuota del 0,35 % sobre los salarios bases vigentes y que corría a cargo de las empresas, recaudándose con la cuota de los seguros sociales unificados. El Decreto de 23 de marzo de 1956 hacía desaparecer la cotización de este seguro manteniéndose la situación de protección especial al paro tecnológico, pero soportando su carga los fondos acumulados mientras la cotización estuvo en vigor.<sup>131</sup>

### ***15.3.2. El Seguro de Paro por Escasez de Energía Eléctrica.***

Fue creado por el Decreto-Ley de 3 de agosto de 1945 y modificado por el de 25 de septiembre de 1953.<sup>122</sup> Sólo adquiriría carácter permanente años más tarde, fuera ya del estudio de este tesis, por el Decreto de 24 de enero de 1958. La falta de voluntad política para hacer del seguro una institución permanente se ponía de manifiesto de forma clara en este caso. Así, en el año 1951, y como consecuencia de las menores restricciones y de las perspectivas positivas para el año 1952, se derogó por Decreto de 28 de marzo de 1952<sup>133</sup> suprimiéndose la Caja de Compensación de Paro por Escasez de Energía Eléctrica. A su vez, por medio de la Orden de 30 de diciembre de 1952<sup>134</sup> se suspendía la exacción del recargo establecido en favor de la



mencionada Caja. Sin embargo por Decreto-Ley de 25 de septiembre de 1953<sup>135</sup> se tuvo que restablecer instaurándose un recargo por consumo de energía eléctrica.<sup>136</sup>

Este seguro equivalía, tras el Decreto de 25 de noviembre de 1953 y la instrucción complementaria de 14 de noviembre del mismo año, a establecer que el primer día de la semana el parado no cobrara dicho subsidio y que en los restantes se le abonara como si hubiese trabajado, aunque teniendo en cuenta que por medio del subsidio se concedía únicamente el salario mínimo establecido en la reglamentación correspondiente, con lo cual su situación se reducía en el mejor de los casos a cobrar en torno al 83 % del salario mínimo establecido.<sup>137</sup>

Este seguro contra el paro, según Girón de Velasco, era una idea total y exclusivamente española fruto de las peculiares circunstancias climatológicas de nuestro país:

“...tuvimos que ampliar la idea de seguro social a un tipo de prestación que suponía un seguro contra el paro, originalmente española, motivada por los años de sequía que estábamos padeciendo. Este seguro especial se llamó PODFE (Paro Obrero por Escasez de Fluido Eléctrico). La tremenda sequía de cuatro años llegó a paralizar hasta el cero las fuentes de energía eléctrica. La famosa política de pantanos de Franco aún no había llegado a cristalizar y miles de pequeñas industrias dependientes para su marcha de la energía eléctrica estaban abocadas a la desaparición si no se compensaba la falta de salario y se indemnizaba a los trabajadores por el paro involuntario.”<sup>138</sup>

Sobre estos subsidios de base profesional se situaban otro tipo de medidas de corto alcance como las del Decreto de 17 de octubre de 1940.<sup>139</sup> Este decreto concedía a los parados la exención total del pago de alquileres de la vivienda que ocupasen, la exención del pago por el suministro de agua y electricidad siempre que dichas cantidades no excedieran de la media consumida en los tres meses anteriores, la exención sobre toda demanda de desahucio de su vivienda, etc. Sin embargo, estos beneficios tenían una duración excepcionalmente limitada a un mes con una prórroga de difícil justificación que podía llegar hasta el año. También hay que añadir que en lo referente al alquiler, era necesario que no excediera de 150 pts. mensuales y que los ingresos totales de la familia no superaran el jornal medio de un obrero de la localidad en que se residiese. De igual manera se exigía estar inscrito en la Oficina Local de Colocación Obrera y poseer una tarjeta acreditativa de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana.

Era prescriptivo percibir los beneficios del Seguro Obligatorio de Enfermedad pero para ello había que tener satisfecha la cuota correspondiente a las tres semanas últimas dentro del año inmediatamente anterior al primer día de su enfermedad de cara a percibir la asistencia médica y farmacéutica, y las cuotas referentes a 26 semanas para percibir la indemnización económica.

### *15.3.3. El Subsidio de Paro por falta de algodón.*

Este subsidio se implantó en 1940 por medio del Decreto de 13 de julio<sup>140</sup> del mismo año con el objetivo de compensar la falta de actividad de las industrias algodoneras debido a la carencia de materia prima a raíz de la II Guerra Mundial. Para ello se creó dentro de la Subcomisión Reguladora del Algodón (S.U.B.C.R.A.) la Sección de Trabajo de la Industria Textil Algodonera. Su financiación estaba a cargo del arbitrio de una peseta por cada kilogramo de algodón importado, siendo anticipado por las empresas a sus trabajadores conforme a una escala proporcional a los días que hubieran trabajado en la semana. La nueva realidad sociopolítica y económica del final de los años 50 dio al traste con esta sección y con este subsidio por medio del Decreto de 9 de mayo de 1958. Por Decreto de 21 de mayo de 1954 se establecieron normas para el pago de salarios en las fábricas textiles de géneros de punto de los partidos judiciales de Mataró y Arenys de Mar, en la provincia de Barcelona.

La normativa a la que nos hemos referido afectaba a los trabajadores de la industria textil regulada por las reglamentaciones del algodón y géneros de punto y normas especiales para la fabricación de hilos comerciales, redes de pesca, mantas y muletones de algodón.

Se podían acoger a este tipo de subsidios los trabajadores que se hallasen en situación de paro involuntario o parcial y que formasen parte de empresas en las que rigiesen las reglamentaciones mencionadas, las cuales habían de obtener la previa autorización de la autoridad (en este caso la del Delegado Provincial de Trabajo ) para que terminase la relación laboral entre la empresa y los trabajadores o para que se redujese el número de días de trabajo por semana según lo estipulado en el Decreto de 26 de enero de 1944.

Pese a ello, la insuficiencia de los seguros de paro creados por el ministerio de Trabajo, lo inapreciable de sus prestaciones y su campo de aplicación limitado permitía solicitar a la altura de los años cincuenta la creación de un verdadero seguro de paro.<sup>141</sup> En cualquiera de estos casos encontramos la constante falta de voluntad para subsanar la lamentable situación de los desempleados españoles de forma efectiva. No existía un seguro nacional de paro.

Tenemos que considerar los motivos políticos que evitaban la búsqueda de fuentes de financiación sustentadoras de una realidad sociolaboral realmente lamentable en los años cuarenta y bastante complicada en los cincuenta, pese a estar voluntariamente tergiversada por las autoridades. Independientemente de la consideración del parado como un vago o parásito de la sociedad (cuestión ya valorada en capítulos precedentes), también hay que considerar dificultades técnicas como el hecho de poner en marcha este seguro con una base de

financiación exclusivamente contrada en las cotizaciones de los trabajadores (única posibilidad considerada). La dificultad radicaba en que aquél se apoyase en el cálculo de probabilidades y en la técnica actuarial, dado el mínimo desarrollo del conocimiento estadístico del paro en España.

Dadas estas circunstancias las cantidades que pudieran haberse dedicado a un seguro de paro total (sin pensar siquiera en factores que pudieran complicar la capacidad adquisitiva real de sus prestaciones) tendría una base esencialmente insuficiente, por lo cual se encontró un parche de primera magnitud en los montepíos nutridos por aportaciones de trabajadores y empresarios.<sup>142</sup>

#### ***15.3.4. Subsidios de paro en las mutualidades laborales.***

Los subsidios concedidos por algunas mutualidades tenían un carácter excepcional; eran subsidios aislados, de configuración variable y constituían asignaciones excepcionales como lo prueba el hecho de que al promulgarse el 10 de septiembre de 1954 el Reglamento general del mutualismo laboral, que sentó las bases para cada tipo de prestación, no se incluyese en la mencionada disposición los subsidios de paro.<sup>143</sup>

Quizás uno de los montepíos que con mayor alcance ofrecía este tipo de ayudas era el de la Construcción y Obras Públicas. Sus estatutos se promulgaron el 28 de noviembre de 1946 y se ocupaba de uno de los sectores en que mayor era la incidencia del paro, sobre el que más control se ejercía por medio de la cartilla profesional y, por consiguiente, sobre el que era más fácil actuar por medio de la técnica actuarial. Otros casos menores pueden ser los de los trabajadores portuarios, regulado por su reglamento de 22 de diciembre de 1948, y el de la Caja de Jubilaciones y Subsidios de los Mineros Asturianos regulada por la Orden de 24 de abril de 1946.<sup>144</sup> A estos casos se puede añadir la existencia a mediados de los años cincuenta, con menor extensión y de forma bastante restringida, de subsidios de paro de cuantía variable concedidos por los estatutos de los montepíos de la Piel,<sup>145</sup> Vidrio,<sup>146</sup> Madera,<sup>147</sup> Panadería,<sup>148</sup> Hostelería<sup>149</sup>, Industrias del Cemento y Yeso<sup>150</sup> y Lácteas.<sup>151</sup>

#### **15.4. Una cima nunca coronada: el seguro total.**

En líneas generales, una de las características distintivas de la aparición de los seguros sociales dentro del período considerado en esta tesis consistió en que brotaron de las entrañas del régimen franquista de un modo esporádico y sin relación de unos riesgos con otros. Era este uno de los motivos por los que desde los propios órganos sindicales se solicitó la unificación de los seguros sociales.<sup>152</sup>

Así pues, se pusieron de manifiesto deseos formales de instaurar lo que a partir de los años sesenta podría denominarse, en el caso español, sistema de seguridad social. En los años en que se centra la investigación este elemento al que nos hemos referido es sólo un deseo, una tendencia, pero en absoluto una realización<sup>153</sup> y no supone más que una inclinación a unificar administrativamente los Seguros Sociales<sup>154</sup> en torno a la idea de establecer una cierta unidad de fines, de técnicas y de miras cuyo objetivo debía ser defender a los españoles ante el infortunio.

En la línea con estos primeros intentos de unificación estaban los criterios del entonces comisario del I.N.P., don Luis Jordana en el año 1946.<sup>155</sup> El camino hacia la unificación consistía en la acción política tendente a transformar la variedad de los seguros creados por el ministerio de Trabajo unificando los mismos en un seguro total mediante la eliminación paulatina de las diferencias entre los servicios respectivos de cada seguro. Ello no podría producirse sin una mínima racionalización y mecanización del proceso administrativo y de gestión de los seguros. Para ello habían de evitarse las lagunas y duplicaciones propias de un sistema de seguros surgidos de regulaciones diferentes y separadas. Así, en enero de 1946 se puso en funcionamiento la comisión para el estudio de la unificación, afiliación y cotización de los subsidios y seguros sociales obligatorios, la simplificación de sus procedimientos administrativos y la unificación de la legislación en los aspectos requeridos. Aparte de lo considerado, la "racionalización afectaba...al procedimiento, a las instalaciones y a la distribución orgánica del personal," en definitiva requería una reforma administrativa en profundidad del I.N.P. y una solución al problema de las instalaciones y de la penuria de los locales que dificultaban grandemente la organización del sistema de seguros.<sup>156</sup> En esta línea el comisario Jordana proponía, como paso fundamental, la unificación de la caja de tesorería de los subsidios familiares (uno de los seguros con mayor superávit) con el total de las operaciones del instituto; y, por otro lado, la unificación de los ingresos de cuotas del subsidio de vejez, el de enfermedad y el de subsidios familiares en orden a mejorar el aparato contable de la mencionada institución.

También, entre las demandas de la organización sindical estaba la de materializar de forma real el párrafo 2º de la Declaración X en lo referente a la consecución del seguro total, conscientes de que las alternativas planteadas por el ministerio de Girón no constituían más que parches en la problemática de la inseguridad ante el riesgo dado que estas metas no podrían "lograrse simultáneamente fuera de un sistema fundado en la más completa hermandad de todos los españoles, orientado en lo jurídico dentro de un régimen de obligatoriedad y en lo financiero sobre una conjunta consideración de los riesgos cuya cobertura se estima indispensable."<sup>157</sup> De ahí la necesidad del llamado seguro total. A ello habría que añadir que las dificultades para lograrlo estaban en directa relación a la inexistencia de un eficiente aparato fiscal. También a

finales de 1953 los sindicatos en Albacete solicitaban la unificación de los seguros sociales como meta a la que había de tender el sistema de previsión<sup>158</sup> pese a las dificultades existentes, entre otros aspectos, por los distintos criterios en cuanto a niveles de renta para la percepción de seguros como era el caso del seguro de vejez, de enfermedad o de accidentes.

Planteada la problemática de la unificación<sup>159</sup> total de los seguros se manejaban cinco opciones en el caso español. En primer lugar, la oposición cerrada a la unificación. Se fundamentaba éste planteamiento en la supuesta necesidad de que riesgos distintos tuviesen mecanismos distintos y órganos independientes de gestión. En segundo lugar, se planteaba el reconocimiento de distintos riesgos con seguros independientes, pero con necesidad de coordinación. Una tercera opción planteaba, como la anterior, el reconocimiento de distintos riesgos con seguros independientes, aceptando paralelamente la necesidad de unificación de los servicios administrativos. El cuarto exponía la necesidad urgente de unificación de todos los seguros y sus servicios, exceptuando el de accidentes de trabajo, que únicamente debería de coordinarse con el resto. En último lugar, y como exponente de la tendencia hacia a la que se caminaba, estaba la estrategia de aquellos que insistían en la necesidad de la unificación total y absoluta de todos los seguros sociales con reconocimiento de un riesgo único, un sólo órgano administrativo y un sólo seguro.

El razonamiento que exponían los defensores de esta última opción giraba en torno a la idea de que el riesgo amparado por el seguro era esencialmente la falta de trabajo y la consecuente falta de retribución para el trabajador y su familia independientemente de la voluntad del obrero. Con ello, y en línea con los planteamientos generalizados tras la II Guerra Mundial, se pretendía abordar la cuestión más preocupante originada por la multiplicación de seguros: la insuficiencia en las indemnizaciones.

Lo hecho en España a lo largo de la etapa Girón, aunque no plenamente desarrollado, estaba imbuido de estos principios y de estos planteamientos. Así, el Decreto de 23 de diciembre de 1944 planteaba que el seguro total comprendiera en España los de muerte, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o comunes, maternidad, paro forzoso, invalidez y subsidio familiar. El Decreto de 29 de diciembre de 1948 y el de 20 de febrero de 1953 pretendían cubrir etapas en este camino hacia el seguro total. La primera de estas disposiciones unificaba el criterio en torno al concepto de trabajador, de salario base, el procedimiento de afiliación y de pago de cuotas. La segunda, incidía en la unificación y coordinación de los seguros.

En cualquiera de los casos se partía de un grave error dado que evidentemente esta política, tendente a establecer la protección total de la “familia española,” unidad básica formal de esta

estrategia, resultaba puramente demagógica desde el momento en que no se planteaba la equiparación de los beneficios concedidos al campo español y a los trabajadores industriales.<sup>160</sup>

### Notas

<sup>1</sup> No haremos especial hincapié en estas disposiciones puesto que quedan muy alejadas del período de esta investigación. Gaceta del 12 de octubre, Aranzadi 1.305.

<sup>2</sup> Se modifica la constitución y pago de las rentas debida a incapacidad permanente y muerte del trabajador accidentado por Decreto de 13 de octubre de 1938. La ley de 8 de mayo de 1942 dispuso el reaseguro obligatorio de todos los riesgos de accidentes del trabajo por incapacidad permanente y muerte en la industria, agricultura y mar. El Decreto de 29 de septiembre de 1943 aumenta a partir del 1 de enero de 1944 las prestaciones del Seguro de Accidentes del Trabajo. El de 24 de noviembre de 1945 regula la concesión de los beneficios del subsidio familiar a los asegurados de enfermedad de accidentes del trabajo y de silicosis en situación de baja temporal o de incapacidad permanente. Las órdenes de 17 de octubre de 1945 y 9 de marzo de 1946 regulan la indemnización correspondiente a los grandes inválidos. El Decreto de 22 de septiembre de 1947 aumentó las indemnizaciones por gastos de sepelio prevista en el art. 77 del Reglamento de 25 de agosto de 1931 (agricultura) y en el art. 30 del Reglamento de 31 de enero de 1933 (industria). La orden de 23 de noviembre de 1949 fijó las condiciones en que las mismas debían ser satisfechas a los familiares de las víctimas de accidentes de trabajo. El Decreto de 9 de enero y Orden de 9 de marzo de 1948 ampliaron el campo de aplicación del Seguro. El Decreto de 31 de marzo de 1950 concedió los beneficios del seguro de enfermedad a los pensionistas del Seguro de accidentes del trabajo. El Decreto de 5 de junio de 1953 modificaba los artículos 3, 7, 37, 27, 28, 29 y 35 del reglamento de 31 de enero de 1933.

<sup>3</sup> En torno al motivo de esta disposición Ucelay determinaba las siguientes razones: "...la realidad era que no se había logrado aún el encaje exacto, dentro de los postulados de justicia social, de los derechos conferidos a personas amparadas por esta legislación, quedando fuera de sus preceptos muchos trabajadores por cuenta ajena cuya falta de protección no aparecía justificada, como tampoco la subsistencia de desigualdades de derechos que era necesario unificar para que tales exigencias e imperativos de justicia estuvieran debidamente satisfechos." Ucelay, *Previsión...*, op. cit., pág. 618. También B.O.E. del 25 de diciembre, Aranzadi 1.742.

<sup>4</sup> B.O.E. del 15 de julio, Aranzadi 1.048.

<sup>5</sup> Bayón Chacón, Gaspar: La nueva legislación de accidentes del trabajo. Revista de Derecho del Trabajo, núm. 15, 1956, pág. 60.

<sup>6</sup> Se refiere a las explotaciones con menos de 6 obreros fijos y sin empleo de maquinaria agrícola.

<sup>7</sup> Perpiñá, El sujeto protegido..., op. cit., pág. 1.327.

<sup>8</sup> Aznar, Severino: El sistema de reparto o el de capitalización en los seguros sociales. RESS, núm. 1-2, vol. I, 1947.

<sup>9</sup> 7.571.045,77 pts. era la cifra exacta. Memoria del balance técnico general del I.N.P. correspondiente al ejercicio de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02. R/237 97-7<sup>a</sup>.

<sup>10</sup> El importe total equivalía a 9.650.403,89 al mes. No es tan significativa la cifra como la ineptitud del sistema administrativo para ejecutar aquello para lo que supuestamente estaba preparado administrativa y financieramente. Sesión del Consejo del I.N.P. llevada a cabo el 30 de noviembre de 1951, pág. 18. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02. R/173.

<sup>11</sup> Este desconocimiento pretendía ser paliado con la ayuda de los servicios del seguro de silicosis, de vejez e invalidez, e incluso de la mutualidad de previsión ante la incapacidad del seguro de accidentes para montar las tablas de mortalidad adecuadas pese a lo cual se era consciente que "toda esta experiencia resulta insuficiente para construir unas tablas de mortalidad." Informe que la Dirección Técnica del I.N.P. elevado a la Presidencia del mismo, respecto a las dificultades derivadas de la disminución de mortalidad, en relación con la mayor vida probable. Madrid, 5 de septiembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/173, pág. 31.

<sup>12</sup> Sobre esta cuestión la Dirección Técnica del I.N.P. estimaba lo siguiente: "...resumiendo queda expuesto en el presente informe, tanto en el aspecto actuarial del Seguro como en los de orden reglamentario y administrativo, esta Dirección Técnica estima, teniendo en cuenta lo exiguo del total de excedentes en el ejercicio de 1950 y salvo lo que en definitiva, y en su momento oportuno, estime más conveniente esa Presidencia, que una medida de elemental prudencia sería estudiar e implantar, previa la modificación de

los preceptos reglamentarios, un nuevo sistema que tendiese a suprimir al Seguro de Rentas la carga que, en la actualidad, representa el abono de las cuotas del Seguro de Enfermedad de los pensionistas afiliados al mismo, de conformidad con lo preceptuado en el Decreto de 31 de marzo de 1950...Esto llevaría consigo el disponer de la totalidad de unos excedentes que son propios del Seguro de Rentas y cuya constitución tiene por objeto paliar las oscilaciones que, en la marcha del mismo, puede suponer una mayor o menor mortalidad o rentabilidad de sus inversiones." Informe que la Dirección Técnica del I.N.P. eleva a la Presidencia del mismo, respecto a las dificultades derivadas de la disminución de mortalidad, en relación con la mayor vida probable. Madrid, 5 de septiembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/173, pág. 33.

<sup>13</sup> Informe del ministerio de Trabajo sobre la insalubridad de las minas de Almadén.

<sup>14</sup> Consejo Económico Sindical. Vizcaya, Bilbao junio de 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/297.

<sup>15</sup> "Recientemente han ocurrido en la localidad de Minas de Riotinto y en la empresa minera del mismo nombre, tres accidentes de trabajo en días casi sucesivos, dos de ellos mortales. Ello dio lugar a que con ocasión del último accidente ocurrido se negaran los trabajadores del pozo en que había sucedido a entrar a trabajar...se trasladó allí el Delegado Provincial de Sindicatos, entregando donativos en metálico a los familiares de los accidentados cuyo importe en cuantía de 4.500 pts. fue donado por el Excmo. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento..." Informes reservados de la C.N.S. de Huelva, enero de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/213.

<sup>16</sup> Alonso Olea, Instituciones de Seguridad..., op. cit., pág. 9.

<sup>17</sup> Este fue el caso de uno de los numerosos accidentes sobre los que la V.N.O.E. elaboró un informe: "Hubo un accidente en Sestao (Vizcaya), en el barco "Montería", en la Constructora Naval se rompió un andamio y cayeron dos obreros a la bodega. Uno murió en el acto (11,30), el cadáver no fue levantado ni se avisó a la familia, de tal manera que cuando la mujer fue con la comida se encontró con el cadáver del marido. El Ingeniero Jefe se enteró de la desgracia por la tarde. Los compañeros quisieron asistir al entierro como protesta y la Empresa concedió el permiso a los del Departamento, pero se marcharon de todas las dependencias de la Factoría, menos de dos. El entierro se celebró el mismo día por la tarde en Sestao, concurriendo toda la Naval menos las dos dependencias citadas, saliendo todos los demás, por tanto, sin permiso. Se ha procedido por la policía a detener a diez, porque la Empresa hizo aparecer ésto como una huelga o un paro. Al enterarse de la detención, algunos dijeron que si no les dejaban libres a sus compañeros iniciarían el paro...En la inspección practicada por la Delegación de Trabajo, se ha comprobado que el accidente ha sido por descuido de la empresa, que no tenía en buenas condiciones el andamio, sin que haya otra novedad. Madrid, 19 de febrero de 1952." Informe de la V.N.O.E., 19 de febrero de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>18</sup> Con fecha 27 de diciembre de 1954 la V.N.O.S. elaboraba un informe sobre los numerosos accidentes producidos en la empresa "Entrecanales y Tavora S.A." en la construcción de las instalaciones de la empresa siderúrgica nacional de Avilés. Se había producido un accidente con resultado de seis muertos cuando se hallaban trabajando en el interior de una campana de aire que había de sostener los altos hornos de la siderurgia. Se habían producido ya 33 muertos cuando tan sólo se habían colocado 304 de los 900 bloques de cimentación con lo que estaba saltando la alarma. En cuando a las causas de dichos accidentes el informe citaba varias. En primer lugar la utilización de mano de obra poco experta; normalmente campesinos del interior; en segundo lugar, "la excesiva celeridad en las obras, como prueba el que se trabajó en un bloque de dos mil setecientas toneladas de peso y cien metros cuadrados de superficie aproximadamente, mucho antes de los treinta días de su hormigonado;" en tercer lugar, "la falta de unos sondeos adecuados, ya no es fácilmente comprensible...que un bloque de dos mil setecientas toneladas de cementos se desnivel con un socavón pequeño, sino que requiere que éste sea grande y por tanto, no debiera haberse escapado a los sondeos...Podríamos citar otra serie de causas remotas de este siniestro, más todas son de tipo técnico (tales como materiales, cálculos de resistencia, construcción..."; en cuarto lugar los bajos salarios ("Estos trabajos tan extremadamente peligrosos son parcamente retribuidos por la empresa, ya que, dada la carestía de vida de la zona de Avilés, no arrojan más que un promedio de 40 a 45 pts. diarias, lo que hace en muchos casos que los obreros se reenganchen al trabajo de campanas una vez concluida la jornada de seis horas señalada para este tipo de actividades por las disposiciones vigentes, con la que indudablemente se aumenta el riesgo de accidentes)." A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N/123-55.

<sup>19</sup> Avanzada, núm. 19, abril de 1955.

<sup>20</sup> Pese a ello no se puede afirmar que la magistratura facilitase las peticiones de reconocimiento de derechos. Concretamente en 1954 hubo 3.981 demandas en magistratura de las que fueron reconocidas

1.351. En Barcelona se concedieron 147 de 865 solicitadas y en Madrid 86 de 166. Estadísticas del ministerio de Trabajo. Servicio de Reaseguro de accidentes de trabajo. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, 209.

<sup>21</sup> Correspondencia de la Delegación Provincial de Sindicatos de Santa Cruz, 26 de mayo 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/243, n° 112

<sup>22</sup> II Congreso Nacional de Trabajadores Españoles. Comisión 4ª: Seguridad Social. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.388. Aparte de esta petición realizada es destacable la nula capacidad de presión de la Delegación Nacional de Sindicatos, y concretamente de su Vicesecretaría Nacional de Ordenación Social (organizadora de estos congresos), lo cual se plasma en la repetición sistemática de sus demandas congreso a congreso. Una comparación de las peticiones realizadas en el I congreso celebrado en 1946 y este, celebrado en 1951, permite afirmar que dichas demandas eran prácticamente idénticas lo cual pone de manifiesto la pérdida de peso específico del sindicalismo y el carácter demagógico de sus peticiones.

<sup>23</sup> Anuario Estadístico de España, 1958, pág. 571.

<sup>24</sup> Avanzada, núm. 19, abril de 1955.

<sup>25</sup> Dantín Gallego, J.: Coordinación de los trabajos de salvamento y profilaxis general del accidente. BIINP, núm. 7-8, 1945, 1.328-9.

<sup>26</sup> González Posada, Los seguros sociales..., op. cit.

<sup>27</sup> Informe que la Dirección Técnica del I.N.P. tiene el honor de elevar a la presidencia del mismo, respecto a la suficiencia o insuficiencia de las tarifas en el seguro de incapacidad permanente y muerte, y los problemas planteados a los de incapacidad temporal e incapacidad permanente y muerte como consecuencia de la concurrencia del seguro privado y mutualidades patronales." Madrid, 5 de septiembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/173.

<sup>28</sup> "...se vio grandemente trastornada por la orden de la superioridad de lanzarse a la constitución de una verdadera cartera del seguro que hiciese llegar a todas las empresas, desde la más modesta a la de mayor importancia, los beneficios verdaderamente sociales que la Caja Nacional propugnó, desde el primer momento, y que eran frecuentemente esquivados por el afán de lucro que el seguro mercantil ha de imprimir, lógicamente, a todas sus operaciones...Esta orden de marcha empezó con la organización del que podemos llamar Cuerpo de los Delegados de Gestión, que comenzó a funcionar con toda eficiencia a finales de dicho año de 1942, fue, como es lógico recibida de forma desagradable por las Entidades de Seguros, que veían en la Caja Nacional un poderoso enemigo con el que no era posible competir." Informe que la Dirección Técnica del I.N.P. tiene el honor de elevar a la presidencia del mismo, respecto a la suficiencia o insuficiencia de las tarifas en el seguro de incapacidad permanente y muerte, y los problemas planteados a los de incapacidad temporal e incapacidad permanente y muerte como consecuencia de la concurrencia del seguro privado y mutualidades patronales. Madrid, 5 de septiembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/173, pág. 5.

<sup>29</sup> Informe de la ponencia sobre la Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo. ministerio de Trabajo, I.N.P., 27 de marzo de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/269.

<sup>30</sup> Así ocurre, por ejemplo en la póliza 62.290 S.T., en la que figura como asegurada "Ingeniería y Construcciones MARCOS S.A." y en la que se considera agente director el apoderado general de la Empresa, Don Francisco Pérez Martín, a quien se han pagado comisiones por importe de pts. 377.627 (hasta 1951) que excedan del 15 % puesto que suponen el 17,41 % de las primas de incapacidad temporal y el 16,31 % de las primas de incapacidad absoluta. Esta póliza ha ocasionado a la Caja pérdidas que pasan del millón de pts.. Y al apoderado general se le han liquidado comisiones incluso sobre los recibos emitidos por consecuencia de actas de control de salarios, pues los declarados eran inferiores a los satisfechos...No puede dejar de observarse que, iniciado este camino y abierto la mano, es natural que la apetencia de comisiones fáciles se avive y que, descubierto un campo fértil donde espigarlas, la acción convergente de agentes y empresa se dirija a lucrarse con el 15 % de las primas, laborando conjuntamente empresarios y agencias para que, en los casos del artículo 91 que de todas formas habrían de ir a la Caja, se evite a toda costa que figuren como de producción directa de la Caja y conseguir de éste que reconozca o tolere la innecesaria interpelación de un agente con derecho a comisión..." Informe de la ponencia sobre la Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo. ministerio de Trabajo, I.N.P., 27 de marzo de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/269.

<sup>31</sup> Proyecto de Decreto estableciendo mejoras sobre las pensiones del Seguro de Accidentes de Trabajo de 15 de junio de 1954. A.P.G.; S.G.A.; Leg. 19, n° 3.

<sup>32</sup> Proyecto de junio-agosto de 1953. A.P.G.; S.G.A.; Leg. 17, n° 1.

<sup>33</sup> I Congreso Nacional de Trabajadores..., op. cit., pág. 43.

<sup>34</sup> En el caso de tener 6 hijos el seguro abonaría una pensión equivalente al 45 % del sueldo mientras que la mutualidad le otorgaría una pensión del 105 %. Avanzada, núm. 17, febrero de 1955.



<sup>35</sup> Consejo Económico Sindical de Vizcaya, 12-16 junio 1956. B.G.A.; S.S.; I.D.D. 45.02, 3.

<sup>36</sup> Nogales Puertas: La ley de accidentes del trabajo en su aspecto médico. BIINP, núm. 1, 1944, pág. 19.

<sup>37</sup> Nogales Puertas: La reforma de la ley de accidentes del trabajo. Revista de Trabajo, núm. 9, 1951, pág. 815.

<sup>38</sup> I Congreso Nacional de Trabajadores, 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.393. "El principal problema que plantea al Seguro de Accidentes del Trabajo la unificación de los regímenes hoy vigentes en industria y en agricultura, consiste en la aplicación del principio de que es asegurable únicamente el trabajador por cuenta ajena, que si en la industria no tiene importancia mayor por el escaso número de los trabajadores autónomos en relación con los que perciben jornal, y por el hecho de que su más alto nivel cultural y económico les permite prever las contingencias de sus riesgos mediante el aseguramiento individual de vida, hoy tan extendido, en el campo, por el contrario, es infinitamente superior el número de trabajadores autónomos que el de por cuenta de tercero, en razón de lo dividida que, salvo excepción, está la propiedad, del sistema de explotación agrícola que en España impera." Equiparación de los actuales regímenes de la industria y agricultura en el seguro de accidentes del trabajo. I Asamblea General del I.N.P., 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/249.

<sup>39</sup> Proyecto de 17 de agosto de 1955. A.P.G.; S.G.A.; Leg. 30, nº 2. El posterior Decreto derogó disposiciones de la I República sobre el seguro de accidentes (Decreto de 12 de junio de 1931, elevado a Ley el 9 de septiembre del mismo año y su Reglamento de 25 de agosto de 1932).

<sup>40</sup> Sobre esta cuestión en la I Asamblea del I.N.P. se señalaba la total ausencia de protección por parte de la caja nacional de los tratamientos médicos de readaptación funcional en el caso de los pocos trabajadores del campo que tenían derecho a dicha prestación. Equiparación de los actuales regímenes de la industria y agricultura en el seguro de accidentes del trabajo. I Asamblea General del I.N.P., 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/249.

<sup>41</sup> Así la Vicesecretaría Nacional de Ordenación Económica redactaba con fecha 3 de julio de 1952 una nota en la que comentaba: "Parece ser que próximamente el gobierno tratará de promulgar un decreto en virtud del cual se unifiquen todos los beneficios y prestaciones en materia de accidentes de trabajo, desapareciendo la dualidad existente entre la grande y pequeña agricultura.

Su aprobación, sería indudablemente, de un gran efecto político, toda vez que tanto en las Asambleas Nacionales de Hermandades como en los Congresos Nacionales de Trabajadores, en los que se ha estudiado el problema de los accidentes de trabajo, se ha solicitado insistentemente y unánimemente esta equiparación, debiendo tenerse además en cuenta la coyuntura económica del campo que por sí sola podría justificar esta medida, haciendo posible que todos los trabajadores perciban los mismos beneficios, derivados de idénticas causas." V.N.O.E., 3 de julio de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>42</sup> Leira, Eduardo: La nueva legislación de accidentes del trabajo en España. RISS, núm. 5, 1956. En la I Asamblea General del I.N.P. se reconocía que durante este período existió formalmente una equiparación total entre el trabajador del campo y el industrial y "que si aquella situación fue transitoria y luego se volvió a dislocar el contenido legal de ambos ordenamientos, ello fue debido a una vacilación del impulso innovador con que había comenzado la transformación de la legislación de accidentes," a lo que había que añadir que no se puso fin. Equiparación de los actuales regímenes de la industria y agricultura en el seguro de accidentes del trabajo. I Asamblea General del I.N.P., 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/249.

<sup>43</sup> Leira, Eduardo: La nueva legislación de accidentes del trabajo en España. RISS, núm. 5, 1956, 1.106.

<sup>44</sup> Arnaldos Jimeno, Pedro: La unificación de los seguros sociales y el seguro de accidentes de trabajo. RESS, 1947, núm. 10, pág. 568.

<sup>45</sup> La clínica nacional del trabajo empezó a recibir tal denominación a partir de 1950. Perteneciente a la Cruz Roja estaba especializada en medicina del trabajo y traumatología laboral. Ya operaba en julio de 1936 pero su capacidad a finales de los años 50 seguía siendo insuficiente; concretamente en 1959 tenía 100 camas (según los datos oficiales). Clínica Nacional del Trabajo, 1933-58. Madrid, ministerio de Trabajo, 1959, pág. 73-4.

<sup>46</sup> I.N.P. Dirección de subsidios y seguros unificados. Informe que la dirección técnica del I.N.P. eleva a la presidencia del mismo respecto al seguro de incapacidad temporal: conveniencia de ampliar la red de instalaciones sanitarias y medios en su caso para obtenerla. Posibilidad de utilizar a ese fin las residencias del seguro de enfermedad, bien destinando en ellas departamentos independientes para accidentes del trabajo o por otro sistema. Madrid, 5 de septiembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/173. Hay que tener en cuenta que el número de centros de atención médica era en este momento relativamente escaso en función de la demanda potencial existente:

-dispensarios locales: 42.

-dispensarios comarcales: 41

-dispensarios locales: 2

-puestos de socorro: 14 (están montados en centros de trabajo lejanos de los dispensarios)

-clínica con carácter nacional: Clínica del Trabajo de Madrid

<sup>47</sup> Instituto de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Publicación de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.922.

<sup>48</sup> El instituto constaba de una Dirección, una Subdirección, una Secretaría General, dos Secretarías Técnicas (una centrada en la medicina del trabajo, social y de enfermedades profesionales y otro en las cuestiones de seguridad y prevención de los accidentes), una Escuela de Medicina del Trabajo (centrada en los aspectos de enseñanza e investigación) y Servicios Generales. La Escuela Nacional del Trabajo se creó el 16 de enero de 1948 y aparte de sus funciones de investigación cumplía una labor docente centrada en la formación de especialistas en traumatología y ortopedia y cursos de formación para especialistas en seguros sociales y medicina social.

<sup>49</sup> Destaca el hecho de que comparando estas cifras con las que oficialmente daba el I.N.P. existe una diferencia en contra el I.N.P. en torno a los 50.000 accidentes. Martos de Castro, Federico: Los accidentes del trabajo y su prevención. RT, núm. 28-29, 1942, pág. 4. En cualquiera de los casos como bien señalan Maroto y Mingo "Para los primeros la empresa es responsable por no equipar adecuadamente a los trabajadores y por no invertir en elementos de seguridad, en máquinas e instalaciones. Para las direcciones de las empresas los accidentes son producto de la negligencia y el descuido de los trabajadores. Lo que podemos apreciar, en todo caso, en estos fondos es que las direcciones de las empresas sólo suelen adoptar medidas preventivas cuando la autoridad laboral les obliga a ello." Maroto Barchino, Para estudiar la historia de las relaciones laborales..., op. cit., pág. 14-15.

<sup>50</sup> Nuestra Obra. Memoria de las actividades desarrolladas por la Obra Sindical "Previsión Social" (años 1941-1963) nº 187, julio de 1984. También en A.G.A.; S.S.; I.D.D. 72.08. nº orden 1, tomo 36/39.

<sup>51</sup> Martos de Castro, Federico: Los accidentes del trabajo y su prevención. RT, núm. 28-29, 1942, pág. 229.

<sup>52</sup> Esta disposición elevaba a 3 pts. la pensión. B.O.E. del 9, Aranzadi 1.149.

<sup>53</sup> B.O.E. del 8, Aranzadi 232.

<sup>54</sup> Este, como otras disposiciones relativas al sistema de previsión, decreto dejaba fuera de su campo de aplicación a los trabajadores domésticos basándose en "las dificultades que presenta la fiscalización de esta clase de trabajos, el producirse la relación, no entre obrero y patrono, sino entre amo y criado, son razones que, unidas a otras dificultades técnicas, han impuesto, en nuestra Patria y fuera de ella, el criterio que el precepto antes transcrito señala..." El subsidio de vejez y el servicio doméstico. BIINP, núm. 1 y 2, de 1941, pág. 4.

Hay que considerar los principales factores que justificaban a los ojos del ministerio de Trabajo el dejar fuera de este subsidio (seguro a partir de 1947) a los domésticos. Se consideraba que este tipo de trabajador sería espontáneamente amparado en su ancianidad; por otro lado la falta de empresa dificultaba su afiliación pese a trabajar por cuenta ajena. Por otro lado, este tipo de trabajadores no ganaban normalmente lo suficiente para asegurarse un retiro digno y sobre ellos flotaba la misma amenaza de desamparo en la ancianidad. Perpiñá Rodríguez, El sujeto protegido por las leyes..., op. cit., pág. 1.319.

<sup>55</sup> Payne, El régimen..., op. cit., pág. 405.

<sup>56</sup> I Congreso Nacional de Trabajadores..., op. cit., pág. 57.

<sup>57</sup> Documentos inéditos..., tomo IV, op. cit., pág. 36

<sup>58</sup> De la Cruz Plaza, Julio: Homenajes a la vejez. BIINP, núm. 12, 1943, pág. 18.

<sup>59</sup> Idem, pág. 19.

<sup>60</sup> B.O.E. del 5 de mayo, Aranzadi 582.

<sup>61</sup> A.P.G.; S.G.A.; Leg. 30, nº 2.

<sup>62</sup> Gascón y Marín, José: Los planes de seguridad social. De la beneficencia al Seguro. Madrid, I.N.P., 1944, pág. 133. Coincidió con este carácter benéfico Macías de Aguirre: "...porque la organización actual del régimen de subsidio de vejez, desde un punto de vista técnico, no es la de un seguro puro, por operar, en parte, como régimen de asistencia, de donde se deduce que como tal seguro ha de entrar todavía en una fase de más amplio y perfecto desarrollo..." Macías de Aguirre: La afiliación de los trabajadores industriales en el régimen de subsidio de vejez. BIINP, núm. 11, 1944, 1.407.

<sup>63</sup> La resistencia del servicio de mutualidades a elevar a los pensionistas sus percepciones en un porcentaje semejante al de los salarios (en torno al 16 y el 20 %) se justificaba por el hecho de que en septiembre de 1954 se había abonado a los pensionistas dos pagas extraordinarias equivalentes al 16,6 % elevado en el año 1956 a la población activa. Correspondencia del Subdirector General del Servicio de Mutualidades al Vicesecretario Nacional de Ordenación Social de 20 de junio de 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, nº 2339.4.

<sup>64</sup> Esta disposición venía complementada por el establecimiento del censo de ancianos en 1942.

<sup>65</sup> Subsidio de vejez en la rama agropecuaria, s/f. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 8, 7.580.

<sup>66</sup> Correspondencia del Delegado Nacional de Sindicatos (Sanz Orrio) a Girón, 16 de junio de 1945. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/18.

<sup>67</sup> Partes reservados de Delegado Sindical Provincial de Cuenca, mayo de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4753.

<sup>68</sup> Ya en 1948 López Valencia afirmaba desde las páginas de la Revista Española de Seguridad Social: "Generalmente, las pensiones de retiro, pagadas por los órganos de la Seguridad social, suelen ser insuficientes para el sostenimiento de los ancianos que no cuenten con otros medios de fortuna o con la ayuda de sus familiares." López Valencia, Federico: Seguridad social de la infancia y la vejez. RESS, núm. 11, 1948, pág. 2.244.

<sup>69</sup> Ponencias de la Delegación Provincial de Sindicatos de Baleares, 26 de mayo de 1953 y de Logroño, 23 mayo 53, Las Palmas, Coruña, etc., etc., para la I Asamblea del I.N.P. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01 R/243, nº 112.

<sup>70</sup> Ponencia de Segovia...I Asamblea del I.N.P., 12 mayo 53. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01 R/243, nº 112.

<sup>71</sup> Propuesta de enmienda para el mejoramiento de la legislación del subsidio de vejez a las Cortes españolas de un procurador sindical en Cortes, 8 de junio de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 8, 7.580. El subrayado es nuestro.

<sup>72</sup> Sánchez Moris, Fernando: Ensayo sobre un seguro social de vejez e invalidez y muerte en un sistema unificado de seguros sociales. RISS, núm. 4, 1956, pág. 877.

<sup>73</sup> I Asamblea del I.N.P.; Ponencia de Santander, 25 mayo 53. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01 R/243, nº 112

<sup>74</sup> Sobre las prestaciones se puede concluir que "es lógico pensar, que si la Orden de 2 de febrero de 1940 fijaba el subsidio en 90 pts.. mensuales y el nivel del coste de vida ha aumentado en casi un 60 % resulta incomprensible que se mantenga esa ridícula pensión que no significa ayuda alguna al productor, ni mucho menos puede ser interpretado como una protección legal." En torno al subsidio de vejez, 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 8, 7.580.

<sup>75</sup> ¿Es necesario, en la actualidad, el subsidio de vejez?, firmado por Lorenzo Valenzuela y Rodríguez, s/f. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 8, 7.580.

<sup>76</sup> En el caso del subsidio de vejez se percibía mensualmente 125 pts.. al mes y a lo largo de los 15 años 22.500 pts.. mientras que en el caso del montepíos de comercio las cantidades percibidas mensualmente ascenderían a 490 pts.. y a 83.200 al cabo de los 15 años, con una diferencia en este último caso de 65.700 pts.. ¿Es necesario, en la actualidad, el subsidio de vejez?, firmado por Lorenzo Valenzuela y Rodríguez, s/f. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 8, 7.580.

<sup>77</sup> Martín de Pereda, Julio: Vejez e invalidez: Valoración médica. BIINP, núm. 10, 1945, 1.893. También en Nogales Puertas: La invalidez en el subsidio de vejez. RESS; núm. 5, 1947, pág. 743

<sup>78</sup> Decreto de 12 de febrero de 1954. También en A.P.G.; S.G.A.; Leg. 18, nº 1.

<sup>79</sup> I Congreso Nacional de Trabajadores..., op. cit., pág. 70.

<sup>80</sup> Proyecto de 7 de enero de 1954. A.P.G.; S.G.A.; leg. 18, nº 1.

<sup>81</sup> El mismo autor afirmaba lo siguiente: "Salta inmediatamente a la vista la muy rudimentaria y escasa protección que el seguro otorga a la invalidez; solo ampara casos extremos y, lo que es de un absurdo manifiesto tratándose de la protección de una invalidez, se hace entrar en juego el factor de la edad." Alonso Olea, Instituciones de Seguridad..., op. cit., pág. 124.

<sup>82</sup> I Congreso Sindical Agrario de Levante. Valencia, marzo de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/162.

<sup>83</sup> Decreto de 12 de febrero de 1954. También en A.P.G.; S.G.A.; Leg. 18, nº 1.

<sup>84</sup> I.N.P. Dirección de Subsidios y seguros unificados. Informe sobre la situación actual del régimen obligatorio del seguro de vejez e invalidez. Madrid, septiembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/173.

<sup>85</sup> Ídem, pág. 8.

<sup>86</sup> Proyecto de concierto del I.N.P. con la organización sindical para el censo laboral agrícola, expedición de la cartilla profesional agrícola y pago de las prestaciones del seguro contributivo de vejez, 20 de octubre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/164.

<sup>87</sup> Correspondencia de Francisco Norte a la D.N.S., 22 de octubre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/164.

<sup>88</sup> Ídem, pág. 16.

<sup>89</sup> La cifra correcta sería 348.292.514 pts..

<sup>90</sup> Para el año 1952 existían 25.000 cuyos devengos hasta el 1 de enero de 1952 ascendían a 75. Sesión del Consejo del I.N.P. llevada a cabo el 30 de noviembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/173.

<sup>91</sup> Informe que sobre la Memoria del Balance Técnico General del I.N.P. correspondiente al Ejercicio de 1952, emitido por la penencia designada a tal efecto por el Consejo de Administración el 28 de mayo de 1953 (emitido el 25 de noviembre de 1953). A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/237, 97-7<sup>a</sup>.

<sup>92</sup> Ídem. El déficit sumado desde 1944 ascendía a 5.350 millones de pts..

<sup>93</sup> Ídem.

<sup>94</sup> Memoria del balance técnico general del I.N.P. correspondiente al ejercicio de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/237, 97-7<sup>a</sup>.

<sup>95</sup> La rama general tenía un superávit de 348.778.800,92 pts.. en 1952 (en el 1951 de 345.104.641,80) La rama de trabajadores el mar tenía un déficit de 1.607.065,40 en 1952. La rama agropecuaria tenía un déficit de 575.016.387,16 en el año 52 (de 556.876.069,87 en el año 51).

<sup>96</sup> Memoria I.N.P. ...ejercicio de 1952, op. cit., pág. 29. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/237, 97-7<sup>a</sup>.

<sup>97</sup> En 1952 el excedente de los subsidios familiares ascendía a 226.062.355,85 pts.. En el año 1954 el superávit era de 538.445.121 pts..

<sup>98</sup> ministerio de Trabajo. I.N.P. Dirección de Subsidios y Seguros Unificados. Balances Técnicos del ejercicio 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/292 n° 9 7-7<sup>a</sup>.

<sup>99</sup> Presupuesto general del I.N.P. para 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/ 269.

<sup>100</sup> Conferencia pronunciada en Vigo el día 20 de septiembre de 1957 en el XV curso universitario de verano por el presidente del I.N.P., Francisco Labadie Otermin. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02 r/331.

<sup>101</sup> Anuario del Instituto Nacional de Previsión, 1946-47. Madrid, I.N.P., 1947, pág. 369.

<sup>102</sup> Nota para el Excmo. ministro de la Secretaria General Técnica del ministerio de Trabajo, 11 de junio de 1959. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, 57.

<sup>103</sup> Desempleo y seguridad social. O.I.T., 1976. pág. 1.

<sup>104</sup> "...son escasísimas las sociedades y asociaciones creadas en nuestro país con el exclusivo objeto de organizar el auxilio contra el paro. García Oviedo, Algunas consideraciones..., op. cit., pág. 50.

<sup>105</sup> Con anterioridad el Decreto de 1 de enero de 1944 había dispuesto que pasasen sus fondos al ministerio de Trabajo lo cual vino a determinar su supresión.

<sup>106</sup> Las bonificaciones iban del 30 % al 100% con un límite temporal de 60 días.

<sup>107</sup> 2 millones con destino a incremento de los fondos que administraba la caja nacional del I.N.P., 108 para el pago de auxilios y primas, 70 millones en obras públicas, 20 en construcción de edificios públicos. El Seguro de paro: 1944-1950. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 6.01, 15.771.

<sup>108</sup> Hernáinz, Miguel: El seguro de paro. Revista de Trabajo, mayo de 1955, vol. 1, n° 5, pág. 522.

<sup>109</sup> París Egulaz, Sentido y límites..., op. cit., pág. 75-6

<sup>110</sup> Pérez González, Esteban: Consideraciones sobre el paro obrero. Revista de Trabajo, abril de 1941, vol. 2, n° 30, pág. 334.

<sup>111</sup> Historia de una década: 1941-1951. Girón al servicio de Franco. ministerio de Trabajo, Comisaría Nacional del Paro, pág. 1.

<sup>112</sup> Redondo Gómez, Pasado, presente..., op. cit., pág. 136.

<sup>113</sup> En esta línea se encontraba el artículo de Mallart en su negación de la cultura del subsidio en contraposición a la necesidad de "producir." Mallart, Posibilidades económicas..., op. cit., pág. 1.549.

<sup>114</sup> López Valencia, Jalones de una Reforma..., op. cit., pág. 89-90.

<sup>115</sup> "Con destino al Aguinaldo del Productor en paro se han distribuido en el Ferrol y Santiago, vales de víveres, así como en la Coruña cuya distribución se ha efectuado en colaboración con la Junta de la Campaña de Navidad inviriéndose 45.000 pts.. Además se han destinado 5.000 pts. para canastillas." Informes reservados de la C.N.S. de La Coruña, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/212.

<sup>116</sup> García Oviedo, Carlos: Consideraciones acerca de "el empleo total". RESS, núm. 2, 1948, pág. 279.

<sup>117</sup> Arias García-Braga, Luis: El problema del paro y sus soluciones: algunas cuestiones en torno a la implantación del seguro. BIIINP, núm. 12, 1946, pág. 3.045.

<sup>118</sup> Arnaldos, Los seguros sociales..., op. cit., pág. 33.

<sup>119</sup> Aznar, La caridad y el seguro..., op. cit., pág. 1.172.

<sup>120</sup> "Desde el punto de vista político, la creación de un subsidio de paro como medida inicial y fundamental, significa un fracaso para el Gobierno que lo establece, pues demuestra su incapacidad ante el problema..." París Egulaz, Sentido y límites..., op. cit., pág. 76.

<sup>121</sup> Salvador Bullón, Pablo y Salvador Bullón Hilario: El seguro contra el paro forzoso. ministerio de Trabajo, Madrid, 1955. Premio Marvá 1952, pág. 11.

<sup>122</sup> Redondo Gómez, José citando a Eugenio París Aguilar en "Pasado, presente..., op. cit., pág. 215.

<sup>123</sup> Hernáinz, El Seguro de Paro..., op. cit., pág. 520.

<sup>124</sup> Ucelay, Previsión..., op. cit., pág. 334-5.

- <sup>125</sup> En este caso concreto se refiere a esta cuestión de una forma que parece poco rigurosa como argumento para explicar la mínima operatividad del ministerio de Trabajo en este tema: "...la extendida oposición de los buenos trabajadores, normalmente no aquejados de paro, a realizar aportaciones en favor de los desocupados." Hernáinz, *El Seguro de Paro...*, op. cit., pág. 520.
- <sup>126</sup> Redondo Gómez, *Pasado, presente...*, op. cit., pág. 209.
- <sup>127</sup> Salvador Bullón, *El seguro contra el paro...*, op. cit., pág. 149.
- <sup>128</sup> París, *Los seguros sociales...*, op. cit., pág. 145.
- <sup>129</sup> Utilizamos la aseveración de Redondo aunque, evidentemente, no consideraba el Jefe Nacional de O. S. Lucha contra el Paro el peso del paro en el campo español tanto a mediados de los años cincuenta como anteriormente, lo cual resta rigor a semejante afirmación. Redondo Gómez, *Pasado, presente...*, op. cit., pág. 204.
- <sup>130</sup> Algunos asuntos tratados en el consejo de mandos sindicales. V.N.O.E., 23 febrero de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 13.01, 3.954, N-134-55.
- <sup>131</sup> Alonso Olea, *Instituciones de Seguridad...*, op. cit., pág. 114.
- <sup>132</sup> B.O.E. del 20 de octubre de 1953. La Orden de 14 de noviembre de 1953 (B.O.E. del 20 del mismo mes) desarrollaba la ejecución del Decreto-Ley de 25 de septiembre de 1953.
- <sup>133</sup> B.O.E. de 11 de abril de 1952.
- <sup>134</sup> B.O.E. de 31 de diciembre de 1952.
- <sup>135</sup> B.O.E. del 20 de octubre de 1953.
- <sup>136</sup> Clavera y otros, *Capitalismo...*, op. cit., pág. 124.
- <sup>137</sup> Alonso Olea, *Instituciones...*, op. cit., pág. 116.
- <sup>138</sup> Girón, *Si la memoria...*, op. cit., pág. 123.
- <sup>139</sup> Completado por las instrucciones de 13 de diciembre de 1940 y el Decreto de 3 de marzo de 1944.
- <sup>140</sup> El reglamento corresponde a la Orden de 5 de agosto de 1940.
- <sup>141</sup> I Congreso Sindical Agrario de Levante. Valencia, marzo de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/162.
- <sup>142</sup> Conclusiones acerca de las causas, importancia actual y soluciones de paro, julio de 1945. O. S. Lucha contra el Paro. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, n° 3.388, pág. 19.
- <sup>143</sup> Hernáinz, *El seguro de paro...*, op. cit., pág. 523.
- <sup>144</sup> Existían también, aunque de forma más restringida, subsidios de paro en los estatutos de los montepíos de la piel, de panadería y del vidrio (Orden de 30 de abril de 1947), de la madera (Orden de 29 de julio de 1947), de hostelería y de las industrias del cemento y del yeso (Orden de 15 de noviembre de 1947) y de las lácteas (Orden de 12 de enero de 1948).
- <sup>145</sup> Orden de 30 de abril de 1947.
- <sup>146</sup> Orden de 30 de abril de 1947.
- <sup>147</sup> Orden de 29 de julio de 1947.
- <sup>148</sup> Orden de 30 de abril de 1947.
- <sup>149</sup> Orden de 15 de noviembre de 1947.
- <sup>150</sup> Orden de 15 de noviembre de 1947.
- <sup>151</sup> Orden de 12 de enero de 1948.
- <sup>152</sup> Actas de la reunión celebrada los días 12 y 13 de noviembre de 1948 de el Junta Social del Sindicato Nacional de la Construcción, Vidrio y Cerámica. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, n° 3336, pág. 8.
- <sup>153</sup> I Congreso Sindical Agrario de Levante. Valencia, marzo de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/162.
- <sup>154</sup> Pérez Ferraro, María Elena: Seguridad Social y Desempleo. Separata del n° 5 (septiembre-octubre de 1976) de la RISS, pag. 5.
- <sup>155</sup> Instituto Nacional de Previsión. Informe del Comisario don Luis Jordana de Pozas sobre unificación de los seguros sociales y racionalización y mecanización de los servicios, 20 de diciembre de 1946. A.G.A.; I.D.D. 90.01, R/390.
- <sup>156</sup> Ídem, pag. 3.
- <sup>157</sup> I Congreso Nacional de Trabajadores, 1946. Conclusiones. Delegación Nacional de Sindicatos; Vicesecretaría Nacional de Ordenación Social, 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.393, pág. 63. Dicha demanda se repetiría sin éxito en los congresos celebrados en 1951 y 1955. I Congreso Nacional de Trabajadores y en el I Congreso Nacional de Trabajadores.
- <sup>158</sup> A.P.G.; J.F.; Leg. 59; 3.1., n° 30.
- <sup>159</sup> Fernández Heras, "Derecho laboral...", op. cit. pág. 139.
- <sup>160</sup> I Asamblea General del I.N.P., 1953. La Seguridad social de los trabajadores del campo. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/243.

## **Capítulo 16. El mutualismo laboral como materialización del fracaso de la política pública de los seguros sociales.**

La primera referencia legislativa relevante sobre mutualidades la encontramos en la Ley de la Jefatura del Estado de 6 de diciembre de 1941.<sup>1</sup> Esta disposición tendía a diferenciar a las entidades "mutualistas" que buscaban el lucro amparadas en la Ley de 14 de mayo de 1908 y las que tenían una índole benéfica y estaban exentas de lucro mercantil. Éstas iban a ser controladas expresamente por el ministerio de Trabajo a través de la Dirección General de Previsión dentro de la cual se había creado, por Orden de 4 de diciembre de 1940, una sección para hacerse cargo de dichas instituciones. La mencionada ley definía a las mutualidades de previsión en su artículo 1º de la siguiente forma:

"Se considerarán mutualidades o montepíos, a los efectos de la presente Ley, las asociaciones que con aquella denominación o con cualquiera otra, y sin ánimo de lucro, ejercen una modalidad de previsión de carácter social o benéfico, encaminada a proteger a sus asociados o a sus bienes contra circunstancias o acontecimientos de carácter fortuito y previsible a los que están expuestos mediante aportaciones directas de los asociados o procedentes de otras entidades o personas protectoras."<sup>2</sup>

En cualquier caso la ley de 1941 y su reglamento de 1943 no eran más que el antecedente más cercano de lo que luego fue, a partir de 1946, el desarrollo del mutualismo laboral, dado que dichas disposiciones encerraban una serie de preceptos y directrices creadas para otro tipo de instituciones de previsión como aquellas creadas por la libre iniciativa de trabajadores y empresarios y al margen de los seguros sociales obligatorios creados por el I.N.P.<sup>3</sup> Por tanto, ese carácter voluntario y no obligatorio las separaba claramente del mutualismo laboral. Dada la inexistencia todavía de la ley de reglamentaciones del trabajo estas entidades podían ser constituidas por particulares, por toda clase de entidades y por empresas. En principio, las prestaciones eran compatibles con las de los seguros establecidos por el Estado, pese a lo cual se dejaba la puerta abierta para que el ministerio de Trabajo pudiera declarar las primeras como substitutivas de las segundas. La designación de los representantes en su órganos de gobierno correspondía a los asociados pese a lo cual el ministerio de Trabajo tenía el derecho de veto.

El Decreto de 26 de mayo de 1946<sup>4</sup> del ministerio de Trabajo para el desarrollo de la anterior ley fue el segundo escalón en la evolución del sistema mutualista en la época Girón. Por medio de dicha disposición se aprobaba el reglamento del régimen de montepíos y mutualidades. En su artículo 3º otorgaba a la organización sindical la capacidad de crear entidades mutualistas junto a los particulares y las empresas. Con el objetivo de afianzar el poder de las empresas o de las entidades creadoras de las mutualidades este mismo artículo permitía que, aquellas que

aportaran más del 25 % de las cuotas de la institución, tuvieran el privilegio de designar un número de miembros proporcional a su aportación en la junta directiva o rectora de la mutualidad.

Entre los socios de las entidades se diferenciaba a los protectores de los miembros de número. Se consideraba socio protector al que, sin obtener beneficio de la entidad, contribuyese a su sostenimiento.

A efectos de clasificación el reglamento establecía cinco tipos de mutualidades. En primer lugar, aquellas cuyo fin fuera cubrir los gastos de sepelio de un asegurado o proporcionar a la familia un "auxilio" económico en forma de capital o pensión temporal o vitalicia. En segundo lugar, las mutualidades o igualatorios creados con objeto de dar las prestaciones del seguro de enfermedad. En tercer lugar las creadas para realizar el seguro de maternidad. Un cuarto grupo estaba integrado por las entidades que asumían los riesgos de vejez, accidentes e invalidez. En último lugar, se consideraba a las mutualidades cuyo fin fuera hacerse cargo de los posibles daños que afectasen al mobiliario o ajuar de los trabajadores, a sus instrumentos de trabajo, ganado, cosechas, aperos, embarcaciones, artes de pesca o cualquier otro bien, mueble o inmueble, de los mutualistas. Estos cinco tipos de mutualidades podían combinar sus prestaciones.

El Reglamento concedía un especial papel a la O. S. de Previsión Social de la Delegación Nacional de Sindicatos en la medida en que era ésta la que podía informar a la Dirección General de Previsión del ministerio de Trabajo con el objetivo de que esta tuviera elementos de juicio políticos para vetar a los posibles desafectos de las juntas rectoras de los montepíos. Este capítulo de control político se concretaba en el artículo 19 en el que se establecía la obligación de notificar a la O. S. de Previsión Social la reunión de la asamblea general de la mutualidad. Éste habría de poner en conocimiento de la Jefatura Provincial de la Obra los acuerdos contrarios al espíritu del Movimiento tomados en la junta o asamblea.

Es de destacar la ambigüedad existente en cuanto al establecimiento de los órganos de poder de la mutualidad y en cuanto a los motivos que pudieran producir su disolución por medio de la actuación gubernamental, lo que de hecho venía a mantener subyugadas a estas entidades al control discrecional del Estado y más concretamente del ministerio de Trabajo. En esta línea, la designación de los jefes, directores, gerentes o consejeros de las mutualidades podía recibir el veto del ministerio de Trabajo por causas justificadas. Lo notable del caso era la ausencia de una enumeración clara sobre los motivos que pudieran provocar ese hecho dejando al criterio puramente interno del ministro dicha causa, "y no existiendo en el vigente Estatuto Jurídico español recurso ninguno contra las resoluciones ministeriales."<sup>5</sup> Hasta tal punto, se pretendía

controlar discrecionalmente desde el ministerio de Trabajo a dichas instituciones que el proyecto inicial de la ley de mutualidades incluía entre las causas de disolución la existencia de una resolución ministerial a la que luego se añadió, como mecanismo mínimo de “seudocontrol” o de coparticipación coercitiva, la necesidad de un acuerdo en Consejo de ministros. Ni que decir tiene que el objetivo de la más absoluta discrecionalidad tenía como fin mantener alejados del control de estas importantes instituciones de previsión social a los elementos contrarios al régimen que pudieran utilizar dichas plataformas para desarrollar “los peligrosos núcleos políticos partidistas.” En coincidencia con los principios enumerados se expresaba entonces José Solís Ruiz:

“En el día de hoy devuelvo a esa Obra Sindical varios expedientes de Mutualidades Y Montepíos que anteriormente me remitiste.

Esta Delegación siente el temor de que tras de algunas de estas entidades pueda esconderse algún clandestino sindicato clasista. Por ello considera conveniente que en todo caso las Jefaturas Provinciales de la Obra informen cada uno de estos expedientes, sin que sea pretexto el corto plazo que señala el artículo 28 del Reglamento vigente de montepíos y mutualidades, ya que esa Jefatura deberá adoptar las medidas necesarias para que estos informes sean emitidos en el tiempo señalado.

Dicha información debe tener no sólo carácter técnico, sino político-social, extendiéndola si preciso fuera a los directivos de las Asociaciones cuyo funcionamiento se pretende.”<sup>6</sup>

La reglamentación establecía también la posibilidad de federación entre las mutualidades que practicasen el mismo ramo del seguro o cuyos beneficiarios fueran personas que se encontraran en las mismas condiciones.

Dado el peso en la economía nacional de los montepíos y mutualidades y de sus fondos de reserva la canalización de los mismos por medio de inversiones reglamentadas constituía un hecho de singular relevancia política y económica. Dicha regulación se llevó a cabo definitivamente por medio del Decreto de 23 de enero de 1953.<sup>7</sup> En dicha disposición se establecía que el 65 % (como mínimo) de dichos fondos se invirtieran en valores emitidos o garantizados por el Estado español; un 15% (como mínimo) en otros fondos públicos españoles que fueran objeto de negociación en las bolsas o colegios oficiales de corredores de comercio. El 20 % que restaba podía invertirse en inmuebles que ofrecieran garantías de valor y productividad, o en títulos privados de renta fija o variable contratados en bolsas o colegios oficiales de corredores de comercio y que devengaran con normalidad sus rendimientos. También podían ser invertidos en obras de carácter social que garantizaran una rentabilidad del 3,5 % como mínimo. Entre los fondos del segundo grupo se incluían las obligaciones del I.N.P.,



las cédulas del Banco Hipotecario de España, las del Banco de Crédito Local y los demás valores de renta fija emitidos por la banca oficial. De igual manera, podían considerarse en este grupo los títulos de sociedades anónimas previa resolución positiva del ministerio de Hacienda. Sin embargo, la promulgación de esta disposición no tuvo el sentido de encauzar las inversiones de las mutualidades en un sentido distinto al que hasta ese momento imperaba tal y como pone de manifiesto el porcentaje de inversiones generalizado entre las mismas justo antes del decreto de enero de 1953:

Deuda perpetua exterior.....	0,05 %
Deuda perpetua interior.....	0,64 %
Amortizable.....	20,37 %
Canal Isabel II.....	0,54 %
Colonización.....	3,34 %
Reconstrucción.....	13,94 %
RENFE.....	10,17 %
Puertos.....	9,96 %
Hipotecarias.....	9,17 %
Crédito Local Lotes.....	5,44 %
Crédito Local Interprovincial.....	2,01 %
Instalaciones Sanitarias.....	10,19 %
Ayuntamientos.....	2,69 %
Diputaciones.....	0,21 %
Inmuebles.....	5,12 %
Prestamos.....	1,29 %
I. Sociales.....	4,27 %
Valores Industriales.....	0,60 % <sup>8</sup>

El Decreto de 10 de agosto de 1954<sup>9</sup> daba un paso más en el camino de la estructuración del sistema mutualista definiendo a las entidades de previsión laboral en su artículo 1º como montepíos, mutualidades, cajas de jubilaciones y subsidios, cajas o mutualidades de previsión de empresas creadas o reorganizadas por el ministerio de Trabajo con objeto de proteger a los trabajadores por cuenta ajena contra riesgos previsibles tal y como estipulaba la Ley de 16 de octubre de 1942 de reglamentaciones laborales.

El artículo 3º establecía como atribución del ministerio de Trabajo la de nombrar y cesar a los directores de dichas instituciones avanzando en el sentido de controlar a las mutualidades de previsión. De igual manera, a partir de este momento, y para diferenciar a las mutualidades nacidas de las reglamentaciones laborales de las restantes, estas entidades habrían de incluir la

palabra laboral en su denominación. La ley establecía un límite para el salario situado en 7.000 pts. a efectos de cotización de cara a las prestaciones de la mutualidad.

Esta ley fue desarrollada por la Orden de 10 de septiembre de 1954 por la que se promulgaba su reglamento. La definición de su artículo 1º pretendía, como ya se ha señalado, diferenciar las mutualidades nacidas de las reglamentaciones laborales de las restantes. En este sentido afirmaba que el "mutualismo laboral es un sistema de previsión social obligatorio establecido en favor de los trabajadores por cuenta ajena en actividades laborales determinadas por el ministerio de Trabajo." Su denominación sería la de mutualidades laborales salvo en el caso en que su ámbito de aplicación fuera una sólo empresa, en cuyo caso, se denominaban cajas o mutualidades de empresa.

En cuanto a su campo de aplicación, la reglamentación establecía una limitación importante en el sentido de desposeer del carácter de mutualista a los trabajadores que, al iniciar o reanudar su trabajo por cuenta ajena en una actividad encuadrada en una institución de previsión laboral, tuvieran cumplidos los 55 años salvo en el caso de que procedieran de otra actividad laboral en que el trabajador estuviera encuadrado en una institución de previsión laboral dentro de los dos años anteriores.

Las prestaciones de las mutualidades eran reglamentarias o extrarreglamentarias.<sup>10</sup> Las primeras se definían como aquellas que tenían carácter exigible por parte de los mutualistas o sus familiares siempre que cumpliesen las condiciones que para ellas se especificaran. En este caso las prestaciones eran denominadas pensiones (cantidad pagada periódicamente con carácter vitalicio o temporal) o subsidios (cantidad pagada de un sólo vez). Las prestaciones extrarreglamentarias eran aquellas potestativas de la institución de previsión laboral y concedidas previa petición del interesado graciosamente a favor de éste sin que hubiera derecho previo por parte del mismo. Entre las prestaciones reglamentarias se encontraban las pensiones de jubilación, invalidez, larga enfermedad y orfandad, las pensiones o subsidios de viudedad en favor de familiares y los subsidios de defunción, nupcialidad y natalidad. En el caso de las potestativas se estipulaba que podían ser de cuatro tipos: extrarreglamentarias, prórroga de larga enfermedad, créditos laborales y de acción formativa.

En lo referente a la pensión de jubilación tenían derecho a la misma los mayores de 65 años que tuvieran cubierto el periodo de carencia y reuniesen un mínimo de 10 años de trabajo efectivo por cuenta ajena dentro del territorio nacional.<sup>11</sup> También adquirirían derecho a esta prestación los pensionistas de larga enfermedad con más de 60 años y 10 de trabajo por cuenta ajena dentro del país, los parados y pensionistas del seguro de accidentes del trabajo o de enfermedades profesionales que cumplieran los mismos criterios mencionados.

Se consideraba la pensión de invalidez cuando, debido a la secuela de accidente o enfermedad, se produjese una lesión orgánica funcional totalmente irreversible que ocasionara al trabajador una incapacidad permanente y absoluta para toda clase de trabajo, exceptuándose las incapacidades debidas a accidentes del trabajo o enfermedad profesional, deportes remunerados o tuberculosis.

La pensión por larga enfermedad se concedía en los casos de enfermedad o accidentes que imposibilitasen al obrero para realizar el trabajo habitual, exceptuando el accidente de trabajo o enfermedad profesional.

En el caso de la pensión o subsidio de viudedad se causaba derecho a la misma cuando el fallecimiento era por causa distinta al accidente de trabajo o a la enfermedad profesional. En este caso la mujer del mutualista tenía que haber contraído matrimonio antes de los 60 años de edad y con dos años de antelación a la fecha del fallecimiento, salvo en el caso en que quedasen hijos legítimos o legitimados del matrimonio (en cuyo caso esta última condición no se consideraría), además de tener cubierto el período de carencia. Causaban también este derecho los pensionistas por jubilación, invalidez y larga duración que cumpliesen los mencionados criterios.

La pensión de orfandad era recibida por los derechohabientes del mutualista que falleciera por causa distinta al accidente de trabajo o enfermedad profesional y que tuviera cubierto el período de carencia. El mismo criterio se seguía con los pensionistas de jubilación, invalidez o larga enfermedad sin considerar su período de carencia. A esta pensión tenían derecho únicamente los hijos legítimos, legitimados y naturales reconocidos o adoptivos del causante (siempre que éstos últimos lo hubieran sido con dos años de antelación al fallecimiento)

La pensión o subsidio en favor de los familiares era causada por el fallecimiento del mutualista por causa distinta al accidente de trabajo o a la enfermedad profesional además de los casos de pensionistas por jubilación, invalidez y larga enfermedad. En este caso, esta prestación podía concederse en favor de nietos y hermanos, madres y abuelas, padres y abuelos e hijas y hermanas. Por último, en el caso del subsidio por defunción causaba derecho a dicha prestación la muerte del mutualista o pensionista que recibiera una prestación por jubilación, invalidez o larga enfermedad.<sup>12</sup>

### **16.1. El gobierno de las mutualidades.**

La reglamentación a la que nos referimos establecía también la forma en que se organizaba el gobierno de las mutualidades. Éstas estaban regidas por los siguientes organismos: una asamblea general, una junta rectora y comisiones y ponencias provinciales. La asamblea general era el órgano supremo de la institución; era ella la que elegía los miembros de la junta rectora y examinaba y aprobaba las memorias y cuentas de la mutualidad. La junta rectora tenía a su cargo el gobierno directo de la mutualidad por delegación de la asamblea. En último lugar, las comisiones y ponencias provinciales tenían atribuciones informativas, de vigilancia del cumplimiento de los preceptos legales y resolutivas, etc.

En la línea de control de las mutualidades por parte de la organización sindical y el ministerio de Trabajo, para ser elegido vocal de los órganos de gobierno del mutualismo laboral era necesario estar afiliado a la organización sindical en el caso de los vocales de los trabajadores y de los empresarios. De igual manera, para elegir las comisiones y ponencias provinciales había que tener en cuenta que los electores eran los vocales mutualistas de las juntas sindicales económicas y sociales de las entidades sindicales provinciales correspondientes al sector laboral al que perteneciesen, recalcando con ello su carácter corporativo.<sup>13</sup> A su vez estas comisiones provinciales habían de elegir a los vocales de la asamblea general, la cual a su vez nombraba a la junta rectora y ésta nombraba al presidente y al vicepresidente. Independientemente del sistema electoral existían una serie de vocales natos. En las ponencias, el delegado provincial de mutualidades; en las comisiones provinciales, un representante de la O. S. de Previsión Social y el delegado provincial de mutualidades; en la asamblea y junta rectora, un representante de la O. S. de Previsión Social y el director de la institución, figura nombrada por el ministerio de Trabajo a propuesta del Servicio de Mutualidades Laborales y que era, junto al presidente, la máxima autoridad de la mutualidad.<sup>14</sup> Todos ellos con voz y voto en dichos órganos.

A su vez el artículo 48 del Reglamento<sup>15</sup> de 26 de mayo de 1943 reservaba a la O. S. de Previsión Social la facultad de interponer el veto a la creación oficial de dichas instituciones en función de criterios políticos y no de interés social en la medida en que sus principios pudieran pugnar con los postulados del Nuevo Estado para lo cual se incidía en el estudio de los antecedentes político-sociales de los miembros que integrasen su Junta Rectora.

De ahí los continuos informes de la Jefatura Nacional de Previsión Social al Director General de Previsión con el objetivo de controlar individualmente a los camuflados "izquierdistas" dentro de las mutualidades. Y es que el artículo 32 del reglamento de montepíos y mutualidades confería a la Obra Sindical de Previsión Social el control político de dichas instituciones y de sus componentes más destacados por su militancia antifrancista. De los mencionados informes, provenientes de la Jefatura Superior de Policía, dan cuenta los vetos presentados y

razonados ante la Dirección General de Previsión por la Jefatura Nacional de la O. S. de Previsión Social de entre los cuales insertamos algunos ejemplos destacados, entre otros aspectos, por la relativa lejanía con respecto a los años más próximos al ardor anticomunista de la guerra civil:<sup>16</sup>

"...que fue elemento destacado de izquierdas, miembro de la Confederación Nacional del Trabajo y Federación Anarquista Ibérica, habiendo sufrido condena por sus ideales extremistas y actuación durante la dominación roja-separatista."<sup>17</sup>

"...es persona de ideas extremistas, denunció a personas de derechas durante el dominio rojo en esta capital. Ha sido liberto condicional."<sup>18</sup>

"...era de ideología izquierdista y durante el dominio rojo se significó por sus actuaciones, marchó al extranjero sin que hasta la fecha se haya vuelto a saber nada de él y se le supone actualmente en Francia."<sup>19</sup>

"...y observa buena conducta moral, pública y privada. Políticamente está considerado como desafecto al Régimen, ya que antes del Glorioso Movimiento Nacional, pertenecía a la llamada Casa del Pueblo, ostentando el cargo de Secretario. No fue detenido al iniciarse el Movimiento, pero se le destituyó del cargo de Cartero, si bien después del correspondiente expediente lo volvió a ocupar en 1941. Actualmente no se le conoce actividades contrarias al Régimen."<sup>20</sup>

"...que antes del Glorioso Movimiento Nacional pertenecía al partido Socialista Unificado de Cataluña, así como durante el mismo ignorándose ocupase cargos en dicho Partido y cometiese algún acto delictivo. El día 3 de agosto de 1943 fue detenido por Agentes del Cuerpo de Policía de Barcelona, por haber sido descubierta una organización del Partido Comunista en la que figuraba como afiliado a una célula de la referida organización..."<sup>21</sup>

Esta era otra de las vertientes relevantes del aparato de previsión. El régimen procuraba con todas sus fuerzas que sus instrumentos de prestigio (en este caso las mutualidades) no cayeran en manos de los que, desde su punto de vista, habían sido derrotados en la guerra civil.

### **16.2. Mutualidades y montepíos: "la gran revolución."**<sup>22</sup>

Las mutualidades y montepíos laborales se pueden definir como un sistema de previsión social de carácter obligatorio desarrollado por instituciones paraestatales con personalidad jurídica

propia que aparecen en España a partir de 1946 con la creación del Servicios de Mutualidades Laborales<sup>23</sup> en virtud de las facultades que concedía al ministerio de Trabajo la Ley de 16 de octubre de 1942 sobre reglamentaciones laborales del trabajo. En dicha disposición se establecía como atribución de dicho ministerio la regulación de las condiciones de trabajo mínimas, entre las cuales, se incluían las medidas relacionadas con la previsión social. De ello se podría deducir el carácter poco acertado de la denominación de mutualidades por cuanto su existencia tenía un carácter obligatorio, estaban creadas por ramas de la producción y tenían como fin conceder prestaciones teóricamente complementarias según los criterios establecidos por el Estado. En definitiva, eran una creación del propio Estado;<sup>24</sup> su “gran creación,” tanto por el campo que intentaban cubrir en el ámbito de la previsión, como por ser el instrumento de creación de las Universidades Laborales.<sup>25</sup>

Indudablemente la idea de la creación de las mutualidades laborales como gran revolución había de partir del ministro que potenció la creación de dichas instituciones consideradas como la “más alta conquista del derecho social español,”<sup>26</sup> sin olvidar (cuestión que estaba en la mente de Girón) la gran cantidad de huelgas y alteraciones del orden que podían haberse evitado (también según Girón) con un sistema de previsión que pudiera paliar, siquiera parcialmente, la negativa situación del mundo del trabajo en las décadas precedentes. Esta política había de constituir un baluarte contra la lucha de clases y a favor de la cooperación entre el mundo empresarial y el obrero al conformarse como una prolongación del contrato de trabajo una vez extinguido, concediendo al obrero unas prestaciones que sustituían la falta del salario.<sup>27</sup>

Sin embargo, comunmente, se daba el caso de que los beneficios de las mutualidades no llegaban a los trabajadores cuando la empresa no tenía al corriente las cotizaciones, pese a que a dichos trabajadores se les había efectuado el pertinente descuento de la parte que a ellos correspondía aportar. Evidentemente, tras la intervención de la magistratura y la declaración como insolvente de la empresa, el trabajador recuperaba sus derechos pero en ese lapsus de tiempo el perjuicio originado para las familias humildes no era reparado por la ausencia de disponibilidad política para ahorrar este largo cúmulo de trámites legales.<sup>28</sup>

Este era un objetivo fundamental que fomentó el desarrollo del mutualismo. Y es que el mutualismo laboral nacía, para los ideólogos de la política social del franquismo, de un sentimiento altruista arraigado en lo más profundo del alma de los españoles que por medio de dichas instituciones se hermanaban y se unían a través de un vínculo prácticamente espiritual para alcanzar un objetivo que había de tener un carácter moral. “Por esto vemos que la mutualidad verdadera nace a impulsos de un sentimiento religioso, profesional o exclusivamente mutualista, pero siempre sobre la base de un pensamiento, de una inquietud, de un anhelo y de un fervor espiritual, moral y social...Hagamos, pues, de España una gran

Mutualidad eminentemente cristiana, es decir, conforme con la continuidad histórica, de un sentimiento profundamente arraigado y netamente español en la que todos los que la integren se sientan unidos y solidarios por una verdadera y efectiva fraternidad cristiana, fuente de la Justicia, la Paz y el Bien,<sup>29</sup> se afirmaba desde las páginas de los órganos de expresión del ministerio de Trabajo. En este sentido el mutualismo nacía como un arma social para disminuir las diferencias y "rencores" posibles entre las clases sociales, como un mecanismo más para aproximar los corazones de empresarios y trabajadores con el fin de armonizar su existencia y la del Estado franquista.

Las mutualidades laborales tenían tres características esenciales: habían de ser laborales y obligatorias, es decir, habían de estar constituidas por empresarios y trabajadores por cuenta ajena comprendidos en alguna reglamentación del trabajo; habían de estar tuteladas por el Estado, lo cual se traducía (independientemente del control de los altos cargos) en el asesoramiento técnico directo y en la ejecución administrativa de los acuerdos que adoptasen los órganos rectores de dichas instituciones; en último lugar, habían de ser entidades verticales, es decir, tenían que estar organizadas por ramas de la producción salvo en lo referente al montepío de actividades diversas que acogía a un número importante de asociados encuadrados en reglamentaciones diferentes y sin ninguna afinidad.

Por medio de la circular nº 156 de 11 de agosto de 1941 la Delegación Nacional de Sindicatos había creado la Obra Sindical de Previsión Social con el fin de desarrollar las funciones de previsión en el ámbito sindical en lo referente a la aplicación y divulgación de los seguros sociales y al fomento y la tutela político-social de las mutualidades libres de previsión. En este momento, todavía no se era muy consciente del potencial económico que iban a adquirir las mutualidades.<sup>30</sup> En esta línea de materialización de la política social por medio del organismo sindical, el Reglamento de 26 de mayo de 1943<sup>31</sup> para la aplicación de la Ley de 6 de diciembre de 1941,<sup>32</sup> establecía el Régimen de Montepíos y Mutualidades Libres, el cual confería la tutela de dichas instituciones en el campo de la previsión social privada a la organización sindical a través de la Obra Sindical de Previsión Social.

El traspaso "definitivo" de las atribuciones del ministerio de Trabajo a la organización sindical se intentó llevar a cabo en el año 1952.<sup>33</sup> Con ello las mutualidades pasaban a depender de la Secretaría General del Movimiento y de su instrumento político, los sindicatos. De hecho, el traspaso quedó momentáneamente vacío de contenido en la medida en que continuaron bajo la dependencia del ministerio de Trabajo y, concretamente, bajo la tutela del Servicio de Mutualidades Laborales una larga lista de Montepíos, Mutualidades, Cajas de Jubilaciones y Subsidios y Cajas y Montepíos de Empresas.<sup>34</sup> En realidad, dicho trasvase nunca se ejecutó por la negativa del ministro Secretario General del Movimiento, Raimundo Fernández Cuesta, que en la Junta Política insistió hasta la saciedad en que si dichas instituciones pasaban a depender

del movimiento o de la organización sindical sería “una posible fuente de irregularidades.”<sup>35</sup> Por otro lado, Fernández Cuesta tenía miedo de que las atribuciones sobre los montepíos fueran compartidas por el ministerio de Trabajo y el ministro del Movimiento, basándose en la tendencia del primero de los ministerios a desarrollar disposiciones muy relevantes para la economía nacional “sin conocimiento del Consejo de ministros.”<sup>36</sup>

Nacieron la mutualidades con el afán de propugnar la protección de sus socios mediante el mutuo auxilio contra los diversos riesgos que amenazaban al individuo y a su familia, previo encauzamiento de dicha corriente por medio del Estado y constituyéndose en aparato de previsión complementario de los seguros sociales que el Estado iba creando de forma progresiva. Sin embargo, se pueden encontrar notas discordantes en torno a esta cuestión en el sentido de que el sistema de previsión mutualista obligatorio, más que complementario de los seguros controlados por el I.N.P. era el seguro “básico, nacional y casi diríamos uniforme”<sup>37</sup> con la única diferencia de que la gestión del mismo se realizaba a través de instituciones profesionales no públicas en las que ni los seguros ni las mismas prestaciones (en ocasiones superiores a las de los seguros obligatorios) eran realidades de segunda fila frente a un escasamente desarrollado aparato de previsión público.

Por supuesto, estas instituciones habrían de caracterizarse por la ausencia de ánimo de lucro y por su plena capacidad jurídica para ejercitar actos relacionados con los fines de su institución. Particulares y empresas podían constituir mutualidades si bien, jurídica y formalmente, la entidad habría de estar totalmente separada de aquéllas. Con ello se pretendía diferenciar perfectamente a las mutualidades laborales de las entidades no laborales y de los seguros sociales obligatorios.<sup>38</sup>

El sesgo paternalista<sup>39</sup> y escorado hacia la beneficencia<sup>40</sup> se constataba en la normativa sobre mutualidades en la medida en que consideraba dos tipos de socios. Por un lado, los activos, que eran afiliados con derecho a ser beneficiarios. Y en segundo lugar, los protectores, que eran los que de forma desinteresada contribuían a la causa y fines de la institución mutualista. Por otro lado, en esta línea se posibilitaba la existencia de donativos otorgados por particulares o por entidades estatales.<sup>41</sup>

En cuanto a la inversión de los fondos sociales, sin tener en cuenta los afectados por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la institución, debían ser invertidos en bienes como la adquisición de inmuebles destinados a la instalación de los servicios de instituciones mutualistas (sanatorios, orfelinatos, clínicas...) y a la compra de valores emitidos por el Estado o instituciones reconocidas y destinados a arbitrar recursos para el desarrollo de los seguros sociales. Esta cuestión era la que más preocupaba a los economistas de talante más liberal



puesto que el considerable volumen de cotizaciones controladas por las mutualidades hacía que en ciertos sectores representasen más del 10 % de los salarios con lo cual se podía introducir un factor favorable o desfavorable para el funcionamiento de la economía aparte de sus efectos sobre el sistema de previsión obligatorio.<sup>42</sup> Incluso se puede afirmar que para los falangistas más radicales el sistema mutualista representó un camino para hacer realidad sus sueños de socializar la industria por medio de dichas entidades en la medida en que éstas podían constituirse en accionistas minoritarios de determinadas empresas y a partir de ahí intentar adueñarse de los consejos de administración.<sup>43</sup> Difícilmente el Estado franquista podía permitir tal cosa por motivos políticos y por cuestiones más pragmáticas como el hecho de que tenía garantizados, en gran medida, sus incrementos en el presupuesto consciente de que tenía cubierto su costes con las emisiones de deuda que, en parte, las mutualidades estaban obligadas a cubrir. Desde este punto de vista, Velarde Fuertes indicaba la posibilidad de hacer de los montepíos laborales los “primeros empresarios de la Patria”<sup>44</sup> logrando así, dentro del marco legal vigente, potenciar sus posibilidades financieras capacitando a dichas instituciones para controlar la mayoría de las acciones de diversas e importantes empresas al materializar esta vía original de “socialización” de la empresa española.

En cuanto al cobro de la cuotas, el proyecto primigenio pretendía, en contradicción con el Código Civil de 1925, que las mutualidades tuvieran preferencia respecto a cualquier otro acreedor sobre los bienes del deudor, cuestión que no se materializaría en dicha forma promulgada la ley.

“Las Mutualidades Laborales, como seguros obligatorios paralelos, fueron una manifestación más de la política intervencionista del Estado,” afirma Benito del Pozo<sup>45</sup> con un claro sostén en la ley de reglamentaciones laborales de 1942. En esta disposición se establecía la posibilidad de crear entes mutualistas dentro de cada ámbito profesional, con el objetivo de desarrollar mecanismos de previsión ante el infortunio financiados por medio de cuotas establecidas sobre el salario de los propios trabajadores. “En consecuencia, se produjo la proliferación de Cajas y Montepíos que no se unifican parcialmente hasta 1946 en que se crea el Servicio de Mutualidades (después denominado Servicio del Mutualismo Laboral).”<sup>46</sup> Este sería el instrumento básico que haría posible transformar en un auténtico sistema lo que hasta el momento eran normas aisladas de previsión.

El Decreto de 10 de agosto de 1954 y el reglamento de 10 de septiembre del mismo año sentaron las bases de un sistema mutualista ya asentado. Hasta ese momento las normas que regían los distintos montepíos eran básicamente las de la Ley de 6 de diciembre de 1941 y su reglamento de 1943. A partir de la promulgación de las disposiciones mencionadas de 1954, podemos afirmar que el sistema del mutualismo laboral estaba plenamente asentado y, en

consecuencia, llegamos a la conclusión de que, en gran medida, el sistema de previsión social español resultaba ciertamente atípico por cuanto la evolución normal conducía de la mutualidad al seguro social obligatorio y no al revés.<sup>47</sup>

Pese a ello, fue precisamente a mediados de la década de los cuarenta (sin que esa proliferación fuera tal en los primeros momentos) cuando el número de mutualidades creció con más intensidad. Concretamente el año en que mayor número de mutualidades se crearon por parte de la Obra Sindical de Previsión fue 1945 (ver cuadro nº 106). En este año el número de entidades mutualistas que vieron la luz se elevó a 377. Por tanto, pese a la puesta en funcionamiento de esta institución en el año 1941, no fue hasta el año 1945 cuando comenzaron a operar un número de mutualidades significativamente importantes. Fue el trienio 1945-47 el que mayor número de mutualidades vio nacer; en total 797.

Años	Nº de mutualidades
44	73
45	377
46	240
47	180
48	46
49	20
TOTAL	944

\*Cuadro nº 106. Mutualidades constituidas por la Obra Sindical de Previsión Social (1944-1949)<sup>48</sup>

Las mutualidades nacieron dada la insuficiencia, el disminuido campo de aplicación y la escasez de las prestaciones del sistema de previsión creado lentamente por el ministerio de Trabajo. Dada la escasa capacidad de la hacienda pública, se pretendía que los trabajadores se autoconcediesen prestaciones fruto de su esfuerzo individual por medio de las asociaciones mutualistas en vista de la incapacidad o falta de voluntad del Estado para concedérselas.<sup>49</sup> Ese escaso desarrollo del campo de aplicación, como en el resto del aparato de previsión social del primer franquismo, suponía que los beneficios del mutualismo no llegarían al mar o al campo español.<sup>50</sup> El "estado del bienestar" que Girón pretendía crear tenía una altura de miras poco amplia, una disponibilidad de recursos pequeña y una voluntad de incentivación del trabajo por todos los medios posibles frente a lo calificado como "política de subsidios." Girón, consciente de la insuficiencia de las medidas de previsión social, elaboró la idea de la potenciación de las mutualidades y montepíos laborales como respuesta, básicamente, a la escasa ambición del Seguro Obligatorio de Enfermedad. No parece que fuera un triunfo ni una revolución del nacional-sindicalismo sino la plasmación de la ausencia de voluntad para crear un sistema de seguros sociales con tendencia a homologarse con el de los países europeos, la explicitación de

la falta de recursos del ministerio de Trabajo y la conciencia de que la ausencia parcial de políticas públicas de previsión social necesitaba de una compensación que paliara los graves problemas sociales que sufría la España de los años cuarenta.

Era evidente que el desigual reparto de cargas significaba una desigualdad sistemática de las prestaciones, dado que el potencial de una mutualidad dependía del número de afiliados de la misma y de la capacidad de diluir el riesgo entre el mayor número posible de afiliados. Y por ello podía darse la circunstancia de que, prestaciones concebidas como mejoras del sistema de los seguros sociales obligatorios, se transformaran en un más eficiente sistema de previsión social para algunos sectores profesionales, reduciendo a la insignificancia las prestaciones de aquellos.<sup>51</sup> “Ejemplo, el seguro de vejez e invalidez concede hoy una cantidad fija mínima -noventa pts. mensuales-, mientras la rama siderometalúrgica concede jubilaciones que van desde el 30 al 70 por 100 del último salario, según los años de servicios en la Empresa. ¿Cabe hablar aquí de mejora? ¿No se trata mejor de una transformación del sistema reparador?,” se preguntaba Pérez Botija poniendo en evidencia el relativamente escaso potencial de la previsión obligatoria.<sup>52</sup> En definitiva, se ponía de manifiesto la injusticia de un sistema que únicamente lograba avances en aquellos sectores potencialmente conflictivos atendiendo a una jerarquía profesional cuyo último peldaño ocupaban los agricultores y los pescadores<sup>53</sup> ante un sistema de seguros obligatorios que les excluía incomprensiblemente atendiendo al criterio de debilidad económica sin que el criterio profesional les sirviera para gozar de los beneficios del sistema mutualista.<sup>54</sup>

Esa debilidad no permitió que el ministerio de Trabajo autorizase al Delegado Nacional de Sindicatos (a partir de 1951 José Solís Ruiz) a ejecutar un proyecto cuyo objetivo era crear un Montepío Sindical Agropecuario que se hiciese cargo de la totalidad de los seguros sociales en la agricultura ensamblado en la Organización Nacional de Hermandades de Labradores y Ganaderos.

En esta línea, Laraña afirmaba en 1950 que las mutualidades laborales tenían como “supuesto existencial y base de su creación, el hecho de la insuficiencia de los seguros sociales obligatorios para garantizar totalmente la seguridad social de los productores.”<sup>55</sup> Hasta tal punto se daba una diferencia acusada entre las prestaciones del sistema obligatorio y el mutualista que algunos solicitaban la disolución progresiva del primero en el segundo.<sup>56</sup> Y es que un sistema de solidaridad de ámbito limitado excluía a los trabajadores a domicilio; a los trabajadores por cuenta ajena que no cumpliesen determinados requisitos (los que trabajasen en actividades no incorporadas al mutualismo laboral o que rebasasen los 55 años al empezar o reanudar el trabajo por cuenta ajena), a los trabajadores del campo, a los del mar y a los servidores domésticos.<sup>57</sup>

En torno a las prestaciones de las mutualidades se estableció en torno a mediados de los años cuarenta una fuerte competencia entre algunos de los montepíos y los servicios sindicales del seguro de enfermedad.<sup>58</sup> Encontramos antecedentes de actitudes ilícitas en los oficios que el Delegado Nacional de Sindicatos (Sanz Orrio) enviaba a la Jefa Nacional de la O. S. Previsión Social (Mercedes Sanz-Bachiller) en el sentido de que a la D.N.S. llegaban protestas de las entidades aseguradoras poniendo de manifiesto como los corresponsales de la O. S. Previsión Social amenazaban a los agricultores con no concederles el subsidio familiar u otras prestaciones salvo que se asegurasen en la Mutua Rural, en detrimento de las entidades aseguradoras.<sup>59</sup> Ello revelaba una descoordinación grande, cuando no malintencionada, entre la organización sindical y el ministerio de Trabajo en la medida en que la Delegación Nacional de Sindicatos había permanecido al margen de dicho proyecto hasta su materialización definitiva.

¿Dónde se establecía el problema de competencia entre ambas “armónicas” instituciones del régimen? A partir de mediados los años cincuenta la ley facultaba a los montepíos para actuar como entidades colaboradores del seguro de enfermedad, y varios de ellos (como el del ramo siderometalúrgico, de la madera y corcho y de actividades diversas) pretendieron convertirse en entidades colaboradoras del mencionado seguro en las provincias de Barcelona, Madrid y Bilbao. Con ello se encontraban en las manos de las mutualidades una parte substancial de las prestaciones relacionadas con la previsión social. Pese a ello, en un primer momento los montepíos se resistieron a ser gestores del seguro de enfermedad pues, tal y como se concebía la labor de la entidad colaboradora, sus atribuciones eran puramente de gestión o administrativas sin poder controlar la eficacia y el funcionamiento de los servicios médico-farmacéuticos, a lo cual había que añadir el problema financiero de la obligación de aquéllos de sostener las instalaciones y el mantenimiento de las mismas.

Paralelamente los denominados Servicios Sindicales del Seguro de Enfermedad (S.S.S.E.) concibieron la gestión de dicho seguro a través de los respectivos sindicatos. Cada uno de ellos debiera haberse encargado de organizar el seguro de sus afiliados aprovechando los servicios sanitarios de la O. S. 18 de julio en forma de delegaciones de los servicios sindicales del seguro de enfermedad. Desde las filas del sindicalismo surgió una cierta desesperación al verse desposeídos de lo que creían era un factor de prestigio e influencia social como las prestaciones del S.O.E. Es más, para los sindicalistas esta política representaba la muerte por asfixia de las entidades colaboradoras y de los S.S.S.E. así como de la O. S. 18 de julio.<sup>60</sup>

Pese a ello, en línea con las críticas que Girón realizaba sobre Sanz Orrio los “sindicatos no se sintieron llamados a esta labor y apenas si podemos poner como ejemplo la Delegación en el Sindicato de Papel, Prensa y Artes Gráficas de carácter nacional, el provincial de la Vid de

Jerez de la Frontera y las Delegaciones de Empresa en la RENFE y ENHER” y por tanto los mencionados servicios sindicales se vieron obligados “por dejación en su día de los Sindicatos respectivos, a atender a la mayoría de su afiliación, pues mientras prestan directamente el seguro a 345.571 familias, las delegaciones especiales atienden a 160.000, de las cuales 131.500 están en la RENFE.”<sup>61</sup>

El problema que se planteaba en cuanto al enfrentamiento por una determinada cuota de poder era la competencia que le podía surgir al sindicato en la gestión del mencionado seguro por parte de las entidades mutualistas. Desde ese preciso momento se convertían, en cierto modo, en competidores en lucha fratricida. Ante ello, el sindicato podía caer herido de muerte al hacerse innecesario para la organización de dichos servicios en tan trascendental aspecto de la política social del régimen. Para evitar dicho “drama” y el desplazamiento del sindicato de las tareas de previsión, y siempre según el punto de vista de las autoridades sindicales, la “fórmula más apropiada sería convertir a estos Montepíos en delegaciones autónomas de los Servicios Sindicales del Seguro de Enfermedad salvando en lo posible la insolidaridad entre los diversos grupos de trabajadores, que traería como consecuencia la imposibilidad de prestar el seguro a aquellos sectores de salarios bajos que ocasionaran cuantiosos déficits.”<sup>62</sup> Y es que la intromisión de las mutualidades se produjo en provincias con un nivel medio de renta superior al del resto de las provincias españolas y en sectores económicamente más pujantes como los pertenecientes a los sindicatos de actividades diversas y siderometalúrgico. En definitiva, los montepíos trabajarían entre trabajadores con unos salarios relativamente altos que permitirían desenvolverse a dichas entidades con cierta holgura económica evitando los riesgos consiguientes. Por el contrario, “los S.S.S.E. en el caso improbable de que se reputase políticamente conveniente la continuación de su existencia, al no actuar en estos grupos de holgados medios económicos, se encontrarían en situación irremediable de déficit.”<sup>63</sup>

Hay que hacer alusión al hecho de que en el Fuero del Trabajo<sup>64</sup> las referencias al desarrollo del aparato de previsión (también las relacionadas con otros aspectos) se caracterizaban por su ambigüedad. El franquismo social pretendía ser intervencionista y proteccionista en el ámbito de lo social, pero se cuidaba muy mucho de hacer proclamaciones que pudieran coartar en un futuro su capacidad de acción en función de una determinada coyuntura. La coyuntura que se le presentaba a partir de la promulgación de la Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad (Ley de 14 de diciembre de 1942<sup>65</sup> y Reglamento de 11 de noviembre de 1943<sup>66</sup>) mostraba con toda claridad la imposibilidad de crear un seguro de amplias prestaciones, bien por incapacidad o por falta de voluntad. Ante esta situación el mutualismo laboral otorgaría las prestaciones de jubilación,<sup>67</sup> orfandad, viudedad, nupcialidad, natalidad y asistencia sanitaria en los casos en que el seguro de enfermedad hubiera agotado sus prestaciones tras los seis meses reglamentarios.

Las prestaciones de las mutualidades fueron otro de los elementos de la política sociolaboral del ministerio de Trabajo que chocaron contra otros grupúsculos del régimen que a los ojos de Girón no veían tan positivo como él del desarrollo de estas instituciones. En torno a este tema las opiniones de Girón dan luz sobre algunos de los frenos que tuvo que aguantar el desarrollo de las mutualidades y montepíos:

“En aquel tiempo era delegado nacional de Sindicatos Fermín Sanz Orrio, a quien le ofrecí la idea. Le ofrecí a los sindicatos en la persona de su delegado nacional esa baza, y Sanz Orrio me respondió que no estaba para esos trotes ni para esas fantasías... Aquello sí que fue la gran revolución. Tuvo un éxito formidable y los obreros lo entendieron perfectamente. Hubo quien quiso divulgar que los fondos de nuestra Previsión social, representados en las reservas de los montepíos laborales, se sustraían a la economía nacional. Totalmente incierto. Salían de los trabajadores y de los empresarios, hasta el último céntimo.”<sup>68</sup>

A la mutualidad laboral correspondiente se cotizaba lo establecido en los estatutos de la misma, modificados por el Decreto de 26 de octubre de 1956. En la mayoría de los casos era un 8 % sobre las retribuciones, de lo cual el 5 % estaba a cargo de la empresa y el 3 % a cargo del trabajador. Pese a ello había ciertos toques antisociales en la forma de cotización. Por ejemplo, las mutualidades laborales del sector siderometalúrgico atendían a sus aportaciones con una cotización sobre los salarios del 11 %. En esta cuota el 3 % pertenecía al trabajador mientras que el 8 % pertenecía a la empresa. Este 8 % constaba de una cuota ordinaria (4 %) y de otro 4 % que tenía el carácter de aportación excepcional y substitutiva de la participación en los beneficios de la empresa por parte de los trabajadores.<sup>69</sup> Pues bien, la sentencia del supremo de 7 de abril de 1954 declaraba que este último 4 % tenía el carácter de remuneración (no de cuota de la seguridad social) y, por tanto, había de estar sujeta a tributación por la tarifa primera de la contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria. De esta forma se alteraba el sistema de cotizaciones por cuanto resultaba que la cotización de la empresa pasaba a ser de un 4 % mientras que la del trabajador se elevaba a un 7 % al menos en lo referente a los trabajadores no manuales (intelectuales) retribuidos por medio de sueldo a los que se refería la mencionada sentencia.<sup>70</sup>

En el proyecto de 1941<sup>71</sup> entre las funciones que se especificaban en el artículo 5º estaban las de enfermedad, maternidad, accidentes del trabajo, invalidez, vejez, defunción, viudedad y orfandad y paro forzoso. Los beneficios y pensiones obtenidos al amparo del sistema mutualista eran compatibles con los percibidos por medio del subsidio de vejez, enfermedad, invalidez y muerte “o cualquier otro seguro social establecido o que se implantase en el futuro.”<sup>72</sup> Las

mutualidades laborales otorgaban una asignación de natalidad en el momento del nacimiento de cada hijo, cuyo monto variaba según los criterios de cada una.<sup>73</sup>

El mutualismo laboral, independientemente de las prestaciones obligatorias a que tenían derecho los trabajadores, concedía otro tipo de beneficios, regulados por el Decreto de 10 de agosto de 1954 y el Reglamento de 10 de septiembre del mismo año. Entre las percepciones que recibían las familias de los mutualistas destacaban las otorgadas por viudedad, orfandad, natalidad, nupcialidad y subsidio de defunción.<sup>74</sup> De igual manera, dentro del mutualismo laboral podían conceder becas para los hijos de mutualistas. Es decir, si el Instituto Nacional de Previsión tenía a su cargo la asistencia sanitaria por accidente no laboral, enfermedad común y maternidad, incapacidad laboral transitoria e invalidez provisional derivadas de lo anterior, desempleo, protección familiar y asistencia social, el mutualismo tenía entre sus funciones la prestación por jubilación, muerte, supervivencia, asistencia sanitaria en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, incapacidad laboral transitoria e invalidez provisional derivada de los anteriores e invalidez permanente por cualquier causa.

Globalmente, el balance final del sistema mutualista, pese a que sirvió para compensar el escaso grado de desarrollo del aparato de previsión obligatorio, no fue todo lo positivo que se esperaba en la medida en que, entre otras cuestiones, las prestaciones de sus pensiones no fueron revisables hasta 1955. De ahí la referencia del Consejo Sindical de Vizcaya al constante encarecimiento de la vida y a la desvalorización del poder adquisitivo de la moneda como causa de la prolongación voluntaria de la jornada laboral de los trabajadores y de la tendencia de los mismos a evitar la jubilación, dada la desproporción entre el jornal (base de la cotización) y las primas.<sup>75</sup> “Son muy pocos los productores que se acogen a los beneficios de la jubilación, en proporción a los que continúan trabajando pese a rebasar los años precisos para gozar de dicho derecho, con quebranto para la economía nacional...,” se afirmaba en el mencionado congreso explicitando la maldición que suponía para aquellos ancianos el final de su actividad laboral.

Pese a estas consideraciones negativas los datos oficiales que el propio ministerio de Trabajo manejaba indicaban que a la altura de 1956, finalizando la etapa Girón, el número de mutualidades laborales ascendía a 97 (fueran de carácter provincial, nacional, interprovincial o cajas de empresa); las empresas cotizantes dentro de este conjunto ascendían a 279.085 y el número de mutualistas era de 3.299.540.<sup>76</sup> Al terminar el año 1956 sus prestaciones ascendieron a 1.669.487.784 pts.<sup>77</sup> En líneas generales, estas mutualidades tuvieron un problema semejante al del S.O.E. Fue éste el de la subida de los gastos farmacéuticos, si bien es de resaltar que el control directo por parte del sindicato de estas entidades pudo generar abusos difícilmente perseguibles dado que eran las propias jerarquías sindicales las que amparaban un

trato de privilegio a sus funcionarios y adeptos al Movimiento en el sentido de lograr mayor y mejor atención médica de las mutualidades y entidades colaboradoras.<sup>78</sup>

## Notas

<sup>1</sup> B.O.E. del 16, Aranzadi, 2.142. Según Bikkal esta ley y su reglamento tenían la virtud de brindar a las empresas la posibilidad de crear y sostener cajas privadas de previsión cuando realmente el sistema tenía un carácter obligatorio y no establecía (en líneas generales) el criterio potestativo de cara a que las empresas optaran o dejaran de optar por dicho sistema. Bikkal, *La seguridad social...*, op. cit.

<sup>2</sup> En su denominación había de estar incluido este término para diferenciarlas de aquellas otras dependientes del ministerio de Hacienda por sus fines lucrativos tal y como estipulaba la ley de 14 de mayo de 1908.

<sup>3</sup> Martí Zuro, Pablo: El reglamento general del mutualismo laboral. Cuadernos de Previsión Social, Madrid, 1954, núm. 8, pág. 74.

<sup>4</sup> B.O.E. del 10 de junio, Aranzadi 829.

<sup>5</sup> Ídem.

<sup>6</sup> Correspondencia de José Solís Ruiz (Delegado Nacional de Sindicatos) al Jefe Nacional de O. S. de Previsión Social de 11 de marzo de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, nº R/231, nº 69.

<sup>7</sup> B.O.E. 1 de febrero, Aranzadi 122.

<sup>8</sup> Avilés García, José: Algunos efectos económicos del Mutualismo laboral. Cuadernos de Previsión Social, núm. 7, 1954.

<sup>9</sup> B.O.E. del 13 de septiembre, Aranzadi 1.404.

<sup>10</sup> En esta investigación únicamente haremos alusión a las reglamentarias.

<sup>11</sup> El período de carencia era el número de días de cotización necesario para tener derecho a poder obtener cualquier prestación reglamentaria en las instituciones de previsión laboral. El número de días dependía del tiempo existente entre la fecha inicial de cotización en el sector laboral a que perteneciese el mutualista y la del hecho causante de la prestación. Si el tiempo transcurrido no excedía de un año, 180 días; si no excedía de 1.400 días, la mitad de los transcurridos; si excedía de 1.400 días, 700 días. Dicho período de carencia era válido para las restantes pensiones o subsidios.

<sup>12</sup> Las prestaciones por nupcialidad y natalidad han sido tratadas en otro capítulo de esta investigación que constituyó la tesina de este doctorando y en la que se abordó el tema de la política familiar del primer franquismo a través del ministerio de Trabajo.

<sup>13</sup> Pérez Leñero, José: ¿Qué son los montepíos laborales? Revista de Trabajo, 1950, núm. 11-12, vol. 2, pág. 905.

<sup>14</sup> Sin embargo, hay que decir que ostentaba la jefatura directa de los servicios administrativos de la mutualidad y redactaba el proyecto de presupuesto, ordinario y extraordinario, de los gastos de administración y ordenaba los gastos y pagos correspondientes a la aplicación de los distintos conceptos presupuestarios, lo cual le daba una autoridad muy por encima de la del presidente y concedía, por tanto, al ministerio de Trabajo control básico sobre la mutualidad.

<sup>15</sup> Informe político-social que emite la Obra Sindical de Previsión Social de la entidad denominada Montepío de Profesores de Orquesta y Música con domicilio en Madrid y otros (17 de marzo de 1947). A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, nº R/386.

<sup>16</sup> A la hora de aludir a los vocales señalados como desafectos al régimen únicamente evitamos hacer referencia a los nombres concretos utilizando únicamente las iniciales.

<sup>17</sup> Informe del Jefe Nacional de la Obra de Previsión Social, Mercedes Sanz-Bachiller, que envía a la Dirección General de Previsión el 5 de agosto de 1955 sobre Sociedad Obrera de Socorros Mutos de Nuestra Señora de los Dolores en Santa Cristina de Aro, en la provincia de Gerona y de su vocal 1º de la Junta que es JPS y de sus antecedentes políticos. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, nº R/287.

<sup>18</sup> Ídem, 20 de junio de 1955 sobre la Mutualidad de Agentes de ferrocarriles suburbanos de Málaga y su vocal ARR de 57. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, nº R/287.

<sup>19</sup> Ídem, 11 de febrero de 1955 sobre la entidad bajo el Patrocinio de San José, Asociación de Socorros Mutuos de Selsona, Lérida, en torno a su vocal MVT. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, nº R/287.

<sup>20</sup> Ídem, 28 de enero de 1955 sobre la Asociación de Socorros Mutuos de San Francisco y San Miguel de La Parrilla en Valladolid, en torno a su vocal FNA. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, nº R/287.



<sup>21</sup> Ídem, 24 de enero de 1955 sobre la Mutualidad de Maestros Cerrajeros de Reus en Tarragona y su vocal JCT. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, n° R/287.

<sup>22</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 124.

<sup>23</sup> Lora Varo, Antonio: Mutualismo Laboral, Información Comercial Española, núm. 245, 1954, pág. 28.

<sup>24</sup> Alonso Olea, Instituciones..., op. cit., pág. 184.

<sup>25</sup> Texto del discurso de Girón al Consejo Técnico de las Universidades laborales, Avanzada, marzo de 1955, n° 18.

<sup>26</sup> Girón, El Seguro de enfermedad..., op. cit., pág. 7.

<sup>27</sup> Pérez Leñero, ¿Qué son los montepíos..., op. cit., pág. 907.

<sup>28</sup> Partes reservados de la C.N.S. de Zamora, octubre 55. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.854.

<sup>29</sup> Serrano, José y Valdés, F.: Elementos esenciales que han contribuido a la formación y desarrollo de las Montepíos y Mutualidades de Previsión Social, RT, núm. 7-8, 1951, pág. 713. En 1958 y en la misma revista Serrano insistía en la idea: "La esencia, pues, del mutualismo de previsión social es ser una creación del espíritu y, por ello, representar primordialmente lo que ha sido concebido y ejecutado por la inspiración del espíritu, ya que sólo el espíritu sabe dar a sus propias creaciones la perdurabilidad a través de los tiempos." Serrano Fernández-Valdés, José: Sobre la naturaleza y el concepto de los Montepíos y Mutualidades de Previsión Social, RT, núm. 10-11, 1958, pág. 82.

<sup>30</sup> En 1942 Pérez Botija escribía lo siguiente: "...las mutualidades, sobre base local o profesional, tienen también grandes inconvenientes: no pueden hacer frente a grandes riesgos, aumentan los gastos administrativos, so pena de que las Mutualidades se encarguen por sí, y gratuitamente, de realizar los servicios burocráticos. Además, no pueden sostener grandes clínicas, hospitales, etc." Pérez Botija, Eugenio: Administración de los seguros sociales. RT, núm. 11, 1942, pág. 26.

<sup>31</sup> B.O.E. del 10 de junio, Aranzadi 829.

<sup>32</sup> B.O.E. del 16, Aranzadi 2.142.

<sup>33</sup> Proyecto de 11 de julio de 1952. A.P.G.; S.G.A.; Leg. 4, n° 1.

<sup>34</sup> Entre la larga lista se encontraban los siguientes: aceite; actividades diversas; agua, gas y electricidad; ahorro y previsión; alimentación, artes gráficas; espectáculo; prensa; cemento, cal y yeso; construcción y obras públicas, confección, vestido y tocado; industrias extractivas; industria harinera, hostelería, cafés, bares y similares; minas metálicas; panadería e industrias similares; productores de dependencia mercantil; industria papelera; periodistas; industrias de la piel; minas de plomo; porteros de fincas urbanas; seguros; industria textil; transportes y comunicaciones; vidrio, cerámica y similares; industrias vinícolas; industrias del carbón del Noroeste; industrias del carbón del Sur; industrias del carbón de Centro-Levante; minería Asturiana; industria de la madera, industrias petrolíferas de Canarias; industrias químicas; industrias sidero-metalúrgicas; tabaquerías de Canarias.

<sup>35</sup> Proyecto de decreto sobre el paso del servicio de mutualidades laborales del ministerio de Trabajo a la Secretaría General del Movimiento. A.G.A.; S.S.; I.D.D.; 90.02, r/204.

<sup>36</sup> Proyecto de decreto sobre el paso del servicio de mutualidades laborales del ministerio de Trabajo a la Secretaría General del Movimiento. A.G.A.; S.S.; I.D.D.; 90.02, r/204.

<sup>37</sup> Blanco Rodríguez, Juan Eugenio: El Mutualismo Laboral en la doctrina española, Cuadernos de Previsión Laboral, Madrid, 1954, núm. 7, pag. 55.

<sup>38</sup> Bayón, Gaspar: La nueva reglamentación del Mutualismo Laboral, Revista del Derecho del Trabajo, núm. 5, 1954, pág. 89.

<sup>39</sup> Este sesgo paternalista se puede apreciar en apreciaciones como las de Blanco: "...tenemos la esperanza de que cuando esa reorganización, coordinación o unificación, si se le quiere llamar así, se acometa no se olvide el legislador de la caliente experiencia de los Montepíos, donde los asegurados se conocen entre sí, los vocales representativos acuden a los domicilios de sus compañeros en desgracia, las oficinas se visitan, por dentro, por los asociados, la cuantía de algunas prestaciones se decide por las comisiones o Juntas, Santos Patronos presiden las deliberaciones de los órganos de gobierno, los expedientes se resuelven en pocos días, los antecedentes personales están a la mano y si no lo están pueden conseguirse parentéricamente, los mutualistas no esperan resoluciones de la lejana capital y todo es familiar en su relación con la Entidad Laboral correspondiente." Blanco, El Mutualismo Laboral..., op. cit., pág. 33.

<sup>40</sup> Así lo entendía uno de los padres del catolicismo social español pese a ser uno de los más activos colaboradores del Instituto Nacional de Previsión. Aznar Embid, Severino: Las fronteras de los seguros sociales, Madrid, I.N.P., 1942.

<sup>41</sup> A.P.G.; I.D.N.; Leg. 26, n° 1.

<sup>42</sup> Paris Egulaz, Los seguros sociales..., op. cit., pag. 65. Otro ejemplo de recelo ante su potencial económico lo encontramos en Pérez Leñero: "...Esta potencia económica, he dicho en otro lugar, puesta

hoy en manos del estado es constructiva; pero su independencia fuera del intervencionismo estatal podía ser un peligro para el propio Estado, si no cuida, como lo está haciendo, de inspirarle un sentido eminentemente social y profesional.” Pérez Leñero, *¿Qué son los montepíos...?*, op. cit., pág. 907.

<sup>43</sup> “De esta forma, por el procedimiento legal que establece el sistema capitalista, llegamos a la insensible socialización de la industria,” afirmaba de León. De León, Rafael: El mutualismo laboral y la socialización de la industria. Cuadernos de Previsión Laboral, Madrid, 1954, núm. 8, pág. 44.

<sup>44</sup> Velarde Fuertes, José: Las inversiones de los Montepíos Laborales. Cuadernos de Previsión Laboral, Madrid, 1954, núm. 7, pág. 70.

<sup>45</sup> Benito del Pozo, *Las clases...*, pág. 325.

<sup>46</sup> Ídem, pág. 325-326. Este servicio se crea por orden de 24 de octubre de 1946 y se reorganiza por la de 25 de mayo de 1951 (B.O.E. del 7 y del 10 de junio respectivamente). La orden de 1946 creaba dicho servicio como dependiente de la Dirección General de Previsión del ministerio de Trabajo. Por orden de 15 de enero de 1948 este servicio pasó a depender de la Subsecretaría del ministerio de Trabajo y se creó con carácter permanente la Delegación Especial de Mutualidades y Montepíos Laborales dependiente de la mencionada Subsecretaría. A su vez el Decreto de 29 de septiembre de 1948 configuraba este servicio bajo la Jefatura del Director General de Previsión, integrando en dicha jefatura una Dirección Técnica de la que dependía la Caja de Coordinación y Compensación que se creaba y una Secretaría General. El Decreto de 25 de mayo de 1951 reorganizaba el Servicio de Mutualidades Laborales, suprimiendo la Dirección Técnica y la Secretaría General, cuyas funciones pasaban al Director General de Previsión. Por tanto existieron dos etapas claras en cuanto al desarrollo del mutualismo en España antes y después de 1946 y de la creación del Servicio de Mutualidades singularizando a esta segunda etapa “la plena intervención y tutela que, con carácter específico y uniforme, llevaba a cabo el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.” Serrano Fernández, José: Antecedentes, evolución y caracteres de las Mutualidades y Montepíos Laborales. Cuadernos de Previsión Social, Madrid, 1953, núm. 6, pág. 66.

<sup>47</sup> A lo que añade Alonso Olea, recalcando el carácter privilegiado de ciertos sectores de la población trabajadora: “Tanto más cuanto que las prestaciones otorgadas eran y son en muchas ocasiones idénticas en su naturaleza a las concedidas por el régimen general; realmente, las mutualidades laborales rompieron el principio de solidaridad nacional ante los riesgos, al crear coberturas especiales para grupos de trabajadores determinados, sin motivo aparente para ello, pues no se les imponía sacrificio especial por lo menos en cuanto a las cuotas de empresa toca, dado que éstas quien las soporta es el público a través de los precios. Hasta al punto es esto cierto, que el régimen general ha tenido que reaccionar ante la existencia de las prestaciones complementarias de las mutualidades, estableciendo prestaciones más altas para quienes no gozan de protección mutualista.” Alonso Olea, *Instituciones...*, op. cit., pág. 185.

<sup>48</sup> Existía una mutualidad para cada actividad o grupo de actividades afines (alrededor de 30) todas ellas de ámbito nacional excepto en el caso de la minería del carbón, el sector químico, la siderometalúrgica y la madera en que existían varias (una para cada región). En el caso de las Canarias su ámbito está limitado a las respectivas provincias (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, caso excepcional puesto que prima el lugar de residencia antes que la actividad profesional. Obra Sindical de Previsión, año 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01; nº 3377.

<sup>49</sup> Serrano F.-Valdés, José: Importancia de la misión actual y futura de los montepíos y mutualidades de previsión social. R.T. núm. 2, 1952, pág. 124.

<sup>50</sup> IV Congreso Sindical Agrario de Castilla la Nueva y Albacete. Conclusiones, Cuenca, 31 de octubre de 1956. Sexta ponencia: Mutualismo para cobertura de riesgos. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/304.

<sup>51</sup> Las mutualidades y montepíos laborales “inicialmente nacen con carácter complementario, en el sentido de que tratan de cubrir huecos, de ninguna manera y o muy precariamente cubiertos por el régimen general de Seguros Sociales Obligatorios...” Meilán Gil, José Luis: El mutualismo laboral. Madrid, C.S.I.C., 1963, pág. 89.

<sup>52</sup> Martí Bufill, *Presente y futuro...*, op. cit., pág. 168.

<sup>53</sup> La reglamentación nacional del trabajo en la industria de la pesca marítima se promulgó por medio de la Orden de 28 de octubre de 1946 (B.O.E. del 13 de noviembre) y atribuía al Instituto Social de la Marina la protección a los pescadores españoles a la vez que creaba en el mencionado instituto el Servicio de Protección Social a los Pescadores. Los estatutos del montepío de trabajadores del mar se publicaron por medio de la orden de 14 de octubre de 1951 (B.O.E. del 29). Sin embargo no todas los trabajadores del mar quedaban amparados por dicho sistema de previsión. En dicho sistema no estaban comprendidos los pescadores de bajura; únicamente los de altura y gran altura. En el caso de los primeros su forma de remuneración y la exigencia para la afiliación consistente en que ésta fuera continua y se regularizaran los pagos de cuotas. “los trabajadores de bajura no tienen carácter fijo, siendo frecuentes sus

desplazamientos, altas y bajas en el trabajo aunque limitado en su localidad." Informe del Montepío de pesca, febrero de 1953. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, nº 61.

<sup>54</sup> Correspondencia de José Solís Ruiz a Girón, 19 de diciembre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/204.

<sup>55</sup> Laratía Palacio, Manuel y Selma Caro, Manuel: Mutualidades y Montepíos Laborales. Barcelona, 1950, pág. 261. También en Pérez Leñero, José: Régimen económico de los Montepíos Laborales. Moneda y crédito, 1950, núm. 32, pág. 22 y Lora Varo, Mutualismo..., op. cit., pág. 32.

<sup>56</sup> Meilán, El mutualismo..., op. cit., pág. 96.

<sup>57</sup> La Ley de 29 de julio de 1944 pretendió instaurar un régimen especial para este tipo de trabajadores pese a lo cual fue durante la época Girón "una ley aménicamente muerta." Meilán, El mutualismo..., op. cit., pág. 146.

<sup>58</sup> Informe en torno a "Los Montepíos Laborales y el Seguro de Enfermedad" por Luis Burgos Boezo (2 de enero de 1954). A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, nº R/262, nº 67(1ª).

<sup>59</sup> Correspondencia de la D.N.S. al Jefe Nacional de O. S. Previsión Social, Mercedes Sanz-Bachiller, de 7 de junio de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/46, nº 67(2ª).

<sup>60</sup> Informe sobre las consecuencias previsibles del decreto del ministerio de Trabajo autorizando a los montepíos laborales para realizar el seguro obligatorio de enfermedad. Informe de la Delegación Provincial de Sindicatos de Barcelona (José Sanz Catalán) elevado a la D.N.S., 9 de enero de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/225.

<sup>61</sup> Ídem.

<sup>62</sup> Ídem.

<sup>63</sup> Ídem.

<sup>64</sup> Aranzadi, op. cit., 230/1936.

<sup>65</sup> Aranzadi, op. cit., 2097/1942.

<sup>66</sup> Ídem, 1535/1943.

<sup>67</sup> Probablemente fueron éstas, junto a las de viudedad, las más operativas del sistema mutualista.

<sup>68</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 124.

<sup>69</sup> En torno a este problema los trabajadores siderometalúrgicos denunciaban lo injusto de esta situación: "En el artículo 99 de la Reglamentación Siderometalúrgica, y bajo la rúbrica *Otras percepciones del personal*, se establece una llamada participación en beneficios, que consiste en el 4 por 100 de la remuneración base anual de los productores, que las empresas a diferencia de lo que ocurre en otras actividades, en vez de entregar a éstos, ingresan en el montepío laboral correspondiente; y se pretende que este 4 por 100, incrementado en lo necesario, venga a completar una mensualidad del salario base que recibirían en mano los trabajadores anualmente y con carácter fijo, mientras subsistan los actuales salarios para compensar, en la parte que se estima necesario para hacer frente a las obligaciones del Montepío, podría elevarse al 6 por 100, el 4 por 100, que actualmente, y aparte de ese otro concepto de participación en beneficios, cotizan las empresas, manteniéndose invariable el 3 por 100 de cotización de los trabajadores." Solicitud de los trabajadores siderometalúrgicos. V.N.O.E., 11 de noviembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-97-53.

Caso prácticamente idéntico era el de las industrias textiles: "En la actualidad, la aportación a la Caja de Jubilaciones o Mutualidad Textil está diferenciada en dos partes: un 8 % que corresponde a la participación en los beneficios de la Empresa que está ingresa como tal concepto y un 2,50 % que, a su cargo, la empresa cotiza además como aportación obrera. A ellos hay que añadir una tercera porción que asciende al 1,50 % que el trabajador debe aportar directamente descontado de su jornales, como consecuencia de la Orden de 27 de noviembre de 1953 que aumentaba los salarios desde 1º de enero de 1954." Efectividad de la reglamentaria participación en los beneficios, en las industrias textiles. V.N.O.E., 25 de mayo de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954, N-154-55. También en Correspondencia de la Jefatura Nacional del Sindicato Textil a Dirección General de Trabajo, 29 de diciembre de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.954.

<sup>70</sup> "Es evidente que la balanza de cotizaciones sufría un notorio cambio de equilibrio, pues resultaría entonces, concebida esta porción de la cuota de mutualidad como una remuneración, que la cotización de empresa se reduciría del 8 por 100 al 4 por 100, y la cuota de trabajador aumentaría del 3 al 7 por 100." Alonso Olea, Salarios y seguridad social, 1955..., op. cit., pág. 190.

<sup>71</sup> A.P.G.; J. D.N.; Leg. 26, nº 1.

<sup>72</sup> Ídem.

<sup>73</sup> Roseira, Los regímenes de asignaciones..., op. cit., pág. 40.

<sup>74</sup> En torno a estas prestaciones hay que especificar que según el art. 22 del reglamento el mutualismo no concedía las prestaciones de invalidez, viudedad y orfandad cuando la causa era un accidente del trabajo o

una enfermedad profesional por negarse la posibilidad de que la mutualidad se hiciera cargo de prestaciones para las que ya existían otros seguros específicos. Reglamento General del Mutualismo. Avanzada, núm. 17, febrero de 1955.

<sup>75</sup> "Si nuestra moneda hubiera conservado el valor adquisitivo desde la fecha del nacimiento de las Mutualidades, los problemas que hoy se presentan no hubieran surgido, porque las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad guardan proporcionalidad equitativa en relación a los sueldos bases del año 1946... las cifras señaladas como remuneraciones básicas o mínimas obligatorias del personal, nunca han servido para atender las necesidades mínimas del productor. Por ello hemos visto que la jornada legal del trabajador de ocho horas en muchísimos casos se eleva a diez,...." Consejo Económico Sindical de Vizcaya. Bilbao, 12-16 junio 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 45.02, 3. También en Consejo Económico Sindical de Vizcaya, Bilbao, junio de 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/297.

<sup>76</sup> Conferencia pronunciada en Vigo (Pontevedra) el día 20 de septiembre de 1957 en el XV curso universitario de verano por el presidente del I.N.P., Francisco Labadie Otermin. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/331.

<sup>77</sup> Informe sobre mutualidades laborales. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.351.

<sup>78</sup> En el oficio de 25 de abril de 1955 que el Secretario Nacional de la Obra 18 de julio (Gerardo Gavilanes) envía a los directores provinciales de la mencionada obra expone de manifiesto como uno de los acuerdos de la reunión ordinaria de la comisión ejecutiva de las mutualidades laborales había consistido en poner un tope a los gastos farmacéuticos excesivos de las jerarquías y funcionarios del movimiento (13,5 pts. por mes y afiliado). Correspondencia de Gerardo Gavilanes (Secretario Nacional de la Obra 18 de julio) a todos los directores médicos provinciales de la obra, 25 de abril 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.527. El 30 de abril el delegado provincial de sindicatos de Almería se quejaba ante el Secretario Nacional de Sindicatos por tan "impolítica" decisión negando que la presión de los funcionarios del movimiento estuviera en la complacencia de los médicos a la hora de otorgarles un trato privilegiado. Correspondencia de la Delegación Provincial de Sindicatos de Almería (Miguel Fernández Sánchez) al Secretario Nacional de Sindicatos (Miguel Vizcaino Márquez), 30 de abril de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.527. En línea con esta problemática la Obra 18 de julio se defendía con un informe elevado al Secretario Nacional de Sindicatos en el que constan argumentos que defendían su tesis: "...hay provincias que funcionan con absoluta normalidad y hasta con fuerte superávit, prestando asistencia a nuestras jerarquías en concierto para funcionarios como perfectamente conocen. Al lado de esto existen otras destacadísimas sobre las demás por el pésimo funcionamiento,....Almería y Alicante, que desarrollan esta función asistencial con un gravísimo déficit económico. Conocemos perfectamente por informes de los propios Directores Médicos, en este caso Maresca lo ha manifestado ante mí personalmente sin el menor género de dudas, que ello se produce por el abuso de las jerarquías provinciales y mandos intermedios, funcionarios, etc., pidiendo constantemente a los médicos determinadas prescripciones farmacéuticas y encareciendo la asistencia...a lo que se el fracaso del delegado sindical que conociendo estos antecedentes por el director médico no le ha dado todo su apoyo y no ha adoptado las medidas pertinentes para corregir los abusos que puedan producirse..." Correspondencia de Jefatura Nacional de Obra 18 de julio (Adolfo Gómez Ruiz) a Secretario Nacional de Sindicatos, de 11 de mayo de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.527.

## **Capítulo 17. Los problema de la vivienda.<sup>1</sup>**

La inexistencia de viviendas a lo largo del primer franquismo constituyó un problema de primera magnitud para el régimen. A ello se añadía la ausencia de construcciones de protección oficial que verdaderamente resultaran adecuadas al nivel adquisitivo de las familias que se pretendía proteger, la inoperancia de las medidas tendentes a reducir los costes de las materias básicas y, en definitiva, una política que cargó sobre los sectores sociales a los que pretendía favorecer.<sup>2</sup>

Desde otro punto de vista, la falta de vivienda era considerada como un factor básico del supuesto "estado de depravación moral que se traducía unas veces por el concubinato y otras por la prostitución" generado en el seno de la familia.<sup>3</sup> Pese a ello, como se ha mencionado, la cuestión de la vivienda estaba íntimamente ligada al tema de la familia (como unidad básica de la nueva sociedad) y de la aplicación efectiva del llamado salario familiar:

"...habitar en una vivienda adecuada constituye la primera premisa para asentar la posibilidad de la vuelta a las tradiciones familiares del hogar cristiano..."

¿Quién ignora que muchas gentes se ven forzadas a ocupar viviendas de renta muy superior a la que pueden pagar? Y es evidente que con ello dejan sin cubrir otras necesidades familiares.

En definitiva se incrementaría decisivamente el poder adquisitivo del salario familiar, objetivo fundamental de la política del Estado."<sup>4</sup>

Girón, transido de admiración por el general Franco, afirmaba que había sido el Jefe del Estado el inspirador de la política que desde su ministerio se había realizado en orden a fomentar la construcción de viviendas, fundamento del hogar y de la familia española, a su vez núcleo social básico a partir del cual había de recristianizarse una España "embestida por el materialismo marxista:"

"Franco ordenó que el hombre español tuviera un hogar digno y saliera de la caverna en que toda incomodidad y todo peligro hacen su nido, en que toda inocencia está acechada y en que toda contaminación ronda. Y a sus órdenes lo hicisteis. La batalla de la vivienda que estáis dando desde hace dieciséis años ni cesa ni cesará, y hasta la seguridad de que es larga y es áspera, y de que la victoria es difícil y está lejos, agranda a los ojos de España la magnitud de vuestra hazaña en la obediencia a esta consigna."<sup>5</sup>

Como hemos mencionado, hay que partir del hecho de que el tema de la vivienda está íntimamente ligado al tema de la familia, que en el caso del franquismo había de ser el tarro de las esencias espirituales de la nueva sociedad que se pretendía articular tras la guerra civil. Así pues, la vivienda, soporte físico del desenvolvimiento físico y moral de estas nuevas familias, había de ser un aspecto básico de la política del régimen desde un punto de vista formal. Sin embargo, la política de construcción racional de viviendas de protección oficial no dio sus primeros pasos hasta 1955 y sus objetivos teóricos fueron los siguientes: "actuación en las periferias, coordinación con el transporte, cooperativismo municipal, arquitectura alternativa a la llamada ciudad burguesa a través de una progresiva racionalización de tipos de habitación y de su proceso de producción, planeamiento físico como instrumento de planificación de control, intervención coordinada del poder de la administración con los intereses de un sector distinto del capital (no inmobiliario de la etapa anterior, sino industrial)."<sup>6</sup>

En definitiva, el problema de la vivienda dependía en mayor medida de la intervención activa del Estado. Según datos aportados por Payne,<sup>7</sup> de 1940 a 1944 sólo se subvencionó la construcción de unas 13.000 viviendas. En 1946 20.000, 30.000 en 1947 y 42.000 en 1950,<sup>8</sup> lo cual generaba la percepción dentro del régimen de que la problemática presentaba cada día unos caracteres más graves:

"Todo esto estaba muy lejos de cubrir las necesidades, pero era el comienzo del estado del bienestar franquista, un sistema que nunca convenció a sus enemigos de clase originales -los trabajadores industriales y los campesinos sin tierra- pero cuyas prestaciones aumentaron de forma significativa durante las décadas siguientes."<sup>9</sup>

De igual manera hay que considerar el peso de los procesos migratorios que se intensificaron en función del decrecimiento proporcionalmente mayor del nivel de vida del campo español al que no llegaban (o bien llegaban tardíamente o de forma sesgada) los beneficios que podían recibir los trabajadores industriales. El hecho de que la posguerra española fuese tan profundamente influida por las tendencias germanófilas provocó que el estado franquista viera con buenos ojos la canalización de recursos escasos hacia otros sectores considerados estratégicos como las comunicaciones, el transporte, el ejército, etc. Por consiguiente, esta masa de desplazados sufría la realidad de una falta sistemática de recursos (financieros o materiales) para hacer frente a su perentoria falta de vivienda en función de la atracción que la ciudad ejercía sobre el campo. Este tipo de movimientos se centraron en las principales urbes del país; muy especialmente en Madrid, donde los problemas de vivienda se centraban en la zona sur. Globalmente había sólo unos 24 ayuntamientos en los que el ritmo de la construcción era intenso. Estos coincidían con la zona norte o con los centros mejor dotados de ejes de comunicación. Por el contrario, en el resto de la provincia se concentraban 95 ayuntamientos en los que el ritmo de edificación era

lentísimo y 77 en los que no había movimiento alguno en lo que a edificación de viviendas se refiere.<sup>10</sup>

Según Payne, tras la guerra civil habían quedado destruidas el 8 % de las viviendas de los españoles.<sup>11</sup> Esa fue una de las motivaciones que llevaron a la creación, en plena guerra civil, del Instituto Nacional de la Vivienda (por Ley de 19 de abril de 1939), de la Dirección General del Regiones Devastadas y del Instituto de Crédito para la Reconstrucción<sup>12</sup> (el 6 de julio de 1939) que gozaba formalmente de turno de preferencia en cuanto al abastecimiento de los materiales para los fines que perseguía<sup>13</sup> con el objetivo de fomentar la construcción de viviendas protegidas.

Todo ello tenía como consecuencia el hacinamiento insalubre de la población en los grandes núcleos urbanos a los que las clases menos acomodadas, sobre todo de origen rural, llegaban en busca de trabajo.<sup>14</sup> Por otro lado, resultaba evidente que el número de viviendas construidas para los sectores menos acomodados de la sociedad resultaban insuficientes dado su precio, lo cual tenía su lectura en el incremento del mercado negro de los alquileres dado que “el plausible deseo de hacer propietario de su vivienda a cada productor beneficiario de casa protegida que se le ofrece exige el pago de cantidades que, aun siendo módicas, resultan superiores a su capacidad económica, con lo que se impide a los trabajadores modestos toda posibilidad de adquisición.”<sup>15</sup> Pese a ello la incidencia de un mercado de alquiler controlado fue otro factor que no favoreció el que proyectos desarrollados a través del I Plan Nacional, como el de viviendas de renta limitada, recibieran una mayor aceptación. En cualquiera de los casos, la capacidad de los trabajadores españoles estaba ligada a su bajo nivel de vida.<sup>16</sup> Para el año 1945 el alquiler mínimo se situaba en torno a las 120 pts. mensuales. Partiendo del hecho de que la unidad familiar podía destinar en torno al 10 o 12 % al alquiler, sólo los que tuvieran unos ingresos en torno a las 1.200 pts. mensuales podían afrontar dicha situación.<sup>17</sup> Y en cuanto a los precios de las viviendas, a la altura de 1947 la O. S. Lucha contra el Paro ponía de manifiesto que el problema (simple y sencillo) que explicaba el fracaso de la política de vivienda tenía en su base el precio efectivo de las viviendas:

“El problema del I.N.V. es el de llegar a construir casas que cuesten doce o trece mil pts. en vez de las que se vienen construyendo que cuestan cuarenta o cincuenta mil y es fácilmente comprensible que aunque se den las máximas facilidades al que la ha de ocupar, en cuanto a un obrero se le piden cinco mil pts. para empezar a construirla, tendrá que desistir de ello.”<sup>18</sup>

A finales de 1943 o principios de 1944 (entre enero y marzo), la delegación provincial de Álava señalaba la necesidad de que las viviendas humildes se pusieran en condiciones de “salubridad

e higiene,<sup>20</sup> lo cual da claras muestras de la lamentable situación de los hogares de las familias de recursos medios o bajos y de la necesidad acuciante de intervenir en dicho sector. En esta misma línea se situaban las peticiones de la provincia de Huelva que denunciaba las malas condiciones de las viviendas de los obreros de las minas de Riotinto y de la Compañía Minera Tharsis de las cuales se afirmaba que estaban “en pésimas condiciones de salubridad.”<sup>20</sup> En otros casos, se podía constatar como en algunas minas de Linares no se había construido prácticamente nada desde el final de la guerra civil hasta (al menos) septiembre del año 1952.<sup>21</sup> En esta misma línea, reforzando la señalada idea de la ausencia generalizada de casas habitables, Guadalajara solicitaba la reconstrucción y construcción de casas económicas ante lo que se presentaba como un problema “agobiador.”<sup>22</sup> En cualquiera de los casos, la realidad de la vivienda española se definía por medio del término miserable.<sup>23</sup>

Esta falta de calidad de las viviendas tenía en su base un ineficaz sistema de contratación que en régimen de subasta pública (y sin entrar a considerar posibles corruptelas)<sup>24</sup> obligaba a la adjudicación de la proposición más barata, lo cual entrañaba como consecuencia la baja calidad y la deficiente solidez de la obra.<sup>25</sup> Aunque no son muy abundantes los documentos que explícitamente hagan referencia al fracaso de la política de viviendas si es posible encontrar algún ejemplo que evidencie el hecho de que, en ocasiones, ni siquiera las casas finalmente fueron solicitadas por la insalubridad con que fueron construidas.<sup>26</sup> Los informes de las O. S. del Hogar sobre los grupos construidos por ella misma reflejan una realidad absolutamente lamentable a la hora de analizar la salubridad y la solidez, siquiera mínima, de aquellas edificaciones que requerían, en muchos casos, la simple demolición tras su construcción:

“Se eligió mal el terreno por estar constituido por capas arcillosas y cercano al río...los cimientos fueron contruidos de forma inaceptable,...los muros denotan también una ejecución poco cuidada y sus materiales...el tejado indica su mala construcción y es la causa de muchas de las goteras...la cubierta presenta unas formas o armaduras de muy escasa calidad y de una ejecución deficiente...(cielos rasos) algunos de éstos se han hundido por completo dejando a las habitaciones sin techo, otros presentan pandos y grietas, todo ello debido a su mala calidad y colocación (están sujetas las cañas por tomizas en lugar de alambres)...en ninguna vivienda del grupo son utilizadas las cocinas...son inservibles, principalmente por no producirse tiro en el fuego y llenarse la casa de humo cuando se intenta utilizar...toda la carpintería de taller del grupo se encuentra en un estado lamentable, las ventanas carecen de vierte aguas, con el natural perjuicio que esto supone, ya que entra el agua pluvial en las viviendas...el grupo carece de todo servicio...”



...los mampuestos eran volcados desde los mismos carros a las zanjas de los cimientos sin aglomerante alguno o muy escaso y pobre...se estima debe acometerse la total urbanización del grupo, dado el gran número de sus viviendas, y sobre todo los servicios a instalar, se debe intentar preferentemente el del agua, que se hace verdaderamente indispensable...Se ha comprobado que las armaduras fueron construidas de manera deficiente e incluso sin ensamblar o fijar determinados elementos unos con otros y que sólo fueron presentados. Esto demuestra una vez más la falta de escrúpulos en la contrata y la carencia absoluta que hubo de dirección e inspección técnica, ya que a este hecho, es aplicable el clásico tente mientras cobro...Las calles interiores del grupo...son verdaderos ríos de pestilentes inmundicias, alimentados incesantemente por las arquetas-registros del alcantarillado convertidos en pozos artesianos de basuras...(Grupo de viviendas Hernán Cortes en Castro del Río)

...no llego a comprender que unas edificaciones realizadas con los medios con que cuenta este organismo, principalmente en su aspecto técnico, para el desarrollo de su función peculiar, presenten el estado de ruina total y abandono en que se encuentran...es indudable que tanto la contrata...como el constructor obraron en la más completa impunidad...durante la ejecución de las obras no debió existir la debida dirección e inspección técnica...se han producido roturas y dislocaciones que han contribuido de manera terminante a la ruina de las viviendas...no hay más solución dado su estado, que una demolición total...(Grupo Mártires de Cañete en Cañete de las Torres).<sup>27</sup>

A ello había que añadir que en cuanto a la vivienda se refería, pese a la existencia de una Ley como la de 17 de julio de 1946 que formalmente obligaba a las empresas de más de cincuenta obreros a construir viviendas económicas para sus empleados, la característica básica era la ausencia de materias primas como el hierro y el cemento a precios razonables.<sup>28</sup> Ello mostraba la incapacidad del Estado franquista para controlar las materias primas e impedía, en gran medida, que la construcción fuera a un ritmo lo suficientemente rápido como para surtir a la demanda potencial, lo cual también incidía en el retraso de las edificaciones ante la imposibilidad por parte de los empresarios de encontrar las materias primas necesarias salvo en el mercado negro en donde los precios se disparaban. Ciertamente la falta efectiva de cupos era el problema más acuciante para la construcción de viviendas, junto al hecho de que los beneficios concedidos por el Estado estaban inicialmente mal calculados, no llegaban íntegramente y en otros casos eran concedidos a destiempo.<sup>29</sup> En definitiva, se palpaba que la corrupción era una moneda de cambio común sobre todo en empresas (como las constructoras) que podían generar enormes plusvalías a los empresarios.<sup>30</sup>

En el mejor de los casos la insalubridad era el resultado final de la construcción.<sup>31</sup> Y pese a lo injustificable de la situación y de la necesidad acuciante de materias primas, en ocasiones la organización sindical interfería en favor de los empresarios para evitar los problemas legales que llevaba aparejado su directa ligazón con el mercado negro de materias necesarias en la construcción de viviendas o los deplorables resultados de sus construcciones.<sup>32</sup>

En lo referente al caso de los productos siderúrgicos una de las motivaciones que incidió en la escasa eficacia de la industria de este sector fue el monopolio efectivo que mantuvo Altos Hornos de Vizcaya cuando menos, de hecho, hasta el comienzo de la década de los 60. Este monopolio sólo fue roto paulatinamente con la creación por parte del Instituto Nacional de Industria de la Empresa Nacional Siderúrgica. Este monopolio era más preocupante si cabe si atendemos a las informaciones que desde dentro de la propia organización sindical partían de la consideración de aquél para explicar el peso del mercado negro de los productos siderúrgicos fabricados por Altos Hornos de Vizcaya, precisamente una empresa caracterizada por su alta tasa de conflictividad social:

"No se puede desconocer la importancia y lo que en el ambiente pesa, una Factoría como Altos Hornos de Vizcaya, con cerca de catorce mil trabajadores, y que siempre se ha caracterizado por su conducta antisocial, dando lugar a mantener un estado permanente de ambiente de disgusto y malestar, por lo que en el pasado mes ha influido favorablemente el haber logrado de la Dirección General de Trabajo una resolución modificando las primas en varios departamentos importantes, y que han supuesto una notable mejora económica de gran número de trabajadores, si bien es de lamentar que nunca se consigan estas justas peticiones por concesión directa de la empresa, sino a través de los Organismos Laborales, y teniendo que agotar todas las vías y recursos, resultando ésto todavía más intolerable cuando procede de una empresa que oculta gran parte de su producción para volcarla en el mercado negro y obtener enormes beneficios, sin que hasta la fecha haya sido sancionada como ejemplarmente merece, no obstante obrar en Madrid hace ya años un completísimo expediente que por esas causas instruyó la Fiscalía de Tasas. Por ello, como dicha empresa se sabe todopoderosa y cuenta con la impunidad, actúa en la forma que lo hace, siendo su masa de trabajadores -maltratada y mal pagada- el núcleo de donde arrancan todas las campañas de malestar y de protesta, que luego, como reguero de pólvora, se corre al resto de la masa trabajadora de esta provincia."<sup>33</sup>

El informe de la C.N.S. de enero de 1952 insistía en este mismo sentido denunciando la bajada voluntaria de la producción por parte de la empresa con la consiguiente elevación de precios y obtención de mayores beneficios:

"Por lo que se refiere a las empresas, continúan manteniendo su espíritu de liberalismo económico, con lo que quiere decirse que no ven con cariño las disposiciones que protegen al trabajador, tanto en materia de seguros sociales, como de estabilidad y garantía en el trabajo, distinguiéndose sobre todas en este espíritu también las grandes empresas y, por encima de todas, marcando la pauta de este espíritu antisocial, Altos Hornos de Vizcaya, para quien no sirve, dada su potencialidad e importancia, ninguna de las disposiciones ordinarias; serían precisas normas y medidas de carácter de excepción para imponer y obligar a dicha empresa a una mayor lealtad y honradez en el cumplimiento de sus deberes sociales, teniendo bien presente que, precisamente por su conducta, constituye siempre un foco latente de disgusto y malestar que en cualquier momento y aún en período de plena tranquilidad, puede condensarse y exteriorizarse en forma aguda, no cabiendo tampoco imaginarse que actúa así por preocuparse excesivamente de sus intereses económicos, que habría de reflejarse lógicamente en su producción, ya que ésta en muchas ocasiones ni le interesa aumentarla y a veces, por su actuación desacertada, conscientemente la disminuye. Por consiguiente y en resumen, puede decirse que dicha empresa está atentando doblemente contra la Nación, tanto por lo que se refiere a la justicia social, como a la economía de la Patria."<sup>24</sup>

Ese es el motivo de que el I Plan Nacional tuviera que sufragarse con un mayor peso de la iniciativa privada de este sector y las consiguientes necesidades de productos importados con las dificultades consiguientes. Para el primer año de dicho plan se preveían unas necesidades de 80.000 toneladas de material siderúrgico de las cuales únicamente 53.000 podrían ser satisfechas por la industria nacional por lo que el resto habría de venir del exterior si se pretendían cubrir los objetivos marcados.<sup>25</sup>

En el mejor de los casos, la autosuficiencia del país en materiales de construcción como el hierro era ficticia. En 1942 el consumo por vivienda fue de 1,2 toneladas, en 1943 la cantidad fue de 1,4; sin embargo, en 1944 y 1945 las cantidades fueron de 1,3 y algo menos de 1,1 toneladas por vivienda respectivamente.<sup>26</sup> Hay que tener en cuenta que en estos cálculos no se incluía exclusivamente la estructura sino todo el hierro necesario para la vivienda (puertas, tuberías, clavazón, etc., etc.). De igual manera, en 1945 se envió a los promotores una circular en las que se les prohibía que utilizaran más de 5,5 kg. por m<sup>2</sup> de acero en la construcción de viviendas. En cualquiera de los casos, esta utilización mínima del hierro sólo podía generar un nivel paulatinamente inferior en la calidad de la vivienda y, por tanto, en el nivel de vida de las familias que las habitaran; y ello porque a mediados de la década de los 40 la cantidad de hierro destinada a la construcción de viviendas suponía el 7 % de la producción nacional.

En definitiva, lo que aquí existía era un problema de flagrante injusticia social. Así el ejército español recibía en 1943 indirectamente 32.000 toneladas al año mientras que el mencionado 7 % suponía alrededor de 5.000 toneladas. A estas cifras habría que añadir las entregas realizadas por la DOEIS de los cupos destinados a construcción de tubería, clavazón y tornillería de las cuales una sexta o una quinta parte (alrededor de 1,5 toneladas) se dedicaban a tuberías y 6 toneladas a clavazón y tornillería. De las 3.000 toneladas que recibía la Dirección General de Regiones Devastadas, 1.600 se dedicaban estrictamente a viviendas. A ello hemos de sumar las 14,5 toneladas entregadas a almacenistas, lo cual nos daría un total de 28.600 toneladas cuando a la exportación se dedicaban en el año 1943 68.000 toneladas y tan sólo al sindicato del metal se le concedían 40.000.<sup>37</sup>

En el caso del cemento su ausencia estaba motivada por la existencia de un número empresas dedicadas a ese sector inferior al necesario, entre otros motivos, por la falta de carbón y energía eléctrica en cantidades suficientes, dándose igualmente el caso de un monopolio encubierto que explotaba el mercado obteniendo inmensas plusvalías.<sup>38</sup> Evidentemente, la puesta en marcha del I Plan Nacional tenía que agudizar todos estos problemas. La escasez de cemento a mediados de los años cincuenta era un hecho evidente que no se podía negar. Concretamente en 1954 el nivel de producción de cemento por habitante se situaba oficialmente en los 80 kg. (con lo que dicha cantidad podría ser rebajada) lo cual suponía un nivel de producción extraordinariamente reducido si lo comparamos con la producción *per cápita* anual de otros países europeos sin considerar el volumen exportado.<sup>39</sup>

En este contexto, era realmente ilustrativa la denuncia hecha por el consejo sindical de Burgos en el sentido de poner el dedo en la yaga sobre el fundamento del mercado negro del cemento y de otras materias básicas en la construcción. Un aspecto básico que lo posibilitaba era la propia actuación del Estado español y de sus organismos dependientes:

"No es aventurado asegurar que el 80 % del cemento que se recibe por adjudicación del pedido oficial, no es posible emplearlo en la obra para la que fue solicitado, por imposibilidad material de tiempo, ya que las obras no pueden esperarse a realizarlas cuando se reciben los cupos, pues supondría tanto como tenerla uno o dos años paradas. Esto origina una cadena de intercambios y suministros en el orden privado, con préstamos o anticipos de cementos que se reintegran al servirse los pedidos a los que no es posible esperar, cuando no es forzoso acudir al mercado negro donde -cosa significativa- siempre hay existencias, porque el precio es elevado..."<sup>40</sup>

Evidentemente el incremento del dinero circulante, las deficiencias en los servicios oficiales de abastecimiento y el descenso de la productividad incidían en el desarrollo del mercado negro.

Sin embargo, la insuficiencia del racionamiento oficial (no sólo en el ámbito de las materias primas destinadas a viviendas) tenía que influir de manera singular, sobre todo si consideramos el hecho de que materiales como el cemento y el hierro procedían en un elevado porcentaje del mercado negro. Hallándose la fabricación y distribución en manos de organismos oficiales interventores se puede deducir de ello que, más que “deficiente,”<sup>41</sup> su actividad podía calificarse, siquiera puntual o individualmente, como delictiva.

Otros materiales deficitarios eran los cerámicos (ladrillos, tejas, etc.) hasta tal punto que se preveía la necesidad de elevar en un 60 % la producción en dicho sector para afrontar las necesidades del I Plan.<sup>42</sup> A estas carencias habría que añadir las de madera. En cualquiera de los casos, la realidad era que los cupos no llegaban y cuando lo hacían era tardíamente, aunque el retraso hay que entenderlo en algunos casos como de varios años. Un ejemplo de esta situación era el de la provincia de Santander:

“...La entrega de materiales intervenidos por los Organismos Oficiales es extraordinariamente lenta, por no decir nula en muchos casos. Tanto el hierro, cemento, puntas, chapa negra, y galvanizado, como plomo elaborado, aceite de linaza, hilo de cobre para instalaciones eléctricas, etc., no se entregan cuando es necesario para la obra, retardándose en muchos casos años, tres o cuatro, con el consiguiente encarecimiento además del desorden administrativo de los expedientes por esta causa.”<sup>43</sup>

En el mejor de los casos la falta de materiales generaba construcciones sin calidad<sup>44</sup> cuyo período de edificación se podía prolongar de forma casi indefinida con la consiguiente repercusión en los precios y el encarecimiento de las viviendas e incluso la necesidad de tener que recurrir al mercado negro. Ligado a esta cuestión de la falta de materiales aparecía el tema de la corrupción. Así, en el caso de las viviendas bonificables, la no estipulación de un límite en los precios de venta de las viviendas dio lugar “a los escandalosos negocios de las ventas por pisos” detrayendo medios y recursos para las viviendas más modestas.<sup>45</sup> Por otro lado, hay que considerar que la ausencia de materiales seguía un criterio discriminatorio. Existía falta de materiales para las viviendas con un menor atractivo para la iniciativa privada. Por tanto, la falta de materiales era más bien una consecuencia del tipo de viviendas que demandaban los mismos, afectando a las “condiciones de precio, plazo de suministro y calidad adecuada al coste de la obra.”<sup>46</sup> Es decir, la demanda de materiales para viviendas destinadas a los niveles de renta inferior veía satisfechas sus necesidades de forma secundaria.

Esta realidad se palpaba en la utilización de materiales que la misma organización sindical tenía que reconocer que eran sistemáticamente de “ínfima calidad.” Tomemos como ejemplo la

realidad de la capital del Estado a principios de la década de los 50. La delegación provincial constataba que el importe total de los proyectos que obraban en sus manos ascendía a 135.573.151,66 pts. inicialmente; sin embargo, a principios de 1952 el importe ascendía ya a 211.432.008,09 pts., es decir, se había producido una elevación que en poco tiempo supuso tranquilamente el doble de lo inicialmente proyectado. Y es que cuando la base de financiación de un grupo se recibía de diferentes organismos con arreglo a unos porcentajes fijados, cuando no se cumplía con alguno de estos trámites por estar pendientes de aprobación por organismos públicos, las constructoras se eximían del cumplimiento del pliego de condiciones lo cual daba lugar a las revisiones consiguientes y a aumentos de precios como el indicado. A su vez, la falta de unidad en la financiación hacía que alguna de las entidades (como el I.N.V.) retrasase la autorización para la financiación con lo cual las obras, en el mejor de los casos se paralizaban.<sup>47</sup>

En definitiva, se evidenciaba que pese a las manifestaciones formales del régimen, la realidad era bien distinta. El mercado de la vivienda estaba regido por principios propios de la economía de mercado y se enfocaba hacia las viviendas de mayor precio y renta y no hacia las dedicadas a los más débiles económicamente, todo lo cual estaba penetrado por casos de especulación y de obtención de inmensas plusvalías. Y es que con respecto a las viviendas para la clase media y bonificables el particular que solicitara los beneficios establecidos en la legislación promulgada podía obtener “a costa de la tesorería del Estado la bonificación o las facilidades crediticias,”<sup>48</sup> mientras que por el contrario dichos beneficios sólo en muy raras ocasiones se otorgaban a los particulares (a la vez futuros propietarios de las viviendas). En definitiva, se favorecía al especulador y no al futuro propietario de rentas más bajas.

De ahí el sinfín de prórrogas que la Junta Nacional de Paro se veía obligada a conceder a los empresarios morosos acogidos a la Ley de 25 de noviembre de 1944 y a los beneficios concedidos por el Decreto-Ley de 19 de noviembre de 1948 en cuanto a los plazos de construcción de sus viviendas.<sup>49</sup>

En cualquiera de los casos este ambiente especulativo, propicio para la generación de grandes fortunas y plusvalías estaba motivado por la incapacidad o falta de voluntad del Estado franquista para lograr desviar mínimamente la iniciativa privada hacia la construcción de grupos de viviendas para los más necesitados de protección. La realidad era que las inversiones privadas se encauzaban mayoritariamente hacia los grupos de viviendas que mayores rentas podían generar.<sup>50</sup>

A estos problemas se añadían otros como el de la especulación sobre el suelo que se intentó resolver con la Ley del Suelo de 1 de febrero de 1956 y que vio truncados sus objetivos por el

hecho de que no se publicó su Reglamento. A ello se añadieron las “deficiencias e inhibiciones de la mayoría de los municipios y, sobre todo, el ambiente general de especulación dentro del proceso inflacionista...”<sup>61</sup> El resultado de esta política, ya desde la década de los cuarenta, fue que los solares subieron enormemente de precios y se construyeron casas de lujo en superior cantidad a la demandada mientras que las casas de renta baja quedaban en el baúl de los recuerdos dado que los empresarios no encontraban suficientes incentivos para su construcción.<sup>62</sup> En otros casos los terrenos susceptibles de ser edificados no eran aceptables por sus condiciones (y cuando eran necesarios daban lugar a colmenas de ambiente insufrible) o resultaban inaccesibles.

Una de las notas distintivas de las viviendas construidas durante el primer franquismo fue la ausencia de urbanización o la lamentable política urbanística ligada a las viviendas de protección oficial. En gran medida, las edificaciones eran “grandes colmenas”<sup>63</sup> carentes de los mínimos servicios, cerradas, sin dotaciones ni equipamientos, pequeños islotes aislados por océanos de terrenos sin urbanizar ni edificar y, en definitiva, instrumentos de colonización. Y es que normalmente no existía la previa urbanización de las zonas en las que se edificaban las viviendas dado que la iniciativa privada sólo la llevaba a cabo en aquellas zonas residenciales o de alto nivel en las que las plusvalías hacían atractiva la inversión. Junto al problema de la urbanización aparecía la cuestión de las redes de transportes que hacían de muchas viviendas realidades aisladas en un mar de terrenos rústicos. Sobre esta cuestión Norte señalaba lo siguiente:

“...que no se acometa la construcción de viviendas ultrabaras, por ejemplo, a costa de ocupar, en condiciones económicamente desventajosas, superficies que, insuficientemente acondicionadas, no sirven a la larga más que para desplazar un poco más allá los límites del suburbio y agravar la cuestión; involucrando muchas veces los planes de urbanización y creando otros problemas derivados (déficits de medios de locomoción, abastecimientos insuficientes de agua y luz, alcantarillado defectuosos, etc.).”<sup>64</sup>

Este era el problema con que se encontró el franquismo y este cúmulo de deficiencias son el conjunto de estrategias que en líneas generales se adoptaron durante el período de estudio.

### **17.1. Los organismos encargados de la política de vivienda.**

Las facultades iniciales del Instituto Nacional de la Vivienda estaban únicamente ligadas a la fiscalización de las actividades particulares que gozaran de algún tipo de beneficio concedido por dicha institución. Es decir, inicialmente no intervino de forma directa en el mercado de la

oferta de viviendas.<sup>55</sup> A partir de la promulgación de la Ley de 19 de abril de 1939 se constituyó como un organismo independiente tutelado por el ministerio de Organización y Acción Sindical con el fin de llevar a cabo una función protectora sobre todo con los trabajadores encuadrados en la organización sindical.<sup>56</sup> A partir de 1941 se empezó a fraguar un cambio significativo. La Ley de 9 de marzo del mencionado año concedía al instituto la facultad de emitir títulos de deuda pública a largo plazo fortaleciendo el potencial financiero de dicha institución. Sin embargo, pese a autorizar al I.N.V. para esta función el mercado de ahorro estaba parcialmente saturado dado que tenía que absorber, entre otras, emisiones de valores para la reconstrucción nacional, del Instituto de Colonización, etc. Este mismo año, la Ley de 7 de agosto concedía al I.N.V. la facultad de construir directamente viviendas. En principio, estas dos disposiciones fortalecían al I.N.V. y al ministerio de Trabajo al incrementar su financiación y las competencias sobre vivienda. Sin embargo, en gran medida este potencial fue absorbido por la O. S. del Hogar<sup>57</sup> en el sentido de que la capacidad de construir directamente viviendas fue sustituida, en gran medida, por dicha obra y cuando no por otra serie de organismos públicos (hermandades, patronatos de funcionarios, etc.) aunque a costa de los presupuestos del I.N.V. A su vez, la mencionada obra se vio potenciada por la promulgación del Decreto de 2 de septiembre de 1941 que creaba la "cartilla del ahorro para el hogar" cuyo objetivo era potenciar el ahorro para dicho fin:

"Como puede apreciarse, la auténtica promoción de carácter público fue la realizada por la O. S. del Hogar (dejando aparte el hecho de que tal entidad no pertenecía propiamente al ámbito de la Administración Pública), ya que el I.N.V. no actuó -salvo en muy contadas ocasiones- como Entidad Constructora (puesto que tal función fue asumida por los Patronatos y Hermandades de Funcionarios a que antes se hizo alusión).<sup>58</sup>

La Obra Sindical del Hogar nació por medio de la Circular nº 19 de 19 de diciembre de 1939 de la Delegación Nacional de Sindicatos. La Orden circular nº 132 de 6 de octubre de 1941 de la Secretaría General de F.E.T. y de las J.O.N.S. la reconocía como la única entidad constructora del partido. La intervención del Estado, en este caso a través de la O. S. Hogar tenía como fundamento la consciencia de que a la altura de 1945 sólo el 25 % de las casas españolas eran mínimamente habitables.<sup>59</sup>

Este organismo alcanzó su mayor fortaleza con la promulgación de la ley de viviendas de renta limitada de 1954 ya que con ello se encomendó a la Obra la realización de un plan de viviendas más conocido como "Plan Sindical Francisco Franco" por medio de los decretos de 14 y 29 de mayo de 1954. Al amparo de este plan se proyectó la realización de 43.700 viviendas en un año, de las cuales 5.462 eran de renta reducida, 29.899 de renta mínima y 8.339 de tipo social.<sup>60</sup> El



segundo plan realizado de acuerdo con la Ley de 15 de julio de 1954 de viviendas de renta limitada pretendía realizar 49.136. Pese a estos buenos deseos en el período 1955-1957 la O.S.H. construyó únicamente 76.526<sup>61</sup> y no las 92.836 proyectadas. Sobre esta cuestión es posible disminuir todavía más las realizaciones de la O. S. del Hogar considerando el criterio propagandista seguido por la organización sindical. Moya, rebajando notablemente estas cifras, afirma que de 1954 a 1957 la Obra construyó 18.974 de protección oficial con un coste medio por vivienda de 44.154 pts. para el período 1954-55 y 98.733 para el período 1955-56.<sup>62</sup> Evidentemente la tardanza en la mecanización y el atraso en la utilización de las modernas técnicas de industrialización influyeron en este bajo ritmo de construcción.<sup>63</sup> Este tipo de transformaciones tecnológicas y estructurales sólo se aplicaron masivamente en el período 1964-69 utilizándose por primera vez en Sevilla en las inundaciones de 1961 y en el Vallés en 1962 así como en los corrimientos de tierras y derrumbamientos en Granada en el otoño del mencionado año.

Otro aspecto que influyó de forma muy decisiva en la escasa brillantez del plan fueron los retrasos en los pagos del importe de las certificaciones de obra a los contratistas. A éstos se les exigían teóricamente unos plazos fijos con sanciones establecidas para los morosos mientras que la organización sindical no pagaba de forma puntual las certificaciones, con lo cual la misma O. S. del Hogar se veía obligada a llegar a acuerdos con los contratistas para que paralizaran las obras.<sup>64</sup>

La consecuencia de ello, aparte de las quejas de los contratistas, fue que se incrementaron las resistencias a presentarse a nuevas subastas ante la necesidad de negociar con las entidades bancarias y al cobrarle éstas los intereses por sus demoras. Así pues, las subastas, cada vez en mayor medida, se iban quedando desiertas por falta de solicitantes.<sup>65</sup>

Dado que parte del Plan Sindical de la Vivienda realizado por la O. S. del Hogar estaba financiado por cédulas emitidas por el I.N.V. y adquiridas por las mutualidades y montepíos, se llevó a cabo el reparto de parte de aquellas viviendas entre dichas entidades lo cual suponía, en principio, un total de 8.000 viviendas. Sin embargo, la D.N.S. decidió otorgar al comenzar el año 35.560 a las mutualidades "por su fiel colaboración."<sup>66</sup> Esta colaboración se fundamentó en el Decreto Ley de 29 de mayo de 1954. La fórmula consistía en que fuese la Delegación Nacional la constructora de las viviendas con la colaboración de entidades económicamente tan potentes como las mutualidades mediante el mencionado sistema de suscripción de títulos de deuda emitidos para tal fin.<sup>67</sup>

La O.S.H. había tropezado tradicionalmente con el problema que suponía el hecho de que su función hubiera de realizarse según criterios políticos. Se pretendía "impresionar" a la

población con logros espectaculares. "Por la simple promesa o realidad de un donativo (en terrenos, etc.) se acepta que todo el resto de la financiación está asegurada"<sup>68</sup> se afirmaba desde la Obra insistiendo en que el ejemplo de esta política de prestigio tenía como manifestación la colocación de primeras piedras, de subastas anticipadas o comienzos de obras con insuficientes medios económicos que dejaban a las viviendas y a sus propietarios en la estacada o con casas de una calidad todavía inferior a la ya de por sí proyectada. Sin embargo, pese a la prevalencia de los criterios políticos la realidad era que la misma Obra construía viviendas que, pese a las ayudas oficiales, no eran accesibles a los trabajadores fundamentalmente porque los escasos recursos de la población se dedicaban a necesidades más apremiantes como la alimentación y el vestido.<sup>69</sup> Concretamente la organización sindical en Jaén denunciaba este aspecto:

"En este mes pasado nos hemos tenido que enfrentar con el problema de poder colocar las viviendas que la Obra del Hogar ha construido, debido, principalmente, a la imposibilidad que la mayor parte tiene de poder aportar el 16 % de su coste para que se les pueda adjudicar una de ellas, pues aun los que tienen Montepío se resisten a ello pues no ignoran que además de las 80 o 90 pts. que tendrían que pagar para alquiler y amortización del coste de la vivienda, también tendrán que dar mensualmente otras cien pts. para amortizar en cinco años el préstamo del montepío, lo que sumado daría una cantidad de 170 a 190 pts., que indiscutiblemente está fuera de las posibilidades de la mayor parte de los obreros de esta provincia el poder entregar."<sup>70</sup>

Era evidentemente que se proyectaban planes muy superiores a los que la entidad sindical podía llevar a la práctica y que no se valoraba correctamente la carga económica total que significaba la construcción de un grupo de viviendas. Es decir, se constataba de nuevo la desproporción desmesurada entre las manifestaciones altisonantes de los políticos que anunciaban a bombo y platillo la materialización de una política de vivienda que iba a hacer de España un paisaje idílico frente a una realidad que obviaba lo que realmente se podía hacer y que constituía un boquete por el cual se iban derramando las ilusiones de los posibles beneficiarios de las viviendas.

Aparte de estas consideraciones políticas, administrativamente la gestión de los recursos por medio de la O. S. del Hogar no resultaba especialmente apta para favorecer el levantamiento de edificaciones. En el caso de la Obra existían dos formas de realizar pagos: pagos con cargo a los fondos que la obra tenía en la Caja Postal y en los que se ingresaba la recaudación de los grupos entregados y las aportaciones de los beneficiarios; y pagos con cargo a fondos de otras entidades (I.N.V., etc.) en los que se cobraba el importe de las certificaciones de obra ejecutada para, a continuación, abonarlo a los contratistas. En cualquiera de los casos, los mencionados pagos no iban a cargo de la Tesorería de la Administración General. Cuando la obra iba a pagar

a una entidad no lo hacía directamente sino que situaba la cantidad en la Administración General y era ésta la que lo abonaba a quien Hogar determinase. Sin embargo, estos pagos se demoraban habitualmente varios meses (en el mejor de los casos) lo cual suponía, por un lado, pérdida de prestigio<sup>71</sup> para la entidad sindical, pero por otro falta de confianza y, por tanto, retraimiento en la construcción de viviendas.

Desde la O.S.H. se intentaba llevar a cabo una función social en un sector que producía un bien básico para la vida de las familias españolas (base de la nueva sociedad que se pretendía organizar tras la guerra civil); se perseguía también un objetivo político cual era el de realzar las obras del sindicalismo para obtener un prestigio que lograra asentar el nacional-sindicalismo en la España de Franco. Por otro lado, con la O.S.H. "se pretendía contribuir a la creación de un estilo arquitectónico que expresase el contenido, el sentido y las inquietudes del Nacional Sindicalismo, en cuanto doctrina que representaba una peculiar concepción del hombre y de la vida."<sup>72</sup> Ello se puso de manifiesto, no sólo por lo que se refiere a la entidad sindical, en la elaboración del I Plan Nacional de la Vivienda, en el que se ordenó que se deshechase la inserción en fachadas de modismos típicos o regionales como instrumento para minimizar la exteriorización del sentimiento nacionalista en las consideradas regiones de mayor tradición separatista.<sup>73</sup>

Al final del período Girón el número de viviendas edificadas por la O. S. del Hogar ascendía a 101.020 según muestra el cuadro siguiente si bien hemos de poner en serias dudas dichas cifras.<sup>74</sup>

Año	Viviendas
1942	32
1943	290
1944	642
1945	1.958
1946	1.355
1947	2.455
1948	1.492
1949	2.138
1950	3.464
1951	2.217
1952	3.112
1953	2.582
1954	2.665

1955	16.496
1956	25.414
1957	34.708
Total	101.020

*\*Cuadro n° 107. Viviendas edificadas por la O. S. del Hogar hasta 1957.*

Otro de los instrumentos para la construcción de viviendas fue el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional que vio la luz por la Ley de 16 de marzo de 1939. Su función era facilitar préstamos para poner en pie lo destruido durante la guerra civil reproduciendo en gran medida la ley Salmón de 1935. Su objetivo no era ni mucho menos la calidad en la construcción sino exclusivamente la realización del mayor número posible de obras en los puntos de la geografía nacional atendiendo, en gran medida, a criterios políticos tendentes a favorecer a los grupos más cercanos al régimen salido de la guerra civil:

“Esta sustitución, sin embargo, no podía por menos que dejar traslucir los matices políticos de su propia gestación (traducidos en la canalización de los préstamos y subvenciones a las personas afectas al Movimiento Nacional), con lo cual su finalidad social se encontraba tremendamente desdibujada...”<sup>75</sup>

Uno de los aspectos más insolidarios del I.C.R.N. era el hecho de que manifestaba una preferencia acentuada por las inversiones de tipo bonificables (o viviendas bonificables) además del hecho de que sus fondos procedían casi exclusivamente del capital privado por medio de la emisión de cédulas. Ello exigía la amortización de un interés durante un largo plazo lo cual generaba la necesidad obtener la máxima rentabilidad y seguridad posible, lo cual conducía al fomento de la construcción de viviendas del nivel más alto dentro de las legalmente toleradas.

A estas instancias se añadió la Junta Interministerial de Obras para mitigar el Paro Obrero creada por Orden de 22 de diciembre de 1939<sup>76</sup> que a partir de 1944 pasó a denominarse Junta Nacional del Paro. Su origen estaba ligado ala recopilación de datos existentes en la anterior Junta Nacional contra el Paro creada para ejecutar la Ley Salmón de 25 de junio de 1935.<sup>77</sup> Su objetivo consistía en conceder préstamos para financiar básicamente la realización de viviendas para la clase media. A partir del Decreto de 28 de mayo de 1945 se concedió al I.C.R.N. la capacidad de emitir cédulas homologables a los valores del Estado para potenciar la base financiera de la junta.

Para su financiación se había creado por Decreto de 14 de diciembre de 1939 la décima sobre la contribución territorial e industrial. El Decreto de 22 de junio de 1943 estipulaba el empleo de los recursos así obtenidos. El 25 % de lo recaudado se ingresaba en el I.N.V. y el 50 %, como

mínimo, había de destinarse necesariamente al pago de jornales; el 25 % restante había de destinarse a materiales.

AÑOS	ORDINARIO	EXTRAORDINARIO	TOTAL
1941	27.883.792	-----	27.883.792
1942	27.883.792	-----	27.883.792
1943	27.883.792	-----	27.883.792
1944	27.883.792	-----	27.883.792
1945	27.883.792	27.883.792	55.767.584
1946	44.483.774	-----	44.483.774
1947	44.483.774	-----	44.483.774
1948	44.483.774	30.000.000	74.483.774
1949	44.483.774	43.000.000	87.483.774
1950	44.483.774	60.000.000	104.483.774
1951	44.483.774	60.000.000	104.483.774
1952	44.483.774	60.000.000	104.483.774
1953	44.483.774	100.000.000	144.483.774
1954	44.483.774	125.000.000	169.483.774
1955	44.483.774	125.000.000	169.483.774
1956	44.483.774	150.000.000	194.483.774
1957	44.483.774	60.000.000	104.483.774

\*Cuadro n° 105. Presupuesto de la Junta Interministerial de 1941 a 1957.<sup>78</sup>

Hay que tener en cuenta que los créditos ordinarios a lo largo de la época Girón eran de algo más de 27 y 44 millones mientras que en el 2° semestre de 1935 y a lo largo de 1936 ascendían 133.333.333 pts. Las cantidades asignadas parecían realmente irrisorias tanto para luchar contra el paro como para llevar una política de construcción que paliara el desempleo.<sup>79</sup>

En la sesión plenaria de la Junta Interministerial de Paro de 23 de diciembre de 1947 se discute el escrito presentado por Solís Ruiz (Vicesecretario Nacional de Ordenación Social) y Redondo, Jefe de la O. S. de Lucha contra el Paro, sobre el “deseo del Gobierno de restringir, con carácter general, créditos, tanto oficiales como por parte de la Banca Privada, medida tendente según parece, a revalorizar la moneda...con que, de ser cierta la noticia, la situación que se plantea en estos momentos para la edificación de viviendas destinadas a la clase media, y para el paro involuntario en el ramo de la construcción, únicos problemas, que afectan concretamente a esta Junta, han de ser gravísimos, pues las disposiciones en vigor, encaminadas a facilitar los créditos para dichos inmuebles quedan virtualmente paralizadas, y todo ello unido

a la alarmante falta de materiales, producirá, en plazo inmediato, un considerable número de obreros en paro.”

La dirección administrativa de la Junta correspondía a la Comisaría Nacional del Paro<sup>60</sup> dependiente del ministerio de Trabajo y con características de Dirección General y diseñadora de las leyes de 1944 y 1948 sobre viviendas bonificables.<sup>61</sup> La función de la comisaría consistía en subvencionar obras con el objetivo de luchar contra el paro obrero. Dichas obras se agrupaban en torno a siete conceptos:

- 1.- Viviendas, obras sociales y de cultura popular.
- 2.- Obras públicas municipales y provinciales.
- 3.- Obras hidráulicas.
- 4.- Obras ligadas a la formación religiosa y culto.
- 5.- Saneamientos.
- 6.- Repoblación forestal
- 7.- Obras diversas.

De este organismo no se puede afirmar que fuera especialmente efectivo a la hora de cumplir su misión (construir para luchar contra el paro) si nos atenemos al esfuerzo financiero que hizo durante una década. De 1941 a 1950 la comisaría había destinado a su labora la cantidad de 547.870.000 pts. aplicando en 1944 28.500.000 pts. y ascendiendo la cantidad destinada a viviendas (téngase en cuenta que, en teoría, se incluyen las llamadas obras sociales y de cultura popular, es decir, escuelas, residencias, dispensarios, hospitales, etc., etc.) a 158.100.000.

ministerio o Centro Oficial de quien depende	Entidad	Misión que le es propia	Actividades en relación con la vivienda
----------------------------------------------------	---------	-------------------------	--------------------------------------------

Gobernación	Dirección General de Regiones Devastadas	Reconstrucción de pueblos adoptados	Ha reconstruido directamente gran numero de viviendas en zonas o pueblos adoptados
	Fiscalía de la vivienda	Hacer cumplir la legislación sanitaria en materia de viviendas	Las de su misión propia. Lleva la única estadística existente de viviendas.
	Dirección General de Arquitectura	Reglamentación del ejercicio de la profesión.	Mantiene el Centro Experimental de Arquitectura. Creó alguna Sección de Vivienda. Hace algunas publicaciones.
	Dirección General de Sanidad	Redactar la legislación sanitaria en materia de vivienda	Promulgó la legislación de 19 de febrero de 1944
	Colegios de Arquitectos	La profesional	Diversas de difusión, como concursos, conferencias, etc.

Trabajo	Instituto Nacional de la Vivienda	Auxilio, construcción o fomento de viviendas y la redacción de los planes general par toda la nación	Las de su misión propia, construyéndose a su través unas 16.000 viviendas al año. tiene una oficina de estudios. Redactó un plan en 1943 y ha colaborador en éste.
	Comisaría Nacional del Paro	Lucha contra el paro	Redactó las leyes de 1944 y 1948 de viviendas bonificables.
Hacienda	Instituto de Crédito para la reconstrucción	Prestar, de acuerdo con la ley, para reconstruir y construir viviendas protegidas y bonificables	Las de su misión propia
Industria	D.O.E.I.S.	Distribución de los cupos oficiales de hierro	Las de su misión propia
	D.O.E.I.C. Cemento	Distribución de los cupos oficiales de cemento	Las de su misión propia
D.N.S.	Sindicato de la Construcción	Lo relacionado con producción y régimen laboral en est ramo	Ha creado una ofician de estudios sobre temas de viviendas, prefabricación etc. Distribuye cupos de diversos materiales.
Educación	Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)	La investigación	Convocó el concurso internacional de 1950 para la construcción de 50.000 viviendas en España al año.



*\*Cuadro n° 109. Ministerios y centros oficiales con atribuciones en el tema de la vivienda en 1954.*

Como muestra el cuadro anterior uno de los problema trágicos de la construcción de viviendas oficiales fue la falta de unidad y la gran cantidad de departamentos con atribuciones en este tema.

### **17.2. Los tipos de viviendas construidas por el franquismo.**

Ya la ley de 19 de abril de 1939<sup>53</sup> señalaba los beneficios que habían de concederse a las llamadas viviendas protegidas, diseñadas para los grupos de renta más baja, como por ejemplo la exención del pago del 90 % de la contribución urbana durante veinte años; la concesión de préstamos sin interés y hasta el 40 % del presupuesto de la construcción, primas de hasta un 20 % del mismo a las cooperativas de viviendas en las que los socios hiciesen prestación de trabajo personal, etc.

Este sistema tenía un problema fundamental. Como se ha dicho, era el I.N.V. el que aportaba el 40 % del presupuesto de la construcción; el beneficiario aportaba el 10 % y el resto había de obtenerse en una entidad crediticia. Sin embargo, la legislación establecía que el I.N.V. no debía hacer efectiva su aportación hasta haber obtenido el préstamo de algún banco con los inconvenientes consiguientes aparte de las dificultades para aportar el 10 % por parte del beneficiario.<sup>53</sup> Los resultados no fueron muy positivos hasta tal punto que durante el período de vigencia de esta ley (1939-54) se construyeron un promedio anual de 16.000 viviendas. Probablemente este dato sea irrelevante tanto en cuanto “normalmente se confundía el concepto de casa de construcción barata con el de casa mal terminada.”<sup>54</sup> Y en cualquiera de los casos la realidad vino a demostrar que estos grupos de viviendas, así como las de clase media y bonificables iban a parar inevitablemente a los mismos grupos sociales, que en este caso eran los de renta más elevada en función del escaso poder adquisitivo de la clase trabajadora y de la insuficiente intervención del Estado.<sup>55</sup>

Sobre los resultados de esta política se afirmaba a comienzos de la década de los 50 desde el sindicato que “sólo en contados casos se consigue que la renta de las viviendas protegidas sea asequible a la capacidad económica de las clases trabajadoras más necesitadas de asistencia, que, en primera aproximación, puede aceptarse están constituidas por la masa que devenga salarios no superiores a 25 pts. diarias.” A esto había que añadir que la mayoría de los trabajadores en peor situación económica (peones sin especialización y los grupos inferiores de cualquier escalafón profesional) podían obtener de las rentas del trabajo alrededor de 760 pts. mensuales. Si las unidades familiares no tenían capacidad para dedicar más de un 15 % al alquiler, la renta de la vivienda no debía exceder de las 112 pts. por mes.<sup>56</sup> Por otro lado, la

política de vivienda centrada exclusivamente en la realización de edificaciones de 3ª categoría con exclusiva presencia de casas de estas características estaba en el origen de la proliferación de verdaderos “focos de infección”<sup>87</sup> desde un punto de vista, no sólo higiénico, sino también social, cuestión que había de preocupar especialmente al régimen.

Las viviendas de clase media nacieron por la Ley de 15 de noviembre de 1944 a la que se añadió la orden de 14 de abril de 1948 si bien sus aportaciones no fueron especialmente novedosas.<sup>88</sup> Sobre la operatividad de la construcción de viviendas para clase media y bonificables existían serias dudas. “¿Tendrán los propietarios que se decidan a construir el auxilio necesario por parte de Estado para proveerse de los materiales necesarios para conseguir realizar la obra que se proponen, así como el transporte de los mismos?”<sup>89</sup> Posteriormente se comprobaría que no. En segundo lugar, el jefe de la O.S. Lucha contra el Paro partía (erróneamente, como se ha tratado en otro de los capítulos de esta tesis) de que el número de parados ascendía a principios del año 1944 a 157.893. Si el motivo de algunas de estas leyes era luchar contra el paro que se concentraba en las zonas urbanas el objetivo ya partía con unas posibilidades nulas de lograr su meta por cuanto el resto de los parados no pertenecían a este sector y no se asentaban en ciudades. A lo dicho hay que añadir que desde las filas sindicales se definía como clase media (a la cual iban destinadas estas casas) a los empleados del Estado. El tope máximo del alquiler de estas viviendas se situaba en 400, 375 o 200 pts. Evidentemente la tendencia fue la de construir las viviendas del tamaño máximo (más de 100 m<sup>2</sup>) como forma de hacer lo más atractiva posible su construcción para los empresarios de este sector. Y si ésto iba a ser así cabría preguntarse, si los sueldos de los funcionarios podían oscilar entre las 500 y las 1.000 pts. cómo podrían pagar esas cifras aunque hablamos de un grupo de trabajadores, en parte, privilegiados.<sup>90</sup>

La construcción de viviendas bonificables a partir del Decreto-Ley de 25 de noviembre de 1944<sup>91</sup> desarrollado por el Decreto-Ley de 7 de marzo de 1947 buscaba, en parte, luchar contra el paro obrero construyendo viviendas para los estratos sociales medios. Con este proyecto se rompía la unidad de la política de la vivienda ya que la ejecución de las viviendas bonificables era competencia de la Comisaría Nacional del Paro.<sup>92</sup> Esta misma institución tendría que reconocer sólo tres años más tarde de la iniciación de este proyecto que no había cumplido íntegramente con lo proyectado.<sup>93</sup>

Esta disposición fue derogada por el texto refundido promulgado por el Decreto-Ley de 19 de noviembre de 1948<sup>94</sup> prorrogado por el Decreto de 16 de diciembre de 1951 al que se añadió el texto refundido de la Orden de 10 de julio de 1954. Los beneficios que se otorgaban eran los siguientes: préstamos concedidos por el I.C.R.N. que podían ser de hasta un 60 % del presupuesto con un interés del 4 % amortizables hasta 50 años; facilidad en el suministro de

materiales; libertad (en algunos casos y con menos ayuda del Estado en otros) en la venta por pisos de las construcciones, bonificaciones tributarias durante los primeros 20 años, etc. "Los alicientes eran, por tanto, magníficos, y ello se reflejó en el elevadísimo número de solicitudes que recibió la Comisaría Nacional del Pazo (órgano ejecutor del mencionado decreto), la mayoría de las cuales no pudieron ser atendidas. Y es que, en cuanto a las demandas de ayudas, "la mayoría comportaban auxilios del Estado en cupos de materiales a precio de tasa, y préstamos a largo plazo y al 3 % por lo que el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, que había de financiarlos, se vio enfrentado con un volumen de inversiones, a realizar en pocos años, de más de 15.000 millones de pts, superior a todos sus disponibilidades durante muchos años," con lo que la solución consistió en diferir los préstamos y en alterar sus condiciones.<sup>95</sup> El problema de este proyecto fue, aparte de las dificultades para el aprovisionamiento oficial de los cupos la escasa regularidad con que los empresarios del ramo recibían los préstamos y ayudas solicitadas con cargo a las viviendas bonificables.<sup>96</sup>

El negocio para los promotores era magnífico, puesto que con dinero del Estado construían las casas que vendían más tarde con márgenes de beneficio realmente escandalosos.<sup>97</sup> Al amparo de este decreto se construyeron de 1944 a 1955 10.091 viviendas al año. En cifras redondas se estimaba a finales de 1953 que era necesario construir 175.000 viviendas anuales (de todo tipo) para romper la cadena deficitaria. Sin embargo, en 1952 se habían construido en torno a las 25.000 viviendas y en 1953 se edificaron menos de 30.000. En ciudades como Barcelona el ritmo de construcción en la década de los cincuenta era de 1.000 a 1.500 al año cuando dicha cantidad debía ser en el peor de los casos de 6.000 contando con el hecho de que sólo en diez años la situación podía estabilizarse de seguir ese ritmo.<sup>98</sup> Al final del período Girón se habían construido 24.573 viviendas de las que, según la legislación de 1944, existían tres grupos: de más de 110 metros cuadrados, de 80 a 110 y de 60 a 80.<sup>99</sup> La disposición de 1948 establecía cuatro tipos de viviendas: de más de 125 metros cuadrados, de 90 a 125, de 70 a 90 y de 50 a 70. Con estas modificaciones se habían construido hasta el 31 de diciembre de 1955 79.885 viviendas. A la luz del Decreto Ley de noviembre de 1953 se estableció otra modalidad por la que se hicieron hasta el 31 de diciembre de 1955 13.805 viviendas.<sup>100</sup>

Estas cifras suelen ser engañosas pues no se hace constar el número de viviendas que realmente adquirían la calificación definitiva de bonificables. Así, para el 31 de diciembre de 1955, de acuerdo a la Ley de 25 de noviembre de 1944, habían adquirido dicho título 24.238 viviendas; según el Decreto Ley de 19 de noviembre de 1948 71.456 y según el Decreto Ley 27 de noviembre de 1953. En total, 106.839 viviendas bonificables.<sup>101</sup>

Las obras susceptibles de ser calificadas como bonificables dividían las viviendas en dos categorías según las calidades y condiciones de la construcción. De esta forma la clasificación

resultaba del siguiente modo teniendo en cuenta que las rentas citadas eran de aplicación en núcleos de población de más de 200.000 habitantes, reduciéndose en los demás del 10 al 20 %:

	1ª categoría pts./metro cuadrado	2ª categoría pts./metro cuadrado
tipo a) más de 125 m/2	6,00	4,60
tipo b) de 90 a 125 m/2	6,10	4,65
tipo c) de 70 a 90 m/2	1,40	4,85
tipo d) de 50 a 70 m/2	1,50	4,90

*\*Cuadro n° 110. Clasificación de las viviendas bonificables.*

En el fondo no existía una diferencia abrumadora entre las viviendas bonificables y las de clase media. Y como se ha dicho este sistema no servía para proteger a los más débiles, entre otros motivos, porque no se había diseñado con este objetivo. Villar señala como el hecho de que la construcción de estas viviendas dependiera de la Junta Nacional del Paro y no del I.N.V. contribuyó de forma significativa a disminuir la calidad de las edificaciones ya que el objetivo perseguido no era más que adaptar la ley Salmón para luchar contra el paro por medio de la reconstrucción del país.<sup>102</sup> De esta forma no se realizó una política oficial adecuada dejando sin la debida atención al grupo de viviendas que más debía haberse potenciado (el de las viviendas protegidas) por el hecho de que la capacidad de obtención de plusvalías por medio de las mismas era notablemente inferior.

Tanto por lo que se refiere tanto a las viviendas protegidas como a las de clase media o a las bonificables la ayuda económica del Estado no alcanzó "en volumen la extensión y cuantía solicitadas."<sup>103</sup> Como otros tipos de viviendas, las bonificables plantearon un serio problema de especulación; en este caso los precios de los alquileres se habían calculado para el nivel de precios y salarios de 1943; dos años después la Junta Interministerial del Paro encargada de dirigir la realización del proyecto ponía de manifiesto que el coste de la construcción había aumentado en torno a un 50 %.<sup>104</sup> En esta situación los alquileres no resultaban tan rentables. Por otro lado, desde el sindicato se afirmaba rotundamente que el sistema de financiación había fracasado porque el I.C.R.N. no había procedido a hacer efectivas las cantidades que la Junta Interministerial de Paro había concedido como préstamos a los expedientes tramitados.<sup>105</sup> Esta dilación, unida a la tendencia a abandonar la construcción por parte de los promotores no podía, por menos, que dar al traste con este proyecto, cuestión que la Junta Interministerial de Paro abordó en diversas reuniones.<sup>106</sup>

Para los grupos especialmente desfavorecidos provocados básicamente por el éxodo rural sobre las grandes ciudades y por la degradación sistemática de su perímetro, se promulgó el Decreto Ley de 14 de mayo de 1954 que creó las viviendas de tipo social obviando la existencia de una

comisión en las Cortes con un proyecto presentado el 27 de noviembre de 1953.<sup>107</sup> La ejecutora principal del proyecto había de ser la O. S. del Hogar en función de la Ley de 26 de octubre de 1945 que declaraba de interés nacional sus construcciones.<sup>108</sup> Estas viviendas habían de tener una superficie máxima de 42 m<sup>2</sup> no pudiendo sobrepasar su valor las 25.000 pts. Sus beneficios indirectos fueron similares a los de las viviendas protegidas, si bien los directos los superaron concediéndose anticipos de hasta el 80 % del coste sin interés amortizables en 50 años. A lo largo de 1955 se llegaron a construir 52.275 por un valor de 2.487 millones de pts., aunque su número disminuyó a 20.739 en 1956 (con un coste global de 1.167 millones y 56.255 pts. por vivienda). La realidad es que con anterioridad a estos resultados al promulgarse la ley se gestó un proyecto que consistía en que la organización sindical construyera 500.000 viviendas a razón de 50.000 por año que evidentemente no se plasmó en la realidad.

Con una finalidad similar se crearon las viviendas de renta mínima y reducida por medio del Decreto Ley de 29 de mayo de 1954 completado por el Decreto de 10 de agosto de 1955. Inicialmente existió un plan para la construcción de 500.000 viviendas de este tipo por parte de la Delegación Nacional de Sindicatos. En el plan diseñado para el período 1944-54 el I.N.V. estimó que era necesario construir 1.396.257 viviendas de las cuales 619.054 habían de ser viviendas financiadas oficialmente. En la VI Asamblea Nacional de Arquitectos se cifró el déficit para 31 de diciembre de 1951 en 800.000 más un incremento anual cifrado en 80.000 pese a lo que la Delegación Nacional de Sindicatos cifró el déficit para idéntica fecha en 1.060.126 distribuidas según consta en el siguiente cuadro.

PROVINCIAS	Déficit de VIVIENDAS calculado para 31 de diciembre de 1953	CANTIDAD de viviendas proyectadas para 1954
Alava	6.146	200
Albacete	15.790	200
Alicante	30.321	300
Almería	14.922	400
Ávila	6.811	200
Badajoz	51.303	300
Baleares	15.055	200
Barcelona	74.479	3.000
Burgos	11.377	200

Cáceres	26.106	300
Cádiz	28.563	400
Castellón	14.248	300
Ciudad Real	24.672	300
Córdoba	39.870	400
Coruña	26.012	500
Cuenca	9.673	200
Gerona	11.772	300
Granada	30.426	400
Guadalajara	3.749	200
Guipúzcoa	16.361	500
Huelva	20.770	300
Huesca	3.366	200
Jaén	29.492	500
León	17.852	300
Lérida	5.259	300
Logroño	7.402	200
Lugo	5.372	200
Madrid	76.708	4.000
Málaga	18.710	500
Murcia	36.918	500
Navarra	12.047	400
Orense	11.828	200
Oviedo	26.765	1.000
Palencia	7.203	200
Las Palmas	21.841	200
Pontevedra	25.813	300
Salamanca	15.285	300
Santa C. de Tenerife	18.662	200
Santander	17.074	500
Segovia	9.803	300
Sevilla	39.305	1.000
Soria	3.878	200
Tarragona	15.491	400
Teruel	7.784	200
Tetuán	-----	50

Toledo	18.952	200
Valencia	59.197	1.000
Valladolid	14.312	400
Vizcaya	30.337	1.000
Zamora	9.533	200
Zaragoza	15.222	1.000
Ceuta	730	50
Melilla	530	50
TOTAL	1.060.126	25.150

*\*Cuadro n° 111. Distribución de las necesidades de vivienda según la D.N.S. en diciembre de 1953.<sup>110</sup>*

Se estimaba que debían construirse anualmente 60.000 viviendas. Sin embargo, la D.N.S. rebajó inicialmente sus deseos situando en 50.000 el número de viviendas de renta reducida y mínima a construir. Las viviendas de renta reducida estaban diseñadas para trabajadores cuyos ingresos oscilaran entre las 15.000 y las 25.000 pts. al año y que habrían de dedicar una 1/5 parte al alquiler de la vivienda, es decir de 3.000 a 5.000 pts. al año, lo que suponía mensualmente de 250 a 416 pts. En el caso de las viviendas de renta mínima estaban diseñadas para obreros cuyos salarios oscilaran entre las 5.000 y las 15.000 pts. que, dedicando 1/5 parte al alquiler habrían de pagar de 83 a 250 pts. al mes, cantidades que en cualquiera de los dos casos parecían excesivamente elevadas. Como se ha mencionado, pese a que la primera impresión era que se necesitaban 60.000 viviendas anuales de estas características, se rebajó esta cifra a 50.000. Posteriormente, se manifestó el deseo de construir 25.150 viviendas correspondientes al año 1954 de las que el 10 % habían de ser de renta reducida y el 90 % de renta mínima. El coste estimado total del proyecto ascendía a 1.257.178.080 pts. A las de renta reducida se iban a destinar 200.194.000 pts. y a las de renta mínima 847.454.400 pts. Las necesidades de material se cifraban en 0,3 toneladas de hierro, 5 de cemento y 1,6 kg. de cobre por vivienda lo cual suponía en total 7.545 Tm. de hierro, 125.750 de cemento y 40.240 Kg. de cobre, si bien hay que tener en cuenta que sólo se consideraban las necesidades de la estructura y no los elementos de fundición, cocinas, saneamientos, etc.<sup>111</sup> Posteriormente este plan se modificó por la necesidad de incentivar a una iniciativa privada que se retraía en la construcción de viviendas de renta baja. El porcentaje de viviendas de renta reducida se elevó al 25 % del total y, por tanto las viviendas de renta mínima iban a ser el 75 % con un coste total que ya ascendía a 2.274.888.000 pts.<sup>112</sup> La eficacia para hacer llegar los cupos de materias primas fue escasa. El cupo de hierro asignado a las viviendas de renta reducida y mínima ascendía a de 9.982 Tm. mientras que lo recibido de forma efectiva consistía en 7.529. En el caso del cemento las cantidades asignadas ascendían a 173.055 mientras que lo entregado había sido únicamente 89.693 Tm.<sup>113</sup>

Para el año 1955 se habían realizado 10.000 viviendas de tipo social (según Decreto Ley de 14 de mayo de 1954) de las cuales 1.000, 1.300 y 6.500 se habían construido en Barcelona, Sevilla y Madrid, respectivamente. De renta reducida se habían edificado 8.912 y de renta mínima 26.738 por un importe total de 3.034.844.710.<sup>114</sup>

Los beneficiarios de este tipo de casas eran los trabajadores encuadrados en la organización sindical siendo el único promotor de estas edificaciones la O. S. del Hogar aunque la propiedad (una vez construida) pasaba al I.N.V. Se consideraban viviendas de renta reducida las edificadas con un vestíbulo, comedor, cocina y cuarto de aseo con 5, 4, 3 o 2 dormitorios. Dichas viviendas se clasificaban en 4 categorías en función de su superficie: 100, 90, 80 o 70 metros cuadrados respectivamente. El precio neto de la vivienda, excluyendo los gastos de urbanización, servicios complementarios y solar, estaba entre las 74.000 y las 100.000 pts. Los beneficios indirectos eran idénticos a los de las viviendas de tipo social. Su realización se llevó a cabo básicamente a través de los patronatos sindicales de la vivienda creados por Orden de 12 de julio de 1954.

La escasa calidad con que se concebían las viviendas de tipo social, de renta mínima y reducida se palpa en las ordenanzas diseñadas por el I.N.V. Así, se establecía la posibilidad de suprimir el vestíbulo de estas viviendas en las provincias en las que, según el I.N.V., el clima benigno posibilitara el acceso directo a las estancias desde el exterior y en todas las provincias cuando se tratase de viviendas en bloque y la caja de la escalera estuviera cerrada. En los casos en que esto no fuera posible se permitía la reducción de la superficie de la estancia.<sup>115</sup>

La ley de 15 de julio de 1954 y reglamento por Decreto de 24 de junio de 1955 suponía un paso más en el intento de resolver el problema de la vivienda con la construcción de las viviendas denominadas de renta limitada<sup>116</sup> que cancelaba los regímenes de viviendas protegidas y bonificables. Se pretendía centralizar este proyecto en el Consejo Nacional de la Vivienda y racionalizarlo con la ejecución del I Plan Nacional de la Vivienda. En dicho plan había dos tipos de viviendas. Las primeras (con beneficios indirectos) no recibían ayuda directa del Estado salvo en lo concerniente a la preferencia a la hora de recibir suministros de materiales y en cuanto se fijaba el alquiler máximo en 1.500 pts. al mes. Gozaban también de exenciones y bonificaciones tributarias y del derecho de expropiación forzosa. El segundo grupo (con beneficios directos e indirectos) recibía prestaciones del Estado por medio de auxilios y se dividía en tres categorías: 1ª, de 80 a 200 metros cuadrados, 2ª de 65 a 150 metros cuadrados y 3ª de 50 a 80 metros cuadrados. Dichas viviendas recibían beneficios como exenciones y bonificaciones tributarias, anticipos sin interés reintegrables a largo plazo consistentes en un 35 % como máximo en las viviendas de 1ª, hasta el 50 % en las de segunda y hasta el 75 % en las de tercera. Las viviendas del segundo grupo eran enajenables aunque existía un límite al precio



de venta condicionado por el resultado de la capitalización al 5 % del alquiler bruto anual. Para algunos como París Eguilaz<sup>117</sup> esta fue la base del fracaso de la política de vivienda del primer franquismo en el sentido de que aquella, tendente a evitar los aumentos de los alquileres, sería la base de la escasez estructural de viviendas con el consiguiente problema para un número importante de familias imposibilitadas para encontrar una vivienda mínimamente digna.

Un problema básico que iba a tener la aplicación del plan era la ausencia de urbanización de los terrenos en los que se edificaba. Y es que los ayuntamientos no tenían aprobados los planes generales de urbanismo; en otros casos, tenían los planes pero no los terrenos puestos en condiciones de edificar. La política de expropiación, cuestión harto delicada para el régimen, influía decisivamente en este estado de cosas hasta el punto de que se daban casos de propietarios de terrenos que se beneficiaban de la revalorización de sus parcelas en el momento de la venta al incrementar desmesuradamente el valor de unos solares ya urbanizados, cuestión que iba “en contra de la más elemental norma de equidad y de justicia.”<sup>118</sup> En teoría, el importe del terreno (considerando las obras de urbanización y saneamiento) no podía exceder del 15 % del coste total de la construcción. Es decir, existía una valoración *a priori* del valor del solar. Sin embargo, al iniciarse el expediente de expropiación forzosa la valoración de los solares quedaba sometida a la consiguiente peritación de un tercero con la consiguiente capacidad para superar el límite teóricamente establecido.

### 17.3. El Plan Nacional de la Vivienda.

Aunque no responde estrictamente a las funciones de un plan nacional, el 20 de enero de 1943 la Dirección General de Arquitectura del Instituto Nacional de la Vivienda redactaba las líneas generales de un anteproyecto de plan general al que luego el Jefe del Estado daría su visto bueno. Este plan no se plasmó en ninguna disposición normativa con lo cual careció de fuerza vinculante y su duración se alargó durante el decenio 1944-54.<sup>119</sup> El objetivo formal, luego no cumplido, era en palabras de José Luis de Arrese, construir casas, “muchas casas, en las que ni habrá el rictus de la tragedia ni se sentirá la España rencorosa de las clases, y esas chozas y esas viviendas infrahumanas caerán bajo la ley de la tea y de la piqueta.”<sup>120</sup>

Este plan partía de la existencia de un déficit de viviendas por cuatro motivos. En primer lugar, consideraba la ausencia estructural y a continuación señalaba las carencias por insalubridad, crecimiento demográfico y por procesos migratorios. Como en otros ámbitos de la administración española una nota distintiva era la ausencia de datos estadísticos fiables sobre esta cuestión. La última referencia (fiable o no) en torno a la cuantificación de las viviendas era el Nomenclátor de 1930 elaborado por la Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística. A partir de éste y de los cálculos realizados por el propio I.N.V. se consideraba que existían (y por tanto se habían de sustituir) 39.266 viviendas insalubres y 62.000 fruto del

crecimiento demográfico. Para un plan de 10 años los mencionados déficits suponían uno total de 392.667 viviendas por insalubridad y 643.590 fruto del crecimiento demográfico. A esta cifra había que añadir 360.000 viviendas en función del déficit global existente a construir en los 10 años siguientes. En total se preveía la construcción de 1.396.257 viviendas de 1944 a 1954. Ambas cifras suponían las necesidades anuales. Pese a estos cálculos las viviendas construidas al amparo de la legislación proyectada por el I.N.V. no se plegó a las directrices del mal llamado plan nacional de la vivienda. Pese a estas predicciones Puerta García cifraba el déficit de viviendas en 2.388.304 (617.945 de déficit propiamente dicho y 1.770.359 de viviendas totalmente insalubres) estimándose que sólo en veinte años podría superarse esta situación (de comenzar el plan de construcción en 1952).<sup>121</sup>

De la cifra mencionada el I.N.V. partía del hecho de que únicamente podría proteger (financiar parcialmente) una cantidad no superior al 25 % considerando que el número de viviendas a construir previa ayuda oficial estaría entre las 619.064 con un mínimo cifrado en 259.064. Sin embargo, el número de viviendas construidas iba a ser mucho menor. Concretamente, en el período 1944-54 el número de viviendas protegidas ascendió a 71.948 y el de bonificables a 81.879. Aparte de estas cifras se construyeron 161.438 viviendas libres. En total, sumando las de protección oficial y las construidas exclusivamente por la iniciativa privada nos encontramos con 315.265 viviendas de las que sólo 153.827 recibieron algún tipo de ayuda oficial con lo cual se ponen claramente de manifiesto los logros efectivos del plan diseñado para este decenio.<sup>122</sup> Solamente cuando el problema del chabolismo avance de forma más significativa en la década de los cincuenta entre las autoridades surgirá la idea de llevar a cabo un plan más sólidamente estructurado. Los resultados del plan diseñado en 1943 daban como consecuencia la existencia de gran número de familias españolas en "viviendas inadecuadas, sin un mínimo de confort, espacio e higiene."<sup>123</sup>

La elaboración de un plan nacional de la vivienda había de tener por objetivo el dotar de una vivienda digna a los hogares españoles y evitar la proliferación de viviendas infrahumanas a lo largo y ancho del territorio nacional. Independientemente de sus logros, la necesidad de intervención del Estado en el tema de la vivienda era percibida como acuciante en función del bajo poder adquisitivo de la mayoría de los trabajadores españoles tal y como se expone en el proyecto inicial del I Plan Nacional de la Vivienda:

"...como la capacidad económica del productor o empleado medio español con relación a la construcción es ahora tan baja que no llega al 35 % de 1936, y aún entonces era bajísima, siempre quedaría un margen de un 45 a un 50 % aproximadamente como promedio, que no sería absorbido en modo alguno por el esfuerzo del individuo mientras no varíen las condiciones generales de la estructura de precios y salarios. La

alternativa, pues, que se presenta al Estado es ésta: o dejar elevarse sueldos y jornales con todas sus consecuencias, o primar las necesidades del individuo para poder así satisfacerlas y conservar el poder adquisitivo de salarios y sueldos.”<sup>124</sup>

Este nivel de vida se plasmó en el abrumador número de solicitudes de préstamos y ayudas a la construcción a raíz de la “ley de paro de 1948” lo cual provocó que, al no concederse todas las solicitudes, y siendo desbordado el ministerio de Trabajo se comenzaran obras que no se terminaron, se adquirieran terrenos y se redactaran proyectos que nunca se llevaron a cabo.<sup>125</sup> Era difícil ocultar que España era el país del continente europeo en el que, en términos relativos, más bajo era el porcentaje de ingresos consagrados a la vivienda.<sup>126</sup>

Ante esta realidad, desde el ministerio de Trabajo, se tenía que desarrollar un plan de la vivienda puesto que el problema que se planteaba era básicamente de continuidad. La cuestión no se iba a resolver con partidas aisladas y con políticas de parcheo sino con entregas de cantidades a fondo perdido y a bajo o nulo interés. Sin embargo, el problema no tenía como único fundamento el bajo poder adquisitivo del trabajador medio español o la inoperancia del Estado sino también la debilidad del sector industrial español y más concretamente el ligado a la producción de los *inputs* de la industria de la construcción. Particularmente nos referimos al sector siderometalúrgico, del cemento o la madera. En esta línea, las carencias se centraban también en materias primas o elementos necesarios para la producción como el cobre, el amianto, el aceite de linaza, los betunes, el caucho, la bauxita, los camiones, motores, excavadoras, trituradoras, correas-transportadoras, materiales de revestimiento y absorción, etc.<sup>127</sup>

En el origen del I Plan Nacional de la Vivienda estuvo el *Censo de edificios y viviendas de 1950*.<sup>128</sup> Tenemos un antecedente de éste en la *Estadística de entidades de población y sus edificaciones* ordenada el 17 de octubre de 1939. La Orden de Presidencia del Gobierno de 22 de febrero de 1949 creaba la Comisión Mixta de Coordinación y Asesoramiento para las Estadísticas de Edificación y Vivienda. El 4 de marzo de 1949 se constituía como tal y formaba una comisión que de marzo a junio de 1949 estructuraba el anteproyecto del censo. De septiembre a octubre de 1949 se llevó a cabo el ensayo en la provincia de Burgos.<sup>129</sup> Por Decreto de la Presidencia del Gobierno de 11 de diciembre de 1950<sup>130</sup> se dispuso que se realizase el censo nacional de edificaciones y viviendas referido al 31 de diciembre de ese año.

Los resultados del censo mostraban la existencia de 5.442.640 edificios de los cuales se destinaban a viviendas 4.599.050. Si atendemos a los principios formales que regían la vida del régimen habremos de llegar a la conclusión de que el objetivo de la política de vivienda era sanear la vida de la familia española. En este sentido el censo ponía de manifiesto las

dificultades, no de los que no eran capaces de adquirir una vivienda, sino de la calidad o infracalidad de las viviendas de aquellos privilegiados que lograban habitar en algo calificado "técnicamente" como vivienda. La relación entre el número de miembros de la familia y el número de habitaciones que ocupaban pone de manifiesto la inexistente acomodación del nivel de vida de estas familias a la política de vivienda del Estado franquista. Así, el grupo más abundante de familias de 3 miembros (286.590) ocupaba dos habitaciones. El grupo más numeroso de familias de 4 miembros ocupaba 4 habitaciones (284.780); sin embargo, al observar los núcleos familiares de 5 o más miembros comprobamos que el número de habitaciones seguía siendo el mismo, concretamente 4. En cualquiera de los casos, según el censo, el grupo de familias más importantes era el formado por 3 miembros ocupando, como ya se ha mencionado, dos habitaciones.

Pese a los resultados más o menos efectivos del plan, elaborado para el decenio de 1944-54, en diciembre de 1951 existía como mínimo un déficit de viviendas en torno a las 800.000, de las cuales alrededor del 75 % (600.000) eran necesarias para los sectores más desprotegidos.<sup>131</sup> Dicho de otra forma, era evidente que la iniciativa puramente estatal era "con mucho deficitaria" entre otros motivos por una muy insuficiente política a nivel de exenciones y reducciones tributarias y de facilidades para la expropiación de fincas.<sup>132</sup>

Antes de comenzar el I Plan Nacional, Álava cifraba su déficit de viviendas anualmente en 3.285 tan sólo en su capital, Vitoria. En la provincia eran necesarias 1.014 viviendas anuales para enjugar el déficit.<sup>133</sup> En el caso de Almería el déficit se cifraba 2.281 en 1948. En este caso la realidad de la miseria era palmaria tal y como transmitían los informes del consejo económico sindical provincial:

"En Almería el problema presenta verdaderos caracteres de miseria en su zona periférica constituida por cuevas que forman un dogal troglodítico que asfixia la ciudad. Las evacuaciones, son descompuestas por el aire y el sol, en el terraplén que las tierras procedentes de la excavación formaron al ser vertidas junto a la entrada, y enjambres de moscas pululan sobre los restos de pescados y basuras allí arrojados.

...crean un ambiente propicio a la insensibilidad moral del individuo y al desarrollo de enfermedades entre las que el tracoma y la tuberculosis ocupan lugar preferente.

Bandadas de chiquillos semidesnudos aumentan la impresión de primitivismo y puede decirse que la realidad excluye cualquier representación imaginativa, porque ésta no es posible."<sup>134</sup>

Años	Viviendas protegidas	Viviendas bonificables	Viviendas R.L. Grupo	Viviendas R.L. Grupo II	Viviendas Subvencionadas	Total de viviendas construidas acogidas a protección oficial	Total de viviendas de construcción libre	Total de viviendas
1951	12.898	17.760				30.658	26.342	57.000
1952	8.766	16.994				25.760	37.240	63.000
1953	9.711	15.971				25.682	41.318	67.000
1954	14.844	15.598				30.442	56.558	87.000
1955	27.537	18.184				45.721	66.279	112.000
1956	45.238	30.578	98	1.812		77.726	44.274	122.000

*\*Cuadro n° 112. Viviendas construidas en España (1951-56).<sup>125</sup>*

Con el Decreto de 1 de julio de 1955 el I.N.V. aprobó el Plan Nacional de la Vivienda con el objetivo de construir en cinco años un total de 550.000 viviendas (110.000 al año) En cuanto a la financiación se consignaron 5.000 millones de pts. anuales (durante 40 años) para el I.N.V. con el fin de destinarlos a los gastos que provocara la amortización y el servicio de intereses que se desarrollaría en las cinco anualidades de vigencia del plan. Esta cantidad sería independiente de los 2.000 millones de pts. que constituían hasta el momento la dotación presupuestaria del I.N.V. En cualquiera de los casos parece razonable dudar de las cifras oficiales que estipulaban el déficit de viviendas. El caso de Huelva puede ser un ejemplo significativo de las dudas que ofrecen los cálculos oficiales incluso dentro de la tendencia a hacer de ellos un soporte sólido para la planificación urbanística. En esta provincia se estimaba que eran necesarias en 1947 8.000 viviendas; sin embargo, se reconocía que dicha cifra podía multiplicarse extraoficialmente por dos (al menos) dada la conciencia de una insuficiente información y de la no inclusión en las cifras oficiales de las zonas mineras de la provincia donde muy probablemente el problema era todavía más acuciante.<sup>126</sup>

Clase de vivienda	Número de viviendas
Renta limitada. grupo I (auxilios económicos indirectos)	100.00
Renta limitada. grupo II (auxilios económicos directos)	
1ª categoría	75.000
2ª categoría (para funcionarios)	25.000
2ª categoría	100.000

3ª categoría	175.000
viviendas de tipo social	50.000
Viviendas de tipo social a ejecutar por el Instituto Nacional de Colonización y otros organismo	25.000
Total	550.000

*\*Cuadro n° 113. I Plan Nacional de la Vivienda.*

La gestación del plan indica que la ley pretendía tener un carácter eminentemente político mientras que su reglamento se había de limitar al desarrollo de la Ley de 15 de julio de 1954 sobre viviendas de renta limitada. Se pretendía dar preferencia a la iniciativa privada y hacer de la O. S. del Hogar un instrumento político al que se debía conceder un lugar destacado.<sup>127</sup>

Según el Decreto de 1 de julio de 1955 y la Orden de 12 de julio del mismo año se estableció la obligación para las empresas de más de 50 trabajadores de construir viviendas para el 20 % de los obreros a su cargo en un plazo de 5 años.<sup>128</sup> El I.N.V. aportaba el 50 % del presupuesto, incluido el valor de los solares, en concepto de anticipo y sin interés. El resto lo compensaba la empresa. Para ello, y en función de la obligación por parte de las entidades industriales, mercantiles, bancarias y de ahorro cuyo censo laboral fuera superior a 50 obreros, las Comisiones de Urbanismo, financiadas por el Instituto de Crédito para la Reconstrucción y por las Cajas de Ahorro (en mayor medida), urbanizaban las áreas contenidas en los planes de urbanismo desarrollados para, posteriormente, vender dichas fincas urbanizadas a los organismos y empresas obligados por ley a realizar dichas construcciones para dar vivienda al 20 % de su plantilla. En este planteamiento se inscribía la urbanización de áreas como la de Barcelona, Madrid, Tenerife, Valladolid o Granada a base de viviendas de renta limitada tal y como se desarrolló en los años cincuenta.<sup>129</sup>

La disposición mencionada encomendaba en su artículo 5º a la O. S. del Hogar la construcción de 35.000 viviendas anuales de las 110.000 que había de construir el plan. Según Villas, fue éste el que verdaderamente asentó las bases de la idea de planificación en el ámbito de la vivienda pública.<sup>130</sup> Sin embargo, este plan tampoco servirá para cubrir las necesidades de las capas sociales más bajas. Precisamente estos estratos sociales serán los que más difícil lo tengan para acceder a una de estas viviendas pese a que la construcción de viviendas de renta limitada del plan dividía las viviendas por categorías a las que se asignaba un determinado tipo de beneficios de cara a que estos fueran proporcionales al tipo de renta de los futuros propietarios. Pese a ello las viviendas construidas del grupo 1º fueron casi tres veces más que las del grupo 2º<sup>131</sup> y, por otro lado, las ventajas dadas a la iniciativa privada tuvieron como efecto que la mayoría de los beneficios del Estado se canalizaran hacia la edificación de

viviendas para clases más elevadas en ausencia de las de arrendamiento, entre otros motivos por la tendencia a la congelación de rentas que desincentiva este último sistema.

Un aspecto notablemente retrógrado y regresivo se plasmó en el Decreto de 13 de abril de 1956 por el que se regulaba la cuestión de la concesión de los préstamos y ayudas a la construcción. En la mencionada disposición se estipulaba que el 50 % de los préstamos concedidos por el Banco Hipotecario, el 20 % de los préstamos concedidos por las Cajas de Ahorro y el 40 % de los otorgados por el I.C.R.N fueran a parar a las viviendas del primer grupo, con lo cual se estaba favoreciendo a los que en mejor situación económica se encontraban.<sup>142</sup> Así, para el primer año del plan se proyectó la construcción de 24.453 viviendas del primer grupo. El coste por m<sup>2</sup> era de 1.480 pts. Teniendo en cuenta que medirían la gran mayoría más de 200 m<sup>2</sup>, el importe total de las mismas iba a estar en torno a los 10.000 millones de pts. o lo que sería lo mismo, el 80 % de los presupuestado para todo el plan.<sup>143</sup>

Pese a ello, los resultados del plan no fueron tan desastrosos como los del llevado a cabo hasta 1954. Ciertamente sólo se construyeron las mitad de las viviendas programadas, aunque en el período 1955-60 se ejecutaron 511.913 viviendas protegidas pero de una categoría superior a la previamente establecida, no satisfaciendo las necesidades efectivas de los sectores más desprotegidos.<sup>144</sup> No fueron los resultados en orden a la resolución del problema de la vivienda lo suficientemente exitosos puesto que el Instituto de Cultura Hispánica cifraba para 1 de enero de 1958 el déficit de viviendas en 1.067.452 continuando con la tendencia de lo que hasta entonces había sido la política de vivienda.<sup>145</sup>

### Notas

<sup>1</sup> Con la Ley de 12 de junio de 1911 promulgada a instancia del Instituto de Reformas Sociales se inició la legislación de casas baratas por medio de la potenciación de las cooperativas y su incentivación por medio de desgravaciones fiscales, subvenciones y préstamos hipotecarios. Según Tamames, igualmente ineficaces fueron las leyes de 1921, 1924 y 1925. Otra faceta fue la congelación de los arrendamientos urbanos por medio del Decreto Bugallal o Real Decreto de 21 de julio de 1920 ampliado por el Decreto de 29 de diciembre de 1931 y por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1946. Otro episodio fue la ley de 25 de junio de 1935 o ley Salmón que tenía por finalidad combatir el paro por medio de la exención fiscal a la construcción. Tamames, *Estructura económica...*, op. cit., pág. 251-2.

<sup>2</sup> Colomuelo, Agustín: *La política económica de la vivienda en España*. CSIC, Madrid, 1960, pág. 69.

<sup>3</sup> El gravísimo problema de la vivienda. Memoria leída con motivo de su ingreso en la Academia por Luis Bañares Manso, 28 de febrero de 1954. Academia de Ciencia Económico-financieras de Barcelona. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, n°206.

<sup>4</sup> El problema de la vivienda. Factores de solución. Enfoque de una posible acción sindical para resolverlo. Asesoría Nacional de Sindicatos (Francisco Norte Ramón), 29 de octubre de 1952. A.G.A., S.S.; I.D.D. 45.02, n°184, pág. 14.

<sup>5</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 176.

<sup>6</sup> Moya González, Luis: *Barrios de Promoción Oficial. Madrid, 1939-1976*. Madrid, 1983, pág. 32.

<sup>7</sup> Ídem, pag. 406.

<sup>8</sup> I Congreso Nacional de Trabajadores..., op. cit., pág. 46.

<sup>9</sup> Proyecto de viviendas..., 1955, A.P.G.; S.G.A.; Leg. 30, nº 2.

<sup>10</sup> Programa de necesidades de la provincia de Madrid. Presidencia del Gobierno. Secretaría General para la Ordenación Económico-Social, año 1950. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/132.

<sup>11</sup> Payne, El régimen..., op. cit., pág. 260.

<sup>12</sup> El desarrollo de esta institución se caracterizó por el desmenuzamiento de la normativa referente a su funcionamiento estatuto legal refundido no saldría adelante hasta el julio de 1952 y su reorganización, ante los deficientes resultados obtenidos, no se llevó a cabo hasta la promulgación del Decreto-Ley de 7 de julio de 1950. A.P.G.; S.G.A.; Leg. 4, nº 1.2.

<sup>13</sup> Decreto de Presidencia de 6 de agosto de 1941. Decreto redactado a mano por Carrero Blanco y publicado en el B.O.E., nº 218 de 6 de agosto de 1941. A.P.G.; S.M.S.; Leg. 30, nº 46.

<sup>14</sup> A la altura del año 1950 se puede afirmar que el 50 % de la viviendas existentes eran insalubres según el Censo de edificios y viviendas de 1950 publicado en 1953 por el I.N.E. (6.370.280 viviendas). De ellas sólo 20.592 se habían construido entre 1941 y 1945, y 31.940 entre 1946 y 1950. Tamames, Estructura económica..., op. cit., pág. 255.

<sup>15</sup> I Congreso Nacional de Trabajadores..., op. cit., pág. 46. Este fenómeno persistía con igual virulencia después del mencionado congreso. Este era el caso de la provincia de Granada donde en el verano de 1948 se sentía la proximidad de un fenómeno acuciante de paro masivo en el sector de la construcción por la elevación de los costes de la vivienda que generaba un alza en los precios de la misma y que motivaba su inasequible para los compradores modestos. Sorprendentemente el mercado se encontraba saturado de pisos caros rebasando la capacidad de los económicamente débiles. Vicesecretaría Provincial de Obras Sindicales de Granada (J. Espada Sánchez). Granada, 5 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.302-1, pág. 1.

<sup>16</sup> La historia de los alquileres de fincas urbanas comienza en España con el Auto Acordado de 1564 y el de 31 de julio de 1792 que los había elevado. Este tipo de regulación tuvo un punto de inflexión importante en la liberalización que realizar las Cortes de Cádiz con el Decreto de 31 de julio de 1813 y ratificado por la ley de 9 de abril de 1842. El "Decreto Bugallal rompió esta tendencia liberalizada en 1920 línea que continuó la dictadura de Primo de Rivera con el Decreto Ley de 10 de octubre de 1924 y el Decreto de 30 de octubre de 1925. Cotorruelo, La política económica..., op. cit., pág. 69.

<sup>17</sup> Fonseca, José: El problema de la vivienda, ministerio de Trabajo, Madrid, 1945, pág. 9

<sup>18</sup> Informes sobre paro de 1945 por provincias y memorias de la O. S. Lucha contra el Paro de 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.322-4. Sobre este cuestión el consejo sindical de Almería llamaba la atención sobre el siguiente hecho:

"...no debe olvidarse que el 70 % de los españoles no pueden pagar las viviendas que se les ofrecen, pues los ingresos de la totalidad de las familia modesta apenas alcanzan para satisfacer sus necesidades primarias de alimento y vestido.

Basta observar que el coste medio de una casa modesta es de 45.000 pts. y dándola en alquiler a 100 pts. mensuales, -excesivo para la mayoría de los pueblos de esta provincia- no se alcanzará a cubrir el interés del capital ni los gastos de conservación.

Sería preciso aportar a fondo perdido unas 20.000 pts. por vivienda para conseguir un alquiler asequible a sus usuarios." II Consejo Económico Sindical de Almería, mayo de 1954. Ponencia VII: Vivienda. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 45.02, 1.

<sup>19</sup> A.P.G.; J.E.; Leg. 59, nº 3.1.

<sup>20</sup> Ídem, nº 49.

<sup>21</sup> Necesidades de urgente solución. Jefatura Provincial del Sindicato del Metal de Jaén, 13 de septiembre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 481.

<sup>22</sup> A.P.G.; J.E.; Leg. 59, nº 47.

<sup>23</sup> Bosch, Asistencia médico-social..., op. cit., 1948, pág. 7.

<sup>24</sup> Podemos encontrar casos de este tipo de situaciones reconocidas y descritas por los propios organismos sindicales. "Informes recibidos dan cuenta de que por el Jefe y el Secretario del Sindicato Provincial de la Construcción de Oviedo, se malversan los cupos de materiales, a los que se da un destino que redunda en el propio beneficio de dichas jerarquías." Correspondencia de la Delegación Nacional de Información e Investigación 18 de abril de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/166-89-5ª.

<sup>25</sup> "...con harta frecuencia se presentan en la práctica, el adjudicatario remata la subasta en un precio manifestamente ínfimo y muy inferior al que realmente costaría la obra hecha con un mínimo de



condiciones en cuanto a calidad y cuantía de las materias primas y demás elementos necesarios. La necesidad de no perder y el afán de ganar lo más posible conducen casi obligatoriamente al contratista a especular con la calidad de los materiales, la dosificación de los morteros, la cuantía del acero, la clase de las maderas, etc. El resultado es una obra de pésima calidad que desmerece rápidamente, apenas puesta en servicio (goteras, humedades, desprendimientos de revocos, grietas en muros, etc., etc.) El problema de la vivienda. Factores de solución. Enfoque de una posible acción sindical para resolverlos. Asesoría Nacional de Sindicatos (Francisco Notte Ramió), 29 de octubre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 45.02, r/184, pág. 34.

<sup>26</sup> "En el grupo de viviendas en Salas de los Infantes (Plan 1954-55) no se han solicitado más que siete de las cuarenta y seis viviendas construidas, estimando como causa el que éstas viviendas no reúnen las condiciones exigidas por los obreros.

En el Grupo construido en Aranda de Duero (Plan 1954-55) han quedado sin solicitar las viviendas de renta mínima, categoría C, estimando esta Jefatura que la causa principal es el número reducido de habitaciones de que consta cada vivienda y la poca superficie de las mismas." Partes reservados de la C.N.S. Burgos, noviembre de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.507.

<sup>27</sup> El mismo tipo de problemas se palpaba en el Grupo Padre Jesús Nazareno en Priego, en el Grupo José Antonio en Fernán Núñez, el Grupo N.º 8.º del Valle en Santaella, el Grupo José Luis Arrese en Puente Genil, el Grupo Generalísimo Franco en Córdoba capital, el grupo Nuestra Señora del Pilar en Posadas y el grupo Nuestra S.ª de la Sierra en Cabra. Obra Sindical del Hogar. Inspección de grupos de viviendas protegidas en Córdoba, 1953-1961. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.750.

<sup>28</sup> Este sector se veía afectado por el hecho de que la producción de cemento sólo se vio incrementada en el quinquenio de 1951-55 y por el control férreo de la Administración sobre los precios hasta el año 1960 de forma básica mediante la Delegación del Gobierno en la Industria del Cemento (DGIC) creada por Decreto de 31 de diciembre de 1941 y dependiente del ministerio de Industria. Este organismo fijaba precios, cupos de entrega por parte de las fábricas así como cupos de adjudicación a las industrias consumidoras. Tamames, Estructura económica..., op. cit., pág. 240-1.

<sup>29</sup> "...Señalan como grave el hecho que supone la poca producción de hierro y más aún que llegando los cupos con gran retraso y en cantidad insignificante se obtenga mercancía suficiente en el mercado negro...El sindicato de la construcción indica que prácticamente tiene paralizadas todas las obras en Santander en espera de cemento, hierro, y cinc...el cemento se paga en el mercado negro a unas ocho pts. el saco por encima el precio oficial..." Notas sacadas del informe verbal dado al Excmo. Sr. ministro Secretario General del Movimiento por el D.N.S. sobre su visita a Santander (26 y 27 de septiembre de 1952). 2 de octubre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/190. Testimonio prácticamente idéntico se encuentra en los informes reservados de las C.N.S.: "en la construcción se reciben muy irregularmente los cupos oficiales de cemento, forzando a los constructores a adquirir este material en el mercado negro y a precios muy elevados, retrayendo aún más la iniciativa privada en esta actividad..." Partes reservados de la C.N.S. de Valladolid, abril de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/214.

<sup>30</sup> Sobre el mercado negro en general afirma Rídruejo que era imposible su desarrollo "sin que mediase en ello la implicación de la propia administración pública. Se trataba ahora de los cupos de materias, sin los cuales no había producción posible, de las autorizaciones industriales y de los permisos de importación. Cualquiera de estas concesiones ponía la fortuna, con seguridad absoluta, en manos del beneficiario. ¿Y habían de quedar como espectadores, envidiosos o escandalizados, los que tenían en sus manos las llaves que abrían y cerraban semejantes fuentes de abundancia?...La implicación burocrática se produjo por todos los modos posibles. Para el gran negocio aparecieron militares de elevada graduación y personalidades de influencia política importante en los consejos de administración. Para el negocio medio, bastaba el soborno discreto, en forma de asociación confidencial, o indiscreto, en forma de pago al contado. Rídruejo, Escrito en España..., op. cit., pág. 131.

<sup>31</sup> II Consejo Económico Sindical de Almería, mayo de 1954. Ponencia VII: Vivienda. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 45.02, 1.

<sup>32</sup> En los informes reservados de la C.N.S. de Barcelona se alude a las dificultades para luchar contra el robo de hilo de cobre y a la relación de éstos con un amplio número de empresarios barceloneses por la cual la C.N.S. había evitado la detención de los mismos por su complicidad con la compra-venta de partidas robadas o provenientes del mercado negro. Informes reservados de la C.N.S. de Barcelona, enero de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/212.

<sup>33</sup> El subrayado es nuestro. Partes reservados de la C.N.S. de Vizcaya, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/214.

<sup>34</sup> Partes reservados de la C.N.S. de Vizcaya, enero de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/214.

- <sup>35</sup> Cotorruelo, Agustín: La política económica de la vivienda en España. CSIC, Madrid, 1960, pág. 118-9.
- <sup>36</sup> Fonseca, El problema de la vivienda..., op. cit., pág. 10-11.
- <sup>37</sup> Fonseca, El problema de la vivienda..., op. cit., pág. 14.
- <sup>38</sup> "...existiendo probadas conexiones entre empresas del ramo, que controlan el 68,5 % del capital, el 87 % de la capacidad y el 84 % de la producción, y cooperando al mismo fin, la Agrupación de Fabricantes de Cemento, que comprende todas las fábricas de España y vela por la defensa de sus intereses." Cotorruelo, La política económica..., op. cit., pág. 121.
- <sup>39</sup> En 1954 la producción *per cápita* de cemento en Alemania se situaba en los 229 kg., en el Reino Unido en 183 kg., en Francia en 182, en Italia 148, en Bélgica 320, en Suiza 286, en Dinamarca 241, etc. III Pleno del Consejo Económico Sindical de Burgos, 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.567.
- <sup>40</sup> III Pleno del Consejo Económico Sindical de Burgos, 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4.567.
- <sup>41</sup> El desequilibrio entre precios y salario. Sus causas, antecedentes y remedios. Consejo Económico Sindical. Madrid, septiembre de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/33, pág. 43-44.
- <sup>42</sup> Cotorruelo, La política económica..., op. cit., pág. 128.
- <sup>43</sup> Vicesecretaría Provincial de Obras Sindicales de Santander, 21 de junio de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.142-1.
- <sup>44</sup> Resumía Antonio Labrada Chércolas, miembro del Consejo Económico Sindical de Cuenca, la realidad de las viviendas construidas o patrocinadas por la D.N.S.: "...pero nosotros hacemos jaulas frías y sin comodidad en que lo fundamental es distribuir un cuarto de familia con 14 metros cuadrados y el resto tres dormitorios, así proyectamos los arquitectos para no sobrepasar un número determinado de metros cuadrados." Consejo Económico Sindical de Cuenca, diciembre de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 45.02, 1.
- <sup>45</sup> Cotorruelo, Agustín: La política económica de la vivienda en España. CSIC, Madrid, 1960, pág. 171.
- <sup>46</sup> El problema de la vivienda. Factores de solución. Enfoque de una posible acción sindical para resolverlos. Asesoría Nacional de Sindicatos (Francisco Norte Ramón), 29 de octubre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 45.02, r/184, pág. 67.
- <sup>47</sup> Informe de la Delegación Provincial de Sindicatos de Madrid sobre las viviendas protegidas entregadas, terminadas o en construcción, 25 de enero de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/185.
- <sup>48</sup> El problema de la vivienda. Factores de solución. Enfoque de una posible acción sindical para resolverlos. Asesoría Nacional de Sindicatos (Francisco Norte Ramón), 29 de octubre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 45.02, r/184, pág. 20.
- <sup>49</sup> El Decreto de 6 de diciembre de 1951 concedía una prórroga de dos años más para la construcción de sus viviendas a los empresarios acogidos al Decreto-Ley de 19 de noviembre de 1948 que autorizaba a la Junta Nacional de Paro a conceder una prórroga de tres años para la terminación de los edificios acogidos a la ley de viviendas protegidas de 25 de noviembre de 1944. A.P.G.; S.G.A.; Leg. 2; nº 1.
- <sup>50</sup> "...las inversiones de capital privado, orientándolo hacia la inversión más rentable, evidencia que se palpa hoy, pues los constructores particulares (capitalistas, inversionistas, empresas inmobiliarias, etc.) procuran construir únicamente viviendas de renta lo más alta posible en detrimento de las necesidades ...de los estamentos sociales económicamente incapacitados por el abono de tales rentas." El problema de la vivienda. Factores de solución. Enfoque de una posible acción sindical para resolverlos. Asesoría Nacional de Sindicatos (Francisco Norte Ramón), 29 de octubre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 45.02, r/184, pág. 7.
- <sup>51</sup> Tamames, Estructura económica..., op. cit., pág. 249.
- <sup>52</sup> Ubierna, José Antonio: El problema de la vivienda en su aspecto legal. Madrid, 1945, pág. 62. También en Vicesecretaría de Obras Sindicales, Hogar. Contestaciones al cuestionario para la reunión de delegados provinciales de sindicatos, Barcelona, marzo de 1949. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 5.384.
- <sup>53</sup> Bando Casado, Honorio Carlos: La protección pública de la vivienda en España. Universidad Complutense, Madrid, 1962, pág. 264.
- <sup>54</sup> El problema de la vivienda. Factores de solución. Enfoque de una posible acción sindical para resolverlos. Asesoría Nacional de Sindicatos (Francisco Norte Ramón), 29 de octubre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 45.02, r/184, pág. 49.
- <sup>55</sup> Villar Ezeurra, José Luis: La protección pública a la vivienda. Montecorvo, Madrid, 1981, pág. 39.
- <sup>56</sup> Bando, La protección pública..., op. cit., pág. 202.
- <sup>57</sup> Las Obras sindicales, 1942. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 72.08, S L-2 en topo 36/39.
- <sup>58</sup> Villar Ezeurra, La protección pública..., op. cit., pág. 144.
- <sup>59</sup> Construye tu casa. O. S. del Hogar y de Arquitectura. Madrid, 1945.
- <sup>60</sup> Martín Arbuez, Adolfo y Roca Cabanellas, Juan: El Derecho a la vivienda. Centro de Estudios Sindicales, Madrid, 1958, pág. 16.

- <sup>61</sup> Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, núm. 105 en Bando, La protección pública..., op. cit., pág. 260. Moya ofrece una cifra todavía inferior.
- <sup>62</sup> Moya, Baños de Promoción..., op. cit.
- <sup>63</sup> Fernández Fernández, José María: Realizaciones de la O. S. del Hogar en construcción industrializada. Madrid, 1976.
- <sup>64</sup> Informes reservados de la C.N.S. de Ciudad Real, diciembre de 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/212.
- <sup>65</sup> Puntos reservados de la Delegación Sindical Provincial de Vizcaya, abril-mayo de 1955. En los informes de noviembre-diciembre de 1955 y enero de 1956 se repite la alusión al mismo problema. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 4853.
- <sup>66</sup> Avanzada, núm. 17, febrero de 1955.
- <sup>67</sup> Avilés, Algunos efectos económicos..., op. cit.
- <sup>68</sup> Estudio sobre la situación de la O. S. del Hogar, 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 5.240.
- <sup>69</sup> Informes reservados de la Delegación Provincial de Logroño, febrero de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 485.
- <sup>70</sup> Delegación Sindical Provincial de Jaén, 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 481.
- <sup>71</sup> Esta tendencia a la búsqueda de actos que fomentaran el prestigio del régimen se patentizaba también en las entregas de los grupos de viviendas construidas; entregas que se procuraba coincidiesen con fechas especialmente significativas como el 18 de julio: "Ningún acto mejor para solemnizar esta fecha gloriosa del 18 de julio que entregar viviendas a gente humilde para que viva mejor. La organización sindical a través de su O. S. del Hogar, ha querido que en el día de hoy en 36 provincias -en muchas de ellas quizás a esta misma hora- nuestros Delegados Provinciales entreguen 5.014 viviendas, que corresponden a 91 grupos y totalizan unos 300 millones de pts. En Madrid, como una tercera fase del grupo Nuestra Señora del Pilar y una primera fase del Nuestra Señora del Buen Suceso, se entregarán 300 títulos de beneficiarios." Referencia a los actos del 18 de julio, 18 de julio de 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/222.
- <sup>72</sup> Cuadernos de arquitectura y urbanismo, núm. 105, pág. 40 en Bando, La protección pública..., op. cit., pág. 260.
- <sup>73</sup> Normas y recomendaciones sobre el desarrollo del nuevo plan de viviendas, febrero de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/339.
- <sup>74</sup> Martín Arbuez, El Derecho a la vivienda..., op. cit.
- <sup>75</sup> Villar Ezcurra, La protección pública a la vivienda..., op. cit., pág. 147.
- <sup>76</sup> B.O.E. del 5 de enero de 1940.
- <sup>77</sup> La Junta Nacional había sido creada por el Decreto de 7 de julio de 1934.
- <sup>78</sup> Créditos concedidos para combatir el denominado paro obrero. Junta Nacional del Paro; ministerio de Trabajo. Madrid, 5 de septiembre de 1957. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 1.16, 8.
- <sup>79</sup> En la sesión plenaria de la Junta interministerial de Paro de 23 de diciembre de 1947 se discutió el escrito presentado por Solís Ruiz, Vicesecretario Nacional de Ordenación Social y José Redondo, Jefe de la O. S. de Lucha contra el Paro, sobre el deseo del gobierno de restringir los créditos oficiales o no a la construcción así como sobre la necesidad de elevar la consignación ordinaria a los 100 millones de pts. Comisaria Nacional del Paro, 3 de enero de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.207-1.
- <sup>80</sup> La comisaria nacional del paro se creó por Decreto de 28 de mayo de 1945.
- <sup>81</sup> Historia de una década: 1941-1951..., op. cit.
- <sup>82</sup> B.O.E. del 20, Aranzadi 434. El reglamento para su aplicación se aprobó el 8 de septiembre de 1939 (B.O.E. 2 de octubre, Aranzadi 1.332).
- <sup>83</sup> Consejo Económico Sindical de Huesca, 31 de junio de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, r/261, nº 62.
- <sup>84</sup> Martín Arbuez, El Derecho a la vivienda..., op. cit., pág. 6.
- <sup>85</sup> Villar Ezcurra, La protección pública..., op. cit., pág. 158.
- <sup>86</sup> A esto Norte añadía: "En cuanto al I.C.R.N., las rentas más bajas que ha conseguido oscilan alrededor del doble de la indicada y ello también en muy contados casos, pues en la casi generalidad no bajan del triple y llegan a más del quintuple, a pesar de que las vigentes disposiciones autorizan a conceder, no sólo préstamos hasta el 60 % del coste de las viviendas, sino bonificaciones hasta un 12 % a fondo perdido." El problema de la vivienda. Factores de solución. Enfoque de una posible acción sindical para resolverlo. Asesoría Nacional de Sindicatos (Francisco Norte Ramón), 29 de octubre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 45.02, r/184, pág. 19-20.
- <sup>87</sup> El problema de la vivienda. Factores de solución. Enfoque de una posible acción sindical para resolverlos. Asesoría Nacional de Sindicatos (Francisco Norte Ramón), 29 de octubre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 45.02, r/184, pág. 31.

<sup>88</sup> “...lo que hizo la legislación de viviendas de clase media consistió en capitalizar las ideas y los resultados obtenidos por la Ley Salomón presentándolos como realizaciones del nuevo sistema, y todo ello, además bajo el protagonismo de la Junta Nacional del Paro que vendrá a sumarse a todo ese conjunto de organismos y entidades...que vaciaron de medios financieros y jurídicos al I.N.V.” Villar Ezcurra, *La protección...*, op. cit., pág. 158.

<sup>89</sup> Enmienda al Proyecto de Ley sobre reducción de contribuciones e impuestos en la construcción de casas baratas para la denominada clase media, presentado por el Jefe Nacional de la O. S. Lucha contra el Paro, 25 de enero de 1944. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.387-3, pág. 1.

<sup>90</sup> Enmienda al Proyecto de Ley sobre reducción de contribuciones e impuestos en la construcción de casas baratas para la denominada clase media, presentado por el Jefe Nacional de la O. S. Lucha contra el Paro, 25 de enero de 1944. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.387-3, pág. 3.

<sup>91</sup> B.O.E. del 27, Aranzadi 1.625.

<sup>92</sup> Cotoruelo, *La política económica...*, op. cit., pág. 171.

<sup>93</sup> Junta Interministerial del paro. Comisaría Nacional. Memoria, ministerio de Trabajo, 1947, pág. 8.

<sup>94</sup> B.O.E. del 13 de diciembre, Aranzadi 1.489.

<sup>95</sup> El gravísimo problema de la vivienda. Memoria leída con motivo de su ingreso en la Academia por Luis Bañares Manso, 28 de febrero de 1954. Academia de Ciencias Económico-financieras de Barcelona. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/206.

<sup>96</sup> Informes reservados de la C.N.S. de Barcelona, abril de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, R/212.

<sup>97</sup> Tamames, *Estructura económica...*, op. cit., pág. 254.

<sup>98</sup> El gravísimo problema de la vivienda. Memoria leída con motivo de su ingreso en la Academia por Luis Bañares Manso, 28 de febrero de 1954. Academia de Ciencias Económico-Financieras de Barcelona. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/206.

<sup>99</sup> Viviendas bonificables. ministerio de Trabajo (Comisaría Nacional del Paro). Madrid, 26 de septiembre de 1957. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/331.

<sup>100</sup> Viviendas bonificables. ministerio de Trabajo (Comisaría Nacional del Paro). Madrid, 26 de septiembre de 1957. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/331.

<sup>101</sup> Viviendas bonificables, 1956. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/331.

<sup>102</sup> Villar Ezcurra, *La protección...*, op. cit., pág. 183-4.

<sup>103</sup> El problema de la vivienda. Factores de solución. Enfoque de una posible acción sindical para resolverlo. Asesoría Nacional de Sindicatos (Francisco Norte Ramón), 29 de octubre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 45.02, r/184, pág. 17.

<sup>104</sup> Junta Interministerial de Paro, 28 de diciembre de 1945. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.125-1.

<sup>105</sup> Correspondencia de Redondo Gómez, (Jefe Nacional de O. S. Lucha contra el Paro) a Girón de Velasco, 28 septiembre de 1946. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.125-1.

<sup>106</sup> En la sesión plenaria de la Junta Interministerial del Paro de 23 de diciembre de 1943 se discutió el escrito presentado por Solís Ruiz (Vicesecretario Nacional de Ordenación Social) y José Redondo Gómez (Jefe Nacional de la O. S. Lucha contra el Paro) para discutir el deseo del gobierno de restringir los créditos (oficiales o privados) con el objetivo de revalorizar la moneda nacional con la consiguiente repercusión negativa en el nivel de construcción de viviendas y en el nivel de paro dado que desde ese mismo momento “las disposiciones en vigor, encaminadas a facilitar los créditos para dichos inmuebles quedaban virtualmente paralizadas, y todo ello unido a la alarmante falta de materiales, produciría, en un plazo inmediato, un considerable número de obreros en paro.” Oficio de Rafael González Gallego, Comisario Nacional del Paro, 3 de enero de 1948. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.207-1.

<sup>107</sup> Correspondencia del Jefe de la Secretaría Política (José López Ruiz) a la D.N.S. sobre proyecto de Decreto-Ley del ministerio de Trabajo sobre construcción de 10.000 viviendas de tipo social, 11 de mayo de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/339.

<sup>108</sup> B.O.E. del 11 de noviembre de 1945.

<sup>109</sup> Cotoruelo, *La política económica...*, op. cit., pág. 159.

<sup>110</sup> Plan de construcción de 500.000 viviendas protegidas. Delegación Nacional de Sindicatos. Madrid, 11 de mayo de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/339.

<sup>111</sup> Plan de construcción de 25.150 viviendas protegidas correspondiente al año 1954 en cumplimiento del Decreto-Ley de 29 de mayo de 1954. O. S. del Hogar y Arquitectura. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/339.

<sup>112</sup> Plan Sindical de la Vivienda año 1955 (Decreto Ley de 29 de mayo de 1954 por el que se encomendaba a la O. S. Hogar en colaboración con el I.N.V. la construcción de 20.000 viviendas anuales para productores de la organización sindical) . Avance del Plan para la construcción de 35.000 viviendas protegidas, 29 de marzo de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/339.

- <sup>112</sup> Informe sobre el desarrollo del Plan Sindical de la Vivienda de 1954-55. Madrid, 21 de septiembre de 1955. O. S. del Hogar y Arquitectura. A.G.A.; S.S.; I.D.D.; 90.01, R/ 339.
- <sup>113</sup> Plan Sindical de la Vivienda. Plan de Construcción de 45.650 viviendas protegidas correspondientes al año 1955-56. Carta de Enrique Salgado Torres, Subjefe Nacional de O. S. Hogar a Solis, 23 de septiembre de 1955. Informe de 21 de septiembre de 1955. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01 R/ 339.
- <sup>114</sup> Ordenanzas del I.N.V. en relación a las viviendas a que se refiere el citado Plan Nacional. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.01, R/ 339.
- <sup>115</sup> Nadal Oller, Narciso: Viviendas de renta limitada. Bosch, Barcelona, 1957.
- <sup>116</sup> Paris, Sentido y límites..., op. cit., pág. 30.
- <sup>117</sup> I Consejo Económico Sindical de Guipúzcoa. San Sebastián, 1956. Ponencia 15: Viviendas. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 45.02, 3.
- <sup>118</sup> Villar Ezcurra, La protección pública..., op. cit., pag. 185-6.
- <sup>119</sup> Conferencia de José Luis de Arrese (ministro Secretario General del Movimiento) pronunciada en el curso provincial de Jefes de Artesanía, del 8 al 12 de julio de 1942 en Madrid. A.G.A.; S.S. I.D.D. 60.1, 15.777.
- <sup>120</sup> Puerta García, Antonio: El problema de la vivienda en España. De Economía, nº 19-20, julio-octubre de 1952, pág. 415.
- <sup>121</sup> Secretaría General Técnica. ministerio de la Vivienda. En Moya González, Luis: Barrios de Promoción Oficial. Madrid, 1959-1976. Madrid, 1983, pág. 33.
- <sup>122</sup> El problema de la vivienda. Factores de solución. Enfoque de una posible acción sindical para resolverlo. Asesoría Nacional de Sindicatos (Francisco Norte Ramón), 29 de octubre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 45.02, r/184, pág. 13.
- <sup>123</sup> Estudios para un Plan Nacional de la Vivienda. Presidencia del Gobierno. Secretaría General para la Ordenación Económico-Social (S.O.E.S.), 1954.
- <sup>124</sup> Idem, pág. 54.
- <sup>125</sup> Royo Martínez, Miguel: El problema de la vivienda. Sevilla, 1953, pág. 14.
- <sup>126</sup> En este último aspecto la muy baja calidad de las viviendas construidas para sectores sociales medios o de baja renta hacen que la ausencia de estas materias no fuese especialmente significativa. Con respecto a los materiales de revestimiento y absorción el anteproyecto de afirmaba que su carencia era irrelevante por su escaso uso en la fabricación de dichos grupos de viviendas: "...por fortuna de poco empleo en viviendas económicas." Estudios para un Plan Nacional de la Vivienda. Presidencia del Gobierno. Secretaría General para la Ordenación Económico-Social (S.O.E.S.), 1954, pág. 69.
- <sup>127</sup> Censo de edificios y viviendas de 1950. I.N.E., 1953. 2 vol.
- <sup>128</sup> Se publicó el estudio con el título de Censo de edificios y viviendas de la ciudad de Burgos. Presidencia del Gobierno, I.N.E., Madrid, 1950.
- <sup>129</sup> B.O.E. del día 15.
- <sup>130</sup> El problema de la vivienda. Factores de solución. Enfoque de una posible acción sindical para resolverlo. Asesoría Nacional de Sindicatos (Francisco Norte Ramón), 29 de octubre de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 45.02, r/184, pág. 2-3.
- <sup>131</sup> Idem, pag. 10.
- <sup>132</sup> Consejo Económico Sindical de Álava. Ponencia: El problema de la vivienda en Álava, 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 88, r/3841.
- <sup>133</sup> II Consejo Económico Sindical de Almería. mayo de 1954. Ponencia VII: Vivienda. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 45.02, 1.
- <sup>134</sup> I.N.E. y Comisión de la Viviendas en su III Plan. En Tamames, Ramón: Estructura económica de España. Tomo II. Barcelona. Guadiana, 1977, pág. 257. De cualquier manera tenemos que manifestar ciertas dudas sobre los datos oficiales teniendo en cuenta la tendencia a inflar aquellos que pudieran dar la impresión de que el ejecutivo estaba realizando una política de vivienda brillante que, como otros aspectos de la política social franquista, podían constituir una justificación para la permanencia del propio régimen. En cualquier caso, en torno al problema de la vivienda se palpaba la ausencia de estadísticas veraces: "...tengo el honor de poner en su superior conocimiento que no es posible a este Instituto, remitir el número de viviendas terminadas durante el pasado ejercicio 1953-54, ya que no había sido establecido un servicio de Estadística..." Consejo Nacional de la Vivienda, 16 de abril de 1956. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, 209.
- <sup>135</sup> Informes sobre paro de 1945 por provincias y memorias de la O. S. de Lucha contra el Paro de 1947. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.304-2, pág. 19.

<sup>137</sup> Consignas dadas al Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de la Vivienda por el ministerio de Trabajo, febrero de 1955. A.G.A., S.S.; I.D.D. 90.01, R/ 339.

<sup>138</sup> Con anterioridad, la Ley de 30 de diciembre de 1943 había dispuesto el cese del gravamen sobre los beneficios extraordinarios de las empresas y la constitución por las mismas de una reserva especial. El Gobierno establecía el destino del 20 % de dicha reserva, dedicado a fines sociales de mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida de los productores. Para dicho fin el Decreto de 2 de marzo de 1944 ordenó que las empresas que tuvieran centros de trabajo establecidos con carácter permanente dedicaran ese 20 % a fines de carácter social y entre ellos, fundamentalmente, a la construcción de viviendas para su personal, siendo estas protegidas por el I.N.V. También el Decreto de 13 de abril de 1945 les autorizaba para invertir estas reservas en títulos emitidos por entidades constructoras de viviendas protegidas. Esta política fue sustituida por el Decreto de 1 de julio de 1955. Aibarrán Olivera, Antonio Jorge: Empresas obligadas a construir. Afrodísio Aguado. Madrid, 1957.

<sup>139</sup> Proyecto de viviendas de renta limitada de 27 de julio de 1955. A.P.G.; S.G.A.; Leg. 30, nº 2.

<sup>140</sup> Villar, La protección pública..., op. cit., pág. 208.

<sup>141</sup> "Únicamente mediante las viviendas subvencionadas -que funcionarán como grupo normativo complementario- podrá paliarse esta desproporción haciendo que la totalidad del sistema se incline en sentido contrario." Villar, La protección pública..., op. cit., pág. 273.

<sup>142</sup> Coterruelo, La política económica..., op. cit., pág. 158-9.

<sup>143</sup> Ídem, pág. 173.

<sup>144</sup> Moya, Barrios de Promoción..., op. cit., pág. 37.

<sup>145</sup> Tamames, Estructura económica..., op. cit., pág. 256.

## **Capítulo 18. El significado y función de las Universidades Laborales.**

No es objetivo de esta tesis ahondar en la realidad de la formación laboral en el período 1941-1957 en un sentido general. Únicamente nos centraremos en las universidades laborales por cuanto constituyeron una creación a las que Girón dio un significado muy especial. Sin embargo, aunque no pretendemos profundizar en la mencionada cuestión, sí habremos de hacer una breve referencia al estado caótico en que se encontraba el mundo de la formación profesional al ponerse en funcionamiento las universidades laborales.

A finales de los años cincuenta encontramos tres parcelas claramente diferenciadas. Por una lado, encontramos la Formación Profesional Industrial regulada por Ley de 20 de julio de 1955 y dependiente del ministerio de Educación, que a través de la Junta Central de Formación Profesional Industrial y dirigida por un Director General de Enseñanza Laboral desarrollaba este tipo de enseñanzas. En este marco se reconocían centros no oficiales de formación profesional industrial sostenidos, por ejemplo, por montepíos o mutualidades de previsión. Al amparo de dicha legislación se reconocía a las universidades laborales como Centros Superiores de Formación Profesional.<sup>1</sup> No se puede olvidar que pese a la idea del ministerio de Trabajo de monopolizar la enseñanza profesional, el ministerio de educación tenía entre sus atribuciones la aprobación de los planes de enseñanza elaborados por el Consejo Técnico de las Universidades Laborales, la capacidad para señalar los requisitos exigibles para el reconocimiento de este tipo de centros, la inspección del personal docente, la determinación de las titulaciones académicas del profesorado y la convalidación de los estudios, lo cual continuaba dando al ministro del ramo una importante capacidad de control sobre los deseos del ministerio de Trabajo.<sup>2</sup>

En segundo lugar, existía la Enseñanza Media y Profesional (o Enseñanza Laboral) regulada por la Ley de 16 de julio de 1949 a través también del ministerio de Educación y bajo la dependencia de la Dirección General de Enseñanza Laboral. Se impartía en centros de enseñanza media y profesional (también denominados institutos laborales) con especialidades agrícola-ganaderos, industriales, mineras, marítimas, etc. Este bachillerato laboral se impartía durante cinco cursos. Su organización y funcionamiento dependía del Patronato Nacional de Enseñanza Media y Profesional.

En tercer lugar, nos encontramos con la Enseñanza Media o Bachillerato pre-universitario dependiente de la Dirección General de Enseñanzas Medias del ministerio de Educación y regulado por la Ley de 26 de febrero de 1953. Sus enseñanzas se desarrollaban en los institutos nacionales de enseñanza media.

En este contexto Girón comenzó a desarrollar su "gran revolución" pese a que desde el ministerio de Educación de Jesús Rubio (desde febrero de 1956) se calificaba como de improcedente e impolítica la tendencia de Girón de monopolizar atribuciones en relación a la formación profesional.<sup>3</sup> Hay que plantearse el hecho de que el auge de las universidades laborales, independientemente de consideraciones políticas, tenía como base el impresionante potencial económico de las mutualidades, principales financiadores de dicho proyecto. Desde este punto de vista, el ministerio de Educación había aceptado como un mal menor el nacimiento de una institución que percibía como clasista en la medida en que el acceso a dichos centros daba preferencia a los hijos de mutualistas con olvido, por ejemplo, de la inmensa mayoría de los trabajadores del sector agrícola y ganadero.

Las reticencias hacia estas instituciones no provenían únicamente del ministerio de Educación. La organización sindical, con un número significativo de centros de enseñanza profesional,<sup>4</sup> veía con muy malos ojos la entrada de Girón en el ámbito de la formación profesional en la medida en que, reproduciendo sus argumentos, se veía en estas instituciones un elemento de desorientación acerca del contenido y concepto de la universidad clásica, aparte de que se consideraba que existía una total desorientación en torno al contenido de los propios centros y que suponía una fragmentación de la universidad misma.

Se percibía como intolerable la autonomía de este tipo de centros y, por tanto, la independencia del ministerio de Trabajo para gobernarlos. Como se ha mencionado, quizás la mayor crítica que se hacía a estas instituciones era su carácter "clasista,"<sup>5</sup> dado que estos centros educativos estaban levantados exclusivamente con el esfuerzo de algunos grupos selectos de trabajadores.<sup>6</sup> Y es que las universidades laborales, en principio, dejaban fuera a los hijos de aquellos profesionales modestos no mutualistas, a los descendientes de funcionarios del Estado, municipios y provincias (esencialmente, a los funcionarios de la organización sindical) y a los hijos de los agricultores. Por otro lado, la universidad laboral tendía a vaciar de contenido a centros de formación profesional como los institutos laborales o a las escuelas industriales existentes en aquel momento. Hasta tal punto llegaba la desazón del mundo sindical por quedar fuera del reparto de la tarta de las universidades laborales que se identificaba la obra de Girón con las "artes perversas" del socialismo de otros tiempos "contrario al espíritu mismo de la doctrina fundacional de la Falange."<sup>7</sup>

"...Este artículo parece tender a la creación de lo que llamaríamos extensión universitaria de la Universidad Laboral, y nos parece acertado, aunque muy peligroso, ya que pueden abocar en Ateneos o Seminarios clasistas. Recuérdese el papel desempeñado por los Ateneos socialistas..."<sup>8</sup>



Sin embargo, el planteamiento de Girón y del ministerio de Trabajo era bien distinto:

“Ya por aquellos días de mi llegada al ministerio de Trabajo sabíamos los falangistas que para alcanzar la plena libertad humana, era preciso dotar al hombre de la única palanca posible para alcanzarla: el dominio de la cultura. Ese dominio que llega cuando, reconstruyendo desde los cimientos mismos de la sociedad, se alcanza una igualdad de oportunidades, sin exclusión alguna. Desde esa idea partí: primero incorporando a los hombres al trabajo; segundo capacitándolos para evadirlos de la esclavitud del peonaje irredento; tercero protegiéndolos frente al infortunio y los temores de su futuro individual, para llegar al primer gran peldaño que fueron las universidades laborales... Nada es consistente si el hombre no goza de esa plenitud humana que le da el saber, no se puede hablar de revoluciones si no se parte de este principio.”<sup>9</sup>

Este, según Girón, era el motivo que sustentaba lo que para el mencionado ex-ministro era su gran obra. Con la educación social se pretendía otorgar la “verdadera libertad” al trabajador. El mundo de las libertades políticas del liberalismo que no iba acompañado de un acceso igualitario a la cultura no era considerado un marco de verdadera libertad dadas las dificultades para dignificar el mundo del trabajo, para acceder al mismo empleo y para garantizar la subsistencia del trabajador y su familia ante el infortunio. Este era el propósito formal de la universidad laboral; “una institución creada por el ministerio de Trabajo, sostenida por las Mutualidades Laborales y reconocida por el Estado como Centro Superior de Formación Profesional.”<sup>10</sup> La sabiduría, el acceso a la cultura, la generalización del saber habían de ser los resortes formales sobre los que asentara el “Nuevo Hombre” nacido de esta “Nueva España” que, supuestamente, estaba materializando la Revolución del nacional-sindicalismo y en la cual el factor propagandístico era ingrediente básico en este objetivo de captación en torno al obrero español.<sup>11</sup>

Este planteamiento voluntarista se sustentaba en un hecho ficticio e ilusorio plasmado en afirmaciones de un calado similar a la que a continuación exponemos: “Ha llegado ya el momento en que los riesgos típicos de la previsión clásica han sido cubiertos.”<sup>12</sup> Aseveraciones de este tipo sostenían la poco fundada idea de que el sistema de previsión público sostenía el elevado nivel de vida de los españoles y que, en consecuencia, los fondos de las instituciones de previsión (en referencia directa a las mutualidades) habían de encauzar su potencial económico hacia fines sociales más loables cuales eran, por ejemplo, la financiación de nuevos templos de la sabiduría como la universidad laboral de Gijón.

Como en la introducción hemos señalado, el acceso a la cultura era, según los planteamientos de falangistas como Girón, el modo por medio del cual los hombres, y concretamente los trabajadores, podrían acceder a la verdadera libertad que nada tenía que ver con la libertad formal de las corrientes liberales europeas. Pese a ello, algunas de las acusaciones lanzadas contra las Universidades laborales que acusaban a dichas entidades de clasistas se fundaban en el hecho de que su financiación era esencialmente mutualista y dicho sistema se veía ligado a la élite del mundo trabajador tal y como señalaba García Oviedo al referirse al nacimiento de las mutualidades:

“Este sistema dista mucho de haberse generalizado. De ordinario, sólo la pequeña burguesía, los empleados de comercio, dependientes de escritorio y obreros muy calificados pudieron poner en práctica.”<sup>13</sup>

Como se ha mencionado esta sería la acusación más relevante a la que las universidades laborales hubieron de hacer frente. Desde algunos sectores del franquismo se veía en estas nuevas “pirámides egipcias” un monumento a la separación entre el mundo obrero y las clases medias cuyo fin consistía en la separación de aquéllos con respecto a las universidades de “los señoritos.”<sup>14</sup>

En este marco, las universidades laborales suponían más que un avance material una “revolución moral”<sup>15</sup> que sería el final de la historia del conflicto social y del enfrentamiento entre patronos y trabajadores. Era esta la “segunda fase de la victoria contra la injusticia”<sup>16</sup> embadurnada por lo que Girón denominaba las cuatro libertades en referencia a la libertad de saber, de mandar, de poseer y de salvar el alma.

Y es que estos potenciales trabajadores jóvenes “sin ningún arma para el futuro engrosaban movimientos desesperados, en los que sus resentimientos contra la sociedad que no supo hacerles útiles encontraba eco violento,” se afirmaba desde la páginas de la Revista de Trabajo.<sup>17</sup> Las universidades laborales constituían un importante instrumento por medio del cual se debía establecer un reinado de paz en la tierra de España, un mundo presidido por la armonía y la colaboración entre los diversos elementos de la producción. La lucha de clases había llegado a su fin por medio del acceso a la cultura y al saber de los elementos tradicionalmente menos privilegiados del proceso de producción: los trabajadores. Es decir, la formación profesional por medio de las universidades laborales tenía una finalidad política y social evidente.<sup>18</sup>

Pero si la demolición del sistema de clases y su enfrentamiento era una labor fundamental de las universidades, la función política encubierta de dichas instituciones era la forja de unas

minorías rectoras. Otro de los objetivos de esta empresa faraónica era la creación de una escuela de mandos, de auténticos nacional-sindicalistas, de fervorosos y apasionados seguidores del falangismo que se constituyeran en firmes baluartes contra los “enemigos” del régimen franquista.<sup>19</sup> En esta línea de adoctrinamiento y control se creó en cada una de las universidades laborales la Estafeta Juvenil Internacional dirigida por la Delegación Nacional del Frente de Juventudes. Entre las normas impuestas para el carteo con alumnos de otros países estaba el soslayamiento de todo tipo de cuestiones relacionadas con temas políticos o religiosos.<sup>20</sup> Este planteamiento sería uno de los principales problemas para la eficacia académica de las universidades laborales hasta el punto de que la Secretaría General Técnica del ministerio de Trabajo elevaba al ministro del ramo un informe con fecha 27 de mayo de 1957 en el que hacía constar la ausencia de elementos técnicos preparados en dichas universidades y la proliferación innecesaria de “sólo (*elementos*) políticos”<sup>21</sup> comenzando por el Consejo Técnico de Universidades Laborales en el que se integraron como vocales de libre designación destacados miembros del régimen como Alejandro Rodríguez de Valcárcel o Pilar Primo de Rivera.

Si había que hacer del obrero un monumento al nacional-sindicalismo, las instalaciones que lo cobijaran durante este período de adiestramiento político y técnico habían de tener las mismas características. Probablemente la universidad de Gijón es el ejemplo más evidente de esta tendencia. Sus cimientos se pusieron en abril de 1948.<sup>22</sup> La grandiosidad con que fue concebida permitía realizar en las páginas de la revista *Avanzada* manifestaciones que homologaban a la universidad Girón de Velasco con el Escorial, cuestión que en cierta medida podemos aceptar tanto en cuanto la universidad de Girón pretendía ser una expresión de exaltación del régimen y del propio ministro de Trabajo:

“Así como el monasterio escorialense de San Lorenzo fue en su día la exaltación de la idea religiosa española para admiración de las futuras generaciones como espécimen del genio y figura de España, la Universidad Laboral de Gijón es la fiel expresión exaltadora de la idea social de un régimen que se reencontró con su grandeza pretérita en el resurgir iniciado por Franco el 18 de julio de 1936...”<sup>23</sup>

Como en el resto de las universidades laborales la financiación para la construcción de la universidad provenía fundamentalmente de las mutualidades. Hasta finales de 1952 se habían invertido en la construcción de esta universidad (sin considerar gastos de mantenimiento) 257 millones de pts., de los cuales 167 provenían de distintos montepíos, 75 de las cajas de ahorro, 7 de la Caja Nacional de Accidentes del Trabajo, 6 de la Junta Interministerial del Paro y 2 de compañías de reaseguro de accidentes del trabajo.<sup>24</sup> De los 167 millones aportados por los montepíos 89,5 provenían del nacional de la construcción y obras públicas, 20 de la mutualidad de dependencias mercantiles, 16,6 del montepío siderometalúrgico de Cataluña y 10 del de

Vizcaya. Si consideramos que estos sectores eran los que, en líneas generales, aportaban un mayor número de alumnos (no sólo a esta universidad) se comprende que la clasificación de las universidades laborales como instituciones "clasistas" no solamente tuviera como justificación el agravio comparativo que se hacía con los hijos de los no mutualistas, sino el bochorno que suponía la dificultad de los alumnos para ingresar en las universidades laborales en función de la pertenencia de su padre a un sector más o menos dinámico de la economía nacional y, por tanto, a un montepío más o menos solvente en lo económico.

De otra forma, por medio de la igualdad económica, utopía irrealizable para Girón, jamás se llegaría al objetivo deseado. Desde el punto de vista de Girón, el final de la lucha de clases era una utopía irrealizable, en la medida en que los trabajadores estaban discapacitados para gobernarse por la imposibilidad para acceder al saber y la cultura:

"Una vez atendida la primera línea de flotación, es decir, las necesidades apremiantes del hombre: alimento, vivienda, vestido y asistencia sanitaria, creo que la igualdad de los hombres en la cultura es la única base sólida para la paz social; mucho más sólida que la que ofrece una igualdad económica, por otra parte imposible. El que proclama sólo el derecho al bienestar material, con secular criterio inmedatista, es un explotador de la ignorancia, porque, repito, la incultura puede transformar los bienes materiales en desgracias morales."

El trato continuo con los trabajadores me dio la seguridad de que la aspiración más profunda del proletariado era dejar de ser una clase. Cuando del proletariado se decía que apetecía más el poder que cualquier otra participación era porque así, los que interpretaban su deseo, pensaban arrancarles el poder y llevarlo en su nombre, puesto que ellos no estaban capacitados para ejercerlo."<sup>25</sup>

Formalmente, las universidades laborales eran un instrumento de igualación de los trabajadores en relación a los situados por encima de éstos en la escala social. Por otro lado, se pretendía imbricar el mundo del trabajo con el mundo académico o lo que era lo mismo: "...dar fin a la división estudiante-obrero..."<sup>26</sup> Girón pretendía con ello que las posibilidades de la clase trabajadora se incrementaran de cara al acceso a los puestos de poder y de dirección dentro del mundo de la empresa y del gobierno: "arrebatar...en suma, el centro de mando en la sociedad a una sola clase y ofrecérselo a la sociedad entera sin distinción ni privilegio."<sup>27</sup> Desde aquella atafaya debían inculcarse a los alumnos las "virtudes de la amistad, la fidelidad, la justicia, la veracidad, el honor, la lealtad, el patriotismo..."<sup>28</sup> sin olvidar por ningún momento el hecho de que en la mentalidad del ministro de Trabajo lo que se estaba llevando a cabo era una operación militar por medio de la cual había de lograrse que "el enemigo" pasara a sus filas.<sup>29</sup>

Fruto de este proyecto se construyeron las universidades laborales de Gijón,<sup>30</sup> Zamora,<sup>31</sup> Tarragona,<sup>32</sup> Córdoba<sup>33</sup> y Sevilla,<sup>34</sup> cuyos órganos docentes (salvo en el caso de Zamora) fueron aprobados por el Decreto de 26 de julio de 1956, siendo nombrados sus respectivos rectores por Orden de 12 de enero de 1957.<sup>35</sup>

Éstas eran las armas con las que el franquismo social pretendía liberar al trabajador español de la ignorancia. A través de ellas los obreros debían conseguir el ascenso en la escala social y en la estructura de poder. La primera de las condiciones estaba reservada para unos pocos; la segunda, para los todavía menos que manifestaran una lealtad inquebrantable al régimen. Al igual que en lo referente a las mutualidades o al Seguro Obligatorio de Enfermedad las universidades laborales fueron concebidas por Girón como “el primer gran estadio de la revolución”<sup>36</sup> que había de permitir el acercamiento del obrero a la universidad. Sin embargo, también se desarrollaron algunas experiencias en sentido inverso. Y así el intento de llevar la cultura a los más recónditos lugares de la geografía laboral española estaba presente en los proyectos desarrollados por el Servicio Universitario del Trabajo (S.U.T.).<sup>37</sup> El objetivo de los campos de trabajo organizados por este servicio de la Delegación Nacional de Sindicatos era llevar a los obreros la cultura de la que los universitarios disfrutaban.<sup>38</sup> Pese a lo que pudiera parecer, en líneas generales, los estudiantes que asistían a estos campos de trabajo tenían como característica la ausencia de inquietud social, política o religiosa alguna. Por el contrario, incidía en gran manera la afición turística o profesional: “Un treinta y cinco por ciento sólo, aproximadamente, va por verdadera preocupación y generosidad.”<sup>39</sup>

Así, pues poniendo de manifiesto la sistemática zanja abierta entre los planteamientos formales y la realidad, lo que estaba preparado para educar a la juventud en valores humanos y no simplemente intelectuales, resultaba ser un mero elemento para preparar peritajes y conocer sitios nuevos. Y ello sin tener en cuenta la desconfianza que podían encontrar en muchos campesinos o mineros de zonas deprimidas económica y socialmente ante los que podían ser percibidos como espías del régimen. En el verano de 1954 su afán por afianzar su presencia en los ambientes obreros les hizo concebir la idea de conducir la cultura hacia dos áreas de la geografía española caracterizadas por la dureza de las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias. Las dos zonas en cuestión eran parte de la provincia de Asturias y la comarca de Las Hurdes.

### **18.1. El arranque de las universidades laborales.**

El punto de partida de las universidades laborales se encuentra en la Orden conjunta de los ministerios de Educación y Trabajo de 12 de julio de 1956 que aprueba los Estatutos de las

Universidades Laborales<sup>40</sup> pese a lo cual, la forma definitiva de estas instituciones no se adoptó hasta la promulgación de la Ley de 11 de mayo de 1959 (fuera del período de estudio de esta tesis). La primera de las disposiciones era el resultado del proyecto elevado a dichas instancias por la Comisión Interministerial de Educación y Trabajo creada el 14 de abril de 1956<sup>41</sup> con el objetivo de elaborar un estatuto provisional para dichas instituciones educativas en respuesta a la consigna que el ministro Girón lanzaba en Sevilla en el otoño de 1950:

“Vamos a crear gigantescas Universidades laborales, castillos de la reconquista nueva, donde vosotros, y sobre todo vuestros hijos, se capaciten no sólo para ser buenos obreros, que eso es poco, y eso es todo lo más que quisieran los enemigos. Vamos a crear centros enormes donde se formen, además de obreros técnicamente mejores, hombres de arriba a abajo, capacitados para todas las contiendas de la inteligencia, entrenados para todas las batallas del espíritu, de la política, del arte, del mando y del poder.”<sup>42</sup>

Un elemento esencialmente anecdótico que caracterizó la puesta en marcha de las universidades laborales fue el de la excesiva prisa y la celeridad, cuestión irrelevante para el ministerio de Trabajo si consideramos que la función principal que estas instituciones habían de cumplir, desde un punto de vista formal, era la desproletarización de la clase trabajadora.<sup>43</sup> Es indicativo de la urgencia que tenía para Girón la puesta en funcionamiento de dichas instituciones el hecho de que antes de la aprobación de los estatutos y, claro está, del plan inicial de las universidades laborales, ya estuviera programada la generalizada puesta en marcha de estos centros educativos cuando el proceso lógico hubiera sido el inverso.<sup>44</sup>

Sin embargo, hay un antecedente de estos estatutos con fecha 13 de julio de 1955. Nos referimos al documento-escritura de regulación de la Universidad Laboral “José Antonio Girón de Velasco” de Gijón que comenzó su andadura en el curso 1955-56.<sup>45</sup> Dicha escritura permite observar que los estatutos de las universidades laborales son una copia exacta de lo regulado en dicho documento, si exceptuamos la legación a la Compañía de Jesús por un período de 25 años de la dirección de dicha universidad, cuya junta de patronato se había constituido ya el 6 de octubre de 1945 con el objetivo de desarrollar el primer ensayo de estas instituciones educativas.

En su preámbulo, los estatutos ya dejaban claro cual iba a ser uno de los elementos inspiradores del nuevo sistema: “...si algo define absolutamente a la Institución que nace es, sin duda, su manifiesta voluntad -a la que se subordina la compleja estructura académica- de forjar hombres españoles acordes en todo con la norma cristiana y militante de nuestra estirpe...Lo verdaderamente decisivo es aflorar en la humanidad entrañable de nuestro pueblo, con ritmo

nuevo y expresión actual, la vena soterrada e inagotable de su genio católico, la calidad universal de su gesto, la fe luminosa de su operante quehacer."<sup>46</sup>

Los mencionados estatutos determinaban que las universidades laborales nacían con el objetivo de desarrollar una triple función a favor del trabajador español: humana, técnica y profesional. Concretando más allá de estas vaguedades se establecían como metas cuatro funciones básicas. En primer lugar, la formación, educación y adiestramiento de la juventud en la faceta técnica, profesional y humana a través de los distintos niveles y estudios. En segundo lugar, el enriquecimiento del espíritu y de la dignidad social de los trabajadores adultos. En tercer lugar, se pretendía elevar el nivel cultural, social y productivo de las localidades en que radicasen las universidades. Y en cuarto y último lugar, la universidad laboral había de potenciar un sistema de becas que permitiesen a los más capacitados acceder a estudios de superior rango.

En cuanto a su estructura se determinaba que todas las universidades tuvieran al menos tres secciones (formación profesional, formación técnica y una sección de capacitación social y perfeccionamiento profesional) pudiendo crear institutos laborales y escuelas de formación profesional en otras localidades en colaboración con entidades, empresas u otro tipo de organismos públicos o privados con la posibilidad novedosa de poder admitir a un cierto número de alumnos no mutualistas.

Inicialmente, la base 10ª de los estatutos programaba la puesta en funcionamiento de cuatro universidades en Gijón, Córdoba, Sevilla y Tarragona diseñándose la creación en un futuro de una universidad específicamente destinada a la formación humana y profesional de los emigrantes españoles a los países hispanoamericanos. De igual manera, se planteaba la posibilidad de crear universidades laborales femeninas dado que las proyectadas únicamente iban a recoger a varones.

El capítulo 4º de los estatutos abordaba la estructuración del sistema docente de las universidades. Se diseñó previamente el proceso de selección de los alumnos por el cual era en última instancia el ministerio de Trabajo el que concedía el ingreso de los estudiantes sobre una selección previa de las mutualidades laborales de aquéllos, que por motivos sociales, más lo merecieran. Tenían preferencia los huérfanos de mutualistas, los miembros de familias numerosas y aquellos descendientes de padres con "méritos sociales" entre los que estuviera la colaboración en la obra social del régimen y la ejemplaridad en el trabajo sin determinar contenido exacto para estos dos últimos criterios y abriendo así el camino a la posibilidad de un trato discrecional en la adjudicación de plazas por motivos políticos.

Aquellos alumnos que aspiraban a ingresar desde el primer grado en la universidad laboral (a partir de los 10 años) habían de pasar un ciclo de dos años de duración. Este ciclo se centraba en unos estudios comunes de aplicación de la enseñanza primaria siendo equivalente al denominado bachillerato laboral, tras lo cual pasaban a la Sección de Formación Profesional o a la de Formación Técnica. Este período conjunto correspondía a un bienio de perfeccionamiento de la enseñanza primaria. Para los que posteriormente pasaban a la denominada Formación Profesional, ésta equivalía al período de preaprendizaje de las escuelas de trabajo y al grado de iniciación profesional de las escuelas primarias. Para los que lograban pasar a la Formación Técnica equivalía al primero y segundo año del bachillerato laboral.

La denominada Formación Humana ocupaba un lugar central en el esquema educativo de las universidades agrupándose sus tareas en torno a cuatro subsecciones: formación religiosa, formación del espíritu nacional y educación física, magisterio de costumbres y formación estética. "La formación religiosa, dentro del marco general de la formación humana ocupará, por su jerarquía superior, el primer plano de toda labor educativa," se afirmaba en la base 20.<sup>47</sup> Esta faceta había de desarrollarse por medio de las prácticas de piedad cristiana y las enseñanzas concretas sobre temas de moral y dogma católico. Como se explicita en algunas memorias de diversas universidades el objetivo de la formación humana era "llevar al corazón de nuestros alumnos la humildad entrañable de nuestro pueblo, con ritmo nuevo y expresión actual, la vena soterrada e inagotable de su genio católico, la calidad universal de su gesto y la fe luminosa de su imperante quehacer y todas las virtudes del honor, el valor, la dignidad, la propia estimación, la fidelidad, la lealtad, la honradez, la hidalguía, la íntima trabazón con la encarnadura religiosa del alma española..."<sup>48</sup>

La subsección de formación del espíritu nacional y educación física tenía como misión el fomento de la salud corporal del alumno por medio de la gimnasia así como su encuadramiento y sometimiento al régimen de disciplina estipulado por la universidad. La misión de la formación del espíritu nacional era la de influir en el comportamiento del alumno a través del fomento del patriotismo y de la formación político-social de acuerdo a los valores del régimen franquista. En función de este planteamiento, las universidades se dividían en colegios en los que, en principio, el número de alumnos no había de superar la cantidad de 250. Dada la función socializadora y de control de las universidades laborales una de las facetas centrales de la subsección de formación del espíritu nacional había de ser el acto de izar y arriar la bandera nacional así como el rezo de la oración por los caídos y las clases de cultura política en función de las directrices impuestas por el Frente de Juventudes.

La subsección de magisterio de costumbres tenía por finalidad infiltrar en el alumno las virtudes que definían al "verdadero hombre de carácter, en armonía con los valores radicales de nuestra



estirpe"<sup>49</sup> a lo cual acompañaba un sistema de estímulos y premios que capacitaba a "los mejores" para acceder a algunas de las funciones de autogobierno de las organizaciones estudiantiles de la universidad. Por último, la subsección de formación estética suponía un conjunto de enseñanzas teóricas, clases prácticas y actividades diversas que pretendían fomentar el interés por las artes y la cultura en un sentido amplio.

Los estudios estrictamente académicos tenían dos vertientes posibles: La formación profesional<sup>50</sup> y la técnica. Las del primer grupo abarcaban cuatro etapas:

- a) primer grado, entre los 12 y 14 años.
- b) segundo grado, de los 14 a los 16/17 años.
- c) tercer grado, de los 17 a los 19 años.
- d) cuarto grado, de los 19 a los 21 años.

Estos estudios comprendían la especialidad agropecuaria y la industrial. La primera se dividía en cuatro grados:

- a) Iniciación agrícola, consistente en dos cursos entre los 12 y los 14 años en los que se fomentaba la formación humana y los estudios de ciencias de la naturaleza.
- b) Grado de trabajador agrícola, consistente en dos cursos en la Escuela Práctica de agricultura de los 14 a los 16 años en los que se debían intensificar los conocimientos sobre tecnología y tareas propias de la agricultura. Acabado este grado el alumno había de volver obligatoriamente al campo y antes de pasar al siguiente grado tenía que realizar dos cursos de especialización.<sup>51</sup>
- c) Capataz. Para acceder a la Escuela de Capataces el alumno había de tener al menos 18 años de edad y tras dos años alcanzaba dicho grado.
- d) Encargado de fincas o industrias agrícolas. Era este el último grado al que podían acceder los alumnos cursando otros dos años más de estudios.

La especialidad industrial comprendía también cuatro grados: preaprendizaje, aprendizaje, oficialía y maestría de acuerdo a la ley de formación profesional industrial. Los alumnos revalidaban sus títulos académicos después de trabajar dos años en la industria con cualquiera de las categorías mencionadas.

A la Formación Técnica pasaban "los alumnos de más capacidad intelectual"<sup>52</sup> constituyendo una escala superior de la educación profesional. Esta sección abarcaba cuatro grados:

a) Bachillerato Laboral al que accedían los alumnos que habían superado el período elemental (de 10 a 12 años) comenzando en el tercer curso del Bachillerato Laboral. Sus planes de estudios eran los propios de los institutos laborales según la Ley de 16 de julio de 1949.<sup>53</sup>

b) Bachillerato Laboral Superior. Duraba este grado dos años y podía dar lugar a la obtención del título mencionado o a un certificado de perfeccionamiento en caso de no aprobar todas las asignaturas que les facilitaban la obtención del título de oficial o maestro propio de la sección de formación profesional. Los “más aptos” tenían la posibilidad de acceder a los estudios superiores laborales y “los de capacidad científica ordinaria” a las enseñanzas del graduado social.<sup>54</sup>

c) Graduado Laboral. Estos estudios duraban dos años y tendían a la especialización o al estudio de disciplinas no desarrolladas en el Bachillerato Laboral Superior.

d) Estudios Superiores Laborales. Se accedía a ellos desde el grado de bachiller laboral superior y abarcaban un período de 4 años.<sup>55</sup>

Como se ha mencionado la universidad laboral tenía entre sus funciones la de formar al trabajador adulto para lo cual se crearon las Secciones de Capacitación Social y Perfeccionamiento Profesional de los Trabajadores. Según la base 63 de los estatutos, entre sus fines se encontraban los siguientes: educar a los trabajadores en el conocimiento de la cultura y la formación espiritual; hacerles conscientes de su posición como miembros de la comunidad nacional, incorporarlos activamente a la organización sindical, difundir la legislación social y perfeccionarles en su oficio. Denota claramente la finalidad de dicha institución el hecho de que la capacitación profesional del trabajador del campo fuera una de las cuatro funciones de las escuelas de capacitación social y que además de esto ocupara el último lugar. La función principal de la escuela de capacitación había de ser la de extender el control de la organización sindical al campo español. Este tipo de cursillos tenían un carácter intensivo y se realizaban en régimen de internado entre los trabajadores previamente seleccionados por las mutualidades laborales. Este proselitismo condujo a la creación primigenia de las Escuelas de Capacitación Social<sup>56</sup> y a la consideración de estos estudios como fase previa para el ingreso en las Escuelas Sociales.<sup>57</sup> Lo relevante resulta de la consideración de que las Escuelas Sociales (cuyo origen se remonta con otro significado a 1936) tenían como misión “desarrollar la conciencia, cultura y técnica social de cuantos se orientaran al ejercicio de las funciones administrativas, jurídicas, económicas y sociales en los organismos dependientes del ministerio de Trabajo, Delegación Nacional de Sindicatos y demás organismos sociales.”<sup>58</sup> Eran un primer escalón para formar parte de las estructuras administrativas y políticas del régimen. La visión de Girón sobre la cuestión era bien distinta tal y como se muestra en el siguiente párrafo:

"Quiso hacer al español dueño de sus destinos y arrancarle de tutelas políticas que le esclavizaban a voluntades ajenas. Y en obediencia a este propósito, ahí están las escuelas de capacitación social, que han lanzado sobre el mundo laboral español cien promociones de obreros instruidos en la doctrina social de la revolución."<sup>59</sup>

Ciertamente, la demanda de obreros cualificados en diversas profesiones era altísima en los años en los que Girón estuvo a cargo del ministerio de Trabajo. Entre diciembre de 1943 y los dos o tres primeros meses de 1944 la delegación provincial de trabajo de Vizcaya solicitó la creación de una escuela de peritaje "a la que contribuyeran corporaciones y empresas; en definitiva, una especie de universidad industrial que comprendiera los tres grados: obreros cualificados, peritos industriales e ingenieros."<sup>60</sup> Barcelona se unía a esta solicitud, dado que la creación de escuelas de aprendizaje y de reeducación profesional hubiera ayudado a reducir el paro, según las autoridades. En Tarragona encontramos una situación similar; la escuela de Reus se encontraba inutilizada, la de Tarragona se encontraba a finales de 1943 o principios de 1944 en construcción, siendo únicamente la de Valls la que funcionaba dentro de lo previsto. Alicante pedía impulsar las Escuelas de Trabajo en Elche y Orihuela. Castellón reclamaba la reorganización de la de Onda y la construcción de una de enseñanza de agricultura y comercio en la capital porque "una riqueza de producción y exportación de 100 millones de pesetas carece de preparación agraria y de comercio exterior."<sup>61</sup>

Huelva era una de las pocas provincias que pese a solicitar fondos para la reparación y establecimiento de escuelas elementales de trabajo consideraba a la mayoría de los obreros del campo aptos para cultivar las fincas con lo cual no reclamaba escuelas de enseñanza agrícola. Sin embargo, dentro de Andalucía, Cádiz destacaba por la exagerada demanda de "talleres de aprendizaje, de mecánica en Puerto Real, San Fernando y Cádiz; de tonelería para Jerez, Sanlúcar, Puerto de Santa María y Chiclana, y de artículos de piel en Ubrique."<sup>62</sup> Faltaban escuelas de aprendizaje agrícola también en Sevilla, Granada y Jaén, las cuales se intentaba que quedaran en manos de la Central Nacional Sindicalista para el más adecuado adoctrinamiento de las juventudes españolas.<sup>63</sup> Hasta tal punto se consideraban trascendentales las escuelas que Ciudad Real afirmaba rotundamente que "la creación de estas...haría desaparecer el paro obrero, pues hay demanda de oficios y exceso de peones."<sup>64</sup> El problema radicaba en su ausencia (dada la supuesta incapacidad de los agricultores para el cultivo de las fincas) y en que algunas de aquellas sólo pretendían "hacer de los campesinos señoritos y burócratas,"<sup>65</sup> en referencia a la Granja Agrícola de Ciudad Real que en aquellos momentos era utilizada como cárcel.

En el caso de Cuenca, a pesar de considerar a más de dos terceras partes de los agricultores capacitados para cultivar, se demandaba la necesidad de convertir la Escuela de Artes y Oficios

de la Diputación en una escuela de orientación y formación profesional. Había provincias, como Cáceres, en las que no existía ni siquiera una escuela de oficios.<sup>66</sup> Santander estimaba de alta conveniencia la implantación de Escuelas elementales de aprendizaje y preaprendizaje en oficios diversos, “de acuerdo con las normas modernas de orientación profesional.”<sup>67</sup> Zamora estimaba necesario crear dos escuelas de oficios y aprendizaje en las ciudades de Toro y Benavente, además de una escuela de capacitación agrícola y ganadera. En el caso de Valladolid se acusaba el hecho de que las escuelas laborales no cumplieran, según las autoridades, las finalidades previstas. Concretamente en esta provincia se hace referencia al hecho de que “existe una falta absoluta de capacitación y orientación profesional de la clase trabajadora.”<sup>68</sup> Era por ello que la gran demanda de obreros especializados o con oficio que existía en la industria no se cubría en absoluto, mientras que existía un gran exceso de peones sin especialización alguna.

En Soria sus autoridades “piden la formación de una Escuela Profesional o Elemental de Trabajo y la necesidad de la formación de la enseñanza y orientaciones agroforestales.”<sup>69</sup> “Sienten la necesidad de una Escuela de Trabajo en Ponferrada y otra de especialización agrícola en la Bañeza,”<sup>70</sup> pedía León. Burgos solicitaba una escuela de capataces agrícolas en Aranda de Duero y otra de trabajo en Miranda de Ebro. En el caso de Ávila se estimaba, simplificando la situación, que la creación de un centro de aprendizaje y formación profesional “sería medida por sí sola suficiente para absorber totalmente el paro obrero, pues la demanda de obreros especializados es muy superior a la de peones.”<sup>71</sup>

Los planes de estudios de estas escuelas abarcaban dos facetas: la formación social y el perfeccionamiento profesional. La primera sección abarcaba asignaturas como religión, cultura, sindicalismo y economía, legislación del trabajo, reglamentaciones del trabajo, seguridad e higiene del trabajo, seguros sociales y mutualismo laboral. El perfeccionamiento profesional se realizaba mediante prácticas relacionadas con el oficio de los alumnos.

La primera promoción comenzó sus tareas en Tarragona, Córdoba y Sevilla el 1 de marzo de 1957 acabando el 15 de abril de 1956. Las mutualidades seleccionadas fueron las siderometalúrgicas de Madrid, Barcelona, Vizcaya, Valencia, Zaragoza, Guipúzcoa, Santander, Sevilla, Gijón y Cádiz además de las mutualidades del carbón (caja de jubilaciones) de la minería asturiana, zona sur, centro-levante y noroeste. Esta promoción estuvo compuesta de 300 mutualistas; 100 siderometalúrgicos en Tarragona y Córdoba respectivamente y otros 100 del carbón en Sevilla. Al no estar en marcha los talleres de las universidades no se impartieron los planes de perfeccionamiento profesional<sup>72</sup> con lo cual la actuación sobre estas primeras promociones vino a recalcar la relevancia fundamental que ocupaba (independientemente de conocimientos teóricos poco adecuados para este tipo de trabajadores) el reeducar políticamente

a los alumnos o en todo casi fomentar la adhesión a los principios del régimen por medio de los planes de estudios ya mencionados. La segunda de las promociones de este primer año académico comenzó sus clases el 25 de abril y terminó el 10 de junio.<sup>73</sup>

Otra faceta de la universidad laboral era la misión de extensión cultural consistente en proyectar la función de la universidad fuera de los muros de la misma en la zona en que estuviera situada.

Organizada la base fundamental de las universidades se diseñó por parte del Consejo Técnico el I Plan para el curso 1956-57.<sup>74</sup> Se estipuló un número de alumnos máximo para cada universidad de 430 internos y 230 externos.<sup>75</sup>

En este plan inicial se diseñaron los planes de estudios para la puesta en marcha de este proyecto faraónico. Los alumnos del primer curso del período conjunto (de 10 a 12 años) impartirían las siguientes asignaturas:

Asignaturas	Horas de clase semanales
Religión	2
Lengua española	6
Geografía e Historia de España	3
Matemáticas	6
Ciencias Naturales	4
Formación del Espíritu Nacional	2
Dibujo	6
Trabajos manuales	6
Educación Física <sup>76</sup>	12
Otras actividades de Formación Humana <sup>77</sup>	6

En el caso del segundo curso de este período conjunto (sólo para la universidad de Gijón) el plan de estudios era el siguiente:

Asignaturas	Horas de clase semanales
Religión	2
Lengua española	6
Geografía universal	3
Matemáticas	6
Física y Química	4
Formación del Espíritu Nacional	2

Dibujo	6
Tecnología y prácticas elementales de taller	6
Educación Física	12
Otras actividades de Formación Humana	6

Se comenzaba a impartir el primer curso del segundo período de la Formación Profesional. En el caso de la Escuela Práctica de Agricultura según el siguiente plan:

Asignaturas	Horas de clase semanales
Religión	3
Lengua española	2
Geografía e Historia	2
Mundo y producción vegetal	3
Mundo y producción animal	3
Agrimensura	3
Formación del Espíritu Nacional	2
Técnica agrícola	6
Trabajos prácticos	6
Educación Física	12
Otros actos y actividades de F. Humana	6

En el caso del aprendizaje industrial el plan era el siguiente:

Asignaturas	Horas de clase semanas
Religión	3
Lengua española	2
Geografía e Historia de España	2
Matemáticas	3
Física y Química	3
Formación del Espíritu Nacional	2
Tecnología industrial	3
Dibujo	6
Talleres	6
Educación Física	12
Otros actos y actividades de F. Humana	6

En lo referente a la Formación Técnica se ponía en funcionamiento el primer curso del Bachillerato Laboral Superior. En la modalidad agropecuaria (aplicada en Sevilla y Córdoba) el plan de estudios era el siguiente:

Asignaturas	Horas semanales de clase
Religión	2
Lengua española	2
Geografía e Historia	2
Matemáticas	3
Física	3
Química	3
Formación del Espíritu Nacional	1
Idioma extranjero	2
Derecho social	1
Dibujo	1
Técnica agropecuaria	5
Práctica de campo	5

En la modalidad industrial (únicamente para la universidad de Tarragona) el plan era el siguiente:

Asignaturas	Horas semanales de clase
Religión	2
Lengua española	2
Geografía e Historia	2
Matemáticas	4
Física	3
Química	3
Formación del Espíritu Nacional	1
Derecho social	1
Idioma extranjero	2
Dibujo	3
Técnica industrial	3
Práctica de taller	3
Educación Física	4
Otros actos y actividades de F. Humana	3

En el caso de la Sección de Capacitación Social se impartían las siguientes asignaturas:<sup>71</sup>

Asignatura	Horas de clase semanal
Religión y doctrina social católica	3
Geografía económica	2
Historia de España	3
Educación moral y cívica	2
Legislación del trabajo y legislación social	3
Seguros Sociales	3
Organización científica del Trabajo	3
Nociones de economía	3
Procedimiento laboral	2
Talleres o trabajos agrícolas	6

### 18.2. Los órganos de gobierno de las universidades laborales.

El órgano rector supremo de las universidades laborales era el Consejo Técnico,<sup>72</sup> creado por Orden de 18 de enero de 1955, dependiente de la Jefatura Nacional de las Mutualidades Laborales e integrado en la Dirección General de Previsión. Dicho consejo estaba formado por un presidente (el director general de previsión y/o jefe del servicio de mutualidades laborales), un presidente delegado y varios vocales.<sup>73</sup> Dependiente de dicho consejo se hallaba una Secretaría General, cuya función básica era la administración de aquellos asuntos que llegara en el día al consejo y una Secretaría Técnica entre cuyas misiones estaba la de formar un estado de opinión en el país favorable a las universidades laborales llevando a cabo campañas de propaganda para las que había de utilizar los medios de difusión y propaganda a su alcance así como nombrar el estudio de las cuestiones que acordara el consejo.

Se constituyó también una Comisión de Investigaciones Laborales que, vinculada científicamente al CSIC pero dependiente de la comisión técnica, había de contribuir a la resolución de los problemas científicos y económicos de las comarcas en que se hallasen las universidades. Esta comisión tenía en Madrid un Centro de Investigaciones Laborales con el fin de coordinar los trabajos de la citada comisión.

Cada universidad estaba regida por un patronato en la localidad donde radicase el centro, siendo nombrados al menos dos tercios de sus componentes por las mutualidades laborales en número proporcional a la contribución económica otorgada a la universidad. El otro tercio lo



integraban personalidades locales.<sup>81</sup> El patronato funcionaba en pleno o en comisión permanente,<sup>82</sup> siendo el pleno el que designaba al gerente (encargado de la gestión y administración de las explotaciones de la universidad) y al interventor.

Los órganos de gobierno de la universidad eran el rector,<sup>83</sup> el vicerrector, el director de formación religiosa, el director de la sección de formación técnica, el director de la sección de capacitación social, el consejo delegado de investigación, el secretario general, el administrador<sup>84</sup> y el oficial mayor.<sup>85</sup> Estos formaban la Junta de Gobierno junto al gerente, el interventor y un representante de la organización sindical elegido entre los mejores alumnos de los cursos superiores.

En orden al sistema de selección del profesorado se perfiló en los estatutos la influencia que tanto la jerarquía eclesiástica como el "falangismo" habían de tener en las universidades. Así, el profesorado de cultura religiosa era seleccionado y designado a propuesta de la jerarquía eclesiástica; por otro lado, el profesorado de formación del espíritu nacional y educación física era designado por la Delegación Nacional del Frente de Juventudes; y de igual manera, los profesores del magisterio de costumbres, cuando la universidad estaba confiada a alguna institución religiosa, eran designados por aquélla. En cifras, a lo largo del curso 1956-57 la Universidad de Sevilla tuvo 83 profesores,<sup>86</sup> la de Tarragona 88, la de Córdoba 84 (de los cuales 28 eran religiosos) y la de Gijón 57.

No cabe duda de que, enmarcado en un régimen autoritario como el del general Franco, la obsesión por el orden y la armonía había de plasmarse de algún modo en el funcionamiento y gobierno de las universidades. Así, dentro de los estatutos el capítulo XVI hace alusión al régimen de disciplina plasmado en su base 135:

"La Universidad Laboral establecerá un régimen de disciplina fundado en la limpieza moral, en el sentido del honor, en el espíritu de camaradería, en la conciencia de la responsabilidad individual, que excluye siempre el servilismo y la delación, y en la ambición de rendir el máximo en el trabajo y en el estudio."<sup>87</sup>

## Notas

<sup>1</sup> Informe sobre formación profesional, s/f (muy probablemente es de 1956 por las referencias que hace en el texto). A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, nº4. También en Borrajo, Política social..., op. cit., pág. 18.

<sup>2</sup> Atribuciones el ministerio de Educación en los Centros Superiores de Enseñanza Laboral. A.G.A.; S.E.; I.D.D. 1.14, 19.154.

<sup>3</sup> Informe sobre universidades laborales (sin fecha). Por las referencias del texto este informe ha de estar elaborado en 1956 (a raíz de la implantación generalizada de las universidades laborales) y aunque consta en el A.G.A. dentro de la Sección del ministerio de Trabajo dudamos que fuera elaborado por el mismo.

Más bien, la riada de críticas a las universidades laborales y las referencias al ministerio de Educación permiten afirmar con casi total seguridad que debe ser copia de un informe elaborado por algún organismo de este último ministerio. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, nº 4.

<sup>4</sup> El número de centros controlados por la organización sindical a finales de 1953 era de 91 con un número de alumnos entre los 14 y los 18 años que se elevaba a 16.525. Realizaciones Sindicales en la formación profesional, 1953. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 6.01, 15.890.

<sup>5</sup> Universidad laboral; Sobre el proyecto de ley organizando la Universidad Laboral, s/f. A.G.A.; S.S.; I.D.D.; 58.02, 4.922.

<sup>6</sup> Gléz. Fausto, José Manuel: El Mutualismo laboral español. Texto de la conferencia pronunciado en Lima, con motivo del II Congreso Iberoamérica de Seguridad Social, y ante los representantes sindicales del Perú, por bis, Subdirector Gral. de Mutualidades Laborales. S/f, pág. 23.

<sup>7</sup> Universidad laboral; Sobre el proyecto de ley organizando la Universidad Laboral, s/f. A.G.A.; S.S.; I.D.D.; 58.02, 4.922.

<sup>8</sup> Ídem.

<sup>9</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 82.

<sup>10</sup> Entorno a las Universidades Laborales. ministerio de Trabajo. Consejo Técnico de Universidades Laborales. Madrid, 15 de julio de 1958. A.G.A. S.E.; I.D.D. 1.14, 19.154.

<sup>11</sup> En los informes reservados de algunas centrales nacional-sindicalistas se describe la labor proselitista realizada entre los obreros con el fin de captar su atención sobre la creación de las universidades por el ministro de trabajo hasta el punto de sufragar los viajes a la universidad de Gijón el mismo titular de la cartera:

"El viaje que, costeado por el ministro de Trabajo, han realizado 75 productores malagueños a Gijón, para visitar la Universidad Laboral que actualmente construye el ministerio del ramo, ha tenido resultados magníficos... El obrero se ha dado perfecta cuenta de que el Estado español ha abordado de lleno la cuestión de su mejora. La Universidad Laboral de Gijón da una idea exacta de la magnitud de esta obra gigantesca." Informes reservados. C.N.S. de Madrid, febrero de 1952. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/213

<sup>12</sup> Fernández González, Víctor: Seguridad social y libertad. RISS, núm. 2, 1954, pág. 249.

<sup>13</sup> García Oviedo, Algunas consideraciones..., op. cit., pág. 23.

<sup>14</sup> García de Viedma, J. M.: La industrialización y las universidades laborales. Avanzada, núm. 14, 18 de julio de 1954.

<sup>15</sup> Girón, Si la memoria..., op. cit., pág. 125.

<sup>16</sup> Discurso de Girón en la apertura de las Universidades Laborales. Avanzada, núm 37, noviembre de 1956. Muy posiblemente la primera fase a la que se refería el ministro de trabajo comenzaba con la implantación del S.O.E.

<sup>17</sup> Jato, David: Consecuencia del paro de los trabajadores jóvenes. RT, marzo de 1941, vol. 1, nº 17, pág. 390.

<sup>18</sup> "...peón sufre más intimamente el complejo de inferioridad social que conduce al descontento: el trabajador, cuanto más culto y preparado está, más amplios horizontes descubre en su propio oficio; y en el momento del paro aprecia mejor lo involuntario del mismo restándole con esto del peligro revolucionario que implica siempre el fenómeno del paro. "Pérez Leñero, José: Factores sociales del paro forzoso. Revista de Trabajo, mayo de 1945, vol. 1, nº 5, pág. 449.

<sup>19</sup> García de Viedma, La función política..., op. cit.

<sup>20</sup> Universidad Laboral Francisco Franco. Memoria del Curso 1957-58. Tarragona, 1959, pág. 78.

<sup>21</sup> Informe del Secretario General Técnico del ministerio de Trabajo al ministro de Trabajo, 27 de mayo de 1957. A.G.A., S.T.; I.D.D. 1.16, nº 64.

<sup>22</sup> El impresionante conjunto de 3.500 ventanas (más del doble que en el Escorial), fue influido básicamente por formas clásicas grecorromanas en la medida en que estas eran consideradas como más representativas de la dignidad humana. La fachada principal está orientada en dirección contraria a la ciudad de Gijón para sobredimensionar grandeza. De hecho, el plan primitivo pretendía que se accediese a la universidad por una amplia avenida que arrancara de la playa de Gijón para magnificar la construcción. La mencionada facha está orientada al sol; es asimétrica y esta formada por dos cuerpo de edificios distintos a uno y otro lado del arco de entrada que da paso a un atrio corintio formado por una galería rodeada por tres lados con columnas de granito azulado de 10,5 metros, la misma altura que las del Partenón. Se accede a continuación al patio central. Mide éste 150 metros de largo por 50 de ancho, las dimensiones de la plaza de San Marcos de Venecia. Su entrada, asimétrica, permite contemplar las tres dependencias más conocidas del conjunto: La iglesia, la torre y el teatro. La iglesia es de planta elíptica, su

cúpula es incluso más alta que la de San Pedro del Vaticano, su superficie es de unos 820 metros cuadrados y sobre la crestería del muro exterior de la iglesia se encuentran 18 estatuas entre las que se encuentran las de la Virgen de Covadonga, Santiago Apóstol, San Pedro y San Pablo, San José Obrero, San Isidro Labrador, San Fernando Rey de España, Santa Teresa de Jesús, Santo Domingo de Guzmán, San Ignacio de Loyola y San Lorenzo Mártir. Columnas corintias de granito rosado y pulimentado enmarcan la puerta principal que, en el diseño original, pretendía recordar las puertas de bronce del Baptisterio de Florencia por sus dimensiones y por la utilización de bronce. Ya en el interior, la bóveda de ladrillo está integrada por un sistema de nervios de influencia hispanoárabe y pesa 2.300 toneladas. La fachada del teatro es de influencia helenística y está inspirada en la del Mercado de Mileto. Se encuentra adornado con estatuas de autores clásicos españoles como Quevedo, Calderón, Lope de Vega, Tirso de Molina, Cervantes, Joveillanos. En el interior del teatro, se realizó un fresco (ora de Enrique Seguro) inspirado en la Escuela de Atenas, de Rafael, en torno al tema del trabajo en el que destaca la figura del ministro Girón de Velasco. En último lugar, la torre está inspirada en la reconstrucción del Faro de Alejandría siendo su altura de 120 metros, y los talleres se inspiraron en las Termas de Caracalla ocupando una extensión de unos 16.000. La torre está inspirada en la reconstrucción del faro de Alejandría y sus líneas recuerdan a la Giralda de Sevilla. Su altura es de 120 metros. Talleres inspirados en las termas de Caracalla ocupan una extensión de unos 16.00 metros cuadrados. En conjunto la longitud de las fachadas es de unos 5,5 km. y la altura oscila entre los 12 y los 14 metros. A. Huerta, S. J.: Guía de la Universidad Laboral J. A. Girón. Gijón, 1966. También en *Avanzada*, núm 33 de 1956.

<sup>23</sup> *Avanzada*, núm 33 de 1956.

<sup>24</sup> La universidad laboral de Gijón, RT, núm 11-12, 1952, pág. 1.206.

<sup>25</sup> Girón, Si la memoria, op. cit., pág. 126.

<sup>26</sup> *Idem*, pág. 128.

<sup>27</sup> *Idem*.

<sup>28</sup> Carta de Girón al padre Valentín García, jesuita, rector de la Universidad Laboral de Gijón, *Avanzada*, núm 40, febrero de 1957.

<sup>29</sup> Manifiesto de Girón al Mutualismo Laboral, 31 de diciembre de 1956. *Avanzada*, núm. 38, diciembre de 1956.

<sup>30</sup> De ella decía Girón que era "una portentosa realidad augural." Esta universidad comenzó a impartir las enseñanzas de la universidad laboral a partir de octubre de 1955. *Idem*, pág. 149.

<sup>31</sup> La universidad de Zamora ya funcionaba en mayo de 1954. Impartía clases a alrededor de 1.000 alumnos, de los cuales 300 eran internos. *Avanzada*, mayo de 1954, nº 13.

<sup>32</sup> En esta universidad el número de alumnos de su primer curso ascendió a 1.028 procediendo 283 de Barcelona y 285 de Tarragona. Por mutualidades la textil envió a 140 alumnos, la del sector de la construcción 117 y la siderometalúrgica de Barcelona 114. A mayor distancia, aparecía en cuarto lugar la mutualidad del comercio con 70 alumnos. Universidad Laboral Francisco Franco. En este primer curso sorprende el hecho de que ya hubiese alumnos de entre 10 y 22 años, predominando los situados entre los 12 y los 15 años (667 en total). Memoria del curso 1957-58. Tarragona, 1959. Probablemente, como en otros aspectos de la política social del primer franquismo se tiende a sobredimensionar lo que se percibe como logros del régimen y a minimizar lo "políticamente" no rentable. Ese puede ser el motivo de que otras fuentes rebajen el número de alumnos para el curso 56-57 a 775 (incluyendo los 100 de capacitación social). Esquema de la Organización docente de las Universidades Laborales, 1957. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, 64, nº 5.

<sup>33</sup> La orden de los predicadores se hizo cargo de la misma formalmente desde febrero de 1956. *Correspondencia con el ministerio de Educación*, 31 de enero de 1958. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, nº 64. Los primeros proyectos para su puesta en funcionamiento son de 1953; su construcción comenzó al año siguiente. Fue inaugurada el 5 de noviembre de 1956 y se hallaba en la finca Rabanales de 400 ha. de extensión y a 7 km de la capital. En la zona construida se podían distinguir 3 grandes grupos de edificaciones: Dirección y plaza superior; Residencias y zona de talleres. Fue obra de los arquitectos Sánchez Puch, Cavestany, Miguel de los Santos y García de Paredes. Guía de la Universidad Laboral Onésimo Redondo de Córdoba. Curso 1970-71. La escritura de regulación de funcionamiento de la universidad lleva fecha de 10 de febrero de 1956 del Ilustre Colegio Notarial de Madrid. A.G.A.; S.E.; I.D.D. 1.14, 19.154. Su reconocimiento como Centro Superior de Formación Profesional (Universidad Laboral) se fecha el 26 de junio de 1956. A.G.A.; S.E.; I.D.D. 1.14, 19.154.

<sup>34</sup> Los salesianos se hicieron cargo de esta universidad desde agosto de 1957. *Correspondencia del ministerio de Trabajo con el ministerio de Educación*, 31 de enero de 1958. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, nº 64. Las clases comenzaron a impartirse el 10 de noviembre de 1957 con 1.080 alumnos, 699 internos y 381

mediopensionistas. El mayor número de alumnos procedía de la mutualidad de la construcción (16 %), seguida por la del comercio (14 %) y los transportes (6 %). Universidad Laboral José Antonio Primo de Rivera. Memoria del curso académico 1957-58. Sevilla, 1958. Según otras fuentes (Esquema de la Organización docente de las Universidades Laborales, 1957. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, 64, nº 5) la cifra de alumnos (incluyendo 100 de capacitación social) ascendía a 794.

En el caso de Sevilla mencionaremos el hecho de que entre su primer profesorado se encontraba como primer titular de Geografía e Historia el profesor D. Antonio Domínguez Ortiz. Consejo Técnico de las Universidades Laborales. Eleva al Pleno del Consejo Técnico las siguientes propuestas de nombramiento para las Universidades Laborales, 1956. A.G.A.; S.E.; I.D.D. 1.14, 19.154.

<sup>35</sup> José María Piñar Mihura, rector de la U. L. José Antonio Primo de Rivera de Sevilla, Miguel Fraile Cobos, de la Onésimo Redondo de Córdoba, Valentín García, de la J. A. Girón de Velasco de Gijón y Francisco Aguilar Paz de la Francisco Franco de Tarragona. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, nº 4.

<sup>36</sup> Girón, Si la memoria, op. cit., pág. 186.

<sup>37</sup> En este sentido la opinión del Delegado Nacional de Sindicatos era que este tipo de campos eran el mejor medio para "llevar la preocupación sindical a la Universidad española." A lo largo del año 1953 se organizaron 50 de estos campos en los que se integraron alrededor de 2.000 universitarios. Correspondencia de la D.N.S. a la Jefatura Nacional del S.U.T. (Servicios Universitarios del Trabajo), 6 de abril de 1954. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/270.

<sup>38</sup> A.P.G.; J.E.; Le. 59, nº 1.

<sup>39</sup> Ídem, pág. 2.

<sup>40</sup> B.O.E. del 19. No hay diferencias significativas entre el proyecto final y el anteproyecto del Consejo Técnico. Anteproyecto de Estatuto de las Universidades Laborales. Consejo Técnico de las Universidades Laborales. ministerio de Trabajo. Madrid, 1956. A.G.A.; S.E.; I.D.D. 1.14, 19.155.

<sup>41</sup> Esta comisión fue dirigida por el Director General de Enseñanza Laboral del ministerio de Educación, Guillermo de Reyna Medina). Las reuniones que condujeron a la aprobación de los estatutos provisionales se celebraron los días 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23 y 24, 25, 28. Constitución de la Comisión Interministerial de Trabajo y Educación. A.G.A.; S.E.; I.D.D. 1.14, 19.155.

<sup>42</sup> Estatuto de las Universidades Laborales. ministerio de Trabajo. Consejo Técnico de las Universidades Laborales. Madrid, 1956. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, 16, nº 64, pág. 7.

<sup>43</sup> Fernández Gléz. Víctor y Marta Buñill, Carlos: La política de Seguridad social Española y sus realizaciones. Madrid, ministerio de Trabajo, 1953, pág. 16. "Mediante la elevación cultural de la masa se conseguirá ir la separando, paulatinamente, de la atracción que sobre ella ejerce lo puramente material y económico..." en palabras de Ríza Ballesteros, José María: La universidad y los trabajadores, RT, núm 9, 1948, pág. 655.

<sup>44</sup> Correspondencia de Girón de Velasco con el ministro de Educación Nacional, 17 de marzo de 1956. A.G.A.; S.E.; I.D.D. 1.14, 19.154.

<sup>45</sup> "Copia simple de la escritura de regulación del Funcionamiento de la U. L. José Antonio Girón de Gijón, Madrid, 13 de julio de 1955." A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, 16 nº 64.

<sup>46</sup> Estatuto de las Universidades Laborales. ministerio de Trabajo. Consejo Técnico de las Universidades Laborales. Madrid, 1956. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, 16, nº 64, pág. 10.

<sup>47</sup> Ídem, pág. 19.

<sup>48</sup> Universidad Laboral Francisco Franco..., op. cit., pág. 75.

<sup>49</sup> Estatuto de las Universidades Laborales. ministerio de Trabajo. Consejo Técnico de las Universidades Laborales. Madrid, 1956. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, 16, nº 64, pág. 22.

<sup>50</sup> La industrial se encuadraba en la Ley de Formación Profesional Industrial vigente.

<sup>51</sup> El alumno no podía realizar más de uno por año cuya duración era de cuatro meses. Estos cursos también podían realizarse por los trabajadores adultos de la Escuela de Capacitación Social.

<sup>52</sup> Esquema de la Organización docente de las Universidades Laborales, 24 de junio de 1957. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, nº 64.

<sup>53</sup> B.O.E. del 17 de julio.

<sup>54</sup> Estatuto de las Universidades Laborales. ministerio de Trabajo. Consejo Técnico de las Universidades Laborales. Madrid, 1956. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, 16, nº 64, pág. 28.

<sup>55</sup> Las áreas de especialización eran las siguientes: agricultura, metalurgia, mecánica, electricidad, industria textil y papelería, construcción, tecnología de los alimentos, organización de la producción, tecnología marítimo-pesquera, geología aplicada, cerámica, refractarios, vidrios y esmaltes y tecnología de los plásticos.

<sup>56</sup> Orden de 7 de febrero de 1942, B.O.E. del 12 o Aranzadi 321.

<sup>57</sup> Orden de 9 de noviembre de 1943, Aranzadi 1.506.

<sup>58</sup> Fernández Heras, Amado: Tratado Práctico de legislación social. Zaragoza, 5ª edición, 1952, pág. 301.

<sup>59</sup> Girón, si la memoria..., op. cit., pág. 178.

<sup>60</sup> A.P.G.: J.E.; Le. 59; nº 3.1.

<sup>61</sup> Ídem, nº 41.

<sup>62</sup> Ídem, nº 40.

<sup>63</sup> Ídem, nº 66, 46 y 51.

<sup>64</sup> Ídem, nº 42.

<sup>65</sup> Ídem.

<sup>66</sup> Ídem, nº 39.

<sup>67</sup> Ídem, nº 64.

<sup>68</sup> Ídem, nº 72.

<sup>69</sup> Ídem, 67.

<sup>70</sup> Ídem, nº 59.

<sup>71</sup> Ídem, nº 34.

<sup>72</sup> Esquema de la Organización docente de la Universidades Laborales, 24 de junio de 1957. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, nº 64.

<sup>73</sup> Entre las mutualidades estaban las de industrias químicas de Madrid, Barcelona, Santander, Vizcaya y Valencia; la caja de jubilaciones y subsidios de la Mutualidad Textil con representación de Alicante, Barcelona, Gerona, Guipúzcoa, Burgos, Castellón, Murcia, Salamanca, Zaragoza y Valencia; la mutualidad de la construcción con sede central en Madrid, y representaciones de las provincias de Barcelona, Cádiz, Lérída, Madrid, Oviedo, Palencia, Valladolid y Vizcaya. En total 100 del sector químico impartieron sus cursillos en Córdoba, 100 del sector textil en Tarragona y otros 100 del sector construcción en Sevilla. Plan Inicial de las Universidades Laborales para el curso 1956-1957. ministerio de Trabajo. Consejo Técnico de las Universidades Laborales. Madrid, 1956. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, 16, nº 64.

<sup>74</sup> Plan Inicial de las Universidades Laborales para el cursos 1956-1957. ministerio de Trabajo. Consejo Técnico de las Universidades Laborales. Madrid, 1956. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, 16, nº 64.

<sup>75</sup> Este criterio era válido para los centros de Sevilla, Córdoba y Tarragona ya que en Gijón habían comenzado las clases en el curso anterior.

<sup>76</sup> En el caso de la educación física incluimos, en este y en los siguientes cuadros, las horas de gimnasia (normalmente 6) y juegos y deportes.

<sup>77</sup> Incluidas en estas actividades podían estar los ejercicios de piedad cotidiana y de liturgia, la historia del arte, la lectura comentada de obras literarias, los ejercicios de redacción, el teatro escolar y la declamación, la música clásica y popular y el cine.

<sup>78</sup> Todas las referencias a los planes de estudios proceden del Plan Inicial de las Universidades Laborales para el curso 1956-1957. ministerio de Trabajo. Consejo Técnico de las Universidades Laborales. Madrid, 1956. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, 16, nº 64, pág. 16-20.

<sup>79</sup> Se constituyó por primera vez Orden de 2 de marzo de 1955 y su presidente fue Fernando Coca de la Piñera, Director General de Previsión y del Servicio Nacional de Mutualidades Laborales. Constitución del Consejo Técnico de Universidades Laborales. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, nº 4.

<sup>80</sup> Entre ellos había un representante del ministerio de Educación Nacional, del ministerio de Agricultura, del ministerio de Industria, de la Secretaría General del Movimiento, el jefe de la sección de enseñanza laboral y formación profesional del ministerio de educación, el jefe de la sección de universidades laborales del ministerio de trabajo, el jefe del departamento técnico de la sección de universidades laborales del ministerio de trabajo y el secretario de esta misma sección que actuaba como secretario del consejo. Estatuto de las Universidades Laborales. ministerio de Trabajo. Consejo Técnico de las Universidades Laborales. Madrid, 1956. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, 16, nº 64, pág. 40.

<sup>81</sup> Había de incluir al rector del distrito universitario, el rector de la universidad laboral, el vicerrector, el director de formación religiosa, el consejero delegado de investigaciones de la universidad laboral y un representante del consejo técnico.

<sup>82</sup> Dicha comisión estaba integrada por el presidente, el vicepresidente y el secretario del patronato, el rector, el interventor de la universidad laboral, el gerente, el representante del consejo técnico y cuatro vocales designados por el pleno.

<sup>83</sup> Dicho cargo dependía directa y conjuntamente del ministerio de Trabajo y del de Educación y podía ser nombrado y separado libremente en función de acuerdo entre los dos departamentos.

<sup>64</sup> Sus competencias estaban ligadas a la administración del patrimonio de la universidad, a la colaboración con el rector y el interventor de la universidad en la redacción del presupuesto general de gastos.

<sup>65</sup> Su función era ejercer las funciones de la secretaría general en caso de vacante, la formación anual del inventario del material de la universidad, la custodia de edificios y material así como la jefatura del personal subalterno.

<sup>66</sup> El mayor número (6) pertenecía al área de Educación Física y Deportes. Esquema de la Organización docente de las Universidades Laborales, 1957. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, 64, nº 5.

<sup>67</sup> Estatuto de las Universidades Laborales. ministerio de Trabajo. Consejo Técnico de las Universidades Laborales. Madrid, 1956. A.G.A.; S.T.; I.D.D. 1.16, 16, nº 64, pág. 65.

## Conclusiones.

La época que hemos intentado estudiar está irremediablemente unida a la vida política de un hombre que, como Girón de Velasco, dirigió el ministerio de Trabajo durante casi 17 años. Girón fue, en el pleno sentido de la palabra, un hombre de acción. Falangista, terrorista y hombre de guerra, dió a su labor al frente del ministerio de Trabajo un sesgo directamente relacionado con su pasado. Este rasgo de su personalidad debió de influir de manera muy notable en su acción política en el sentido de dotarla de un carácter impulsivo que en la mayoría de las ocasiones no generaba los resultados inicialmente apetecidos. Por otro lado, su profunda fe en el general Franco, le convirtió en uno de los más activos propagandistas del régimen, lo cual vino a potenciar más todavía la notable distancia entre los proyectos del ministerio de Trabajo, la forma y el fondo en que el mencionado ministerio los pretendía presentar ante los españoles y los resultados efectivos, cuestión sobre la que éste doctorando ha pretendido hacer un especial hincapié. Este aspecto ha sido uno de los que con más claridad se han puesto de manifiesto a lo largo de la investigación.

La función del ministerio de Trabajo y de la organización sindical consistía en generar lazos de adhesión al régimen por medio de la obra social coadyuvando de esta forma a aplastar cualquier posible conflicto social. El franquismo se había legitimado fruto del resultado de una guerra y con un discurso articulado en torno a la necesidad de salvar a España de todos sus males. Entre estos males se encontraba, naturalmente, el problema social en un sentido genérico. En consecuencia, la tarea de los dos mencionados organismos consistía en ganarse al pueblo español por medio de la elevación de su nivel de vida. La incapacidad inicial para ejecutar esta tarea hizo de ambos organismos meros instrumentos de propaganda, y así una nota distintiva de la política social del régimen fue la escasa relación entre los propósitos plasmados en las manifestaciones solemnes de sus más capacitados representantes y el producto final de sus políticas. Este resultado afectó más si cabe a la organización sindical que al ministerio de Trabajo, pues en última instancia aquélla era un simple organismo subalterno que ejercía las funciones que el ministerio de Trabajo decidía delegar en la misma explicitando la paulatina pero imparable pérdida de peso del falangismo dentro del régimen, aspecto del que la política del propio Girón fue un buen ejemplo.

No parece intrascendente el hecho de que en plena guerra civil se promulgara la carta magna del franquismo en su vertiente social. Con el Fuero del Trabajo se realizaba una gran promesa (la "gran promesa") al pueblo español. Ésta pretendía inculcar a la población que la preocupación básica de uno de los bandos (el nacional, por supuesto) se centraba en los problemas sociales de los españoles. El franquismo, por tanto, se vio obligado a nacer con una marcada preocupación social como fórmula para dotar al régimen de un aspecto más aceptable y menos

retrógrado si bien, en modo alguno, los presupuestos más radicales del falangismo originario se plasmaron en dicho fuero. En cualquiera de los casos, el Fuero del Trabajo pretendía exponer una serie de puntos básicos sobre los cuales habría de estructurarse el mundo de lo social una vez se produjera la victoria del bando franquista.

Bajo nuestro punto de vista la idea central que, formalmente, articulaba el mensaje social del franquismo era la necesidad de proteger a la familia. Pero a la familia en su sentido más tradicional; a la familia como unidad básica de socialización de futuros adeptos al régimen en el que la diferenciación de funciones promovida por el nuevo ordenamiento legal posibilitara que el varón se constituyera en el cabeza de familia y la mujer en la fiel servidora del primero. Partiendo de este hecho, al hombre se le concebía en exclusiva como el soporte económico y material de la familia y, en consecuencia, como el único miembro de la misma relacionado con el mundo del trabajo remunerado. Por contra, a la mujer se le asignaba el papel de la procreación y de la socialización de unos futuros españoles que habían de ser educados según los valores tradicionales que el régimen propugnaba, entre los que podemos citar el catolicismo como factor básico de cohesión social. Así pues, el padre español había de preocuparse del sustento económico de su familia y la madre de generar buenos católicos y fieles franquistas. Éste, evidentemente, era el planteamiento meramente formal que vertebraba el discurso del franquismo. La realidad era bien distinta. Pese a la construcción jurídica que pretendía apartar a la mujer del taller y de la fábrica, la realidad era que, ante el acuciante descenso del nivel de vida de las familias españolas, las mujeres se incorporaban al mundo del trabajo soslayando los impedimentos legales y burlando las trabas burocráticas siempre que podían. Es más, ya en la década de los cincuenta surgieron voces que denunciaban la incorporación paulatina de la mujer a puestos de trabajo sin que la causa fuera necesariamente la necesidad de complementar el salario del varón.

Así pues, el sueño de dar a luz una realidad "paradisiaca" como la que acabamos de relatar no llegó a buen puerto. La idea originaria de desarrollar el salario familiar como fórmula para llegar a esa meta no se materializó en la medida en que dicho sueño no posibilitó la elevación en términos reales del nivel de vida de los españoles. El llamado subsidio familiar, de hecho, no fue más que otro de aquellos complementos salariales ideados para contrarrestar la pérdida sistemática de poder adquisitivo de las retribuciones de los trabajadores, sin que por otro lado supusiese una mejora en el nivel de vida de las familias españolas si comparamos su peso en la economía familiar desde su puesta en funcionamiento hasta el final de la década de los cincuenta.

Los resultados del plus familiar y la política de protección a las familias numerosas estuvieron en línea con la labor realizada a través del subsidio familiar. El primero nació como un



sobresueldo complementario del trabajo si bien su eternización era poco comprensible puesto que debía realizar una función análoga a la del subsidio. En cuanto a la familia numerosa, los beneficios concedidos a las mismas eran verdaderamente limitados y cuando no insignificantes porque no se desarrollaban las normas reglamentarias pertinentes o porque, cuando se desarrollaban éstas, eliminaban los beneficios concedidos por la ley.

Si hemos dicho que la base fundamental del Nuevo Estado había de ser la familia y si el potencial de aquél se ligaba a la fuerza moral y física de la segunda, resultaba coherente la pretensión de que la familia fuese un reducto de valores tradicionales considerados como irrenunciables y que tuviese como función la procreación y la socialización de nuevos españoles que fortaleciesen al Estado. Para ello había nacido el subsidio familiar; para facilitar el sustento de la familia partiendo de una concepción formal diferenciada de lo que debía ser el trabajo y el salario.

De nuevo aquí encontramos una diferencia notable entre los postulados teóricos y las ejecuciones prácticas. El mundo del trabajo constituía la fuente básica de los conflictos sociales. Conflictos que eran percibidos por el franquismo como el embrión de la destrucción de su idea de España. El conflicto había de ser estirpado y, en consecuencia, una de las funciones básicas del Nuevo Estado consistía en erradicarlo en la medida de sus posibilidades. Así, el régimen comenzó por monopolizar de forma absoluta el control de las relaciones laborales por medio de las reglamentaciones del trabajo. Se pretendía con ello extraer del ámbito de la negociación individual las relaciones contractuales en el marco de la empresa. Se defendía la idea de que dicho planteamiento serviría básicamente para defender al trabajador de la explotación del empresario. Sin embargo, la promulgación de las reglamentaciones era una atribución exclusiva del ministerio de Trabajo. Y decimos exclusiva, porque la intervención de la organización sindical en este ámbito de la política social era (como otras muchas) meramente simbólica. En cualquiera de los casos, el acceso de los trabajadores a la fijación del marco de relaciones laborales en el que se iban a desenvolver era escaso y cuando no, nulo.

Las reglamentaciones del trabajo fueron otro de los aspectos que pusieron de manifiesto el fracaso de la política social del régimen. La autarquía, a la que iba irremediabilmente unida el "reglamentarismo" en el ámbito laboral, dió paso al final de la década de los cincuenta al Plan de Estabilización y las reglamentaciones establecidas por el ministerio de Trabajo a los convenios colectivos. Pese a que el control de las relaciones laborales era una de las notas distintivas del estado autoritario nacido de la guerra civil, la organización sindical fue uno de los focos desde los que con más fuerza se defendió la necesidad de superar el marco establecido por las reglamentaciones. Muy probablemente, entre las motivaciones existentes para que desde la organización sindical se defendiera dicha postura, estaba el deseo de adquirir un mayor

protagonismo en la articulación de las relaciones del trabajo. Sin embargo, el hecho de que, teóricamente, la organización fuera uno de los últimos reductos del falangismo viejo hacía más incomprensible el hecho de que fuera el sindicato el que apostara por abrir la nueva etapa de los convenios colectivos. Ello, era otra muestra de que la organización sindical, no era más que un cuerpo burocrático que en modo alguno hacía la función de guardian de las viejas esencias ideológicas del régimen nacido el 18 de julio de 1936.

Eran las reglamentaciones las que debían servir para aplicar un nuevo concepto del trabajo. Sin embargo, el trabajo era la base fundamental de la riqueza nacional y siendo el Estado franquista la meta suprema a la que había de servir, las reglamentaciones del trabajo se distinguieron por el sometimiento de la mano de obra a las directrices emanadas desde el ministerio de Trabajo. Así pues, el trabajo, en vez de constituirse en un elemento de armonización social y de hermanamiento entre los empresarios y los trabajadores siguió siendo un factor generador de conflictos. Esa conflictividad tenía su origen, entre otros aspectos, en un nivel de vida condicionado por unos salarios que perdían capacidad adquisitiva en la medida en que el proceso inflacionario se acrecentaba, ante lo cual el ministerio de Trabajo sólo ideó básicamente dos fórmulas (a cual más inútil) para refrenar ligeramente sus efectos. En primer lugar, los pluses, que nacidos como una fórmula transitoria, perduraron durante todo el primer franquismo; y en segundo lugar, las subidas de salarios base de las reglamentaciones, de entre las cuales la más significativa se llevó a cabo durante el año 1956, siendo uno de los factores que provocó la salida de Girón del ministerio de Trabajo.

Otra fórmula tendente a armonizar a la sociedad española fue el cooperativismo. Sin embargo, la supuesta finalidad económica de dichas entidades era paralela a la obsesión del régimen por no dejar ningún resquicio a la libertad de los miembros de las mismas controlando la cadena de mando de las cooperativas y más concretamente los puestos relevantes dentro de las mismas. Es decir, de igual manera que en el caso de las reglamentaciones del trabajo, se defendía el desarrollo del cooperativismo como factor imprescindible para el desenvolvimiento de la economía nacional mientras que, por otro lado, se estaba sometiendo la libre iniciativa de las partes al control exhaustivo del Estado. Y ello en función de la mentalidad de guerra civil que hacía ver detrás de cualquier pequeño espacio de libertad la sombra de los calificados como enemigos de España y de los males que se habían derrotado en la guerra civil.

Magistraturas y jurados de empresa fueron otros dos ejemplos de los mecanismos utilizados por el franquismo para intentar armonizar la sociedad española y para evitar en lo posible la explicitación de los conflictos laborales. Ambas instituciones fueron acogidas con frialdad por el mundo del trabajo y, especialmente, la evolución de los jurados de empresa demostró la falta de voluntad por parte del régimen para otorgar a los trabajadores pequeñas parcelas que

posibilitaran la defensa de sus derechos. Como en el caso de las cooperativas, la preocupación básica del régimen fue la de controlar a los miembros de los jurados evitando en lo posible que pudieran acceder a ellos elementos abiertamente desafectos al régimen depurando por vías legales o ilegales las listas electorales o posibilitando resultados que fueran lo más favorable posible a los intereses de la empresa. La tendencia de los trabajadores a obviar la presencia de los enlaces sindicales y de los jurados y a plantear directamente o por medio de otras instancias sus reclamaciones puso claramente de manifiesto la percepción extendida entre los obreros de que, básicamente, los jurados no eran más que otro instrumento tendente a examinar e intervenir su conducta.

Sobre el trabajador se extendía el peligro del riesgo en cualquiera de sus variantes. Para ello desde el ministerio de Trabajo se desarrolló una política tendente a dotar al obrero de un aparato de previsión social que, ante el infortunio, le permitiera sobrevivir a él y (teóricamente) a su familia. Nota distintiva de este aparato de previsión social era el hecho de que se constituyó como un conjunto descoordinado de seguros. En modo alguno se puede hablar seguridad social dado que, aparte de otras consideraciones, no se desarrolló sobre un campo de aplicación universal. Los seguros sociales creados o desarrollados durante la época de Girón de Velasco tuvieron un soporte profesional y las únicas esperanzas de universalización fueron los leves retoques técnicos que, con el ansia de establecer el llamado seguro total, se llevaron a cabo durante este período. Era el trabajo el que daba acceso a prestaciones las más de las veces insignificantes. Aparte de esta consideración hay que tener en cuenta que, partiendo de este criterio profesional, hubo sectores (fundamentalmente los trabajadores del campo) que se vieron apartados de los beneficios que otorgaban los mencionados seguros. No existía un aparato administrativo capaz de extender los seguros a una España que, en parte muy importante, dependía laboralmente del campo. No existió voluntad de desarrollar una política fiscal con la finalidad de redistribuir justamente la riqueza nacional. Y pese a la apología sistemática del hombre del campo, como el más seguro centinela de los valores tradicionales de lo que se entendía como español, aquél, en estos momentos en que se daban algunos de los primeros y titubeantes pasos de la previsión social en España, se vio apartado de sus beneficios.

El paso de mayor calado que se dió en el orden de la previsión fue la promulgación y puesta en funcionamiento de la ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad. Es incuestionable el hecho de que España había avanzado extraordinariamente poco en el ámbito de la sanidad pública. Sin embargo, como en el caso de otros seguros, el campo de aplicación de éste fue mucho menor de lo que en principio pudiera parecer. De igual manera, hay que considerar que el aparato estadístico del primer franquismo se encontraba en estado de subdesarrollo y que, dada la función de legitimación de la política social, las estadísticas eran manifiestamente hinchadas o desinfladas en función de las necesidades del régimen. Así pues, como en otros casos, las

estadísticas del S.O.E., tras su cotejo con otras fuentes, evidenciaban la diferencia entre los pronunciamientos formales y las ejecuciones prácticas del ministerio de Trabajo, aspecto que sobresale a la hora de analizar el Plan Nacional de Instalaciones del S.O.E.

Por otro lado, hay que señalar que el aparato de previsión estaba especialmente diseñado para potenciar la actividad laboral a base de otorgar prestaciones que malamente podían permitir sobrevivir a una unidad familiar de tipo medio. Así, pese a los discursos pomposos del ministro de Trabajo, la previsión social española perderá muy lentamente los marcados rasgos benéfico-caritativos más propios de la beneficencia del siglo pasado. Esta falta de voluntad para extender los beneficios de los seguros sociales provocó el peculiar fenómeno de que en España se avanzara en este período de la política de previsión pública hacia la mutualidad, camino opuesto al desarrollo lógico de la previsión social, demostrando la incompetencia del sistema para compensar con aportaciones públicas la carencia de salarios ante el infortunio. Las mutualidades se desarrollaron, en parte, con la finalidad de compensar las exiguas prestaciones que concedía el Estado. Sin embargo, su campo de aplicación fue todavía más restringido que el de los seguros centrándose, en general, en grupos concretos de trabajadores. En cualquiera de los casos, las mutualidades se convirtieron en potentes entidades económicas hasta el punto de que uno de los sueños de Girón, las universidades laborales, se construyeron (básicamente) con la aportación de las mismas.

Estas instituciones de enseñanza pretendieron ser un monumento de exaltación al régimen. Independientemente de otras funciones, las universidades (especialmente la de Gijón) ejercían la función de las pirámides del Egipto faraónico y, por tanto, nacían con la idea de eternizar la tarea social del régimen y especialmente la de su ministro de Trabajo, Girón de Velasco. La grandeza con que se concibieron y la imitación de lo clásico, hacen de la Universidad Girón de Velasco un canto de autoalabanza a los nuevos dioses del Olimpo.

Ciertamente en un contexto de progresiva industrialización se necesitaba una vivificación de la formación profesional pese a lo cual las universidades laborales vinieron a añadir más confusión a un panorama ya de por sí desconcertante con un sinfín de atribuciones desperdigadas entre diversos ministerios y organismos. Evidentemente, si a la madre en el hogar le correspondía socializar adecuadamente al niño haciendo de él un buen cristiano y un devoto franquista, las universidades laborales se diseñaron para hacer también de aquellos estudiantes leales seguidores del régimen.

Como se ha dicho el punto central de esta construcción era la familia; una "nueva" familia protegida por un nuevo concepto formal del salario que había de responder a un nuevo enunciado de lo que se entendía por trabajo y relaciones laborales. Relaciones laborales

articuladas por medio de las reglamentaciones del trabajo, con una única finalidad: evitar el conflicto. La familia o el concepto de familia que defendía el franquismo social, requería soportes reales para su supervivencia. Es decir, la familia, independientemente del concepto formal predominante en torno al salario o el trabajo, necesitaba de forma efectiva un puesto de trabajo. Era la legitimidad del régimen lo que se estaba jugando y por consiguiente era éste el aspecto más vidrioso para el ministerio de Trabajo y para la organización sindical. Pensamos que en el apartado dedicado al paro ha quedado claro que, como en otras cuestiones, existía una marcada voluntad política por minimizar la repercusión del paro y de ahí la importante y constante diferencia entre las cifras oficiales y las aproximaciones que los propios organismos del franquismo realizaban para intentar tener una idea más cercana a la realidad. El hecho de que desde estos mismos organismos se reconociera que se controlaba sólo una pequeña parte del paro efectivo y de que existieran importantes y evidentes motivaciones políticas para oscurecer lo más posible dicha realidad, creemos que nos permite afirmar que las cifras de paro eran todavía mayores que las que hemos estimado en este estudio; y más si tenemos en cuenta que, en líneas generales, cuando hemos cotejado las cifras oficiales con la estimadas hemos utilizado aquellas donde el número de parados era menor y pese a ello, tal y como se ha mostrado en el apartado correspondiente, podemos multiplicar las cifras oficiales por más de dos (como mínimo) y, en algunos casos, por más de veinte. Pese a ello durante el primer franquismo, y en el marco del aparato de previsión social, no se tomó la iniciativa de poner en práctica un seguro de paro eficaz, llevándose a cabo políticas parciales en sectores muy concretos de la economía que ante el peso del desempleo no se dejaron prácticamente sentir.

En último lugar, la familia necesitaba para ejercer su función un sostén material. La vivienda era el escenario físico en el que aquella había de ejercer la función encomendada por el Estado. La vivienda era otra de las demandas que el régimen había de satisfacer para cerrar el círculo teórico de protección material en torno a la familia. Sin embargo, hay que esperar a la mitad de la década de los cincuenta para que comience a ejecutarse el I Plan Nacional de la Vivienda. Un plan que por otro lado, no sirvió para complacer las esperanzas inicialmente puestas en él. Y menos todavía si analizamos con un criterio cualitativo las construcciones llevadas a cabo, la calidad de los materiales, las dotaciones y equipamientos, la urbanización previa de las zonas a construir (habitualmente inexistente), la relación calidad-precio o el tamaño de las viviendas. En definitiva, la política de viviendas vino a poner de nuevo en evidencia las significativas diferencias entre los discursos propagandistas y la cruda realidad de un déficit de viviendas que se acrecentaba a media que los procesos migratorios del campo a la ciudad aumentaban generando focos de chavolismo y marginación en torno a las grandes ciudades.

Al final de este intento de estudio de un aspecto no muy investigado de la historia del régimen del general Franco creemos haber constatado la discrepancia existente entre el discurso formal

del régimen en su vertiente social y la obra finalmente ejecutada. La historia de la política social del primer franquismo, partiendo de la comparación de ambas vertientes, se presenta como la historia de un fracaso. Un fracaso fundamentado en esa zanja que separaba las manifestaciones voluntariosas de las ejecuciones prácticas que en modo alguno supone obviar la labor llevada a cabo en campos como, por ejemplo, el de la previsión social donde la tarea realizada en anteriores periodos de la historia de España había sido escasa o nula.

## **Fuentes y bibliografía consultada.**

### **1.- Fuentes de archivo utilizadas.**

#### *Archivo de Presidencia del Gobierno (A.P.G.):*

1. Sección de Presidencia del Gobierno (S.P.G.):
  - 1.1. Junta de Defensa Nacional (J.D.N.).
  - 1.2. Secretaría del Ministro Subsecretario (S.M.S.).
2. Sección de Jefatura del Estado-Varios ministerios(J.E.).

#### *Archivo General de la Administración (A.G.A.):*

1. Sección de Trabajo (S.T.):
    - 1.1. Junta Nacional de Paro.
  2. Sección de Sindicatos (S.S.):
    - 2.1. Organización Sindical.
- I.D.D. 40 a 93. D.N.S.-Servicios (1932-1986):
- Congreso Sindical.
  - Consejo Económico Sindical.
  - Secretaría General.
  - Servicio de Colocación.
  - Consejo Económico Sindical.
  - Consejo Nacional de Trabajadores.
  - Vicesecretaría Nacional de Ordenación Social.
  - Servicio de Seguridad Social.
  - Delegado Nacional de Sindicatos.
  - Vicesecretaría Nacional de Obras Sindicales.
- I.D.D. 136. Organización Sindical (Fondo Azucenas). Conocido como Azucenas por haber estado depositado en un almacén sito en la calle Azucenas de Madrid, este fondo comprende la documentación producida por las instituciones encuadradas dentro de esa organización entre la década de los 40 y los 50 transferida al A.G.A. por la A.I.S.S. (Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales). La documentación utilizada proviene de los siguientes organismos:
- Delegación Nacional.

O. S. de Colonización.

O. S. de Formación Profesional

O. S. Previsión Social.

O. S. 18 de julio.

Secretaría Nacional.

Vicesecretaría Nacional de Obras Sindicales.

## 2.2. Obras Sindicales.

- I.D.D. 1 al 9. Obras Sindicales, 1927-1978. Existe documentación utilizada de los siguientes organismos:

O. S. Colonización.

O. S. Cooperación.

O. S. Formación Profesional.

O. S. Hogar y Arquitectura.

O. S. Previsión Social.

O. S. 18 de julio.

- I.D.D. 129. Obras Sindicales (1935-78) Contiene:

O. S. Artesanía.

O. S. Colonización.

O. S. Formación Profesional.

## 3. Sección de Educación (S.E.).

### 3.1. Dirección General de Enseñanza Laboral.

## 2.- Fuentes documentales publicadas.

*Actas de las II Jornadas de Investigación interdisciplinaria sobre la mujer.* Madrid, Universidad Autónoma, 1984.

*Actos celebrados con motivo de la Asamblea General de la Unión Nacional de Cooperativas del campo.* Madrid, 1958.

*Anuario Estadístico de España.* Madrid, I.N.E.

*Anuario del Instituto Nacional de Previsión, 1946-47.* Madrid, I.N.P., 1947.

*Aranzadi. Nuevo Diccionario de Legislación.* Pamplona, Aranzadi, 1976.

*Aranzadi. Repertorio cronológico de legislación.* Pamplona.

*I Asamblea General del I.N.P.* Madrid, Ministerio de Trabajo, 1953.



*Boletín Oficial del Estado* (B.O.E.).

*Boletín Oficial del Movimiento* (B.O.M.)

*Censo de edificios y viviendas de 1950*. Madrid, I.N.E., 1953, 2 vol.

*Conclusiones del I Congreso de la familia española*. Madrid, ed. del Congreso de la familia española, 1959.

*Conclusiones del II Congreso de la Familia Española*. Madrid, ed. C.F.E., 1962.

*Congreso de Padres de Familias Númerosa*. Revista de Trabajo, Madrid, 1956.

*I Congreso Nacional de Trabajadores. Conclusiones*. Delegación Nacional de Sindicatos; Vicesecretaría Nacional de Ordenación Social. 1946.

*I Congreso Iberoamericano de Seguridad social*. Madrid, 1951.

*Constitución de la II República Española*. Madrid, ed. García Rico, 1993.

*Datos asistenciales del Seguros Obligatorio de Enfermedad correspondientes a la Provincia de Ciudad Real*. Ciudad Real, Ministerio de Trabajo, 1959.

*Documentos inéditos para la Historia del Generalísimo Franco*. Madrid, Ed. Fundación Francisco Franco, 1994.

*Estudio económico-social de las grasas vegetales*. II Congreso Nacional Oleícola. Jaén, Sindicato Nacional del Olivo, 1956.

*Estudios y conclusiones*. Comisión Provincial de Barcelona, Gabinete técnico, fascículo nº 7, Madrid, ed. C.F.E., 1958.

*Estudios y conclusiones*. Congreso Provincial de Madrid, Gabinete Técnico, fascículo nº 22, Madrid, ed. C.F.E., 1959.

*Estudios y conclusiones*. Congreso Provincial de Vizcaya, Gabinete Técnico, fascículo nº 23, Madrid, ed. C.F.E., 1958.

*Estudios y conclusiones*. Congreso Provincial de Vizcaya, Gabinete Técnico, fascículo nº 26, Madrid, ed. C.F.E., 1958.

*Estudios para un Plan Nacional de la Vivienda*. Presidencia del Gobierno. Secretaría General para la Ordenación Económico-Social (S.O.E.S.), 1954.

*Estudios sobre la economía del aceite*. Madrid, Sindicato Vertical del Olivo, 1945.

Franco, Francisco: "Discurso en su visita al I.N.P., 27 de marzo de 1942." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, núm. 3, vol. 1. 1942.

Franco, Francisco: "La obra social de España." Discurso el 1 de octubre de 1943 ante el Consejo Nacional de F.E.T. de las J.O.N.S., *Revista de Trabajo*, núm. 10, vol. 1, 1943.

Franco, Francisco: "Discurso del Caudillo, 18 de julio de 1944." *Revista de Trabajo*, núm. 7, vol. 2, 1944.

Franco, Francisco: "Discurso ante el Consejo Nacional, septiembre de 1943." *Revista de Trabajo*, núm. 47, vol. 2, 1943.

Girón de Velasco, J. A.: *Ante una ofensiva nacional. El Seguro de Enfermedad visto por quienes lo crean y organizan (discurso)*. Madrid, I.N.P., 1944.

*Informe sobre la explotación de las instalaciones sanitarias del Seguro Obligatorio de Enfermedad*. Madrid, I.N.P., 1959.

*Informe sobre una política coordinada relativa al nivel de vida familiar*. Nueva York, Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 1957.

*II Jornadas técnicas sociales*. Ponencia IX: La ayuda familiar en el régimen de prestaciones de la seguridad social. Madrid, Ministerio de Trabajo, 1961.

*Nueva síntesis de ponencias provinciales*. Gabinete Técnico, fascículo nº 21, Madrid, ed. C.F.E., 1959.

*Plan Nacional de Instalaciones Sanitarias*. Madrid, Ministerio de Trabajo, 1951.

*Política familiar. Conclusiones*. II Congreso de la Familia Española. Fascículo nº 9, Madrid, ed. C.F.E., 1962.

O.I.T.: *Desempleo y cambios de estructura*. Ginebra, 1962.

O.I.T.: *Desempleo y seguridad social*. Ginebra, 1976.

Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 1952. *Revista de Trabajo*, septiembre de 1952.

*Síntesis de ponencias provinciales en torno a la familia en la doctrina del Movimiento*. Fascículo nº 13, Madrid, ed. C.F.E., 1958.

*Síntesis de ponencias provinciales en torno a la familia y su protección por el Estado*. Fascículo nº 18, Madrid, ed. C.F.E., 1959.

Universidad Laboral Francisco Franco. *Memoria del Curso 1957-58*. Tarragona, 1959.

Universidad Laboral José Antonio Primo de Rivera. *Memoria del curso académico 1957-58*. Sevilla, 1958.

### 3.- Bibliografía.

Aguirre Lostau, Joaquín: "El reconocimiento médico en la silicosis y el art. 34 de la ley de accidentes del Trabajo en la industria." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, núm. 7, vol. 2, 1946.

- Aguirre Lostau, Joaquín y Álvarez Valdés, Camilo: "Importancia social de la función médica en la silicosis." *Revista Española de Seguridad Social (Revista Española de Seguridad Social)*, núm. 4, vo. 1, 1947.
- A. Huerta, S. J.: *Guía de la Universidad Laboral J. A. Girón. Gijón*, 1966.
- Alba, Víctor: *Historia de la Resistencia Antifranquista*. Barcelona, Planeta, 1978.
- Albarrán Olivera, Antonio Jorge: *Empresas obligadas a construir*. Madrid, ed. Afrodiseo Aguado, 1957.
- Albentosa Puche, Luis: *El paro en España*. Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1983.
- Alonso García, Manuel: *Política social española en relación con la familia*. Madrid, Ed. del Congreso de la Familia Española, 1958.
- Alonso Olea, Manuel: *Instituciones de Seguridad Social*. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1959.
- Alonso Olea, Manuel y otros: *La ayuda familiar en el régimen de prestaciones de la seguridad social*. En las II Jornadas Técnicas Sociales, Madrid, 1961.
- Alonso Olea, Manuel: *Política social española en relación con la familia*. Madrid, ed. C.F.E., 1958.
- Alonso Olea, Manuel: "Salarios y seguridad social." *Revista Iberoamericana de Seguridad Social*, núm. 2, 1953.
- Alonso Olea, Manuel: "Salarios y seguridad social." *Revista Iberoamericana de Seguridad Social*, núm. 3, 1954.
- Alonso Olea, Manuel: "Salarios y seguridad social." *Revista Iberoamericana de Seguridad Social*, núm. 2, 1955.
- Alonso Olea, Manuel: "Salarios y seguridad social." *Revista Iberoamericana de Seguridad Social*, núm. 2, 1956.
- Alonso Olea, Manuel: "Salarios y seguridad social." *Revista Iberoamericana de Seguridad Social*, núm. 1, 1957.
- Álvarez Ude, José: *Los criterios financieros de los seguros sociales*. Madrid, Ministerio de Trabajo, 1946.
- Andrés Bueno, Vicente de: "El concepto actual de enfermedad profesional." *Revista de Trabajo*, núm. 12, vol. 1, 1942, pág. 17.
- Aparicio, Miguel A.: *El sindicalismo vertical y la formación del Estado franquista*. Barcelona, Eünibar, 1980.
- Arco Álvarez, José Luis del: *Temas cooperativos*. Madrid, O.S. de Cooperación, 1963.

- Arias García-Braga, Luis: "El problema del paro y sus soluciones: algunas cuestiones en torno a la implantación del seguro." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, núm. 12, 1946.
- A. Ritter, Gerhard: *El Estado social, su origen y desarrollo en una comparación internacional*. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991.
- Arnaldos Jimeno, Pedro: "Aspectos sociales de la valoración de incapacidades en el seguro de accidentes del trabajo." *Revista de Trabajo*, núm. 1, 1950.
- Arnaldos Jimeno, Pedro: "Extensión de los seguros sociales obligatorios al personal del servicio doméstico." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, núm. 4, vol. 1, 1946.
- Arnaldos Jimeno, Pedro: "La unificación de los seguros sociales y el seguro de accidentes de trabajo." *Revista Española de Seguridad Social*, 1947, núm. 10.
- Arnaldos Jimeno, Pedro: *Los seguros sociales en los estados totalitarios*. Madrid, I.N.P., 1941.
- Arrese, José Luis de: *Una etapa constituyente*. Barcelona, Planeta, 1982.
- Artola, Miguel (dir.): *Enciclopedia de Historia de España*. VI vol.. Madrid, Alianza Editorial, 1993.
- Asenjo Martínez, José Luis: "Consideración estadística del paro español." En *De economía*, año VI, nº 22, enero-febrero 1953.
- Avilés García, José: "Algunos efectos económicos del Mutualismo laboral." *Cuadernos de Previsión Social*, núm. 7, 1954.
- Avilés Caballero, Julián-Ángel: *La silicosis de los mineros y sus problemas médico-legales*. Oviedo, 1969.(815d)
- Aznar, Severino: "El sistema de reparto o el de capitalización en los seguros sociales." *Revista Española de Seguridad Social*, núm. 1-2, vol. 1, 1947.
- Aznar Embid, Severino: *Del salario familiar al seguro familiar*. Santander, Ministerio de Organización y Acción Sindical, 1939.
- Aznar Embid, Severino: *El seguro de enfermedad y los médicos*. Madrid, I.N.P., 1934.
- Aznar Embid, Severino: "El sistema de reparto o el de capitalización en los seguros sociales." *Revista Española de Seguridad Social*, núm. 1-2, vol. 1, 1947.
- Aznar Embid, Severino: "La caridad y el seguro social." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, núm. 5, vol. 1, 1946.
- Aznar Embid, Severino: *Las fronteras de los seguros sociales*. Madrid, I.N.P., 1942.

- Aznar Embid, Severino: "Los peligros del seguro de enfermedad y su inspección sanitaria." *Revista Española de Seguridad Social*, núm. 12, vol. 2, 1948.
- Aznar Embid, Severino: *Los seguros sociales*. Madrid, Instituto de Estudios Político 1947.
- Aznar Embid, Severino: "Para quién se ha dado el régimen de subsidios familiar." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, nº 3, vol. 1, 1944.
- Aznar Embid, Severino: "Qué es el régimen de subsidios familiares." *Boletín de Información del I.N.P.*, vol. 1, nº 1, 1944.
- Aznar Gerner, Sara: "El Seguro social de los económicamente débiles." *Revista Española de Seguridad Social*, núm. 1-2, vol. 1, 1951.
- A. Vanderreyd, M: "El subsidio a la madre en el hogar." *Revista de Trabajo*, nº 11/12, vol. 2, nov./dic. 1955.
- Azpiazu, Joaquín: "El trabajo como prima de seguro total familiar." *Revista de Trabajo*, vol. 2, nº 49/50, 1943.
- Bando Casado, Honorio Carlos: *La protección pública de la vivienda en España*. Madrid, Universidad Complutense, 1982.
- Barceló, José Luis: "La seguridad social en la postguerra." *Revista Española de Seguridad Social*, núm. 7-8, vol. 2, 1948.
- Barciela, Carlos: "El mercado negro de productos agrarios en la posguerra, 1939-1953," en Josep Fontana (dir.), *España bajo el franquismo*, Barcelona, Crítica, 1986.
- Barciela, Carlos: "La España del estraperlo.", en García Delgado, J. L. et. al., *El primer franquismo. España durante la segunda guerra mundial*, V coloquio de Historia Contemporánea de España, dirigido por M. Tuñón de Lara, Madrid, Siglo XXI, 1989.
- Baile Florensa, Juan: "Las reglamentaciones de trabajo y la técnica industrial." *Revista de Trabajo*, núm. 6, 1948.
- Bayón Chacón, Gaspar: "La nueva legislación de accidentes del trabajo." *Revista de Derecho del Trabajo*, núm. 15, 1956.
- Bayón, Gaspar: "La nueva reglamentación del Mutualismo Laboral." *Revista del Derecho del Trabajo*, núm. 5, 1954.
- Bellod, Juan José: *La familia en la doctrina del Movimiento*. Fascículo nº 2, Madrid, ed. C.F.E., 1958.
- Benítez Franco, De.: "El seguro de enfermedad y la lucha antituberculosa." *Revista de Trabajo*, núm. 31, vol. 1, 1942.
- Benito del Pozo, Carmen: "Ideología y trabajo. Las relaciones laborales durante el franquismo." *Cuadernos Republicanos*, nº 13, 1993.

- Benito del Pozo, Carmen: *La clase obrera asturiana durante el franquismo*. Madrid, Siglo XIX, 1993.
- Bermejo, Francisco: "Economía y justicia social." *Revista de Trabajo*, núm. 5, vol. 1, 1950.
- Bernal Martín, Salvador: "Los trabajadores eventuales y el seguro obligatorio." *Revista Española de Seguridad Social*, núm. 10, vol. 2, 1948.
- Bestard Comas, Juan: "Un precursor de los subsidios familiares en España: El P. Bartolomé Quetglas." *Revista Iberoamericana de Seguridad Social*, separata del nº 5, septiembre-octubre de 1964.
- Beveridge, William: *Full employment in a Free Society*. Londres, 1944.
- Beveridge, William: *Seguro social y servicios afines*. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad, 1989.
- Bikkal, Dénes: "La seguridad social en España." *Revista Iberoamericana de Seguridad Social*, núm. 3, 1954.
- Blanco Rodríguez, Juan Eugenio: "El Mutualismo Laboral en la doctrina española." *Cuadernos de Previsión Laboral*, núm. 7, 1954.
- Borrajó, Efrén: *Política social. Madrid*. Madrid, Doncel, 1959.
- Borrajó Dacruz, Efrén: *Revisión y actualización de la ley de familias numerosas*. Unión Nacional de Asociaciones Familiares, Cuadernos de documentación, 1967.
- Bosch Aymerich, Alfonso: *El paro obrero*. Madrid, ed. Fe, 1941.
- Bosch Aymerich, Alfonso: *El paro obrero*. Barcelona, Instituto de Investigaciones Económicas, 1941.
- Bosch Marín, Juan: *Asistencia médico-social en Madrid*. Madrid, Ministerio de Gobernación, 1948.
- Bosch Marín, Juan: "Asistencia tocología prestada por el S.O.E. durante el año 1955." *Revista del Seguro de Enfermedad*, nº 27, junio de 1956.
- Bosch Marín, Juan: *Como ha resuelto la Italia de Mussolini el problema demográfico*. Madrid, Ministerio de Gobernación, 1942.
- Bosch Marín, Juan: *De qué mueren los niños de España*. Madrid, ed. Ministerio de Gobernación, 1950.
- Bosch Marín, Juan: "Maternidad, infancia y seguridad social." *Revista del Seguro de Enfermedad*, nº 5-6, ag./sept. 1954.
- Bosch Marín, Juan: "Política familiar y sanitaria." *Práctica Médica*, nº 113, agosto de 1952.
- Bosch Marín, Juan: "Seguro de Maternidad." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, núm. 8-9, vol. 2, 1942.

- Bosch Marín, Juan: *Trabajo, maternidad y lactancia*. Madrid, ed. I.N.P., 1943.
- B. Puig, Juan: "El trabajo femenino en la industria textil." *Revista de Trabajo*, nov./dic. 1945, vol. único, nº 11/12.
- Bouthelier, Antonio: "En torno al problema del paro forzoso en España." *Revista de Trabajo*, vol. 3, nº 23, septiembre de 1941.
- Buesa, Mikel y Molera, José: "Cambio tecnológico y procesos de trabajo: una aproximación al papel del Estado en la introducción de los métodos de la Organización Científica del Trabajo en la economía española durante los años cincuenta." *Revista de Trabajo*, nº 67-68.
- Bustanza Ugarte, Pedro: *El poder adquisitivo de los salarios en Bélgica, España, Italia y Reino Unido, referido al coste de alimentación*. Madrid, CSIC, 1958.
- Cachimero Sánchez, Benito: "La evolución de la nupcialidad en España (1887-1975)." *Revista Española de Investigaciones Sociológicas (R.E.I.S.)*, nº 20, 1982.
- Cámara, Juan Pedro de la: "El seguro de enfermedad y su tiempo." *Revista Española de Seguridad Social*, núm. 5-6, 1954.
- Campo, Salustiano del: *Análisis de la población de España*. Barcelona, Ariel, 1975.
- Campo, Salustiano del: *La evolución de la familia española en el siglo XX*. Madrid, Alianza Universidad, 1982.
- Campo, Salustiano del y Navarra López, Manuel: *Nuevo análisis de la población española*. Barcelona, Ariel, 1987.
- Campos Nordman, Ramiro: "La política de salarios y la economía nacional," *De economía*, núm. 29, 1954.
- Carr, Raymond y Fusi, J. P.: *España, de la dictadura a la democracia*. Barcelona, Planeta, 1979.
- Casado, Demetrio: "Introducción a los servicios sociales." Madrid, Acebo, 1991.
- Casares, Francisco: "Los seguros sociales: una base de equilibrio y justicia." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, núm. 12, vol. 2, 1943.
- Casas Carnicero, A.: Medicina científica y medicina actual. *Revista del Seguro de Enfermedad*, nº 29/30, ag.-sept. de 1956.
- Catalá Ruiz, Marcelo: *Función política de la política social*. Madrid, Ministerio de Trabajo, 1952.
- Cierva, Ricardo de la: *Historia del franquismo*. Barcelona, Planeta, 1975 y 1978.

- Clavera, Esteban, Monés, Montserrat, Ros Hombravella. *Capitalismo español: De la autarquía a la estabilización (1939-1959)*. Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1973, 2 vol.
- Clínica Nacional del Trabajo, 1933-58*. Madrid, Ministerio de Trabajo, 1959.
- C. Malerbe, Pierre: *La oposición al franquismo 1939-1975*. Madrid, Naranco, 1977.
- Codón, José María: *La familia en el pensamiento de la tradición*. Fascículo nº 31, Madrid, ed. del Congreso de la familia española, 1959.
- "Consideraciones actuales sobre el seguro de enfermedad." *Revista del Seguro de Enfermedad*, núm. 20, 1955.
- Construye tu casa*. Madrid, O. S. del Hogar y de Arquitectura, 1945.
- Cottruelo, Agustín: *La política económica de la vivienda en España*. Madrid, CSIC, 1960.
- Cruz Plaza, Julio de la: "Homenajes a la vejez." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, núm. 12, 1943.
- Cuenca y Gléz.-Ocampo, Juan Antonio de: "Cotización de primas en la seguridad social." *Revista Española de Seguridad Social*, núm. 1-2, vol. 1, 1951.
- Dantín Gallego, J.: "Coordinación de los trabajos de salvamento y profilaxis general del accidente." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, núm. 7-8, 1945.
- Dantín Gallego, Juan: *La nueva organización oficial del seguro de silicosis*. Madrid, I.N.P., 1942.
- Dantín Gallego, J.: "Posibilidades de la higiene del trabajo en los nuevos seguros sociales." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, núm. 8-9, vol. 2, 1944.
- Díaz Martín, Julio Antonio: "Estudio comparativo del Seguro de Enfermedad." *Revista Española de Seguridad Social*, núm. 4, vol. 2, 1949.
- Díaz Rodríguez, M<sup>a</sup> del Carmen y Martín Ruiz, Juan Francisco: *Población, empleo y paro en Canarias*. Las Palmas de Gran Canaria, 1983.
- Domínguez Ortiz, Antonio: "Notas sobre la capacidad de poblamiento de España." *Revista de Trabajo*, vol. 2, nº 11/12, nov./dic. 1944.
- Domínguez y Tenreiro, Francisco: "Necesaria coordinación entre la política económica y la de seguridad social." *Revista de Trabajo*, núm. 6, vol. 1, 1953.
- E. Ashford, Douglas: *La aparición de los estados de bienestar*. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989.
- Edificios sanitarios para el Seguro de Enfermedad*. Madrid, I.N.P., 1947.
- Ellwood, Sheelagh: *Prietas las filas*. Barcelona, Crítica, 1984.
- Elorriaga, Gabriel: *Dinámica familiar española*. Madrid, Cuadernos de Investigación, 1963.



- Elorriaga, Gabriel: *Acción familiar*. Madrid, ed. C.F.E., 1961.
- Elorrieta y Artaza, Tomas. *La carta del Atlántico y la carta de Filadelfia*. Madrid, 1945.
- "El subsidio de vejez y el servicio doméstico." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, núm. 1 y 2, 1941.
- "El subsidio familiar no debe tributar por impuesto de utilidades." *Revista de Trabajo*, vol. 2, n° 9, sept. 1952.
- Equipo Mundo: *Los 90 ministros de Franco*. Barcelona, Dopesa, 1970.
- Espinosa Poveda, Arturo: *Las relaciones laborales en el campo*. Madrid, 1949.
- "Espíritu y apariencia en las Instituciones Sanitarias del S.O.E." *Revista del Seguro de Enfermedad*, núm. 19, 1955.
- Fagoaga G. Solana, Miguel: "El plus familiar y el impuesto de utilidades." *Cuadernos de Política Social*, n° 15, 1952.
- Farré-Escofet, Emili: "Inflación y bloqueo de la inversión (1939-1953)." *Banca Catalana*, núm. 57, 1980.
- Fernández, Alberto: *El paro*. Madrid, ed. Mañana, 1977.
- Fernández-Arias, Carlos: "La Teoría General, el paro encubierto y la política fiscal." En *De economía*, año IV, suplemento monográfico n° 1, marzo-abril 1951.
- Fernández de Castro, Ignacio: *Del paternalismo a la justicia social*. Madrid, Euramérica, 1956.
- Fernández Fernández, José María: *Realizaciones de la O. S. del Hogar en construcción industrializada*. Madrid, 1976.
- Fernández Gléz., Víctor: "En torno al concepto de la seguridad social." *Revista de Trabajo*, núm. 3, vol. 1, 1945.
- Fernández González, Víctor: "Seguridad social y libertad." *Revista Iberoamericana de Seguridad Social*, núm. 2, 1954.
- Fernández Gléz. Víctor y Martí Bufill, Carlos: *La política de Seguridad Social Española y sus realizaciones*. Madrid, Ministerio de Trabajo, 1953.
- Fernández Heras, Amado y Fernández Mendiola, Amado: *Derecho laboral y seguridad social*. Madrid, Gráficas Reunidas, 1960.
- Fernández Heras, Amado: *Índice de reglamentaciones de trabajo y estatutos de mutualidades laborales*. Zaragoza, 1955.
- Fernández Heras, Amado: *Normas únicas para aplicación del plus familiar*. Madrid, 1959.
- Fernández Heras, Amado: *Tratado Práctico de legislación social*. Zaragoza, 1952.

- Ferner, Anthony y Fina, Lluís: "La dinámica salarías durante el franquismo. El caso de R.E.N.F.E." *Revista de Historia Económica*, nº 1, vol. 6, 1988.
- Ferri, Llibert; Muixí, Jordi; Sanjuán, Eduardo: *Las huelgas contra Franco*. Barcelona, Planeta, 1978.
- Figuerca Martínez, Emilio de: "¿Es aplicable a España la teoría del pleno empleo?" En *De economía*, año IV, suplemento monográfico nº 1, marzo-abril 1951.
- Fina, Lluís: "Política salarial i lluita de classes sota el franquisme." *Revista Materiales*, 1978, nº 7.
- Fonseca, José: *El problema de la vivienda*. Ministerio de Trabajo, Madrid, 1945.
- Fontana, José María: *El paro agrícola en España*. Madrid, 1946.
- Fraga Iribarne, Manuel: *La familia española ante la segunda mitad del siglo XX. Problemas y soluciones*. Cuadernos de Investigación, nº 4, 1959.
- Franco Salgado-Araujo, Francisco: *Mis conversaciones privadas con Franco*. Barcelona, 1976.
- Fuente Chaos, Alfonso de la: "Concepto nacional-sindicalista de la Medicina del Trabajo." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, núm. 3, vol. 1, 1943.
- Fuente Chaos, Alfonso de la: "Consigna: El Estado, las empresas y los seguros." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, núm. 8-9, vol. 2, 1942.
- Fusí, Juan Pablo: *Franco*. Madrid, ed. El País, 1985.
- García Delgado, José Luis; Barón, Enrique; López Muñoz, Arturo: *Inflación y desarrollo*. Madrid, ZYX, 1967.
- García Nieto, M<sup>a</sup> Carmen y M. Donezar, Javier: *La España de Franco, 1939-1973*. Madrid, Guadiana Publicaciones, 1985.
- García Oviedo, Carlos: *Algunas consideraciones acerca de la lucha contra el paro forzoso*. Sevilla. Imprenta y librería de Elogia de las Heras. 1928.
- García Oviedo, Carlos: "Consideraciones acerca de el empleo total." *Revista Española de Seguridad Social*, núm. 2, 1948.
- García Oviedo, Carlos: "La seguridad social y el derecho del trabajo." *Revista Española de Seguridad Social*, núm. 10, vol. 2, 1950.
- García de Viedma, J. M.: "La función política de las universidades laborales." *Avanzada*, núm. 14, 18 de julio de 1954.
- García de Viedma, J. M.: "La industrialización y las universidades laborales." *Avanzada*, núm. 14, 18 de julio de 1954.

- Garrido y Comas. Juan José: "El seguro de enfermedades profesionales (Aspectos de su implantación en España)." *Revista del Combustible*, núm. 60, 1948.
- Gascón y Marín, José: *Los planes de seguridad social. De la beneficencia al Seguro*. Madrid, I.N.P., 1944.
- Girón de Velasco, J. A.: Contra el apasionamiento en el rencor, el apasionamiento en la hermandad. *Revista de Trabajo*, núm. 7, vol. 2, 1944.(815j)
- Girón de Velasco, J. A.: "Discurso ante Franco en su visita al I.N.P., 27 de marzo de 1942." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, núm. 3, vol. 1. 1942.
- Girón de Velasco, J. A.: "Discurso ante la III Asamblea de Delegados Provinciales de Trabajo el 25 de mayo en la Escuela de Capacitación Social de Trabajadores." *Revista de Trabajo*, núm. 5, vol. 1, 1953.
- Girón de Velasco, J. A.: "El Seguro de enfermedad en España." *Revista de Trabajo*, núm. 1, 1944.
- Girón de Velasco, J. A.: *Escritos y Discursos*. Madrid, ed. Altamira, 1952, 4 vol.
- Girón de Velasco, J. A.: "La colaboración en el seguro de enfermedad. *Revista de Trabajo*, nº 1, vol. 1, 1944.
- Girón de Velasco, J. A.: *La futura empresa de los Seguros sociales*. Madrid, I.N.P., 1943.
- Girón de Velasco, J. A.: "Orientaciones sociales del Gobierno, discurso del Excmo. Sr. Ministro de Trabajo en las Cortes españolas." *Revista de Trabajo*, núm. 11-12, vol. 2, 1944.
- Girón de Velasco, J. A.: "Seguro de enfermedad." *Revista de Trabajo*, núm. 1, vol. 1, 1943.
- Girón de Velasco, J. A.: *Si la memoria no me falla*. Barcelona, Planeta, 1994.
- Girón de Velasco, J. A.: "Sobre el plus familiar...(declaraciones al periódico ABC)." *Revista de Trabajo*, enero 1954, vol. 1, nº 1.
- Gómez Gómez, Carmen y Pérez Serrano, Julio: "La mujer en la política laboral del fascismo a través de la Revista de Sanidad e Higiene públicas, (1938-1945)" en *Actas de las II Jornadas de Investigación interdisciplinaria sobre la mujer*, Madrid, Universidad Autónoma, 1984.
- Gómez Molleda, María Dolores (dir.): *Los Seguros sociales en la España del siglo XX*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988, 3 vol.
- Gómez Reino y Carnota, Manuel: "La familia rural y urbana en España," en *La familia Española*, Madrid, Centro de Estudios Sociales de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, 1967.

- González Fausto, José Manuel: *El Mutualismo laboral español*. Texto de la conferencia pronunciado en Lima, con motivo del II Congreso Iberoamericano de Seguridad Social, y ante los representantes sindicales del Perú, por J. M. González Fausto, Subdirector General de Mutualidades Laborales, s/f.
- González Gallego, Rafael: "La siega en relación con el paro." *Revista de Trabajo*, vol. 2, nº 34, agosto de 1942.
- González González, Manuel Jesús: *La economía política del franquismo (1949-1970). Dirigismo, mercado y planificación*. Madrid, Tecnos, 1979.
- González Jiménez, Luciano: "Estructura económica del paro en España." En *De economía*, año IV, suplemento monográfico nº 1, marzo-abril 1951.
- González Posada, Carlos: *Los seguros sociales obligatorios en España*. Madrid, Revista de Derecho Privado, 1949.
- G. Pinedo, José: "La función político-social del Seguro de enfermedad." *Revista de Trabajo*, núm. 6, vol. 1, 1944.
- G. Pinedo, José: "Los subsidios familiares en el extranjero I." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, nº 4, abril 1942.
- G. Pinedo, José: "Los subsidios familiares en el extranjero II." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, nº 6, junio 1942.
- G. Pinedo, José: "Los subsidios familiares en el extranjero. Conclusión." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, nº 6, julio 1942.
- Guía de la Universidad Laboral Onésimo Redondo de Córdoba*. Curso 1970-71.
- Heine, Hamut: *La oposición política al franquismo (1939-1952)*. Barcelona, Crítica, 1983.
- Hernáinz Márquez, Miguel: "Realizaciones de la Seguridad Social Española." *Cuaderno de Política Social*, núm. 26, 1955.
- Hernáinz, Miguel: "El Seguro de Paro." *Revista de Trabajo*, núm. 5, 1955.
- Hernáinz Márquez, Miguel: *Tratado elemental de Derecho del Trabajo*. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1953.
- Hervás, Manuel: "El factor espiritual en el movimiento demográfico." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, vol. 2, nº 12, 1942.
- Historia de una década: 1941-1951. Girón al servicio de Franco*. Ministerio de Trabajo, Comisaría Nacional del paro, 1951.
- Ipiña, Francisco de: "El equilibrio financiero en la ordenación técnica de los seguros sociales." *Revista Española de Seguridad Social*, núm. 11, vol. 2, 1947.
- Jané Solá, José: *El problema de los salarios en España*. Barcelona, Oikos-Tau, 1969.

- Jato, David: "Consecuencia del paro de los trabajadores jóvenes." *Revista de Trabajo*, vol. 1, nº 18, marzo de 1941.
- Jefatura Nacional del S.O.E. de España: "Organización de la prestaciones médicas en los Seguros Sociales: Seguro Social de Enfermedad." *Revista Iberoamericana de Seguridad Social*, núm. 6-7, vol. 1, 1951.
- Jordana Fuentes, Jorge y Borrajo Dacruz, Efrén: *Los estudiantes y la seguridad social en España*. Fascículo nº 24, Madrid, ed. C.F.E., 1958.
- Jordana de Pozas, Luis: "Características del seguro español de enfermedad." Madrid, I.N.P., 1944.
- Jordana de Pozas, Luis: *La función de la empresa en la seguridad social de nuestros días*. Madrid, Ministerio de Trabajo, 1959.
- Jordana de Pozas, Luis: *Política familiar del Nuevo Estado*. Santander, Aldus, 1938.
- La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica*. Barcelona, Ariel, 1987.
- Lamas, Francisco: "Coordinación sanitaria del seguro de enfermedad con el mutualismo y la beneficencia." *Revista Española de Seguridad Social*, núm. 9, vol. 2, 1950.
- Lamas, Francisco: "Los médicos y la medicina en el Seguro Español de Enfermedad." *Revista Española de Seguridad Social*, núm. 1, vol. 1, 1948.
- Langa García, Luis: "El salario base de cotización para los sistemas de previsión social obligatoria." Madrid, Ministerio de Trabajo, 1960.
- "La nupcialidad en España en los años 1900 a 1940." *Boletín de Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, 1943. vol. 2, nº 11.
- La protección de la familia por el Estado*. Fascículo nº 39, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, ed. C.F.E., 1959.
- "La universidad laboral de Gijón." *Revista de Trabajo*, núm. 11-12, 1952(9.1.)
- Laraña Palacio, Manuel y Selma Caro, Manuel: *Mutualidades y Montepios Laborales*. Barcelona, 1950.
- Laroque, Pierre: "Familia y seguridad social." *Revista de Trabajo*, abril de 1948, vol. 1, nº 4.
- Las asignaciones familiares*. Ginebra, A.I.S.S., 1954.
- Las asignaciones familiares. Evolución de la legislación sobre Asignaciones Familiares desde 1953*. Ginebra, 1965.
- Las Heras, Patrocinio y Cortajarena, Elvira: *Introducción al bienestar social*. Madrid, Siglo XXI, 1985.

- Lasheras Sanz, Antonio: "Contribución al estudio de los métodos de financiamiento de los seguros sociales." *Revista de Trabajo*, núm. 7-8, vol. 2, 1950.
- Leal Ramos, León: "El seguro de maternidad en los medios rurales." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, núm. 7, vol. 2, 1942.
- Leal, Alejo: *El trabajo y el trabajador en la agricultura*. Madrid, 1953.
- Leal Ramos, León: *La familia, preocupación fundamental del Estado español*. Cáceres, Seminario de Estudios Sociales, 1950.
- Lebel, Roland: *Las asignaciones familiares*. Ginebra, A.I.S.S., 1954.
- Lebel, Roland y Cvejic, Zarco: *Las asignaciones familiares. Evolución de la legislación sobre Asignaciones Familiares desde 1953*. Ginebra, A.I.S.S., 1965.
- Leira, Eduardo: "La nueva legislación de accidentes del trabajo en España." *Revista Iberoamericana de Seguridad Social*, núm. 5, 1956.
- León, Rafael de: "El mutualismo laboral y la socialización de la industria." *Cuadernos de Previsión Laboral*, Madrid, 1954, núm. 8.
- "Ley de sanidad infantil y maternal." *Revista de Trabajo*, núm. 9, 1941.
- Llorens Castillo, Carlos: *La primera década. Una aportación al proceso político e ideológico del franquismo y a la historia del Partido Comunista de España*. Valencia, Fernando Torres, 1983.
- López Medel, Jesús: *La familia rural, la urbana y la industrial en España*. Madrid, Cuadernos de Investigación, 1961.
- López Valencia, Federico: *Jalones de una Reforma Social*. Madrid, ed. de la Escuela Social de Madrid, 1946.
- López Valencia, Federico: "Seguridad social de la infancia y la vejez." *Revista Española de Seguridad Social*, núm. 11, 1948.
- Lora Varo, Antonio: "Mutualismo Laboral." *Información Comercial Española*, núm. 245, 1954.
- L. Teijeiro, Leopoldo: "El seguro de Enfermedad." *Revista de Trabajo*, núm. 11-12, vol. 2, 1945.
- Ludevid, Manucl: *Cuarenta años de sindicato vertical*. Barcelona, Laia, 1976.
- Macías de Aguirre: "La afiliación de los trabajadores industriales en el régimen de subsidio de vejez." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, núm. 11, 1944.
- Mallart, José: *Hacia un sistema integral de protección a la familia*. *Revista Española de Seguridad Social*, nº 3, marzo de 1948.

- Mallart, José: "Posibilidades económicas de la seguridad social." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, núm. 12, vol. 2, 1944.
- Maroto Barchino, Caridad y De Mingo, José Antonio: "Para estudiar la historia de las relaciones laborales en el lugar de trabajo. Una nota sobre la documentación procedente de los Jurados y Comités de Empresas," en *I Jornadas de Historia Económica de las relaciones laborales*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1996.
- Martí Bufill, Carlos: "La seguridad social como política." *Revista Española de Seguridad Social*, núm. 11, vol. 2, 1950.
- Martí Bufill, Carlos: *Presente y futuro del seguro social*. Madrid, Studium, 1947.
- Martí Zaro, Pablo: "El reglamento general del mutualismo laboral." *Cuadernos de Previsión Social*, Madrid, 1954, núm. 8.
- Martín Angulo, Francisco: *Los mineros ¡acusan! ¡las huelgas!*. Madrid, Sedmay, 1977.
- Martín Arbuez, Adolfo y Roca Cabanellas, Juan: *El Derecho a la vivienda*. Madrid, Centro de Estudios Sindicales, 1958.
- Martín López, Enrique: *El cambio social durante el régimen de Franco*. Madrid, Actas, 1993.
- Martín de Nicolás, Isidro: "El servicio doméstico en su relación con los seguros sociales." *Revista de Trabajo*, nº 2, vol. 1, 1943.
- Martín de Pereda, Julio: "Vejez e invalidez: Valoración médica." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, núm. 10, 1945.
- Martín Ruíz, Juan Francisco: "Dinámica del empleo, trasvases de población activa y envejecimiento rural en Canarias (1940-1979)," en *Canarias ante el cambio*, Santa Cruz de Tenerife, Universidad de la Laguna, 1981.
- Martín Sanz, Dionisio; García de Oteyza; Patac de las Traviesas, Luis; París Eguilaz, Higinio: *El paro estacional campesino*. Madrid, Sindicato Vertical del Olivo, 1946.
- Martín Sanz, Dionisio: *Técnica y política agraria*. Madrid, 1946.
- Martínez Blasco, Nicolás: "Nuevo Avance en el Seguro obligatorio de enfermedad." *Revista de Trabajo*, núm. 3, 1946.
- Martínez Gutiérrez, Juan José: "Economía de guerra después de la guerra (sobre la configuración de la política económica autárquica en el primer franquismo)," en *El Régimen de Franco (1936-1975)*, Madrid, U.N.E.D., 1993.
- Martínez Llanos, Nemesio: *Los premios de nupcialidad y natalidad en el mutualismo laboral*. *Revista de Trabajo*, nº 7/8, vol. 2, jul./ag. 1955.

- Martos de Castro, Federico: "Los accidentes del trabajo y su prevención." *Revista de Trabajo*, núm. 28-29, 1942.
- Matoses Solves, Antonio: "Nupcialidad y natalidad." *Boletín de Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, 1944, vol. 2, nº 7.
- Meilán Gil, José Luis: *El mutualismo laboral*. Madrid, CSIC, 1963.
- Melas, Reinhold: "La familia ante los Seguros Sociales." *Revista de Trabajo*, vol. 1, nº 2 feb. 1954.
- Miguel, Amando de: *Sociología del franquismo. Análisis ideológico de los Ministros del Régimen*. Barcelona, Euros, 1975.
- Miguel, Jesús M. de y Díez Nicolás, Juan: *Políticas de Población*. Madrid, Espasa Calpe, 1985.
- Mingarro y San Martín, José: "Síntesis de la doctrina de la seguridad social." *Revista de Trabajo*, núm. 7-8, vol. 2, 1949.
- Morodo, Raul: *Los orígenes ideológicos del franquismo: Acción Española*. Madrid, Alianza Universidad, 1980.
- Morón Albar, Gabriel: "Los trabajadores de las cooperativas ante los seguros sociales." *Revista de Trabajo*, núm. 2, vol. 1, 1952.
- Mozo Gayo, Almudena: "Un giro en las relaciones laborales," en *Congreso Internacional sobre "El Régimen de Franco"*, Madrid, U.N.E.D., mayo de 1993, II vol.
- Moya González, Luis: *Barrios de Promoción Oficial. Madrid, 1939-1976*. Madrid, 1983.
- Nadal Oller, Narciso: *Viviendas de renta limitada*. Barcelona, Bosch, 1957.
- Naredo, José Manuel: *La evolución de la agricultura en España (Desarrollo capitalista y crisis de las formas de producción tradicionales)*. Barcelona, ed. Laia, 1971.
- Naredo, José Manuel: *La evolución de la agricultura en España (1940-1990)*. Granada, Universidad de Granada, 1996.
- Navarro Vilorda, José: *Por el camino de la solidaridad*. Madrid, 1962.
- Nofuentes, Manuel: "El jurado, como instrumento de colaboración en la empresa." *Revista del Combustible*, núm. 49-50, 1949.
- Nofuentes G. Montero, Manuel: "Nistagnus del minero. Su existencia como enfermedad profesional y régimen legal del seguro." *Revista Iberoamericana de Seguridad Social*, núm. 3, 1952.
- Nogales Puertas: "La invalidez en el subsidio de vejez." *Revista Española de Seguridad Social*, núm. 5, 1947.



- Nogales Puertas: "La ley de accidentes del trabajo en su aspecto médico." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, núm. 1, 1944.
- Nogales Puertas: "La reforma de la ley de accidentes del trabajo." *Revista de Trabajo*, núm. 9, 1951.
- "Nuevo seguro social." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, núm. 12, vol. 1, 1942.
- París Eguilaz, Higinio: *50 años de economía española (1930-1980)*. Madrid, 1981.
- París Eguilaz, Higinio: *Diez años de política económica en España, 1939-1949*. Madrid, 1949.
- París Eguilaz, Eugenio: *Los Seguros sociales y la economía española*. Madrid, 1951.
- París Eguilaz, Higinio: *Política de creación de empleo*. Madrid, ed. Fe, 1940.
- París Eguilaz, Higinio: "Seguros sociales y estabilidad económica." *Revista Española de Seguridad Social*, núm. 7-8, vol. 2 1947.
- París Eguilaz, Higinio: *Sentido y límites de la política social*. Madrid, 1954.
- París Eguilaz, Higinio: *Un nuevo orden económico*. Madrid, ed. Fe, 1941.
- Parrilla, Amparo: *Protección del niño a través de la madre*. Madrid, Ministerio de Trabajo, 1953.
- Payne, Stanley. G.: *El régimen de Franco, 1936-1975*. Madrid, Alianza Editorial, 1987.
- Payne, Stanley G.: *Historia del fascismo español*. Madrid, Ruedo Ibérico, 1985.
- Pérez Botija, Eugenio: "Administración de los seguros sociales." *Revista de Trabajo*, núm. 11, 1942.
- Pérez Botija, Eugenio: *Jurados de empresa. Notas a su reglamento*. Madrid, 1954.
- Pérez Botija, Eugenio: "Los salarios en relación con la familia y rendimiento. Estudio de la reciente legislación española y portuguesa." *Revista de Trabajo*, vol. 2, nº 37 1942,
- Pérez Botija, Eugenio. *Salarios. Régimen legal y tarifas mínimas*. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1944.
- Pérez Ferraro, María Elena: "Seguridad Social y Desempleo." *Revista Iberoamericana de Seguridad Social*, separata del nº 5, (septiembre-octubre de 1976).
- Pérez González, Esteban: "Aspecto social del servicio doméstico." *Revista de Trabajo*, núm. 2, vol. 1, 1944.
- Pérez González, Esteban: "Consideraciones sobre el paro obrero." *Revista de Trabajo*, vol. 2, nº 30, abril de 1941.
- Pérez González, Esteban: "Soluciones a los problemas sociales en la legislación española." *Revista de Trabajo*, núm. 11-12, vol. 2, 1944.

- Pérez Leñero, José: *Comentario al reglamento de Jurados de empresa*. Madrid, 1956.
- Pérez Leñero, José: "Ética y seguridad social." *Revista de Trabajo*, núm. 11-12, vol. 2, 1952.
- Pérez Leñero, José: "Fundamentos de la seguridad social." Madrid, Aguilar, 1956.
- Pérez Leñero, José: *Instituciones del Derecho español de Trabajo*, Madrid, 1949.
- Pérez Leñero, José: "Los reglamentos nacionales del trabajo. Su sistematización jurídica I." *Revista de Trabajo*, núm. 15, 1941.
- Pérez Leñero, José: "Los reglamentos nacionales del trabajo. Su sistematización jurídica II." *Revista de Trabajo*, núm. 17 (conclusión), 1941.
- Pérez Leñero, José: "Naturaleza humana y seguridad social." *Revista Iberoamericana de Seguridad Social*, núm. 6, 1953.
- Pérez Leñero, José: "¿Qué son los montepíos laborales?" *Revista de Trabajo*, 1950, núm. 11-12, pág. 907.
- Pérez Leñero, José: "Régimen económico de los Montepíos Laborales." *Moneda y Crédito*, núm. 32, 1950.
- Pérez Serrano, José: "La reglamentación del trabajo en el nuevo Estado español." *Revista de Trabajo*, núm. 24, 1941.
- Perpiñá Rodríguez, Antonio: "El sujeto protegido por las leyes de previsión social. Conceptualismo jurídico y finalidad social." *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, núm. 7-8, vol. 2, 1945.
- Perpiñá Rodríguez, Antonio: "La estructura de los salarios en España." Madrid, 1962.
- Perpiñá Rodríguez, Antonio: "New Deal en la Previsión Social Española. Comentario a las disposiciones recientes sobre financiación de los Seguros Sociales." *Revista de Trabajo*, núm. 7-8, vol. 2, 1956.
- Personalidad y vida familiar*. Madrid, Consejo Superior de las Mujeres de Acción Católica de España, 1955.
- Pío XII: *Pío XII y la familia cristiana. Discursos del Padre Santo a los recién casados: 1939-1947*. San Sebastián, ed. Pax, 1943.
- Pisani Ricci, Rómulo: *La experiencia sanitaria del Seguro social en España y la evolución económico- social de Venezuela*. Madrid, OISS, 1953.
- Preston, Paul: *España en crisis. Evolución y decadencia del régimen de Franco*. Barcelona, Planeta, 1981.
- Preston, Paul: *Franco*. Barcelona, Grijalbo, 1994.
- Principios del cooperativismo*. Madrid, O. S Cooperación, Madrid, 1965.

- Puente Ojea, M: "Problemas en torno al trabajo de la mujer." *Revista de Trabajo*, vol. 1, n° 4, abril 1953.
- Puerta García, Antonio: "El problema de la vivienda en España." *De Economía*, n° 19-20, julio-octubre de 1952.
- Puy Muñoz, Francisco: *La cooperación y el derecho natural*. La Coruña, O. S. Cooperación, 1968
- Quesada Munuera, Enrique: *Los Jurados de Empresa*. Madrid, Vicesecretaría Nacional de Ordenación Económica, 1956.
- Quetglas Gaya, Bartolomé: *El salario familiar. Teoría y práctica*. Biblioteca Temas Sociales, 1935.
- Quetglas Gaya, Bartolomé: *Las cajas de subsidios familiares anteriores al régimen obligatorio*. Palma de Mallorca, Imprenta Tous, 1963.
- Quintana, Primitivo de la: "Problemas de Medicina social." *Boletín del Consejo General de los Colegios Médicos de España*, núm. 2, 1940.
- Rebollo González, Aníbal: *Subsidios Familiares*. Madrid, Oficina Iberoamérica de Seguridad Social. Serie Estudios, 1954.
- Redondo Gómez, José: *El paro agrícola en España*. Madrid, 1948.
- Redondo Gómez, José: *Pasado, presente y futuro de un problema social*. Madrid, Servicio Nacional de Información y Publicaciones Sindicales, 1955.
- "Reglamento General del Mutualismo." *Avanzada*, núm. 17, febrero de 1955.
- Riaza Ballesteros, José María: "Análisis del paro forzoso en España." *Cuadernos de Política Social*, n° 37, 1958.
- Riaza Ballesteros, José María: "La empresa en el sistema de la seguridad social." *Revista Española de Seguridad Social*, núm. 7-8, vol. 2, 1950.
- Riaza Ballesteros, José María: La universidad y los trabajadores. *Revista de Trabajo*, núm. 9, 1948.
- Ridruejo, Dionisio: *Escrito en España*. Madrid, Toto, 1976,
- Riva Labarta, Ángel M. de la: "La madre en el concepto universal de ginecología". *Revista del Seguro de Enfermedad*, julio de 1954, n° 4.
- Riva Labarta, Ángel M. de la: "Pragmatismo de la Sanidad Social en maternología." *Revista del Seguro de Enfermedad* n° 20, nov. de 1955.
- Robert Robert, Antonio: *La Industrialización rural como remedio al desequilibrio económico entre el campo y la ciudad*. Madrid, Instituto Nacional de Colonización, 1942.

- Rodríguez, Federico: *Defensa económico-social de la familia*. Fascículo nº 18, Madrid, ed. C.F.E., 1958.
- Rodríguez, Federico: *Tendencias actuales de la política social*. Madrid, Ateneo, 1955.
- Res Jimeno, José: *La familia en el panorama demográfico español*. Madrid, Cuadernos de Investigación, 1959.
- Roseira, Mário: *Los regímenes de asignaciones familiares y los problemas originados por las relaciones entre las asignaciones familiares y las demás ramas de la seguridad social*. Ginebra, A.I.S.S., 1965.
- Royo Martínez, Miguel: *El problema de la vivienda*. Sevilla, 1953.
- Salas Montilla, Cristóbal: *Distribución de los puntos en el plus familiar*. Barcelona, Artes Gráficas Rafael Salvá, 1959.
- Salvador Bullón, Pablo y Salvador Bullón Hilario: *El seguro contra el paro forzoso*. Madrid, Ministerio de Trabajo, 1955.
- Sánchez, Adrián: *La medicina en el seguro social de enfermedad*. Madrid, I.N.P., 1945.
- Sánchez Monís, Fernando: "Ensayo sobre un seguro social de vejez e invalidez y muerte en un sistema unificado de seguros sociales." *Revista Iberoamericana de Seguridad Social*, núm. 4, 1956.
- Sánchez Pravia, María José: "La política asistencial del franquismo en Murcia: La casa José Antonio, hogar provincial del niño, (1939-1945)," en *El Régimen de Franco (1936-1975)*, Madrid, U.N.E.D., 1993.
- Sanfulgencio Nieto, Salvador: *Los jurados de empresa y su ordenamiento jurídico*. Madrid, 1962.
- Sanfulgencio Nieto, Salvador: *Vacaciones anuales retribuidas*. Madrid, 1946.
- Searle, José Antonio: "Periodo de descanso y prestaciones económicas de las embarazadas." *Revista Española de Seguridad Social*, núm. 12, vol. 2, 1947.
- Seguridad social y prestaciones familiares. Balance del sistema francés de seguridad social. Traducido de "Droit Social," París. *Revista de Trabajo*, vol. 1, n.º 3, marzo 1956.
- Seguro de Enfermedad. Estudio de un Plan General de instalaciones de asistencia médica*. Madrid, I.N.P., 1944.
- Sempere Navarro, A.V.: *Nacional sindicalismo y relación de trabajo*. Madrid, 1982.
- Serrano Fernández, José: "Antecedentes, evolución y caracteres de las Mutualidades y Montepíos laborales." *Cuadernos de Previsión Social*, núm. 6, 1953.

- Serrano Fernández-Valdés, José: "Elementos esenciales que ha contribuido a la formación y desarrollo de las Montepíos y Mutualidades de Previsión Social." *Revista de Trabajo*, núm. 7-8, vol. 2., 1951.
- Serrano Fernández-Valdés, José: "Importancia de la misión actual y futura de los montepíos y mutualidades de previsión social." *Revista de Trabajo*, núm. 2, 1952.
- Serrano Fernández-Valdés, José: "Sobre la naturaleza y el concepto de los Montepíos y Mutualidades de Previsión Social." *Revista de Trabajo*, núm. 10-11, 1958.
- Serrano Guirado, Enrique: *El Seguro de Enfermedad y sus problemas*. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1950.
- Serrano Guirado, Enrique: *Las relaciones humanas en las seguridad social*. Madrid, Ministerio de Trabajo, 1959.
- Solé, Carlota: "La recesión del neocorporativismo en España." *Revista de Sociología*, nº 33, 1990.
- Soler Serrano e Irurozqui: *Girón entre el ayer y el mañana*. Barcelona, ed. Jaime Solá, 1973.
- Suárez Fernández, Luis: *Francisco Franco y su tiempo*. Madrid, Fundación Francisco Franco, 1984, 8 vol.
- Suárez Mier, J.: "Análisis de las regulaciones laborales mineras." *Revista de Trabajo*, núm. 10, 1946.
- Tallada Pauli, José María: "El ciclo económico y el paro forzoso." *Revista de Trabajo*, nº 1, enero de 1945.
- Tamames, Ramón: *Estructura económica de España*. Madrid, Guadiana, 1985.
- Tapia, Blas de: Los subsidios familiares en el plan Beveridge del seguro social unificado. *Boletín Informativo del Instituto Nacional de Previsión*, nº 5, vol. 1, 1943.
- Tarancón, Vicente: *La familia hoy*. Madrid, ed. Euramérica, 1958.
- Toharia Cátedra, J.: "El plus de cargas familiares." *Revista de Trabajo*, vol. 2, nº 48, 1943.
- Torno Cervino, Antonio: "Política demográfica." *Revista Española de Seguridad Social*, vol. 2, nov. 1947.
- Torres, Manuel de: *Juicio de la actual política económica española*. Madrid, Aguilar, 1956.
- Torres Centurión, Manuel de: "El problema de algunas reglamentaciones nacionales de trabajo." *Revista de Trabajo*, núm. 6, 1945.
- Tortella, Gabriel. *El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX*. Madrid. Alianza Textos, 1994.

- Tuñón de Lara, Manuel (dir.): *España bajo la dictadura franquista (1939-1975)*. Labor, Barcelona, 1980.
- Tusell, Javier: Carrero. *La eminencia gris del régimen de Franco*. Madrid, Temas de Hoy, 1993.
- Tusell, Javier: "La autarquía cuartelera: las ideas económicas de Franco a partir de un documento inédito." *Historia 16*, nº 115, vol. 10, 1985.
- Tusell, Javier: *La dictadura de Franco*. Madrid, Alianza, 1988.
- Tusell, Javier: *La oposición democrática al franquismo*. Barcelona, Planeta, 1977.
- Ubierna, José Antonio: *El problema de la vivienda en su aspecto legal*. Madrid, 1945.
- U., J. A. de: "Problemas Financieros del seguro de enfermedad." *Revista Española de Seguridad Social*, núm. 6, vol. 1, 1948.
- Ucelay Repollés, Mariano: *Previsión y seguros sociales*. Madrid, Gráfica González, 1955.
- Vallejo Nájera, A.: "Concepto de la higiene racial." *Práctica Médica*, nº 107, febrero de 1952.
- Vallejo Nájera, A.: "Necesidad de una política biológica racial." *Boletín del Consejo General de los Colegios Médicos de España*, núm. 8, noviembre de 1940.
- Vannutelli, Césare: "La tutela de la familia en el ámbito de la previsión social." *Revista de Trabajo*, vol. único, nº 10, oct. 1948.
- Velarde Fuentes, José: "Las inversiones de los Montepíos Laborales." *Cuadernos de Previsión Laboral*, Madrid, núm. 7, 1954.
- Villar Ezcurra, José Luis: *La protección pública a la vivienda*. Madrid, Montecorvo, 1981.
- Villar Salinas, Jesús: "Pasado, presente y futuro de la profesión médica." *Revista Española de Seguridad Social*, núm. 2, vol. 1, 1949.
- Viver Pi-Sunyer, C.: *El personal político de Franco (1936-1945)*. Barcelona, Vicens Vives, 1978.